



+ 176076
C. 71410919

TRATADO DE DERECHO POLÍTICO.

TRATADO
DE
DERECHO POLÍTICO

SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA

Y EL DERECHO CRISTIANOS

POR

ENRIQUE GIL Y ROBLES

CATEDRÁTICO DE LA ASIGNATURA

EN LA

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

~~~~~  
TOMO SEGUNDO  
~~~~~

SALAMANCA

IMP. SALMANTICENSE, Á CARGO DE B. DE LA TORRE
Arroyo del Carmen, 15

—
1902

Es propiedad del autor.



R. 145224

PRÓLOGO

Debo al frente de éste prólogo, escrito después de redactado el tomo á que precede, reproducir en parte las advertencias del *post scriptum* del tomo primero. También en los veintitrés meses trascurridos entre el 15 de Noviembre de 1899 y el 15 de Octubre de 1901, han interrumpido con frecuencia el trabajo dolores físicos, preocupaciones de diversa índole, inexcusables tareas periodísticas y otras atenciones imprevistas y urgentes, bien que dejándome, por la misericordia de Dios, algún mayor desahogo y relativa calma para concluir en dos años escasos doble tarea de la que necesitó antes dos y medio bien cumplidos.

He de esperar, por lo tanto, del lector aquella benevolencia que impetré entonces para las repeticiones, acaso no estrictamente precisas, pero tal vez no del todo inútiles, con que en el libro, á semejanza de lo que practico en la explicación oral, he procurado expresar de varios modos un mismo concepto, á fin de que de él se penetren bien los alumnos, y aun parafrasearlo y ampliarlo en varios pasajes del libro, aprovechando la estrecha conexión de las materias, cuya relación puede pasar inadvertida á los jóvenes lectores, si el autor no se esfuerza en llamar y concen-

trar una atención de tantas maneras solicitada y distraída fuera del objeto.

En éste tomo son más numerosas y detenidas que en el anterior las referencias y demostraciones históricas, porque, de día en día, estoy más persuadido de la necesidad imprescindible de comprobar en la realidad los principios, las ideas en la vida, para que, al propio tiempo que se va señalando la armonía providencial entre las exigencias de la razón y las leyes y el proceso de la historia, cuando no turban el acuerdo el error y el pecado, se estimule y acostumbre al discípulo al único modo posible de observación y experimentación en la ciencia jurídica, la crítica de los sucesos. Ejercitándose en ella, despiértanse afición más viva y gusto más pronunciado hácia el íntimo nexo entre el hecho y la teoría, y se previene al entendimiento y á la lucubración contra los exclusivismos positivistas ó idealistas entre los que vacila y cae el pensamiento humano, desde que Descartes rompió la continuidad radicional de la filosofía de las gentes.

Por esto escribí en el tomo primero, y reproduzco ahora, los siguientes párrafos: «Abrigo la esperanza de »que no ha de imputárseme abuso de las comprobaciones en la Historia. Las referencias á la *Declaración* y »á sus precedentes en la vida moderna y contemporánea me parecen indispensables para señalar la dañada »raíz de las nuevas instituciones; los ejemplos de los artículos de la constitución vigente, además de lo que »significa y pretende en cualquiera ciencia la prueba experimental, son utilísimos para despertar en el discípulo la afición á la exégesis y crítica y ensayarlo en

»ellas; y, en cuanto á las generalidades de historia romana y de la Edad media, no necesitaré explicarlas al lector discreto. «Sea el que fuere su juicio acerca del valor, influjo, posición y significación del pasado en el presente, no negará al derecho romano los que le corresponden como el más perfecto de la antigüedad; y difícil será que no vea en el de la Edad media el derecho cristiano por excelencia, aunque no llegaran á la plenitud de su desarrollo, ni siquiera á la madurez de la vida, las instituciones medioevales. En tal supuesto, son uno y otro los mejores campos de observación de como la ley natural se abre paso en las leyes humanas cuando no se lo cierra, y todo lo que se lo permite, la pecadora y extraviada libertad del hombre.

»Muestra él un derecho hasta donde puede llegar el genio jurídico de un pueblo, no iluminado, ó iluminado tardíamente por la revelación cristiana; ofrece el otro el espectáculo, no repetido, de la divina fecundidad con que el cristianismo hace resurgir la justicia y la vida de entre las ruinas amontonadas por la ciega violencia de la barbarie. El derecho romano es principalmente de humana labor, obra admirable de una cultura lenta y trabajosamente desarrollada á través de los siglos; el derecho de la Edad media, en máxima parte, parece construcción de una especial providencia que edifica con muy escasa cooperación de los hombres en tierra removida y asolada por ellos, y teniendo, á cada paso, que defender la fábrica contra la rudeza de brutales y desencadenadas pasiones. ¿Cómo no indagar en esas dos grandes épocas y en los respectivos derechos las relaciones de oposición y

»de armonía entre la razón y la conducta, entre la ley
»positiva y la natural?»

Aunque en un curso, por elemental que sea, de Derecho político, no necesitará el profesor que el Estado le imponga la obligación de hacer las necesarias referencias, por vía de prueba experimental, no sólo á las constituciones modernas más importantes y adecuadas al caso, sino al estado social y á las condiciones de la vida pública en las naciones, cuyas son esas leyes fundamentales, la ampliación del título de la asignatura (1),

(1) Fué atinada medida dividir la asignatura de Derecho político y administrativo en las dos distintas que expresa el doble título de la que hasta aquí constituyó una misma, repartida en dos cursos; pero no me parece tan acertado que en una enseñanza, al fin elemental, la añadidura de *comparado con el extranjero* implique en el Real Decreto de 1.º de Agosto de 1900, (*Gaceta* del 4), el pensamiento y exigencia de que toda institución española haya de cotejarse con las idénticas ó semejantes de legislaciones extrañas, ó, cuando menos, con las que, por conceptos varios, más importen. Los estudios comparativos son propios de docencias y culturas superiores y posteriores á la primera iniciación que en la materia corresponde é incumbe á asignaturas universitarias, en las cuales poco espacio y tiempo quedará para otro derecho que no sea el nacional, máxime habiendo de exponer con la debida detención y cuidado el fundamento racional de las instituciones, seguido de una noticia, por sucinta que sea, de su desarrollo histórico. Por esto, mientras el Estado, ingiriéndose más en la esfera docente con el anunciado programa ó cuestionario oficiales, no marque las proporciones y amplitud de tales comparaciones, el profesor discreto no las dará mucho más alcance que el que antes las concedía, puesto que *ad impossibilia nemo tenetur*; é imposible es que este paralelo jurídico llegue á lo que parecen exigir los motivos que en la Exposición parecen expresar estas palabras: «La solidaridad que, por numerosas causas, es cada día mayor entre todas las naciones, y el sistema de libertad que en materia de extranjería por todas partes impera, (esto no estoy seguro de haberlo entendido bien), exigen que el Derecho político español se estudie comparado con el extranjero.» ¿Habrà que compararlo, no sólo con el de cuantas naciones mantengan con España representación diplomática, sino con el de aquéllas cuyos súbditos gozan la libertad de trasladarse á tierra española y morar y establecerse en ella?

requiere mayor frecuencia y extensión de los ejemplos y noticias tomados de los pueblos y derechos extranjeros, singularmente de Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos. Así es que, sin incluir en el texto comparaciones más minuciosas que las aducidas en el tomo primero, porque no podía la innovación hacerme cambiar ni el concepto que de las exigencias y límites de los cursos elementales tengo formado, ni, por consiguiente, el plan y disposición del libro, he dado, sin embargo, en la parte de ampliación y en las notas adjuntas mayor amplitud á los datos y juicios comparativos.

No he de concluir estas advertencias sin declarar que dudo de haber podido sustraer el espíritu y la pluma, por mucho que lo he procurado, á las tristezas y amarguras del pesimismo sin esperanza y á las acritudes y aun violencias de la colérica y desdeñosa indignación de que tiene que estar saturada el alma del creyente y del patriota ante el espectáculo del mundo y en particular del pueblo, que, ingratos y locos, vuelven la espalda á Cristo, cerrando con saña y contumacia de réprobos el entendimiento y el corazón á la idea siempre nueva y regeneradora. Después de todo, estos sentimientos sinceros y honrados no me parecen incompatibles con la plena confianza en la adorable providencia de Dios y con el respeto incondicional á sus decretos y la absoluta entrega y abandono á sus divinos designios. Y aunque no han dejado de asaltarme dudas y escrúpulos de si el dolorosamente advertido, y á costa suya enseñado, tiene derecho á ennegrecer con tan sombrías desolaciones el rosado optimismo

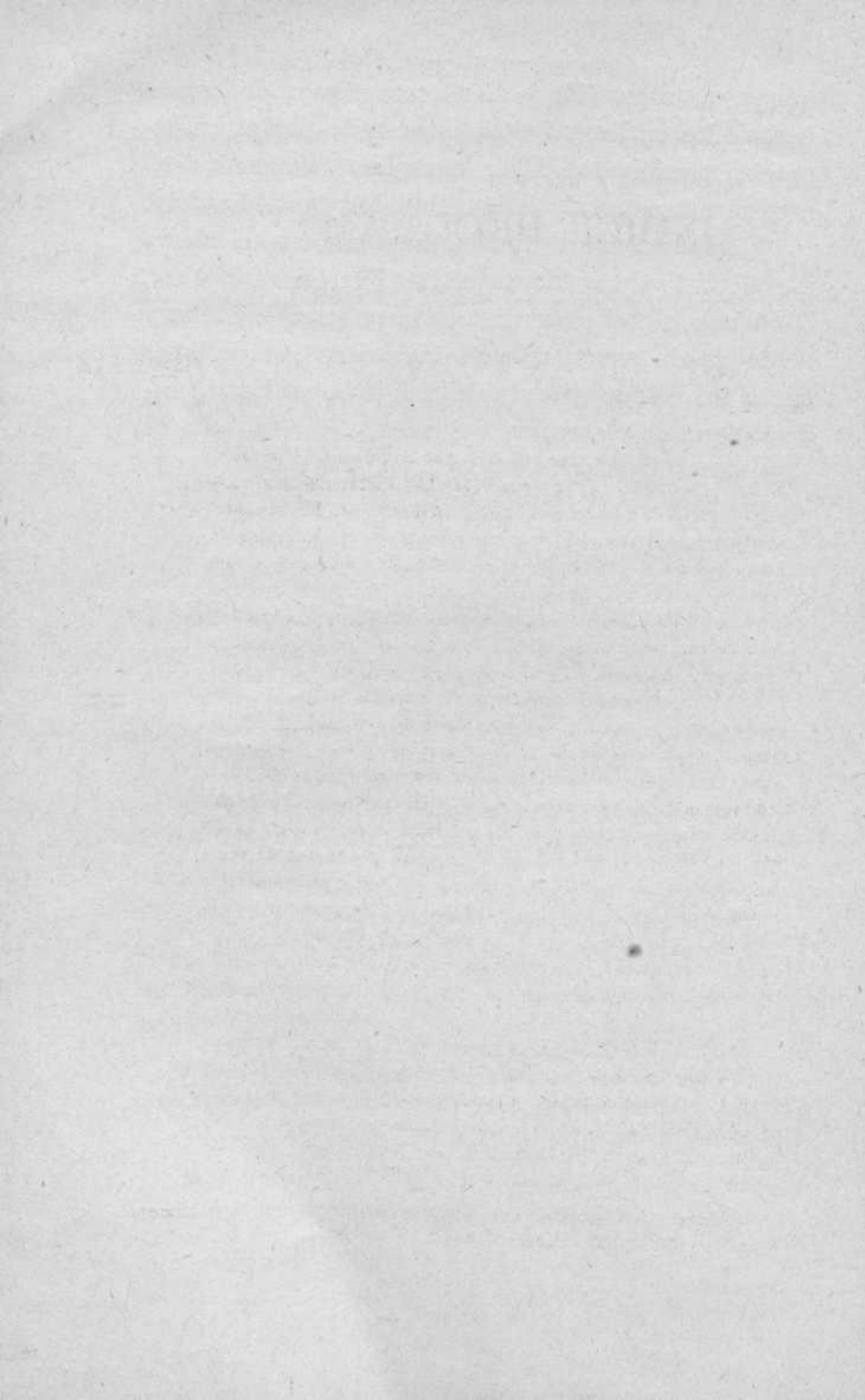
de los primeros años de la vida, me tranquiliza y aquieta la convicción de que acaso tales lecciones y tonos de triste y desengañada experiencia sean hoy un indispensable factor educativo para contrarrestar esa escéptica y enervante tolerancia, ese funesto, tranquilo y plácido indiferentismo que, verdadero y espontáneo en algunos, y con trazas de afectado y artificial en otros, procede en todos de la dañada raíz del fatalismo que inspiró al filósofo panteista el sugestivo consejo *nec flere nec indignari, sed intelligere*. Hay además en esa atrabilis, que nunca producirá serios estragos, porque en el alma juvenil se temple y endulza con las risueñas ilusiones y con las encantadas perspectivas falaces de una dichosa inexperiencia, cierta cauta y paternal preparación que previene y, de antemano, virilmente tonifica á la gente joven contra las deprimentes sorpresas y abrumadores abatimientos del desengaño emboscado y apercibido siempre contra la vana seguridad imprevisora, pero, hoy como nunca, cierto é implacable en la desastrosa realidad que, por todas partes, nos rodea. Más vale encontrar la vida no tan mala como se complacieron en pintarla viejos mal humorados, que tropezar, al primer paso que se cree dar entre rosas, con las espinas que desgarran el alma y la dejan desangrada, abatida y rendida á los piés de la iniquidad triunfante. Por esto, espero que el lector ha de tomarme en cuenta y en descargo que al mismo historiador impónele el elevado ministerio verdad, imparcialidad y justicia, no apático estoicismo ni corruptora imparcialidad entre el vicio y la virtud, el egoísmo y la abnegación, el heroísmo y el crimen, ni siquiera

ría y seca corrección y displicente medida de lenguaje, bajo las cuales, y á título y pretexto de austera serenidad narrativa, se deban contener y ahogar los generosos arranques de la ira saludable y moralizadora.

Y no concluiré, sin pedir, ahora como en el último párrafo del primer tomo, que bendiga Dios mi labor, dándola la virtud y eficacia que fuere servido, y retractando yo de antemano cualquiera involuntario error que el infalible magisterio de la Iglesia católica considere digno de corrección ó enmienda.

19 de Octubre de 1901.





INDICE PROGRAMA (1)

Páginas

PRÓLOGO. V

CAPÍTULO I.—*Principios generales acerca de la personalidad de las sociedades componentes de la sociedad civil.—Autarquía de estas.—Auxilio social de las superiores á las inferiores.*—1. De la personalidad de las sociedades, sean las que fueren su clase y jerarquía; diferente relación de las partes con el todo físico y el todo moral de que son miembros respectivamente; trascendencia de las elementales nociones metafísicas en que se funda esta teoría.—2. Consecuencia de la personalidad: *la autarquía*; doble sentido del término: las funciones del propio gobierno personal. El social auxilio en relación con la deficiencia de autarquía.—3. Doble origen y título del auxilio complementario de una persona á la deficiencia de otra. La tutela; acepción amplia y estricta de esta palabra equívoca; la tutela en los varios órdenes y ramas del Derecho; legitimidad de la acción tutelar.—4. El auxilio de las personas iguales y el de las superiores. En qué lugar corresponde á la nación y al Estado el auxilio social; órganos más inmediatamente obligados á prestarlo.—5. Explicación del hecho más general y constante de haberlo prestado el Estado más bien que los demás órganos; referencia á la romana Ciudad-Estado y á algunas de sus instituciones; de qué clase y alcance fué el individualismo en la vida y en el derecho de Roma. 3

CAPÍTULO II.—*La autarquía de la familia, de las sociedades incompletas, del concejo y de la provincia.*—1. Por qué no ha sido, como debiera, la familia el órgano y factor principal de derecho privado; causas que han reducido la esfera autárquica de la familia á los límites de su actual acción. Armonía entre dos principios,

(1) Téngase por reproducida la advertencia contenida en la misma nota del índice programa del tomo primero.

opuestos al parecer, la legítima y la libertad de testar.—2. Razón de la amplia autarquía de las sociedades incompletas. Distinción entre la personalidad administrativa y la civil. Derechos del Estado en el orden jurídico de estas sociedades.—3. La autarquía que corresponde al pueblo, como sociedad completa y pública que es. Derechos del *Estado municipal* en el círculo de otras personas inferiores. La dependencia natural del pueblo á la nación no se opone á toda la legítima autonomía de aquél.—4. Consideración de la doble naturaleza de la provincia para determinar su grado de autarquía y explicar porqué no suele corresponder éste á la potencia y jerarquía provinciales. Cómo resurgen el carácter y supeditación de la provincia romana. 22

APÉNDICES al anterior capítulo:

Los Códigos civiles de la burguesía.	45
La personalidad administrativa y la civil.	47

CAPÍTULO III.—*De la autarquía regional y sus grados según variedad de circunstancias históricas. El regionalismo, las hablas regionales.*—1. Importancia del asunto. Qué es la región, y porqué suele ser tan señalada y profunda la personalidad regional. Relaciones de la región con el Estado central y con las demás personas inferiores á ella: hechos extrínsecos y, hasta cierto punto, indiferentes á la autonomía regional en el orden especulativo y en el histórico; referencia á las Provincias Vascongadas y á las controversias entre foralistas y antiforalistas.—2. Regiones anteriores y regiones posteriores á la formación del núcleo nacional; efectos de esta distinción en el grado de la autonomía regional y en la constitución correspondiente; sucinta referencia histórica á las regiones y reinos ibéricos.—3. Qué relación existe entre la autarquía de las regiones y las formas y modos de agregación al Estado nacional. Estudio histórico experimental comprobatorio en más detenidas referencias á las Provincias Vascongadas, Navarra y Cataluña.—4. Errores de un exagerado foralismo acerca de la naturaleza de los pactos de agregación regional al núcleo y centro de la patria y de la posición respectiva de las partes contratantes. Explicación y nuevas comprobaciones históricas. El pase foral.—5. El regionalismo; acepciones. El regionalismo tradicional y cristiano y el regionalismo liberal. La Constitución de 1812 y los Fueros.—6. Las hablas regionales y su relación con la personalidad y autonomía de las regiones. El habla y la raza. El dialecto y el idio-

ma.—Regionalismo jurídico y regionalismo político; regionalismo y descentralización; regionalismo nacionalista. La tesis y la hipótesis foralistas.—Nueva referencia al pasado, presente y porvenir de los Fueros regionales en España.	51
APÉNDICE al anterior Capítulo.— <i>El sistema colonial</i>	107
CAPÍTULO IV.— <i>Las relaciones estrictamente nacionales. La confederación. La federación. La mera unidad de soberanía</i> .—1. Este es asunto verdaderamente político; su importancia; se plantea la cuestión.—2. Dificultades para resolverla. Si la mera unión militar y aduanera constituyen unidad nacional. En que sentido esta unión, u otra más amplia confederal pueden llamarse Estado.—3. Cuando hay nación por haber <i>federación</i> : no basta la unidad monetaria y de pesos y medidas, ni siquiera un código común de comercio. Condiciones federativas estrictamente necesarias: la <i>interregionalidad</i> en derecho privado y público; la <i>superregionalidad</i> ; la <i>internacionalidad</i> . La hacienda, el código penal y el ejército federales.—4. Confederación y federación; en que se diferencian, y si es la federación forma imperfecta, ó si lo es cumplida de unidad nacional.—5. De la llamada <i>unión personal</i> , y si es bastante por sí sola para constituir nación; ejemplos históricos.	139
CAPÍTULO V.— <i>De las relaciones políticas que incumben al Estado, esto es, al Gobierno</i> .—1. Distinción entre las funciones esenciales y las tutelares.—2. Dificultad de distinguirlas previamente de un modo concreto; causas de esta dificultad.—3. El problema en el derecho nuevo. El <i>estatismo</i> ; referencia á Suiza y á los Estados Unidos.—4. Como plantea la cuestión el derecho fundado en una recta teoría de la personalidad y de los derechos de las varias clases de personas componentes de la nación. Principios fundamentales. Determinación de las funciones federativas correspondientes al Poder central.—Juicio crítico de varias teorías y soluciones respecto del fin, funciones y esfera del Estado.	165
CAPÍTULO VI.— <i>De la centralización y la descentralización. El moderno federalismo; sus clases</i> .—1. La centralización y descentralización no es materia <i>substantiva</i> ni distinta de otras, ni tan limitada y restricta como generalmente se supone.—2. Definición de ambos términos figurados. Peligrosa impropiedad de las palabras centralización y descentralización; doble relación entre ambos conceptos y fórmula comprensiva de ella; centralismo y <i>descentralis-</i>	

mo.—3. Centralización y descentralización políticas y administrativas respectivamente; autonomía, autarquía y descentralización; descentralización y regionalismo. Relación entre centralización y función tutelar del Estado. Una acepción infundada y menos usada de descentralización política y administrativa.—4. La desconcentración administrativa; qué significa. El moderno federalismo: orgánico, sinalagmático; en qué se diferencian.—5. De las causas de la mayor ó menor centralización; qué importancia tiene esta indagación, y si es fácil y aun posible. 189

CAPÍTULO VII.—*Del socialismo en general.—Variedad de acepciones y clases.*—1. Diversos sentidos que racional ó convencionalmente tiene el término socialismo.—2. El socialismo no sólo es de Estado, sino vicio en que pueden incurrir las otras sociedades.—3. Su raíz en la época pagana y en la presente; doble origen del moderno socialismo, en comparación con el antiguo.—4. y 5. Evolución del moderno individualismo filosófico y jurídico al monismo panteísta y positivista y á su consecuencia indefectible, el socialismo. 207

APÉNDICE al Capítulo anterior: *La moderna doctrina orgánica.* . . . 228

OTRO APÉNDICE: *La sociología.* 240

LIBRO IV

El gobierno.

CAPÍTULO I.—*El gobierno; variedad de acepciones.—El Gobierno y el Estado.—Las funciones gubernativas.*—1. La acepción más fundamental y comprensiva del término gobierno; corolarios.—2. Base y criterio psicológicos é individuales para determinar las funciones del gobierno; análisis del término pensamiento; actos y funciones que implica.—3. Las funciones gubernativas en la persona moral; comparación con las de la persona física. La costumbre y la jurisprudencia, fuentes principales de legislación individual.—4. Crítica de las divisiones que contengan más términos que los dos tradicionales de división y subdivisión respectivamente. La función *deliberativa*, la *consultiva* y la *constituyente*; referencia á la doctrina aristotélica. 269

CAPÍTULO II.—*Los sujetos de gobierno.—El superior organismo gubernativo.—La autoridad soberana.—La superioridad natural y correspondiente á la soberanía.*—1. Toda persona capaz es órgano de gobierno nacional; pero antonomásticamente solo la colectividad nacional superior, el Estado; sinonimia entre Estado y Gobierno.—2. El supremo órgano gobernante, ó sea, soberano; referencia á las nociones autoridad, potestad y poder, propias del Derecho natural.—3. La soberanía es un derecho adventicio de la persona superior; pruebas; recuérdanse los fundamentos de toda autoridad.—4. La superioridad de la soberanía es por más de un respecto, y por las dotes de la voluntad especialmente. Las virtudes propias de la soberanía y necesarias al soberano. 285

CAPÍTULO III.—*De las leyes de concreción de la soberanía.—La soberanía es, per se, inelegible é inamovible.—De la educación y el poder soberanos.*—1. Se enumeran cinco leyes de concreción de la soberanía.—2. Pruebas de que la soberanía es, *per se*, inelegible; examen de la significación y valor de varios casos históricos de elección.—Consecuencias de la inelegibilidad; la soberanía es determinada por hechos independientes del libre consentimiento social; exige acatamiento obligatorio, y es inamovible y vitalicia.—4. La soberanía se trasmite por sucesión hereditaria familiar.—5. La educación del soberano; aplicación de los principios de la educación en general, de la de la aristocracia en particular, y singularmente de la que exige la soberanía; la educación militar del imperante.—6. Consideraciones generales acerca del poder soberano. De la fuerza y coacción que la sociedad le presta. El servicio militar; doctrina racional acerca de la organización de la fuerza pública; sucinta noticia histórica. De la riqueza del soberano. . . 305 .

CAPÍTULO IV.—*Del origen de la soberanía.—Causa primera y causa ó causas próximas de ella.—Teoría escolástica del consentimiento, como determinación ó concreción del poder civil.*—1. La causa primera de la soberanía; términos y locuciones expresivos del mismo concepto. La soberanía es de *derecho divino natural*; significación de esta tésis. La doctrina contraria del liberalismo.—2. La soberanía no es de *derecho divino positivo*; dañada tendencia de los que la suponen tal origen; las luchas entre el Sacerdocio y el Imperio.—3. Causa ó causas próximas de la concreción de la soberanía. Afirmación común de la doctrina ortodoxa. Teoría de la mayor parte de los autores escolásticos: el consentimiento libre de la comunidad; fundamentos racionales y motivos prácticos.—

4. Detenido examen crítico de esta doctrina; referencia á puntos de refutación contenidos en textos del P. Suárez y del Cardenal Belarmino.—5. Varios sentidos del término consentimiento, que se analiza para deshacer el equivoco é indeterminación que encierra. 339

CAPÍTULO V.—*De los varios modos de concretarse la soberanía; división de ellos.—La ocupación.—La sucesión.—La usucapión.*—1. Corolario del anterior capítulo: la ocupación de la soberanía; pruebas; analogías y diferencias entre esta ocupación y posesión y las que se refieren á otros derechos.—2. Títulos de esta ocupación: negativo: soberanía *nullius*. ¿Es posible determinar los títulos positivos? Referencia á autores y teorías que lo han intentado.—3. De la sucesión como título derivativo que concreta la soberanía: sucesión *inter vivos* y sucesión *mortis causa*; analogías y diferencias con las de la misma clase en los derechos privados. La renuncia, la abdicación.—4. Modos excepcionales de originarse la autoridad civil: la elección. La usucapión: se define y se fundamenta; referencia á la doctrina de los *hechos consumados*. Comparación entre la usucapión civil y la política; ejemplos históricos.—5. Consideración del *lapso de tiempo* en esta usucapión. *Adhesión del espíritu público*.—6. Importante punto de la fijación de los derechos y deberes recíprocos de las tres personas que figuran en esta complicada relación jurídica.—7. La prescripción de la soberanía legítima enfrente de los actuales gobiernos. Potestad de la Iglesia. . . 371

CAPÍTULO VI.—*La legitimidad y la revolución.—La Revolución francesa*—1. La legitimidad y la legalidad; como se aplican á la soberanía. Sentido racional y sentido convencional y antonomástico de la legitimidad.—2. La revolución considerada en abstracto; criterio para juzgar de la legitimidad de las revoluciones; mal que arguye la necesidad de ellas. Aplicación á la materia actual. Órganos y factores de revolución.—3. Maldad é ilegitimidad intrínsecas de la Revolución francesa; sus principios, causas, motivos reales y efectivos. Situación que hacía urgente una renovación revolucionaria.—4. Corolario y postulado sociológico y político de la doctrina de la Revolución: el pacto social. La teoría pactista protestante y la construida y formulada por Rousseau. El idealismo pactista; sus consecuencias. 411

CAPÍTULO VII.—*El sujeto de la soberanía según los sistemas liberales.—La soberanía nacional en el liberalismo democrático y en el doctrinario.*—1. Como á la soberanía immanente de la masa se yuxta-

pone la cuestión del origen del poder en persona distinta de aquélla: la representación electiva del gobierno; el mandato y el sufragio universal. Precedentes históricos: la democracia protestante no pactista; el pacto en los tratadistas protestantes de Derecho natural.—2. Refutación de la teoría rousseauiana; sus contradicciones esenciales. La voluntad general y la voluntad de todos. El sufragio en la práctica; respetables testimonios de mayor excepción.—3. Otras trasformaciones más doctrinarias de la teoría. El sufragio indirecto ó de grados. Soberanía popular y soberanía nacional; como entienden ésta los doctrinarios. Títulos de concreción de la soberanía. Noticia histórica de la evolución del doctrinarismo.—4. Las *fuerzas vivas*: soberanía de los *inteligentes* y de los *ricos*; examen crítico. Referencias á la Constitución inglesa y á su legislación electoral política.—5. También las *fuerzas vivas* necesitan siempre gobernar por *representación*; qué significa esta necesidad.—6. Fluctuación de la nueva política entre el liberalismo *democrático* y el doctrinario, entre el sufragio universal y el restringido, y como se van confundiendo en una nueva transacción doctrinaria. El voto proporcional; ejemplos en la legislación belga. 437

CAPÍTULO VIII.—*Contradicción esencial de la representación necesaria de toda la soberanía.—El mandato imperativo.—El plebiscito.—La representación de las minorías.—Los colegios de la representación individual* —1. Absurdo esencial del moderno gobierno representativo: no cabe en ninguna de las dos clases de representación la representación soberana.—2. Retorno á la tesis rousseauiana de la irrepresentabilidad de la soberanía; el *mandato imperativo*; significación; imposibilidad; qué supone ésta.—3. La democracia directa y el plebiscito; qué arguye éste.—El plebiscito romano y el plebiscito moderno; el *referendum*.—4. Otra yuxtaposición doctrinaria: la representación de las minorías; fundamentos, motivos y título de esta representación en el derecho nuevo. Sistemas ideados para la presentación de las minorías.—5. Repartición cuantitativa y territorial de la masa electora, para la representación individualista y atómica. La unidad y pluralidad de colegios; combinaciones doctrinarias.—Colegio, circunscripción, distrito; crítica de toda esta materia. 484

CAPÍTULO IX.—*La unidad y la dualidad de cámaras en el moderno gobierno representativo.—De los varios sistemas de constitución de la alta cámara.—El self-government.—El moderno gobierno re-*

<i>representativo</i> .—1. Otro elemento de agregación ecléctica en el liberalismo democrático y en el doctrinario; qué significa la doble representación ó sistema bicameral; fundamentos aducidos para justificarla.—2. Examen y crítica de la doctrina de la doble discusión con que se pretende justificar la segunda cámara. Aún es más insostenible y contrario á la lógica del sistema el motivo de la necesidad de dar representación en la alta cámara á los elementos conservadores.—3. El fundamento de ella en la representación <i>orgánica</i> ; factores, motivos y valor de esta añadidura doctrinaria. Examen crítico de la representación gremial.—4. Imposibilidad actual de la restauración y representación corporativas. Referencia á la Constitución de 1876 y á las leyes electorales del Senado y del Congreso.—5. Procedencia y constitución de la alta cámara; cómo su eficacia teórica y la imposibilidad de su acción están en razón directa de la mayor contradicción doctrinaria que implique; sistemas inglés, francés y belga; indicaciones sucintas de la constitución española, francesa, belga y americana.—6. Corolario importante: qué relación hay entre el <i>self-government</i> y soberanía popular y nacional, y si la Constitución inglesa puede, aun ahora, considerarse la expresión más perfecta de aquél.—7. Corolario final: imposibilidad de definir el actual gobierno representativo; dificultad de la misma fórmula descriptiva. La pseudo representación soberana no puede menos de ser en teoría republicana y unicameral	515
--	-----

APÉNDICE á los capítulos anteriores: <i>La soberanía, la democracia y la representación según el liberalismo armónico</i>	549
---	-----

OTRO APÉNDICE: <i>La democracia cristiana y la Encíclica Graves de communi</i>	557
--	-----

CAPÍTULO X.— <i>De las formas de gobierno; criterio de división y de legitimidad.—Comparación entre la monarquía y la poliarquía.—Los gobiernos mixtos</i> .—1. Pruébese que no hay más división lógica de formas de gobierno, ó mejor dicho, de soberanía que la de monarquía y poliarquía. Qué se entiende por <i>espíritu</i> de las formas, y cómo es cosa extrínseca racionalmente á la persona física ó moral gobernante. Aristocracia, democracia, mesocracia, y teocracia. Divisiones ilógicas y de términos yuxtapuestos.—2. Deducciones importantes: el gobierno no es patrimonio de clase, aunque, en otro respecto, debe ser lo más aristocrático posible y toda constitución aristocrática, democrática, mesocrática y teo-	
--	--

crática á la vez.—3. Así la monarquía como la poliarquía ó república son formas legítimas de gobierno. Doctrinas extremas y contrarias que profesan la legitimidad de una ú otra forma solamente. Comparación de la monarquía con la poliarquía para determinar cual de ellas es superior. La regencia.—4. Los gobiernos llamados mixtos: no los hay en teoría; cuales y por qué se denominan así en lenguaje usual y corriente. 567

CAPÍTULO XI.—*Diversas denominaciones y clases de monarquías.*—

La monarquía hereditaria.—Condiciones de las leyes de sucesión.

—1. Importancia de la materia para deshacer equívocos y determinar bien nociones erróneas ó confusas. Se fija el concepto de monarquías *de derecho divino, puras, absolutas y patrimoniales.*

—2. Se hace lo mismo respecto de las *moderadas ó templadas*; cuales lo son en estricto sentido. Las modernas monarquías *constitucionales y representativas.* Monarquías *doctrinarias y democráticas*; en qué se distinguen.—3. Porqué, teóricamente, no pueden subdividirse las monarquías en hereditarias y electivas. Que es la monarquía electiva; porqué no arraigó la herencia en el Imperio romano.—4. La sucesión en la monarquía; la primogenitura; la representación; sus respectivos fundamentos.—5. Cuestión acerca de la sucesión de la mujer; referencia á la doctrina del feminismo. En qué proporciones y hasta qué punto debe predominar el sistema agnaticio. La ley sálica. Ejemplos históricos en los sistemas sucesorios de Castilla, Aragón y Navarra.—6. De la sucesión en las poliarquías, y porqué no ha arraigado en la práctica una ley común á toda soberanía. 601

CAPÍTULO XII.—*Órganos que comparten las funciones legislativas.*

—*Cómo se reparten entre las cortes y el jefe del Estado.—El veto y la disolución de las cámaras y suspensión de sus sesiones.—La legislación constituyente y la ordinaria.*—1. Los órganos no soberanos de gobierno central. Funciones soberanas retenidas; funciones encomendadas ó delegadas. Cómo comparten con el soberano otros órganos la función legislativa: sanción, iniciativa, formación y deliberación de la ley; diferencias entre el derecho racional é histórico y el derecho nuevo.—2. Cómo son las cortes en el antiguo y en el nuevo régimen organismo legislativo, y con qué título. Qué significa el decreto en el sentido de resolución legislativa según el derecho racional y el inspirado en el liberalismo. Identidad entre sanción y decreto al tenor de la lógica del sistema.—3. Qué funciones legislativas atribuye el doctrinarismo al

jefe del Estado así en las monarquías como en las repúblicas. El *veto* y sus clases; relaciones con la sanción; referencia á las constituciones españolas.—4. Otras contradictorias atribuciones de la superior magistratura unipersonal respecto á la existencia y actuación de las cámaras: convocación, disolución, suspensión de sesiones; alcance de tales prerogativas; disposiciones de nuestra legislación constitucional y de algunas extranjeras.—5. Distinción entre la función legislativa constituyente y la ordinaria. Si surge ó no de una exigencia racional aun en el derecho nuevo; el verdadero motivo. Cuestiones ajenas á ésta: la flexibilidad y la rigidez de las constituciones. Criterio de las constituciones españolas, de la inglesa y de algunas otras. 639

CAPÍTULO XIII.—*Los funcionarios ejecutivos y judiciales y las respectivas legislaciones orgánicas.—El Jurado.—El organismo consultivo.*—1. Las funciones ejecutivas centrales retenidas y las encomendadas; título de concreción en los respectivos sujetos. En qué sentido se dicen representativas las segundas. Los dos intereses armónicos en el empleo. El empleo en las repúblicas clásicas, en el cesarismo imperial romano y en la época feudal. Idoneidad del empleado.—2. La designación para el empleo y la estabilidad de éste es materia de legislación principalmente; bases orgánicas de ella. Fundamento, proporción y esfera del libre arbitrio soberano.—3. La función jurisdiccional del Estado; aplicación de los anteriores principios y bases á la organización de la magistratura. Sucinta historia de las vicisitudes de la jurisdicción central en las edades antigua, media y moderna. Razón y límites del arbitrio soberano así respecto de la magistratura como de la acción judicial directa de éste.—4. El Jurado; naturaleza, definición; fundamentos en que lo apoyan; crítica.—5. El Jurado, expresión de la jurisdicción del pueblo juez, en razón de soberano. Magistratura representativa de los jurados. Contradicciones doctrinarias de la institución. En qué instituciones anteriores han pretendido encontrarla conexión más ó menos íntima; el juicio feudal de *pares*; la judicatura y la función judicial distintas de la magistratura y su jurisdicción en el *ordo judiciarius* anterior á Diocleciano.—6. El consejo, función gubernativa central. Los órganos privados y públicos, individuales y colectivos de consulta. El organismo consultivo; cuestión de la unidad y pluralidad de consejos. Legislación orgánica. Elementos componentes de los cuerpos consultivos; materias de la consulta. Es otra moderación orgánico-protárquica, como el organismo ejecutivo y el judicial. La fun-

ción consultiva en la época antigua; el consejo feudal; modificación y transformación. El Consejo Real.—7. A quien corresponde la formación de funcionarios, magistrados y consejeros. La acción universitaria; eficacia de su autarquía. 661

CAPÍTULO XIV.—*El constitucionalismo.—Constitución y derecho constitucional.—La teoría constitucionalista.—Gobiernos de gabinete y gobiernos representativos.—El poder moderador.—Las fuentes del derecho constitucional.*—1. Constitucionalismo como doctrina concerniente al organismo del Estado. Determinación previa del concepto de *constitución* en amplio y en estricto sentido. Derecho constitucional en acepción general y en acepción antonomástica é histórica. Confusión y oscuridad de la nueva doctrina acerca de tan sencillas nociones.—La teoría constitucionalista, tal como la formuló Montesquieu división del poder: igualdad é independencia de los poderes públicos; fines y propósitos de la división; relaciones consiguientes; intervención de cada poder en la esfera de los otros. La inviolabilidad real y la responsabilidad ministerial. Crítica de la teoría. Locke y Montesquieu, Montesquieu y Maquiavelo.—3. Montesquieu *apriorista* una fase y etapa mal entendidas de la constitución británica, que eran ya de parlamentarismo avanzado. Reacción constitucionalista, siempre contradictoria, hacia la unidad en el poder antiguo. *El poder regio. El poder ministerial*; qué son en la práctica los ministros responsables. Sucinta referencia á la historia política de Inglaterra y Francia para explicar las respectivas situaciones del rey, parlamento y ministros.—4. Fluctuación de la unidad del poder entre el poder antiguo y el nuevo; inclinación natural hacia el parlamentarismo. Examínase si el gobierno llamado *presidencial ó representativo* en estricto sentido es verdaderamente constitucionalista, ó si hay en él un centro, aunque no tan determinado, de unidad. Naturaleza de este gobierno y razón de su nombre; comparación de la constitución francesa con la de los Estados Unidos, y estudio más detenido de esta última. Examínese si puede considerarse *presidencial y representativa* la Constitución federativa de Alemania.—5. Negación radical del constitucionalismo: el *poder armónico ó moderador*; su naturaleza; qué significa en las monarquías y en las repúblicas. Es en substancia el *poder regio*, contradictorio en teoría, impotente é inútil, por lo general, en la práctica. Los conflictos que *resuelve*. El poder armónico y la opinión. La distinción de funciones no es la división de poderes.—6. Las fuentes del derecho constitucional. Examínase si son distintas de las de los demás

derechos. Las formas del derecho político escrito: *compilación, ordenamiento, código*; aplicación de los principios generales. Constituciones propiamente dichas y cartas otorgadas; en qué se diferencian. La costumbre en derecho político constitucional, y si expresa siempre el término costumbre la idea general y corriente. La costumbre en las constituciones flexibles y en las inflexibles; ejemplos de la Constitución inglesa, de la Norteamérica y la vigente en España.

707

CAPÍTULO XV.—*De las moderaciones del poder soberano; sus clases.*

—*Las moderaciones orgánicas.—La autarquía nacional.*—1. Las moderaciones inspiradas en la razón y formadas por la historia. En qué consistió la moderación de los gobiernos medioevales. De la diversa clase de moderaciones. Las moderaciones éticas; su valor en el soberano y en la sociedad. Las moderaciones legales ó jurídicas. Gobierno moderado ó templado. Todos deben serlo. Caracter de las moderaciones en el constitucionalismo.—2. Qué entendemos por moderaciones orgánicas; valor y categoría. Las moderaciones orgánico-protárquicas. Moderaciones orgánico-autárquicas; variedad y jerarquía. *La autarquía nacional*; defínese. Es la moderación por excelencia. Se forma con los mismos elementos y en el mismo orden que la sociedad civil ó nación. Nada valen las moderaciones orgánicas, si no están informadas por las éticas. La esfera autárquica nacional es la de las libertades públicas cristianas.—3. La soberanía y la autarquía; distinta categoría de cada una, en qué relación están la acción gubernativa soberana y la autárquica. Las moderaciones en los gobiernos antiguos y en los cristianos y medioevales. El derecho y la política nuevos han concluido con las verdaderas moderaciones, las éticas y las orgánicas. Cuales hubieran sido los frutos de *soberanía legítima* y *autarquía nacional*, si la constitución en ellas basada hubiera llegado á madurez.

769

CAPÍTULO XVI.—*De la comunicación é inteligencia entre la autarquía nacional y la soberanía.—La opinión y los partidos.—Órganos y medios de formación y expresión.*—1. La opinión pública; porqué no se la llama *certeza pública* ni *conciencia social*; en qué consiste; elementos y factores; órganos de formación. De qué depende el valor de la opinión nacional. La opinión en las sociedades racionalistas.—2. Los partidos. Constituyen una imperfección natural. En qué relación se hallan con la opinión, con la sociedad civil y con las demás sociedades componentes de ella. Condi-

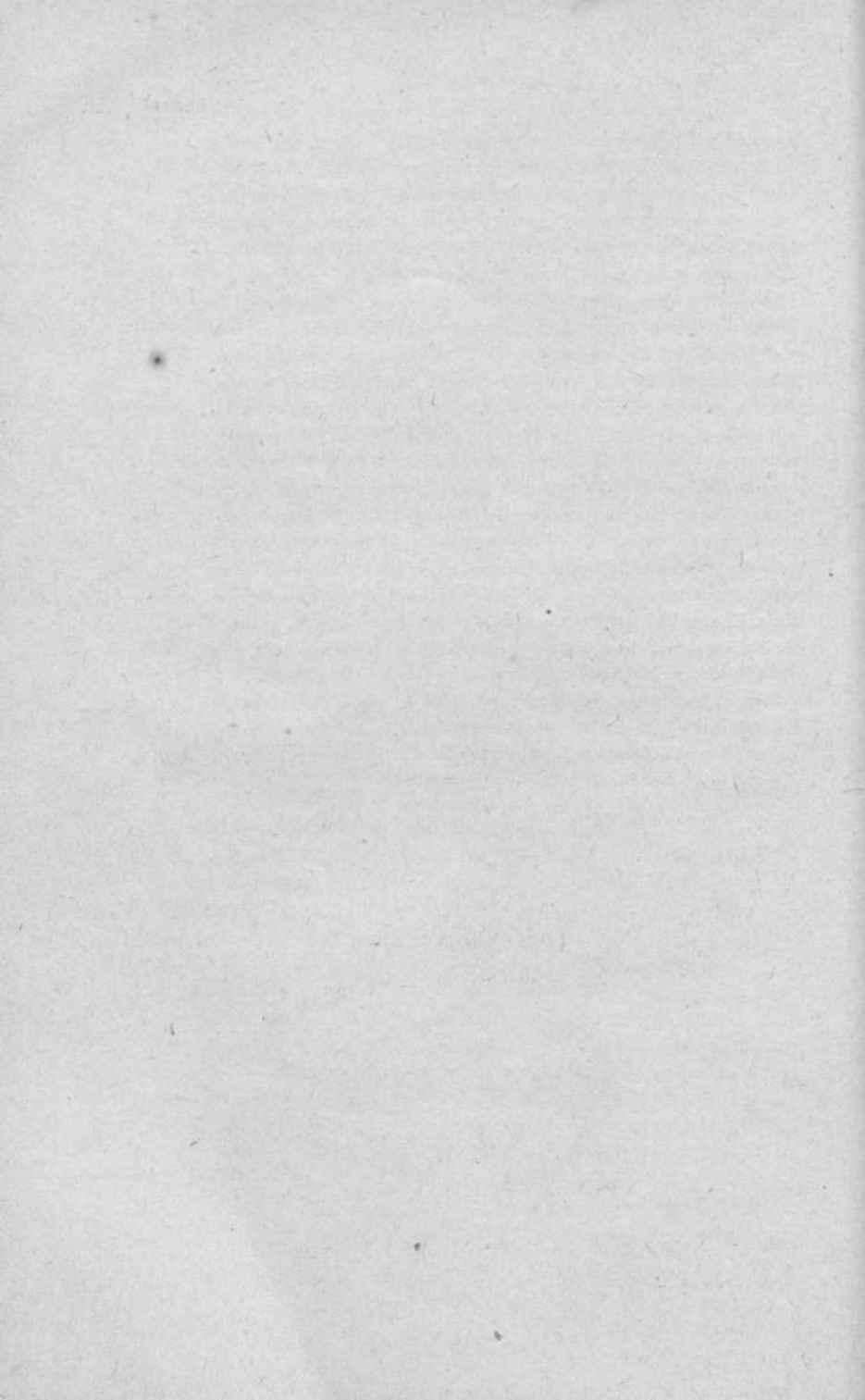
ciones de su moralidad, utilidad y eficacia. Los partidos modernos. Lejos de ser lo excepcional y extrínseco de la opinión son los sumandos heterogeneos de ella. Su condición y caracteres. Su *bondad intrínseca* según el racionalismo.—Como son instrumentos de gobierno. No pueden clasificarse ni dividirse. Sucinta referencia histórica á los partidos ingleses, belgas, franceses, etcétera.—3. Otros factores y órganos de opinión y de partido. La reunión y la asociación; son actos lícitos y derechos naturales; pero más natural que otras sociedades sean las que formen y expresen la opinión y las opiniones. Obligaciones y derechos del Estado respecto de la reunión y de la asociación. Porqué el moderno Estado las mira en la práctica con tanta prevención, y las reglamenta y restringe excesivamente. Noticia del criterio predominante en Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos.—4. El principal vehículo de opinión y de partido: la prensa; su *bondad intrínseca*. Aun el diario es bueno, *per se*, y hubiera nacido y perfeccionándose en sociedades avanzadas en el progreso cristiano.—Sus inconvenientes y peligros. El moderno diario liberal. La prensa de partido y la prensa *neutra y de opinión imparcial*. 789

CAPÍTULO XVII.—*Naturaleza de la representación; sus órganos.—Las cortes; el estamento regional y el aristocrático.—El gobierno representativo.—La resistencia al Poder.*—1. Un sentido del concepto *representación* no considerado directa y explícitamente hasta aquí: la *petición*; acepción amplia y acepción estricta; su relación con la representación en el más amplio y fundamental sentido de expresión y manifestación de una cosa por medio de otra. Fundamento de la petición.—2. La petición representativa es derecho de toda persona; pero lo natural es que sea regional; expónganse las razones. El mandato imperativo y la representación regional. Sus condiciones: *intermitente, periódica, igual*. La legislación representativa, asunto común á la autarquía regional y á la soberanía. Corolarios: la representación no debe ser ni provincial, ni municipal, ni menos gremial directamente; no debe haber más que un estamento regional para todas las regiones. Porqué en la Edad Media fué la representación solo concejil y había cortes distintas de región-Estado.—3. Amplitud de la materia de la representación regional. La petición de una región es asunto directamente nacional. La asamblea regional nacional es órgano de consulta además de petición. Porqué puede decirse que las cortes legislan con el rey. No puede fijarse de antemano en qué materias

ha de legislar éste con el concurso de aquéllas. Su intervención efectiva en todo el gobierno.—4. Si debe haber, ó no, un estamento aristocrático; motivos de duda. Necesidad de la representación aristocrática para el cumplimiento de sus oficios nacionales; en qué sentido se dice representativo este estamento. Si sólo debe formarse por título hereditario, ó también por designación real. Del elemento eclesiástico en la representación nacional; títulos racionales é históricos.—5. Corolario: todo gobierno, sin distinción de formas, debe ser representativo. Criterio para resolver la cuestión histórica de la índole de ciertas asambleas medioevales. El derecho á ser representante es el carácter más distintivo entre la nacionalidad y la ciudadanía. Excursión histórica respecto de la distinción entre ambos estados en Roma, en la Edad media y en el nuevo derecho.—6. Función y oficios de las córtes en el caso de legítima resistencia al poder. Referencia á la doctrina de derecho natural sobre la resistencia *pasiva y activa* al Poder. En caso extremo de iniquidad y tiranía del soberano se traslada de hecho la autoridad soberana á las córtes; sus deberes y derechos en tal supuesto é hipótesis. Referencia á la conducta de las asambleas revolucionarias de Inglaterra y Francia en las épocas de las respectivas revoluciones. 819

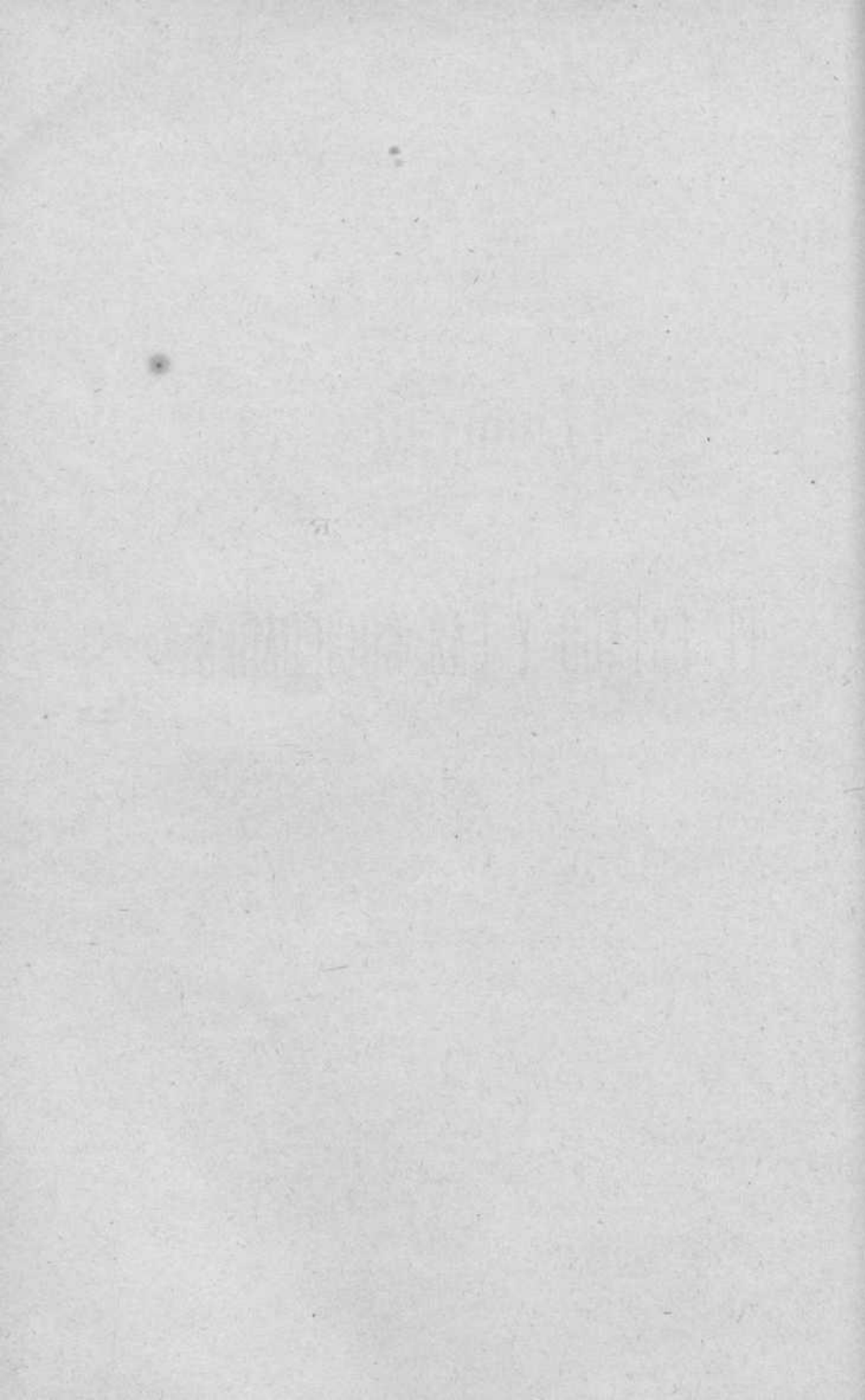
CAPÍTULO XVIII.—*Los vicios de la soberanía.—El gobierno personal.—El liberalismo, vicio á la vez funcional y orgánico.—El parlamentarismo.*—1. Qué entendemos por vicios de la soberanía; su división. Vicios funcionales: injusticia de la acción soberana; sus manifestaciones más frecuentes: la tiranía; no es exclusiva de la forma monárquica. La oligarquía funcional y la oclocracia; no son exclusivas de la república, aunque más frecuentes en ella.—2. El despotismo; en qué consiste; se distingue de la tiranía. Se define el absolutismo de que ha habido que tratar en muchos pasajes. La anarquía; riguroso sentido etimológico; concepto técnico. Es también vicio común á ambas formas gubernativas. La anarquía en las monarquías medioevales y en las contemporáneas.—3. La monarquía no tiene vicio orgánico. De dónde proceden los de las poliarquías ó repúblicas. La democracia; en que sentido se la considera vicio. La demagogía. Reacción oligárquica; la oligarquía orgánica; no puede considerarse vicio, sino, cuando más, una irregularidad, para bien probablemente.—4. *El gobierno personal*; sus clases y formas. La dictadura; sus causas. Las dos especies de dictadura en Roma. El *cesarismo*; cual es su forma. El *imperio*; cómo y porqué nació en la constitución romana. El im-

perio en la Edad media. Las monarquías cesaristas en esa edad y en la moderna y contemporánea. De qué procede el gobierno personal en las actuales repúblicas; en qué consiste éste en las monarquías doctrinarias; en qué se diferencia del gobierno personal de las antiguas monarquías.—5. El liberalismo, conjunto de vicios funcionales y orgánicos. Radical injusticia de todo naturalismo. Cómo del pragmatismo liberal surge la tiranía, y porqué no ha hecho retroceder al mundo á la antigua servidumbre. Naturaleza y definición del despotismo liberal. El absolutismo propio del sistema. Cuáles son en él los gérmenes de la anarquía. La democracia y la demagogía liberales. Obstáculos con que tropiezan la depuración oligárquica y el gobierno personal.—6. El parlamentarismo; naturaleza y definición; cita de Donoso Cortés. Principales manifestaciones del vicio esencial, general é ingénito: falsificación y supeditación del voto; corrupción electoral. Naturaleza y carácter de las asambleas de tal origen y del pragmatismo legalista con que gobiernan. Oligarquía funcional; á quién favorece. Otras manifestaciones subalternas: la incontinencia y la inacción legislativas. El absolutismo parlamentario en los gobiernos de gabinete; los *votos de censura* y los *votos de confianza*; la oligarquía y la dictadura en el Ministerio; el servilismo y la rebelión de las mayorías; el fraccionamiento de los partidos y la inconsistencia de los Ministerios; vaguedad del programa y dificultad del gobierno. El *retorismo parlamentario*. El caciquismo y el parlamentarismo. 859



LIBRO III

EL ESTADO Y LAS SOCIEDADES



CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES ACERCA DE LA PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES COMPONENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL.—AUTARQUÍA DE ÉSTAS.—AUXILIO SOCIAL DE LAS SUPERIORES A LAS INFERIORES.

1. La nación, en un orden regular de vida y desarrollo, es, según ya hemos visto, una sociedad completa, pública y autónoma, que se compone de otras varias inferiores, así incompletas como completas, privadas como públicas, relacionadas, en concepto de partes á todo, con la que, por antonomasia, se viene llamando civil, y de la cual, en varios respectos, dependen.

Mas por lo mismo que son partes de un todo moral, no dejan de ser personas, ni de mantener, como tales, en el conjunto la personalidad correspondiente, perteneciendo á él más que para la subsistencia y prosperidad del todo para la armónica utilidad legítima de las partes, esto es, para la cooperación y auxilio recíprocos, conducentes al cumplimiento del propio fin y de la variedad de fines que éste comprende. Lejos de ser las personas para la sociedad, es ésta más para aquellas, y, á diferencia de lo que sucede en la persona físi-

ca, puede afirmarse que más utilizan los *órganos* al *organismo* que el *organismo* á los *órganos*, por más que de la perfección de éstos en el ser y en el acto resulte, en ambos conceptos, la de aquél y recíprocamente se influyan y aquilaten la del uno y la de los otros.

2. Del concepto de persona y de sociedad y de los respectivos fines se deduce que las personas morales ó colectivas tienen, como las físicas, el deber y el derecho de procurar su bien ó fin por los medios correspondientes, ordenando al efecto los actos sociales. De donde se sigue que toda sociedad, por subalterna ó inferior que sea, es sujeto directo é inmediato de su propio *régimen ó gobierno*, con las funciones que éste implica de darse la ley, la norma de conducta, (función legislativa) y de cumplirla, haciéndola efectiva por varios modos (función ejecutiva) según racional intento para el fin, y sobre los actos y los medios conducentes.

Es decir, que no hay persona moral que con más título y mayor eficacia que la persona física *sui juris* no tenga eso que con término corriente, aunque exótico, llaman ahora *self-government*, y que designaremos más bien con el de *autarquía*, ora signifique esta palabra también *propio gobierno*, ora la *suficiencia mayor ó menor, pero siempre relativa, con que una comunidad atiende á sus fines y necesidades, usando los medios y recursos propios*. En este sentido la tomó y usó Aristóteles, correspondiéndose ambas acepciones por la conexión íntima que existe entre la suficiencia para cumplir el fin y el deber y el derecho de que por sí mismos lo procuren así el individuo como la comunidad,

sean de la clase que fueren. Así pues, *selfgovernment* ó mejor autarquía, por neologismo de más clásico y naturalizado abolengo, es el *derecho de propio é inmediato gobierno que tiene toda sociedad como toda persona en virtud de su personalidad é independencia y en proporción de la capacidad personal y de la entidad y cuantía de los bienes que posee.*

De lo cual se deduce que el auxilio social que una sociedad superior presta á otra inferior es solo complementario de la insuficiencia de aquélla, ora por defecto de su capacidad gubernativa, ora por la escasez y falta de recursos; y que cuando el auxilio no tiene estos fundamentos y motivos, no solo es inútil y carece de título, sino que puede ser además nocivo y en todo caso supone una intervención desordenada en la esfera gubernativa de la persona social y un atentado á la autarquía, que deriva de su legítima independencia.

3. En lo que se refiere á la capacidad, siempre limitada de toda y cualquiera sociedad, hay que tener en cuenta que aún puede ser circunstancialmente inferior á la que corresponde á la naturaleza de esa comunidad y que, por lo tanto, el *complemento gubernativo* tiene un doble origen, razón y título: el de la limitación natural de cada sociedad, según su condición y jerarquía, y el que por situación anómala más ó menos acentuada, extraordinaria y habitual, necesita y requiere *en el actual momento histórico*, como ahora dicen, esto es, en un período ó época determinados. A esta intervención complementaria de gobierno, se la ha designado, lo mismo en derecho privado que público, in-

terno ó internacional con el nombre, no poco equívoco, pero tradicional, de tutela.

El mismo nombre se ha aplicado también á la función con que la persona física ó moral superiores acuden á la insuficiencia de recursos de las inferiores con auxilio no de ordenación, sino de los bienes que necesitan éstas, por razón de justicia ó de misericordia, según los casos. El término es tan equívoco cuando designa éste como el anterior oficio, porque tutela (de *tueor*) significa vigilancia y defensa ó protección más bien que sustitución supletoria de gobierno ó prestación de bienes sociales, y solo una traslación convencional, por analogía, ha extendido la denominación á funciones no estricta y simplemente protectoras y defensivas.

4. Aunque también los iguales se auxilian, no solo por cooperación igual, sino por prestación de superiores bienes morales y materiales, resultando entonces que el igual de condición y estado es superior por posición ó por circunstancia, lo natural es que la ordenación ó el recurso de que una sociedad carece lo reciba de una persona jerárquicamente superior, más íntimamente ligada por razón de humanidad y sociabilidad con aquella que ha menester la dirección ó el medio, y así que la sociedad privada los solicite y reciba de la pública, y la inferior de éstas, el pueblo, de la provincia, la provincia de la región y ésta de la comunidad nacional.

La nación, por lo tanto, estará menos obligada á estos auxilios con los individuos y con las sociedades que no son elementos directamente constitutivos del

todo nacional; y no por que la obligación sea menor, antes es en proporción de la superioridad del Estado y la cuantía y valor de sus medios, sino por que ese deber lo concretan tanto la necesidad del que exige, como la imposibilidad ó dificultad de que otras sociedades más íntimamente ligadas á él le asistan con el bien que reclama. La obligación nacional es más extensa y comprensiva que concreta y frecuente, más potencial que actual, más apercibida y dispuesta que ejercitada y efectiva; y porque las funciones sociales de la nación son más elevadas siempre, y aun las extraordinarias y anormales suponen mayores empeño, esfuerzo y necesidad, no debe ni puede estar en ejercicio de continua, amplia y habitual tutela, especialmente con las personas inferiores á la región, para no debilitar y agotar así la potencia y virtualidad del Estado, paralizando ó enervando su acción, de modo que no pueda acudir ó acuda floja, débil é ineficazmente á las atenciones naturales é intrínsecas ó á las históricas de más precisión, apremio y trascendencia.

Hay además que tener en cuenta que, no el gobierno complementario, pero sí la prestación de los demás bienes que necesita la sociedad inferior y que ella no puede proporcionarse, no siempre los recibe, ni es bien que los reciba directamente de los órganos gubernativos, esto és, de la autoridad del pueblo, provincia, región ó nación respectivamente, sino de los otros órganos sociales de esas comunidades públicas, porque también en ellas, su Gobierno, ó como si dijéramos *su Estado*, no ha de practicar para la vida colectiva interior ni para la de relación con los otros consorcios más

funciones que las estrictamente autoritarias ó las tutelares que sean precisas. La razón de esto es común, no solo á toda autoridad, lo mismo pública que privada, soberana ó dependiente, sino á cualquiera otra persona, la cual solo está obligada á dichas prestaciones en defecto de otros sujetos en quienes se concrete antes y con preferencia el deber por razones de mayor intimidad social y mejores actitud y disposición para el auxilio: tales son los individuos y especialmente las sociedades incompletas, que, en la esfera de las completas desde el pueblo á la nación inclusive, procuran la consecución y fomento de uno ó determinados bienes, no abarcando su actividad el ámplio círculo, ni los graves oficios de los poderes públicos de concejo, provincia, etc. Los cuales extienden sus funciones á los distintos órdenes de la vida y del derecho, sin excepción, aunque no toda ni la mayor parte de aquélla y de éste les esté confiada; debiendo ser, en un orden regular de progreso cristiano proporcionado al tiempo de existencia histórica y de armónico adelanto de las instituciones, fuerzas dispuestas á lo más, y capaces de ello, pero empleadas en el menor ejercicio actual posible. Vuelve aquí á presentarse, tanto el problema de la acción del Estado, como el de la de todos los otros *Estados*, problemas formalmente idénticos y cuya solución no corresponde al Derecho político únicamente, sino á todo el Derecho público y al privado y en varias partes, no solo en una de las respectivas materias.

5. No solo en el derecho nuevo, sino en el antiguo y en el de la Edad media, nótese en la esfera privada

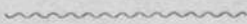
y en la municipal más intervención directa del Estado, esto es, del poder soberano, que de la sociedad nacional por el ministerio de otros órganos, y que de las otras colectividades públicas completas bien por conducto de sus autoridades, bien por el de las demás personas, las sociedades incompletas especialmente. Este hecho, casi general y constante, que no solo característico de la sociedad moderna y contemporánea, parece expresar una ley natural contraria á la doctrina expuesta en los anteriores números.

Parece, sin embargo, que puede explicarse el fenómeno históricamente por el nacimiento simultáneo del pueblo y la nación; ó por mejor decir, por la confusión primitiva entre ambas sociedades públicas, cuando el Estado nacional no excede del Estado concejil, cuando la nación es un pueblo independiente y el Estado todo lo más una ciudad y su término. No hay entonces sociedades completas intermedias entre la nación y las familias, que son los inmediatos elementos componentes de aquéllas, y menos aún existen esas sociedades incompletas que arguyen más larga vida nacional y el progreso correspondiente á ella. Entonces las familias solo de la autoridad soberana pueden recibir tanto la superior intervención gubernativa como los demás oficios de social beneficencia.

Después, aunque aparezca y prospere la vida municipal y aun la de comunidades más ámplias y poderosas, y nazcan y se multipliquen las otras asociaciones espontáneas para fines y bienes determinados, ya el Estado ha contraído el hábito de una acción más ó menos justificada en el orden privado y municipal, y la

familia y el municipio la costumbre de que el poder civil, y no otro, los gobierne y socorra.

A lo cual hay que añadir el conato invasor en la esfera agena que no es exclusivamente propio de este Poder sino común á toda persona, la cual hállese más expuesta á la inmotivada ingerencia, cuanto más carece de los elementos de moderación y templanza que encierran á cada sujeto en el límite de sus deberes y atribuciones, ó son esos elementos débiles é insuficientes. En las sociedades precristianas, y más en las actuales, fué y es vicio habitual tal intromisión por el necesario influjo de hechos y de ideas, de que se tratará en otro capítulo de este mismo libro, y cuyo carácter esencial y distintivo fué el mayor ó menor desprecio y desconocimiento de la personalidad agena y por consiguiente de la independencia y autarquía proporcionada y debida á cada persona. El cristianismo, por el contrario, trajo á la vida é infundió en ella, con el respeto á la personalidad, el reconocimiento de toda y cualquiera autarquía, y con las moderaciones éticas de todo poder, mayores y más sólidas seguridades á la libertad legítima y á la relativa autonomía de cuantos, por ser personas, son principio y agente inmediato de su derecho. En la Edad media encarnaron, bien que imperfectamente, estos factores como todos los de la constitución social y jurídica, privada y pública de la sociedad.



1. En los Capítulos I, III, IV, en éste especialmente, del Libro II hállase la *razón del método* del primer capítulo y los demás del Libro III. Después de estudiados los oficios del Estado para con la Iglesia, para consigo mismo y para con la persona individual, procede la exposición de los que tiene con las varias personas sociales, así privadas como públicas, incompletas ó completas, y antes de los concernientes á cada clase de sociedades, la doctrina general acerca de las personas morales y jurídicas cualquiera que sea su naturaleza y condición.

Este capítulo, que es como preliminar, y en el que se condensan los inmediatos corolarios jurídicos de las nociones filosóficas acerca de la persona individual y la colectiva, contiene los principios de todas las teorías de este Libro III y no pocas de las del IV, las cuales fluyen con la facilidad y evidencia de no muy mediatas ni lejanas deducciones. Pero es todavía, en su mayor parte, doctrina común de Derecho natural, incluida en el políptico por los autores liberales y por nosotros en virtud de las razones reiteradamente expuestas en varios pasajes del tomo primero, bien que éste capítulo y el IV del libro anterior den la clave para resolver muchos é interesantes problemas de la política, y no de manera formalmente distinta que los que encierra la doctrina concerniente á toda y cualquiera personalidad y autoridad.

Las partes de un todo moral, esto es, los miembros de una sociedad, sea de la clase que quiera, son no sólo substancias, sino *subsistencias* ó lo que es lo mismo substancias completas y además *supuestos*, ó sea substancias de naturaleza racional. Mientras que el pié, la mano, cualquiera órgano físico, en su calidad de substancias incompletas, se ordenan á un compuesto substancial, las substancias completas, ya sean simples, ya compuestas, no se ordenan á constituir á éste, y mucho menos se ordena el supuesto, substancia singular que define el P. Tongiorgi (*Institutiones Philosophiæ*—Volumen II, pág. 81, editio sexta) *quae per se integrum quoddam est atque completum;*

videlicet quae nec alterius pars est neque uti pars spectari potest (1).

En estas sencillas y al parecer lejanas nociones escolásticas, que el vulgo, (y en él comprendemos buena parte de la gente de *letras*) juzga estériles nociones metafísicas sin aplicación alguna práctica, se funda toda la teoría de las públicas libertades, así individuales como colectivas, la autarquía, el verdadero *self-government*, que no puede menos de naufragar en las concepciones irremisiblemente monistas del racionalismo y naturalismo. Como más adelante veremos, aquellas elementales y fecundas nociones son las que han olvidado, si alguna vez las aprendieron, los autores positivistas, para lo cual han tenido que desdeñar la experiencia, que es también la fuente primitiva, mediata, á la vez que la comprobación real de tales conceptos.

2. Dios ha encomendado á cada persona, desde que llega al uso de la razón, el cuidado de ordenarse al propio fin directamente, asignando á cada hombre la responsabilidad proporcionada al conocimiento del bien y á los medios personales y colectivos con que cuenta para lograrlo. Esto implica y requiere la *independencia*, atributo esencial de la personalidad y de la misma condición y jerarquía que el estado y posición de cada persona: que entre el agente y cumplidor de su destino y el acto con que lo prosigue y trata de conseguirlo, no se interponga indebidamente ningún otro sujeto, sino solo en cuanto de diversos modos y con varias funciones ayuda, *suple* á la persona en el cumplimiento del bien último y de los otros intermedios y útiles que á él conducen.

La sociedad, en sus diversas formas y grados de comprensión, extensión, eficacia y poder es un medio, un vehículo para la efectividad del bien personal, y, en tal concepto, debe estimarla el hombre, como recurso para remediar los defec-

(1) ¡Y aún se atribuye á la filosofía y al derecho nuevos la idea de que el hombre no ha de ser considerado como medio exclusivamente!

tos de la finitud de su ser y potencia y complementar y perfeccionar el acto con la cooperación de los demás hombres. Y para que este individualismo no dé en el egoísmo y en la egolatría, cuya raíz está en la esencia de los modernos sistemas filosóficos y jurídicos, hay que fundar los deberes sociales en su único título ético y jurídico, la voluntad de Dios, que quiso para todos los individuos de la especie humana el mismo fin por iguales medios, y que, por lo tanto, obliga racionalmente á cada hombre á querer esos bienes, no solo para sí, sino para sus semejantes en naturaleza y destino y ayudar á todos á que en ellos se cumpla el divino propósito (1).

De aquí se deduce que del individualismo rectamente entendido surgen la misma prosperidad y grandeza sociales, porque todo hombre está racionalmente necesitado de mantener y perfeccionar el medio temporal más amplio y perfecto para la realización del fin individual y colectivo impuesto por Dios á la especie y á los individuos de que consta y en que se concreta; y trabajando por y para la sociedad, por sí y para

(1) El razonamiento para fundamentar el íntegro deber de sociabilidad y todos los que encierra, de los cuales consta, que de él se deducen y en los que se reparte y manifiesta, es formalmente el mismo en todos los autores así cristianos como racionalistas, modernos ó antiguos. El *no quieras para tí lo que no quieras para otro* con su correspondiente fórmula positiva; el *no consideres al hombre como puro medio*; las mismas paráfrasis kantianas del imperativo categórico de la razón práctica tienen idéntico motivo y razón formales, como derivados de ese patrimonio intelectual común que resiste á los perpétuos ataques con que á él atenta el sofisma. La separación y la discrepancia empiezan donde todas las que abren un abismo entre el concepto cristiano y el racionalista, en la fundamentación de éste como de los demás deberes, que para el cristiano está en Dios y para el racionalista en el hombre mismo, sobre el cual no hay otro ser. De aquí que, por falta de motivo racional y ético, que no pueden existir sin motivo religioso, si el individualismo no ha de caer en el egoísmo, cuya lógica y repugnante fórmula ideal sintetiza Fichte *en el ámate á tí mismo sobre todas las cosas y á tus conciudadanos por amor á tí*, ha de dar en el otro extremo opuesto, en el inevitable escollo del socialismo, cuya evolución práctica y sistemática hemos de exhibir en breve.

sí trabaja, con lo cual aumenta los recursos materiales y morales y contrae y aquilata los méritos de una sobrenatural virtud, la caridad. He aquí la clave de aquella armonía entre el interés individual y el social someramente indicada y de paso en las páginas 148 y 149 del tomo primero.

Si la autarquía de la persona física deriva inmediatamente de su personalidad é independencia, menos puede desconocerse en la persona moral ó sea en una sociedad cualquiera, por imperfecta é incompleta que sea, y mucho más debe reconocerse y respetarse en las sociedades de superiores entidad y medios. El régimen y gobierno propio, que es lo que significa *autarquía* (1), en cualquiera persona supone todas las funciones inherentes al gobierno en su más amplio sentido, es decir, las que comunmente se vienen llamando legislativa, ejecutiva y judicial, de cuya naturaleza, clasificación y división pudiera y debiera desde luego tratarse, puesto que no son solo propias de la autoridad soberana, ni por lo tanto, asunto exclusivo del Derecho político, sino más bien de Derecho natural y de la sección correspondiente á todas las nociones comunes acerca de la persona. Ora por la tendencia socialista de tradición romana, que no admitió ya en el derecho imperial otra autoridad que la del César, esto es, la del supremo imperante; bien porque el más elevado gobierno sea el soberano

(1) La palabra castellana autarquía lo mismo puede derivar de *ἀυταρχεία* que de *αυταρχία*. La primera de *αυτος* y *αρχεω* significa suficiencia y la segunda de *αυτος* y *αρχη* está traducida por *imperium* en *Stephanus, Thesaurus græcæ linguæ*, donde puede verse tal acepción en un texto de Dio Cassio allí trascrito. De aquí el que *αυταρχος* signifique *imperator*. Me he permitido dar más extensión á la palabra, trasladándola desde *imperio* que es un atributo de gobierno á el gobierno mismo, esto es, desde la parte al todo y no limitándola al imperio propio de la autoridad soberana y á ésta, cuyo es el imperio, sino refiriéndola también á cualquiera otro órgano gubernativo inferior. También en este pasaje y en otros muchos del primer tomo y de varios opúsculos míos se da, como notará el lector, y por las mismas razones, más extensión de la generalmente acostumbrada al término *selfgovernment*.

y por consiguiente sus funciones las más perfectas, es ya general costumbre asignar al Derecho político una materia que se presenta, y no con escaso interés en la familia, concejo, etc. No por otra razón la reservamos para el libro IV y así además se obtiene la ventaja de no separar de los principios comunes consecuencias y deducciones políticas de la mayor importancia y trascendencia (1).

Toda intervención inútil en la esfera autárquica de otra persona es indebida, y por consiguiente atentatoria, aunque sea con el sincero intento de hacer algún bien, y es además nociva, sobre todo si se repite la intromisión y más si se convierte en hábito; porque la persona así gobernada y socorrida, pierde la costumbre de obrar por sí, entumécense sus energías é iniciativas y abdica de hecho su personalidad, cuando con daño propio y del procumún, al fin se anula la acción y se atrofia la potencia. Hasta en la familia el padre, que sea discreto pedagogo, procura que el hijo, en cuanto empieza á andar y á discurrir, se determine y se valga todo lo posible, así física, como moralmente; y por eso al padre que gobierna más de lo necesario ó provechoso á la esposa y á los hijos mayores, sobre todo si son buenos, capaces y prudentes, se le tilda con los mismos deshonorosos dictados que al soberano déspota ó absolutista. Las doctrinas de este capítulo y de los

(1) También la persona física se gobierna más ó menos desde que tiene uso de razón; y si no puede decirse que uno es autoridad de sí mismo, porque autoridad supone relación, aunque no sea más que entre dos personas, no hay inconveniente (y no es la frase extravagante, bien que sea poco usada) en aplicar, cuando sea preciso, los términos de *autolegislación*, *autoejecución* y *autojurisdicción*; puesto que ley es para uno la propia decisión, el propósito de conducta, los cuales cumple ora *ejecutivamente*, ora mediante un juicio práctico más detenido para obrar con justicia y prudencia en caso de duda. También en la conciencia, por aquello de que es *á la vez testigo, fiscal y juez*, procede uno criminalmente contra sí mismo y se absuelve ó condena, no bastándole, por cierto, al hombre de conciencia estrecha la pena del remordimiento, ni dejando de imponerse alguna aflictiva, aunque se sienta sólidamente *corregido*.

sucesivos son de la trascendencia política que irá notando el lector.

3. La tutela es una institución jurídica que no se limita al orden doméstico; sino que por idénticos títulos y para iguales fines, se extiende á los diversos órdenes de vida pública, así interior como internacional; y tutela es desde la que se ejerce con el menor y el incapacitado hasta el protectorado de una nación sobre otra. En todas hay sustitución complementaria en el gobierno de la persona y prestación de bienes, aunque no sean siempre materiales; y en todas, para que sea justa, es preciso que sea efectiva la necesidad, ó cuando menos la utilidad de este doble auxilio, y no máscara de ambición, opresión ó abusivo señorío, como sucede en muchos casos de centralismo en la esfera interior y de atentados á la soberanía en la relación internacional.

Por lo demás, no hay sociedad que no necesite del auxilio de otra, no exceptuándose las mismas naciones, aunque no lleguen al extremo de la protección continuada; mas para que la acción benéfica de suplemento y socorro merezca el nombre de tutela, es preciso que sea seguida y permanente por más ó menos tiempo, y en esto se diferencian en derecho internacional la intervención y aun el arbitraje del protectorado.

La cuestión de tutela de una persona á otra, y por consiguiente, de una sociedad á otra sociedad, contiene en gérmen y en raíz una de las fases del problema de los fines del Estado, la de su función histórica, así como el suplemento y auxilio, no circunstanciales, sino esenciales y permanentes, encierran la otra fase, la de la función intrínseca del poder civil. Los principios formales son los mismos, sea la que fuere la persona gobernante ó prestadora; la determinación concreta corresponde á cada derecho, que es donde, con la condición de cada persona y de cada estado, se fija la necesidad ó natural y constante ó circunstancial y extraordinaria que reclama

la superior intervención y el grado, proporciones y duración de ella.

4. Rara vez el igual coopera con el igual en condiciones de absoluta igualdad, aunque sean ambos de un mismo estado jurídico y de posición social idéntica, y aparentemente contribuyan al bien en situación legal no diversa de capacidad y prestación, por ejemplo, en una academia. En otras relaciones los iguales de estado civil y político y de social posición hállanse circunstancialmente en situación bien definida y marcada de respectivas superioridad é inferioridad en uno ó varios casos y hasta habitualmente (1). Pero en condiciones normales de vida y de progreso lo frecuente y natural es que la persona superior auxilie á la inferior la mayor parte de las veces, y por lo tanto la persona moral á la física y la sociedad pública á la privada.

Y no hay que arguir que las sociedades incompletas, que son los naturales factores directos del auxilio social, tienen categoría inferior á la familia, que es al fin una sociedad completa. Las sociedades incompletas públicas constituyen un desarrollo y expansión de las públicas completas correspondientes, de las cuales pueden considerarse como miembros y dependencias, por cuyo ministerio el pueblo, la provincia, la región y la nación, cooperan á los fines comunes, mediante *diferenciación* de funciones y órganos, cuando estas sociedades han vivido ya cierto tiempo y conseguido el progreso proporcionado á los años ó siglos de existencia histórica (2).

(1) Hasta el inferior puede ser superior en algún respecto, como se vé bien claro en los préstamos que hacen al Estado los grandes capitalistas, cosa hoy corriente por las condiciones del capital judío ó judaizante y por los apuros rentísticos de las naciones.

(2) Aún en la misma familia regularmente numerosa y culta, sobre todo si tienen los súbditos de ella alguna capacidad é iniciativa, puede nacer y aun de hecho surgirá no pocas veces alguna embrionaria é informe sociedad incompleta doméstica, por ejemplo, de los hijos entre sí ó de la madre con los hijos para fines interiores de la casa ó de relación con perso-

Lo que, en defecto de las sociedades incompletas y aun de las otras personas ó por insuficiencia de ellas, deben practicar el pueblo, la provincia y la región por el medio de sus respectivas autoridades constituye el problema de la acción tutelar de éstas, que es formalmente idéntico al del Estado, así como tampoco difiere en la otra fase de él, la de las funciones intrínsecas ó esenciales de todos estos poderes públicos (ayuntamiento, diputación provincial, etc.)

5. Nótase en los pueblos clásicos, pero singularmente en Roma la absorción del individuo en la familia y la de ésta en la Ciudad-Estado. Es, en mi entender, aunque así no opinen resuelta y categóricamente muchos autores, el mismo socialismo que en Oriente, con la diferencia accidental de la mayor ó menor extensión de la sociedad civil. La sociedad doméstica en la primitiva constitución de Roma es un elemento orgánico de la federación nacional, y por consiguiente el derecho privado una parte y sección del derecho público. De la misma manera que el hombre no se estima sino en cuanto ciudadano, tampoco la familia sino como miembro de la comunidad civil. Porque el individualismo, en las sociedades y épocas anteriores á Cristo ó reñidas con su doctrina, no tanto significa respeto de la persona, como deficiencias é imperfecciones en la constitución de la sociedad pública; en cuanto ésta se organiza y actúa con alguna regularidad y consistencia, la persona inferior es absorbida por la superior, la familia por la ciudad, de igual manera que el individuo por la familia, cuya representación y condensación es el *pater*.

No hay otra personalidad que la del fuerte y de aquí surge el socialismo: de la mayor fuerza de la colectividad, de la superioridad física de ésta sobre el individuo: el socialismo

nas físicas ó morales ajenas á ella. Y no digamos nada cuando la familia, no encerrada dentro de los estrechos límites de la actual en las naciones latinas, alcanza las proporciones gentilicias de la familia natural, como aún se conserva, según dicen, en la raza eslava.

de la ciudad antigua no es otra cosa que la preeminencia del todo físico sobre las partes componentes; el individuo y la familia son substancias incompletas; *substancia completa*, su *puesto* solo es la Ciudad-Estado (I).

El primitivo movimiento individualista en la constitución y el derecho romanos, aunque no fuesen absolutamente ajenos á motivos racionales de derecho natural, á cuyo influjo no está del todo cerrada ninguna legislación positiva, más se funda en la conveniencia del Estado que en el deber, que no conoce ni siente, de respetar la independencia y autarquía personales. El mismo motivo de política bien entendida que le impulsó á consentir mayor ó menor libertad municipal á no pocos pueblos italianos y españoles, le determinó á desprenderse del ejercicio de ciertas funciones gubernativas federales, no por la convicción de que no le correspondían, sino porque le era más cómodo y expedito encomendarlas, delegarlas al jefe inmediato de la familia, considerada como unidad política, más bien que cual sociedad doméstica. Así se explica la evolución de ciertas instituciones privadas, por ejemplo, el tránsito del testamento *in comitiis colatis* á otras formas de testamentifacción, y que en el fondo no se diferencia del movimiento *individualizador* de la propiedad; así también se resuelve la aparente contradicción entre criterios á primera vista tan distintos y opuestos como el de la sucesión

(1) El individualismo tan decantado de los bárbaros no fué otra cosa que la consecuencia de no haber consolidado durante la vida nómada y vagabunda la constitución municipal de la tribu. Si lo hubieran logrado en las mismas condiciones que los greco itálicos, hubiera surgido igualmente el socialismo de la Ciudad estado antigua; y si así no sucedió cuando los invasores se fijaron definitivamente en las tierras del Imperio, no fué porque trajeran los bárbaros el gérmen de una constitución distinta y característica de la raza, sino porque elementos sociales ajenos á ella, y entre todos y sobre todos el Cristianismo y el magisterio y acción de la Iglesia, quebrantando el poder violento de la colectividad, sembraron la semilla del personalismo verdadero en la Edad media. El mundo antiguo no podía ser individualista.

por puro y exclusivo ministerio de la ley, que es lo que representa el testamento hecho en la asamblea del pueblo, y el principio de la absoluta libertad de testar consignado en las Doce Tablas. El testamento siguió siendo, en concepto del legislador, un asunto tan público como la familia, mero círculo y parte orgánica del Estado, como la propiedad de éste dividida entre sus elementos constitutivos: las tribus, las curias y á las familias; mas por ocurrirse casos frecuentes de sucesión en los plazos intercomiciales, el Estado encomendó al *pater familias*, como funcionario de la comunidad el que dispusiera de la herencia, bien penetrado el legislador de que había de hacerlo como antes sancionaban los comicios, esto es, según los intereses de la ciudad. Por esto, todo lo confió al arbitrio del padre, y dió de antemano por ley hereditaria lo que éste dispusiera (*uti legasset*) (1). Es claro que desde entonces la testamentifacción se convirtió en asunto privado y se ingirió en ella la libertad del dominio, al revestir, con el testamento *per æs et libram*, la forma de la contratación, pero esto no fué porque se hiciera cargo el legislador de la naturaleza principalmente doméstica de la institución y cambiara á

(1) El socialismo propio de la civilización pagana moldeó la propiedad como las demás instituciones. Por esto fué social, colectiva antes que individual, y de la sociedad pública antes que de la sociedad privada, de la tribu antes que de la gens y de la familia. Era propietaria la persona de más pronunciada, de más fuerte personalidad y se necesitó no poco tiempo para que se destacara en esta relación la personalidad de los varios miembros de la familia. Así la propiedad romana conservó mucho tiempo este carácter orgánico de la raza y el mismo tipo de institución pública que ella. Por eso, y por los oficios religioso-políticos de la propiedad, no podía el *pater* sino presentar á los comicios un proyecto de ley (el testamento) para que el pueblo decidiera en la misma forma que los demás asuntos públicos de interés para la comunidad. Cuando el *pater familias* dispuso *super pecunia tutelave suæ rei* hacíalo aún en nombre del Estado que, confiando en el jefe de la casa, encomendaba á su arbitrio la resolución de un negocio político. Aquella libertad de testar era de muy distinto fundamento que la de ahora.


priori el poder civil el concepto que de la sucesión tenía. Así no se verificaban los cambios en la historia de Roma y en el derecho menos apriorístico que ha habido en el mundo, al menos hasta la época imperial.

Aun toda la evolución individualista posterior, que fué mucho más allá de lo razonable y justo deshaciendo la primitiva constitución orgánica de la familia y la propiedad y *atomisándolas* en términos muy parecidos á los de las legislaciones de la mayor parte de las naciones latinas, especialmente de Francia y en Castilla, no procedió directa ni principalmente de una falsa noción individualista ni de un exacto concepto, bien que exagerado, de los derechos de la persona, sino más bien del arbitrio omnipotente del Estado, que continuó legislando como antes en el orden doméstico, bien que no para mantener la entidad política familia en su robusta cohesión de sólido elemento orgánico de la comunidad, sino para desarticularla más de lo equitativo y conveniente.

Lo cual no quiere decir que el reconocimiento de la personalidad de la mujer y del hijo y hasta cierto punto la del esclavo no fuera justo ni que dejaran de influir en él el derecho natural y sobre todo el Cristianismo; lo que únicamente afirmo es que el Estado que mantuvo hasta el fin la noción socialista de la sociedad civil y del poder supremo, siguió legislando en la familia como en esfera que le pertenecía y la cual arreglaba á su antojo desnaturalizando y torciendo el puro influjo cristiano. El imperio de Roma no fué otra cosa que la expansión, la dilatación de la primitiva Ciudad-Estado; y así como antes ella no reconoció ni dentro ni fuera más personalidad que la suya, ni más ni menos que los déspotas orientales, y sin otra diferencia que la resultante de la forma de gobierno, tampoco cuando la comunidad se engrandeció con dilatados dominios y el orbe se encerró en la ciudad (*urbem fecisti quæ prius orbis erat*) dejó de considerarse lo que fué primitivamente, la única persona social, que más por cálculo que por deber, daba ó quitaba la personalidad, ensanchaba ó restringía las facultades de la persona física ó de la jurí-

dica (1), pero mirando con hostilidad y recelo lo que había de recto y sano en la constitución agnaticia y gentilicia de la casa romana.

(1) Nótase en la evolución del derecho de Roma el quebrantamiento del organismo de la familia en la proporción en que va destacándose la personalidad de sus miembros, antes absorbida por el *pater*, no habiendo el derecho romano conseguido la difícil armonía entre la razonable *personalización* de los individuos y el mantenimiento de una vigorosa constitución doméstica, gentiliciamente dilatada con solidario interés y apretados vínculos de afecto. Esto acaso procediera de que el Estado, que iba concentrándose y unificándose más en pocas magistraturas y al fin en una sola, no tuvo interés en conservar las entidades orgánicas constitutivas de la sociedad civil y consintió toda la emancipación individual que no perjudicaba, antes favorecía los planes de la dictadura y el cesarismo más fáciles de realizar, como sucede ahora, sobre masa atómica que sobre organismos resistentes á las invasiones socialistas. Ni en la familia ni en la curia convenia al Estado fuerza orgánica, sino agregado de individuos más fácilmente manejables por el arbitrio absoluto del César.



CAPÍTULO II

LA AUTARQUÍA DE LA FAMILIA, DE LAS SOCIEDADES INCOMPLETAS, DEL CONCEJO Y DE LA PROVINCIA.

1. Aunque haya sido por incidencia, no poco se ha anticipado en el último punto de la lección anterior la doctrina general de la acción del Estado en la familia y los principios capitales á que han de ajustarse los oficios gubernativos y benéficos del poder civil en el orden doméstico.

Puede afirmarse que la razón y la naturaleza exigen precisamente lo contrario de lo que se ha venido verificando y consolidando en la historia por un concurso de causas y hechos contrarios á la inspiración, imperio y arraigo del derecho racional en la vida. Casi todo el derecho doméstico es obra del Estado en las naciones modernas, tanto ó más que por atraso y deficiencia de la familia, por intervención más ó menos justificada de la única sociedad pública que sobre la familia existía, el pueblo-nación. Éste, por el ministerio del entonces único órgano poderoso y eficaz, la autoridad

soberana, ha gobernado y auxiliado á la familia, á falta de otras comunidades más íntimas, cuya personalidad, vigor é iniciativa eran incompatibles con el concepto pagano del derecho y con la consiguiente organización jurídica de la sociedad.

La familia, si el Renacimiento y sus consecuencias no hubieran detenido y aun paralizado la acción é influencia cristianas, es la institución que menos necesitara recibir de otras la regla preceptiva ó supletoria á que ajustar la conducta doméstica, porque son el afecto y el más solidario y armónico interés estímulo fuerte y garantía más segura de recto y prudente gobierno y al propio tiempo fuente de legislación introducida por el uso, esto es, por la repetición de actos, en relaciones poco complicadas que no requieren más saber y circunspección de los ordinarios y comunes, y á los cuales acude sabía y pródicamente la naturaleza, obra de Dios. Y en tal orden de relaciones aun fuera más perfecta y expedita la autarquía familiar, y por consiguiente su labor legislativa y gubernativa, si por la acción de un torcido individualismo no se hubiera reducido la familia á la sociedad conyugal y paterno filial y perdido en la mayor parte de las naciones el carácter gentilicio que la dilataba hasta los confines mismos de la sociedad pública, dándole los recursos morales y materiales, el poder, el prestigio, la cultura y la justicia consiguientes.

Así se hubiera ido formando sobre la base de principios generales y de un patrimonio común jurídico la parte más interesante del derecho civil local de pueblos, provincias y aun regiones, sin despreciar por es-

to, antes perfeccionando y adaptando al caracter y condiciones distintas de las razas y circunscripciones de cada nación la herencia legal que de Roma recibieron los Estados medioevales y modernos. El uso uniforme, convertido en costumbre por la jurisprudencia de los tribunales locales que, en virtud de propia competencia, entendiesen en los asuntos litigiosos, hubiera determinado un derecho menos divergente de lo que pudiera temerse, puesto que, la influencia de la ley natural y del criterio jurídico propio de cada época y cultura y el espíritu nacional común borrarán cada vez más las diferencias y acentuarán las analogías del derecho civil, que no es ni acaso pueda ser nunca absolutamente idéntico ni mucho menos unificarse por la acción omnipotente y abusiva del Estado, mediante códigos apriorísticos, idealistas y niveladores.

Con este principio de la acción autárquica de la familia por el órgano y conducto de sus distintos miembros, pero principalmente por la autoridad del padre, se resuelven fácilmente muchos puntos de perpétuo debate y de fácil solución en mi entender, descubriéndose á primera vista una armonía perfecta entre instituciones que se juzgan opuestas é incompatibles, por ejemplo la legítima y la libertad de testar, punto en que no puede discutirse la justicia esencial de la institución, sino los títulos de la intervención del Estado en esta relación de familia, es decir, una de las fases del problema consabido.

2. En las sociedades incompletas aún debe ser menos frecuente, continuada é intensa la intervención del

Estado, porque estas comunidades, son por naturaleza las más perfectas, en cierto respecto, y por ende las más aptas para el cumplimiento de los fines que se proponen.

Como no son todos, sino algunos y generalmente uno solo ó cuando más dos ó tres de ellos, afines y semejantes, (por ejemplo el científico y el literario, ó los íntimamente conexos á que se dedican las instituciones bancarias de distinta índole) se manifiestan y logran en tales asociaciones los efectos y beneficios de la división del trabajo social, emprendido y fomentado por el colectivo esfuerzo, por la actitud y la vocación y por la misma espontaneidad á que estas sociedades deben su origen y progresos.

Tampoco pueden desconocerse en ellas otros títulos de mayor autarquía, cual es el hecho de nacer generalmente en épocas un tanto adelantadas de vida y vigor nacionales, y, por consiguiente, con personalidad bastante para gobernarse por sí, y con recursos suficientes para excluir con más razón que los individuos *sui juris* el auxilio ó las prestaciones del Estado.

Así es que éste poco ó nada tendrá que hacer respecto de ellas fuera de reconocerlas la plenitud de su personalidad y registrar su existencia como la de los individuos, suponiendo que esta función corresponda al poder central exclusivamente, y no deba compartirla con los otros poderes públicos, reservándose él la que se refiere á las sociedades incompletas que tengan caracter nacional.

Aun el previo conocimiento de los estatutos, esto es, de la constitución de ellas, no puede considerarse

atributo esencial del poder civil, sino cuando más, oficio que le imponen accidentalmente las circunstancias, si es que no procede de un injustificado recelo ó de abuso absolutista más ó menos habitual y sistemático.

Ya hemos dicho que estas sociedades son manifestación y desarrollo de las colectividades públicas completas, partes del pueblo, provincia, región y nación, y organos por los cuales realizan la más eficaz cooperación al fin social común, aliviando á las autoridades respectivas de atenciones que embarazan y dificultan el cumplimiento de los fines esenciales del poder público desde el municipal en adelante. Por esto, á ellas recurren las otras personas inferiores en demanda de los bienes sociales, que por sí no pueden proporcionarse; y la suficiencia con que acuden á tales necesidades es el límite natural de la intervención, no solo del Estado, sino de las otras autoridades de la región, provincia y concejo, la cual, siempre que sea inútil, es cuando menos perturbadora.

3. El pueblo en el sentido de sociedad pública más elemental é inmediata á la familia, es además de sociedad completa, sociedad más perfecta que la doméstica, aunque supongamos á ésta con una extensión y poder que generalmente no tiene, estando, como hoy está, circunscrita, desde el derecho romano imperial, el justinianeo especialmente, y por el influjo ulterior é indefinido de él, á los límites estrechos que hemos expuesto. El pueblo, en un grado intermedio de expansión y población y de moral y material adelanto, es una sociedad

con recursos físicos bastantes para vivir y prosperar y con las suficientes dotes de inteligencia y voluntad para gobernarse por sí mismo según las luces del derecho natural, las inspiraciones de la ley cristiana y el sentido jurídico propio de las varias épocas y civilizaciones. Aun los insignificantes y reducidos municipios rurales de nuestros días, y con mayor motivo los de un territorio regularmente extenso y poblado, podrían por sí mismos existir y progresar, aunque no dependieran de un todo social más amplio y poderoso, si gozaran de nacional autonomía. Ya hemos dicho que este y no otro caracter es el que distingue al Estado nacional de las demás sociedades públicas completas.

En virtud de tal suficiencia (*avtaqxeta*) y de la consiguiente capacidad de gobierno (*avtaqxia*) no solo se ordenarían á sí mismos en la variedad de las funciones ordenadoras, sino que gobernarían y auxiliarían á las otras personas inferiores, así físicas como jurídicas, *a*) en lo necesario para mantenerlas en el conjunto, esto es, para la permanencia, consolidación y perfección de la superior colectividad pública; *b*) en la proporción en que, por razón de su naturaleza ó por especiales circunstancias accidentales históricas, necesitan que la autoridad popular las gobierne; *c*) en la prestación de bienes morales y materiales, que, por cualquiera de esas dos clases de deficiencia, necesitan las personas dichas y deba prestar el pueblo, ora directamente, ora por conducto de sociedades incompletas (de beneficencia, instrucción, etc.) *d*) en la relación hipotática con otras sociedades superiores, desde la provincia á la nación inclusive, y en la esfera, formas y modos de

unión que no correspondan é incumban directamente á los individuos, familias ó sociedades incompletas.

Pues bien; la dependencia legítima del pueblo respecto de la nación de que forma parte es cosa extrínseca y agena á la autarquía concejil, que no puede mermarse por el hecho de pertenecer el pueblo á una comunidad social mayor y más perfecta, siendo absurdo que merme la personalidad y sus derechos lo que perfecciona á la una y da á los otros más seguridad y eficacia. De aquí que el Estado no tenga en el pueblo más intervención justa que el concejo en la familia y no por distintos respectos ni por diversos títulos, y eso en el supuesto de que entre las dos colectividades públicas extremas no se hayan determinado y concretado una ó las dos intermedias, provincia y región, porque entonces éstas, por más inmediatas y más obligadas, ejercen, cuando es preciso, las funciones gubernativas que en último caso y término corresponden al Estado. En una palabra, si las sociedades incompletas son más perfectas por la limitación y restricción de sus fines y por la consiguiente mayor eficacia que á la acción social resulta, el pueblo, aunque procure la totalidad de los bienes humanos y sociales, es más perfecta comunidad por el número y clase de las personas integrantes y por el poder y fuerza inherentes á la cantidad y á la calidad de la población. Estos son los títulos de la autarquía concejil y la medida del grado en que debe ser reconocida y respetada.

4. Con más razón habrá que reconocérsela á la provincia, en favor de la cual existen en cierto respec-

to títulos de la misma clase que los del pueblo, pero de mayor fuerza, por el superior grado de perfección de una sociedad pública, compuesta ya inmediatamente no de sociedades privadas, sino de otras públicas también.

Los oficios y funciones que al concejo corresponden en la esfera familiar son los que incumben á la provincia en la esfera concejil; pero debe tenerse en cuenta que la provincia, no solo por la parte que en su formación y organización ha tenido el Estado, sino porque en algunos países es la única comunidad intermedia entre la nación y los concejos, suele gozar menos autarquía que éstos, en cuanto más cercana al poder central, más gobernada é intervenida por él, y como vehículo de gobierno y de cualquiera otra acción social soberana en el círculo de las demás personas inferiores, ya sean físicas ó morales. No puede tampoco desconocerse que el vínculo de sociabilidad es menos íntimo y por consiguiente no tan estrechas y afectuosas las relaciones como las de la *patria chica*, más cercana, útil y amada, el pueblo, ni fundadas en las ideas y sentimientos que supone y encierra la *patria grande*, esto és, la patria nacional. De todo lo cual se deduce que si la provincia es más perfecta por la fuerza material y moral, individual y numérica, social y orgánica que sus elementos contienen, es menos perfecta por razón del principio y grado de sociabilidad y de la menor virtud y eficacia del consiguiente espíritu público. Todas estas circunstancias tienen que mermar la autarquía provincial, esto és, el poder gubernativo en la propia esfera y en la de las personas inferiores, aun en naciones

y tiempos en que la provincia mantenga su personalidad y no haya sido borrada, disuelta ó reducida á servidumbre por el Estado socialista.

1. Ya se ha dicho (Tomo I. Capítulo II) en qué se distingue el derecho público y el privado y que no son las relaciones privadas ó públicas por razón del sujeto que las cumple, sino por la clase de persona á cuyo interés afecta directa y principalmente la relación jurídica. Según esto, no porque el Estado trace la regla de las relaciones individuales y domésticas cambia su naturaleza, pues de otra suerte toda la legislación civil, esto es, privada, sería política; y lejos de eso, aunque en los códigos (tomamos la palabra en el extenso sentido de cuerpo legal) haya y deba haber disposiciones públicas y políticas, son ó deben formar éstas la mínima parte de él.

En unas y en otras, es, según la doctrina expuesta en este y en el anterior capítulo, órgano inmediato así de regla jurídica como de cumplimiento de ella la persona *sui juris* en cuanto es capaz de una y otra función, porque todo deber y derecho requieren, en virtud de la personalidad y la independencia consiguiente, ser cumplidos y ejercitados por las personas cuyos son. Pero mucho más tratándose de deberes y derechos que inmediata y principalmente interesan á la persona privada (individuo, familia) á los cuales solo se ha de imponer la norma y la ejecución cuando y en cuanto la persona haya mostrado que necesita de ello. Solo entonces puede el poder superior, á quien corresponda hacerlo, trazar y san-

cionar la regla preceptiva ó previsoramente la supletoria para el caso de que la persona inferior no la haya determinado por el uso.

Como la familia natural no debe reducirse á marido y mujer, padres é hijos, sino abarcar en la línea recta y en las colaterales, sobre todo en las agnaticias, más individuos y generaciones, uniéndolas no solo con el vínculo del afecto, sino de deberes y derechos recíprocos, jurídicos además de morales, la elaboración del derecho doméstico debiera ser obra de la gens (1) y ofrecería así probabilidades de mayor justicia y

(1) Varias causas han reducido la esfera de la familia, encerrándola en sus estrechos límites actuales. Ha habido una causa histórica antiquísima que data de la civilización pagana más completa y cumplida, la de Roma, y es el socialismo por cuyo influjo, el poder soberano, aun sin advertirlo, va desarticulando todos los organismos inferiores para reducirlos á agregado y masa individuales y atómicos. Antes que los pueblos primitivos entraran en las vías de una torcida cultura y fuesen por ella subyugados, la misma ley natural mantenía una familia más comprensiva, numerosa y orgánica, aunque con noción imperfecta de como se armonizan los derechos individuales con los de la sociedad doméstica; y concentrando también socialistamente todas las personalidades en la personalidad del padre. Esto fué primitivamente la familia romana. Toda la transformación ulterior de la *domus*, según ya hemos dicho, está caracterizada por dos movimientos distintos y aun contrarios, uno justo y benéfico, debido á la inspiración de la ley natural y al influjo del Cristianismo; otro ni justo ni conveniente, que continuó fluyendo de la entraña misma de la sociedad pagana, á pesar del derecho natural y del cristiano, coetaneo de ambos, pero á los dos adverso. Fué la primera corriente la que dulcificó la situación del esclavo y aseguró la personalidad de la mujer y del hijo, garantizando, acaso más de lo debido, la independencia económica de aquélla y de éste; fué la segunda la que dejó reducida la agnación y la gentilidad, punto menos que á nombre y recuerdo, equiparando á la agnación con la cognación y destruyendo y borrando el parentesco civil, que no fué puro extravío y capricho de la constitución y ley primitivas, sino que tiene en la naturaleza y en un legítimo interés de la sociedad civil el fundamento perdurable y no exclusivamente romano.

Pero, si bien se considera, aun el carácter orgánico de la familia romana era, no podía menos de ser, poco sólido, como fundado exclusivamente en la autoridad socialista, en la personalidad absorbente del pater y no en

acierto, formándose insensiblemente y en fundamental armonía las legislaciones civiles locales por virtud de un criterio legal común á las dilatadas patriarcales familias. De él, como expresión del espíritu y caracter concejiles, debiera resultar en el concejo una ley uniforme y una legislación cada vez más parecida entre las provincias y regiones, de suerte que el derecho nacional tuviera de día en día más profundas semejan-

el afecto doméstico y en la equitativa utilidad de la sociedad civil. Por esto, roto por la muerte el vínculo principal, sino único, la potestad del mayor ascendiente, se rompía la cohesión de la familia, reduciéndose los lazos de la agnación á la herencia y á la tutela, cada vez más aflojados por la evolución de la familia civil hácia la igualdad y confusión con la familia natural, sin que después de muerto ó *capitis diminuido* el padre, hubiera sobre los que resultaban jefes de las distintas familias lazo alguno de común interés y de gobierno gentilicio actuales, de esos que no perjudican á la condición *sui juris* de los respectivos padres de familia ni á la razonable independencia y potestad necesaria para regir la suya cada uno. Este movimiento de dañado individualismo, que se manifestó principalmente en las leyes sucesorias, y^a del cual fueron órganos, lo mismo que de el de justa emancipación individual, pretores y césares, se tradujo más ó menos en los códigos románicos de los bárbaros, marcándose bien en las legislaciones civiles de la Edad media los dos elementos, más yuxtapuestos y en pugna que amalgamados ó armonizados: el elemento justinianeo, último término de la evolución romanista y el principio de la familia verdaderamente natural, más orgánica y extensa en las razas invasoras y aun en las indígenas no subyugadas, verbigracia los vascos, por la civilización de Roma.

En las legislaciones ibéricas es donde puede estudiarse mejor la gradación del influjo románico entre los dos extremos del derecho castellano, el más romano de todos, y el vizcaino, el más ageno y resistente al romanismo, como de región en que la más pronunciada personalidad de raza física é histórica ha podido mantenerse al amparo de la máxima descentralización, propia del flojo vínculo personal que ha unido á las Provincias con Castilla. Pero ninguna familia ha mantenido como la esclava, si he de atenerme á lo poco que de ella conozco, la cohesión y amplitud gentilicias, representadas por un jefe común, el *gospodar* y por la condición harto socializada de la propiedad que no procede de la industria y del comercio, única que desde luego se individualiza. Lo cual ya hemos dicho que procede no tanto de un principio interno diferencial de raza, como de la acción más lejana y débil que la civilización y el derecho de Roma han ejercido sobre gentes venidas más tarde al teatro donde se ha desarrollado principalmente el dra-

zas sin necesidad de que las adelantara prematura, violenta y efímeramente la despótica codificación.

En virtud de lo más independiente que es del Estado y aun de los otros poderes públicos el derecho individual y doméstico, no hay ninguno en que más se refleje la autarquía de la persona física y de la familia. Por esto la regla más libre de agena y superior ingerencia es de suyo la de la contratación,

ma de la historia con sus dos grandes episodios, la plenitud de la cultura gentilica y la aparición, desarrollo é influencia del divino y sobrenatural principio cristiano (véase en el Tomo 1.º el Capítulo IV del primer libro y especialmente la página 92.) Así se explica la afinidad que, por la misma causa, revelan instituciones de razas cuyo parentesco nadie ha señalado, domiciliadas á tanta distancia y apartadas más todavía por su acción y papel históricos, como son los eslavos y los vizcainos, cuya robusta y enérgica troncalidad revela el mismo principio y carácter de familia menos romanizada.

En este paganismo redivivo, en que el error antiguo se ha erigido en sistema, es aún más señalada la acción disolvente de falso individualismo y de socialismo desbordado que reduce á la familia á sus más precisos y rudimentarios elementos, á los que sostiene un afecto puramente físico, y la encierra dentro de la efímera convivencia que no dura más que la vida de los padres, del padre en Castilla. Ajustase esta agregación de padres, hijos y hermanos al egoísmo sensual propio de los tiempos y al atomismo característico de la vida y del derecho nuevos, en los pueblos latinos especialmente, y bien refleja ambos vicios el anacrónico Código castellano de 1889, en que, á vuelta de algunas pegaduras de legislación foral, agregadas sin discernimiento y con el *criterio* de un eclecticismo irreflexivo, campea donde ha innovado al derecho antiguo, la más servil imitación de los *mejores* códigos extranjeros. Nada tiene de extraño que lo miren con la mayor prevención, desvío y aun desdén las regiones que mantienen su derecho histórico y que quieran afirmar y consolidar más el imperio de éste, en el cual menos se ingirió el romanismo contrario á las inspiraciones del derecho natural y donde más resiste la familia al deletereo elemento revolucionario de destrucción y disolución de la contextura y solidaridad gentilicias. En el individualismo y socialismo á la francesa, aunque sin llegar á los extremos de la igual partición forzosa entre los hijos (la misma tiránica atrocidad impuso el Parlamento inglés á los católicos irlandeses para empobrecerlos y deshacer las familias) está aun informado el Código de Castilla, que refleja vaga y lejanamente un cierto jacobinismo transportado á las mismas relaciones privadas por nuestros jurisperitos progresistas.

siguiendo luego la de las relaciones familiares, bien *inter vivos* bien *mortis causa*. En el contrato de caracter principalmente privado apenas hay otra ley que la voluntad de las partes, no solo por el predominio de su interés sobre el interés público, sino porque son personas iguales en cuanto *sui juris* y en él respecto de la necesidad que les obliga á contratar, aunque nadie sea igual á otro en todos concéptos. De aquí el que, en el supuesto de la licitud, deba tenerse por obligación la que las partes acuerden, sean cuales fueren la materia y forma del contrato, con tal que no falten las condiciones esenciales de él, sin que me parezca cuestionable, si en todo caso, el poder público habrá de prestar su sanción é intervención judicial á toda convención, aunque carezca de ciertos requisitos aún naturales; y, por lo tanto, creyendo muy justa la innovación radical introducida por nuestro Ordenamiento de Alcalá, en reacción contra el formalismo romano, que tiene, sin embargo, grandísimo interés como evolución histórica de la institución y una de las más expresivas del carácter jurídico de aquel pueblo, tan lógico siempre en el desenvolvimiento natural de su derecho.

Según este mismo criterio de la mayor independencia jurídica de la familia se resuelve fácilmente el tan debatido punto de las legítimas y de la libertad de testar, principios que no son opuestos sino cumplidamente armónicos, porque en realidad no se trata de si ciertos parientes, sobre todo los hijos y padres, se deben respectivamente una porción hereditaria de propiedad, sino de averiguar si la porción debida ha de imponerla por precepto el Estado ó si ha de fiarse á la autoridad del padre la distribución de los bienes según justicia distributiva; ó lo que es lo mismo, y para decirlo más claramente, si el deber moral de la legítima y el consiguiente derecho de los legitimarios han de convertirse en jurídicos, sancionados en la ley común. Y la contestación es fácil: el derecho legitimario es tan evidente como el derecho de que el padre, asegurando á los hijos una porción legítima, goce de libertad bastante para repartir entre ellos el resto del caudal y

aun emplear fuera de la familia una parte de él sin ingerencia legislativa ni ejecutiva del Estado mientras no fuere precisa. En una palabra, la imposición de la legítima no es una función esencial, sino circunstancial del poder supremo, y cuyo título no es otro que la necesidad, demostrada ó determinada por la experiencia, de los abusos que contra la justicia y la piedad cometan con habitual frecuencia padres desnaturalizados. He aquí la razón de prudencia que á los poderes públicos más inmediatos á la familia y, en último término y caso, al Estado, aconseja é impone primero la acción judicial en cuantos testamentos inoficiosos se sometan á una equitativa intervención superior, y al fin la consagración de una legítima legal (I).

(I) Tal fué la evolución de la legítima en Roma. El Estado confió primero en que el padre no se olvidaría de que la propiedad no era exclusiva ni principalmente suya, sino que en ella tenían derecho, aunque no fuese á título de condóminio actual, los hijos, á los cuales llamó y consideró desde luego *herederos de sí mismos*; y sólo, cuando se le ofreció el espectáculo doloroso de padres que disponían despiadadamente del patrimonio familiar, se creyó en el caso de poner remedio con una parsimonia y prudencia tal vez extremadas, primero, prohibiendo la preterición, medio vergonzante y vergonzoso de una desheredación infcua, después admitiendo la queja de testamento inoficioso, esto es infractor, *por locura*, de los deberes del parentesco más cercano, finalmente, extendiendo por interpretación á los herederos forzosos el derecho de la *cuarta falcidia*, introducida equitativamente en favor de los instituidos, con lo cual se convirtió en ley lo que hasta entonces había sido función de jurisprudencia, fijándose después definitivamente la porción legítima en la tan conocida novela de Justiniano.

Moralmente no puede fundarse la absoluta libertad de testar sino en el individualismo más absurdo, en el que supusiera que toda la propiedad familiar es solo y exclusivamente del padre, afirmación ahora más extraña y repugnante que nunca, cuando contra el derecho y la economía individualistas se pronuncia cada vez con mayor justicia, una saludable reacción hácia el sentido y carácter no socialistas sino sociales de toda propiedad. Si no hay ninguna que no tenga funciones y deberes para con la sociedad pública, ¿no ha de tenerlos para con la sociedad privada, para con la colectividad más íntima y amada del propietario, para aquella cuyos miembros son carne de su carne y sangre de su sangre?

Y si, en cuanto al cumplimiento de tales oficios puede establecerse alguna diferencia entre la propiedad heredada y la adquirida, entre la que es

Aun hoy mismo, bajo un socialismo de Estado que se ingiere más de lo debido en la esfera de la familia y del interés particular con disposiciones preceptivas, que ni siquiera deberían tener, por innecesarias, el carácter de supletorias; aun ahora, después de tan quebrantada la autarquía familiar y casi extinguida la fuente consuetudinaria de derecho, todavía se determinan y destacan usos particulares, y lo que es más notable y extraordinario, en las comarcas de menos iniciativa y

de la familia y la más particular del padre, tal distinción será para concluir probablemente que en la primera apenas nada puede dejarse, si es que algo se deja, al arbitrio paterno, mientras que en la segunda hay que conciliar la libertad del dominio con los derechos actuales y potenciales de ciertos parientes en términos de la mayor armonía, pero sin olvidar que predominan, tanto *inter vivos* como *mortis causa*, los deberes sobre los derechos del propietario. Los partidarios más fervientes de la libertad de testar suelen reconocer el derecho de alimentos cuando menos á hijos y á padres; ahora bien ¿qué es esto más que la legítima?

Ya apenas nadie sostiene que sea la sucesión intestada expresión de la voluntad presunta del que no testó; antes al contrario, el testamento debe ser expresión de la justicia, que regula para después de la muerte las relaciones económicas de la familia, y el órgano de esta justicia debe ser el padre, mientras la experiencia no haya demostrado la necesidad de que un poder y una ley públicos superiores tracen de antemano cuales son los derechos familiares y cual la esfera del arbitrio en la testamentifacción.

Los bárbaros encontraron entre las instituciones de una cultura, en muchos puntos más perfecta que la suya, el principio legitimario sancionado ya por el poder civil, y lo aceptaron tal como estaba, sin más diferencia que lo que es accidental, la mayor ó menor cuantía de la legítima, no parándose á considerar si las costumbres hacían ó no necesaria tal sanción, que, una vez consignada, no ultraja fuero alguno de autoridad paterna y que más vale que sobre que no que falte. ¿Cuándo una ley justa, aunque fuere innecesaria, puede menoscabar ni humillar á un poder razonable y á una libertad verdadera? Lo que después pasó en los Estados ibéricos respecto de la legítima es cosa tan conocida como natural y análoga á lo que sucedió con el código románico en general, con la mayoría de sus instituciones en particular y con el derecho romano posterior al Fuero Juzgo ó no incluido en él. Los Estados más románicos, en primer lugar Castilla y en segundo Cataluña, trasladaron á su legislación general y mantuvieron en ella la legítima, romana en la esencia, aunque no de idéntica porción,

espontaneidad jurídicas, esto es, en Castilla y León, donde no faltan instituciones, que, sin llegar á costumbres verdaderas, por no tener, ni ser posible que tengan, el sello de la jurisprudencia judicial, no han necesitado el consentimiento del legislador para ser reglas locales acatadas sin contradicción en el territorio de pequeños municipios. Aun no autorizándolas la índole de los modernos códigos, la idea que de sí y de sus atribuciones tiene el Estado y la absoluta falta y negación de

Castilla al fin la máxima parte, Cataluña la mínima. En esto no hicieron sino recibir el influjo del romanismo más acentuado de estas comarcas, juzgando que la condición de la sociedad exigía la consagración de la legítima por la autoridad civil, bien que dejando Cataluña, con una legítima insuficiente una muy amplia esfera al paterno arbitrio, y reduciéndolo Castilla á términos más estrechos que Justiniano. No eran tanto como parece, porque ha de tenerse en cuenta la libertad racional que implica la mejora, y que yo considero igual en esencia al heredamiento, aunque más perfecta que él, por representar juntamente con la legítima el más cumplido y armónico derecho sucesorio, máxime, si para complemento y remate de él, se hubiera conservado el mayorazgo y hubiera logrado la troncalidad el puesto y alcance que le corresponden de en calidad de institución derivada de una más amplia solidaridad familiar que debe reflejarse en el carácter también más gentilicio del patrimonio doméstico.

La misma legítima simbólica de Aragón y Navarra, que es después de todo un reconocimiento efectivo, bien que ilusorio y sarcástico, no solo de la validez moral del principio, como lo sustentan y defienden entre otros Soto, Lugo y San Alfonso Ligorio, sino también del derecho tutelar del Estado á sancionar y fijar la porción legitimaria, no ha tenido otro título y origen que el predominio de la inmunidad feudal: es una prerrogativa más que los señores arrancaban al Estado tanto ó más que para disponer del medio conducente á la conservación y acrecentamiento del poder, grandeza y lustre de las casas, para excluir al soberano de la ingerencia en los negocios privados de ellas y, por consiguiente, en el arreglo de la sucesión. Esta libertad no se fundó en un criterio de recta descentralización familiar, sino en un privilegio de independencia de la nobleza, privilegio que se convirtió después en beneficio común de las demás clases; de modo que más se trató de arrebatar al Poder una prerrogativa que, por desgracia, tendrá cada vez mayor fundamento y título en el desarreglo de las costumbres y en la merma de la virtud social, que de restituir á la autarquía y autoridad familiares atribuciones de que solo deben gozar mientras merezcan disfrutarlas.

racional arbitrio en los tribunales, no por eso dejan de ser normas efectivas en relaciones extrajudiciales, normas de justicia y conveniencia discutibles, pero que, de todas suertes, arguyen un sentido jurídico más vivo y pujante de lo que se cree y de lo que consienten circunstancias tan contrarias como las presentes á la personalidad gentilicia y concejil y á la potencia legislativa de familia y concejo (1).

(1) En el pueblo de Canillas de Abajo, perteneciente á la provincia de Salamanca, el arrendamiento que se denomina, no con este nombre general y corriente, sino con el de *asiento*, ha venido desde tiempo inmemorial transmitiéndose por sucesión, no á todos los hijos del arrendatario, sino al menor de éstos, sin distinción entre varones y hembras y con preferencia al hijo ó hija imposibilitados, sea cual fuere su edad. Este uso ha durado hasta hace unos años, fecha en que los dueños han reivindicado los derechos que legalmente corresponden al arrendador.

Excusamos comentar la singularidad especialísima de esta institución que no es ni censo ni arrendamiento largo, sino una especie de heredamiento ó minorazgo más ó menos regular de *conducción* en favor de la persona que se supone más desvalida y necesitada de posición estable y segura. Sobre el estricto sentido de justicia distributiva predominan el propósito é interés de no dividir parcelaria é indefinidamente el disfrute de la tierra y el sentimiento de misericordia hacia los que tienen menos poder y recursos para luchar por la existencia, entregándose á los azares de la suerte y á las contingencias de lo desconocido. Los menores han llegado más tarde á la participación de los bienes de la familia y de los auxilios con que ésta les pone en camino y disposición de propiedad y fortuna, y los imposibilitados han menester, con mayor motivo, esta benéfica previsión sucesoria. Sea cual fuere el juicio que se forme acerca de tal uso, no se puede negar que hay en él una noción económico-jurídica elaborada por el común sentir de individuos y familias. A ella se debe, en opinión de los que han meditado acerca del *asiento* indivisiblemente transmitido, no sé si la ventaja ó desventaja de que apenas haya crecido la población de Canillas, pero ciertamente la ventura de que no llegaran á media docena el número de vecinos pobres.

En cambio en Calzada de Don Diego, también de la provincia de Salamanca, el arrendamiento se trasmite asimismo por sucesión, pero se reparte la tierra entre todos los hijos é hijas del arrendatario, lo cual ha producido tal framentación en el cultivo y goce de las tierras arrendadas que hay labrador que no trabaja y disfruta más que una y aun media *pierna* (una *pierna* es la $\frac{16}{8}$ parte de una yugada) y menos de ésta no suelen labrar los arrendatarios de Canillas de Abajo.

2. De la doctrina expuesta acerca de la personalidad de las sociedades incompletas se desprende cuan infundada es según lógicos y rigurosos principios la distinción entre la personalidad administrativa y la civil, distinción que no tiene otro propósito que restringir á ciertas colectividades los derechos concernientes á la propiedad y á la contratación, después de haber reconocido la existencia y licitud de tales asociaciones. Esta contradicción, según la cual el derecho administrativo se limita á reconocer y autorizar una persona colectiva, mientras que el derecho civil se permite la facultad de concederla ó negarla los derechos inherentes á la personalidad misma, procede de la errónea concepción socialista del Estado, ora advertida, ora irreflexivamente, y ofrece la particularidad extraña de que, mientras no hay persona física, por dé-

De aquí resulta que, por el natural apego á la tierra natal, adhesión que es más fuerte aun en los agricultores y aldeanos, la población de Calzada ha crecido extraordinariamente y en la misma proporción el número de pobres, tanto que el dueño del pueblo, que es de señorío como el de Canillas, enfrente de éste problema social, va resolviéndolo con prudencia, procurando reducir el número de arrendatarios de modo que cada uno tenga una yugada ó media cuando menos, sin prohibir la morada en el lugar á los ya residentes, á algunos de los cuales ha consentido la construcción de nuevas viviendas por motivos atendibles de equidad. En los últimos treinta años se habrán levantado unas 50 casas.

El Señor Don Isidro Beato Sala, ilustrado profesor auxiliar de esta Facultad de Derecho, á quien debo estos datos que tengo por seguros, aunque no haya podido yo comprobarlos sobre el terreno, me ha añadido curiosas noticias é interesantes observaciones sociológicas sobre el carácter muy distinto de uno y otro pueblo, separados por una vega como de dos kilómetros y confiados al celo parroquial de un mismo pastor, Don Nicolás Álvarez, que ha contribuido no poco á la morigeración de las costumbres, desarraigando algunos malos hábitos inveterados. Entre los rasgos más salientes de ambos caracteres figura el contraste de ser más graves, retraídos y reservados los vecinos de Canillas, menos dispuestos al mútuo auxilio, mientras que más expansivos y propicios á fraternal solidaridad los de Calzada, sin duda por más pobres y más en contacto con el mundo por medio de la carretera de Ciudad-Rodrigo y hoy por la cercanía de una estación de la línea de Salamanca á Portugal.

bil é insignificante que sea, á la cual se le nieguen los atributos jurídicos correspondientes á su estado, una persona jurídica, que es siempre más que una persona individual, no tiene más poder y facultades que los que al Estado le plazca concederla.

Si á los poderes públicos no incumbe, por regla general, en las sociedades incompletas otra función que la de registro de su existencia y estado y la misma de inspección que ejerce sobre los individuos, y no por modos, en formas y con procedimientos mas recelosos y molestos, síguese que es también norma ordinaria de conducta no trazarles una legislación preceptiva, sino cuando mas supletoria, y aun esta última es cuestionable en virtud de varias razones que no he de expresar aquí para no alargar demasiado esta parte ampliativa. Es decir, solo por función tutelar, verdaderamente fundada en las circunstancias, pueden las autoridades públicas, y en último extremo y lugar el Estado, permitirse una acción gubernativa ó de auxilio, que son de accidente no de esencia, y que muchas veces, aun ahora no se apoyarán en razones, sino en pretextos encubridores de invasiones absolutistas (1).

3. No puede negarse que la primera forma, etapa y manifestación del Estado es la de una sociedad pública que en gente y territorio no excede de la de un pueblo de regular

(1) Es muy importante no olvidar esta doctrina y reforzarla y ampliarla debidamente en *tésis*, para que la *hipótesis* de tutela no se extienda más de lo racional y justo; porque aun en la actual situación, si más vale que el Estado no se quede corto en precauciones respecto de ciertas sociedades, por ejemplo, las mercantiles, y no todas, en cambio hay que estar muy apercebidos para que no invada la legítima esfera de acción de otras colectividades, verbigracia, las docentes. Uno de los solapados expedientes indirectos con que el oportunismo masónico judaico que tiraniza á Francia trata de deshacer y arrebatar la relativa y mermada libertad de enseñanza que lograron arrancar los católicos al monopolio universitario por la ley de 1850, es el *refuerzo* de aquella inspección que había venido cayendo en desuso desde la ley Falloux y en tal sentido ha redactado Mr. Ribot el dictamen de la correspondiente comisión parlamentaria. Esto se escribe en Enero de 1900.

extensión y número de habitantes, sin que pueda encontrarse hoy un tipo de comparación del todo exacta, ora en nuestras villas, ya en nuestras ciudades de tercer orden. La historia nos muestra los modestos orígenes y proporciones de la ciudad clásica por excelencia, Roma, que á pesar de ellos, no solo logró mantener la vida y la independencia en frente de otras tribus y ciudades más poderosas, sino someterlas y hacerse al fin dueña de Italia y señora del mundo conocido.

Los municipios rurales, ora compuestos de un núcleo de población continúa, ora de grupos de población diseminada, podrían subsistir, aunque mal, con recursos propios, y mejor las villas importantes y nuestras pequeñas ciudades. Si supusiéramos, (mera hipótesis) rotos los presentes vínculos de nacionalidad y con ellos el consiguiente íntimo auxilio y cooperación ordinarios, ámplios y habituales entre los pueblos, todavía el esfuerzo propio de cada uno y el necesario comercio con los otros *extranjeros* bastarían no solo á la satisfacción de las necesidades actuales, sino al crecimiento de la población y al progreso, aunque lento, de la sociedad pública en todos los órdenes de la vida. Después de todo, la razón no concibe otra manera de formarse así las ciudades de Grecia y Roma como antes los grandes imperios orientales que por expansión y agregación de pequeñas poblaciones que eran verdaderos Estados en cuanto eran independientes.

4. En un tratado de Derecho político no se puede hacer de la provincia, como tampoco de las otras sociedades públicas, la inferior, el pueblo, y la superior, la región, un estudio directo, el cual corresponde más bien á las distintas secciones del Derecho público, y actualmente, por imposición de un error y un uso inveterados y absurdos, al Derecho *administrativo*. En un opúsculo escrito y publicado después del tomo primero de esta obra (1) he discurrido brevemente acer-

(1) *Guía para el estudio del Derecho administrativo, seguida del programa de esta parte de la asignatura de Derecho político y administrativo*. Salamanca 1899.

ca de los precedentes históricos y la naturaleza de la provincia. No se puede negar que el vínculo de la contigüidad más inmediata y la consiguiente mayor intimidad habitual del humano comercio forman al fin una comunidad natural que la tradición y la historia irán consolidando y perfeccionando cada día, y que en tales títulos se fundan el deber y el derecho de substituir al Estado en la acción gubernativa y en las funciones varias de social auxilio, ora esenciales ora tutelares, en la esfera de las distintas personas físicas ó colectivas inferiores á la provincia.

Lo que hay es que, como en ésta se reúnen y concentran los dos caracteres y conceptos de comunidad natural y de círculo protárquico arreglado por el Poder para sus oficios y funciones, ya legítimos, ya indebidos y usurpados, no es tan fácil distinguir la esfera de la autarquía provincial y las atribuciones que en tal respecto le corresponden de aquellas otras que ejerce en representación y por delegación de la autoridad soberana común; y aun puede acontecer que la dificultad de tal deslinde de deberes y derechos cohiba y estorbe la espontaneidad de la acción provincial y hasta que el Estado hállese más predispuesto á considerar á la provincia como organismo protárquico que como persona pública dotada de la correspondiente autonomía. No hay para qué decir que en el derecho nuevo y en la época actual está mucho menos defendida que el pueblo contra las intromisiones del Estado socialista, y que la consideración de parte y servidora de él predomina casi en absoluto sobre la que no puede negársela ni arrancársela de sociedad natural.

A medida que la política y el derecho, cada vez más anticristianos, más se acercan á un paganismo de peor especie que el antiguo, renace y resurge la nota odiosa de la primitiva provincia romana, tierra y región sometidas por la victoria y supeditadas al arbitrio del Estado vencedor. La evolución sociológica moderna en eso mismo consiste, bien que en virtud de sistema: es pugna del absolutismo del Estado con la per-

sonalidad y autarquía de las colectividades públicas y al fin vencimiento y anulación de ellas.

Y lo que se dice de la provincia en relación con el Estado central debe también entenderse en relación con el Estado regional, cuando no es aquella la sociedad pública intermedia entre el pueblo y la nación, sino que se compone ésta inmediatamente de regiones que han conservado alguna ó plena personalidad. Pero entonces suele ser más acentuada y fuerte la autarquía de la provincia, porque no está en íntimo contacto con el Estado soberano; porque se formó en épocas en que la autoridad superior era más respetuosa con la autonomía de las comunidades inferiores y porque el sentimiento regionalista, por justicia, lógica é interés común, está más dispuesto á otorgar á las provincias los bienes y fueros que quiere y reivindica para las regiones (1).

(1) En la historia puede decirse que no ha llegado á consolidarse y acentuarse el carácter de sociedad natural de la provincia ni, por consiguiente, la autarquía que le corresponde. Aparece por primera vez como creación del poder central en los territorios que Roma ocupaba y sometía fuera de Italia, significando provincia tierra vencida y gobernada por un derecho especial determinado para ella y menos parecido al de Roma que el de las ciudades de Italia, agregadas de varios modos á la ciudad romana. Cuando ésta fué extendiendo y afirmando su imperio en tierras y sobre tribus y razas de inferior cultura, no existía en ellas intimidad y solidaridad sociales superiores á la del pueblo, á la ciudad Estado, y así la provincia fué exclusivamente obra burocrática del conquistador. Luego, cuando las provincias se asimilaron á la metrópoli y la comunidad de intereses entre los pueblos contiguos pudo ir ingiriendo un elemento de sociabilidad natural en el círculo puramente administrativo, el absolutismo imperial y la supeditación de los vencidos, el despotismo cesáreo y la servidumbre pública apenas consentían que brotara la personalidad de esta comunidad superior.

Parece, á primera vista, extraño y aun inexplicable que surgieran antes la nación y la región que la provincia, y que haya hoy mismo más espíritu regional que provincial, regionalismo y no provincialismo; pero bien se penetra la causa. En la primera manifestación de la vida pública, el pueblo, confundense en una misma idea y afecto la vecindad y la nacionalidad, el

Los códigos civiles de la burguesía

La doctrina de éste y el anterior capítulo acerca de la autarquía con que cada sociedad debe ser fuente principal y directa de su derecho no se opone á que en la actual situación de la familia, privada hoy de una buena parte de su materia y extensión sociales gentilicias y del consiguiente poder jurídico, cumpla el Estado en el orden del derecho civil, á falta

concejo y la patria, cuyos dominios y jurisdicción se van ensanchando como los de Roma, como un municipio-Estado. La región aparece después, es fenómeno de la Edad media, cuando se determina y crea el espíritu y carácter de raza histórica; antes no había más que razas físicas idénticas ó similares, sin apenas más lazo que el de la circunscripción geográfica, pero casi sin conciencia del origen común ni vínculo social superior al de efímeras y pasajeras alianzas. El sentimiento regional se pronuncia más vivamente después, al agregarse las razas históricas á una comunidad nacional superior, en la cual recuerdan su mayor autonomía como un bien perdido, aunque imposible de mantener, pero queriendo conservar ó recuperar de él al mayor parte y siendo todo lo más autárquicas que permitan las circunstancias.

En tanto, y por esto mismo, no pueden las provincias despojarse de su carácter centralista como parece que debía ser desde que hubo una comunidad más cercana al Estado común y órgano más inmediato y propio para las funciones del superior gobierno. La razón es clara: mientras las regiones no tuvieron en el Estado común más vínculo legal, exterior y orgánico que la persona del mismo soberano, continuaron siendo Estados y naciones, y dentro de ellas, el poder central gobernó directamente por el conducto y medio de los círculos provinciales que conservaron así su principal y absorbente carácter burocrático.

De las instituciones medioevales más parecidas á la provincia, en las *merindades* y *adelantamientos* predomina la nota gubernativa central, y la de sociedad más espontánea en las *comunidades* que tienen una naturaleza mixta entre concejil y provincial. Desde el Renacimiento vuelve en la provincia á renacer más marcadamente el romanismo, sobre todo desde el siglo XVIII, y, por consiguiente, á ser las circunstancias así sociales como políticas, lo mismo el centralismo cesarista que la decadencia y postración de la espontaneidad y autarquía de toda sociedad, menos favorables al desenvolvimiento de la personalidad y *self-government* provinciales. El liberalismo ha acabado de sofocarlos y hacer imposible su restauración,



de las otras sociedades públicas, harto mayor número de deberes tutelares, de los que se impone y debe imponerse en beneficio equitativo de ciertas clases.

Ya en otro lugar, (Capítulo VIII, Libro II Tomo 1.º), al tratar del carácter y de los deberes sociales de la propiedad, expusimos cual es la legítima intervención del Estado en la presente hipótesis histórica en favor del trabajo agrícola y fabril, y cual la tutela con que debe defender al desvalido contra la infame explotación usuraria.

En el severo juicio que merecen los actuales códigos civiles que por el patrón del napoleónico ha redactado la burguesía liberal para su provecho injusto, están conformes así los socialistas doctrinarios de la presente etapa como los católicos, mal llamados socialistas, que quieren depurar á la propiedad de su vicioso y desalmado individualismo y confiar al Estado, único poder hoy en disposición y potencia tutelares, la protección de intereses legítimos, sacrificados por la fuerza injusta tras el embeleco del igualitarismo revolucionario.

Pero entre esos socialistas del oportunismo ecléctico y los católicos, además de las esenciales discrepancias que ya no necesitamos repetir, existe una diferencia respecto de la imputación infundada que hacen los primeros al romanismo y al antiguo régimen medioeval de ser las causas y precedentes de la *burguesocracia* reflejada en la mayor parte de los modernos códigos civiles. Porque cierto es que en ella paró el derecho civil de los romanos, como parará todo derecho no influido ni purificado bastante por la salvadora acción del Cristianismo; y en esto coinciden el derecho de Roma y el de la Revolución, en el sentido pagano de que no se purgó aquél y en que se inspiró plenamente éste; pero es inexacto que del romanismo copiaran directa y principalmente las actuales legislaciones civiles el individualismo igualitarista, bebido en las cenagosas fuentes del sistema liberal en su fase idealista y abstracta. En cuanto al derecho de la Edad media, su carácter fué precisamente el contrario, el de la solidaridad que el Cris-

tianismo trajo á la vida y que bien se manifiesta en la constitución y disfrute jerárquicos del suelo y, que, pugnando en la familia con la tradición romanista, no dejó de darla cierto carácter orgánico aun en la legislación castellana (1).

Las leyes protectoras del trabajo fabril y agrícola, del colonato, del prestatario en el mútuo, tienen perfecta cabida tanto en la legislación civil, que tan minuciosa es en la defensiva reglamentación de la propiedad individualista, como en leyes especiales, por estar ya hechos los códigos, y mientras no se reforman, máxime si se entiende que esas disposiciones encierran un predominante sentido y carácter de solidario y directo interés nacional.

La personalidad administrativa y la civil.

Es lo más general que las legislaciones modernas no traduzcan la doctrina, que me parece racional, de la identidad de la personalidad *administrativa* y la civil. Las leyes extranjeras que ahora tengo á la vista entienden que no está la persona moral en el mismo caso que la física al efecto de concretar

(1) El igualitarismo del derecho romano se parece al del liberalismo abstracto é idealista en el resultado, pero no en los principios; porque en Roma fué producto de aquella larga lucha y evolución por las cuales los plebeyos se equipararon á los patricios y luego todos los súbditos de Roma á los ciudadanos de ella, aconteciendo como ahora que la igualdad legal ocultaba una monstruosa desigualdad de condición entre habientes y no habientes, ricos y pobres. Esta es la consecuencia ineludible de todo naturalismo pagano ó liberal, el predominio de la fuerza sobre la debilidad, bien sea el poder del número ó la potencia de la riqueza. Pero culpar al derecho romano del vicio de que adoleció por naturales accidentes históricos y que es el mismo que, por sistema y en grado máximo, debe imputarse al derecho nuevo, paréceme notoria inexactitud é injusticia. El derecho romano podrá ser, como ha dicho Ihering, *el sistema del egoismo disciplinado*, porque no dan más de sí las civilizaciones pre y anticristianas; pero es absurdo titularle el peor de los derechos antiguos como le ha calificado un escritor italiano (creo recordar que ha sido Salvioli, profesor de la Universidad de Palermo.)

con la existencia la plenitud de los derechos nativos y adventicios, sino que para el goce de los mismos derechos civiles, la propiedad en primer lugar, existe un orden jerárquico de asociaciones, cuya entidad social y estado correspondiente incumbe trazar al poder soberano.

Han seguido en esto los Estados la tradición romana de restringir todo lo posible la personalidad colectiva y sus derechos, teniendo tal conducta el mismo fundamento entonces que ahora, el socialismo, vicio en aquella sociedad, sistema en ésta; prevención en ambas contra toda personalidad que no fuera la natural física, el individuo, ó la más natural de las colectivas, la familia.

De las asociaciones voluntarias y de las correspondientes sociedades, determinadas de un modo estable y permanente por el hecho de la asociación contractual, las que primero llamaron la atención del legislador y reclamaron el reconocimiento de derechos fueron aquellas, originadas de la aspiración predominante y de primera aparición y solicitud aun en tiempos de incultura y atraso, el lucro; de tal suerte que así, en el derecho romano como en los códigos y comentadores romanistas, sociedad y contrato y colectividad para la ganancia eran una misma cosa (1). Siguió la tradición románica el Código de Napoleón, entendiéndola la sociedad del mismo modo y definiéndola en términos análogos; y de esta regla y traza no se han separado no pocos actuales códigos y no hay que decir que tampoco el vigente en Castilla. El sentido dominante en esos cuerpos legales es considerar á la sociedad más por el aspecto de contrato que la establece que de persona jurídica creada por él. Y se comprende por las razones dichas, esto es, por el influjo de aquel principio y conducta que durante no poco tiempo resistieron ver en la sociedad otra cosa que la convención de obligaciones y derechos entre los socios y no la persona moral en relación con las otras personas

(1) Véase en prueba de ello, la definición que con el nombre de compañía da de la sociedad la ley 1.^a, tít. 10, partida quinta.

así físicas como colectivas, mediante facultades y deberes distintos é independientes de los de los asociados con el conjunto y con los demás sujetos de derecho extraños á aquél (1).


Aun en época reciente y en naciones no latinas, ó que solo en parte lo son, se sigue distinguiendo el contrato y la persona moral que el contrato establece, y admitiendo varias categorías de sociedades en razón de los derechos de que disfrutan por concesión del Estado que las otorga más ó menos personalidad, si es que del todo no se la niega á algunas. Así, por ejemplo, el suizo «Código federal de las obligaciones» de 1881, aunque no restringe el concepto de sociedad á convención para el mero lucro, sino que en la definición comprende toda clase de asociaciones, distingue la que llama *simple sociedad*: a) de las colectivas, comanditarias y anónimas; b) de cualesquiera otras que, no siendo éstas, tengan, sin embargo, fin económico ó financiero; d) de las de cualesquiera otros fines intelectuales ó morales (religioso, científico, benéfico, etc.) Las *simples sociedades* no tienen personalidad; las demás la adquieren por la inscripción en el Registro de Comercio que es registro para todas, aun las no comerciales. También el «Código civil del Imperio alemán» extiende la sociedad á todo fin y no exclusivamente al lucro; trata de todas las asociaciones (*vereine*) en el título de las «personas jurídicas», y distingue las sociedades de índole económica de las de *índole ideal* (intelectual, moral, social, etc.) La capacidad

(1) La repugnancia del derecho romano contra la sociedad en concepto de persona jurídica acaso no proceda tanto del socialismo de Estado como de la parsimonia y cautela con que aquel derecho procedía respecto de nuevos hechos jurídicos que no encajaban en las instituciones anteriores, y en los cuales iba considerando la fase principal y primaria antes que la íntegra naturaleza. De aquí el haber visto antes y recibido jurídicamente primero el contrato determinante de la sociedad que la sociedad misma, esto es que la persona moral libremente convenida; pero sin perjuicio de reconocer la personalidad á aquellas asociaciones de más importancia social por su objeto, por ejemplo, explotación de salinas, y minas y percepción de impuestos, las cuales, aun conservando el nombre de sociedades, tenían de hecho la categoría superior de corporaciones.

jurídica de las primeras depende de concesión del Estado federado en cuyo territorio radiquen, debiendo advertir que una buena parte de las asociaciones no están comprendidas en el código común federal, ó porque son objeto de leyes especiales del Imperio, como sucede con las sociedades industriales y mercantiles ó porque están reservadas al poder legislativo y reglamentario de cada Estado (caza y pesca, minas, agricultura, montes y aguas.)

Como se ve, de los tres criterios respecto de la personalidad de las personas jurídicas, el de la personalidad por el solo hecho de la institución, ó por la mera formalidad del registro, ó por la concesión del Estado, éste último es el más conforme con las miras y naturaleza del Estado moderno y el que prevaleció en el Reichstag al formarse el Código civil del Imperio. El partido *nacional liberal*, órgano de la plutocracia judaica, defendió este sistema de la autorización discrecional legislativa ó administrativa para las asociaciones políticas, político sociales, ó religiosas con el objeto de tener éstas al arbitrio despótico del Estado y hacer de tal requisito un baluarte del ya moribundo Kultur-Kampf (1).

(1) Los demócratas socialistas habían sostenido el criterio de Gierke, el de la más amplia libertad, y lo mismo el Centro católico, sin más diferencia que avenirse al registro que los socialistas solo exigían para la adquisición de inmuebles; á pesar de lo cual se otorgó á la autoridad administrativa el derecho de oponerse á la inscripción de las asociaciones ilícitas ó á las de fin político, político-social ó religioso.



CAPÍTULO III

DE LA AUTARQUÍA REGIONAL Y SUS GRADOS SEGÚN VARIEDAD DE CIRCUNSTANCIAS HISTÓRICAS.— EL REGIONALISMO.— LAS HABLAS REGIONALES.

1. Las relaciones de la región con el Estado y, por consiguiente una de las fases del asunto, esto es, la acción del poder central en las regiones, exigen capítulo aparte por la importancia histórica y actual de la materia.

En efecto; la región generalmente es después del pueblo la colectividad pública más natural y más consolidada por la historia; y hoy, á pesar del uniformismo centralista, apenas quebrantado doctrinariamente en teoría, y mucho menos en la constitución de las naciones latinas, el regionalismo, ó sea la doctrina de la personalidad y autarquía de las regiones y la reivindicación de aquéllas por modos legales ó violentos, es al presente uno de los más interesantes temas de política especulativa y práctica que preocupan por igual á todas las escuelas y partidos.

Porque la región, que, por su etimología, es un círculo gubernamental entre la provincia y el Estado, es

de hecho una circunscripción territorial más amplia que aquélla y el asiento de una colectividad pública y completa con vínculos morales y tradicionales más íntimos por regla general que los de la provincia y más estables y sólidos, por lo común, que los del pueblo.

En las actuales naciones de una regular extensión y población, España por ejemplo, las grandes circunscripciones regionales no han sido, como la provincia, obra del poder central principalmente para la variedad de fines que tiene que cumplir en la periferia, sino grandes sociedades naturales, formadas por una raza histórica «cuya personalidad no se ha borrado dentro de la nacionalidad y el Estado comunes. Así es que el carácter y el espíritu de raza suelen mantener perenne y viva esa personalidad con la autonomía y autarquía adecuadas» (1), sobre todo cuando esas regiones fueron antes naciones y Estados que al fin formaron con otros, por títulos y modos varios de unión, una nacionalidad y Estado únicos, verbigracia, Navarra, Cataluña y Aragón; ó, aunque no fuesen independientes de derecho, lo fueron de hecho por largo tiempo, como probablemente las Provincias vascongadas. En ambos casos conservan más ó menos el espíritu y carácter de la nacionalidad antigua, siempre una personalidad pública bien señalada y poderosa, y con ella, sino la independencia, el derecho á la autonomía compatible con la unidad y solidez de la patria común, y á la conservación del organismo y derecho regionales, bien que esto no implique el absurdo de que

(1) Gil y Robles, *Guía de Derecho administrativo* pág. 66.

nunca hayan de experimentar mudanza para un legítimo y verdadero progreso en interés común armónico de la nación y de sus inmediatas partes componentes, las regiones.

De aquí se sigue que en la región solo debe el Estado central intervenir por función propia para el fin de la conservación, consolidación y perfección de la unidad nacional, y, en lo que de aquél dependa circunstancial y tutelarmente, para aquellos otros, que por deficiencia histórica, no pueda por sí misma cumplir la región. Igualmente se deduce que, en tésis, es la autoridad regional la que en el círculo de las personas inferiores, provincia, si la hay, concejo, familia, sociedades incompletas é individuos, desempeña asimismo tanto las funciones esenciales del Estado regional, como las tutelares ó históricas que el atraso ó decadencia de la autarquía de esos sujetos de derecho imponen á la región y á sus autoridades. Como se ve, esta doctrina es deducción inmediata de la general del Capítulo I, aplicada á las relaciones entre la región y el Estado de idéntica formal manera que á las de las otras personas de que se trata en el Capítulo II, y es todo ello corolario de la teoría filosófico cristiana de la personalidad.

2. Lo común es que las regiones sean anteriores á la formación de las grandes naciones y Estados tal como al presente se hallan constituidos (España, Francia, Inglaterra etc.); pero también puede suceder que procedan de expansiones del núcleo primitivo é histórico de la nación, más ó menos adelantada en extensión territorial y población absoluta y relativa, aunque

en proporciones siempre más reducidas que en la actualidad, tal sucede con Valencia y las Baleares respecto de Aragón, con Galicia y Portugal respecto del reino astórico y con los reinos musulmanes respecto de León y Castilla.

En tal caso, bien que la personalidad regional con todas sus consecuencias no deje de existir, permanecer, acentuarse y consolidarse por la acción misma de la naturaleza, y según los principios de la sociabilidad y los hechos y circunstancias que la determinan en grados distintos de intimidad, armonía y unión, se verifican, sin embargo, dos fenómenos históricos, también muy naturales: ni es tanta la autarquía de las regiones, ni su organismo, y su derecho tan distintos del de la parte constitutiva del núcleo y centro nacionales. Ambos fenómenos proceden de un hecho fundamental y radical: una personalidad pública menos característica por razón de menos diversidad de raza histórica, que ya que no sea una, es menos varia, al menos en la población superior y por varios títulos predominante.

Entonces, como del Estado anterior ha recibido no solo una porción importante de pobladores más que por la cantidad, por la calidad, por el poder y por el influjo consiguientes, sino las bases, cuando menos, de la organización jurídica pública y privada, se destaca en los orígenes el carácter de provincia sobre el de región; es círculo más gubernamental y protárquico, y este sello y giro primitivos subsisten, más ó menos señalados, pero indelebles, á través del tiempo, aunque se haya dejado en él desenvolver á la región su personalidad sin ponerla obstáculos y aun ayudándola á ello.

Estas regiones son, por decirlo así, menos autárquicas, pero más nacionales que las otras, y es en ellas más amplia y continúa la acción del Estado, que tuvo en la formación y organización de esas sociedades una parte más activa y directa y las acostumbró más que á gobernarse principalmente por sí mismas á la dirección tutelar ó acaso abusiva del poder soberano.

3. Aunque la manera de incorporación de las regiones de raza histórica, de relativa autonomía ó de independencia absoluta, al núcleo del Estado nacional puede influir y de hecho ha influido algunas veces en la intimidad y fuerza de la unión y, por consiguiente, en el grado de autarquía que conserven dentro de la común nacionalidad, es independiente de las formas de agregación la personalidad pública que retengan ó que traten de reivindicar las regiones incorporadas. Porque esa personalidad procede ante todo del espíritu y sentimiento, del carácter arraigado y secular de raza histórica, en los cuales solo pueden influir accidental y circunstancialmente los modos de anexión al mismo Estado. Así se ve que el regionalismo es más acentuado en Vizcaya y Cataluña, agregadas á Castilla por fusión del derecho soberano en una misma persona, que en Guipúzcoa y en Álava unidas definitivamente por pactos que pudiéramos llamar federales. Aragón, incorporado á Castilla por el mismo título que Cataluña, es comarca apenas regionalista, y, en cambio, Navarra, sometida por conquista, cuando menos, aparente, una de las regiones más íntima y sinceramente españolas.

Porque, entre los modos de anexión, son la conquista y el pacto, cada uno de ellos por razón distinta, los que coinciden generalmente con el regionalismo más profundo y tenaz: la conquista porque implica unión forzosa y por lo tanto mayor tardanza y obstáculo á la formación y consolidación de la unión moral mediante ulterior y espontáneo consentimiento; el pacto porque supone, con la agregación hasta cierto punto voluntaria, una independencia y poder dueños de sus destinos, y que no abdican sino en el grado estrictamente preciso á que les impulsa y mueve esa necesidad que es el origen y móvil de la mayor parte de las convenciones así privadas como públicas.

4. En cuanto al pacto que, según las condiciones de él, por las circunstancias en que se acuerde, puede consignar más ó menos autarquía, y, por consiguiente, menor ó mayor unión nacional, hay que rectificar dos errores que, aunque notorios, están muy extendidos, los cuales encierran un grave peligro, y tienen hoy en España la más nociva y dolorosa trascendencia. Es el primero de ellos la suposición de que la sociedad anexionada puede por sí misma romper el pacto en cuanto juzgue que el Estado, esto es, la otra parte contratante, infringe las condiciones convenidas; es el segundo el que ese pacto ó no puede alterarse, ó ha de hacerse por mútuo acuerdo en que la región y la nación, de igual á igual, modifiquen el contrato en la misma forma de novación que las convenciones privadas.

Nada más falso: en tal pacto la región renuncia á su independencia para mayor perfección social, si es que

no para la conservación de la vida misma de ese Estado que se desprende de un grado máximo, pero nocivo ó menos útil de autonomía, á fin de conservarla dependiente, aunque más adecuada al legítimo interés social. La nación, por su parte, bien que, con la incorporación, obtenga mayores ventajas de prosperidad y grandeza, consagra á la comunidad anexionada gobierno, tutela y aun otros bienes efectivos, debiendo para ello hacer un esfuerzo de actividad, mantener una posición y arbitrar unos recursos que obligan á la región unida no solo á gratitud sino á permanente correspondencia de tales beneficios. La perfección y eficacia sociales que nación y región reciben en proporciones más amplias no pueden deshacerse, menguarse ni menoscabarse á voluntad de una de las partes contratantes, y menos aún de la que es inferior, so pena de parar en el absurdo de que no hay otra sociedad necesaria que la marital y paterno filial y que todas las otras dependen no ya en su formación, sino en su continuación y subsistencia, del arbitrio de las personas componentes en siendo *sui juris*. Con este criterio podría sostenerse igualmente la legitimidad de la misma forma de disolución de la provincia y del pueblo. Se incurre además en el absurdo de hacer de peor condición el pacto público que el privado; porque este no se disuelve por la voluntad de una de las partes sino por mútuo disenso; y cuando el pacto es entre más de dos sociedades, por ejemplo, en el caso de una federación nacional, nacida exclusivamente del convenio de todas las comunidades antes independientes, tampoco esta sociedad ha de ser de peor condición que las privadas de las que no debe salir

uno ó la minoría de los asociados cuando y como le convenga ó plazca.

En cuanto á la inalterabilidad del pacto, esto es, de la constitución pública de la región agregada y de las cláusulas de agregación que contienen las relaciones de unión federal con el común Estado, aún es más absurda, porque supone que tal organismo no ha de progresar y mejorarse de ningún modo, ni atemperarse en justicia y prudencia á las circunstancias de los tiempos, peregrina especie que á nadie le ocurre respecto de las demás relaciones jurídicas. Se trata de una legislación como otra cualquiera, susceptible de reforma y adelanto por los mismos medios y conducto que los otros ramos, y en esto la región y la nación no tienen posición igual sino la de la respectiva jerarquía, y bien que sean las modificaciones legislativas obra del soberano y de la comunidad anexionada, á ésta le toca é incumbe lo que á las demás, la acción y función representativas que solo según el derecho liberal son cosoberanas. En una palabra, la convención puede ser el título y modo de agregación nacional, que después es perpétua y no muda en cuanto á la substancia las relaciones esenciales del Estado nacional con las sociedades públicas de que inmediatamente se compone.

5. Desde que el absolutismo liberal, centralizador y uniformista, concluyó de arrebatarse á las regiones la personalidad y organización propia que les había dejado el absolutismo del antiguo régimen, surgió en las naciones latinas y por parte de las comarcas y circunscripciones de más acentuada y antigua raza histórica

ese movimiento que se ha convenido en llamar regionalismo y por el cual se entiende no tanto el *sistema público de la varia constitución peculiar y del propio gobierno de las distintas regiones* como el *deseo de estas de reivindicar la personalidad, la organización y la autarquía arrebatadas por el Estado moderno y el consiguiente esfuerzo para recuperarlas.*

Esta reivindicación, cuyos títulos son tan notorios, como que se derivan del derecho público cristiano, inspirado por lo tanto en la filosofía tradicional del Cristianismo, solo es sana y ofrece garantías de justicia y prudencia mientras se mantiene dentro de las enseñanzas y en el límite de los deberes trazados por aquel derecho que es y no puede menos de ser el alma al mismo tiempo que la base y el núcleo de la política, constitución y legislación nacionales. Solo mediante él puede sostenerse y afirmarse cada vez más la no tan fácil armonía, así en la doctrina como en la práctica, entre las legítimas exigencias de la unidad nacional y la amplia, pero razonable autarquía de las regiones, fundiendo y concentrando el amor de la patria grande y de la patria chica por el influjo y eficacia de ese principio moral de concordia que previene y reprime así los movimientos separatistas y los exageradamente autárquicos como las intrusiones de un abusivo centralismo injustamente invasor del *self-government* regional y enemigo de sus legítimos fueros.

Por ausencia de ese supremo vínculo espiritual de sociabilidad cristiana, que engendra y determina con virtualidad natural y sobrenatural las mayores y más perfectas comunidades sociales que se llaman nacio-

nes, es hoy el regionalismo liberal un movimiento irracional é injusto, que fluctúa entre la esterilidad y la perturbación, una fuerza ciega y anárquica que lucha con otra no menos irreflesiva é inícu, el burocratismo uniformista y tirano.

En efecto; el regionalismo moderno adolece del vicio común y característico de todas las instituciones liberales, el naturalismo que, por falta de sentido religioso y ético, concluye en escepticismo teórico y práctico y por consiguiente en utilitarismo materialista y sensual. Así es que «destruida en el derecho nuevo y »disipada en la edad contemporánea la superior uni- »dad moral que región y patria encierran, una y otra »se estiman como sociedades para meros fines econó- »micos, las cuales no se aman y defienden cuando no »son útiles, y se aborrecen y rechazan cuando ocasionan »materiales pérdidas. De aquí el que este regionalismo »utilitario sea separatista cuando juzga que la empre- »sa nación es contraria á la empresa regional, y aun de- »fienda y procure la agregación á otra extranjera com- »pañía si entiende que más ha de convenir á los intere- »ses materiales» (1). Pero como nada hay menos firme y duraderamente social que el interés, divorciado del derecho que armoniza y concierta todos los intereses legítimos, resulta que «la misma sociedad regional »es círculo sobrado ancho para que logre el interés sen- »sualista, sometido al criterio del individualismo, con- »ciliar tantas y tan variadas conveniencias personales, »y daría al traste con ella el mismo principio disolven-

(1) Gil y Robles, Ob. cit. pág. 68.

»te que corroe actualmente la unidad material de la patria. Por esto no para la patria chica en la región; sino que retrocede hasta el concejo, y ni aun en él subsistiría, roto el vínculo religioso y ético, el cual, aunque flojo y efímero, mantuvo coherentes á las tribus primitivas en los estrechos límites de la convivencia local» (1).

Por esto, el regionalismo liberal es mucho menos tolerante y sufrido con los defectos y excesos del poder central, los cuales exagera y abulta, y gradúa de tiranía ó centralismo oprobiosos é intolerables aun los que son accidentales y pasajeros é hijos de error más que de mala voluntad; y hasta se da el caso de que á la patria y al Estado atribuya exclusivamente la iniquidad y el desconcierto esenciales á los sistemas y gobiernos que las mismas regiones agregadas han contribuido á encumbrar, mantener y consolidar tanto ó más que las comarcas que son el centro de la nación y las primeras víctimas de la plaga que á todas aflige.

Y no hay para qué decir que dentro del naturalismo es imposible la restauración de la personalidad regional y por tanto estériles y vanos los intentos y esfuerzos á ella dirigidos. Tales ineficacia é impotencia son corolario de la doctrina de todo liberalismo acerca de la personalidad colectiva, incompatible con el individualismo y socialismo del sistema, errores íntimamente ligados entre sí. Porque en una concepción sociológica según la cual la sociedad se compone de individuos, y no hay más sociedad pública que la nación

(1) *Ibidem.*


soberana que concede ó niega la formación y existencia de las comunidades extra y suprafamiliares, organizándolas como place al Estado, la región, lo mismo que la provincia y el concejo, son círculos puramente administrativos, distribuciones aritméticas y geométricas de la única sociedad civil y para sus fines, necesidades y servicios. Al Estado, *representante del pueblo soberano*, incumbe pues determinar y arreglar el organismo y funciones regionales como los provinciales y concejiles, dándoles hoy esta disposición y extensión y cambiándolos mañana en una nueva ley según una idea que parezca más exacta, justa y conveniente.

6. El respeto á la personalidad regional supone y exige el respeto al dialecto ó á la lengua que suelen tener las regiones, y cuyo mantenimiento, difusión y arraigo en la conciencia y en el sentimiento, en el alma de ellas, son generalmente proporcionadas al grado de espíritu y carácter étnicos que conservan y á la autarquía que mantienen ó que, perdida, desean reivindicar. Es decir, el dialecto y, sobre todo, la lengua son por lo común, á la vez que derecho de la región, la medida de regionalismo actual ó de fuerza y vigor en el anhelo y movimiento regionalistas.

De donde se deduce que las hablas regionales deben ser no solo vehículo de conversación y de relaciones extrajurídicas sino lenguaje oficial para todo lo que se refiere al interés público regional y caiga dentro de la autarquía ó propio gobierno de la región; correspondiendo á la lengua nacional común cuanto concierna á la relación política de las regiones con el Estado cen-

tral y á los oficios esenciales ó tutelares que el Estado desempeñe en ellas.

La dificultad y complicaciones para la armonía entre el lenguaje nacional y los regionales no proceden de la lengua en sí misma sino de los obstáculos que en la teoría y en la práctica presenta la árdua concordia entre la unidad y la variedad, entre las razonables exigencias de la patria común y los justos fueros de la legítima autonomía y el propio gobierno de las regiones; no es cuestión filológica sino de razas históricas, así de la más general y común como de las regionales y de la relación jurídica pública entre aquélla y éstas. Esta relación y acuerdo, casi nunca fáciles, lo son menos ahora por el mal espíritu naturalista y utilitario que extravía y envenena al moderno regionalismo y que se refleja principalmente en la controversia y pugilato acerca de las lenguas, de las cuales y de las correspondientes literaturas se ha hecho símbolo, vehículo y bandera de exagerado *self-government* ya que no de separatismo encubierto ó declarado.



1. Este Capítulo tampoco pertenece al derecho político, sino al derecho regional; y por lo tanto si se incluye aquí es por motivos, tantas veces expuestos, de la indebida extensión que se viene dando á la materia. Aunque el derecho regional

tenga, como todos los demás públicos y aun el privado su parte política, la de la relación con el interés directo y solidario de la sociedad nacional, de la que es también órgano la región lo mismo que el individuo, no es político en cuanto al fondo y contenido de la doctrina. Esta no es otra que el derecho de la región, y no le incumbe directamente determinar cual es la fase nacional de las instituciones regionales, como tampoco le corresponde al derecho privado fijar este aspecto en las relaciones individuales y de familia, aunque en los códigos correspondientes, de la misma manera que en la realidad de la vida, no pueda separarse lo que, por abstracción, se discierne y distingue en el derecho racional (1).

Como el socialismo antiguo y el contemporáneo no han permitido consagrar la substantividad é independencia de las secciones infrapolíticas del Derecho público, no se trata en ninguna parte del Derecho regional, ó se hace brevísima é indirectamente en el Derecho administrativo al estudiar las regiones como círculos ó circunscripciones de administración *civil ó especial*, y, sobre todo y de soslayo, al ocuparse en el problema de la centralización y descentralización. La doctrina desarrollada en el Capítulo I del tomo 1.º y en toda la «Guía para el estudio del Derecho administrativo», especialmente en los apartados I, II y VI acerca de la *substantividad* de este derecho, me dispensan de añadir una sola palabra acerca de la improcedencia de exponer en el segundo curso de la asignatura la materia de este capítulo. Si se incluye en el programa y en la explicación del Derecho *administrativo* es por las razones apuntadas en la «Guía» y repetidamente en los dos tomos de este tratado.

(1) Región viene de *rego*, regir, gobernar; de modo que su derivación etimológica expresa más bien la idea de circunscripción gubernativa, sin que la semiótica de la palabra indique si es de autárquico ó de central gobierno, ni pueda tampoco penetrarse las razones de haber el uso trasladado tal acepción á la más geográfica que hoy predomina como significación primera y principal del término.

No nos interesa, ni es ocasión, investigar y resolver aquí si las Provincias vascongadas fueron, de *facto et de jure*, independientes de los reinos cristianos inmediatos á ellas, por qué no de su independencia durante luengos siglos, suponiéndola cierta, sino de los hechos y circunstancias múltiples y seculares, que, con autonomía absoluta ó sin ella, determinaron una profunda personalidad pública, proceden los títulos á una autarquía actual proporcionada á esas causas históricas de remota y continua acción. A esta personalidad tan acentuada puede contribuir la independencia, pero no como factor único ni esencial, y por ello se dice en el texto que es tal independencia cosa no substancialmente intrínseca del espíritu y sentimiento regionalistas, que tampoco están en necesaria proporción con el grado de autonomía que disfrutaron las regiones. Lo que principalmente influye ya se ha dicho que es la raza histórica como elemento inmediato, y también la raza física, aunque en el lugar y por el modo secundarios y subalternos expuestos en el Capítulo IV, págs. 84, 85, 90 y 91 del tomo primero de este tratado, máxime no habiendo entre los vascongados y la restante población indígena de España, sean las que fueren sus respectivas procedencias étnicas, una variedad física ni histórica tan señalada como en las tres grandes ramas del humano linaje (1).

(1) Resulta por esto, indiferente, hasta cierto punto, para la política especulativa y práctica, y por tanto materia de erudita *historia præterita* más que de importante historia actual la cuestión que planteó Llorente en sus «Memorias históricas de las tres Provincias vascongadas», y que provocó con los vascófilos y eusqueristas la enojosa é interminable polémica sobre los romanos, godos, navarros y astures sometieron á las Provincias y tuvieron sobre ellas títulos de soberanía. El mal intento centralizador y uniformista del clérigo tristemente célebre y de su inspirador Godoy no tendría fundamento alguno teórico ni legal, aunque hubiese probado lo que no probó: que sobre los vascos habían ejercido Roma, los visigodos, y los Estados cristianos de la restauración un dominio efectivo y jurídico; así como tampoco del solo hecho de la absoluta independencia de las Provincias hasta su incorporación á Castilla en los siglos XII, XIV y XV respectivamente, que suponen notorio los impugnadores de aquel parcialísimo es-

Tampoco la independencia anterior de las regiones ni la autarquía que, por razón de aquélla ó de cualesquiera otras circunstancias, lograron conservar al incorporarse al común Estado, significa que sean intangibles la constitución y el derecho regionales, consignados y garantidos al tiempo de la agregación en documento más ó menos solemne que forme parte de la legislación nacional federal. Esto equivaldría á las aberraciones siguientes: que aquel organismo y leyes eran perfectos; ó que tampoco cambia con los tiempos el derecho positivo por bueno que relativamente sea, ó que el legítimo apego y amor á los fueros regionales y el sincero y escrupuloso respeto que les tenga el poder soberano condena á las regiones á la renuncia de todo adelanto constitucional y legislativo. En estos evidentes absurdos suelen incurrir los más de los

crítor, redundaría á la región más ni menos derechos autárquicos, ni á la nación y al poder central común acción gubernativa más ó menos amplia y constitución federal débil é insuficiente ó sólida y segura. Lo mismo el agresor Llorente que Novia de Salcedo y los demás campeones del eusquerismo colocaron el asunto y controversia fuera del lugar y criterio propios y oportunos.

Y no hay para qué decir cuan agena es á la solución acertada del problema, á la vez regional que político, la del origen étnico de los vascos. Jaféticos ó semitas, iberos ó celtas, arios ó turanios, hyperboreos ó africanos, más aislados de las superiores culturas, ó por pobres é insignificantes ó por belicosos é indómitos, siempre será lo cierto y lo importante que su historia y todos los factores que ésta encierra determinaron en las tres provincias hermanas un espíritu y carácter, una constitución y un derecho que dieron á estos vascos personalidad pública muy saliente y conspícua, y, por lo tanto, posición y autarquía correspondientes y adecuadas á aquélla en la nacionalidad común. Aun suponiendo desvanecido y descubierto el enigma no encerraría él exclusiva ni principalmente la razón del mayor aislamiento y del self-government euscaldunas, que hay que atribuir á otras causas más inmediatas, eficaces y fehacientes, investigables y descifrables sin necesidad de engolfarse y perderse en conjeturas prehistóricas.

Porque, á pesar de todas las diferencias y aun oposiciones de raza histórica y física, vienen desde la Reconquista gravitando las Provincias con atracción poderosa hácia el Estado ibérico, con el que tenían menos conexión étnica, y separándose del de su mismo linaje y casta, con lo cual se refuerza la doctrina expuesta en el citado capítulo del primer tomo, es á sa-

autores foralistas, sino por conclusión categórica, por teorías y exigencias que implican error tan grave y trascendental; bien que á él hayan sido arrastrados por fundada desconfianza y no poco justificado recelo hácia los gobiernos actuales, cuyos principios, programa y aspiraciones son incompatibles con la autarquía de todas las comunidades distintas de la nación. A ella y al derecho racional y nacional confunden en el anatema que solo merecen el derecho, la política y los poderes nuevos, tan antipatrióticos como antiregionalistas.

2. La doctrina de ser menos marcada la personalidad de las regiones que proceden de la expansión del ya antiguo núcleo nacional, sólido, estable y regularmente poblado y extenso, puede comprobarse principalmente en las conquistas de

ber, que la más radical variedad de raza, lo mismo física que histórica, no es obstáculo á la formación y consolidación de fuertes vínculos nacionales.

Independientes ó no, los vascos mantuvieron desde el principio de la Reconquista más amplias y habituales relaciones de lo que se cree y escribe con los Estados cristianos vecinos y más con el que era continuador del Estado gótico, cuyo ducado de Cantabria tuvo sobre las Provincias una jurisdicción, no sé si puramente nominal ó un tanto efectiva. Esto era natural: no solo la santa religión que euscaldimas y erdaldunas profesaban, sino el común peligro irían anudando lazos antes desconocidos y débiles y formando por elaboración interna y silenciosa esa intimidad social en que la nación consiste y que precede casi siempre, y es conveniente que preceda, á la constitución y declaración de un mismo Estado federal: aquélla y éste se determinan y ultiman sobre y á pesar de todas las diferencias y aun oposiciones de raza.

Los vascongados vivieron luengos siglos en pacífica y amada comunidad, no solo legal sino moral y psíquica, con la patria común, sin que durante la monarquía pura se turbase nunca de una manera grave el feliz acuerdo entre el poder soberano y éstas, más favorecidas por la historia, porciones integrantes y estimadísimas de la nación hispana. Para romper esa armonía han sido precisos todos los naturales desafueros centralistas y uniformistas de los nuevos poderes liberales y revolucionarios, y que el derecho nuevo, sensualista, utilitario y disolvente, envenene y extravíe los legítimos anhelos de razonable reivindicación foral, empujando y aun precipitando el regionalismo por la pendiente separatista.

León y Castilla sobre los territorios musulmanes que formaron el Califato de Córdoba y constituyeron, á su caída y fraccionamiento, pequeños estados independientes. En esas conquistas siguen los reyes otorgando donaciones á los señores y amplias franquicias á los pueblos; pero si la autarquía local no desaparece ni aun se mengua, la región es más bien una circunscripción geográfica sin propio organismo distinto del central, y, por lo tanto, apenas se marca una comunidad intermedia entre el Estado y los círculos gubernativos que son como los comienzos y vislumbres de la provincia en la Edad media (1).

Así se explica que en las regiones, que han sido como el centro de la nacionalidad común, no haya espíritu regional, ó por mejor decir, regionalismo y patriotismo se confunden en una misma idea y en idéntico sentimiento de sociabilidad, lo cual no obsta al amor de las razonables libertades públicas, á su mantenimiento y defensa y á la adhesión al organismo y derecho de la comunidad, que es al mismo tiempo, región y patria. Mas, también por esto, esas regiones, en que radica el Estado nacional, quiero decir, el Gobierno, al cual consideran con razón como cosa más propia é identificada con el pueblo, no solo más toleran y sufren los extravíos y aun excesos del Poder, sino que suelen habituarse á ellos y aguantarlos indefinidamente, sin distinguir, cual deben, las funciones esenciales de las tutelares y unas y otras de las intromisiones de la soberanía. Tienen, sin embargo, tales regiones la circunstancia atenuante de no contar con los mismos elementos de legítima moderación y resistencia, por carecer de un organismo regional propio, que es un estado semisoberano; y he aquí porqué más responsables aun del centralismo uniformista y de los despotismos, tiranías y demás desafueros del poder central,

(1) La comunidad es sociedad natural intermedia entre el concejo y la provincia; la merindad tiene más de provincia que de región, y más carácter de círculo gubernativo delegado que de colectividad local, y esta misma nota burocrática predomina en el adelantamiento.

son las circunscripciones que han contado con más recursos de legítima defensa, ó que, aun habiéndolos perdido, conservan el espíritu de raza histórica y, arraigado en él, un regionalismo más ganoso de justas reivindicaciones, que han de procurarse, no de cualquiera modo ni por cualquier camino, suponiendo ecléctica y escépticamente á la vez que todos son buenos y conducentes, sino por los procedimientos verdaderos, justos, prudentes y adecuados (1).

Si alguna región de las que estamos tratando llegaron á conquistar autarquía y descentralización muy pronunciadas, por ejemplo, Galicia en algún tiempo, y aun la autonomía absoluta como Castilla respecto de León, y Portugal respecto de León y Castilla, no ha sido por diferencias de raza histórica sino por otras circunstancias que favorecieron la tendencia emancipadora y separatista de las regiones en épocas de formación nacional, en que está todavía poco adelantado y fuerte el espíritu de la amplia y común patria. Y si á tal impulso de disgregación, propio de sociedades y tiempos atrasados, se juntan la flaqueza del poder central, el vigor y pujanza del feudalismo y otras más urgentes atenciones del Estado, cuidadoso de peligro más grave, el de la morisma, que amenazaba, no con desprendimientos, sino con disolución á la patria, bien

(1) No es ciertamente irresponsable Castilla de la pérdida de las libertades regionales ni del centralismo desmedido, para el cual proporcionó al poder soberano en el siglo XVIII los principales ya que no exclusivos recursos y fuerzas; pero de la nivelación burocrática y uniformista consumada por el liberalismo, más culpables son aún los otros Estados españoles, que tenían aun más que perder en el triunfo de ideas y principios incompatibles con la restauración y conservación de la autarquía regional. Lo mismo en Castilla que en las comarcas de raza histórica y propio derecho público y privado los partidarios de la constitución tradicional, los elementos nacionales, serán los que tengan razón y motivo para abominar de la centralización abusiva y desbordada, no los liberales vascongados y catalanes, insensatos partidarios y mantenedores de una política esencialmente antiforal, y obstinados por pasión ó por incultura en achacar á gobiernos *castellanos ó á la castellana* la destrucción de los fueros de la cual solo es reo el liberalismo profesado por esos extraños regionalistas.

se explica la formación de los distintos Estados ibéricos, aun dentro de los tres grandes grupos y centros de restauración nacional, Estados al fin unidos por visible acción de la Providencia, con excepción lastimosa de aquel, que, desde hace más de tres siglos, se obstina en una independencia irracional, reñida con la justicia, con la propia conveniencia y con los intereses y destinos de la española raza.

Pero la prueba de la teoría que venimos exponiendo está no solo en las expansiones de León y Castilla, Estados de un poder monárquico más fuerte y unitario, sino de las conquistas de Aragón en los reinos, también musulmanes, de Mallorca y Valencia. Apesar de la ingénita y crónica debilidad de la realeza aragonesa, bien reflejan los fueros otorgados por el gran rey conquistador y legislador á los territorios, ganados con armas y recursos de Cataluña y Aragón respectivamente, el pensamiento, en gran parte realizado, de una constitución y legislación tan generales como lo permite una feudalidad no buebrantada, y de una centralización gubernativa tan extensa y sólida como lo consiente el poder escaso y siempre disputado del Trono. El rey otorga libertades con la mayor largueza, pero ya las circunstancias son más favorables á un organismo central, que sin absorber la personalidad de la región, pueda atender, *á priori* y según un plan preconcebido, á los intereses de la patria y del Estado nacionales representados en la persona, no más todavía, de un mismo monarca (1).

(1) Para mostrar la diferencia entre el Fuero de Aragón y el Fuero valenciano no hay sino fijarse en una magistratura, que tiene en ambos el mismo nombre, pero, bajo la denominación común, el carácter más distinto y las atribuciones más diversas. El Justicia de Aragón, que en un principio, y siempre en la forma y en la exterioridad, parece un oficial real, un magistrado, en quien delega el rey las funciones judiciales que él no puede ejercer ni retener por lo tanto, se convierte de hecho, por evolución histórica y por el no interrumpido influjo del espíritu aristocrático burgués de la constitución aragonesa, en el depositario legal de varias facultades esenciales, arrancadas á la monarquía por la nobleza, y en uno de los instrumentos con que ésta defiende y sostiene judicialmente en las Cortes y fue-

3. La conquista y el pacto son ciertamente, como se ha dicho en el texto, los modos de agregación que implican mayor autonomía regional, como expresivos, cada uno por su estilo, de más necesidad que espontaneidad en la unión á un mismo Estado. La unión personal parece contener y suponer mayor intimidad patria, porque en los orígenes de la conglomeración nacional apenas tienen nación y Estado ante la conciencia pública, vínculo más visible y estrecho, expresión más adecuada y cordial que ese mismo soberano que goza generalmente de la adhesión del espíritu público en las varias *nacio-*

ra de ella privilegios en gran parte contrarios á los legítimos fueros de la realeza y de la verdadera democracia. Desde Epila, la acción armada, violenta y anárquica de los nobles se traslada á la jurisdicción de un magistrado, que no es el escudo de toda justicia y derecho, sino el brazo judicial de una oligarquía prepotente y opresora así del rey como de la miserable plebe de los campos, de los infelices *vasallos de signo servicio*.

En cambio el Justicia y luego los Justicias son en Valencia una magistratura monárquica popular que tiene una jurisdicción delegada del rey y común á todos los ciudadanos, sin más limitaciones que las impuestas por la existencia de dos fueros con que no pudo menos de transigir D. Jaime, el fuero personal nobiliario de Aragón y el territorial del nuevo reino conquistado. En este ni el poder ejecutivo ni el judicial vienen de antemano feudalmente repartidos por la constitución originaria del Estado ó Estados pirenaicos entre el rey y los señores (Fuero de Sobrarbe), sino que, como en el Estado astúrico, leonés, castellano, es, á la gótica y á la romana, el monarca fuente de jurisdicción, de mero y mixto imperio, reteniendo, al menos en teoría, los que le parece, y delegando las funciones que le place con iguales amplitud y criterio democráticos que en Castilla y León durante el período en que no empieza la restricción de la autarquía é inmutabilidad concejiles. Lo mismo los funcionarios y corporaciones gubernativos que los judiciales muestran en Valencia bien marcados el origen y carácter de instituciones procedentes de la voluntad del rey; de modo que puede decirse que, así como en su reino originario la monarquía tiene las atribuciones que le dejan la aristocracia y los burgueses, en Valencia, por el contrario, es el rey el que descentraliza y reparte el poder gubernativo y jurisdiccional que resuelve no retener y ejercer en persona. Es que en Aragón la monarquía recibe por pacto lo que la aristocracia le concede al reconocer, crear la realeza, mientras que en Valencia la monarquía preexistente conquista y organiza con el concurso subordinado y subalterno de las otras clases sociales. Por esto, aunque menos poderosa que en Castilla,

nes de que es cabeza; la existencia de un *padre común determina* la de una misma familia política. Y sin embargo, la historia nos muestra más reacia á la consolidación orgánica federal á Vizcaya, incorporada á fines del siglo XIV á Castilla en la persona de un mismo señor y rey, y á Cataluña que lo fué más de un siglo después en la persona de Doña Juana. Navarra, en cambio, no solo por razón de raza sino de una independencia de hecho y de derecho, que no ha sido cuestionada, debía haber mantenido una personalidad nacional tanto y aun más profunda, señalada y viva que las dos provincias vascongadas,

no deja de afirmar en la constitución del nuevo reino el atributo inseparable del señorío real; la justicia, (soberanía), diferenciándose el organismo regional valenciano de las conquistas de leoneses y castellanos en los reinos musulmanes de Occidente et. el más ó en el menos, que no cambia la especie, esto es, en el grado de potencia real y de regional descentralización y autarquía, no en la tesis de la soberanía una é indivisa del rey en los lugares poblados á fuero de Valencia y, por consiguiente, de una circunscripción y derecho más protárquicos y nacionales que étnicos y autónomos.

A lo cual contribuyen también las razas conquistadoras, aunque por modo y en proporción diferentes: en Extremadura y en Andalucía la población dominadora es casi de una misma raza y nacionalidad, y por eso el regionalismo menos hondo, potente y celoso de su autarquía, y otro tanto sucede en Valencia, bien que por el hecho contrario de la diversidad de raza y Estado históricos, porque la variedad de los vencedores (aragoneses, catalanes, provenzales, etc.), impide la unanimidad y pujanza del sentimiento regionalista en razón directa de las diferencias étnicas. Sí, á pesar de esto, entre Aragón y Valencia no hubo otra unión que la llamada personal, ó sea, por razón del mismo monarca, es porque la monarquía aragonesa, menos fuerte que la castellana y más supeditada por la oligarquía aristocrático burguesa, no pudo lograr la sólida unión real que León y Castilla en sus conquistas meridionales. Por esto se dice «la Corona de Aragón» que no es lo mismo que el «Reino de Aragón», mientras que, refiriéndose á Castilla, ambas expresiones significan la misma cosa, esto es, el Estado y la nacionalidad castellanos, designados trópicamente por su forma de gobierno. Esta diferencia es una de las circunstancias, razones y títulos de la preponderancia y hegemonía españolas de Castilla, de ser el núcleo y centro de la nación y patria comunes y del predominante papel social y político en la península y fuera de ella, en el antiguo y en los nuevos continentes.

por menos mezcla de elementos étnicos extraños y menor comunicación con el Estados gótico y con los reinos de la restauración. La incorporación de Navarra por conquista, bien que no larga ni difícil, debió contribuir aún más á un grado de regionalismo confinante con el anhelo de absoluta independencia. Y, á pesar de eso, Navarra ha tenido, para gloria suya y suerte de toda España, el mérito y la fortuna de una armonía y equilibrio tradicionales entre la autarquía regional, bien señalada y característica, y el sentimiento nacional y el espíritu de patria, que ha resistido á los agravios del liberalismo centralista y uniformador y á la tentación de la coyuntura más propicia, que ofrecían nuestras últimas desventuras, á las exageraciones regionalistas y aun á las intentonas de separatismo (1).

(1) Por su posición geográfica estuvo Álava en más continuo contacto y trato con las razas indígenas, asimiladas al fin á las culturas y Estados superiores, y luego con estos, así en la época romana como en la gótica y en la de la reconquista occidental y oriental. Más apartadas y recónditas las otras dos provincias, robustecieron y aun *cristalizaron* su espíritu étnico y regional, de tal suerte que en él ni en la adhesión á la patria y Estado españoles nada influyeron la fecha ni la manera de la Unión. Guipúzcoa se incorpora en la misma forma y antes que Álava á Castilla y es sin embargo más regionalista; y Vizcaya agregada después (bien que solo por modo definitivo y legal); pero, por consolidación de soberanía monárquica y de feudal señorío en una misma persona, es más regionalista que sus dos hermanas.

A Navarra la condición de Estado soberano le dió más amplia y frecuente intervención en los asuntos, no sólo de la Península sino de las dos naciones á que se extendían su territorio y las relaciones de las dinastías que se sucedieron á la extinción de la dinastía nacional. La imperfecta ley sucesoria, que es la que se conoce con el nombre, un tanto equivoco é inexacto, de cognaticia pura, franqueó la entrada al influjo extraño, introducido por las dinastías francesas, y tuvo fluctuante al espíritu público entre los dos grandes Estados confinantes con la pequeña monarquía vascona, aunque inclinándose marcadamente hacia España á pesar de las relaciones de los reyes navarros en Francia y su corte y los manejos de ésta en las cosas del reino pirenaico y de sus familias reales. La Providencia dispuso los sucesos felizmente, de modo que de las divisiones intestinas, guerras, asolamientos y anarquía crónica mantenida por los partidos desde la ambiciosa

En Cataluña á pesar de la identidad de raza física y de haber experimentado desde los tiempos históricos la población vicisitudes análogas á las demás regiones españolas, viene hace tiempo muy pronunciado el espíritu de raza histórica y el de nacionalidad perdida, y es, por consiguiente, muy profundo y vivo el regionalismo, que acaso aspira no solo á descentralización máxima, sino á la unión puramente confederal con España, como nación y Estado que suponen en situación y relaciones parecidas á las de Hungría con Austria. Este sentimiento y anhelo de autonomismo nacionalista es tan difícil de justificar como de explicar el hecho de que se mantenga tan hondo en Cataluña el caracter étnico, siendo tan semejantes á los del resto de España los elementos y factores de raza física. Porque la fecha de la independencia absoluta de

intromisión del Rey D. Juan en los Estados de su desgraciado hijo, el Príncipe de Viana, facilitaron la influencia é intervención de Castilla que había llegado al apogeo de su poder bajo el cetro de los Reyes católicos. Aunque no pueda decirse que la facción beaumontesa tuviera concepto reflexivo y adecuado de la necesidad de las grandes agrupaciones nacionales, ni sintiera, por lo tanto, el anhelo y estímulo de la patria española, los intereses de partido sirvieron á la idea y al derecho, y en las pasiones ciegas y furibundas del bando beaumontés encarnó efectivamente el espíritu pátrio que atraía á un mismo cuerpo social á aquella fracción tan importante y benemérita de la libera gente. En colisión con este supremo derecho poco valían los títulos dinásticos ni las prendas personales de los últimos reyes de Navarra, si es que tenían valor y fuerza morales aquellos títulos derivados de un semiparricidio, el consumado en el infeliz Príncipe de Viana, y de un fratricidio, el que cometió contra la no menos desdichada D.^a Blanca su cruel y ambiciosa hermana D.^a Leonor, abuela de la reina D.^a Catalina. Cayeron sobre la segunda generación aquellos crímenes y los expiaron con tantas penas y desgracias y con la pérdida de sus Estados la última reina de Navarra y el rey consorte D. Juan de Labrit, dignos ambos de mejor suerte. El advenimiento de la dinastía borbónica al trono de España restituyó á Navarra su dinastía legal, porque sabido es que D. Felipe V descendía por no interrumpida línea agnaticia de Antonio de Borbón marido de D.^a Juana Labrit, nieta de la reina D.^a Catalina, y madre de Enrique IV de Francia. Esto consolidó aun más la unión de Navarra con Castilla.

Cataluña es harto remota y no se incorporó inmediatamente á Castilla, sino cuando la corona de Aragón, como parte de ella, y por fusión de derechos soberanos en una misma persona, es decir, por el mismo título que trasladó el cetro aragonés á la descendencia de los Condes de Barcelona. Es de larga fecha la existencia de un germen de antipatía más ó menos disimulada ó manifiesta, que aprovecha todas las ocasiones propicias para expresar la malquerencia y el despego hacia la nacionalidad común y aún para romper los patrióticos vínculos con ella. Pero la pertinacia de este sentimiento, originado de livianas causas, es lo que no tiene explicación ni excusa á medida que el adelanto de los tiempos y de las ideas debieron abrir paso á la reflexión y, con ella, al concepto y anhelo de amplia nacionalidad contra el estrecho exclusivismo de pequeña región independiente. Ni de la dinastía castellana ni de la casa de Austria recibieron los catalanes agravios de dañada intención ni de cuantía bastante á justificar ni cohonestar movimientos separatistas y mucho menos anexión al Estado que á la madre patria había inferido mayores perjuicios y ultrajes con menoscabo y daño de la cristiandad y del imperio de Cristo en ella. Los contrafueros posteriores pertenecen al número de esas desventuras nacionales que no pueden imputarse á ninguna región en particular, ni á la nación común, sino al Estado oficial; en la consumación de ellos tampoco estuvo exenta de culpa Cataluña, y para remediarlos y volver las cosas á más racional y justa situación lo procedente es trabajar de acuerdo y con el auxilio de las regiones hermanas en vez de maldecir de ellas y desatar ó aflojar los lazos de la familia española (1).

(1) El partido vencedor en una civil contienda no debe, aunque esté convencido de la legitimidad de sus títulos, imponer á las regiones que siguieron la bandera contraria, la pérdida de la personalidad y de la constitución y el derecho regionales. Esta pena no solo es desproporcionada sino aun más radicalmente injusta por contraria al orden y á la misma conveniencia nacional, que no consiste en el uniformismo centralizador, sino en la variedad compatible con la unidad, en esa armonía de la que surge y de-

Desde la consolidación de la dinastía borbónica Cataluña se resignó con su suerte, y en la tolerancia de los desafueros consumados no se mostró menos pasiva y apática que las demás regiones despojadas y que la absolutista Castilla, consinténdolos, en cierta manera, por la falta de una acción y movimiento reivindicadores legales y eficaces y de una protesta respetuosa, viva y perenne de razonable restauración regional. Pero aún ha hecho más Cataluña: desde la introducción y afianzamiento del liberalismo, esencialmente incompatible con los fueros regionales, no ha contribuido menos, por comisión ú omisión, que las demás regiones españolas al establecimiento y consolidación del sistema, y Barcelona, ahora tan exagerada y extraviadamente regionalista, si es que en eso queda, se distinguió como la ciudad que más en las odiosas y violen-

pende en gran parte la fuerza y solidez de las naciones. Pero esto no quiere decir que el triunfador no tenga derecho á ciertas medidas preventivas y tutelares que pueden restringir un tanto la autarquía regional y suspender por más ó menos tiempo su ejercicio, si la justicia y la recta prudencia, no el capricho y el vengativo desquite, aconsejan tales medidas de precaución. Más aún: el vencimiento de una región es coyuntura propicia para que, no por vía de pena, sino de mejora, se modifique la constitución nacional en punto tan interesante como el de la relación de las partes con el todo, de modo que no padezca la legítima autonomía regional, pero que se consolide y robustezca la unidad nacional antes floja, quebradiza y precaria.

Por esto no vacilo en afirmar que, al advenimiento de Felipe V, había llegado la ocasión de que se procurara, donde se pudiera, convertir la unión puramente personal de la Corona de Aragón con Castilla en solidaridad más segura y garantizada que la que procede de tener un mismo soberano. Felipe II procedió con harta parsimonia respecto de Aragón; fué lástima que el primer Borbón español no acertase á conciliar el respeto de los fueros aragoneses, catalanes y valencianos con los superiores fueros de la nación española. La oportunidad no pudo ser mayor, porque, si bien hay otra mejor y preferible, la conformidad y aun el deseo de las regiones en virtud del progreso de la noción y afecto de patria, rara vez se da esta feliz circunstancia, y tiene que ser el poder central el que atienda á este vital interés y lo promueva con prudente y enérgica perseverancia.

El mismo título que á su derecho civil tenía la corona de Aragón á su

tas escenas que acompañaron y siguieron al entronizamiento del nuevo régimen. Una vez afianzado el parlamentarismo, no ha sido en Cataluña ni más atenuado ni más recto y pulcro que en el resto de España, y es además de extraño, lastimoso espectáculo, por lo injusto y desaprensivo, el de esas gentes que execran la corrupción social y política y el centralismo abusivo é indigno al que el liberalismo catalán ha llevado no pequeño contingente de podredumbre.

Ya va siendo, pues, hora de que, lejos de disgregar ó de disolver la malparada nación con regionalismos de cierta especie, que tocan, por irreflexión ó de intento, en el extremo separatista, traten todos los miembros de la familia española de restaurarla, purificarla y fortalecerla, considerando el centralismo y uniformismo agarrotadores y tiranos como una ca-

derecho público; pero no hay razón especulativa ni tradición histórica que consagren la intangibilidad de constitución ni legislación alguna, por autónomas é independientes que hayan sido las regiones integrantes de la patria; y explicación y atenuación tiene que Felipe V no concibiera ni amara otra unidad que la del cesarismo francés y no entendiera los derechos de la magestad y los atributos soberanos de distinta manera que Luis XIV. ¿Qué hizo Castilla (y esta fué su única participación culpable en la abolición de los fueros del otro reino) para que el nuevo monarca adoptara un criterio de política y de gobernación más conforme con la naturaleza de la monarquía templada y con el organismo y autarquía de las demás regiones? ¿Ni qué podía hacer, si la tradición de la realeza moderada y del gobierno representativo, que nunca arraigaron ni prosperaron gran cosa en el Estado más románico de la península, habían casi desaparecido en los dos reinados anteriores más por ya antigua incuria é indiferencia de los pueblos que por abuso de los reyes?

Por lo demás razón tuvieron y tienen los catalanes para agravarse y quejarse del espíritu y del conjunto del Decreto de Nueva Planta, más no de todas las disposiciones de Felipe V, algunas de las cuales fueron de plena justicia y conveniencia, por ejemplo, la derogación de las prohibiciones de extranjería, cuyo mantenimiento es contrario al principio de la nacionalidad común. El regionalismo que inclina esta disposición en el capítulo de cargos contra D. Felipe y contra Castilla es regionalismo muy sospechoso. Lo extraordinario es que tal *extranjería* hubiera podido subsistir hasta entonces.

lamiento común, y á la autarquía regional como una reivindicación que á castellanos, catalanes y vascos importa por un mal alto interés jurídico que las conveniencias y vanidades locales. Para ello es preciso olvidar agravios recíprocos, como olvida Castilla hidalgamente los sucesos del siglo XVII, y convencerse de que la restauración regional no se consigue por cualquier camino y procedimiento, sino por los medios y las vías nacionales, esto es, del derecho cristiano y de la esencia y espíritu, ya que no de todo el contenido, forma y letra del derecho histórico (1).

(1) Con excepción del tradicionalista, el regionalismo catalán adolece de los defectos señalados en la página 60 y sobre los cuales se insiste en la página 61. Por escéptico, supone que caben en el programa regionalista todas las opiniones sociales, jurídicas y políticas, sin otro principio, criterio, y vínculo comunes que la vaga y abstracta afirmación formal de mero regionalismo; y cayendo luego, en utilitarismo positivista, que es lo que acontece cuando nada se afirma ni rechaza en el terreno especulativo, viene de hecho y en concreto á no admitir más tesis ni más fin que el de las conveniencias materiales, reduciéndose al cabo la reivindicación autárquica á cuestión y aspiración puramente económicas; lo cual es también absurdo, porque no hay economía que no sea jurídica y ética y que no tenga, por lo tanto, que decidirse por un sistema y un procedimiento determinados.

El regionalismo liberal en Cataluña es, como no puede menos, apriorístico y sin conexión alguna con el Cristianismo ni con la historia. Empezó por una manifestación y fase literarias, y de allí se extendió á exhibir y hacer valer los títulos, no de la tradición, que habría de restaurarse en esencia y en parte, con las reformas, mejoras y cortapisas impuestas por las circunstancias, sino los de la innegable actual superioridad fabril y comercial del Principado, y, los imaginados de una total cultura superior y de una mejor raza que la del resto de la Península (han llegado algunos hasta fantasear que son los únicos aríos de España; de los demás españoles, dicen los catalanistas que somos semitas). Tales suposiciones, que no parecen dignas de la rectitud, gravedad y formalidad catalanas, no podían menos de ingerir en el regionalismo de Cataluña un espíritu y factor de desdén y de hostilidad hacia Castilla y el resto de la patria y colocar la restauración regionalista en un terreno resbaladizo y peligroso, contra el cual deben estar muy apercibidos los elementos católicos y españoles de dentro y fuera de la región catalana. De esa prevención absurda proceden las exageraciones de

4. El error denunciado en el texto elemental procede, en mi opinión, de equiparar los pactos y convenios públicos de formación nacional ó de agregación de un Estado á otro á las convenciones y contratos de derecho privado, á lo cual entiendo que han contribuido un hecho histórico de larga permanencia y de general extensión y una teoría probablemente no poco influida é inspirada por este acontecimiento. El hecho es la formación, ó mejor dicho, la reconstitución de la sociedad pública por modo y en forma feudales después de la caída del Imperio romano de Occidente y la destrucción de la maquinaria gubernativa de Roma, que en España subsistió en gran parte hasta la invasión mahometana. En efecto, el falso y atrasado individualismo de los bárbaros no podía entender la ciudadanía ni reconstituirla entre hombres libres sino por medio del pacto feudal, y tanto los señores, esto es, los más poderosos é inmunes, como los que estaban exentos de servidumbre ó huían de ella, no se consideraban ligados al rey sino porque consentían la condición de súbditos (vasallos y pecheros según la categoría y clase) á cambio del beneficio recibido; porque beneficio era lo mismo el que así se llamó, el otorgado á los nobles, que la tierra que con mayores cargas personales y reales se concedía en la carta de población á los pecheros, ó por tácito consentimiento se confirmaba á las ciudades.

Lo que aquí se llamaba cartapuebla era realmente un convenio entre el *poblante* y los pobladores, en que estos, por el hecho de venir á poblar, consentían en la relación privada de censo enfiteútico (dominio útil, por canon ó pensión que se llamaba en general infurción ó pecho de diversas formas y nombres; fumazga, martimega, mañería, etc.), en la relación pública de otros servicios (justicia, fonsado) y en las condi-

la mera unión confederal y frases tan acerbas é injustificadas como las que hacen sinónimos gobierno antiregional y centralista y gobierno castellano. Dijeran los catalanes que hace mucho tiempo que están gobernados en francés y en liberal y no incurrirían en sinrazón con visos de *jingoismo*.

ciones jurídicas de la convivencia social y de la sumisión al señor (fueo). Este carácter de contrato era aún más marcado en el feudo propiamente dicho, por la mayor igualdad entre el rey y los señores; y de aquí las prestaciones menores y más suaves y una legislación nobiliaria en que aún se traducía una independencia no poco parecida á los primitivos y efimeros vínculos del *comitatus*.

Ahora bien, como el vínculo nacional, cuando se confundía con el local, lo mismo en el señorío que en el realengo, era una relación consentida entre hombres libres, (padres familiae como si dijéramos), aplícase después el mismo criterio del consentimiento, cuando se trataba, no de una localidad vecinal (pueblo), sino de una circunscripción más amplia, cuya autoridad convenía expresa ó tácitamente la agregación á un señor más poderoso de un Estado más fuerte, ó cuando varios estados se federaban á un tiempo, formando de todos ellos una nación y creando ó reconociendo una soberanía común. Pero de la misma manera que no es ahora rescindible la condición de ciudadano y súbdito por el hecho de haberse concretado y determinado en remotas edades de la única manera posible, por convenio, ni pueden los concejos separarse de la nación por la circunstancia de haberse constituido los más de ellos en virtud de otros tantos pactos entre el rey y los pobladores, tampoco pueden separarse las regiones unidas por incorporación paccionada, y no el pacto, por sí mismo, sino la personalidad que supone, es la que implica mayor autarquía y menos derechos intrínsecos ó tutelares de la nación y de sus poderes soberanos en las comarcas así anexionadas. Por esto, para las modificaciones ulteriores y mejoras de la legislación regional, lo mismo en la parte pública interna que en la de relación, no se hallan las regiones y el soberano en la condición igual de los contratantes civiles. Y creemos innecesario añadir que la legislación primitivamente pactada no es inmutable é intangible, ni la modificación de ella una novación de contrato en que de igual á igual han de intervenir las dos partes. ¿A quién se le ocurriría que no se puede cambiar la legislación

concejil en los pueblos de realengo ó de señorío, sino dejarla en los mismos términos del fuero primitivo, ó que, de cambiarla, ha de hacerse por mútuo acuerdo del rey y de los vecinos? (I).

En estos erróneos extremos han caído nuestros escritores forales, aunque les abone en parte el natural y disculpable sentimiento de radical oposición y reacción contra las teorías centralistas, inspiradas por el cesarismo romano, renacido en el absolutismo galicanista ó en el sistemático de la doctrina liberal. Contra el criterio de Llorente y demás escritores y estadistas de su escuela se pronunció la opinión diametralmente contraria de los regionalistas, no castellanos, desde Novia de Salcedo á Ramery, que, por modo más ó menos categórico y explícito ó contradictorio y ecléctico, dan, sin que-

(I) Aun en las relaciones privadas, el hecho de originarse por contrato alguna de ellas no significa que pueda disolverse por los modos generales de esta clase de obligaciones. Dígalo, sino, el matrimonio, que, en lo que tiene de natural y en cuanto á su forma, es un contrato, indisoluble por esencia, como *consortium omnis vite*, porque se propone no un solo fin, que se realiza y cumple en un acto y tiempo determinados, sino la totalidad de los fines de la vida y durante indefinido plazo, ó, lo que es lo mismo, por ser el origen y modo determinante de la existencia de una sociedad completa, la familia. Pues cosa análoga, y con mayor motivo, ha de decirse de la nación, en la cual, aunque entre por convenio una sociedad pública hasta entonces independiente, se obliga, sin embargo, al cumplimiento de los fines nacionales, que son también todos los de la vida, bien que en relaciones más complicadas, para mayor eficacia en la prosecución de los fines humanos, y en perdurable continuidad superior á la de la sociedad doméstica. Solo en el erróneo supuesto de que las naciones sean sociedades voluntarias, que se disuelvan por uno de los modos por que cesa la sociedad privada para los socios, los cuales pueden apartarse de ella cuando no se le haya fijado duración ó no resulte de la naturaleza del objeto (artículo 1705 del Código civil de Castilla); y, por consiguiente, en el no menor absurdo implícito de ser solo necesaria la familia, hallaría fundamento la teoría más ó menos radical de que la unión política pactada produce necesariamente condiciones y consecuencias de efímeras solidez y duración, y menos atribuciones soberanas, que cuando la nación se ha formado por expansión ó conquista.

rerlo, por lo que respecta á sus regiones en una teoría tan insostenible como extraña en autores tradicionalistas, porque implica no sólo una cosoberanía de la región en sus asuntos y en los de relación con la pátria nacional y con sus poderes, sino algo que, á poco que se estire, dá en el pacto sinalagmático. El soberano debe á todas las regiones los mismos oficios de justicia y de prudencia: respeto á la autarquía de que se muestren capaces estas sociedades públicas; reformas equitativas y cautas, como si dijéramos, mejora de los fueros con la consulta y participación, que sea posible, de las regiones; mayor cuenta, por imperfectos ó deficientes que sean, con el organismo, legislación y gobierno regionales de aquellas comarcas de más pronunciada personalidad de raza histórica, sobre todo, si fueron independientes de derecho ó de hecho, háyanse agregado por pacto ó por conquista, por persuasión ó por violencia justa, ó cuya ilegitimidad inicial haya prescrito. Pero de la misma manera que, por convicción regionalista, parte y exigencia de política cristiana y nacional, puede y debe ejercer el Estado, en lo que de él dependa y en lo que le incumba, una acción descentralizadora respecto de las regiones de menor autarquía, Castilla por ejemplo, así puede en las otras reivindicar los derechos intrínsecos de la nación y los esenciales del Poder, y aun ingerirse tutelarmente en provecho de esas comarcas y para el solidario interés nacional, cuando sea preciso. Para el caso tan indiferente es, en esencia, que procedan los fueros, no de *concesiones graciosas* sino de disposiciones justas del poder central, como que sean el producto de una elaboración indígena consuetudinaria que ya trajeron á la unión pactada. A lo que esto último obliga es á mirarlos con más veneración, aunque no sea más que por la antigüedad tradicional y lo que ella supone, y á reformarlos con más circumspecta parsimonia: nadamás. (1)

(1) En este respeto y cautela se ha distinguido siempre la Monarquía española para con las Provincias vascongadas y Navarra, no habiendo, por mucho que los robusque el exagerado foralismo, agravios y atentados que

Por supuesto, que, al hablar de pactos incorporativos de Guipúzcoa y Alava, damos por cierto, para reforzar el argumento contrario, que sean los convenios verdaderos contratos entre iguales é independientes al tiempo de la contratación,

denuncien preocupación y desafección contra aquellos fueros, sino cuando más, y concediendo todo lo posible, desaciertos y equivocaciones, hijas de un recto deseo de convertir la unión nacional meramente personal en la que podemos llamar real, (*federal-orgánica*.)

Los dos grandes cargos contra Castilla y su monarquía, ó mejor dicho, contra la patria común y su poder soberano, han sido el referente á las Aduanas en tiempo de Felipe V y el del *pase foral* en tiempo de Carlos III.

No me parece siquiera discutible que no sea exigencia nacional la unión aduanera y, por lo tanto, la uniformidad de organismo y régimen uno de los puntos de unidad y concentración intrínsecamente indispensables para la existencia de un mismo Estado, por ámplia que sea la federal descentralización. Así como no debe haber aduanas intranacionales, (ahora las ha resucitado la contribución de consumos), no es posible que la nación tenga desigual régimen económico y tributario en relación con el mercado extranjero, ni éste condición diferente en territorio alguno de fronteras para adentro. Aun entre naciones del todo independientes, y no ligadas siquiera por los vínculos de la alianza, existen conciertos aduaneros (*zollverein*), que son como el primer paso para acuerdos más ámplios é íntimos. ¿Cómo dentro de un mismo Estado puede haber barreras económicas que implican, en materia tan importante como la del comercio, una verdadera extranjería? En la disposición de Felipe V lo discutible será la oportunidad y la forma legal del precepto soberano, de ninguna manera su justicia. Por supuesto que el Rey, cediendo á las reclamaciones del país, revocó en 16 de Diciembre de 1722 la Real Orden de 31 de Agosto de 1717.

En cuanto al *uso ó pase foral*, sea cual fuere la consideración que se le deba como institución muy característica de las Provincias y de Navarra, y la exquisita prudencia con que en todo tiempo debió proceder el legislador respecto de este derecho, que han considerado esas regiones como una de sus más preciosas libertades y garantías, no dudo en afirmar que es insostenible, en buenos principios, por esencialmente contrario á los atributos de la soberanía, cualesquiera que sean la forma y el sujeto de ella, y lo mismo según el derecho racional é histórico que el liberal y revolucionario.

En efecto, hacer depender la fuerza obligatoria y la efectividad de un precepto soberano del acuerdo y placet de una magistratura inferior llámese Consejo, Diputación ó Junta, que esto es lo que significan *pase foral*, *concesión de uso y sobrecarta*, supone contradicción *in terminis*; porque es la

con escritura y todo, como la probablemente apócrifa, y que se debió inventar ya en el siglo XVII, entre Guipúzcoa y Don Alfonso VIII. Creo más bien tales *pactos* análogos á los de la carta puebla y el fuero, sin más diferencia que la ya

traslación nada menos que de la sanción y del gobierno desde el soberano al súbdito. Una cosa es que las instituciones tengan su motivo histórico y otra muy distinta que se le pueda asignar fundamento racional, y que, á título de las circunstancias préteritas, que introdajeron y en parte cohonestaron una costumbre ó ley, sean éstas intangibles é inocentes ó menos peligrosas siempre y en todo tiempo. El *pase foral* es institución de desconfianza y recelo hacia el Poder nuevamente aceptado, y retención de una parte muy interesante y eficaz de la independencia anterior. En Navarra ni siquiera fué esto, sino derecho otorgado en forma de ley, después de la incorporación á Castilla, y magnánima concesión de D. Felipe II á petición de las Cortes de Sangüesa de 1561. Al defecto, ó por mejor decir, á la esencial inconveniencia de la institución, suplían el espíritu de justicia y de armonía fundamental entre los poderes públicos en las sociedades y tiempos informados por el cristianismo y los hábitos de rectitud y prudencia en el gobernante y de obediencia y sumisión naturales en los inferiores y súbditos; pero, en el estado actual de insubordinación y anarquía, sería una peligrosa arma de injusta y revolucionaria resistencia á los poderes más nacionales y más legítimos. Más todavía: el regionalismo liberal que, si no es separatismo categórico y deliberado, á él conduce por indefectible proceso lógico é histórico, convertiría el pase en arma de disgregación y disolución de la nacionalidad española. Como más adelante veremos, no es tal institución consecuencia é instrumento ni de la debida *desobediencia*, ni de oposición pasiva ó activa á las graves y habituales injusticias del poder soberano, y, por lo tanto, nada tiene que ver con la autarquía racional de las regiones; antes, al contrario, es uno de esos defectos orgánicos, contrarrestados por la bondad general y por la justicia que informa el conjunto del organismo público, pero cuyo desuso debió procurarse, ya que tal vez fuera imprudente y violenta la repentina derogación, sobre todo si no se hacía con el concurso representativo de las regiones interesadas. Con tal criterio ha de juzgarse el acto de Carlos III, que en 1766 privó á Guipúzcoa del *pase foral* y que la restituyó por Real provisión de Diciembre de 1780; así como también la Real Orden de Septiembre de 1796 que se lo *suspendía*, cuando menos á Navarra, y que no llegó á aplicarse.

Hay que reconocer, sin embargo, que esta última estaba inspirada ya en malquerencia, no solo contra el pase, sino contra los fueros, y que no tan-

indicada, de referirse estos á mera localidad concejil y los otros á más extensa comarca que un alfoz, y más parecida en la amplitud territorial á los concejos llamados comunidades. Nótase tal caracter especialmente en la más realenga de las provincias vascongadas, Alava, cuya Cofradía convino con Don Alfonso XI la incorporación á la Corona en los términos más semejantes á los generales y frecuentes en que el rey y los señores en sus respectivas tierras pactaban las condiciones de la puebla y de la ley local. Alava, según el acuerdo de 1332 con el Monarca, tuvo dos fueros que podemos llamar generales: uno, porque lo era, el Fuero real, y otro, porque se aplica á toda la tierra, y, particularmente á los nobles, el Fuero de Soportilla; éste, como inmediata legislación regional, aquél, como supletorio en cierta manera y de relación *federal* con el poder soberano. Las relaciones de las clases sociales entre sí y de éstas con el rey, y las facultades jurisdiccionales de la Corona eran en el fondo las mismas que en Castilla, porque de las tres provincias, Alava tuvo más íntima conexión social y política que las otras dos, así con el Estado gótico, como con el Estado astórico-cantábrico, su continuador y heredero y el representante, sin solución de continui-

to, se dictó por reivindicación de esenciales derechos soberanos, para provecho de la nación y patria, sino por motivos de centralismo igualmente antiforal que opuesto á los verdaderos intereses del Estado. En este centralismo socialista, uniformador é invasor ya por sistema, está inspirada toda la legislación enemiga natural de los fueros que sucedió al titulado Convenio de Vergara, desde la ley de 25 de Octubre de 1839 hasta la de 21 de Julio de 1876, base y punto de partida de la inícuo é impolítica abolición total. Así han de juzgarse todas las disposiciones intermedias y posteriores, ora como despojos violentos consumados por el radicalismo progresista estrecho, idealista é ignaro, ora como forzosas concesiones insuficientes y vanas, de más apariencia que efectividad, arrancadas á la *prudencia gubernativa* de moderados y conservadores por conveniencia utilitaria ó miedo á la opinión y potencia de las nobles regiones atropelladas. No tuvo más justicia política, valor ni mérito el Real Decreto *reparador* de 8 de Febrero de 1844. Fueros y liberalismo de cualquiera matiz son esencialmente incompatibles y opuestos.

dad, de la nación española constituida por Recaredo, y de la cual fueron los otros Estados de la Reconquista desprendimientos producidos por las circunstancias, hasta que el mismo espíritu nacional, favorecido providencialmente por otras, reconstituyó al fin en tiempo de Felipe II la unidad perdida.

Y debe tenerse en cuenta que es, cuando menos, muy discutible que á las Provincias vascongadas asistiera título jurídico para mantener y perpetuar su independencia legítima, por sólo haberla disfrutado de hecho enfrente de la Monarquía gótica y del Reino astúrico-leones-castellano. Para resolver este punto, escabroso y difícil, sería preciso inquirir y decidir si toda comunidad extrafamiliar tiene razón y justicia para mantenerse independiente, resistiendo á la atracción poderosa y al derecho superior de una agrupación nacional más fuerte y culta, donde, con provecho de ésta y de la sociedad inferior y más imperfecta, pueden, sin perjuicio de su razonable autonomía, cumplir de modo más eficaz y completo los fines sociales (1).

(1) La Roma pagana no podía invocar sobre las tribus, razas y ciudades independientes título alguno de justa dominación, porque la cultura precristiana no era cultura que pudiera prestar y comunicar los principales bienes sociales, es decir, la prosperidad justa y verdadera. Circunstancias y razones muy distintas se presentaron cuando no solo el soberano, sino el Estado se hicieron católicos en la persona de Recaredo y pudieron los godos alegar el principio y fin capital de las sociedades, ser regidas según ley de Dios y de la justicia que de ella deriva. Desde entonces ya no se trata de la colisión entre una cultura material, falsa y aparente, y una libertad selvática, aunque más conforme con la naturaleza, no extraviada ni corrompida por una pseudocivilización, sino entre una independencia agreste, un estado social rudimentario é imperfectísimo y otro más adelantado y culto, el cual necesita y reclama para mayor progreso el concurso de fuerzas que, mientras disgregadas y perdidas, son estériles para la propia ventura y la agena. O la sociedad pública, y la nación por consiguiente, solo pueden constituirse por un solo título y modo, el consentimiento, doctrina que me parece errónea (véase el Capítulo VII, Libro y Tomo primeros) ó la monarquía gótica, ya católica y en las vías de justicia y adelantos muy superiores á las de las naciones contemporáneas de ella, tenía sobre los vascos los mismos títulos de soberanía que sobre las demás tribus y razas, ya de antiguo sometidos.

5. En varias ocasiones se ha hecho referencia al socialismo, que es atributo esencial del derecho nuevo, filiado en una filosofía anticristiana incompatible con la noción de la perso-

das y asimiladas á Roma, soberanía á que no renunciaron los reyes godos herederos de los césares romanos, aunque no pudieran hacer efectivo su imperio en la Vasconia y estuvieran con ella en frecuentes guerras ora defensivas, ora de conquista justa. En la misma situación y disposición siguieron los monarcas de Asturias, bien que las circunstancias hicieran todavía más difícil la reivindicación, cuando el poder central era aún más flaco y débil que antes de la invasión agarena, y de la rota unidad del Estado gótico y, bajo el imperio de las apremiantes leyes de la defensa, del desquite y de la repoblación, brotaba y resurgía la patria no solo en el núcleo, centro y representación de ella, en los restos del ejército nacional y en el caudillo, retoño de la naufragada realeza legítima, sino en otros puntos, extremos y comarcas que no eran miembros principales de la nación, por más que también los informara, animara y vivificara el alma de ella. Pero, si bien el reino vascón más inmediato tuvo también inflajo y aun dominio en estas provincias de su misma raza física, principalmente en Guipúzcoa, las relaciones nacionales más íntimas, aun antes de la dependencia efectiva, fueron con el Reino astúrico-leones-castellano, disponiendo la Providencia los sucesos de modo que, sobre las diferencias étnicas materiales, el mismo espíritu público acercase al corazón de la patria á esas regiones, antes de que definitivamente la Monarquía las estrechara en él. ¿Qué significan, sino, las pueblas y erección de ciudades y villas que consintieron los vascongados en su territorio á los reyes y señores castellanos, es decir, una población y legislación distintas y extrañas, y que eran otros tantos pasos para que penetrara en el país un elemento de dominación é influencia morales, precursoras y preparadoras, sin violencia ni precipitación inoportunas, de la única unidad nacional entonces posible? Los señores de Vizcaya, cuyos patronímicos castellanos denuncian claramente la naturaleza y procedencia, fueron, en su calidad de señores vizcaínos y de vasallos del rey de Castilla, lazo de anticipada unión entre señorío y reino, medio y conducto de frecuentes acuerdos para la política interior y exterior de los respectivos Estados y de recíproca intervención en los asuntos de ambos, especialmente, como era natural, del reino en el señorío, hasta que, siendo una misma persona señor y rey, Castilla y Vizcaya fueron hijas de la misma patria. La unión de las otras dos provincias, por más espontánea, particularmente la de Alava, arguyen aun más un tradicional espíritu de nacionalidad común.

Bien puede asegurarse que en el pensamiento de los reyes astures, leoneses y castellanos perduraron la idea de su soberanía sobre aquel territorio vascón que no se erigió en reino, y el propósito de reivindicarla cuan-

nalidad, y fundamento de una sociología y de una política en las que no hay más persona social que el Estado, aunque la naturaleza y la realidad, impongan aquí á escritores y trata-

do pudieran; y que con tal intento coincidió en las Provincias un concepto y sentimiento vagos é irreflexivos de su natural dependencia al primero y más fuerte Estado español, y de los cuales nacía y se alimentaba ese conato é impulso de gravitación, apenas reflexivo, hácia él. Tal atracción recíproca es lo que han desconocido, desde sus respectivos puntos de vista extremados y erróneos, así los mantenedores del centralismo, empezando por Llorente, hombre falto de las dotes de crítica y moralidad necesarias para la empresa que tomó á su cargo, como los foralistas que han mirado y resuelto la cuestión á través de un prejuicio poco ámplio y nacional, y tampoco con ánimo desapasionado y sereno, sino con un criterio extraño, mezcla de federalismo medioeval y de, sin duda no advertido, pactismo sinalagmático. Por eso, Llorente y sus continuadores y secuaces quieren forzar la historia; influidos por el cesarismo socialista romano, renacido en el absolutismo real, no entienden que hay más personalidad social y más fuero que los que el poder soberano magnánimamente otorga; esfuerzanse esos preocupados escritores en probar que la autonomía y la legislación vascongadas no tienen origen distinto del de las pueblas y cuadernos locales de Castilla y León, y que el que los concedió á las varias municipalidades y comarcas españolas puede restringir la concesión ó anularla, por aquello de *ejus est tollere, cujus est condere*. En reacción disculpable, aunque no justificable, los foralistas vascongados dan en la contraria exageración de que la santidad de un pacto (no sé como pueden probar su existencia respecto de Vizcaya) pacto intangible, mientras de común acuerdo y de igual á igual no sea novado por las partes contratantes, debe dejar la legislación pública de esas regiones y la relación con la nacionalidad española en el mismo estado que en remotos tiempos, es decir, que en los siglos XI, XIV y XV. Pues ya hemos dicho que ni la autarquía y la legislación propias proceden única ni principalmente de ordenamientos reales, sino de raíz más honda y de más fundamental y sagrado título; ni, aun suponiendo la unión por riguroso convenio entre partes independientes de hecho y de derecho al tiempo del contrato, puede este regirse, en cuanto á sus consecuencias y duración, por los mismos principios y reglas de la contratación privada como si la sociedad nacional fuera una sociedad civil ó mercantil. Por esto el farragoso alegato histórico-crítico de Llorente, aunque no tuviera tergiversaciones, mutilaciones y adulteraciones, por todo extremo vituperables, y fuese rigurosamente exacto, es tan inconducente al propósito como las contestaciones y réplicas de cerrado foralismo, que, bien que de buena fe, y sin desfigurar y alterar los monumentos, se obstina en darles una significación y alcance que no tienen.

distas las inevitables contradicciones eclécticas. En distintos pasajes de este y del siguiente libro se ha de insistir sobre el error y el vicio dominantes y acaso más característicos de la concepción jurídica nueva y contemporánea, estudiándolos total y sistemáticamente en el lugar más oportuno según riguroso método. Allí aparecerá de un modo aun más evidente, y como uno de los más interesantes corolarios, la incompatibilidad entre regionalismo y liberalismo de cualquier grado y matiz, y se presentará como lógicamente indiscutible dentro del sistema la política injustamente centralista con que, por procedimiento radicalmente revolucionario, ó con cautela moderada y conservadora, fueron despojadas de su autonomía regional y fueros Navarra y las Provincias vascongadas.

Ya la Constitución de 1812, informada en el liberalismo abstracto, individualista y atómico del pacto social, liberalismo más inmediata y prácticamente socialista, que el que llaman liberalismo orgánico, elevó á sistema el centralismo informador y dió en teoría el golpe de gracia al regionalismo, en gran parte respetado y conservado por el antiguo régimen; de modo que, á partir del nuevo código político, tenía que ser precaria la autarquía regional, como especulativamente contraria no sólo á la letra, sino al espíritu y carácter de aquél y al molde en que se vaciaba el nuevo organismo público. La destrucción del régimen foral era ya sólo cuestión de oportunidad, es decir, de tiempo; y no se comprende que personas un tanto sinceras y medianamente versadas en filosofía y en política hablen de la tradición descentralizadora y regionalista de los legisladores de Cádiz. Lejos de eso, en la organización de los tres poderes, ciego estará el que no distinga claramente el centralismo entendido y practicado según el modelo jacobino francés, como si dijéramos, el liberalismo radical atomista á que estaban más expuestos y propicios los países de tradición más absolutista cesarea, Francia, especialmente (1).

(1) El artículo 10 expresa la composición regional del territorio español, enumerando los Estados de que se formó la España continental y la

6. No siempre, y sin excepción, la diferencia entre el habla regional y el idioma, que más ó menos extendido, haya alcanzado la categoría de lengua política, es decir, nacional y federativa, arguye que sean profundas y potentes ora la personalidad actual de las regiones, ora el movimiento y acción reivindicadores de la autarquía perdida, porque puede muy bien suceder, como ya indiqué en las páginas 94 y 95 del tomo primero, que apenas quede más que el recuerdo de la autonomía deshecha, y que por el progreso del centralismo, ó por la postración y atonía sociales, generalmente por ambas

ultramarina; aunque sin nombrar la palabra región ni hacer referencia alguna á su autarquía; y en el artículo siguiente amenaza á esta distribución orgánica é histórica del territorio «con una división más conveniente del territorio español, por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan». Todo el título VI «Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos» así en su Capítulo I: «De los Ayuntamientos» como en el II: «Del gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales» manifiesta que el Estado omnipotente crea una nueva organización municipal y provincial á su antojo y según su pensamiento idealista y apriorístico, sin tener más cuenta de la realidad presente al hacer la ley constitucional, que de las circunstancias futuras cuando se le antoje modificarla ó abrogarla. Aquí la descentralización consiste en conceder más ó menos facultades, en encargar mayores ó menores atribuciones á esos organismos, de los cuales se ha conservado el que no puede menos de existir, el concejo, y el que, por ser histórica y hoy sistemáticamente burocrático, hace y deshace el legislador cuando le place, la provincia. La región, que tan racional fundamento tiene en la naturaleza y tal arraigo en la historia ha desaparecido. Y no digamos nada del régimen representativo y judicial, inspirado el primero, como se verá, en los principios de la representación individualista, y el segundo en la idea de que no hay más sujeto ni fuente de jurisdicción que el Estado.

Nada tiene, pues, de particular, no ya que las Cortes de Cádiz impusieran el juramento de la Constitución, sino que, desde el año 1820 á 1823, sufriera el régimen foral eclipse completo. La Junta de Vizcaya, que en 1812 encontró cierta *uniformidad*, y en 1820 puntos de *concordia* entre la constitución y los fueros, estaba tan enterada como los que recientemente en el Ateneo han encomiado, por lo visto, la tradición *regionalista* de la legislación y código gaditanos y como los liberales *foralistas* de Vasconia y de Cataluña. (Esto se escribe en 31 de Marzo de 1900.)

causas, no reste sino lo que el habla supone siempre, una raza histórica presente ó pretérita que fué, si ya no es, tan acentuada como indica la diferencia entre la lengua regional y la oficial. De aquí que al regionalismo que sea puramente lingüístico y literario, pero nada más, no hay para qué tomarlo en cuenta como término de división especulativa ó histórica, sino, á lo sumo, como hecho que puede ser ocasión y punto de partida de movimiento restaurador regionalista y motivo de que una política justa y cauta no sólo en él respete un resto venerable de raza y de *self-government*, sino que permita ajustarse á él los actos que no tengan relación con un interés verdaderamente político. Esta sería una manera hábil y eficaz de promover la reivindicación regional en lo que del poder central depende (1).

(1) De tal especie es en mi sentir el regionalismo gallego, valenciano y balear; porque el movimiento regionalista que hoy se nota en esas comarcas, y en alguna de ellas con recientes manifestaciones harto sensibles, es creación artificial y de circunstancias más bien que continuación de un espíritu y carácter incesantes de raza histórica, ó el renacimiento de un anhelo é impulso de legítima autonomía, nunca renunciada y con raíz perenne en la conciencia y en el corazón de esas regiones. Justo y razonable es que en ellas surja un principio de restauración autárquica á la cual tienen el mismo derecho que las otras circunscripciones nacionales; pero no pueden fundarlo en el título de una tradición constante y sin solución de continuidad, ó sólo con ligeras interrupciones y paréntesis de cercana fecha. El regionalismo de ahora, en lo que no sea artificio y ruido, no tiene más origen é inspiración que los señalados en las páginas 59 y 60, y es en vano tratar de asignarle un abolengo histórico que no justifican los hechos, porque hace largo tiempo que esas regiones dejaron de ser Estados, y desde lejana fecha su autonomía no pasa de recuerdo histórico, en las Baleares y en Valencia por las causas expuestas en las páginas 54 y 55; en Galicia, comarca de análogos elementos étnicos físicos á los del resto de España, porque su descentralización y semiindependencia fueron puramente feudales, y el título efímero de reino en alguna que otra rara ocasión se redujo á una de tantas manifestaciones de la *patrimonialidad* de la monarquía y del afecto de familia, los cuales no tuvieron afortunadamente las consecuencias que en Portugal.

La prueba de ello está en que al regionalismo gallego no se le busca

Se deduce también de lo expuesto en este número y capítulo, así como de la doctrina del Libro IV del tomo primero, que tiene con ésta íntima conexión, que la diferencia lingüística de

generalmente una filiación menos remota de raza histórica en lo que podíamos llamar el *suevismo*, es decir, en el Estado que mantuvieron independiente dos siglos los suevos, sino un precedente casi vecino de los tiempos prehistóricos, en el *celtismo*; esto es, en el supuesto carácter profundo é indeleble que dejaron los celtas en el ser y en la vida de la raza gallega y, por consiguiente, en las costumbres y en las *leyes*, en la *ciencia*, y en la literatura, en la música y no sé si en las demás bellas artes. Todo se lo imaginan celtismo inmanente, consubstancial y hoy redivivo; hasta la nostalgia de la tierra y el romanticismo sentimental y aun muelle de la literatura gallega, que á mí se me antoja más bien creación convencional de vates que copia de la realidad popular.

Dicho sea con el mayor respeto á cualquiera opinión, no reñida con el dogma y la moral católicos, y al culto de todo lo tradicional, aunque me parezca fantástico, no encuentro fundamento serio al celtismo ni al regionalismo que, saltando por cima de siglos y sucesos, intente filiarse en él. Porque, si los suevos no dejaron en la raza y constitución gallegas huella apreciable, menos la habrán dejado los celtas moral ni materialmente, como raza física ni como raza histórica: bárbaros por bárbaros, aún más serán estos que aquéllos que al fin conocieron y recibieron la verdadera religión y pudieron, por menos lejanos de la época actual, legarla algún elemento de vida. Lejos de eso, unos y otros son de esas razas que hemos llamado de *historia pretérita*, porque nada ha transmitido, á la *presente*, ni mantenido y perpetuado en ella, al menos que se sepa y pueda discernirse. Cuanto más primitivos son los pueblos más se parecen á los niños, menos personalidad tienen y menos pueden grabarla con permanencia en institución alguna, en costumbres ni en leyes; no quedan de ellos más que las conexiones de una generación parcial remotísima, factor físico, ó casi desvanecido con el tiempo, ó que, si algo conserva, no puede apreciarse en sí y mucho menos en su extrínseca, sutil y evaporada relación moral y social. Acaso cuando la química sociológica jurídica del positivismo haya llegado á culminantes etapas de la evolución, pueda en el laboratorio precipitarse lo que haya de celta en cada gallego, y nos pongamos en camino de resolver el problema por generalización inductiva.

Esto en el supuesto de que la de *celtas* no sea una denominación de razas por el respecto geográfico, ó lo que es lo mismo, por cosa tan accidental y agena al concepto de raza como el de la habitación primitiva, averiguada en tiempos ya históricos ó conjeturada en los anteriores, ó el de las comarcas que fueron las principales etapas y jornadas de la inmigración

mero dialecto arguye generalmente menos distinción de raza histórica y de personalidad regional que la de idioma; pero que no puede siempre aplicarse el criterio de este dato meramente filológico como medida infalible y regla sin excepción en todo caso y tiempo; porque la personalidad étnico histórica y el regionalismo actual ó reivindicador correspondiente á ella proceden de varios hechos y causas independientes del grado de distinción de las hablas, pudiendo resultar que regiones, cuyos idiomas tienen lejanísimo parentesco ó acaso ninguno descubierto con la lengua oficial, hayan perdido del todo personalidad y autonomía y hasta el anhelo de recuperarlas; y, por el contrario, que los conserven indelebles otras comarcas, cuyo romance sea parecidísimo al político ó común, hállese más ó menos extendido y vulgarizado por la nación.

Esta conclusión es agena á las opiniones filológicas acerca de la distinción entre lengua y dialecto, con todas las cuales puede conciliarse, no importándole al tratadista de derecho público, al estudiar la cuestión presente, otra diferencia que la puramente práctica de que dialecto implica más parecido al idioma nacional, y lengua menos semejanza. Así á nadie se le ocurrirá llamar dialecto al vasco, por el solo hecho no filoló-

de amplias agrupaciones de varias razas á los centros donde se desenvolvía como en teatro principal la historia del género humano, y donde las encuentra y señala ya con certeza el historiador. En tal caso, aun teniendo estos pueblos una conexión étnica más estrecha que la de blancos, negros ó amarillos, apenas dentro de subdivisiones, amplísimas todavía, se les podrá asignar bien ni siquiera el carácter material del tipo físico, cuanto más el de la personalidad de raza histórica, que ahora resurge tan maravillosamente, y que no sería de *celtas*, sino de alguna agrupación más restringida, concreta y nacional, sea y llámese como se quiera. Podrá acaso invocarse el *galaicismo*; pero el celtismo ¿cómo ni porqué más que en la mayor parte de las comarcas españolas? De todos modos si hay quien acierte á explicar *célticamente* las propiedades de la lírica y música gallegas, con dificultad se podrá fundamentar en la misma base el regionalismo de Galicia. ¡Que empeño de buscar en bárbaros orígenes y en títulos prescritos mil años há lo que tiene más alto y noble abolengo y un título imprescriptible!

gico de ser Vasconia región y no nación; ni al portugués se le discernirá, si la tiene, su condición de lengua sólo por la circunstancia de hablarla un pueblo independiente; ni en la controversia de si el gallego procede ó nó del castellano, se mezclará para nada la creencia, que nos parece casi cierta, de no haber regionalismo de raíz étnica y de continuidad tradicional en Galicia; ni al catalán se le negará entre los romances igual categoría que al castellano y al francés.³ Para nosotros, sin que nos importe señalar el linde que separa al dialecto de la lengua, (ni creo que sea esto cosa tan fácil aun á la más consumada filología), el gallego será dialecto del castellano, como habla española más parecida á él; y esta semejanza arguye en el presente caso la regla general de no ser ni haber sido raza histórica la gallega, de igual manera que el parecido del portugués significa que no lo fué tampoco la portuguesa, aunque hoy goce Portugal independencia en daño suyo y nuestro. En el caso presente de derecho público y político basta llamar dialecto á las lenguas más semejantes á la oficial y lenguas á las que tiene menos similitud filológica y gramatical con el idioma federativo (1).

(1) Después de todo no discrepa mucho tal noción vulgar y práctica de las opiniones eruditas y técnicas acerca del punto; porque, según la más generalizada de éstas, el dialecto es una *diferenciación* de una lengua más perfecta y hecha, diferenciación que se llama dialecto mientras está en estado y períodos evolutivos, cuyos caracteres son a) la menor lejanía de la lengua en cuya unidad surge ese principio y movimiento diferenciales b) su atraso, ó al menos su incompleto desarrollo gramatical y literario, é interin no llega á esa etapa que es, sino de alto definitivo, de larga permanencia *substancial*. Pero ¿quién es capaz de decir donde concluye el dialecto y empieza la lengua? ¿cuando los romances dejaron de ser latín, para ser castellanos, francés, rumano ó catalán? ¿ni qué importa para buscar en las semejanzas lingüísticas ó dialectales la identidad ó cercanía de raza, el que las lenguas sean hermanas ó madre é hija? Procedan del castellano el gallego y el portugués, ó hayan nacido las tres del latín, ¿dejarán de ser los romances de mayor parecido de familia y de arguir su menor *diferenciación* actual menor diferencia de elementos étnicos, así físicos como históricos, hasta tiempos relativamente avanzados de la vida?

Cuando las hablas regionales sólo sirven para el uso de la clases inferiores, aunque no hayan perdido por esto inmediatamente é *ipso facto* su importancia y jerarquía lingüísticas, no tardarán en corromperse; y lo que es peor, este hecho denuncia el último grado de decaimiento y postración del espíritu regional, que tiene que ser patrimonio y sagrado depósito de todas las clases, y no sólo de la plebe, incapaz por sí sola de mantener la personalidad y autonomía regionales. Porque una cosa es que un habla no haya llegado todavía al grado y etapa de cultivo técnico y literario, aunque sea vehículo de comunicación social entre las clases constitutivas del pueblo, y otra muy distinta que los más elevados órdenes

Sin competencia para discurrir por mí mismo y de propia ciencia experimental, doy por buena en los párrafos anteriores la opinión de Grimm que coincide, si no me equivoco, con la de Max Müller, no pareciéndome dato y signos bastante expresivos de distinción el ser el dialecto habla de conversación puramente y no de gramática, diccionario y literatura; porque ésto habrán sido acaso, no solo en un principio, sino acaso más tiempo del debido, hablas dignas ya de trabajos gramaticales y de manifestaciones literarias eruditas, quiero decir, retóricas y que han tardado, no por su culpa, en conquistar el acceso á las clases y funciones superiores de la sociedad. Y bien puede también suceder que desde esas alturas hayan caído en manos y uso de lo que llaman vulgo, es decir de la plebe, por desafecto, olvido é incuria de las altas clases, por pérdida del concepto y afecto regionales que las deja relegadas injustamente á esos fondos donde más perduran las tradiciones buenas ó malas, y en los cuales al fin se alteran y corrompen por falta de un cuidado y cultivo amplia y verdaderamente populares. En tal último supuesto sería dialecto la lengua que descende y por el solo hecho de descender á las capas sociales en que perderá pronto su caracter, pureza y perfecciones.

Y no abona semejante opinión la etimología de la palabra (dialecto viene de *διαλεγομαι*, conversar) porque ni la significación actual de las voces es la de su rigurosa etimología, sin altaración alguna, ni porqué se mantenga en el sentido presente la acepción capital, genérica y predominante de origen, como suele acontecer, excluye estas otras ampliadas y trasladadas, en el presente caso, la de *conversación* literaria *culta* y oficial). Antes remontándonos más en la semiótica de la palabra hasta su descomposición en el verbo primitivo y su prefijo *δια*, (dis latino), dialecto expresa diferenciación, habla distinta que empieza en otra.

sociales dejen de emplearla en todas las relaciones privadas y públicas del humano comercio. Esto último significa que las clases directoras se han dejado avasallar por el centralismo, si es que no lo profesan en teoría, ó, cuando menos, que indiferentes á la idea y tradición regionalistas, nada hacen por conservarlas y aun ordenadamente promoverlas, dando ocasión y tentación, no sólo á que el poder central más se ingiera por deber en el gobierno tutelar de la región, sino acaso á que se arrogue más atribuciones de las esenciales ó circunstancialmente precisas. La libertad regional como los demás intereses morales y materiales no pueden quedar confiados á la custodia, celo y dirección de la clase plebeya ni exclusiva ni principalmente.

En cambio, cuando las cuestiones acerca del lenguaje regional, sea lengua ó dialecto, trascienden del orden literario y de la conversación popular, y á todas las clases preocupa igualmente la difusión, estimación é imperio del habla en las relaciones públicas y oficiales, mirando como ofensa de región y raza cualquiera restricción injusta, ó que lo parezca ó se finja y simule, del habla propia, entonces expresa tal hecho que lengua y personalidad de raza histórica están unidas tan íntimamente que se consideran un mismo asunto de vital interés. Es en tal caso el amor al habla la medida exacta del regionalismo que se conserva ó quiere restaurarse; las controversias sobre lenguaje son manifestación y síntesis de un problema más amplio y complicado de derecho público, y las dificultades de arreglo y concordia entre las hablas nacionales señalan otras más hondas y graves de conciliación entre la unidad nacional y el personalismo de las grandes regiones componentes de un Estado, en que es poco sólido y está seriamente comprometido el espíritu y sentimiento de la pátria común. Tal sucede en Austria-Hungria, donde la cuestión de lenguas es la de nacionalidades, tan antigua como ellas, y cada vez más envenenada, de una parte por el regionalismo liberal y revolucionario, de otra por el centralismo del mismo carácter y origen y de ambas por un *jingoismo* intransigente y vio-

lento que constituye uno de los fenómenos, y complicaciones del parlamentarismo austriaco (1).

No concluiremos esta materia sin añadir algunas observaciones, que son corolarios importantes del conjunto de la doctrina, y que no pueden adscribirse rigurosamente á ninguno de los números del capítulo.

Empezaremos por manifestar que no encontramos fundamento á la distinción entre regionalismo político y jurídico, que no deja de estar en boga, que ha sonado en una conferencia reciente del Ateneo, y á la cual falta sin embargo el requisito lógico de la exclusión de los términos; puesto que todo regionalismo debe de ser jurídico, y el que llaman político es una esfera, manifestación y parte de aquél. Lo que supongo que ha querido expresarse con la denominación de regionalismo jurídico es la situación de aquellas regiones que conservan su derecho privado, como único resto de la destruida personalidad, el regionalismo que limita sus aspiraciones á mantener la legislación civil ó á restaurarla en todo en parte, si en todo ó en parte se hubiere perdido. Los que así se expresan llaman, en cambio, político al regionalismo que se propone el mantenimiento ó reivindicación del organismo y de-

(1) Hartas más diferencias que entre la lengua eslava y la alemana hay entre los correspondientes pueblos que ventilan en este punto capital todo el pleito de su personalidad dentro del Estado común. De diez años á esta parte ha sido la preocupación dominante de los políticos y de los gobiernos en aquel Imperio, y ha gastado una porción de ministerios, haciendo su vida azarosa, desasosegada y breve desde la caída del Conde de Taaffe. El actual gabinete, presidido por Kærber, parece en vías de una solución que consiste en dar carácter oficial á la lengua preponderante en la comarca; pero, como los eslavos y alemanes no solo residen en sus respectivas regiones, sino que están esparcidos por todas las de la Monarquía, el criterio no puede ser meramente territorial, y ha de tomarse en cuenta la población germana ó esclavona de cada territorio. (Esto se escribe en 4 de Abril de 1900.)

recho, así privados como públicos, estos principalmente, ó lo que es lo mismo, al regionalismo íntegro y total, ó sólo al público que denominan político por la confusión tan errónea y trascendental de la parte con el todo. Por lo cual no se necesita añadir, para rectificar tal confusión, que el regionalismo, en su parte substantiva y de fondo, es asunto privado y público á la vez, y político solamente en su fase de relación con la unidad nacional y con algunas, no todas, las atribuciones del poder soberano.

Es corolario, no menos importante, el de las relaciones entre regionalismo y descentralización, que son de distinción de parte á todo, puesto que regionalismo implica la descentralización regional, ó sea una clase y esfera de la descentralización *in genere*. Siendo descentralización reconocimiento y atribución á la sociedad, sea cual fuere su naturaleza y jerarquía, de las facultades inherentes á su estado jurídico y á su situación histórica, y regionalismo el sistema de la personalidad jurídica de las regiones, regionalismo y descentralización regional se convierten *simpliciter*, siendo comunes los principios, los problemas y las soluciones, así como la cuestión de *tésis* ó ideal, y de *hipótesis*, ó sea de conducta prudente según las circunstancias históricas. En el capítulo concerniente á la centralización aún se confirmará más, si es que lo necesita, la doctrina.

No es tampoco término de distinción especulativa ó teórica el de regionalismo nacionalista, porque no es otra cosa que el grado extremo ó máximo de regionalismo ó descentralización, procedente de una personalidad pública tan acentuada y profunda, de una conciencia y sentimientos tan arraigados de raza histórica, que ha determinado y producido la conservación de la mayor autonomía posible dentro de la unidad nacional, dejándola con frecuencia menos sólida y asegurada de lo que conviene al legítimo interés de la patria. Esto sucede generalmente cuando, no solo fueron plenamente autárquicas las regiones, sino que constituyeron Estados perfectos, por ejemplo, los Estados alemanes del actual Imperio,

Hungría respecto de Austria. Y aun menos que este regionalismo federal quieren restaurar algunas regiones, reduciendo la unión á un vínculo puramente confederativo, ó cuando más á la mera unión personal en una soberanía común, con lo cual retroceden á la forma más rudimentaria ó imperfecta, á la etapa más primitiva de la constitución de los grandes grupos nacionales (1).

Finalmente, tratándose de regionalismo, como de cualquiera otro asunto, hay que distinguir con sumo cuidado entre la tésis racional y la hipótesis histórica; y aunque al profesor no le incumbe generalmente otra función que la de señalar en términos comunes y abstractos tal distinción y recomendar la exquisita y recta prudencia de toda práctica jurídica y singularmente en la obra de la legislación, hay, sin embargo, muchas veces necesidad de bajar la mano en la cátedra á referencias concretas de cautela y arte legislativos, así en derecho público como privado. Porque ya se sabe que la práctica es en ciertas proporciones parte de la misma teoría y de la docencia universitaria, que tampoco puede perder de vista la formación del hombre, de derecho y por lo tanto del políti-

(1) Esto acaso pretende cierto catalanismo extremado, un regionalismo sospechoso y fanático, de anacronico retroceso; sin que para tal pretensión pueda alegar Cataluña más títulos, sino muchos menos que Navarra, comarca rectamente regionalista, y que el no menos glorioso reino aragonés, donde también sobre la idea y afecto regionales descuellan y predominan los de patria.

En cambio Bohemia, disfruta en el Imperio austriaco menos autonomía de la que le corresponde, y esta condición es tanto más injusta é irritante cuanto que contrasta con la posición que goza Hungría en la federación austro-húngara, en cuya política interior y exterior ejerce un influjo muy marcado y nocivo. No menores derechos que Bohemia tienen las fracciones de la desgarrada é infeliz Polonia en los Imperios que se la repartieron, bien que esta misma circunstancia de no pertenecer toda ella á un mismo Estado, la prive de la fuerza necesaria de cuerpo nacional íntegro y compacto, para reivindicar dentro de una sola nación la plenitud de la autonomía á falta de la perdida independencia.

co honrado, docto y circunspecto, del ciudadano ilustrado y apto para el cumplimiento de sus oficios patrióticos, de sus deberes nacionales. Y esta cuestión regionalista afecta de tal modo al presente y al porvenir de la patria española, con tal instancia y apremio pide orientación teórica y solución urgente, que no es posible negarla las sucintas consideraciones que siguen.

Sobre los fueros regionales de España, violentamente destruidos contra razón, justicia y conveniencia, ha pasado la misma revolución liberal, que no ha procedido con ellos de distinta manera que con lo que restaba de toda la constitución española al advenimiento del derecho nuevo. Aunque la abolición del organismo y el derechos públicos de las regiones vascas es de fecha contemporánea y aun reciente, mas aunque el tiempo, las circunstancias anteriores á los atentados antifuerales, las concomitantes con ellos y las que hubieron de seguirse harían tan difícil la absoluta y plena restauración foral, como la de la constitución tradicional de la nación, definitivamente destruida por las Cortes de Cádiz y su código político. Más que la distancia de los años nos separa de esas organizaciones venerandas la entidad, magnitud y trascendencia de los sucesos.

Aunque se dijera, y aun se creyese, amiga de los fueros, ha habido en las Provincias, como en el resto de España, una minoría novadora, activa, intringante, bulliciosa y turbulenta que, siendo partidaria más ó menos reflexiva del liberalismo y la Revolución, los prepararon é introdujeron en Vasconia, lo mismo que en toda la Península, minando así los cimientos del edificio foral. También algunos *ilustrados* creerían de buena fe que la Constitución de 1812 era la mejora y selección más aquilatadas, la síntesis más perfecta del antiguo derecho público de los Estados españoles, un extracto de su organismo social y político, un condensado ordenamiento, vivificado por el espíritu nacional, y no un desdichado código apriorista liberal y revolucionario, de factura francesa é imitación y corte jacobinos. Pues desde entonces los liberales *foralistas* han

crecido de tal modo en número, influjo y dominación, que no sería prudente restaurar en la integridad de su letra y contenido unas constituciones regionales de forma y contextura cristianamente democráticas, sin que, ingerido en ellas el elemento liberal, las convirtiera en arma de revolución y de separatismo. No sucedería cosa distinta con el sistema representativo de las Provincias y Navarra que con el de los demás Estados ibéricos, aun siendo tradicional, é inspirado en el Cristianismo. Es que el sentido católico, y, el sentido ético y jurídico con él, han descendido y menguado, y, en el ambiente naturalista y positivista de la moderna sociedad, no tienen aire respirable, garantía y sólida defensa las libertades cristianas, y hay que restaurarlas con muchas precauciones, por falta de sujeto digno y apto, no con menos parsimonia que con la que restituye la alimentación conveniente á enfermo crónico, víctima de sus vicios.

Además, del estado social que animaba y sustentaba esas instituciones, nada queda; ha pasado sobre él la piqueta de la revolución, deshaciendo en meauado polvo los organismos que eran origen, fundamento y sustentáculo de toda la fábrica foral. De la misma manera que en España no sería posible el inmediato planteamiento de la representación de clases y gremios, porque no los hay, y no se improvisa la obra lenta y trabajosa de los siglos, tampoco sobre el mismo individualismo atomístico puede restaurarse la secular construcción foral orgánica. Se minaron los cimientos, se demolió la fábrica, se esparcieron los materiales ¿puede rehacer y juntar todo esto un decreto de la *Gaceta*?

Pero no sólo faltan el alma y los miembros, que habrían de juntarse en cuerpo vivo por acción taumatúrgica de que no goza el restaurador y legislador más poderoso; es que los Fueros, admirables por su espíritu y por la solidez y aun armonía y gallardía del conjunto, dejaban mucho que desear, analíticamente considerados, en sus particulares elementos componentes, en muchas de sus instituciones tan respetables como defectuosas; y aun más imperfectos eran en lo que res-

pecta á la parte política, es decir, de relación con la unidad nacional. Y si con las deficiencias de la constitución regional interna podía transigirse, por ser negocio que más á Vasconia importa é incumbe, no podía mantenerse el organismo nacional común con un tan flojo y quebradizo vínculo como el solo y exclusivo de la persona de un común soberano. Llegó la edad contemporánea y estalló aquí la Revolución, sin que en punto tan interesante de la constitución española, como en otros muchos, se hubieran introducido reformas y mejoras no poco ámplias y profundas, bien que inspiradas en los principios y la índole del derecho nacional; y sin que se hubiera hecho nada por poner en equilibrio, en armonía y en el jerárquico lugar correspondiente el regionalismo y el patriotismo, los fueros de las regiones y los derechos de la nacionalidad común. Si en lugar de los conatos de uniformismo centralista y cesareo que siguieron á la paz de Basilea, hubiérase consagrado la Monarquía á recabar, con buena voluntad y de acuerdo con los antiguos Estados ibéricos, el indispensable organismo federativo común y el cumplimiento de los deberes que tienen hoy para con Alemania las naciones y Estados del Imperio federal, no hubiera tocado bien pronto la antigua realza las consecuencias de un estrecho regionalismo, sin más bandera que la de «Religión y Fueros», omitido en el lema el término segundo de «Patria» que dejó monopolizar á la Revolución, y acaso no experimentáramos hoy el dolor, la incertidumbre y la angustia de los foralismos desaforados que amenazan á la obra nacional, dejada sólo en cimientos y en comienzo por los Reyes católicos y por Felipe II.

De aún más larga fecha procede el desordenado espíritu regionalista, que no existía cuando las regiones eran Estados más ó menos independientes, y para ellas región y nación una misma cosa; pero que se acentuó á medida, que, redondeándose y consolidándose la nación y haciéndose más poderoso el Estado central, miráronle con recelo aquellas, que no comprendían ni sentían aun muy reflexivamente el afecto de patria, y temieron del poder común agravios y contrafueros que

no sabían diferenciar de la acción soberana legítima en las circunscripciones regionales (1).

(1) Bien puede, por esto, decirse que la región es coetanea de la nación y que el nacimiento de ésta determinó, por contraste, el sentimiento regionalista. En efecto, es inútil buscar antes el precedente histórico de la región, bien caracterizada y señalada, porque no remonta más allá de los comienzos de la Edad moderna. Refiriéndonos á España, porque más nos interesa y es en ella más perceptible y notorio el hecho, á nadie le ocurrirá señalarlo en los tiempos históricos anteriores á la invasión y dominación romanas. Entonces las regiones eran meramente circunscripciones geográficas que los escritores romanos demarcaron y denominaron con el criterio de ser aquéllas el asiento de razas indígenas sin más conexiones que las étnico físicas, no las de comunidad moral é histórica más amplia que la de tribu y pueblo, ó de alianzas deleznales (no confederaciones) desvanecidas en cuanto de la corta vista de tan rudas gentes desaparecía el inmediato y únicamente perceptible peligro común: gracias que en aquellos tiempos y estado de incultura se extendiese la sociabilidad más allá de la *gens*. Después de asentada y afirmada la dominación de Roma, la región se confundió con la provincia, es decir, las provincias son principalmente círculos burocráticos de extensión y amplitud regionales, y durante el periodo y reino góticos se conserva, bien que borrosa y alterada, la provincia romana por no haber todavía en el pueblo espontaneidad é impulso autárquicos bastantes para que surja naturalmente el superior grado de sociedad regional.

Desde la Reconquista empieza á manifestarse el fenómeno contrario: cae la provincia romana, deshecha como todas las piezas de la maquinaria pública romano-gótica, y la comunidad moral inmediatamente superior al concejo se destaca en forma de Región-Estado. Lo que en otras naciones menos románicas empieza á determinarse desde la invasión de los bárbaros, se retrasa aquí hasta que la irrupción agarena nos coloca en circunstancias análogas: conexiones territoriales y de raza física ocasionan y promueven las relaciones y vínculos de raza histórica, y de la independencia primitiva de unos Estados, núcleos coetaneos, con Asturias, de reconquista y repoblación, ó de la independencia que otros consiguen después por ruptura efectiva del vínculo de feudal vasallaje surge el Estado regional con absoluta ó casi absoluta personalidad pública. He aquí porqué no hay región donde región, nación y patria son una misma cosa, ni regionalismo donde es éste la forma y expresión del sentimiento pátrio. Solo cuando en la persona del soberano común empieza á marcarse confusamente la distinción de dos sociedades, la parte y el todo, es cuando apunta débilmente la idea de nación, fomentada por la fuerza y amplitud que tiene en la Edad media el espíritu cristiano de sociabilidad, pero esa idea y afectos están conteni-

Pero cuando un mismo violento é injustísimo atentado ha concluído con la constitución regional y con la nacional; cuando solo es razonable, equitativo y prudente pensar en el restablecimiento de la tradición y el derecho españoles en su espíritu, fundamento y esencia, no en su letra y conjunto íntegros; cuando aquí la restauración nacional no puede consistir en otra cosa que en la buena intención y en el propósito decidido de rehacer lo que se pueda y cuando se pueda, siendo verdad de simple buen sentido que el siglo XIX no es ninguno de los anteriores, y que la hipótesis del XX vá á ser mucho más compleja, difícil, embarazosa y tirana, que todas las de la historia anterior, porque proceden, más que de naturales y corrientes imperfecciones, de abominables extravíos y de tremendas desgracias, ¿no há de aprovecharse la misma magnitud de las catástrofes y desventuras, para iniciar la restauración foral con idéntico criterio de justicia y prudencia, empezando por la del ansiado y no conseguido equilibrio de los dos grandes intereses mencionados, y, no con ocasión de la victoria de unos y del vencimiento de otros, sino del triunfo sobre el común enemigo y del renacimiento y rehabilitación de la patria, amorosa madre de todos? Que títulos pueden invocar Vasconia, Aragón y Cataluña superiores á los de Castilla? Y si es imposible restaurar la total estructura de

dos, avasallados y casi ahogados por el otro concepto y pasión anteriores y más íntimos, el de la comunidad en que nación y región se confundieron. Pues bien; para España transcurrió toda la Edad moderna sin que progresara gran cosa la noción de patria y se le subordinara dentro de sus justos límites el espíritu regional. No trabajaron en esta necesaria armonía más los reyes que los otros órganos nacionales, antes cedieron en general lo mismo los Austriacs que los Borbones (con excepción de Felipe V respecto de la Corona de Aragón) ante las reclamaciones de la región vasca, que invocaba fueros anacrónicos, respetables mientras vigentes, pero que debieron tratar los reyes de modificar legal y jastamente, poniéndolos en consonancia con la unidad de la nación, cosa distinta de la *unidad constitucional de la Monarquía*; porque ésta es la uniformidad centralista del derecho nuevo.

la imperfecta constitución castellana, ¿quién podrá, en sano juicio, pretender que resurjan como estaban á fines del siglo XVII la aragonesa, la catalana y la vasca? (1).

Los mismos vascongados se avinieron á conferenciar sobre arreglo y concierto forales, asistiendo, desde la Real Orden de Julio de 1849 y otras disposiciones posteriores, á conferencias encaminadas á una transacción; pues ya debían comprender que no podía ser otra cosa el acuerdo con sistemas y gobiernos natural é indefectiblemente antiforalistas, y cuyas desfavorables disposiciones de intemperante radicalismo ó de solapadas cautelas no podían ocultarse á nadie desde el mismo titulado Convenio de Vergara, y que se traspresentaban hartó en los artículos de la ley de 25 de Octubre de 1839 (2). Y si

(1) Nadie que discurra sin pasión podrá argüirme de desafecto y prevenciones injustas hácia los fueros regionales, porque no afirme lo que no sé que haya afirmado escritor alguno, que esté cuerdo, es á saber, que los fueros son perfectísimos é inmutables, y porque en el más ó el menos de su deficiencia, especialmente en lo que atañe al punto en cuestión, haya discurrecido, acaso con error, seguramente sin odio y aun sin desamor y siempre con serena é indiscutible libertad. Si no me ha impedido ni me impedirá mi afecto natural á Castilla reconocer y declarar defectos y vicios graves de su constitución social y política ¿por qué no he de explicarme con igual ingenuidad, desapasionada y sinceramente respetuosa, acerca de las regiones forales? No he de condenar el exagerado foralismo con más rigor que el centralismo invasor y el uniformismo tirano: ni de mi tierra ni de la agena discurro sugestionado por el *beneficio* ó la *injuria*; porque aspiro, aunque no lo logre, al *liceat inter abruptam contumaciam et deformem obsequium pergere*. Libre de las responsabilidades del político activo, que, procediendo con recta prudencia, tantas veces tiene que sacrificar á la realidad la convicción, no debo cercenarla ni disimularla en la cátedra, sino limitarme á recomendar en esta materia una circunspección y tino singulares á los que, como hombres prácticos del derecho, tengan que entender, por cualquiera título y respecto, en tan delicado asunto.

(2) El artículo I confirmó los fueros de las Provincias Vascas y Navarra *sin perjuicio de la Unidad constitucional de la Monarquía*; y sin más que con esto, por condenados á muerte debieron darlos, porque ya se sabe lo que significa *unidad constitucional* de la monarquía, expresión que no debe tomarse á la letra, en el sentido de unidad nacional, sino tal como la

ahora se diese á las regiones forales el absoluto arbitrio de restaurar su autarquía y derecho, no poco perplejos habrían de verse para resolver los términos de tal restablecimiento, los liberales, por la incompatibilidad entre el sistema y el derecho

entiende y practica un derecho, del cual el contralismo y el uniformismo son atributos esenciales.

A los mismos moderados parecieron muy dudosos y equívocos los términos de los cuales pidieron explicación al Gobierno el Marqués de Viluma y aun el mismo Presidente de la Comisión, Duque de Rivas, que declaró que ésta no entendía la fórmula redactada por el ministro de Gracia y Justicia, Arrazola. Entonces éste y su colega de Gobernación, Carramolino, declararon que las palabras de significación oscura equivalían á un mismo rey y á una representación nacional común.

Aquietáronse con esto los *foralistas* moderados y no tiene nada de particular esta aquiescencia, porque las reivindicaciones parlamentarias no suelen exigir mucho, y casi siempre con muy poco se satisfacen; lo extraño es que también el Sr. Ramery se contentara, y escribiese en su libro «El liberalismo y los Fueros bascongados». «Es incuestionable, pues, que el régimen foral, á pesar de los pesares quedó salvado...» No vieron que la unidad de *representación* y de Parlamento liberales significaba que el soberano común ya no había de legislar con las Provincias para las Provincias, sino con la nación una é indivisa para toda ella del mismo modo, y según el imperio de la mayoría, esto es del número; que una ley electoral, uniforme y extensiva á todo el territorio, anulaba de hecho el sistema representativo político regional; en una palabra, que esta unidad de representación, á que no podía renunciar ningún gobierno de tal carácter, origen y política, expresaba la oposición substancial entre Constitución y Fueros, y por lo tanto, ¡adiós consagración solemne de la unión pactada, adiós santidad del contrato sinalagmático y bilateral que hasta ciertos autores tradicionalistas sostienen aún ahora, á las altura presentes. Tan salvado quedó el régimen y tan sólida fué la interpretación auténtica, dada por las Cortes, conformes con la particular de Arrazola y Carramolino, que en la *unidad constitucional* se fundó también Espartero para dictar el Real Decreto de 29 de Octubre de 1841, aplicando el principio con el criterio del partido progresista y anulando casi totalmente los Fueros, puesto que no solo suprimió el *pase foral*, sino las Juntas y Diputaciones forales, sustituyéndolas con las Diputaciones provinciales, elegidas con arreglo á la ley común, según la cual habían también de organizarse los Ayuntamientos é introducirse los Juzgados de primera instancia ¡Buen camino tenían que llevar y llevaron los Fueros!

foral, de espíritu y letra contrarios; los tradicionalistas por razón de la imperfección accidental que no podían menos de reconocer en constitución y legislación atrasadas y anacrónicas en muchos puntos, especialmente en el tantas veces mencionado.

El sistema colonial.

El sistema y régimen de la autarquía de las colonias y de sus relaciones con la nación y patria comunes y con el poder central no se funda en principios esencialmente distintos de los que deben inspirar, organizar y regular la personalidad y *self-government* de las demás regiones, contiguas ó discontiguas, cercanas ó lejanas del núcleo nacional.

En efecto, siendo las colonias en todas las épocas de la historia y del desenvolvimiento y progreso coloniales, sociedades públicas de extensión y población generalmente mayores que las del concejo, es regla general que tengan el grado jerárquico de autarquía correspondiente, y por lo tanto, el derecho á las atribuciones y funciones gubernativas propias de toda región, y por los mismos títulos expuestos en el capítulo á que este apéndice corresponde, sin más limitaciones que las que proceden de las circunstancias, esto es, de meros accidentes de lugar, raza, tiempo, cultura, etc. Y al contrario, no ha de tener el Estado, en representación de la nación y patria de que también son miembros las colonias, más intervención y función ordenadoras que las esenciales, ó las que aquellas circunstancias impongan, es decir, las de legítima tutela. No se aplican á este punto la descentralización (regionalismo) ni la centralización (derechos varios del Estado en las colonias) de distinta formal abstracta manera que á las demás regiones, y, en general, á las inferiores comunidades componentes de la nación.

De lo cual se sigue que es irracional el *asimilismo*, si por él se entiende la uniformidad absoluta del régimen de todas las

colonias y su identidad al de las regiones nacionales contiguas ó muy cercanas, porque el asimilismo es el uniformismo que tampoco puede aplicarse, como hemos visto, á estas regiones del núcleo pátrio, y, por esencialmente absurdo, no lo toleran la naturaleza y la realidad, que no han consentido tamaño igualitarismo aun en las colonias de los más centralistas países latinos (1).

Pero los accidentes á que hemos hecho referencia imponen, bajo los mismos principios, distinciones de oportunidad y aplicaciones varias de la tesis regionalista á las situaciones diferentes, en que, según las épocas y períodos, se hallan las colonias respecto del Estado, llamado metrópoli por clásica tradición.

Dos marcadas etapas y épocas se destacan perfectamente en la hipótesis histórica respecto de este régimen regionalista: la de situación rigurosamente colonial, y la de autonomía máxima y *self-government* punto menos que autónomo.

En la primera, las colonias son establecimientos que una nación más adelantada funda en tierras y naciones de inferior cultura, bárbaras ó semi bárbara casi siempre. Entonces la misión y función del Estado colonizador es señalada y extensa-

(1) Por asimilismo no puede entenderse la parte orgánica federativa común, que, para la unión real con el Estado, necesita, aún en las etapas de mayor cultura y autarquía, el régimen colonial. El asimilismo es el vano empeño de uniformación según los principios del liberalismo abstracto, la cual, si con burocrático despotismo puede realizarse en la metrópoli, es imposible consumarla en las lejanas posesiones ultramarinas. Así los reconoce aun la misma Constitución vigente, que, á pesar de su espíritu y tendencia, se vió precisada (art. 89) á consignar la especialidad de las leyes para las provincias de Ultramar, autorizando al Gobierno para aplicar las de la Península con las *modificaciones* que juzgue convenientes. O lo que es igual: el asimilismo solo puede ser relativo y, en la práctica, la tendencia y partido asimilistas se limitaban á lo que indica el nombre, á asemejar todo lo posible las colonias al modelo y patrón continentales, en oposición á la tendencia autonómica de profunda descentralización y distinción orgánica. Excusado es decir que perdimos las Antillas sin que se llegara á la identificación absurda é irrealizable, y menos aún en Filipinas.

mente tutelar, no para provecho exclusivo de él, sino para bien armónico de metrópoli y colonias. Porque aquélla no ha de buscar en estas, única ni principalmente, la explotación económica sino el *cultivo* de la vida y del derecho para grandeza y prosperidad comunes, poniendo quién puede y según el principio de la ley natural *haz el bien*, aplicable á esta como á las demás relaciones y de idéntica manera, la acción civilizadora que esas regiones inferiores necesitan. A este fin le corresponden amplísimas facultades tutelares de gobierno que á todo descienda y en todo se ocupe en interés principal de esas razas y gentes, como sucede en toda tutela, que es más para conveniencia del pupilo que del tutor (1).

Entonces, aunque la raza de ese territorio suele ser física é históricamente muy distinta de la población inmigrante y colonizadora, y aun muy opuesta y hostil en un principio, los colonos, que empiezan generalmente siendo conquistadores, y que de todas suertes tienen un superior poder é influjo, como más cultos que son, están en el caso y en la posibilidad de or-

(1) Colonia viene de *colo* cultivar; y aunque expresa en la palabra primitiva y en la derivada cultivo material, no es aventurado ni arbitrario trasladar el sentido al de cultura de orden superior. Este es el cristiano social oficio de misericordia y de justicia, providencialmente encomendado á las naciones que han tenido la fortuna de estar más adelantadas en las vías de la civilización. Miestras España lo cumplió con toda la fidelidad que consienten la condición y miseria de los hombres, el carácter de la mayor parte de los aventureros y la lejanía de la metrópoli, entonces triplemente separada que ahora por la dificultad de comunicación, conservó su colosal imperio ultramarino, aun en épocas de flaqueza y decadencia en el continente; cuando en lugar de la civilización verdadera con su séquito natural aun de bienes materiales implantó la *civilización* liberal con su indefectible secuela de desastres, y al reino de Cristo sucedió la tiranía de las logias, y como consecuencia se convirtió á las colonias en campo de explotación y principal desagadero de la corrupción administrativo, Dios consintió que se nos despojase con ruina y vilipendio de lo que nos fué otorgado para adelanto y prosperidad de aquellas tierras, grandeza y provecho legítimos del pueblo colonizador, y, sobre todo, para que en ellas imperara con la fe la justicia y todos los bienes que el Señor las añade.

ganizar la región y legislar para ella de modo análogo y por títulos semejantes á los que expusimos en el número 2 del anterior capítulo. Esos pueblos tienen poco hecha y pronunciada su personalidad histórica, y son parecidos á los niños en el dejarse fácilmente conducir por gente cuya civilización y grandeza atrae y seduce á esas sencillas razas con autoridad y prestigio, que moralmente las subyugan: están en la relación y disposición de toda nación bárbara ó de rudimentaria cultura respecto de las más avanzadas en el progreso social.

Por esto la metrópoli puede disponer constitución, gobierno y derecho regionales del modo más adecuado á su función colonial y á la tutela consiguiente, bien que tratando siempre de armonizar ésta con la personalidad, y autarquía de que puedan disfrutar y sucesivamente conquistar esas regiones, sin obstinarse el tutor en prolongar su poder, antes procurando adaptarlo á la necesidad del pupilo y disminuyendo el patronato á medida que el protegido adquiere más luces, moralidad y educación.

Es esta la época de un *asimilismo* relativo y de transición, no sólo porque los colonizadores organizan y reglamentan las relaciones privadas y públicas según su constitución y derecho nacionales, con variaciones insignificantes y mínimas, sino porque tal organismo y legislación deben atraer á los indígenas, que sin repugnancia ni gran esfuerzo las adoptan en cuanto empiezan á vislumbrar, aunque no sea muy reflexivamente, las excelencias y ventajas de la vida civil, desaficionándose poco á poco á sus costumbres y leyes y dejando al fin no pocas de éstas en desestima y olvido. Esto sucede con más facilidad y menos violencia, cuando la metrópoli procura lo más suavemente posible el tránsito del estado social y jurídico de la población indígena á otro más perfecto, sin convertir esta cautela en rémora contra el adelanto de la raza inferior y en pretexto para prolongar más tiempo del debido la diferencia de condición y derecho, esto es, la dualidad de legislaciones, erigiendo y perpetuando inicua y torpemente la ley de castas. El asimilismo es, en tal supuesto, tránsito y vehículo de cul-

tura, etapa de la evolución de la colonia á provincia, ó mejor dicho, á región con vida propia y organismo característico, el molde en que se trasforma la raza, vida y condición de los sometidos, y en que, mezclándose é identificándose con la de los dominadores, se funde una nueva y común raza histórica, que convierte la supeditación tutelar en la autonomía más vecina de la independencia.

Porque, en este período colonial elaborativo, han ido acercándose las razas, estrechando sus vínculos de amplia sociabilidad y determinándose así una étnica variedad física no poco señalada, y al fin también de raza histórica con la correspondiente personalidad y título de autarquía. En más ó menos tiempo, según diversidad de circunstancias, todas las condiciones y factores morales y materiales de un ambiente social, lejano generalmente y muy distinto del de la metrópoli, han producido en la colonia el efecto total y complejo de un espíritu y carácter propios, muy semejantes al de las diversas naciones independientes. La distancia, la siempre menor facilidad de comunicaciones, las mismas diferencias étnicas de procedencia y civilización producirían personalidad y separación mayores entre el Estado colonizador y sus establecimientos que la que existen entre naciones de una misma raza física é histórica, por ejemplo, las latinas y germánicas contiguas ó poco distantes, si en todo el período colonizador, es decir, en el de benéfica y humana cultura, al comunicar la metrópoli á la colonia la multiplicidad de los bienes sociales superiores de que aquélla dispone, desde la religión generalmente y el derecho hasta la agricultura y demás industrias, no le hubiera impreso el sello hondo é indeleble de nacionalidad, dejándole un fondo substancial é interno de constitución social y política, de leyes y costumbres que representan un parentesco parecido al paterno filial, y en cierto modo y respecto, aun más íntimo, puesto que es parentesco espiritual y de indefinida duración y se extiende á todas las órdenes y manifestaciones de la vida.

Por esto, si bien los elementos materiales, país y pobla-

ción, son más desemejantes en los establecimientos ultramarinos que en las regiones contiguas del núcleo nacional, el espíritu público puede y debe ser más íntimo que entre los Estados independientes ó en los semiautónomos. Unos y otros en el territorio continental no tuvieron en un principio más vínculos que los que la inmediata vecindad supone y contiene, y formaron una nación común por fusión de derechos soberanos, pacto ó conquista, es decir, con la menor espontaneidad posible. Estas partes del común Estado, cuando en él se unieron, tenían la personalidad y cultura que hemos visto en el capítulo anterior; mientras que los establecimientos coloniales recibieron una y otra del Estado que sembró en ellos la simiente de la civilización, ó promovió los adelantos de la deficiente y aun rudimentaria que tenían.

Por esto, aunque con el sano progreso moral y material las que de colonias sólo conservan al fin el nombre entren en el período segundo y definitivo, en el de autonomía, y la desarrollen y amplíen hasta el límite mismo que la separa de la independencia absoluta, tal *self-government*, vecino de la soberanía, está, si el Estado y la colonia cumplen sus respectivos deberes, contenido por ese espíritu nacional que es el alma de la patria, latiendo con fuerza aun en esos lejanos miembros y vivificándolos con un sólido y ardiente patriotismo. Entonces este amor de familia, fundado en la estimación y gratitud recíprocas, especialmente, en la que la colonia debe á la metrópoli, es lazo más fuerte que el meramente confederativo, que no es incompatible con la autonomía absoluta é íntegra.

Lo cual no es decir que la autonomía sea el tránsito á un superior estado legítimo, juríicamente necesario y exigible, el de la emancipación completa, cuando tengan las colonias medios bastantes y fuerza necesaria para erigirse en naciones, emancipación indefectible al cabo de más ó menos tiempo, realizada con el consentimiento de la metrópoli ó sin él, y por violenta acción separatista, en cuanto se presenten favorables circunstancias. Lejos de eso, ya hemos dicho (véase el Capí-

tulo III, número 6, página 58 y 78 del tomo primero) que la discontigüidad no imposibilita, como accidente puramente físico que es, aunque lo dificulte, un espíritu de sociabilidad más íntimo entre sociedades apartadas y distantes y esparcidas por todas las partes del mundo. Ahora bien, de la misma manera que esos vínculos estrechos entre los individuos no son siempre voluntarios y de puro afecto y moral inclinación, sino debidos y obligatorios, así también entre las sociedades públicas y por las mismas razones expuestas en el capítulo precedente respecto de las regiones constitutivas primitivamente del Estado en un territorio contiguo. Para que así no fuera, sería necesario probar que la discontigüidad les daba, *per se*, mayor personalidad, potencia, posición, influjo y eficacia para cooperar á los fines de la sociedad universal en el concierto de las naciones independientes. Mas, por el contrario, esa distancia ni supone siempre tal cosa, ni rompe los vínculos de la gratitud, que no es un concepto abstracto, un mero recuerdo y un sentimiento estéril, sino una disposición á oficios de justicia commutativa, que se convierte de la potencia al acto en cuanto se dán los hechos y circunstancias que se están continuando, incesante y múltiplemente presentando en las recíprocas necesidades y relaciones entre la Metrópoli y la colonia, y que mantienen, afianzan y consolidan más la comunidad social entre ambas, siendo tal gratitud expresión y título, causa y efecto, á la vez, de tal intimidad nacional, triunfadora de la distancia y del abismo de los mares. Más aún: esa misma distancia puede ser y es en muchos casos origen y motivo de perpétua inteligencia y unión connacionales, para mantener, como se indicó en el capítulo y número citados, el equilibrio de las razas históricas, ya civilizadas en los distintos continentes, zonas y climas, y evitar no solo que una domine principalmente en el mundo, sino que confinándose cada raza en una parte de él, rompan, ó cuando menos debiliten, la solidaridad del humano linaje, contra el mismo plan de la divina Providencia, que repartió los dones de la tierra para que en toda la redondez de ella los disfruten equitativa-

y proporcionalmente los miembros y agrupaciones de la gran familia humana (1). Así, el máximun de autonomía, dentro

(1) Nada más contrario á este principio y aspiración racionales y cristianas que el *panamericanismo*, ó mejor dicho, *panyankismo* contenido, en la fórmula, sea de quien fuere, pero netamente sajona, de *América para los americanos*, disfráz tosco de América para los Estados Unidos, y el programa que, á costa de la raza latina, van poco á poco realizando. Si España hubiera conservado su poder y su dominio ultramarinos, la raza más utilitaria, invasora y moralmente atrasada, (aunque esta afirmación asombre y aun escandalice) no hubiera pasado del límite de las colonias inglesas más meridionales; no hubiera *tomado* la mitad de Méjico, no amenazara por de pronto con su influjo, y dentro de poco con la anexión y la conquista, al Centro de América, disponiéndose á avanzar hasta donde le permita la decadencia é insensatez de las naciones latinas del continente meridional. El pueblo hidalgo colonizador la contenía con la tizona, al servicio de la Cruz, aún en la época de las mayores desventuras y en el comienzo de los extravíos nacionales; pero al poco tiempo de evacuar España el continente, fué mutilada Méjico y tomaron vuelo audaz las intencionas de expansión y rapiña. Aun desde las Antillas, y como centinela avanzado de la Europa latina en el golfo de Méjico, pudo España, si no hubiera apostatado de la fe y de la tradición, ser vínculo de inteligencia y hasta de alianzas entre las razas hermanas de ambos continentes, y en nombre de las que heredaron la cultura clásica, renovada, purificada, y vivificada por el Cristianismo, de las que fueron apóstoles de ideas y no exploradoras é incautadoras de mercados, poner veto y valladar á las codicias y depredaciones sajonas, custodiando el patrimonio universal de una civilización espiritualista que, buscando ante todo el reino de Cristo, recibiera de añadidura la misma prosperidad y grandeza materiales. Pero ya el mercader excluyó de los últimos restos del heredado patrimonio al caballero envilecido, enflaquecido y arruinado por la irreligión y por los vicios; y con él, representante y campeón, en mejores días, de la política y del derecho católicos, cayó toda eficaz resistencia á la ambición de las naciones heréticas, cismática y pagana que se van á repartir en Asia, Africa y América el monopolio y la explotación de la tierra. Abiertas quedan las extensas regiones que cristianizamos y civilizamos á las invasiones de un pueblo, que tiene el privilegio y la especialidad de adulterar y rebajar hasta la misma divina religión verdadera, convirtiéndola en mercancía pietista, de fácil adaptación á cualquiera concupiscencia y sentimentalismo, *humanizando* para ello, y apropiando á la sensualidad de la vida moderna y al error naturalista un dogma que se quiere aligerar y aliviar todo lo posible de intransigencias y rigores, hasta reducirlo á las vaguedades teistas que convierten á la religión en asunto

de una amplia unión nacional, de espíritu y carácter cada vez más fuertes y profundos, es el ideal que más se acerca á la unión del linaje humano con efectivos lazos legales, y no con los de la mera naturaleza y sociabilidad, marcando una gradación intermedia entre la relación de nacionalidad y la de humanidad exclusivamente, y facilitando así la comunicación y fraternidad de pueblos y razas. En suma, la autonomía es no solo la tésis de la relación jurídica entre la metrópoli y las colonias, como corolario lógico de la teoría de la personalidad en este orden, sino, como consecuencia, el ideal y el término del progreso, del que es preparación y etapa históricas el período rigurosamente colonial.

De este no pasó la colonización española, por sucesos y circunstancias en los cuales no dejó de tener la Metrópoli alguna responsabilidad, pero que no le son imputables en primer lugar ni en máxima parte. España empezó á colonizar, cuando se abrió la era de la colonización cristiana en los mundos nuevamente descubiertos, y cuando no estaba aún la nacionalidad continental constituida sólidamente ni siquiera redondeada. Sin prácticas y experiencia de régimen colonial, supo, sin embargo, guiada por el espíritu de religión y de

de atención secundaria y subalterno cuidado, sin eficacia moralizadora ni social influjo, que pueda servir, no ya de resorte de gobierno, pero ni siquiera de inspiración y garantía de honestidad pública y privada. Ya no colonizan los pueblos de las aventuras caballerescas é idealistas para la propaganda de los principios en que se asientan la justicia y hasta el encanto de la existencia; son las razas positivistas y utilitarias las que invaden y batallan para imponer la superioridad de la fuerza y la tiranía de la industria; no se coloniza para Cristo, sino para Mercurio, no para la solidaridad fraterna de las gentes, sino para sacrificar al débil en aras del poderoso, ni se organizan expediciones por la fe, sino por la posesión de las minas ajenas. Presa de esos colonizadores, que representan el renacimiento de una nueva barbarie, del protestante tudesco ó sajón, del cismático ruso y del japonés pagano, pero ya parlamentario, serán esas colonias que se emanciparon del antiguo señor descuidado y pecador, pero más condescendiente y humano que el implacable y esquilador amo nuevo sin conciencia y sin entrañas.

justicia, luz indefectible y fuente inagotable de bueno y prudente gobierno, echar las bases y aun levantar las primeras hiladas de una constitución y legislación ultramarinas, tan sabias y perfectas como pudo ser obra humana, combatida, no solo por los defectos inherentes á nuestra naturaleza, sino por multitud de obstáculos y contrariedades, propios de los tiempos. Monumento insigne de la colonización española son esas Leyes de Indias que, cuando ya no exista España, mantendrán vivo su recuerdo en el fallo de la Historia y en la gratitud de las gentes.

Porque en la colonización española y en la constitución y derecho coloniales domina, ante todo y sobre todo, el principio y espíritu de la civilización efectiva que las naciones más adelantadas deben cultivar en los establecimientos fundados en las tierras de bárbara ó menos culta gente, comunicarles el supremo bien de la religión verdadera, fuente aún de sólida y amplia prosperidad temporal y condición y garantía de libertad razonable y justa. La catolización de las razas sometidas constituye el fin é intento principal de la ocupación y conquista ultramarinas y como la preocupación y cuidado casi exclusivos de nuestros reyes. Y no solo la religión, sino las demás ventajas y conveniencias, que celosamente deben procurar para todos sus dominios y súbditos los gobiernos cristianos, fueron otorgadas á América, de manera muy semejante á como se gozaban en España, y aun en mayores proporciones, perfección y diligencia; de modo que, aun no había pasado un siglo desde la conquista, y ya estaba el Nuevo Mundo dotado de un gobierno lo más parecido al de España, de catedrales, parroquias y monasterios, de múltiples instituciones de beneficencia y de Universidades como las de la Península, que esparcían sobre las Indias la luz de la ciencia cristiana, y, con ella, el principio de la cultura y el espíritu de una naciente, pero pronto adelantada civilización. El organismo municipal se planteó desde luego también según el modelo y traza generales de la constitución concejil castellana, y la legislación y gobierno de Indias, en suma, lleva bien impre-

sos el sello y carácter de una ocupación y establecimiento efectuados, no para oprimir y explotar, sino para elevar, dignificar y emancipar con la fe á aquellas razas, esclavas de la idolatría y de las supersticiones y barbarie consiguientes (1).

Para ello se necesitaba la amplia acción tutelar que la distancia y la dificultad de comunicaciones permitían, y un protectorado de la metrópoli, que, en la intención del legislador y en la ley, fué superior al de todos los sistemas colonizadores no solo coetáneos, sino de más avanzados tiempos. A la imperfección natural de toda obra humana juntáronse, para desvirtuar el efecto é influjo benéficos de aquellas leyes, la lejanía del poder paternal protector, la rudeza de los conquistadores, la codicia de los aventureros y la misma repugnancia de las incultas gentes, á las cuales había que imponer el trabajo, la policía y la iniciación en vida social menos rudimentaria con la coacción, la violencia y rigor, alguna vez excesivo, y menoscabar la misma natural libertad y otros derechos de los indígenas á fin de civilizarlos y hacer posibles la coexistencia, vida, justas ventajas y estímulos de la población inmigrante y colonizadora. De esos obstáculos y contrariedades inevitables han hecho argumento los enemigos de España y de la Igle-

(1) Y aún fueron más libres los concejos de Indias que los de Castilla, afirmando los publicistas argentinos D. Vicente G. Quesada, (*La sociedad hispano americana bajo la dominación española*), y el doctor Ramos Megía, (*El Federalismo Argentino*) que de las raíces de la autarquía concejil bonaerense surgió el gobierno federal, luego que se emancipó el Virreinato. Y en efecto, los municipios hispano americanos, no sólo elegían sus cabildos sin intervención del poder político, sino que además de un amplio gobierno en las cosas de paz y guerra, tenían á su cargo la justicia correccional y de primera instancia; así es que las ciudades-cabildos de Buenos Aires fueron después las cabezas de las nuevas provincias, ó sea, Estados federales. Y no había solamente concejos de europeos, sino también de indios, porque éstos gozaban de sus derechos civiles y de la mayoría de los públicos, siendo considerados como hombres de sangre limpia. Los municipios tuvieron además gran influjo y acción en la política y gobierno de las colonias y no pequeña parte en sus alteraciones y disturbios contra la madre patria.

sia para calumniar con injustas declamaciones de afectada filantropía á nuestra colonización, pintando un cuadro de abultados á inventados excesos con los colores más recargados y sombríos, que de todo tiene menos de trasunto, aun débil y lejano, de la realidad. La misma delicada sensibilidad y la caridad generosa de algunos españoles, ante las cuales todo abuso de poder y fuerza tomaba proporciones un tanto fantásticas y exageradas, han servido de testimonio y de capítulo de cargos contra las supuestas tiranía, opresión y explotación perpetradas sobre los indios. Mas, para que se destaque la humanidad del gobierno colonial español, no hay nada tan conducente como compararlo con el de los dictadores que afligieron y degradaron á nuestras emancipadas colonias y con los sistemas de ocupación, expoliación y exterminio de otras colonizaciones y expansiones territoriales, especialmente las anglosajonas (1). Si preocupados protestantes como Robertson

(1) Las principales imputaciones que nos vienen lanzando autores preocupadísimos son las expropiaciones y despojos sufridos por los indios, el forzoso trabajo de las minas, la introducción de la esclavitud en las colonias, y las célebres y execradas *encomiendas*.

No negaré ni dejaré de condenar las expropiaciones injustas de que serían algunas veces víctimas los indígenas, cuyo derecho dominical en las cosas tiene los mismos fundamentos y títulos que el de los demás hombres en las suyas, sean bárbaros ó civilizados, paganos ó católicos. Sigo en esto la opinión, que me parece más probable y aun cierta, de Belarmino, Covarrubias, Suárez, Menchaca, Navarro, Barbosa, etc., que es la misma de los grandes teólogos, moralistas y juristas filósofos, Victoria, Soto, Molina, y no hay que decir que la del ardiente protector y abogado de los pobres indios, el P. Las Casas, de tan veneranda y simpática memoria. Conformábanse en esto con la doctrina de Inocencio, Juan Andrés, Decio y Cayetano; pero hay que reconocer que no era punto incontrovertible ni resuelto, y que en la controversia figuraban, como decididamente contrarios al derecho de propiedad de los infieles, Palacios Rubios, Sepúlveda, Gregorio López, Cevallos, Bovadilla, Herrera, Solórzano y otros, apoyados en las teorías de el Hostiense, el Panormitano, Torquemada, etc., que eran las mismas de Baldo y Oldrado y tenfan á su favor la aún más respetable y autorizada de Santo Tomás. Sostenían éstos que era la infidelidad motivo bastante y causa justa de despojo, desde que, transmitida á la Iglesia la potestad que

y declamadores enciclopedistas como Raynal, se complacieron en acumular gratuitas acusaciones contra la colonización española, sin dejar de reconocer alguna vez sus ventajas y méritos, otros, como Humboldt, la hicieron plena justicia en

tiene Cristo como monarca absoluto del mundo, encomendaba la Iglesia á los reyes la sujeción de las naciones paganas para el fin principal de la cristianización de ellas. Según estos opuestos criterios interpretaban unos y otros la bula de concesión de Alejandro VI, fijándose los primeros en el tenor literal de ella, que comprendía « todos los señoríos de Indias, ciudades, castillos, lugares, villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias, » y distinguiendo los otros en estos términos, susceptibles de más de un sentido, la soberanía y la propiedad. Así el P. Victoria (*Tract de indis insular.*) afirmaba que los herejes no son despojados de sus dominios, mientras que la Iglesia no los condena con las debidas formalidades canónicas, arguyendo además con el ejemplo de que los judíos y mahometanos eran á la sazón mantenidos en la posesión de sus bienes. Esto mismo defendía con fervorosa elocuencia, por escrito y de palabra, el P. Las Casas (*Tratado de las treinta proposiciones.—Historia general de las Indias*) y lo mantuvo contra sus adversarios y ante el mismo emperador Carlos V, excitándole á que mereciera de Dios largo y glorioso reinado, desterrando, en los principios de él, de sus dominios la que, en su caritativo, pero apasionado celo, calificaba de *monstruosa opresión* el paternal y bondadoso fraile.

Esta disparidad de opiniones dejaba al poder soberano cierta libertad y un arbitrio, que no podía con evidencia calificarse de inícuo, para disponer, con mayor desahogo y extensión, de la propiedad de los indios, muchos de los cuales, (la mayor parte de ellos) no gozaban de la cultura y civilización relativas de los peruanos, mejicanos y chilenos, sino que eran bozales, salvajes y aun antropófagos, que no habían consolidado, con la ocupación permanente, el asiduo trabajo é indispensable cultivo, la propiedad de la tierra, ni podían alegar sobre ella los mismos títulos que los propietarios que, en las sociedades ya constituidas sobre el fundamento de la agricultura, dedican el suelo á sus naturales usos en justo provecho del individuo, de la familia y de la pública comunidad. Más aún: había que proporcionar condiciones de regular y aun atractiva estancia á los inmigrantes europeos, dotándoles de tierras no lejanas de los centros de población, y no de las más apartadas y abruptas, cuyo cultivo requeriría trabajo y esfuerzo más de siervos que de hombres libres y dominadores, gente además aventurera y militar, más dada á la espada que á la esteva. Con los que traían, aparte y á pesar de sus codicias, excesos y aun crueldades, una civilización superior y hasta un estado material y económico menos desfavorable.

multitud de pasajes de su obra, citada en la nota, y Prescott (*Historia del reinado de Fernando é Isabel la católica en España*, parte 2.^a, capítulo IX) afirma que el gobierno de la metrópoli, lejos de considerar su dominio colonial como cosa ex-

table que el anterior á los indígenas, debían estos compartir una propiedad, en nadie absoluta, y con parte de la cual compraban en cierta manera los bienes morales y aun físicos inherentes á la religión y á la moralidad, mejor gobierno y policía que de aquella fluyen y dependen. Era una colisión entre el derecho á toda la propiedad y el supremo interés público, no sólo de España y de las Indias, sino de la humanidad y de la Cristiandad, cuyas conveniencias son solidarias, y todas [las cuales promovía la colonización. Faltaba, es cierto, la indemnización correspondiente á estas expropiaciones, pero no tenía la metrópoli con qué satisfacerla, y no, por ello, había de renunciarse á los bienes de más cuenta que traía una más adelantada cultura, cuya introducción y establecimiento había autorizado en bula de amplia é ilimitada concesión el Vicario de Jesucristo. A nadie se le ha ocurrido que podían pasar sin apropiarse de una parte de la tierra de los vencidos los bárbaros invasores del Imperio romano, á pesar de que no traían elemento alguno de cultura positiva; sin esa propiedad no hubieran arraigado establemente en las comarcas ocupadas, ni se echaran los cimientos y condiciones de nación y patria. Pues con mayor razón y título podían exigir los colonizadores católicos, para vivir y civilizar, dominios territoriales que les asentaran en la colonia, les unieran á ella con los vínculos y arraigos de la propiedad inmueble y de la agricultura, convirtiendo al fin en ciudadanos pacíficos á los militares aventureros, que, con sus abusos y todo, eran instrumentos de la Providencia para propagar la idea salvadora y, con ella, la civilización colonial más perfecta que han conocido los siglos ¿Qué autoridad pacífica podían ejercer y emplear para la cultura y asimilación de aquellas gentes, si carecían los europeos de una posición adecuada con que imponerse á los indígenas y conservar sobre ellos el prestigio y respeto necesarios? ¿Sólo las armas y la violencia habían perpetuamente de mantener la sumisión? Por medio de aquellos *aventureros* cumplía España sus oficios y deberes colonizadores, y en tales esforzados hijos, no siempre ni generalmente malos, y, en su mayor parte, abnegados y heroicos, gobernantes discretos y aun insignes, que no sólo rudos é incultos soldados, era compensada la Metrópoli, tanto de los sacrificios de generosa sangre derramada en la evangelización de las Indias, como de los dispendios necesarios, que, en los veinticinco primeros años de la conquista, eran muy superiores á los recursos é ingresos procedentes del Nuevo Mundo. Pero pronto veremos en qué consistieron esas decantadas expropiaciones que, por ignorancia ó mala fe, presentan muchos escritores como despojos de la propiedad in-

traña al reino y para el provecho y prosperidad de éste, miraba las colonias como miembros integrantes de la patria.

Después cuantas imputaciones malévolas se han hecho contra nuestro régimen colonial son, más bien que defectos

dividual de los indios, cual si estuviera constituida como en las sociedades civilizadas. Este punto se relaciona con la sabia organización de las encomiendas.

En cuanto á las *mitas* ó forzoso trabajo, impuesto á los indígenas en las minas tan varias y ricas de la tierra descubierta, los enemigos de España han tratado de desnaturalizar la institución, pintándola también con negros colores, y desconociendo ó, mejor dicho, afectando desconocer el racional fundamento y el motivo circunstancial de ellas. O se dejaban explotados é infecundos aquellos veneros de riqueza, ó había que obligar á los naturales á una faena que voluntariamente no emprendían en los primeros años de la ocupación colonial; porque no tenían los indios hábito alguno de trabajo, y generalmente, á su pereza é indolencia de temperamento, raza, clima y cultura repugnaban las tareas menos molestas de la agricultura regular y ordenada, cuanto más el rudo y penoso esfuerzo de la industria minera. Entre los derechos de tutela está comprendida, en proporción de la necesidad, aquella restricción de libertad que no implique esclavitud, sino algún género y grado de servidumbre, compatible con el respeto á los derechos esenciales de la personalidad humana, y, por lo tanto, la asignación forzosa de alguna clase de trabajo: no todos los mayores de edad son personas *sui juris*, antes, como á los niños, puede, por causa justa, limitárseles la plena disposición de sí mismos, y, por su deficiencia y atraso en orden á la religión, honestidad, civilización y policía, tratar como menor y, en cierto modo, *alieni juris* á una raza y pueblo. El trabajo en las minas podía serles doloroso y aun perjudicial á la salud, pero estos males eran inevitables en contemplación á los mayores bienes, ocasión y motivo de tales perjuicios. Ni negaremos que en esto, como en todo, la mala voluntad y aun otras contingencias, independientes de ella, pudieron producir mayores molestias y gravámenes de los inexcusables, y que abusivamente fueron los indios víctimas de graves excesos y aun crueldades; mas no son éstas ni aquellos imputables al Gobierno central ni á una legislación humana y benigna, que procuraba con la mayor solicitud y paternal celo hacer lo más tolerable y llevadera, que posible fuere, la ímproba labor de las minas. No sólo las *mitas* eran un recurso complementario para llenar el hueco de los trabajadores libres ó de los negros, empleados bien pronto en la explotación, sino que, como su nombre indica, (*mita* en indio significa vez) se sustitufan en este trabajo durante el año varias cuadrillas y agrupaciones de mineros, de modo que sólo una parte de él respiraran el mal ambiente sub-

é injusticia de las leyes, infracciones y violaciones de la sabia legislación de Indias y olvido y menosprecio de aquellas equitativas y discretas instrucciones de gobierno en que se reflejaba la solicitud tutelar de los reyes españoles. A pesar del

terráneo; los niños y los ancianos estaban exentos; no podían los indios ser empleados á grandes distancias del lugar de su residencia ni en climas extremos distintos de los de su habitual estancia. Andando el tiempo se les pagó su jornal como á los trabajadores que voluntariamente aceptaban ó elegían esta ocupación. Que se compare este cuidado protector con la explotación que hoy sufren los trabajadores bajo la ley de la *libre concurrencia*, instrumento de la tiranía del capital y se reducirán á sus debidas proporciones los declamatorios anatemas contra las *mitas*.

Por ellas, y para aliviar á los indios y en parte sustituirlos en éste y en trabajos, también rudos, de agricultura, se autorizó la introducción de negros, y con ella el crimen de la esclavitud y los horrores de la trata. Mas no hay que decir que en este atentado contra el derecho, y que fué propuesto por el mismo P. Las Casas, no incurrió solo España, y que si el Emperador permitió la entrada de negros en América, con lo cual se ocasionaron los execrables excesos consiguientes, fué por el motivo antes manifestado, el cual constituye una circunstancia atenuante en favor de los españoles. Además, la situación de los esclavos en colonias tan penetradas del espíritu cristiano y entre colonos que eran creyentes, aunque de condición áspera y dura, fué mucho más suave y tolerable que en otras épocas y en los demás pueblos, acercándose más á servidumbre que á esclavitud propiamente dicha, y siendo la mayoría de los siervos una especie de criados y clientes de sus amos. Y hay que tener también en cuenta que esta plaga estuvo menos extendida que en parte alguna en las colonias españolas, pues el Barón de Humboldt asegura en su *Ensayo político sobre la nueva España* que en la América continental española el número de esclavos africanos, comparado con el del Brasil y los Estados Unidos del Sur, estaba en proporción de uno á cinco en los últimos años de la dominación de España, y que todas sus colonias, que representaban una extensión superficial mayor en un quinto que la de Europa, no contaban tantos esclavos como el solo Estado de Virginia. En cuanto á los indios, solo fueron esclavizados, según las nociones de Derecho penal en aquella época, los caríbes y canibales relapsos en idolatría, antropofagia y sodomía, como hace notar, contestando á Robertson, el P. Nuix en sus *Riflessioni imparziali sopra l'umana degli Spagnuoli nell' Indie: riflessione IV* párrafo II. Más adelante no consintió el Rey que fueran declarados esclavos los araucanos, como apóstatas y reos de alta traición, y, lejos de eso, mandó emancipar á los que fueron reducidos á servidumbre.

optimismo idealista de Fray Bartolomé de las Casas, que los más graves, doctos y caritativos varones juzgaban impropio, impracticable y peligroso, por contrario á la realidad de las cosas, al imperio de las circunstancias, más atendido fué

En cuanto á las encomiendas, no se les puede imputar otra cosa que el abuso que de ellas hicieran los encomenderos; pero no pugnaban con la ley natural, en cuanto la propiedad no es un derecho ilimitado, que no pueda anularse ó menguarse en colisión con otros, ni la libertad de las personas mayores de edad es tan absoluta que no sufra restricción alguna por razón de tutela y por igual título que la libertad de los menores, esto es, por incapacidad, fundamento común de la tutela de cualquier orden y clase.

Ya digimos antes que este punto de las encomiendas se halla íntimamente relacionado con el de la propiedad de los indios y con los derechos que una conquista justa sobre pueblos infieles, total ó casi totalmente incultos, atribuye sobre la propiedad de los vencidos al dominio eminente del Estado. El cual, por razones de alto interés social, puede limitar la propiedad de los particulares, máxime si, como en el presente caso, redundan en superior provecho de ellos, que no solo en el de los ocupadores y conquistadores. Así el de éstos como el de los indios salieron perfectamente conciliados en la institución de las encomiendas.

Aun en los grandes Estados indios la decantada civilización, exagerada y todo, consistía en ciertos adelantos puramente materiales, realizados, en interés del tirano y de las clases más altas, por la muchedumbre sierva, constreñida por el látigo de los explotadores, sin consideración alguna á los fueros de la personalidad humana, que ni siquiera acertaban á entrever ni sospechar. Así, en la cultura incásica, la propiedad individual estaba punto menos que desconocida, y se aplicaba y practicaba el principio en las más mínimas proporciones. Casi toda la propiedad personal era del Sol, del Inca, de los templos de sus falsas divinidades y de su sacerdocio; la de los demás era un verdadero precario que se mantenía por el beneplácito del despótico imperante. Así es que, por falta de estímulos, por las escasas necesidades de una civilización embrionaria, por la incuria propia de gente bárbara y aun por la pereza inherente á la raza y clima, apenas existía la propiedad particular. Vivían las familias en sitios riscosos y apartados, manteniéndose de frutos silvestres, y las que estaban constituidas en comunidad, en común poseían para el fin principal de la tributación de la colectividad al Inca y á los caciques.

Así es que bien puede asegurarse que el reconocimiento de la propiedad y la garantía de sus condiciones esenciales y de su racional disfrute, bien que no absoluto, no se conocieron ni gozaron hasta la conquista y ocupación de las Indias por España. Y en efecto, no hay una sola disposi-

el benéfico fraile que sus opositores y detractores. Mientras el libro de Sepúlveda, (su famosa Controversia), el más opuesto y contrario á las ideas y planes del dominico, sufrió el percance de que, así el Consejo de Indias como el de Castilla, con-

ción del Gobierno metropolitico que no recomiende el respeto de la propiedad de los indígenas, y eso que, siendo casi toda ella del Estado anterior, en cuyos derechos se subrogó el Estado cristiano, y no estando consolidado y extendido el dominio particular, podía el Gobierno haberse dispensado un tanto de ciertos respetos y aun escrúpulos, porque bien podía decirse *bienes nacionales* la mayor parte del territorio ocupado.

De estos *bienes nacionales* hizo el Estado español el uso más equitativo y prudente, otorgando unos en pleno dominio á los españoles para que los cultivaran y se convirtieran de gente belicosa y levantisca en pacíficos labradores, fundamento y núcleo del dominio colonial. Pero los conquistadores é inmigrantes eran muy pocos para fundar, mantener, adelantar y propagar el cultivo en las formas y proporciones necesarias, y además el carácter, hábitos, superioridad social y de raza despegaban aun á los más humildes europeos de las fatigosas tareas rúricolas. Así es que, una de dos: ó se renunciaba al cultivo de la tierra, base y fuente principal de la riqueza y poder de los Estados, y que nuestra Monarquía trató de promover con el más discreto y diligente celo, ó había que buscar un modo y expediente de que los indígenas se aplicasen al trabajo agrícola en las mejores condiciones posibles de justicia para ellos y de recta conveniencia para el promún armónico de Metrópoli y colonias. Esta feliz combinación representan las encomiendas, erróneamente juzgadas aun por autores amigos de la colonización española, los cuales las juzgan buenas en tésis, pero dictadas con desconocimiento de la realidad, en la cual fracasaron. Lejos de eso, no fueron engendro idealista, ni pueden considerarse fracaso los abusos, ajenos á la naturaleza de la institución, ni siquiera inmediatamente ocasionados por ella, sino por la condición humana, amén de las circunstancias de tiempo, lugar, razas, posición y estado respectivos de ellas, etcétera, etc. Procediera España por el sistema más expedito ó cómodo, contrario al de la asimilación, el del exterminio de las tribus bárbaras, como hicieron los norteamericanos y otros *colonizadores* por el estilo, y no tuvieran cargo alguno que hacer á nuestro gobierno, régimen y legislación coloniales ni por el abuso de los encomenderos ni por el establecimiento de las encomiendas.

Pero estas fueron la más compleja y acertada combinación, ante todo y sobre todo para la *reducción* de los indios, esto es, para su conversión á la fe católica y á la vida, policía y trabajo, que separan la barbarie de la cultura. Nada de esto se lograra sin la residencia sedentaria y civil en rela-

formándose con el parecer de las Universidades de Salamanca y Alcalá, prohibieran la publicación, por contener doctrinas mal sanas (las de la mera *servidumbre política* ó *civil* no la de la *propiedad* de los indios), no obstante de haber sido permitido

ción con los conquistadores más civilizados y bajo la amplia tutela de ellos para tales fines. Esto era principalmente la encomienda una *dirección tutelar de los indios que la metrópoli confiaba (encomendaba) á la raza superior, á los colonos, únicos órganos y sujetos posibles de esta tutela, en la imposibilidad de ejercerla por sí mismo el poder central y en la dificultad de que la desempeñaran con eficacia las autoridades coloniales*. Si los colonos cumplían mal y abusivamente su función, no habría posibilidad de que lo hicieran mejor otros órganos sociales, porque la misión tutelar del Poder y sus delegados no puede multiplicarse, descendiendo directamente á la tutela efectiva de cuantos la necesiten, sino que tiene que limitarse á la vigilancia é inspección soberanas, que prevean y eviten, en lo posible, los excesos, y á su represión gubernativa ó judicial cuando aquéllos se hayan cometido. Las autoridades coloniales no faltaron, por lo general, á ambos deberes, pero sobre todo la Metrópoli, no solo mediante la solicitud paternal de los reyes, sino por los no menos constantes y reiterados desvelos del Consejo de Indias, atento siempre y vigilante á proveer al bienestar de los indígenas, á precaver los perjuicios y atender las reclamaciones de los indios, no pocas de mala fe y muchas provocadas por minucias y exageradas pretensiones de un mal hábito pleitista.

Pero la *reducción mediante la tutela*, que es el carácter predominante de la encomienda, requería una retribución por parte del tutelado á la benéfica función del tutor, que no es gratuita, ni lo ha sido nunca en ninguno de los órdenes, fases y manifestaciones de la tutela, desde la del huérfano hasta la internacional de un pueblo más débil y atrasado, esto es, relativamente incapaz. Y de aquí las cargas y servicios de la encomienda ó sea *la obligación, en el encomendado, de ciertas prestaciones personales al encomendero y de ciertos tributos que le pagaba por la tierra que cultivaba el indio y en la que tenía éste no el precario de los tiempos anteriores á la conquista, sino una propiedad verdadera, aunque coartada*.

Esta es la otra doble fase secundaria, bien que natural é inevitable de la encomienda; a) la de una racional limitación de la libertad del trabajo, lo cual no puede llamarse ni siquiera servidumbre, en el sentido convencional explicado en la página 374, Libro II, Capítulo IX del Tomo I, como no era servidumbre el *pecho* en la Edad media; b), la distribución de un dominio público en una especie de enfiteusis, en que el indígena tenía una propiedad, antes no garantizada, sin más limitación que la que pudiéramos llamar el *cánón enfiteúticó*, aunque fuera más crecido que el de esta clase de censos.

en Roma, el P. Las Casas fué acogido más que benévolamente por el Cardenal Cisneros, por Selvagio, por Mercurino Gattinara y por el mismo Emperador; se le concedieron medios de plantear su utopia de colonización pacífica y puramente

Para juzgar y acriminar las encomiendas se han colocado sus detractores en supuestos y puntos de vista absolutamente erróneos: el de la igual posición de las razas y el de una propiedad constituida entre los indígenas en los mismos términos y condiciones que en la situación normal de una nación regularmente civilizada. A nadie extraña que la irrupción de los bárbaros en los dominios de un Imperio de adelantada cultura, y en el cual la propiedad había desarrollado y traducido sus elementos esenciales en la legislación, produjera un grave trastorno de las bases del dominio y determinara una constitución dominical con modificaciones de gran cuenta sobre el fundamento de una nueva distribución de las tierras; porque, en estas hondas crisis de transformación histórica no pueden juzgarse con el criterio de las épocas pacíficas y ordinarias los sucesos ni las leyes. Así es que, generalmente, se vá haciendo justicia á la organización feudal de la propiedad, como producto natural y espontáneo de las múltiples condiciones y circunstancias de aquel período de radical y total renovación.

Pues no menos radical, aunque para mayores y más inmediatos efectos civilizadores, fué la que provocaron la ocupación y conquista españolas en América, y no hay nación que afrontara y salvara el tránsito súbito del estado de barbarie indígena al de cultura colonial con más sabiduría y equidad que España, con el más escrupuloso respeto á la libertad y propiedad de los indios, sólo restringidas en la mínima proporción estrictamente necesaria. Porque las encomiendas conciliaron, de la mejor manera posible, la reducción y la independencia del catecúmeno y del salvaje, la propiedad del indio y la que necesitaba el europeo, la natural desigualdad de las razas, que tiene la misma razón formal y origen que las de los demás estados jurídicos, con los fueros de la igualdad de naturaleza y destino y la dignificación y elevación del indio á una condición superior, mediante el legítimo progreso, cuyas vías no cerraba á los naturales, como ha hecho la colonización inglesa, sinó que las franqueó y allanó nuestro régimen colonial con facilidades y estímulos para recorrerlas con firme y ligero paso.

Pero, como las reparticiones primeras no las hizo el Gobierno de la metrópoli, sino los jefes de las expediciones y los cabildos ó ayuntamientos, prontamente erigidos en el Nuevo Mundo, adolecían no pocas veces del defecto de desproporcionada é inícuca distribución, aparte de la falta de título definitivo de que adolecieron. Otras las harían, por su propia cuenta y con notorio despojo, los mismos aventureros, que eran soldados y no frailes y pedagogos, es decir, gente no la más educada y escrupulosa, y sin los mira-

persuasiva, otorgándole doscientas setenta leguas de costa y las que necesitara en el interior, para que realizaran la reducción de los indios los agricultores caballeros de la *especta dorada*, ilusorio y un tanto ridículo proyecto que fracasó mi-

mientos y suavidad de costumbres, maneras y trato que los hombres de Iglesia, cátedra y foro. Mas la metrópoli ni siquiera transigió con los hechos consumados; no sólo dictó las normas de la institución, sino que trató, lo mejor que pudo y consentían la distancia y la resistencia de los malos intereses heridos, de legitimar las viciosas reparticiones por el único medio factible, la *composición*, que dió lugar á incesantes diligencias gubernativas y judiciales, escuchando siempre los tribunales, en particular el Consejo de Indias, las demandas, por poco fundadas que fuesen, de los indios, y mirándolas con más benévola disposición que las de los españoles, así europeos como americanos.

No nos cansaremos, pues, de repetir que los cargos hechos á la colonización española son los que pueden hacerse á la flaqueza y miserias humanas, y que causa indignación que sean los increpadores de las encomiendas los que sostienen el secular despojo de Irlanda, que no era nación bárbara cuando la sumisión, sino más civilizada que Inglaterra, la cual arrebató su propiedad, no á indios que apenas la tenían, sino á cristianos, por el *delito* de catolicismo, á honrados propietarios que habían fructificado la tierra con el sudor propio y el de sus mayores, reducidos, hacía siglos, á vida civil y á apropiación y disfrute del suelo garantidos por toda clase de títulos. Con no más paciencia puede tolerarse que sean los ingratos americanos los que abulten y multipliquen fantásticamente los abusos de los españoles, cuando con este nombre se designa también á los descendientes de ellos, á los criollos y mestizos, que se hicieron al fin casi totalmente dueños de la tierra y de la riqueza y se distinguieron vergonzosamente en la explotación y tiranización del indio con lujo de soberbia y despotismo cruelísimos.

Si en vez de soldados y labradores procedentes, por lo general, de las clases más humildes de España, aunque el origen en este solar nobilísimo les diera en América consideración y respeto de aristocracia étnica, dispusiera la Metrópoli de número bastante de clérigos, sobre todo de regulares, no solo para evangelizar, sino para las demás funciones de la colonización, todas las reducciones de América, hubieran sido lo que, por un conjunto feliz de circunstancias, fueron las célebres *Reducciones* del Paraguay. Porque bien pueden considerarse éstas como encomiendas, en el más noble y amplio sentido, unas encomiendas, preservadas por la caridad, el desinterés y la abnegación, de los defectos accidentales y de los irremediables abusos de las otras, é informadas, por el espíritu del catolicismo y el genio colonizador de España, de todas las excelencias y ventajas, no de la ideal Re-

serablemente. ¿Qué más? Las célebres ordenanzas de 1544 puede decirse que son obra del célebre Obispo de Chiapa, porque la junta de prelados, caballeros, religiosos y consejeros, nombrada el año antes por el César para redactarlas, tra-

pública de Platón, sino de una república cristiana, que, sin más que aplicar la ley de Dios al gobierno de los pueblos, convierte, por ensalmo, una sociedad bárbara en una comunidad de civilización madura, apenas nacida, y hace de la ciudad terrena un como trasunto y anticipo de la ciudad celestial.

Penetrados nuestros reyes de las aptitudes de la Compañía para esta amplia y colosal obra benéfica, no hicieron más que otorgar á los Jesuitas un poco más de independencia de las autoridades coloniales en las reducciones que los padres fundaran, y con solo ésto surgió en cada una de ellas la vida cristiana y civil, el progreso moral y material en una proporción y armonía verdaderamente portentosas. Religión y costumbres, instrucción é industria, bienestar y desahogo materiales sobre la base de una riqueza familiar ni exigua ni desmesurada, sino felizmente mediocres, libertades concejiles, viviendas sanas, cómodas, regulares y de bella construcción, calles tiradas á cordel, policía, hasta entonces desconocida en los pueblos de indios y en las mismas villas y ciudades de las Colonias y de la metrópoli, todo este esfuerzo de los religiosos, sin casi más auxilio que el de la buena voluntad y alientos de la cristiana realeza, salió triunfante contra los obstáculos interiores y exteriores: contra la rapacidad, envidia, codicia y desalma de los legos, contra la enemiga, no rara, de las autoridades civiles y alguna eclesiástica, contra los ataques de los *mamelucos*, filibusteros protervos que en el Brasil organizaban expediciones de robo, saqueo, devastación y exterminio implacables, destruyendo de raíz reducciones felices y florecientes. Pues aun á este peligro, á esta tormenta, que se condensaba con aciaga frecuencia en la inmediata colonia portuguesa de San Pablo, acudieron los padres, armando á los neófitos, procurando la alianza de indios valerosos y fieles, aun no reducidos, verbigracia, los *chiquitos*, echando en la mejor armada milicia local de América las bases de un ejército colonial, que escarmentó duramente á los *mamelucos*, alejando al fin definitivamente este riesgo continuo, y acudiendo en auxilio de otras comarcas y de las autoridades seculares de menor fuerza militar que las Reducciones, así defendidas por hombres, á quienes su misión de paz no estorbaba el uso legítimo y saludable de la bien constituida fuerza pública al servicio de la religión y del derecho. Fueron las *Reducciones* perfecto modelo de teocracia local, no en el falso y odioso sentido que gratuitamente la dan los escritores liberales, sino de suave influjo y pacífica dirección, ejercida por el sacerdocio, es decir, por los dos padres, el párroco y el vicario, que estaban al frente

dujo en ellas el proyecto de Las Casas, á pesar de la oposición de tan señaladas é influyentes personas como D. García de Loaisa, Cardenal-Arzobispo de Sevilla, el Obispo de Lugo Don Juan Suarez de Carvajal y el Comendador mayor Fran-

de cada reducción. La cual elegía su cabildo (ayuntamiento) por sufragio de los vecinos, confirmado luego, en nombre y representación del rey, por la autoridad superior de la provincia. En esto, en mantener á las *Reducciones* fieles á España, consistieron los planes de dominación y soberanía, cállumniosamente atribuidos á los Jesuitas, que, cuando la expulsión, no soñaron siquiera en hacer la menor resistencia á la infuca y tiránica medida, como hubieran podido verificarlo, y abandonaron resignados aquella heredad cultivada para el Señor y para la misma dicha temporal de los indios, sin más sentimiento que el de ver comprometido y perdido para Dios y para la patria el fruto de tantos desvelos y trabajo.

Y al que juzgue parcial y exagerado el juicio acerca de la más grande de las obras sociales de la Compañía le remitimos á la opinión, no de autores católicos, pero ni siquiera cristianos algunos de ellos, al elogio cumplido hecho por Montesquieu, Robertson y Raynal. Dice el primero (*De l'esprit des lois*, Lib. IV, cap. VI) refiriéndose al prurito de mandar imputado á la Compañía:... «pero siempre será hermoso gobernar á los hombres haciéndolos felices... Ha hecho abandonar las selvas á pueblos nómadas, les ha asegurado la subsistencia, les ha vestido; y aunque con esto no hubiese hecho más que aumentar la industria entre los hombres, habría hecho mucho. Los que quieran establecer instituciones parecidas, introducirán la comunidad de bienes de la república de Platón, el respeto que pedía él para los dioses, el alejamiento de los extranjeros para la conservación de las buenas costumbres.» Por supuesto que no hubo tal comunidad de bienes en las *Reducciones*, sino el más perfecto equilibrio entre la propiedad individual y la comunal, de cuya conservación y razonable acrecentamiento cuidaron especialmente los Jesuitas. Del respeto á Dios nada hay que decir, y en cuanto á la exclusión de elementos extraños á la población india, bien se explica esta medida de precaución para que no pervirtiera á los indígenas la gente criolla, de costumbres y vida bastante extragadas. Robertson (*Historia de Carlos V* libro IV) escribe: «Pero en el Nuevo Mundo es donde los jesuitas han desplegado con más esplendor y utilidad sus facultades para la felicidad de la especie humana... Ellos se encargaron de instruir y civilizar á aquellos salvajes, y les enseñaron á cultivar la tierra, á criar animales domésticos y á construir casas. Indujéronles á vivir socialmente en aldeas; les hicieron apreciar los atractivos de la sociedad y las ventajas de la seguridad y del orden. Así, esos pueblos se hicieron súbditos de sus bienhechores, que los gobernaron

cisco de los Cobos. Aquellas Ordenanzas, inspiradas en una caridad idealista y que, por este mismo *defecto*, son indeleble título de gloria para Las Casas, para el Emperador y para España, abolían las encomiendas, una vez muertos las actuales

»con paternal ternura, como si fueran realmente sus hijos, y así respetados, queridos, casi adorados, algunos jesuitas dominaban á millares de indios.» Finalmente Raynal (*Historia política y filosófica de las Indias*) se expresa así: «Cuando las misiones del Paraguay salieron de manos de los Jesuitas, en 1768, habían alcanzado el más alto grado de civilización, á que pueden ser conducidas las naciones nuevas, y superior á cuanto se conocía á la sazón en lo restante del Nuevo Mundo. Allí se observaban las leyes, imperaba una admirable política, llegaron las costumbres á su mayor pureza, unía los corazones la más dichosa fraternidad, las artes más precisas y las del lujo habíanse perfeccionado, reinando en todas partes la abundancia.»

Y no podía menos de reinar, añadiremos de nuestra cuenta, porque de la virtud surge la moderación de las necesidades y de los anhelos, y con ella las economías y el bienestar material que proporciona el ahorro. La primitiva propiedad comunal de los indios la distribuyeron los jesuitas en patrimonios familiares, de suerte que cada familia tuvo su porción de terreno, origen, materia y estímulo de riqueza particular y pública; pero cuidaron también los padres del patrimonio concejil, reservándole tierras de las poseídas antes por la comunidad, entendiendo que el equilibrio entre el dominio privado y el público es condición de prosperidad para el municipio como para el Estado, y mantiene y promueve la armonía entre un recto individualismo y el amor y servicios consagrados al procomún. De estos bienes, que pudiéramos llamar de *proprios*, según la terminología corriente, se depositaban los frutos y rendimientos en almacenes públicos para las tres grandes atenciones del Gobierno de cada reducción: el culto, la defensa armada y la beneficencia, que se practicaba con la amplitud y proporciones naturales en aquella dichosa teocracia concejil, atendiendo, con largueza propia de la gran familia cristiana de cada pueblo, á viudas, huérfanos y demás menesterosos y desvalidos, y con el correspondiente *fondo de calamidades* á las extraordinarias de epidemias, pérdidas de cosechas y demás estragos.

Si toda la colonización española se hubiera verificado por gente tan penetrada como la Compañía, del espíritu y carácter de toda nuestra constitución y, por consiguiente, del criterio y propósito del régimen colonial, mejor entendido y más humano que registra la Historia, se hubiera pasado felizmente del período y etapa colonizadores al de autonomía, por evolución pacífica y suave, convirtiendo al indio en ciudadano de la patria común

encomenderos conquistadores; suprimían el trabajo personal de los indios, pagándoles el que fuera inexcusable; privaban desde luego de las encomiendas á cuantos hubieran tomado parte en las discordias y turbaciones suscitadas en el Perú entre Pizarro y Almagro; y asimismo declaraban incapaces de poseer aquéllas á obispos, monasterios, hospitales y á todos los que hubieran sido gobernadores, corregidores, oficiales de S. M., aunque quisieran renunciar el oficio. La implantación de las Ordenanzas costó la vida al tenaz, pero heróico y leal, primer Virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, combatiendo en Añaquito la insurrección encomendera de los Pizarros; hubo que suspender la aplicación en los dos grandes Virreinos y revocar pronto las humanitarias leyes; pero ellas mismas atestiguan que en la Metrópoli predominaba el generoso ideal cristiano sobre los interesados consejos de la prudencia, aun siendo recta y no torpemente utilitaria.

Para otras naciones colonizadoras apenas ha habido problema colonizador y lo han resuelto, como Inglaterra, de la manera más sencilla y expedita; la colonia es un mercado, un desahogo de la población y de la industria metropolíticas, y fines tan *modestos* no implican ni exigen planes civilizadores, ni proyectos y leyes de inteligencia y asimilación de razas para elevar, por tutela y pedagogía, á las inferiores hasta el nivel de las europeas. Para el *ideal* económico y mercantil los medios más apropósito son mantener el atraso, la barbarie y el embrutecimiento de los indígenas, exterminándolos, si es preciso, cuando y en la proporción en que estorben: así se

en las más autárquicas de sus regiones; el amor regional y el nacional crecieran juntos y fraternos, conciliando nacionalidad y regionalismo por los más íntimos lazos de conciencia y de afecto; los odios de procedencia y de raza no hubieran separado á la población de las Indias, y, en lugar de la enemiga del criollo, envidioso é ingrato, elemento enconadísimo é implacable fautor de rebelión, hubieran consolidado la soberanía, cada vez más llevadera y más respetuosa del *self-government* americano, el amor y el reconocimiento del indígena, hecho cristiano, libre, digno y culto por la nación de las aventuras más generosas, cosmopolitas y humanas.

evitan las desazones y perjuicios de la concurrencia y los peligros de la emancipación. Este es el tipo general de las colonias inglesas, las *de la Corona*, y que están, á estas fechas en pleno primer período, es decir, en el colonial propiamente dicho, el cual, para Inglaterra, es sinónimo de explotador en exclusivo provecho de la Metrópoli. En esos dominios apenas hay sombra de autarquía ni propia administración, y la fuerza de un poderoso ejército los mantiene sometidos á la Gran Bretaña. Su favorable posición, sus escuadras, el atraso en que tiene á los naturales, que constituyen una raza y aun casta aparte, hacen difícil, improbable y muy lejana la independencia, cuyos elementos en la América española fueron los criollos que gozaban la plenitud de sus derechos civiles y aun políticos, y á los cuales favoreció España para que tornaran luego contra ella las fuerzas y recursos de la civilización de que los dotó. Es verdad que Inglaterra tiene otro tipo colonial, el ampliamente autónomo, rayano de la independencia, (Canadá y Australia); pero este puede decirse como de excepción, y aunque no neguemos que sea un régimen hábil y discretamente entendido y practicado, no lo dictaron la justicia ni un generoso criterio y sentido descentralizadores, sino esa necesidad, también utilitaria, á la cual lo mismo en la metrópoli que en las Colonias sabe plegarse Inglaterra con calculadora flexibilidad para sacar el mejor partido posible de las circunstancias, cuando ha encontrado una colonización más adelantada, como en el Canadá, ó la importancia, fuerza y cultura de la población europea imponen para ésta un régimen más expansivo y autárquico. Porque del sentido jurídico de la Gran Bretaña para tratar y gobernar á los que no son ingleses dá idea bastante y adecuada su conducta secular con la infeliz, despojada y oprimida Irlanda, cuya población, aun después de las exiguas reivindicaciones, logradas á duras penas y á costa de perseverantes y heroicos esfuerzos en el presente siglo, ha descendido en el actual reinado, desde ocho millones de habitantes á poco más de la mitad. Si así procede con la Isla hermana, á pesar de su representación en

el Parlamento, ya puede presumirse cual será su conducta con los infelices bárbaros y salvajes de las colonias. Las represiones militares, ejecutivas en las insurrecciones sofocadas en la India, dejan atrás en crueldad extremada á las *clásicas* matanzas de los tiempos anteriores á Cristo.

En la pérdida de las colonias de tierra firme la menor culpa fué de España. Cuando más puede imputársela cierta apatía y pasividad, que no la dejaron desarrollar en el gobierno los gérmenes de legítima autonomía, contenidos en el espíritu y en los principios de nuestro organismo y derecho coloniales, y no haberse puesto á la cabeza de un movimiento asegurado de evolución regionalista, franca y ampliamente descentralizadora, á fin de salvar pacíficamente, por etapas y sin peligrosa precipitación, la distancia entre el período de colonización y el de autonomía. Pero ¿acaso la Metrópoli procedió de distinta manera respecto de su propia constitución pública, desenvolviendo sus elementos en proporción de la virtualidad que encerraban, y con el progreso correspondiente y adecuado á los siglos de existencia nacional? ¿Nó se paralizó aquí también la evolución de las libertades populares, del gobierno representativo, de la misma autarquía de la nación, la cual supone la armonía entre los esenciales derechos del poder soberano y la acción gubernativa del pueblo, ejercida por la variedad y concierto de los distintos órganos, individuales y colectivos de la sociedad? ¿Y no son también circunstancias atenuantes, además de la distancia y la dificultad de las comunicaciones, los apuros interiores y exteriores, las guerras civiles y separatistas en la misma Península, las continuas complicaciones, empresas y desgracias internacionales, todo, en fin, cuanto dentro y fuera embargaba y encadenaba nuestra actividad en asuntos más propios y en más urgentes y calamitosas atenciones, sin apenas culpa ni responsabilidad por parte de España? La misma desproporción que hubo siempre entre nuestro espíritu y alientos y nuestros materiales recursos, entre nuestro poder peninsular y nuestra portentosa, providencial posición y pasajero dominio en Europa, ese mismo

desnivel y desequilibrio hubo entre la extensión, población y fuerza de la Metrópoli y sus vastísimas posesiones ultramarinas. Puede decirse que sólo las mantenía bajo el cetro español la bondad y la justicia de nuestro sistema colonial y la paternal benignidad de la monarquía española.

Pero esta situación era muy difícil de mantener y prolongar desde que la raza hispano-americana tuvo conciencia de su cultura y, sobre todo, del poder y de la posición e influjo sociales que la daban las riquezas adquiridas al amparo de la colonización y de las leyes españolas y que casi exclusivamente estaban en manos de los criollos. Cuando llega á tales alturas la población colonial, es muy difícil que no la cieguen la presunción y el orgullo, y no la tienten á romper los vínculos con la patria lejana, máxime si atraviesa difíciles pruebas y tremendas crisis, y la ven enflaquecida, decadente y amenazada en su prestigio y hasta en su misma existencia. Entonces el criollo, que es por lo general ingrato y altanero, cierra la memoria y el corazón al recuerdo del incalculable beneficio, y busca en la independencia colonial, más que la prosperidad y grandeza del nuevo Estado, la satisfacción de los apetitos de mando, de ambición, de vanagloria, y el desquite de la consideración inferior en que estuvo respecto del europeo, aunque fuera tan generosa la Metrópoli que no le vedara la ley el acceso á los empleos y cargos públicos del Estado, ni á los beneficios de la Iglesia, y aun para unos y otros diera cierta preferencia al americano sobre el penínsular, como disponía nuestra legislación de Indias (Cédulas de Carlos V y de los tres Felipes, ley XIV, Título II, Libro III de la Recopilación de leyes de Indias). Si de hecho fueron pospuestos á los españoles, aunque no en la proporción que han inventado los enemigos de nuestro dominio colonial, fué, porque ya hacía tiempo que se había pronunciado la separación y enemiga entre los naturales y los europeos, por culpa de unos y otros, y desconfiaba, no sin razón, España, de la lealtad y adhesión de los criollos, temiendo que fueran instrumento y coyuntura de satisfacción de rencorosas pasiones el mando y el poder.

De esa raza fueron los dictadorzuelos que, desde el comienzo del movimiento separatista, mostraron como las Carreras de Chile, los pequeños Robespierres que inauguraron con asesinatos la Revolución de Buenos Aires y otros, sus aptitudes de tiranía, y los que con ella, cual el Doctor Francia, afligieron luego á las colonias emancipadas.

Esta desapoderada ambición y rencoroso despecho de los criollos erán, lo menos desde un siglo antes, materia y tierra bien dispuestas para que fructificara el separatismo, que pusieron al fin en fermentación sediciosa las nuevas ideas liberales, propagadas especialmente por los extranjeros y los hijos del país, *educados* en Europa y afiliados á las logías masónicas del viejo mundo. Un diluvio de libros y folletos enciclopedistas y revolucionarios, no menos que la superficial y extraviada erudición de gárrulos y pedantes, presumidos y crueles, *intelectuales*, iniciados en la masonería y esclavos de ella, ahogaron, bajo los alardes y violencias del radicalismo emancipador, los deseos y esfuerzos de la gente más moderada, que deseaba meras reformas más ó menos razonables y sanas, y no faltaron, aunque en proporción mínima, verdaderos conservadores, que quisieron, con la separación, sustraer á las colonias del contagio liberal que introdujeron en España los miserables gobiernos sustitutos de la desertora realeza. Y como si esto fuera poco, el liberalismo, de suyo sedicioso y esencialmente separatista, y los hombres y partidos liberales de la Península favorecieron cautelosa ó abiertamente el alzamiento americano, que debió, más que á los franceses, á Riego y al ejército minado y sublevado por las logias, el triunfo definitivo.

La revolución americana, como la de Europa, fué principalmente obra y empresa de la burguesía *ilustrada*, y para el provecho de una parte mínima de ella; porque en las colonias españolas el indio, sin mezcla mestiza, permaneció fiel á la patria, mediante la monarquía, reclutándose en la población indígena, cuya adhesión duró aún después de consumada la independencia, una buena parte de los reducidos ejércitos con que la Metrópoli hacía frente á los rebeldes.

De aquí la dificultad de que, llegadas las cosas á tal extremo, aplacárase la revuelta con la más amplia autonomía, la cual, como todas las mudanzas considerables, debe ser producto del tiempo y de la evolución más ó menos rápida, no cambio repentino, arrancado fuera de sazón por los sucesos que no se supo preveer, y cuyo curso tumultuoso y embravecido no se ataja con tardías, inconsideradas concesiones, hijas de la impotencia y del miedo.

Después de todo ¿á quién sino á España debió la revolución americana la fuerza y los recursos del separatismo? ¿quién organizó aquellas milicias locales, verdadero ejército colonial, convertido en ejército rebelde, y cuyos jefes criollos provocaron y acaudillaron el movimiento, erigiéndose en dueños y dictadores de los nuevos Estados? ¿á quién debía América aquéllos cabildos libérrimos, de que los cabildantes criollos hicieron juntas revolucionarias, que también se erigieron dictatorialmente en gobierno sin título alguno, y por irrisoria *representación* del pueblo, cuando no les imponía éste la inalienada soberanía callejera, movido y excitado por los milicianos y doctorzuelos declamadores y vacíos, remedo y tipo de la mesocracia indocta, desalmada é inmoral que hizo las revoluciones europeas?

Hay que confesar que era aquella gente, ya contagiada del liberalismo y digna servidora de el, materia poco apropiada para descentralizaciones y autonomías efectivas y verdaderas, fundadas en el derecho cristiano y educidas de la virtualidad y la esencia del derecho nacional, sino más bien sujeto apropiado para rebeliones anárquicas y desaforados despotismos. Aun suponiendo que España hubiera tenido un plan autonómico maduramente pensado y resuelto ¡con cuánto pulso y circunspección tendría que haberlo planteado por falta de personas aptas para realizarlo, y que lo hubieran convertido pronto en independencia absoluta! ¡Gallardas muestras de *justicia, prudencia y humanidad* dió en el gobierno de las emancipadas repúblicas la burguesía criolla, para que no fuera su condición otra circunstancia atenuante más del *despotismo*


ilustrado en que las mantuvo España! Con harta mayor cordura política procedió la monarquía absoluta que el absolutismo liberal, tratando de reprimir el alzamiento, cuando desgraciadamente no era oportuna otra conducta que la de rechazar la fuerza con la fuerza, y tenía que resultar contraproducente, y un nuevo combustible del incendio, la autonomía, aun no adoleciendo del absurdo y aberración liberales y siendo fórmula y grado máximo de una legítima libertad regional (1).

(1) En América, como en la Península, había llegado el tiempo de reformas, á la par que decididas prudentes, tradicionales en el fondo y la substancia, innovadoras y aun radicales en la forma y en la cuantía, para llenar con urgencia y en las proporciones indispensables, las deficiencias y el vacío de una tradición paralizada y aun fuera de las vías históricas del espíritu, del carácter, de la índole de la nación. Había que erigir lo más pronto posible, en España el gobierno representativo, en América la autonomía colonial. Pero de la apatía y omisión respecto de esta último no es España la principal responsable, sino la misma población criolla, que se encargó luego de hacer patente cuan poco capacitada y dispuesta se hallaba para el *self-government*. Siquiera la monarquía absoluta tuvo siempre un criterio fijo, el que es propio de la etapa colonial; mientras que los Gobiernos liberales de la Metrópoli han fluctuado y vacilado siempre entre el asimilismo y la legislación especial, para decidirse por la autonomía á última hora, bajo la presión y coacción vergonzosas del extranjero y del rebelde, y cuando el régimen autonómico, aun sin la guerra civil y la exterior, que estaba encima, era la independencia en inmediato plazo.

Porque la autonomía del sistema es separatista por esencia, como él, y vino cuando la falta de espíritu nacional determinaba la disolución indefectible, que ya avanza en la Península, y que en las Antillas tenía que estar harto más adelantada, no solo en razón de la naturaleza y circunstancias en que se hallan las colonias, sino por haber los gobiernos liberales convertido lo que nos quedaba de imperio ultramarino en mina, entregada á la explotación escandalosa del más inferior y despreciable personal de los partidos turnantes, en cloaca donde desaguaban las heces de una sociedad en descomposición y de la burocracia más inepta y corrompida que haya podido abortar el parlamentarismo en época y parte algunas.

CAPÍTULO IV

LAS RELACIONES ESTRICTAMENTE NACIONALES—LA CONFEDERACIÓN—LA FEDERACIÓN—LA MERA UNIDAD DE SOBERANÍA.



1. El método, hasta aquí adoptado y seguido, exige estudiar en el presente capítulo las relaciones del Estado con la nación, asunto verdaderamente político, á diferencia de los anteriores, que, si tienen cabida en los tratados y cursos de la asignatura, no es por un fundamento racional, sino por los motivos circunstanciales repetidamente expuestos.

Después de haber determinado en el segundo capítulo del primer libro del tomo primero los conceptos de nación y Estado, y en el octavo de los mismos tomo y libro los fines de la nación y las relaciones políticas, procede ahora reanudar el hilo de la materia propia y exclusiva del Derecho político, desenvolviendo la doctrina, allí solo iniciada, esto es, fijando aquí qué clase y cuantía de cooperación y de intimidad sociales engendran, forman y constituyen la sociedad pública más perfecta, en la cual inmediatamente se concreta y diversifica la sociedad universal. Sin esto, no podrían determi-

narse los oficios y funciones del Estado en la nación, teoría también directa y propiamente política, aunque no la única ni primera, porque el Estado, en la acepción estricta en que venimos estudiándolo, es solo un órgano, no el órgano de acción nacional ó política, como es solo un órgano, no el órgano de las demás funciones jurídicas en general.

2. Dando por supuesto y probado en Ética y en Derecho natural que las relaciones nacionales no han de ser de inferior condición que las de las otras sociedades completas, en cuanto á la permanencia indefinida del vario y complejo vínculo social que la nación implica y exige, hay que proceder en este punto, debatidísimo y aun no resuelto, con la mayor circunspección, haciéndose cargo de las dificultades que la resolución presenta. Las cuales son la siguientes: *a)* la de orientarse en la experiencia histórica, que ofrece grados y formas tan distintos de unidad y solidaridad nacionales; *b)* la indeterminación de los límites que separan á ciertas alianzas internacionales de lo que se llama *confederación* de Estados *independientes*; *c)* la no menor vaguedad y fluctuación de caracteres distintivos de la mayor autonomía regional y de la menor unidad nacional posibles respectivamente; *d)* la distinción real, hoy muy esparcida y corriente, entre nación y Estado, no solo en concepto de todo y parte, cuando se considera el Estado en su acepción más estricta y antonomástica, sino cuando se toma la palabra en su más ámplio sentido, sinónimo del de sociedad pública, *absolutamente* autónoma en el orden temporal; de tal

manera que nación, según este concepto, implica mayor intimidad que Estado, siendo, en cierto modo, el Estado una nación menos unida y la nación un Estado de unidad más perfecta.

No creo que la mera unión militar y aduanera, bien que de hecho constituyan un Estado intermedio entre la alianza temporal, para estos fines, de naciones independientes, y la verdadera unidad nacional, aun de máxima descentralización federativa, pueda decirse nación, y por consiguiente Estado en el respecto y sentido en que estos términos son sinónimos. En efecto; la alianza defensiva y ofensiva y la organización y dirección jurídica y técnica para estos efectos, aun siendo concertada, no á plazo, sino *in perpetuum* y con expresiones más ó menos explícitas, no abarca más que una materia, fase y respecto de la vida social, por importante que sea; materia y fase que, además de adjetivas y de pura relación, no limitan la soberanía de las sociedades confederadas en todos los demás órdenes de la vida y del derecho, en los cuales las naciones y Estados, así unidos, pueden expresar y traducir una personalidad social y política bien propia, característica y diferente. No pasando de ahí la cooperación y el auxilio, no puede decirse que haya todavía una sociedad nacional; porque, si bien la confederación coopera directa é igualmente á la existencia, vida é integridad de las comunidades confederadas, no es en todos los órdenes y medios, ni coopera á la prosperidad de ellas en equitativa proporción; y sabido es que la prosperidad es fin de las naciones, como de cualesquiera otras sociedades y aun personas en general; que éste bien no debe ser

para una ó más partes, sino para el conjunto, so pena de tiranía, y que en la confederación, puede acontecer que unas comunidades prosperen y adelanten, mientras que otras se estanquen y aun retrocedan y decaigan hasta la anulación y la ruina.

De un modo análogo y con el mismo criterio debe discurrirse respecto de la unión aduanera. La cual, aunque tenga más cercana conexión con la común prosperidad, en cuanto implica cierta cooperación directa á ella en el orden económico, ni aun siquiera en este es total y capaz de promover por sí sola eficazmente la proporcionada riqueza de la confederación, y hasta es posible que tal comunidad arancelaria y la libertad comercial, que supone dentro del Estado confederativo, produzcan el mismo efecto que en las mismas relaciones internacionales, esto es, que aproveche á un Estado á costa de la pobreza y aun bancarrota de los otros. Aun, dando por supuesto que el *zollverein*, pactado á perpetuidad, tuviera, *per se*, virtud bastante para producir en las debidas y justas proporciones la prosperidad material de los Estados, no es suficiente esta comunidad de intereses secundarios, y en un solo orden de la vida, á determinar ni expresar las más elevadas y complejas unidad y cooperación espirituales que toda sociedad completa exige, y, por lo tanto, también la más perfecta de ellas, la sociedad civil, en la cual la mayor autonomía relativa de las sociedades componentes no obsta á la intimidad y solidaridad morales y fundamentales de la nación, cuyo ideal debe ser una unión tan estrecha en su clase y esfera, como la de la familia en la suya, y una cumplida armonía entre

tal espíritu patrio y la autarquía máxima de todas las personas *sui juris*, integrantes del todo nacional.

Lo que hay es que la confederación aduanera y la militar sobre todo, no se conciertan entre comunidades públicas limítrofes, por el solo hecho de la contigüidad y las relaciones internacionales, que suelen ser muchas veces las de una vecindad molesta y recelosa, y aun hostil; sino que el vínculo confederal, por limitado que sea, es producto y expresión de una comunidad de ideas, sentimientos é intereses más radical y extensa, que se determina y traduce en dos esferas y respectos sociales, en la imposibilidad de abarcar otros. En una palabra, la confederación es la manifestación, etapa y organismo, iniciales de una nacionalidad, que no ha alcanzado la plenitud de la perfección en el ser y en el acto, como podía también ser el resto y residuo de una nacionalidad, no del todo deshecha, pero que no puede conservarse en el grado de unión social anterior.

Mas ni en uno ni en otro caso es lo regular y frecuente que el mero interés militar ó comercial, ni separados ni juntos, determinen, por su propia entidad y fuerza, las uniones confederales; estos dos estímulos y móviles; escuetos y aislados de una alta y compleja conveniencia moral, pueden engendrar alianzas más ó menos estrechas, tratados de comercio más ó menos comprensivos y favorables, pero no los conciertos de indefinida y perpétua permanencia, que es, lo que, por convencional uso, expresa la palabra confederación (*confederatio*), gramaticalmente no distinta de federación (*fædus*) y de los correspondientes términos castellanos *alianza*, *junta*, etc. y demás sinónimos.

3. Pero, si es probable que las confederaciones no sean, *per se*, naciones y, por consiguiente, estados en el respecto en que estos dos términos son sinónimos, es también difícilísimo determinar, donde empieza la unidad estrictamente indispensable para la existencia nacional en la forma y grado *federativos*, que contengan y expresen la comunidad de vida y de derechos, no tutelar ni abusiva, sino esencial á la sociedad civil; y habiendo de abordar el problema, sin el precedente y auxilio de la fijación previa en el derecho privado, de la esfera de la familia, y en derecho público interno, de las del pueblo, provincia y región, es más árduo el punto y más ocasionado á error.

Por esto, en vez de señalar y enumerar á priori y en orden categórico, los bienes é instituciones propiamente nacionales, es más seguro ir indagando y recorriendo otros grados de intimidad social, más amplios y estrechos que los de confederación hasta aquí examinada, y á partir de la meramente militar y aduanera, ver de descubrir donde empieza una federación íntima y comprensiva.

La unidad monetaria y la de pesos y medidas encierra y expresa una comunidad económica más extensa é íntima que la aduanera y arancelaria, pero que, circumscripta á un orden particular é inferior de la vida, no arguye la cooperación social propia de las sociedades completas, y, por lo tanto, de las naciones. Es más; no repugna que naciones independientes y ni siquiera confederadas para el fin militar, concierten una inteligencia económica permanente, ó de indefinida duración que no se limite á los aranceles y adua-

nas. Tal concierto económico podrá argüir más frecuencia y amplitud de relaciones, no sólo mercantiles sino de toda industria en general, dando ocasión al desarrollo del humano comercio en toda la extensión moral y social de la palabra, pero todavía no arguye ni *per se*, implica verdadera y rigurosa unidad nacional, que es colaboración para más superiores fines que los exclusivamente utilitarios y materiales.

Por esto, aunque la asociación más estrecha en todo el orden de los bienes económicos llegara, (caso raro é improbable), hasta traducirse en un código de comercio común, mientras no fuera este la obra legislativa de una común soberanía, y, por lo tanto, de una nación ya formada, no puede decirse que el mismo cuerpo legal mercantil constituya y signifique, por sí sólo, la existencia ya bien determinada de un Estado. Este código tendría el carácter de un tratado de comercio circunstanciado y minucioso, que sólo se distinguiría de los otros tratados en la cantidad y extensión de las materias y en la perpetuidad, confederativamente pactada, entre naciones todavía independientes.

Para que haya nación y Estado, y no mera confederación de Estados y naciones, es preciso una comunidad más íntima que la de mera humanidad, no para uno ni varios fines, sino para todos los de la vida, y por consiguiente, una norma fundamental idéntica para tales relaciones, la cual es, á la vez, expresión y requisito de esta unidad más estrecha. Es por lo tanto atención, exigencia y condición de la sociedad civil *a)* un mismo derecho privado interregional, que, respetando el de cada región, se limite á determinar la norma de las

relaciones privadas entre las personas de región distinta, ó como si dijéramos, un mismo derecho civil *substantivo y adjetivo*, no total, sino circunscripto á lo que, en el caso análogo de derecho internacional, se llama teoría de los estatutos; *b)* dada la naturaleza de las relaciones mercantiles, el actual desarrollo del comercio y las facilidades y demás circunstancias en que hoy se verifica, no será aventurado incluir entre los asuntos nacionales el código, ó mejor dicho, la legislación mercantil. He aquí los dos puntos y manifestaciones fundamentales y capitales de la nacionalidad en el orden privado, la cual implica la *interregionalidad*, que es expresión de ese vínculo más estrecho que el de la sociabilidad general ó la meramente confederativa, y da á los nacionales de las distintas regiones idéntica consideración y estado en todas y en cada una de ellas, y por consiguiente, les atribuye también para estos fines la *interprovincialidad* y la *intermunicipalidad* en las respectivas sociedades provincia y pueblo, abarcando los tres estados; *a')* la relación entre las partes, ó sea, entre las varias personas constitutivas de región, provincia y concejo; *b')* la relación con el todo y su organismo autoritario ó gubernamental.

La comunidad, unidad y armonía entre las personas regionales exige y supone la de las regiones mismas y, por lo tanto, la existencia de un derecho interregional público, para que sin perjuicio de la personalidad y autarquía de las regiones, *a)* las mantenga unidas como parte de un todo social superior, la nación; *b)* para que establezca, regule y sancione el deber y el derecho que tiene el conjunto regional, la sociedad

civil, de auxiliar á cada región á mantener su existencia mediante el orden público, siempre y en lo que lo necesiten y por sí mismas no puedan lograrlo; *c*) para dirimir todas las competencias y contiendas, que entre las regiones se susciten por cualquiera respecto y en cualquiera orden de la vida; *d*) para juzgar y resolver, según el correspondiente estatuto, los litigios y cuestiones de las personas físicas ó morales que sean súbditas de regiones distintas, siempre y en lo que no se sometan las partes contendientes, de acuerdo, á una jurisdicción regional de cualquiera de las regiones nacionales.

La nacionalidad, pues, supone y exige no solo la interregionalidad, sino la *superregionalidad*, y una y otra contienen y necesitan *a*) la unidad del sistema monetario de pesos y medidas; *b*) una cierta nacionalización de la comunicación interregional (correos, telégrafos, teléfonos) y de las vías generales de locomoción (carreteras, ferrocarriles, ríos, canales.)

Estas son las materias y relaciones substanciales é interiores de la nacionalidad; pero la existencia de otras sociedades independientes, ora ligadas por los vínculos de la mera sociabilidad, ora por los tratados, ora por el acuerdo y lazo confederativos, incluyen en el orden jurídico de la nacionalidad las relaciones internacionales, la *internacionalidad* diríamos, si el termino no fuera equívoco y ocasionado á error, y que aquí significa el asunto federativo *a*) de la relación jurídica con otras naciones, en cuanto afecta directa y solidariamente al conjunto nacional, formado por todas las regiones (derecho internacional público, que mejor llamaríamos internacional político) *b*) en cuanto concierne á los in-

tereses no directos de las naciones, sino de las otras personas nacionales (derecho internacional privado, término poco exacto, porque supone que tales intereses solo pueden ser los de los individuos y de las familias.) Las primeras relaciones son *a'*) ó todas las normales, ordinarias y corrientes ó las normales, especiales y extraordinarias (alianzas, tratados de comercio, postales, de navegación etc.) *b'*) anormales ó de guerra (declaración, realización y dirección de ésta, celebración de la paz, suspensión de hostilidades, convención de armisticios, etc.)

Y no hay necesidad de decir que la entidad y trascendencia naturales y sobrenaturales, temporales y ultraterrenas de la región cristiana y la existencia de la sociedad divina instituida por Jesucristo, la Iglesia Católica, hacen supremo asunto nacional la tan varia y compleja relación de la Iglesia con el Estado, al tenor de la doctrina expuesta en el Capítulo I del Libro II.

Para todo lo cual las naciones necesitan, como las demás sociedades y aun personas, varios medios que no son otros que los que toda existencia individual y social exigen: *a)* el patrimonio ó hacienda, es decir, una propiedad de varias clases y formas con que pagar las atenciones nacionales federativas; *b)* los recursos de represión necesaria para mantener la existencia nacional y por lo tanto *a')* un código penal federativo que defina y pene los delitos, que afectan directamente á la existencia, integridad y honor nacionales; *b')* una fuerza armada, que defienda contra cualesquiera atentados interiores ó exteriores esos supremos bienes de la nación.

4. De la doctrina expuesta en los anteriores números se desprende, aunque no de un modo explícito y categórico, que no aceptamos ni usamos los términos *confederación* y *federación* con la sinonimia que les atribuye el uso corriente y aun el semitécnico, justificado por la derivación y valor etimológico de ambas palabras, sino con la distinción, que, por la importancia del asunto, hay que señalar más detenidamente.

Se ha considerado la confederación como *alianza acordada á perpetuidad, de un modo más ó menos explícito entre naciones ó estados independientes para determinados fines sociales* (generalmente la acción armada y el comercio); y por lo tanto, la confederación no constituye la sociedad civil superior, por no abarcar el concierto social todos los bienes de la vida en su comprensión ya que no en su extensión. Por lo cual, si bién la confederación suele ser históricamente comienzo de nación ó residuo de ella, no hay nación, sin embargo, mientras no haya *federación*, ó sea, *la unidad social que procede del acuerdo y cooperación más íntimos y armónicos que los internacionales, así en la esfera privada como en la pública y respecto de todos los bienes ó fines humanos*.

Y ahora surge el problema de si la *federación* es la forma más rudimentaria é imperfecta de unidad nacional, el inmediato desenvolvimiento de la confederación, ó si, como pretenden cierta escuela y partido, es el ideal de la constitución de la sociedad civil y la expresión completa y cumplida de su unidad.

En verdad que hay otros varios respectos de interés y, por consiguiente, de unidad que los enumerados como estrictamente precisos para la existencia de la so-

ciudad nacional, y que la federación, bien que contenga y exija comunidad para todos los fines humanos, no la requiere en toda la extensión y multiplicidad de sus fases. Así considerada la cuestión por este aspecto, parece la unidad federativa unidad embrionaria, elemental y, por consiguiente, atrasada é incompleta. Mas como quiera que todo lo no incluido, por ley ó por costumbre, en la esfera de la federación, queda encomendado á la acción y autarquía de las regiones, parece la unidad federativa la más favorable y propicia á la personalidad y *self-government* regionales, y, en tal concepto, conciliación armónica entre la mayor libertad de las partes y la unidad y solidez del conjunto. He aquí porqué es tan grave la duda y tan difícil la solución, que no corresponde al texto elemental, y que tampoco presumo haber hallado en las indagaciones de ampliación. Aquí solo procede señalar los siguientes corolarios: 1.º, la federación es legítima, 2.º la federación es cosa extrínseca á las formas de gobierno, 3.º aunque el origen y título de la federación puede ser y es el pacto, no repugna una unidad federativa, concretada por otros modos, tambien naturales y legítimos, por ejemplo, la fusión de derechos soberanos y aun la misma conquista, cuando el conquistador es tan humano y discreto que cree poder respetar, sin peligro, la mayor autonomía posible al pueblo vencido.

5. No debe concluirse este capítulo sin una especial referencia á la llamada *unión personal* ó sea á la *que existe entre dos ó más sociedades públicas completas por el solo hecho y elemento de una soberanía común.* ¿Basta ella para la unidad nacional?

La *ratio dubitandi* consiste en que la soberanía no implica *per se* más comunidad que la de un órgano común de derecho, no la de relaciones jurídicas íntimas y habituales, surgidas del fondo mismo de la vida social; pero cuando esta soberanía posee y ejercita sus esenciales atribuciones ¿no puede dar á los actos sociales la unidad exterior necesaria de cooperación al íntegro fin nacional, acaso con más extensión é intensidad que en la federación misma?

Procedamos con método eliminativo, por decirlo así, y con las distinciones y anticipaciones necesarias. Según el concepto, hoy tan extendido, de la llamada *soberanía popular*, bien que reducida de hecho á un sufragio electoral más ó menos ámplio, la unidad nacional, por el solo elemento y vínculo de un gobierno común, será perpétuo asunto de derecho constituyente ejercitable y ejercitado, en llegando la ocasión, en que tal función, fundamentalmente renovadora verifique el *pueblo soberano* de las respectivas sociedades públicas, verbi-gracia Austria, Hungría, Bohemia, Grecia y Noruega; España y Portugal. Pero si tal soberanía fuese legítima y real, que no es lo uno ni lo otro, resultaría que no es posible dentro del sistema semejante cuestión, porque lo mismo en tiempo y época normales de soberanía constituida que en período constituyente, el órgano gubernamental, creado ó confirmado y consentido por el pueblo soberano, y mero mandatario y representante de él, supone una comunidad radical en el espíritu público de las respectivas sociedades, y, por lo tanto, todas las funciones y medios comunes de unidad, ora meramente federativa, ora tan centralista y extensa



como pluguiera á las soberanas colectividades mandantes.

En el supuesto doctrinario de la *cosoberanía* de la realeza y del pueblo, sean cualesquiera las proporciones y modos en que estas entidades *compartan* el poder supremo, la conclusión es idéntica, sin más diferencia que la de la teórica contradicción ecléctica de tal cosoberanía y los naturales é indefectibles obstáculos con que tropieza en la práctica, los cuales han de manifestarse en este punto no de distinta formal manera que en las demás materias y órdenes de la *común ordenación* de las Cortes con el Rey. Es decir, tampoco hay cuestión, porque la unidad no es solo en la persona del soberano, sino que, mientras gobiernen de acuerdo rey y pueblo, aunque no haya un mismo parlamento, la unión resultará de las respectivas concordias del monarca con sus naciones. Y cuando surjan conflictos, se *resolverán* por los medios y expedientes que el derecho nuevo tiene *previstos y acreditados*; y, si la *solución* consiste en el destronamiento, ya no habrá problema, ó se plantearía en los mismos términos que en el supuesto de la soberanía popular sin el aditamento contradictorio de la realeza legítima.

Donde y cuando ésta se halle provista de su natural y suficiente prerrogativa soberana, y, sobre todo, si cuenta con la potencia moral y el prestigio de la autoridad y de la persona, como es frecuente que suceda en la monarquía tradicional, entonces la armonía de ésta con el espíritu público y la consiguiente cooperación, psíquica y efectiva, de los pueblos no extraviados ni perturbados por el liberalismo, producen, por lo general y habitual.

mente, una comunidad nacional más honda de lo que aparece á primera vista, y es la unión personal, cuando menos, la base, la primera etapa, y el primero y rudimentario elemento del organismo nacional. Falta todavía, sin embargo, la unidad federativa, á la cual puede ser la confederación tránsito natural y menos brusco, aunque no necesario ni inexcusable. En tal situación estuvieron, hasta el advenimiento de la dinastía de Borbón, los varios Estados ibéricos, y continuaron Navarra y las Provincias vascongadas hasta el titulado Convento de Vergara. España, en los períodos más prósperos y gloriosos de su historia, no fué siquiera una confederación de monarquías, sino varios Estados regidos por un mismo monarca.

1. La importancia y trascendencia de determinar las funciones nacionales, y, entre ellas, las que, sin dejar de serlo, corresponden ora al Estado, ya á otros órganos individuales y colectivos, no puede ocultarse á los que hayan seguido con algún detenimiento y reflexión la doctrina de los capítulos de este y los anteriores libros. Tales entidad é interés acabarán de penetrarse en todo el curso ulterior del tratado, y, en particular, en el capítulo siguiente.

2. El que á la confederación se la pueda llamar *Estado* y no *nación* no contradice la teoría de la identidad real de

ambos términos en una de las acepciones del primero, tal como fué expuesta la teoría en el Capítulo II del Libro I, porque el estado en su sentido jurídico general se predica de toda persona física ó colectiva, y con más motivo que de otras muchas personas morales, de la comunidad confederativa que es la más cercana á la nación. Pero, si á la confederación se la llama Estado en la acepción en que no se distingue á *parte rei* de sociedad civil, esto es, en el sentido de Estado nacional, opino que hay yerro notorio: el mismo, aunque no en igual grado, que si se diera tal nombre á la mera alianza temporal. Hay nación cuando hay *Estado* y viceversa, y si es aceptable que se llame así á las confederaciones, es porque la perpetuidad de la alianza, el abarcar ésta más de un fin y la unidad moral interna y profunda que, por lo común, arguye y expresa el vínculo confederativo, pone á la confederación en los mismos confines de la nacionalidad, de la que ya hemos dicho que es iniciación ó resto, lo primero generalmente. Repito que entre el orden internacional y el federativo no hay concepto intermedio, como no lo hay entre la independencia, esencialmente compatible con la confederación, y la mayor autonomía, siempre relativa, de las regiones federales (1).

Cuando las colonias rompen el lazo de unión con la metrópoli, no queriendo ellas ni pudiendo ésta mantener ni siquiera el grado de máxima descentralización federativa, en el interés de una y otras estaba el conservar ó establecer, cuando menos, las relaciones confederales militar y comercial, y triunfar así de los errores, de las prevenciones, de los odios y resentimientos recíprocos y hasta del tiempo, que las tuviere se-

(1) Sabido es, que aun la independencia nacional no puede decirse absoluta, como quiera que hasta las más poderosas naciones se necesitan recíprocamente, y están ligadas entre sí por más de un concepto. Los meros tratados son limitaciones de la independencia de los pueblos, como los contratos de los individuos *sui juris*, por elevadas que sean su clase y posición. Al definir en el citado capítulo del primer libro la sociedad civil independiente, manifestamos en qué consiste la independencia, esto es, la menor dependencia de las naciones.

paradas años y aun siglos. Ningunas sociedades mejor dispuestas á esta relación más estrecha que la madre patria y los que fueron sus establecimientos coloniales, cuando sosegadas las pasiones del separatismo, y borrado el recuerdo de la guerra y de sus violencias, renacieran el amor de la madre y la gratitud de las hijas, y estos afectos y disposiciones se concretaran y perpetuaran en un sólido acuerdo confederal (1).

3. Toda sociedad, de cualquier clase que sea, es para los individuos, aunque de la misma prosperidad, que les proporciona y presta, resulta naturalmente la del conjunto, perfeccionándose así, en acción é influjo recíprocos y sucesivos, el todo y las partes constitutivas de él. De lo cual se deduce que el ser y la unidad nacionales son ante todo y principalmente, para el legítimo interés y provecho de todas las personas físicas y sociales, y, en último término, para los individuos de que se componen estas últimas; bien que de la potencia y eficacia de los respectivos órganos surjan la grandeza y virtud de los correspondientes organismos, que á su vez las comunican y trasfunden nuevamente á sus miembros. Por esto, la raíz de la comunidad nacional, y, por consiguiente, la causa

(1) Tales debían ser uno de los primeros cuidados y atenciones de un gobierno español, verdaderamente nacional: favorecer y estimular la renacida inclinación que sienten hacia España los elementos más juiciosos y sanos de las que fueron sus colonias, y que se extravía y pierde por falta de fomento y dirección, imputable principalmente á la viciosa política interior y exterior del liberalismo español y americano. De esta única reconquista posible de España en América no sería aquella la que obtuviera el principal provecho, porque sólo la confederación ibero americana podrá contener el invasor influjo yanqui en las repúblicas latino ibéricas, contrarrestar la hegemonía sajona en todo el continente, y no sólo cerrar el paso á las *expansiones* de los Estados Unidos, sino rechazarlos del corazón mismo de México y de su golfo, convertido ya en mar de la Federación anglo-americana. Los tratados de comercio, navegación y comunicaciones y los de arbitraje, cada vez más fraternales y extendidos entre España y la América española, podían ser la preparación precursora y el paso inmediato al pacto confederal.

final de su existencia hállanse en el fondo mismo de la vida civil, para la cual es la vida pública y política, y no respecto de este ni el otro fin, sino de todos y en la variedad de sus fases. Así es, que la nación cimenta su unidad en las profundidades de esa vida privada, á cuyo provecho legítimo sirve de condición y medio toda sociedad, en orden ascendente, desde la familia hasta las que en el orden internacional representan los tratados ó las confederaciones; y, por esto también, aunque sean más que las expresadas, las materias y relaciones jurídicas de carácter político, esto es, nacional, no es absolutamente preciso que estén incluidas en la constitución federativa, ó sea, en el organismo expresivo de la estricta unidad necesaria para la existencia de la nación. He aquí porqué, si bien en materia de montes, de minas, de aguas, de sanidad, etc., hay también una parte y respecto de inmediata y solidario interés nacional, no pueden considerarse esencialmente federativos, como los consideró el proyecto de Constitución de 1873, que inspirado, á pesar del *sinagmatismo, conmutativo, bilateral é intermedio*, en el vicio centralista del derecho liberal, incluyó entre las *facultades correspondientes á los poderes públicos de la federación* todos los códigos generales, la Universidad federal y cuatro escuelas normales superiores de agricultura, artes y oficios (1).

Con lo expuesto puede uno orientarse algo más para la solución del problema planteado en el número 4 del texto, acerca de si la federación es la más imperfecta unidad nacional, ó por el contrario, el ideal de ella. La experiencia histórica más inclina á lo primero, cuando presenta federaciones que empie-

(1) El Título V de dicha abortada constitución tampoco distingue, dentro de lo nacional, lo que incumbe al Estado y lo que es de acción de otros órganos jurídicos, aun en materia política, confusión igualmente socialista; así es, que atribuye al Gobierno todo lo concerniente á las *fuerzas de mar y tierra*, sin tener en cuenta que, en lo militar como en lo contributivo, no toda la legislación y ejecución corresponde á los poderes centrales, sino á las otras sociedades públicas inferiores, que deben entregar sus respectivos capos de la manera que mejor les parezca, siendo justa.

zan por confederaciones, pactadas en fuerza de la dura ley de una necesidad apremiante de defensa, por ejemplo, los cantones del Estado, que, mucho después, se llamó Suiza, ó la de las Colonias inglesas de la América del Norte, los actuales Estados Unidos. Por eso, solo se desprendieron, en virtud de la convención federativa, de la autonomía necesaria para una superior y más fuerte unidad social. Mas si se mira el ejemplo más reciente del Imperio federal de Alemania, se nota que allí la unión tiene raíz y estímulo más profundos en la unidad de raza histórica y en un espíritu nacional de patria común, formada más, que para la defensa, para el engrandecimiento é influjo germánicos en Europa y fuera de ella, y nutrida en parte de la tradición del Sacro Romano Imperio y de la Confederación germánica, deshecha en Sadowa. En la unión suiza del siglo XIV se concertaron sociedades independientes, pero atrasadas, constituyendo una embrionaria é incipiente unidad nacional más confederativa que federativa; en el pacto federal alemán se conciertan Estados independientes que, de hecho y de intento, dejan de serlo, aunque conserven los antiguos nombres y las apariencias de naciones, y constituyan una nación común con amplia descentralización seminacional; es decir, se pacta una verdadera armonía entre el máximo de personalidad regional y el grado necesario de unidad y solidez nacionales. En Suiza, la forma nacional primera es imperfectísima, es más bién una confederación que no se eleva á federación, hasta el presente siglo; en Alemania es la federación un organismo reflexivo y maduramente concebido, desarrollado y formulado en términos que nada esencial falta ni al *self-government* de las partes ni á la seguridad y grandeza del todo.

Por lo cual me inclino á formular esta distinción que llega, en mi entender, al linde mismo de la solución del problema, aunque no me aventure á darlo por resuelto: la federación, en épocas relativamente remotas y atrasadas, es una forma imperfecta de unidad nacional, porque lo que se deja de incluir en la esfera de lo federativo, no es por título de racional autarquía de las regiones (cantones, estados, ó como quiera llamar-

selas) sino por ese individualismo, ó mejor dicho personalismo, inherentes á la incultura y á la extraviada pasión de autonomía; pero, en épocas más adelantadas, á medida que la constitución federal se ha desarrollado, adquiriendo sus elementos esenciales, ó cuando se la formula en una constitución nueva, que no omite ninguno de ellos, parece la federación el producto de la mayor expansión del *self-government*, conciliado con una superior unidad á la cual nada le falta ni le sobra para vivir robusta y prosperar sin obstáculos. Todo lo que le falte implicaría indebido poder autárquico, todo lo que le sobre sería abusivo centralismo.

Corolario no menos importante, por su aplicación y práctico interés actual, es la exageración, por darle el nombre más favorable y benévolo, de ciertas pretensiones pseudoregionalistas que, contra los buenos principios, fuera de oportunidad y de sazón, quieren para las antiguas regiones una autonomía, que ni es la histórica y tradicional, ni la acomodada á una tesis justa y á una hipótesis razonable, y tiende á que del extremo del centralismo se pase al extremo de la mera unión personal, ó punto menos, no perfeccionando el régimen federativo, sino deshaciéndolo, todo ello con encubierto propósito separatista, ó con un regionalismo mal ilustrado y aun inconsciente. De tal vicio adolecen la negación de la interregionalidad y de la común cociudadanía, es decir, de los derechos de la nacionalidad en cada región á los que no pertenecen á ella, y la aspiración de que todo pleito civil haya de fenecer en la jurisdicción regional sin ulterior recurso á un supremo tribunal del común Estado, aparte de otros extravíos en que incurre no solo el regionalismo liberal, sino alguno que otro elemento verdaderamente nacional y sano (1).

(1) Véase en el anterior capítulo toda la doctrina más directamente conexas con la actual. Ya allí justificamos, por equitativa y oportuna, la disposición en que Felipe V estableció en Cataluña lo que la actual Constitución federal alemana llama el indigenato, aboliendo la irracional extranjería. El actual *catalanismo* es esto: cuando menos un regionalismo ex-

4. Hasta cierto punto distinguen la confederación de la federación los términos alemanes, ya corrientes y aun aceptados en el terreno técnico, *staatenbund* y *bundestaat*, por los cuales han convenido designar la confederación y la federación respectivamente (unión de estados y estado de unión). Digo hasta cierto punto, porque hay no poco de vago y de arbitrario en estas palabras, puesto que también la federación es unión de estados, aunque no soberanos, y en la confederación hay un género de vínculos distintos de los de mera humanidad y de la comunidad establecida por los tratados de alianza, comercio, postas, etc. *Foedus* y sus derivados y compuestos, con el prefijo ó sin él, y la palabra alemana *bund* son fundamental y esencialmente equivalentes, sin que el vocablo *staat* antepuesto ó pospuesto modifiquen la etimología y la semiótica del término, aunque si su empleo actual que considera el *bundestaat* como unión más íntima é interna (nacional en una palabra) mientras que deja el *staatenbund* en el grado de mera liga ó alianza.

Además estas palabras no corresponden á una actual rea-

clusivista, estrecho y anacrónico, cuya fórmula más cruda es el acuerdo de la asamblea de Reus respecto del derecho, acuerdo en que se pide, no solo un derecho catalán, lo cual es justo y una Comisión de Códigos para Cataluña, asunto también principalmente regional, sino jueces y magistrados catalanes y terminación de la instancia civil en Cataluña, cosas todas contrarias al nacionalismo, estado común de todas las regiones y regionales. También es antinacional, por antifederativo, el que todo el derecho de Cataluña sea catalán; porque casi todo el derecho político tiene que ser español, aunque casi todo el derecho civil y el público deban ser catalanes, cuando las circunstancias permitan la *realización de este ideal*. La síntesis y carácter del catalanismo es lo que llaman el nacionalismo, esto es, la restauración de la nación catalana, no sé si en los términos en que la agregó á Aragón el hijo de D.^a Petronila; y digo que no sé si en los mismos términos, porque, en un documento presentado á D.^a Cristina, cuando la exposición de Barcelona, se pedía una unidad como la de Austria-Hungría, que es unidad nacional al fin, es decir, algo más que la de la comunidad de soberano. Afortunadamente, la mayoría del pueblo catalán es harto juiciosa para suscribir á ésto.

lidad histórica, porque todas las que ahora se llaman confederaciones son federaciones, y hasta en el lenguaje vulgar y científico y oficial se usan indistintamente y como sinónimos ambos términos. Así es que, hablando de la Confederación alemana como de la suiza, si por arbitrio inexplicable se designa con tal nombre al compuesto, se habla de gobierno federal, asamblea federal, autoridades federales, etc.

En efecto, tomando por objeto de observación y comparación los dos Estados europeos limítrofes de forma tan distinta de Gobierno, república el uno, imperio el otro, se ve desde luego que ambos consideran federativa, es decir nacional, harta más materia y relación jurídicas que las señaladas anteriormente como estrictamente constitutivas de la sociedad civil, y que se han pactado, en concepto de federales, sin duda por razón de circunstancias y aun por falso concepto socialista del poder civil, no pocas funciones correspondientes por naturaleza á las regiones (1) Confederación propiamente dicha lo

(1) El artículo 3 de la Constitución alemana (16 de Abril de 1871) sanciona el indiginato común, es decir, lo que hemos llamado interregionalidad con la provincialidad y municipalidad que supone, sin más que una justa limitación, la relativa en los municipios, á la admisión y manutención de pobres. En la constitución federal suiza (19 de Abril de 1874) todo suizo (artículo 43) goza en el cantón, donde se establezca ó resida, de todos los derechos cantonales y vecinales, bien que con la restricción, extraña y anómala, de no participar en los bienes del municipio y corporaciones, ni tener voto en los asuntos puramente municipales. La *supraregionalidad* está comprendida en todos los casos del artículo 4.º de la Constitución alemana, en los cuales se incluye, no solo la materia confederal y la estrictamente federativa, sino otra que no es esencialmente nacional, aunque lo sea por razón de circunstancias, si es que no indebidamente se hayan desprendido de ella las religiones, las partes contratantes federadas; por ejemplo, toda la legislación civil, penal, mercantil y procesal (caso 13 ampliado por la ley de 20 de Diciembre de 1873); y en los artículos 74, 75, 76 y 77. Lo mismo puede decirse de todos los artículos del Capítulo primero de la Constitución federal suiza, y especialmente del segundo, que extiende el objeto de la Confederación á «mantener la tranquilidad y el orden en el interior, proteger la libertad y los derechos de los confederados y aumentar su prosperidad.» Respecto de códigos generales, la constitución suiza, se limita

fué la de Suiza en un largo período de su historia, y de hecho lo es hoy, aunque no se lo llame, el Imperio austro-hungaro, que tambien es federal en el concepto que veremos.

5. La unión meramente personal por el órgano y conducto de la común soberanía no implica *per se* federación ni con federación siquiera, y tiempos ha habido en que no existió más comunidad social externa que la resultante de tener un mismo soberano, como aconteció á España durante la mayor parte de su historia, esto és, hasta muy avanzadas la época moderna y aun la contemporánea. Pero esta comunidad, que ha sido el principio y primera manifestación de la mayor parte de las actuales naciones, se sostenía entonces por el pujante influjo del espíritu nacional, que existía de hecho en el fondo mismo de las sociedades civiles así agregadas, como fuerza interna de atracción hacia una misma patria, que iba laborando su unidad á traves, por encima y contra todas las diferencias y oposiciones regionales. Solo con este principio latente y embrionario elemento de nacionalidad pudo el soberano de varios Estados llevar á cabo empresas interiores y exteriores de tal entidad, importancia, y gloria, como las que acometió y consumó felizmente España, pero siempre con no pocas dificultades y con menores y menos sólidos y duraderos resultados que los que

en el artículo 46 á la parte *estatutaria* en la legislación civil, bien que con la excepción del 54 que hace declaraciones de derecho federal en impedimentos para el matrimonio, ciudadanía y vecindad de la mujer y legitimación de hijos. Y no hay para qué decir que, sobre la generalidad y vaguedad de los artículos constitucionales, han desarrollado el unitarismo á la moderna varias leyes orgánicas complementarias que consideran materia federal mucha que no lo es, por ejemplo, la organización judicial, la de registro civil, capacidad civil, persecución por deudas y quiebra, nada menos que todo el código de las obligaciones civiles y mercantiles y una buena parte del enjuiciamiento civil y criminal. En suma, sino por la constitución, por las leyes que la desenvuelven, en Suiza hay más relaciones jurídicas *federadas* que en Alemania, lo cual se explica por el mayor poder de los Estados a'lemanes federados.

hubiera conseguido á estar más adelantado el organismo nacional, aunque solo fuera confederalmente.


En la época actual, en que no solamente falta ese vínculo de moral cohesión, sino que el racionalismo con todas sus formas y factores disolventes, apenas permite más unidad que la coactiva y externa del Estado, provisto de enormes atribuciones y sanciones legales, la unión personal, sin organismo confederativo, por lo menos, no puede mantener la unidad de la nación, máxime siendo la realza constitucional y parlamentaria magistratura de escaso ó nulo arraigo y prestigio, mero instrumento, ó poco más, del parlamento y de las facciones. Aun con más organismo común que el de la monarquía doctrinaria, es decir, con algún otro vehículo confederativo más ó menos rudimentario, está la unidad nacional tan amenazada como la de Suecia y Noruega y tan débil y quebradiza como en Austria-Hungría, á pesar de ser allí la unión monárquica de larga fecha y obra de los siglos, y tener la confederal las condiciones y medios esenciales y precisos de existencia y perpetuidad (1). Esta confederación no tiene actualmente más

(1) Austria y Hungría no solo tienen un mismo soberano, el emperador rey, sino que están unidas por el pacto confederal de 1867 y demás disposiciones orgánicas derivadas de este compromiso, renovado en 1878 y 1887, siendo comunes materias de ambos Estados los negocios exteriores, los asuntos militares, los de hacienda para los gastos confederales, los de comercio, especialmente lo relativo á aduanas, impuestos indirectos, sistema monetario, líneas férreas austro-húngaras. etc. Dentro de los dos Estados confederados, cada una de las dos partes (la *Cisleithana* ó sea Austria, en sentido lato, compuesta del Archiducado de este nombre, aquende y allende el Ens-alta y baja Austria-Bohemia, Dalmacia, Galitzia, etc. y la *Transleithana*, ó sea, Hungría, Transylvania, Croacia y Eslavonia) son, en cierto modo, federaciones, como quiera que conservan las circunscripciones respectivas personalidad tradicional, que ha resistido, por el vigor del elemento étnico histórico, al unitarismo del nuevo derecho revolucionario; mantienen regional autonomía, y en los respectivos Parlamentos, el Reichsrath austriaco—Cámara de los Señores y Cámara de los Diputados—y la Dieta húngara—Cámara de los Magnates y Cámara de los Diputados—disfrutan representación circunscripcional y un tanto orgánica. El organismo confederal legislativo son las Delegaciones de los respectivos Parlamentos, 60 miembros por cada uno.

vínculos que los de una legalidad confederal, no muy restringida, la popularidad y autoridad moral, que, aunque no poco ni inmotivadamente menguada, todavía conserva el emperador rey, Francisco José, y la superioridad efectiva que en la política internacional y, de rechazo, en la interior de Austria-Hungría, tienen los húngaros sobre las demás razas así físicas como históricas del heterogeneo y abigarrado imperio-reino. Aun así y todo, hay en Hungría un partido avanzado revolucionario, republicano y separatista, más ó menos decidido y descubierto. El *jingoismo* calvinista, masónico y judío predomina en los partidos liberales de matiz conservador ó radical, que han ido arrancando á la flaqueza del emperador y á su medio-cricidad política concesiones cada vez mayores en sentido anticatólico. El interés del liberalismo, siempre contemplado y favorecido, con vituperable timidez, por un monarca de innegable virtud privada, pero sin energía política, es la base del indefinido equilibrio, siempre inestable, en que se mantienen los dos Estados.

Dentro de cada uno de ellos, la cuestión de raza, envenenada por el liberalismo, es un factor perenne de agitación y discordia, ya crónicas, y quién sabe si elemento de mayores perturbaciones y aun de no lejana disolución. En la Transleithana, á pesar de estar en minoría los húngaros, tienen sometidas tiránicamente á las otras razas, y el hondo sufrimiento y malestar de esas poblaciones no alcanzan las manifestaciones tumultuarias de continua y airada protesta que en la Cisleithana. En esta parte, en el Imperio, es donde están en perpetua colisión el germanismo intransigente y avasallador y el eslavismo, secular é injustamente postergado, no habiendo conseguido Bohemia, reino de antiguo y glorioso abolengo, la posición de razonable personalidad y autarquía á que tiene sin duda más títulos que el reino húngaro. Esto ha dado lugar á que el sano elemento de amplia reivindicación regionalista, representado por el partido de los antiguos *tehecos*, vaya cediendo puesto é influjo á la agrupación llamada de los jóvenes *tchecos*, es decir, á una fracción liberal y sectaria que lleva al

regionalismo, como á las demás materias y cuestiones de política interior y exterior, el criterio radical, revolucionario y aun separatista, manteniendo en toda la vida pública, en la Dieta bohemia, y en el Parlamento imperial una lucha continua con frecuentes explosiones de feroz violencia. La ocasión y la bandera de encarnizado combate entre las razas es la de las lenguas, esto es, el uso oficial del alemán ó del eslavo en las comarcas de población germánica ó bohemia, más ó menos equilibrada y predominante; y el interminable litigio, que hoy preocupa al ministerio Kœrber, y antes á otros varios derribados por la colisión insoluble de los idiomas, aparece hoy como uno de los complicados síntomas y fenómenos del parlamentarismo austriaco y es una de tantas causas y factores de su desprestigio y de la indiferencia y desdén, cada día mayores, con que lo mira el país.



CAPÍTULO V

DE LAS RELACIONES POLÍTICAS QUE INCUMBEN AL ESTADO, ESTO ES, AL GOBIERNO.

1. Siempre que en el curso de este tratado se han hecho anticipadas referencias indispensables al problema que, desde remota fecha viene y seguirá preocupando á los autores de política especulativa y á los políticos practivos, es á saber, el de la naturaleza, esfera, oficios y fines del Estado, se ha ido poco á poco facilitando la solución, ó mejor dicho, simplificando y aun descartando el problema.

El cual, á estas alturas, y en lo único que al Derecho político corresponde é importa, queda reducido á investigar y determinar qué acción incumbe al Estado en las que nos han parecido materia y relaciones nacionales, tal como quedan expuestas en la lección anterior, y siempre en el supuesto de que ni en lo privado, ni en lo público, ni en lo político es el Estado órgano exclusivo, sino órgano superior de acción social y función jurídica. En todas ellas, sean las que fueren su naturaleza y clase, habrá algo que el Estado habrá hecho, hace y tendrá que hacer siempre, porque nunca

lo han hecho, ni podrán hacerlo otras personas, y algo también que ha practicado, practica y practicará, por circunstancial, no natural incapacidad de los otros órganos de acción, ora individuales, ora colectivos inferiores al poder supremo. A las funciones que en toda esfera, no solo en la política, tiene necesariamente que ejercer el Estado, porque son inasequibles á todo otro sujeto, se ha convenido en llamarlas, con término claro y exacto, *esenciales ó intrínsecas*; á las que no derivan de su esencia, sino que ejerce por falta de idoneidad actual de los demás órganos, imposibilitados por cualesquiera múltiples causas, se las puede denominar *accidentales ó extrínsecas*, y hasta es corriente, aunque oscuro y equívoco, designarlas con el nombre de *históricas y tutelares*, lo primero, porque son temporales, mutables y contingentes, y lo segundo, porque, en tales casos, realiza el Estado respecto de las demás personas una acción supletoria análoga á la de tutela por clásica antonomasia, la que se ejerce sobre el pupilo.

2. La dificultad de discernir unas de otras funciones, ó sea de resolver el problema, aun circunscripto al orden de las relaciones nacionales, que es el propiamente político, no solo procede de que tampoco se puede uno orientar en la historia, que nos presenta casi siempre al poder central desempeñando multitud de oficios que le son ajenos, sino de que también es muy difícil y cuestionable determinar á priori hasta donde llega la capacidad natural de las personas en sus respectivas clases y condiciones, esto es, la inherente á cada estado, desde el de los menores hasta las perso-

nas públicas completas (regiones) de que se compone ordinariamente la sociedad civil, y, por lo tanto, cuál es la acción esencial é indefectible del superior órgano gubernativo.

Más aún: en un regular estado de autarquía social, nada hace el Estado que no sea con cierta colaboración más ó menos amplia y directa de la nación, no cosoberana, sino *cogobernante*, es decir, cooperadora, por varios modos mediatos ó inmediatos, á la ordenación social, legislativa y ejecutivamente. Así, por ejemplo, las mismas relaciones entre la Iglesia y el Estado no dependen solo, por lo que á la esfera temporal respecta, de la buena ó mala voluntad del imperante, sino de la disposición de la sociedad, esto es, del arraigo y extensión de la fe y de la obediencia en los que son súbditos comunes de ambas sociedades y potestades. De otra suerte no habría más que la tesis católica ó la antítesis liberal, pero no esos grados y matices de hipótesis que impone al gobernante católico un pueblo descreído ó adverso en su mayor parte al Catolicismo ó, por el contrario, al gobernante enemigo las convicciones de una población creyente y decidida en mayoría considerable. Es que, aun en épocas de servilismo y, por consiguiente, de despotismo y tiranía, no puede decirse que, aun en los pueblos más abyectos, todo lo haga el Gobierno, tanto en la esfera privada como en la pública; mucho menos cuando es señalada y enérgica la personalidad de una nación virtuosa y libre y, por consiguiente, más eficaz y poderosa su autarquía.

Además, en el supuesto de un pueblo de regular

moralidad y sentido jurídico, hasta en las funciones que, por naturaleza, corresponden al Estado, éste es órgano complementario de ejecución, la cual corre más bien á cargo de la buena voluntad de otras personas y del impulso de varios géneros de coacción, más directa y acaso eficaz que la del gobierno, constituyendo, como ya en varias ocasiones se ha manifestado, un grado de eminente progreso aquella situación en que más bien la sociedad que el poder supremo gobierna de hecho, previniendo, reprimiendo y obrando por el conducto de las varias personas desde el individuo á la región y desde la autoridad paterna á la regional.

En cuanto á la función legislativa del Estado, es punto menos que imposible determinarla y deslindarla, sino en todas, en varias materias y relaciones de orden político ó nacional. Así, por ejemplo, es indudable que es el Estado el que debe figurar como parte contratante en los tratados internacionales de esta ó de la otra clase, é intervenir como una de las potestades que se ponen de acuerdo en los concordatos con la Santa Sede; pero ¿quién es capaz de señalar á priori cual es la fase y porción inexcusablemente federativas de la legislación militar ó rentística, siendo así que á las regiones, á los municipios, y quién sabe si á las mismas familias, no solo importa, sino que incumbe no poca acción en la forma de distribuir y cumplir estos servicios y deberes, y que á la misma nación y al Estado interesan, por muchos conceptos, que sea la sociedad la que organice y arregle una buena parte de éstos y de otros oficios é instituciones?

3. Para el derecho nuevo la dificultad se agranda desmesuradamente, porque si no es llano y fácil discernir qué es lo que el Estado tiene que hacer en las relaciones políticas, ya puede suponerse cuan ardua tarea será la de fijarle toda la esfera de acción jurídica, en materia privada y pública, municipal, provincial y regional, y que es lo que en todo círculo de acción le corresponde, ora respecto de la diversa clase de bienes, ora de la disposición ú ordenación de ellos al fin y fines humanos. Resolver, con el criterio y desde el punto de vista del socialismo, propio del derecho y la política actuales, el problema de la esfera del Estado tiene que proceder de una observación minuciosa de todas las relaciones jurídicas y de toda la clase de bienes físicos y morales que entre sí se prestan las personas, para concluir, por vía de generalización abstracta, que no vacilo en declarar imposible, cuales son los oficios esenciales del poder central lo mismo en cuanto á los bienes (enseñanza, beneficencia, etc.) que en cuanto á su disposición jurídica á los correspondientes fines. Y como el derecho político es el Derecho del Estado, según la concepción socialista tantas veces señalada, es al Derecho político á quien se encomienda la indagación de lo que corresponde á varias ramas jurídicas, indagación árdua para cada una de ellas, abrumadora é irrealizable para una sola, máxime, si se la quiere confinar á uno ó dos capítulos, como suele hacerse.

Pero aun hay más, este problema, en el socialismo dominante, apenas puede plantearse, ó, si se plantea, es por una de tantas eclécticas exigencias é imposiciones de la realidad. La razón es obvia: si el Estado tiene

atribuciones esenciales y otras circunstanciales, es porque las otras personas las tienen también derivadas de su respectiva personalidad, y según su estado y circunstancias históricas, pero donde no se afirma más personalidad que la del Estado, (y esto implícitamente se contiene en la concepción de él como *la institución del derecho*) todas las funciones jurídicas le corresponden, todas son suyas, porque no hay otro sujeto de quien sean, y entonces, solo por atraso histórico, se habrá visto privado de ellas; reivindicándolas, recobra sus oficios esenciales y naturales, y no pueden la especulación racional y la ciencia hacerse cargo de lo que es accidental y transitorio, ni hay para qué se hagan: las funciones tutelares quedan relegadas á asunto y materia de historia, es decir, no hay tal problema en el derecho y en la política teóricos.

Y tan cierto es esto, que el avance del socialismo en la teoría y en la práctica va despojando de gran parte, por no decir, de todo su interés á la cuestión, sólo palpitante y siempre actual para la ciencia y para las agrupaciones que no han desistido del intento restaurador de las libertades cristianas y, por lo tanto, de la verdadera y efectiva autarquía. Ahora, aun en las repúblicas más federativas, son bien marcadas la tendencia é invasión *estatalistas*, aunque, por varias causas, estén más moderadas y contenidas que en otras constituciones, las cuales, en virtud de su espíritu y de su letra, permiten al Estado arrogarse cuantas funciones y atribuciones le plazca con la aquiescencia y con aplauso de la opinión y de la misma política especulativa, cada vez más indiferente á la distinción de oficios esenciales y ac-

cidentales de la soberanía. Inglaterra y los Estados Unidos, modelo obligado de *self-government*, y Suiza, que no pasó de confederación hasta muy avanzado el presente siglo, son prueba concluyente de nuestro aserto.

4. Por el contrario, la política cristiana, fundada en la teoría de la personalidad, tan repetidamente expuesta, debe plantear la cuestión en la parte que al Derecho político y á este tratado corresponde, no olvidando los siguientes principios y orientándose y guiándose por ellos: *a)* una de las fases y principales conquistas del progreso social consistiría precisamente en el movimiento contrario al que hoy se observa, esto es, en que el Estado hiciera cada vez menos y la sociedad, por el conducto de los varios órganos, hiciera cada vez más, tanto en la esfera privada como en la pública, así en lo público no político como en lo político ó nacional; *b)* hay que distinguir, aunque las constituciones no lo hagan, todo lo que, esencial ó accidentalmente, corre á cargo de la nación, de lo que, por naturaleza ó circunstancias, corre á cargo del Estado; *c)* el Estado, como las demás personas sociales, no solo tiene que trazar y ejecutar una parte del derecho, sino prestar en todo caso y tiempo alguna materia de derecho (los bienes que son objeto de éste y que dispone ú ordena al fin y fines individuales y sociales, naturalmente armónicos) no diferenciándose, en tal respecto, el problema de la acción del Estado del de la de cualquiera otra persona y autoridad; *d)* en todo tiempo, el Estado presta menos bienes de derecho que las otras personas y autoridades, consistiendo en la prestación de cosas una buena parte de

la llamada función histórica ó tutelar, y señalándose tanto más ésta cuanto mayor y más variado es el número de los bienes que directamente proporciona; e) *á contrario*, el progreso de la autarquía social avanza á medida que se restringe la acción benéfica y jurídica del Estado; progreso autárquico y acción central están en razón inversa.


Sobre estas bases nos aventuramos tímidamente á determinar, aunque sea por un procedimiento un tanto casuístico, que es, en cada una de las materias estrictamente nacionales, la acción y oficio no menos estrictos del Estado.

En los estatutos de derecho civil, esto es, en la interregionalidad de derecho privado común, no es de esencia el que el Estado los formule previamente y *á priori* por la ley llamada escrita; sino que pueden ser, y esto es lo más natural, labor y producto de derecho consuetudinario, constituido por los varios órganos y en las distintas formas con que se va determinando y condensando el uso jurídico. Al Estado solo le compete convertirlo en costumbre, mediante cualquiera de los modos y precedimientos que pueden adoptarse para esta conversión, siendo el medio y conducto más naturales y corrientes la jurisprudencia del alto tribunal nacional en los litigios interregionales, en que tiene necesariamente que conocer la alta jurisdicción federativa.

Respecto del derecho mercantil, tampoco repugna que el uso social lo haya ido determinando, y que el Estado lo adopte y haga suyo de la misma manera que á los estatutos civiles; pero la naturaleza del derecho

mercantil, el desarrollo y circunstancias actuales del comercio, su caracter más uniforme y cosmopolítico, habrán, por regla general, impuesto al poder soberano común la función legislativa directa en un ordenamiento ó código más ó menos amplio y conforme con la ley y costumbres precedentes.

En cuanto á la interregionalidad pública y supra-regionalidad, todas las funciones federativas, esto es, las estrictamente nacionales incumben al órgano gubernativo soberano, menos las leyes orgánicas militar y tributaria, acerca de las cuales ya hemos dicho en el número 2 que solo una parte de este derecho corresponde al Estado. En efecto, el poder central debe reconocer á la región, provincia, concejo y aun familia, en sus respectivas esferas, la facultad de proporcionar, según ley ó costumbre, los respectivos cupos, en condiciones de una equitativa igualdad, por el procedimiento que sea menos molesto y más grato á esas colectividades, reservándose el Gobierno federativo la expresión legal de aquellas bases fundamentales de organización y función precisas para que la fuerza nacional, así militar como policiaca, se ordene adecuadamente á su fin. En qué proporciones es este derecho nacional incumbencia de los distintos órganos sociales no habría de decirse aquí, aunque fuera posible determinarlo en abstracto y *a priori*.



4. Véanse especialmente la introducción á los Capítulos I y IV y todo el XIV del libro II del primer tomo, aunque desde el Capítulo I del primer libro, viene presentándose la cuestión en la forma que, á estas alturas, debe ser ya familiar al lector, y con criterio y sentido absolutamente contrarios á los del socialismo dominante (1).

2. En el orden de la familia no es tan difícil discernir las funciones del padre de las de los demás miembros (mujer, hijos, servidores), ni las que corresponden al jefe de la sociedad doméstica, de las que, por esencial oficio, circunstancias históricas ó ingerencia abusiva, desempeña un poder público superior (hoy el Estado, en vez de los gobiernos municipal, provincial ó regional). Pero, á medida que la sociedad se desarrolla y diversifica, va complicándose también en igual proporción el problema de las funciones que, en la vida pública, corren á cargo de la comunidad concejil por el ministerio y conducto de las personas físicas y morales de que consta el pueblo, ó por el órgano de la autoridad municipal. Y así sucesivamente, cada vez es más árdua empresa la de determinar el social auxilio que incumbe á las comunidades públicas superiores, y que éstas prestan también por el concurso de sus respectivos gobiernos ó de los individuos y de las colectividades incompletas dedicadas á la prosecución de bienes determinados en la esfera de la provincia y de la región. Estudiado y expuesto el derecho público por orden ascendente, desde el relativo al concejo en adelante, sería menos difícil el problema de los respectivos Estados, mediante la prévia resolución del de la autoridad paterna (patria potestad), en derecho civil; y cuando se llegara al problema del Estado soberano ó central, (Gobierno en sentido estricto) ya no habría tal problema, porque en todo el curso del Derecho pú-

(1) Puede también consultarse varios pasajes de mi «Guía para el estudio del Derecho administrativo.»

blico se le habría resuelto poco á poco y en las partes y lugares oportunos (1).

No solo este número, sino en general, todo el capítulo debe estudiarse con referencia directa á los citados anteriormente, y en particular al último del tomo primero. Lo que allí se dedujo del estudio de la relación entre el Estado y la persona individual, aparece aquí confirmado por toda la doctrina concerniente á las personas colectivas y á la acción y prestaciones del Estado en la esfera de estas comunidades.

3. En Suiza viene señalándose y avanzando cada vez más el *estatismo*, á medida que se ha ido infiltrando en las ideas y las costumbres la democracia moderna y, con ella, el absolutismo unitario y centralista, que no se ha desprendido ni puede desprenderse del socialismo, propio de *todo* el derecho nuevo. El *estatismo* podrá en materias interesantes perder la batalla, pero irá ganando terreno favorecido por todas las circunstancias del pensamiento y de la vida actuales, incluyendo entre ellas el mismo *referendum*, en cuanto es expresión de *democracia* directa é inorgánica, cada vez más influida y movida de la prensa y demás vehículos de extraviada pasión hacia el centralismo. La derrota del *Sunderbund*, ó sea de la liga que en 1843 formaron los cantones católicos para la defensa de su fe y de la más augusta de sus libertades, la de la creencia católica, minó también profundamente la raíz histórica de las libertades locales y preparó la constitución más democrática, es decir, más absolutista y centralizadora de 1848, de la cual es mera reforma la constitución actual.

(1) Durante el tiempo transcurrido entre la formación y redacción del primer capítulo de esta obra y las del presente, he tenido hartas razones para pronunciarme en sentido contrario á la opinión apuntada como probable en la nota de la página 34 del tomo primero, y cambiar el estado de duda, allí expresada, por el de la hipótesis que se ha ido determinando durante unos cuantos años de construcción científica. Esta hipótesis aventuré ya en mi «Guía para el estudio del Derecho administrativo», escrita en el período intermedio de los dos tomos de este tratado.

En cuanto á los Estados Unidos nos limitaremos á citar, como testimonio de mayor excepción, el del reputado y conocido autor J. Bryce (*The American Common wealth*, tomo II, capítulo 46) que denuncia como los *Estados* van perdiendo importancia en razón directa del progreso de su población y riqueza, porque en iguales proporciones ha crecido el influjo y acción absorbente del poder central, por una parte, y de las grandes ciudades por otra. Así es que la autonomía regional subsiste en la ley, pero cada vez se va restringiendo más de hecho, y, á la *manera que los grandes árboles ahogan á los arbustos que envuelven en poderosa sombra*, así las regiones, (*Estados*) se empequeñecen ante el Gobierno federal, preocupándose más los ciudadanos de los asuntos generales que de los locales, con daño del interés que debían inspirarles estos últimos, los cuales hieren ya menos la imaginación de las masas, y han dejado de ser objeto de las legítimas y generosas ambiciones de acción pública. Los dos partidos, el republicano y el democrático, han recibido el influjo del liberalismo individualista y continental, ni más ni menos que los partidos ingleses y la misma secular constitución británica. El *imperialismo* no es meramente la manifestación de las violentas expansiones de injusta invasión y conquista, delito hoy común á todas las naciones que se sienten fuertes, y para las cuales, en el orden internacional, ya no hay más derecho ni título que la potencia física; es la tendencia centralista y aun cesarea que, en esta ú otra forma, surge de las tituladas democracias, así antiguas como modernas, es decir, de esas democracias fingidas y aparentes, *gobernadas* y manejadas por la sinrazón y la injusticia del número. Ese imperialismo encontrará en el militarismo estímulo, arma y, por consiguiente, desarrollo y crecimiento.

Lo cual no es decir que toda la multiplicidad de funciones, que hoy desempeña el Estado, sean por usurpación socialista, por injustificable absolutismo; muchas de ellas le han sido impuestas por legítima tutela; y de esa deficiencia de las otras personas no es, por lo general ni siempre, el Estado el único,

ni siquiera el principal é inmediato culpable. Asi es que la mayor parte de las leyes y acción gubernativa, con que el poder soberano, en Inglaterra, interviene en la esfera económica, son justas y oportunas, porque proceden de notoria decadencia de la iniciativa y energía sociales, ó, cuando menos, de no haberse éstas desenvuelto á medida y en la proporción que las necesidades y relaciones, cada vez más complicadas de la vida moderna.

4. Así como el Estado es *órgano de todo derecho, no de todo el derecho*, así también las demás personas, sin más diferencia que la de los correspondientes estado y categoría jerárquica, de modo que no hay persona que al llegar al uso de la razón, un tanto desarrollada, no pueda ser órgano de relación política; y el que lo sean las más, incluso los adolescentes y las mujeres, es una importante manifestación y conquista de la autarquía y del progreso de un pueblo (1).

Cómo, y en qué proporción y forma, es cada persona sujeto de acción política no puede decirse aquí. Suponiendo que no sea una materia esparcida por todo el derecho privado y público, y en parte estudiada donde y cuando se trate de cada personalidad y capacidad, y que le esté exclusivamente reservada al derecho político, más bien ha de tratarse en el libro siguiente, consagrado al Gobierno. De todas maneras, siempre resultará, una vez más, con visos de máxima probabilidad la opinión sustentada de que ni siquiera la acción política del Estado puede determinarse solo desde su punto de vista y no desde los respectivos de los demás órganos de acción nacional (2), antes más bien desde éstos que desde aquel, al con-

(1) ¿No es el patriotismo la síntesis de los deberes, y, por consiguiente, de los derechos nacionales, y no obliga á todos sin excepción, bien que según clase, sexo y demás condiciones y cualidades de cada estado?

(2) Si las circunstancias no hubieran impuesto una consideración y estudio del derecho político según el criterio erróneo y tan generalizado de la concepción socialista, y del cual, por razones históricas y críticas, no ha podido prescindirse, el orden lógico de un tratado de esta rama jurídica

trario diametralmente de lo que ahora se practica. De aquí el fracaso de cuantos han intentado resolver el problema apriorísticamente desde la mera consideración del Estado soberano, ya que sea imposible hacerlo *á posteriori* y de una vez desde la observación y experimentación nada menos que de todas las relaciones jurídicas.

Aun á riesgo de prolijidad, para la cual el lector discreto no dejará de hallar circunstancias harto atenuantes, repetiremos que, por desconocer que el Estado no tiene en todo orden más oficios que los de los otros sujetos, son á saber, prestación de derecho y de materia de derecho (toda clase de bienes) en la medida y proporción en que las demás perso-

ca hubiera sido como el de las demás ramas; *a)* funciones; *b)* órganos de relación jurídica nacional. De este modo, todo el tiempo mal gastado en materias tan ajenas al derecho político como las que hemos señalado en el curso de la presente obra, hubiérase empleado con fruto en la indagación, aun no intentada sistemáticamente, de las funciones políticas del individuo, de la familia, etc., destacándose así un derecho político individual, familiar, concejil, etc., como hay un derecho individual privado, de familiar y de contratación, y así en las demás ramas.

Del derecho político individual no han podido desentenderse los mismos tratadistas modernos, bien que sobre la base sociológica, á la vez falsamente individualista y socialista, del pacto, y considerando al fin al individuo como mera parte de la única colectividad, la nación. Por esto nadie se ocupa en el derecho político no solo del municipio, sino de la misma familia, la cual, porque ahora no lo sea, no deja de ser racionalmente un órgano de derecho nacional, como lo fué en Roma, bien que allí á título de miembro orgánico, casi inmediato, del Estado, y, por razón de personalidad propia, en una concepción más filosófica y cristiana de todo sujeto de derecho. Los que vemos reducida la familia á sus más estrechos límites, sobre todo en las naciones y legislaciones más románicas, no podemos sospechar siquiera cual sería la esfera política de una familia extendida más allá de los confines de la agnación y aun de la gens, de aquella agnación y de aquella gens, que, hasta en el orden privado, fueron perdiendo los derechos de la familia natural, desnaturalizada, más que perfeccionada en todas las civilizaciones adversas ó reacias al influjo cristiano.

nas, por deficiencia natural ó circunstancial, no pueden proporcionarse norma jurídica efectiva ni objeto de ella á sí mismas ni á las otras, no ha resuelto ni resolverá jamás la política nueva el problema que ni siquiera ha propuesto ni planteado debidamente.

Es cierto que la respetable tradición del derecho romano, restaurada y aun acentuada por el renacimiento románico medioeval, y á cuyo influjo no pudo sustraerse del todo aun el mismo el derecho político, fundamental y fragmentariamente tratado y expuesto por los doctores católicos, conspiraba á sacar la compleja cuestión de sus naturales y llanas vías. Pero también parece indudable que, colocados la filosofía, el derecho y la política modernos en disposición y criterio absolutamente contrarios á la idea é inspiración cristianas, descarriaron de vez y acaso definitivamente la indagación.

Permítaseme una sucinta comprobación histórica del aserto, cuya importancia y valor á nadie puede ocultarse.

La determinación del fin del Estado en la conocida y corriente fórmula *el bien público* y en la equivalente metáfora, también harto vulgarizada, *la salud del pueblo*, de que tanto uso y aun derroche se viene haciendo por tratadistas, gobernantes y *políticos prácticos*, no pasa, considerada en sí misma, de una vaga y equívoca afirmación sin trazas ni título de teoría científica. Que el Estado debe proponerse el bien público, no puede discutirse ni dudarse; pero el problema queda sin resolver mientras no se diga cual es el bien público que corre á cargo del poder supremo, y en qué relaciones, entidad, cantidad y lugar le incumbe procurarlo y proseguirlo. Es evidente que se dá por solución el enunciado mismo de lo que se intenta resolver, aparte de la deficiencia con que la cuestión se plantea, porque no sólo es pública, sino también privada la función del Estado, como puede verse hojeando y observando al acaso cualquiera legislación ó código civil (1).

(1) Además, estas fórmulas *el bien público*, *la salud del pueblo* ofrecen el peligro de su tradición socialista romana, cuando, de hecho, aunque no

Desde el influjo de la doctrina kantiana continuó definiéndose el fin y oficios del Estado con la misma indeterminación y vaguedad y con idéntica deficiencia de reconocimiento y garantías sólidas para los derechos personales; porque se limitaron los autores á asignar al Estado el mero fin jurídico, el cual era concebido generalmente con arreglo al criterio filosófico y jurídico de Kant. Considerado el derecho como *la condicionalidad de la coexistencia de las libertades*, y el Estado como la *institución del Derecho*, toda la función soberana se reducía al limitado y negativo fin de conciliar las libertades de arbitrio, esto es, las que corresponden al mundo de los fenómenos, de manera que recíprocamente no se estorben ni dañen esas libertades.

Esta noción, como todas las modernas, es á la vez falsamente individualista y socialista: individualista, porque no se propone otro fin para el derecho y para el Estado que el asegurar á cada individuo la esfera de su imperativo categórico, ó sea, el imperio de su *libertad racional*, aunque con la incompatibilidad y contradicción que encierra todo el sistema del pensador tudesco (1); socialista, porque para la conciliación

por sistema, era el Estado, república primero é imperio después, la única persona social, y las demás, meros miembros de la comunidad civil, representada por las varias magistraturas republicanas supremas, y al fin por el cesar. La esfera del derecho se confundía entonces con la del Estado, y el bien público, la *salus populi* no eran el armónico interés legítimo de los súbditos, sino la grandeza socialista del todo, identificada con la de su representación soberana.

Esto mismo significaron esas expresiones en el redivivo cesarismo pagano, restaurado por los romanistas en la Edad media: la conveniencia arbitraria, absolutista y tiránica del imperante, en cuanto la consentían el arraigo é influjo del derecho cristiano, cuidadoso guardador de las libertades legítimas, empezando por la de la Iglesia, contra las intromisiones y atentados de los emperadores.

En el derecho nuevo ambas fórmulas cuadran perfectamente al socialismo sistemático que de aquel y de la moderna sociología fluye.

(1) La que existe entre lo fenoménico y lo nouménico, entre la incierta realidad exterior y la certidumbre de lo interno, entre el escepticismo es-

de las libertades del arbitrio, mediante el derecho, no reconoce otro sujeto que el Estado y no los demás agentes jurídicos desde la persona individual al poder supremo.

Es además esta teoría tan pragmática como todas las racionalistas, y, por consiguiente, como la concepción puramente práctica y de ningún modo técnica, de la *salus populi*, puesto que, dentro de cualquiera naturalismo, carece el derecho de principio, término y contenido, no habiendo para la naturaleza humana, y, por lo tanto, para el orden de sus actos, bien que sea adecuado ni proporcionado á ella, consistiendo, por lo mismo, el derecho en la expresión de la voluntad del imperante, vacía de todo motivo ético y jurídico, esto es, de valor objetivo y real, y reduciéndose así á lo que place al imperante, rey ó pueblo, ó mejor dicho, rey ó cualquiera facción más ó menos numerosa en que viene á parar la *soberanía popular*. El *fin jurídico* representa, pues, un mero cambio de nombre, respecto del *fin del bien público*, y es lo mismo que éste, un disfraz de la despótica tiranía que hoy usan y manipulan los parlamentos al servicio de una mínima fracción burguesa, siendo aún más inferior la doctrina kantiana, puesto que excluye, por su menguada y deficiente concepción jurídica, toda prestación de bienes materiales ó morales por parte del Estado.

El panteísmo hegeliano, que así en la Metafísica como en el Derecho, extrajo todas las consecuencias del idealismo kantiano, disolviendo sus contradicciones esenciales en el pélagos del monismo dialéctico, no apartó la cuestión del viejo y hollado carril pagano racionalista; no hizo más que sistematizar el socialismo con todo el poder de una lógica avasalladora, deducida de los principios y de la entraña misma de la filosofía trascendental. El divorcio entre la Moral y el Derecho,

peculativo en la esfera de la razón pura y la yuxtaposición empírica en la de la razón práctica, entre el dominio moral absoluto de lo categórico y el dominio jurídico relativo de lo contingente y posible, entre la libertad racional, agente de la acción interior, y que es una necesidad categórica, y la libertad del arbitrio, que es la facultad electiva en el mundo del fenómeno.

que, desde un punto de vista y por un motivo práctico, había consumado Tomasio y sistematizado Kant mediante una amplia disquisición y concepción metafísico-jurídica, desaparece en el panteísmo dialéctico de Hegel. El Estado es un *imperio moral* (ein sittliches reich), ó mejor dicho, el imperio moral único, el de la sola personalidad, la personalidad divina, el *Dios presente y actual* que concibe y expresa la norma jurídica de una manera absoluta (Sittlichkeit). Siendo, pues, el Estado *la realidad de la idea moral*, ó sea, la voluntad sustancial elevada de la conciencia particular á la universalidad, el fin del Estado no puede ser otro que la moralización, la realización de la ley moral, sin que haya siquiera posibilidad de distinguir entre fines morales y jurídicos, esenciales y tutelares, allí donde no hay más que una voluntad sustancial, que, en cuanto se concibe obrando de una manera absoluta sobre todo lo particular y relativo, es decir, moralmente, se manifiesta, *llega á ser Dios* en su etapa dialéctica más perfecta, el Estado. El *problema* no existe en la doctrina hegeliana, porque en todo el decurso de la lucubración filosófico-jurídica lo ha venido descartando el gran génio del pensamiento racionalista. Y no hay necesidad de añadir que esta teoría es idéntica en el fondo á la del *salus populi*, de la cual sólo se diferencia por la sistematización metafísica del socialismo, y que no dá mayores garantías que aquélla á la personalidad y á la libertad, puesto que el sistema de Hegel no es más que el idealismo kantiano, despojado de su ecléctica yuxtaposición de lo fenoménico, las categorías inmóviles convertidas en *idea*, que, en y por su movimiento dialéctico, es decir, en y por su desarrollo lógico, *explica* la génesis y relación de las *cosas*. Pero como fuera de la idea, del pensamiento, no hay nada, ni nouménico, ni fenoménico, ni cierto, ni dudoso, del mismo modo que la noción carece de contenido, así también carece de fin el hombre, y, por consiguiente, de fin y principio la acción, el orden de los actos, y no hay más derecho ni moral que la *idea divina* del gobernante, del Poder, cuyo órgano es el parlamentarismo, el artefacto explotador al servicio hoy de una minoría burguesa

masónico judáica. El hegelianismo es el pragmatismo, el abso-
lutismo más lógicamente fundamentado en un error trascen-
dental.

No ha acertado el moderno derecho político á desprender-
se de esta indeterminación y vaguedad, más ó menos inspira-
das, pero siempre é indefectiblemente, en la concepción socia-
lista y pragmática del Estado, esenciales á todo y cualquiera
racionalismo. Así, por ejemplo, Roberto Mohl (*Enciclopedia
de las Ciencias del Estado*) asigna á este nada menos que la
promoción de los fines vitales lícitos de cada pueblo y los ofi-
cios consiguientes, así respectò del individuo como de la so-
ciedad; donde se ve que, aparte del influjo bien marcado de
la escuela histórica y aun del positivismo, puesto que se afir-
ma que cada Estado tiene su fin, lo cual solo es cierto en par-
te y subalterna y accidentalmente, no se distingue entre la
promoción que corresponde al Estado y la que incumbe á las
demás personas, ni entre la función esencial y las tutelares
del poder supremo, ni tampoco tiene manera de fijar la lici-
tud de los actos soberanos con otro criterio superior á la vo-
luntad del imperante, aunque suponga al moderno Estado *re-
presentativo* y constitucionalista el único estado de derecho,
afirmación que la experiencia abrumadora de las impurezas
parlamentaristas convierte en sangrienta y amarguísima ironía.

Así también Zacharia (*Derecho del Estado*) (1) incluye en

(1) A los que hayan seguido el curso de mis ideas acerca del derecho
político y del Estado no les extrañará que traduzca la palabra alemana
Staat de la misma manera cuando está sola que en composición con otras
y diga «Enciclopedia de las Ciencias del Estado» (*Encyclopädie der Staats-
wissenschaften*) en lugar de Enciclopedia de las ciencias políticas, y Derecho
del Estado (*Staatsrecht*) en vez de Derecho político. La índole especial de
la lengua alemana se pliega y acomoda aquí admirablemente á la idea so-
cialista del Estado; pero tengo el mismo perfecto derecho á corregir el tér-
mino que á rectificar el concepto, y por lo tanto, á restituir á la palabra la
significación material de sus elementos componentes, en vez de la acepción
sintética convencional, inspirada en el error dominante y extendido. Ni el
Estado es toda la sociedad ni es político todo lo que el Estado hace.

la esfera de éste todas las relaciones exteriores de la vida humana terrestre, comprendidas en la noción general de derecho, esto es, exigibles por la fuerza, si es necesario, para mantener el orden en la vida común de la humanidad, notándose aquí la misma idea kantiana, sin otra diferencia que la distinta noción y amplitud del derecho, mientras que Mohl no limita la función del Estado al mero oficio jurídico, sino que la extiende á la promoción de todos los fines. Ambas teorías son socialistas en cuanto el Estado se subroga en la acción de otras personas, ora para el mero oficio de derecho, bien para promover los demás bienes de la vida.

Y comprendiendo otros autores que todo esto no es decir nada, en tanto que no se concreten las funciones soberanas del Poder, esfuérganse, sin embargo, infructuosamente en la resolución del problema por la imposibilidad, tantas veces referida, como puede verse en las arbitrarias, infundadas é ilógicas teorías de Schulze (*Sistema del Derecho del Estado alemán*), Held (*Elementos de Derecho político universal*), Holzendorf (*Principios de Política*) etc.

El primero distingue tres fines lo mismo en el individuo que en el Estado; *a*) el del bienestar (Wohlstand) obtenido por el ejercicio de la actividad sobre la naturaleza exterior y los bienes que contiene; esta es la esfera económica de la vida, (Wirthschaftliches Leben) *b*) el fin social, regulado y ordenado por el derecho (Gesellschaftliches Leben); *c*) el fin, educativo, esto es el de desarrollo, dirección y perfección del ser en todas sus facultades y aptitudes, vida educativa (Bildungsleben).

Después de la doctrina expuesta considero innecesaria la crítica de tan extraña determinación de los fines del Estado. En ella, como en toda concepción socialista de la sociedad, y por consiguiente, de la soberanía, no se disciernen las funciones que respecto de estos fines incumben á las otras personas que no son el poder supremo, y por lo tanto, en qué lugar y proporción corresponden á éste los oficios indispensables para el logro de fines que Schulze declara con razón comunes

al individuo y al Estado. Este es el único atisbo de su teoría, que debió orientarle para conocer que el problema de los fines de aquél no se puede plantear y resolver como suele hacerse. Y notará también el lector la absoluta carencia de distribución lógica de las funciones del Estado, distinguidas de la manera más arbitraria y caprichosa, de tal suerte que, por lo visto, la vida económica no es jurídica ni social, y otro tanto puede decirse de la educativa. Sin embargo, el absurdo del Estado docente es tal, que Schulze, por una feliz contradicción, solo admite la intervención indirecta de aquél en la esfera intelectual. Este criterio debió aplicar á las otras, en vez de atribuir al Estado la totalidad de los fines humanos, en cuanto trascienden del individuo y afectan á la sociedad civil.

Lo mismo puede decirse de las teorías de Held y de Holzendorf. Refiriéndome especial, aunque brevemente, á este último, por la inmerecida autoridad de que todavía goza su libro *Principios de Política*, haré notar defectos análogos y, si se quiere, aun más señalados que en los anteriores tratadistas. De los tres fines que al Estado asigna, el que llama de *potencia nacional* (machtzveck) ó sea el de afirmación y sostenimiento de la nacionalidad, no es fin del Estado solamente, sino de toda la sociedad civil, la cual lo realiza ó debe cumplirlo, no por solos acción y ministerio del poder central, sino de todos los nacionales, de todas las personas físicas y colectivas de que la nación se compone y de las cuales el patriotismo es á la vez obligación y derecho sagrados. Vida precaria, miserable y efímera tendrán los pueblos, cuya existencia independiente corra á cargo exclusivo ó principal del Gobierno, resida éste en quien quiera que sea. Como se ve, Holzendorf ó atribuye al Estado un oficio que es común á todos los órganos sociales, por más que cada uno de estos lo cumpla en proporción, entidad y lugar distintos, y con acción y medios también diversos, ó incurre en el error de no reconocer, al menos para este fin, más personalidad que la del Estado (socialismo). El otro fin de éste, según dicho autor, es el de relación con las personas individuales para garantizar su libertad

y derechos (Freiheit Rechtzweck;) pero ni corren éstas solo á cargo del poder civil, ni se afirma nada en concreto, mientras no se determine cuántos y cuáles son estos derechos, cómo y cuándo los garantiza el Estado, esto es, en qué medida comparte en cada esfera jurídica esta función con otras personas, sujetos también de derecho, en todos los respectos y y órdenes de él. A cualquiera le ocurre que la mera afirmación de que el poder central es defensor y guardador de los derechos personales no resuelve ni la más mínima parte del consabido problema. Por último, para Holzendorf el tercer fin del Estado es el fin de cultura social (Kulturzweck), y aunque el nombre parece significar cosa distinta de la que realmente expresa, designa con tan impropia denominación el autor tudesco la función con que el poder soberano armoniza la oposición de los intereses de las personas colectivas que forman la nación, reduciendo esa pugna á la unidad del pueblo mediante el Estado, es decir, resolviendo las antítesis en una síntesis superior. En este tercer fin, en el que bien se nota la influencia hegeliana, poco hay que observar: aparte del característico vicio socialista de ser solo el Estado el que concierta las oposiciones sociales en la unidad sintética del pueblo, se comprende que tal armonía tiene que verificarse mediante una función jurídica, no distinta material ni formalmente de la que se ejerce respecto de los individuos, y la cual enuncia Holzendorf en los mismos términos indeterminados y generales á que hemos hecho frecuente referencia. Todo se reduce á distinguir en este fin de cultura social las tres funciones supremas: a) respecto de la oposición entre los grupos sociales; b) de la de los miembros de cada grupo; c) de la actitud del Estado en cuanto á los medios de que éste dispone y puede prestar á esas colectividades, notándose aquí una influencia predominante, aunque no exclusiva, de kantismo, por la tendencia y disposición bien marcadas á la neutralidad y pasividad del Estado enfrente de las agrupaciones distintas y opuestas, con el principal propósito de conciliar sus respectivas *libertades*.

Tampoco la doctrina *armónica* de Krause y sus secuaces españoles y extranjeros ha resuelto el problema con la distinción entre los fines *materiales y formales* y las consiguientes esferas del Estado, presumiendo que, con encerrar á éste en la del derecho, había alcanzado la conciliación entre un bien entendido individualismo y los oficios inherentes al supremo poder social. Porque es absolutamente falsa é imposible esa distinción entre el objeto del derecho y el derecho mismo, es decir, entre los bienes que son materia jurídica y la ordenación de ellos al fin y fines humanos, para el efecto de que el Estado se desentienda de la religión, ciencia, arte, educación é instrucción (esferas materiales de la vida), y confiando á la conciencia individual y social estas esferas y la de la moralidad (esfera formal) se ocupe y entienda solo en la otra de esta especie (el derecho). Paréceme este efugio del todo infundado é inconducente, puesto que esos bienes han de disponerse al fin humano y á la variedad de fines individuales y sociales mediante el derecho, y si el Estado es la *institución del Derecho*, todas esas esferas son jurídicas, como son también morales, y, por consiguiente, en ellas intervendrá el Estado á título de la que se supone su característica función, y el Estado será religioso, científico, artístico, etc. Y lo será por total oficio esencial, pues en esta concepción socialista del Poder, como único sujeto de derecho, ya hemos visto que no cabe distinción entre las funciones intrínsecas y las tutelares, con lo cual bien se ve en qué viene á parar la autarquía que pretenden conciliar estos armónicos con los derechos del Estado. Así como el krausismo es en filosofía un eclecticismo que se resuelve al fin en el monismo panteísta, del mismo modo en derecho y en política concluye en un socialismo pragmático, tan vacío de sentido ético como todos los anteriores, sin límites posibles á la incontrastable omnipotencia y absolutista intrusión del Estado (1). Creo que esto bastará para com-

(1) Esta distinción entre lo material y formal, para el propósito expresado, se parece á la que domina en la controversia sobre si la Economía

probar histórica y prácticamente que en el Derecho nuevo no tiene el *problema* solución.

política es ó nó ciencia jurídica, y acerca de lo que en ella es económico y lo que es jurídico, parecida á la que se suscitara en cualquiera otro orden de la vida, por ejemplo, la enseñanza sobre lo concerniente al fondo (la ciencia, el arte, etc.,) y lo relativo á su disposición al fin (derecho). En la teoría krausiana, el Estado lo es todo, desde religioso hasta industrial, bien que no teniendo, dentro del naturalismo, fundamento ni licitud ninguna religión, el Estado se limita, en teoría y en apariencia, á la neutralidad entre los varios *fanatismos*; y de hecho á la persecución ú hostilidad, cuando menos, contra la religión verdaderamente religiosa, el Catolicismo, y á la *política* que ha de seguir respecto de las *dañosas ilusiones* de la superstición, para destruirla abiertamente y por violencia, ó ir la minando y deshaciendo con *prudente* cautela. Lo mismo en el sistema de Krause que en cualquiera otro de socialismo ateo puede inspirarse *filosófica y jurídicamente* un *kulturkampf*, así el pasado de Bismark, como el presente del gabinete Valdeck Rousseau.

CAPÍTULO VI

DE LA CENTRALIZACIÓN Y LA DESCENTRALIZACIÓN—EL MODERNO FEDERALISMO; SUS CLASES.

1. El que haya seguido hasta aquí, y sin interrupción, el curso de este tratado sabrá á qué atenerse acerca del valor de los términos metafóricos *centralización* y *descentralización* y, de la necesidad ó utilidad de consagrarles un capítulo ó capítulos, ora en el derecho *administrativo*, según suele hacerse, ora en cualesquiera de las ramas del derecho público interno.

En el supuesto de la verdad y exactitud, cuando menos generales y fundamentales, de la doctrina expuesta, puede afirmarse que, sólo por las necesidades de la enseñanza elemental, y eso no de un modo ineludible, deberá estudiarse aparte y en una lección ó lecciones del Derecho público el *problema* de la centralización y descentralización, porque éste no es otro que el del Estado, y cuanto se ha dicho y se diga en lo sucesivo acerca de él, concierne de igual manera y por los mismos respectos á la materia del presente capítulo. De él sólo serán, pues, objeto referencias, anticipaciones, corolarios y escolios y algún punto subalterno de crítica,

y ampliación sobre la inteligencia de los términos y de su relación con otros conceptos.

2. Suponiendo que sea del todo fundada la comparación entre el Estado y el centro y entre la sociedad y la periferia de una figura, cuerpo ó espacio, la *centralización* expresará todas las acepciones que contiene la *posesión de las facultades y ejercicio, por parte del poder supremo, de cuantas funciones le correspondan, en concepto de tal, ora esencial, ora circunstancialmente; y á sensu contrario, la descentralización será la posesión de las atribuciones y ejercicio de las funciones, que, por el doble título de su personalidad y de su capacidad actual, corresponden á las otras personas, que no son el Estado, sin distinción ni excepción de individuos y colectividades y de cualesquiera clase y condición que sean.*

No se descubre aquí otra cosa que el problema del Estado en sus varios respectos y fases, y tal como, especialmente desde el primer capítulo de este libro, se ha ido desenvolviendo sobre el fundamento de la personalidad y de la autarquía; es la doctrina de las funciones esenciales y accidentales del poder civil y la de las demás personas físicas y colectivas. Resulta, pues, que la centralización y descentralización hállanse en una relación doble: *a)* en perfecta armonía, cuando se afirma en tésis las funciones autárquicas esenciales á cada persona y estado jurídico; *b)* en razón inversa, cuando, en hipótesis, se tienen en cuenta las circunstancias presentes, accidentales (históricas) de la actual capacidad de los varios sujetos de derecho. En el primer supuesto, no tienen las personas más ni menos funcio-

nes que las que les corresponden; en el segundo, á más funciones de los sujetos superiores, menos de los inferiores, y, por lo tanto, á más funciones del Estado, menos de la sociedad, y viceversa. O lo que es lo mismo, toda la doctrina de la centralización y descentralización está contenida en esta evidente y comprensiva verdad, sintético corolario, mas aun que de un tratado de derecho público, de toda la ciencia jurídica y filosófica: *cada persona, desde el individuo, llegado al uso de la razón, hasta el poder supremo, tienen de derecho la autarquía correspondiente á su personalidad y estado; pero, de hecho, sólo pueden ejercitar la que permitan y autoricen las condiciones históricas de su presente capacidad por razón de varios hechos accidentales.* La negación de la primera parte de la anterior fórmula implica socialismo, más ó menos acentuado y sistemático; la de la segunda desconocimiento de la necesidad, y, por tanto, de la legitimidad de la tutela con que unas personas suplen las deficiencias de los recursos y de la capacidad de otras, en virtud del deber general y fundamental de la sociabilidad, concretado según hechos y títulos diversos en la variedad de las relaciones sociales y jurídicas.

No hay inconveniente en considerar sinónimos los términos *centralización* y *centralismo*, *descentralismo* y *descentralización* para explicar los respectivos estados y situaciones de capacidad esencial ó circunstancial ya referidos, así como las teorías y sistemas que los explican ó tratan de cohonestarlos; pero va siendo un tanto frecuente y extendido el uso convencional de la palabra *centralismo* en el sentido de centralización abusiva, es

decir, no justificada por los derechos intrínsecos del Estado ó por la debida, legítima tutela que tiene el deber y el derecho de ejercitar sobre otras personas.

3. El intento y carácter de este capítulo exigen nuevas ampliaciones de los términos y de los conceptos centralización y descentralización, á fin de examinar y deshacer errores muy generalizados, lo cual se consigue fácilmente sin necesidad de un trabajo de crítica, ya hecha implícitamente en varios pasajes de este y de los anteriores libros, y solo con una sencilla deducción de los principios expuestos en varios capítulos.

Según la doctrina que contienen, no se halla fundamento á la distinción entre centralización y descentralización políticas y administrativas respectivamente, como quiera que no se descubre razón alguna por la cual sean administrativas las facultades y funciones que poseen y ejercen así el Poder central como las demás personas. Estos no cambian de naturaleza y estado, sean cuales fueren los actos jurídicos, de que son sujeto activo; y en cuanto á los actos mismos, sabido es que son privados, públicos ó políticos no por la persona que los ejecuta, sino por aquella á que directamente afectan, por el sujeto pasivo de la relación. Cuando éste es la nación, esto es, toda la sociedad civil, la relación es política, sea cual fuere el sujeto activo de ella, no administrativa, aunque así se la denomine sin motivo científico, y, por eso, no hay centralización ni descentralización administrativas, por no haber actos ni rama jurídicos que lo sean.

Percíbese también identidad real entre *autonomía*

autarquía y *descentralización*, puesto que todas indican cualidades, atribuciones y funciones que derivan de los respectivos personalidad y estado, sin más diferencia que la puramente formal de venir designando un uso convenido, con el término *autonomía* la independencia ora natural, ora circunstancial de cada persona, la de significar *autarquía* la consiguiente suficiencia personal y el correspondiente propio gobierno de cualquier sujeto; y la de expresar con el término figurado *descentralización* el conjunto de facultades, deberes y derechos propios de la personalidad, autonomía y autarquía de cada sujeto, según su condición jurídica y su accidental situación.

No menos evidente resulta que regionalismo es la descentralización que corresponde á las regiones, en virtud del grado de personalidad, autonomía y autarquía proporcionado á su condición de personas colectivas de categoría inmediatamente inferior á la nación, y que se las debe sin otros límites que los que imponga la hipótesis, esto es, una tutela, solo legítima, en cuanto es justa y prudente, y que carecerá de prudencia y de justicia, cuando desconozca los títulos de la personalidad y las exigencias de la historia, ó no sepa armonizarlos con oportunidad debida.

Finalmente, advertiremos que, cuando se toma la palabra tutela, no en el vago y general sentido metafórico de la defensa y amparo que, por sus funciones esenciales, presta una autoridad á la sociedad cuya es, sino en el más concreto y corriente, así en derecho privado como público, de acción con que una persona suple las deficiencias accidentales de la personalidad y

recursos de otra, entonces tutela equivale á centralización circunstancial ó histórica, esto es, no por razón de los oficios intrínsecos ó naturales de una autoridad cualquiera, sino de los hechos que temporalmente exigen y justifican ese suplemento de autarquía en y para la persona inferior. La tutela es entonces una fase de la centralización y el título de sus funciones extraordinarias, que cesan en cuanto desaparece la incapacidad del tutelado, y que, por esto, no puede invocarse como razón jurídica y permanente de tales oficios para convertirlos de temporales en perpétuos, mucho menos cuando se ejercen sobre las personas colectivas cuya autarquía está en razón directa de la clase y condición de ellas, y cuya incapacidad es más anormal y debe ser por lo tanto menos durable.

4. La concepción socialista, dominante en todo el derecho y política actuales, ha convertido la descentralización en algo parecido á lo que algunos autores modernos llaman *desconcentración administrativa*, ó sea, en el grado mayor ó menor de delegación de funciones que hace el único poder público, el soberano, en comunidades que no son más que meros círculos de división burocrática de la única sociedad pública, la nación, y en autoridades que no pasan de meros órganos dependientes y auxiliares de aquel poder. El cual es el único árbitro, según el criterio de su conveniencia gubernativa, y para mayor eficacia y expedición de ésta, de otorgar ó consentir, expresa y explícita, ó tácita é implícitamente, máxima, media ó mínima descentralización. Ella no es entonces un derecho de la personalidad,

sino una concesión del poder, y ni aun esto siquiera, porque no hay concesión donde no hay persona á quien la concesión se haga, y en el supuesto socialista, lógico y riguroso, (aparte de las atenuaciones y yuxtaposiciones impuestas por la realidad), las colectividades públicas son meras distribuciones cuantitativas y numéricas de la colectividad nacional, no personas, cuyos derechos hay que reconocer, respetar y garantizar.


Por esto, dentro del liberalismo, siempre socialista, solo en el grado se diferencian la descentralización más *moderada y conservadora* de la más *ámplia y federal*, que no pasa de ser una *desconcentración* más pronunciada, una delegación más *ámplia* de los oficios centrales en órganos dependientes del centro y absolutamente subordinados á él, aunque ejerzan sus funciones en los distintos lugares y círculos de la única y sola colectividad pública, la nación. Cuando en un nuevo período constituyente, el *pueblo soberano* introduce mudanzas más ó menos graves en la constitución anterior, y *arreglando* de distinta manera el organismo de la sociedad y sus funciones, *traslada á la periferia* muchas de las que estaban antes centralizadas, procede con el mismo absoluto arbitrio, con igual título é idéntico criterio acerca de los derechos del poder y de las otras personas, que cuando *reivindica y recoge* en el centro las atribuciones que antes estaban esparcidas fuera de él. Y esto, aunque se *reconstituya* según los principios del federalismo *sinalagmático, conmutativo, bilateral, intermedio*, esto es, del que, retrocediendo lógicamente á la pura doctrina del pacto social, *entiende que no hay otra constitución legítima que la federativa, producto de una*

serie ascendente y categórica de contratos, en virtud de los cuales, van formándose por libre convención de los individuos las colectividades inferiores, y por la de éstas las inmediatamente superiores en grado y clase, hasta que del libre pacto social de las regiones, (cantones, estados etc.) resulta la nación ó estado federal. En tal federalismo, donde se reproduce y es más patente la relación lógica y la evolución necesaria entre los dos extremos del individualismo y del socialismo del nuevo derecho, la extensión, amplitud y proporciones de la centralización y la descentralización dependerían del arbitrio de la muchedumbre, es decir, de la sucesión de pactos en que el Estado fué *convenido*. No hay en tal supuesto más personas verdaderas que los individuos cuyo agregado constituye la masa social, la nación; las otras personas sociales no tienen otra existencia y derechos que los que la multitud quiere precariamente darles en virtud de los pactos fundamentales y radicales (inter síngulos), de los cuales surgen las primeras y siguientes comunidades en que se divide atomística y numéricamente la gran colectividad federal. Otra prueba de esta verdad es el uniformismo de todas las constituciones federales liberales, no solo en la organización del poder federal, sino en el de los otros círculos públicos y en sus relaciones con el centro.

5. Como la materia y el asunto de la centralización y descentralización modernas se reducen á la cuestión del más ó el menos de las funciones retenidas ó delegadas por el soberano, de aquí la importancia que dán algunos tratadistas, especialmente los doctornarios, á la indagación, estudio y clasificación de los

hechos, condiciones y circunstancias físicas y morales que influyen en el mayor ó menor grado de funciones actuales del poder central. Para ellos no tienen tales lucubraciones un principal interés histórico, esto es, el teórico de explicación del estado actual de las instituciones, y el práctico de orientación de razonable y justa prudencia política; son más bien un trabajo de arte pragmático, á fin de conocer el conjunto de reglas á que ha de atemperarse el empirismo manipulador y perpetrador de todo el centralismo posible; un cálculo de las resistencias y obstáculos con que puede tropezar la reivindicación de los derechos del Estado, que son todos los que quiera y esté en disposición de ejercer, á tenor del socialismo dominante en el pensamiento y en la vida.

A cualquiera se le ocurre la dificultad, por no decir la imposibilidad, de generalizar en un capítulo la variedad de causas presentes y pretéritas que pueden influir en la suma de funciones esenciales y tutelares del Estado y en las que corresponden á la personalidad y capacidad actual de los otros sujetos de derecho. Tiene que ser tal lucubración el producto de un municioso trabajo generalizador de doctrinas y hechos concernientes no solo á la idea y vida del Estado, sino á las de todas las personas individuales y colectivas de que se compone la sociedad civil; es decir, materia que trasciende y excede no solo de las proporciones de una lección, sino de los límites de una rama jurídica y aun de todo el derecho.



4. No deja de ser frecuente reducir la centralización y la descentralización á las relaciones entre el Estado y las sociedades públicas completas, (pueblo, provincia, región), con lo cual la materia sería de la exclusiva competencia del derecho público interno, repartiéndose la doctrina entre las varias ramas de éste, según el punto de vista desde donde se *plantease el problema*, esto es, según la personalidad y capacidad que se estudiara, que lo mismo pueden ser las del concejo que las del Estado. Todo cuanto acerca de éste queda expuesto y se expone en el presente capítulo convence de lo contrario, es á saber, que también se da el problema en la esfera de la familia, de la universidad, de la sociedad mercantil, etc., en una palabra, en la relación entre las respectivas autarquías de una persona inferior y otra superior, empezando por el individuo y concluyendo por el poder soberano. Sería ya prolijidad injustificable y ofensiva para el lector que ofreciéramos ejemplos de fases del problema en el derecho civil y mercantil, abriendo por cualquiera parte los respectivos códigos.

Más aún: dentro de cada sociedad se presenta de nuevo el problema siempre que se trata de las respectivas atribuciones y funciones de la autoridad y de las demás personas de que la colectividad consta, verbigracia, del padre, de la esposa, de los hijos, del alcalde, del ayuntamiento, de los vecinos, etcétera. Por do quiera y á cada instante surgen confirmaciones numerosas de que es imposible, vano y peligroso el intento de encerrar la materia en un capítulo.

2 Los mismos términos centralización y descentralización son una metáfora impropia, infundada, odiosa y de sentido y uso principalmente modernos; porque parecen expresar un asunto de mera prudencia é interés gubernativos, según los cuales el Estado retiene ó delega los oficios y facultades que le conviene. Y, si aún puede tolerarse que se diga centralización en referencia á derechos y funciones del poder, llamado por analogía, central, no puede ser más impropio el nombre descentralización, muy ocasionado al error de que se tome por

desprendimiento, renuncia, dejación por parte del Estado de atribuciones propias, cuando lo que se *descentraliza*, por justicia y con recta oportunidad, no es más que la autarquía, la autonomía inherentes á la personalidad y que tutelarmente se retuvieron, si acaso no se usurparon, á la independencia natural y á la actual capacidad de las demás personas que no son el Estado. Bien se ve la conexión entre la expresión figurada y el socialismo, en que incurrió habitualmente la monarquía absoluta y cesarista, y que convirtieron de vicio en sistema la filosofía, el derecho y la política liberales.

En razón de la perfecta armonía que hay, en tésis, entre centralización y descentralización, todas las escuelas y partidos se declaran favorables á una y á otra, y se dicen, aunque no lo sean, centralizadores y descentralizadores á la vez, rechazando la nota de centralismo en cuanto expresa éste centralización abusiva, en la que no pueden menos de incurrir, por lógica de sistema, el derecho y la política nuevos. Tratan entonces de ocultarlo y aun de engañarse á sí mismos, ora distinguiendo entre centralización política y administrativa, ora suponiendo, sin fundamento en la realidad, razones y títulos de tutela que no existen y la convierten en una verdadera usurpación (1).

3. Para la refutación fundamental de la distinción, absolutamente inmotivada, entre centralización política y administrativa véase el Capítulo I del tomo I, números 3 y 5 y el desenvolvimiento y ampliación de la doctrina de ellos en los números I, IV y VI de mi *«Guía para el estudio del Derecho administrativo.»*

(1) A medida que la sociedad va abdicando, resignada y aun gustosa sus derechos en el Estado, hallándose, cada vez, mejor avenida con la servidumbre propia del liberalismo, y que va éste infiltrándose en la masa con caracteres de incurable cronicidad, no tiene el poder necesidad de tomarse el trabajo de justificar sus intrusiones que, según hemos dicho, juzga él reivindicaciones de esenciales atributos y oficios, por ser el soberano la única autoridad pública.

En cuanto á la perfecta sinonimia é identidad real entre autonomía y descentralización, solo hay que añadir que la misma relación existe entre este término y los de independencia y autarquía, todos los cuales tienen su fundamento en la personalidad y en la capacidad de los sujetos de derecho, y son, como hemos visto, más expresivos y exactos que el de descentralización. No se usa el de autarquía, porque apenas ha tomado carta de naturaleza en el lenguaje técnico, ni aún de la política cristiana y nacional, á pesar de sus preferentes títulos sobre la exótica palabra *self-government*; y generalmente tampoco se sustituye á descentralización independencia, porque, aunque no hay sujeto que no la tenga, una justificada antonomasia aplica el término á la persona más independiente y menos dependiente, la nación, mientras que, por uso convencional, se predica la autonomía, no antonomásticamente de la persona más autónoma, sino de todas, según su estado y categoría, principalmente de las comunidades públicas, y, singularmente, de las de personalidad, autarquía é independencia más inmediatas á las de la nación (las regiones, cantones, estados, etc.) (1).

Ya se comprende aún más la relación entre descentralización y regionalismo; las regiones son las sociedades que tienen un título de descentralización correspondiente á su personalidad y á su capacidad, ni más ni menos que lo que le sucede á las demás personas.

Solo por el respeto á la doctrina y autoridad de tratadistas, cuya opinión contraria nos hace desconfiar gravemente de la nuestra, añadiremos alguna otra rectificación á las incluidas en el texto. Empiezo por declarar que no hallo funda-

(1) La autonomía es la expresión de la personalidad, de la independencia y de la autarquía, por el lado y fase de uno de sus atributos, el darse la ley, que es una de las funciones del propio gobierno, la fundamental de ser legislador de sí mismo. Por antonomasia la autonomía, como la independencia, se atribuiría á la nación, pero el arbitrio del uso lo ha dispuesto de otro modo.

mento alguno á la distinción entre descentralización política y administrativa en el supuesto, que me parece absolutamente arbitrario, de ser la primera una desintegración de funciones soberanas que se reparten entre varias magistraturas centrales, mientras que la segunda es la atribución á las distintas personas individuales ó colectivas de aquellas funciones propias de su respectivo estado natural y circunstancial. Ejemplo de tal descentralización ofrece en la República romana la creación de varias autoridades, entre las cuales se repartieron la dignidad y los oficios que, de la destruida realeza, recibió el primitivo consulado; produciéndose el fenómeno contrario, esto es, la centralización política, cuando asumió el cesar los oficios y autoridad de estos varios funcionarios (cónsules, censores, pretores, ediles.) Mas, si bien se considera, aunque pueda sin impropiedad, bien que con peligro de confusión y con usurpación notoria de uso, aplicarse á estos fenómenos históricos y otros análogos el mismo tropo *descentralización, centralización*, desde luego se descubre que se trata de materia y cuestión distintas de que haya más ó menos funciones y atribuciones en el centro ó en la periferia y de asunto ageno y aun indiferente al hecho de que el organismo central, Gobierno, concentre por naturaleza, tutela ó abuso, pocos ó muchos oficios y facultades de gobierno. Si á la repartición de funciones soberanas entre varias magistraturas supremas se la llama descentralización política, á lo contrario, esto es, á la posesión de todas por un solo organo (persona física ó moral) habrá que llamarla centralización de la misma clase y nombre; pero esto nada tiene que ver con la doctrina de que aquí se trata, que no es otra que la de las respectivas esferas gubernativas del poder soberano y de las demás personas individuales y colectivas (1).

(1) Otra prueba más del fundamento y probable verdad de esta crítica es que, tratándose de la monarquía pura, no tiene aplicación posible el concepto que venimos examinando; porque, cuando el poder soberano reside en una sola persona física, podrá haber cuestión acerca de las funciones soberanas que retiene ó delega en el centro ó en la periferia, no de las re-

4. Suele distinguirse entre el federalismo *orgánico* y el *sinálgmático*; pero si bien se considera, apenas son perceptibles si es que existen, las diferencias ni en el orden teórico ni en el práctico. Para los orgánicos, la federación ó sea la desconcen-

tenidas que no puede compartir con otras magistraturas centrales cosoberanas. Para nosotros, como más adelante probaremos, no es verdadera monarquía la moderna titulada *representativa constitucional*.

En el ejemplo aducido de la historia política de Roma hay además una particularidad propia y característica de la vida y derecho de aquel pueblo, tan singular y de tan interesante evolución social y jurídica, particularidad que no se repite en los tipos modernos de República. En las actuales la centralización ó descentralización se verifican, como en las monarquías, por el hecho de que el poder central (*jefe del Estado y parlamento*) ejerzan más ó menos funciones de las que por personalidad y capacidad corresponden á los otros órganos sociales, no porque el poder central se divida entre varias entidades, como se divide según la doctrina del constitucionalismo, principio común así á las organizaciones unitarias como á las federales. A nadie le ocurre decir que lo mismo en Francia que en los Estados Unidos, en Alemania que en Italia, la descentralización política consiste en esa desintegración constitucional de compartir la soberanía con las Cámaras respectivas los respectivos presidentes y monarcas. En unos y en otros Estados la soberanía, efectiva ó nominalmente, reside en el jefe del Estado con el parlamento, y es cosa muy extraña, arbitraria y ocasionada á error, llamar á esto descentralización ó desconcentración.

Estas denominaciones metafóricas tienen respecto de Roma un fundamento histórico en hechos que no se han vuelto á repetir, al menos en los mismos términos y con la misma razón circunstancial. Recordemos brevemente esta parte de la evolución política romana.

Contra la tiranía real no se le ocurrió á un patriciado, que no podía menos de ser todavía ageno no sólo á la ciencia, sino á la experiencia política, otro remedio y prevención que dividir, desintegrar la monarquía vitalicia, repartiendo su autoridad entre dos monarcas temporales, los cónsules. Por la puerilidad, que se paga de las apariencias, no quiso llamarlos reyes, siendo así que en ellos se esforzaba en depositar todo lo que era posible de la autoridad y dignidad reales. En un principio no hubo al lado de los cónsules otras magistraturas que las primitivas que desempeñaron funciones delegadas por el rey; mas, luego, la variedad y complicación de los negocios determinaron la creación de otros cargos centrales que desempeñaban funciones no consulares ni cosoberanas, sino encomendadas por la soberanía que de hecho compartía el Senado con los Comicios, llevando aquél la mayor efectiva parte. No había, pues, desintegración de soberanía, es de-

tración máxima es un mero deber, derecho y función constituyente del Estado ya constituido, el cual, en cumplimiento de su obligación y en uso de sus atribuciones, se federaliza del mismo modo que se había centralizado, cuando antes así le pareció y convino; mientras que los sinalagmáticos entendieron que esa federación no podía decretarse *á priori* por una de tantas asambleas constituyentes, sino ser objeto de una série de pactos, en virtud de los cuales todas las personas autónomas fueran voluntariamente ligándose en orden social ascendente, limitando sus derechos en la medida necesaria para la creación y existencia de otros organismos superiores hasta llegar al Estado central soberano, producto á su vez de un convenio interregional, entidad suprema, constituida por la renuncia que de la totalidad de sus derechos hicieran las regiones (cantones, estados, etc.,) á fin de crear una autoridad común que, por y para el interés de ellas, las ligara. Es la doctrina del pacto social, aplicada en todo su rigor en cada período y faena constituyente, y de la misma manera y en igual forma que en la contratación privada, en que las partes conciertan sus intereses bilateralmente, esto es, con derechos, deberes y utilidades recíprocos.

cir, lo que llamarían descentralización política, sino variedad de delegaciones hechas por el poder supremo.

De lo cual se sigue que el fenómeno contrario de la concentración de consulado, censura, sacerdocio, etc., en el imperator, la cual fué un modo hábil é indirecto de golpe de Estado y dictadura, podrá llamarse centralización política en cuanto reduce los órganos centrales y asume uno la actividad y funciones de varios; pero sin que haya en ello nada más que una aplicación, poco motivada, de términos que venían significando cosa muy distinta, una peligrosa traslación y extensión de unas mismas palabras á ideas diversas y remotamente relacionadas, de las cuales, una ni siquiera expresa un orden jurídico normal de instituciones, sino un hecho anormal que puede ser circunstancialmente necesario, y, por tanto, legítimo, pero que es siempre un remedio extraordinario y peligroso, la dictadura. La cual, en las sociedades modernas tampoco viene por el camino y en la forma de solución, pacífica, en su última etapa, de la dictadura cesarista romana.

Mas de esto mismo se sigue la imposibilidad práctica del federalismo sinalagmático, tan incompatible con la realidad, como la vieja doctrina del pacto social, en que se funda y que trata de desenvolver hasta sus últimas consecuencias. Como el hombre no se ha hallado, y menos ahora, al cabo de tantos siglos de existencia social, en estado de naturaleza, sino en un estado constituido, en el cual, á pesar de todos los trastornos y demoliciones revolucionarios, quedan un fondo, una base y hasta una hilada de construcción histórica, tradicional, resulta que la *federalización sinalagmática* tiene que hacerse igual que la orgánica, por una de tantas asambleas constituyentes, *organizando* de nuevo la sociedad por un procedimiento idealista y apriorístico de la misma clase que los otros; la serie de contratos sinalagmáticos, bilaterales é intermedios son pura ilusión y superchería, desde que no es posible deshacer las naciones, reduciéndolas á mera masa individual y atomística *pactanda y pactante* de un estado social absolutamente nuevo de abajo á arriba. Porque, en efecto, la *soberanía popular*, que es el agregado de las *soberanías individuales*, supone una igualdad é independencia absolutas, y, por consiguiente, el estado *natural* presocial y la necesidad, para salir de él, de convenir todas las relaciones sociales *sinalagmáticamente*, debiendo ser el Estado la materia y producto del último pacto público; pero como esta rigurosa exigencia lógica del error es absolutamente irrealizable, siendo, como son, ficción y sofisma lo mismo la soberanía del pueblo que el consiguiente *estado de naturaleza*, ninguna federación puede hacerse *sinalagmáticamente*, sino por el mismo procedimiento que las demás constituciones, concentristas ó desconcentradoras, esto es, por la confección de un *código fundamental*, impuesto por un partido revolucionario, llegado violentamente al poder y en disposición y con medios de introducir mudanzas más ó menos radicales y efectivas en el organismo social anterior. No hay *pactum unionis inter singulos*, sino un aparente *pactum sujectionis*, implícito é incluido en la creación del nuevo *soberano delegado*; fingiéndose que todas las otras disposiciones constitucionales


son otras tantas convenciones de la masa de individuos, cuando en realidad no pasan de nuevos preceptos del reciénvenido gobierno pseudo popular. Por esto, tales asambleas, unitarias y centralizadoras ó federales, no son convenciones más que en el nombre, y de hecho ninguna es sinalagmática, á no ser que quiera hacerse pasar por sinalagmatismo la deliberación constituyente que hace la *masa presocial* por el conducto de sus *mandatarios* y el orden de discusión y establecimiento constituyente de los organismos inferiores al poder central, decretados, (pactados) antes de la creación de éste (1).

5. Como para los modernos autores la cuestión de centralización ó descentralización se refiere exclusivamente á las relaciones entre el Gobierno y la provincia y el municipio, no es tan difícil una indagación y clasificación de las causas y circunstancias más ó menos propicias á la concentración de funciones en la administración central, ó á la desconcentración en la local, destacándose sobre todos el hecho de mayor y profundo influjo, esto es, el elemento étnico, el factor más importante de regionalismo.

Mas como no se trata solo de esos grandes círculos administrativos, en que se divide el Estado unitario y centralista para su *mejor*, esto es, su más *expedito* funcionamiento, sino de todas las demás personas, no pueden influir de la misma manera los principios y los hechos en el grado de autarquía

(1) ¿Quién sería capaz de calificar de orgánica ó de sinalagmática á la fracasada nonnata constitución de 1873, ora ateniéndose á su elaboración, ora á su texto? Si hubiera diferencia especulativa en éste se notara, y en la formación del Código viérase también la variedad del procedimiento. Lejos de eso, el sinalagmatismo del Sr. Pi y Margall solo pudo apreciarse en sus lucubraciones orales ó escritas, y dicen que en la impasibilidad estóica y aun en la interior satisfacción con que veía en el movimiento cantonal la *previa desocialización* de la España *anacrónica*, la demolición del edificio antiguo, para reconstituir en el solar la fabrica nueva, según el rigor de los principios. Mostrábase en esto el Sr. Pi el más lógico por ser el más pactista, al menos en teoría, de todos los liberales.

de aquéllas. Así, por ejemplo, tratándose de universidades, la cuestión de raza histórica, bien que no deje de tener conexión con la autonomía escolar, no es sin embargo tan eficaz y directa, que no pueda mantener la escuela su *self-government*, aun cuando lo hayan perdido la región, la provincia y el con-
cejo, y aun borrándose en ellas hasta las trazas de su constitución y gobierno. Para ello bastará con que el Estado se penetre de que no hay en la universidad las mismas razones de tutela, ó que, aun siendo injustamente invasor el Gobierno, no lleve el error y la injusticia hasta los extremos del Estado docente. Lo mismo habrá que decir de las sociedades mercantiles, en que el poder central debe excusarse de las ingerencias, no impuestas por la desconfianza fundada que tenga de la moralidad social, la que bien puede conservarse en relativa pureza, aunque no esté á la misma altura la autonomía de las demás sociedades públicas completas. Y por supuesto, la familia aun es más agena á la acción de las causas que determinan el grado de personalidad de las sociedades públicas, de tal suerte que, por su propia naturaleza, donde más se refleja y más impreso está el divino designio, la sociedad doméstica es la más inmune del influjo de las causas históricas que merman la autarquía de las otras colectividades. Aun en estas sociedades tan inmorales y esclavas, la mayor parte de la intervención del Estado en el orden doméstico es infundada, y, por lo tanto, abusiva, como puede comprobarse en *nuestro* Código civil de Castilla, abriéndolo al acaso.



CAPÍTULO VII

DEL SOCIALISMO EN GENERAL.—

VARIEDAD DE ACEPCIONES Y CLASES

1. Aquí terminaríamos el presente libro, si no fuera útil y aun necesario recoger en conjunto y síntesis las frecuentes y anticipadas, las casi continuas referencias al error característico de la vida y el derecho nuevos, al que comparte con la otra aberración extrema, el individualismo, el tiránico imperio sobre casi todas las actuales instituciones públicas, marcando en ellas un sello indeleble, una huella profunda y siniestra, el socialismo. En su molde ha vaciado la máxima parte del derecho público, convirtiéndola en derecho político, y amenaza avasallar al derecho privado, en cuyos dominios avanza con nuevas invasiones y usurpaciones.

Así como el término individualismo tiene dos sentidos (véase el último capítulo del tomo primero) uno el de reconocimiento y garantía á la persona individual de los derechos que le corresponden en razón de la personalidad y del correspondiente estado, y otro el de atribución de supuestos derechos que corresponden á una persona social superior, así debiera tener tam-

bién ambos usos el término socialismo, para expresar, según el contexto ó la expresión terminante, ora los propios, legítimos derechos de una persona social cualquiera, especialmente las públicas completas, desde el concejo á la nación, ora los que abusivamente se atribuyeren, usurpándolos á la persona individual ó á otras comunidades inferiores. Pero solamente se usa la palabra en parte de la acepción última, es decir, en el sentido de *atribución á la sociedad civil y á su único órgano representativo, el Estado, de derechos que, por ningún título, les corresponden, y que la nación y su poder soberano se arrogan en menoscabo de la personalidad y autarquía de las demás personas inferiores*. Aún este sentido es menos usual y corriente, porque no sólo el vulgo, sino muchos autores, por motivos prácticos, reservan antonomásticamente el nombre de socialismo al económico, tal como en sí y en sus relaciones con el comunismo queda descrito en el Capítulo VII, libro II, tomo 1. Mas, si bien se considera, el socialismo económico es una manifestación y especie del socialismo en general, porque no hace más que aplicar al orden de la producción y distribución de la riqueza, los principios que éste trata de extender y de hecho extiende á los demás órdenes de la vida y del derecho.

Lo mismo el socialismo en general que el económico pueden á su vez considerarse, ó como mero error y exceso que no proceden, al menos advertida y directamente de una aberración sistemática, ó fundados en una extraviada concepción filosófico jurídica, construída y formulada en sistema más ó menos completo y riguroso. En el primer supuesto, el socialismo

es un vicio social, porque no puede decirse que hay socialismo mientras no haya hábito de intromisiones socialistas; en el segundo respecto es una doctrina ó teoría contraria á la naturaleza y á la realidad é inaplicable en toda la integridad del absurdo, antes bién mixtificada con las contradicciones doctrinarias que le imponen la necesidad y las exigencias de la vida. Las mismas yuxtaposiciones eclécticas del socialismo económico, señaladas en el capítulo citado del tomo primero, son naturales é ineludibles en cualquiera de las otras manifestaciones y especies de socialismo.

Veamos ahora la causalidad y evolución de éste en los dos respectos enunciados en el párrafo anterior.

2. Ya en él dijimos que, aunque generalmente no se conciba más socialismo que el que pudiéramos llamar de nación y Estado, hay socialismo donde quiera que *una sociedad mayor ó menor, completa ó incompleta, pública ó privada usurpa los derechos de sus miembros ó los de otra comunidad inferior, reteniéndolos y ejerciéndolos, en el nombre de la colectividad injustamente detentadora, la autoridad y el poder de ésta, ó lo que es igual su órgano ú organismo gubernativo*. Así es que socialismo hubo lo mismo en la primitiva familia romana que en el Estado federal de la ciudad, que en las repúblicas griegas, que en los grandes imperios asiáticos; porque el socialismo fué la necesaria inevitable constitución de las sociedades antiguas, en cuanto formaron grandes agrupaciones, y constituidas en estancia y vida sedentarias, tuvieron una organización pública por imperfecta ó rudimentaria que fuese.

El motivo y la razón son evidentes: más que del influjo de las teologías y metafísicas antipersonalistas que, entonces como ahora, penetra poco más allá de una mínima porción de las clases *intelectualistas* y *directoras*, procede el socialismo del vicio de aquellas sociedades en que no es persona el hombre sino el fuerte, y en que por lo tanto, la persona, el individuo sobre todo, no tiene más personalidad que la que le proporciona y garantiza su poder social, y en proporción y razón directa de éste. El hombre no es lo que es por los títulos de su común naturaleza, origen y destino, sino por su posición y recursos, que, en tiempos privados de la luz del cristianismo, y cuyo sentido jurídico natural más oscurecía cada vez la culpa, no eran otros que la violencia y la riqueza que ésta acaparaba por medio de la opresión y del despojo. Por esto la sociedad valía más que el individuo, una sociedad mayor más que la menor y sobre todas la sociedad civil, ó mejor dicho, la agrupación más numerosa y compleja. Esta superioridad no consistía en el valor moral procedente de los medios más copiosos y eficaces para el procomún que tiene la colectividad sobre el individuo y las colectividades de mayor jerarquía sobre las otras, sino del número de sus miembros que implica mayor fuerza física y el *mejor título* de derecho.

Por esto tampoco estas sociedades tenían *self-government*, autarquía verdadera; ellas mismas carecían de personalidad, la cual venía á confundirse con la del jefe, que era, no el órgano autoritario de la comunidad, sino representación, ó mejor dicho, concreción, condensación única y absoluta de una comunidad en que apenas ha-

bía más que cabeza. Por eso en la familia romana primitiva, antes del movimiento paralelo de recto y de torcido individualismo, (véanse los Capítulos I y II) antes de que el Estado emancipara al esclavo, á la mujer, al hijo, por un doble impulso de sano personalismo y de concentración de los poderes, antes *desconcentrados* en el *pater familias*, esto es, por una sustitución de socialismo de estado á socialismo de patria potestad, el jefe doméstico lo era todo y la familia nada, y desde sacerdote á propietario, el paterfamilias se destacaba como casi único sujeto de derecho en un conjunto, cuyo nombre (*familia*) expresó en sentido primitivo y recto la verdadera condición. Y lo que era la familia para el individuo y el pater para la familia, era la sociedad civil para sus miembros y el soberano para la sociedad civil; y todas las comunidades intermedias, municipios ó satrapías, no pasaban de círculos gubernativos con las facultades descentralizadas ó delegadas que al poder social único ó absoluto pluguiera otorgarles ó consentirles.

3. En la sociedad antigua no había respeto á la personalidad, porque faltaba la noción verdadera del hombre y de Dios, noción que Cristo, verdad y vida, trajo al mundo; en la sociedad moderna el socialismo resurge de dos hechos contrarios que producen sin embargo el mismo efecto. De estas dos causas de acción coetánea, aunque no de igual relación con la realidad y de la misma influencia en la vida, una es diametralmente opuesta al hecho de donde se originó el socialismo en la edad antigua; la otra es ese mismo hecho universal y constante, bien que convertido en sistema

por una evolución filosófica del descarriado pensamiento moderno. La primera es el falso individualismo, á la vez principio y resultado, criterio y síntesis de la revolución religiosa, social y política, característica de la época moderna; la segunda el monismo, conclusión lógica de toda filosofía pre y anticristiana; aquella es una causa de valor y sentido más prácticos, más sociales y políticos; esta es de filiación y significación más filosóficas, aunque, por esto mismo, de operación menos directa y de efecto más remoto y cuestionable en las actuales revoluciones y en las constituciones nuevas y de más restringido y atenuado imperio no sólo en las masas revolucionarias, sino en las ideas y programas de sus apóstoles y caudillos. Como la una, que es el endiosamiento de la individualidad, tiene la misma virtud y potencia que la otra que es la negación sistemática, metafísica de toda personalidad, se verá á continuación, quedando desvanecida la aparente paradoja.

Todo el vicio del moderno individualismo consiste en el absurdo de la absoluta igualdad de la persona física, y por esto, en la afirmación, no sólo de la igualdad de naturaleza, sino de la de todos y cada uno de los individuos. De donde resulta: *a)* que no puede haber más relación social legítima que la voluntariamente pactada, es decir, la que se origina inmediatamente del contrato, *b)* pero, á fin de que el contrato, constitutivo de la sociedad civil, no atente á la *naturaleza* humana, ó lo que es lo mismo, á la absoluta igualdad é independencia individuales, hay que concebir el pacto social, no como los autores pactistas anteriores á Rousseau, sino

de la manera en que éste entendió conciliar lo inconciliable, es á saber, la igual independencia y la subordinación al Poder, sin el cual la sociedad no puede existir. Rousseau imaginó que la conciliación se conseguía, no enagenando una parte de la libertad é independencia iguales, (la necesaria para constituir la autoridad), enagenación que, desde el punto de vista del pacto social resulta una inhumana mutilación de la naturaleza, sino enagenando todos toda su independencia en todos, en el conjunto, con lo cual suponía aquel autor que cada uno recobraba una parte igual á la que cedió. Ahora bien, la abdicación total de la independencia y libertad en el conjunto es la 'abdicación completa de cada individualidad en la colectiva masa soberana y en su representación supuesta, el Gobierno, lo cual equivale á la afirmación de una sólo persona social, *la masa pseudo-soberana*, ó mejor dicho, su mandatario, el único poder público y político, el efectivo soberano, representante del soberano ilusorio. He aquí como del exceso de individualismo se origina lógicamente la radical negación de la individualidad, viniendo á parar por motivos puramente prácticos, sin más aparato filosófico ni más sistema que el que se necesita para tratar de cohonestar con apariencia de razón el interés y el sofisma, á la misma conclusión sociológica y política á que tuvo que llegar indefectiblemente la filosofía racionalista mediante una evolución que también empieza en el individualismo critereológico de Descartes y concluye en el monismo panteísta ó materialista. La conclusión de Rousseau es idéntica á la de Hegel.

Por la lógica de estos *principios*, que coincidía en

rigor con la violencia de los apetitos revolucionarios, consumó la Revolución el socialismo que desde ella domina y cada vez más avanza, en los países latinos sobre todo, no existiendo ni concibiéndose desde entonces, en virtud de esas mismas doctrinas, otro socialismo que el de Estado. La razón es obvia: entre las sociedades singulares y el individualismo moderno hay la misma esencial incompatibilidad que entre él y toda la sociedad civil, sin más diferencia que de ésta como de la familia, bien que alteradas y quebrantadas, no podía prescindirse, mientras que sin las otras sociedades intermedias, históricas y tradicionales, ora voluntarias, ora necesarias, ya completas ya incompletas, se podía ir pasando, aunque mal. Concertados y aliados la dialéctica y el odio, suprimieron sin contemplación y violentamente, por anacrónicas, contrarias á la independencia é igualdad individuales, esto es, á la supuesta esencia humana todas las corporaciones; y hasta á la familia la redujeron á la más mínima expresión, la desarticularon y la despojaron de cuantas atribuciones, de cuantos medios y recursos consiente en el orden moral la paciente naturaleza, reflejo de la paciencia con que, por respeto á la libertad del hombre, tolera Dios, hasta el extremo, los extravíos del arbitrio irracional é injusto. El resultado fué que, en el orden público, disuelto todo el organismo social menos el del Gobierno, y reducida la sociedad á mera masa, los individuos ya preparados por el error y la culpa á la servidumbre, no pudieron defenderse tras la fortaleza corporativa (el gremio, el concejo, etc.) contra la expansión socialista de la única persona pública, el soberano. Por eso diji-

mos, ya varias veces, que ya no hay más socialismo que el de éste, aunque, en rigor de teoría, pueda llamarse socialismo al de cualquiera colectividad contra y sobre los derechos de los individuos, miembros de ella, ó contra otras sociedades inferiores.

4. A los indispensables elementos de Historia de la Filosofía en general y de la del Derecho en particular remitimos al lector, para que se haga cargo de cómo y por qué natural evolución el individualismo critereológico revolucionario y el subjetivismo psicológico de Descartes produjeron una filosofía monista según la cual, siendo *todo uno y lo mismo*, llámesele Dios ó materia, sucumben la individualidad y la personalidad, incompatibles con una substancia, idéntica en la esencia y sólo varia en el accidente. A la afirmación de la filosofía que los monistas llaman dualista, porque defiende la existencia de dos substancias esencialmente distintas, el espíritu y la materia, y en cada uno de estos ordenes, tantas personas ó individuos substancialmente distintos cuantos sean los entes concretos, ha sustituido la moderna filosofía, en virtud de un descarrío inicial y radical, la tesis opuesta de un sólo y único ente, que, al llegar á cierto grado y etapa superiores de la evolución, es y se llama hombre, persona, y que adquiere su mayor perfección *actual*, nunca definitiva en la *série* de un *devenir* indefinido, cuando adviene á la etapa, al grado social, y dentro de ellos á la manifestación más perfecta, la de la sociedad civil más adelantada y civilizada, que es la más fuerte.

Según esto, la sociedad no es un ser moral, un ser

cuya unidad depende de la del fin y de la consiguiente de los actos de los distintos seres físicos de idéntica naturaleza y destino, sino un ser, uno por su intrínseca naturaleza y con la misma unidad física que el individuo, sin más diferencia que la mayor perfección que tiene el todo material sobre cada una de las partes y un todo superior sobre un todo inferior que es á su vez parte de aquél.

Ahora se comprende que, ora considérese al Estado social más poderoso como el *Dios vivo y actual*, esto es, Dios, en la última etapa de su movimiento, ó ya se le juzgue el animal más perfecto, la materia en su más adelantada evolución de animalidad, la individualidad y la personalidad son incompatibles con el sistema, puesto que individuo es *indivisum á se et divisum á quolibet alio* y persona es *rationalis nature individua substantia*.

Y para llegar á tal conclusión, es indiferente que el camino haya sido ó el movimiento dialéctico de la pura idea absoluta y abstracta, sin contenido y fondo, mientras no lo saque, por lógica exigencia, de su pura virtualidad, que es la pura nada (*el ente es la nada*), ó que de un *algo* material, que ni siquiera es el punto físico, se extraiga, también por evolución, de la misma manera inexplicable, toda la rica variedad de la realidad y de la vida que son puramente fenoménicas.

Poco importa que dentro del positivismo haya, como no puede menos, yuxtaposiciones individualistas, y que los autores de la escuela y los extraños á ella se den á la vana controversia de si Spencer ú otros de sus secuaces son individualistas ó son socialistas. Concebi-

da la sociedad como un todo físico y material, para éste serán las partes, al contrario de lo que sucede en el todo moral en que por y para las partes es el todo, aunque del bien y perfección de éstas resulte también la de él, como en el todo físico, la integridad y robustez del conjunto refluyen en las de los miembros ó partes.

Estos monismos filosóficos pueden fundar y explicar el socialismo en la variedad de sus manifestaciones y esferas; pero, de hecho, el que directamente ha influído en el sesgo y sentido actuales de la vida y en el trastorno y *renovación* sociales y políticas es el que deriva por directa filiación práctica del individualismo teológico y sociológico inaugurado por Lutero y sistematizado por Rousseau. En esto, como toda la sociología y política modernas, el que aun impera es el *Contrato*, por ser la concepción más lógica y asequible, no sólo á la masa, sino al vulgo de los políticos de *pensamiento* y de acción. A pocos se les ocurre derivar el socialismo de la doctrina hegeliana, como tampoco enlazar con ella el gobierno constitucional.

¹ La lectura detenida y meditada del Capítulo VII, libro II, tomo I. persuade de que cuanto se ha escrito del socialismo en la esfera económica es aplicable á cualquiera clase

de socialismo y al que invade por igual todos los órdenes jurídicos. Aquel puede ser también puro error y exceso no sistemáticos, más ó menos habituales, ó ya absurdo fundado en una teoría sistematizada, bien de carácter más práctico y sociológico, bien de fundamentación directamente filosófica. Y del mismo modo en la esfera económica que en las otras es el socialismo inspirado en motivos prácticos, sin más metafísica que la necesaria é implícita para cohonestarlos, el que ha engendrado las escuelas y partidos socialistas, más bien que el socialismo científico, deducido de una concepción monista, formulada en un sistema íntegro que abraza toda la realidad y, según él, trate de explicar y arreglar la vida. Aunque los apóstoles y patriarcas del socialismo hayan sido en general pensadores de mayor elevación y vuelo, hombres de más amplia y sintética comprensión que los políticos *demócratas* y doctrinarios, á las masas no ha podido llegar la acción de ese magisterio técnico, ni son tampoco capaces los inmediatos agitadores y directores de ellas de entender y abarcar esas complicadas doctrinas socialistas, de las cuales alguna tiene su raíz y fundamento en profundidades teológicas, bien que de una teología tan falsa como extravagante.

Es del individualismo, que quiere y proclama la propiedad igual de todo hombre, de donde hemos visto surgir el socialismo que hace propietaria á la sociedad civil, conformándose al fin con la propiedad colectiva, en la imposibilidad de la distributiva de cada individuo, para que, en último término, el Estado solamente sea el productor y distribuidor, el dueño de la riqueza social. Y de la misma manera que el socialismo económico radical ni en teoría puede sostenerse sin introducir las contradicciones doctrinarias señaladas en el capítulo citado del libro anterior, descendiendo al cabo hasta la forma socialista más atenuada, el socialismo agrario, tampoco cualquiera otro socialismo, tanto el pagano como el de procedencia individualista y revolucionaria, ó el que deriva lógicamente del monismo, pueden llevar el absurdo hasta la afirmación de una sola personalidad, el Estado, y la negación de todo

derecho que no sea el suyo. Por grandes que fuesen el atraso y la injusticia de las edades anteriores á Cristo y extremadas y rigurosas las consecuencias que en la época moderna se deduzcan del contrato, ó de la filosofía panteísta y materialista, los errores y desafueros contra la persona no habían de llegar hasta el desconocimiento absoluto de ella ni á su imposible supresión en la realidad; la naturaleza impone á los delirios humanos en el orden teórico las necesarias adherencias eclécticas, como en el orden práctico las inconsecuencias precisas, para que ya que las aberraciones ataquen, alteren y desfiguren, no destruyan ni inutilicen la obra de Dios.

2. Como todo este capítulo es una reducida condensación de frecuentes y múltiples anticipaciones que en él se extraen y ordenan, deben leerse otra vez los dos capítulos primeros de este libro, el primero en particular, en los cuales las necesarias referencias al socialismo, son acaso más extensas y prematuras de lo debido, especialmente en la parte de ampliación. De la oportunidad de ellas y de la utilidad de los ejemplos históricos allí aducidos, dudo menos que de la conveniencia de las proporciones que las di. En realidad, en todo el tratado, pero sobre todo en este libro, tiene que notarse, como se percibirá también en el siguiente, la siniestra sombra, la proyección fatídica del error dominante y característico de la edad presente. Fué el socialismo el molde y sello de la sociedad pagana y tiene que serlo forzosamente del paganismo redivivo de la sociedad actual. Cuando las gentes desconocían á Cristo, la individualidad, la personalidad carecieron de las luces de la revelación cristiana y de las garantías consiguientes al arraigo é imperio del cristianismo en la vida y en el derecho; hoy que de Cristo apostatan los pueblos, no puede defender los fueros personales un supuesto individualismo sin fundamento posible en la filosofía racionalista, ni condiciones de subsistencia en las nuevas instituciones y costumbres. El liberalismo, que es la negación y antítesis de la libertad, implica necesariamente un principio, fondo y espíritu de socia-

lismo, ó sea de incompatibilidad absoluta con la personalidad; la fingida *emancipación* del hombre concluye en la supresión de la persona; la lógica del pensamiento emancipado es el instrumento vengador de Dios negado y ofendido; la rebeldía naturalista la indefectible premisa de la servidumbre liberal.

3. A fin de evitar repeticiones inútiles, reservo una más minuciosa noticia de la evolución del individualismo hasta el socialismo, para cuando en el siguiente libro trate de la titulada soberanía popular, de sus precedentes y estímulos en el postulado que el protestantismo contiene, de la elaboración del lógico contenido de la doctrina en los tratadistas políticos protestantes revolucionarios, de la esencial contradicción que la teoría del pacto presenta en los autores protestantes de Derecho natural, y finalmente, de la última etapa y desenvolvimiento de ella en las obras de Rousseau y particularmente en el *Contrato social*.

Entonces acabará de evidenciarse como de la misma manera que, para lograr la imposible propiedad de cada individuo, hay que venir á parar en la supresión de todo individual propietario, es decir, en el universal despojo, así también para conservar la íntegra naturaleza humana, la independencia y libertad absolutamente iguales, hay que enagenarlas, sin reservarse ninguna, en la colectividad de la que, sólo por un miserable juego de palabras, puede suponerse que recibe cada uno lo mismo que da, ó sea, otro tanto de lo que enagenó.

Lo cierto es que el *Contrato* es un monumento de franco, resuelto y radical socialismo, como puede verse en varios pasajes. En efecto, «las cláusulas del contrato social se reducen »todas á una sola, es á saber, á la enagenación total de cada »asociado con todos sus derechos á la comunidad» (*Contrato social* I, 6). Cada cual debe darse todo entero, «tal como actualmente se encuentra, él y todas sus fuerzas, de las que forman parte todos los bienes que posee...» «El Estado, respecto de sus miembros, es dueño de todos sus bienes por el con-

»trato social... Los poseedores son considerados como depositarios del bien público» (Ibídem I, 9) (1).

4. Fuera de la filosofía cristiana, que iluminada y garantida por la certeza superior y sobrenatural de la revelación, todo lo explica sencilla y satisfactoriamente con la idea de un Dios creador, para su gloria, de criaturas substancialmente distintas de él y distintas entre sí, ordenadas al divino propósito y relacionadas unas con otras en una armónica y rigurosa jerarquía, no hay otra solución que el monismo, cuando se trate de indagar el origen de las cosas y sus conexiones, es decir, siempre que el pensamiento humano anhele, como es natural, construir un íntegro sistema de filosofía. O un ser necesario y eterno, con todas las perfecciones reales que ésta su eternidad y necesidad suponen, el Ser que da el ser á los de-

(1) Podían aducirse aun más textos de Rousseau; y entre ellos, por referirse al principio socialista del Estado docente en toda su crudeza, no podemos suprimir el siguiente: «Como no se deja á la razón de cada hombre por único árbitro de sus deberes, menos aún debe abandonarse á las luces y á los prejuicios de los padres la educación de los hijos, que aún más importa al Estado que á los padres.»—«Si la autoridad pública, ocupando el lugar de los padres y al encargarse de esta importante función, adquiere sus derechos, al llenar sus deberes, tienen tanto menos motivo de queja, cuanto en este respecto, no hacen realmente otra cosa que cambiar de nombre y tener en común, bajo el nombre de ciudadanos, la misma autoridad sobre sus hijos, que ejercían separadamente bajo el nombre de padres. (*Discours sur l'Economie politique*, 302) «Así la educación pública, en reglas prescritas por el Gobierno, y bajo magistrados establecidos por el soberano, es una de las máximas fundamentales del gobierno popular ó legítimo.» «Ella es la que debe dar á las almas la forma nacional. Los pueblos son á la larga lo que el Gobierno les hace ser: guerreros, ciudadanos, hombres cuando él lo quiere, populacho, canalla cuando le place.» (*Sur le Gouvernement de Pologne*, 277, 283, 287.) «¿Quereis una idea de la educación pública? leed la República de Platón... las buenas instituciones sociales son las que saben mejor desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para dársela relativa, trasportar el yo á la unidad común, de manera que cada particular no se crea más uno, sino parte de la unidad y no sea sensible sino en el todo... (Emile, libro I.)»

más seres contingentes y temporales (*creatio ex nihilo*), ó todos estos no son más que manifestaciones necesarias de una substancia única, producto, solo accidentalmente vario, de la evolución de un solo ser, llámenle Dios, ó nómbrenle materia (1).

(1) Los panteístas no prescindieron de la necesidad de un absoluto en que fundar filosóficamente la existencia y origen de lo relativo; pero este absoluto, ó tenía que ser el absoluto por simplicidad, el ente real, cuya esencia es la existencia, que tiene en acto todas las perfecciones y da el ser á los demás seres que no lo tenían (*creatio ex nihilo*), el Dios del Cristianismo, de la revelación, de la sana metafísica y de la Iglesia católica, ó tenía que ser el absoluto por abstracción, el que forma el entendimiento, excluyendo mentalmente toda existencia actual, el ente posible, la pura *nada real*, convertida en principio absurdo de toda la realidad y de la vida, *effectio ex nihilo* en todo el valor literal é irracional del término. Por eso, encerrado Hegel en el círculo férreo del error fundamental é inicial del racionalismo, dijo bien cuando dijo *el ente* es decir, el absoluto *es la nada*; y para explicarse lo que toda filosofía tiene que explicar, el porqué, el fundamento, origen y conexiones de las cosas no le quedó otro recurso que acudir á la contradicción que implican ser y nada y á la necesidad de resolver dialécticamente esta contradicción, mediante el *werden* (*devenir*, llegar á ser, *fieri*) que es la conversión de la nada en algo, por virtud del movimiento de lo único que es y cuya certeza consta, la idea de este absoluto sin fondo ni realidad actual que saca de su vacío la realidad toda. Pero es el caso que el movimiento dialéctico de la idea es una afirmación gratuita, un dogma del racionalismo hegeliano, porque, así como la idea es representación de la realidad objetiva, la dialéctica, la conexión de unas ideas con otras depende y se ocasiona de la que tienen entre sí los respectivos seres, de suerte que, si éstos no existieran, no habría ni ideas ni su relación racional ó lógica. Lejos, pues, de explicar las cosas por la dialéctica, hay que hallar en aquéllas el fundamento, la razón de ésta; porque si no hubiera fuera del entendimiento humano seres reales distintos de él, cuyo origen y respectos recíprocos es necesario conocer y explicar, ni habría raciocinio, ni ciencia de él, lógica, y, por consiguiente, dialéctica (la sintaxis del raciocinio) careciendo éste de causa, motivo y fundamento real; en una palabra, no habría idea, ni porqué, ni para qué ésta se moviera dialécticamente.

No obstante, esta puerilidad hegeliana en que se manifiesta todo el absurdo y esterilidad del racionalismo, es, aunque parezca contradictorio, la más ingente concepción racionalista, la fórmula y síntesis perfecta de la

En toda concepción monista, bien sea la del panteísmo, bien la del positivismo, la sociedad es un todo orgánico, tomada la palabra en el sentido recto y material, no en el figurado y traslaticio, según el cual, las doctrinas no monistas,

aberración. En esto consiste precisamente el mérito de Hegel, en quién parece quiso Dios mostrar la inutilidad é impotencia del genio apartado de las vías del pensamiento tradicional iluminado por la revelación: Hegel es todo el racionalismo, el racionalismo directamente extraído del entimema de Descartes, es el subjetivismo idealista, criterio á la vez que fondo y conclusión de todo racionalismo, formulado, sintetizado y sistematizado en una concepción de grandeza siniestra que atrae como el negro abismo. Toda la historia de la filosofía, toda la lucubración que media entre Descartes y Hegel, el kantismo inclusive, puede considerarse como estéril y vacía, de ningún influjo intrínseco en la construcción racionalista, que no es menos ni puede ser más que la colosal fábrica alzada por el primer filósofo libre-pensador del siglo. Antes de él todos fueron tanteos, ensayos, contradicciones y deficiencias; después de él todo rectificación, demolición, miserables edificaciones parciales y fragmentarias con los elementos desarticulados y dispersos de la filosofía moderna.

Porque Hegel convirtió el idealismo de Descartes en monismo panteísta sin más que prescindir de la gratuita deducción de la certidumbre de la realidad que Descartes infiere infundadamente de la certidumbre del pensamiento, y explicar por la forma más abstracta de éste, la idea de lo absoluto y su evolución, la existencia, origen y relación de todas las cosas, es decir, de todas las ideas. Kant, pensador sincero y profundo, no pudo, á pesar de la grandeza de su talento penetrante y analítico, construir nada, y es su metafísica una perpétua vacilación y al fin una composición ecléctica entre la antigua filosofía de las gentes y de los siglos y la individualista y revolucionaria, inaugurada por Descartes. Hegel rompe resueltamente con lo *viejo y anacrónico*, con el criterio fundamental de la certeza en la percepción inicial sensible de los objetos reales, y ateniéndose al entimema *cogito ergo sum*, extrae de él todo su contenido lógico, no para afirmar que de el pensar se deduzca el existir, sino que el pensamiento es el único ser, cuya certeza consta, y, que por lo tanto, en la forma del pensamiento, la idea, y en su actuación, el movimiento dialéctico, hay que explicar la realidad y la aparición evolutiva de ella.

De los correspondientes tratados de la filosofía tradicional y cristiana se deduce que el entimema de Descartes es verdadero si se le traduce y parafrasea en esta ó analoga forma y formula: *si no existiera, no pensara; luego, cuando pienso, es que existo; ó, lo que es lo mismo, que el existir es el su-*

llaman á la sociedad organismo y á sus partes órganos por la mera analogía y semejanza, de ninguna manera por la identidad entre el todo físico y el moral, entre la sociedad que sólo tiene unidad por el fin y por el acto y los entes individuales,

puesto y condición real del pensar, y que de la certidumbre de la realidad ha de inferirse la del pensamiento y su razón de ser. El reconocimiento del propio pensamiento es un acto de conciencia refleja, del cual son las anteriores representaciones sensibles ó intelectuales de la realidad materia á la vez que condición de ejercicio; y si no tuviera certidumbre precisa del objeto de aquéllas no podría darmela la de mi propio pensamiento. Si esta fuese la primera certeza no me proporcionaría otra distinta que la de aquella que contiene: *cogito, ergo cogito* y nada más. En esto Kant se anticipó á Hegel para concluir la certeza de lo nouménico, sin poder explicar lo fenoménico y sin saber si es realidad ó forma subjetiva, (categórica) de representación. Hegel cortó el nudo, concluyendo que también lo externo, lo objetivo, lo fenoménico es idea, la *idea fuera de sí*. El racionalismo ó es idealismo ó no es nada.

En cambio el materialismo es aún más absurdo é incapaz de una construcción filosófica, aun aparente y falsa; porque con la materia es incompatible ese absoluto por abstracción, remedo del absoluto real que todo lo explica, por lo mismo que todo lo crea. En el pseudo espiritualismo racionalista es posible la formación y concepción de un pensamiento abstracto, es decir, del ente con negación de toda actual existencia y del cual surja ésta por el desarrollo dialéctico ó sea lógico de ese absoluto. Pero como la materia es algo real, por insignificante que sea, siempre es un relativo y tanto más relativo, cuanto más se reduzca el elemento material primitivo, el más *simple* elemento, de cuya evolución procede toda la variedad compleja de la materia única. De donde se deduce que no hay posibilidad de una filosofía materialista, porque no hay filosofía donde no hay explicación posible de las cosas por razones absolutamente últimas con su fundamento en un absoluto real ó abstracto. Y por esto el materialismo tiene que parar en *positivismo*, esto es, en negación de filosofía por incompatibilidad entre filosofía y materia.

En efecto, positivismo, que por su valor gramatical significaría el conocimiento y sistema de lo real, de lo cierto, (en tal sentido nada habría más altamente positivo y positivista que la filosofía) ha venido á significar convencionalmente ausencia é imposibilidad de toda filosofía y, por consecuencia, la exclusión de ella de la enciclopedia científica, descendiendo la que después de la Teología es la ciencia primera á concepción pre y anti-científica, á etapa intermedia entre las *fantasías teológicas* y el conocimien-

físicos que la tienen por el ser. Sea la sociedad el grado y etapa más elevados en el movimiento de la idea, ó como si dijéramos, Dios, en la manifestación más excelente y avanzada de su *verden*, ó concíbala el determinismo positivista como

to verdadero, real: la Teología es el símbolo, la Metafísica la abstracción infundada, gratuita é ilusa, la ciencia, el conocimiento cierto. Pero es el caso que el conocimiento cierto de las cosas exige el conocimiento de cada una no solo en sí misma, sino en sus causas y en su relación con los otros seres, sin que haya razón para detenerse en las causas y relaciones relativamente últimas, sino en las últimas y en la última absolutamente; de modo que, ó se estancan y mutilan el raciocinio y la indagación, ó ésta, por el camino de las ciencias subordinadas, concluye en filosofía, en metafísica necesariamente. Y aquí tenemos al positivismo, enemigo de la filosofía, dando inconsecuente en ella y atribuyendo el carácter de absoluto á lo que no puede ser el absoluto real, porque es la cantidad más insignificante de materia, ni el absoluto abstracto del transcendentalismo, porque tal absoluto es la negación de toda realidad por reducida y *simplicísima* que sea.

Pero positivismo significa algo más que negación de filosofía (véase el Capítulo III de mi *Ensayo de metodología jurídica*); sería negación también de ciencia y aun de raciocinio, en cuanto positivismo es mera observación de datos, hechos y fenómenos, si fuera posible que en ella, sin relacionarlos y explicarlos entre sí, se detuvieran el pensamiento y la lucubración. Por esto, en cuanto trata de buscarles un fundamento y principio, da también en el materialismo monista evolucionista, en la célula, protoplasma ó nucleolo, ó como quiera llamarse á ese reducido algo material de donde *va saliendo* toda la realidad tan rica y variada del universo. Tampoco en este terreno puede mantenerse el positivismo sin cortar los vuelos al pensamiento y las alas al espíritu.

Lo cual no quiere decir que no sea, en cierto modo, natural la tendencia positivista de los entendimientos, fatigados y hastiados de las abstracciones fantásticas del idealismo transcendental, reñido con el común sentir de las gentes, no menos que con la sana filosofía. Punto menos que imposibilitados por sus prejuicios los pensadores modernos de tornar al seguro asilo de ella, sienten algunos repulsión, un tanto motivada, á raciocinios que confunden con falacias y á sistemas que parecen sueños de enfermo ó alucinaciones de enagenado, y se limitan á recoger, registrar y reunir datos y acumular observaciones en los distintos dominios de la realidad, como penetrados de que subir hacia las cumbres de la filosofía moderna es penetrar en las regiones de la ficción. Un escepticismo práctico, esto es, una desconfianza, harto fundada de la filosofía moderna, es uno de los más poderosos

la evolución más potente y compleja de la materia y de la fuerza únicas, la sociedad es organismo en la misma material y formal manera con que lo es el individuo vivo (hombre, animal, planta), ó cualquiera otro ser real ó ideal, porque en la aplicación y extensión del término organismo no están conformes los autores *orgánicos*, y mientras para unos sólo á los seres vivos es aplicable el concepto y la palabra, los otros estiran la transcendencia de ellos y ven organismo, (Krause), en la armonía de las partes con el todo, ó donde quiera que haya sistema (Tiberghien).

5. En cualquiera de estos supuestos, las partes son para el todo, como los miembros para el hombre y para el animal, las partes para la planta, las moléculas para el mineral, las teorías para el sistema, los ángulos para el triángulo y para la cantidad los números, al contrario de lo que sucede en la concepción racional y cristiana de la sociedad, en que ésta es para el bien de sus miembros, y, aunque el de éstos redunde en el

y permanentes motivos de la aberración positivista; el positivismo es el cansancio, hijo de un esfuerzo impotente, el esfuerzo de la razón *emancipada*.

Hay también en él un fondo de escepticismo especulativo que explica muy bien la tendencia y retroceso hacia Kant. Si no se quiere explicar los fenómenos como meras manifestaciones de una substancia única (la idea ó la célula) de cuyo *fondo* nacen y se producen por evolución, y relacionarlos entre sí por este común origen y esencia, no puede saberse cual es la realidad de esa materia fenoménica que se ofrece al sentido y en la cual tampoco el entendimiento puede percibir y justificar la noción común de único ser. Por esto, solo puede el positivista afirmar, como Kant, la mera apariencia sin saber lo que es, ni si es como aparece; ó el fenómeno es idea ó materia ó no es más que fenómeno. Pero como el entendimiento no se resigna á mantenerse en el escepticismo, tan contrario á la razón como á la realidad, el espíritu, que se siente ahogar en el ambiente de la duda sistemática, rompe con fuerte sacudida á través de esa atmósfera de muerte y torna á las afirmaciones absolutas con ansia de aire que respirar, aunque sea en el monismo determinista, el de la materia ó el de la idea. Por la apariencia y aparato filosófico de este último, se ha ingerido en el positivismo la yuxtaposición hegeliana, la del racionalismo plenamente sistemático, el idealismo acabado y perfecto, la insustituible é inmejorable filosofía naturalista,

del todo, es para que de nuevo refluya en el de sus órganos componentes.

Entendido de esta manera el Estado en su acepción amplia de sociedad civil, ó sea de nación, no puede menos de trascender el error socialista también al Estado en el sentido estricto de *organismo* soberano y central. Como órgano superior que es, los otros órganos para él son, para la más cumplida existencia de su ser, para la mayor perfección y eficacia de sus funciones. Según la teoría cristiana, el soberano y gobierno actúan para el procomún, y como la extensión é intensidad de la acción benéfica soberana están en razón directa de la mayor necesidad que de ella tienen los súbditos más débiles y desvalidos, resulta que, lejos de ser la série categórica de los órganos para el de mayor categoría, es éste para aquéllos y más para los inferiores que para los superiores. Hay aquí dos órdenes inversos de categorías, la de la dignidad y la del provecho; el cristianismo las distingue, y el naturalismo esencialmente socialista, por monista, las confunde, porque el órgano soberano es el primero no sólo en jerarquía, sino en conveniencia con *perfecto título* racional, como quiera que es la materia más perfecta con la fuerza más poderosa, ó el *Dios vivo actual* para quien la tiranía es como el reconocimiento y adoración debidos á la *divinidad* imperante. Al socialismo de Rousseau, según el cual la nación es el único sujeto de derechos públicos, los que á título de supuesto mandato enajena de hecho la sociedad civil en el gobierno, ha llegado la filosofía racionalista por la evolución que expusimos en la extensa nota anterior. Y ya no habrá necesidad de añadir como, confundiendo en estas teorías el derecho con la fuerza, (la de la materia ó la de *Dios*) un pragmatismo sin más sentido ético que el estrictamente necesario, impuesto por la naturaleza y la razón para que la sociedad no se disuelva, convierte á las naciones en patrimonio de una minoría de inicuos poderosos explotadores. La injusticia, el absolutismo, el despotismo, y la tiranía son *perfectos derechos*, de *título* mecánico y fisiológico, cuando no divino.

La moderna doctrina orgánica.

En el anterior capítulo debiéramos terminar cuanto acerca de la materia de este apéndice hay que decir, no ya en un curso elemental, sino en libro de más honda y extensa docencia, como quiera que están suficientemente condensados los principios de la moderna sociología orgánica y no menos prolijamente expuestos allí y en los capítulos anteriores el criterio y teoría con que ha de examinarse y juzgarse esta nueva dirección sociológico-jurídica. Nada podrá producir no solo en el fondo, pero ni en la traza general y en las conclusiones capitales de la doctrina, la inagotable literatura amontonada por los orgánicos contemporáneos que parezca nuevo y sea capaz de sorprender, ni siquiera á los alumnos que se hayan penetrado de cual es la esencia de la filosofía monista y cuales las consecuencias que de ella necesariamente fluyen en la Ética y en el Derecho. Múltiples é ingeniosos, pero más bien extravagantes, radicales y aun ridículos corolarios es lo que á la doctrina de Hegel, Schelling y Comte, han añadido los autores modernos, en los cuales unas veces predomina el pseudo espiritualismo de la filosofía trascendental, otras el monismo materialista más crudo, y no pocas veces transacciones eclécticas de aberraciones, idénticas en el fondo y en los resultados prácticos. No vacilo en decir que no doy á estas teorías y á sus numerosas manifestaciones en el libro y en la revista, en la cátedra y en la academia importancia intrínseca alguna, y sí únicamente las concedo la circunstancial utilidad que encierran, en cuanto muestran que, si no son exactas, tampoco son nuevas, que no contienen otra cosa que los bizarros atrevimientos de resueltas deducciones en donde se exhibe el absurdo del principio y su incompatibilidad con la naturaleza y hasta con la seriedad del pensamiento y de la vida. Ni en Hegel ni en Schelling ni en Comte se encuentra nada digno de risa; pero la mayor parte de los deductores y continuadores de su sociología, jurisprudencia y política se ha encargado

de probar que, además de su parte siniestra y sombría, tiene el error su faz amena y aun regocijada.

Aun los autores liberales menos científicos y sistemáticos, aquellos que se mantienen en una mezcla informe de viejo doctrinarismo y de krausismo anticuado, con sus adherencias y adornos de positivismo poco consciente, suponen contemporánea la concepción orgánica de la sociedad y del Estado y cuando más reconocen en el antiguo régimen algunos precedentes remotos de organicismo.

Pero, como la sociedad es un *organismo* y sigue, bien que en mínima parte, siéndolo, á pesar de la Revolución francesa, y hasta en los países latinos más desorganizados por ella, la concepción *orgánica* de la sociedad se descubre por doquiera en la ciencia-jurídico política y en la legislación tradicionales, aunque, por lo general, no esté explícita la doctrina, y los términos figurados órgano y organismo apenas tuvieran aplicación y fueran de uso muy poco frecuente. En cambio, la teoría orgánica, imperante en la ciencia y en la política especulativa y práctica del liberalismo, es aún más moderna que él y de importación panteísta, del panteísmo de Schelling principalmente. De él han tomado los principios y el impulso las construcciones teóricas y los ensayos de *restauración orgánica*, en las naciones demolidas por la Revolución, y lo general es que en la filosofía *armónica* de Schelling y de Krause funden la doctrina no solo los autores monistas, sino los que no lo son, ó al menos no se dicen tales, dándose también el caso de que unos y otros, por el imperio y atractivo que tiene la tradición, aun sobre los más preocupados y enconados contra ella, busquen al moderno organicismo un antiguo y noble abolengo en la vida y en el derecho histórico y aun medioeval, como quiera que la Edad orgánica por excelencia fué la Edad media. En esto no puede prescindirse tampoco de la componenda doctrinaria que en todas las instituciones modernas mezcla lo antiguo con lo nuevo, por las ineludibles y sanas exigencias de la naturaleza y la razón.

Pero la doctrina orgánica contemporánea, además de re-

volucionaria é idealista, es decir, de ninguna conexión con las instituciones precedentes, es panteista en el fondo y la substancia, de tal modo que, aun dentro del liberalismo, los autores menos sospechosos de ideas y tendencias reaccionarias, se han pronunciado, por repugnancia hacia la doctrina, contra el abuso y aun el uso de las expresiones figuradas con que se viene expresando (1).

(1) La filosofía de Schelling es la esencialmente *orgánica*, porque es dentro del trascendentalismo la menos idealista, aunque sí la más fantástica de todas. La menos idealista por la más despegada, en cuanto es posible, del subjetivismo predominante desde Descartes á Hegel inclusive y más influida de la noción y del imperio de la realidad exterior, en reacción y oposición á las construcciones puramente psicológicas del racionalismo; la más fantástica, no porque las otras no lo sean también, sino, porque de una supuesta intuición de lo absoluto, ó sea, de un ontologismo *sui generis*, tan gratuito como los demás, partió para la explicación de las cosas; es decir, esta filosofía fué una deducción integral de una idea innata, no la del Dios personal, sino la de un todo uno é idéntico. Fáltale al schellingnismo el punto de partida desde el yo real ó desde un pensamiento concreto, para ascender, por medio de la abstracción, á un yo puro ó á una idea sin contenido, como en todos los sistemas del trascendentalismo psicológico, lo mismo cartesiano que kantiano, fichtiano y krausista.

Mas por esto mismo, por ser el racionalismo menos racionalista, como más reñido con la esencia y procedimiento subjetivista del racionalismo, es el sistema de Schelling el que tomó, sino de la filosofía de las gentes, del buen sentido de ellas, más elementos de la realidad de la naturaleza, el que más se dejó dominar por la verdad, por la armonía, por el encanto, por el ritmo del Universo, de tal manera que en Schelling es el panteísmo como cosa externa, añadida y exótica, algo como vínculo obligado y postizo para unir lucubraciones exactas y llenas de verdad y de poesía en un cierto aparente sistema que, en aquel tiempo y en Alemania, no podía ser otro que el error tirano en la esfera de la idea y de la vida. Lo absoluto y eterno, que concibió Schelling como todo el ser substancialmente idéntico en sus dos grandes esferas y dominios, la naturaleza, que es el *espíritu visible*, y el espíritu que es la *naturaleza invisible*, se manifiesta *orgánicamente* en estos dos reinos de la realidad una y esencialmente la misma. De igual manera que en la naturaleza hay *organismos físicos*, también en el mundo del espíritu hay *organismos ideales* (la Iglesia, el Estado, la familia) sin más diferencias que las accidentales que existen entre estos dos ordenes: la *acción divina*, que en la naturaleza es necesaria é inconsciente, es consciente y li-

Dos direcciones, de aparente diferencia y de identidad efectiva en el fondo del monismo, se notan en la moderna doctrina orgánica, las mismas del sistema filosófico jurídico general moderno: una pseudo-espiritualista, la que corresponde en cierto modo al panteísmo hegel-schellingniano, otra la positivista

bre, por espiritual, y como universal voluntad, en el dominio del espíritu. Como se ve, Schelling no hizo otra cosa que acomodar á su sistema la denominación *órgano* y *organismo*, no de distinta manera que hicieron Hegel y Fichte, expresando aquél, lo mismo que éstos, con iguales palabras la esencia de las respectivas doctrinas, un monismo, que hace esencialmente distinta y contraria de la antigua la doctrina orgánica moderna, y sin más conexiones que la materialidad de la voz y el vínculo del tiempo, no la continuidad histórica de la teoría. Lo que hay es que principalmente se atribuye á Schelling la introducción de la doctrina orgánica, por dos razones: la ya apuntada de ser su racionalismo el menos racionalista, el que más retrocede, en cierto modo, al agregado real, al conjunto colectivo de todas las cosas, al panteísmo de Spinoza, en una palabra, á la *restauración de la realidad objetiva* por solo la supresión del proceso psicológico con que los otros sistemas inquirieron y formaron el absoluto abstracto y que Schelling sustituye con la *intuición del absoluto real*; y además por ser al fin el schellingniano un sistema monista como otro cualquiera y, en tal sentido, conforme á la esencia de la filosofía y á la preocupación del pensamiento modernos.

De aquí procede la reacción muy pronunciada entre autores tan poco sospechosos á los modernistas como Lotze que incluye esa terminología entre las palabras ociosas de que se pedirá cuenta el día del Juicio, Leroy-Beaulien que las califica *jeux d'esprit* y *gagueuses curieuses*, y modernos naturalistas, verbigracia, Budge, Gegenbaner, Wundt, que evitan cuidadosamente el empleo de tales términos aun en las ciencias naturales, por el abuso que se ha hecho de esas expresiones y su indeterminación y vaguedad dentro de las doctrinas evolucionistas. Lo mismo opinan E. Laveleye (*El gobierno en la democracia*) y Krieken (*De la titulada teoría orgánica del Estado*.)

Realmente estas palabras, aun empleadas en el sentido figurado de símil y metáfora y por razón de mera formal analogía, son muy ocasionadas á error y peligrosas; y ahora más que antes, á causa de la difusión y arraigo de los errores del monismo. Así es que profesores y discípulos deben estar muy apercibidos contra la identificación de lo orgánico material y espiritual é insistir mucho aquellos en reiteradas y aun prolijas reservas y advertencias, cuando se le escapen esas palabras ó las impongan las necesidades de la elocución y del estilo, lo cual sucede no pocas veces.

inaugurada por Comte, desenvuelta en pleno materialismo por los juristas y naturalistas que desarrollaron con más ó menos rigor lógico las doctrinas de Häckel. La primera dirección, por su apariencia y aun conatos de *espiritualismo*, ha sido casi totalmente oscurecida por la segunda, más conforme con la tendencia y el caracter de las sociedades esclavas de la carne y de la sensualidad en la misma proporción que emancipadas del cristianismo. Una y otra manifestación del monismo en la sociología muestran, en medio de las extravagancias y atrevimientos á que arrastra el desenvolvimiento lógico del falso principio, las vacilaciones y contradicciones con que le combaten, atenuan, mixtifican y desautorizan las pujantes imposiciones de la verdad y de la realidad su servidora y aliada. Entre ambas direcciones fluctúan otros pensamientos y teorías aun más eclécticos, como quiera que en ellos es difícil señalar cuál es la aberración predominante, si la de la filosofía trascendental ó la del positivismo, ora porque están inspirados por ambos sobre poco más ó menos, ora porque son un tímido retroceso del positivismo crítico y escéptico á la doctrina hegeliana que es, como hemos dicho, toda la filosofía moderna.

La dirección pseudo espiritualista es solo hasta cierto punto hegel-schellingniana, y digo hasta cierto punto, porque no parece fundada intencionalmente en el sistema de esos filósofos, como una deducción sociológica de sus sistemas, sino que solo tiene de común con ellos el no considerar á la sociedad un todo material, un más perfecto dominio zoológico, un viviente puramente animal, más complejo y de superior categoría, sino un orden ideal y *espiritual*, un ser colectivo que, de la misma manera que la persona física, tiene un alma, es decir, unidad física y no moral exclusivamente (1).

(1) Hemos empleado las palabras ideal y espiritual por huir del equívoco que, no antes, sino ahora, encierran los términos todo físico y todo moral, en cuanto, aunque significan respectivamente unidad por el ser y unidad por el fin y por el acto, podía confundirse el primero con un todo material. En esta segunda acepción, en que lo físico equivale á lo distinto

Algunos han dado á esta dirección el nombre de orgánico psicológica, por el solo hecho de indicaciones y referencias, ó de afirmaciones rotundas respecto de esa *una* alma colectiva, ó sea espíritu social en sentido propio, no en el figurado de mera analogía metafórica explicada en el Capítulo V del libro y tomo primeros; y de aquí la existencia de una psicología social concerniente á este superior grado de la *psiquis*, á la *psiquis* en la etapa de su desenvolvimiento como conciencia y voluntad sociales, en la sociedad civil ó nación especialmente. En esta psicología se proponen los pensadores, procediendo por analogía ó por identidad con la psicología real y verdadera, multitud de los problemas relativos al alma individual, especialmente á sus facultades, funciones y proceso cognoscitivo de las ideas dominantes en cada época y pueblo. Y decimos por analogía ó por identidad, porque en esta dirección, llamada psicológica, son tantas las vacilaciones y contradicciones, aun sin salir de un mismo autor y libro, que es difícil saber cuando desarrollan la pura y neta concepción del idealismo hegeliano de un alma colectiva tan particular y determinada como la del individuo, y cuando discurren por modo de comparación y metáfora, para ampliar y desenvolver una importante materia sociológica, la del espíritu nacional en las dos acepciones expuestas en el capítulo citado. Es este uno de los puntos en que más se ve vacilar á la inteligencia entre dos atracciones encontradas, la de la verdad y la de la lógica que el error ha divorciado de aquella en cuanto es posible (1).

de lo espiritual y contrapuesto á él, sólo puede aplicarse á la concepción sociológica del materialismo que no reconoce *un* alma de la colectividad, sino cuando más un órgano material superior que subordina á los otros y los reduce á armonía, pero no al concepto sociológico en que al fin se proclama *un* principio anímico en la sociedad y, como en la persona física, con unidad de ser. Pero se ha subrayado la palabra espiritual para denotar que es lo que significa y vale el espiritualismo en estos sistemas.

(1) No hay inconveniente en decir que hay una psicología social, con tal que este término no se emplee en el sentido monista del idealismo hegeliano, único en que puede fundarse sistemáticamente una psicología social

Por lo demás, parece inútil añadir que esta doctrina orgánica no tiene eficacia ni valor alguno para restaurar, con la doctrina de la personalidad, un sano y efectivo individualismo, al propio tiempo que la autarquía y derechos de las otras personas morales que no sean la nación ó sociedad civil; y esto por la razón, tantas veces dicha, de ser todo monismo incompatible con la noción de persona individual y con todas las consecuencias que de el reconocimiento de ella derivan. El alma nacional, como proceso último y superior de la divina *psiquis*, convierte de hecho á los otros órganos en meras partes de un todo físico, y para él y su provecho y engrandecimiento ordenadas, á diferencia de lo que hemos dicho que sucede en toda colectividad moral, en que más es el *organismo* para las partes que las partes para el conjunto orgánico. Así es que la tendencia de este organicismo es á no reconocer más personalidad que la de la nación; y si la del individuo y la de las otras sociedades inferiores se imponen en tales sistemas, arrancando en la teoría y en la práctica afirmaciones, concesiones importantes, con sincero deseo á veces de restaurar la autarquía individual y social en todos los órdenes de la vida y del derecho, es en virtud y por la fuerza misma de esas contradicciones felices, pero insuficientes, de la realidad, de la

en la rigurosa acepción propia y directa de la palabra. De donde se sigue la aberración y ligereza de los que confunden dentro de esta dirección psicológica á autores católicos y racionalistas, sin más razón y vínculo que el accidental y extrínseco de las denominaciones y de las afirmaciones formales y abstractas cuando más, verbigracia, á De Maistre, Taparelli, Prisco, etc., con los autores monistas de las varias especies y matices, habiendo entre ellos la diferencia, siempre bien marcada por la ciencia antigua, que entre la persona física y la moral, diferencia que en el actual monismo psicológico se va borrando, por las vacilaciones, correcciones y yuxtaposiciones de los autores modernos, todas las cuales se refieren á si esa *psiquis* colectiva, que es una como la individual, tiene también un mismo y único cuerpo, ó si sólo vive y se manifiesta en la pluralidad de los cuerpos individuales, cuestión que es un problema para el positivismo, pero casi indiferente en el monismo idealista.

tradición, de esas necesidades incluíbles que radican en el fondo mismo de la humana naturaleza y que viven y en parte imperan á pesar del error y de sus exigencias lógicas. Así como Savigny no admite más sociedad natural pública que la nación, de la misma manera éstos sociólogos, inspirados en parte en la doctrina hegeliana, para la cual la nación, representada por el Estado, es la suprema voluntad divina, sin que tales autores suelen preocuparse, dado su idealismo, del elemento social corpóreo para decidir si también la sociedad tiene un sólo cuerpo, ó si tantos como son los individuos de que las respectivas sociedades constan (1). Para un hegeliano puro

(1) Sin embargo, Savigny no puede por sólo eso ser tachado de socialista sistemático, porque influida su doctrina en el derecho romano, no hizo más que elevar á principio la naturaleza y carácter de aquella constitución en que no hubo más organismos primitivos y reconocidos que la Ciudad-Estado y su miembro colectivo inmediato, la familia. A las otras sociedades que después surgieron, (*personae fictae*), las reconoció la personalidad por el procedimiento que usaron siempre aquel derecho y aquella política, el de equiparar una institución nueva á una antigua, buscando en semejanza más ó menos próxima y natural la razón y el título de la existencia y derechos. *Persona ficta* no es persona que existe por el arbitrio exclusivo del Estado, sino persona á quien, inspirándose en la naturaleza, busca éste los medios de situación legal dentro de la constitución histórica de la ciudad romana.

Lejos de ello, en esta dirección psicológica, concorde con el panteísmo de Hegel, aunque no esté rigurosamente deducida de él, se notan á primera vista los dos caracteres de la filosofía hegeliana: el idealismo y el socialismo como puede verse en Wund (*Ética.—Una investigación de los hechos y leyes de la vida moral*) y en Zitelmann (*Concepto y naturaleza de las llamadas personas jurídicas*). En el primero, que es uno de los autores más confusos, contradictorios y logográficos, mezcla informe de Fichte y Hegel, no son, á pesar de las vacilaciones é inconsecuencias, menos marcados los dos errores que en Zitelmann. Este, sin embargo, afirma terminantemente que la realidad de la persona no radica en el individuo, sino en la idea trascendental de que son éstos una pasajera manifestación; y Vigliarolo (*Las personas jurídicas consideradas en relación con la filosofía del Derecho*) va más allá, pues juzga que el espíritu está como menguado é imperfecto en el cuerpo y se rehace y eleva en la asociación, siendo el individuo, la familia y la sociedad las etapas y formas de la actividad del espíritu.

Como determinista que es esta psicología, se propone todos los proble-

en la voluntad está la personalidad, no en la unión substancial de alma y cuerpo.

La natural tendencia lógica de esta dirección es á la localización del espíritu social en un determinado órgano, el Estado, representación, ó mejor dicho, determinación del *espíritu del pueblo* que es el mismo espíritu de Dios. Y siguiendo la hilación de estas bizarras deducciones, no ya, comparan sino que identifican la vida social con la individual, suponiendo que el Estado, de la misma, no análoga manera que el individuo, tiene su infancia en que domina el sentimiento, su juventud, caracterizada por la irreflexión, su virilidad, con el correspondiente imperio de la razón, para volver á la nueva infancia, la vejez. En esto Welcker torna atávicamente á una muy marcada semejanza con el círculo en que, según Vico, giran fatalmente las naciones, cosa que no sé como puede compaginarse con el consabido *indefinido divino progreso*. De la misma especie y valor es la famosa teoría de Böhmer acerca de los partidos políticos: el partido radical es el niño y el *absolutista* el anciano; de los intermedios, el liberal es el joven y el conservador (¡qué afortunado!) el hombre en la plenitud viril de sus facultades. Cualquiera se lo conoce, e pecialmente en España.

Pero la absoluta identidad de la sociedad con el individuo corresponde á la otra dirección monista, al materialismo que, descartando al fin y definitivamente toda apariencia y

mas bajo la preocupación y tendencia de hacer de la psicología social una ciencia de leyes y principios fijos, á los que se ajuste el espíritu social, uno en su necesario desenvolvimento, de tal modo que *á priori* pueda algún día determinarse, como en las ciencias físicas, las normas y aun los sucesos de la evolución ulterior de las naciones en general y de cada una en particular, por más que ahora tenga que contentarse esta psicología con disquisiciones y observaciones meramente constructivas acerca de los elementos y factores del espíritu y carácter nacionales y demás puntos interesantes de la *nueva* disciplina. Para su indagación y resolución sigue el mismo criterio que la psicología del alma individual, guiándose por esa psico-física, también monista, que fluctúa entre el hegelianismo y el positivismo.

noción de espíritu, equipara en absoluto el cuerpo social al de la persona física, el individuo. Invadiéndose recíprocamente este terreno común naturalistas, fisiólogos y médicos por una parte, y juristas y sociólogos por otra, convienen en que la sociedad es un organismo material, no colectivo ó compuesto de pluralidad de cuerpos, sino individual, producido por la evolución más adelantada, progresiva y perfecta de la única fuerza cósmica. Como según esta aberración, las ciencias físico-naturales y las morales, sociales y políticas tienen un mismo material objeto, (y no es fácil tampoco distinguirlas por el objeto formal), se toman recíprocamente estos científicos sus respectivas terminologías, no solo por exigencias de lenguaje y de elocución, sino como términos y conceptos comunes de propio y directo sentido y técnico valor y significación en un mismo dominio de la realidad y el pensamiento. La sociedad es un individuo, y éste á su vez una colectividad, porque, cuando menos en los dos superiores reinos de la naturaleza, una y substancialmente idéntica, lo general es que estos sociólogos entiendan que hay individualidad donde hay una cualquiera determinación, y viceversa, sociedad donde quiera que haya un conjunto ó agregado de *cosas* contiguas ó discontiguas: es la misma confusión monista, ultimada ya en todos los conceptos por la filosofía trascendental. Así es que, de igual manera que en el derecho y en la política aplican la denominación de células, tegidos, sistemas, cerebro, etc. á las correspondientes instituciones sociales y políticas, en sentido propio y no analógico, así, en idéntica acepción directa, no figurada, se trata de asociación, federación, centralización, burocracia, gobierno y demás en un animal ó en una planta.

Como en estas filosofías todo es uno y necesario, y las soluciones teóricas y prácticas indiferentes é ineludibles, propóñense también los problemas del individualismo y del socialismo, decidiéndose por uno y otro y encajando la solución en el cuadro de la doctrina y terminología correspondiente. Una vez se inclinarán al atomismo individualista rousseauiano, diciendo que la célula social es el individuo, y otra vez,

en una concepción más *orgánica*, afirmarán que la célula es la familia y que los tejidos son las corporaciones, gremios y clases, y los órganos los oficios y cargos públicos. De todas suertes, sobre las contradicciones y dudas de los autores siempre resultará que, tengan ó nó substantividad las células, tejidos y órganos lo mismo en la planta que en el animal ó en la sociedad, lo más imperfecto será para lo más perfecto, la célula para el tejido, el tejido para el órgano, y el organismo para aquel órgano que es el centro, clave y punto armónico de él: es la misma jerarquía de la creación, sólo que mutilada en la parte más culminante, el espíritu que es el principio así del recto individualismo como de la sociabilidad razonable y equitativa. La cuestión y la solución versarán sobre lo que el cerebro necesite y exija para la plenitud, no la plétora de su vida y funciones; pero como esto, tratándose de la sociedad, no pueden juzgarlo y definirlo las ciencias naturales, una de cuyas secciones y ramas es el derecho materialista, la conclusión práctica es la que dan las otras teorías reinantes y la condición y estado crónico de las sociedades modernas, esto es, ese socialismo cuyo fundamento, principio, génesis y desarrollo quedan expuestos. Donde la personalidad y la libertad no existen, y eso sucede en las doctrinas actuales, y donde los organismos históricos han sido disueltos por la consecuencia de aquellos errores y por la violencia revolucionaria, nada han de salvar las contradictorias afirmaciones individualistas de Spencer y demás sociólogos materialistas y las tímidas parciales aparentes y vanas rectificaciones del positivismo crítico y *espiritualizado*. La doctrina y la constitución verdaderamente orgánicas surgen del concepto y del arraigo de la libertad racional de que dió noción cierta el cristianismo, implantando el imperio de la personalidad en la vida, instituciones y costumbres medioevales. Fuera de él, lo que es lógico es ese socialismo que realmente predomina en los sociólogos positivistas, como cuando afirma Hæckel que la perfección de los organismos está en razón directa de la más íntima unión de las células y del consiguiente mayor grado de centraliza-

ción, ó cuando Spencer no reconoce otro organismo social que la nación, y afirma que el Gobierno es en esta lo que el cerebro en el animal, aunque no saque de esta afirmación las consecuencias, como le arguye Huxley; ó cuando Schäffle se declara paladinamente socialista y al socialismo el sistema y solución del porvenir. (1)

(1) El fundamento de este monismo no puede ser más viejo; es el materialismo que, antes como después de Jesucristo, comparte con la otra dirección monista el casi universal dominio de los espíritus, privados de las luces de la Revelación, u obstinada y hostilmente cerrados á ellas. Las aplicaciones son las que ofrecen la novedad de atrevida y á veces ingeniosa sutileza, no por eso menos absurda y aun grotesca, aunque no extrañai es el anacrónico materialismo sobre cuyo fondo y base, sin tomarse el trabajo vano y estéril de una imposible demostración, disponen los modernos positivistas estos juegos malabares, suponiendo y aun exigiendo previamente la aceptación ciega del dogma fundamental. Decía Vera que el hegelianismo solo puede demostrarse á un hegeliano; así tampoco el positivismo puede tener cabida más que en entendimientos y sobre todo en corazones propicios á recibirlo, y aun ansiosos de él por prejuicio anticristiano, por aversión á Cristo y á la ciencia que Él iluminó y dignificó.

Ni siquiera en Comte hay nada esencialmente original: ni método ni doctrina. El método es la observación de los fenómenos sociales, procedimiento que habían empleado antes cuantos sociólogos no adoptaban el procedimiento del racionalismo idealista y subjetivo iniciado por Descartes y llevado por Hegel hasta los últimos extremos de sus lógicas consecuencias. Lo único nuevo que hay en Comte es la forma, un tanto original, del orgullo racionalista, es á saber, la peregrina especie de que hasta entonces no hubo ciencia, sino las dos etapas inferiores y anteriores del desarrollo del pensamiento humano, la teológica y la metafísica, y que hasta él, hasta Comte, la doctrina política y social fué un conjunto de alucinaciones fanáticas y de abstracciones vanas. Aunque así no lo expresara, esta misma es la pretensión del racionalismo cartesiano y la que supone todo discurrir según el criterio racionalista.

Lo cual, sin embargo, no impidió á Comte llevar á la observación de los fenómenos sociales el prejuicio de la filosofía de su tiempo, el determinismo y la idea del progreso, como desenvolvimiento necesario, fatal, esto es, el supuesto del monismo, implícitamente contenido como postulado y corolario en toda doctrina determinista. Así es que, si después de esto y de la suposición previa de un sistema de ideas generales, á las que debía ajustarse la organización y funciones sociales y políticas, Comte afirmó la subs-

La Sociología.

Con frecuencia se han empleado en el presente libro los términos *sociología*, *sociológico* para expresar estudios y conocimientos concernientes á la sociedad en los varios respec-

tantividad de las ciencias, la discontinuidad de los fenómenos sociales y la especialidad de sus respectivas leyes, hasta el punto de declarar esteril la unidad científica, fué esto, ó por contradicción palmaria con su preocupación determinista, ó porque manifestó que en el período y etapa constructivos, en que la ciencia se hallaba aún, no hay razones bastantes para deducir y concluir la unidad de la realidad y, por consiguiente, la del objeto material de todas las ciencias.

El socialismo de Comte, que es lo que por ahora y directamente nos interesa de su doctrina, es bien patente en varios pasajes de sus opúsculos y de su *Curso de Filosofía positiva*: «la sociedad es la realidad por excelencia; y deben desaparecer las instituciones hechas para el individuo.» Consecuente con este pensamiento, le sacrifica aun la misma libertad de conciencia, enalteciendo el criterio de autoridad hasta deducir la necesidad del gobierno de los sabios en sustitución de la soberanía del pueblo y establecer el supremo poder espiritual de una especie de Iglesia con facultades más extensas que el actual papado, y residente en un concilio que desenvuelva el sistema de la más amplia educación altruista y positiva. Para combatir la dispersión fundamental de las ideas, de los sentimientos y de los intereses, que resulta del desarrollo mismo de la humanidad, pero que lo detiene, si no es combatida, reclama Comte la *enérgica preponderancia de un poder central* que comparta con el espiritual la dirección de la vida; y lleva su autoritarismo hasta la justificación y preconización de los golpes de Estado, de la dictadura, llegando á juzgar al Czar y al gran Visir como los órganos más capaces de penetrarse de los beneficios de la política positiva. Comte es un racionalista que condena el racionalismo, que desconfía de la razón hasta tocar en el error del tradicionalismo filosófico, y de la libertad hasta anularla en aras del absolutismo más despótico y centralizador. Por lo demás, Comte es un apreciador casi imparcial del valor y de los méritos de la Edad media, á la que ensalza por la distinción (separación admirable dice él) de los dos poderes, considerando á esta época como un esbozo y preparación de la filosofía y política positivas. Estas deben, remontando la corriente de los tiempos, reanudar de hilo de la tradición donde Hobbes y Rousseau lo rompieron; porque la filosofía positiva, imitadora del catolicis-

tos en que puede ser estudiada; y, aunque realmente no incumbe á este tratado ocuparse en el asunto del epígrafe, hacen muy útil las circunstancias un apéndice, que corresponde más bien á los libros y asignatura de Derecho natural. La

mo, reparte á semejanza suya las funciones entre los dos nuevos poderes, el espiritual y el temporal, de modo que se establezca un concurso *espontáneo y sistemático entre los filósofos, limpios de toda personal ambición, y los dictadores, ajenos á toda tiranía espiritual*. Comte es, por consiguiente, del todo opuesto al individualismo y al igualitarismo revolucionarios, así en Economía política como en los demás órdenes del derecho, considerando este período como etapa de crítica y demolición, para el establecimiento de una nueva doctrina orgánica y de una solidaridad social, acerca de cuyos fundamento, principio, valor y eficacia nada nuevo tengo que añadir. En este autor, si bien no hay nada nuevo ni verdadero en el conjunto, se encontrará mucho que aprovechar de observaciones juiciosas y profundas, atinadas y discretos raciocinios, que revelan, ya que no génio, talento nada vulgar, y que sirven de testimonio de mayor excepción contra las nuevas doctrinas, incluyendo las del mismo patriarca del positivismo.

Spencer es todavía un ecléctico, con ese grado de eclecticismo que consiste en ser más acentuado que el que en general implican todos los sistemas erróneos, y que se ahonda y extiende cuando, más alejados histórica y doctrinalmente de la verdad, va reduciendo el error los dominios de ella, por las exigencias lógicas de los principios. Suprimidos, en la obra *La Justicia*, toda idea y elemento sobrenaturales, se atiene absolutamente, para explicar la realidad y sus relaciones, al puro monismo materialista. La evolución de la materia, desde la primera nebulosa y el primitivo protoplasma á través de los tres mundos, *inorgánico, orgánico y superorgánico*, va produciendo los varios grados y etapas de la vida, única é idéntica, hasta llegar á los más complicados organismos sociales, donde alcanza, con la mayor complejidad, la mayor perfección. Hasta aquí Spencer profesa netamente el materialismo monista de Hæckel y las leyes darvinianas de la evolución, descartada ya la yuxtaposición de lo sobrenatural, que todavía aparece en *La Estática social*, publicada cuarenta años antes que *La Justicia*. Pero en la Sociología empiezan las contradicciones, notándoselas ya en la misma denominación de *superorgánico* que da al dominio de la colectividad humana, como si ya viera en este organismo algo distinto y superior de los organismos precedentes y menos perfectos, que no puede encajar en las clasificaciones, terminologías é identidades botánicas y zoológicas. Así como el individuo puede considerarse cual *una nación de unidades, que viven una vida individual*, así también toda *nación de seres huma-*

materia de esta parte de la nuestra, parte verdaderamente sociológica, explica y justifica la atención que dedicamos al punto, y nos hace confiar fundadamente en que no ha de ser tildada de invasión en campo ageno; y la grave trascenden-

nos es un organismo, que, como el individual, crece en masa y progresa en estructura, cuyas partes dependen entre sí, de tal modo que no pueden vivir sin esta dependencia, permaneciendo la unidad del todo á través de la sucesión y renovación de sus factores componentes. Pero vienen después las diferencias, que no escapan ni á la observación desfavorablemente prevenida contra ellas: el organismo social es *discontinuo* en sus elementos componentes, *movible* de lugar en sus partes, *indefinido* en su forma externa, y sin un centro común de sensibilidad. Spencer llega á *triunfar* de casi todas estas diferencias *aparentes*, explicándolas de la manera más violenta y pueril: lo discreto y discontinuo del organismo social tampoco falta en el individuo, donde no hay más cohesión que en el protoplasma indiferente del cual surgen las unidades orgánicas, también discretas; los individuos tienen además la continuidad de la superficie en que están, y que es parte *viva* del social organismo; y en cuanto á la inmovilidad individual es también relativa, limitada, como está, por la fijeza que exigen las funciones públicas (¿solo ellas?) Pero la substancial distinción de carecer el organismo social de un órgano común, donde resida el sensorio ó conciencia colectivos (que son una misma cosa para el sensualismo materialista) subsiste de modo evidente, excluyendo hasta los subterfugios y sofismas spencerianos; no hay uno mismo común placer y dolor para la sociedad como lo hay para el individuo. Spencer lo dice: el animal *tiene una conciencia colectiva, capaz de placer ó dolor, pero no la sociedad, porque sus unidades vivas no pierden, ni pueden perder, su conciencia individual, y la comunidad, como un todo, no tiene conciencia colectiva*. Este principio de individualidad que, por imperio de la naturaleza y exigencias del buen sentido, flota sobre las aberraciones monistas, denuncia, á contrario, el socialismo de todo monismo, porque el mismo Spencer reconoce, y en ello acierta, diga lo que quiera Fonillée, que en el individuo (el individuo solo materia en el supuesto materialista) todo tiende al bienestar y salud del sistema nervioso, mientras que los actos y funciones sociales tienen por fin inmediato el bien y provecho de sus miembros, únicos elementos capaces de conseguirlo y experimentarlo.

Esta es la capital afirmación individualista de Spencer, de la que parten principalmente sus analogías y conexiones con el individualismo optimista del siglo XVIII, pero la que constituye al mismo tiempo la principal yuxtaposición ecléctica del spencerismo, el arma poderosa con que Huxley se-

cia del concepto actual de la Sociología, que es la asignatura capital y característica de la nueva sección de Derecho, recientemente establecida para la Universidad de Madrid (8 de Agosto de 1900) es motivo bastante para que ningún pensa-

ñala las contradicciones de Spencer, forzándole, para una desdichada defensa, á fluctuar entre la afirmación de meras semejanzas formales y la de identidad absoluta entre el individuo y la sociedad, entre lo orgánico y lo superorgánico, entre la terminología puramente metafórica ó de recto y propio sentido, cuando aplica á la sociedad los términos de las ciencias naturales. En efecto, por argüirle Huxley que de la identificación de la sociedad con el viviente individual se deducirá que el cuerpo social debe estar supeditado á la férrea férula del centralismo despótico del Gobierno, como el cuerpo humano al cerebro, so pena de parálisis y muerte, es por lo que Spencer señala las diferencias de lo concreto y discreto, de lo simétrico y asimétrico como característicos del individuo y de la sociedad, y, sobre todo, la culminante é inatacable del sensorio concentrado ó desconcéntrico.

Pero al individualismo de Spencer le sucede lo que al de Rousseau y lo que, en general, á todos los individualismos no cristianos, que dan en socialismo por las razones y por las vías ya expresadas. En Spencer el socialismo no solo es implícito en la esencia, traza general y conjunto del sistema, sino explícito en afirmaciones casi categóricas y terminantes: ni los gremios, ni las sociedades locales son, para él, verdaderos organismos, no hay apenas más corporación social que la nación, no reconociendo otro Estado que el nacional, ó el más ámplio y futuro de federación entre las naciones ahora independientes.

Schäffle (*Estructura y vida del Cuerpo social*) es aún más ecléctico que Spencer, notándose en aquél más marcadas las huellas del hegelianismo, no sistemático, auténtico y directamente tomado del gran filósofo racionalista, sino de las fuentes y manos segundas del hegelianismo, adulterado doctrinariamente por Kranse, Lotze, Lange, esto es, por la corriente de la *psicología social*. Si fuera posible caracterizar bien el agregado confuso y embrolladísimo de kantismo, hegelianismo y krausismo, es decir, de pseudo espiritualismo por una parte, y de darwinismo, heckelianismo y spencerismo por otra, mi opinión, contraria á la de Fonillée, se inclinaría á colocar á Schäffle más bien en la corriente monista-hegeliana que en la del materialismo neto. A esto me decidiría el concepto del espíritu ó del alma social, que es para Schäffle *el principio íntimo de conexión de los fenómenos, acciones y reacciones del sujeto con el mundo exterior*. Consecuencia de la psico-física hegeliana que profesa Schäffle es que, si bien considera á la sociedad como producto último y más perfecto de la evolución, siendo el reino

dor católico desperdicie la oportunidad y coyuntura de señalar la esencia y el carácter, el propósito y tendencias de la moderna Sociología, erigida en ciencia independiente.

Antes no se la tenía en tal concepto; la misma denomina-

personal social una síntesis de los dos reinos precedentes é inferiores de la naturaleza, un todo de masas inorgánicas y orgánicas, se compone también de *masas espirituales*, lo cual le constituye en superior grado evolutivo. Schäffle no lo juzga opuesto á los otros, sino el más alto punto ascensorial del mundo, pero confiesa que con él nada puede compararse en el reino vegetal y animal. Porque ni aun los animales gregarios son capaces del elemento y vínculo ideal que constituye la asociación, por lo cual repugna al profesor austriaco (explicó en Viena, además de en Tubinga) aplicar á la sociedad el concepto y término de organismo, coincidiendo en esto con Spencer, que la tuvo por un dominio superorgánico de la realidad. Pero el alma social no la estima Schäffle un sensorio común, al modo spenceriano, (bien que tampoco como un principio uno y simple á la manera de la psicología tradicional) sino, lo mismo que Wundt, una coordinación de condiciones internas (no sé como podrán coordinarse sin un principio coordinador) un conjunto de representaciones, voliciones y sentimientos, tanto en la conciencia individual como en la social, que se condicionan y cooperan á la conservación de la vida, bien que sin el punto anímico de unión, armonía y acción!

Prescindiendo ya de estas psicologías, así como de la concepción ética y jurídica de Schäffle, en la que más se destaca no sólo el kantismo, sino también la anacrónica teoría de Tomassio, diremos, por lo que aquí nos importa, que el sistema del profesor ministro es socialista. No sólo no es el individuo, sino la familia, la célula social, sino que el individuo no tiene realidad y eficacia fuera de la asociación (es el concepto hegeliano y del panteísmo de la moderna psicología social); si se conserva y cuida de sí, es para el servicio del todo, como *instrumento de trabajo*, para el bien universal humano, que, en ningún monismo, puede concebirse lógicamente fuera y separado del de la especie; así es que *toda la vida espiritual del individuo es esencialmente social*. En cuanto al valor y eficacia de lo orgánico, ya puede suponerse: según Schäffle *ninguna célula, ningún tejido, ningún órgano puede vivir, obrar, nutrirse y conservarse fuera de la asociación principal del organismo y de la asociación secundaria á que dentro de él pertenezca*. La consecuencia absolutista y centralista es inevitable: no hay más estado que el nacional, al cual corresponde la protección exclusiva del derecho; el Estado representa en el cuerpo social el central órgano nervio motor, y de él dependen en absoluto las obras públicas, el ejército, la policía sanitaria, las

ción, aún corriente, de ciencias sociales demuestra que se consideraba y todavía se sigue considerando á la sociedad, en la variedad de sus especies, formas y categorías, como materia que excede de los límites de una jurisdicción científi-

bibliotecas y museos, la Iglesia, como la agricultura, el arte, como la ciencia, y hasta la dispensación de honores (cruces, placas quiero decir). Porque el Gobierno es la manifestación de la voluntad colectiva del pueblo, es el órgano unitario y ejecutor de sus resoluciones (vuelta á Rousseau) y el Parlamento la expresión de las ideas, sentimientos y resoluciones nacionales, no obstante que en otro lugar ha reconocido Schäßle que es imposible que la voluntad del elector esté realmente representada en el elegido, y que la voluntad popular, supuesta en el número del moderno sufragio es una burla.

En suma, Schäßle es uno de tantos manipuladores, á veces discretos é ingeniosos, pero, con más frecuencia, pesados, oscuros y confusos de todos los errores contemporáneos, y no es de sentir gran cosa que se le conozca y y lea muy poco fuera de Alemania.

No me atrevo á decir si Fouillée, otro manipulador por el estilo, es más ó menos ecléctico que Schäßle; aunque acaso pueda afirmarse, no por el resultado de su teoría, sino por las intenciones que descubre, que es un *conciador* á la moderna, á la manera de Cousin y de muchos otros, y no con más profundidad y sistema que ellos. Por esto vacilo mucho en colocarlo en el que llaman *indivizno medio*, ó sea en ese terreno neutral, ó, por mejor decir, igualmente inclinado y resbaladizo hacia las dos direcciones naturalistas, idénticas en el fondo. También es su doctrina una mezcla, bastante mal amasada, de kantismo, schellingniano y hegeliano por un lado y de crudo spencerismo, ó mejor, heckälismo por otra parte. La doctrina común á todo naturalismo, que quiera explicarse filosóficamente el origen y conexión de las cosas, la evolución, la determinación necesaria por el desarrollo de ese algo, de esa potencialidad mínima, idea ó materia, á la que traslada el naturalismo los atributos y caracteres del absoluto real, es también la base y el supuesto fundamental de la teoría de Fouillée, y sobre ese fondo edifica toda la endeble fábrica de sus contradicciones. Las *ideas fuerzas* recuerdan la identificación hegeliana de lo ideal con lo real, (todo lo real es ideal y todo lo ideal es real). Tampoco es original en Fouillée su concepto de la sociedad como un organismo fisiológico, como un individuo más perfecto y complicado; la idea de que lo individual es social, en cuanto es conjunto, y lo social individual, en cuanto es una determinación, es común á todos los monismos y deriva de la negación radical é implícita del principio de contradicción. El materialismo trasformista no es más que un hegelianis-

ca determinada, y, al contrario, es objeto común de varias ciencias. O lo que es lo mismo, la Sociología es un dominio enciclopédico parcial, una parte de la enciclopedia del saber humano, y no hay error ni peligro en usar en tal acepción y

mo, que llena con la realidad material, que se impone al buen sentido, el vacío encasillado dialéctico, no sólo en el dominio de la idea *fuera de sí*, sino en el de la idea *en sí*, en la conciencia de sí mismo. Una de las fases y etapas de este último orden dialéctico es el orden social. La sociedad es un organismo, concebido á la manera monista común, con predominio principalmente del patriarca de la moderna doctrina orgánica, Schelling, y de sus vulgarizadores y propagadores, Krause, Ahrens, etc.; y tanto dá decir que es un organismo ideal, como material y fisiológico; todo es cuestión de nombre y nada más. Pero en este punto Fouillée se inclina á la expresión y terminología materialista neta: la sociedad es un organismo individual fisiológico, llámesele como se le llame (Fouillée le denomina *reino social*) con la tendencia, aun más materialista que Spencer, á borrar las diferencias de que éste se hizo cargo entre lo orgánico y lo superorgánico; porque el hombre es para nuestro conciliador espiritualista un *vertebrado* como los demás, desde que la *Psicología comparada* allanó las barreras (tales son la razón, la palabra, la moralidad y la religiosidad) que la Teología (¡oh!) se obstina en mantener, explicando estas cualidades de supuesto origen divino como evolución de sencillos hechos psicológicos comunes al hombre con los animales. Como se vé, hasta aquí, el *espiritualismo*, ni siquiera aparente del monismo panteísta, no aparece por ninguna parte. El mismo factor conciencia no diversifica, ni cambia, en modo alguno, la naturaleza del animal-hombre, así individual como social. Su conciencia es un grado más perfecto de la conciencia común: así como la de los zoofitos y los anélidos es *confusa y dispersa*, y la de los animales superiores, especialmente los vertebrados y el hombre inclusive, *clara y centralizada*, la del animal social, el social individuo, ó sea, la de las sociedades humanas, *clara y dispersa*.

Y aquí empiezan las vacilaciones y los *equilibrios* entre la conciencia ó sensorio uno é indiviso y la conciencia colectiva, los mismos aprietos en que se vió Spencer, y ante los cuales procedió ciertamente con harta más formalidad y dignidad científica que Fouillée. Prescindamos, para hacernos pronto cargo de estos subterfugios ecléticos, del extraño atavismo que implica una conciencia, que, en el último grado de su evolución, vuelve á ser dispersa, como la del zoofito y la del anélido, ocupando un necesario término medio entre la del primero y el último grado de la escala animal; pasemos también por alto la afirmación, á todas luces falsa, de que la conciencia social es clara, cosa que no acontece en las sociedades atrasadas y me-

sentido el término, erróneo y perjudicial cuando se le toma en el respecto de una ciencia distinta con objeto siquiera hipotéticamente discernido y marcado.

No es posible dar aquí la prueba de estos asertos; sería ne-

nos aún en las racionalistas y librepensadoras, no alcanzando en ninguna, por perfecta que sea, la unanimidad de pensamiento y volición en cada acto social. Al llegar á este punto de psicología social, Fouillée niega que la sociedad sea una individualidad psicológica, aunque lo sea fisiológica, no obstante haber antes afirmado la existencia de una conciencia común, una en substancia y sólo distinta en grados, la cual debiera ser en todos los individuos el principio de individuación total y no por un sólo respecto. Y lo más extraño, si en este tejer y destejer hubiera algo que lo fuere, es que entre todas las partes del organismo social, es decir, entre las personas físicas, hay una comunicación mental semejante al comercio de las células en el individuo, la cual engendra el egoísmo colectivo, principio de la simpatía y del instinto de sociabilidad. A este organismo social no se le puede negar el correspondiente sistema nervioso, porque todos los cerebros de los ciudadanos forman, según Fouillée, la masa nerviosa de la nación, la cual, aunque difusa y discontinua, se comunica por medio de los sentidos, y, salvando por medios materiales la distancia, logra una intimidad *más intelectual que la conexión de las células yuxtapuestas á lo largo de un nervio*. O lo que es lo mismo, Fouillée no se para en los escrúpulos de Spencer, y afirma la conciencia ó el sensorio colectivos, identificando, como no puede menos de ser en todo monismo, especialmente el materialista, lo fisiológico y lo psicológico, y borrando la distinción entre las respectivas individualidades. Pero asáltanle en seguida los reparos del espiritualismo y la sana doctrina de la individualidad, y no pudiendo aquietarse ni con la teoría del *espíritu inconsciente* de Harmant, ni con la *conciencia colectiva*, como Espinas la entiende, niega con razón que tenga la sociedad un yo concentrado, distinto y separado como el del individuo, un yo, cerrado é impenetrable en cada persona física, que no puede unificarse con los demás, como se unifican en el órgano las células particulares que forman el cerebro. Añade que, de ser cierta la existencia de esa conciencia colectiva, trascendería desde las asociaciones más limitadas á las más amplias y extensas, sin detenerse en la sociedad civil, antes abarcando la raza, y finalmente la humanidad, y llegando al *espíritu del mundo*, á la *conciencia del gran todo*, el sólo y único ser, el dios de los panteístas. Y ya en estas vías hegelianas, concluye que la conciencia universal, concebida como un yo, necesita una pluralidad de hombres y de conciencias, del mismo modo que una variedad de células la conciencia individual, porque la conciencia general no impide la individualidad y li-

cesario para ello la imposible labor de la determinación de la materia de todas y cada una de las ciencias sociales, que no parecen ser otras que la Filosofía en la variedad de sus tratados (la Ontología, la Psicología y la Ética especialmente) y

bertad de las conciencias individuales y la unión de voluntades, que es en lo que puede consistir, *si se quiere*, la conciencia social.

Pero después de estas reminiscencias y escárceos hegelianos, el monismo de Fonillée resulta tan materialista como cualquiera de los de la mayor parte de esta dirección: la conciencia es un factor que no cambia lo esencial del organismo fisiológico, sino que este permanece el mismo, á pesar de la *idea fuerza* y de la voluntad que la conciencia supone é introduce en la evolución. Así como la conciencia no es esencialmente distinta, sino una misma con diversas modalidades, ó sean etapas y grados evolutivos, lo mismo sucede con la voluntad: también la tienen, y de la misma esencia que la del hombre, el mineral, el vegetal y el animal, sólo que la del primero es absolutamente egoísta, obrando cada parte para sí, como si no existieran las otras; la de los segundos es ya simpática, aunque con una simpatía en cierto modo *mecánica*, mientras que la del hombre es de un superior grado de atracción y solidaridad, en cuanto consciente y libre que es la voluntad humana. La libertad es un grado superior evolutivo de la conciencia y voluntad comunes: materialismo neto en una palabra, idéntico en el fondo al monismo hegeliano.

Ha-se dicho que uno de los factores de la *conciliación*, intentada por Fonillée entre las dos direcciones monistas del pensamiento moderno, es la que expresa la *síntesis* sociológica contenida en el término compuesto *organismo contractual*. Opino en esto de distinta y opuesta manera; porque no creo que haya aquí otra cosa que una mera denominación, ni siquiera la yuxtaposición ecléctica del consentimiento libre que supone el contrato, al lado de la necesaria evolución social que implican y exigen lo mismo el determinismo pseudo espiritualista que el materialista crudo y categórico.

Para Rousseau el pacto social es producto del libre arbitrio, que, en la doctrina rousseauniana, no había sido borrado por exigencia lógica del determinismo filosófico; para Fonillée, la sociedad es un organismo contractual, en cuanto la sociedad es un organismo plenamente conocido y querido por la conciencia y la voluntad, que, en el grado y etapa sociales de la evolución, llegan á la plenitud consciente y volitiva, menos perfectas en los grados y etapas inferiores y precedentes. Como en toda la filosofía moderna ha naufragado el libre albedrío, la libertad no es la facultad de elegir, sino sólo la voluntad y la volición conscientes, aunque necesitadas por naturaleza, determinadas *ad unum*. Por esto Fonillée llama contractual al or-

el Derecho en la variedad de sus ramas. Si estas disciplinas estudian el ser social en la diversidad y totalidad de sus aspectos, se sigue *á contrario* que no le queda á la titulada ciencia sociológica objeto material ni formal.

ganismo social, en cuanto consentido, no en cuanto elegido, esto es, en cuanto el vertebrado hombre, al llegar á estas alturas de la evolución, la conoce, la quiere y se siente impulsado á ella por la idea-fuerza de una simpatía y solidaridad más conscientes. Contrato aquí no es un vínculo que se determinó por elección, sino la misma relación conocida, querida y sentida ni más ni menos que cualquiera otro deber. Las palabras de Fonillée son terminantes: la sociedad es un organismo contractual, porque es *un organismo que se realiza concibiéndose y queriéndose él mismo*» (*La Science sociale contemp.* pág. 115), ó lo que es lo mismo, aquí no hay más que una aplicación al monismo materialista de la teoría que considera á la libertad como la voluntad en cuanto consciente.

Respecto del socialismo y el individualismo, este autor maneja las ideas corrientes y vulgares que el cristianismo y la ciencia tradicional esparcieron por el mundo, y Fonillée no hace más que encajarlas ó encasillarlas dentro de su sistema, que es radical y fundamentalmente incompatible con ellas. Engañase Herbert Spencer al abundar en el sentido del puro individualismo, pero también se equivoca Yäger abundando en opuesto sentido. La descentralización perfecta es compatible con la perfecta centralización; cuanto mejor comprenden los ciudadanos que son libres, mejor entienden también la utilidad de la asociación, ó lo que es lo mismo *la multiplicación de fuerzas, de inteligencia y hasta de libertad, que resulta de la unión de las fuerzas, de las inteligencias y de las libertades*. Las asociaciones, al desenvolverse, se irán también federalizando, de tal suerte, que el Estado del porvenir será una *asociación de asociaciones, una centralización libre resultante de la descentralización misma*. Así dice que se concilian los términos contradictorios! *individualidad y colectividad, libertad de las partes y cohesión del todo*. Pero al lado de estas afirmaciones, generalmente juiciosas y exactas, tomadas del patrimonio científico del género humano, y no de ningún sistema demoledor y exclusivo, figuran los errores socialistas de todo y cualquiera monismo. Juzga equivocadamente Fonillée que el individualismo es la condición necesaria de una acción creciente y, por otra parte, apetecible, inevitable, del Estado, lo cual constituye para Fonillée un progreso, porque, para el determinismo, progreso es lo que sucede, porque no puede menos de suceder. Que el individualismo liberal engendra el socialismo es cierto como hemos visto; pero, en cambio, el individualismo recto alivia á todas las sociedades, desde la familia á la sociedad civil, y lo mismo á las aso-

Pero, si la premisa del entimema en que puede condensarse y formularse el anterior raciocinio, no necesita ni es posible que tenga aquí prueba directa, es tan fácil como útil aducir otras muchas también claras y concluyentes.

ciaciones voluntarias que á las necesarias, á las incompletas que á las completas, de sus cargas y atenciones actuales; y por consiguiente la acción del Estado, como la de cualquiera otra autoridad, está en razón inversa de la autarquía individual, bien entendida y practicada. Lejos de esto, el referido pensador asigna al Estado una acción cada vez más extensa, adjudicándole á él sólo la *justicia reparatriz*, no sólo de las violaciones actuales del derecho, sino de las históricas, cuyos efectos subsisten, aunque no esté obligado á repararlas todas, y tenga que aplicarse la *prescripción* á todo lo que no se puede apreciar ni comprobar (*tout ce qui est inverifiable et inappreciable*). No sólo no ha marcado Fonillée los límites entre la acción individual y la del Estado, al señalar sus fines y esfera de un modo harto insuficiente y vago con el término de *justicia reparadora*, sino que no admite, de hecho, personas y poderes intermedios, que entre el Estado y el individuo la apliquen y realicen; y como, según este sociólogo, á medida que el individualismo crece, se acrecienta también y refuerza la acción del poder civil, el socialismo fluye de esta teoría individualista tan lógicamente como fluye del individualismo rousseauniano. Instrumento de la justicia reparatriz es, en la doctrina que exponemos, la instrucción universal, gratuita y obligatoria; y, finalmente, Fonillée sella de socialismo su sistema, afirmando que el Estado es el único supremo juez de sus deberes, sin que los que tiene orguyan en el individuo correlativos derechos, especie peregrina que el autor de *La idea moderna del Derecho* no se toma el trabajo de fundamentar en metafísica y moral algunas.

El representante del más puro positivismo materialista es acaso Lilienfeld (*Pensamientos sobre la Sociología del porvenir*). Para él la sociedad es un organismo de células nerviosas, semejante al sistema nervioso del cuerpo humano; es un organismo como el de cualquiera animal, solo que (cosa extraña y contradictoria con el grado de evolutiva perfección, que la sociedad realiza y supone!) este organismo no consta más que de células nerviosas. Por lo demás, el tal organismo se desenvuelve según las mismas leyes naturales que los demás, idénticas á las que presiden á los otros fenómenos de la naturaleza: generación, nacimiento, crecimiento, desarrollo, enfermedad, muerte y renacimiento. Se desarrolla la sociedad, desenvolviéndose por diferenciación progresiva, para una concentración de actividad cada vez más intensa con una diferenciación de fuerzas más especializada. La lucha por la existencia, purificada y enaltecida en las especies superiores animales, en

Todas ellas se reducen al testimonio de mayor excepción que prestan los autores modernos, partidarios de la substantividad de la Sociología, al mostrarse incapaces de determinar su objeto, distinguiéndole, aunque no sea más que formalmente, del de las otras ciencias que siguen llamando sociales. De aquí la división que algunos admiten (por ejemplo, Lagresille, (*Vues contemporaines de Sociologie...*) de Sociología general y sociologías especiales, que no son otra cosa que esas disciplinas, que también estudian á la sociedad, y que componen una especial jurisdicción de la enciclopedia general con los nombres,

cuanto consciente, libre (¡espiritualizada!) engendra las costumbres, su norma, el derecho, y el poder depositario de éste. En Lillienfeld está representado el individualismo por la afirmación de que la célula nerviosa no es una sociedad, por ejemplo, la familia, sino el individuo; el socialismo, por el supuesto de ser el gobierno el centro del sistema nervioso social; y un repulsivo concepto y sentido aristocráticos, por la teoría de que la sociedad tiende á la constitución nobiliaria, en virtud del mayor desarrollo adquirido por ciertas células en los organismos inferiores, el cual les da preponderancia sobre las otras. Por no alargar más esta nota, ya sobrado extensa, no hacemos referencia á otros autores, aun siendo tan conocidos como Bluntschli y Zachariä. Fluctuó el primero, al comparar la sociedad con el hombre, entre el más crudo sentido de identidad material y las vaguedades analógicas de la psicología sociológica de tendencia pseudo espiritualista. Domina la *primera manera* en los *Estudios psicológicos sobre la Iglesia y el Estado* en los que éste, tan encomiado como superficial tratadista lleva sus amenas extravagancias de comparación é identificación *antropológicas* hasta el extremo de atribuir al Estado sexo masculino, y fememino á la Iglesia. También pertenecen al *sexo fuerte*, por sus dotes de entendimiento y voluntad, no solo el gobierno, sino la justicia, la monarquía y la aristocracia, no obstante el género gramatical de estas últimas; en cambio, la democracia y la ideocracia, la economía y cultura nacionales son del *bello sexo*. Después en la *Teoría general del Estado* recogió velas, limitándose al *organicismo* del criterio psico-físico de las modernas filosofía y política, que navegan y naufragan entre los escollos del materialismo ó del espiritualismo aparente.

Zachariä, siguiendo la misma dirección, hizo estudios, no poco originales, de Patología y Terapéutica políticas en el mismo sentido de este antropologismo, preocupado con las analogías (ó acaso algo más) entre las enfermedades del cuerpo humano y los extravíos y vicios de las naciones.

todavía corrientes, de ciencias *morales, sociales y políticas*, para indicar con el segundo el conjunto de ellas, con el primero la que es su raíz y fundamento inmediato y la naturaleza ética de todas, y con el tercero, ó la fase nacional de ellas, y que constituye, por su objeto formal, una rama jurídica distinta, ó, lo que es más probable, la confusión socialista de la sociedad con el Estado y la consideración consiguiente de éste como único sujeto y órgano de acción pública. Pero ya se ve que la división, más ó menos explícitamente establecida por Lagressille, carece de toda condición lógica, en cuanto divide con criterio y en concepto de todo y partes, defecto de forma que corresponde á la imposibilidad de asignarle objeto á la Sociología y por tanto á la de resolver el problema. Porque la generalidad de la Sociología más amplia, esto es, de la Sociología efectiva y específica según estos autores, ó ha de consistir en el carácter enciclopédico de ella, lo cual niegan ellos, para no confesar la *insubstantividad* de su *ciencia*, ó tiene que reclamar su especial objeto material ó formal en la materia común de la Sociología general y de las especiales, la sociedad: *nulla est solutio*. Porque no es solución el pueril efugio de Giddings (*Principios de Sociología*) que se empeña en que la Sociología pueda ser ciencia general sin ser enciclopedia. Hay aquí un juego de palabras, procedente de varios desconocimientos de bastante bulto: no hay ninguna ciencia general, todas son especiales, incluso la Filosofía, cuya especialidad consiste en considerar toda la realidad, Dios, el mundo, el hombre, por razones formales distintas de las de las otras ciencias que se reparten estos tres objetos, y que la Filosofía estudia por razones no relativamente últimas, como cada ciencia extrafilosófica, sino por razones absolutamente últimas, empezando por los conceptos más abstractos y universales del ser, la Ontología, que también llaman Metafísica general. Mas, al trasladar este carácter no general, sino filosófico á la Sociología, no hacen otra cosa que considerarla como la filosofía de la sociedad, esto es, la que, por principios generales, armoniza la materia y doctrina de las sociologías especiales, subordinando

la variedad á unidad de razones universales y abstractas. Pero, en tal supuesto, la Sociología general es la Ética, es á saber, la Filosofía práctica, la ciencia de esas razones absolutamente últimas, de donde inmediatamente derivan los principios y doctrinas de las sociologías particulares, ó sean, las *ciencias sociales y políticas*.

Para eludir esta conclusión de la doctrina *anacrónica*, tradicional, etc., á la cual son abiertamente hostiles el prejuicio y el encono de estos pensadores, se han obstinado en el mismo imposible en que se estrellan los positivistas, cuando pretenden unificar los conocimientos de las diversas ciencias concernientes á la única realidad, la materia, sin tropezar en la aborrecida Metafísica, aunque no sea más que la de los seres ó meros fenómenos materiales. Lo importante para estos sociólogos es no dar en la Ética, como cabeza y principio de la enciclopedia sociológica; y de aquí las evasivas, ó de disimular la conclusión, negando y cambiando el nombre de esta ciencia madre, ó de confundir la Sociología con otras ciencias sociales, verdaderas ó supuestas, tales son la llamada Filosofía de la Historia y la Filosofía del Derecho.

Respecto de la *substantividad* de la primera, he escrito cuanto de ella se me ocurre en la nota XVI y XL de mi *Ensayo de Metodología jurídica*, donde se prueba, ampliando doctrina contenida en el texto, desde las páginas 36 á la 40 y desde la 150 á la 153, que la Historia no es ciencia y que lo que se ha venido llamando Filosofía de la Historia no es más que una *historia interna*, más crítica y profunda, de los motivos, significación y alcance de los sucesos históricos. Ahora bien, no siendo ciencia, no puede equiparársela á la Sociología que presume de tal, aunque no falta razón para identificarlas á los que cultivan la Sociología en el sentido y con el criterio, puramente eurísticos, de una observación y experimentación de los fenómenos sociales, para el mero efecto de revistarlos y catalogarlos, deteniéndose en parciales y deficientes generalizaciones é inducciones. Para evitar tal confusión, distingue Fouillée la Sociología de la Filosofía de la Historia en que el



método de aquélla es predominantemente *experimental*, á *posteriori*, *inductivo*, mientras que el de esta es el de construcción y deducción (*á priori*); lo cual es un error notorio, porque la historia interna, ó sea la Filosofía de la Historia no puede construirse científicamente, puesto que la Historia no es ciencia, y, ni á *priori* ni á *posteriori*, encontrará las leyes necesarias á que han de someterse necesariamente los ulteriores sucesos humanos, de los cuales es un factor importante la libertad humana, cuya esencia y carácter es la carencia de toda necesidad, y otro superior, la Providencia divina, cuyos designios no son escrutables, ni sujetos á leyes predeterminadas que puedan penetrarse y formularse por la inteligencia del hombre ni por la sabiduría del historiador. De suerte que, si por el método han de distinguirse solamente estas *ciencias*, no se encontrará razón y fundamento algunos de distinción, mientras no pase la Sociología de ese perpétuo análisis crítico de los fenómenos sociales, á fin de encontrar en ellos lo que no se hallará nunca: un especial respecto sociológico. Lo que hay es que Fonillée concibe la Filosofía de la Historia á la manera monista y de determinista evolución, como la ciencia histórica que llegará al *summum* de trazar al fin las leyes á que han de ajustarse los actos humanos, esto es, á una *divina* presciencia del porvenir; pero á esto mismo llegaría la Sociología, si fuere ciencia, á señalar los principios necesarios é inmutables á que habrá de sujetarse la evolución social. Mas hasta ahora Filosofía de la Historia y Sociología están en el mismo caso, en el de ensayo y tanteo, primeras funciones y tareas de construcción científica, *experimental* y á *posteriori*, no habiendo aún salido la Sociología del período eurístico en que la dejó Comte, á no ser para tentativas ó conclusiones evidentemente absurdas, ni pasado la Filosofía de la Historia tampoco de esas fantásticas relaciones, no de los hechos, sino sobre los hechos y aun contra ellos, de esas tésis filosóficas en que se les desnaturaliza y trunca para acomodarlos y encajarlos en el molde del *apriorismo* monista y hacerles hablar el lenguaje de las leyes necesarias que presiden al desarrollo

de la Historia, como al de los hechos y sucesos del orden físico, todo ello por el influjo determinista de la filosofía moderna, del hegelianismo singularmente. En una palabra; como hasta ahora Filosofía de la Historia y Sociología están operando sobre hechos presentes y pretéritos, limitándose á observaciones y experimentaciones, á más de deficientes, falaces, las más veces, á causa del *color del cristal con que miran*, y punto de ascensión para excursiones aereas por la jurisdicción de estupendas *hipótesis*, no deja de tener motivo y explicación el carácter histórico que no pocos autores dan á la Sociología, puesto que, mientras no se alce á una construcción general científica, aunque no sea más que hipotética, y se mantenga en el análisis y estudio de los hechos sociales, estará retenida en el terreno, jurisdicción y propósito de la Historia. Diga lo que quiera Fouillée, imaginando alambicadas y oscuras distinciones de los respectivos objetos formales de ambas ciencias, no habrá fenómeno social que no sea histórico, ni historia que no abarque los fenómenos sociales en la totalidad de sus respectos.

Pero como esta categoría histórica no logra satisfacer á los que quieren á la Sociología ciencia independiente á toda costa, ni puede el humano pensamiento detenerse en funciones iniciales, parciales é insuficientes de la construcción científica, manteniéndose en lucubraciones fragmentarias y desordenadas, sin más finalidad que ellas mismas, y equivalentes á *pensar por pensar*, explicase mejor que se haya confundido la Sociología con la Filosofía del Derecho, que al fin es ciencia inmediatamente derivada de la Ética, puesto que Filosofía del Derecho no es en realidad cosa distinta del Derecho natural, más *filosófica*, esto es, más profundamente indagado y expuesto. Así opinan Saint Marc y Guelfi, asegurando categóricamente el primero que la Sociología es la verdadera Filosofía del Derecho; dos testimonios más de la *insubstantialidad* de la Sociología, que pueden sumarse al de Vander Resch, el cual, en el discurso de apertura de la Universidad de Bruselas en 1888, se pronunció contra la distinción de la

supuesta ciencia, á causa de la vaguedad é indeterminación de su objeto, inclinándose á considerarla como un grupo de las ciencias morales y políticas, ó á identificarla con la Filosofía de la Historia, y opinando, con muy buen sentido que debe eliminarse del plan de estudios universitarios.

Esta dirección no era bastante á satisfacer á los sociólogos, porque reducía la Sociología á mero término distinto con que se designara una ciencia moral, social y política, el Derecho, que eso es, en resumen, la Filosofía de él. Por lo cual la tendencia más seria y al par más lógica es la de los que, como Vanni y, en cierto modo, Vaccaro, quieren dar á la Sociología un carácter filosófico, bien que sin incorporarla á ninguno de los tratados de la Filosofía. Así es que dice el primero de los citados autores que la Sociología no es posible, sino en cuanto filosofía de las ciencias sociales, con lo cual se conforma Miraglia, bien que entendiendo que á esto equivale el considerar á la Sociología como la enciclopedia de ellas: otro testimonio de mayor excepción á favor de nuestra tesis.

Contra la opinión de Vanni y de los que piensan del mismo modo no hay que discurrir ni argüir de distinta manera que contra los que, en el positivismo, no saben en qué hacer consistir esa Filosofía que, con su Metafísica y todo, tiene que surgir en cuanto se discurra acerca de la realidad, sea cual fuere, por formales razones abstractas y universales, absolutamente últimas que la abarquen y estudien en todos sus respectos. O la filosofía, aún en el materialismo positivista, tiene que ser eso ó reducirse á un conjunto de ciencias, digámoslo así, sin superior unidad de cohesión y armonía. Pues lo mismo hay que argüir á éstos sociólogos que coinciden con el criterio de Vanni: si la Sociología no ha de ser lo que es, y con muy buen sentido dice Miraglia, esto es una enciclopedia sociológica, tiene que ser una filosofía de las ciencias sociales; pero la filosofía de las ciencias sociales no puede ser otra que la Ética, resultando de los dos modos lo que hemos antes afirmado, es á saber que la Sociología no tiene substantividad. Esto es lo que nos importa, aunque es claro que, opinando

que la Sociología es conjunto de ciencias sociológicas, no hemos de reducirla á la Ética.

¿Y por qué no se avienen estos sociólogos á la conclusión lógica de identificar la Sociología con la Filosofía moral? La respuesta á tal pregunta, descubriendo el íntimo motivo de una repugnancia, al parecer inexplicable, pondrá de manifiesto todo el trascendental error que encierra la substantividad de esta pseudo ciencia, engendrada en las entrañas mismas de la filosofía moderna, y que expresa y traduce la esencia de su radical aberración.

En efecto; la Ética cristiana y tradicional estudia en las diversas clases, categorías y formas de la sociedad, las normas y condiciones de su moralidad y rectitud, esto es, la racional manera con que han de ordenarse al fin del hombre, mediante el cumplimiento y efectividad de los deberes y derechos de los asociados respectivos; pero no presume, ni trata de indagar, encontrar y formular *á priori* las leyes á que se ha de ajustar la acción social futura, de una manera tan necesaria é inmutable como los seres y organismos físicos se ajustan en su actuación indefectiblemente á las leyes y normas de su correspondiente naturaleza. O lo que es igual, como el monismo de cualquiera clase, lo mismo el *espiritualista* que el *materialista*, profesan la unidad de substancia y la evolución necesaria de ella á través de los distintos grados y etapas en que se desarrolla la realidad una é indistinta, llámese idea, materia, idea-fuerza, etc., no puede acomodarse á erigir en Sociología una ciencia, que viene secularmente distinguiendo lo que debe ser de lo que es, lo necesario de lo contingente, y que, apreciando en la conducta social idéntico factor que en la individual, el libre albedrío, carece de la presciencia de los hechos contingentes y libres, y no puede por lo mismo trazar las leyes del desarrollo de la vida moral ni en los individuos ni en las sociedades. El físico conoce y formula las leyes de la atracción, la gravitación, etc.; el moralista y el sociólogo ignoran, é ignorarán siempre, como se determinará en tal ó cual circunstancia la voluntad del hombre, y, por lo tanto, como se determinará la

acción social de las varias sociedades presentes y futuras (familia, universidad, concejo, nación...) En una palabra, el monismo determinista necesitaba una ciencia nueva, que, considerando á la sociedad como un dominio de la idea, ó como un organismo material viviente, redujera á unidad superior la variedad de los fenómenos sociales, subordinándolos en una fundamental armonía, y señalando de antemano las inmutables é indefectibles leyes del desarrollo social. Aunque esto podía intentarse con el criterio, y desde el punto de vista de cualquiera monismo, fué Auguste Comte quien acometió la empresa fuera de los idealismos hegelianos, que pugnaban tanto con la realidad, y en vez de deducir *á priori* los principios sociológicos en este orden dialéctico de la idea, emprendió la obra de encontrarlos por medio de la observación y experimentación de los fenómenos sociales, procediendo inductivamente en esta labor eurística, bien que con el prejuicio, sino del monismo ya construido y declarado, con el del materialismo en que iban cayendo los que huían del idealismo trascendental, y á quienes su apasionada preocupación anticristiana obstruía el camino y cerraba el paso hacia la solución y refugio de la filosofía verdadera.

Desde entonces los ensayos sociológicos y la hipótesis y construcciones resultantes de ellos no han conseguido determinar el objeto y límites de la nueva ciencia, ni avanzar realmente un paso siquiera más allá del terreno de indagación analítica en que la dejó Comte. No supo éste decir si era la Física ó la Fisiología social, ni donde concluye la jurisdicción de la Fisiología y empieza la Física de la sociedad; los sociólogos modernos tampoco han discernido todavía cual es la particularidad *sociológica* de los hechos sociales; y eso que para los positivistas la tarea se reduce á una cuestión de ciencias físico naturales, á una distinción del objeto formal que en la materia una é idéntica estudia cada una de esas ciencias, sin que los nombres de moral, derecho, sociología, etc., sean obstáculo serio para tal discernimiento, puesto que, á pesar del nombre, no pueden designar esas disciplinas pseudo morales más que los aspectos y fases de la materia.

Así es que el pensamiento de Vanni de que la Sociología sea una filosofía sociológica no podrá pasar de una aspiración, que, por las razones dichas, resulta irrealizable, manteniéndose la *ciencia* indefinidamente en el período y etapa de recuento histórico y observación y experimentación presentes de fenómenos varios concernientes á la sociedad. A esto la reducen la mayor parte de los más conocidos y célebres sociólogos positivistas, á indagación histórica del origen y progresos de la idea y sentimiento sociales que unos juzgan exclusivos del hombre (p. ej., Spencer, Schäffle y Tarde) y otros, como Espinas y Yäger, comunes á las especies inferiores del reino, ó mejor dicho, de la etapa animal, opiniones que son indiferentes para el conjunto de la doctrina espiritualista, y que no modifican en nada la substancia del materialismo. Unos y otros autores acuden en apoyo de estas y de otras especies á esa fantástica prehistoria, región de las invenciones y de los ensueños más peregrinos, para demostrar ora que la sociedad es privativa del vertebrado más perfecto, el hombre, y que no la alcanzó siquiera el pitecantropo, ó bien para señalar hasta en las hormigas, y no digamos nada en los castores, los esenciales elementos constitutivos de la comunicación social.

Y unos y otros, así los que juzgan á la sociología una filosofía social, como los que no salen de la fase y labor eurística, tienen que resignarse á no constituir nunca ciencia efectiva; porque ésta es incompatible con el actual positivismo, con el kantismo redivivo de la mera fenomenalidad, que se disipa y pasa, y que sólo observar, recoger y apuntar la serie y sucesión de los fenómenos exige y permite (1). Es decir, la Sociología no está hoy más adelantada que en la filosofía de Comte,

(1) Véase en mi *Ensayo de Metodología jurídica*, Capítulo IV, como el positivismo evolucionista es incompatible con la ciencia del Derecho y con la utilidad de ella y de la Historia. Las mismas razones pueden aplicarse para deducir la imposibilidad é inutilidad de la Sociología desde el punto de vista de la evolución que profesan cualesquiera monismos.

y la que éste dejó en estado de ensayos, tanteos é hipótesis, envueltos en las contradicciones y vacilaciones de aquel período inicial de invención científica, sigue al cabo de tantos años en igual situación, no por la reserva, prudencia y circunspección relativas con que procedió el patriarca, sino por impotencia de los sociólogos sucesivos, ó mejor dicho, por imposibilidad de erigir ciencia de un objeto que no existe. Aún no sabemos ahora como entonces si la Sociología es Física, ó Fisiología social, si es ó no la etapa y fase social del derecho, ó es el derecho mismo, si es éste la misma realidad social, ó un producto de ella, ó la fuerza específica del organismo social, y estamos en la misma ignorancia respecto de las relaciones de identidad ó de distinción entre la Biología y la Sociología, y entre éstas y la Estática y la Dinámica sociales. Por esto no le falta razón á Adolfo Costa para afirmar que la Sociología, á diferencia de lo que él llama la Ideología, observa, estudia y recoge lo relativo de las cosas y fenómenos sociales, que es lo único que permiten considerar y agrupar los sistemas evolucionistas, incompatibles con la idea de substancia, y por lo tanto, con la posibilidad de la ciencia. Lejos pues de ser la Sociología una ciencia filosófica, ni siquiera es ciencia; debe huir de todo *dogmatismo*, y, por consiguiente, de formular principios é ideas fundamentales, con lo cual, dice bien este autor desde su punto de vista, enseñará la *tolerancia* y el *respeto* á las opiniones ajenas y á resignarse á lo que acontece de un modo necesario, porque no puede menos de suceder. Ya sabemos la significación y trascendencia escépticas que tienen las palabras subrayadas, y lo que encierra la *resignación* ante los sucesos, que equivale á declarar la inutilidad de la indagación de los principios y leyes sociológicos, con el intento vano de orientar é ilustrar y dirigir la vida social, que, de todos modos, ha de cumplirse y desarrollarse con la necesidad propia de todo determinismo. Con esa resignación, que expresa más de lo que parece, y que no es, ni mucho, menos la conformidad con los designios de la Providencia, se declara lógicamente ilusorio por imposible, el propósito de Comte de hallar y formu-

lar una pedagogía social y política, fundada en las leyes de un progreso en el cual nada influye ni puede el libre albedrío, y que ha de verificarse de un modo necesario, puesto que para Comte, como para todos los deterministas, progreso y desarrollo ó evolución indefectibles son una misma cosa; el progreso no es más que la evolución en la etapa ya humana, *moral* y social.

Este sentido histórico y utilitario de Costa tiene intrínseca conexión y coincide en gran parte con la concepción de Marx, Engels y Loria, que van simplificando la Sociología hasta reducirla al estudio de la evolución del fenómeno capital y fundamental, el económico, al cual se subordinan los demás hechos é instituciones sociales, y á cuyo estado y transformaciones se adaptan la situación y sucesión de esos fenómenos y de las leyes que en cada nación y época los regulan. Marx desarrolló lógicamente, y aplicó á la sociedad y á la consiguiente concepción de ella el criterio del materialismo neto, reduciendo todo el fin humano á la vida y prosperidad terrenas y materiales del individuo y de la colectividad. La conclusión es indefectible: si no hay en el hombre substancia inmortal, ni, por consiguiente, vida ultraterrena, es aquí en la tierra donde hay que conseguir el fin puramente temporal de la felicidad corpórea, mediante el goce de los bienes físicos adecuados; el bien económico es el bien humano íntegro, el bien honesto y moral; derecho y economía, se confunden, ó por mejor decir, la Economía política es todo el derecho, toda la moral, el único orden de la vida individual y social, el que se dirige á arreglar la producción y la distribución de manera que todo hombre tenga un goce sensible suficiente é idéntico. Si bien se mira, en esto tienen que venir á parar todas las concepciones naturalistas, la pseudo espiritualista inclusive; y en Hegel se inspiró Marx, llenando el encasillado vacío de la dialéctica hegeliana con el materialismo de Feuerbach, y explicando toda la evolución histórica por las transformaciones del régimen de la producción, el cual determina y origina todos los cambios sociales para acomodarlos á cada etapa de esa me-

tamórfosis económica producida por la, hasta aquí incesante, lucha de clases (1).

(1) El socialismo de Marx y Engels se diferencia de los sistemas socialistas anteriores en que es ya monista y determinista, y por eso, sin duda, algún autor lo llama socialismo científico, por fundado en los indefectibles postulados del racionalismo, la unidad de substancia y la evolución. El socialismo que pudiéramos llamar clásico no se había aún divorciado de dos de los principios de la ciencia antigua: la inmutabilidad de las leyes económicas y la acción de la libertad humana, concebida aún á la antigua, es decir, como libre albedrío, y, por consiguiente, como uno de los factores, el único, ó cuando menos el principal del estado económico de cada tiempo y pueblo. Para estos socialistas de la escuela que pudiera titularse francesa, el capitalismo era una aberración y un abuso, un extravío del entendimiento y un uso vicioso de la libertad. Por el contrario, para Marx el régimen capitalista no es una categoría económica; porque *las categorías económicas no son categorías lógicas, sino categorías históricas*; y así el capitalismo es un estado económico, que vino, como los demás, cuando no pudo menos de venir, cuando las condiciones y exigencias de la producción lo trajeron necesariamente, puesto que estas condiciones y exigencias son las que determinan en cada etapa y estadio de la civilización el estado económico y, según él y para él, el social. No es pues el capitalismo un accidente, como creyeron los economistas clásicos y utópicos, ni el libre albedrío tuvo nada que hacer en el advenimiento y existencia de tal fase económica, como nada tendrá que hacer en su desaparición, cuando el régimen capitalista se haga absolutamente incompatible con una nueva situación en la producción de la riqueza. Esta situación ha llegado ya por virtud de la antítesis entre la manera de la producción, que por su desarrollo y necesidades se ha hecho social, y la distribución, que continúa siendo individual, no de distinta manera que cuando la pequeña producción apenas exigía más esfuerzo que el del trabajador dueño de su artefacto, y capital y trabajo eran de una misma persona. Actualmente el capital paga al trabajo lo que llama Marx el *valor en cambio*, esto es lo que vale como mercancía en el mercado, según la bárbara y férrea ley de la concurrencia, y se enriquece con el *valor en uso* de ese trabajo, es decir con el valor positivo, productor de la riqueza y que se mide por la cantidad de los productos creados. Con la diferencia entre ambos valores, esto es, con el exceso que sobre el salario representa la parte de valor en uso no retribuida, el *plusvalor*, se enriquece inícuamente el capital. Hay pues que establecer la jornada de trabajo normal, es decir, fijarla en consonancia con lo que el salario retribuye, y no con lo que ahora pone demás el obrero y el capital le usur-

Si no temiéramos alargar este apéndice, lo terminaríamos con una referencia, siquiera sucinta, á las relaciones entre la Sociología y otra ciencia también de nuevo cuño, la Biología, relaciones que aún no han determinado todavía sociólogos ni biólogos. Ni es fácil, porque á la Biología le acontece lo que á la Sociología: tampoco es ciencia, sino materia incluida en las varias disciplinas que estudian seres vivientes, empezando por la Teología, en cuyo objeto está comprendida la suprema, divina, incomunicable vida de Dios, hasta la Botánica, que considera la más inferior de las vidas, la de las plantas. La Biología, como ciencia independiente y substantiva, procede de la misma raíz que la Sociología, como ciencia distinta de las varias concernientes al ser social, esto es, del monismo materialista ó panteista, según el cual es la vida una propiedad que se predica de un modo no análogo sino unívoco ó de todos los órdenes de la única substancia material ó divina, ó de algunos de ellos más adelantados en la etapa y grado de la evolución. De aquí la división de la Biología en general y particulares, según que trata de la vida esencialmente una é idéntica en todos los seres ó en aquellos en que adviene por grado superior de desarrollo, no por distinta naturaleza; ó considera las varias vidas, solo accidentalmente distintas sobre el fondo de la única substancia, ó con vida en todas, ó solo en algunas fases de la evolución de la materia ó *del divino todo*.

Luego vienen las dificultades de marcar la diferencia de objeto formal, única posible en el monismo, entre cada biología y la ciencia correspondiente á aquel orden de la realidad, ó como si dijéramos entre la Sociología y la Biología, que es equivalente á la de encontrar esa distinción entre la Botánica y la Biología vegetal ó entre la Zoología y la Biología de los

pa; y para obtener *la verdadera Carta magna del mundo moderno* (así llama Marx á esa jornada) en sustitución del *pomposo catálogo de los Derechos del hombre* (frase también del mismo autor) no hay otro recurso que la fuerza, que es la que siempre ha resuelto los conflictos económicos: la historia no es más que la lucha de clases.


animales. Y aquí empiezan las diferencias: unos autores, por ejemplo Saint Marc y Lilienfeld, confunden ambas ciencias, opinando el primero que la Sociología es una biología de la sociedad; otros quieren á todo trance, siguiendo la doctrina de Comte, distinguir ambos dominios científicos, verbigracia, Collajanni, no faltando tendencias intermedias y vacilantes entre ambas opiniones, y pudiéndose afirmar que nadie ha marcado el respectivo objeto formal de la Biología y la Sociología.

No teniendo por ciencias ni á una ni á otra, no nos interesa gran cosa el problema, al menos en el terreno en que se plantea, sino cuando más señalar en cada ciencia social lo que haya de biológico, es decir, lo concerniente á la propiedad vida en la sociedad, y como puede esta propiedad atribuirse á las personas morales. En tal respecto, así como la vida del alma es uno de los objetos de la Psicología en su parte más fundamental y elevada en la que llaman algunos Psicología racional, y Antropología otros, del mismo modo de la vida social tienen que tratar las distintas sociologías, bien que no en el sentido monista de una vida social *física*, esto es, individual y concreta, sino en el sentido metafórico y de mera analogía explicados en el Capítulo V del primer tomo y en el anterior apéndice del presente libro. Y así como solo metafóricamente y por analogía, puede hablarse del alma social, así de la vida de la sociedad en general y de las distintas sociedades; y la vida social sería uno de los asuntos de la Psicología social, si ésta fuera ciencia y no un conjunto de cuestiones sociológicas propuestas y estudiadas á modo y por semejanza de las concernientes al alma del individuo.

Pero no creo de ningún modo que la solución del problema, ora en el sentido de la identidad ó de la distinción de las supuestas ciencias, dependa de que se juzgue ó no á la sociedad como un organismo viviente, físico, individual y material; ambas cosas son ajenas é independientes entre sí; porque en el supuesto de que sea tal organismo, siempre cabrá proponerse y resolver si en él hay algo que estudiar más que la vida ó solo ésta, reduciéndose á ella toda la materia social;

y en la opinión contraria de que solo por analogía pueda llamarse á la sociedad organismo, también procederá considerar, bien que por modo metafórico, si en el ser social no hay otra cosa que estudiar que la vida ó algunos otros respectos materiales ó formales. Son pues aquí indiferentes, por fuera de lugar, los argumentos que contra el supuesto organismo físico y material aducen los autores, por ejemplo, Colajanni, Boistel, Vareilles-Sommers, á fin de distinguir la Sociología de la Biología (1).

(1) No son otros que los ya indicados de la contigüidad y continuidad y la discontigüidad y discontinuidad, que respectivamente caracterizan de un modo notorio á los organismos físicos y á las sociedades. Un empleado de caminos de hierro, dice Colajanni, puede pertenecer á un club, á una sociedad de lectura, colaborar en un periódico, representar en un teatro, votar en un comicio. Boistel hace observar por su parte que en cuanto una célula vegetal ó animal rompe la continuidad y se aísla, deja de participar de la vida del organismo, ó para morir ó para engendrar uno nuevo, extraño al anterior, al contrario de lo que sucede al miembro de una sociedad. Vareilles-Sommers, por su parte, afirma con razón que un organismo (el del Estado), que tiene á la vez los caracteres de los anélidos y vertebrados, de las esponjas y de los mamíferos, de los mixomicetos y del hombre, no es un verdadero organismo, por asimétrico y contradictorio.



LIBRO IV



EL GOBIERNO

CAPÍTULO I

EL GOBIERNO; VARIEDAD DE ACEPCIONES.—EL GOBIERNO Y EL ESTADO.—LAS FUNCIONES GUBERNATIVAS

Por ser más compleja la noción de gobierno que la de Estado, no se puede señalar desde luego la relación entre ambos términos, ni marcar, por consiguiente, el enlace de este libro con el anterior, comenzando el presente capítulo con la obligada *razón de método*, como quiera que el alumno sólo tiene aún á estas alturas, idea bastante del Estado, pero muy confusa y vaga del Gobierno, la cual no ha sido todavía objeto de indagación directa. Por esto, sin apartarnos del método rigurosamente deductivo, que es el de la enseñanza, ensayaremos la determinación del concepto que constituye toda la materia de este libro.

1. No ha llegado la oportunidad de señalar aquella acepción en que la idea de gobierno tiene íntima afinidad con la del Estado, en el sentido antonomástico expresado en el Capítulo II del Libro I, y que es el mismo en que ha sido objeto de todo el tercer libro.

El método, cuya razón se irá descubriendo en bre-

ve, exige que se considere ante todo al Gobierno en su acepción más amplia y comprensiva, aquella en que se aplica á cualquiera comunidad y aun persona, en cuanto significa un carácter y nota común de todas, esto es, la ordenación misma, ejercida por el sujeto correspondiente. En tal respecto gobierno es *el ejercicio de la ordenación, en la variedad y totalidad de sus funciones, mediante las correspondientes atribuciones esenciales ó tutelares de la persona para el cumplimiento de aquellos fines permanentes ó históricos, que de la persona dependen, y á ella, por consiguiente, incumben.*

No hay necesidad de demostrar, por tratarse de corolarios de inmediata evidencia, desprendida de todo el conjunto de la doctrina expuesta hasta aquí *a)* que solo importa y corresponde al Derecho político la materia concerniente al gobierno de la sociedad civil, esto es al interés colectivo, directo y solidario de la nación; *b)* que no todo el gobierno que desempeña el Estado es gobierno político, aunque se pueda llamar nacional en el ámpilo sentido de la palabra, por referirse en todo caso, aunque sea indirectamente, al procomún de la nación; así no es política toda la ordenación que el poder civil (Estado) desempeña en el círculo de la familia, del concejo, etc., cuando se dirige al interés inmediato de estas sociedades, bien que en último término redunde también en utilidad y prosperidad legítimas del todo social; *c)* el problema de la acción gubernamental política es el mismo del fin, naturaleza, acción y esfera del Estado, como el del gobierno de cualquiera otra sociedad, que no sea la nacional, es igualmente el de los fines y jurisdicción esencial ó tutelar de la auto-

ridad propia (padre, alcalde, rector, etc.) ó, lo que es lo mismo, el problema de cada gobierno es idéntico al de las atribuciones *de cada Estado*, aunque ya se sabe á qué autoridad social se aplica antonomásticamente tal palabra; *d)* por consiguiente, nada habrá que añadir, al menos directamente en este libro, acerca de las atribuciones del gobierno político, por haber expuesto en los últimos capítulos del libro anterior cuanto á ellas concierne, al tratar de las relaciones propiamente nacionales, y las que de ellas incumben al Estado, y haber hecho en todo el tratado frecuentes referencias al problema.

2. De la misma manera que la noción genérica de gobierno, precisamente por ser genérica, no es exclusiva del Derecho político, como no lo son las de autoridad y otras afines, tampoco incumbe á esta asignatura, sino en la necesidad y medida de estricto enlace con las nociones fundamentales comunes, el estudio de las funciones gubernamentales. Son hasta hora todas estas nociones de mera referencia al Derecho natural, para base y orientación de lo específico y característico de la rama política. Si solo en el Derecho político se estudian, proponiéndose en él las cuestiones y problemas que debieran haberse planteado más bien en el Derecho natural, es, no por razones técnicas y lógicas, sino por variedad de circunstanciales motivos.

Para determinar las funciones de cualquiera gobierno, autoridad, poder, etc., procediendo con un criterio y orden que prevengan y eviten, en cuanto es posible, la confusión reinante, de donde se origina la variedad de

opiniones, hay que acudir en busca de dirección á la psicología, que pudiéramos llamar más corriente y asequible al común sentir y comprensión, á la que distingue en el acto, en la conducta de ordenación, es decir, de gobierno individual, dos funciones irreducibles: el *pensamiento* y la *acción*, tomada esta palabra equívoca en su estricto sentido de verificación, realización del pensamiento.

Observando y experimentando en frases y expresiones corrientes la variedad de sentidos en que doctos é indoctos toman y usan la palabra *pensamiento*, se nota que unas veces significa lo mismo el acto que el producto de las facultades cognoscitivas intelectivas, y otras la determinación de la voluntad, la volición que, en cuanto dirigida á un fin y por él informada y movida, se llama *intento*, *propósito*. A todo acto de acción externa corresponde y precede un pensamiento, ó sea un acto cognoscitivo y volitivo á la vez, que se distingue del que pone en ejecución la idea y el propósito, como se distingue lo interno y lo externo, lo que en términos de Escuela pudiéramos llamar lo *elícito* y lo *imperado*. Ahora bien, el pensamiento que determina y precede á la acción con precedencia de tiempo unas veces, y de naturaleza siempre, es ley de la conducta, en cuanto norma y regla de ella, es función y acto de legislación individual en la que sin esfuerzo se descubre los dos elementos y caracteres de toda ley: la verdad práctica para el entendimiento, el precepto racional para la voluntad.

Pero el pensamiento, en la más amplia y comprensiva acepción de idea é intento juntamente, es y se ha

formado para la consiguiente realización ó verificación, ó lo que es igual, para ejecutarse, siendo verdadera función ejecutiva aquella con que una persona *lle-
va á cabo, pone por obra* su pensamiento, que á esto equivale en una de sus acepciones ejecutar, á realizar la ley que una persona se ha trazado previamente, ó en el momento mismo de hacer, de actuar. Y esta ejecución del propio pensamiento puede verificarse ó por aplicación inmediata de la volición, y sin vacilar, en caso de urgencia ó de notoria justicia y oportunidad de la resolución tomada, ó, por el contrario, y en caso de duda acerca de la rectitud y prudencia actuales y prácticas del propósito, después de un juicio más ó menos complejo y detenido, que disipe la perplejidad y aclare y determine la actitud del agente. En el primer supuesto, por rápida y perentoria, la función es estrictamente ejecutiva, ejecutiva por antonomasia; en el segundo, sin perder tal caracter, es menos ejecutiva, por más detenida y menos apremiante, y en virtud del juicio, un tanto reflexivo y amplio, puede denominarse función judicial. Tenemos, pues, que las funciones gubernativas con que el individuo se ordena son dos irreducibles: *la legislativa*, ó sea de pensamiento, y *la ejecutiva*, ó de acción, subdividiéndose á su vez ésta en *ejecutiva*, en estricto y antonomástico sentido, y *judicial*.

3. También en la persona moral, en la colectividad, se notan, y no más ni menos, estas mismas funciones gubernativas de igual naturaleza y fin, y no para distintos propósitos ordenadores que en la persona individual ó física. Las diferencias son las siguientes: 1.ª

Además de identificarse en el individuo la autoridad y el súbdito, es, por lo común, aquélla la que se gobierna sin auxilio de ningún otro órgano ordenador, esto es, la que delibera, resuelve y lleva á la práctica la resolución. En la sociedad, por simple y rudimentaria que sea, además de distinguirse la autoridad de los súbditos, tiene ésta agentes auxiliares de gobierno, que dentro de la colectividad misma desempeñan funciones gubernativas consentidas ó encomendadas por la autoridad. Así vemos que la esposa aconseja al marido, delibera con él, y es órgano ejecutor de muchos acuerdos, notándose mayor diferenciación y repartición de oficios y actos ordenadores á medida que las colectividades son más ámplias, complejas y minuciosas, verbigracia, la familia, el pueblo, etc. En tal caso la distinción de las funciones está en razon directa del número y valor de las personas físicas y morales de que se compone el todo social. 2.^a En el individuo no suele haber tampoco precedencia y separación temporales entre las funciones, tomándose la resolución muchas veces al tiempo mismo de ir á ejecutarla, lo cual acontece también á menudo en las sociedades más imperfectas ó simples. También la función judicial es generalmente tan rápida que no se distingue de las otras, aconteciendo que, casi en el mismo acto indivisible, se legisla y ejecuta judicialmente, confundiéndose deliberación legislativa y examen judicial, sumarísimos ambos, cosa que también acontece en las sociedades menos numerosas, y aun en las públicas y en la misma nación en los comienzos de su vida y en los albores de la historia y del progreso. 3.^a Más raro es aún en la perso-

na individual que la legislación se formule previamente en regla abstracta y general de conducta, sino que más bien la costumbre y la jurisprudencia, digamoslo así, son las fuentes casi exclusivas del derecho, elevándose lo resuelto y ejecutado, con juicio ó sin él, en casos uniformes y habituales á ley del proceder individual; pero esto mismo acontece en otras muchas sociedades, hasta en las naciones en las épocas primitivas de su existencia. 4.^a La función ejecutiva en la esfera individual se reduce á la realización del pensamiento por la persona cuyo es, ó por otra que haga sus veces; en la colectividad hay una clase de ejecución que consiste en sustituir la acción obligatoria que no lleva á cabo la persona, ú otra en su lugar, por una compensación civil ó penal del acto no realizado. De todo lo cual se deduce que las diferencias entre las funciones de gobierno individual y social unas son extrínsecas á la función, puesto que se refieren mas bien al órgano de ella, y otras, las que proceden de la función misma, además de ser de puro accidente, no pueden marcarse más que de una manera relativa.

4. Si es exacta la teoría de los dos números anteriores, resultará que cuantas divisiones y subdivisiones de las funciones gubernativas contengan más ó menos términos son falsas ó por defecto de forma, ó de fondo, esto es, ó por falta de lógica, ó por error de doctrina. Algunas de las que de este proceden (las otras se notan con facilidad) consisten no en la falsedad de la distinción de esas funciones, sino en ser incompletas para el fin, y en el respecto prácticos que la or-


denación implica, ó como si dijéramos, por no tener en sí mismas finalidad práctica, y carecer la distinción de más interés que el psicológico. Así vemos que la deliberación, es en efecto, una función psicológica distinta de la volición y resolución, lo mismo en la persona física que en la colectiva, y que esa serie de juicios y raciocinios, en que el deliberar consiste, son para la acción, así del individuo como de la comunidad; pero en sí misma, esa función intelectual no ordena, mientras la voluntad no se determina en virtud de las razones que ha examinado y *pesado*. A su vez, como no hay volición que no deba ser racional, esto es, iluminada y orientada por el entendimiento en la variedad de sus funciones, la deliberación, que es requisito psicológico de la volición, se identifica y confunde con ella para el fin práctico ordenador, no habiendo pensamiento ordenador completo é inmediatamente dispuesto para la ejecución hasta que hay pensamiento en su íntegro sentido de idea y propósito. El que en la persona social, y aun en la individual, algunas veces se distinguen el órgano de la deliberación y el de la resolución, por ejemplo, las Cortes del Rey, es cosa accidental y extrínseca á la función misma que contiene todo lo que necesita y exige un juicio práctico, y no es completa mientras no comprenda todos los elementos de él.

En cuanto á la función consultiva, ó sea *aquella con que una persona da su parecer á otra acerca de un pensamiento, ó de su ejecución*, esto es, *acerca de la justicia y conveniencia de una medida legislativa, ejecutiva ó judicial*, bien puede afirmarse que es una forma y elemento

de la deliberación, aunque así generalmente no se estime, por tomar esta palabra en el sentido más estricto, convencional y corriente de actual discusión por una asamblea en que todos sus miembros tienen los mismos derechos, lo que se viene llamando voz y voto, esto es, facultad de controversia y acuerdo colectivos. Pero en el sentido más amplio en que aquí se usa el término, y en que debe tomarse, no solo á la altura de estos principios, sino en algunas aplicaciones prácticas más concretas y lejanas, para que haya deliberación ó sea *serie y complejidad de raciocinios, peso de razones*, ni es necesario que se haga en acto indiviso y continuo, ni que todos tomen parte con iguales derechos en el razonamiento y en la decisión. Ora el consejero informe de palabra, oiga los reparos y los conteste, ora emita dictamen por escrito, y no tenga que hacerse cargo de las respuestas y replicar para mayor esclarecimiento, siempre delibera, *lato sensu*, en cuanto intelectualmente contribuye á la racionalidad, rectitud y prudencia de la resolución, é influye en el ánimo de la persona física ó moral que ha de adoptarla. El que las sociedades más completas y numerosas tengan órganos consultivos, determinados y permanentes, constituidos con más ó menos perfección, es cosa agena á la verdad de que es la consulta parte, forma y elemento deliberativos en el riguroso sentido psicológico y jurídico de la palabra.

Otro término que suele ingerirse en la división de las funciones gubernativas es la función constituyente, la cual, si bien se considera, se reduce á las anteriores, puesto que constituir, en estricto sentido, según se ve

rá más adelante, no es otra cosa que establecer, en cuanto de la voluntad depende y por el ministerio de sus varios órganos, las fundamentales instituciones de cada orden jurídico, lo cual se hace legislando. La función constituyente no es otra cosa que el ejercicio del gobierno en esta legislativa ordenación capital é importantísima, pero no formalmente distinta de cualquiera otra legislación.



1. Aunque gobierno, como autoridad, solo se atribuyen en el lenguaje científico á las sociedades, y especialmente á las públicas y, por antonomasia, á la nación, bien puede también decirse de la persona individual que, en cuanto se ordena por sí misma, y es sujeto inmediato de su ordenación, *se rige, se gobierna*. Así lo entiende el común sentir vulgar en frases equivalentes á éstas: *Juan se gobierna bien, Pedro es un desgobernado*, etc., las cuales, bien que principalmente se refieren al orden económico, ó sea, de los intereses materiales, pueden ampliarse, por identidad de fundamento, á la dirección de cualquiera acto respecto de cualquiera bien para un fin humano, esto es, á la total esfera jurídica.

2. Los motivos de tratar exclusiva ó principalmente en derecho político, y no en el derecho racional ó natural las no-

ciones de este capítulo y otras semejantes y afines bien pueden ser la mayor jerarquía del gobierno nacional y de sus funciones y órganos; pero acaso sea más bien el sentido socialista, tantas veces descubierto en este tratado, y que advertidamente, ó por hábito irreflexivo, profesan los autores.

Lejos de ello, consecuente con el sano criterio individualista que, así en la doctrina como en el método de este libro se ha venido siguiendo, habrá que orientarse en la persona y en el derecho individuales para extraer de este orden jurídico todas las aplicaciones y deducciones al derecho social. A la luz de estos principios se ve coincidir el concepto de pensamiento, en su más comprensivo sentido práctico de *resolución deliberada*, con el de ley moral y jurídica, esto es, con el de *regula actuum humanorum qua talium*, y de ley positiva, es decir, establecida por aplicación y expresión de la ley natural. La actuación y complejo ejercicio intelectual con que el individuo extrae de la ley eterna, participada á la criatura racional, por el ministerio de las varias funciones del entendimiento, todo el contenido de regla y medida que encierra para la conducta, y la volición consiguiente, iluminada por esa medida y regla, constituyen una función legislativa de la misma esencia en la persona física que en la moral. Aquélla, cuando forma un propósito, esto es, un pensamiento práctico, no hace otra cosa que *ferre legem*, llevar la ley, aplicar la ley natural, determinándola positivamente para dirigir la vida; y legislar uno para sí no es intrínsecamente distinto de legislar otro para los demás. Por esto, *á simili*, puede decirse y se dice pensamiento del legislador á la ley que da éste para la sociedad cuyo es.

De igual manera tampoco se cambia la naturaleza de la función ejecutiva, porque uno mismo la efectúe por sí y para sí, imponiéndosela también por sí y á sí mismo, ó porque el precepto proceda de otro, no sea para el mismo que lo lleva á cabo, ó, siéndolo, un tercero lo cumpla, ó, no cumpliéndolo ninguno, sea sustituido con una compensación civil y penal, ó meramente civil. Y lo mismo acontece con la función judi-

cial. En ella puede uno mismo ser juez en propia causa ante el tribunal de su conciencia, sin que esto sea obstáculo á que en ese proceso auto-personal existan los esenciales elementos, requisitos del juicio, demanda, contestación, prueba y sentencia, ni más ni menos que si se distinguieran realmente el juez y las partes, y la resolución judicial recayera no sobre propio, sino en negocio ageno.

3. Es al Derecho natural al que corresponde tratar directamente de la ley, la costumbre y la jurisprudencia como fuentes y formas naturales, y, por lo tanto, legítimas y permanentes, de derecho positivo. A las diversas ramas de éste incumbe señalar qué valor les atribuye el legislador, y juzgar las disposiciones con que mantiene y autoriza la fuerza y vigencia de estos orígenes perennes é inagotables de regla jurídica, ó, por el contrario, debilita, ciega ó suprime alguno de ellos por insano y arrogante pragmatismo. Sin perjuicio de hacer á esta doctrina general y fundamental referencias más amplias y circunstanciales en lugar oportuno, nos limitaremos ahora á señalar como la ley, en sentido estricto, es rara vez norma y fórmula de conducta individual, aun en personas reflexivas, doctas y virtuosas, las cuales, más bien por usos, esto es, por repetición de actos se rigen, siendo muy pocas las que llegan á trazarse *á priori* un plan de vida en una que pudiéramos llamar ley general, aplicable á todos los casos que se presenten.

También puede decirse que las personas individuales condensan su derecho en forma de *jurisprudencia*, cuando de la resolución idéntica, adoptada en más de un caso dudoso, extraen y generalizan una regla del proceder ulterior para iguales ó parecidas circunstancias. Por lo demás, la ley y la costumbre colaboran alternativamente en la obra de la legislación en sociedades más amplias y completas, las públicas, y especialmente en las naciones, cuando la sucesión de los tiempos y el progreso, que debe á ellos ser proporcionado, despiertan y aquilatan las dotes ordenadoras en los órganos de gobierno,

esto es, la reflexión y la previsión, y, con ellas, la necesidad de recoger de la experiencia pasada y presente los elementos consuetudinarios que hay que traducir y mejorar en la ley, la cual á su vez es incesantemente perfeccionada por la costumbre (1).

3. La ingerencia del término *deliberativa* en la división de las funciones del gobierno procede de la división aristotélica de las funciones de la potestad política; pero no puede impu-

(1) Aunque no sea corriente, ni siquiera por vía de comparación, referir al individuo los conceptos de gobierno y sus funciones, y los de ley, costumbre y jurisprudencia, no estará demás, antes me parece útil, insistir en estas relaciones y analogías.

A primera vista, en el individuo no parece que puede distinguirse entre el uso y la costumbre, como quiera que no existe una autoridad que con el consentimiento preste á aquel toda la fuerza y el valor consuetudinarios; ó, lo que es igual, por ser una misma la persona que hace, que determina el uso, y la que puede trazar la línea divisoria entre él y la costumbre; pero bien puede subsistir la distinción por razón de etapas y períodos en la génesis del derecho consuetudinario individual, denominando, también por analogía de lo que en las sociedades sucede, uso á la costumbre que se está formando y consolidando, y costumbre al uso ya bien determinado y hecho.

Esto mismo habrá que decir respecto de la *jurisprudencia individual*. No hay en ella otro juez que la misma persona cuyo es el caso sometido á juicio ante la propia conciencia; ni hay tampoco necesidad de más de una decisión para que la regla, contenida en el hecho resuelto, sea en adelante ley del individuo, y en idénticas circunstancias; pero ya se ha dicho que lo intrínseco y esencial del juicio es el caso dudoso, lo mismo de conducta individual que social, la aclaración que la duda exige, y el consiguiente empleo del entendimiento en sus varios modos de ejercicio, para que, disipada aquella, y dictada la resolución, sea esta llevada á efecto. Por poco árduo que el negocio se presente, no hay individuo que no juzgue, esto es, que no se detenga algo más de lo que se para en el rápido juicio, que precede á la función estrictamente ejecutiva; de aquí el que sea la jurisprudencia la fuente más abundosa de legislación individual. Igual acontece á la sociedad civil, que, en sus comienzos, y no poco después, tanto ó más que por ley, legisla en forma de lo que, en términos de derecho castellano, llamaremos *fazañas* y *albedríos*.

társele á Aristóteles, porque con el nombre de *deliberativa* designó á la función legislativa, como con el de *gubernativa* á la ejecutiva. De manera que lo que hay en esas denominaciones es menos propiedad en el primer término, é impropiedad en el segundo, pero no error de fondo, ni más defecto de lógica que el que se nota á primera vista en la división tradicionalmente aceptada, y que consiste en construirla con un miembro de división (función legislativa ó deliberativa), y dos de subdivisión, (funciones ejecutiva ó gubernativa y judicial). Pero este defecto, por ser tan notorio, y sobrentenderse tan facilmente la distribución lógica que condensa y abrevia, no tiene importancia alguna.

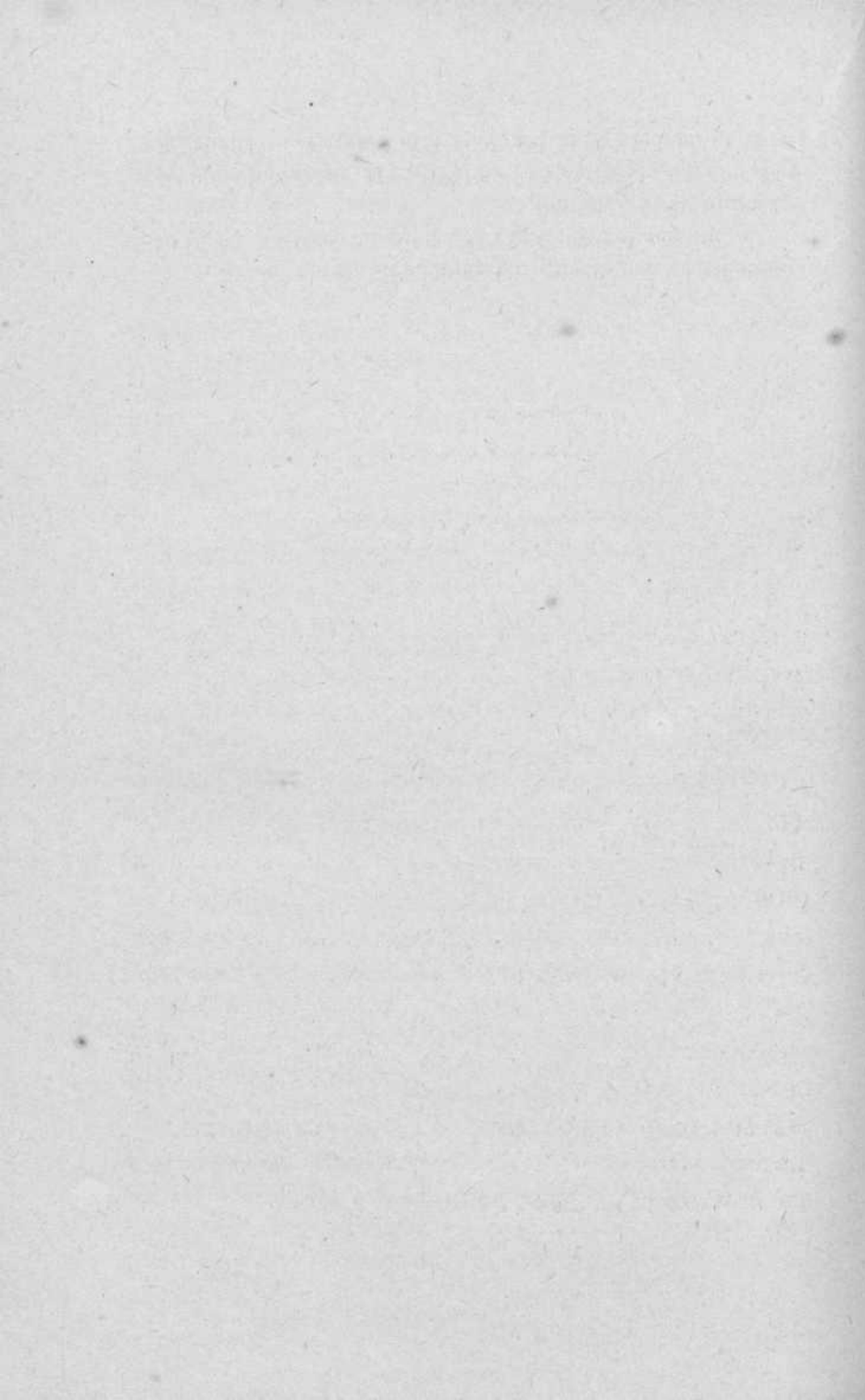
Para Aristóteles, deliberar era tanto como legislar, porque la asamblea que contribuía á la discusión de la ley era la misma que la sancionaba, la que acordaba la regla legislativa, no siendo distintos en la constitución ateniense, en que se inspiró el filósofo, los órganos de la deliberación de los de la resolución; mientras que en otras constituciones, las verdaderamente monárquicas, aunque contribuyan á la obra legislativa otras entidades que el soberano, es éste el que decide ó sanciona, legisla, en estricto sentido, pues es el que convierte lo deliberado en resuelto.

En cuanto á la sustitución del término *ejecutiva* por el de *gubernativa*, la impropiedad consiste en aplicar á una función de gobierno el nombre que corresponde genéricamente á todas, si bien á primera vista se descubre la razón de antonomasia, por ser la función, estrictamente ejecutiva por su continuidad, la más gubernativa de todas. Así como, por ser más ejecutiva que la judicial se la designa con la palabra común á ambas, por ser la más gubernativa de todas, se la traslada por tropo la denominación genérica. En efecto, no siempre está la persona legislando ni juzgando, pero sí ordenándose ejecutivamente, y aunque, por lo que á la autoridad concierne, tampoco pueda decirse que está en ejecución continua, nunca deja de estar en perenne observación y previsión respecto de la ordenación que por sí mismos verifican los súbditos.

tos. La voluntad es la potencia más práctica y ordenadora, y la función ejecutiva ó gubernativa la representación más cumplida de la voluntad.

En el lugar oportuno se verá como la constitución es precisamente lo que menos se establece en forma de ley.





CAPÍTULO II

LOS SUJETOS DE GOBIERNO.—EL
SUPERIOR ORGANISMO GUBERNATIVO.
—LA AUTORIDAD SOBERANA.
—LA SUPERIORIDAD
CORRESPONDIENTE Y NATURAL Á
LA SOBERANÍA

1. Después de la relación jurídica que el concepto y término *gobierno* expresan, el orden rigurosamente deductivo impone el estudio de los sujetos de gobierno, de las personas gobernantes, *órganos* diríamos, según la metáfora ya usual y corriente.

Si, aun tratándose del gobierno individual, es decir, de la esfera gubernativa de la persona física, no puede en absoluto decirse que sea ésta el único sujeto de su propio gobierno, como hemos visto en el capítulo anterior, con más razón en la persona social son órganos de gobierno las varias personas físicas y morales de que consta la colectividad, en cuanto tengan y en lo que tengan capacidad suficiente de orden, de derecho, por lo que respecta á la sociedad de que son miembros esas personas. Así, en su posición y jerarquía correspondientes, también son órganos y factores de gobierno nacional político cuantas personas realizan funciones políticas, bien obligatorias, bien libremente realizadas,

á menos de negar á esas personas su condición de tales, y, por lo tanto, de sujetos de toda relación jurídica, privada ó pública, y nacional dentro de ésta.

De estos órganos de gobierno nacional, que es el que aquí nos interesa, el primero, no por la cantidad, sino por la entidad y jerarquía de sus funciones y por la consiguiente posición categórica, es el Estado en la acepción restricta y antonomástica, explicada en el Capítulo II del Libro I y en todos los capítulos del anterior. El Estado, como organismo superior de ordenación, se llama Gobierno también antonomásticamente, esto es, por razón de esa misma superioridad; y además, en virtud de la conexión entre la función y el órgano, se traslada á éste el nombre de aquélla, llamándose así tanto al ejercicio de la ordenación como á la colectividad odernadora; de manera que Gobierno, en este estricto sentido, es el *Estado, en cuanto organismo supremo de ordenación nacional*.

Y ahora ya se notará la razón de método, ó sea el enlace de toda la materia de este libro con la de los precedentes. Primero se ha estudiado la *nación*, por ser concepto más general y comprensivo; en seguida una de sus partes, el Estado en la acepción más restricta, aquella en que se distingue de la *nación* como la parte del todo; y después de la definición del Estado, expuesta ya en el Libro I, se le señala su esfera de acción y los límites de ella al determinar en el Libro II la de Iglesia y la de la persona individual, y en el III la de las varias personas sociales, para estudiar en el IV todo su organismo ordenador con la extensión, y en la forma, y según el método que se verá.

2. La entidad ó colectividad gobernante de toda sociedad consta, ante todo y sobre todo, de la autoridad correspondiente, de la cual son auxiliares subordinados los otros sujetos de que se compone la persona moral gubernativa.

La autoridad nacional no es distinta por naturaleza, fines y funciones de cualquiera otra autoridad, diferenciándose de las demás autoridades solo por la misma propiedad, caracter y nota específicos de la nación (sociedad civil), por la soberanía. De aquí el que nada más que el estudio de este atributo incumba al Derecho político, que toma del Derecho natural el concepto genérico de autoridad, definiéndola en estos ó parecidos términos: *el derecho que corresponde á la persona superior de una sociedad, para obligar á los miembros de ella á los actos conducentes al fin social, en cuanto, por naturaleza ó circunstancias, sean incapaces esos miembros de ordenarse á dicho fin ó bien.*

La soberanía no es más que la propiedad de independencia temporal de la llamada por antonomasia autoridad ó potestad civil, ó sea autoridad nacional. Soberana es aquella autoridad que no recibe de otra ni *legislación, ni impulso directo y obligatorio de gobierno*, ó lo que es igual, la que, por no aceptar de ningún poder la imposición de deber social alguno, está por encima de todas las demás autoridades y personas de la sociedad cuya es, y no por bajo de cualquiera otra autoridad temporal extraña.

Como toda autoridad implica y necesita la potestad correspondiente, suelen usarse ambos términos para expresar el mismo concepto y cosa, bien que potestad

signifique más bien, según indica la misma etimología de la palabra, *la facultad y posibilidad de ejercitar el derecho autoritario, esto es, la eficacia ordenadora que la autoridad tiene por naturaleza*, designándose también la autoridad, en cuanto derecho, con el nombre de *poder*, que denota principalmente *la posibilidad física de ordenar, ó sea, la posesión de los recursos y medios coactivos materiales para llevar á efecto la ordenación en la variedad de sus formas*. Lo mismo *potestad* que *poder* se aplican, con el tradicional y convenido aditamento de civil, á la autoridad de la sociedad civil más perfecta, de la nación, aunque también se dice potestad y poder paternos, heriles, etc.; pero, mientras que lo mismo se llama autoridad al derecho ordenador que á la persona cuyo es, no sucede otro tanto con los términos potestad y poder, que solo indican la facultad ó derecho ordenadores en los respectos formales expresados, no el sujeto que ordena. Tenemos, pues, que autoridad civil, potestad civil, poder civil son sinónimos de soberanía, y términos usados con preferencia á este último en los autores escolásticos, si bien el de soberanía parece preferible por ser simple y menos expuesto á equívoco, bien que el uso tradicional haya consagrado á los otros una significación antonomástica clara y precisa.

3. La soberanía, con más razón que cualquiera otra autoridad, no es un derecho nativo (*natural stricto sensu*) sino un derecho derivado, adventicio, como se demuestra por pruebas de experiencia y de razón; de experiencia, que, por doquiera, nos señala más personas sin autoridad que con ella, y á la máxima parte de los

sujetos naciendo desprovistos de tal derecho; la razón evidenciando que no es necesaria para el cumplimiento del fin humano una facultad que no implica necesidad ni utilidad en cuanto al conocimiento de este, de los deberes, de la ley, ni á la ejecución de ellos, mediante la posesión y uso de los consiguientes medios ó bienes morales y materiales.

La soberanía, con mayor motivo que las demás autoridades, no es un derecho derivado ó adventicio de los iguales, como sucede en el contrato con las partes contratantes, en el respecto en que contratan, sino un derecho de los superiores, porque de esencia de toda autoridad es la superioridad, ó sea la desigualdad que implican las respectivas posiciones de ordenar y de ser ordenado en aquello en que la persona no puede ordenarse á sí misma. Lo demuestran la experiencia y el consentimiento universal del género humano, viendo en la autoridad, y atribuyéndola una superioridad, cuando menos racionalmente presunta, con presunción *juris tantum* unas veces, y *juris et de jure* otras; la razón presentando como evidente, sin necesidad de largo ni complicado raciocinio, la verdad de que es inferior el que carece de un bien y lo necesita, y superior aquel que lo posee y puede prestárselo, puesto que el uno no siempre, ni con frecuencia, puede ordenarse, y el otro, en la mayor parte de los casos y circunstancias, le ordena. En los tratados escolásticos de Derecho natural se prueba esto al tratar de la autoridad como propiedad esencial de la sociedad, (de razón formal de ella), puesto que sin autoridad no puede existir la unión moral en que la sociedad consiste, como quiera que sin este

principio superior de unión no se podría unificar especulativa ni prácticamente los juicios sociales, ni ligar la diversidad de voliciones con el vínculo del deber, ni prevenirse y defenderse contra los abusos de la libertad infractora del orden. En esto se emplea la superioridad de la autoridad: no en poner todo principio y elemento de unión social, porque también lo son las inteligencias y voluntades de los asociados en cuanto facultades y tendencias naturalmente inclinadas á sus respectivos bienes, á la verdad la una, al bien (*stricto sensu*) la otra; sino en suplir la natural deficiencia unitiva de estas potencias que es lo que indica la misma derivación etimológica del término autoridad, (de *augere*, porque aumenta y realiza la más perfecta unión social que los otros órganos sociales por sí solos no consiguen).

Pero la superioridad de la soberanía, si, en la esencia, no es distinta de la de cualquiera otra sociedad, lo es en el grado supremo de las dotes y excelencias que supone y exige, las cuales, en toda sociedad, están en razón directa de la naturaleza y jerarquía sociales, esto es, de la perfección que las sociedades tienen en razón de su muchedumbre, de los fines que prosiguen y de los bienes que cultivan, de la consiguiente variedad y complejidad de las relaciones sociales y del grado de independencia y autonomía de que disfrutan. Por esto, la más alta superioridad debe ser la de la autoridad soberana, puesto que la más perfecta de las sociedades temporales es la sociedad civil ó nación.

4. Tampoco se distingue la superioridad de la so-

beranía de la que necesitan y reclaman las otras autoridades sociales en cuanto á la simplicidad ó variedad de las facultades y dotes ordenadoras, porque, aun en las sociedades más incompletas é imperfectas, la superioridad autoritaria no puede ni debe ser por un solo respecto, el del bien ó fin que la sociedad procura, sino tambien por todos los respectos de la superioridad humana, es decir, de las dos potencias específicas de nuestra naturaleza, y en relación con las exigencias de todo orden y gobierno, por elemental y sencilla que la sociedad sea. Aun la prosecución de un solo bien social, por ejemplo, el científico, el mercantil, exige en el gobernante dos clases de facultades y aptitudes, las que pudiéramos llamar directas, por inmediatamente conducentes y eficaces á la consecución del fin social, y las que son indispensables para mantener con el orden la permanencia, y aumentar y consolidar la vida y prosperidad sociales. Para lo primero basta la superioridad por razón del fin y del respecto correspondientes; para lo segundo la posesión de las complejas dotes de gobierno por parte así del entendimiento como de la voluntad, las cualidades complejas de la íntegra superioridad humana, que es mayor y mejor cuando es á la vez intelectual y volitiva.

La diferencia existe, y empieza á destacarse, respecto de la proporción en que han de estar esas dotes: la que es útil y necesaria para el fin social, y las que se requieren para el gobierno de la sociedad misma. Esa proporción depende de la comprensión y extensión sociales, según que las sociedades son más ó menos perfectas por razón de los fines que se proponen y prosi-


guen. Veámoslo. Cuanto más simple é incompleta es la sociedad, menor necesidad, aunque ésta siempre exista, y sea utilísima, hay de las dotes generales y genéricas de gobierno. Entonces la razón y el título predominantes de la autoridad es la superioridad que se le supone en cuanto al bien que la sociedad cultiva, y los demás fundamentos y motivos de legitimidad autoritaria, aunque no despreciables ni desatendibles, son secundarios y subalternos. Viceversa sucede á medida que las sociedades van siendo menos incompletas, y con mucha mayor razón cuando son completas, esto es, cuando prosiguen la variedad é integridad de fines de la vida y del derecho. Entonces va siendo más difícil, dada la humana limitación, la superioridad por los varios aspectos de la finalidad social; y en las sociedades completas punto menos que imposible que la excelencia de la autoridad descuelle y brille en todos los conceptos correspondientes á todos los fines sociales.

Empieza así á marcarse la distinción entre las dotes de las respectivas superioridades hasta aparecer evidente entre los dos extremos de la comparación, que son los de la serie. Mientras en la sociedad más simple, por ejemplo, una que cultive una sola ciencia ó un solo arte, ha de influir más la sabiduría que las dotes de gobierno para el efecto de concretar la autoridad en la persona del sabio, por el contrario, en las sociedades completas, (familia, pueblo, región, nación), bien que sean útiles y apetecibles, y deban procurarse la mayor parte de las aptitudes en el gobernante supremo, son precisas en primer lugar las cualidades de la potencia activa por excelencia, la voluntad, que más directamen-

te relacionada con la acción, es la facultad más ordenadora, la destinada á mantener la vida social y á acrecentar y adelantar la prosperidad de las sociedades. En la imposibilidad, si no física, moral, de que la mayoría de las autoridades de las sociedades completas sea superior por todos los conceptos, y en todos los órdenes de vida y derecho que esas colectividades suponen é implican, basta con que sobre la base del entendimiento, un tanto ilustrado, y sobre todo de la inteligencia práctica ó buen sentido, descuellen las cualidades de íntegro y superior impulso, no los hábitos intelectuales, sino los de la voluntad, no la ciencia y la sabiduría, sino la virtud, la justicia en el íntegro y ámplio sentido de la palabra (*justitia in sese virtutes continet omnes*).

De aquí se sigue cuales han de ser, en grado máximo de intensidad, elevación y abnegación, las dotes intelectuales y morales de la soberanía. De análoga manera á lo que acontece con el padre, que no, por iliterato, pierde y mengua su derecho, ni la obligación de respeto, obediencia, veneración y amor en los súbditos, tampoco ha menester el soberano ser genio ni sabio para gobernar bien á la nación; y del mismo modo que se llama buen padre, no al más ilustrado, sino al más recto, así tampoco han merecido las bendiciones de sus coetáneos, ni ganado el aplauso de la posteridad los soberanos de más letras, sino de más virtudes. Necesitan éstos, pues, ante todo la *justicia* en estricto sentido, el hábito é inclinación arraigada de dar á cada uno su derecho; la *prudencia*, esto es, la atemperación de la justicia á la práctica; la *fortaleza*, ó sea la serena consideración y recepción de los peligros, y la constante

paciencia en los trabajos; y la *templanza*, en el riguroso y propio, y en el ámplio sentido de la palabra, ó lo que es lo mismo, no solo la moderación de la concupiscencia ó apetito sensible, sino la moderación que debe ponerse en las operaciones y pasiones, lo cual es común á cualquiera virtud. A todas preside la religión, ó sea el hábito de los deberes de adoración, fe, amor y culto á Dios, siendo tal virtud base, espíritu y aliento de todas, y principio que las enlaza y armoniza en la que es síntesis de ellas, la caridad. Tenemos, pues, que las virtudes de la soberanía no son por naturaleza, fines, materia y forma, distintas de la de cualquiera ordenación y gobierno, empezando por el individual de la conducta de la persona en las varias relaciones de la vida; y que Dios no exige ni da al soberano otras prendas que las que ha menester cada sujeto para cumplir el humano destino, y contribuir á que lo cumplan los demás. Solo por razón de fin, esencia, oficios y jerarquía, la autoridad soberana requiere esas virtudes en grado superior; y nada hay más conforme á la naturaleza y misión del poder supremo, y á los designios de Dios para con él, como el que el soberano, la sociedad y las correspondientes instituciones procuren que en el más elevado gobierno brillen las virtudes generales del hombre, y más especiales y propias del imperante, en el apogeo de la posible perfección.



1. El individuo es sujeto único de su propio gobierno, no en cuanto realice él solo los actos conducentes á su legítimo interés, puesto que necesita de una porción de auxilios y actos sociales para el cumplimiento de los varios fines; sino en cuanto, en virtud de la independencia personal que tiene todo hombre, no hay entre la potencia y el acto individuales un agente intermedio de operación. Esto lo es que implica la independencia: ser el hombre causa y motor inmediatos de sus acciones, por el hecho y en virtud de ser persona. Por lo demás, puede decirse que mediatamente gobiernan al individuo no solo cuantos le imponen un precepto legítimo, sino quienes le ayudan con medios morales y materiales, ora por libre voluntad, ora por obligación: todas las personas que influyen en la conducta individual, y contribuyen más ó menos indirectamente á determinarla en uno ú otro sentido.

Pero, tratándose de la persona moral ó colectiva, no puede decirse que sea sujeto de su gobierno un solo órgano, ni siquiera en el respecto en que puede decirse del individuo, sino que la misma pluralidad del ser social por lo que concierne á la materia, esto es, á los individuos de que se compone, hace que, en ningún concepto, pueda decirse que la gobierna una sola persona, sino cuantas tienen el deber y el derecho de actuar para el procomún. Mientras el individuo es, al fin, el único sujeto inmediato de las resoluciones concernientes á su gobierno, no puede decirse otro tanto de la persona jurídica, sin caer en el absurdo de afirmar que ningún otro miembro de ella más que la autoridad actúa en contemplación, y para el fin colectivo, es decir, que ninguna persona, aparte la autoridad, es sujeto de relaciones directa y solidariamente conexas con el bien de la comunidad correspondiente.

Por esto, solo se puede decir gobierno, en el sentido traslaticio y antonomástico, no exclusivo, de la palabra, al organismo de supremo gobierno nacional, por razón de la jerarquía superior de sus funciones gubernativas, y de la que requiere en las personas encargadas de este gobierno, las cuales son el soberano y sus inmediatos y más altos delegados para

el ejercicio de la ordenación que el soberano no puede por sí mismo desempeñar. Pero también se dice, aunque no por antonomasia, gobierno al de cualesquiera otras sociedades, (familia, concejo, universidad, sociedad mercantil, etc.), y en ellas es también gobierno su organismo superior ordenador, su *Estado*, el cual es también colectividad gobernante hasta en la comunidad de más caracterizada forma monárquica, la familia (1).

2. De la autoridad ya se trató, por necesidad de anticipada referencia, en el Capítulo VI, número 1 del Libro I. En éste tampoco directamente se estudia una materia que, por ser común á varias ramas jurídicas, corresponde más bien al Derecho natural. Si se viene exponiendo esta doctrina en Derecho político, es no solo por la jerarquía de la autoridad soberana y sus funciones, sino acaso por influjo, aunque no sea notado, de socialismo á que no ha podido sustraerse el mismo derecho cristiano, en virtud del valor é imperio del elemento románico, de tanta significación lo mismo en las relaciones privadas que en las públicas. Adoptando un término medio entre la costumbre y la que me parece razonable exigencia científica, no me he ocupado directamente en la autoridad en general, pero no he desaprovechado la oportunidad de referencias bastantes al asunto al deducir de la teoría común la que es propia de esta rama jurídica.

Pero no me he creído en el caso y en el consiguiente deber de considerar, siquiera en resúmen, el punto de si la autoridad es mera propiedad de la sociedad ó forma de ella. Desde luego el asunto no es de Derecho político, y aun dudo si de Derecho natural elemental; y bien que tenga no poca tras-

(1) Aun reducida ésta á los restrictos límites de la generación que está todavía bajo la potestad del jefe, no puede decirse que éste solo gobierne donde tantas y tan importantes funciones de orden doméstico desempeña la madre. Y no se diga nada cuando la sociedad familiar alcanzase la comprensión y extensión siquiera de la agnación romana, y máxime si llegara, como la familia esclava, á la amplitud de la *gens*.

cendencia la solución, no importa tan directamente al Derecho político que no pueda excusarse de resolver el problema directamente, en vez de dar implícitos el criterio y la opinión en varias partes y materias de la asignatura. Por esto, me limito á recomendar al lector, que quiera enterarse breve, compendiosa y claramente del punto, las *Institutiones juris naturalis*..... por el Padre Teodoro Meyer, Pars I, Lectio II, Liber I, Caput I, Articulus I, páginas 300 y siguientes.

La definición que de autoridad se da en la parte compendiada del capítulo, es, en el fondo, la tradicional y clásica, por decirlo así, de los autores escolásticos y que Costa-Rossetti, formula en estos términos: *auctoritas socialis est jus membra societatis in cooperatione ad finem socialem assequendum efficaciter dirigendi*. Con ella coinciden, aunque no en las palabras, Meyer y Kathrein que adoptan una misma: *jus obligandi membra societatis ut ad bonum commune suis actibus conspirent*. El lector penetrará las razones de los aditamentos contenidos en la definición adoptada en el texto, y que son la utilidad de una referencia á la condición y calidad de la persona, cuya es la autoridad, y de la expresión de ser ésta principio suplementario de la unidad que la materia social no puede darse á sí misma, por razón de naturaleza ó de circunstancias, con lo cual se marca al mismo tiempo la distinción entre las funciones esenciales y tutelares de toda autoridad.

3. En el citado Capítulo VI del Libro I copiamos del P. Costa-Rossetti la materia del fundamento ó razón de la autoridad. Con ocasión de la nueva referencia á la doctrina, y á fin de que conozcan los alumnos la exposición que de ella hace otro autor eminente, el P. Meyer, copio de su expresada obra las pruebas aducidas en apoyo de la *Thesis XXXVIII*, que formula así: *Quamquam in ordine metaphisico moralis unio constans recte dicitur forma societatis, non minus vere tamen asseritur, in ordine reali societatem humanam per auctoritatem socialem formaliter constitui*..... Probatur 1.º «*Societas humana in ordine reali per id formaliter constitui recte dicitur,*

»per quod essentialiter ipsa *unio moralis constans* membro-
 »rum societatis realiter efficitur et subsistit; *atqui* id fit solum
 »et essentialiter per auctoritatem socialem; *ergo*, etc. Prob.
 »minor. I *Ex natura materiae socialis*. Videlicet: a) Homines
 »etsi naturae necessitate in bonum feruntur suamque beatitudi-
 »nem in commune consideratam appetunt, ad nullum tamen
 »bonum in particulari, sive privatum sive commune, revera
 »prosequendum naturaliter determinantur, sed eligendi *liber-*
 »tate praediti sunt tum quoad intentionem finis alicujus com-
 »munis tum quoad delectum mediorum ad finem. b) Vi inae-
 »qualitatis individualis inter homines summa est voluntatum
 »ac studiorum varietas, summa plerumque etiam in appre-
 »tiandis mediis ad communem finem judiciorum divergentia.
 »c) Etiam si aliquando contingeret, judicia de opportunitate
 »vel necessitate mediorum theoretice congruere, multos tamen
 »a spontanea, efficaci et constanti cooperatione procul dubio
 »retineret sua in subeundis oneribus communibus desidia aut
 »praevalens privati commodi studium.—*Atqui* haec omnia
 »manifeste evincunt, meram aliquam moralem attractionem
 »ex parte finis communis in ordine reali nequaquam sufficere,
 »ut homines ad unionem vere socialem, scilicet unionem in-
 »telligentiarum, voluntatum ac virium effective colligantur
 »in eaque constanter contineantur, nisi ad spontaneitatem sin-
 »gulorum jugiter incertam communis aliqua vis moralis corpo-
 »ri sociali intestina et permanens accedat, quæ formalem illam
 »unionem realiter et jugiter determinet.—*Ergo* ipsa natura
 »materiae socialis essentialiter exigit aliquod principium unio-
 »nis stabilis societati internum et vi obligandi praeditum, i. e.
 »auctoritatem socialem.»

«2. *Ex natura cooperationis socialis*. Cooperatio socialis
 »per se non una est et simplex, sed multiplex et varia, pluri-
 »mas atque inter se diversas functiones complectens, partim
 »physicis partim moralibus viribus adimplendas. Itaque in
 »corpore sociali, non secus ac in phisico organismo, ad finem
 »communem non eadem singulis membris virum applicatio
 »neque aequaliter omni tempore incumbit, sed alia aliis, alia

»alio tempore necessaria est.—*Atqui* ejusmodi conveniens distributio atque moderatio operum socialium tam variorum, »ad unum tamen finem conspirantium, non per se determinata est, sed positiva indiget pro adjunctis contingentibus de- »terminatione, quæ aliumde profecto nisi á sociali auctoritate »procedere nequit.—*Ergo*, sicut materia, ita et *cooperatio* socialis in ordine reali non nisi per illam formaliter una effici et »constanter manere potest».

En la tésis y en el razonamiento comprobatorio vá incluida la necesaria distinción entre el orden metafísico y el real para el efecto de resolver si la autoridad es mera propiedad ó si también forma de la sociedad cuya sea.

Continúa el P. Meyer aduciendo un argumento de analogía, la que tiene la sociedad con el organismo físico y personal, en los cuales no hay unidad de ser y de acción, sino por la subordinación de los miembros y órganos á la forma substancial, al vital principio interno. Y, finalmente, expone la prueba del hecho constante y universal de no haber existido sociedad alguna, por simple y exigua que sea, p. ej., la conyugal, y hasta las sociedades llamadas de iguales, que no tengan y necesiten la autoridad correspondiente.

4. Puede observarse que aun en las sociedades de iguales, que se proponen un sólo fin determinado, no se elige, ó, por lo menos, no debe elegirse para la presidencia al que siendo no, toriamente el más apto respecto del bien social, por ejemplo el mejor literato, ó el médico más distinguido, ó el más preclaro jurisconsulto, carece, sin embargo, de prudencia, de energía, y, menos aún, si con pasiones extraviadas é ilícitas, verbigracia, la soberbia, la ira, etc., pudiera comprometer, al mismo tiempo que la autoridad moral del presidente, el orden y los adelantos sociales. En tal caso, y cuando la elección es gobernada por la razón y la justicia, y no por la irreflexión ó por torcidos móviles, se prefiere á otra persona que, sin dejar de ser insigne por las dotes conducentes al fin social, es, sin embargo, inferior al sujeto desechado por falta de las otras virtu-

des gubernativas en las que les supera el menos sabio, artista, negociante, etc. A medida que la sociedad vá siendo menos incompleta, por ejemplo, no la Academia de la lengua, sino la de Ciencias políticas y sociales, y más aún una Universidad, más difícil es la superior excelencia por parte de las diversas materias científicas, objeto de la institución; menos se tendrá en cuenta la sabiduría y el talento, y más la rectitud, la discreción, el tino y el carácter, en una palabra, las virtudes de la acción y del gobierno.

Estas y no otras, dirigidas por la inteligencia y el buen sentido que no niega Dios á la mayor parte de los hombres, son las que se requieren para el buen orden de la familia, y las mismas para la recta dirección de las otras sociedades que, además de completas, son públicas, de la nación particularmente.

Lo que hay es que, cuanto mayor es la amplitud de la sociedad completa, ha de ser la virtud del gobernante más insigne, desprendida y abnegada, porque faltan en éstas colectividades otros impulsos de buen gobierno, el afecto familiar, el paternal sobre todo, y el mismo interés utilitario, material, que en la familia está más conexo con la justicia, ó menos divorciado de ella, Dios, protector más providente aun de la familia que de las otras sociedades, ha puesto en el corazón del gobernante doméstico el aliciente de un legítimo goce sensible, anejo al cumplimiento de los deberes ordenadores, de un placer que no vá unido generalmente, ó es más raro y mucho menos intenso, á la práctica de las demás virtudes sociales. Por eso hay más padres buenos que alcaldes ó jefes de provincia, región ó Estado, y han menester estos sustituir con otros móviles más racionales y éticos, procurados con especial y más cuidadosa educación, la carencia ó flojedad de los estímulos afectivos y utilitarios. Estos últimos en el pater familias, se funden generalmente en el egoismo y en el amor paterno, por que sabe que el padre y los parientes, la esposa y los hijos especialmente, han de experimentar los buenos efectos de una recta gestión económica, al contrario de lo que le acontece la

soberano, al cual, si gobierna bien, rara vez le afecta de un modo principal é inmediato el crecimiento de la riqueza pública.

De la misma complejidad y extensión de las relaciones públicas, y especialmente de las nacionales, se sigue también que, si el entendimiento y el saber no son las cualidades principales y más apetecibles del soberano, las necesita, sin embargo, en calidad y grado superiores á las del pater familias; y ya la naturaleza, servidora de los designios divinos, provee á esta necesidad por medio de una educación proporcionada y más intensa, potente y eficaz, que, si no puede dar al soberano el talento que le ha negado el Cielo, le sustituye y en parte compensa con el hábito y existencia de una ilustración sólida, ámplia y discretamente elegida, de manera que más valga y sirva la mediócre inteligencia de un soberano, enriquecida con variedad de conocimientos útiles y fructíferos, que el mayor ingenio erial, y, por lo tanto, estéril, ó, lo que fuera peor, sembrado de arrogante y deficiente pseudociencia.

No ha querido Dios que el señorío que la soberanía y, en general, la autoridad suponen, se ejerza, concrete y exija por dotes y títulos distintos de los que traen aparejado el legítimo influjo y un cierto dominio en los otros órdenes y relaciones de la vida social. En ella, cuando son las sociedades regularmente honestas, y, en la misma proporción, ordenadas, son la voluntad y sus cualidades las que imperan y dirigen, más que el entendimiento y la mera lucubración y la ciencia desprovistas de virtud. La voluntad, no la inteligencia, es la facultad activa por antonomasia, y la responsable de sus actos, la que domina á la otra con dominio llamado de ejercicio, la que ha recibido de Dios la obligación y la carga inherentes al cumplimiento del humano destino, y á la que se imputa el mérito y el demérito, únicos y positivos, de la acción personal para el fin del individuo y de las colectividades en que vive y se perfecciona. Por eso, de las virtudes cardinales del imperante, particularmente cuando reciben el soplo y espíritu de las teologales y divinas, dependen en máxima parte, que no


de la mera y sola sabiduría asentada en el solio, la grandeza efectiva y la gloriosa suerte de los pueblos, los cuales solo se elevan por la justicia, y solo son verdaderamente miserables por el pecado.

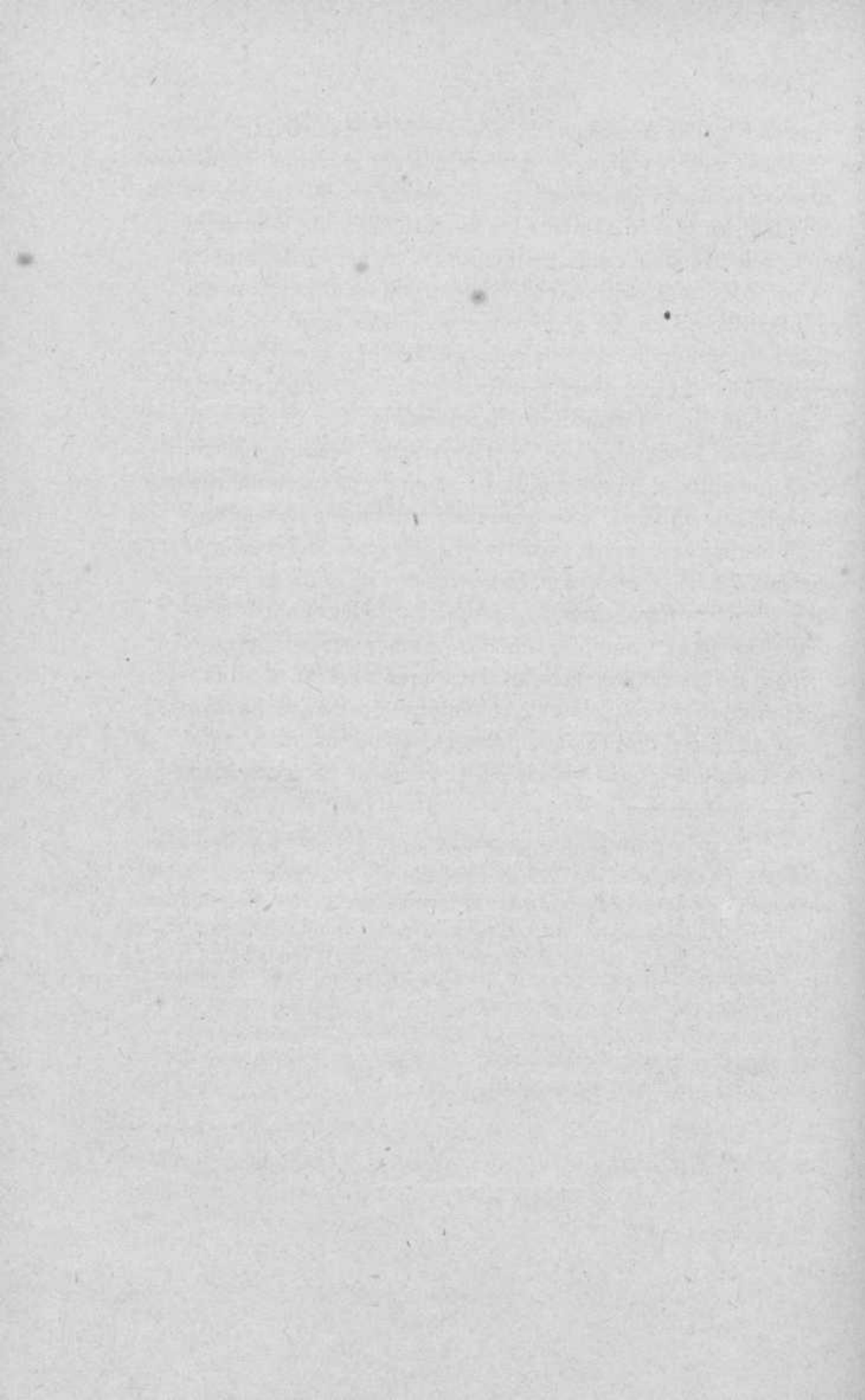
Esta justicia, en el amplio sentido ya expresado, comprende á las virtudes cardinales y las que éstas á su vez implican. En la justicia, (*stricto sensu*), entran la religión, la piedad, el patriotismo, etc. Por esto debe el soberano ser el primer patriota, porque el patriotismo no es otra cosa que la piedad respecto á la madre patria, análoga á la piedad filial, (*erga parentes*), y por motivos semejantes á los que determinan el deber de estimar y amar á los padres. No es el soberano superior á la nación, que es madre de él como de los demás nacionales, sino su primer servidor é hijo, en provecho de ella y de la gran familia nacional antes que en el personal y propio del primer súbdito de la patria común. La *prudencia* exige á su vez, como elementos necesarios, lo que llama Santo Tomás *eubuliam*, ó sea la bondad del consejo; *synesim*, el recto juicio acerca de lo que ha de hacerse, y *gnomen*, ó la perspicacia para el juicio práctico, las cuales, á su vez, requieren las cualidades intelectuales de memoria é inteligencia, y las intelectuales y volitivas juntamente de providencia, docilidad, circunspección y cautela, todas las cuales deben brillar singularísimamente en la soberanía (1). La *fortaleza* supone también la magnanimidad, ó sea el hábito de las grandes y generosas empresas; la *paciencia* ó sosiego, por la contemplación del bien racional, contra la tristeza y decaimiento producidos por los males; la *perseverancia*, ó la resistente firmeza del propósito contra las dificultades anejas á la larga duración del acto. A la *templanza*, en fin, corresponden la *continencia*, la *mansedumbre*, *modestia*, *parsimonia*, *austeridad*, *sencillez*, etc.

(1) Sería muy curioso y útil señalar en los modernos gobiernos, además de la carencia de justicia, los vicios contrarios á la prudencia: negligencia, precipitación, obstinación, inconsideración, inconstancia y prudencia de la carne.

De todas ellas aun más debe sobresalir la justicia, que es la que más asemeja la soberanía á la paternidad, por la amorosa disposición á dar á todos los miembros de la comunidad lo que rectamente les corresponde, á la manera que el padre reparte equitativamente los bienes en la familia, ora con proporción aritmética, ó de estricta igualdad (justicia conmutativa), ya con la proporción geométrica, por la desigualdad del merecimiento, en contemplación al bien é interés comunes (distributiva, remunerativa y vindicativa), ya la que llaman *legal*, que no considera directamente á la persona, ni *singulariter*, ni como parte del todo social á que pertenece, sino al conjunto, á la comunidad á la cual ordena (gobierna) por medio de la ley (1). Cualquiera defecto ó vicio son más tolerables que la falta de justicia, virtud que parece la más característica de la soberanía, la que al pueblo y á ella misma defiende contra los abusos y excesos del poder, contra la tiranía sobre todo. Cuando en medio de sus extravíos, y en el naufragio de las demás virtudes, ha logrado salvar el soberano, (bien que esto sea difícil), el sentimiento y la inclinación de la justicia, son con él más sufridos los súbditos, más benignos los coetáneos, y menos severo el juicio de la posteridad.

(1) En una nota de la página 142 del tomo primero se ha hecho ligera referencia á la escasa propiedad del término *justicia legal*, que resulta un tanto inexacto y equívoco, dicho sea con el mayor respeto á la venerable tradición científica que desde Aristóteles viene consagrando esta especie y denominación de justicia. Solo por la doble antonomasia, fundada en la importancia de la justicia que se refiere directamente al bien de la sociedad civil, y en el hecho de ser el soberano el primero y principal cumplidor de la justicia social, se explica el uso de una expresión, que, como indican las mismas palabras, es aplicable á cualquiera especie de justicia, y sea el que fuere el sujeto activo ó pasivo de ella.





CAPÍTULO III

DE LAS LEYES DE CONCRECIÓN DE LA SOBERANÍA.—LA SOBERANÍA ES, «PER SE», INELEGIBLE É INAMOVIBLE. DE LA EDUCACIÓN Y EL PODER SOBERANOS.

1. De la doctrina del anterior capítulo se deducen las leyes de la concreción de la soberanía, ó sea *aquellos principios derivados de la esencia de ésta, y con arreglo á los cuales, y por razón de ella, tiende á personificarse, á determinarse en un sujeto.* Estas leyes son:

1.^a La ley natural y los hechos, acomodándose á ella, mientras no los contraríe y tuerza la malicia humana, se inclinan á determinar la soberanía en la más excelsa superioridad, y no por una sola cualidad de las facultades específicas del hombre, sino por las dotes del entendimiento y de la voluntad, y de ésta especialmente; es decir, la soberanía exige en el sujeto de ella una compleja superioridad moral en el amplio y estricto sentido del término, pero, sobre todo, en la acepción más rigurosa y limitada de la excelencia de la voluntad por los hábitos de que está adornada, ó sean las virtudes. Esta superioridad es la más inclinada y generalmente dispuesta á hacer el bien, y, en la misma propor-

ción, la menos tentada y expuesta al mal, no solo por el preservativo de la virtud, sino por menor necesidad y menos estímulos de extravío y pecado. 2.^a En razón de esta misma superioridad, la soberanía tiende más bien á ser reconocida y acatada que constituida por elección, la cual es más bien un medio extraordinario, excepcional y supletorio de determinar el soberano, cuando otros hechos naturales y consiguientes títulos legítimos no han concretado el poder supremo en el sujeto en quien la historia ha ido acumulando y mostrando las dotes notorias, ó racionalmente presuntas, de esa varia y compleja idoneidad, tan difícil de discernir de antemano, y que la soberanía requiere por razón de naturaleza y oficio. 3.^a Por esto la naturaleza, término que aquí significa el conjunto, sucesión y cruzamiento de múltiples causas morales y físicas, de necesaria ó de libre acción, va providencialmente disponiendo los sucesos de manera que, por desarrollo paulatino y suave, se vaya marcando y destacando en estados y relaciones sociales anteriores la superioridad pública de un sujeto á quien, para ser soberano, solo le falta la absoluta independencia de la comunidad pública á la cual ordena. 4.^a La soberanía tiende también á concretarse inamoviblemente en el soberano, no solo por las ventajas de sustraerse ella y la sociedad civil á los azares, peligros y deficiencias de la elección, sino porque solo así posee el poder moral y material y los prestigios y perfección que el supremo gobierno necesita. 5.^a Por esta misma razón tiende igualmente la soberanía á hacerse hereditaria por sucesión familiar, como medio indispensable además para la educación adecuada y pro-

porcionada al solio, á la superior aristocracia que la soberanía requiere, á las prendas que, para el procomún, le prestan la tradición y la historia.

La primera de estas leyes queda ya explicada; las otras, aunque son en gran parte corolarios de la primera, exigen consideración más detenida.

2. Aunque, para que haya elección, basta que se presenten el caso y necesidad de decidirse entre varias personas ó cosas, mediante una deliberación previa, consistente en juicio comparativo de los diversos sujetos ó bienes que solicitan la determinación de la voluntad, no puede decirse que hay elección con todas las condiciones racionales y jurídicas, necesarias en negocio tan importante como el de la designación del soberano, mientras no haya posibilidad de un discernimiento detenido, reflexivo y bastante de las condiciones, de las dotes indispensables de las personas en quienes puede recaer la soberanía, y no tengan los electores, más aun que la competencia electoral, la rectitud, las virtudes indispensables para elegir en justicia. Así, pues, conciencia recta y suficientemente ilustrada es la condición que implica y exige toda elección que no sea un acto arbitrario, apasionado y ciego, que se determina en un sentido sin más motivos racionales y justos que en cualquiera otro. De donde se sigue que cuanto más importancia y trascendencia tenga la elección, mayor conocimiento especulativo y práctico y mayor virtud electorales requiere; y en tanto que para asuntos sencillos y triviales de la vida bastan la luz natural y la justificación ordinaria que alcanza la mayor parte de los

hombres, para cosa de tanto interés como la designación de soberano son menester cualidades insignes de entendimiento y voluntad, que, aun en las sociedades y tiempos de más cultura y virtud, son patrimonio no solo de los menos, sino de los pocos.

Únicamente éstos son capaces de elegir, tanto por la entidad y gravedad de la elección, como por la dificultad de discernir y apreciar las complejas y altas cualidades no sólo de uno, sino de varios sujetos á quienes se presume con aptitud y en potencia de ser soberanos. La comparación, que siempre es difícil, y la decisión, expuesta á ser apasionada é injusta, aun tratándose de cotejar una sola cualidad, por ejemplo, la aptitud y saber en un orden de conocimientos, ¿qué serán cuando haya que estimar y aquilatar la variedad de dotes propias de la soberanía y cotejar las de las diversas personas entre las cuales se ha de elegir? Esto suponiendo que toda virtud sea discernible, por públicamente notoria; que los candidatos hayan mostrado antes cuantas cualidades el gobierno requiere, y no una solo, v. g., la justicia en el ejercicio de la jurisdicción, ó nada más que la pericia y el valor en la guerra; y que puedan ir bien orientados los electores respecto de las aptitudes de la soberanía, por la manifestación y experiencia de las dotes desplegadas en relaciones y estados sociales inferiores por elevados que éstos fueren. Porque, de la misma manera que el que se ha mostrado virtuoso en estado de soltería, ofrece probabilidades y presunciones, pero nada más, de que será buen marido y buen padre, así las virtudes del ciudadano y del súbdito, mostradas en puestos eminentes, representan

probabilidad, esperanza y presunción racionales, nunca seguridad y certeza, de superioridad y excelencia verdaderamente soberanas.

Pero, prescindiendo de esta última consideración, contra la cual puede oponerse que ninguna elección humana debe de presumir de éxito y acierto absolutos é indefectibles, siempre quedará en pié el argumento de que los electores del soberano tienen que ser, por exigencia misma de la superioridad que tratan de discernir y designar, una selecta minoría de hombres eminentes en conocimiento, experiencia y virtud, pues sólo así ofrece la elección garantías de rectitud y tino. Además, este reducido cuerpo electoral ha de contar con el poder social suficiente para defender la decisión adoptada, imponerla y mantenerla contra cualesquiera voluntades y actos contrarios á la elección y á la persona elegida; en resumen, la elección del soberano supone ya en ese reducido cuerpo electoral una superioridad, no discernida por otros electores, sino determinada por la naturaleza y la historia, ó lo que es igual, una aristocracia, una soberanía de forma poliárquica, que en las dotes de la elección tiene ya las de la soberanía, que con el mismo título que elegir puede gobernar, y que, si en vez de esto, hace aquéllo, es para constituir una forma de gobierno más perfecta y conveniente al común. La elección se convierte de hecho en una función constituyente en que el soberano perfecciona el órgano de la soberanía, reconociendo, más bien que buscando y señalando, una superioridad mayor y absoluta, una supremacía efectiva y verdadera de más adecuada forma, la monarquía generalmente.

Síguese de aquí que, *per se*, por su naturaleza, la soberanía es inelegible, y que sólo *per accidens*, en casos extraordinarios y anómalos, habrá elección, cuando, por la deficiencia de los hechos, no se haya determinado el supremo poder en el sujeto á quien de derecho le corresponde, y que hasta tendrá generalmente la obligación moral y social de ejercer el más alto gobierno. Estos casos no son los de la función electiva, verificada por una superior y reducida aristocracia que, cuando elige, ejecuta más bien una función de soberanía constituyente, sino aquellos en que, por azarosas é irregulares circunstancias de atraso ó decadencia públicos, un cuerpo electoral más numeroso de lo debido y conveniente, se vé, ó se coloca, en situación de designar al soberano. Y también es caso, bien que cada vez más raro en sociedades de ya larga existencia y de constitución regularmente formada y aun adelantada, la función constituyente supletoria é imprevista, originada por accidentes excepcionales: aquella en que se provee, á la carencia de imperante por no existir personas llamadas á la sucesión en el poder supremo, lo cual sólo puede acontecer en las monarquías, y si acaso, con posibilidad muy escasa y lejana, en las poliarquías compuestas de un reducidísimo número de aristócratas. Cuando tal sucede, los organismos infrasoberanos de inmediata jerarquía resultan soberanos de hecho y de derecho, por falta de superior común, y están en el caso y en el deber de designar persona, con arreglo á la constitución escrita, consuetudinaria, ó aunque no sea más que á la interna y no formulada ley fundamental de la nación.

3. De que la soberanía es, *per se*, inelegible se concluye que si el previo consentimiento libre, explícito ó implícito, no es el hecho generador de ella, serán, por regla general, algunos otros hechos más naturales, ordinarios y corrientes los que determinen ó concreten, los que originen el supremo poder en un sujeto; y que, una vez así determinado por variedad y multiplicidad de causas necesarias y libres, mediatas ó inmediatas, hay obligación moral, social y jurídica de reconocer y acatar esa soberanía, ó, lo que es lo mismo, prestar á su existencia y ejercicio el consentimiento, que en tal caso no es otra cosa que una conformidad ó aquiescencia debidas, no de distinto fundamento y naturaleza que los que implica y exige cualquiera otro deber. Lo primero, es decir, la determinación por títulos que normalmente no son la elección, se deduce, *á contrario*, de la verdad de ser esta solo modo accidental y extraordinario de atribuir la soberanía á una persona. O la soberanía carece de títulos y modos ordinarios y esenciales de concreción, lo cual es absurdo, ó han de ser estos independientes, la mayor parte de las veces, de la inmediata voluntad libre de los súbditos y ciudadanos. Lo segundo, lo del acatamiento debido, ó sea lo del consentimiento necesario, no de distinta índole del que los hijos están obligados á prestar á la autoridad del padre y á su ordenación, es consecuencia inmediata del derecho y aun deber de soberanía que tiene el superior, y deducción mediata de la necesidad de la sociedad civil ó nación y de la autoridad, sin la cual no puede aquella existir.

Si solo se designa y elige la persona del soberano

en las accidentales y extraordinarias circunstancias de originaria indeterminación de la soberanía, ó de ulterior extinción de la dinastía ó de la aristocracia gobernantes, se concluye también que, una vez concretada la autoridad en una persona física ó moral, su derecho es vitalicio. Para que no lo fuera, sería preciso que en toda la nación, ó en parte de ella, residiera por naturaleza el derecho de elegir soberano, cosa contraria á la esencia de la soberanía y á los requisitos que exige su elección. Además, (y esta razón que va á exponerse es un nuevo argumento en pro de la inelegibilidad esencial del poder civil), soberanía amovible no es soberanía, puesto que, por conceptos varios, es naturalmente menos apta para la suprema ordenación y menos capaz de sus oficios, fines y virtudes. Soberanía es independencia en todos los respectos posibles en lo humano; y de ella carece la persona cuya continuación en el poder depende del arbitrio ageno, siendo más soberano, y pudiendo de hecho serlo, aquel cuerpo electoral que, al designar al soberano, lo hace, y, al sustituirlo, lo destituye. Por esto puede decirse que el que fuere naturalmente elector podría, por razón de la superioridad que el discernimiento electoral requiere, ser soberano, y que, si no es naturalmente soberano, tampoco puede ser elector.

La consecuencia es que el Poder amovible está más tentado á la injusticia y á la tiranía, por halagar y favorecer á los electores de cuya voluntad depende la continuación en el poder, ó la sustitución; mientras que el soberano inamovible ofrece, por el contrario, más probabilidades de ordenar para el procomún, no sólo

por menor necesidad de injusticia y nepotismo, sino por la generosidad propia de los verdaderamente superiores, la cual en mayor grado suele resplandecer en el absolutamente superior, y que engendra en él la inclinación y el hábito magnánimos y paternales de favorecer á todos, y en particular, de amparar y defender á los humildes, colmándoles además de los dones y auxilios que su mayor necesidad reclama. El más elevadamente superior, el independiente en todos los conceptos que implica la independenciam humana en lo temporal, está mucho menos expuesto á la ambición y á la envidia que son los principales estímulos y factores de la iniquidad y de la opresión. Careciendo de estos dañados impulsos, ó siendo en el soberano más débiles, intermitentes y raros, es más vigoroso el racional conato nativo de hacer el bien, fomentado en todo aristócrata verdadero por la educación y la posición, más esmerada y perfecta la primera, y más elevada y culminante que ninguna otra la segunda en la soberanía.

La más recta ordenación y el más caritativo patronato social, que, si no indefectibles, son naturales en la más alta aristocracia, cual es la del soberano, le captan el amor de los súbditos, el más alto y merecido prestigio y la autoridad moral consiguiente á la virtud y al honroso y aun glorioso concepto que del soberano no puede menos de tener una sociedad honesta. Con esto, el imperante más gobierna por medio de la dirección racional y afectuosa que con la coacción sensible externa, engendrándose así amistad y solidaridad más íntimas entre el pueblo y su gobierno, más respeto y cuidado de los respectivos derechos, y más solidez, con-

sistencia y duración del espíritu nacional en los términos expuestos en el número I, Capítulo III del Libro II. Además, el soberano inamovible es más poderoso, y dispone, por razón de su poder, de mayores y más adecuados medios para el bien social; y en proporción de aquél, más deben esperar y temer, y de hecho los súbditos más esperan y temen, de la suprema autoridad vitalicia que de la temporal y pasajera; y no sólo por deber y adhesión, sino por interés bien entendido, se conforman con la ordenación, con lo cual tiene más alicientes y probabilidades y salvaguardias la razonable obediencia.

Por otra parte, si hasta los empleos y cargos públicos, y más los nacionales, han de ser vitalicios en el que los adquirió legítimamente, y cumplidamente los desempeña, y esto no sólo por conveniencia justa y consiguiente derecho de los funcionarios, sino por exigencias armónicas del procomún, con más razón y con mayor motivo debe ser inamovible la soberanía. La única diferencia que hay en este supremo empleo es que su permanencia se funda casi exclusivamente en el interés público, no sólo porque el soberano no suele ni debe necesitar de la soberanía para vivir, sinó porque la mayor disposición especulativa y práctica, inherentes á la permanencia en el cargo, más que ningún otro la reclama el de una ordenación tan elevada, variada, completa y difícil como es el soberano gobierno.

Finalmente, es ley natural de la soberanía la inamovilidad, porque es más conforme con el orden y el sosiego públicos, con la paz, condición indispensable para el cumplimiento de los varios fines nacionales. Toda

elección, además de ocasionada á desacierto involuntario, lo es á graves infracciones, pecados y delitos en este capital asunto, en razón directa de lo numeroso que sea el cuerpo electoral, que, cuanto menos reducido y aristocrático sea, más se dejará influir por torpes móviles de concupiscencia en la designación del soberano, para tenerlo por suyo, ó más propicio á ilegítimos intereses, distintos de los del procomún, y aun contrarios á éste. Por eso la naturaleza tiende á que sean las elecciones en caso extraordinario, y para las circunstancias, siempre desgraciadas, de indeterminación de la soberanía, ó falta de sucesor en ella. La diversidad de juicios, aun inspirados en recto motivo, pero sobre todo la variedad, incompatibilidad y la furia de los malos apetitos engendra división actual, y aun sucesiva y durable, del espíritu público, y turbaciones efectivas más ó menos hondas, enconadas y continuas, que pueden llegar hasta el calamitoso extremo de la civil contienda con todos sus males presentes y consiguientes.

4. Aunque no fuera más que para prevenir, en lo posible, tales desacuerdos y aun discordias, sería conveniente, útil y natural la sucesión de la soberanía en la familia ó familias del imperante ó imperantes supremos. Mas no es esta la principal razón de la continuidad sucesoria familiar de este poder, como no lo es de la inamovilidad la de evitar los defectos, vicios y disturbios á que está frecuentemente expuesta la elección. La razón de más peso es otra, que deriva directamente, como la inamovilidad, de las leyes anteriormente expuestas.

En efecto; ya que lo ordinario y corriente es que, las menos veces, tenga que discernir un cuerpo electoral las cualidades de la soberanía, y determinar la persona que ha de ejercerla, debe, en beneficio de la sociedad, la previsión humana tratar de formar al soberano, ya que tan difícil y ocasionado á males es elegirle, y puesto que no siempre los hechos, y rara vez de un modo notorio, señalan una superioridad indiscutible, que imponga contra la ambición, la vanidad, la soberbia, el orgullo y la codicia de otros superiores, un reconocimiento espontáneo, sincero y constante de la soberanía concretada por los hechos. En una palabra, al discernimiento del soberano debe sustituirse la preparación de él en las prendas y ventajas de entendimiento y principalmente de voluntad que son de naturaleza, fin y razón de la soberanía. El soberano, más que *se elige, se hace*, y si la intervención humana en la formación de él ha de imperar, como causa libre, sobre otras de acción necesaria, es preciso que en la soberanía se suceda familiarmente como en los demás derechos, no por el interés privado, sino por el interés público de la recta ordenación nacional.

Porque sólo así puede esto conseguirse mediante la educación, cuyo agente directo y principal, núcleo y centro es la familia, lo mismo para la pedagogía ejercida sobre el futuro soberano que sobre cualquiera otro hombre, tanto para la soberanía como para los demás oficios sociales, sin más diferencia que la de la categoría, posición, funciones y fines respectivos. Todo cuanto se ha escrito en el Capítulo XII y XIII del Libro II es perfectamente aplicable á la más alta aristo-

cracia, la soberana, y á su formación; y la doctrina del número 2 del Capítulo XII es exactamente aplicable á este punto. Más adelante, al tratar de las leyes sucesorias, se extraerán del fecundo principio, aquí señalado y demostrado, las más evidentes é importantes consecuencias, cuya anticipación sería ahora inoportuna. Lo que no debe omitirse, aunque también sea acaso un tanto prematuro, es la insinuación de que la acción de la naturaleza, ó sea, de causas independientes de la acción humana en la concreción de la soberanía, tiene preferente influjo en el primer origen de aquélla, esto es, en la determinación del primer soberano; en la de los sucesores son más bien la acción del hombre y de la ley, pero no el libre arbitrio y consentimiento previo, los que confieren el derecho al supremo imperante.

5. La educación de éste, ó sea, la *acción de perfeccionar con los hábitos propios del entendimiento y de la voluntad estas facultades del llamado por la ley al futuro ejercicio de la soberanía*, no se diferencia, en cuanto á la naturaleza, de la dirección pedagógica de cualquiera otro hombre, sino únicamente por razón del oficio y, consiguientemente, del grado de elevación, de la amplitud educativa y del celo y esmero con que ha de procurarse formar al sucesor en la soberanía. La del soberano, como la de los ciudadanos y súbditos, ha de ser intelectual y moral (stricto sensu); pero en aquél como en éstos, por evidentes razones filosóficas y teológicas, que no hay para qué repetir aquí, más importa la educación en la virtud que en el saber; así es que, sin descuidar éste, ha de procurarse con especial interés y

ahinco aquella. Como aun ha de brillar más en el soberano, por la naturaleza de la ordenación nacional que le está encomendada, ya queda expuesto en este y en el anterior capítulo, siendo aplicable al presente toda la doctrina relativa á la aristocracia en general, y que se desarrolló en los capítulos citados, y particularmente en los números 1 y 2 del XII. Siendo la función soberana la más aristocrática de todas, y el soberano el primer aristócrata de la nación, ha de procurarse que las virtudes brillen en él, no en grado mediocre, ni aun eminente, sino heróico, con el desprendimiento, generosidad y abnegación que más utilidad y valor tienen en el gobierno que en ninguna otra relación y función sociales.

También son dos las secciones y partes de la educación soberana, como las de los demás ciudadanos: una dirigida á los fines humanos y sociales que llamaríamos genéricos y comunes, y otra enderezada á la formación profesional, ó sea de nacional oficio y función. En la parte fundamental pedagógica, la preparación del supremo imperante solo se distingue de las otras en la solidez, elevación y extensión, en el esmero y en los recursos educativos. En lo que más se diferencia ésta de las demás pedagogías es en la parte que denominaríamos técnica y profesional, en razón de la naturaleza, fines y atenciones de la soberanía. La cual, si, en cierto modo, puede decirse función y oficio en el más amplio y noble sentido de la palabra, no es profesión determinada y singular, sino tan comprensiva, variada y completa como lo son en sus órdenes respectivos la de los jefes de las sociedades completas, privada

ó públicas. Por esto la formación técnica del soberano no puede circunscribirse á los estudios de una Facultad, sino abarcar las materias más conexas con la suprema gobernación, con la ciencia y sabiduría del supremo estadista, manteniéndose en la generalidad que pudiera compendiarse en la fórmula *divinarum atque humanarum rerum notitia*, ni tan insuficiente y vaga que nada enseñe, ni tan circunstanciada y honda que rompa la proporción necesaria entre las nociones é ideas más conducentes á la más alta dirección del Estado. De donde se deduce que entre la parte general y especial de la educación del jefe de éste no están ni tan marcadas las diferencias, ni tan señalados los límites como en las dos secciones de la pedagogía propia de las demás clases sociales. Ya en la educación aristocrática acontece algo parecido, como quiera que tampoco los nobles tienen á su cargo una función y profesión determinadas, sino el alto patronato social y los oficios de público gobierno.

6. En cuanto al poder del soberano debemos notar: 1.º que no hay persona ni dinastía con los recursos y medios bastantes de coacción física para hacer efectiva la ordenación contra la mala voluntad de los súbditos, aun estando los reacios y discolos en minoría; 2.º que es de la sociedad de donde ha de obtener el soberano ese poder coactivo, y que la sociedad está obligada á prestárselo, siendo éste uno de los deberes de las personas componentes de la nación, bien que lo tengan y cumplan en lugar, formas y proporciones distintos; 3.º que en todos tiempos y naciones conviene

que el poder material y físico del soberano sea proporcionado á la posición de más alta y eminente aristocracia que el soberano tiene, y que así este poder personal y dinástico será como núcleo y centro de atracción de ese poder que la sociedad debe prestarle; 4.º que en los orígenes de la vida nacional, y en épocas y sociedades bárbaras y atrasadas, es más necesario que el poder individual y familiar del imperante descuelle sobre los otros, y este poder es entonces no solo la más notoria y apreciable excelencia de la soberanía, sino el medio más eficaz de que se concrete en un sujeto. Y no solo para ocuparla, sino para mantenerla y consolidarla, es indispensable ese poder que consiste principalmente en la riqueza y en la fuerza.



4. El P. Taparelli escribe en su *Ensayo teórico de Derecho natural apoyado en los hechos*: «Es evidente la suavidad y »sabiduría de esta ley (la de la concreción de la autoridad en »el soberano de hecho) pues pone el derecho de mandar 1.º »en quien no tiene necesidad alguna de hacer el mal, y está »por consiguiente libre de la mayor de las tentaciones; 2.º en »quien tiene la fuerza necesaria para hacer el bien, como superior que es á los demás en aquello mismo que pretenden »al asociarse; 3.º en quien naturalmente se siente inclinado á »hacer el bien, pues si miramos á la superioridad con ánimo »libre de preocupaciones, siempre la veremos propensa por »sí misma á esto; el que es docto desea comunicar sus pensa-

»mientos enseñando, el rico comunica sus riquezas desple-
 »gando magnificencia, el poderoso su poder á sus empleados,
 »el noble su nobleza á sus hijos; y si la limitación de estos
 »bienes hace á veces á los hombres avaros de sus tesoros, la
 »voz pública y el remordimiento interior lo vituperan, y de-
 »claran así cual es el verdadero impulso de la naturaleza ra-
 »cional. Un rico avaro, un poderoso que oprime, un noble
 »que injuria, etc., son mónstruos universalmente detestados.
 »¿Quiénes son, pregunta el ilustre Haller, aquellos embrolla-
 »dores del foro que arruinan y venden á sus clientes? ¿son aca-
 »so los abogados de más nota y habilidad? ¿Quiénes los mé-
 »dicos que prolongan deliberadamente las enfermedades para
 »aumentar el número de sus visitas? No por cierto los mejores
 »médicos. ¿Quiénes los soberanos que tiranizan á los pueblos?
 »¿No son por ventura los más tímidos y suspicaces? Si bien se
 »considera, la debilidad incita al delito: roba el pobre, persua-
 »dido del hambre; muerde el literato envidioso, porque su
 »mérito es inferior; hurta el jugador con fullerías lo que no
 »sabe ganar con habilidad.» Y continúa en el párrafo siguien-
 »te: «Condición natural es de la superioridad, como lo es asi-
 »mismo de la autoridad, ser benéfica; y si la humana malicia
 »abusa de entrambas, no por eso es menos justa, menos sábia
 »y suave la ley establecida por el Criador, según la cual, allí
 »se fija el derecho donde reside la superioridad de hecho. ¡Ay
 »de nosotros el día en que, cansado del vocerío de los decla-
 »madores, viniese en concederles que la autoridad mudase de
 »condición, y viniese á parar en manos de los más débiles y
 »miserables. Entonces veríamos la sabiduría de esta ley,
 »cuando nuestros males fuerán no ya una violación de la natu-
 »raleza, sino una especie de instinto que juntara, para estrago
 »de la sociedad, al gérmen inagotable de la original corrup-
 »ción la vida insaciable de la anterior penuria, el rencor de la
 »envidia, la tiranía de los débiles» (Tomo I, págs. 254 y 255).
 La desgracia, temida y hasta vaticinada por el ilustre jesuita,
 ya la están padeciendo los pueblos, en los cuales los gobier-
 nos parlamentarios, surgidos del sufragio, demuestran cada día

lo que pueden, *para estrago de la sociedad, la vida insaciable de la anterior penuria, el rencor de la envidia y la tiranía de los débiles* sobre el fondo y la base del germen inagotable de la original corrupción.

2. En apoyo de la elección, como único ó principal modo de originarse la soberanía, no es lícito, en buena lógica, argüir con la historia, aunque no pueda negarse que presenta ésta numerosos casos, no tantos como se cree, de designación del soberano. En primer lugar, comparados éstos con los de la soberanía determinada aparte y aun en contra del consentimiento libre y previo de la sociedad, resultan una excepción, y no de importancia. Además, de los hechos no pueden inducirse siempre en el orden moral leyes racionales y éticas, por frecuentes y repetidos que aquéllos sean, cuando se prueba que son contrarios á esas leyes, y proceden de circunstancias desgraciadas, en las cuales tiene no poca parte, y no pequeña responsabilidad el extraviado albedrío de los hombres. En la historia, los casos de elección, en que concurre á hacerla un reducido y selecto número de aristócratas, son los menos, y, por el contrario, los más aquéllos otros en que la elección se practica *democráticamente*, es decir, por muchos más de los debidos y de los que convienen al interés social; pero esto acontece en sociedades nacientes é imperfectas, ó en períodos de turbaciones revolucionarias, cuando no están bien destacadas las superioridades sociales, ó cuando, después de una crisis política y de un grave cambio de constitución, no tienen autoridad ni fuerza los mejores para contener la irrupción del número, ansioso de influjo, de poder y de mando. Lo primero sucede generalmente antes del nacimiento de las monarquías; lo segundo, cuando derrocadas éstas, se disputan los nobles y la plebe la soberanía vacante, sin más títulos ésta y una buena parte de aquéllos que la potencia física, puesta al servicio de la ambición.

Hay que tener también en cuenta que, ó por insuficiente é inexacta apreciación de los hechos, ó por defectos de expre-

sión en términos ambíguos, que en la historia se usan más que los rigurosamente técnicos, suelen considerarse elecciones actos que no pueden ni deben confundirse con ellas. Tales son, por ejemplo, la conformidad y aquiescencia del pueblo á los acuerdos de las clases superiores, en cuya justicia, prudencia y acierto confía la plebe, guiada por certero instinto al acatamiento del único criterio seguro para ella, el de autoridad. Otras veces un reconocimiento espontáneo y rápido de la superioridad social que, acaso sin pretenderlo, ni aun darse cuenta de ello, empieza á ejercer actos de soberanía, se confunde con la elección, imaginando que ésta consiste en la aclamación y unanimidad con que se recibe al soberano, dándole señales inequívocas y ruidosas muestras de adhesión y fidelidad. Esto significan los términos *alzar rey*, *eleva sobre él paves* y otros análogos que se leen en la historia, y no pueden sin embargo considerarse como elecciones efectivas, aunque tal confusión sea lo corriente. Así se tiene por elegido, después de la rota del Guadalete, á D. Pelayo, suponiendo que la monarquía astúrica surgió por elección, de la misma manera que la realeza del Estado pirenaico, siendo así que el uno es un caso bien marcado de reconocimiento, y de elección el otro (1).

(1) Don Pelayo fué reconocido rey, y alzado por tal después que él tomase, probablemente en la retirada, la dirección de los dispersos restos de la derrotada hueste goda. Sobre aquel *general en jefe*, independiente desde la muerte ó desaparición del rey D. Rodrigo, no había nadie con títulos bastantes, iguales ni superiores, ni que tuviera una anterior superioridad social tan señalada como D. Pelayo, alto dignatario en la Corte goda, miembro ilustre de la familia de Chindasvinto, hijo además del duque de Cantabria. La sociedad goda, después de la catástrofe, quedaba reducida á una sociedad principal, ya que no exclusivamente militar, retrocediendo, por el imperio de las circunstancias aciagas, á la situación en que estaban las naciones bárbaras en los comienzos de la invasión y de la conquista de las tierras del Imperio. En esas sociedades, así como la primera atención es la guerra, así también el caudillo es el supremo director de todas las relaciones sociales, el soberano legislador y magistrado, y el poder guerrero la manifestación más notoria y el título más preferente de la superioridad.

Otras veces, la elección provee no á la determinación de la forma de gobierno, ó á otras mudanzas graves en el organismo constitucional, sino á la contingencia de la extinción eventual, desgraciada y extraordinaria de sucesores en la soberanía,

dad propia de la soberanía. Dice el P. Mariana: «En el valle que hoy se llama Cangas, y entonces Cánica, tocó tambor y levantó estandarte (D. Pelayo). «Acudió de todas partes gente pobre y desterrada, con esperanza de «cobrar libertad»... es decir que D. Pelayo *ocupó* la soberanía al tomar el caudillaje de aquella *gente pobre y desterrada*. «Pero, después que algún «tanto respiraron y concibieron dentro de sí alguna esperanza de mejor «partido, (continúa el historiador), todos se juramentaron, y con grandes «fuerzas se obligaron de hacer guerra á los moros, y sin excusar algún peligro ó trabajo ser los primeros á tomar las armas. *Tratóse de nombrar «cabeza, y por voto de todos señalaron al mismo D. Pelayo por su capitán, y «le alzaron por rey de España...*»

He subrayado las palabras concernientes á la elección para llamar la atención del lector sobre lo improbable de la resolución electoral en aquella *gente pobre y desterrada* que acudió al llamamiento del príncipe godo, y que en todo pensaría menos en discernirle la dignidad y el cargo de caudillo y rey, sino en aclamarle en uno mismo é indivisible concepto. Aquella gente carecía de título legal consuetudinario y escrito para elegir rey, y no sería probable que, indigente y desvalida, como á la sazón estaba, se arrogase un derecho que no tenía, y que usurpan, ó se toman, las muchedumbres cuando se encuentran con poder, y en favorables circunstancias para ello. De manera que lo de *tratóse de nombrar cabeza, y por voto de todos* no es, en el P. Mariana y en los demás que así se expresen, otra cosa que la fórmula de tradición clásica y de teoría más corriente, aplicada *á priori* al suceso oscuro, en cuanto á la forma, de la elevación de D. Pelayo.

Caso de elección por los que podían y debían hacerla, y con la significación y alcance que hemos dicho, de acto de soberanía constituyente, fué el origen de la monarquía pirenaica, ora en tiempo de Iñigo Arista, ó bien en el de García Jimenez, si quiere anticiparse el nacimiento de la monarquía, ya fuese en Sobrarbe, ya en Navarra, lo cual no nos importa, ni es posible dilucidar aquí. Lo probabilísimo, por no decir cierto, es que varios señores independientes, con los mismos títulos de nobleza y; regularmente de poder, concertasen unir sus esfuerzos para la común defensa, y de las pequeñas sociedades públicas de que eran jefes y caudillos formasen una nación, poniendo á uno como cabeza de ella, con nombre y autoridad de rey. Aquí la sociedad civil y la realeza nacen á un mismo tiempo, y ambas del consentimiento libre y previo, por estar las diversas sociedades constitutivas,

caso que, de hecho, sólo se ha dado y se da en las monarquías, aunque no repugne que pueda darse en las poliarquías ó repúblicas también. Hay entonces que proceder á la designación electoral del soberano, sin que esto quiera decir, que la haga toda la nación, sinó entidades é instituciones superiores que, ipso facto, quedan soberanas, en cuanto falta el superior común, esto es, el soberano anterior; las cuales proveen, sin embargo, como es su deber, á la continuación de la forma gubernativa tradicional, sobre todo cuando es más perfecta que la que resultaría de retener el poder soberano esas colectividades constituyentes y electoras. En sociedades regularmente adelantadas en la existencia nacional y en la organización de sus instituciones políticas, habrá, cuando estas vacantes de soberanía se presenten, una representación pública suficientemente arraigada y sólida para hacerse cargo del poder supremo, bien que interinamente, mientras acuden á suplir aquel defecto eventual, y siempre subalterno, por importancia que quiera darse á la persona del soberano, y eligen al que haya de serlo. Tal ocurrió en cierto modo en Aragón á la muerte de D. Martín, cuando el Parlamento de Caspe le designó sucesor en la persona de D. Fernando de Antequera (1).

y los jefes de ellas en posición análoga, aunque no idéntica, y acaso no bien discernida la superioridad de uno de aquéllos, bien que, tal vez más que elección, fuera reconocimiento espontáneo y unánime del caudillo tenido por mejor. A esta determinación tan minuciosa y circunstanciada no llegan casi nunca las historias primitivas, y menos las de los oscuros y controvertidos orígenes del reino pirenaico. Lo probable es que él que iba á ser primer rey de Sobrarbe ó de Navarra, bien que *legalmente* igual á los otros señores, les excediese de tal suerte en prendas guerreras, que éstos tuvieran el deber moral y patriótico de alzarle rey, en lugar de retener la soberanía el cuerpo de nobles electores, manteniéndose en poliarquía aristocrática. De todas suertes, en el orden jurídico, tuvo esto que ser por libre resolución.

(1) Don Jaime el Conquistador había trazado en testamento la ley sucesoria á la corona, declarando que, á falta de línea masculina, fueran llamados los de la femenina. Esto aconteció en 1248, provocando guerras y discordias por las encontradas pretensiones de los infantes y ricos hombres;

3. Si la inamovilidad de la mayor parte de los funcionarios, que es una de las bases imprescindibles de toda buena ley de empleados públicos, sólo se fundara en el interés y conveniencia de éstos, sería imposible armonizarla con el procomún y sostenerla en colisión con éste, cuando pareciera convenirle la sustitución del funcionario con otro, cuyas superiores dotes bien pueden discernirse, tratándose de cualquiera cargo infrasoberano, por importante que sea, y no siendo esas aptitudes ni tan eminentes ni tan complejas como las de la soberanía. Aun así y todo, al empleado que alcanzó legalmente su destino, y dignamente lo desempeña, no se le sustituye, aunque sea evidente y notoria otra mayor aptitud, ó pueda, por medio de la elección que el soberano haga ó encomiende á otras personas de confianza, buscar y encontrar funcionario mejor que el presente. Es que la inamovilidad se funda no en el legítimo interés del funcionario solamente, sino, ante todo y sobre todo, en la conveniencia pública de las sociedades, cuyo es aquél, (concejo, provincia, región, nación), y, por lo tanto, todas las razones, que en apoyo de esa inamovilidad hayan de aducirse más adelante, son aplicables con mayor motivo, necesidad y provecho social á la permanencia vitalicia de la soberanía. Aquí bastará indicar, por indispensable anticipación, que uno de los inconvenientes y defectos, unánime-

de tal suerte que no llegó á arraigar en Aragón un régimen sucesorio, bien determinado y recibido, que previera contingencias como la ocurrida á la muerte del último rey de la dinastía catalana. Hubiera ley clara y precisa, no contradicha por nadie, y el Conde de Urgel, de la línea agnaticia de los reyes de Aragón, sustituyera en el trono á D. Martín, en calidad de descendiente directo de D. Jaime II por vía masculina, á pesar de sus mediocres condiciones, de la antipatía que le profesaba el último Rey, y de la lejanía de la línea colateral de este pretendiente. Por falta de ley de tales condiciones, las Cortes de los tres Reinos proveyeron, eligiendo nueve mandatarios, tres por cada uno de los Estados de la Corona de Aragón, más que para elegir rigurosamente, para fallar entre los títulos presentados por los aspirantes al trono, y teniendo principalmente en cuenta no tanto el alegato del parentesco con la dinastía como el interés público, que movió á San Vicente Ferrer en favor de D. Fernando.

mente reconocidos en los gobiernos parlamentaristas, es que la amovilidad legal y frecuente de las Cámaras y del Ministerio, que son los poderes en quienes reside el gobierno, comprometen los planes y proyectos más beneficiosos. Corren éstos la suerte de los que los forman y conciben, impidiendo además la falta de tiempo el detenido estudio, la madurez y perfección apetecibles, y no siendo tampoco probable que Parlamento y Gabinete nuevos posean la experiencia y práctica de los negocios, y aun los datos y precedentes de ellos, todo lo cual es preciso para la mejor gestión de la cosa pública. Siempre se mira con menor interés la obra agena, y no con todo el debido y conveniente la propia, cuando se teme no llevarla á feliz término, ni recibir por ella cuando menos el público aplauso y el testimonio del reconocimiento nacional, y no se puede alimentar la esperanza de merecer las bendiciones de la posteridad y el glorioso galardón otorgado por la Historia. Y si se tuviere la magnanimidad de sobreponerse al legítimo impulso de estos naturales alicientes, y trabajar sin ellos, y sólo por puro deber, con el mismo ahinco y perseverancia, siempre la difícil labor adolecería de la falta de unidad en la idea, propósito y método, careciendo también de ese pleno dominio del asunto, suministrado por su génesis é historia, las cuales sólo cumplidamente conoce el que empieza y termina el negocio.

4. La sucesión hereditaria de la soberanía, como consecuencia de no ser, por ley de naturaleza, elegible el soberano, y en calidad de medio indispensable para el mayor y adecuado perfeccionamiento de la inteligencia, (instrucción), y el de la voluntad y de la conducta (educación stricto sensu), (1) da á la sociedad, bien que no directamente, una parte é influencia provechosas en la pedagogía del futuro gobernante. Porque,

(1) Respecto de la distinción y relaciones entre la instrucción y educación, léase la nota de la página 274 del tomo primero, donde se verá una útil referencia á mi *Ensayo de Metodología jurídica*.

si bien es la familia el inmediato y principal agente educador, también la sociedad, por la acción y conducto de los distintos órganos sociales, así individuales como colectivos, educa al soberano presente, y al que ha de sucederle, como educa á los demás ciudadanos, en sus respectivos estados, y para sus respectivos oficios. Y más educa, cuanto más elevada es la posición y jerarquía; y por lo tanto, más á los aristócratas, y sobre todo, á la dinastía ó dinastías gobernantes; porque uno de los cuidados, y á la vez caracteres, de la más esmerada educación es recoger, reunir y condensar en el centro de ella, todos los esfuerzos y recursos pedagógicos que, de continuo, las relaciones sociales proporcionan á todos, sin distinción de clases; siendo, como es, la sociedad civil, en todas las ocasiones que presenta la vida, un amplísimo campo en que recíprocamente nos estamos educando unos á otros, desde los albores de la razón hasta el sepulcro. Y, en épocas y naciones regularmente adelantadas, es interés y deber de la aristocracia educar á sus miembros en ese vasto ambiente popular, donde se reciben las inspiraciones del espíritu público, y proporcionan las necesidades nacionales una escuela práctica para el patronato social, encomendado á la nobleza, una especie de clínica política de preciosos experimentos y comprobaciones.

Pues lo que se dice de la aristocracia, con mayor motivo ha de aplicarse á la soberanía; la cual aún más necesita de esos influjos y lecciones de la sociedad que ha de dirigir como órgano ordenador supremo; y no hay modo de que, desde la edad primera, vaya formándose el sucesor en ese amplio seminario de sana y benéfica democracia, si de ello no cuida especialmente el padre, ó el que haga sus veces, dirigiendo la atención y el estudio del infante y del adolescente hacia la gran cátedra de enseñanza nacional. Cuanto más íntimos son los vínculos entre la soberanía y el pueblo, y más secular la amistad entre la nación y su autoridad histórica, la participación, también tradicional, de las ideas y sentimientos nacionales en la dirección pedagógica de la dinastía monárquica, ó de

las dinastías poliárquicas, más poderosamente contribuye á formar al soberano á imagen y semejanza del pueblo, y á ir moldeando la inteligencia y el corazón del sucesor de la manera más conveniente á los sagrados intereses que han de confiársele. Compárese el valor y la eficacia de este influjo invisible, pero seguro y cierto, con la supuesta acción soberana que representa la papeleta del voto, y se verá la distancia que hay de la ficción á la realidad.

5. Al principio de este número se define la educación no en el sentido restricto del término, sino en su acepción más amplia de dirección de las dos facultades humanas y perfeccionamiento de ellas mediante los hábitos con que las enriquece una recta pedagogía. Por evitar prolijas é innecesarias repeticiones, no se ha establecido una distinción minuciosa entre las dos funciones que la educación comprende: la instrucción, y la educación en el sentido antonomástico de guía y mejora de la voluntad y de la conducta; ni se ha manifestado que, en la misma instrucción, la parte más fundamental y genérica tiene un mayor carácter educativo, como quiera que abarca, más que conocimientos directamente profesionales, aquellos otros en que se ilustra y orienta el cumplimiento de todos los deberes para con Dios, para con uno mismo y para con la sociedad. Se suponen estos conceptos ya bien discernidos en la asignatura de Derecho natural, y familiares al alumno, de tal suerte que por el contexto comprenda la acepción en que se toman esos términos, cuyas acepciones los hacen un tanto equívocos, lo mismo cuando se refieren al soberano que á cualquiera otra persona.

Sin embargo de que en la instrucción de aquél no están marcados los límites entre la cultura general y la técnica tan señaladamente como en la instrucción de los ciudadanos, que han de dedicarse á un oficio especial, y que necesitan, por consiguiente, una determinada preparación para él, la índole de la soberanía y de sus funciones exige al sucesor en ellas un estudio más detenido y cuidadoso de las materias más con-

xas con la gobernación suprema, y que no son diferentes de las que entran en la formación de los demás estadistas. Síguese de aquí que las ciencias morales, sociales y políticas y los conocimientos auxiliares de ellas, esto es, los que les sirven de base, ilustración y ampliación, deben constituir el núcleo de la instrucción del soberano, de modo que, si bien no se trate de hacer de él precisamente un jurisconsulto, y un abogado mucho menos, le sean familiares, sin embargo, los principales problemas sociológicos y jurídicos, y esté fundamentado sólidamente en los principios según los cuales han de ser aquéllos planteados y resueltos.

La educación militar del soberano es también necesaria, ó, cuando menos, utilísima en todo tiempo y nación; porque representante aquél de la fuerza y poder de la colectividad, puestos al servicio del derecho y del orden interior y exterior, debe la soberanía ser el primer brazo armado de la sociedad, así como es la más alta personificación de la justicia y demás virtudes públicas. Por esto, no solo en los turbados y azarosos períodos primitivos y remotos de asiento y formación nacionales, sino hasta en épocas y sociedades adelantadas en el orden y en la paz, conviene en sumo grado que sea el supremo órgano de la coacción el que lo es también de la ley, y figure la función militar soberana entre las que el soberano retiene.

Además es el valor guerrero, para la defensa del orden en el interior y de la independencia y grandeza nacionales en frente de las naciones extranjeras, no solo la expresión, sino el más digno empleo de la fortaleza y la constancia, las cuales no son virtudes, sino cuando se armonizan con la justicia y la recta prudencia; pero, en tal caso, las de más esplendor y brillo, las que más contribuyen al prestigio del soberano ante las muchedumbres, aun cultas y cristianas, las más eficaces para prevenir y enfrenar las rebeldías de dentro y las ambiciones de fuera, máxime en estos tiempos en que el orden interior apenas tiene más escudo que el poder físico, y en que el equilibrio internacional no cuenta con otros factores que el

interés y el miedo. De todo lo cual se sigue que debe el soberano ser, y más ahora, hombre de letras, (sobre todo de leyes), y de armas. Si Luis XVI hubiera sido militar de veras, aunque no llegara, ni mucho menos, á genio y rayo de la guerra, es casi seguro que en lugar de concluir la sombra y simulacro de la monarquía, ahogara, en la jornada del 10 de Agosto, el motín concejil y callejero y, con él á la misma revolución.

En las poliarquías, sino es tan útil que todos los poliarcas sean militares, conviene también que lo sean varios, para alejar el peligro de los golpes oligárquicos y dictatoriales, en el supuesto de que éstos sean siempre y, *per se*, un mal, punto que no me atrevo, cuando menos aquí, á resolver.

6. El deber militar, la organización de esta función y servicio, y los sistemas de reclutamiento y reemplazo del ejército son puntos de derecho público y político, que no solo de éste, puesto que dentro de la autarquía de las sociedades públicas completas está comprendido el deber y el derecho de disponer de la fuerza pública correspondiente y necesaria para el mantenimiento del orden que á estas sociedades incumbe. De suerte que solo es materia de Derecho político la función militar encomendada, por esencia ó circunstancias, al Estado; si ahora se considera asunto exclusivo suyo, es ó por idénticos motivos de socialismo que en otros órdenes, ó porque la situación interior y las relaciones internacionales imponen la absoluta centralización de este servicio.

Por esto, aunque la partición convencional y arbitraria de materias entre el Derecho político y el *administrativo* adjudica generalmente á éste la totalidad del asunto, á pesar de hallarse en las Constituciones las disposiciones capitales de él, no podemos desperdiciar la ocasión, que aquí se ofrece, de summar las indicaciones sobre doctrina que consideramos propia.

El servicio militar es un deber que deriva de la nacionalidad y, con mayor razón, de la ciudadanía, porque, dada la humana condición, no pueden subsistir los derechos de la per-

sona física ó moral, sea ésta de la jerarquía que fuere, sin la fuerza que los defienda contra los injustos ataques interiores y exteriores. Es, pues, deber de los miembros de la nación, deber de piedad patriótica, mantener la existencia, la integridad y el orden nacionales por el medio conducente, que es el servicio armado. Este, en condiciones normales, ha de prestarse por los nacionales mismos, y no por mercenarios extranjeros, que solo sirven por la paga, tienen menos interés moral en la defensa de la nación y hasta pueden constituir un peligro para ella.

De que, en abstracto, sea el servicio militar obligación de cuantos hombres estén en disposición de prestarlo, no se sigue que *in actu* deban prestarlo todos, porque generalmente, y en un regular estado de orden moral de las naciones, así en el interior, como en sus relaciones con las otras, no es necesaria tanta fuerza armada, y no siendo necesaria, es injusta, por atentatorio al derecho de los individuos y al interés mismo de la nación, en varios respectos, exigir y mantener esa sobrada milicia: al derecho de los individuos, porque se les compele contra su voluntad y vocación, sin utilidad para el Estado, á una ocupación de suyo dura y hasta aflictiva, con menoscabo, cuando menos, de las ocupaciones y negocios de cada cual: al interés del Estado, porque, sin necesidad ni provecho para él, se ve en la precisión de dispendios perjudiciales, irrogándosele además á él y á la nación el daño de sustraer á otros oficios, y en particular á las industrias, con grave quebranto de la pública riqueza, tiempo, trabajo, capital y celo productores. El llamado servicio general obligatorio, ó sea la condición y el estado militares de toda la población masculina disponible para prestar el servicio en distintos grados, períodos y situaciones, es una dolorosa y desgraciada *hipótesis*, pasajera y puesta por la defensa nacional proporcionada é indispensable, como sucede hoy á las Repúblicas sudafricanas de los boers; pero que, como estado permanente y habitual, arguye un lastimoso conjunto de circunstancias antijurídicas, un desorden moral y social en las relaciones inter-

nacionales, y hasta en las interiores, que fuerza á tener la nación armada, para invadir ó repeler á los pueblos vecinos, y aun, lo que es peor, para convertir al ejército, que solo en situaciones excepcionales debe ser instituto policiaco, en factor y gendarme de seguridad y vigilancia del orden público.

En situaciones normales, y á medida que adelantara el progreso cristiano, en la misma proporción debiera disminuir la milicia, así de policía como de ejército; y cuanto más se acercara la institución al ideal de la fuerza pública, lo más reducida posible, más fácil sería convertir la función militar en profesión, así para los grados jerárquicos de la milicia, como para la clase de tropa. Entonces serían el servicio y la recluta voluntarios en todo ó en máxima parte, con las ventajas que este sistema supone, para el mejor cumplimiento de un deber convertido en decoroso y noble oficio regularmente retribuido, para la dignificación del ejército, mediante el espíritu militar común al general y al soldado, por el estímulo, fomento y desarrollo del valor, del honor, y, en general, de todas las virtudes de la milicia. Y esta organización no sería obstáculo alguno para que en caso extraordinario pudiera armarse toda ó una buena parte de la nación, la cual, siendo virtuosa, es, en el mismo grado, guerrera y susceptible de rápida formación y organización militares dentro de los cuadros de un ejército que, sin ser numeroso, esté sólidamente constituido.

Solo, por falta ó deficiencia del reclutamiento voluntario, habrá que acudir al forzoso, en la proporción necesaria, con arreglo á un criterio de igualdad entre todos los nacionales aptos, designándose, generalmente por medio del sorteo, quienes han de convertir en actual la obligación potencial del servicio, lo cual no obsta ni á la sustitución personal del quinto, ni á la redención á metálico. Y no es ni una ni otra un privilegio de los ricos ó acomodados, sino una consecuencia de su posición, que de ninguna manera daña, antes conviene al interés nacional: la sustitución, porque, bien sea gratuita, ora retribuida, lleva á las filas á una persona mejor dispuesta y

apta para la ruda vida del soldado, proporcionando casi siempre á un pobre una colocación que apenas le es aflictiva, y el beneficio de la suma que, por servir en lugar de otro, recibe; la redención, porque es una compensación real del concurso personal, y que sirve, ó para reclutar voluntarios, ó para las varias atenciones, no exiguas, del correspondiente capítulo del presupuesto.

En todo el anterior razonamiento viene incluido el principio y doctrina del ejército permanente, ahora imprescindible desde que la guerra dejó de ser desordenada acometida, y se convirtió en arte técnico de lucha, habilmente dispuesta, primero según las luces de una estrategia natural, y después según reglas reflexivamente preconcebidas y científicamente aplicadas. Por esto, si en un principio el ciudadano es el soldado, y el magistrado civil el jefe, y solo cuando se necesitan, en caso de guerra, bien pronto, y en cuanto la Ciudad-Estado adquiere proporciones de nación regularmente desarrollada, y quiere influir en otros pueblos, y engrandecerse á su costa, el servicio intermitente se convierte en continuo, y se distinguen y separan las funciones y ocupaciones pacíficas, de la preparación y disposición siempre apercebidas para el ejercicio militar. Sustitúyese entonces á la masa de ciudadanos guerreros los soldados, en el estricto sentido y primitiva significación de la palabra, esto es, los asalariados por razón de este trabajo y oficio de milicia, ó los que, sin ser retribuidos, reciben aquel nombre por traslación y extensión de él, en cuanto desempeñan la misma función, aunque procedan de reclutamiento forzoso en las poblaciones vencidas, ó las confederadas y aliadas proporcionen la máxima parte del contingente armado, en virtud de pacto, dispuesto mañosamente para que sobre ellas recaiga el mayor peso del tributo de sangre.

Con el Imperio romano cayó también, como otras muchas instituciones, el servicio militar permanente, porque de tal manera les repugnaba á la incultura y al *individualismo* de los bárbaros invasores y dominadores, que tuvieron que pasar muchos siglos hasta que el servicio militar dejara de ser una

función feudal, esto es, convenida, en su mayor parte, entre el soberano y las dos fuerzas sociales: la aristocracia y el pueblo. Refiriéndonos á España, (porque más nos interesa, y porque, sobre poco más ó menos, aconteció lo mismo en todas las naciones medioevales), apenas quedó de la ley militar gótica más que el recuerdo, el modelo y la traza del servicio momentáneo y pasajero; más allá de esa general obligación, había que convenirlo, incluyéndolo en la fidelidad propia del vasallaje de los nobles, ó en las condiciones de la carta-puebla y el fuero otorgado á la gente pechera. Aparte de esto, y fuera de los casos en que se convocaba á la hueste, el rey tenía que proveer, al mismo tiempo que á su seguridad personal, á la necesidad de una fuerza coactiva necesaria á las reducidas funciones del central gobierno, con una reducida guardia asalariada en forma feudal, ó retribuida al uso de cualquiera otra recluta mercenaria.

El ejército permanente empezó cuando la moderna Edad, como producto y efecto de la variedad de circunstancias coetáneas y características de aquélla; son á saber: las definitivas determinación, consolidación y grandeza de las nacionalidades, la amplitud de las relaciones internacionales, más belicosas que pacíficas, el recíproco influjo y el poderío y la hegemonía disputados por las naciones más fuertes, la reivindicación, lograda por el poder real, de las atribuciones esenciales y tutelares del Estado, y la detentación de otras que acaso no le correspondieran. Para todo ello se necesitaba una fuerza permanente más numerosa que aquella guardia real, sobre cuya base, cada vez más ampliada, se fué formando el ejército, para el cual casi bastó al principio la recluta voluntaria, necesitándose luego, á medida que la vida y las costumbres se fueron haciendo más civiles y aun cómodas y sensuales, el reclutamiento obligatorio, ora como servicio arrancado á la población sierva, verbigracia en los estados alemanes, especialmente en los pequeños, ora en calidad de deber nacional, concretado por la suerte en una proporción determinada, correspondiente al número y densidad de la población (quinta).

A las correspondientes secciones del Derecho público pertenece estudiar que fuerza pública, y para que funciones de coacción y poder físico, debe correr á cargo respectivamente del concejo, provincia y región. De esas materias de consideración prévia, según un concepto mejor determinado y definido del Derecho público, y de la distribución de su objeto en los cursos indispensables en la Facultad de Derecho, se vendría deduciendo qué clase de fuerza pública corresponde, como nacional, al Estado, y cuales serían sus atenciones internas é internacionales; y se concluiría que el ejército sólo debe ser fuerza policiaca supletoria en excepcionales y anormales circunstancias, que hoy se van convirtiendo en habituales por las causas antes indicadas. Igualmente se habría ido desarrollando y demostrando en lugares oportunos como de la autarquía de las sociedades públicas inferiores se desprende la consecuencia de que, con arreglo á bases orgánicas generales, igualmente inspiradas en el procomún que en la libertad de los ciudadanos y colectividades, cada concejo, provincia y región deben proporcionar su contingente de la manera que les sea más agradable y menos vejatoria, mas conforme á su tradición y usos, siempre que no se atente á los fueros de la persona ni al interés nacional.


Conviene también, en todo tiempo, que el soberano cuente con la riqueza propia para mantener su posición y rango, de modo que no dependa de la sociedad, y no la sea de ningún modo gravoso, ó lo menos posible. La soberanía, por su misma alteza y fines, y para su mayor prestigio, mejor es que sea función gratuita, á fin de que ni siquiera por el concepto de retribución, esté supeditado el supremo imperante á la nación á que gobierna. Pero en los comienzos y atraso de la existencia nacional, cuando la riqueza pública aún no se ha desarrollado, y de la general escasez se resienten todas las clases, incluso el soberano mismo, tenía la sociedad que acudir al decoroso sustento de aquél, lo cual no repugna á la justicia en caso, época ni pueblo alguno, ni aun en la edad presente, por razón de circunstancias extraordinarias que hubieran afli-

gido por igual á la nación y á sus gobernantes legítimos, y de trastornos y revoluciones que hayan afectado á la organización de la sociedad civil y de la propiedad pública y privada.

A la riqueza del soberano han provisto la tradición y la historia con tanta suavidad, oportunidad y eficacia como á las demás necesidades sociales, acrecentando con el aluvión de los siglos el patrimonio de la familia y el de la Corona, de suerte que éste principalmente sea el que se aplique al mantenimiento y lustre de ella, sin menoscabo, ó insignificante, de la fortuna privada del rey. En la Edad media la forma retributiva de la función soberana fué feudal, por tránsito en las naciones latinas, (nos referimos especialmente á España), del principio socialista romano, que consideraba al imperante *dominus rerum*, y no distinguía entre la propiedad pública y la personal del César, á un forzoso sistema de división del dominio en directo y útil, en que el rey mantenía el primero, y concedía el segundo á señores ó á concejos. Este fenómeno, que en España no se pronunció, arraigó y generalizó hasta que la invasión y conquista agarenas pusieron á la Península en situación análoga á la de toda Europa con la irrupción y dominación de los bárbaros, dejó al rey en posesión, más que de bienes alodiales, de una considerable porción de censos, digámoslo así, que tales eran la *infurción* ó *pecho*, con distintos nombres y en varios conceptos pagados por los pueblos, en virtud de lo convenido con el rey en la carta-puebla, verdadero contrato feudal de población, de sumisión y de prestaciones á la Corona, solo diferente del de señorial vasallaje en que el noble estaba inmune de tributo, y muy rara vez, y solo en circunstancias extraordinarias y solemnes, contribuía al señor.

Lo mismo el dominio familiar del rey que el Real Patrimonio estuvieron defendidos, el primero, por su cuantía, y el segundo, por ésta, no menos que por la institución vincular, con que también podía el Rey preservar á su fortuna privada de la parcelación de sucesivas divisiones hereditarias, y del precario estado consiguiente. Pero desvinculada toda la pro-

piedad, y reducido cada vez más el Real Patrimonio, no solo á causa de las donaciones que en anteriores siglos hicieron los reyes, menos por liberalidad indiscreta que por necesidad apremiante, sino con las mermas que *legalmente* sufrió en la presente centuria, hubo que acudir al actual sistema del sueldo anual del soberano, *ó lista civil*. Este sistema, ya que no derive de la esencia misma del moderno régimen constitucional, es más conforme con su índole y con la posición, significación y autoridad que tiene dentro de él la jefatura del Estado; lo cual no quiere decir que, dadas la naturaleza de la soberanía y la imposibilidad de dedicarse á otro trabajo y función que la del gobierno, no deba proveer la nación, por varios modos que no hemos de determinar aquí, á sostener un real patrimonio suficiente y aun cuantioso, y á suplir, cuando menos, las menguas y quebrantos de la propiedad particular del soberano.



CAPÍTULO IV

DEL ORIGEN DE LA SOBERANÍA. —CAUSA PRIMERA Y CAUSA Ó CAUSAS PRÓXIMAS DE ELLA.—TEORÍA ESCOLÁSTICA DEL CONSENTIMIENTO, COMO DETERMINACIÓN Ó CONCRECIÓN DEL PODER CIVIL.

1. Estudiados la naturaleza y fundamento de la soberanía y las leyes de su concreción, procede examinar ahora su origen, ó sea, el principio de su existencia. El cual puede ser considerado, ora en la causa primera, ora en la causa segunda, ó segundas próximas, que concretan, esto es, determinan la soberanía en una persona física ó moral, si es que es indiferente que un individuo ó una colectividad ejerzan el poder supremo.

A origen de la soberanía en la primera causa de ella equivalen también otros términos y locuciones corrientes, de uso y abolengo respetables, tales son los de *primer principio*, *principio inmediato* de la autoridad, del poder civil, que así es denominada por antonomasia la autoridad temporal superior á todas las otras. El término *primer principio*, aunque no del mejor gusto, por ser frase innecesariamente pleonástica, es exacto y claro; pero no así el de *principio inmediato*, que también puede aplicarse á la causa próxima, en cuanto entre ella y el efecto, la concreción de la soberanía, no hay

hecho intermedio, porque entonces sería él la verdadera causa próxima. Tampoco se concibe entre la causa primera y los seres, propiedades y leyes que crea, y de aquí que también sea principio inmediato de ellos; pero este doble sentido de la locución hace que sea anfibológica y no exprese clara y precisamente, antes de alguna explicación, la materia de que se trata.

Causa primera de la soberanía es Dios que, en cuanto autor de la sociedad civil, lo es también de todas sus propiedades, atributos y condiciones, y, por consiguiente, de la autoridad que es uno de ellos. No se hace aquí otra cosa que exponer el inmediato corolario jurídico de otras doctrinas antecedentes y fundamentales de la religión y de la filosofía cristiana: Dios, creador de todos los seres, lo es también de sus propiedades y leyes; Dios, creador del hombre, lo es de su natural medio, la sociedad y de cuanto ella contiene, supone, necesita y exige, esto es, de la sociedad y de la autoridad, de la sociedad más perfecta, la nación, y de su autoridad, la soberanía. El derecho político tiene que limitarse á extraer la doctrina más inmediata de cualquiera teísmo que afirme las verdades de un Dios personal que dió el ser á los seres que no lo tenían, y, con el ser, todas sus propiedades y las leyes según las cuales habían de ordenarse á sus respectivos fines. La soberanía es de *derecho divino natural*, ó lo que es lo mismo, de derecho que deriva necesaria é inmediatamente de la naturaleza misma de la sociedad, cuyo autor es Dios, siendo divina en este respecto, y natural en el otro, ó sea, en cuanto á la procedencia directa de la naturaleza individual y social del hombre.

En frente de esta doctrina del origen inmediato divino de la autoridad, no por institución directa de Dios, (porque entonces sería de derecho divino positivo), sino en cuanto Dios es autor del hombre, de la sociedad y de su propiedad consiguiente, la autoridad, sostiene el naturalismo jurídico, ó sea el liberalismo, la contraria doctrina lógicamente derivada del naturalismo filosófico, que, no admitiendo la existencia de un Dios personal, creador, rechaza también que sea la autoridad obra de Dios. Ni ésta ni la sociedad, ni institución alguna pueden tener, en tal supuesto, más origen que el humano, porque siendo el hombre el ser superior de la naturaleza, no es posible concebir otro autor de las instituciones y de las leyes que la humana razón que las concibe, y la humana voluntad que las acuerda y establece.

Ahora bien, si la procedencia inmediatamente divina de la autoridad soberana, lo mismo que de la patria, y ambas por ministerio de la naturaleza, obra de Dios, es una verdad apoyada en motivos de certeza natural y sobrenatural, la opuesta afirmación del liberalismo es, por idénticos motivos, y *á contrario*, errónea, sin que proceda aquí la prueba de aquella verdad y de este error, como quiera que son una y otro, corolarios de verdades capitales correspondientes á otras disciplinas. En ésta, como en las demás manifestaciones del liberalismo, la refutación está de antemano hecha allí donde la Teología y la Filosofía afirman y evidencian la existencia de un Dios personal, creador y providente, autor y sostenedor de los seres, de sus propiedades y estados, y de las leyes consiguientes según las cua-

les aquellos se ordenan á sus varios fines, dependientes del último y á él subordinados y enderezados. Solo el ateismo puede negar el divino origen de la soberanía en Dios, como causa primera, y de aquí el que el error del origen exclusivamente humano de aquélla no puede menos de ser, por lo capital y trascendental, también herejía, por manifestación fundamental é inmediata del liberalismo, ó *sea del origen exclusivamente humano del derecho*. La Iglesia la ha definido y condenado cuantas veces haya enseñado la verdad contraria, ó referidóse directa ó indirecta, implícita ó explícitamente á este error, y, no hace mucho, por la palabra infalible de León XIII en la Encíclica *Diuturnum*.

2. Si la soberanía, en general y en abstracto, no ésta ni la otra soberanía, es de *derecho divino natural*, síguese que no es de *derecho divino positivo*, es decir, no es instituída por acto é intervención personales de Dios, como causa próxima de la institución soberana, y, mucho menos, de la designación del soberano mismo. Esta acción preternatural de Dios en la creación de la autoridad civil y en la determinación del sujeto que la posea y ejerza es contraria a) á la experiencia histórica que, con crítica apoyada en motivos naturales y sobrenaturales de evidencia y certidumbre, enseña que solo en la antigua ley que precedió á la de gracia, y en el pueblo depositario de las tradiciones y promesas divinas, intervino Dios repetidas veces, preter y sobrenaturalmente en la vida, en la historia y en el gobierno, de diversas maneras, y hasta designando y ungiendo á sus gobernantes; y luego, después del advenimiento de Je-

sucristo, fundó el Verbo Eterno su Iglesia santa, y además de las instituciones necesarias al régimen y gobierno de ella, designó la persona del supremo Jefe y las de los primeros sacerdotes, los Apóstoles, elegidos por el mismo Hijo de Dios. Esta misma experiencia nos muestra que las demás sociedades, así privadas como públicas, y sus autoridades, deben su origen á hechos naturales y actos humanos, con más ó menos participación directa é indirecta de la voluntad y libre consentimiento de los hombres; *b)* al propósito y al orden con que Dios, después de crear los seres y á la primera pareja y sociedad humana, mantiene la creación moral y física mediante la acción y concurso de las causas segundas, y, por regla general, sin otra acción é intervención divinas que la que contiene y supone la providencia; *c)* con la institución divina no se explica ni se concilia la variedad de formas de gobierno, ni la imperfección del organismo gubernamental en las sociedades civiles, porque Dios las habría dotado de autoridades y poderes de igual bondad y eficacia naturales, para el cumplimiento de los deberes y la realización de los fines encomendados á la soberanía, sin que en el comienzo de la existencia y actuación de la sociedad y de la autoridad correspondiente se notaran los defectos y vicios inherentes á las obras y actos humanos; *d)* y si además de la soberanía, se considerara de divina institución la persona del imperante, á la manera de la designación de los Apóstoles para el sacerdocio, y la de Pedro para el Primado Pontificio, entonces: *a')* se sustituiría, en este respecto y relación jurídica, á la acción y orden naturales, la preternatural y sobrenatural del

milagro; y b") no solo no se explicaría la existencia de protervos, tiranos y crueles gobernantes, sino que se haría grave injuria á la sabiduría y bondad de Dios, atribuyéndole la institución de tales soberanos, con lo cual se le suponía autor directo del mal, como por capricho ó gusto de hacerlo, (notoria y horrible blasfemia).

Se concibe que la doctrina contraria del origen de la soberanía mediante divina institución personal, ó sea la teoría de la autoridad civil de *derecho divino positivo*, importe principalmente, no tanto á los que han querido así elevar y sublimar el poder soberano, el poder real especialmente, como á los que se han propuesto equipararle, en lo posible, al poder eclesiástico, al Primado pontificio en particular, con el dañado propósito de sustituir la autoridad del Estado á la autoridad de la Iglesia, y los derechos y prerogativas del soberano temporal á los del Papa; ó si no esto, cuando menos acrecentar indebidamente las regalías de la potestad secular con merma y menoscabo de la espiritual del Vicario de Jesucristo. De aquí el que hayan sustentado esta errónea doctrina, ante todo y sobre todo, el protestantismo anglicano, y antes y después de él muchos autores y príncipes regalistas, así en el período de las luchas entre el Sacerdocio y el Imperio, como de las que sostuvieron después la Iglesia y el Estado, ó, por mejor decir, éste contra aquélla; bien que el regalismo moderno y especialmente el contemporáneo prescindan de estos fundamentos y títulos teológicos, para buscar y reforzar otros ó meramente naturales, ó naturalistas, esto es, los del liberalismo.

3. Si la divina institución no es la causa próxima, el origen inmediato, el hecho de la concreción ó determinación de la soberanía en una persona, y, por consiguiente, el título de la posesión y ejercicio de la autoridad civil ¿cuales son entonces? ¿de dónde procede? ¿cual ó cuales son los hechos á que el poder soberano debe el principio de su existencia y actuación en su natural sujeto, en un individuo ó en una colectividad?

La pura y clásica doctrina ortodoxa está conforme en cuanto al origen de la soberanía en Dios como primer principio, causa primera de ella, y, por lo tanto, en suponer de *derecho de gentes*, de *derecho natural mediato*, la determinación del poder en todas y cada una de las naciones; la discrepancia entre los autores católicos y rigurosamente escolásticos empieza cuando se trata de determinar el hecho ó hechos que originan la soberanía y, con él ó ellos, el título de ésta, ó sea la razón jurídica de su posesión y ejercicio.

La mayor parte, y acaso la más autorizada de los tratadistas, en razón de su mérito y fama, y de la no interrumpida continuidad con que, desde remota fecha, se ha profesado la doctrina, conviene en que es el *consentimiento libre de la comunidad, esto es, de la nación, manifestado expresa ó tácita, implícita ó explícitamente el que origina la autoridad ó poder civil (soberanía) en la persona física ó moral, que por traslación lo recibe*. No hay, pues, según ellos, más que un hecho, y por ende un título y un modo de soberanía legítimamente concretada: el *consentimiento traslaticio*, ó la *traslación consentida*, es igual, de la soberanía desde la comunidad á la persona á quien se lo trasfiere.

Los fundamentos de esta doctrina, cuya elaboración, en general, y en cada uno de los autores en particular, no se puede, ni es oportuno desenvolver en este tratado, son las dos suposiciones siguientes: 1.^a que no hay término medio entre la soberanía de divina personal institución y de consentida traslación humana; 2.^a que no hay razón para que una persona física ó moral (rey, aristocracia...) posea y ejerza, con preferencia á otras, el poder soberano. De aquí el que la soberanía inherente á la nación, y de que Dios es autor, como de la sociedad civil ó nacional, resida *radicaliter*, *formaliter* y *virtualiter* en la colectividad misma, que es el natural sujeto del poder supremo, y que nadie pueda tenerlo ni ejercitarlo sino en virtud del *consentimiento* social, que lo traslada á un imperante ó á varios. En suma, la soberanía, por *derecho divino natural*, está en la colectividad; y, por *derecho de gentes*, ó sea *natural mediato*, en una monarquía ó poliarquía, que la reciben en virtud y por el título de un solo y único hecho, el consentimiento que se la trasfiere ó traslada.

4. Esta doctrina, á pesar de su tradición de remota antigüedad cristiana, y del respeto y reverencia que sus autores merecen, (lo cual obliga á considerarla y juzgarla con detenimiento y á desconfiar de la contraria), parece falsa, y coincide tal juicio con el de autores, también graves y doctos, entre los cuales figura el P. T. Meyer, cuya opinión es la más reciente que puedo aducir cuando esto escribo.

Recuérdese, ante todo, como fundamento y punto de partida, lo expuesto acerca de la inelegibilidad na-

tural de la soberanía y de la natural consecuencia de ser la elección, esto es, el verdadero propio y riguroso consentimiento libre y previo, solo forma y medio accidentales, anormales y extraordinarios de originar y concretar el poder civil, que es, *per se*, inelegible, aunque, *per accidens*, sea alguna vez elegido. Todo lo expuesto entonces es base, indicación y guía de la crítica correspondiente á esta materia, y ella á su vez, confirmación y desarrollo de aquella ley de concreción de la soberanía.

No puede decirse que sea la comunidad el sujeto de la soberanía, al cual Dios, autor de la sociedad y de su forma, comunica directamente el poder; porque, para que éste residiera en la colectividad, recibéndolo por *derecho divino natural* de Dios, causa primera del ser social y de las propiedades consiguientes, era preciso que todas las personas tuvieran la soberanía como derecho nativo, error sustentado por Rousseau, pero de ninguna manera por los autores escolásticos. Y si no se puede decir que sea sujeto de la autoridad civil la comunidad, porque esto solo pudiera afirmarse cuando la soberanía fuese necesidad racional, y, por lo tanto, deber y derecho de todos los asociados, habrá que concluir, *á contrario*, que la soberanía es derecho adventicio de los capaces de ejercerla, los cuales tendrán, por razón de capacidad, título á que se concrete en ellos la soberanía, y no por traslación de quien, no teniendo autoridad, no puede trasferirla. Ni Dios, por derecho divino natural, la comunica, á quien naturalmente no puede ser sujeto de ella, ni quien no tiene ese derecho puede cederlo á otro: *nemo dat quod non habet*.

Pero entonces no se puede hablar de que sea la comunidad, sino alguno ó algunos de la comunidad, el sujeto de la soberanía.

Y entonces en los que, por razón y título de la capacidad de que en el anterior capítulo se ha tratado, son sujetos potenciales de la autoridad civil, debe concretarse y tenderá á concretarse ésta, fuera y aparte de toda traslación de la sociedad, debiendo ser el consentimiento de ésta consentimiento debido y necesario, no libre, á la manera que tampoco lo es la conformidad y aquiescencia con que los hijos deben, (necesitan), consentir en la autoridad del padre; y el consentimiento así de los ciudadanos como de los hijos, súbditos unos y otros de las autoridades respectivas, es sinónimo de reconocimiento y acatamiento de ellas.

De donde se deduce una confirmación y prueba más de la doctrina expuesta en el capítulo precedente, de que todo lo más que puede concederse es que ese consentimiento sea el acto con que los inferiores, no trasladan el derecho que no tienen, sino que inquieren y buscan entre varios al que, por juzgar superior, quieren, porque deben, someterse, no discerniéndole la soberanía, antes sometiéndose á ella luego que juzgan haberla hallado.

Pero no es conforme al orden regular y providencial con que Dios dispone las cosas, á la acción, eficacia y enlace de las causas y al curso normal de los sucesos el que, por modo tan imperfecto, deficiente y peligroso, se concrete la soberanía, y tengan los inferiores, en todo caso, que indagar y proclamar quien es el soberano, en lugar de que los hechos vayan, á través de la historia,

determinando el sujeto del poder civil, y mostrando los títulos, cada vez más sólidos y fuertes con que tiene y ejerce la autoridad soberana; por el contrario, sólo en accidentales y excepcionales circunstancias dejará la naturaleza de ser tan patente y explícita como es preciso, y quedará la sociedad tan vacilante y confusa respecto de esta capital necesidad y primordial deber, teniendo entonces que ser la elección, no un acto de soberanía constituyente, en que una poliarquía numerosa mejorará la forma de gobierno, sino una efectiva designación del soberano verificada, nunca por todos los asociados, pero sí por más número de personas *sui juris* de las que son capaces de elegir (1).

La propia doctrina de los autores escolásticos que estamos examinando se refuta á sí misma a) cuando afirma, con la autoridad de sus dos tal vez más sabios mantenedores, *que no es necesario ni siquiera conveniente á la naturaleza, que la autoridad continúe inmutablemente en toda la comunidad, la cual apenas puede ejercer esa autoridad, mientras así permanezca, y no se le añada alguna determinación ó mutación* (P. Suárez); ó todavía más explícita y contradictoriamente sostiene que la

(1) Lo que más adelante se dirá del sufragio universal democrático, que de hecho, siempre resulta restringido, es aplicable á esta doctrina, bien que los fundamentos de ella sean tan distintos de los de la titulada soberanía del pueblo. Por mucho que la situación favorezca el sufragio ejercido por más gente de la que tiene aptitudes para elegir al soberano, siempre resultarán los menos electores, y por mucho que en sociedades atrasadas ó revueltas se ingiera la plebe en esta función electoral, la dirección é influjo de las clases superiores pondrán realmente la elección en sus manos y á su arbitrio. Si así sucede, hasta en épocas y naciones subvertidas por la revolución liberal, con más motivo en aquéllas en que las conmociones populares y la anarquía no proceden de esta permanente y dañada raíz.

traslación, que de la autoridad hace la sociedad civil, es por el *mismo derecho natural*; porque la república (nación) *no puede por sí misma ejercer esta potestad*; luego *no puede menos (tenetur) de transferirla en uno ó en pocos (in aliquem unum vel aliquos paucos)*; y de esta manera la potestad de los príncipes, considerada genéricamente, es también de derecho natural y divino; y no puede el género humano, aunque todo él lo conviniera simultáneamente, establecer lo contrario, esto es, que no hubiese príncipes ni gobernantes (Cardenal Bellarmino). Ahora bien, ¿qué derecho natural de la comunidad es ese que naturalmente no conviene que la comunidad tenga, ó que naturalmente de ninguna manera puede retener, y que, también por derecho natural, debe, (tenetur), transmitir? Bien se vé que en este raciocinio del ilustre purpurado el consentimiento es debido, pero entonces no hay traslación, porque ésta ó es voluntaria ó no existe; b) al reconocer los escolásticos otros hechos que, 'aparte del consentimiento previo expreso ó tácito, implícito ó explícito, sin él ó contra él, determinan la soberanía legítimamente, cosa incompatible con el libre consentimiento y la voluntaria transferencia como único título y modo de originarse mediatamente la autoridad civil, tal es el vencimiento de una nación por otra en guerra justa, y la sujeción consiguiente del vencido, ó la usucapion de la autoridad en favor del vencedor, aunque fuera injusta la guerra. Ya se verá que de la misma manera que éstos puede haber otros casos, y no de discutible legitimidad de origen, en los cuales, sin y contra el libre consentimiento, se determine y concrete la soberanía.

Esa traslación de la soberanía no se concibe como posible sin incurrir en el absurdo de la existencia de la sociedad sin la autoridad correspondiente. En efecto; la traslación supone la previa determinación del ser social *in actu primo et secundo*; y en el supuesto de esta doctrina escolástica, en que no hay autoridad civil hasta que la sociedad la trasfiere por libre consentimiento, antes existió la nación que su soberanía, la cual, como propiedad esencial y forma de la nación, necesita determinarse al mismo tiempo que ella, como le sucede á todo lo que está contenido en la esencia y naturaleza de los seres. El consentimiento libre de la autoridad implica una convención expresa ó tácita, que habría que hacer al mismo tiempo que se pactara la existencia nacional; es decir, esta teoría escolástica da en el error del pacto social, tan ageno al intento y á la general y fundamental doctrina de tan juiciosos, doctos y católicos autores.

Pero como una cosa es la intención del autor, y otra las exigencias y consecuencias lógicas de la doctrina, á la del pacto social conduce también la suposición de que no hay mayor motivo ni título para que un hombre ó colectividad, y no otros, tengan la soberanía. Si así fuera, sería por ser todos los hombres iguales é independientes, ó cuando menos los *sui juris y patres familias*, y no haber otro origen ni razón legales de entrar en relaciones de recíproca dependencia que el contrato de todos los hombres, ó por lo corto, el de los independientes en el orden y respecto domésticos, no pudiendo en uno y otro supuesto nacer la sociedad civil, sino por libre convenio ó de todos los hombres, ó de los emancipados.

Lejos de eso, la dependencia natural que en el seno de la familia tienen, por conceptos varios, los distintos miembros de ella, subordinados al jefe, prosigue, se acentúa y destaca á medida y en proporción que la sociedad doméstica se desarrolla y convierte en sociedad pública, sin que sean en ésta todos iguales, ni como hombres, ni siquiera como padres familias y personas *sui juris*. Antes al contrario, la misma dependencia en que, por hechos y títulos distintos, están unos hombres *sui juris* de otros en una sociedad pública, desarrollada y constituida, viene ya predeterminada desde la familia, y en ella, siendo la misma desigualdad natural doméstica, causa, origen y ocasión de las desigualdades luego más pronunciadas en la sociedad civil. En ésta, á su vez, se determinan y consolidan otras, en virtud de nuevos hechos, de complicado concurso sucesivo y simultáneo de causas físicas y morales, necesarias y libres. Sobre esto se insistirá en la lección inmediata.

Finalmente la trasferencia de la soberanía por la sociedad civil supone el derecho de lo que se trasfiere y, por lo tanto, la facultad de no transferirlo, ó de transferirlo con estas ó las otras condiciones, ó por determinado tiempo. Si la sociedad, en uso de este su derecho, no trasfiere la soberanía, resulta que, en el supuesto de que sea derecho nativo de todos, no hay sociedad civil posible, puesto que todos son independientes en el concepto de soberanos, y así, se incurre en la doctrina del estado presocial, al menos en lo que á la sociedad civil respecta; y, si se juzga que la soberanía es derecho adventicio de las personas *sui juris*, se viene á parar en que la forma natural de gobierno es una demo-

cracia, esto es, una poliarquía de *padres-familias*, poliarquía que, por el excesivo número de gobernantes, es imperfectísima forma de gobierno, y aun impracticable en sociedades civiles que no sean muy reducidas. En este último supuesto, y en el de la soberanía como derecho nativo de todos, se viene á parar al absurdo, que más adelante notaremos, de soberanía que no pueda en ningún caso ejercerse sino mediante representación de la totalidad de sus funciones, siendo así que la representación de toda la soberanía, lejos de ser de esencia de ella, es un accidente de la forma monárquica. La contradicción que encierra un derecho natural, que no puede retener nunca ni ejercer el sujeto natural de este derecho, queda señalada en la referencia hecha anteriormente á la doctrina de Belarmino, de la cual se vió que solo difiere la del P. Suárez en que la retención de la soberanía, que, para aquél, es imposible, para éste no es conveniente, y apenas puede ejercerse la autoridad mientras no se traslade.

Suponiendo que fuera la soberanía derecho nativo de toda la comunidad, en cuanto de todas y cada una de las personas componentes de ella, sería contra naturaleza la enagenación perpétua ó temporal de ese derecho, y dado caso que una generación lo trasfiriera, la traslación no obligaría á las siguientes, ni en su perjuicio adquirirían nunca la suprema autoridad ninguna monarquía ni poliarquía. Y en el otro supuesto de pertenecer el poder civil, no á toda la comunidad, sino á los independientes en el respecto doméstico, esto es, á los *sui juris*, también se daría la contradicción de que, siendo de derecho divino natural esta forma democrá-

tica, (de tan amplia democracia como la que supone la muchedumbre de padres-familias soberanos), se cambiaba para siempre, contra naturaleza, la forma natural y propia de la soberanía, ó, cuando menos, también sin razón, y hasta sin derecho, enagenaba temporalmente el poder civil la poliarquía democrática que debía mantenerlo. El dilema es claro y concluyente: si los padres de familia son los aptos, los capaces de ejercer la soberanía, es esta deber y derecho de ellos, y la comunidad poliárquica no puede ni debe trasferirlo; si lo trasfiere á otros, por más aptos, es que estos son los soberanos por derecho propio, y no por consentimiento ni transferencia, y que, por lo tanto, el cuerpo ó colectividad de *padres-familias* no puede jurídicamente tener ni ejercer la autoridad civil. Cuando en alguna ocasión anormal y excepcional designen el soberano, ni siquiera verifican el acto de una poliarquía que mejora su organismo, sin retener siquiera el poder constituyente, sino que indagan y buscan, en concepto de inferiores, la soberanía, mal determinada ó indeterminada, á causa de circunstancias desfavorables, de calamitosos accidentes y defectos históricos, á fin de reconocerla y acatarla, cuando la hayan encontrado, ó así lo entiendan.

5. No ha contribuido poco al error de que se viene haciendo examen y crítica la variedad de acepciones del término consentimiento, y la anfibología con que, por falta de previa aclaración, ó por conveniencias de la doctrina que se sustenta, se usa la palabra, sin las distinciones y aclaraciones convenientes. En su sentido más amplio consentimiento es volición, es acto

de la voluntad, no siempre libre, sino debido, como ya se ha insinuado en los números precedentes. Solo en esta acepción más extensa es como puede decirse que la autoridad civil se tiene y se ejercita con, y no sin el consentimiento, de la nación; y esto en la hipótesis de una sociedad regularmente ordenada y honesta, en que la mayoría de los súbditos estima y ama á la autoridad y acata y respeta en ella sus fines, fueros y oficios, aunque acaso no esté en las mismas disposiciones favorables respecto de la persona en que se concreta.

Otras veces, con el nombre de consentimiento tácito é implícito, que bien puede ser libre y anterior á las relaciones jurídicas que engendre, designan un consentimiento necesario y posterior, una aquiescencia y conformidad racionales y debidas con la posesión y ejercicio de soberanía por otros hechos y de otros modos concretada legítimamente, resultando esta confusión de palabras una contradicción efectiva de dos principios tan opuestos como el del origen de la autoridad por libre transferencia, y el de su determinación por títulos justos independientes del consentimiento social.

Finalmente, el hecho y derecho individuales de tener cada ciudadano *sui juris* libertad de pertenecer á esta ó la otra nación, cambiando la de su naturaleza por distinta sociedad civil, á que voluntariamente se agregue, y que, como adoptivamente, le acoja, conviértelo en el previo derecho de la comunidad de elegir á su soberano, trasladándole la originaria é inmediata soberanía social. La diversidad de casos y derechos es notoria; puesto que una cosa es la relación con una so-

ciudad civil existente, y otra muy distinta la supuesta facultad de dar existencia á la autoridad, determinando el sujeto y transfiriéndole los atributos y facultades de ella; y, por consiguiente, no puede ser previo derecho natural de la comunidad lo que es un derecho posterior de algunas personas, las *sui juris*, miembros ya de una nación existente y constituida.

4. La anfibología del término *principio inmediato* de la soberanía consiste en que su exactitud depende del punto de vista desde el cual se considere la causa de la autoridad civil. Si es desde la realidad actual de la sociedad y de su poder soberano ya constituidos, entonces el principio inmediato es la causa ó causas próximas que han determinado la soberanía en la sociedad nacional; mas, si, por el contrario, es desde el origen, para nosotros remoto, de la primera causa de todas las cosas y de sus leyes y propiedades, es esa causa el principio inmediato de la soberanía, en cuanto entre ella y su efecto no hay ser, actividad ni acción intermedias. De todos modos, las expresiones más exactas, porque no necesitan explicaciones ni distinciones, son las de causa primera y causa segunda ó próxima, que no dejan lugar á duda acerca de que origen ó principio de existencia de la soberanía se trata. Tampoco es, por ningún concepto, ambigua la locución, no tan corriente, pero exacta, de concreción ó determinación de la autoridad civil en un sujeto.

Ha llegado la ocasión de referirnos á una doctrina jurídica general, de aplicación amplísima, doctrina que conviene esclarecer, disipando, por medio de las convenientes distinciones, anfibologías en que no incurren los iniciados, aunque solo sea elementalmente, en el derecho cristiano, pero que son frecuentes en el vulgo, y á las cuales contribuyen la mediocre cultura, y la racionalista, por elevada y superior que sea. Todas las confusiones versan sobre el uso é inteligencia de los términos *derecho divino*, *derecho natural*, *derecho positivo*, *derecho de gentes* que tradicionalmente vienen usando los tratadistas escolásticos, sin haberlos siempre definido, ora por falta de ocasión, ora porque del contexto se deduzca la significación y alcance de ellos y no juzgaron necesaria la definición.

En cualquiera concepción teísta, que no sea la del deísmo, todo derecho y todo el derecho son divinos, en cuanto Dios es su primera causa, y no puede concebirse orden moral y jurídico que no proceda del Dios creador, que al dar el ser á las cosas, las dispuso á sus respectivos fines según leyes conformes á la naturaleza de aquéllas. En este último respecto todo el derecho y todo derecho son naturales por propios y adecuados á la naturaleza del hombre cuyos son, resultando, en tales concepto y fase, *simpliciter convertibles* el derecho divino y el natural.

Pero, por antonomasia, y en sentido estricto, se llama derecho divino, al derecho que pudiéramos en cierto modo llamar más divino en cuanto establecido directa y personalmente por Dios, como causa próxima, y no en cuanto autor de la naturaleza, de sus inmediatas propiedades y de sus respectivos órdenes y leyes, esto es, como causa primera y remota. A su vez, antonomásticamente, y en acepción propia, se llama derecho natural al derecho, en cuanto Dios no es autor próximo, preter y sobrenaturalmente autor de él, sino únicamente como causa primera, y por el concurso de los hechos y de las causas segundas, justificándose esta acepción antonomástica, a) por ser conforme á la naturaleza del hom-

bre; *b*) por no proceder, después de la creación, de acción ó preternatural ó sobrenatural de Dios; *c*) por no conocerlo el hombre mediante revelación ó manifestación directa de Dios, sino discurriendo, ejercitando con la función intelectual del raciocinio una de las potencias específicas de la naturaleza humana.

También en cierta manera todo derecho es positivo, como establecido directa ó indirecta, natural ó personalmente por Dios; porque *positum* (de *pono*) significa también *instituido* de cualquier modo, ora por Dios, ora por el hombre; pero antonomásticamente también se dice derecho positivo al divino en estricto sentido, esto es, al puesto, promulgado directa y personalmente por Dios, como causa próxima de la institución jurídica. Y para mayor claridad y evitar confusiones, no suelen los tratadistas conformarse con el término *derecho divino* sino que añaden *positivo*.

Y no solo por esto, sino porque á un orden y clase de derecho natural llaman también divino, no en el sentido estricto, ni en el amplio en que lo es todo derecho y el derecho, sino en una acepción intermedia, en cuanto sin ser directa y personalmente divino, es más divino en cierto modo que todo el restante. Así *derecho divino natural* es el derecho natural, en cuanto es del ser y de aquello que necesariamente encierra y supone la naturaleza del ser, no de lo que de ella deriva por actos contingentes y algún género de intervención y arbitrio humanos. La misma distinción que entre los derechos naturales (nativos) y los adventicios es la que existe entre el derecho divino natural y todo el restante derecho, que solo es una y otra cosa en el amplio sentido expuesto anteriormente (I).

(1) Meyer (tomo segundo, pág. 346 y 347, obra cit.) así lo define y distingue del natural positivo humano: «*Quippe juris divini naturalis nomine in sensu scholae ea sola censentur, quae naturam per se necessario consequuntur, et ideo ab ipso auctore naturae immediate constituta sunt, ut, v. g. auctoritas parentalis in familia. Juris autem humani esse dicitur*

Al que no es natural y divino en las más restrictas acepciones explicadas se le designa por algunos autores con el nombre de humano, por razón de referirse á situaciones y hechos contingentes en que tiene más ó menos intervención é influjo el acto humano, según puede verse en la definición de Meyer que se transcribe en la nota, significando en ella la palabra *consilii* tanto como parecer, y, aun más ampliamente, la acción derivada de la humana voluntad. En este derecho humano hay que apreciar varios grados, según que se acerca más ó menos á aquel derecho que procede necesariamente de la naturaleza, y que se ha denominado *divino natural*, y según que en los hechos, que han determinado su aplicación y vigor, tiene más ó menos parte el *humanum consilium*; y así al grado más inmediato del derecho *divino natural*, en cuanto, por más conforme á la naturaleza, es común á todas ó casi todas las gentes, se le denominó desde antiguo derecho de gentes, a) no solo por razón de esta conformidad, constancia y comunidad á la máxima parte de las naciones que alcanzan cierto nivel de cultura, sino b) porque, ya que la razón individual no lo descubra siempre fácilmente, la razón social colectiva, por el concurso de sus varios órganos, lo penetra casi con la misma facilidad que cada persona física los primeros principios de la ley natural. Este carácter de su asequibilidad á la razón común de la sociedad civil es el que expresó, tanto como el otro de la general aplicación, Justiniano definiendo en las *Instituciones* el derecho de gentes: *quod naturalis ratio inter omnes homines constituit* (1).

«quidquid et quatenus non immediate vi naturae viget, sed ad suum determinatum vigorem aliquo interventu humani consilii indiget, atque ita aliquo modo ab humana auctoritate tamquam proximo suo fonte emanat vel constituitur, tametsi forte idem in jure naturae fundatum et in suo genere præceptum intelligatur».

(1) Hay que confesar que la denominación de *derecho humano* al que no es *natural divino*, puede originar ciertas confusiones, porque en sentido más restricto, y con uso más general, se llama humano, no á este *mediatamente natural*, sino al positivo establecido por el hombre en la ley consue-

Ahora ya se comprenderá lo que significa, y el alcance que tiene la afirmación de que la autoridad civil, la soberanía es de *derecho divino natural*, y el valor de las sagradas expresiones «*omnis potestas á Deo*», «*non est potestas nisi á Deo*» y otras parecidas; y qué relación hay entre esta doctrina y la de la teocracia, que, como en otro lugar veremos, solo en muy amplio y general sentido puede identificarse con la teoría del divino origen de la soberanía en Dios, causa primera de ella, no en las acepciones más restrictas y propias de aquel término.

También se comprende la oposición y animadversión del liberalismo á esta deducción lógica de cualquiera doctrina teísta, y como es en el muy natural que la moteje de teocrática en el amplio y fundamental sentido del término, puesto que, para el naturalismo y ateísmo, es teocracia cualquiera género de acción divina de un Dios personal.

Lo es igualmente para el racionalismo y liberalismo deístas que ya hemos visto como, de hecho, para el efecto de la acción é intervención de Dios en el mundo, y las consecuencias de ella en el orden físico y en el moral, se identifican con el ateísmo, tanto en la opinión de la indocta masa actual de los políticos *teóricos* y prácticos, como en la de los deístas á lo Rousseau y á lo Kant, es decir, lo mismo entre los que no tienen doctrina filosófica ni jurídica alguna, como en los que fueron deístas por deficiencia de cultura en la Metafísica y en el

tudinaria ó escrita, deduciendo y determinando los preceptos del derecho natural. Por eso al humano, de que venimos hablando, le estaría mejor el nombre de *mediatamente natural*, *natural adventicio*, *natural derivado*, ú otro así. En cambio, el término *derecho de gentes* es de suyo bastante expresivo, sin que pueda confundírsele con el internacional ó *inter gentes*, puesto que el uno es ese derecho *mediatamente natural*, que la naturaleza y la razón han generalizado en casi todas las sociedades, mientras que el otro es el derecho de relación entre los Estados, y el cual comprende, no solo las instituciones más naturales y asequibles al conocimiento social, sino también todas las otras, aun menos cercanas á la naturaleza, y no tan fácilmente cognoscibles.

Derecho (Rousseau), ó resultaron tales por extravío inicial y sucesivo de una lucubración íntegra y seria (Kant).

Por esto, tienen mucha razón los tratadistas católicos en imputar la doctrina contraria al divino origen de la autoridad á Rousseau, que fué el patriarca del liberalismo, aunque no fuera lógica y sistemáticamente ateo, como no podía serlo un hombre que, aparte de su gran talento y de los encantos de su estilo, estaba, por lo menguado y flaco de la fundamentación y lo superficial de la cultura, al mismo nivel de los que en libros, revistas y periódicos, parlamentos, cátedras, ateos, etc., truenan contra la teocracia y el derecho divino (1).

La heregía contenida en la afirmación del origen exclusivamente humano del Derecho tiene el mismo fundamento y trascendencia que cualquiera otra que niegue el divino origen de los seres, de sus propiedades y leyes; implica un liberalismo fundamental y radical que el Soberano Pontífice León XIII en la Encíclica expresada (29 de junio de 1891) severamente señaló y condenó como error perniciosísimo de los *filósofos* del siglo anterior, de los cuales, (dice) «vero dissentiunt catholici homines qui jus imperandi á Deo repetunt velut á naturali

(1) Al ateísmo llamado especulativo, esto es, al que no procede de la ciega y brutal negación, forjada y condensada al calor de la concupiscencia y de las malas pasiones, se llega por caminos que no habían recorrido Rousseau, ni la mayor parte de aquella generación de *apóstoles* y propagandistas de las *nuevas* ideas, gente de erudición á la violeta, recogida de segunda mano, en ese acervo común de ideas que descienden á las capas intermedias de los *intelectuales* de segunda fila, y que los prejuicios, la disposición hostil y el odio alteran y aderezan con gruesos sofismas, dándoles cierta traza de teorías y sistema. El ateísmo *por principios* deriva de las concepciones naturalistas del panteísmo ó del positivismo, y estaba tan lejos del programa de Rousseau, como de la mayor parte de los liberales deistas contemporáneos, muchos de los cuales se dicen y aun creen católicos y á quienes, para arrancarles la confesión del divino origen de la soberanía, bastan unas cuantas preguntas, á partir de la afirmación del Dios personal, obteniendo así el corolario, sin más trabajo y esfuerzo que un elemental y sencillo ejercicio de lógica y de sentido común, cuando no se interpongan la vanidad, el interés y otros desordenados afectos.

necessarioque principio.» En esta admirable encíclica acerca del gobierno cristiano, (De político principatu), se expone la doctrina del divino origen de la autoridad, aduciendo en pro de aquélla el testimonio de las Sagradas Letras y de los monumentos cristianos, y presentándola como la más conforme á la razón y á la salud de los príncipes y de los pueblos. A este documento pontificio remitimos al lector, que encontrará en él todos los sagrados textos de donde se deriva la ortodoxia de la presente teoría y la heterodoxia de la contraria (1).

2. Durante el reinado de Luis de Baviera (1314-1347), congregados los príncipes del Imperio, decretaron contra la autoridad pontificia: «Ad tantum malum evitandum declaramus quod imperialis dignitas et potestas est immediate á Deo solo», palabras ambiguas que lo mismo podían significar el divino origen de la autoridad en general, según se ha explicado en el anterior número, que la institución personal del imperio y su soberanía por derecho divino positivo. Mas parece que esto último; é, indudablemente, según el espíritu y propósito de la asamblea, los precedentes de ella y las circunstancias generales de aquel período y reinado, no podían tener otra sig-

(1) Tales son por el orden en que el Pontífice los cita: *Per me reges regnant... per me principes imperant et potentes decernunt justitiam* (Prov. VIII, 15, 16) *Præbete aures vos qui continetis nationes... quoniam data est á Deo potestas vobis et virtus ab Altissimo* (Sap. VI, 3, 4.) *In unamquamque gentem Deus præposuit rectorem* (Eccl. XVII, 14) *Potestatem adversus me nullam, nisi tibi datam esset desuper* (Joan. XIX, 11.) *Discamus quod dixit, quod et per Apostolum docuit, quia non est potestas nisi a Deo* (Tract. CXVI in Joan. n. 5.) *Non est potestas nisi á Deo... Princeps Dei minister est* (Ad Rom. XIII, 1, 4.) *Non tribuanus dandi regni et imperii potestatem, nisi vero Deo* (De Civ. Dei. lib. V. c. 21.) *Quod principatus sint et quod alii imperent, alii subjecti sint, neque omnia casu et temere ferantur... divinæ esse sapientiæ dico* (Joan Chrys; in epist. ad Rom. homil XXIII, n. 1) *Potestatem imperatoribus ac regibus cælitus datam fatemur* (S. Greg. Mag. Epist. lib. II, epist. 61) *Unus est legislator et iudex, qui potest perdere et liberare* (Jacob IV, 12) .. *A quo (Deo) omnis paternitas in cælis et in terra nominatur* (Ad Ephes. III, 15.)

nificación estas palabras, encaminadas á equiparar la autoridad del Emperador á la del Pontífice, cosa que importaba mucho á aquél y á los príncipes durante las luchas entre el Sacerdocio y el Imperio. Por supuesto, el intento era vano, pues aun concediéndoles que el Imperio y sus poderes fueran de divina institución como la Iglesia y el Primado pontificio, no se seguiría que tuvieran la misma jerarquía, derechos y atribuciones, y que el Estado imperial y su autoridad no estuvieran sometidas á la sociedad y potestad eclesiásticas, porque el que las instituciones sean de derecho divino positivo no quiere decir que sean iguales en naturaleza, fines, oficios y prerogativas, como no son en la jerarquía de orden iguales los presbíteros y diáconos á los obispos.

Igual pernicioso, pero más radical intento fué el de la secta anglicana, que ya en pleno cisma, trató de sustituir la autoridad pontificia del Primado por la del poder civil, erigido en supremo sacerdocio de esta iglesia sectaria y herética, que presumió conservar la jerarquía, después de negar el principio y la clave de ella, poniendo al rey en lugar del Papa. A este fin, Jacobo I de Inglaterra envió á todos los príncipes cristianos una que él se imaginó refutación de la doctrina de Belarmino, á que en el número 3 de este capítulo se hace referencia, así como á la réplica que felizmente provocó por parte del eximio P. Suárez.

3. Supusieron no todos, sino la mayor parte de los autores escolásticos, que entre la doctrina anglicana de la divina institución positiva de la autoridad real, (y, por consiguiente, de toda otra cualquiera autoridad civil) y la traslación que, por consentimiento, hace el pueblo, en el imperante ó imperantes, de la autoridad comunicada por Dios directamente á la comunidad, ó sea, por derecho divino natural, no había término medio, ó, lo que es lo mismo, hechos que, aparte ese consentimiento, sin él y contra él, concretaran ó determinarían legítimamente la soberanía en una persona física ó moral. De aquí el que entre los términos del supuesto dilema, no

pudiendo atribuir á Dios la trasferencia de la autoridad al imperante, necesariamente tuvieron que atribuírsela al pueblo, para lo cual era preciso que él la tuviera por comunicación de Dios, autor del ser social y de su forma. Lo cual es suponer que la soberanía está en la comunidad, no solo *radicaliter et virtualiter*, sino como está todo derecho en el sujeto natural de él, esto es, también *formaliter* (1).

Aparte de las razones intrínsecas contenidas en el aparente dilema, que en todo tiempo ha sido la condensación y síntesis de esta teoría, no han influido poco en ella otros motivos históricos y circunstanciales, laudables unos, y dignos de reprobación otros. Pertenecen á los primeros los que inspiraron á insignes polemistas católicos, entre los cuales ocupan lugar preferente el Cardenal Belarmino y el P. Suárez, S. J., controversias y refutaciones brillantes de la doctrina que pudiéramos llamar regalista acerca del origen del poder, contra la cual presumieron que no había oposición más fundamental y de mayor fuerza que la contraria teoría de la comunicación inmediata de la soberanía á la comunidad civil, y la trasferencia de aquélla á rey ó poliarcas mediante el consentimiento social, expreso ó tácito. Pero, ya antes, esta teoría había servido para el opuesto propósito de rebajar la autoridad pontificia y realzar la del Concilio, forjando, con este fin, una falsa doctrina democrática respecto de la constitución de la Iglesia, en la cual significaran, valiesen y pudiesen más las asambleas ecuménicas que el Vicario de Jesucristo, en virtud de la comunicación directa del Poder á la comunidad ecle-

(1) No vale aquí la distinción contradictoria de que la comunidad solo tiene la *virtus*, ó sea la facultad de trasferir la soberanía. La facultad es el derecho mismo; y si la comunidad trasmite el de soberanía, es porque radicalmente reside ésta en la sociedad civil, como únicamente puede residir, como forma del ser social. De suerte que una de dos: ó no hay tal *virtualidad*, ó, si la hay, es por razón de un derecho que está radical y formalmente en la persona cuyo es. Por esto, aunque no siempre, ni todos los autores de que tratamos, hagan afirmación tan rotunda, lógicamente se halla' contenida en la doctrina.

siástica, antes que á sus ministros que lo recibieron de ella. Esta fué la doctrina galicana de tradicional clásica cepa. Porque no puede negarse que tiene dos caras y fases el sistema, pero tampoco que en él domina un peligroso sentido y fundamento de extraviada democracia, la cual, aunque muy lejos del intento y de las remotas bases y mediatos principios de la teoría, surge y resulta en cuanto se apuran lógicamente las consecuencias de una autoridad de que no puede ser sujeto la comunidad, sino en cuanto lo son todos los individuos componentes de ella. No siéndolo todos, sino varios, por muchos que sean, ya la soberanía, aunque esté en la comunidad, por estar en ella los órganos soberanos, no es derecho de toda la comunidad, sino de los sujetos legítimos del poder supremo, en quienes ha de concretarse por hechos distintos de la supuesta trasferencia. Sino liberal, porque para ello era necesario que se fundase en la absoluta independencia del hombre, no concebido como criatura de Dios, la doctrina escolástica que estamos examinando concluye en la *soberanía del pueblo*, bien que *teológicamente* fundamentada (1).

(1) Prescindiendo de la parte que nos parece rechazable son sapientísimas disquisiciones así las de Belarmino (Controvers. tom. II, 1, 3, De laicis, c. 6) como las de Suárez (De legib. I, 3, c. 3 y 4; y Def. fid. cath. I, 3, c. 2 et 3), escrita esta última para refutar los errores de la secta anglicana, contenidos en el rescripto de Jacobo I, que denunciaba la doctrina de Belarmino como depresiva de la autoridad real y fomentadora de sediciones! Antes la escuela galicana, con el fin de supuesta reivindicación de la *libertad* de las varias iglesias nacionales, y de imaginada descentralización de derechos *indebidamente* reservados al Papa, y que ella atribuía á otras dependientes autoridades eclesiásticas, singularmente á los Obispos, encontró muy propicia á este dañado intento la teoría que, con el más puro propósito cristodoxo, habían esgrimido los citados autores *ultramontanos*. Así opina Jansen en su «Etude critique» sobre *L'origine du pouvoir civile* (Extrac. de la «Revue de la Suisse Catholique», transcribiendo un texto del corifeo galicano Jacobo Almain acerca de opiniones de G. Occam, y luego otro de la aplicación de la teoría á la constitución de la Iglesia (De auctorit. Ecclesiae et conc. gen.) Inspirados en estos errores de Occam y de Marsilio de Padua, fueron los autores galicanos los precursores de la democracia eclesiástica

Acerca de la participación de la comunidad en la designación expresa ó tácita de la autoridad civil, discrepan los autores. Unos suponen que en el mismo acto uno é indivisible la sociedad determina el sujeto y le trasfiere la autoridad; otros que solo hace lo primero, y que Dios comunica la soberanía directamente al sujeto designado, poniendo la comunidad la materia, y Dios transfiriendo la forma y el derecho consiguiente de ordenar.

Opinan Balmes y algún otro autor que tal diversidad de opiniones carece de interés práctico, y, en efecto, creemos que aciertan, si por interés práctico se entiende el resultado efectivo y real de una y otra opinión, el cual no es otro que trasladar toda la autoridad á los poderes consentidos. Mas no por eso carece de importancia especulativa y, en la misma proporción, de una trascendencia que no puede ocultarse á los que mediten detenida y profundamente el punto, porque si el pueblo hace solamente la designación de persona, y Dios traslada al designado inmediatamente la autoridad, por acto que es distinto del de la primera creación, resulta de derecho divino positivo, no meramente natural, la institución del poder civil, y se le equipara con el Primado pontificio, lo cual

protestante, ó sea de la autoridad residente *radicaliter et formaliter* en la comunión de *los santos*, ó lo que es lo mismo, de los fieles y de los justos por los solos méritos de Cristo, autoridad trasladada, en representación del pueblo *fiel*, á la asamblea de los presbíteros.

Fué otra, posterior y menos *clásica*, la dirección galicana que ensalzó al poder regio con el pernicioso fin de cesarismo pagano, similar del anglicanismo protestante, y no poco cercano á él, camino más seguro para tener un episcopado propicio y aun supeditado al poder civil, engrandecido á expensas y en daño y rebajamiento del Papado, que tal es la esencia, espíritu y objeto de las tituladas libertades galicanas: Iglesia que, cuanto menos una y católica, y más apartada de la fuente indefectible de verdad y de santificación, más expuesta á esas *libertades* que maneja el rey absoluto por el conducto de los obispos á su devoción, y en cuyo nombramiento influye é interviene más de lo debido. En el orden eclesiástico, como en el civil, las falsas libertades son licencias anárquicas, generadoras de otros abusivos y contrarios extremos de la autoridad secular.

rechaza con razón el P. Suárez (1), sosteniendo la opinión más científica y más ortodoxa.

4. Sin que pueda decirse que esta más generalizada doctrina haya sufrido solución de continuidad, pues en todo tiempo ha tenido, y aún tiene hoy, respetabilísimos sustentadores, no cabe duda que la opinión contraria viene desde fines del pasado siglo, ganando terreno y partidarios, que no por eso rompen con la esencia, fundamentos y carácter de la tradición escolásticas, ni dejan de inspirarse en los principios comunes, siguiendo también las huellas de los Padres y Doctores de la Iglesia, cuyas opiniones tratan, no sin éxito, de interpretar en sentido favorable á la nueva teoría, concordándola con la de Santo Tomás y aún de San Agustín. A los respetables nombres de Taparelli, Liberatore, Kleutgen, Cathrein, Schiffini, etc., hay que añadir el no menos respetable de Meyer en las

(1)... «*sola naturalis ratio non inducit translationem potestatis ab uno homine in alium per solam designationem personæ sine consensu et efficacia voluntatis ejus, a quo transferenda seu conferenda est. Unde intellegitur non potest collatio potestatis, quæ a Dño immediate fiat, media generatione, electione, aut simili designatione personæ nisi ubi successio est ex divina institutione positiva (quæ quoad potestatem pontificiam habetur); potestas autem regia non ex divina institutione positiva, sed solum ex ratione naturali ducit originem, media libera voluntate humana, et ideo necessario est ab homine immediate conferente et non tantum personam designantem. Et hinc etiam oritur (quod est clarum judicium hujus veritatis), ut hæc regia potestas non sit æqualis in omnibus regibus, neque cum eisdem proprietatibus durationis, perpetuitatis aut successionibus et similibus.*»

Esta opinión es más conforme con el supuesto común á ella y á la contraria: si Dios confiere inmediatamente por derecho divino natural á la sociedad la potestad correspondiente, es claro que la comunidad tiene el derecho no solo de designar persona, sino de conferirle la autoridad, y no es preciso, antes bien innecesario y opuesto al orden con que Dios gobierna al mundo mediante hechos y causas naturales de próxima acción, acudir á la inmediata y directa intervención divina para el efecto de conferir un poder natural á una sociedad natural también, y no sobrenatural y divina como la Iglesia.

Institutiones juris naturalis sen philosophiae moralis universae. (1) Bien se ve que ni siquiera puede decirse más jesuitica la opinión contraria; pero no hay temeridad en afirmar que es la contemporánea menos peligrosa y mucho más legitimista.

5. En el supuesto de la referida trasfendencia en virtud de propio, virtual, radical y formal derecho de la sociedad civil, lo más natural hubiera sido lo más frecuente, ofreciéndonos la historia más casos de consentimiento anterior expreso y explícito, ó sea, de verdadero sufragio electivo del soberano, que de consentimiento posterior, tácito y presunto; porque la facultad de consentir supone y encierra la de designar por elección, y hasta este término fuera más propio y menos equívoco en la hipótesis que venimos refutando. La trasfendencia, en efecto, supone, como modo y medio lógico, la facultad de determinar entre varios la persona ó persona á quienes se traslada y confiere la soberanía social. Lejos de eso, lo que más presenta la experiencia es el hecho contrario más general y constante, es el consentimiento, esto es, la conformidad ulterior al primer ocupante de la soberanía, ó al sucesor de ella; y la generalidad y constancia del hecho arguyen, como ley de naturaleza, la concreción de la soberanía, por derecho,

(1) En el segundo tomo, editado en 1900 (el primero salió á luz en 1885) agota la materia este insigne colaborador de la ciencia lacense, (de Maria Laach), examinando con la detención y cuidado más exquisitos la opinión más clásica y tradicional, y disipando absolutamente, en mi entender, todo equívoco, vacilación y duda. Léase atentamente la doctrina contenida desde la página 344 á la 405 escritas con extensión y profundidad supraelementales.


Singular placer he tenido en ver confirmada con tal autoridad la doctrina explicada en la cátedra durante 24 años, coincidiendo en los argumentos con el sabio jesuita, y sin más diferencia que la que existe entre su entendimiento y erudición y los menguados míos. El lector notará, sin embargo, alguna diversidad de cierta importancia en teorías exclusivamente propias por el fondo y método, las cuales bien que, deducidas de los principios comunes, no pueden todavía alegar en su favor el criterio y juicio de tan grave y reputado tratadista.

ó por fuerza, antes del consentimiento, sin él y contra él. Y claro está que el consentimiento posterior implica también el sucesivo, el de las generaciones sociales subsiguientes, consideradas en conjunto, ó en todos y cada uno de sus miembros; y entonces, ó tienen el derecho de retirarlo, ó no. Si lo primero, ya hemos visto lo que resulta, y á lo que se muestra opuesto Belarmino, y casi opuesto Suárez; si no tienen el derecho de retirarlo, es que lo deben, necesitan prestarlo en virtud de títulos autoritarios que no proceden de la libre voluntad social.

Y esto es lo que acontece en uno de los modos de consentimiento, de los tres que reconoce el P. Suárez, es á saber, en el que se da *paulatim et quasi successive, prout successive populus augetur*, por ejemplo, en la familia de Adán y de Abraham, obedecidos, primero como padres, y luego como patriarcas, es decir, como jefes ya de *gens*, que, por el número y la independencia, asciende ya á sociedad pública y nación. Pero hay que preguntar, (empezando por reconocer que es distinta y por distintos títulos la obediencia de hijo de la de súbdito), ¿podían, ó no podían rectamente dejar de prestarla los miembros de una sociedad ya pública? Seguramente que á título de hombre no, porque entonces al arbitrio de mujeres, hijos y siervos quedaba el romper el vínculo social público, aun contra la voluntad de marido, padre y señor, y el no pertenecer á la sociedad de que éstos continuaran formando parte, y á la cual aquéllos están unidos por el vínculo que les liga á las respectivas autoridades domésticas; ¿los padres, los *sui juris*?, pues entonces, ó se incurre en el error de que no hay más sociedad natural y necesaria que la doméstica, ó que la forma de gobierno natural y propia de la sociedad civil es una poliarquía democrática, compuesta de todos los paterfamilias, á los cuales se supone independientes en todo respecto público, por el hecho de serlo en el privado. Lejos de eso, la soberanía se concreta legítimamente en el patriarca por el hecho y título de que trataremos en breve.

De la misma clase, es decir, necesario y debido es el con-

sentimiento que se presta á la soberanía en el hecho, aun suponiéndolo acto libre, de pertenecer á una nación, pues el que continúa, aun por su voluntad formando parte de una sociedad civil no puede decirse ni que la hace, ni que, por estar libremente unido á ella, tenga aquel grado de superioridad é independencia en que consiste la soberanía, de tal suerte que sólo por consentimiento libre y prévio de todos y cada uno de los nacionales exista y actúe el poder civil de monarca ó poliarcas. Esto suponiendo que dependa siempre del libre arbitrio de las personas *sui juris* pertenecer á esta ó la otra nación, y no sea más cierta la doctrina de que el deber moral de ser miembro de una nación determinada, en circunstancias normales y ordinarias, no lo convierte el Estado en deber jurídico, sino en casos excepcionales y extraordinarios, por juzgar, y con razón, que no necesita el poder civil mandar ni vedar aquello que tiene sanciones más poderosas y eficaces que el precepto soberano, y la obligación por el impuesta.



CAPÍTULO V

DE LOS VARIOS MODOS DE CONCRETARSE LA SOBERANÍA; DIVISIÓN DE ELLOS.—LA OCUPACIÓN.—LA SUCESIÓN.—LA USUCAPIÓN.

1. Si ni Dios ni la comunidad, como causas próximas, transfieren al soberano su derecho, síguese que el acto que, por primera vez, en una nación concreta la soberanía en una persona física ó moral es la *ocupación*, en manera semejante al primer hecho ó acto que determina el primer dominio de una cosa en un dueño; y que, por lo tanto, también en modo análogo á lo que con la propiedad sucede, es la *ocupación* el hecho y título originarios de la autoridad soberana.

Solo que, tratándose no de una cosa material, sino inmaterial, de un derecho, no hay aprehensión ni acto sensible que se le parezca, y que pone la cosa mueble é inmueble á disposición de la persona; antes bien entiéndese por ocupación *el primer acto de ejercicio de ordenación soberana, con ánimo de continuar ejercitándola, y, por consiguiente, de retener la posesión de ella.*

Esta tésis que, implícita é indirectamente, viene demostrada en la doctrina anterior, se prueba aquí de un modo directo, bien que por vía de corolario con la verdad que encierran las proposiciones siguientes: 1.^a que

no hay sociedad *in actu*, mientras no exista autoridad también *in actu*; 2.^a que, por lo mismo, tienen que ser coetaneas la existencia real, la actuación de la sociedad civil y la de su autoridad soberana; 3.^a que, así como la nación no nace de improviso por pacto, sino que procede del desarrollo de una sociedad anterior, y, por conceptos varios, menos perfecta, sin que general y ordinariamente haya solución de continuidad entre las dos sociedades, también la autoridad nacional viene predeterminada por la superioridad y posición que tuvo en la sociedad prenatal; 4.^a que, por esto, y según el orden natural y corriente de la expansión social, que convierte en nación á una sociedad privada ó pública, no hay distinción real entre la institución ó establecimiento de la soberanía y el primer acto soberano, ó sea, entre la existencia del poder supremo y el comienzo de su ejercicio, verificándose la concreción de aquél por y mediante la primera función soberana que ejerce, y confundiéndose la consiguiente posesión con el primer hecho posesorio. De otra suerte, y para que tal distinción existiera en la esfera de los hechos, sería preciso que la soberanía fuese deferida inmediatamente, ó por Dios, ó por la comunidad, ó por cualquiera otro cuerpo electoral más ó menos numeroso, y de cualquiera de los tres extremos ya se ha dicho cuanto nos parece verdadero y procedente.

2. En modo análogo al hecho originario que concreta el dominio en un sujeto, no se concibe tampoco otro distinto de la ocupación para determinar, también por primera vez, la soberanía en una persona física ó

moral. Pero, á la manera que no toda ocupación de una cosa es legítima por el solo hecho de aprehenderla ó ponerla á disposición del ocupante, así tampoco es legítima la ocupación de la soberanía, si carece de título el que la ocupa ejerciéndola por primera vez. Para ello hay un título negativo, también semejante al de la primera determinación del dominio de una cosa en un sujeto, que es el ser la cosa *nullius*. Lo mismo puede en cierto modo decirse de la soberanía, que también es *nullius*, en cuanto no es derecho natural (nativo) de todo hombre, ni adventicio de las personas *sui juris*. En lo que hay variación es respecto del título positivo, el cual, para la ocupación de la cosa *nullius*, no es otro que el de mera humanidad individualmente concretada, mientras que, tratándose de la soberanía, es derecho adventicio y aun deber imperfecto de aquella persona ó personas en quienes se presume la superioridad de que se ha tratado en el Capítulo II. De donde resulta que, para que la soberanía sea legítima por parte del origen, es necesario que sea ocupada por el superior.

Los que no pueden señalarse ni clasificarse son los hechos que determinan esa superioridad soberana, habiendo fracasado cuantos intentos se han hecho para hallar y marcar la causa segunda que pudiéramos llamar menos próxima, ya que no remota, en cuanto precede á la ocupación, y la justifica moral y jurídicamente. Es esta superioridad de derecho natural mediato, y se engendra, nace y progresa por el curso, enlace é influjo recíproco de varias causas de distinta clase, pertenecientes unas al orden físico, al orden moral otras, con mayor ó menor acción, é intervención, más ó me-

nos limitadas y eficaces, de la voluntad del hombre, ó libre, ó necesitada por el deber. Es decir, como se trata de hechos contingentes, no puede determinarse científicamente y *a priori* los principios, leyes y sucesos según los cuales indefectiblemente ha de engendrarse y consolidarse la superioridad que implica el derecho soberano. Pertenecen esta génesis, desarrollo y consolidación al dominio de la historia cierta ó probable; y por generalizar sin fundamento, trasladando el orden histórico de lo contingente al orden dialéctico de lo necesario, se equivocó Haller al construir una teoría tan sencilla como errónea, y no pudo pasar Taparelli de un ensayo analítico y eurístico bien que luminosamente orientador.

Porque ¿quién es capaz de predecir la existencia futura de lo que puede ser ó no ser, vaticinar el uso de la libertad humana y las consecuencias de su ejercicio, y sondear los inescrutables designios de la Providencia en la vida? Tanto sería preciso para inducir y deducir, determinar, clasificar y dividir los hechos que originan la superioridad soberana en un sujeto ó varios por concurso inmediato de los siguientes factores: *a*) los propios merecimientos; *b*) los recursos, medios, prestigio, posesión y poder que de ellos proceden; *c*) los que suministra la acción de otras causas y hechos, ajenos á la persona, por ejemplo, la herencia de bienes morales y materiales, la consideración, estima, amor, munificencia de la sociedad, etc., etc., todo, en fin, lo que vulgarmente se llama suerte, por razón de su contingencia y el desconocimiento de la causalidad, operación y resultados.

La única generalización que la ciencia, confirmada por la historia, puede aventurar, sin seguridad de exactitud, es que la soberanía procede *a)* ó de previa superioridad doméstica, ó de previa superioridad pública; *b)* y en uno y otro caso, de superioridad extraautoritaria, ó de superioridad constituida en autoridad prenatal: *a')* completa ó incompleta; *b')* superior ó inferior en la sociedad precedente.

3. También la sucesión es el modo derivativo de la soberanía como lo es del dominio, es decir, el que concreta una y otro, no *primitus* en los respectivos sujetos, sino por *substitución ó subrogación de una persona por otra en el derecho que aquélla no puede ó no quiere tener ni, por tanto, ejercer.*

De lo expuesto en el Capítulo III acerca de la inmovilidad y de la sucesión de la soberanía, como leyes, esto es, principios prácticos de su concreción, se deduce la doctrina concerniente á este punto, y ésta y aquélla mutuamente se completan, aclaran y confirman.

De la inmovilidad de la soberanía y de sus ventajas se desprende que no puede sucederse en ella por causas, en las formas y para los fines de la contratación propia de los derechos privados, siendo ésta una diferencia ya muy marcada entre la sucesión de aquéllos y la de la autoridad soberana. La contratación tiene por objeto el provecho de una ó de las dos partes contratantes, y hasta en los unilaterales y gratuitos la satisfacción de ambas; pero, por su esencia y objeto, la soberanía, bien público nacional, que solo por la inmovilidad puede procurarse eficazmente, es *per se* insus-

ceptible de alienación por vía sucesoria *inter vivos* en cualquiera forma de convención, contrato ó pacto de los que pudieran parecer aplicables al derecho de que se trata, ó á su uso y ejercicio: la donación, la permuta la compraventa, el arrendamiento.

Se deduce igualmente de la doctrina de dicho capítulo que, en cambio, en la soberanía no sólo puede, sino que debe sucederse *mortis causa*, y en virtud de fundamentos y principios formales, análogos á los de la Sucesión de algunos derechos privados, y de otras razones exclusivas de la soberanía. La mortalidad de los hombres y la permanencia de ciertos derechos son el fundamento aplicable á la soberanía como á cualquiera otro de aquéllos; al de soberanía hay que añadir que no es de los derechos que concluyen al mismo tiempo que la persona cuyos son, como el del marido ó el padre, sino que sobreviven, como el de propiedad; y no sólo permanecen, pueden y suelen permanecer, sinó que es necesario que tengan la misma permanencia, inmutabilidad é indivisibilidad que la nación de la cual y para la cual es la autoridad soberana, natural, esencial é indefectiblemente.

Ya veremos como el derecho y la política liberales, por razón de su doctrina acerca de la concreción y sujeto de la soberanía, son contrarios á la inmovilidad y sucesión *mortis causa* de ella; y como es *inter vivos* objeto de una especie de mandato *representativo*.

Difiere la sucesión *mortis causa* de la soberanía de la de otros derechos en que la sucesión hereditaria de aquélla es indivisible, y, por lo tanto, no puede haber

en ella la sucesión singular y repartida que implican los legados y la porción legítima en los bienes privados y derechos; y en que es toda ella legítima, ó por ministerio de la ley, y no testamentaria por naturaleza, sino por accidentes y defectos históricos; porque la soberanía es para la nación, y en provecho de ella, y dejaría de serlo en absoluto, ó sería menos conducente á estos fines públicos de la más perfecta sociedad, si se partiera el derecho soberano, ó se dispusiera de él con el relativo arbitrio y libertad que supone y expresa el testamento en la sucesión privada.

Se prueba la menor de este implícito silogismo: ó se reparte la soberanía entre los sucesores del monarca ó poliarcas de tal suerte que á cada uno se designa y marca un territorio donde ejercerla sólo, ó se trasmite el derecho indiviso, de modo que *in solidum* lo tenga y ejerza la comunidad de sucesores. En el primer caso se disuelve la nación, partiéndola en tantas cuantas sean los sucesores, atentando así á la integridad y poder de la sociedad civil y á lo que éstos significan é importan; en el segundo, se cambia una más perfecta forma de gobierno en otras menos perfectas: ó la monarquía en poliarquía, ó ésta de aristocrática, ó menos democrática, en *ampliamente democrática* é imperfectísima, por lo tanto, aunque no se tome la democracia gobernante en el sentido tradicional y aristotélico de que más adelante se ha de tratar.

También la sucesión testamentaria de la soberanía es contraria á su perfección. Aunque á primera vista parezca que tiene la ventaja de encomendar al arbitrio justo, prudente é ilustrado del soberano la designación del su-

cesor, siendo elegido éste por quien únicamente puede ser elector, en razón de la superioridad que toda elección supone, resulta, sin embargo, que la sucesión soberana necesita ser legítima, ó sea, que por total ministerio de la ley se atribuya de antemano á una persona determinada de la familia real, ó de las familias de los poliarcas, y esto por varios motivos: 1.º, para tener persona cierta en quien acumular y concentrar todos los elementos y recursos educativos desde el momento en que, por el uso de la razón, pueda ya utilizarlos el futuro sucesor, con el consiguiente provecho social que proporciona esta más oportuna, esmerada y eficaz preparación para el ejercicio del poder; 2.º, porque, encomendada la designación al arbitrio del padre, bien que, por el amor, quedará generalmente asegurada la sucesión en los descendientes, podían, sin embargo, el extravío y aun la injusticia del afecto postergar al más digno descendiente en provecho de un hermano menor, acaso no de un hijo, sino de un nieto, quedando así vacilante, tornadiza y retrasada la acción educativa, tanto familiar como social, con daño del bien público, mas amenazado también con mayor posibilidad de minoridades, cuando la forma es monárquica, privado de mayor experiencia y dotes gubernativas aun en la misma poliarquía ó república; 3.º, la fluctuación sucesoria, aun dentro de la dinastía ó de las familias aristocráticas, *a*) es menos propicia á la solidaridad entre aquéllas y la nación, y á la consiguiente intimidad actual y tradicional entre la soberanía y el espíritu público; *b*) más expuesta á disensiones privadas y públicas, atentatorias á la paz y á la unidad sociales, y ocasionadas á guerras civiles más ó menos duraderas

y aun crónicas. Para evitar repeticiones se ampliará este último motivo al tratar de las leyes sucesorias.

4. Los anteriores títulos y modos de concreción ó determinación del poder soberano, originario el uno, y derivativo el otro, son los dos que podemos llamar naturales, y, por consiguiente, ordinarios y de mayor frecuencia, como quiera que son conformes á la esencia y fines de la soberanía.

Al lado de estos deben figurar, como excepcionales y accidentales, otros dos, que solo en virtud de irregulares y extraordinarias circunstancias concretan la autoridad civil: á saber, la elección y la usucapión. Del primero ya se ha dicho lo procedente en los lugares oportunos.

En cuanto á la usucapión, bastará definirla para formarse idea de que constituye un modo y título especiales, mezcla de ocupación y de sucesión *inter vivos*. *Es la conversión de la soberana, ilegítimamente detenida por falta de título y mediante usurpación, en soberanía legítima por el lapso de tiempo, y en virtud de las relaciones jurídicas que este engendra y supone.* Según se ve, la definición ó fórmula descriptiva es formalmente idéntica á la de la usucapión del dominio, y entran en aquélla los mismos elementos: detentación y posesión sin título, y adquisición de él mediante el transcurso del tiempo, bien que tratándose de derechos tan distintos como sus fines, el provecho privado y el público, los fundamentos respectivos tienen que ser diferentes.

Circunscribiéndonos á la usucapión de que aquí se

trata, hay que tener previamente en cuenta que ni en el orden privado ni en el público puede, *per se y simpliciter*, el hecho injusto engendrar derecho, ni extinguir el de otra persona, el cual es el orden mismo, concretado en ella en virtud de las razones abstractas de todo derecho y de los hechos que lo determinan personalmente (título ó títulos). Solo según la concepción naturalista y fatalista, el hecho y el derecho se identifican, por aquello de que lo que sucede no puede menos de suceder, y que todo lo *real es ideal*, como todo lo *ideal es real*. La *legitimidad* de los hechos consumados, por solo consumarse, además de irracional é inmoral, es en este orden especialmente subversiva y calamitosa, porque tienta á la usurpación y á todos los peligros trastornos y perjuicios consiguientes á la amenaza constante que es de la legitimidad, del orden y el sosiego públicos; atenta también á las costumbres cívicas, fomentando el incumplimiento de los deberes de los súbditos con el soberano legítimo, el servilismo para con el éxito triunfante, la indiferencia escéptica de los ciudadanos, y una pasividad social que facilita y alienta las empresas del despojo y de la tiranía. Así es que el tiempo no convierte el hecho en derecho, ni hace que la injusticia sea causa eficiente de legitimidad, teniendo aquí perfecta aplicación el axioma jurídico *quod ab initio nullum est non potest, tractu temporis, convalescere*.

Lo que hay es que, cuando el mero detentador logra por el lapso del tiempo consolidar y arraigar la detentación, y, aunque ilegítimo poseedor, no es gobernante injusto, y cumple los deberes de la soberanía, esta circunstancia paraliza, no enseguida, sino cuando es ha-

bitual la recta ordenación, y ofrece esperanzas fundadas de seguir siéndolo, la reivindicación de la soberanía, por parte del soberano legítimo, y la cooperación que, para recuperarla, debiera, en caso contrario, prestarle la sociedad. Prodúcese entonces una colisión entre el derecho del legítimo soberano á recobrar la soberanía y el derecho de la sociedad á conservar el orden moral y material y todos los bienes que de él surgen; colisión no real, sino aparente, porque siendo el poder civil no para el sujeto de él, antes bien para la sociedad, trataba éste con la acción armada de reivindicar un derecho ya sin fin, objeto y necesidad, lo cual es absurdo; iba á dar á la sociedad el bien que ya ésta tenía, y quitándoselo previamente, sin certeza de restituírselo, y con posibilidad de perderlo por tiempo indefinido. Bien se ve que no hay colisión, porque, para ello, era necesaria la existencia de dos derechos, y aquí solo hay uno, el de la sociedad á vivir en orden, y á que no la perturben para darla dudosamente lo que efectivamente disfruta. Aquí el detentador no posee ni directamente adquiere derecho alguno; todo el derecho es de la sociedad, y éste prevalece sobre y contra los del detentador injusto y del legítimo soberano desposeído. Aquel, por el hecho de la detentación, contrae el deber de gobernar bien, ya que gobierna, no de otra suerte, por ejemplo, que el padre ilegítimo, con ocasión de su pecado, echa sobre sí las obligaciones de la paternidad; y, en cuanto la sociedad es bien gobernada, va á su vez determinando el deber de no arriesgar con el desorden de la reivindicación violenta el bien positivo, propio y honesto para el cual es la sociedad civil, y por el cual existe.

Y no se arguya que esta teoría es peligrosa, en cuanto compromete la estabilidad vitalicia y la sucesión hereditaria de la legitimidad, y estimula la invasión por parte del extranjero, ó la rebelión interior. Esto puede acontecer en sociedades y tiempos en que, en proporción de la inmoralidad social, están las naciones más propensas á la rebeldía y anarquía, al mismo tiempo que á la tiranía y al servilismo; no en sociedades regularmente honestas y un tanto adelantadas en su constitución jurídica en general, y política en particular. En ellas, con sólo que el soberano mande con una mediocre virtud, tendrá de su parte el espíritu público y toda la fuerza y defensa moral y material que presta la opinión en pueblos libres y obedientes, y apenas hay posibilidad de que un ambicioso, á no ser imprudentísimo, conciba el intento de la usurpación, menos que pueda ponerlo en práctica, y mucho menos que prospere y se realice el atentado, que probablemente se estrellará en la resistencia pasiva y activa de una nación resuelta y fiel. Por el contrario, cuando la detentación avanza y se logra en una sociedad honesta, lo probable es que, por sus culpas personales, ó por el reato de la de los antepasados, haya ido menguando y perdiendo sus títulos de legitimidad radical el soberano, y ganándola y adquiriéndola, sobre y contra los de la mera legalidad dinástica, un usurpador, más de nombre y apariencia que de hecho, el cual no tanto satisface una ambición bastarda como cumple el deber patriótico de librar á la sociedad de un gobernante torpe, inícuo ó totalmente desautorizado. Más que atentado á la soberanía, la detentación es entonces la sustitución de una

legitimidad social verdadera á una legalidad, no sólo nominal y vacía, sino dañina y calamitosa.

5. No puede la ciencia fijar de antemano, como en las relaciones privadas, el lapso de tiempo necesario para que prescriba el título del soberano legítimo, y por usucapión, se convierta la detentación en legítima soberanía; porque son los hechos que temporalmente se verifican, no el tiempo mismo, los que determinan las respectivas situaciones del soberano desposeído, del poseedor de hecho y de la sociedad civil. Estos hechos y circunstancias, como contingentes que son todos, aunque físicos unos, morales los otros, unos debidos, otros libres, no son susceptibles de generalización, de clasificación y división lógicas. Lo que únicamente puede decirse es que una buena parte de las causas que abrevian ó alargan la usucapión, es de orden moral y dependiente, en no mínima proporción, de la voluntad y de las virtudes de las tres personas que intervienen en esta compleja relación jurídica; el soberano despojado, el usurpador y la sociedad; de ésta, sobre todo, no por su categoría, sino por su poder material y moral, y porque, sin cambiar el pueblo de posición, las circunstancias le erigen accidental é indirectamente en árbitro y juez de las causas de ambos soberanos, y en ejecutor, con fuerza física bastante, del fallo que dicte en tal litigio.

Por ésto, son en cierto modo el recto espíritu público, la opinión nacional, *el juicio y la resolución de la mayor parte de la sociedad civil, ó de su porción más selecta y sana;* a) el criterio con que juzgar de la pres-

cripción de un título y de la adquisición del otro; b) y, por lo tanto, del lapso de tiempo en que ésto se ha verificado. De suerte, que la adhesión del espíritu público, razonable y justo, al soberano desposeído ó al detentador, puede ó aplazar indefinidamente la usucapión, ó precipitarla en más breve plazo hasta del que se necesita para usucapir entre presentes las cosas muebles.

Como debe formarse este espíritu público, y el valor que tiene en sociedades honestas, ora para sofocar en sus comienzos la usurpación, ó para contenerla é impedir que totalmente se consume, ya, en fin, para restituir al soberano legítimo su soberanía, ó, por el contrario, consolidar la detentación y darla el título de que carecía, ha de verse en el siguiente número en que se trata de los respectivos deberes y derechos de los dos soberanos y de la sociedad civil.

6. Estos deberes y derechos son corolario y aplicación de la doctrina expuesta en los anteriores números.

Así como el soberano está en el deber y el derecho de rechazar al invasor ó al rebelde, al primero, porque atenta á la nacionalidad por lo menos, y al segundo, porque ataca al orden jurídico y político, así, una vez la usurpación avanzada ó triunfante, no se merman, cambian ni alteran aquel derecho y aquel deber en presencia del hecho injusto consumado. A raíz de él, y en lo sucesivo, mientras no sea más que hecho, la reivindicación de la soberanía tiene el mismo título que la posesión y el ejercicio de ella, y la justicia del fin y de los medios no reconoce más límite que la pru-

dencia de no causar mayores males, por la cuantía ó la duración, que el de la usurpación triunfante. Por regla general, la acción armada, y aun la civil contienda, no pueden considerarse mal mayor; son *per se* un medio necesario, aunque doloroso de coacción legítima, puesta al servicio del derecho.

Pero en cambio, á medida que el tiempo transcurre sin haber podido ejercer tal coacción, ó fracasado ésta, si mientras el detentador impera en justicia, y máxime, si bajo su gobierno se cumplen adecuada y prósperamente los fines sociales, dando con el orden todos los bienes y ventajas que son su consecuencia, debe el soberano abstenerse, cuando menos, de toda acción reivindicatoria, pacífica ó armada, y pueden llegar sus deberes hasta el caso extremo de la renuncia de sus títulos para desarraigar todo gérmen de división pública que turbe la paz social.

El detentador, por su parte, no tiene generalmente ningún derecho, cuando se trata de un soberano legítimo que no es habitualmente tirano, ó de cualquiera otra manera injusto gobernante. De la misma manera que no debió alzarse contra la soberanía legítima, ni usurparla, no tiene derecho ni deber alguno de rechazar por medios pacíficos ni violentos la reivindicación soberana, porque el que carece de derecho, carece de la coacción consiguiente, que no puede invocar aquí razón ni motivo alguno.

Pero mientras no renuncie á su soberanía efectiva, y la defienda, aunque sin título, tiene el deber de ejercerla, y de ejercerla justamente, en virtud de la situación en que voluntariamente se ha colocado. Y enton-

ces, si á esta recta ordenación siguen sus naturales y frecuentes consecuencias, esto es, la prosperidad y los bienes que encierra y supone, se van verificando coetáneamente, y en la misma proporción, la prescripción de la legitimidad y la usucapión de la soberanía sin título, según los principios y en las condiciones que hemos expuesto, pudiendo suceder, no solo que el detentador concrete indirectamente, y como de rechazo, su deber y su derecho, en razón del interés social, sino que éste exija la continuación del detentador en el poder supremo, y se engendre el deber moral y el perfecto derecho de no abandonar ni ceder la soberanía.

La sociedad civil, á su vez, tiene que orientarse y guiarse por los mismos principios, que ahora son los de su legítima conveniencia exclusivamente, no los del interés ajeno como en las situaciones anteriores. En general, la aplicación es tan sencilla considerada la sociedad en conjunto y en abstracto, como difícil cuando se trata de las distintas personas, de los diferentes órganos sociales y de los diversos estados, posiciones y deberes y derechos respectivos en relación con ambos soberanos y con la comunidad civil sobre todo.


Para rechazar la usurpación, ó para reivindicar la soberanía en las condiciones expresadas en los anteriores párrafos, la sociedad en general está obligada á cooperar con acción pacífica ó armada, regida por la justicia, prudencia y demás virtudes: el militar como tal, y el hombre civil según su estado y las relaciones que, en virtud de él, le ligan á la patria y á su legítima soberanía, pudiendo haber ocasiones en que hasta á la cooperación guerrera se hallen obligados los aptos y capaces.

Mas como tal deber ha de subordinarse al más fundamental y final de patriotismo recto y sano y á las particulares obligaciones que éste contiene é implica en cuanto el soberano ilegítimo consolide su situación y gobierne, tienen el deber los ciudadanos de cooperar á ese gobierno, en general en las mismas condiciones, esferas de acción, medios y recursos que si gobernara el poder legítimo, y esto no por el detentador, sino por la nación y la piedad, también filial en cierto modo, que con aquella une á sus miembros. Lo que hay es que, en sociedades virtuosas, la conciencia y el honor retraen á los ciudadanos de prestar los servicios que no sean estrictamente indispensables, prefiriendo, en caso de duda, abstenerse cuanto puedan de los oficios públicos, previniéndose contra toda cooperación no ya ilícita, sino indecorosa simplemente, y haciendo así difícil la situación del detentador, y aun tentándole á represalias y desafueros, que crean, en daño suyo y en favor del soberano desposeído, relaciones jurídicas complicadas y difíciles, poco propicias y aun contrarias á la usucapión. En relaciones tan complejas y oscuras, la repugnancia al usurpador resuelve de plano y decididamente, con muy buen sentido, en provecho del legítimo soberano despojado y proscrito.

7. Aunque mero corolario de la doctrina expuesta, no puede, en razón de la importancia intrínseca y circunstancial que tiene la teoría, omitirse la consecuencia de que no prescribe el título de la legitimidad enfrente de gobiernos no ya solo habitual y crónicamente injustos, sino radical y esencialmente desorde-

nadores, en virtud del vicio y mal intrínsecos del sistema filosófico y jurídico en que se fundan é inspiran. Tal acontece á las soberanías legítimas respecto de los actuales gobiernos, no tanto por mixtos, constitucionales y parlamentarios, revolucionarios y opuestos á la natural constitución histórica de las naciones, como por liberales, y, en tal concepto, incompatibles con la organización y gobierno cristianos, con el fin social, con la justicia, con la religión, con los derechos de la Iglesia, de la patria en general y en particular de los ciudadanos. En la misma proporción que contrarios á la verdad y á la naturaleza, á los bienes propios del individuo y de la comunidad y á sus deberes fundamentales respecto de Dios y de la sociedad y de las potestades espirituales y divinas, lesionan la libertad razonable y verdadera y los demás derechos de los ciudadanos, é imposibilitan y aun destruyen los medios conque en la nación se realizan los fines humanos por el concurso de todos los órganos sociales y del poder soberano legítima y adecuadamente constituido.

Porque si estos gobiernos hacen algun bien, es accidentalmente y á pesar de ellos, por impulso y exigencias de la naturaleza y de la realidad, que aseguran las condiciones estrictamente necesarias para la vida social, á despecho de los delirios y extravíos humanos, y, por consiguiente, la mínima cantidad de orden indispensable al progreso meramente material y al provecho inicuo de una minoría de ciudadanos.



1. En el fondo de la naturaleza y carácter del derecho hay una comunidad radical y formal, y por lo tanto, una, ya identidad, ya analogía entre los derechos privados y los públicos; y de aquí la utilidad de orientarse por medio de la comparación de unos con otros para señalar las respectivas notas genéricas y específicas, precaviéndose así de desconocer éstas ó aquéllas. Por tal razón, comparamos la soberanía con la propiedad, cuyos conceptos son más vulgares, y aun más familiares al alumno, por recogidos en el trato de la vida, y científicamente confirmados y sabidos en las asignaturas precedentes (Ética, Derecho natural, Derecho romano).

Así sabrá el discípulo, y en general el lector, en qué sentido se usan, tratándose del derecho público de soberanía, los términos ocupación y posesión. Esta, lo mismo en frases y locuciones corrientes y familiares que científicas, tiene antes de las varias acepciones racionales y positivas, ya más restrictas, en que expresa relación del hombre con las cosas y bienes materiales, otro sentido general y común que comprende la de un sujeto de derecho con el derecho mismo, sea de la clase que quiera, y entonces posesión *es tanto como tenencia de un derecho actual con título*, porque cuando es sin él, aunque haya ánimo de continuarla, debe llamarse más bien detención (1).

(1) Por el contexto, ó por los adjetivos, se comprende en qué acepciones y sentidos se usa la palabra posesión, cuyo concepto es más fácil de determinar cuando se trata de cualquiera otro derecho que del que se tiene sobre las cosas materiales muebles ó inmuebles, porque cuanto más amplia es la acepción, y comprende derechos más distintos y apartados del señorío sobre las cosas materiales, no hay necesidad de determinar las relaciones entre la posesión y el dominio ó los derechos *in re*, por ejemplo, la propiedad plena, el usufructo, las servidumbres, el arrendamiento largo, etc. Entonces la palabra *possessio* vá perdiendo el significado material de su etimología y de la paráfrasis del derecho romano para identificarse con la tenencia, esto es, conservación y continuación del derecho en y por la persona cuyo es; y así se dice que está en posesión de su derecho de propietario, como de padre, marido, etc., y así se toma posesión de un caballo ó de una heredad, como de una alcaldía ó de una cátedra.

En cuanto á la ocupación, también ha de notarse que la que hemos explicado como propia de la soberanía es análoga á la que también determina y origina ciertos derechos privados, que no pueden ser aprehendidos materialmente, ni puestos á disposición física del ocupante: tal sucede con las servidumbres que se ocupan, empezando á ejercitarlas, lo cual produce la posesión de este derecho, que los romanos llamaron *juris quasi possessio*.

2. Continúa en este número señalándose las analogías y diferencias entre la ocupación de una cosa material y la ocupación de la soberanía. En ambas, es la ocupación el hecho originario, en el doble sentido que tiene aquí el término, es decir, no solo de hecho que determina el derecho en el dueño y en el imperante, (porque en este ámplio sentido también es modo de origen la sucesión), sino de hecho que determina por primera vez el dominio en esta ó en la otra cosa, y la soberanía en esta ó la otra sociedad civil.

En una y otra relación jurídica, la ocupación es el hecho y la causa próximas; pero antes de ellos hay una serie y sucesión temporal de hechos y causas que han traído á dueño y soberano respectivamente á las correspondientes situaciones de ocupar la cosa y el poder supremo, mediante una génesis histórica en que el enlace, concurrencia, é influjo recíproco de elementos y de factores físicos y morales, obligatorios ó libres, han producido la ocupación, hecho último, etapa postrema de ese proceso, en virtud del cual se han actuado la facultad dominical y la potestad soberana. Este proceso, como histórico que es, puede históricamente en cada caso particular indagarse y conocerse más ó menos; lo que no puede investigarse, penetrarse ni señalarse *á priori*, por las razones expuestas en la parte elemental, son los modos generales con que en todo lugar y tiempo, todo y cualquiera dueño ó soberano han llegado al caso de concretar dominio ó soberanía.

Por ésto, no puede calificarse de inexacta la afirmación de que es la historia título mediato de legitimidad soberana; y ni

siquiera es tachable de vaguedad semejante afirmación, con tal que se expliquen los varios sentidos y acepciones del término y frase legitimidad histórica. La cual, unas veces es la legitimidad en cuanto transmitida al actual imperante por una serie de sucesiones que arrancan de un primer título originario en el ascendiente más ó menos remoto; otras, aunque las menos veces, sobre todo en épocas y sociedades adelantadas, significa que á la legitimidad imperante no se le puede descubrir el título de primitiva concreción originaria, pero que tiene á su favor el de la tradición y antigüedad, con todo lo que representan y valen en cualquiera institución, y singularmente en la de la soberanía; y siempre expresa la legitimidad que se determinó en el primer sujeto, inmediatamente, por ocupación, usucapión, ó acaso cierto consentimiento social, pero, mediatamente por ese proceso histórico que hemos expuesto en el anterior párrafo.

De tal proceso trata magistralmente Meyer (obra citada, tomo II, páginas de 390 á 405). Todo el raciocinio está comprendido y sustentado en las siguientes afirmaciones: *a)* que de la misma manera que la sociedad se desenvuelve orgánicamente, también la autoridad civil por aquello de que *quo aliquid fit, eo et perficitur*; y así, generalmente hablando, las cosas se completan por iguales ó semejantes causas por las que comienzan; por lo cual las mismas causas han de producir la acción una é indivisa de preparar la materia del cuerpo social y el sujeto de la correspondiente autoridad civil; operaciones en parte incoativas, en parte completivas de la misma sociedad perfecta, *b)* que al todo y á la parte esencial debe atribuírseles el mismo origen como al cuerpo y á la cabeza, y participar de la misma cualidad en razón de su origen histórico, y así lo confirma la experiencia respecto de la sociedad y de la autoridad civiles; *c)* que las mismas causas suponen variada cooperación directa ó indirecta de la voluntad humana, habiendo entrado en los planes de la divina providencia el que con ella cooperase la libertad, de suerte que no todo en el orden moral se estatuyera y cumplierse por modo de inmediata necesi-

dad natural y en determinada y constante forma, sino que, sobre todo, aquello que concierne y conviene natural y genéricamente á la vida social se actuara y concretara por el correspondiente ministerio y acuerdo humanos, unas veces directos y libres, bien que *sub generali naturæ rationalis directione*, otras en cooperación más bien secundaria con precedentes causas naturales y providenciales, según también demuestra la experiencia histórica; *d*) que, como la sociedad civil no siempre ni necesariamente tiene un origen pacticio, tampoco, y por las mismas razones, la autoridad; *e*) que los derechos naturales, en cuanto á su material concreción, si bien unos dependen de hecho libre, como los correspondientes al orden de la justicia conmutativa, otros proceden de hecho natural, quiere decir, necesario y obligatorio; y la autoridad civil es de esos derechos que pueden concretarse de uno ó de otro modo, porque no se sigue de su naturaleza que haya de concretarse siempre por hecho libre, pues entonces toda autoridad, y no solo la política, así se concretaría, y la razón y la experiencia enseñan que por hecho necesario y no libre se concreta la autoridad paternal; y si bien la política no es la paterna, también es cierto que, en cuanto á la relación pública y nacional, tampoco son iguales é independientes ni los hombres todos, ni los padres, como no lo son, aunque por distintos respectos y causas, los miembros de la sociedad doméstica (1).

(1) Sobre una conformidad fundamental y esencial habrá notado el lector una no subalterna discrepancia entre la doctrina del sabio jesuita y toda la expuesta en este y en los anteriores capítulos. La tesis del P. Meyer parece expresar que lo mismo puede concretarse la autoridad por libre consentimiento que por los otros *citra* y *extra consensum*; mientras que en este libro se considera el consentimiento modo accidental, extraordinario y rarísimo, de la misma manera y por análogas razones á lo que acontece con el origen de la sociedad civil. En tanto que este autor, como Cathrein, no ha podido sustraerse del todo al influjo de la teoría clásica, yo voy cada vez más decididamente inclinándome á la radical, lógicamente contraria, y reduciendo á exígua minoría los casos de consentimiento, muchos de los cuales no son lo que, por equívocos é inexactitudes de lenguaje histórico, significan, ó se les ha hecho significar.

En cuanto se ha intentado, á imitación de los antiguos doctores escolásticos, generalizar indebidamente, reduciendo á un solo modo y título la primitiva concreción de la soberanía, no ha sido menor el fracaso que el de la teoría clásica, aunque en verdad sean las nuevas más favorables á la legitimidad, más adversas á la Revolución, y, por lo tanto, menos peligrosas y expuestas á cierta apariencia liberal, y á semejanzas externas con la doctrina del derecho nuevo.

Los errores y horrores revolucionarios provocaron una reacción que podemos determinar con el término general de histórica, porque abarcó cuantas tendencias y direcciones son contrarias al sentido idealista del derecho nuevo, que supone originadas la sociedad y la autoridad civiles por arbitrio absoluto del hombre. Lejos de eso, escritores, así católicos co-

Aquí añadiré, confirmando doctrina del Capítulo VII del Libro I, que ni en el orden ideal ni en el real, puede dividirse la estructura nativa de la sociedad en *pacticia* y en *orgánica*, aunque no sea más que señalando como predominante uno ú otro carácter, porque toda la sociedad es más orgánica que pacticia, siendo como es accidental y rárísima la formación de una sociedad, no nacional, pero ni pública siquiera, (bien que en absoluto no repugne), sólo por individuos iguales é independientes. Si esto es excepcionalismo, toda formación social pública será orgánica, cuando menos de familias. En tal caso, de la misma manera que la sociedad nacional viene orgánicamente preformada en la anterior ó anteriores privadas ó públicas, así también la autoridad soberana, que, ó se dejará residir en el conjunto de las autoridades prenacionales (poliarquía), ó se reducirá el número de aquellas (poliarquía más aristocrática), ó se confiará á una sola persona, por función constituyente que elige, (busca y reconoce), una superioridad verdaderamente soberana, mejorando la anterior forma de gobierno (monarquía). Y esto será lo que haya de pacto y libre, y de consentimiento tácito ó expreso, ora dejando la soberanía en el cuerpo de los anteriores imperantes presoberanos, ora depurando el órgano del poder supremo; porque cuando se dará el caso, aunque posible, de una coincidencia en tiempo y en espacio de hombres y mujeres *sui juris* que *hagan* la sociedad, al mismo tiempo que la soberanía, por pacto *inter singulos*, así *unionis* como *subjectionis*. Aun así y todo, y suponiendo á las mujeres iguales á los hombres en el respecto y para los fines de la autoridad pública, que me parece harto feminismo, no puede decirse que pactarían y elegirían, por razón de independencia aneja á la razón de mera humanidad, sino de circunstancial independencia.

mo protestantes, afirmaron las dos verdades contrarias, son á saber, el nacimiento natural de la nación, la cual es desarrollo y complemento de otras sociedades inferiores, y el título tradicional de las soberanías legítimas en hechos anteriores y antiguos, independientes de la voluntad y del mandato del pueblo soberano. Estos autores que Stahl, (*Historia de la Filosofía del Derecho*, penúltimo capítulo), comprende bajo el epígrafe general de *Los escritores de la Contrarevolución* no convinieron sino en esas dos afirmaciones, y en considerar, por consecuencia de la más fundamental de ellas, á la sociedad como orgánica y corporativa, esto es, no compuesta de individuos; pero discreparon en cuanto al hecho, modo y título que por primera vez determinó la soberanía en la sociedad civil, indagación que descuidaron y aun desdeñaron algunos, por ejemplo, De Maistre y Burke, desde sus respectivos puntos de vista, sin duda porque no era su propósito descender á esta materia concreta en obras de amplio y variado objeto, no rigurosamente didácticas, y escritas con un propósito crítico y más elevado y trascendental.

No procedió así Haller (*Restauración de la Ciencia política*), sino que trató ante todo de deslindar el primitivo título de las soberanías legítimas, creyendo haberlo hallado en un solo hecho uniforme, universal y constante é igualmente aplicable á las monarquías que á las repúblicas. El soberano es un señor territorial independiente; los hechos y títulos que concretaron ese dominio y esa independencia determinaron asimismo la soberanía. Esta no es otra cosa que el conjunto de las relaciones sociales de ese poderoso y superior con los inferiores, respecto de los cuales ha de conducirse según justicia y benevolencia. Es decir, Haller considera que la soberanía no es más que el complejo desarrollo, la varia y múltiple consecuencia de un derecho privado, teoría que no hemos de refutar aquí, porque está de antemano juzgada y rechazada, donde, cuando y siempre que se haya distinguido entre la relación privada y la pública y política. De la opinión de Haller, aunque haya sido su intención defender la li-

bertad verdadera en frente de la violencia y tiranía resultantes del contrato y de la soberanía popular, surge también justificada y fundamentada la tiranía, por el hecho mismo de la confusión entre la relación pública y la privada; y además la Historia muestra una porción de soberanías que no se han determinado originariamente así, de la misma manera que tampoco las relaciones públicas y políticas son la mera ampliación y el variado desarrollo de las relaciones privadas (I).

El P. Taparelli, separado, con sólidos fundamentos y racionales, de la teoría escolástica clásica, y no orientado directamente por ella en este como en otros puntos, al menos en cuanto á la dirección, estructura y forma de la doctrina, coin-

(I) Haller discurrió bajo el influjo de un sano, pero exagerado y erróneo prejuicio contra la Revolución y sus fundamentos sociológicos y políticos en la doctrina del pacto social. De ella se deducía, como se verá en el siguiente capítulo, que el imperante supremo, lejos de ser esto, es un mero funcionario y mandatario del *pueblo soberano*. Haller, para hallar á la soberanía título propio, personal é independiente, no encontró mejores y más eficaces medio y razón que derivar la soberanía del derecho privado de propiedad, y considerar al soberano como un individuo, ó una comunidad propietarios independientes que gobiernan, para sus fines privados, á cuantos, por razón de esa propiedad del señor, están á él supeditados, y á los cuales debe regir justa y benévolamente, como el poderoso al desvalido, el fuerte al débil. El campo de observación, á que acudió el ilustre pensador suizo para confirmar tal principio y ley con la experiencia histórica, fué limitadísimo, la Alemania, donde, en efecto, los Estados confederados no fueron sino grandes feudos, y los soberanos grandes vasallos que rompieron casi todo el vínculo feudal, dejando subsistente una mínima parte de él. Por el hecho de ser los jefes de esos Estados ambas cosas á la vez, grandes señores territoriales, y gobernantes en sus feudos, confundió Haller las relaciones públicas de gobierno, y en particular la de soberanía con la privada de dominio en esos señoríos, convirtiendo hechos concurrentes en hechos relacionados por eficiente causalidad, y no ocasional tan solo, sin considerar que la jurisdicción (*lato sensu*) es cosa distinta del dominio, y que, aún habiendo tenido uno y otro origen coetáneo é igual procedencia, en la misma concesión figuraban como derechos y prerogativas diferentes, otorgados ó consentidos de grado ó por fuerza por el rey y Emperador á los grandes vasallos, á los cuales daba tierra por una razón y fin, y, por otros, les delegaba más ó menos amplias funciones de gobierno.

cedió con Haller en la traza general y en las bases capitales de ella; pero, con delicado y profundo análisis histórico, señaló no uno, sino varios modos y, por consiguiente, títulos de originaria determinación de la soberanía.

No pudo el eminente pensador prescindir de la generación de la soberanía en la paternidad y el patriarcado, modo natural de predeterminarse, perfeccionarse y consolidarse la autoridad pública por el mismo proceso con que la familia y la gens, sin solución de continuidad, dejan de ser sociedad doméstica y llegan á sociedad civil independiente, y su autoridad á soberana. Mas, al mismo tiempo, la Historia enseñaba al sabio jesuíta que no siempre la superioridad soberana viene preterminada, sin ruptura de sucesión, desde la sociedad doméstica y el poder paterno y patriarcal, sino que, fuera de la familia y la gente, y sin relación inmediata y conocida con ellas, otra superioridad social, por ejemplo, la del magisterio y la riqueza, pueden dar ocasión y poner á un sujeto en disposición, aptitud y oportunidad de ejercer la soberanía, esto es, de ocuparla de la manera que hemos expuesto. Esto coincide en el fondo con la generalización que he aventurado en el último párrafo de este número en la sección elemental, y confieso que me ha servido de criterio y base para ella (1).

(1) Creo, sin embargo, que se equivocó, dicho sea con el mayor respeto, el P. Taperelli, no solo en la manera con que explicó como del poder paterno procede naturalmente el poder soberano, sino al señalar otros hechos y circunstancias que también engendran la soberanía. Supone este autor que el padre, sobre los hijos emancipados que permanecen en tierras paternas, tiene, como propietario, el derecho de excluirlos de ella, si no se conforman con la ordenación del padre patriarca, y que de aquí derivan las soberanías de título y caracter territoriales: la soberanía procede de la legítima coacción dominical de excluir de la residencia, ó como si dijéramos, de la facultad penal de extrañamiento que el padre tiene juntamente con el dominio, ó que pudo reservarse al desprenderse de todo ó parte de él. Mas si bien se considera, hay aquí una petición de principio, en cuanto explica la soberanía por la soberanía misma, que á esto equivale explicarla por la coacción soberana penal de excluir. Lejos de eso, lo que había que fundamentar jurídicamente era la rectitud, la justicia con que el padre

Aparte de Taparelli, los autores antes mencionados, y sobre todo Meyer, dieron á esta teoría fundamentación escolástica, enlazándola vigorosa y sistemáticamente con el conjun-

patriarca, ó sus sucesores, aplicaban esa sanción penal á los que no se sometieran á su gobierno. En una palabra, el derecho de penar procede de la autoridad correspondiente, no viceversa. Los títulos ordenadores del patriarca, igual á los demás asociados, en concepto de hombre y de padre, son: *a)* el negativo de que los hijos y descendientes no son soberanos por ninguno de los dos conceptos, y menos como hombres simplemente; *b)* el positivo de la racional presunción de mayor prudencia, por los años, por la experiencia gubernativa, por el hecho de haber empezado á gobernar como padre; de la justicia más probable de mirar al procomún de los que están ligados á él por los mismos vínculos de filiación y descendencia; mientras que cualquiera de los hijos y descendientes más expuestos están á inspirarse en el interés particular y doméstico propios. De aquí, que el que gobernó primero como padre á los hijos, siga, sin solución de continuidad, gobernándoles como patriarca, y á cuantos forman parte de una ya más amplia familia ó gens, que es pública en cuanto es bastante numerosa; y que racionalmente *deban consentir* todos los súbditos (hijos, nietos, nueras, siervos, etc.), en una ordenación que fué naturalmente *ocupada* desde que no fué doméstica en el sentido más estricto de familia, (esposa, hijos no emancipados), es decir, desde el primer acto ordenador extra-familiar.

Cierto es que el dominio y sus consecuencias, esto es, la riqueza mueble ó inmueble del patriarca, proporcionan á su gobierno el poder material de física coacción, pero de él no nace la soberanía, porque el dominio es en sí mismo relación privada, y no puede, en concepto de causa eficiente, producir una relación pública. En las mismas monarquías patrimoniales y feudales venía el poder supremo predeterminado y originado de otros hechos y títulos; la posesión del suelo no hizo otra cosa que consolidar la soberanía al propio tiempo que la sociedad, dando á una y otra, con la estancia permanente en el territorio, la única manera posible de establecer, mediante el feudo más preciado y durable, el de tierra, las relaciones entre la autoridad y los súbditos, y, por consiguiente, la existencia y perpetuidad de la nación.

Sería alargar demasiado esta nota, y ageno al propósito y objeto de ella, señalar como la superioridad providencial de la primogenitura y la consiguiente reverencia que inspira, son el principio natural de la sucesión en el patriarcado, y el suave impulso con que atrae al reconocimiento de ella. Sin embargo, en sociedades incipientes y atrasadas no debió ser frecuente la sucesión hereditaria patriarcal, sino que se interrumpiría por la ocupación violenta del poder, realizada por el más bravo, fuerte, poderoso y au-

to de la común doctrina filosófico-jurídica tradicional en la Escuela.

3. Casos de sucesión *inter vivos* de la soberanía son la re-

daz, que es la superioridad que más se destaca en naciones y épocas incultas, la casi exclusiva de ellas, y la más necesaria y aun providencial para constituir grupos nacionales mediante la fuerza y la conquista, para defenderse y para invadir, y asentar sobre esta base amplias comunidades públicas en forma de monarquía militar. Así se debieron constituir los grandes imperios orientales, á diferencia de las monarquías de los bárbaros, militares también, pero en las cuales el caudillo, aunque ocupador de la soberanía, en razón y por el título principal de la superioridad guerrera, no lo hizo por violencia, sino más bien con el consentimiento racional de sus súbditos que lo reconocerían y aclamarían, y aun alguna vez le elegirían por el voto de los principales ó optimates de la aristocracia guerrera, y con la aquiescencia y aplauso de todo el pueblo.

Tampoco creemos que el magisterio ó las riquezas por sí sólo sean el hecho que concrete la soberanía, aunque puedan ser una causa ocasional y un instrumento y factor concurrentes.

En efecto; la docencia, ora obligatoria, ora libremente aceptada ó elegida, aunque sea pública por el propósito y por el número de discípulos, no implica más superioridad que la de la inteligencia, la doctrina y el saber, no otras; ni de ella deriva más autoridad que la necesaria para el fin docente y el orden indispensable al mantenimiento de la asociación enderezada á él. El maestro no necesita más coacción que la precisa para ello, y carece, por lo tanto, de título para otra más amplia, agena á las recíprocas relaciones de docencia y discencia; y aunque pueda llegar, con justa causa, á la aplicación de pena mayor, que es la cesación del magisterio á los que sean indignos de recibirlo, ni puede con justicia aplicarla á los que no se sometan á su autoridad, cuando pretenda ser más que docente, ni esta pena tendría, por su entidad, eficacia bastante para obligar á ser totalmente súbditos á los que solo lo son en conceptos de discípulos. Cierto es que á Mahoma, maestro de sus tribus, le dió no poco prestigio el magisterio, pero aun siendo éste universal, es á saber, desde religioso á social, político, higiénico, etc., no le hubiera dado la soberanía, si á la sola habilidad de zurcidor de *dogmas* y de inventor de religión no añadiera el impostor árabe sagacidad, dotes políticas y, sobre todo, las de la voluntad: la fortaleza, el valor guerrero, la constancia para triunfar, como caudillo fiero y aguerrido, de los que amenazaron en su origen la autoridad del *profeta*, y, en la cuna, á la nación que fundó con elementos étnicos, disgregados y dispersos en tribus independientes y enemigas.

nuncia, y la abdicación, que es un modo especial de renuncia; mas, por de pronto, á cualquiera le ocurre que no son naturales y frecuentes, sino accidentales, anómalos y extraordinarios, y no pueden entrar por esto en una clasificación y división de los modos de sucesión de la autoridad civil.

La renuncia de la soberanía es, como la de otro cualquier derecho, el acto voluntario de dejar la posesión y ejercicio de aquélla, y sin tratar aquí, al menos directamente, la cuestión moral, no necesaria, aunque útil, de si la soberanía es siempre y *per se* un deber, y si es ó no renunciable en todo caso, nos limitaremos á manifestar: 1.º que la justicia, en el supuesto del deber de la soberanía, y cuando no la justicia, la benevolencia y la misericordia, con el estímulo natural de los atractivos morales y materiales, aún lícitos, del poder, hacen de la renuncia de aquélla un acto excepcional y rarísimo; 2.º que en las poliarquías, y cuanto más numerosas, ó más verdaderamente aristocráticas por la superioridad efectiva de los poliarcas, tiene más libertad moral, jurídica, y acaso también legal, cualquiera de aquellos, para dimitir en la comunidad de

Tampoco la riqueza es más que riqueza, es decir, cosa extrínseca á las cualidades personales, de las que, solo puede, cuando más, argüir el trabajo honrado y la habilidad de empresa. Legítima y discretamente empleada dará influjo y poder social, y hasta la base y el núcleo del que necesita la soberanía, pero bien se ve que en este caso son las cualidades morales que implica ese recto y meritorio uso de la riqueza, no la riqueza misma, las que pueden determinar la soberanía en el rico superior, no en un rico cualquiera. Las riquezas proporcionaron á Lorenzo el Magnífico ocasión, posición y medios, no solo de desplegarlas fastuosamente, y para sus fines personales y políticos, sino para hacer manifestas otras cualidades, é intervenir en los negocios públicos como militar, diplomático y gobernante. Con estos medios no adquirió legítimamente, sino que ocupó por detentación dictatorial la soberanía de su república, soberanía que ya le dejó como incoada su padre, y que, por falta de dotes, no pudo mantener su hijo, á pesar de sus riquezas y de la tradición hereditaria que empezaba á iniciarse.

De todo esto se desprende que de la doctrina de Taparelli hay que admitir la indicación general y profunda, la traza de la teoría, no las deducciones y soluciones concretas.

los otros la parte de soberanía, que bien que *pro indiviso é in solidum* le corresponde, sin que pueda por ello decirse que abandona el poder; 3.º y *á contrario*, la renuncia de la soberanía, en algunos casos, el de un poder uni personal, cuando no está establecida ó asegurada la sucesión, ó el de una poliarquía muy limitada, por ejemplo, un triunvirato, puede constituir, en el primer supuesto, abandono, en el segundo, grave perjuicio y aun imposibilidad de gobierno.

En cuanto á la abdicación, que es una especie de renuncia, la que se hace dejando la autoridad real al sucesor previsto ó designado según ley ó costumbre, puede justificarse aun moralmente, cuando éste se halla en edad y en aptitud de sustituir al monarca abdicante, sobre todo en naciones sólidamente constituidas, adelantadas en la virtud del mayor número, especialmente de las clases directoras, y en las cuales el cumplimiento de los fines propios de la sociedad civil, su existencia y prosperidad dependen menos de la acción real que de la acción y cooperación concordes de otros órganos sociales y gubernativos. En tal caso, cuando el abdicante, aun llamándose Carlos I, tiene por sucesor á un Felipe II, en plena edad viril, con dotes de saber, fortaleza y prudencia ya experimentadas en el gobierno, bien puede el rey descinsar de las fatigas y preocupaciones, del enorme peso de los negocios públicos, y más que por el desengaño y por el hastío, por el más especial y exclusivo cuidado del alma y cumplida preparación para la muerte, dejar la corona y aun el mundo, declarándose muerto para cuanto no sea asegurar todo lo posible la inmortal vida (1).

(1) Es este para monarcas y poliarcas asunto de conciencia, y no habrá legislación tan aciagamente *previsora* que provea á tales casos. La renuncia y la abdicación pueden ser, según las circunstancias, ó indiferentes, ó pecaminosas, ó meritorias y hasta heroicas inclusive. ¿Qué ley puede concebir y determinar *a priori* las contingencias que en cada caso determinan la moralidad de tal acción? Un rey desconceptuado y abominado justamente deberá abdicar; otro que tenga un sucesor inepto ó depravado deberá retardar cuanto pueda el triste momento en que el sucesor ciña la corona. Un rey,

Ya más adelante, al tratar de la soberanía del pueblo, saltará á la vista, aun sin necesidad de señalarlas, las consecuencias que, respecto de la sucesión, se desprenden del supuesto de ser la soberanía derecho nativo de todos, y del hecho de convertirse en la práctica en el derecho electoral de los menos.

4. No nos incumbe tratar aquí de los motivos y fundamentos puramente civiles de la usucapión en materia privada, y que no me parecen otros, si es que no han de ser contrarios á la moral, que la libertad racional, por parte del Estado, de no conceder su tutela indefinidamente, y amparar ante los tribunales siempre y en todo caso, derechos perdidos por negligencia ó cualesquiera otras circunstancias independientes de la voluntad de los interesados. Tiene hartó que hacer y en qué pensar la autoridad pública, cuya acción y medios son limitados, para constituirse en providencia y salvaguardia incondicional y perpétua de intereses, que, por legítimos que sean, no afectan directa y solidariamente al procumún, el cual más bien saldría perjudicado de que el poder civil, ó el de otra sociedad pública cualquiera, multiplicasen sus atenciones y oficios, descuidando los más importantes y perentorios por acudir á otros que lo son menos. Quiere esto significar que, aunque moral y jurídicamente, los derechos privados son imprescriptibles, pudiendo decirse que siempre *res ubicumque sit pro suo domino clamat*, es la usucapión de los derechos privados un caso de colisión entre cada uno de éstos y el interés que tiene la sociedad de que, con perjuicio de ella, no haga la autoridad civil más de lo que puede y debe. He aquí la analogía entre la usucapión civil, ó mejor dicho privada, y la po-

aun justo y glorioso, puede encontrarse en tan excepcionales circunstancias, que sea abnegación y sacrificio, aunque no obligación, descender del trono. No repugna que en las poliarquías resuelvan los poliarcas si han de aceptar la dimisión de uno de los cosoberanos; pero en una y otra forma de gobierno, este punto, aun siendo jurídico, no es de los que están previstos en la constitución, ni de los que generalmente se resuelven por tribunal alguno.

lítica, de que se trata ahora: ambas derivan de un interés público, siendo las diferencias las que median entre los correspondientes derechos que *pugnan por razón de actual y accidental incompatibilidad*, y de las cuales se han expuesto las que importan al asunto de la presente materia.

En una y otra, el hecho consumado, intrínsecamente inmoral por contrario á la divinidad (lato sensu) de todo y cualquiera derecho, y al título, ó sea, razón objetiva inmediata que lo concreta en el sujeto, el hecho injusto formal y materialmente no engendra derecho dominical ni soberano, pero da ocasión á que otras circunstancias adjuntas determinen la aplicación de otros derechos de título superior. Nada por el detentador inmoral é injusto de la cosa ó de la soberanía; todo por la sociedad y por sus intereses, que en tales colisiones, una real, y aparente otra, deben ser preferidos en virtud de la importancia del derecho y de la evidencia y universalidad del título (1).

Ya se vé, pues, la radical oposición entre esta teoría y la de los hechos consumados, incompatible con el concepto racional y cristiano del derecho, y que fluye de toda concepción naturalista, así la del materialismo como la del pseudo espiritualismo panteísta, en los cuales se identifican y confunden el orden moral y material, siendo el derecho mera potencia física, *pleno y perfecto el derecho*, en cuanto el hecho es totalmente efectivo.

Esta teoría, que tiene tan honda dañada raíz y amplias y subversivas aplicaciones en el derecho público interno y en el internacional, es la misma de Spinoza, de todos los panteismos y materialismos, y á todas las manifestaciones de uno y mismo naturalismo jurídico es aplicable el axioma monista y fatalista de Hegel que hemos citado en el texto. El día en que *la rec-*

(1) Una diferencia muy señalada es que el usurpador de la cosa nunca será moralmente dueño legítimo, mientras que el de la soberanía, siempre por razonable y justa conveniencia social, puede purgar la ilegitimidad de origen, purificar su detentación y ser soberano *jurídica y éticamente*.

titud del hecho consumado se aplicara á todas las relaciones públicas, y se enseñoreara del derecho privado, sería imposible la sociedad, y, por lo tanto, la vida. ¿Qué mayor prueba del absurdo? (1).

No es, pues, triunfo ínfimo y desastroso del mero *hecho* completo, sino del derecho social, la usucapión soberana, la cual, según el grado, entidad y apremio de aquel supremo derecho, puede presentar el caso de una detentación aparente bajo la cual exista un título perfecto de ocupación legítima, fundado en un patriótico deber. Tal fué el caso de D.^a Isabel la Católica, á la cual ni la opinión popular entonces, ni la Historia luego, ni la equidad ni la ciencia jurídica pudieron tachar de usurpadora, sombreando con esta culpa de origen aquel gloriosísimo reinado, y con la más leve mancha de injusticia la figura augusta y luminosa de tan santa mujer como insigne princesa. Entre la justicia de sus títulos y una legalidad, si indiscutible en derecho privado, incompatible con el honor del solio y con la dignidad de un gran pueblo, este apenas vaciló, y con las contadas excepciones de una hidalguía mal entendida, ó de torpes y bastardos intereses, apenas dejó á la infeliz D.^a Juana, hija menos que presunta del cuarto Enrique, otro título y apoyo que el de las armas extranjeras.

No concluiré la ampliación correspondiente á este número sin llamar la atención del lector acerca del uso y relaciones

(1) Aunque discrepe no poco de esta teoría en cuanto á los fundamentos metafísico jurídicos, es idéntica en cuanto á los resultados, y puede llamarse también del *jus facti completi* la de cierto fatalismo *conservador*, *pseudo cristiano*, que da á todos los hechos una rectitud derivada de su condición de providenciales, sin distinguir, con grave y hasta blasfema injuria á Dios, entre la providencia negativa que permite, por no impedirlo, el mal, y la providencia positiva y santa, que no es nunca autora de él. Esta doctrina, ideada y sostenida con el propósito de defender y consolidar contra la Revolución, instituciones tradicionales legítimas, es, como dice Meyer, *anceps principium*, espada de dos filos que, con el respetable nombre de derecho histórico, puede justificar aun más que la monarquía y el antiguo régimen, la Revolución, el protestantismo y otras iniquidades de sólido arraigo temporal.

que tienen los términos *usucapión* y *prescripción*, cuya sinónimia actual es la misma que en derecho privado, prescindiendo ya de las diferencias puramente históricas que entre prescripción y usucapión hubo en el derecho privado romano prejustiniano.

Tratándose, como se trata, de un modo de adquirir la soberanía, es término más expresivo y propio por su misma composición etimológica el de *usucapión*, de la misma manera que en derecho privado el título adquisitivo de la propiedad ó de las servidumbres. Pero también puede decirse que el propietario adquiere por prescripción, en cuanto esta es la excepción con que rechaza y paraliza la acción reivindicatoria del actor, y por analogía también puede aplicarse á la adquisición de la soberanía, aunque no haya tribunal ante el cual se alegue y excepcione, por cuanto el detentador sin título excepciona en derecho contra el soberano desposeído, invocando el ya expresado legítimo interés de la sociedad nacional. Las necesidades y elegancia de la elocución determinarán el uso de este ó el otro término, de los cuales uno contiene uno de los factores adquisitivos, el uso mediante el tiempo, y el otro el acto que pone término á la detentación y la sella de soberanía legítima. Con referencia al soberano legítimo, de la misma manera que al propietario, suele decirse que han prescrito sus títulos; pero con respecto al poseedor sin título originario lo mismo puede aplicarse un término que otro.

5. El poder soberano puede y debe determinar de antemano en la ley hasta qué tiempo otorga á la legalidad y á la justicia del título privado la protección tutelar, y, por lo tanto, la correspondiente acción judicial de los tribunales, ó la ejecutiva de la autoridad civil; pero sería ridícula, además de peligrosa y tentadora, una disposición constitucional que expresara en qué tiempo prescribían las soberanías desposeídas.

En cuanto al espíritu público, bien puede afirmarse que hace aquí, en cierta manera, á falta de otros, las veces de fiscal, testigo, juez y ejecutor. Decimos que en cierta manera, por-

que los súbditos no dejan de ser súbditos, pero la carencia de tribunal, da al juicio y á la acción pacífica ó armada de la sociedad un valor, eficacia y poder excepcionales y extraordinarios.

Porque el caso de detentación no es el caso de un litigio tranquilo entre dudosos derechos soberanos, en el cual los órganos y cuerpos sociales inmediatos á la soberanía, quedan de hecho imperantes supremos que ejercitan una soberana función constituyente, como la del Compromiso de Caspe, sino que estas entidades superiores, sin perder su jerarquía social, no por eso dejan de estar sometidas, de derecho al soberano legítimo, y de hecho al detentador injusto, cuando ha consumado, y en la parte y proporción con que consumare el despojo. Entonces no pasan de ser factores y órganos de ese espíritu público, á cuya formación, expresión y actuación contribuyen todas las personas individuales y colectivas en sus respectivos estado, condición y clase: noble, plebeyo, burgués, militar, hombre civil, familia, concejo, región, universidad, gremio, etc.; pero no pueden, ni deben, por lo que al soberano desposeído concierne, actuar de jueces y legisladores. Les falta para ello superioridad de derecho y de hecho, aunque no, por la situación anormal y calamitosa, pierdan su jerarquía y el valor é influjo sociales correspondientes.

6. No hay para qué decir que las respectivas relaciones privadas, y aun las públicas que no estén directamente conexas con las respectivas situaciones de los dos soberanos, el de hecho y el de derecho, no se cambian, por regla general y esencialmente, bien que se modifiquen y diversifiquen por el imperio accidental de las circunstancias. Así es que, generalmente, se deben soberano legítimo y detentador entre sí, y les debe la sociedad, el respeto absoluto é ilimitado de ciertos derechos, por ejemplo, el que tienen á la verdad, al honor y á la fama que les corresponda; otros, sin más limitación que las que impongan los hechos, esto es, las respectivas posiciones y los títulos preferentes en la colisión variada y compleja engen-

drada por tan anómala como difícil situación de los soberanos y de la sociedad civil (1), á cuyo interés legítimo ya hemos

(1) Por no corresponder el punto, en su totalidad, no solo al capítulo, pero ni siquiera á la asignatura, y ser esta una complicadísima cuestión, ó mejor, un conjunto y enlace de cuestiones tanto jurídicas como morales, pertenecientes, en no mínima parte, á más altas disciplinas, superiores á mi competencia, no debo insistir sobre el tema, limitándome á algunos ejemplos comprobatorios y aclaratorios, útiles para poner al lector en camino de más profundas indagaciones y orientándole para ellas. Puede al detentador, por ejemplo, ocultársele la verdad, pero no alterarla, ni siquiera negarle la que estrictamente le deban las personas, según las respectivas relaciones en que estén con aquél. No hay para qué, ni se debe, elogiarlo directamente, y sin necesidad, pero cuando no se pueda menos, es inhumano negarle el honor y fama debidos, es decir, el juicio que merezcan sus acciones. Por vía de pena, habrá que restringirle algunos derechos ó privarle de ellos, por ejemplo, la propiedad, la misma vida, pero siempre mediante juicio, y por tribunal ordinario ó extraordinario; y así no podrá persona alguna matarle, como no sea en combate, ó en uso legítimo del derecho de defensa. La misma pena de confiscación es cuestionable que pueda serle impuesta, aunque sea lícito el secuestro total por vía y en concepto de indemnización de daños y perjuicios, no ya civil, sino pública y nacional.

En cambio, al soberano desposeído, mientras la usurpación comienza y se desarrolla, y aun á raíz de su completo éxito, puede decirse que, en general, se le deben plenos é íntegros sus derechos nativos y adventicios, privados, públicos y políticos. Lejos de negárselos y restringirlos, habrá en las sociedades honestas una benévola y generosa tendencia más bien á ampliárselos, abultando hidalgamente los merecimientos, ocultando ó atenuando las faltas, y elogiándole *oportune*, y tal vez *importune*, aunque sin daño de la verdad y de la justicia. Después que arraigue y se consolide la detentación, y vaya avanzando y al fin se ultime la usucapión de la soberanía, los derechos del desposeído no tendrán, á pesar de ello, otros límites que los que directamente le impongan los derechos de la sociedad y los que en contemplación de ella, gana el detentador. Así, hasta puede llegar el caso de no tener derecho el soberano desposeído á la residencia en territorio nacional, y esto no por vía de pena, sino para que con su estancia en él no mantenga y fomente las divisiones intestinas, poniendo en peligro la paz pública, y hasta preparando de nuevo la guerra civil. En ningún caso, mientras no delinca gravemente verificando actos de reivindicación, que será injusta en la misma proporción que de éxito improbable, ó por descabellados medios intentada, no hay derecho á imponerle más privación de derechos y limitación de libertad que las estrictamente precisas, y esto no por

visto que deben subordinarse los derechos políticos del soberano y del detentador.

La cooperación, que en todo tiempo y ocasión debe la sociedad á su gobierno, se rige esencial y generalmente por los mismos principios y reglas en caso de ordenación verificada por la soberanía legítima que por el usurpador de ella. Así es que para el desempeño de los cargos públicos, que es derecho, y aun deber de los ciudadanos en ciertos casos, según las varias condiciones de vocación, aptitud y profesión, hay que atenerse á los preceptos generales y comunes que en otro capítulo han de manifestarse. El criterio especulativo y práctico es el siguiente: *nada por, ni para el detentador injusto; todo por y para la patria* que en conceptos varios, necesita y exige racional y justamente el concurso de sus hijos. Si desde que el empleo militar ó civil dejó de ser una relación privada de forma feudal, el cargo público no se tiene ni por graciosa concesión del soberano, ni para su servicio, provecho y honor directa ni principalmente, menos constituirá vínculo de lealtad y gratitud personal respecto del detentador injusto. El cual, si gobierna bien, y elige para los empleos según justicia distributiva, no da por munificencia cosa suya, ni nada se le debe por el derecho que reconoce y otorga.

Lo que hay es que, generalmente, y más en los modernos tiempos, usurpación é inicuo, tirano nepotismo van juntos; los

hostilidad y malquerencia, sino en virtud de una dolorosa necesidad de que no es el único ni el principal responsable, si es que tiene alguna responsabilidad personal, pues puede muy bien no tener ninguna, como acontecerá á los descendientes y sucesores del soberano desposeído que todavía mantengan íntegros sus títulos por falta de usucapión en el detentador que sea además injusto gobernante. En virtud de estas consideraciones, puede categóricamente afirmarse que el secuestro de la propiedad particular de los soberanos legítimos desposeídos y desterrados por la Revolución triunfante es una medida inícu y odiosa, un despojo que lleva el sello de la feroz enemiga sectaria, y que es tanto más opuesta al derecho, á la moral y á la religión, cuanto que esos príncipes mantienen, por regla general, firme, completo y válido su derecho en frente de gobiernos esencialmente desordenadores.

cargos públicos en su mayor parte se consideran botín de los partidos parlamentarios, y la concesión y aceptación de empleos y honores es como un sello infamante que rechazan los hombres de verdad, justicia, conciencia y decoro, complicándose así, por razón de circunstancias, los principios y reglas de moralidad política en este orden (1), pero siendo mucho mejor, por de más moralizador ejemplo, una conducta de absoluto desvío, que contraste con el servilismo é indignidad que en estas sociedades corrompidas se apresuran á aceptar, acoger, apoyar y adular al injusto éxito triunfante. Es justo y

(1) De la forma y constitución feudales de los cargos y servicios públicos se ha tratado ya, bien que por incidencia, en varios pasajes y directamente se tratará en más oportuno capítulo. Ahora me circunscribiré á algunas reglas referentes á la situación actual de los legitimistas, y en general, de los verdaderos católicos y patriotas en distintos Estados europeos que no hay para que nombrar.

La tesis es que no es ilícito, y hasta puede ser circunstancial y excepcionalmente obligatorio el aceptar y desempeñar un destino cualquiera; pero generalmente non *debet*, porque, como el nepotismo liberal parlamentario sólo los otorga á los *amigos* y *paniaguados*, se produce, y más en una sociedad honesta, el escándalo de ser confundido con aquéllos. No hay inconveniente alguno en aceptar los empleos, cuando una ley previa orgánica marque las condiciones de la obtención y de los ascensos en la carrera correspondiente, sobre todo si en ella se ingresa por oposición.

El mismo criterio domina, en *tesis*, en cuanto á la aceptación de honores y condecoraciones, pero en la *hipótesis* actual es todavía más indecoroso el recibir esas muestras de distinción, no sólo por las razones dichas, sino por lo que se han rebajado y envilecido títulos, cruces, etc., así por el abuso de la concesión, como por la clase y condición de los agraciados. Además, bien que éste discernimiento de honor y fama hecho por el poder civil, si es justo, (y puede ser también hasta debido), á nada obligue, no es necesario, ni siquiera de utilidad inmediata para la cooperación al gobierno nacional, y apenas se concibe caso y circunstancia en que la aceptación resulte deber de patriotismo. De tal manera que, aun en caso de detentación no complicada por el estado y caracteres sociales y políticos de las modernas sociedades, la regla general de prudencia y decoro debe ser una cuando menos reserva en la admisión de estos honores, y mejor aún la renuncia de ellos, contentándose con el honor y fama que discierne y otorga la sociedad, de varios modos, en distintas formas, y por el ministerio de diferentes órganos.


obligatorio mantenerse dentro de la justicia con moderación, y sin alardes de arrogante jactancia; pero en la duda, más vale no quedarse corto en el desdenoso apartamiento de estas situaciones de neta iniquidad y mera fuerza, que dar á la flaqueza humana y á los desordenados apetitos de codicia, ambición, orgullo, vanagloria, etc., las apariencias falaces y corruptoras de patriotismo, si es que no de religión, y encubrir con velos de prudencia fingida una concupiscencia hipócrita y desenfrenada.

7. La doctrina de este número pudiera condensarse rigurosamente en un silogismo, cuya premisa mayor, la usucapición por interés social, ha sido la materia de los números anteriores, y cuya premisa menor, la injusticia esencial y la indefectible desordenación propias de los gobiernos liberales, fué en parte asunto de anteriores capítulos, y lo será, sobre todo, de aquellos otros en que se trate directamente de los gobiernos á que en la sección elemental se hace referencia. Los defectos de esos gobiernos serán obstáculo á la usucapición, y paralizarán la prescripción de la soberanía legítima, en la proporción y grado en que tales gobiernos sean desordenadores por accidente ó por esencia; de donde resulta que la prueba incoada de la premisa menor no será plena y notoria hasta más adelante.

En esta relación jurídica corresponde á la Iglesia la potestad indirecta que en los demás asuntos temporales, y puede usarla cuando y como lo tenga por conveniente, resolviendo *ad salutem animarum* si uno usucape, y prescribe el otro los respectivos derechos, ó, si por el contrario, mantiene la legitimidad la validez, integridad y eficacia de sus títulos jurídicos. Mas en esto, la exquisita prudencia de la Sede Apostólica la retrae generalmente de pronunciarse en uno ú otro sentido, y sobre todo, á favor de las soberanías legítimas, á fin de evitar justamente el mayor mal de provocar contra la Iglesia y los fieles las iras y persecuciones por parte de los gobiernos de hecho, con quienes mantiene y necesita mantener la Iglesia las

relaciones necesarias para el cumplimiento de su divina misión.

La Iglesia sólo, y no ninguna otra persona, puede fallar con criterio infalible cuando deban los ciudadanos prescindir definitiva ó temporalmente de la legitimidad, como único medio, camino y vehículo de restauración católica y nacional, y sustituir la adhesión al soberano desposeído, por la aceptación de diversas clases y grados de las *legalidades* imperantes de hecho, siendo, mientras tanto, lo más seguro y menos expuesto á grave infracción de capitales deberes políticos guiarse por las reglas de todo el presente capítulo, imitando la constancia irreductible con que los Soberanos Pontífices, incluso el reinante, mantiene sus títulos de soberano temporal en los Estados pontificios en frente y contra la usurpación perpetrada por los piemonteses.



CAPÍTULO VI

LA LEGITIMIDAD Y LA REVOLUCIÓN. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.

1. Dedúcese de la doctrina de los anteriores capítulos que la legitimidad no se atribuye á la soberanía de distinta manera que á los demás derechos, así públicos como privados, todos los cuales son y se dicen legítimos en cuanto conformes con la ley, es decir, en cuanto derechos concretados en un sujeto por hecho y título justo. Implica pues la legitimidad a) la razón abstracta de derecho; b) su determinación ú origen en una persona física ó moral, en virtud de hechos ó causas que, conformes con la naturaleza del derecho, se lo atribuyen á una persona y no á otra. *El hecho ó hechos en cuanto próxima razón objetiva que determina en un sujeto la existencia y eficacia del derecho y el reconocimiento y respeto de él por las demás personas se llama título.* En tal respecto, también las soberanías modernas pudieran por sus partidarios llamarse legítimas, puesto que también presumen de justamente concretadas, pero se ha convenido en designar con el término antonomástico de legitimidad á toda soberanía de título opuesto á los del derecho nuevo, en cuanto revolucionario y liberal.

Soberanía legítima equivale, pues, á soberanía histórica ó tradicional; histórica, porque su primitivo título es anterior á la edad contemporánea, y porque no ha perdido, antes ha acrecentado con el tiempo, la razón de su derecho soberano la persona que lo posee; tradicional, porque siendo histórica debe haber recibido de la historia las ventajas que da á todas las instituciones la continuidad progresiva de ellas, la perfección natural inherente á la continuación de la vida, las consiguientes excelencias, las cuales, tratándose de la soberanía, son las expresadas en los anteriores capítulos de este libro y en el tercero del libro segundo.

Y soberanía legítima ó histórica es tanto como soberanía antirevolucionaria en el sentido de soberanía, a) que por naturaleza repugna mudanzas radicales y violentas, así del sujeto de ella, como en el organismo de la institución, aunque, por accidente, puedan y aun deban esas mudanzas verificarse en casos anómalos y extraordinarios: b) soberanía que en ningún caso, ni siquiera por accidente, debe concretarse, constituirse ni mudarse según los principios filosóficos, sociológicos y jurídicos de la Revolución francesa, y de las que, á su imitación, y por su espíritu é influjo, se verificaron en el Continente en el decurso de la presente edad.

2. Lo cual significa que hay que distinguir entre la revolución y la *Revolución*, esto es, entre la revolución en abstracto, y la que, por su naturaleza especial, caracteres y trascendencia, ha monopolizado el nombre: la revolución que estalló en Francia en 1789, y que

venía preparándose de larga secular fecha en Francia y en toda Europa.

Revolución, en general, así en el orden moral como en el físico, tiene varias acepciones, pero en el sentido en que aquí se toma, equivale á *mudanza súbita y radical, ó cuando menos ámplia y trascendente, en el estado actual de un ser*. Por eso, refiriéndose á una institución, es ese mismo *cambio brusco y violento, no limitado ni secundario, que la transforma ó la modifica considerablemente*.

La revolución en sí no es mala, porque puede ser justa y oportuna, cuando reuna las condiciones de rectitud por el fin y los medios, y además sea necesaria ó útil, y no falte á la prudencia y á la moderación, compatibles con esos cambios y trastornos, é indispensables, bien que difíciles, en ellos. Es oportuna siempre que sea procedimiento supletorio del medio natural y de la manera ordinaria de verificarse la tradición y el progreso á la vez, esto es, cuando deba y tenga que sustituir á la reforma. La cual *es la mejora sucesiva, normal, proporcionada, no interrumpida ni violenta, de las personas y de sus actos, de las instituciones y de sus leyes*. De lo cual se deduce que la revolución *a)* es un medio y vehículo extraordinario de progreso; *b)* que puede ser útil ó necesaria, lícita ú obligatoria además; *c)* contraria á una tradición mala por injusta; *d)* conforme y armónica con una tradición buena, pero imperfecta, á la cual, con ese cambio repentino y violento, da la perfección correspondiente al tiempo trascurrido, ó acaso superior á la época y al término medio y corriente de su cultura. Solo cuando la revolución se propone un mal

fin, ó por malos medios prosigue un fin ilícito ó lícito, ó cuando es innecesaria, inútil ó perjudicial, puede decirse ilegítima; y, *á contrario*, desde lícita á gloriosa, será siempre que sea buena *ex integra causa*, esto es, por el fin y por los medios, y se verifique por precisión inexcusable, ó para grandes, positivas y racionales conveniencias.

Con referencia á la soberanía, la revolución puede dirigirse, ora á la sustitución violenta del soberano, por causa legítima de que se tratará más adelante, ó por usurpación de que ya se ha tratado en el anterior capítulo, ora á la constitución de la soberanía de forma monárquica ó republicana de que se hablará á su debido tiempo, así como de las revoluciones en todo el organismo del Estado y del Gobierno.

Síguese también de lo dicho que son órganos y factores de revolución legítima los que lo son de acción social y jurídica en la nación, y cuantos, en distinta condición y jerarquía, contribuyen á ordenar la sociedad á sus fines, desde el soberano á los súbditos, que, de cualquiera modo y en cualquiera estado, realizan funciones políticas. Así, el soberano debe ser el primer revolucionario, y desempeñar en esta vía los oficios y cumplir los deberes correspondientes á su posición y autoridad.

3. Si puede haber, y ha habido de hecho, revoluciones buenas, la Revolución francesa, es decir, la Revolución, fué total y absolutamente mala é ilegítima, no por inoportunidad, pues cuando estalló era llegado el caso de hondas, extensas y perentorias mudanzas en todos los órdenes de la vida y del derecho, sino por el error

fundamental de sus principios y doctrina, por la injusticia de los fines y por la inmoralidad é iniquidad de sus procedimientos.

En efecto, la doctrina filosófica y jurídica de la Revolución fué, ó el puro naturalismo francamente materialista, ó un deísmo que, por sus deficiencias especulativas y sus resultados prácticos, equivale á la negación terminante de un Dios personal, creador, legislador y providente. De aquí la radical aberración acerca del fin del hombre y de la sociedad, y de la naturaleza, principio y fin del Derecho. En una palabra, Revolución y liberalismo son una misma cosa, y aun es frecuente compendiar en el término Revolución la síntesis de todos los errores y extravíos del sistema, como quiera que la Revolución fué teóricamente la fórmula de ellos, y en la práctica, la violenta y fiera ejecutora de todos los delirios que le consintieron realizar la naturaleza y la Providencia.

Consecuente con su fundamento liberal y con la concepción antropológica que el liberalismo implica, profesó la Revolución la independencia del hombre, no sólo en el sentido general y abstracto de la especie humana, (género humano, humanidad), sino del hombre individual, de todo y cualquiera hombre, llegando á esta conclusión, que no se desprende lógicamente de la primera, por la eficacia y acción de varias causas: a) una radical, universal y constante, esto es, el orgullo y la soberbia del hombre caído, *fomes peccati* que mueve á todo hombre á romper los vínculos de cualquiera legítima dependencia, y á declararse y ser tanto como otro; b) el influjo perenne y sugestionador, así especulativo

como práctico, de lo que podemos llamar, en cierto modo, la naturaleza y el carácter de la Edad moderna, es á saber, esa misma independencia irracional, pecadora y anticristiana, que, por caminos diversos, con más ó menos lógica, por lucubración sistemática, ó por móviles prácticos de mayor ó menor protervia, ha engendrado en todos los órdenes del pensamiento y de la vida un falso é insano individualismo, cuyas principales manifestaciones fueron el protestantismo en la religión, el cartesianismo en la filosofía y la Revolución en la sociología y en las varias esferas del derecho.

De aquí que el *ideal* y el objeto aparentes de la Revolución fuesen restituir á los hombres la posesión de sus derechos naturales é imprescriptibles, no según el concepto y sentido cristianos del doble y armónico criterio de la igualdad de naturaleza y de las legítimas desigualdades, personales é históricas, de cada estado, sino según el nivelador igualitarismo explicado en el Capítulo IX del Libro II. Pero no siendo esto posible, y traduciéndose de hecho todos los sistemas que ponen el fin del hombre en el hombre mismo, en el goce material y sensual como último bien humano individual y colectivo, y reduciéndose los pseudo individualismos á tiranía y opresión ejercidas por los fuertes sobre los débiles, la Revolución y sus hombres, á vueltas de fingidos alardes de igualdad y fraternidad, y enojosas é insinceras declamaciones de igualdad, libertad, derecho y justicia, no tuvo más propósito, móvil y aspiración que el despojo de unas clases por otras, la traslación de la riqueza y el poder de la monarquía y de la aristocracia á una burguesía despreocupada y sin sen-

tido ético. El *non serviam*, sofisticamente distrazado de libertad, encendió en el corazón de las muchedumbres el fuego de las concupiscencias más brutales, y, con la fuerza de la pasión y del número, realizó la expoliación, sin reparar en medios, erigiendo en sistema y procedimiento el crimen, hipócritamente mal cubierto con el ropaje de la ley, de la virtud y hasta de civismo y de humanitarismo magnánimos.

4. Principio fundamental, á la vez que corolario, postulado y fórmula de tales metafísica, sociología y derecho no pudo menos de ser el natural, lógicamente indefectible, de toda independencia é individualismo así entendidos: el pacto como razón, origen y título únicos de la sociedad en general, de todas las relaciones sociales y de las leyes por que se rigen, y esto sin distinción de relaciones privadas y públicas, políticas y no políticas. Entre los que son independientes, no en este ni el otro respecto, sino en todos, no cabe otra manera de nexo que el que se conviene, el que se contrata; y, por consiguiente, si la sociedad, conjunto variado y complejo de recíprocas uniones, cooperaciones y dependencias, existe, es porque los independientes la han libremente querido y pactado con y en un pacto que implica y contiene: a) la unión b) el medio, condición é instrumento de ella, la subordinación á una autoridad social, á un poder, sin el cual la permanencia de la unión es imposible.

Esta doctrina, la del pacto de unión y, consiguientemente, de sujeción, es común á todos los pactistas, desde los autores protestantes de derecho natural, (pri-

meros doctrinarios y *conservadores* que quisieron conciliar el derecho histórico y la legitimidad soberana con este principio falsamente individualista y disolvente y anárquico por naturaleza), hasta Rousseau, que extrajo de él todas las consecuencias políticas, bien que teniendo que dar con otra contradicción opuesta á la de los tratadistas de la *Reforma* pero no menos evidente que aquella; desde los sociólogos, juristas y políticos que elaboraron el pacto por la necesidad, sugestión é impulso de prácticos intereses, (lo mismo Grocio que Rousseau), hasta los que lo fundaron, como Kant, solo bajo la influencia mediata y remota de esos móviles, é inmediatamente sobre los principios de una lucubración, filosófico-jurídica, íntegra y seria, bien que *ab initio* y radicalmente extraviada por el prejuicio que se respira en la moderna y presente edad.

De la misma manera, aunque no por las mismas capitales y teológicas razones que los autores católicos escolásticos sostuvieron la traslación indefinida y perpetua del poder civil al supremo imperante, los tratadistas de la *Reforma*, en los cuales surgió la doctrina del pacto por motivos de religión y no directamente de política, no llevaron su teoría más allá de donde les convino; y una vez pactada la sujeción al poder público, la consideraron hecha á perpetuidad, con lo cual imaginaban asegurar la estabilidad social y la legitimidad y constitución permanente de la soberanía, sin malquistarse con los soberanos protestantes, antes captándoselos para los torcidos fines de las teologías é iglesias *reformadas*. El pacto y la consiguiente sujeción al poder quedaban hechos para siempre.

Pero desde el común punto de vista, era esto una visible y enorme contradicción para Rousseau. No comprendía, y con razón, como, siendo la independencia individual absoluta un derecho nativo, se podía, no ya enagenar para siempre, pero ni restringir siquiera mediante sujeción alguna á persona física ó colectiva, la cual, en el hecho de ser poder, era desigual á las otras personas, más libre é independiente que ellas, cercenándoselas la libertad é independencia en proporción de las que tenía de más el soberano.

La sociedad, según la doctrina del pacto, es contraria, en efecto, á la naturaleza, porque aquélla se forma con fracciones, desprendimientos y mutilaciones de ésta; la autoridad se hace y sostiene á expensas de la libertad que, si no es plena é íntegra, no es libertad, sino servidumbre. Así es que, para *salvar y conciliar* ambas cosas, esto es, la integridad é inalienabilidad de esos derechos nativos, y la existencia social, imaginó Rousseau el siguiente burdo y pueril sofisma: para formar la sociedad, mediante la autoridad, no hay que enagenar en una persona determinada una parte de la independencia individual, sino toda ésta en toda la comunidad; todos y cada uno abdican en el conjunto, con lo cual, recuperan, mejor sería decir que retienen, sin enagenarlo, ese su derecho nativo de independencia libre é igual.

No hay que detenerse mucho en deshacer tan vano juego de palabras sobre el que gira toda la fantasmagoría del *Contrato*; porque desde luego se descubre que por la abdicación total en toda la comunidad, *a*) ó cada individuo recobra solo una parte de la indepen-

dencia que trasladó, y en tal caso queda esta mutilada, y enagenado un derecho que, ó es pleno, ó no es derecho; *b)* ó si la recobra y retiene total, se vuelve al estado de naturaleza y se declara imposible, inútil, insostenible y esteril el pacto; es decir, ó la contradicción de los tratadistas protestantes, ó la imposibilidad de la sociedad mediante convenio, y de todas suertes, incompatibilidad entre la sociedad, que es estado natural del hombre, y la naturaleza que es contraria á la sociedad, según se desprende de la doctrina rousseauiana.

Al tenor de ella, todas las instituciones tradicionales eran esencialmente viciosas, no defectuosas por accidente; y esto, no solo porque las supuso contrarias á la naturaleza humana, sino porque no habían sido libremente estatuidas por pacto. De aquí ese *idealismo* que desprecia y detesta á la tradición y á la historia, y el error consiguiente de no considerar racional y buena sino á la constitución jurídica nuevamente creada por el libre arbitrio humano, según el criterio apriorístico de la soberana razón del hombre. Entre lo actual y lo precedente, entre lo nuevo y lo antiguo no hay otro nexo que el del tiempo, no el de ese común contenido substancial de los estados y leyes, que son conformes á la naturaleza, y sobre cuyo fondo se van mejorando, por obra de la tradición y del progreso, los defectos accidentales y subalternos; por el contrario, las instituciones de reciente creación son justas en la proporción de contrarias á las antiguas, siendo tal oposición el criterio y guía de las innovaciones y la garantía de su bondad y rectitud.

La idea de que lo antiguo, por ser viejo y falto de

raíz y base, es fácilmente destruible y sustituible por lo nuevo, que en su racionalidad y justicia contiene el principio y la seguridad de arraigo y eficacia, y, por otra parte, la soberbia idea del poder del hombre y del número, al servicio de lo que estimaban razón y derecho, engendraron la aberración y el delirio destructores de la constitución tradicional, que son como el hábito y carácter de la sociedad moderna. Y el supuesto de la soberanía popular, inmanente é inalienable, ha convertido á la revolución en modo y procedimiento regulares y ordinarios de estatuir toda legalidad, variable y modificada al compás de los cambios que experimenten las ideas y acuerdos del soberano omnisciente y omnipotente. Todas las atenuaciones y mixtificaciones doctrinarias del anárquico principio, el cansancio, postración y atonía que han sucedido á la violenta fiebre y al frenesí revolucionarios, han dejado en pié el falso principio y el impulso de donde surgen una legislación siempre divorciada de la realidad y de la vida en la misma proporción que de la verdad y de la naturaleza.



1. La legitimidad de cualquiera institución es su conformidad con la ley en toda la extensión de la palabra, y, por lo tanto, con la ley divina, natural y positiva, y con la humana, ya consuetudinaria, ya escrita. Así pues, lo mismo da decir

legitimidad que legalidad; pero á veces se emplea esta última palabra, y así lo expresará implícita ó explícitamente la elocución, en el sentido de ley contraria á derecho, ó como si dijéramos, sin moralidad y rectitud, puro legalismo pragmático, privado del espíritu de justicia, y divorciado y enemigo de ella; y también puede usarse el término como expresivo de una ley, que aunque tenga en sí misma razón y justicia, no está en conexión y armonía, sino en oposición y pugna, con otras leyes de orden superior, y así no puede atribuir derechos actuales en colisión con los demás de preferente título. En tal caso de pura legalidad dinástica, y no de legitimidad soberana, hállese el derecho sucesorio de los imperantes que gobiernan despótica y tiránicamente, por hábito ya crónico, y más aún por sistema contrario á la naturaleza de la autoridad, á sus fines y oficios.

En la legitimidad, como en todos los demás derechos, hay un elemento abstracto, la razón especial de orden que cualquiera derecho supone y expresa, y la concreta determinación del derecho abstracto en un sujeto, en una persona física ó moral. Así, pues, la legitimidad tiene un carácter divino en cuanto es de derecho divino natural, según anteriormente se ha explicado; y humano é histórico por lo que á la concreción ó determinación concierne, es decir, en cuanto es de derecho natural mediato, ó sea de gentes, ó histórico, como otros le llaman. Y el hecho que la determina se llama título, que significa razón fundada en la realidad que atribuye el derecho á la persona (1).

Entre legitimidad y revolución no hay incompatibilidad, cuando la revolución sea justa; pero si entre la legitimidad y la Revolución francesa, en cuanto ésta profesó un concepto

(1) Tratándose de la soberanía, tampoco hay distinción real entre hecho, modo y título, todos los cuales son la razón objetiva del derecho; y así el hecho de la ocupación es, lo mismo en la propiedad que en la soberanía, un modo de concretarse y un título ó razón objetiva de poseerse y de ejercerse ambos derechos.

naturalista del derecho, despojando á éste de su divino origen y carácter, en virtud de una terminante negación ateísta ó de un absurdo deísmo; y además en cuanto solo consideró hecho, modo y título justos de soberanía á los que, deducidos del concepto y doctrina naturalista, exponremos en la siguiente lección.

2. En una de sus acepciones, revolución es todo movimiento, mudanza y transformación; y así se dice revolución de los astros á un movimiento que nada tiene de revolucionario en el sentido antonomástico que, tanto en el orden moral como en el físico, se aplica á los cambios enunciados en la parte elemental, y sin duda por razón de ser más importantes y graves, y carecer del ritmo de la normalidad.

Las revoluciones, aun siendo buenas, arguyen el mal anterior de una tradición viciosa, extraviada, ó paralizada é inmóvil, y por eso son difíciles y, en la misma proporción, peligrosas, porque hay, ó que transformar radicalmente, ó cuando menos enderezar y completar la tradición, haciendo en un tiempo y momento dados lo que debía la reforma sosegada y sucesiva haber realizado en acción temporal continua y proporcionada. Entonces, el progreso, que perfecciona á la tradición, no es lo que etimológicamente expresa la palabra, esto es, acompasado andar, ni presuroso ni lento, pero seguro, sino paso precipitado que, por ganar el tiempo y la mejora perdidos, puede comprometer con el tropiezo y la caída los fines, aun lícitos y meritorios que se procuran.

Por esto, se requieren en todos los órganos sociales, para ser revolucionarios, mayores aptitudes que para la normal y tranquila acción; y un soberano que, en épocas de orden sólido y seguro, y de adelanto proporcionado al tiempo, puede, sin ser genio, ni aun hombre superior, cumplir sus deberes y funciones con relativa facilidad y habitual acierto, es probable que fracase en tiempos en que la revolución se imponga, por útil, ó imprescindible. Necesitan todos estos órganos, pero los directores especialmente, y en particular el so-

berano, grandes virtudes privadas y cívicas para estar á la altura de las circunstancias. Esa plenitud de dotes faltó, como hemós dicho, al desgraciado Luís XVI que, á pesar de su rectitud, de su paternal bondad, del mejor deseo y celo del bien público, careció de la decisión y energía precisas para guiar y moderar la Revolución, no menos que de la integridad de principios verdaderos en que inspirarse para empresa tan árdua.

3. A fines del siglo XVIII, había llegado en Europa, que no solamente en Francia, la necesidad y la ocasión de una acción revolucionaria, que, en sentido cristiano, reanudara la tradición rota y el progreso interrumpido por el Renacimiento, realizando, en cuanto fuere posible, de una vez, resuelta y aun violentamente, las reformas que habia dejado de efectuar el tiempo, y corrigiendo los defectos y supliendo y enmendando las faltas de que eran responsables los distintos órganos y las varias clases de la sociedad. En todos los órdenes de la vida y del derecho, era urgente una renovación amplia y honda del actual estado de cosas, siendo las más apremiantes reformas la destrucción de algunos privilegios, ya anacrónicos é insostenibles, cuya desaparición no afectaba al organismo social, á las desigualdades legítimas de clase y á la existencia de una aristocracia, cuyos oficios públicos y políticos son indispensables, y solo ella puede cumplir; la más equitativa distribución de los impuestos; el retorno de la monarquía á sus tradiciones de moderación y templanza, y para ello, como uno de los principales, sino exclusivo medio, el fomento y arreglo de la representación política, que compartiera con la realeza, en las esferas respectivas, el gobierno nacional que no corresponde en absoluto al soberano, ni es natural y conveniente que en solo sus manos resida, y de su arbitrio dependa. En una palabra, ensanchar la igualdad y reducir el privilegio, sin caer en la nivelación igualitarista, romper el estrecho molde feudal de la representación política, y dar vigor y fuerza á las moderaciones orgánicas que mantienen al poder soberano

en los límites de su acción, ganar, en fin, el tiempo perdido y mal empleado en todo el trascurso de la Edad moderna, hé aquí la empresa que se imponía á las naciones continentales, y á Francia particularmente.

Desgraciadamente, lejos de inspirarse tales reformas en la idea de verdad y de eficacia perdurables y siempre nuevas, en la idea cristiana, se inspiraron en el pensamiento y en la doctrina absolutamente contrarios, á lo cual contribuyeron todos los múltiples hechos y causas que habían en Europa, y especialmente en Francia, desnaturalizado y adulterado el espíritu del cristianismo, despojándole de su valor especulativo y de su práctico y social influjo en la misma proporción que de su pureza é integridad divinas. De aquí procedió, sino la des-cristianización de la sociedad, cuando menos grave quebranto, desmayo y mengua en los sentimientos religiosos de todas las clases sociales, una preocupación hostil de los entendimientos contra la Iglesia, y una no menos apasionada inclinación ó al ateísmo materialista, ó á un insustancial deísmo filantrópico que satisficiera en parte la necesidad de creer, sentida por las almas, y se compaginara al mismo tiempo con la ligereza y futilidad de los caracteres y con la corrupción de las costumbres (1).

(1) La Revolución venía en Francia preparándose desde la Reforma, y los primeros é inconscientes factores de aquélla fueron tanto los Valois como los Borbones, cuya política vacilante y anticatólica, lo mismo en el interior que en el exterior, dieron al protestantismo existencia legal y un influjo deletereo, así en la división del espíritu público como en la debilitación de la fe católica, que es lo que sucede siempre donde se consienten é imperan creencias distintas, luego que pasa el período violento de la oposición y de la lucha armada, y logran los cultos disidentes el amparo de la legalidad.

Añádase á esto que el catolicismo oficial que se salvó en Francia, era un catolicismo menguado, rebajado y hasta muy cuestionable y dudoso, que estuvo á dos dedos del cisma, y que perseveró en el vicio regalista hasta la Revolución, y aun puede decirse que hasta el Concilio Vaticano. El galicanismo, que es el error á que me refiero, sino obstruyó la comunicación con la Cátedra y fuente de verdad, la estrechó y dificultó no poco, convirtiendo

La Revolución fué, de hecho y por principios, una revolución anticristiana, y la negación y antítesis más radicales y absolutas de la constitución de la sociedad según la doctrina social y jurídica y el espíritu del cristianismo. Poniendo el fin del hombre en el hombre mismo, como acontece indefectiblemente á todas las concepciones naturalistas y liberales, hizo consistir *el fin de toda asociación política* (art. 2 de la Declaración) *en la conservación de los derechos naturales é imprescriptibles del hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la*

á la Iglesia francesa en una especie de anglicanismo, casi más atento á la satisfacción y agrado del Rey que á la obediencia y sumisión al Papa. En el error galicano está incluido, y como incoado, el liberalismo en su forma de catolicismo liberal, ó sea, de la independencia igual y absoluta de las dos potestades, y de hecho, como sucede siempre, de la invasora ingerencia de la autoridad temporal en las cosas espirituales y en el gobierno de la Iglesia. Contagiado de galicanismo el clero francés, careció de la autoridad, de las gracias y auxilios, y de los prestigios y fervor necesarios para mantener y fomentar en las clases sociales, y en el pueblo especialmente, la piedad cristiana y la honestidad de la vida privada y pública. Si á las *últimas capas sociales* no llegan estos errores de las clases intelectuales y directoras, al fin no puede menos de experimentarse el influjo negativo del enflaquecimiento de la fe, que deja á las pasiones populares sin moderación y freno, y al torpe é inculto entendimiento de las masas en la actitud más propicia de asimilarse y utilizar los sofismas de la nivelación y del libertinaje, para la satisfacción de la venganza y la codicia, mediante el asesinato y el despojo. Esto fué lo que hizo la plebe de las ciudades y los campos á raíz de la revolución política, como la plebe protestante á raíz de la revolución religiosa.

Las otras clases se habían descristianizado más, y de un modo positivo, con los errores galicanos y jansenistas que prepararon el terreno á la crítica y negaciones volterianas, y á la profesión de esas pseudo filosofías deístas ó materialistas, elaboradas por motivos prácticos, y con lucubraciones y elementos del discurrir natural y pseudo ilustrado, al alcance de la mayor parte de las inteligencias. La que pudieramos llamar filosofía oficial de la revolución fué un deísmo que, por el sólo hecho de serlo, no pudo menos de engalanarse con girones y restos de religión cristiana; pero que, falto del espíritu y de la santidad del cristianismo, desnaturalizando y adulterando la caridad con la levadura de la filantropía, fué tema retórico de libros y peroratas, y pasatiempo de salón, hasta que dió el natural fruto de delirios, crímenes y horrores, engendrados y ocultos tras del miserable velo de la fraternidad humanitaria acreditada por el Terror en la guillotina.

resistencia á la opresión. Pero entre éstos, no la mera libertad, que es medio y no fin, ni la seguridad, que es condición, garantía y estado de otros derechos, sino la propiedad solamente puede satisfacer los anhelos del hombre descreído y sensual, como único y positivo bien en los sistemas naturalistas. Por eso, la Revolución se redujo, de hecho y en último resultado, á lo que confiesa Taine sinceramente, después de aguda y honrada observación de aquellos sucesos, discretamente analizados y juzgados: á una sustitución en el dominio y en la consiguiente posición y poder sociales y políticos, á una constitución nueva de la propiedad sobre bases distintas, y para provecho de otros dueños que los antiguos é históricos. Hasta entonces, bien que con graves y hondos defectos, que urgía corregir, la propiedad había sido social y jerárquica; en lo sucesivo, los principios y la lógica de la Revolución exigían que fuera colectivista y socialista; pero esto no convenía á la clase media escéptica, corrompida y sensual, instigadora y factora de la Revolución, y que, al hacerla, no tuvo otro objeto que gozar, medrar y mandar. Así es que, mostrándose en seguida *conservadora y moderada*, mantuvo para su provecho, la propiedad individual de que despojó á la Iglesia, al trono, á la aristocracia y á las corporaciones, convirtiendo el dominio en absolutamente individualista, sin más limitaciones que el superior derecho dominical del Estado.

Para forzar la mano á los poderes oficiales, se anticipó con la violencia á remover las bases tradicionales de la propiedad, valiéndose de aquella *jaquería* popular, expoliadora y homicida, que azuzada en los primeros años de la Revolución por los sofistas y patriotas callejeros y de cotarro, saqueó é incendió castillos, y degolló á no pocos nobles y á sus familias; mas luego, como sucede siempre, pasado el turbión, la clase media se aprovechó de la desamortización airada y de la legal, no logrando la demagogía los provechos de la *oclocracia*, los cuales usufructuó la misma clase que monopolizó el poder, la burguesía. Desde entonces, todas las revoluciones inspiradas en la francesa, tuvieron el mismo re-

sultado é igual objeto: la posesión oligárquica de la riqueza y de la soberanía por aquella mesocracia, que ha hecho de la patria una inícuca empresa mercantil depredadora, y de las palabras y engaños de libertad, igualdad, patriotismo, etc., el señuelo y el reclamo del negocio (1). La *libertad*, *igualdad* y

(1) La Revolución debió, ante todo, ser comunista, si había de ser digna y consecuentemente conforme con sus principios; y en efecto, coetáneos de la Revolución fueron el movimiento y acción del socialismo, así en teoría como en la práctica, y no solo en el derecho público, sino en el privado, lo mismo en la esfera de bienes distintos de los materiales, que en la propiedad. Es que el socialismo, ya hemos dicho que deriva indefectiblemente del individualismo igualitario; porque éste implica la atribución igual de todo bien y goce á todo hombre, lo mismo el bien de la instrucción, que el de la soberanía y el de la propiedad, la cual, en tales condiciones, solo puede ser distribuida por el Estado. Por esto, Rousseau, patriarca del individualismo, pudo, sin faltar á la lógica, execrar y maldecir al primer apropiador individual del suelo, esto es, al primer depredador de los derechos dominicales de la comunidad. Así se explican las vacilaciones y contradicciones que entre el principio y la lógica comunistas, y la yuxtaposición ecléctica y *conservadora* de la propiedad individual, se notan en los sociólogos, juristas y políticos de la Revolución; y de aquí proceden las leyes, á la vez individualistas y comunistas, de la sucesión *mortis causa* y de la propiedad doméstica, á la cual, por una parte, se la despoja de su condición social, y, por la otra, se la desnaturaliza y perturba con mudanzas á la vez inspiradas en el falso individualismo y en el socialismo.

Babeuf sostuvo y propagó resueltamente el comunismo, abogando en su periódico *El Tribuno del Pueblo* por la supresión de la propiedad particular y por la obligación de los ciudadanos de depositar el fruto de su industria y trabajo en almacenes comunes, para que la Administración lo distribuyera *en porciones iguales, á domicilio*. Pero, si no con esta lógica crudeza impracticable, los principales apóstoles de la Revolución fueron individualistas y socialistas, bien que con las contradicciones eclécticas que implica, como repetidas veces hemos dicho, todo socialismo. En una *Declaración de los derechos del hombre*, que tenía preparada Robespierre, se convertía la propiedad particular en un mero usufructo y aun precario, considerando aquel derecho como el *de disfrutar cada ciudadano la porción de bienes que le asegura la ley*. Aun sin haberse llegado á consignar tal principio, él constituyó el criterio revolucionario respecto de toda propiedad, incluso la privada y doméstica, y de aquí la tendencia individualista igualitaria de nivelar la sucesión de los herederos *ab intestato*, suprimiendo to-

fraternidad de la Revolución no tenían de común con las que enseñó y predicó Cristo, y que fueron la esencia y el ideal de la sociedad cristiana, y como la base y el espíritu de las constituciones medioevales, nada más que el nombre. La libertad fué licencia y anarquía, generadoras de tiranía y despotismo, como, hasta entonces, no se había conocido en el mundo, ni siquiera antes de la venida del divino Libertador; la igualdad un feroz sarcasmo que contrastaba con la realidad cruel de una nación supeditada á los criminales intereses, pasiones y caprichos de una minoría jacobina, en cuya comparación resultan gobernantes píos y humanos y celosos del bien público los mayores monstruos que ciñeron corona; la fraternidad, un escarnio, no menos cínico ante el asesinato *legal*, sin forma de juicio, ó con una ejecutiva é irrisoria apariencia de él, erigido en sistema de gobierno y de seleccionador patriotismo, y alternado con los procedimientos, aun más rápidos y perentorios de matanza en globo y en conjunto, sin distinción de clase, sexo, ni edad: fusilamientos, ametrallamientos sobre centenares ó millares de infelices, ahogamientos en ríos ó en mares, quema de vivos en hornos, y otros medios igualmente fraternales y filantrópicos. El delirio destructor y homicida

das las diferencias de sexo ó de primogenitura procedentes de *costumbres* provinciales (8 de Abril de 1791), y tratando de hacer lo mismo con los herederos testamentarios. Mirabeau sostenía la porción legítima igual de todos los hijos, sin que la décima parte de la herencia que dejaba á libre disposición del padre pudiera emplearse en mejora á favor de ninguno de aquéllos. Robespierre se mostró contrario al derecho de testar, y la Convención, en 7 de Marzo de 1793, abolió los testamentos y aun las donaciones *inter vivos* en la línea recta, y con inaudita retroactividad, en 6 de Enero de 1794, anuló todas las disposiciones testamentarias de los que aún vivían ó habían muerto después del 14 de Julio de 1789. En una palabra, por un lado se atribuyó el poder civil derechos dominicales que no le correspondían, y destruyó la propiedad social; pero de la individual que mantuvo, bien que restringida, se apoderó, al amparo de la legalidad revolucionaria, la burguesía, que para ese efecto y el de apoderarse del poder, á fin de ejercerlo tiránicamente en propio provecho, hizo la Revolución. Para lo mismo, ha provocado y realizado todas las otras posteriores é imitadoras de aquella.

durante la Revolución francesa, convertido como en hábito y monomanía, tiene algo de sobrehumano y sobrenatural; se parece á sugestión y furia de poseidos; el Terror semeja al efectivo imperio social y político del Averno, representado por el *Comité de salvación pública*. Sabido es que la masonería fué el agente principal de la Revolución, y la instigadora constante de sus excesos más espantosos.

Y no hay distinción fundada, ni posible, entre los dos períodos revolucionarios y las supuestas direcciones y tendencias de la Revolución en cada uno, esto es, entre la doctrina del 89 y la conducta del 93, distinción que algunos se fingen para declarar tan sanos los principios proclamados en aquel año, como reprobables los excesos cometidos en éste. Si existe alguna es la que hay entre las premisas y las consecuencias lógicas indefectibles, entre la demagogía y la anarquía, que perpetraron directamente expoliaciones, incendios y matanzas, y la sangrienta dictadura oligárquica de aquella minoría de energúmenos jacobinos que centralizó y monopolizó la tiranía más feroz que registra la Historia, y regularizó y legalizó el asesinato continuo é implacable. La Revolución, despojada del augusto ropaje con que la han disfrazado el sofisma y la *pseudo* historia lírica, aparece á todos los no preocupados, en la más horrenda y abominable desnudez, aunque no falten todavía algunos católico-liberales, que consideren el programa revolucionario como la perfecta expresión y cumplida síntesis sociológica, jurídica y política del cristianismo, especie que sería atrozmente blasfema, si no fuera absolutamente irreflexiva y *cándida*.

4. El individualismo igualitarista es una mala inclinación y tendencia del hombre caído, y tiene su raíz en el orgullo y la soberbia, los cuales preponderan é influyen en el pensamiento y en la conducta á medida y al mismo tiempo que descienden, se enflaquecen y menguan la fe y el fervor cristianos, y, con ellos, la virtud de la humildad. Los pecados que fueron causa ocasional del protestantismo, imprimieron sello y

carácter á la Edad moderna, infundiendo en los espíritus y en los corazones un hábito de extraviada independencia especulativa y práctica, una preocupación hostil contra las verdades elaboradas por la humanidad, recibidas por las generaciones y consagradas por el consentimiento de las gentes y por la autoridad de la Historia. Una manía de lucubración aislada y solitaria, que presumía de acertada y segura en la misma proporción en que era individual y exclusiva, y emancipada de todo otro criterio y guía que el de la propia razón, se apoderó de todos los autores y tratadistas reformados, é influyó no poco hasta en los católicos, que no podían sustraerse en absoluto al ambiente moral de su tiempo, especialmente en los países protestantes y en aquellos otros en que la nueva religión había quebrantado el vigor de la antigua creencia. El hombre, autor de un nuevo cristianismo, debía serlo también de una nueva filosofía y de una nueva sociedad que nada tuvieran que ver con la religión, la filosofía y la sociedad precedentes. Si entre Lutero, Descartes y Rousseau no existe el vínculo interno, sistemático de una misma doctrina que, sin solución de continuidad, determinara tres indefectibles manifestaciones lógicas substancialmente idénticas, les liga, sin embargo, el lazo de un principio superior y trascendente, el prejuicio, mejor dicho, la preocupación y la pasión insana de ese individualismo absurdo, de esa independencia que quiere fundar sobre el hombre toda la fábrica de la idea y de la realidad. Los tres son, en tal concepto, los patriarcas respectivos del racionalismo y naturalismo en religión, filosofía y sociología, aunque no lo fueran de intento, ni de ello se dieran cuenta, y aun lo repugnarán, especialmente los dos primeros, y en todos, pero en éstos particularmente, apareciera el sistema incoado, ecléctico y contradictorio, por la mezcla y aun el predominio de los elementos tradicionales.

Esta fué la causa remota de la doctrina del pacto en los autores protestantes de Derecho natural. La causa próxima, más señalada y notoria en Tomasio que en otro alguno, fué un interés práctico, de orden religioso digámoslo así, la *liber-*

tad de conciencia, entendida como la entendían y practicaban tales sectarios, esto es, el derecho de ejercitar libremente el nuevo culto en los países en que los protestantes no eran dueños del número, de la fuerza y del poder, y en los cuales no podían imponer por estos medios la religión reformada como creencia oficial. La religión era cosa individual y libre, porque, de la misma manera que la moral no había entrado en el pacto, en el cual se convinieron solo las condiciones necesarias de orden para la existencia social. Quedaban, pues, moral y religión fuera del contrato, y, por lo tanto, exentas de las limitaciones y desprendimientos á que en el orden jurídico tuvieron que resignarse los contratantes para establecer, con esas parciales renunciaciones de la independencia y la libertad, la sociedad civil (1).

Pero, antes de Rousseau, los individualistas no habían afirmado la independencia y libertad del hombre más que en la esfera religiosa y moral en que les convenía afirmarlas, y aunque se tratase de materias tan importantes y trascendentes como esas, lo hicieron para el efecto de sustraerlas á la acción del Estado católico (2). El pacto, mas bien que por asignar

(1) Véase la nota de las páginas 206 y 207 del tomo primero acerca del naturalismo, ó sea, liberalismo todavía incipiente y moderado, pero manifiesto ya, de los autores protestantes del Derecho natural, singularmente de Tomassio, que es, en efecto, el patriarca del liberalismo *religioso*, ó protestantismo liberal.

(2) En realidad, sólo mantuvieron la absoluta independencia religiosa y moral respecto de toda autoridad, aun eclesiástica, aquellos protestantes que, lógicos con el principio de libre interpretación individual de la Escritura, y con el de la justificación y santificación de todo creyente por los sólo y puros méritos de Jesucristo, concluyeron por la abolición de todo sacerdocio, ó autoridad docente y justificadora, intermedia entre el fiel y Dios. La consecuencia del protestantismo es el anarquismo religioso que han profesado y aun mantienen ciertas sectas avanzadas y radicales. Por el contrario, los anglicanos y aun los presbiterianos son, en su grado respectivo, unos doctrinarios que, contradictoriamente, sostienen parte del sacerdocio, después de haber negado y combatido el superior, el que es base y clave de toda la jerarquía establecida por Jesucristo, la autoridad y primado del Papa.

en tésis categórica y apriorística el origen de la sociedad civil en la libre voluntad y en el convenio, se dió para el efecto negativo de declarar exentas de coacción civil la religión y la moral, como quiera que no se habían incluido entre las condiciones necesarias para la existencia de la sociedad (derecho). Así es que la separación y divorcio entre éste, la moral y la religión es en los tratadistas protestantes no tanto una tésis como un escolio, resultando la parte de naturalismo que tales sistemas contienen, de la necesidad de idear un expediente de abogados, una como cautela forense para arrancar al poder civil católico el título y el derecho de prestar á la religión verdadera el apoyo del brazo secular, y de proscribir la profesión y práctica de los cultos *reformados*; porque ya se sabe como los sectarios trataron á la *libertad de conciencia*, y el respeto que tuvieron á la de los católicos en aquellos paises en que la heregía se hizo dueña del gobierno.

Pero si á los pactistas protestantes de Derecho natural les parecieron buenas, ó, cuando menos, no esencialmente malas todas las instituciones sociales antiguas que no fueran contrarias á la *Reforma* y á la seguridad, propagación é imperio de ella, y se limitaron á explicarlas y legitimarlas por el supuesto pacto, al cual dieron más bien el carácter de descubrimiento histórico del hecho originario de la sociedad y del consiguiente título de las instituciones sociales, á Rousseau le parecieron todas, absolutamente todas, intrínseca y esencialmente

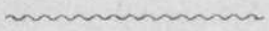
Si este no es necesario, tampoco el otro sacerdocio subalterno, y si este es preciso, no podrá explicarse ni fundarse sino en la piedra sobre la que el Hijo de Dios edificó su Iglesia. Y aunque mayor es la contradicción de los episcopalistas protestantes, que quieren mantener la institución divina de los obispos, despues de suprimir la del Obispo de los Obispos, no deja de existir también aquélla en el presbiterianismo, porque la asamblea de los presbíteros, esto es, la cámara de diputados religiosos, representantes del soberano pueblo fiel, implica la contradicción esencial que bien pronto hemos de notar en toda representación según la doctrina del liberalismo. Para los presbiterianos, el sacerdocio que conservan no es de derecho divino positivo, pero no por eso deja de ser una yuxtaposición doctrinaria.

viciosas, por contrarias á la naturaleza humana, á la natural independencia y libertad iguales en todos los hombres. Entonces el pacto, sin perder del todo en Rousseau la condición de hecho histórico, que debió verificarse en algún lugar y en alguna parte, aunque no se sepa, ni les importara mucho á los pactistas averiguar cuando y como, se convirtió más bien en una exigencia racional, en una proposición categórica, que es consecuencia de un principio, de un supuesto fundamental, la independencia y libertad absolutamente iguales de todos los hombres. El pacto es no tanto un hecho como un ideal; las instituciones sociales son de tal manera viciosas que, ó no pudieron proceder del pacto, ó éste se convino mal, y con vicio de nulidad originaria, por haber contrariado y desconocido la esencia y atributos de la humana naturaleza, y no haberse ajustado á este criterio y patrón de legitimidad. La humanidad actual está en el caso de revisar el contrato, de novarlo en razón y justicia, cuando, tanto y como quiera, volviendo, al deshacer el convenio presente para modificarlo, al estado de naturaleza, en que todas las instituciones, ó como si dijéramos, las cláusulas del anterior pacto no tienen otro carácter y estado que el interino y provisional.

Por esto las instituciones nuevas no tienen para qué tomar en cuenta las antiguas, sino tan solo el principio racional apriorístico de esa libertad é independencia á que el convenio ha de ajustarse; y antes más bien han de mirar con prevención y hostilidad aquel pasado irracional é injusto, que lo era en proporción de la necesidad y de la urgencia con que había que sustituirlo. Si alguna cosa se conserva de él, es no por razón de historia, sino porque, á pesar de ella, era conforme parcial y accidentalmente á la razón. He aquí como coinciden, en cuanto á los resultados prácticos, el idealismo de Kant y el de Rousseau, por más que el primero fuese el producto de una fundamental é íntegra lucubración filosófico jurídica, y el otro se elaborara fragmentariamente con elementos de filosofía natural extraviada, puesta al servicio de la amarga hipocondría misantrópica de un plebeyo, acibarado

por las muchas injusticias de su tiempo, y singularmente por las que afectaban á su persona, maltratada unas veces en sus verdaderos derechos, y no pocas en el orgullo y en la soberbia despechada y demoledora. Pero ese plebeyo dió á la Revolución el credo, el espíritu y el carácter permanentes y como indelebles de que no la despojarán otros sistemas más graves y *sabios*, mientras la sociedad no vuelva, si es que vuelve en lo que le reste de vida, á las vías de Cristo, á los caminos de la redención (1).

(1) En Kant, el pacto es un ideal aún no realizado, porque es el principio del estado de derecho según las exigencias categóricas, y aun lejanas, de la razón. Esta, que suponemos actual situación jurídica, es el verdadero estado de naturaleza fenoménica, por no ajustada aún al imperativo categórico.



CAPÍTULO VII

EL SUJETO DE LA SOBERANÍA SEGÚN LOS SISTEMAS LIBERALES.—LA SOBERANÍA NACIONAL EN EL LIBERALISMO DEMOCRÁTICO Y EN EL DOCTRINARIO

1. La consecuencia de la doctrina expuesta en el capítulo anterior acerca de la Revolución y de su síntesis y fórmula, el pacto, es que, según la teoría de éste, ha desaparecido y hay que eliminar del Derecho político la materia y cuestiones referentes á la concreción de la soberanía en un sujeto determinado. La razón de ello es que toda la sociedad civil es, por naturaleza y no *radicaliter et formaliter* tan solo, como afirmaban los escolásticos, sino por modo *inmanente é inalienable*, colectividad soberana. Porque la soberanía de la *nación*, del *pueblo*, resulta del hecho de ser nativamente soberanos los individuos de que se compone la comunidad, siendo en ella la soberanía el atributo colectivo procedente de una facultad y derecho de todas y cada una de las partes, esto es, de ser igualmente libres é independientes las personas físicas de que la sociedad consta. La suma de las independencias y libertades, ó sea, de las soberanías de todos y cada uno, es la soberanía nacional ó popular. Con la misma existencia, independencia y libertad del pueblo se confunde su soberanía, y como

derechos nativos de la nación, no puede enagenarlos, esto es, trasladarlos á ninguna otra persona física ó moral, sin atentar á la existencia misma de la sociedad civil. En ella *queda*, pues, la soberanía, (inmanet), siendo, por lo tanto, también *irrepresentable*, porque su representación es, de hecho y con otro nombre, una enagenación verdadera, es la cesión de la soberanía á otro ú otros que no son toda la comunidad.

Pero la inmanencia de la soberanía en toda la sociedad es la anarquía, porque es la vuelta al *estado de naturaleza*, ó mejor dicho, la permanencia en una situación en que todos tienen derecho á mandar, y ninguno la obligación de obedecer, y todos el mismo derecho y título sobre las cosas sin excepción, de lo cual se engendra el desorden y la violencia perpetuos. Así es que Rousseau, para conciliar y armonizar la existencia y el orden sociales con la inalienabilidad de la soberanía nacional, ideó un expediente de parecida verdad, consistencia y eficacia al que inventó para que no resultara mutilada ni enagenada la independencia de que cada individuo se desprendía completamente en favor de la comunidad: ésta retuvo toda la soberanía, pero dió en representación todo el gobierno, ó como si dijéramos, se quedó con la nuda facultad soberana, pero encomendó, por necesidad ineludible, el ejercicio de ella en forma de mandato á otras personas, las cuales, en nombre de la nación, del pueblo, desempeñasen la soberanía, que éste por sí mismo no puede ejercitar. Redúcese así de hecho la soberanía nacional á la elección de esos representantes, mandatarios, diputados, etc., elegidos por el voto de todos, por el sufragio que llaman universal.

Bien se nota que después de quedar suprimida y eliminada en la teoría revolucionaria y pactista la debatida cuestión del origen de la soberanía en un sujeto, por ser ésta derecho nativo de toda la colectividad, resurge el problema en otra forma, ó por mejor decir, con otro nombre, el de la concreción del gobierno, ó sea la determinación originaria del ejercicio de la soberanía que no puede ejercitar el sujeto cuya es.

El gobierno, es según ésto, el producto de la voluntad de todos, no en cuanto todos lo ejercitan, ni en cuanto se ejercita con arreglo á los acuerdos y á las reglas procedentes de la soberana resolución nacional, sino solo por la circunstancia de que todos han elegido los mandatarios diputados, para que lo desempeñen como lo tengan por conveniente en *representación* del pueblo. Mas después resulta que, ni en este último concepto, el gobierno depende de la voluntad de todos los individuos, porque ni siquiera son los más los que votan, y no por abstención voluntaria, sino por imposibilidad legal y justa, quedando reducido el voto del pueblo al de una minoría más ó menos numerosa, y pudiéndose llamar universal el sufragio por antífrasis solamente, ó cuando menos, de un modo harto relativo, por haber otros sistemas y leyes que aun lo merman y reducen más.

2. No procede aquí la refutación directa de tales sofismas. Si la sociedad es un estado natural al hombre, y, por lo tanto é *in genere*, un estado independiente del arbitrio humano, que solo puede cooperar á ella de varias maneras, pero nunca de un modo absoluta y exclusivamente libre, y como única causa que produce y

determina por pacto previo la actuación y existencia sociales; si los hombres, iguales en especie, son desiguales por razón de la concreción individual, y aun las personas *sui juris* tienen legítimamente diversidad de derechos adventicios; si es uno de estos la soberanía, la cual supone y exige una superioridad suprema y compleja, que *per se* y por regla general, se muestra y determina mediante hechos ajenos á la voluntad y á la elección de los inferiores; en una palabra, si toda la doctrina minuciosamente expuesta y fundamentada en anteriores capítulos es cierta, falsa será, *á contrario*, la que deriva del concepto liberal, revolucionario é idealista de la sociedad, de la igualdad y de la soberanía.

La tarea de este número se reduce á llamar la atención del lector sobre las visibles contradicciones esenciales en que la teoría se refuta á sí misma con ese doctrinarismo notorio y coetaneo de las primitivas y más radicales tesis de ella. Veámoslas.

La independencia y la libertad, derechos nativos, condiciones esenciales y fundamentales para que cada uno cumpla sus deberes y ejerza por sí mismo sus derechos, se confunden aquí con el derecho de ordenar á la sociedad civil, independientemente de todo otro poder temporal. Esta confusión, hija del igualitarismo tantas veces señalado y refutado, que entiende que todas las independencias y libertades no son distintas según los diferentes estados jurídicos, concluye que ningún hombre es independiente y libre, si no lo es tanto como los demás, y de un modo absoluto y supremo. Y como soberanía es absoluta independencia, y todo hombre es soberano en el hecho de ser libre, y no es libre si no es

soberano, esta confusión de derechos en el individuo los traslada el igualitarismo á la sociedad, ó sea al pueblo, al cual no supone tampoco independiente y libre, sino en cuanto es también supremo imperante, y está constituido en el único y verdadero estado jurídico, la *democracia*. La cual no es, para el igualitarismo liberal pactista, aquella condición del pueblo, explicada en el Capítulo X del Libro II, sino la que la composición etimológica del término expresa: mando, imperio, gobierno del pueblo soberano, una república en que se confunden la persona moral soberana y la comunidad civil. La democracia es la suma de las libertades individuales, iguales é independientes, el atributo de soberanía que procede en el todo numérico de la soberanía de cada una de las unidades constitutivas de él.

Pero como la realidad no consiente tales y tan disolventes extremos de aberración, y no puede conformarse con el estado anárquico y antisocial, procedente del mando de todos los asociados y de la obediencia de ninguno, que tal es, en puridad, la soberanía nacional inmanente, Rousseau acudió al subterfugio de distinguir entre soberanía y gobierno, para dejar aquélla al pueblo, y atribuir su ejercicio, en representación, á los mandatarios por el pueblo elegidos. Que es tanto como decir que un derecho nativo no puede ejercerse en ningún caso por la persona cuyo es, ó lo que es lo mismo, que lo natural es la imposibilidad de que una persona actúe por sí misma su natural derecho, el cual, tratándose de una persona moral tan amplia, como es toda la sociedad civil, ni siquiera por imposibilidad circunstancial puede dejar de ejercitarse por la persona

misma. Se arguye, pues, contra este sofisma en la siguiente comprensiva y concluyente forma: si la soberanía fuese derecho nativo de la comunidad, en ningún caso estaría imposibilitada de ejercerlo por sí misma, pues no se concibe en tal persona ni aun incapacidad accidental, como en el individuo; es así que nunca puede desempeñar por sí misma la soberanía, luego es señal que no es derecho nativo de la nación ó el pueblo.

Queda pues reducida la soberanía al mero derecho electoral, ó sea de designación del soberano de hecho y de derecho, es decir, á cosa tan distinta como es el gobernar por sí mismo, ó nombrar á quien á uno le gobierne; con lo cual se confiesa que son otras personas distintas de la comunidad las que tienen las prendas y excelencias propias de la soberanía, y las del gobierno que no es otra cosa que el desempeño y actuación de ella. Muéstrase un cambio tan radical de tesis como el que implican los términos pueblo soberano y pueblo elector, y por consiguiente, derecho nativo de gobernar y derecho nativo de elegir el gobernante.

Pero ya en anteriores capítulos se ha demostrado que la soberanía es *per se* ineligible, aunque, *per accidens*, sea alguna vez elegida, nunca por todo el pueblo, con título justo, porque no toda y cualquiera persona es capaz de elegir. Aquí basta con alegar la confesión implícita que de la incapacidad electoral nacional hace la misma teoría que se está examinando. Puesto que no toda persona elige, y el titulado sufragio universal queda reducido al voto de una minoría, por amplio que éste sea, se declara con ello que es un derecho adventicio y no nativo, propio de las personas que se su-

ponen aptas para elegir, y entonces, arguyendo con el criterio de la capacidad, no hay más que negársela, en virtud de pruebas de experiencia y de razón, á todo hombre *sui juris*, que, por el hecho de serlo, no tiene más dotes discernidoras de entendimiento, moralidad, é independencia que el menor, la mujer ó cualesquiera de los otros individuos á quienes excluyen las leyes más liberales del sufragio universal.

Si el voto fuera derecho nativo de todo hombre, por el hecho de ser hombre, los incapaces, por cualquier concepto, (menor, mujer, incapacitado...) lo ejercitarían por medio de representante, (tutor, marido, padre, etc.), los cuales, á título de esta representación legal y necesaria, tendrían, además del voto propio, el de sus representados. Esto constituiría de hecho una desigualdad privilegiada y una porción mayor de la soberanía que la que disfrutaban los que no tienen más sufragio que el suyo.

Comprendiendo la inconsistencia del fundamento del voto en la soberanía individual y en la consiguiente del pueblo, hanse contentado muchos con dar por razón del sufragio el interés que todos tienen en el buen gobierno, de donde deducen la consecuencia del derecho electoral y el título para ejercerlo, sin tener en cuenta que el interés capital de un buen gobierno es, en efecto, interés común de los nacionales y ciudadanos sin excepción, pero que de él no se deduce la capacidad de todos para procurarlo adecuadamente, como del interés que en la buena gestión de su hacienda tienen el hijo y el menor no se desprende que sean aptos para administrarla bien. La *soberanía inmanente*

del pueblo es harto contraria á la razón y á la ley natural, al orden público, á los fines de la sociedad y aun á los superiores derechos de la Iglesia, para que ésta haya dejado de tener en cuenta error tan pernicioso y de tales estragos, y de señalarlo como tal, y así lo ha hecho S. S. León XIII en la encíclica ya citada *Diuturnum* con palabras terminantes que comprenden lo mismo la soberanía nacional que el mandato, ó sea el voto en que la nación la *delega*.

3. Aun rebajada la soberanía nacional ó popular al mero voto electivo con que una minoría designa á los gobernantes, ni siquiera se le aplicó en todo su rigor y pureza, sino que se ideó restringirlo aun más en el sentido y con el propósito de concederlo solamente á personas más capaces, ó mejor dicho, menos incapaces, planteando para ello el sufragio indirecto, el de segundo ó más grados, ó sea aquel en que el elector no designa directamente al gobernante, (en particular al legislativo), sino á otro elector del gobernante, ó acaso todavía á otro elector intermedio. Confesión más paladina de que la elección exige una capacidad que no es propia no ya de todo hombre, pero ni siquiera del hombre *sui juris* apenas puede concebirse. Esta rectificación doctrinaria de la teoría del Contrato es coetanea, así en la práctica como en la doctrina, del período álgido de la Revolución, y señala ya el criterio, comienzo y base del doctrinarismo en estricto sentido, ó sea, *de aquella más pronunciada tendencia de conciliación entre el antiguo y el nuevo régimen, y la cual, así en este punto como en otros de sociología y derecho, presumió tal eclecticismo*

haber logrado con la mera agregación ó yuxtaposición de principios contrarios, y, por lo tanto, de imposible armonía sistemática.

No se renunció á la soberanía nacional ó popular, pero se la designó ya más bien con el primer nombre, que no expresaba tan netamente como el segundo la soberanía del conjunto ó masa, por suma de las soberanías de los individuos, únicos elementos numéricos de la colectividad social. Este término vago y equívoco era, por su misma anfibología, muy adecuado y favorable á las indeterminaciones, confusiones y oscuridades, calculadas unas, y necesarias y no intencionadas otras, con que todos los eclecticismos envuelven las doctrinas opuestas é inconciliables, eludiendo así, tras perífrasis, paráfrasis y tautologías, la crítica y refutación á que se prestan mejor las tesis categóricas.

Porque con el término soberanía nacional, que puede significar también, aunque éste no sea su actual convenido uso, la misma independencia de la nación, expresaron los doctrinarios la soberanía revolucionaria y antitradicional que corresponde, no al pueblo, en cuanto agregado atómico de individuos, antes bien al pueblo ó nación, en cuanto conjunto orgánico, en el cual no es la soberanía la suma de la soberanía de todos, ó sea, de las iguales é independientes libertades de los individuos, sino una función y un derecho que la nación ejerce por el conducto y ministerio de órganos aptos y adecuados al desempeño del gobierno soberano. La soberanía, según los doctrinarios, no es, al menos de un modo exclusivo, un derecho y oficio de los poderes históricos tradicionales, cuyos títulos legítimos se han ex-

puesto en otro capítulo; es un derecho y función del todo nacional, que éste ejercita por medio de personas capaces de este soberano oficio.

La mezcla de verdad y de error yuxtapuestos que hay en esta teoría bien se nota á primera vista. Contiene un elemento negativo que es exacto: la soberanía no es un derecho individual nativo, y no corresponde á la sociedad civil, como agregado de individuos que prestan á la colectividad el atributo soberano de todas y cada una de las partes de que la comunidad consta. Encierra además, y por consecuencia, una afirmación positiva no menos verdadera; la contraria del error de la soberanía derecho individual nativo, la soberanía, derecho adventicio de las personas capaces de ejercerla. Negación y afirmación son conformes á la naturaleza y fines de la soberanía, función de superiores, no oficio y derecho de iguales, y esta es la parte de derecho racional y tradicional que encierra el doctrinarismo.

Pero de aquí no pasa, porque, lejos de sacar todas las consecuencias que de aquellas tesis resultan, convirtió la cooperación gubernativa nacional, esto es, la participación que en el gobierno de la sociedad civil tenían, dentro de sus respectivas esferas y categorías, ciertos elementos, órdenes y órganos sociales, en una soberanía, ó mejor dicho, en una cosoberanía ejercida de igual á igual con la realeza histórica, que era la forma de gobierno más generalizada al advenimiento de la Revolución. Con esa realeza intentaron conciliar especulativa y prácticamente los doctrinarios la teoría nueva acerca del sujeto del poder. Juntaron, en la ciencia y

en los códigos políticos, tesis tan contrarias como la legitimidad que tomaban de los hechos, y la soberanía nacional que imaginaron exigencia racional de los principios científicos. Como compaginaron una y otra cosa, es decir la cosoberanía de la nación con el rey se verá más adelante.

Mas no basta afirmar tal especie de soberanía nacional, es preciso determinar por que órganos ejerce la nación ese derecho, que no es de todos los individuos sino de los aptos y capaces, presentándose así á los doctrinarios el problema de la concreción de la soberanía en los mismos términos que á toda doctrina política, que no puede excusarse de plantearlo. Y no teniendo el liberalismo doctrinario precedentes que consultar en la historia, porque hasta entonces ni se había afirmado sistemáticamente, ni había habido soberanía nacional en el mundo, supuso que la soberanía es función y consiguiente derecho de los inteligentes, de los ricos y, en general, de las *juerzas vivas* del pais, expresiones que es necesario fijar bien para deshacer la confusión que los doctrinarios mantienen todavía, huyendo de tesis escuetas y de afirmaciones categóricas, y barajando y mezclando ideas y conceptos distintos en párrafos retóricos más bien que en raciocinios dialécticamente ordenados.

4. El sufragio indirecto implica con preferencia la soberanía de los inteligentes, puesto que lo que pretende la elección por grados es, ante todo, depurar á través, de éstos, la *inconsciencia* con que la masa hace uso del voto. De aquí que se simplificara el principio y el pro-

cedimiento, afirmando de vez que la soberanía es función y derecho político de los inteligentes, de las capacidades.

Al tratar de la superioridad compleja que la soberanía requiere, se expuso cuáles son las dotes morales necesarias al soberano, y qué significación, valor y lugar corresponde á las de la inteligencia. Ahora, completando aquel punto, y juzgando esta doctrina á la luz de los principios entonces asentados y explicados, hay que notar el absurdo de este expediente doctrinario con el siguiente raciocinio. Inteligencia es un término vago y equívoco que no sabemos si expresa el entendimiento, esto es, la facultad intelectual más potente y eficaz, lo que se llama vulgarmente talento, ó si con tal palabra quiere significarse el entendimiento ilustrado por la posesión y hábito de ciertas verdades y conocimientos distintos. Suponiendo que sea lo segundo, porque lo primero implica mera disposición, no capacidad actual efectiva, hay que oponer: 1.º que, aunque esa inteligencia consistiera en la posesión, en un cierto grado de conocimiento científico, de cuantas verdades están directa ó indirectamente conexas con las varias relaciones y necesidades sociales, y las consiguientes atenciones del gobierno, no implicaría la cualidad principal de éste, que es la de cualquiera ordenación, y aun de todo acto humano, esto es, la moralidad, las virtudes que, por un modo superior y eminente, deben resplandecer en el soberano. El científico, el sabio tiene más medios, más motivos, mayor obligación de ser bueno y justo en la proporción y medida en que mejor conoce sus deberes, y discierne en cada caso la regla de la conducta;

pero la experiencia y la razón demuestran que inteligencia y rectitud no son inseparables, porque la voluntad tiene el esencial atributo de la libertad y, por consiguiente, el tremendo arbitrio de elegir entre el mal y el bien. El filósofo más eminente, el erudito más universal pueden ser malísimos soberanos, como la experiencia histórica enseña. 2.º que no siendo posible, ni intentando los doctrinarios atribuir la soberanía solo á los inteligentes en todos los órdenes de verdad y de conocimiento, una de dos: *a)* ó hay que suponer adventiciamente soberano al inteligente en cualquiera materia, aun no teniendo conexión directa con la capacidad en las doctrinas conducentes y precisas á la ordenación nacional, por ejemplo, la Medicina, las Matemáticas, las bellas Artes, etc., y entonces se exige una capacidad agena á la función, ó *b)* hay que reducir la soberanía á los inteligentes en las materias conexas de un modo inmediato é imprescindible con el gobierno, el cual vendría á parar en una poliarquía de moralistas, sociólogos ó jurisconsultos, y, de hecho, en una democracia de abogados, cosa tan agena á la razón como al mismo propósito del doctrinarismo; *c)* por la lógica tendencia ampliamente *democrática* de estos sistemas, y á la cual no puede resistir el doctrinarismo, ora por intrínseca inclinación liberal, ora por la presión del liberalismo más radical y menos doctrinario, esta soberanía no es la de los verdaderos inteligentes en cualquiera ramo, sino de todos los que saben algo de cualquiera cosa, por poco y malo que su saber sea, esto es, de las pseudo ilustraciones, menos que mediocres, mínimas, contentándose algunos sistemas y leyes electorales con que

sepa el soberano, digo el elector, leer y escribir, lo cual reduce la soberanía de los titulados inteligentes á un efectivo imperio de los ignorantes; *d*) y de los ignorantes más nocivos y calamitosos, que son los presumidos, sin fundamento, de ilustrados, y cuya ilustración se limita á la menguada luz, que les impide ver su nulidad, pero no alumbrar vaga y tentadoramente los caminos de la ambición y demás concupiscencias, y buscar y hallar, para satisfacerlas, medios tan inmorales y vituperables como los fines; *e*) la sabiduría, la ciencia y la ilustración modernas carecen de sentido ético y religioso; no están inspiradas en el temor de Dios que las preserva de extravío y corrupción, y así son antisociales y anárquicas, y, de hecho, además tan escépticas y positivistas que sólo se enderezan á convertir el gobierno en instrumento de medro individual, y cuando más en provecho del partido en que cada uno busca y persigue el propio interés ilícito; *f*) estos intelectuales carecen, por otra parte, de la independencia que dan la virtud, la posición y la educación conveniente, y se entregan, con la misma ó mayor facilidad que el hombre absolutamente analfabeto, á disposición de cualquiera que, á cambio de un empleo, conveniencia ó dádiva, les compre la soberanía, esto es, el voto. Menos independiente que la masa obrera, menos asequible á las inspiraciones del buen sentido, de la ley natural y de la virtud, es esta muchedumbre intelectualista, forzosamente viciosa y proletaria, incapaz de ganar el pan con el trabajo rudo, y puesta, por falta de colocación en las *industrias inmateriales* en tentaciones y peligros de venalidad inminente.

La falsedad y el carácter antisocial y anárquico de esta teoría han sido implícitamente reconocidos, y aun confesados, por el doctrinarismo, que no se resuelve á confiar el gobierno á tales inteligentes, y busca á la soberanía otros títulos y fundamento más amplio y sólido, expresados con la usual figura pleonástica de *fuerzas vivas del país*, á las cuales este sistema llama al ejercicio del poder supremo. El término, parafraseado y diluido en otros análogos, viene á significar, si es que algo significa, lo que ya hemos dicho: que la soberanía es patrimonio de una alta superioridad compleja, en la que las dotes intelectuales valen y pesan menos que otras cualidades y excelencias. Pero el doctrinarismo, siempre preocupado contra el antiguo derecho, altera y desvirtúa esta verdad, suponiendo *fuerza viva*, superioridad gobernante, no á la más encumbrada y perfecta, sino á cualquiera potencia, aun mediocre, insignificante y vulgar, que se alza y destaca apenas sobre el nivel de la plebe. Y como tales fuerzas no son las de aquellos organismos históricos que cooperaban al gobierno, porque el doctrinarismo los aborrece y la Revolución los ha destruido, los doctrinarios no encuentran en la masa inorgánica, á que el individualismo liberal ha reducido al pueblo, otras *fuerzas vivas* que los *inteligentes* y los propietarios, y de ahí no pasan los elementos á que ha confiado el influjo y el gobierno social.

Representan los primeros el elemento *progresivo*, y los segundos el elemento *conservador*, elementos que los doctrinarios inconsideradamente separan, suponiéndolos arbitrariamente oficio y función de personas y

clases distintas, cuando, al contrario, todo sujeto razonable, pero con más motivo, título y obligación el soberano, debe ser *progresista* y *conservador* á la vez, esto es, órgano de mejora prudente al mismo tiempo que de mantenimiento de lo que sea bueno, ó de lo que, no siéndolo, no se puede, sin imprudencia y peligro, modificar, al menos por el pronto.

Pero, así como los solo inteligentes, y, sobre todo, los *intelectuales* contemporáneos, no tienen, por este único hecho, las condiciones, ni ofrecen las garantías de un progreso justo y circunspecto, tampoco los propietarios, y menos los de ahora, por la sola circunstancia de la propiedad, son órgano adecuado de recta y oportuna conservación, y no puede por este título, que es supuesto, concretarse en ellos la soberanía.

En efecto; la propiedad, aun en la cuantía bastante en que ya supone y se denomina riqueza, no solo no implica superioridad soberana, pero ni siquiera mera aristocracia ó excelencia y mérito personales, sino, cuando más, y no siempre, la habilidad y virtud ordinarias de un trabajo afortunado.

La riqueza es en sí buena, y don providencial, cuando su origen es legítimo, y legítimamente se usa de ella; y ya se ha visto, (Capítulo XII, Libro II), como puede ser principio de aristocracia individual y familiar, y es siempre condición indispensable del mantenimiento y duración de la nobleza. Por eso en la Edad media expresaba y significaba el poder social que tuvieron las clases, las cuales poseyeron riqueza proporcionada á sus respectivas función, importancia y jerarquía; y no tanto por ricas, cuanto por la condición y

potencia que arguía la correspondiente propiedad, alcanzaron los órdenes posición, influjo y poder sociales, derechos públicos y políticos, y colaboración representativa en el gobierno nacional. Pero los doctrinarios, perpétuos mixtificadores de la verdad, de la tradición y de la naturaleza, convirtieron aquella representación ante la soberanía y consiguiente colaboración gubernativa con ella, de las cuales era la riqueza factor, condición y signo, no título principal, y exclusivo mucho menos, en intrínseca cualidad y superioridad soberanas, y no de las clases sino de los individuos, imaginando que los ricos tienen tal derecho adventicio por más interesados utilitariamente que los pobres en el buen régimen de la nación. Es decir, convirtieron en primero y solo móvil de recta ordenación uno que es efectivo, pero subalterno y secundario, y que, erigido en único ó predominante, eleva el positivismo y materialismo sensual y egoísta á principio y resorte exclusivos de gobierno.

En manos del rico nuevo, es decir, del que entiende la riqueza y la emplea según el criterio del naturalismo individualista, considerándola como el *jus utendi et abutendi* para el provecho y el goce personales y egoístas, desligándola de los deberes de justicia y de los oficios de caridad y misericordia, la riqueza es el capital maldito de explotación de las clases inferiores, y el gobierno una empresa de interés tiránico de clase. A estos ricos les importa mucho menos un buen gobierno que el mal gobierno con que procuran y logran la satisfacción de la codicia. El interés legítimo de un buen gobierno es para ellos un mal negocio.

Por su parte, la riqueza actual, por sus condiciones y circunstancias, es la menos propicia para la formación y consolidación de una aristocracia puramente patrimonial y directiva, cuanto más gobernante y soberana. Es la riqueza nueva repentina é improvisada, no formada y acrecentada paulatinamente á través de las generaciones; la aumenta la fuerza del río henchido inopinadamente, turbio y cenagoso, no el aluvión sosegado y benéfico; es la riqueza aleatoria del negocio, no la continúa, cierta y segura, aunque lenta, del trabajo honrado, del ahorro y la economía. El rico, hecho de repente, queda tan pobre de virtudes y tan plebeyo de alma como antes, á diferencia del rico por herencia, el cual con ocasión de la riqueza, de su racional y justo empleo en la familia y en la sociedad, ha ido ennoblecándose de la manera expuesta en el capítulo citado. Además de repentina, es la riqueza de ahora fluctuante y movediza, por el individualismo que la ha desorganizado y desarticulado, desvinculándola de la familia y de la clase: no ya solamente es el pobre el nieto del rico, el mismo que hoy anochece potentado amanece menesteroso al día siguiente, porque la empresa ó la bolsa tragaron en un momento una fortuna. Esto es ahora más frecuente por la extensión y predominio de la riqueza mobiliaria y por la naturaleza de las manipulaciones á que es propicia y tentadora, y porque sus fluctuaciones y reveses repercuten contra la solidez y seguridad de la misma riqueza inmueble, perpétuamente menoscabada por las particiones hereditarias, sin la defensa y compensación del mayorazgo. Añádase á esto ó, por mejor decir, póngase en primer lugar, la

disipación y el derroche que comparte con el otro extremo vicio de la sórdida codicia el señorío sobre una propiedad sin religión ni virtud, y comprometida á diario por la vanidad y el lujo, por el ansia de bienestar material y de goce desenfrenado.

Finalmente sobre la soberanía de los ricos, gravita, con la misma fuerza de lógica y con igual apremio de orgullo individualista, la doctrina radical democrática de la soberanía, la cual obliga al doctrinarismo, falto de la resistencia y eficacia de la verdad, á continuas cesiones del campo, del falso terreno en que combate; y así como la soberanía de los inteligentes queda reducida á la de la peor clase de ignorantes, la de los ricos viene á parar en la de los pobres de más ínfima condición moral, la de los contribuyentes por una cuota mínima, los pobres con más necesidades y anhelos que los trabajadores y proletarios, y aun más dependientes que ellos, por causa de esas aspiraciones no satisfechas.

5. Pero á la soberanía de esas tituladas fuerzas vivas, órganos de la que corresponde á la nación, y que por ministerio de ellos ejercita, le acontece lo que á la soberanía derecho nativo de todos, es á saber, que no pueden en ningún caso desempeñarla por sí y necesitan darla indispensablemente en representación. Solo que ya los doctrinarios no hacen la distinción entre la soberanía, que las *fuerzas vivas* no pueden por sí mismas desempeñar, y el gobierno que trasladan, por sufragio, á los representantes á título de mandato, porque no se toman el trabajo de intentar siquiera la explicación de

cómo esas personas, declaradas capaces de la soberanía, son incapaces siempre de ejercerla, ni más ni menos que los declarados soberanos á título de hombres, y necesitan, lo mismo que éstos, confiarla en necesaria é imprescindible representación.

Aquí, si cabe, es aún mayor la contradicción que allí, porque, aunque, según la soberanía del liberalismo radical, la colectividad soberana es toda la sociedad civil, y no se concibe incapacidad esencial ni accidental para el ejercicio del derecho en persona jurídica tan amplia, al fin en el sistema doctrinario, por pocas que sean las *fuerzas vivas*, y cuantas menos mejor, ya componen una poliarquía que, por el número y por la supuesta capacidad de esos inteligentes y propietarios, puede y debe en todo caso desempeñar el gobierno, (la soberanía en acción), sin que, ni siquiera por incapacidad accidental y circunstancial, necesite en caso alguno confiarlo representativamente. La contradicción es la misma: por atribuir sin fundamento, aunque como derecho no nativo, la soberanía á quienes no son ni pueden ser sujetos de ella, ni por su excesivo número pueden ejercerla directamente, no hay otro recurso que suponerla también el único derecho que solo puede ejercerse en forma de representación. Argúyese, pues, aquí de la misma manera que á la representación de la soberanía del pueblo, sin más diferencia que el mayor ó menor número de los *soberanos mandantes*.


Del mismo modo, la soberanía de estas fuerzas vivas queda de hecho reducida al sufragio no universal, esto es, más reducido aún que el otro, con la misma diferencia que hay entre ejercer la soberanía y elegir al

soberano, entre gobernar y designar al gobernante, en una palabra, entre mandar y obedecer, no siendo tampoco capaces de ejercitar este derecho los inteligentes y los propietarios, por las razones expresadas en el anterior número.

6. De idéntica manera que toda la política contemporánea gira y fluctua entre las afirmaciones y prácticas más radicales y menos doctrinarias del liberalismo *democrático* y las más doctrinarias y menos radicales de este liberalismo moderado, sincrético y ecléctico, también la soberanía, es decir, el derecho electoral vacila entre el sufragio *universal* y el sufragio menos universal, entre las mayores ó menores restricciones de un amplio voto otorgado á los varones *sui juris*, y el censo limitado á los *capaces*, á título de *inteligentes*, ó de *ricos*.

Según el grado de fuerza de la *democracia* liberal, ó el contrario superior influjo de los elementos *conservadores* y *reaccionarios*, el estado de la *opinión pública*, el poder é influjo de las instituciones históricas, principalmente la realaleza, ó el simple arbitrio, el capricho y aun el miedo de los gobernantes, así predominan el sufragio universal ó el censo, la *democracia* ó el doctrinarismo en las leyes electorales. También es circunstancia determinante del mayor imperio de uno ú otro el que la elección representativa sea para una ú otra Cámara, la alta ó la baja, la más conservadora ó la más *progresiva*. No proceden ahora respecto de este punto más observaciones que las siguientes: 1.^a Antes marcaban los sistemas y las leyes electorales una distinción y direc-

ción más pronunciadas en un sentido ó en otro; ahora el *censo* es cada vez menos restringido y más cercano al sufragio universal, por la mayor lógica ó, si se quiere, menor contradicción de éste, y por el favor que le otorgan las muchedumbres, ansiosas de poder, y la inclinación, cada vez más extraviadamente democrática, de la vida moderna. 2.^a A su vez, el sufragio universal en toda su *pureza* va siendo menos frecuente, porque tratan los gobiernos de atenuar la fuerza demoledora y anárquica de él, ora por medio del sufragio indirecto, ora restringiendo el directo á los hombres que, además de tener la edad competente, saben leer y escribir, (mínima expresión de la soberanía de los inteligentes), ó bien, por medio de la combinación ultradoctrinaria de la proporcionalidad del voto, que consiste en la yuxtaposición más marcada de ambos sistemas, en virtud de la cual, ningún *sui juris* queda sin un voto, y tienen los que se suponen más capaces más de uno, según el grado de esta supuesta capacidad, por ejemplo, los propietarios, los padres de familia, los que tienen título profesional. 3.^a Según que el voto y la *representación* consiguiente son para la Cámara baja, ó para la alta, cuando ésta se constituye por elección, ó se combina este elemento con otros sistemas, así predomina en el primer caso el sufragio más amplio, ó en el segundo, por el contrario, el voto más restringido de las capacidades, ó cuando menos y en parte el sufragio universal indirecto.



1. La teoría *democrática* de la soberanía del pueblo, bien que no fundada todavía en un sistema jurídico íntegro, como el de los tratadistas protestantes de Derecho natural, es anterior á la iniciación y desenvolvimiento de la filosofía jurídica de la Reforma. Precede á ésta, y deriva de una necesidad práctica más urgente que la de la *libertad de conciencia*, la de remover revolucionariamente los poderes históricos, enemigos de la concepción eclesiástica protestante más lógica y radical, la que considera á la Iglesia, no como un orden social jerárquico de clérigos y legos, de sacerdotes y pueblo fiel, sino como la igualitaria comunidad de los santos, de los redimidos y justificados, sin cooperación y obras propias, por solo los méritos de Cristo. En tal comunidad en que creyente, fiel, justo y santo son una misma cosa, reside por *derecho divino* toda la autoridad y poder eclesiásticos, procediendo de aquélla los que, en representación, ejerce la asamblea de presbíteros, si es que el pueblo fiel no mantiene la soberanía inmanente como suma de la de todo cristiano, comunicándose directamente con Dios sin intervención y mediación de sacerdocio alguno.

Ahora bien, puesto que el poder civil está subordinado al eclesiástico, sacaban estos hereges la natural consecuencia de que el pueblo fiel, suprema autoridad eclesiástica, podía quitar y poner, confirmar ó destituir á los reyes é imperantes según que fueran favorables ó adversos á la nueva creencia. En concepto de esta nueva *teocracia*, el que es soberano en el orden superior lo es en el orden inferior, y los poderes históricos solo subsistirán mientras plazca al pueblo fiel, que así como puede mantenerlos, puede igualmente deponerlos y castigarlos. En suma, todo poder dimana del pueblo, y no tiene más título de gobierno que el consentimiento popular: he aquí como, sin los rodeos del pacto, surgió una teoría *democrática* y revolucionaria, enderezada contra las realezas católicas, por católicas, de la misma manera que luego la Revolución las en-

derezo contra las realezas por históricas y tradicionales (1).

La teoría del pacto, elaborada más por pensadores que por furibundos políticos militantes, aunque influida en los principios, y determinada por los factores que en el Capítulo anterior quedan expuestos, fué en general conservadora de los poderes históricos, á cuyo gobierno buscó en el contrato título de legitimidad permanente. Existían y regían las realezas en virtud de la enagenación y desprendimiento que los asociados hicieron de la parte de libertad é independencia necesarias para crear la autoridad, condición indispensable de la social subsistencia. El *pactum subjectionis* fué una enagenación perpetua de parte de aquel derecho nativo de nociva independencia absoluta que disfrutaron los hombres en el supuesto estado natural en que no podían vivir; y Hobbes, en su sombrío y siniestro pesimismo misántropico, derivó de ese pacto el absolutismo real en los términos más categóricos, amplios y repulsivos (2).

(1) Tales fueron los principios, espíritu y propósito de las obras tan citadas y conocidas de Hubert Languet (Junio Bruto) *Vindiciæ contra tyrannos*; de Buchanam, *De jure regni apud scotos*; Milton, *Pro populo anglicano defensio*. Con mezcla de citas bíblicas y clásicas, pasajes de la Escritura, textos de Cicerón y el obligado alegato de la *ley regia* que sancionó la dictadura cesarea por supuesta traslación de los poderes del pueblo romano al imperator, elaboraron estos hereges la teoría que necesitaban para derrocar el solío católico, y aun el anglicano episcopalista que no se plegaba á los *piadosos radicalismos* presbiterianos ó puritanos. Así justificó Milton el regicidio de Carlos I, y Buchanam las groserías, brutalidades é infamias cometidas por los reformados escoceses y el feroz sectario Knox contra la valerosa reina mártir María Estuardo, de dulce y veneranda memoria.

(2) Para Tomás Hobbes, legitimista de los Estuardos, partidario de Carlos II, á quien siguió en la desgracia y en el destierro, y que quiso fundar la monarquía absoluta, contra y en frente del Parlamento revolucionario y regicida, el estado de naturaleza era la guerra, *bellum omnium contra omnes*, y, por consiguiente, el fin único de la sociedad el anhelo y el estímulo para ella, la paz material, asegurada contra todas las posibles contingencias de turbación y desorden. Para ello no encontró expediente más eficaz y cierto que la enagenación en el imperante, en el rey, en la cabeza

Es Locke principalmente el que imprime á la teoría pactista, antes que Rousseau, una dirección y carácter liberales doctrinarios, influido por los sucesos de la revolución inglesa, de la que fué tan partidario como enemigo Hobbes, y á la que quiso justificar, procurando el predominio del Parlamento, títulos *racionales* y apriorísticos que no estaban en la historia inglesa, y había que buscar en la doctrina común del Derecho natural protestante, adaptado doctrinariamente á la actual realidad revolucionaria. Bien puede decirse que Locke fué el primer doctrinario, ó sea mixtificador de teorías y hechos incompatibles, en cuanto trató de acomodar el derecho histórico de la realeza con la preponderancia del Parlamento, no fundada en la representación política feudal y en la cooperación gubernativa de las Cámaras con el rey, imperfectamente definida en la constitución y mal deslindada por los hechos, sino en la supuesta representación legislativa del pueblo soberano, á quien atribuyó la facultad de hacer la ley, aunque no por sí mismo (1).

del animal fantástico, con que Hobbes simbolizó la sociedad, de la personalidad del súbdito, hasta del derecho de interpretar la Escritura, porque de otra suerte la diversidad de opiniones y la discusión comprometerían el sosiego social, confiado al príncipe, indiscutible é impecable: *summi imperantes peccare non possunt, nec cum ratione unquam culpandi sint* (*De Cive; Leviathan, ó De Civitate ecclesiastica et civili*).

(1) Locke, á diferencia de Hobbes, trató de mermar cuanto pudo los títulos y el poder de la monarquía, porque educado en el ambiente revolucionario que se respiraba durante el reinado de Carlos I, abrazó la causa del Parlamento contra el Rey. Después, acusado de conspiración contra Jacobo II, huyó á Holanda, donde permaneció hasta la caída de los Estuardos, regresando á Inglaterra con el usurpador invasor Guillermo III.

Así como Hobbes fué el mantenedor no ya solo del absolutismo y del despotismo, sino de la total abdicación socialista de la personalidad y de todos sus derechos en el imperante, Locke, por el contrario, trató de combatir la legitimidad monárquica, el poder propio y personal del rey, cuyos títulos de soberanía en la variedad de las funciones no dependían en Inglaterra de pacto alguno, sino de hechos anteriores á todo acuerdo constitucional del monarca con sus súbditos, incluyendo el de la Carta magna. A es-

2. Pero, si Locke se anticipó á Rousseau en la afirmación contradictoria de la soberanía representativa, no llegó á ella por la necesidad de *conciliar* de algún modo la soberanía inmanente con la posibilidad del gobierno y de la social existencia, sino que se limitó á establecer la tesis, sin tomarse el trabajo de explicarla, ni proponerse como Rousseau el problema de la consabida armonía. Mientras que Locke no se cuidó de considerar la relación que hay entre pueblo, factor de la ley, y pueblo que nunca puede hacerla sino por medio de representante, Rousseau declaró sincera y noblemente que la soberanía es *per se* irrepresentable, y que darla en representación y enagenarla es una misma cosa, porque de hecho el soberano se convierte en súbdito, y desaparece la igualdad de las independencias y libertades. Según Rousseau, el pueblo inglés, que se cree libre, solo lo es mientras elige sus representantes; después de elegidos, se esclaviza, se anula.

Para sostener el subterfugio con que Rousseau pretendió salir del paso, mediante la inmanencia de la soberanía y la delegación del gobierno, podría argüirse que eso mismo sucede en varias sociedades de iguales, en las que la colectividad no ejecuta sus resoluciones sino por el conducto y órgano de

te fin, y para atribuir al pueblo, como parte contratante, un poder, cuando menos igual al de la monarquía, se echó á construir una doctrina que sustituyera á la historia y constitución inglesas, según las cuales el pueblo no había sido nunca soberano ni cosoberano, aunque la feudalidad, tan poderosamente jerárquica y orgánica en Inglaterra, se hubiera sobrepuesto de hecho, no pocas veces, á la monarquía, y en esta materia tan bien dispuesta se infundiera el espíritu *democrático* y revolucionario del protestantismo, trocando la monarquía templada en monarquía liberal. Para ello escribió Locke sus *Dos tratados de Gobierno*, deduciendo de la doctrina común del pacto que solo el pueblo tiene la facultad de darse leyes, correspondiendo al rey solamente la de ejecutarlas, cosa contraria á la constitución inglesa, en la cual el monarca, fué, al menos de derecho, har- to más que simple ejecutor de la ley, conservando, aun hoy día, prerogativas con que podía anular al Parlamento, aunque hayan caído en desuso y, por evolución, histórica y liberal á la vez, venga á ser la realza inglesa la presidencia vitalicia de una república parlamentarista y plutocrática.

alguno ó algunos de los asociados, á los cuales encomienda la realización de aquéllas, en representación de toda la sociedad, no habiendo ninguna en la cual no sea necesaria esa representación para tales efectos gubernativos, de los cuales se encarga una junta directiva, es decir, un gobierno de forma poliárquica. Se contesta: 1.º que en esas sociedades de personas iguales y *sui juris* nadie enajena su libertad é independencia, antes bien la conserva; lejos de enagenar sus derechos nativos, los ejercita por sí, y, siendo persona capaz, no solo no tiene precisión de delegar por mandato el ejercicio de tales derechos, sino que no debe ni puede hacerlo; 2.º lo que da en necesaria representación la sociedad es la actuación de derechos adventicios, pero reteniendo, respecto de ellos, la colectividad la función capital y fundamental de todo gobierno, esto es, la legislativa, la cual ejercen directamente, y por sí, todos los socios, discutiendo y votando, y dando, si quieren, á los mandatarios ejecutivos, cuantas instrucciones juzguen convenientes, (mandato especial imperativo), al desempeño de la gestión representativa. No hay para qué decir que nada de común tiene con ésto la delegación del gobierno soberano, puesto que es la delegación, la enajenación de un derecho nativo, que ni el todo ni las partes pueden ejercer en ningún caso por sí mismos; y el gobierno que dan en representación no es la función ejecutiva, sino todas, empezando por la de legislar, que es imposible que desempeñe, y, por lo tanto, que retenga el pueblo, el cual es un mandante que, en el mandato, abdica toda su personalidad de tal, sin reservarse facultad alguna, ni poder dar ninguna instrucción imperativa al mandatario.

La soberanía de la colectividad, puesto que es el conjunto de derechos nativos de igual libertad é independencia, no podrá ser legítima, sino en cuanto sea la expresión de la voluntad de todos, sin faltar uno siquiera, puesto que si no es así, los que discrepan de la opinión y acuerdo de la mayoría, no solo descienden á la condición de súbditos, sino que, á la vez que la soberanía, ven desconocida y hollada su libertad é

independencia iguales, es decir, atropellada su misma personalidad y sometida á esclavitud (1). Así es que la voluntad de todos quedó reducida á una mera ficticia *voluntad general*, que, en el supuesto rousseauniano, se traduce lógicamente en el despotismo y tiranía de unos y la servidumbre de los otros; en la servidumbre de los más perpetrada por una tiránica y despótica minoría; porque los soberanos, los que votan en ese fingido sufragio universal, son muchos menos que los que se quedan sin voto; de lo cual resulta que la voluntad general no es lo que la palabra expresa, sino una voluntad particular, y particular de la menor parte. (2)

(1) Y no vale replicar que lo mismo sucede en las poliarquías, en las cuales, cuando no hay unanimidad, es acuerdo soberano el de la mayoría de los poliarcas, porque en repúblicas, que no sean la que supone la soberanía del pueblo, el poliarca ó poliarcas que se quedan en minoría no pierden ni ven menoscabado ningún derecho nativo, sino que en aquel caso todo se reduce á no ejercitar una ó más veces un derecho adventicio, que como el de soberanía no es para el propio provecho directo, sino para el procomún nacional.

(2) No solamente tienen en la teoría de Rousseau tal significación implícita y contradictoria los términos voluntad de todos y voluntad general, sino otro alcance que más explícitamente expresa el autor, dando á las locuciones un sentido convencional distinto de su valor gramatical riguroso. Voluntad de todos y voluntad general no significan ya la expresión de la soberana decisión de todos, ó solo de parte de los asociados, sino el fin, el intento y el uso consiguiente de esa soberanía, la cual, cuando cada soberano la endereza al propio interés personal, da por resultado una suma de voluntades enderezadas á un bien que es el conjunto de bienes particulares; (esta es la voluntad de todos); y si la dirige al procomún, resultante de igual bien social logrado para todos los asociados sin excepción es *la voluntad general*. Es decir, la una es una agregación de todos los intereses egoistas y particulares; la otra el producto armónico de los intereses colectivos, ó mejor del interés legítimo del conjunto social. No nos incumbe señalar aquí, por referirse á otro punto distinto del que tratamos, la distinción caprichosa y arbitraria que hay en este juego, en este cubileteo de palabras y de sofismas. Únicamente diremos que, siendo la sociedad mera suma de individuos, cuyo bien individual consiste en el igual goce de los derechos absolutamente iguales en todos los individuos, no hay bien social, esto es, general, sino en cuanto está logrado igualmente el bien de todos y de

Aun convertida la soberanía en un derecho electoral de los menos, por muchos que sean los que disfruten de ese impropio y falsamente llamado sufragio universal, la experiencia histórica, así contemporánea como anterior, muestra cualquiera en el uso y en las consecuencias de ese voto la incapacidad de los electores, faltos del conocimiento, de la rectitud y de la independencia que exige una elección acertada y conducente al legítimo interés nacional de un buen gobierno. La ignorancia, la pasión sin freno, el interés sensual son los inspiradores y guías de ese voto, cuando es *independiente*, esto es, en la parte, proporción y circunstancia en que no es manejado por el criterio, impulso, sugestión y coacción de otras conveniencias y personas de mayor poder social efectivo. Pero bien puede decirse que el voto está supeditado siempre, por lo menos á los sofismas de los demagogos, directores de la masa popular, y cuando no, á los torpes cálculos de las llamadas clases conservadoras; de suerte que, si la ciega irreflexión popular no lo entrega á la aberración y al delirio insanos, lo vende al dinero, al influjo, á la imposición del poderoso, que ahora es el rico nuevo. Rara vez, y solo por un extraordinario y feliz concurso de hechos y causas favorables y excepcionales, logran los elementos sanos de la sociedad encauzar el sufragio, ó despojarle, al menos, de parte de su desdichada eficacia destructora; lo común y general es que tal acción sea impotente, y que los manipuladores inmorales de la *voluntad del pueblo*, si superiores á él en indignas artes y habilidades, inícuas é indecorosas, muy inferiores en sentido moral, falsifiquen el sufragio en provecho de la paz y el orden materiales, y de la anarquía mansa que ha menester la plutocracia bur-

cada uno de los socios, y así no hay distinción entre ambas voluntades por razón de su fin. En el igual goce comunista de los bienes de la tierra tiene que consistir para Rousseau el bien de todos y el general, porque solo así serán los hombres iguales é independientes. Lo que hay es que esto, además de ser falso, absurdo é imposible, menos que ninguna otra podría conseguirlo ni la soberanía de todos, ni la de la parte á que ese todo soberano queda reducido.

guesa para el negocio. El sufragio es una simulación, una su-
perchería en que el buen gobierno y la prosperidad de la na-
ción corren la misma suerte que la democracia verdadera, cu-
yos destinos se ponen en tales manos (1).

(1) Aun en una sociedad cristiana, sólidamente organizada, y en que el pueblo esté contenido dentro de los límites de su acción é influencia socia-
les, es muy peligroso el sufragio de la plebe y muy difícil de dirigir por
las clases superiores. Pero el de las actuales muchedumbres descristianiza-
das y, en proporción, degradadas y embrutecidas, el de esta masa inorgá-
nica, que ya no es pueblo, es por regla general ingobernable. La pseudo
democracia contemporánea rechaza de sí á todo elemento verdaderamente
directivo, á toda superioridad intelectual y ética que están muy por encima
de la comprensión, de la moralidad, de la educación y los gustos del pue-
blo soberano, el cual se inclina indefectiblemente á aquellos hombres cuyo
nivel apenas excede del de la plebe paganizada, á esa burguesía sin escrú-
pulos, cuyos manejos repugnan á las gentes de alguna delicadeza y eleva-
ción de espíritu. Tal minoría selecta, cada día más mermada, necesita ha-
cer un esfuerzo casi heróico, no para una cordial y anhelada inteligencia
sanamente democrática con el pueblo, sino para la actual titánica empresa
de arrancar á los míseros esclavos del sofisma, de la corrupción y de los
abusos dominicales de la plutocracia burguesa á esos tiranos que los enlo-
quecen y envilecen á fin de mejor explotar la ignorancia y el rebajamiento
plebeyos. Solo por excepción, y como por milagro, no abandonan á Cristo
y aclaman á Barrabás estas infelices muchedumbres, de las cuales todo lo
más que logran los políticos limpios y bastante abnegados para descender
al terreno fangoso de una lucha innoble, es triunfo parcial y efímero, per-
pétuamente amenazado de absoluta é incondicional derrota.

Para que no se atribuyan á preocupación y amargo pesimismo tales es-
pecies, copiaremos de testimonios de mayor excepción, significativos pasa-
jes, acaso no más expresivos y concluyentes que otros muchos que habrí-
amos podido escoger en una elección difícil, por razón de la misma abun-
dancia y del valor de las pruebas. Dice Paul Lafitte (*Le suffrage universel
et le regime parlementaire. . .*) «A la hora presente la mayor parte de los
»hombres tiene abstraída la atención por el trabajo del día, por el cuidado
»del siguiente, y es mucho pedirles que se interesen por una tradición his-
»tórica, ó por la libertad política. Lo natural es que el interés inmediato
»ocupe lugar preferente en el alma de esos hombres que viven del trabajo
»diario. Los elegidos de tal mayoría pensarán como ella. De aquí el despe-
»go de la política de ideas y el fraccionamiento de los partidos...» Y acerca
de los políticos de profesión, que tienen que ser á imagen y semejanza de
tales electores, escribe más adelante: «El político entra en carrera con el

Y no logra la adulteración doctrinaria de la democracia radical embotar completamente la potencia antisocial del sufragio, ni aun siquiera para los torpes fines de la burguesía conservadora, porque las masas, cada vez más descreídas y

»equipaje más ligero, como el antiguo atleta que se despojaba del peso innecesario. No ha menester estudios, pues no necesita otro que el de agradar á la mayoría; ni principios, pues el único suyo es que la mitad más uno tiene siempre razón... En cada elección se ve disminuir el número de hombres respetables por sus antecedentes, por su saber y su experiencia en los negocios. Los sustituyen hombres nuevos que no sienten escrúpulos para aceptar programas absurdos».

Así se expresa un liberal doctrinario, constitucional y parlamentarista, que lamenta eso por lo que daña y menoscaba á su sistema representativo. Véase ahora lo que escribe un socialista, Henry George en el libro que ya una vez hemos citado, *Progreso y pobreza*. «La transformación del gobierno popular en un despotismo de la especie más vil y degradante se realiza rápidamente ante nuestra vista. Nuestros cuerpos legislativos son cada día inferiores; los hombres capaces y rectos se ven obligados á huir de la política, y las artes del agiotista son mucho más apreciadas que la reputación de un hombre de Estado. Se vota con una indiferencia cada vez mayor; aumenta el poder del dinero; es difícil despertar en el pueblo la idea de la necesidad de las reformas, y más difícil el que las realice; las diferencias políticas no son ya diferencias de principios, y las ideas pierden su imperio; los partidos están sometidos á una oligarquía ó á una dictadura .. En todas las grandes ciudades americanas existe hoy una clase directora, tan determinada como puede estarlo en los países más aristocráticos del mundo. Sus individuos llevan el poder en los bolsillos, dirigen las elecciones, distribuyen los empleos, y, aunque no trabajan, visten lujosamente y gastan el dinero con prodigalidad..... ¿Quiénes son estos hombres? ¿Acaso hombres prudentes, buenos, instruidos, que han obtenido la confianza de sus conciudadanos por la pureza de la vida, por el brillo de sus talentos, por su probidad en las funciones públicas, por su profundo estudio de los problemas de gobierno? No; son jugadores, charlatanes, intrigantes, ó algo peor, que han convertido en oficio el manejo de los votos y la compra y venta de los puestos oficiales... Son como los pretorianos de Roma decadente; el que quiera sentarse en la silla curul, ó llevar las haces por delante, debe enviar mensajeros á su campo y otorgarles mercedes y promesas. Por medio de estos hombres, los grandes intereses pecuniarios llenan el Senado y los tribunales de justicia con protegidos de quienes disponen. Ellos hacen y deshacen inspectores, asesores, magistrados, rectores de centros de enseñanza y diputados del Congreso.

materializadas, más ansiosas de goces sensibles y de poder político para lograrlos, y más arrogantes con la fuerza del número y de la asociación, menos toleran de día en día los programas y los directores que no descienden hasta las utilita-

»Hay, por causa de ellos, muchos distritos electorales en que hombres como Jorge Washington, Benjamin Franklin y Tomás Jefferson no podrían alcanzar nunca el más pequeño empleo legislativo. La elevación y rectitud de su carácter sería el mayor obstáculo para su nombramiento.»

«Fórmase entre nosotros una clase que tiene todo el poder de las aristocracias sin sus virtudes; tenemos simples ciudadanos que gobiernan millones de millas de vías férreas y millones de hectáreas de terreno, y de quienes depende el sustento de gran número de hombres; ellos nombran gobernadores de Estados soberanos como á sus dependientes; eligen senadores, y su voluntad tiene fuerza de ley. La industria tiende por doquiera á revestir una forma en la cual uno solo es el dueño y los demás sus servidores. Así como el *landlord* inglés hace votar á sus colonos, del mismo modo el fabricante americano hace votar á sus obreros....»

«Gracias al sufragio universal el poder se encuentra en manos de los que no se interesan directamente en la marcha de los asuntos públicos, que, atormentados por la necesidad, ó embrutecidos por la pobreza, están dispuestos á vender sus votos al mejor postor ó á seguir al demagogo que grite más fuerte, ó, que, agriados por la opresión, miran á un gobierno tiránico y disoluto con la misma satisfacción con que los proletarios y esclavos de Roma veían á un Calígula y á un Neron diezmar á los ricos patricios. Dada una comunidad de instituciones republicanas, en la que una clase es demasiado rica, y la otra es tan pobre que basta con un puñado de dinero en un día de elecciones para moverla en uno ú otro sentido, el poder cae fatalmente en manos de agiotistas que lo compran y venden como los pretorianos la púrpura romana, ó en manos de demagogos, que son reemplazados, después de algún tiempo, por otros demagogos peores aún que los primeros.»

Hé aquí á lo que queda reducida la democracia moderna, ó sea el sufragio universal, según un partidario tan convencido y ardiente de ambas cosas, como lo es Henry George. Véase lo que dice de ellas el grave y sesudo Macaulay en una carta dirigida en 1857 á un biógrafo de Jefferson: «Tengo la firme seguridad de que jamás he escrito una línea, ni pronunciado una palabra que exprese la opinión de que la autoridad suprema en el Estado deba confiarse á la mayoría numérica de los ciudadanos, ó, en otros términos, á las clases más pobres é ignorantes de la sociedad. Desde hace largo tiempo abrigo la convicción de que las instituciones completamente democráticas han de destruir, tarde ó temprano, ya la libertad, ya la civi-

rias miras de ese interés presente y temporal, único concepto y designio que caben en el entendimiento y en el corazón de la plebe privada de las luces y de las inspiraciones del criterio y del sentimiento cristianos. La repartición igual y próxima de

»lización, ya la una y la otra á la vez. Es evidente que nunca vuestro go-
»bierno podrá refrenar á una mayoría perturbadora y mal hallada con sus
»condiciones de vida, puesto que entre vosotros es la mayoría quien gobier-
»na y tiene á su merced á los ricos que constituyen siempre una minoría.
»Día vendrá en que en el Estado de New York, una multitud de gentes que
»apenas han almorzado, y que no esperan más abundante comida, habrán
»de elegir las Cámaras; y ¿es posible dudar del carácter de las Cámaras
»así elegidas? ¿Ved, por una parte, un hombre político que predica la pa-
»ciencia, el respeto á los derechos adquiridos y la fidelidad á los compro-
»misos públicos; por otra, oid al demagogo que declama contra la tiranía
»de los capitalistas y de los usureros, y que pregunta con qué derecho al-
»guien bebe champaña y va en coche; mientras que millares de gentes hon-
»radas carecen de lo necesario? ¿Cuál de estos dos candidatos tendría más
»probabilidad de ser elegido por el obrero á quien sus hijos piden pan? Te-
»mo mucho que en semejantes circunstancias adopteis medidas funestas. No
»hay más que dos términos: ó algún César, algún Napoleón, se apoderara
»de las riendas del Gobierno, ó vuestra República será entregada al saqueo
»por los bárbaros del siglo XX, tan espantosamente como el Imperio ro-
»mano lo fué por los bárbaros del siglo V. La diferencia consistirá en que
»los hunos y los vándalos venían de fuera, y las modernas hordas nacerán
»en vuestro país, al calor de vuestras propias instituciones.»

Como habrá notado el lector, Henry George presenta el aspecto y la etapa servil de la democracia moderna; Macaulay el lado y la indefectible evolución de la avasalladora tiranía demagógica é igualitarista. Entre ambos extremos fluctúan estas democracias, que, por serlo solo de nombre, tendrán alternativamente licencia y servidumbre, nunca libertad, mientras rujan blasfemamente á Cristo: *apartate de nosotros, no queremos conocer tus caminos.*

Así es que provoca amarga risa Tocqueville cuando dice: «querer dete-
»ner la democracia es luchar contra el mismo Dios; las naciones tienen que
»acomodarse al estado social que les impone la Providencia.» Cierta sería
esta afirmación tratándose de aquella democracia descrita en el Capítulo X
del Libro II; no de la democracia liberal á que Tocqueville se refiere; no
siendo exacto que la Providencia la imponga, sino que la tolera y permite
como un mal, hijo del pecado y azote de las naciones prevaricadoras, pri-
vadas de la libertad y de la democracia efectiva en igual medida, en que de
la verdad se alejan.

los bienes de la tierra es el único ideal asequible á las muchedumbres sin Dios, y á él han de irse plegando cada vez más esos políticos de oficio, que bien pronto solo las guiarán, en cuanto se dejen empujar por ellas, y se abstengan de poner á las ansias populares el reparo y moderación de otras ideas y derechos, incompatibles con el igualitarismo nivelador forjado por las *democráticas* concupiscencias.

Y nada decimos de la presión ejercida sobre el sufragio universal por la sugestión corruptora de ciertos gobiernos, á la que un político español llamó *influencia moral*, sin duda para distinguir púdicamente el conjunto de los *expedientes* y *artes*, falsificadores del voto, de la descubierta y descarada coacción de la fuerza brutal, encomendada á los propios agentes, ó consentida á los sicarios del partido. Este *resorte pacífico* no es monopolio de los países latinos parlamentaristas; sin escrúpulo alguno lo utilizó Bismarck, cuando le fué necesario, y ahora se lo han echado en cara á Chamberlain periódicos ingleses independientes, acusándole de haberse proporcionado así en las últimas elecciones una mayoría *jingoista*, partidaria de la prosecución, á toda costa, de la inicua mercantilista guerra contra las repúblicas sudafricanas, víctimas de la riqueza mineral que poseen y que tienta á la cartaginesa codicia británica.

3. El lógico error radical de la soberanía inmanente é irrepresentable, coincidiendo con los fieros impulsos anárquicos de las muchedumbres, desligadas de todo respeto y obediencia, colocó á las asambleas *representativas* de la Revolución en la actitud más desairada y humillante de esterilidad é impotencia, supeditándolas al *mandato imperativo* de la demagogía que legislaba en los clubs y en la calle, y que imponía su voluntad por medio del populacho armado de las secciones. El soberano, es decir, una minoría de exaltados y basiliscos, dictaba y ejecutaba en París los acuerdos de la omnipotente y tenaz tiranía jacobina, y eran órganos de esta voluntad suprema las Secciones, los clubs, el Ayuntamiento, los pe-

riódicos, los cafés y la plazuela, todos menos la Asamblea, soberana de puro nombre, que deliberaba y votaba bajo la presión y la amenaza, y en la cual no hallaban, por el fanatismo y por el miedo, aplauso y acogida más que los pensamientos y los planes del más descabellado y demente radicalismo. Los elementos conservadores, cuantos hombres lograron en medio de los delirios comunes, salvar del naufragio un resto de moralidad y buen sentido, quedaron totalmente anulados, y la prudencia y el instinto de conservación les fué excluyendo voluntariamente de aquellos escaños, donde eran blanco continuo de las injurias y execraciones de la turba desentrenada de las galerías, la cual, á la salida de las sesiones, agredía brutalmente á los moderados, aun solo por el *incivismo* del silencio. Desde la reunión de la Asamblea Constituyente, quedó Francia entregada á la demagogía, que ejercía su sanguiento y criminal despotismo por el conducto de una facción cada vez más reducida, y que, en el motín comunero de 10 de Agosto de 1792, con un acto de soberanía constituyente, al cual hubiera hecho fracasar la energía de un general mediocre, derribó la mísera y ficticia soberanía constituida, desapareciendo también la sombra de aquella realeza que mucho antes se había suicidado.

Con el movimiento *conservador y reaccionario* de 9 de Thermidor se inician en la opinión y en la política práctica de una considerable mayoría la tendencia y fase doctrinarias del liberalismo, á la cual no tardará en corresponder también el principio de una teoría concorde con las necesidades de vida social y de gobierno medianamente estable y sólido, teoría determinada y forjada por las más dolorosas experiencias y por el apremio, cada vez más exigente de la realidad (1).

Aunque donde quiera que haya contradicción é incompati-

(1) Para evitar repeticiones, expondremos, al tratar de la teoría constitucional, una sucinta historia interna de los expedientes y artificios con que trató el doctrinarismo de desvirtuar la lógica y amansar la fiera del liberalismo radical.

tibilidad de principios y tesis hay doctrinarismo, pues tal agregación de lo inconciliable es la esencia de éste, y en tal sentido, puede considerarse doctrinario al mismo Rousseau, se ha convenido en designar con el nombre de doctrinarios á los que construyeron, *perfeccionaron* y profesaron ese conjunto de yuxtaposiciones del antiguo y del nuevo régimen, tratando de atenuar la fuerza destructora de los absurdos de éste con imitación y aun fragmentos del antiguo, y más que por deliberado propósito y reconocimiento de su bondad y utilidad, por imposición de la naturaleza, que es baluarte de la razón y de la justicia y poderoso agente restaurador, por lo menos, de aquella parte estrictamente indispensable para la vida social. Presumían tales políticos de acción, más bien que pensadores y tratadistas científicos, haber hallado una *doctrina*, la *verdadera doctrina política*, por el mismo criterio y procedimiento eclécticos de que se valió Cousin, y con igual propósito é idéntico resultado puramente sincrético, erróneo y estéril, para indagar y obtener la *doctrina*, la *verdadera doctrina* filosófica. El doctrinarismo es un eclecticismo y sincretismo político, como el eclecticismo es un doctrinarismo filosófico (1).

(1) Lo cual no es decir que el doctrinarismo sea la deducción política del eclecticismo, de suerte que en este se halle lógicamente contenido aquel, como la aplicación en el principio, la consecuencia en las premisas. Entre uno y otro no hay relación lógica, interna y esencial, sino las extrínsecas y accidentales del tiempo y de otras coincidencias y semejanzas externas. Una doctrina política que no es sistemática no puede estar fundada en doctrina filosófica alguna, ni verdadera ni falsa, ni armónica, ni meramente zurcida con elementos contradictorios. El eclecticismo y el doctrinarismo se parecen solamente a) en que vino el uno después de las aberraciones del materialismo, como el otro después de los abominables excesos de la Revolución, y que, así como un disgusto y hastío de los errores materialistas determinaron y estimularon en los espíritus orientación y rumbo hacia otra filosofía, así el desprecio á los sofismas del liberalismo radical, y el horror á sus tremendas consecuencias movieron á los entendimientos hacia otra política, é inclinaron á los autores y á los estadistas á fundar en ella la constitución y gobierno de los pueblos; b) ni eclécticos ni doctrinarios procedieron

4. Había, sin embargo, la Revolución penetrado harto profundamente en el entendimiento obcecado y prevenido de la burguesía liberal, de las clases *ilustradas* y *sensatas*, para que renunciasen á ese dogma de la soberanía popular, que, al fin, y después de sosegadas las tormentas demagógicas y anárquicas, pondría el poder á disposición de la calculadora y ambiciosa clase media ya semidescristianizada, sino descristianizada del todo, no poco antes de 1789. Toda la evolución conservadora que, después de Thermidor, se inicia y pronuncia en la sociedad, y después del 18 de Brumario en el Gobierno, daba á las superiores capas burguesas la esperanza fundada y aun la seguridad de que habían de monopolizar en su provecho la dirección de los negocios públicos; y como esto no podía ser, si, con el antiguo régimen, se restauraba en su esencia y fundamento la soberanía de la realeza, y, bajo ella, el concierto social y el influjo y acción gubernativa,

por amor á la verdad, sino por el móvil, menos elevado, de una reacción como impuesta forzosamente por los hechos, y siempre prevenida desfavorablemente respecto de la filosofía y la política antiguas; c) unos y otros creían que todos los sistemas eran verdaderos y falsos á la vez, por no contener todos la verdad total, sino porciones de ella, y consistir el error en una verdad incompleta; d) por lo cual, en ir extrayendo de todos la parte de verdad que encierran, para obtener la verdad íntegra y completa, consiste la lumbración filosófica y política respectivamente; e) eclécticos y doctrinarios se equivocaron en esto como en creer que tal indagación, extracción, y agregación podían hacerse sin un criterio discernidor, esto es, según una filosofía y políticas previamente tenidas por ciertas para saber cual es, y donde está, la verdad que cada doctrina contiene; f) los resultados fueron los mismos, la esterilidad y el error: el eclecticismo, bajo las apariencias de espiritualismo falaz, obtuvo una conclusión de naturalismo panteísta, y dejó el pensamiento en la pendiente de todas las aberraciones, sin contener, ni poco ni mucho, los avances, invasión, y predominio del positivismo y del materialismo que es la filosofía más lógica y práctica; el doctrinarismo tampoco restauró cosa alguna ni en práctica, ni en teoría, y, si logró contener un momento, por sus expedientes y componendas, la marcha de la democracia liberal y de la revolución brava, lo cual es muy dudoso, no ha quebrantado en lo más mínimo su lógica y su poder, y deja al número y á la fuerza señoras del porvenir, y al servicio del socialismo y de la Internacional.

tivos de los diversos órdenes sociales, la clase media no renunció al dogma rousseauiano, que era á la vez el título y el instrumento de su utilitaria empresa política; se limitó á hacer con él lo que con todas las instituciones así antiguas como nuevas: manipularlo y modificarlo en su favor, conservándoles más bien el nombre engañoso que la naturaleza. La soberanía del pueblo subsistió, pero de modo que sus órganos y oráculos no fueran todos los ciudadanos que hasta entonces lo habían sido, sino ellos, los capaces, esto es, los *ilustrados*, los que saben lo que es progreso, y cuales son sus procedimientos y caminos, y los acomodados, ó sea, los que tienen más interés en que ese progreso no comprometa el orden material y la libertad necesaria para gozar de la vida. A este fin dispusieron ambos elementos, de modo que resultase un equilibrio puramente físico de la acción contraria de estas dos fuerzas: la centrífuga de un adelanto ciego y disolvente, y la centrípeta de una reacción, no menos torpe é inconsiderada, de material conveniencia.

A la menguada ilustración y á la circunspección del bolsillo, llamaron los doctrinarios *fuerzas vivas*, entre las cuales no había lugar para las principales dotes de la soberanía que son la virtud y la aristocracia verdadera, porque ni los doctrinarios estaban en disposición de estimarlas, ni era fácil encontrarlas y reunir las ya en una sociedad nivelada por el igualitarismo y desarticulada y pulverizada por la Revolución. Y como la doctrina más lógica, la de la democracia radical, pugna con estas mixtificaciones, empujando siempre hacia el sufragio más amplio, y tampoco convenía á la clase media una oligarquía de sabios y de potentados, hubieron de contentarse con cualquiera saber y riqueza, con el saber vecino de la ignorancia, y la riqueza que linda con la indigencia, sin la dignidad y aun las virtudes de ésta.

Quién había de discernir la calidad y entidad de estas *fuerzas vivas* para otorgarles su título y derecho soberano es punto espinoso y difícil, porque habían de ser ellas mismas las que se reconocieran tales, ó habían de ser la soberanía an-

tigua, ó la nueva las que les otorgaran el Poder. Si lo primero, nadie se consideraría tan desprovisto de saber y de fortuna que no se juzgara con potencia y vitalidad bastantes para el gobierno, siguiéndose de aquí la discordia y guerra inherentes á tal pretensión; si lo segundo, ser econocería en el Gobierno legítimo, ó en el nuevo soberano las dotes y título de un poder constituyente que no hay razón para que no siga siéndolo constituido. Pero el doctrinarismo, ó no se cuidó de tales minucias, ó, si lo hizo, fué para salir del paso con la distinción entre constituir y gobernar, y entre los órganos naturales y jurídicos de ambas funciones, como se verá en el capítulo siguiente.

En el antiguo régimen, los elementos sociales de inteligencia y riqueza, factores siempre estimables y de legítimo influjo, no eran soberanos; pero contribuían al público gobierno, concejil ó supremo, no desarticulados, sueltos y dispersos, sino dentro de los respectivos órdenes y clases, por conducto de ellos, y como miembros de estos organismos; eran fuerza social y cooperadora con la autoridad, no fuerza soberana. El doctrinarismo lo entendió, ó lo dispuso de otro modo, porque, no entrando en sus miras ni la restauración de la realeza con sus naturales atributos, ni el nuevo dogma de la soberanía expresada en el sufragio universal, no tenía más soberanía disponible que la inteligencia y la riqueza, y éstas no constituidas, ordenadas y disciplinadas en las colectividades históricas correspondientes, sino desligadas de la clase y del gremio por el revolucionario individualismo que redujo la sociedad á masa, es decir, á suma y mero agregado de individuos.

A esto mismo va á parar Inglaterra. Bien que su vigente sistema electoral esté asentado sobre la base de la riqueza, y el sufragio restringido toque, desde 1884 especialmente, en los límites del sufragio universal, esto se ha verificado allí por vía de evolución y aun de reforma profunda y amplia, sin romper apriorística y revolucionariamente la continuidad de la tradición histórica. La Cámara de los Comunes fué, desde tiempos remotos, en Inglaterra; y no mucho después de la

Carta magna, la representación del cuerpo de libres propietarios, así nobles de clase inferior, como de la acomodada burguesía de las ciudades y villas con voto en la Cámara baja. Abuso y corruptela, bien que de fecha larga, habían dado el mismo derecho electoral que á los condados y á los grandes centros de población á pequeñísimas localidades que, por su insignificancia llamaban *bourgs pourris*, *bourgs de poche*, los cuales contribuían no poco al poder de la *gentry*, ó sea de la clase vecina de la aristocracia, aliada de ella, é influida por el mismo espíritu; en esas aldeas semi despobladas era donde los señores territoriales y los propietarios ricos disponían más á su antojo del sufragio. (1) Este sistema, sobre el cual habían pasado, sin alterarlo, las dos revoluciones del siglo XVII, sufrió en 1832 la primera modificación, inspirada ya un tanto en el liberalismo individualista continental, pero todavía harto circunspecta y moderada para dejar subsistir la base del sistema electoral histórico: el *condado*, la *ciudad*, el *burgo*. Las tres circunscripciones permanecen en la ley de 1867, extensiva á Escocia y á Irlanda en 1868; pero el censo de riqueza se disminuye, bien que manteniendo tipos diferentes en cada uno de las tres clases de distritos, hasta que en 1884 el régimen de los burgos se aplica á los condados con lo cual se triplica el número de los electores rurales.

Como se ve, ha sucedido en materia electoral lo que en la mayor parte de las instituciones inglesas, por no decir todas. Por debajo de la forma y de la exterioridad intangibles é inalterables, ó punto menos, se ha verificado una transformación profunda y total, ora mediante evolución suave, lenta y continua, ora por reformas, revolucionarias de hecho, bien que

(1) Por uno de esos burgos, el de Newark, de que disponía el duque de Newcastle, cuyo hijo, el conde de Lincoln fué en Oxford condiscípulo de Gladstone, entró éste en la vida pública, recién salido de la Universidad, y ese *distrito* representó hasta 1846, en que la participación de Gladstone, todavía *tory*, en la abolición de los derechos sobre los cereales importados, lo derribó del poder con Peel, sacrificado en aras de la resentida aristocracia.

siempre respetuosas de la tradición, ó al menos, de su tradicional cobertura. Ahora, como en tiempo de Eduardo III y aun de Eduardo I y de Enrique III, el cuerpo de los libres terratenientes y el de los burgueses que se les asemejan en posición y riquezas, aunque no sean territoriales, envían sus representantes al Parlamento, al amplio consejo nacional de la realeza. Los distritos son: la natural circunscripción feudal territorial donde reside la jerarquía de propietarios libres, *el condado*; y los núcleos de población urbana ó rural, las *ciudades y burgos*, que han recabado en esos centros, ó al lado de ellos una personalidad social y jurídica bastantes para lograr aparte representación política; pero el liberalismo del Continente se ha ingerido poco á poco, ó por ruda invasión, en esos viejos moldes, infundiéndoles el espíritu nuevo más cercano del doctrinarismo, de la *democracia* próxima al *sufragio universal* (1).

(1) Con el advenimiento al trono del rey wigh Guillermo IV, no pueden sostener más tiempo los *torys* la vieja organización electoral, y despues de prolongada y tenaz resistencia, llena de episodios dramáticos y salpicada de sangre en graves motines, el ministerio liberal del Conde de Grey y de lord Russel logra en 7 de Junio de 1832 hacer pasar el célebre *bill de reforma*. La ley ha tenido, así y todo, un marcado sentido *conservador*. Por de pronto, disminuye el abuso de los *bourgs pauvris*, suprimiendo un gran número, é incorporando otros á las ciudades, ó disolviéndolas en el condado. En estos son electores todos los propietarios de bienes alodiales que produzcan como valor líquido diez libras esterlinas, ó sean, doscientos cincuenta francos anuales, así como los que perciban igual renta de su propiedad, á título de *copyhold* (los *copyholder* son los antiguos solariegos, aun adscritos á la tierra, pero que no podían ser despojados de ella mientras cumplieren las cargas y servicios, á que el señor había reducido la servidumbre de aquéllos, y que constaban en el registro señorial); lo son igualmente los arrendatarios por sesenta años, ó los que, por veinte sólo, paguen cincuenta libras esterlinas anuales.

Esta ley aun dejaba las elecciones en poder de la aristocracia y de la *gentry*, porque, si bien es cierto que desaparecen no pocos de aquellos despoblados y mínimos centros de que disponían á su arbitrio los aristócratas y ricos, concede voto en los condados á nuevos electores, los *tenants at will*, ó sea, aquellos arrendatarios cuyo derecho depende de la voluntad del dueño; y, por otra parte, la elevación de la cifra del censo excluía á la clase

5. La soberanía de las *fuerzas vivas* es en las naciones de regular población, y á poco que se abra la mano respecto de las dos condiciones soberanas, una poliarquía tan amplia que, no sólo por la incapacidad, sino por el número de los poliar-

agrícola más modesta. Así y todo, aun duró la ley bastantes años, hasta que en 1886 el ministerio liberal Russel-Gladstone presentó un proyecto en el que se rebajaba el tipo, y se abría paso á los locatarios, y, con ellos, á la mayor parte de la población obrera; pero la defección de algunos *wighs* aristócratas, que se unieron á los *torys*, derribó al ministerio, y fué sustituido por el gabinete conservador Derby-Disraeli. De tal suerte, sin embargo había agitado y conquistado la opinión la elocuente palabra de Gladstone, defensor del *vill*, con el mismo ardor con que había combatido la reforma de 1832, que el ministerio conservador se vió obligado á presentar un proyecto al cual los liberales se abstuvieron discretamente de hacer oposición. La nueva ley de 1867 privó á 11 burgos de representación, redujo á un sólo diputado la de 35, y á 12 libras de renta la franquicia electoral en los condados; en los burgos es elector cualquier morador de casa inscrita en el registro de contribuyentes al impuesto en favor de los pobres, (*poortax*), y en las ciudades todo inquilino que pagara 10 libras (250 francos) de alquiler. El cuerpo electoral, sólo en Inglaterra, se aumenta un 50 por 100 en los condados, y un 200 por 100 en los burgos; pero sobre todo en las ciudades hizo electora á la mayor parte de los obreros.

Sin embargo, todavía esta ley conservaba algo del sistema antiguo, y, por consiguiente, no poca desigualdad representativa, según el nuevo criterio de la representación individual, que prescinde de la corporación representada, para solo tener en cuenta la masa numérica de la población con arreglo al concepto sociológico del liberalismo abstracto. Por esto, Gladstone, que dentro del partido liberal, en el que había ingresado hacía muchos años, fué siempre el campeón de las ideas liberales del Continente, aprovechó en 1884 el poder, para lograr, sostenido y aun movido por los elementos radicales, y forzando con amenazas de una nueva hornada de pares la oposición de los lores, una reforma electoral más avanzada que las precedentes. El sistema electoral de los burgos se aplicó á los condados, triplicándose así el número de electores de los campos; pero, sobre todo, lo que modificó más radicalmente el régimen antiguo, bajo las formas exteriores que se conservaron, fué la introducción del escrutinio uninominal y de un diputado por cada 50.000 almas. Así es que hoy el sistema electoral inglés no se diferencia, en el fondo, del régimen doctrinario del Continente; y es casi tan parco como el que más en la restricción del censo de riqueza, estando equilibrada y contrarrestada, si es que nó en posición inferior, la plutocracia

cas, no puede constituir lo que se viene tradicionalmente llamando *democracia directa*, ó sea, aquella que, por sí misma y sin necesidad de representantes legislativos, se supone que puede ejercer el poder soberano. Lejos de eso, necesita encomendarlo en una representación de la misma especie, y con igual significación que la que confía el pueblo soberano á sus diputados, sin que se note entre uno y otro mandato más diferencia que la del mayor ó menor número de representados mandantes, según que el sufragio es *universal*, ó es restringido, esto es, más ó menos restringido, pues ya hemos visto que la universalidad del voto es puro nombre, simulación y término inexacto. El que los electores voten á título de un supuesto derecho nativo, ó de un derecho adventicio de superioridad, igualmente ilusoria y ficticia, tampoco cambia la naturaleza del gobierno, que es siempre, por la multitud de los poliarcas representantes, una república democrática, la peor de las formas de la soberanía, según Aristóteles afirmó con notoria evidencia (1).

6. Es la pluralidad proporcional del voto la expresión del más sutil, y por lo tanto, contradictorio doctrinarismo; puesto que yuxtapone, sin modificación alguna, el principio del sufra-

aristocrática y de la *gentry*, á la cual contiene, y acaso ya domina, el elemento democrático obrero. Él ha de dar al traste no sólo con los antiguos moldes y formas de la Constitución inglesa, sino con su espíritu y carácter, poniendo la política y la suerte de Inglaterra en manos de las muchedumbres, tan incapaces é ineducadas allí como en las demás naciones. Casi toda la población masculina adulta tiene voto.

(1) Bien se percibe desde luego que el sentido en que se toma la palabra *democracia* es el mismo en ambos supuestos de representación, la del pueblo y la de las *fuerzas vivas*: una poliarquía en que, por el excesivo número de representantes, en una ó en dos cámaras congregados, bien que sea posible la deliberación legislativa, adolece ésta de todos los defectos de las repúblicas menos aristocrática, y de todos los vicios del moderno parlamentarismo. En uno y otro caso la democracia consiste en la amplitud y extensión del cuerpo electoral, y en los centenares de elegidos que ejercen la función legislativa.

gio universal, con arreglo al axioma *todo hombre con voto (one man one vote)*, y la teoría de que éste ha de ser proporcionado á la capacidad ó idoneidad. Y aunque al pronto impresiona y alucina la idea de que la parte que se tome en el gobierno corresponda al grado de aptitud y garantía del sujeto, pronto se echa de ver que todo el que no tenga y ofrezca las necesarias y estrictamente precisas no debe participar de la función, para cuyo desempeño no basta el poseer aquellas dotes en mínimo grado. De suerte, que ó la soberanía (el voto) es derecho nativo de todo hombre, y entonces es un privilegio odioso que á hombre alguno se le conceda más de un sufragio; ó es derecho adventicio de las capacidades, y, en tal caso, quien no la tenga no debe votar.

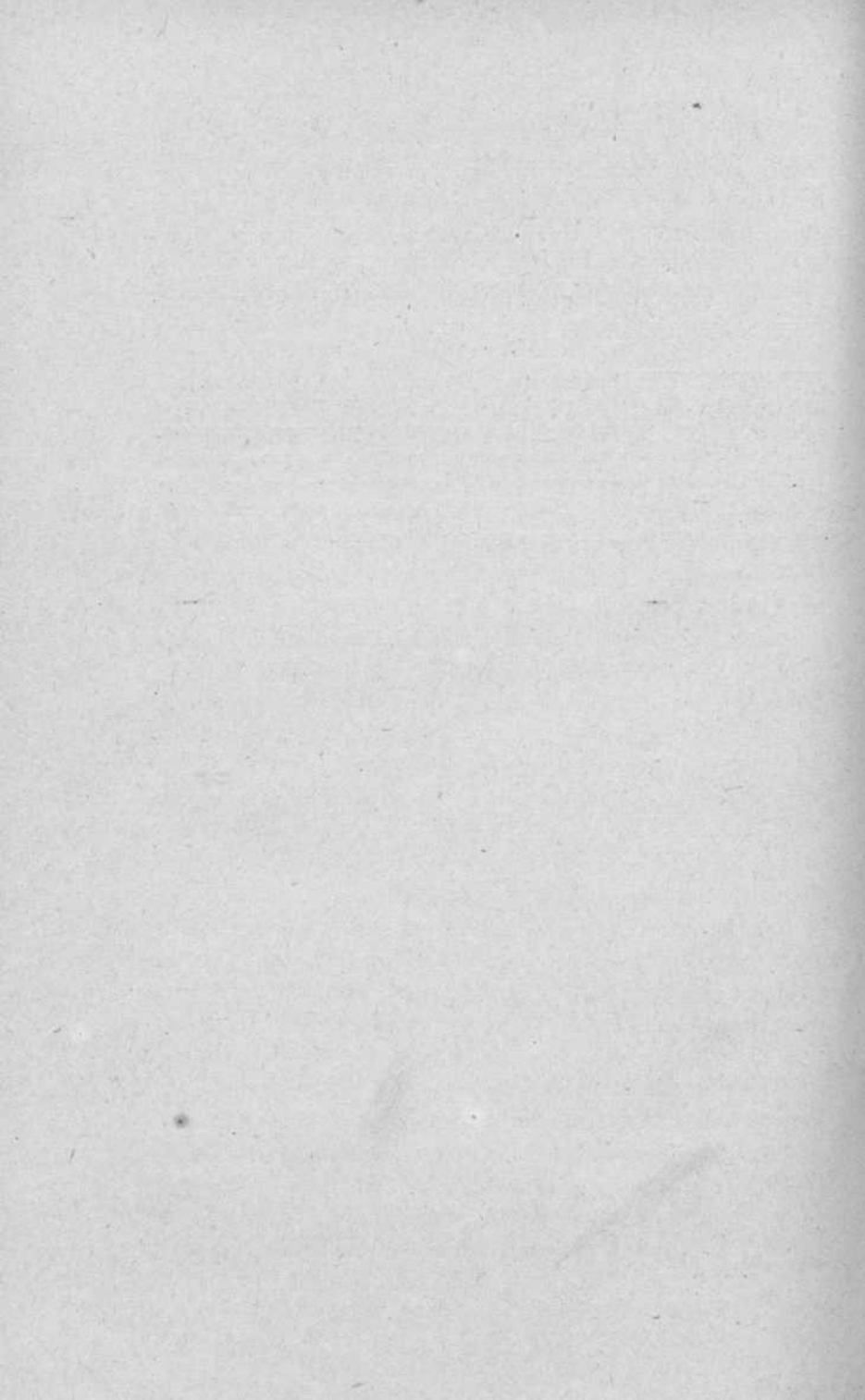
Del título de los inteligentes y acomodados ya nos parece haber dicho lo bastante; respecto del de los padres de familia solo hay que advertir que la mera paternidad no arguye ninguna de las condiciones, aun insignificantes y mínimas, que juzgó el doctrinarismo bastantes para el ejercicio del poder supremo; y que la jefatura doméstica, y aun la potestad sobre numerosa prole, ni siquiera suponen *per se* ese interés puramente utilitario de orden y sosiego materiales. Más bien la apremiante necesidad y la congojosa situación de una dilatada familia menesterosa son, cuando la virtud no los modera, motivos é impulsos que arrastran á buscar en las perturbaciones sociales mejora de suerte; y la desventurada situación de los seres más queridos determina y acrecienta ese amargo y desesperado pesimismo misantrópico, que es uno de los más activos reclutadores del socialismo contemporáneo.

La ley electoral belga de 28 de Junio de 1894 introdujo este sistema del voto vario, ideado por el diputado conservador Nissens, sistema que representa en el partido católico una concesión arrancada por el número y la fuerza del partido socialista, así del radical, como del liberal *católico (democracia cristiana)*, y en uno y otro socialismo, un paso más, un avance hacia el sufragio universal puro y neto, sin tergiversaciones ni combinaciones eclécticas que lo mitiguen y desarmen.

La reforma fué un progreso del parlamentarismo, cada vez más orientada hacia la primitiva aberración lógica de la democracia rousseauniana, y una prueba más de que, para los elementos católicos y verdaderamente conservadores, el terreno de la lucha parlamentaria es campo de inacción y de retroceso hasta que llegue el momento de la derrota y la anulación definitiva (1).

(1) Esta ley da voto á todo elector de 25 años; dos votos á los casados y viudos con familia, mayores de 35 años, contribuyentes por 5 francos de contribución directa, y á los electores de 25 años con alguna propiedad mueble ó inmueble. Los mayores de edad, con título profesional académico, disfrutan de três votos. Con esta reforma el censo electoral ascendió desde poco más de 100.000 á cerca de 2.000.000 de electores.





CAPÍTULO VIII

CONTRADICCIÓN ESENCIAL DE LA
REPRESENTACIÓN NECESARIA
DE TODA LA SOBERANÍA.—EL MANDATO
IMPERATIVO.—EL PLEBÍSCITO.
LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINO-
RÍAS.—LOS COLEGIOS DE
LA REPRESENTACIÓN INDIVIDUAL.

1. De toda la doctrina del anterior capítulo se desprende cual es el absurdo esencial del moderno gobierno representativo: el de una poliarquía que no puede ejercer por sí misma su derecho soberano, y tiene que confiarlo en la totalidad de sus funciones á una representación de no se sabe qué clase, porque no cabe dentro de ninguna de las especies de representación jurídica, la cual, así en derecho privado como público, solo puede ser, ó necesaria, en cuanto, por uno ó varios conceptos, no depende del arbitrio del representado, ó voluntaria, en cuanto es libre el que la confía de hacerlo ó no hacerlo, de este ó del otro modo, con más ó menos amplitud de atribuciones, encomendándola á este ó al otro representante, trasladándole una absoluta facultad de gestión, ó limitándosela con arreglo á determinadas instrucciones, siempre bajo la inspección del representado, y retirando al representante sus poderes cuando aquél lo estime conveniente.

La representación necesaria, deferida por ministerio de la ley, implica una incapacidad ó imposibilidad accidentales ó circunstanciales en la persona representada; las cuales no pueden suponerse en el individuo *sui juris* que esté en el pleno uso de sus atribuciones y derechos, mucho menos en una persona moral, de ningún modo en la persona moral soberana, esto es, en una poliarquía regularmente numerosa, máxime si lo es tanto como la formada por todos los hombres, por ser la soberanía derecho nativo, ó por los inteligentes y acomodados, por las *fuerzas vivas* de la nación.

La representación de esta persona moral soberana solo es necesaria respecto de las funciones ejecutivas subalternas de gobierno; la legislativa, y la ejecutiva y judicial supremas no solo puede, sino que debe retenerlas y practicarlas por sí misma la colectividad, so pena de no tener oficio y función que cumplir; y, si se declara que en ningún caso puede efectuarlas, es que la incapacidad de la persona es esencial, y que, por lo tanto, no le incumben ni le son propios tales función, deber y derecho.

Del concepto del mandato se deduce un nuevo argumento contra el gobierno representativo. Es el mandato una forma de representación que supone toda la libertad que implican los contratos, y alguna más, que es propia de éste, no consistiendo solamente el derecho del mandante en la elección del mandatario, sino en la facultad de darle para la gestión del derecho ó derechos confiados tan minuciosas instrucciones que pueda convertirlo en un mero ejecutor material y subordinado de los encargos del mandante. Además, si el mandato pue-

de estar motivado, no solo por mera comodidad y utilidad del mandante, sino por verdadera necesidad, nunca es ésta de tal naturaleza que se extienda á todos los derechos de la persona capaz, bien sea física ó colectiva, ni á la totalidad de las funciones personales, menos á todas las de una comunidad, que necesariamente tenga que confiar en mandato el desempeño íntegro y completo del oficio, sin retener ni desempeñar una parte, la más importante, capital y característica de él. ¿Qué se diría de una sociedad literaria, de una sociedad mercantil que no pudiera cultivar por sí misma ninguno de los bienes y objetos de su instituto, y que necesitara imprescindiblemente delegar aun la deliberación acerca de ellos?

Ahora bien, la representación de la soberanía tiene que ser por mandato, porque así es la representación de toda persona *sui juris*, y capaz, máxime si es persona moral soberana. Pero ésta, no solo no necesita representación, sino que es nocivo que encomiende en mandato á otras personas menos capaces que ella las funciones verdaderamente soberanas que se han concretado en el sujeto imperante por razón y á título de racional presunción de idoneidad mayor para desempeñarlas debidamente. Si tiene que encomendarlas *semper et ubique*, es que no es apto; si es verdaderamente apto, entonces el mandato es infundado, innecesario, perjudicial; es abdicación reprobable y punible.

Pero, suponiendo que pudiera mandar el ejercicio de la soberanía, ó que tuviera que hacerlo, el mandato deferido por el soberano no debiera ser de peor condición que el de cualquiera otro mandante, ni tener que

limitar su libertad á la mera elección de mandatario, para que éste gestione á su arbitrio y sin cortapisa los negocios y derechos del mandante por *poder general*, otorgado necesariamente. Luego es éste un mandato especial, que solo tiene de mandato una mínima parte, estando la libertad del mandante en razón inversa de su personalidad, de su capacidad, de su posición, de su poder, y cambiándose los papeles, es decir, siendo el superior y soberano de hecho el mandatario, é inferior y súbdito el mandante, el superior y el soberano nominal de derecho.

De donde resulta que la representación de la soberanía no es necesaria, porque ésta procede de una incapacidad ó imposibilidad de la persona que no puede suponerse en una poliárquía democrática, ó sea, compuesta de mucha gente; ni voluntaria, ó de mandato, puesto que aquí el mandante no *puede menos de dar*, ó mejor dicho, de consentir una representación, una gestión de su oficio y derecho, absolutamente independiente de la inspección, de la dirección y de las instrucciones del representado.

2. La yuxtaposición y contradicción de soberanía siempre é inexcusablemente encomendada en representación, que sólo tiene de voluntaria y libre la designación del mandatario, no se ocultó á Rousseau, que ya sabemos como imaginó armonizarlas y resolver ambos principios incompatibles. Pero el absurdo efugio rousseauiano no pudo satisfacer á nadie; y de aquí que haya sido, desde entonces, punto de perenne controversia, y no dejará nunca de serlo, en todo tratadista for-

mal, y en toda teoría, que por liberal que sea, no se satisfaga con juego de palabras y sofismas, la cuestión del mandato imperativo, de su posibilidad é imposibilidad, de sus ventajas é inconvenientes.

Bien expresa el término lo que es el concepto y de qué se trata: el mandato imperativo no es otra cosa que el mandato ó poder especial en lo referente á la representación política, mejor dicho, á la representación de la soberanía, *la instrucción ó instrucciones de los supuestos soberanos mandantes, (de la poliarquía compuesta de ellos), á los mandatarios representantes, á los diputados que, en nombre de esa colectividad soberana, ejercen la suprema función legislativa.*

Si bien se considera, la cuestión, exclusivamente liberal, del mandato imperativo, es para nosotros un testimonio de excepción en favor de la doctrina expuesta, porque no es otra cosa que el planteamiento del insoluble problema de soberanía y representación imprescindible, el apremio con que la lógica vuelve á poner enfrente tésis contrarias, y que, en tal concepto, jamás podrán compaginarse, puesto que no se pueden armonizar mediante el *mandato imperativo*.

En efecto, éste confirma la doctrina del número anterior acerca de la clase de representación que tendría que ser la representación de una poliarquía. No sería otra que la que procede en persona tan capaz como una amplia república democrática, en la que no hay modo de suponer la incapacidad accidental de que son susceptibles las monarquías: el mandato, de la misma naturaleza y caracteres formales que en derecho privado y en los varios órdenes del públi-

co. La representación soberana, ó no es representación, ó ha de sér, como cualquiera otra, voluntaria y libre, una representación susceptible de instrucción ó instrucciones especiales hechas á los representantes mandatarios, tan amplias y minuciosas como quiera y deba darlas el soberano mandante. Pero es así que esto es imposible, luego si no hay posibilidad de mandato especial, es porque no hay en el supuesto mandante el derecho que habría de encomendar al representante ó diputado por voluntaria representación. Si lo hubiera, tal mandato sería posible, como lo era en la representación antigua, y ni siquiera se propondría, por inútil, la cuestión que será perenne en la doctrina liberal.

La prueba de la premisa menor de este esbozado silogismo es tan sencilla como evidente. El mandato imperativo, conferido por persona moral, exige deliberación prévia de todos los que la componen, á fin de acordar las instrucciones dadas al representante; pero en una poliarquía tan extensa como la que forma la nación, ora se la suponga la suma de individuos nativamente soberanos, ora de *fuerzas vivas*, es física y moralmente imposible tal deliberación, y, por lo tanto, también el mandato, del cual la deliberación prévia es condición y requisito esenciales é indefectibles. La imposibilidad moral de esa deliberación por parte del pueblo soberano, ó del conjunto de las *fuerzas vivas* se ha demostrado en el Capítulo VI; en cuanto á la imposibilidad física, á cualquiera le ocurre que hay un límite cuantitativo hasta el cual es factible la presencia, sin solución de contigüidad, de todos los deliberantes, y la

discusión entre ellos; pero que traspasado aquél, por mucho que quiera alargársele, ni pueden estar juntos ni hablarse ni oírse los soberanos ¿Dónde van á congregarse, y cómo van á entenderse, en unidad en acto, millones, ó si se quiere, sólo millares de soberanos? Si pudiesen hacerlo, fuera inútil el mandato, porque la deliberación para él sería ya el ejercicio de la función legislativa, la cual, no sólo no necesitaban, sino que no debían dar en representación, como quiera que aquélla es función esencialmente retenida, que el soberano ha de ejercer por sí, y no por otro; no es posible el mandato, luego es que no hay esa democracia inmanente, constituída por todos los hombres, nativamente soberanos, ó por los inteligentes y propietarios, y si no hay tal democracia inmanente, no hay para qué pensar en representación ni necesaria, ni voluntaria de un derecho que no existe en el supuesto sujeto de él. Y es claro que habiendo concluído en la imposibilidad del mandato imperativo no hay para qué, y es inútil, tratar de las ventajas é inconvenientes de la institución, al menos en esta parte elemental.

La cuestión del mandato imperativo es, como se ve, la de la democracia directa, punto implícito y concluyentemente resuelto en lo que tiene de fundamental en los capítulos anteriores, y que lo será totalmente en el que trate de las formas de gobierno. La democracia en el sentido de soberanía del pueblo, suma de individuos soberanos, ó de la nación, conjunto orgánico de *fuerzas vivas*, es un principio falso, y que no tiene ni puede tener realidad; la naturaleza misma lo rechaza invenciblemente. La democracia en cuanto poliarquía,

compuesta de muchos más superiores de los convenientes, pero de superiores al fin y con posibilidad física y moral de ejercer por sí mismos la legislación y las demás funciones retenidas de soberanía, es una forma deficiente, pero posible y aun legítima de gobierno, y no ha menester de representación para los oficios verdaderamente soberanos, ni debe delegarlos sin cometer falta de más ó menos grave abandono. Cuando el excesivo número de poliarcas hace imposible el ejercicio de las capitales funciones retenidas del poder supremo no puede determinarse previamente, ni importa expresarlo aquí; es una cuestión concreta de número.

3. Lógica exigencia de la democracia directa y reivindicación de sus fueros, con arreglo á los rigurosos principios liberales, es el *plebísquito*, ó sea el *acuerdo y decisión que el pueblo adopta á pluralidad y mayoría de votos, aceptando ó rechazando sin discusión, y solo con la afirmación ó negación correspondientes, una ley, ó medida de gobierno, ó el nombramiento de uno ó varios funcionarios ejecutivos, todo ello á propuesta de una magistratura, ó de un cuerpo colegiado, ó de uno ó más ciudadanos.*

Del mismo modo que el *mandato imperativo* es argumento irrefutable contra la representación de la soberanía, así también el plebísquito es prueba concluyente contra la democracia directa. En efecto, si al pueblo ó nación no se le otorgan otras funciones legislativas ó ejecutivas que las que implica el plebísquito, es decir, la mera aprobación ó desaprobación, es porque la poliarquía democrática, compuesta de una numerosa

multitud de soberanos, no puede decidir ni tomar la iniciativa de la ley, medida de gobierno, ó nombramiento de funcionarios, ni discutir en unidad de acto, y en presencia de todos los poliarcas, la justicia y conveniencia de esos acuerdos; ahora bien, sin facultad de iniciativa y de deliberación en la persona física y moral, cuya es la función soberana, no puede decirse que tal persona ejerza verdadera soberanía, ni sea sujeto propio de ella. No es natural que sea soberano quien naturalmente, por absoluta imposibilidad física, no puede ejercer en caso alguno dos funciones esenciales del gobierno que le está encomendado. Y no tenemos que añadir aquí, porque en el lugar oportuno se demostró, la imposibilidad moral en que, por la carencia de dotes intelectuales y volitivas, están los supuestos soberanos de ejercer función alguna gubernativa, hallándose para la sanción de las leyes tan incapacitados como para la iniciativa y discusión de ellas, y para una medida ejecutiva, ó designación de cualquiera funcionario, la del jefe del Estado particularmente.

De lo cual se deduce que la institución plebiscitaria contemporánea no puede invocar en su apoyo los plebiscitos antiguos, no solo por no estar fundados en el dogma de la soberanía popular, desconocido hasta la Edad Moderna, sino porque procedían de especiales circunstancias históricas, de defectos de constitución, naturales y propios de aquellos pueblos, que no pudieron suprimir y desarraigar totalmente las primitivas asambleas ámpliamente compuestas de los padres-familias, ni adaptarlas á una más conveniente organización política, en la cual fueran elementos y órganos de

cooperación gubernativa en la esfera subordinada que les corresponde.

Esto mismo puede decirse del *referendum* suizo que es un plebiscito, ora cantonal, ora nacional federal, de ratificación ó desaprobación de las leyes correspondientes á la función legislativa de los cantones, ó á la de la nación. En los cantones significa el tradicional personalismo de las familias representadas por sus jefes, y en la nación el principio, así individualista como descentralizador, prevenido contra las accidentales ó las abusivas funciones del gobierno federal, y acaso contrario aún á los atributos esenciales del Poder supremo común. En los modernos tiempos no ha dejado de ejercer poderoso influjo para el arraigo de la institución el dogma y la doctrina de la democracia liberal directa.

4. En toda persona moral, cuando el acuerdo no es adoptado por voto unánime, no hay más remedio que conformarse con la resolución tomada por mayoría de sufragios, teniendo, con presunción racional, por probablemente justa aquella disposición en que convengan, aunque no sea más que la mitad más uno de los asociados. Así hay que proceder en las poliarquías, ofreciendo en ellas la pluralidad de votos tantas mayores garantías de justicia y prudencia del acuerdo, cuantos menos en número y verdaderamente superiores son los miembros componentes de la colectividad soberana. Pero, á medida que las poliarquías son democráticas, ó sea, compuestas de muchos poliarcas, entre los cuales los menos tendrán la superioridad que supo-

ne y exige la soberanía, disminuyen las garantías y probabilidades de que la mayoría tenga razón y derecho, porque representa unidades más que calidad, y es lo natural y frecuente, aunque no indefectible, que los inferiores, que son los más, impongan por el número y la fuerza, al servicio de la ignorancia y de las malas pasiones, resoluciones absurdas, inúcuas ó imprudentes.

Si este peligro y nociva inclinación han sido de todo tiempo, pueden ya considerarse vicio connatural de las modernas democracias, en las cuales no solo el número y condición de los soberanos representados (electores), como de los mandatarios representantes (elegidos), tienen habitualmente entronizadas toda la aberración é iniquidad que consiente la azarosa y desventurada existencia de las naciones. De aquí que los sistemas modernos, hondamente preocupados por el imperio brutal de la cantidad y de la concupiscencia, hayan tratado de asegurar representación á las minorías, para que no siempre sea ley lo que quieran la mitad más uno de los *representantes* del país; precaución que no solo sería inútil, sino injusta, si la poliarquía se compusiera de verdaderos soberanos, esto es, de absolutamente aristócratas, porque entonces mayoría significa voto de ciencia y de virtud, cuanto es posible en lo humano.

Expresa, pues, la representación de las minorías, una yuxtaposición doctrinaria, hija de la natural y justificada desconfianza con que se mira á la voluntad general y se temen sus injusticias é insanias, y de la cautela con que se procura buscarlas cortapisas en las inspiraciones y con los expedientes de la realidad; aunque los autores liberales no hagan tal confesión, sino

que traten de justificar y fundamentar la teoría aduciendo la necesidad de que estén representados todos los intereses y opiniones.

A esto se arguye que eso es imposible, porque siempre quedarán algunos sin representación, reduciéndose todo en último caso á la de varias mayorías, las cuales no tendrán, dentro del sistema, más título que el número. Además, lo que importa no es que tengan representación todos los intereses y opiniones, sino que el sujeto de la soberanía ofrezca á los verdaderos, legítimos y efectivos cuantas seguridades de tutela y fomento sean posibles. El fundamento alegado por los autores liberales supone escépticamente que todos los intereses y opiniones son dignos de representación parlamentaria, y se forja además la ilusión pueril de que las minorías en los modernos parlamentos pueden con sus razones contrastar la fuerza numérica de la mayoría, hacerla desistir de sus ideas y conveniencias, y quebrantarla y menguarla de modo que con los desprendimientos de aquélla alcancen las minorías la victoria. Y, aun suponiendo, con el más cándido optimismo, probabilidades de tal situación, solo efectos negativos, ó, cuando más, transacciones insuficientes, conseguirán las varias minorías, cuyos programas y aspiraciones son distintos y aun contrarios. En resumen, tal representación es tan injustificada en teoría y tan inútil en la práctica como todos los recursos y paliativos doctrinarios.

De donde se deduce que los sistemas ideados para la representación de las minorías solo tiene para nosotros una importancia meramente práctica de derecho

positivo, por lo cual nos limitamos á señalar en esta parte elemental, los dos métodos de combinaciones matemáticas más sencillas, que son los más generalizados, pero al propio tiempo los más deficientes é ineficaces, para el fin que se procura. Son estos el sistema del *voto restringido*, que consiste en que no pueda el elector votar el número total de representantes correspondientes al colegio, sino uno ó varios menos de éstos, á fin de que el restante ó restantes puedan reunir los sufragios de las minorías; y el sistema del *voto acumulado* según el cual, disponiendo en cada colegio cada elector de tantos votos cuantos sean los representantes que el colegio elige, en lugar de obligársele á dar un voto á cada representante, se le deje en libertad de repartirlos como quiera en favor de algunos, ó de uno solo de éstos.

5. Hasta aquí se ha venido discurriendo en el supuesto de la representación individual, tal como se desprende de la concepción sociológica del pacto, ó sea, de la composición atomística de la sociedad, mero agregado de individuos, y no de elementos sociales orgánicos.

Así es que la representación, lo mismo en la teoría democrática de la soberanía de todo individuo que en la doctrinaria de los ricos é inteligentes, no puede ser sino representación numérica de la suma, de la masa social, repartida para los efectos de la elección del representante en porciones numéricas, en cantidades aritméticas de mera colectividad, v. g. un diputado por cada 30.000, 40.000 ó 50.000 almas.

Combinando luego este criterio con el de la distribución territorial de los electores, hánse adoptado por los tratadistas liberales varios sistemas, que tampoco tienen para nosotros otro interés que el del derecho positivo y el de un nuevo y subalterno aspecto crítico de la doctrina con motivo y desde el punto de vista de sus aplicaciones.

Los dos métodos más señalados, opuestos, simples y sencillos son el del colegio único, y el de la pluralidad de colegios del mismo nombre y número de electores para votar un sólo representante en y por cada colegio. El primero, que se conoce también con el nombre equívoco de *escrutinio por lista*, consiste en no establecer división alguna de electores, sino que dentro de la colectividad formada por todos los de la nación, cada uno de ellos nombra á todos los representantes de aquélla, y de los cuales han de componerse la cámara ó cámaras.

Este método es el más lógico por más conforme con la doctrina sociológica de la composición atomística de la sociedad, y por identificar y compenetrar la representación de cada individuo con la representación nacional única é indivisa. Cada diputado *sería así* al propio tiempo el representante del todo y de cada una de las partes, sin rastros ni reliquias de la *anacrónica constitución* orgánica de la sociedad, sustrayéndose así los electores al influjo de los egoismos y particularismos locales, puesta la mira en las ideas y conveniencias generales y en el mérito de los sujetos cuya altura se destaca sobre las *eminencias* de concejo, provincia y región.

Con lo cual no hay para qué decir que el sistema de la pluralidad de colegios más reducidos es, por menos lógico, menos conforme con la esencia del liberalismo atomista y abstracto, y cuantos argumentos formule serán otros tantos ataques á la doctrina común y otras tantas confesiones á favor de la contraria. Y en efecto, eso significa y vale la observación de que es imposible que el elector conozca á tantas personas eminentes cuantos son los representantes, teniendo que confiar en la autoridad de los jefes de partido, sustituyéndose la sugestión y coacción de localidad por la de los directores de las agrupaciones, y la imposición del caciquismo de cotarro por la de los sofismas de los *politiciens* manipuladores del *voto nacional*. En resumen: uno y otro sistema convienen en que el elector no es capaz, ni independiente de estos ó de los otros manejos. El escrutinio en este segundo sistema es más fácil y más *inspeccionable* por el elector, mientras que el escrutinio por lista exige una complicada labor burocrática central, más expuesta á las adulteraciones y falsedades perpetradas por los Gobiernos, y de casi imposible inspección y prueba por parte del cuerpo electoral. No hay confianza en quien más debiera inspirársela al pueblo, si el Gobierno fuera, en cierto modo, creación nacional, y el pueblo apto por varios conceptos para el ejercicio de *su soberanía*. Además, es difícil combinar en tal escrutinio los métodos para la representación de las minorías, la cual, en cambio, es absolutamente imposible en el sistema del colegio de singular representación.

Por esto el doctrinarismo ha echado por el camino del medio, el de los colegios que llama *circunscripcio-*

nes (los más pequeños y de un sólo representante se denominan *distritos*), diferenciándose unos de otros en que es mayor la colectividad electoral de las primeras, y correspondiente á ella el número, no singular, sino plural de representantes. Presumen que con este sistema hay menor peligro de la influencia de la idea abstracta, de la utopía sofística, del influjo de los *politiciens*, del desconocimiento de los hombres que valen y que merecen la representación, y al mismo tiempo no es tan avasallador el poder caciquil, ni en el representante tan menguada la talla como la de las *notabilidades de campanario*. No necesitamos decir que este *prudente término medio* es la suma de ambos inconvenientes y males, sin compensación de bien alguno.

Hay también una combinación *ultradocrinaria* en aquellos sistemas y leyes electorales que admiten ambas clases de colegio, la *circunscripción* y el *distrito*, por razones, ó mejor dicho, motivos *exclusivamente prácticos*, por no darles la calificación más propia y merecida.



4. El dilema contenido en el raciocinio de este número se puede formular así: ó la representación de la soberanía es necesaria esencialmente, y entonces arguye incapacidad esencial en la poliarquía democrática, ó la representación es voluntaria ó de mandato, y, en tal supuesto, puede ó no enco-

mendarse á otro con posibilidad física y libertad de hacerlo, pero faltando, si se hace, al deber que tiene el soberano de retener las capitales y más altas funciones de la soberanía, las verdaderamente soberanas. Lo primero arguye que la nación no es soberana, lo segundo la imposibilidad moral de la representación; y uno y otro término que la soberanía es *per se* irrepresentable, y que en el absurdo de soberanía que nunca, ni por nadie, puede ejercerse sino mediante representación, consiste la esencia del moderno gobierno representativo, así radical como doctrinario. Contra tal dilema no queda recurso alguno, porque no lo es suponer que hay un tercer término, una representación social intermedia y *sui generis*, la representación política de la soberanía, que no se parece ni á la representación que tienen el padre, el marido, el tutor sobre el hijo, la mujer y el pupilo, ni á la que libremente otorga un hombre *sui juris* en el pleno uso de sus facultades y derechos por vía de mandato con poder general, ó minuciosamente circunstanciado y restringido á un gestor de negocios ó mandatario (1). En efecto, aquí se trata de gestión de derecho ageno sin más diferencia que la del derecho que se gestiona, que es en los otros órdenes jurídicos un derecho privado ó público, y en el presente caso el derecho político de soberanía; pero éste, como los otros, no se concibe que pueda gestionarse sino por ministerio de la ley, y aparte é independientemente de la voluntad del representado, ó por libre arbitrio de un mandante, y según la esencia y condiciones de todo mandato, porque lo que diversifica la representación en cuanto á la forma, no en cuanto al contenido, es que dependa ó no dependa de la voluntad de aquél cuyo es el derecho que ejercita el representante.

Por esto, si la representación de la soberanía es mandato,

(1) Gestor de negocios tiene aquí el significado racional sinónimo de representante, mandatario, no el circunstancial, histórico, de abolengo romano, con que se designa á una de las partes en el cuasi contrato *negotiorum gestio*.

ha de ser un mandato de la misma clase que los otros, sin más diferencia que la del derecho que se manda, pero con idéntica forma de mandarlo y con iguales libertad y atribuciones en el mandante, y si en el mandato de soberanía el mandante, que, por soberano, debiera tener mayores arbitrio y facultades, solo puede elegir y designar la persona del mandatario, es que no hay tales mandato ni mandante, por no haber ese derecho que mandar en el sujeto, en la persona moral en quien se supone.

2. Causan asombro las *razones* que alegan contra el mandato especial imperativo, ó contractual sinalagmático, como alguien le ha llamado los partidarios de este pseudo gobierno representativo liberal. Son en substancia las mismas en que se funda la representación de la soberanía, una mera petición de principio en que se da por prueba lo mismo que se intenta probar, en que por argumento se reproduce la tesis, reduciéndose el raciocinio á parafrasear, si es que no á repetir, los términos de la proposición. Todos los adversarios vienen á decir en suma que tal mandato es contrario al gobierno representativo, y es verdad, al representativo de representación necesaria é inexcusable como lo es la de persona incapacitada que no puede ejercer por sí su derecho. Así opinaba Guizot, y eso vienen á decir los que, para la misma conclusión, distinguen entre el representante y el procurador como si éste no fuera una especie de representante, pudiendo aplicarse el término, en sentido estricto á todo y cualquiera mandatario, y, en acepción general, á todo y cualquiera representante, que también procura (*cuida*), del derecho y negocio de otro (padre, tutor, marido, etc.) El diputado, personero ó como quiera llamársele, procurador es en este amplio sentido de la palabra; pero de lo que se trata es de si es procurador voluntario ó necesario, y, en el primer caso, de si puede ó no recibir un poder tan especializado como quiera el que se lo da. Cuando dice Rousseau que los diputados del pueblo no pueden ser sus representantes, sino solamente sus comisionados, desconoce el valor

jurídico y vulgar de las palabras y sus relaciones de sinonimia. ¿Pues qué son los comisionados sino representantes, mandatarios ó procuradores? Y el diputado ó representante, que el doctrinarismo supone distinto del mandatario, para diferenciar en esto el gobierno representativo doctrinario del radical ¿qué es *sino la persona nombrada por un cuerpo para representarle?* Y el cuerpo que nombra para tal fin ¿qué hace sino dar un mandato general si quiere, pero particular también, si le conviene y acomoda? ¿Qué miserable juego de palabras es éste?

No incurre en este defecto Stuart Mill (*El Gobierno representativo*; traducción española de García del Mazo, Capítulo XII) el cual, con harto mejor sentido, opina que es esta una cuestión de circunstancias y que, cualquiera que sea el sistema de representación, pueden los electores cambiarlo en un sistema de simple delegación (1).

3. El argumento de este número consiste en aplicar á la persona moral soberana la doctrina concerniente al acuerdo que toma cualquiera sociedad de iguales. ¿Qué sociedad hay,

(1) Stuart Mill no examina la cuestión desde el punto de vista de los principios, sino que, según el criterio positivo de su sistema y de su raza, considera el punto prácticamente, no atreviéndose á una conclusión categórica, pero viniendo á aplicar la regla de conducta propia de todo mandante, que da poder general, ó especial según la confianza que el mandatario le inspira. Si los electores tienen posibilidad y facilidad de buscar hombres superiores y eminentes, y los encuentran, no necesitan entonces, antes les es perjudicial ese mandato imperativo; pero de no hallarlos, ni ser fácil, y esto es lo frecuente, están aquéllos en el derecho de imponerles y exigirles compromisos formales. Lo que hay es que Stuart Mill no tiene por imposible física y moralmente el mandato imperativo, porque califica de tal cualquiera promesa que se haga, ó programa que de este ó del otro modo exija el cuerpo electoral, sin hacerse cargo de lo que hemos dicho, es á saber, que mientras no haya deliberación directa, y en unidad de acto, de toda la poliarquía nacional soberana, no hay acuerdo respecto de la instrucción ó instrucciones, y tampoco, por consiguiente, verdadero mandato imperativo. Todo el capítulo citado es, por supuesto, sin quererlo el autor, un alegato contra el derecho electoral del pueblo.

de cuyo seno no pueda surgir la iniciativa de una resolución, estando presentes todos los que forman la comunidad, y proponiéndola á todos ellos los iniciadores? ¿Qué cuerpo colegiado no puede asimismo discutir, deliberar previamente en presencia y con asistencia de todos los miembros, oyéndose y entendiéndose éstos, y comunicándose las razones y motivos en pro y en contra de la proposición? ¿Dónde se ha visto que sólo en forma plebiscitaria una sociedad de iguales pueda tomar sus resoluciones, sin que tengan más participación ni iniciativa en el gobierno la mayor parte de los miembros, siendo así que todos gozan iguales derechos, y en todos reside naturalmente la autoridad social, cuyas supremas funciones autoritarias puede y debe retener toda la colectividad? Pues en el supuesto del liberalismo, sólo esa colectividad soberana, la que debe suponerse más perfecta y capaz de todas las sociedades de iguales, es la única que no puede ejercer la totalidad de funciones de su instituto y oficio.

El nombre romano de las decisiones de la plebe se ha conservado para significar una institución moderna que tiene con las antiguas conexión tan importante como es la forma del popular acuerdo. El fundamento también parece común, al menos en lo que se refiere al plebiscito democrático, pues lo mismo éste que el romano arguyen el extraviado y falso individualismo que atribuye una importante función de la soberanía á quienes no les corresponde ninguna de ellas. Mas si bien se considera, las causas de esos plebiscitos son tan distintas como lo son entre sí un erróneo sistema de absurdo igualitarismo y los naturales accidentes históricos que determinaron en Roma la forma plebiscitaria, análogos á los que produjeron la existencia de las asambleas de otros pueblos primitivos, por ejemplo, las de los bárbaros. Fueron tales reuniones la manifestación primera y el vínculo embrionario de la incipiente nacionalidad, porque en ellas se juntaban á tratar de los asuntos comunes, que eran escasos, los padres de familia, como si dijéramos los patriarcas y primates de las tribus. Mientras éstos no fueran muchos, pudieron ejercer directamente la fun-

ción legislativa; mas, á medida que aumentó el número de los legisladores, haciéndose imposible la discusión, congregáronse para aprobar ó desaprobar clamorosamente las propuestas del caudillo militar, en quien se iba destacando y consolidando la dignidad monárquica, y extendiéndose la autoridad desde los negocios de la guerra, la conducción y mando de la hueste, al ejercicio de la soberanía en los asuntos comunes, en los intermitentes y no largos períodos de relativa paz. El poder soberano del caudillo comenzó por el desempeño de las funciones ejecutivas, ocupándose las asambleas de los patres y guerreros en una ó dos épocas del año en los asuntos más capitales, y trasladando la decisión legislativa de los otros, que mientras tanto ocurrieran, al rey y á un cuerpo más limitado de ancianos, que fué, á la vez, cuerpo consultivo y legislador con el nombre y atribuciones de senado. Este, por la capacidad y el número, constituyó la verdadera y primitiva asamblea, legisladora de hecho, porque podía discutir y deliberar, y la que en los asuntos no reservados á la asamblea máxima del pueblo, aconsejando al caudillo, convertía la mayor parte de las veces el consejo en ley; mientras que en los negocios más graves formulaba el proyecto que había de presentarse á la reunión general de los padres, los cuales por su número ya no podían decir más que sí ó nó, el *uti rogas ó antiquam probo* de los comicios romanos (I).

(I) No costará mucho trabajo descubrir la acción de la naturaleza, que así va esbozando estos rasgos y lineamientos en las constituciones que nos son más conocidas, las de la gente *aria*, y señalar tales analogías lo mismo en las instituciones políticas de Roma, que en las de los bárbaros invasores del Imperio, especialmente en las de los godos. En Roma, así legislaron, porque no podían ser de otro modo, los comicios curiados, los de los primitivos patres y de sus descendientes (*patricii*), y en igual forma, y con mayor motivo, los comicios ulteriores de las centurias y de las tribus. Y aunque solo á las decisiones de la plebe se llamó *plebiscita*, también eran *placita ó scita*, formulados y adoptados de la misma manera, las decisiones del pueblo en las asambleas de los primitivos inmigrantes y ocupantes del suelo (comicios de los patres y *patricii*) que en los del pueblo compuesto ya también de la población plebeya en los comicios centuriados. Así se

Y cuantas veces en el trascurso de los tiempos, y aun en más avanzadas épocas históricas, hállanse los pueblos en igual atraso, y su constitución en estado tan embrionario é imperfecto, acontecerá lo mismo, ó cosa parecida; y así bien puede verse la raíz del *referendum* suizo en el personalismo de aquellas tribus, que renunciaron de muy mal talante á su independencia por la dura ley de la necesidad, amenazadas de un enemigo más dispuesto á arrebatarlas toda autonomía. Para conservar la mayor parte de ella, se confederaron, reteniendo todo el poder que les fué posible los jefes de familia, aun en frente de los poderes locales de cantón, y con mayor motivo en frente del gobierno confederal, y convirtiendo después por el influjo del individualismo, y especialmente del individualismo liberal atomístico, el *referendum* en un derecho de ciudadanía, en el derecho político de cuanta soberanía *inmanente* es posible. El *referendum*, en lo que tiene de tradicional é histórico, lejos de ser un ideal, es el recuerdo y rastro de una cons-

comprende que en todas las épocas de Roma, pero principalmente cuando las asambleas populares eran más numerosas, é incapaces en la misma proporción, en el Senado estuviera de hecho la potestad legislativa, en el cuerpo que podía tenerla, porque podía tomar la iniciativa de las leyes y discutir y presentar formado el correspondiente proyecto. A través de las pasiones de la plebe, la naturaleza reivindicaba sus fueros, tratando de arrancar la legislación á quien, siendo incapaz de deliberar, lo era también de sanción legislativa.

En la constitución visigoda pueden estudiarse y señalarse de la misma manera las etapas de este fenómeno, más marcado en los godos por la mayor influencia del romanismo. Se van poco á poco borrando y desapareciendo las asambleas bianuales que subsisten tanto tiempo entre los francos, y sustituyéndose por las más reducidas de los *mayores del palacio y del pueblo*, que son los que eligen al rey, cuando no es él quien se toma el centro, arrancado al antecesor con la vida. En todas partes va la *soberanía del pueblo* retrocediendo, y la adquieren, por imperio de la ley natural, las aristocracias ó el rey con ellas, privándose á los menores de todo influjo y acción gubernativa, hasta que en la Edad media el cristianismo y la feudalidad van dando social posición á las muchedumbres, y abriéndolas con una verdadera representación ante la soberanía, el acceso á los negocios públicos, el único que naturalmente y en justicia las corresponde.

titución imperfecta y primitiva; y en lo que tiene de ingerto nuevo, es el absurdo de la soberanía democrática. Lo cual no quiere decir que alguna vez no se ejerciten con más razón, justicia y buen sentido éste y otros *plebiscitos* que las decisiones de los poderes oficiales: tales pueden ser ellos (1).

4. Copiaremos aquí del autor doctrinario más en boga en las cátedras españolas parte de la minuciosa descripción y crítica de los sistemas ideados para la representación de las minorías. Respecto del voto restringido dice: «Tal sistema, »presentido por Condorcet en su *Plan de Constitución* de 1793 »fué propuesto por el Conde Grey en 1836 á la Cámara de los »Lores en Inglaterra, cuando se discutía la reforma de los mu- »nicipios en Irlanda, pidiendo que los electores sólo votasen »los cinco octavos del número total de consejeros (2).

«Lord Rusell en 1854, siendo ministro, planteó la reforma »proponiendo que en cada colegio de electores, á que corres- »pondiesen tres diputados, solo pudiera votarse por dos. La »reforma, desechada entonces, presentóse de nuevo por Lord »Cairns en 1867, siendo al fin aprobada, primero en la Cáma- »ra de los Lores, y después en la de los Comunes, y confir- »mada nuevamente en 1870, al rechazar la proposición de mis- »ter Bright para que se anulase, sosteniendo entonces Disraeli

(1) En algunos cantones suizos se conserva la *Landsgemeinde*, ó sea una especie de *ayuntamiento abierto cantonal* que diríamos en términos de nuestro derecho castellano, la asamblea de los electores vecinos, una democracia directa de amplísimas facultades, desde el nombramiento de empleados hasta la función constituyente. En Suiza existe también, derivada de las mismas causas, la *iniciativa* de los ciudadanos para presentar un proyecto de ley y aun de reforma constitucional. Esta iniciativa es el mismo derecho de petición, con la sola diferencia, que no cambia la naturaleza de aquél, de que tiene que ser atendido por los poderes oficiales para el efecto de ocuparse en lo propuesto por los iniciadores ó peticionarios.

(2) Esta proposición fué dictada por el interés sectario de dar participación en los municipios á la exigua minoría protestante, tiranizadora de la mayoría católica en la heroica y desgraciada isla. (Nota del autor de este tratado).

»li que no bastaba una sola prueba para abolir una institución
»que todavía no había echado raíces en el país.....

»La claridad y sencillez de este sistema le hacen esencial-
»mente práctico, por más que Lord Bright, su implacable ad-
»versario, le calificase de *simple absurdo en materia de legis-*
»*lación*. Pero, aunque tiende á corregir los vicios del régimen
»de las mayorías, no consigue que las minorías estén represen-
»tadas *justa y proporcionalmente*, lo cual constituye su gran
defecto». El autor arguye, con razón, que es arbitraria la rela-
ción numérica que se establece entre la representación de las
minorías y la mayoría; que se reduce injustamente la de ésta,
y se mengua la libertad del elector, impidiéndole votar á to-
dos los representantes del colegio.

Acerca del voto acumulado se expresa así: «Este sistema,
»defendido por M. James Garth Marshall, ha tenido diversas
»aplicaciones, ya para la elección de senadores, como en el
»Cabo de Buena Esperanza, donde primero se puso en prác-
»tica, ya para elecciones municipales, como en Pensilvania,
»que lo aceptó en la legislatura de 1869, ya para las eleccio-
»nes académicas, como en Inglaterra, cuyos *schools boards* se
»constituyeron así en 1870, ya en fin para las elecciones ge-
»nerales como en algunos estados de la Unión americana.

»Desde luego no cabe duda, como dice Garth Marshall,
»que, hallándose autorizado el elector para dar sus tres votos,
»por ejemplo, al mismo candidato, la minoría tiene asegurado
»un representante. Y en el supuesto de que los electores de
»la minoría constituyan la tercera parte del cuerpo electoral,
»párese también que se consigue la proporcionalidad en la
»representación, triplicando cada uno su voto para sacar uno
»de los tres diputados que corresponden al distrito. Presenta
»este método la sencillez del anterior, y no incurre en el de-
»fecto de establecer á priori el número de representantes que
»han de tener respectivamente mayoría y minoría.

»Pero la proporcionalidad es más aparente que real, y
»más bien de cálculo que de justicia. En tanto vale el voto del
»ciudadano, en cuanto expresa la opinión respecto al repre-

»sentante que elige, por las ideas que significa; así es que, por
»más que el elector dé tres, cuatro ó cinco votos á su candida-
»to, todos estos votos no tendrán más valor moral que el de
»uno solo, porque solo expresan una opinión individual. Se
»dirá que lo que se procura ante todo es la representación del
»partido; pero esto servirá únicamente para indicar que ha de
»buscarse la proporcionalidad de otro modo diferente, no
»multiplicando la opinión del individuo, sino reflejando fiel-
»mente el número de opiniones individuales con que cuenta
»cada agrupación política. Por otra parte, como hace notar
»Mr. Gigon, no sería posible dar en la práctica á cada partido
»el número de representantes, proporcionado al número de sus
»afiliados, dependiendo el éxito de la lucha electoral de la
»mayor ó menor exactitud con que los directores de la elec-
»ción calculen previamente el número de votos de que dis-
»ponen, para aconsejar á los electores el número de veces que
»han de escribir el nombre de cada candidato en la papele-
»ta, con lo cual el triunfo sería de los más hábiles, desesti-
»mándose casi por completo la iniciativa del elector». (1)

La anhelada proporcionalidad inspiró á Tomás Hare el sistema del *cociente electoral* que consiste en dividir el número de electores por el de representantes, para que todo candidato que alcance el cociente resulte elegido. El desarrollo y las combinaciones de este sistema no solo exceden de las proporciones de un curso elemental, sino del intento y amplitud de esta parte complementaria. Remitimos al lector, curioso de este punto de derecho liberal, al citado libro de Stuart Mill y al del Sr. Santamaría que ha tomado, al parecer, del autor inglés y del folleto de Brunialti citado por el traductor español de *El gobierno representativo* (2) la mayor parte de la

(1) Santamaría de Paredes, Curso de Derecho político... Parte tercera, Sección primera, Capítulo II, Segunda edición.

(2) Todo el capítulo, el VII, es, como los demás, una implícita y forzada confesión preciosa de los defectos y vicios del sistema, que resultan esenciales, aunque así no se diga, ni se quiera reconocer, y una prueba de

doctrina copiada por nosotros, y la que hemos dejado de copiar.

Ahora añadiremos que la representación de las minorías importa cada vez menos, no solo por lo que significan los principios de la soberanía y representación actuales, sino porque las minorías liberales serán más de día en día, pero compuestas de menos gente; fenómeno natural en una sociedad en que el racionalismo y el positivismo multiplican hasta el infinito las opiniones y los intereses. De lo cual resulta que esas minorías valdrán cada vez menos, y tendrán menos títulos de *representación*. En cambio, según el rumbo que llevan las cosas, y los caminos por donde el *mundo marcha*, para las minorías de la razón y del derecho, más mermadas á medida que el mundo se descristianiza, no habrá acaso dentro de poco cociente representativo, por muchas y sabias que fueren las operaciones encaminadas á asegurárselo. Y, aunque la mayoría se reduzca también en la proporción en que las múltiples é insignificantes minorías crecen, menguando asimismo el derecho de aquélla á imponer su *criterio*, siempre, y en último caso, será ley lo que disponga la mitad más uno de esos *mediocres* de que consta la *representación nacional*.

Además, esas combinaciones del cociente y coeficiente electorales, tan difíciles de arreglar y de realizar, tan expuestas á los manejos y fraudes burocráticos, tan superiores á la inteligencia del vulgo, y no menos sustraídas á la vigilancia y comprobación de los electores, tienen en contra suya no sólo la lógica del sistema, sino la misma razón natural que no encuentra más forma de acuerdo en las colectividades que la mayoría de votos. En todo sistema de gobierno deben las opinio-

cuán vano es el empeño de manipular la ignorancia, la pasión y el número, de modo que no resulten la indefectible consecuencia, que será siempre la de que la mayoría, si es que no esa mayoría de la mayoría, de que se lamenta Stuart Mill, decida en la Cámara, sin más título que la cantidad, ni otra cortapisa que la obligación de oír á las minorías *como quien oye llover*, y á cuyos alegatos atará corto por medio de un reglamento *discretamente* hecho.

nes tener franca una representación, la que se ejerce por medio del derecho de petición individual ó colectiva; en ningún régimen, cualquiera idea é interés, aun estando en exigua minoría, tienen derecho á representación parlamentaria, reducida después de todo á exponer y razonar. Pero, aun admitiendo el principio de la representación de las minorías, debe para éste haber un límite, y por consiguiente una proporción, señalada *á priori* en la ley, con medida que, no por discrecional, es arbitraria é injusta. De aquí el que al sistema del *voto restringido* y al del *voto acumulado* no se les pueda argüir con la supuesta deficiencia, y que se recomienden en cambio por su sencillez y facilidad de aplicación (1).

(1) En España es el voto restringido el que ha alcanzado favor y preferencia en la legislación del ramo, como puede verse en los artículos 22 de la ley electoral de diputados (26 de Junio de 1890) y 3 del Real Decreto de adaptación de aquélla á las elecciones para Diputados provinciales y Concejales (5 de Noviembre de 1890.) Y no hay para qué decir que las manipulaciones y sugerencias de que en todos los Estados es objeto el sufragio, lo mismo el universal que el restringido, acaban de despojar de todo interés práctico á esto de la representación de las minorías, sobre todo en las naciones donde, habiendo llegado el parlamentarismo al período último de cronicidad, complicación y gravedad, son las minorías como la mayoría igualmente forjadas por la *influencia moral* del Ministerio, mediante el previo *encasillamiento* como se dice en cierto indecoroso *argot* parlamentario. Y tal labor de minorías, convenidas y hechas lo mismo que el Gobierno, pueden practicarla los *politiciens* (*muñidores* es nuestro más equivalente término) sin necesidad de que la *solicitud* del legislador se emplee en combinaciones de voto restringido y acumulado y complicados cálculos de coeficientes y coeficientes.

El modelo acabado de la representación proporcional de las ideas é intereses de los elementos políticos del país es la ley belga de 29 de Diciembre de 1899, impuesta á la mayoría católica por motín callejero que amenazaba con más seria revolución. Consiste en una combinación ingeniosa del escrutinio de lista con las circunscripciones electorales, y viene de hecho á convertir á Bélgica en un colegio único, porque las listas parciales de las circunscripciones producen al fin el mismo efecto que si el elector votara la lista de todos los diputados de la nación. Esta ley, que presume haber expresado y conseguido el ideal doctrinario del poder á la mayoría, á las minorías la intervención, y á los varios grupos la representación corres-

3. Colegio, circunscripción, distrito son en derecho racional términos sinónimos, sin otra distinción que la de la fase ó carácter que en la misma institución señalan de una manera exclusiva ó principal. Así *colegio* expresa respecto de los electores lo que respecto de otra colectividad cualquiera, es á saber, la colectividad electoral, compuesta de *compañeros, colegas* (de cum lego); y decimos la colectividad, y no la sociedad, comunidad ó cuerpo de electores, porque en los modernos sistemas no son los colegios más que agrupaciones numéricas, sin composición ni vínculo orgánicos, aun dentro del liberalismo que presume restaurar la vida corporativa, y erige al efecto cuerpos electorales de puro nombre. *Circunscripción y dis-*

pondiente á los elementos electorales con que cuentan, ofrece ocasión de importantes observaciones y reflexiones graves y amargas acerca de las ideas y del porvenir del partido católico, ó mejor dicho, conservador belga. El propósito de la reforma fué asegurar al partido liberal *clásico* una representación é influjo que ya había perdido, y proporcionarle una minoría que no alcanzara, anulado como estaba, de una parte por los católicos, y por los socialistas de la otra, si el sistema del cociente electoral no le diera una aparente importancia social y una efectiva fuerza parlamentaria. La nueva ley puso de manifiesto la división del partido católico, y quebrantó á la vez su unidad, produciendo en su seno dolorosas crisis y cambios ministeriales. Mientras unos conservadores no se avenían á ceder ante la brutal y grosera obstrucción parlamentaria y á las asonadas y ruidos del arroyo, no comprendiendo como un partido iba á ser víctima de su misma robustez y del arraigo que tenía en el país, otra fracción más tímida abdicó ante semejantes coacciones, no insistiendo siquiera en la decorosa transacción de que se aplicara la proporcionalidad solo á las circunscripciones urbanas que eligieran más de seis diputados, ya que pareciese extremado é intransigente el proyecto de Mr. Van de Peerebon de volver á los colegios unipersonales que aseguraban á los católicos la mayoría de los electores campesinos.

Y no es lo menos curioso que uno de los motivos que decidieron á los católicos á la representación proporcional, más ó menos acentuada ó ecléctica, fué la necesidad de conservar la vida al otro partido turnante, al partido liberal histórico, que, con la división de las ideas y el avance del radicalismo, amenazaba disolverse, dejando en única posibilidad, y con la perpétua carga de gobierno, al partido católico ó conservador. Este es un dato y fenómeno muy expresivos respecto del papel y del porvenir de los partidos católicos en los sistemas parlamentaristas.

trito significan también lo que en cualquiera otros ordenes del derecho, es á saber, la división territorial para este fin del sufragio, designando el segundo de estos términos la repartición ó división misma (distribuo), y el primero, los límites de ella (circumscribo). Colegio, pues, es la población electoral única, ó repartida en varias porciones, y circunscripción ó distrito el territorio ó territorios á que están adscriptas la colectividad electoral y sus fracciones más ó menos numerosas.

Pero el derecho positivo ha empleado estos términos según un arbitrio y uso convenidos, y no siempre fijos é idénticos, que por lo mismo no pueden señalarse aquí circunstanciadamente, ni es preciso, porque facilmente descúbrese en las leyes el sentido y acepción de las palabras dichas (1). La denominación de *colegios uninominales* (distritos que eligen un solo representante) y *colegios plurinominales* (circunscripciones que eligen más de uno) es un neologismo confuso, de equívoca derivación, como facilmente percibe cualquiera. Estos colegios de representación plural deben ser, según el principio de la representación moderna, atomística é individualista, de igual número de representantes, sin que obste á ello la amplitud ó tamaño de la circunscripción, pues, lo mismo cuando éstas son iguales que cuando son distintas, la representación ha de ser proporcionada al número de electores de que se compone la división territorial.

A primera vista parece que el distrito de representación singular, ó sea el que elige un representante, conserva algo de la representación antigua, no solo por la mayor posible inti-

(1) Suele entenderse por circunscripción un distrito más amplio; y entonces puede decirse á *contrario* que distrito es una circunscripción más reducida. Las divisiones interiores de ambos, para el efecto de la emisión del voto, tienen la denominación, bien caracterizada por la etimología, de *secciones* (de seco cortar). La ley de Junio de 1890 llama indistintamente distritos á las divisiones territoriales grandes ó pequeñas; pero implícitamente los considera sinónimos de colegios, aunque reserve este nombre especialmente para las Universidades, Sociedades económicas de Amigos del País y Cámaras de Comercio (Título III, artículos 21, 22, 23 y 24.)

midad social entre los electores y el elegido, sino porque el colegio de distrito, presenta cierta semejanza y relación exteriores con la tradicional división pública orgánica, fundada en la vida corporativa. Más esto es mera apariencia, porque, aun suponiendo calcada la división electoral sobre la concejil, sabido es que la Revolución en los países latinos ha destruido y borrado la personalidad histórica de los municipios, y sustituidolos con una nueva repartición numérica de individuos en los términos municipales, creada *á priori* por el legislador, sin tener en cuenta aquella personalidad formada natural y tradicionalmente por los sucesos y los siglos. Esto aparte de que solo en ciertos centros de población podían coincidir ayuntamiento y colegio; en las grandes ciudades tendría que haber más de uno de éstos, quedando así convertidas en circunscripciones.

Por lo demás ya se ha dicho y probado que la condición del cuerpo electoral y la índole de la contienda expulsan de ella á los hombres de verdadero mérito, los cuales también se retraen por repugnancia natural á los espíritus rectos é independientes; y así la representación queda en manos de medianías sin escrúpulos, y de moralidad tan menguada como bajo es el nivel de la inteligencia y cultura (1).

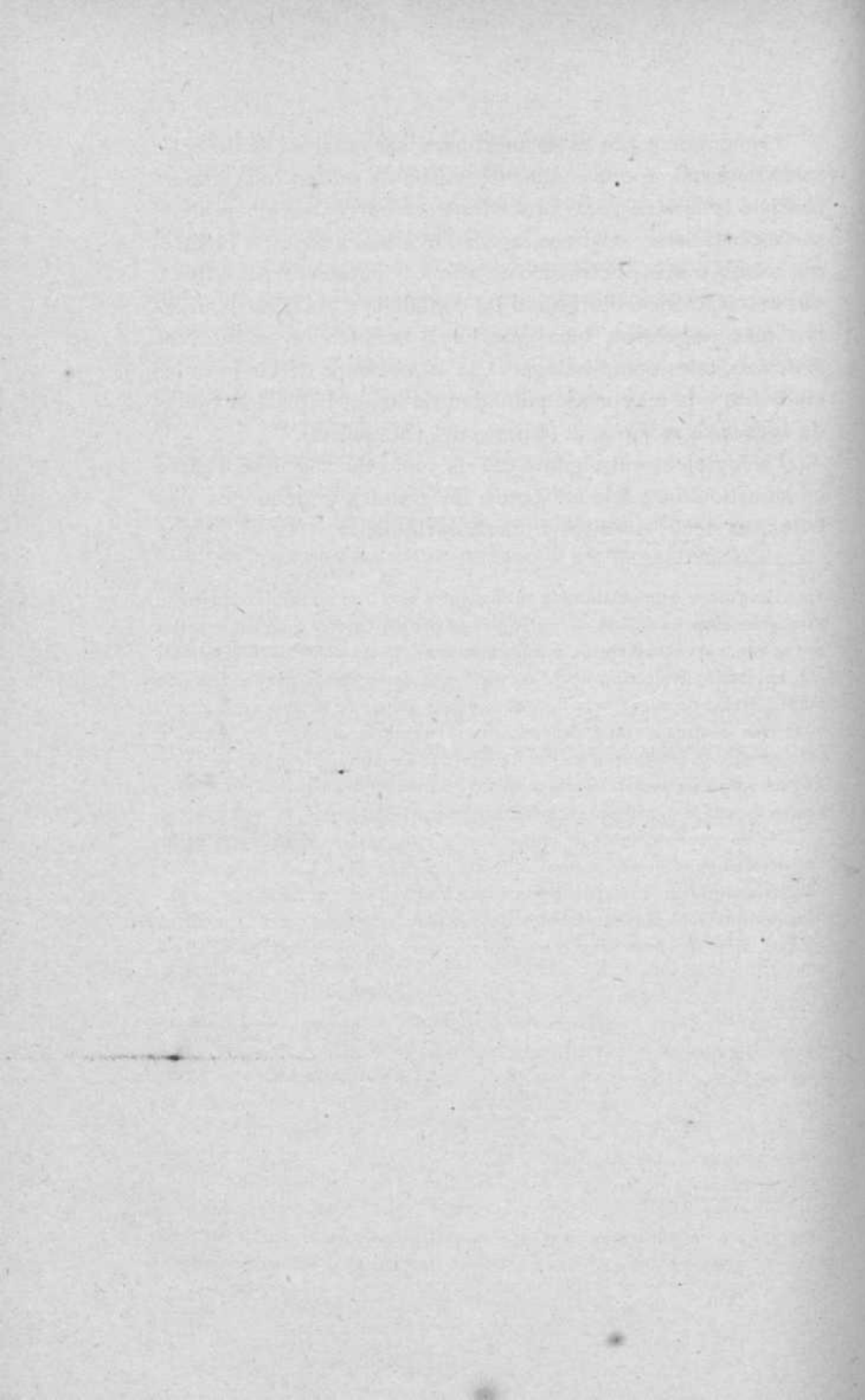
(1) Con distritos, circunscripciones, ó colegio único siempre la representación será de cotarro. Y para que no se tache esta apreciación de pesimista, medítese este párrafo de Stuart Mill, obra citada, capítulo VII) «Los Estados Unidos ofrecen un ejemplo elocuente de lo que decimos; allí en la elección de Presidente, nunca el partido más fuerte osa lanzar al público los nombres de sus individuos más importantes, porque, por el hecho tan solo de que estos individuos han estado largo tiempo en evidencia, una u otra parcialidad tendrá alguna objeción contra él; de consiguiente, estará menos seguro de reunir todos los votos que una persona de la que nunca se haya oído hablar. Así es que la persona designada aun por el partido más fuerte, quizás no representa realmente sino el espíritu de algunos individuos que pertenecen á la pequeña fracción, con cuyo apoyo este partido excede al otro. Toda sección, cuyo concurso se necesita para el triunfo, puede oponer su *veto* al candidato. Cualquiera de ellas, más obstinada que las otras, puede obligar al resto á que acepten el suyo; y

Preocupados por estas cuestiones secundarias de derecho constitucional, á que realmente acaba de quitar toda importancia é interés el vario procedimiento corruptor inherente al parlamentarismo, algunos legisladores han adoptado el sistema mixto y más doctrinario de admitir juntamente distritos y circunscripciones, otorgando tal condición á los centros urbanos más populosos, bien que haya también otros motivos *prácticos*, tales como halagar á la *democracia* de las grandes ciudades, y la mayor asequibilidad de los distritos á la titulada *influencia moral* y al imperio del caciquismo.

La ley electoral vigente (26 de Junio de 1890) se refiere en su artículo 22 á la existencia de grandes y pequeños distritos, es decir, distritos y circunscripciones.

»por desgracia, esta obstinación se encuentra más bien en los que muestran
»tan gran empeño dejándose guiar por su propio interés, que en aquellos
»cuya conducta está dirigida por los motivos del bien público. Generalmen-
»te hablando, la elección de la mayoría está determinada por la fracción
»más tímida, de miras más limitadas y más llenas de prejuicios, ó por la
»que más obstinadamente defiende sus intereses de clase; y los derechos
»electorales de la minoría, en vez de servir al fin para que son recogidos los
»votos, solo dan por resultado imponer á la mayoría un candidato elegido
»entre lo más insignificante ó inferior que en sí encierra.»

»No es sorprendente que, reconociendo estos males, muchas gentes los
»reputen como el precio necesario de un gobierno libre. Tal era la opinión
»de los amigos de la libertad hasta época muy reciente: el hábito de juzgar-
»los irremediables es tan inveterado que parece haberse perdido la facul-
»tad de mirarlos como cosas á que voluntariamente se pondría fin si se pu-
»diese».



CAPÍTULO IX

LA UNIDAD Y LA DUALIDAD DE CÁMARAS EN EL MODERNO GOBIERNO REPRESENTATIVO.—DE LOS VARIOS SISTEMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA ALTA CÁMARA. «EL SELF-GOVERNMENT».—EL MODERNO GOBIERNO REPRESENTATIVO.

1. Otro elemento de agregación ecléctica, común á la democracia y al doctrinarismo en sentido estricto, es la doble representación, la representación repartida en dos cámaras, la *baja* y la *alta* (Congreso y Senado, Cámara de los Comunes y de los Lores, etc.), ó, como dicen los autores liberales con exótico neologismo corriente, sistema *bicameral*. El contrario, el de la cámara única, (*unicameral*), ha caído en desuso en la práctica, y ha perdido casi toda su autoridad en teoría.

En los tiempos y naciones medioevales fueron la naturaleza y la historia formando y consolidando una representación nobiliaria, ó sea de la aristocracia, acerca de cuya índole, motivos y títulos, trataremos al estudiar el legítimo y tradicional sistema representativo, que fué *bicameral* también, en cierto modo, en cuanto y desde el momento en que los elementos populares alcanzaron por su parte representación en la corte del soberano.

Mas no hay necesidad de decir que esta representación nobiliaria es incompatible con el igualitarismo de la filosofía y el derecho individualistas y con la teoría política, no solo del liberalismo radical, sino del doctrinario. Con el primero, puesto que éste profesa el principio de la soberanía nativa é igual de todo hombre; con el segundo, porque toda y cualquiera *fuerza viva* es igualmente soberana, sin distinción de entidad, clase ni jerarquía; por lo cual en uno y otro sistema no hay más que disponer la *representación* de la colectividad soberana de la manera y en la forma que mejor exprese la *soberana voluntad*, y más fiel y adecuadamente desempeñe el mandato representativo, no concibiéndose necesidad y fundamento alguno de la repartición de los representantes en dos cámaras.

Pero la incompetencia, incultura é iniquidad de las varias asambleas únicas é indivisas que se sucedieron en Francia, la torpeza, fanatismo y tiranía de la Constituyente, de la Legislativa y, sobre todo, de la Convención, movieron á los políticos teóricos y prácticos á echar de menos una segunda cámara, con cuyo concurso se evitaran los inconvenientes y defectos de esa representación una, contra la cual deponía tan notoria é invictamente la más inmediata y dolorosa experiencia. Desde entonces dióse el doctrinarismo, aquí como en otras materias políticas, á tomar de la institución antigua el establecimiento de una asamblea, corte, estamento, que oponer al de la nueva y genuina representación liberal, con el objeto de contrarestar y prevenir los males inherentes á ella.

Ahora como siempre, abstúvose el doctrinarismo de

confesar la bondad y virtualidad de la institución antigua, inventando otros motivos que los de su razón y eficacia, con lo cual despojaba á aquélla de su valor teórico, y contribuía desde el principio á hacerla estéril en la realidad. Era preciso buscar á esta doble representación fundamentos distintos y aun opuestos á los de la representación de la clase nobiliaria, y los autores liberales han invocado uno de estos varios títulos, decidiéndose cada tratadista por cualquiera de ellos, si es que no han invocado al mismo tiempo más de uno, para reforzar el argumento: *a)* sistema constitucionalista del contrapeso, equilibrio y balanza de los poderes; *b)* necesidad de la doble discusión; *c)* representación de los elementos sociales conservadores; *d)* representación individual en la cámara baja, y representación corporativa en el senado, ó como quiera que la cámara alta se llame.

Antes de examinar cada uno de estos fundamentos, desde luego se percibe que, si la representación única es la que exige la lógica del sistema, y si la experiencia y el raciocinio muestran que hay que corregir en esa representación vicios que no se contrarestan sino con la representación doble, ya generalmente aceptada, es que el sistema es falso, según hemos demostrado, así en lo que respecta al sujeto de la soberanía como á la naturaleza y procedimiento de la representación. Ahora se comprobará concretamente.

2. A fin de evitar repeticiones, se tratará del fundamento asignado á la cámara alta en el motivo mecánico del contrapeso de los poderes públicos al estu-

diar la moderna teoría constitucionalista. Empezando ahora por el de la doble discusión no hay necesidad de esforzarse mucho para descubrir. 1.º que una cámara es de suyo, por el número y la capacidad de sus miembros, bastante apta para que la discusión sea suficientemente ilustrada, y para que el acuerdo se inspire en la virtud y la moderación, no en torpes intereses y pasiones. Si la asamblea única, compuesta de los representantes de una amplia comunidad nacional soberana, no logra, en cuanto es posible en lo humano, la ciencia, justicia, prudencia y templanza precisas para sus funciones, es que los electores comitentes son incapaces de elegir mejor de lo que lo hacen, y designan mandatarios á imagen y semejanza de los mandantes; ó lo que es lo mismo, que el pueblo soberano, ó la amplia poliarquía de las fuerzas vivas ni son soberanos ni pueden ser electores. Si en ningún caso puede formarse y constituirse la asamblea representativa de modo que sean sus resoluciones sabias, equitativas y oportunas, es que no hay en ella, por vicio esencial de representados y representantes, las dotes y condiciones precisas para el ejercicio del poder. 2.º si la otra cámara las tiene, no solo es inútil la baja, sino que es un obstáculo para la buena legislación, puesto que el concurso de esa cámara incapaz es condición y requisito indispensables para decretar las leyes. 3.º si en una y otra hay buenos y malos elementos de cultura, rectitud y circunspección, fúndanse en una sola asamblea, depurada de imperfecciones y defectos, que esto es lo que el buen sentido aconseja, y no la coexistencia de dos asambleas deficientes, que más han de estorbarse que auxi-

liarse y completarse recíprocamente. Si, á pesar de tan claras y concluyentes razones, se insiste en el sistema, es porque no quiere confesarse el vicio intrínseco de la representación liberal, y se trata, aunque inútilmente, de remediarlo, yuxtaponiendo una institución antigua, pero despojándola previamente de su esencia, sentido, finalidad y títulos y buscándole otros enteramente falsos y deleznable.

En este sistema de la doble discusión no se conserva de la institución antigua más que el nombre, y está el doctrinarismo más oculto, porque en apariencia no pugna con el dogma esencial y capital del liberalismo. No así sucede en el sistema que funda la existencia de la cámara alta en la necesidad de dar representación á los elementos conservadores; porque implícitamente se reconoce que la cámara baja no sirve para el efecto de mantener ciertos principios antiguos é instituciones tradicionales, indispensables al orden y consistencia de la sociedad civil, de los cuales elementos fué expresión y vehículo representativo la cámara, brazo ó estamento nobiliarios.

Entonces, y cuanto más parecido tenga con ellos en la forma y en el fondo la cámara alta que intenta restaurarse, más patente y notoria es la contradicción ecléctica, mayores dificultades encontrará el planteamiento y arraigo de la rediviva institución, sobre todo donde el liberalismo haya alcanzado más extensión é imperio sociales, y de escasos por no decir nulos resultados serán la acción y función de una cámara, que luchará impotente contra la lógica del sistema y el favor que le otorga la extraviada opinión popular. Una y otra ar-

guirán victoriosamente que ya el soberano mandante cuidará de que en la cámara baja estén representados los elementos conservadores y progresivos, y en esto consistirá la buena y discreta elección, en buscar y designar representantes que sepan conciliar las legítimas exigencias de la conservación y el progreso, mejorando las instituciones sin destruirlas, no empeñándose locamente en ciegos y precipitados adelantos, ni obstinándose, con no menor insania, en mantener á toda costa instituciones inúctuas y caducas. Asignar á una cámara la misión del progreso, y la de la conservación á otra, es suponer distintos y contrarios ambos elementos de vida, y en lugar de armonizarlos también, puesto que son armónicos, en el seno de una misma representación, colocarlos de frente como incompatibles y enemigos, para que se miren con recelo y se hostilicen, y no puedan actuar sino á costa de torpes transacciones, ó de abdicación de una de las cámaras, la alta, que es lo que generalmente viene sucediendo, hasta en Inglaterra.

Este sistema se reduce en puridad al de la representación aristocrática, ora porque realmente sea la nobleza histórica el más genuino elemento sana y rectamente conservador y tradicional, tanto por las virtudes cívicas como por los intereses mismos de clase, ya porque la función conservadora no pueden en la actualidad desempeñarla sino personas que *descuellan* en uno, ó varios conceptos sobre el nivel común de los ciudadanos, esto es, lo más conspicuo de aquellas fuerzas vivas acerca de cuya *aristocracia* ya se ha expuesto en otro capítulo lo necesario y oportuno. Si es la aristocracia histórica la que ha de componer la alta cámara,

el sistema es inconciliable de todo punto con las nuevas doctrinas acerca de la libertad, la igualdad, la soberanía y la representación; y si á la aristocracia nueva ha de confiarse en tal asamblea la custodia y cuidado de los intereses conservadores, ó será por derecho propio, y en tal caso es tan incompatible con el derecho liberal como la nobleza antigua, ó será por elección de la supuesta comunidad soberana, y entonces ya hemos dicho que puede y debe tener cabida en la cámara baja la representación conservadora encomendada á los que designen los electores, á quienes incumbe elegir personas que miren igualmente por la conservación que por el progreso. No siendo estos antagónicos, sino armónicos é inseparables, no hay para qué confiarlos á distintos sujetos y cuerpos colegisladores.

3. Del mismo modo que, dentro del racionalismo, la filosofía trascendental schellingniana, en reacción contra el anterior subjetivismo idealista, trató de restaurar la realidad objetiva y los correspondientes organismos, tanto en el orden de la naturaleza como en el del espíritu, así también, dentro de la sociología y el derecho liberales, surgió, por el influjo de la doctrina filosófica postfichtiana, por las inspiraciones y enseñanzas de la vida y por las exigencias de la misma política práctica, un *nuevo* concepto acerca de la composición de la sociedad civil, la cual, según esta teoría sociológica, no consta sólo de individuos, sino de otros organismos sociales inferiores de distinta clase, categoría y posición. A este liberalismo, que ha reaccionado contra la doctrina atomista é individualista del pacto so-

cial, le han llamado *orgánico* por razón de éste su principio de sociología, y *armónico* por la concomitancia que tiene con el *armonismo* krausista, y porque, como él, presume con ilusión ecléctica, y con el mismo éxito que cualquiera eclecticismo, haber armonizado las opuestas doctrinas políticas sobre la base de la concepción orgánica de la sociedad.

Aplicando este principio á la representación, y no sólo por virtud de él, sino por el motivo doctrinario común de establecer una cámara alta que corrigiese, ó cuando menos atenuara los defectos de la representación común y de la cámara única, concluyó, que componiéndose la sociedad de individuos y de sociedades, de *personas* físicas y órganos colectivos, individual y orgánica debía ser la representación para que la tuvieran las ideas y los intereses de unas y de otras personas, en la cámara baja los de los individuos, en la alta los de las corporaciones.

Bien se nota, sin grandes cavilaciones, la yuxtaposición de la doctrina sociológica del pacto con la antigua concepción tradicional de la composición de la sociedad, mediatamente de individuos, inmediatamente de elementos sociales, de unidades orgánicas, de la misma naturaleza que el conjunto. Y no menos señalada es la agregación á la representación individualista, de otra representación corporativa, no ya de la aristocracia solamente, sino de las demás clases y elementos gremialmente constituidos y organizados. El moderno sentido igualitarista no permite á este liberalismo admitir únicamente la representación de la nobleza; pero, convencido de que son base falsa é insostenible así el

sistema de la doble discusión, como el de la representación de los elementos conservadores, ha tratado de restaurar toda la representación orgánica antigua. Era esta precisamente la del estamento ó brazo popular; y se dá el caso extraño de que á la alta cámara moderna, á la que conserva el nombre y parecido de aquel estamento en que generalmente concurrían los nobles por derecho personal, y no por mandato de clase, sea á la que asignen la representación orgánica. Y como la nueva representación no tiene con la antigua ninguna clase de conexión sustancial histórica, han acudido estos autores *organicistas* al cómodo y pueril expediente de decir: la sociedad se compone de personas físicas y morales, luego también la representación ha de ser individual y corporativa, y de aquí la necesidad de dos asambleas.

No han caído en la cuenta de que la representación corporativa excluye á la individual, porque de la misma manera que los individuos no son elementos directamente constitutivos de la nación, sino que forman parte de ella, mediante y por el conducto y ministerio de varias sociedades intermedias entre la persona física y el Estado nacional, así la representación ha de ser también orgánica, por la mediación y vehículo de las varias sociedades á que pertenece el individuo, el cual no ha de tener representación nacional directa, por la misma razón de que tampoco es parte directamente conexas con la sociedad civil. Y así como la idea y el legítimo interés nacional no es el agregado y la suma de los conceptos y justas conveniencias individuales, sino una armonía que se forma y

condensa y determina á través y por el vínculo y principio superior de las varias sociedades y corporaciones á que el individuo pertenece en una nación regularmente adelantada en vida y en progreso, de la misma manera la representación pública ha de irse concretando y manifestando por, y á través de los órganos colectivos, que funden y concilian las ideas y aspiraciones de los individuos de que esas comunidades se componen. En una sociedad regularmente moralizada y constituida, el interés de la persona física no es distinto ni antagónico del de la persona moral, el del hijo y de la mujer del de la familia, el de la familia y de las sociedades locales del interés del concejo, y así sucesivamente; de modo que á la legua se descubre el absurdo de que haya dos representaciones nacionales diferentes, la de los individuos sueltos y desorganizados, y la de los individuos orgánicamente unidos á las varias sociedades á que más íntimamente que al Estado pertenecen.

Tampoco se concibe como ha de arreglarse la representación corporativa: si todas las sociedades, sea cual fuere su naturaleza, categoría y jerarquía han de ser representadas, y lo mismo las privadas que las públicas, las incompletas que las completas; ó si las incompletas han de serlo por el conducto de aquellas completas inmediatamente superiores á que pertenecen, por ejemplo, los gremios por medio del concejo de que forma parte. ¿Las familias y todas las industrias deben estar representadas? Parece que sí: las familias por la importancia de la sociedad doméstica; las industrias por la significación y valor económicos y sociales de la

función que desempeñan y la clase que constituyen. Mas como tampoco se puede, en tal hipótesis, excluir de la representación á las sociedades públicas completas, que son superiores por varios conceptos, concejo, provincia y región, resultará una cámara de lo más numerosa, desordenada é incoherente, en la cual se supone igual entidad social y se otorga igual derecho representativo á corporaciones de tan distinta especie y posición, y sin que se acierte ya á encontrar fundamento á tan abigarrado sistema, como no sea en la expedita fórmula *la sociedad se compone de individuos y sociedades, luego todos los individuos y sociedades deben tener representación, aquéllos en la cámara baja, éstos en la alta*. Ni todos los individuos tienen igual importancia social ni para los fines de la representación en Cortes valen ni significan lo que las personas morales; y, en cuanto á éstas, no siendo ni representando lo mismo unas que otras en la nación, tampoco han de constituir en las cámaras elementos representativos de igual gerarquía, influjo y poder.

Si tal conclusión se rechaza, no resta entonces otro fundamento que el de la competencia técnica de las corporaciones, pero este a) ya no es el de la corporación misma b) quedan así excluidas de la representación las de más importancia social, familia, concejo, provincia, región; c) el elemento técnico no necesita, ni exige una representación aparte; antes lo justo, conveniente y verdaderamente armónico es darle cabida en la representación única é indivisa, y de eso ya se cuidarán los electores, máxime si son estos las *fuerzas vivas*, entre las cuales figuran en primera línea los inteli-

gentes; d) de otra suerte, habría que suponer á la otra cámara sin inteligencia ni competencia, que es tanto como despojarla de su título de legisladora y soberana.

La única conclusión que de todo se desprende es que la representación ha de ser corporativa, pero en los términos que explicaremos, y que la representación de la nobleza es compatible con el brazo y estamento de la representación común. Esa doble representación reúne las ventajas de ser conservadora y progresiva, de contribuir á la mayor ilustración y rectitud de sus funciones, y de traducir en sólido y estable equilibrio exterior la interna y profunda armonía de elementos sociales, políticos y gubernativos, de que es á la vez expresión y síntesis la institución *biestamental* histórica.

4. La moderna representación corporativa es además imposible y ficticia, por falta de fundamento teórico y por imposibilidad real de aplicación, vida y arraigo en la sociedad contemporánea, al menos en los países latinos. En efecto, así como la filosofía del panteísmo objetivo no ha podido restaurar la personalidad corporativa, porque ni ésta, ni la misma de la persona física son compatibles con el error de la única y *divina* substancia, ó con la materia única é idéntica, así el liberalismo orgánico es incapaz de rehacer la existencia de las corporaciones, á la cual se oponen el individualismo y el socialismo esenciales é inherentes al sistema liberal.

Este, en cuanto sigue profesando el principio abstracto de la absoluta libertad é independencia y la consiguiente soberanía del hombre, no puede sustraerse al

còrolario de la formación de la sociedad pública y, por consiguiente, de la sociedad civil, por pacto, no existiendo en ella, otras sociedades que las que voluntariamente quieran formar los individuos, y por el tiempo y en las condiciones que convengan los asociados. Aun éstas son de vida efímera, porque falta al derecho nuevo aquel elemento cristiano de solidaridad y cohesión, y á la sociedad el hábito y el vínculo de asociación sólida y duradera, procedentes del alto y sobrenatural principio de caridad que determina, condensa y mantiene todas las intimidades sociales desde la de gremio á la de patria.

El anárquico individualismo contemporáneo no tiene otros diques que el interés, lazo insuficiente y flojo que apenas congrega, cuando ya disgrega y disuelve, y la fuerza coactiva del Estado, que sustituye con una unión externa y violenta la unidad moral, interior y profunda, propia y característica de la sociedad cristiana, y que al descristianizarse perdieron las naciones. Estas, especialmente las latinas, fueron desarticuladas y de tal modo desorganizadas y deshechas por la Revolución, que sería difícil reorganizarlas en mucho tiempo, aun suponiendo lo que no existe: un renacimiento del espíritu corporativo cristiano, aun más pujante y fecundo que el que redujo á unidad y sociabilidad al individualismo de los bárbaros; porque el de éstos procedía de ignorancia y atraso, y el actual deriva de una aberración sistemática, engendrada sobre todo por el orgullo racionalista, que ha envenenado, torcido y extraviado el sano individualismo, aportado á la tierra por el Hijo de Dios. La sociedad moderna tiene arrai-

gado ese vicio de falsa y soberbia independencia, incompatible con la restauración corporativa, á la cual aborrece por ser la corporación cosa cristiana y tradicional.

Por otra parte, el moderno Estado, imbuido en esos mismos errores, inspirado en el socialismo, vicio connatural de la sociología, del derecho y de la política actuales, según hemos dicho varias veces, júzgase el único representante de la única sociedad pública, la nación, y no consiente más sociedades que las que él crea, dividiendo á su arbitrio, y para sus fines de absoluto gobierno, la masa social, ó aquéllas voluntarias que explícitamente permite y autoriza, ó por aquiescencia tácita tolera. El renacimiento orgánico repugna además al Estado moderno, por ser contrario á sus ideas y propósitos, á su programa y práctica gubernativos, porque aquél representa otras tantas libertades y autarquías, que serían eficaces elementos moderadores de la omnímoda y omnipotente acción invasora de un poder centralista que se considera, no solo órgano soberano, sino único instrumento de ordenación social. Así es que todo acto de restablecimiento corporativo que los actuales Gobiernos realicen, ó es *inconsciente* é incauto, ó por regla general se verifica á sabiendas de que los colegios corporativos que se *crean* no han de tener de tales sino el nombre y la apariencia vana, reduciéndose de hecho á una nueva división y distribución de la muchedumbre numérica, á pura colectividad aritmética y territorial, sin espíritu, nervio y contextura orgánicos que no han de darles los asociados en mera suma por ministerio de la Gaceta.

5. La cámara alta en los sistemas y en las constituciones actuales, ó deriva de la designación procedente de un cuerpo electoral, más ó menos numeroso, pero no aristocrático, ó se compone de senadores por *derecho propio*, es decir, de personas notables, á las cuales la ley ó la costumbre, la ley tradicional, ó la moderna, conceden la investidura de legisladores aparte é independientemente de toda elección soberana. Y esta aristocracia, ó es la antigua nobleza histórica, ó es otra abigarrada y heterogénea, compuesta de sujetos ilustres ó distinguidos por variedad de conceptos, predeterminados en la constitución y en las leyes nuevas dentro de categorías en las cuales la aristocracia tradicional tenga más ó menos cabida, ó acaso ninguna.

El senado compuesto por elección es menos incompatible con las doctrinas modernas acerca de la soberanía, pero por lo mismo menos apto para los fines de la cámara alta, sobre todo cuando se funda ésta en la necesidad de protección y tutela á los principios y elementos conservadores de la sociedad, ó se propone el equilibrio mecánico de los poderes públicos. Cuanto más se acercan el sistema y procedimiento electorales para el senado á los que se emplean para la elección del congreso, especialmente al sufragio llamado universal, menos explicación tiene en teoría la segunda cámara, y menos eficacia en la práctica; pero menos repugna á las ideas y hábitos de la sociedad moderna, y más fácilmente la tolera la lógica del nuevo derecho, y con menor repugnancia se admite en los países donde la revolución liberal tiene más arraigo, influjo y fuerza. Este sistema electivo, que llaman *belga*, es el

único que tiene cabida y aplicación en las constituciones y en las naciones más *democráticas*, que apenas sufren en las respectivas leyes electorales del senado y del congreso otra diferencia que la elección indirecta, ó por grados para la alta cámara.

Al contrario, el sistema opuesto de la senaduría por propio derecho de personas ó clases distinguidas y sobresalientes en la sociedad, (aristocracia en su más ámplio sentido), es como ya hemos dicho, absolutamente contrario á la esencia, principios y espíritu de la política liberal, y aunque, precisamente por esto, parece más idóneo para los fines y funciones del senado, la contradicción ultradoctrinaria que implica, hace más difícil su establecimiento en los modernos códigos políticos, y punto menos que imposible la actuación regular de esta cámara, que generalmente, si quiere vivir, no tiene más remedio que abdicar, como hace tiempo que le viene sucediendo á la misma Cámara de los Lores. Tal senado de propio derecho es, aisladamente considerado, un instrumento más útil y conducente para el gobierno, una rueda más perfecta del mecanismo gubernamental, mas, por la misma antigüedad y excelencia, es inadaptable del todo á la moderna maquinaria, y si la otra rueda, la del senado á *la belga* anda mal y torpemente, ésta apenas puede moverse sin desperfecto propio y del artefacto.

Por esto, el neto sistema aristocrático histórico, el llamado *inglés* no ha podido aplicarse en toda su integridad y pureza en los países más hondamente socavados por la Revolución liberal, y la nobleza antigua, ó por mejor decir, los antiguos nobles, pues en la mayor

parte de los países la clase no existe ya, forman solo uno de los elementos componentes del alto cuerpo colegislador, al lado de otras *notabilidades* individuales del talento, de la riqueza, de la burocracia, etc. lo cual constituye una adulteración del principio nobiliario, y hace más inútil, pero no menos odiosa á los partidarios del derecho nuevo, la asamblea de esta improvisada y ficticia nobleza. A este sistema inglés mixtificado se le designa con el nombre de sistema *francés*.

En él, como en toda cámara, en la cual los miembros no proceden de la elección del pueblo *soberano*, ó de las fuerzas vivas, no puede decirse que hay representación, sino en el amplio y general sentido en que se dicen representar á una sociedad las partes ú órganos más visibles y señalados de ella, en cuanto la *manifiestan, expresan y exhiben*, y en cuanto esas personas desempeñan funciones, cumplen deberes y ejercitan derechos, no para el exclusivo ó principal interés propio, sino para el procomún, según se verá cuando directamente se trate de la representación en el lugar oportuno. Pero tal representación es incompatible con la moderna representación de la soberanía, y no cabe sistemáticamente dentro del gobierno representativo actual.

Por muy liberal el sistema belga, y por reaccionario el otro, no sólo en su pristina sencillez británica, sino en su forma francesa de adaptación á la sociedad moderna en los países latinos, ha habido que idear otros sistemas, que se llaman mixtos, y que consisten en combinaciones, agregaciones y arreglos de los sistemas puros, que se mezclan en las más artificiosas y arbitrarias proporciones, para atender y satisfacer á todas las ideas

y *tendencias*, al elemento *progresivo* y al *conservador*, los cuales hay que contemplar, manejar y *conciliar lo mejor que se pueda*. Pero, organizada de este ó del otro modo la cámara alta, tiene igual significación, influjo y poder político, reduciéndose, por exigencia de la lógica y fuerza de las circunstancias, á un trámite dilatorio en la sanción de las leyes decretadas por la otra asamblea, de nuevo discutidas en la segunda para aprobarlas sin modificación sustancial, y, las más veces, ni accidental siquiera.

La cámara alta conserva valor y potencia sociales y políticos cuando, bien que yuxtapuesta á la representación individual de que está investida la cámara baja, expresa y mantiene al lado de ella algún elemento y principio de la antigua representación orgánica, la de las regiones, estados ó cantones componentes de la federación nacional. Mas entonces la cámara alta tiene otra razón, motivo, y título que los anteriormente examinados, y el origen y fundamento de tales vitalidad, energía y prestigio están en los que tenga la personalidad y autarquía de aquellas sociedades públicas, á las cuales representa.

6. El término *self-government* que, en su más amplia acepción, significa tanto como autarquía, según vimos en el Capítulo I del Libro III, y que puede por lo mismo aplicarse á la capacidad social y al gobierno propio de cualquiera sociedad y persona, se usa ahora antonomásticamente como sinónimo de soberanía nacional, ora en el sentido del liberalismo radical, ya en el doctrinario; y emplean esta palabra exótica, con prefe-

rencia á la más usual del *clásico* liberalismo los partidarios del llamado orgánico ó armónico, por la admiración que profesan á la constitución británica, á la cual suponen expresión cumplida, y hasta ideal perfecto, de esa autarquía, que para ellos no es cosa distinta de la soberanía nacional.

Indiferente es dentro del sistema el uso de uno ú otro término, de los cuales soberanía nacional es más claro y expresivo, mientras que *self-government*, además de innecesario, atenta á la pureza del lenguaje; lo que no puede sostenerse es que la constitución inglesa sea todavía, aunque está ya muy cerca de ello, tipo de *self-government* en el sentido de soberanía del pueblo, porque ya se ha dicho que la legislación electoral está basada en el censo restringido, y porque la Cámara de los Lores conserva, casi íntegra, su aristocrática estructura medioeval. Y si se arguyera que en la constitución inglesa ha penetrado el espíritu *democrático*, esto es, liberal radical, produciendo en la esencia de aquélla un cambio profundo, independiente de la externa forma histórica que aún conserva en parte el organismo político de Inglaterra, se contestaría que esa infusión del liberalismo individualista continental, bien que no escasa ni ligera, no ha llegado al extremo de poner el gobierno á disposición de las masas populares, y arrancárselo á la *gentry*, esto es, á la *alta burguesía* que ha sustituido al fin á la aristocracia en el influjo social, y en el poder político.

De todo lo expuesto se deduce la imposibilidad de definir el moderno gobierno representativo, por causa de las agregaciones doctrinarias que contiene, aun en aquellas escuelas que presumen concebir y expresar la doctrina de la *representación soberana* en toda su pureza. Por lo cual nos limitaremos á describirlo, no sin dificultad de encerrar en la fórmula la esencia de la teoría y las añadidas contradicciones eclécticas, comprendiendo además en la descripción el gobierno representativo en la convenida acepción estricta de que se tratará más adelante, y la otra *especie* representativa, es á saber, el gobierno parlamentario ó de gabinete. Diremos, pues, qué llaman ahora *gobierno representativo á aquel en que una ó dos cámaras, elegida la única, ó, en caso de dos, la llamada baja por la comunidad soberana del pueblo, ó por una colectividad más reducida de personas idóneas ó capaces, y constituida la cámara alta, ó también por elección total ó parcial, directa ó indirecta, ó sin elección de ningún grado ni especie, ejerce ó ejercen solas, ó en unión del Jefe del Estado, la superior función legislativa, y participan, en mayor ó menor proporción, mediata ó inmediatamente de las otras funciones de gobierno*. Fácil ejercicio de la cátedra es señalar analíticamente en la anterior descripción los elementos esenciales y sistemáticos, y los doctrinariamente añadidos, y justificar, á la luz de la doctrina de éste y del anterior capítulo, el contenido y los términos de la enojosa fórmula, en la cual los defectos de retórica y aun de gramática, proceden más que de culpa del autor, de la longitud y heterogeneidad del asunto. Había que comprender en la descripción: a) la esencia del actual gobierno repre-

sentativo, ó sea la *elección de mandatarios*, hecha por la supuesta comunidad soberana del pueblo, ó la *de las fuerzas vivas*; *b)* el sistema *unicameral* y el *bicameral*; *c)* en éste los sistemas puros y mixtos de constitución de la alta cámara; *d)* el gobierno representativo republicano y el monárquico; *e)* las funciones legislativas y las ejecutivas, (*administrativas* y judiciales de las cámaras;) *f)* y abarcar con la misma vaguedad general las que corresponden á los gobiernos especialmente *representativos*, y á los parlamentarios ó de gabinete, que solo *in genere* llaman representativos.

1. El sistema bicameral no tiene sobre el de la cámara única otra preferencia que la de la general adopción de las dos asambleas en las constituciones políticas y aun públicas de los Estados, y el tributo que todo doctrinarismo, forzado por la realidad, rinde, bien que de un modo deficiente y estéril, á la verdad y á la naturaleza, á la obra y á los designios de Dios. Pues por lo demás, á todos los sofismas, con que los doctrinarios de cualesquiera grado y matiz quieren ocultar ó disfrazar las concesiones y confesiones que les arrancan la realidad y la necesidad, contesta victoriosamente la lógica del liberalismo radical, esto es, del menos doctrinario, con las razones que hemos aducido en la parte elemental de este número, arguyendo, por boca de Sieyes, que la ley es la voluntad popular, y que, así como no puede suponerse en el pueblo dos voluntades, tampoco deben admitirse dos cámaras. Y no vale objetar que la ley ha de ser expresión de la razón, porque eso ya lo presuponen todos los sistemas, y cuando se habla de vo-

luntad se entiende voluntad ilustrada y razonable; así es que para una concluyente réplica no hay más que parafrasear ligeramente el raciocinio de Sieyes diciendo, que puesto que el pueblo no tiene dos razones, no debe tampoco haber dos cámaras. Si la razón popular no es capaz de ejercer la función legislativa, el sistema falla por su base, pero si al pueblo se le presume legislador idóneo, con una cámara basta para que los representantes del pueblo legislen en su nombre razonablemente (1).

2. Laboulaye, Maurice Block y Laveleye fundan principalmente el sistema bicameral en la necesidad, ó, cuando menos, en las ventajas de la doble discusión, parafraseando la tesis y diluyéndola en ampliificaciones del mismo raciocinio, presentado alguna vez en fases de cierta novedad, aunque sea tan extraña y peregrina como la que señala el tercero de los citados tratadistas cuando dice que la oposición de la Cámara de los Lores hace más populares los acuerdos de la de los Comunes, por el hecho de rechazarlos la alta Asamblea. No creo que haya necesidad de analizar tal especie, ni otras por el estilo, refutadas en conjunto en la parte elemental. La mayor madurez, circunspección y templanza que imponen á cada una de las cámaras la idéntica función y la igual prerogativa de la otra, á eso se reduce todo; lo que equivale á confesar la deficiencia, si es que no la incapacidad de ambos cuer-

(1) De la misma opinión fueron Turgot que juzgaba la existencia de dos cámaras motivo y fuente de divisiones; Destut-Tracy que consideraba el equilibrio bicameral, ó puerilidad vana, ó civil contienda; Royer-Collard que opinaba que la cámara alta electiva hacía inútil la Cámara de los diputados; Luciano Brun, discutiendo el punto en 1875 en la Asamblea francesa, calificó al Senado de peligrosa inutilidad; y Menier afirma que, cuando la segunda cámara sirve para algo, es como instrumento del poder ejecutivo, y ocasión de conflictos con la Asamblea que representa más directamente la voluntad nacional; máxime, si, como dice Tissot, siendo hereditaria la cámara alta, entroniza el régimen aristocrático, y constituyéndola el poder ejecutivo, la forma la arbitrariedad.

pos, y que el miedo, ó la emulación cuando más, son los principales móviles y garantías de su conducta, y en tales motivos, y no en la justicia y en la recta prudencia, se inspirará la conciliación, esto es, la transacción indebida é inconveniente. La mayor parte de estos razonamientos los dicta la prudencia de la carne, eso que llaman moderación los doctrinarios, la que es propia de todo pragmatismo que reduce el gobierno á manipulación y equilibrio de materiales intereses y de resortes mecánicos. Para el doctrinarismo todo principio categórico es falso y perjudicial, y el justo medio consiste siempre en una *componenda* entre las tesis absolutas: tal es la esencia del sistema.

Tampoco respecto de la fundamentación de la cámara alta en la necesidad del mantenimiento y defensa de los principios y elementos conservadores de la sociedad hay mucho que añadir á lo expuesto en la sección elemental de este número y en otros pasajes. Los doctrinarios, en la imposibilidad de justificar la existencia del estamento aristocrático con sus títulos racionales é históricos, se han compuesto de manera que han convertido lo que fué beneficio de clase, para provecho nacional, en privilegio odioso de una fracción de ciudadanos, usurpadores de derechos generales, apareciendo el senado como injusta concesión hecha á una minoría, á fin de que defienda y retenga, en perjuicio del procomún, prerogativas y franquicias indebidas y anacrónicas. La institución que, como todas, surgió y encajó en la armónica y sólida fábrica tradicional por obra de la naturaleza y ministerio y labor de la historia, aparece hoy como una vieja y caduca adherencia, adosada grosera y deleznablemente al edificio del derecho nuevo, con el vano intento de que, al amparo de ella, se pongan á salvo y se guarden desigualdades irritantes y absurdas. Los doctrinarios franceses y españoles, y especialmente Guizot y Thiers, han conseguido presentar á la segunda cámara, que debe ser escudo y garantía de los fueros y libertades comunes y de clase, perfectamente conciliables lo mismo en la teoría que en la práctica, como el más antipático instrumento

de monopolio y tiranía de casta (1). Nada tiene de extraño que con tanta lógica, dentro del sistema común, combata Menier la necesidad y títulos de una cámara, que, desde que dejó de ser aristocrática verdaderamente, haciéndose así incapaz de las altas funciones representativas encomendadas á la nobleza, es el baluarte tras del cual una aristocracia de puro nombre é imitación, y de hecho una burguesía desalmada y calculadora, trata de perpetuar el imperio de esa *gentry* judía ó ajudada, dueña y señora de la sociedad que apostata de Cristo.

3. Consúltese con más particular atención el Capítulo VII del anterior libro y el inmediato apéndice «La moderna doctrina orgánica», como precedentes que han de tenerse en cuenta al tratar del liberalismo orgánico, acerca de cuya relación con el panteísmo postfichtiano y con el positivismo puede afirmarse, sobre poco más ó menos, lo mismo que se dijo de las concomitancias entre el doctrinarismo político y el eclec-

(1) Ya Montesquieu, después de la *razón* capital del equilibrio y balanza de los poderes, no encontró otro mejor motivo psíquico y ético de la representación aristocrática que el de conquistar así la benevolencia de las altas clases para con la recién introducida libertad común. Guizot basó al senado una base más *práctica* y burguesa en esta *elevada y consoladora* doctrina, igualmente *dignificadora* de una y otra cámara: hay en las sociedades dos elementos esenciales y permanentes, los hombres que viven de sus rentas y los que viven de su trabajo, y por esto, si los de vida holgada no tienen una representación para su uso y conveniencia, serán víctimas de la expoliación, mediante la anarquía. De aquí resulta que la cámara baja viene á ser algo así como representación de *sansculots* y la alta, de ricos ociosos y egoístas. Por esto arguye Laveleye que no hay más peligrosa imprudencia que colocar de frente, como enemigos, el capital y el trabajo, (ya lo son y no pueden menos de serlo en la sociedad contemporánea). Rossi presentó la teoría por el lado más pudibundo de la cámara alta, representación del elemento conservador, y la baja del progresivo; y en cuanto á los clásicos doctrinarios españoles (Pacheco, Alcalá Galiano, etc.) meros pedisécuos, sin elevación ni originalidad alguna, del doctrinarismo francés, nada hay que decir, porque no han hecho más que parafrasear, si es que no copiar, los argumentos que desde el año 1814 vinieron prolija y enojosamente repitiendo los doctrinarios franceses.

ticismo filosófico. De la misma manera que para ser liberal doctrinario, no es preciso ser filósofo ecléctico, ni del eclecticismo se deduce necesariamente en sociología y en política la conclusión doctrinaria, así tampoco los liberales armonistas ó organicistas han menester profesar la filosofía de Schelling, Hegel ó Krause, ó el positivismo, como único fundamento racional y sistemático de las teorías orgánicas, sociológicas ó jurídicas. Lejos de eso, lo que generalmente sucede es que la doctrina de la composición orgánica de la sociedad civil se tome de la realidad misma, de la historia y de la ciencia antigua para yuxtaponerla á la concepción atomística del pacto social, y que de la misma procedencia sea el corolario de la representación corporativa; porque lo natural es que los políticos organicistas, que no estén preocupados ni obcecados por las filosofías del monismo, no traten de fundamentar la personalidad de las varias sociedades componentes de la nación en metafísicas incompatibles con el concepto y el reconocimiento de otra personalidad que no sea la del Estado. Por eso lo corriente es que el liberalismo armónico, que es un liberalismo tan doctrinario como cualquiera otro, acuda en busca de sus agregaciones *insistemáticas* á la misma fuente donde el doctrinarismo clásico, coetáneo de la Carta, escogía las instituciones que necesitaba para sus varios intentos, y que se vea á no pocos publicistas de esta dirección arremeter decididos contra las filosofías monistas, así las de crudo materialismo, como las de espiritualismo aparente. Aun los políticos que en filosofía sean positivistas, si han de ser consecuentes con el método del sistema, tratarán de indagar, observando la realidad presente, y en la Historia la pretérita, los hechos y datos de la vida social orgánica, tales como son y han sido, no como *apriorísticamente* se los finja una sociología fantásticamente deducida del prejuicio de una *metafísica* previa.

4. Si la misma familia, reducida en las naciones más *revolucionizadas* á la temporal convivencia de padres é hijos, apenas puede resistir al elemento de permanente disolución

individualista y á los ataques que hace tiempo le viene asfaltando el socialismo propio del moderno Estado, ya puede calcularse qué consistencia tendrán las demás sociedades, menos defendidas por la naturaleza contra la insana independencia de un personalismo egoísta, reacio á los vínculos de toda sociabilidad que no sea la estrictamente necesaria, y contra los desafueros del absolutismo liberal que se cree árbitro de manejar, formar y dividir á su antojo una masa social, una colectividad compuesta sólo de personas físicas.

Suponiendo que no sea aparente interés por la libertad é independencia del sufragio, es candidez insigne el actual planteamiento de la representación orgánica en virtud de previa é inmediata improvisación gubernativa de los *organismos* representados, sobre todo cuando se crean en la Gaceta, manipulando el censo general, del que se resta un número determinado de electores para erigirlo en especial colegio con este ó el otro nombre, y como si con él renacieran milagrosamente las deshechas instituciones antiguas. La historia fué formando el órgano, y después vino por sus pasos contados su función representativa, posterior al ejercicio de otras sociales; hoy en las constituciones y en las leyes se *habilita* de repente el órgano para darle la representación al mismo tiempo que la aparente *existencia*. Esto han hecho la Constitución española y las leyes electorales del Senado y del Congreso influidas por el nuevo sentido orgánico (1).

(1) La Constitución de 1876 estableció la representación corporativa para el Senado, disponiendo en el párrafo 3.º del artículo 20, que el Senado se compone también: «De senadores elegidos por las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley. Estas corporaciones son (Ley electoral del Senado de 8 de Febrero de 1877).» Los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de cada una de las provincias que forman los arzobispados de Toledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Burgos y Valladolid—La Real Academia Española—La de la Historia—La de Bellas Artes—La de Ciencias exactas, físicas y naturales—La de Ciencias morales y políticas—La de Medicina de Madrid—Cada una de las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid

3. En una división científica, ó por mejor decir, lógica, de los modos de constituirse el senado en los modernos códigos políticos no nos parece que caben otros miembros que los señalados en el texto: ó los senadores son, ó no son *representan-*

»y Zaragoza, con asistencia del Rector y Catedráticos de las mismas, Doc-
»tores matriculados en ellas, Directores de Institutos de segunda Enseñan-
»za y Jefes de las Escuelas especiales que haya en su respectivo territorio—
»Las sociedades económicas de Amigos del País, que designarán un Sena-
»dor por cada una de las regiones que, á continuación se establece.....»
—Las Diputaciones provinciales y compromisarios de los Ayuntamientos y
mayores contribuyentes de los pueblos.

De estas corporaciones, tienen algunas alguna vida propia, bien que á todas las del orden civil, ó mejor dicho, temporal, les falte el espíritu verdaderamente corporativo y coherente, propio del derecho nacional y cristiano, y estén casi del todo contagiadas del individualismo naturalista que corroe todo organismo en la sociedad moderna. Otras, por ejemplo, las Universidades, no conservan de la institución antigua más que el nombre, y son círculos burocráticos sin vida ni personalidad, en cuanto no eligen ni renuevan por sí mismas su cuerpo docente. La experiencia ha demostrado que este elemento de representación orgánica no se ha hecho notar, ni dado en la Cámara alta señal alguna de influjo, ni aun de existencia, sumándose tales senadores á las agrupaciones de los partidos militantes, y decidiéndose siempre en todas las materias con el criterio cerrado del liberalismo abstracto, atomista, burocrático y centralizador.

También la ley electoral del Congreso (26 de Junio de 1890) *ingirió* la *representación corporativa*, no establecida ni autorizada, como lo fué la del Senado, por el artículo constitucional correspondiente, puesto que ni el 27 ni todo el Título IV de la Constitución, hacen indicación ni referencia alguna á tal representación orgánica, antes la excluyen, estableciendo el citado artículo la individual y numérica de un modo terminante: «El Congreso de los Diputados (dice) se compondrá de los que nombren las Juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado á lo menos por cada cincuenta mil almas de población». Así es que para no ponerse en contradicción con el texto constitucional, el artículo 24 de la ley, no ha podido mantener la personalidad electora de cada Universidad literaria, Sociedad económica de Amigos del País y Cámara de Comercio industrial ó agrícola organizada oficialmente, (éstos son los Colegios especiales creados por la ley), sino que los considera como otros tantos sumandos, componentes del número de 5.000 electores, de que han de constar esos colegios para elegir un diputado. Esos electores se descuentan del censo general en el que pueden ingresar de nuevo, porque aquí no se trata

tes ó mandatarios en el sentido de la *soberanía representada*, tal como entiende el derecho nuevo el contenido de este término compuesto. Y para aquellos senadores, cuyo título no procede de la elección, sino de cualidades personales, prede-terminadas en la ley ó en la costumbre, ó cuyo discernimiento dependa en absoluto del Jefe del Estado, no encuentro denominación mas exacta que la de senadores por derecho propio, y que tiene científicamente un significado más amplio que el convencional y arbitrario que le da la vigente Constitución, la cual en su artículo 20 llama senadores por derecho propio á los que lo son por ministerio de la ley constitucional, sin necesidad de que los nombre el Rey, ó los elijan las Corporaciones del Estado y mayores contribuyentes.

La representación histórica de estos dos sistemas, el de *elección soberana*, y el de *senaduría independiente* de aquélla, términos lógica é históricamente irreductibles entre sí, corresponden á dos constituciones, una contemporánea, otra tradicional, la belga y la inglesa, de las cuales han recibido los respectivos nombres, cuya aplicación se justifica por ser los más opuestos entre sí ambos sistemas, y los que en mayor pureza y sencillez reflejan la respectiva índole del nuevo y del antiguo derecho político.

Toda la Cámara alta inglesa está compuesta de lores, de los cuales unos lo son por derecho propio hereditario, y otros por creación ó llamamiento de la corona, aparte de los lores irlandeses y escoceses que son elegidos, vitaliciamente los primeros, y temporalmente los segundos. Por esto, aunque la cámara de los lores es principalmente hereditaria, no puede decirse que lo sea en absoluto, y que en esto se distinga del sistema francés, con el cual tiene de común la facultad real de

de otra cosa que de un mero cambio de distrito, no orgánico, sin más diferencia que la denominación de derecho común, ó, por ejemplo, la de Cámara tal ó cual, igualmente manejada por el Gobierno, ó por los *politiciens*, y con candidatos ministeriales ó de oposición, del mismo modo y previamente *encasillados*, y dignos de cualquiera de los distritos generales.

creación de algunos pares. Lo que caracteriza al Senado inglés es su pura composición de los elementos aristocráticos históricos, de una nobleza que, no solo por la especial constitución de la propiedad, sino por el espíritu de cuerpo y clase que conserva, no se reduce á colectividad disgregada é inorgánica de nobles más ó menos antiguos, y de prosapia y posición más ó menos distinguidas. Aunque en la Cámara de los Lores los hay electivos, (los escoceses é irlandeses), no lo son por el pueblo, ni por las *fuerzas vivas*, sino por la nobleza; de suerte que el sistema inglés es mixto, pero en cierto modo, no en el sentido de la mezcla del antiguo estamento ó cámara nobiliarios con el senado designado por un cuerpo electoral distinto de la nobleza histórica.

Por sistema francés entendemos no el de la Constitución actual, sino el de la Carta de 1830, que no pudo menos de prescindir ya de la *pairia hereditaria*, y constituyó la Cámara llamada de los Pares por el procedimiento de la designación real de senadores vitalicios, de número indeterminado, que el rey nombraba en decretos especiales y justificativos de entre las clases y categorías taxativamente señaladas en la Carta: propietarios, comerciantes, fabricantes y banqueros que pagasen 3000 francos de contribución y reunieran la condición conjunta de haber desempeñado otras funciones legislativas, ejecutivas ó judiciales. Y he aquí lo característico de este sistema: no el que el rey nombre con cierta amplitud de arbitrio á los senadores, pues algo de esto sucede en Inglaterra, sino el elemento constitutivo de la Cámara, que allí es la nobleza histórica, y según la Carta de 1830 una nueva aristocracia, la titulada de la riqueza, del talento ó del cargo público desempeñado (1).

(1) El actual Senado francés, al tenor de las leyes orgánicas de 25 de Febrero de 1875 y 9 de Diciembre de 1884, se funda en el sistema belga, aunque con una combinación más complicada y heterogénea, que muestra cuan poco á propósito es la pura elección para constituir la segunda Cámara. Esta, en Bélgica, se compone de un número de miembros igual á la mitad del que forma la Cámara de representantes: 26 senadores son elegidos por los Consejos provinciales, independientemente de toda condición de cen-

A este sistema le arguyen de realista por las facultades reservadas á la Corona en el nombramiento de senadores; y, en verdad, si de hecho fuera el rey quien los eligiera, tal asamblea sería la menos apta para moderar el poder monárquico y cooperar á la función gubernativa con la debida independencia; pero en los países constituidos parlamentaristamente no es el monarca, sino el gabinete responsable el que hace esta cámara, y, por el conducto del gabinete, la cámara baja quien indirectamente forma la alta, menos dueña de sí y libre que si procediera de la elección. Esto, cuando una y otra no son hechura de la oligarquía ministerial, órgano é instrumento de los tiránicos partidos.

En las constituciones federativas la cámara alta, constituida de este ó del otro modo, puede tener, y en algunas constituciones tiene, cierto carácter y significado de representación orgánica, análogo, cuando menos, á la antigua representación concejil, que se hubiera convertido en regional, si el gobierno representativo de la Edad media, hubiera alcanzado perfección y madurez históricas, ó, aunque no fuera más, hubiese salido de su primitivo estado embrionario. Así puede verse en la constitución del Imperio alemán, en la de los Estados Uni-

so; los restantes son elegidos directamente entre los ciudadanos que pagan al Estado 1200 francos, cuando menos, de impuestos indirectos, ó poseedores de inmuebles que den una renta de 12000 francos. En la Constitución de 1831, antes de la revisión de 1893, era el sistema más sencillo, de elección directa, por el mismo cuerpo electoral de la otra Cámara, y sin más diferencia que la del mayor censo en los elegibles, y este procedimiento es el que se llamó belga. Pero el actual sistema francés es aún más abigarrado que el belga de la revisión constitucional: sobre el primitivo elemento de los senadores vitalicios nombrados por la Asamblea nacional y por el Senado, y que en Setiembre de 1899 quedaba reducido á 16 senadores, esta Cámara es elegida por los Departamentos franceses y de algunas colonias, formando el Colegio departamental los diputados del Departamento, los Consejeros generales y de *arrondissement* y los Delegados de los Consejos municipales. Es decir, que la elección es indirecta de dos y tres grados, habiéndose procurado un cuerpo electoral *conservador* por el único procedimiento que consienten las naciones y constituciones *democráticas*.

dos de América y en la de Suiza, de cuyos senados, el más orgánico y corporativo, por la naturaleza, autonomía y poder de los Estados federados, es el *Bundesrath* (Consejo federal), porque sus 58 miembros no son electivos, sino vitalicios designados por los Jefes de los correspondientes Estados, y porque un sólo representante puede disponer de todos los votos asignados á cada parte de la Federación (Prusia cuenta con 17 y le sigue Baviera con 6); mientras que en el *Senado* americano y en el *Consejo de los Estados* suizo tiene amplia participación el elemento de la elección individualista é inorgánica del derecho nuevo. (1)

De tipo de cámara alta, arreglada por la combinación de los sistemas llamados puros, puede servir la mezcla constitutiva del Senado, según la vigente Constitución española de 1876, puesto que aquél se compone de un cierto ingrediente *inglés*, (una parte de los senadores por *derecho propio*: los grandes de España con 60.000 pesetas de renta anual, procedente de inmuebles ó derechos de la misma consideración legal, además de los hijos del Rey y del inmediato sucesor de la Corona, mayores de edad); un factor francés (los otros senadores por derecho propio: Capitanes generales y Almirantes, Patriarca de las Indias y Arzobispos, Presidentes del Consejo de Estado, Tribunal Supremo de Cuentas del Reino, Consejo supremo de la Guerra, de la Armada; y los que pueden ser designados por el rey, de entre varias y múltiples clases y categorías, y que son las mismas de entre las cuales pueden elegir senador las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes (2); y el elemento belga-francés actual en el dere-

(1) Los senadores americanos son nombrados por la asamblea legislativa de cada uno de los Estados federales (dos senadores por Estado); y el *Consejo de los Estados* en Suiza es elegido en parte por las autoridades legislativas en algunos cantones, y en otros por sufragio directo de los ciudadanos.

(2) Presidente del Senado ó del Congreso; Diputados de tres Congresos diferentes, ó de ocho legislaturas; Ministros de la Corona; Obispos; Grandes de España; Tenientes Generales y Vicealmirantes; Embajadores y

cho de elección directa ó indirecta, otorgado á dichas Corporaciones y contribuyentes, en la forma varia y poco análoga que determina al pormenor la citada ley electoral orgánica del Senado (8 de Febrero de 1877).

6. Desde la revolución de 1648, y, sobre todo, desde la de 1688 que derribó á la dinastía legítima de los Estuardos, fué convirtiéndose la Constitución inglesa en un agregado extraño de organismo histórico y de organismo nuevo, ó por mejor decir, en un organismo medioeval que se iba renovando interna y profundamente, bien que conservando la corteza exterior, la forma superficial de la mayor parte de las instituciones tradicionales. Por esto, porque el liberalismo inglés se anticipó al liberalismo del Continente, arraigándose y consolidándose en su forma parlamentaria, sin graves convulsiones, y con trazas de mayor seguridad, duración, y hasta de más

Ministros plenipotenciarios; Consejeros, Ministros y Fiscales del Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Cuentas del Reino, Supremo de la Guerra y de la Armada, Decano del Tribunal de las Ordenes militares; Presidentes ó Directores de las Reales Academias Española, de la Historia, de Bellas Artes de San Fernando, de Ciencias exactas, físicas y naturales, de Ciencias morales y políticas y de Medicina; Académicos de ellas que figuren en la primera mitad de la escala de antigüedad; Inspectores generales de primera clase de los Cuerpos de Ingenieros de Caminos, Minas y Montes; y Catedráticos de término de las Universidades; todos los cuales, además de cierta antigüedad en sus cargos y destinos, necesitan, como condición *plutocrática* conjunta á su distinción burocrática ó *aristocrática del talento*, 7.500 pesetas de renta.

Siguen después otras categorías en que la renta de 20.000 pesetas, ó las 4.000 de contribuciones directas al Tesoro público constituyen la primera y capital condición de elegibilidad, á la cual se añaden como indispensables conjuntas cualquiera de las siguientes: Títulos del Reino, Diputados á Cortes, Diputados Provinciales, ó Alcaldes en pueblo de mas de 20.000 almas.

Las Corporaciones electoras y los mayores contribuyentes, ó eligen directamente al senador, ó mediante el compromisario designado, es decir, que la elección es de uno ó dos grados, según concretamente puede verse consultando la varias veces citada ley orgánica, en la cual es fácil señalar el influjo é imitación de la Constitución belga y la francesa vigente.

moralidad y pulcritud, cuando menos relativas, que en parte alguna, ha sido, desde los albores de la Revolución, la Constitución británica objeto del entusiasmo y el ciego culto de los liberales: de los más avanzados por el radical naturalismo anticatólico, que es el fondo y el alma de aquella organización, y de los doctrinarios, por la apariencia y parte de elemento histórico accidental que mantuvo, y aun en mínimas, proporciones mantiene, elemento que el doctrinarismo estima no como histórico, sino como *conservador* y de ecléctica moderación del *progresivo*. En ambos conceptos le profesan el mismo amor y admiración los liberales armónicos: por liberal, protestante, sobre todo, y por *orgánica*, esto es, por representante de ese nuevo doctrinarismo que en el suelo volcánico y removido por las filosofías y derechos esencialmente antiorganicistas sueña con restaurar los organismos que aniquiló la Revolución.

Pero todo menos *self-government* en sentido de democracia radical, de soberanía del pueblo, hay en Inglaterra. Por natural inteligencia de la nobleza de segundo orden y de la burguesía ciudadana que se sentaban juntas en la Cámara de los Comunes, donde al fin se hicieron solidarios los respectivos intereses, y armónicos los principios é ideas, se fué formando una poderosa clase media, una *gentry* terrateniente é industrial que ha sustituido en el poder social y político á la primera nobleza, y que en gran parte maneja el sufragio, sin otra limitación que la de la otra fuerza contemporánea, la población obrera, también poderosamente constituida en robustas asociaciones, y que con el voto, ya harto ampliado, disputa á la burguesía una prepotencia de que al fin ha de lograr despojarla. Casi íntegra conserva la alta Cámara su estructura y prerogativas legales, pero de hecho ya no significa ni pesa en los negocios más que cualquiera otro senado de los países latinos, y sólo á cambio de transigencias y cesiones, se tolera la forma anacrónica de la antigua primera Cámara nobiliaria; pero eso no quiere decir que la de los Comunes, que la ha sustituido y suplantado, sea una asamblea democrática, sino

burguesa, bien que con ingerencia muy marcada y creciente de liberalismo radical. Un parlamentarismo, en manos todavía de las altas capas de la clase media es la constitución inglesa, como la mayor parte de las contemporáneas, notándose en la Cámara de los Comunes, donde de hecho está concentrada y puede decirse que reside la soberanía, reflejados ya los dos elementos sociales y políticos, las dos contrarias fuerzas que se disputan el goce sensual de la vida y el absoluto imperio de ella: la burguesía capitalista acomodada y la plebe trabajadora que quiere acomodarse. Aun domina la primera, pero, por evolución, que es como todo se hace en Inglaterra, el cuarto estado desbancará á la *gentry*, como ésta suplantó á la aristocracia.

De todo lo expuesto se deduce que el gobierno representativo moderno nada tiene de representación, no sólo por el absurdo que implica soberanía necesariamente y en todo caso representada, sino porque, aun reducida la representación á la elección de una poliarquía, que se supone compuesta de mandatarios, sólo podría, aun en tal sentido, llamarse gobiernos representativos á las repúblicas con una sola cámara elegida por una comunidad más ó menos amplia de soberanos *electores mandantes*, pero no á toda la contradictoria urdimbre y armazón de la mayor parte de los modernos gobiernos representativos, en los cuales no tienen título representativo ni la realza constitucional, ni aquellos miembros de la alta cámara que no procedan de la elección hecha por los supuestos soberanos.

Descartadas del moderno gobierno representativo las adherencias doctrinarias incompatibles con la moderna teoría acerca del sujeto de la soberanía y del concepto de la representación, era aquél fácilmente definible según el rigor lógico

de un sistema que, por naturaleza, no puede menos de ser republicano y unicameral: *gobierno representativo es aquel en que una asamblea de mandatarios, elegidos directamente por la comunidad soberana del pueblo, ó de las personas declaradas capaces de tal soberanía, ejerce por sí misma, en nombre de estos soberanos mandantes, la función legislativa, é inspecciona, vigila y dirige soberanamente el ejercicio de las otras funciones ejecutivas y judiciales que no retiene.* Pero tal gobierno no sólo no existe en ninguna parte, sino que en *toda su pureza* no hay tratadista, por radical y avanzado que sea, que lo admita y defienda.

La soberanía, la democracia y la representación según el liberalismo armónico.

No está incluido este punto en número alguno de los capítulos precedentes, porque no es, por su naturaleza, materia de enseñanza elemental, ni en la parte de ampliación tiene cabida, como quiera que implícitamente va contenido en toda la doctrina del presente libro y en una buena parte de la del anterior. He aquí porque se hace sucinta referencia al asunto, por vía de apéndice, para que el lector, si gusta, lo pase por alto, sin interrumpir ni cortar la unidad de la exposición, y sin menoscabo del íntegro y esencial contenido de ella.

Según la concepción kantiana y fichtiana, ó sea, según el racionalismo abstracto y subjetivista, cada individuo vale tanto como otro, porque las diferencias individuales, como pertenecientes á la realidad objetiva, no hay que tenerlas en cuen-

ta. Todo individuo es el dominio idéntico de lo incondicionado y no contradictorio, de lo racional, de lo absoluto y *divino*, y, por lo tanto, estimado por el aspecto abstracto de la mera naturaleza humana específica; cada persona es igual á las otras é independiente de ellas. En esto coincide el individualismo igualitarista de Rousseau con el de Kant y Fichte, bien que Rousseau no haya roto con la noción científica y corriente del libre albedrío, y en los otros sea la libertad una mera volición consciente de la necesidad racional del acto (1). De esta doctrina filosófica resulta también la soberanía un derecho individual nativo, y, por consiguiente, el dogma de la soberanía popular en los mismos términos que en el *Contrato*, bien que la fundamentación y los motivos sean distintos.

Por el contrario, de la corriente filosófica del panteísmo objetivo, que presumió restaurar el valor y significación de la naturaleza y de la realidad, debió surgir, como de todo naturalismo, una doctrina jurídica liberal, es decir, incompatible con el divino origen del derecho en un Dios personal, creador y legislador, pero de ninguna manera el dogma de la sobera-

(1) El individualismo igualitarista moderno nació antes que la filosofía racionalista se sistematizara, y se desarrolló fuera é independiente de ella sobre la base de una falsa concepción del hombre individual, pero determinada por motivos circunstanciales y prácticos, no por una previa elaboración filosófica. Se entendía la libertad como la habían entendido hasta entonces la filosofía y el buen sentido, los sabios y las gentes: como la facultad que elegir, bien que se la emancipara de toda ley superior al dictámen de la razón de cada individuo, igual á los demás é independiente de ellos. Este racionalismo práctico llevaba incoada é implícita una radical transformación filosófica, pero aun no había trascendido á la región de la psicología, á donde llegó más tarde la conclusión necesaria de todo monismo, el determinismo. De tal sistema racionalista, inicial, fragmentario, *insistemático* surgió casi toda la corriente liberal moderna y contemporánea, ó, cuando menos, su más henchido é impetuoso brazo, y no fué otra la filosofía que profesó la mayor parte de los políticos teóricos y prácticos de la Revolución, y la que aún profesan los más de sus actuales teorizantes y partidarios. Una mínima porción de gente pensadora y especulativa filia su liberalismo en los monismos deterministas del panteísmo ó del positivismo.

nía popular, *a*); porque en esa realidad objetiva, nouménica ó fenoménica, substancial ó accidental no podía menos de reconocerse, entre la variedad de hechos y en los diversos grados y etapas de la evolución, la distinción de estados jurídicos, y, por lo tanto, la diversa capacidad que implican las varias condiciones, y exigen los diversos oficios de derecho, no pudiendo cualquiera persona, á título de tal, ser órgano del más alto, complicado y difícil, la soberanía; *b*) porque ésta, de derecho y de hecho, debiera corresponder á la más alta personificación del Estado nacional, á aquel órgano en quien la historia hubiera concretado la superioridad y el poder inherentes á la soberanía, surgiendo así, aun por el camino del monismo, y por el apremio y exigencia natural del buen sentido, una teoría legitimista, igual en la estructura y forma exteriores á la que hemos sustentado.

Pero la filosofía trascendental de la etapa postfictiana se encontró ya con este hecho de la soberanía democrática en el mundo, é hizo con él lo que con las demás cosas y hechos, lo que con la realidad presente y con la realidad histórica: acomodarla al sistema filosófico preconcebido, como éste á las circunstancias, con recíproca *adaptación* de la idea á la realidad y de la realidad á la *idea*, aunque para ello hubiera que forzar *un tanto* el continente y el contenido (1).

Así es que estas filosofías, al descender á la esfera de la Sociología, del Derecho y de la Política, se hicieron también doctrinarias y conservadoras, para venir á parar á conclusiones análogas á las del doctrinarismo histórico y práctico de los Royer-Collard, Guizot, etc., solo que por el camino y procedimiento de parafrasear y manipular el *principio de identi-*

(1) Curioso y elocuente testimonio de esta *manera* es toda la filosofía de la historia, *hegeliana*, y el ingenioso expediente con que acomodó Hegel los *cuatro imperios universales* que han *devenido* en el mundo, dentro del encajillado del movimiento dialéctico. En él encaja de un modo no menos lógico todo el artefacto del moderno gobierno constitucional: el hegelianismo pudiera disputar al eclecticismo de Cousin el título oficial de filosofía constitucionalista.

dad con que el monismo ha sustituido al *dualista principio de contradicción*, y presentando aquél con los juegos más extraños de concepto y de palabra.

En efecto, la soberanía immanente de la masa resulta aquí de un raciocinio que puede condensarse de este modo: siendo la soberanía la misma actividad general y radical del Estado, tienen que participar de ella todas las partes de ese todo físico y vivo, que tal es el Estado nacional. La actividad del Estado es el conjunto de la de todos los miembros, (partes físicas de él), y está esparcida en la colectividad, que es el *sujeto* primario de esa capacidad y poder jurídicos, de los cuales no hay persona que no participe. La misma actividad, capacidad y poder de cada una son en ella su propia soberanía, y del agregado de todas, resulta la soberanía política del Estado. La soberanía popular, que en Rousseau era la suma de las soberanías individuales, es aquí el producto de la actividad jurídica de las partes, de las cuales se compone la actividad del todo físico. Así se comprende la identificación de personalidad, capacidad, autoridad y soberanía bien notorias en frases tan expresivas como la de Gerber, cuando considera la soberanía como la misma facultad de querer en un organismo concebido como persona.

En la concepción de la sociedad civil, como un todo moral, cada persona tiene su grado distinto de actividad, capacidad y poder; toda persona es autárquica, pero no soberana, porque la soberanía es propiedad y atributo de la persona absolutamente superior; en la concepción monista, del mismo modo que en el cuerpo del hombre hay una actividad radical y común, esparcida por todos los miembros, y de la cual todos participan, así también en la sociedad única, la nación, compuesto material de unidades materiales.

Esta conclusión, tan socialista como la de Rousseau, es principalmente la del materialismo, pero no la pueden eludir ni evitar las teorías pseudo-espiritualistas, que formalmente y en términos que no sabe uno discernir si son metafóricos ó de sentido directo y propio, vienen á coincidir con esta tesis

de la sociología positivista. De esta manera, siendo la soberanía propiedad total del conjunto, por serlo parcial de todas y cada una de las partes, la distinción y antinomia entre súbdito y soberano desaparecen, y ya no hay para qué preocuparse, como se preocupó Rousseau, de la alienabilidad é inalienabilidad de la soberanía, que enagenada, se convertía en servidumbre, y retenida en la masa, hacía imposible la existencia social. Así procede el monismo cuando se encuentra con tales problemas: corta el nudo.

La soberanía del todo social, por todo el esparcida, como la vida por los miembros, coincidiría con el dogma de la soberanía popular, tal como lo entendió y elaboró Rousseau, si el doctrinarismo no se hubiera ingerido también en esta política monista, mediante la concepción orgánica de la sociedad, deducida de las filosofías postfichtianas, y á la cual se ha hecho ya bastante y variada referencia. Aunque todos los miembros y partes de la sociedad, tienen en cuanto participan de la actividad y de la capacidad radical y fundamental del todo, su parte de soberanía, no tienen su parte igual, porque la sociedad civil se compone mediatamente de individuos, pero inmediatamente de órganos sociales de distinta entidad y jerarquía, los cuales desempeñan distintos oficios sociales y jurídicos, en razón y proporción del grado de su actividad y capacidad, no de otra manera que en el todo vivo éste es sujeto y principio de la actividad y de la vida, pero las varias funciones de ésta son, según su importancia y complicación, propias de los órganos correspondientes, que tienen para el ejercicio de ellas la capacidad necesaria.

No hay que discurrir mucho para ver como surge aquí la teoría de las fuerzas vivas, la soberanía, no como conjunto y suma de soberanías individuales (soberanía popular), sino como propiedad del todo, que la ejerce por los adecuados órganos (soberanía nacional), atributo de la entidad nación, pero de la cual no participan por igual todos los miembros por el sólo hecho de ser sujetos de alguna actividad nacional y capaces del ejercicio de ella. A esta soberanía la llama el nuevo doc-

trinarismo *soberanía del Estado*, suponiendo que el término es más exacto y propio por la distinción que entre nación y estado existe; pero siendo en realidad indiferentes y teniendo la misma significación convenida una soberanía que otra; porque, cuando, y en lo que se distingue el Estado de la nación, como la parte y el todo respectivamente, no afecta á la idea que con este término compuesto se ha querido expresar (1).

En cuanto á la representación, tiene *este nuevo* liberalismo una idea tan amplia y contradictoria como el doctrinarismo y con los mismos fines prácticos de *acomodar* los elementos antiguos y los nuevos, y encajar en el nuevo régimen instituciones tradicionales, incompatibles con él. Este interés es aún mayor en Alemania que en los países latinos, porque la revolución individualista y democrática no penetró tan hondo, no destruyó la constitución antigua ni en su cimiento, ni en parte de la fábrica, y se estiman, por su virtualidad, y como factores importantes y valiosos de vida, la realeza y otras instituciones, que no se compaginan con la soberanía del pueblo ni con el *mandato representativo* recibido de él.

Por lo cual, y de la misma manera que los otros doctrinarios, tampoco limitan éstos la representación política á su única lógica forma en el derecho nuevo, la representación reflexiva, libre y previa de delegación por mandato, bien que reducida, como hemos visto, y por lo que dijimos, á la mera

(1) La soberanía, como propiedad y atributo de la sociedad pública independiente, lo mismo se puede decir soberanía nacional que soberanía del Estado, pues éste, en su acepción más amplia, es la nación en el aspecto formal tantas veces explicado, de persona de íntegro y perfecto *estado jurídico*, en el orden temporal. En tal sentido, ambas locuciones son exactas y expresan una idea común, la de no ser dueña absoluta de sí, ni gobernarse por propio, directo, exclusivo impulso más que la sociedad civil, la independiente de cualquiera otra. Pero en la acepción errónea, convencional del doctrinarismo, puede que más equívoco sea el término de soberanía del Estado, porque pudiera entenderse en sentido ageno á la idea y á la intención de los que lo usan, en el de soberanía que corresponde al poder central: la retenida, al soberano, y á los otros órganos de aquél la que delega en ellos la persona física ó moral soberana.

elección del representante. Aquí lo mismo pueden serlo de la soberanía del Estado, de la soberanía nacional, diputados elegidos que senadores hereditarios ó vitalicios, tanto los reyes como los césares, los dictadores y aun los tiranos.

Porque la representación es la forma con que el Estado ejerce su actividad y soberanía, pero hay representación donde quiera que una persona ejerce su actividad por y para otro, y así como la actividad del Estado se ejerce mediante sus miembros, estos en cuanto actúan como tales, le representan, siendo representación el acto de la *persona* en cuanto es parte de ese todo físico y vivo que se llama el Estado y para él.

Es inexacto que todo obrar personal sea representativo de la comunidad de que se forma parte. Aun tomada la representación en el más amplio sentido, en el de acto para otra persona, (y en tal concepto es representativa toda autoridad), no puede decirse que el que actúa para el fin é interés directo y principalmente personales, bien que exclusivamente no lo sean, verifica un acto de representación. Es solo en la teoría monista de la sociedad considerada como ser, como unidad física, como individualidad de un todo físico y vivo, en la que se confunde la acción, con la representación, en que todo ejercicio de actividad es acto representativo. Como no hay más personalidad que la de ese todo, lo que él y cuanto él actúa por medio de sus miembros, por y para él lo hace; y de este socialismo monista proceden esas extrañas especies que asombran y alucinan á primera vista, y en la primera impresión, y de las cuales la fórmula sintética es que *la forma del Estado es y no puede menos de ser representativa*, porque solo de esa manera puede ejercitar su actividad.

Del mismo fondo de monista necesidad é indiferencia procede asignar la misma naturaleza á representaciones tan distintas no ya como la *reflexiva* y la *consciente*, sino como la necesaria, la voluntaria y la mixta, esto es, aquella en que solo es *libre* la designación del representante; la que se consiente y la que se rechaza; la legítima y la usurpada; la legal y

la de puro hecho. Por eso dicen estos *representativistas* que en todo tiempo y nación el gobierno ha sido representativo, diferenciándose el actual de los anteriores en las tendencias y progresos hacia la representación *consciente (reflexiva)* y *expresa*; y juzgan representativo al Estado por el hecho de representaciones tan diferentes como la del rey, la de una cámara vitalicia y hereditaria, la de los *mandatarios elegidos* por el pueblo, la masa y suma de individuos soberanos, ó por la colectividad de las *fuerzas vivas*, para legislar en nombre de tales mandantes (electores) en la cámara baja; bien que dentro del determinismo del sistema, la misma designación electiva no es un acto de libre albedrío, sino de consciente determinación. En suma, en este *gobierno representativo* se descubre sin esfuerzo el mismo cúmulo de agregados insistemáticos que en el otro, aunque en el de los Royer-Collard, Guizot, etcétera, fundado todavía en la antigua doctrina de la personalidad y de la libertad, hay sofismas más *ingeniosos* para conciliar los contrarios; mientras que aquí se sale del paso con el cómodo y previo dogma de la identidad de los opuestos, según el cual tanto monta y vale en teoría la representación del Emperador, como la del Reichstag, ó la del Bundesrath.

Así se explica que en la indiferencia de tales determinismos haya argumentos para todas las opiniones, gustos y tendencias, para lo conservador y lo radical, y aun para lo *reaccionario* y *retrogrado*; no solo para las monarquías, sino para las dictaduras y cesarismos, para las aristocracias y hasta las oligarquías, y que á la representación *consciente, libre*, previamente acordada, del *mandato electivo* la hayan tratado, desde su punto de vista del monismo, algunos autores tan mal, por lo menos, como los tratadistas *teológicos, ultramontanos*, etc. (1).

(1) Léase en la nota final del apéndice del anterior libro «La moderna doctrina orgánica», las referencias á Comte, Schäfle y Lilienfeld. No menos contrario á la democracia *soberana* se muestra Gustavo Le Bon. Según éste, la soberanía popular es una ingerencia desastrosa de la *masa inorgánica*, que es *médula*, en funciones *cerebrales* que no le corresponden, convir-

Y estos son los que proceden con más lógica dentro de un sistema que no puede ser igualitarista por las razones expuestas al comienzo de este apéndice, es decir, porque en el orden de la realidad, entiéndase como se quiera, y mientras no se fantasee según el prejuicio del liberalismo idealista y abstracto, no todos los órganos sociales son idénticos, ni capaces los inferiores de las más altas funciones del organismo nacional.



La Democracia Cristiana y la Encíclica

«Graves de Communi»

En el Capítulo X del Libro II queda expuesta la idea, que nos parece exacta, de verdadera democracia, y la conexión y armonía que, por derecho divino, natural y positivo, existe entre democracia y cristianismo. La mayor parte de la doctrina del Libro IV se refiere más ó menos directamente á otra democracia, no sólo distinta, sino opuesta á aquélla de que fué Jesucristo fundador y maestro, y tan injusta como absurda, tan contraria á la razón como á la naturaleza y fin, á la existencia misma de la sociedad nacional.

tiéndose en impulsora la que solo obra mediante impulsión extraña, inconscientemente arrastrada por imágenes confusas y brutales apetitos, que la tienen en perpetua movilidad.

¿Con cuál de éstas democracias tiene relación de afinidad la que es objeto del presente apéndice, y porque reclama especial estudio, siendo así que, por el título, parece estar incluída en el Capítulo citado del Libro II, y de todos modos, sea ó no lo que expresa el nombre, ha de suponerse fundadamente que á estas alturas nada esencial acerca de ella se habrá omitido?

La razón es que el nombre no corresponde á la cosa, y democracia cristiana es desde hace algunos años la denominación respetable y atractiva que ha usurpado, y la investidura con que intenta cubrirse, autorizarse y recomendarse un grado extremo, un radical matiz de catolicismo liberal, que en la esfera económica, en la que principalmente se ocupa, trabaja y agita, ha incurrido en errores de notorio socialismo, y en los otros órdenes jurídicos profesa, cuando menos implícitamente, principios incompatibles con el sobrenaturalismo católico, confundiéndose además en materias de soberanía y gobierno con la moderna democracia revolucionaria.

La democracia cristiana tiene de común con el catolicismo liberal político la suposición gratuita y errónea de la intrínseca bondad de las nuevas ideas, de su concordancia y armonía con la Religión y de la posibilidad de mejorar con ellas la condición del pueblo, y mediante ellas atraerle al mismo tiempo á la Iglesia y á la Revolución, entre las cuales no cree que existe contradicción y antagonismo.

Es partidaria esta democracia de la igualdad y de la nivelación de las clases, del gobierno del pueblo por el pueblo y, por consiguiente, del sufragio universal; y cuando trata de aliviar la desgraciada suerte de los obreros y de elevar y consolidar su posición física, moral y socialmente, lejos de pedir su doctrina al cristianismo, de divina fecundidad inagotable en principios y procedimientos aplicables á tal propósito en todo tiempo y lugar, se inspira en el socialismo, y en general, en las aberraciones del naturalismo sociológico y jurídico. Es la democracia el propio socialis-

mo llamado cristiano-ó católico, que, condenado por la Iglesia, cambia de nombre, pero no de programa.

Así es que la democracia cristiana no se ha limitado á condenar los excesos y la tiranía del moderno capitalismo desalmado y anticristiano, sino que ha asestado rudos golpes al mismo capital, en vez de reconocer y buscar la armonía entre él y el trabajo. Pero, sobre todo, ha incurrido en crudo y neto naturalismo, suponiendo que la cuestión económica es independiente de todo principio sobrenatural y religioso, y que debe limitarse á procurar á la clase obrera los bienes materiales, con prescindencia de los del alma, encerrando el problema en el grosero círculo de lo temporal y terreno, sin consideración alguna á los bienes espirituales y al inmortal glorioso destino del hombre. Y ya en este camino, ó mejor dicho despeñadero, ha descartado, y para la solución del problema, el factor y elemento sobrenatural de la caridad, sosteniendo que es de pura justicia cuanto al trabajador se debe, y que el amor al prójimo por Dios nada tiene que ver ni que hacer en la cuestión social, llegando á aceptar el axioma socialista de que el auxilio envilece y la limosna degrada. La rechaza, pues, no solo en su forma clara y precisa de tal limosna en propio y estricto sentido, sino en todas las varias manifestaciones que inspira la delicadeza inagotable de la caridad, coincidiendo con el socialismo en considerar las instituciones patronales como anacrónica institución del pasado, en que el halago tienta á la debilidad y flaqueza del obrero para que se contente, á título de misericordia, con parte de lo que se le debe de justicia, y así quebranta y debilita la fiera independencia y altivez reivindicadoras de los derechos de la clase.

Y como es lógico y natural, esta democracia, enemiga nata de las iniciativas de otros órganos sociales y desconfiada de la potencia y eficacia de esa acción, que solo se compagina con la libertad verdadera y la robusta y enérgica autarquía nacional, encomienda al Estado, represen-

tante de tal democracia, no ya la legítima intervención tutelar que la necesidad y la deficiencia económica de la sociedad reclamen, sino, como función intrínseca del Poder civil, toda la odiosa ingerencia precisa para arreglar por sí mismo, ó por medio de sindicatos obligatorios, los contratos del trabajo, según el criterio y las inspiraciones de este socialismo que se engalana con el nombre de cristiano.

No hay para qué decir que estos demócratas, entre los cuales, por desgracia, figuran, como agitadores y aun jefes, clérigos inquietos, mal aconsejados y ligeros, propalan y propagan la inteligencia con otros elementos no cristianos en el sentido de un latitudinarismo como el americanista, condenado por el Sumo Pontífice reinante en la Encíclica *Testem benevolentiae*, y dejan que sus obreros fraternicen con los socialistas y tomen parte en sus congresos, dicen que con la esperanza de conquistarlos, pero con el resultado inevitable y efectivo de dejarse seducir, suggestionar y arrastrar por los errores de la democracia liberal y por el socialismo, que es su lógica é indefectible consecuencia. El actual ministro francés Millerand representante del socialismo en el Gabinete *oportunist* sectario y anticatólico Waldeck Rousseau, y dicen que alma del Ministerio é inspirador de sus más odiosas medidas contra la Iglesia, es objeto de la simpatía y hasta admiración y aplauso de estos tan extraños cristianos.

Atenta la Santa Sede al desarrollo y á los progresos de esta doctrina, y procediendo respecto de ella con la prudencia y circunspección habituales en medio de las vivas y acres polémicas que la democracia cristiana ha motivado y suscitado, creyó al fin llegado el caso de poner las cosas en su punto, y así lo ha hecho el Soberano Pontífice León XIII, en 18 de Enero de 1901, por medio de la Encíclica *«Graves de communi»* que Su Santidad declara continuación y complemento de la *Apostolici muneris* (28 de Diciembre de 1878) y la *Rerum novarum* (15 de Mayo de 1891), de cu-

vos benéficos efectos, reconocidos por personas de buena fe, aun no católicas, se regocija el Padre Santo, atribuyéndolas el nuevo impulso y vigor de las obras de acción social en beneficio de la desgraciada clase obrera, (secretariados del pueblo, cajas rurales de crédito, mutualidades de asistencia y de socorro y varias clases de benéficas asociaciones.)

Ocupándose el Pontífice en las varias denominaciones de esta benéfica acción, distingue el nombre *democracia social* del término *democracia cristiana*, reprobando las doctrinas de la primera, encerrada en la consecución y goce de los bienes corporales y terrenos, para cuya distribución y disfrute, según los errores del comunismo, quieren tales demócratas que al pueblo se atribuya la soberanía y se nivelen las clases, borrada toda diferencia entre los órdenes sociales. En cuanto á la democracia cristiana, dice, por el contrario, que, por razón de su nombre, debe fundarse en la fé divina y proveer á los intereses de los desvalidos, (*infirmorum sic prospiciens utilitatibus*) pero de modo que perfeccione las almas criadas para lo eterno. De manera que nada más santo para ella que la justicia, el respeto de la propiedad y la posesión, el mantenimiento de la distinción de las clases, y el que la forma é índole de la humana sociedad sean las que Dios quiso darlas.

Pero no se ha de dar á la democracia cristiana una torcida acepción política, expresando con el término la forma de gobierno popular, sino mantenerla en el sentido de acción social benéfica según el amor de Dios y del prójimo é independiente de las vicisitudes y contingencias de esta ó de la otra manera de régimen gubernamental, absteniéndose no menos de rebajar la democracia cristiana al estrecho exclusivismo de los intereses de las clases inferiores, con prescindencia de las otras y en perjuicio de la conservación y mejora del Estado y de la solidaridad y armonía establecida por la ley cristiana de la caridad entre todos los hombres *utpote unius ejusdemque familiæ, eodem benigni-*

nissimo editos Patre et redemptos Servatore eandemque in hereditatem vocatos æternam (1).

No quiere León XIII que se oculte bajo el término democracia cristiana la intención de rechazar la obediencia y desdeñar á los superiores legítimos, antes inculca una vez más el deber de conformarse á sus órdenes justas, ó sea conformes con la ley natural y la ley cristiana, y declara contrario á una vida que haga profesión de tal el no querer someterse ni obedecer á la autoridad en la Iglesia. Así explicada la democracia de que se trata, no encuentra peligro el Soberano Pontífice ni en la palabra, ni en la cosa, esperando que desaparezca toda discusión acerca del término que ya solo significa el celo que, según la ley natural y divina, procura que los que viven del trabajo manual se hallen en situación más tolerable y tengan con que atender poco á poco al porvenir, puedan privada y públicamente practicar la virtud y ejercitar la piedad y se penetren de que no son animales, sino hombres, no paganos, sino cristianos, para que así se dirijan fácil y ardientemente al bien único y necesario, al bien supremo para que hemos nacido (1).

(1) De singular satisfacción me ha servido ver confirmada por autoridad infalible en esta preciosa encíclica la doctrina contenida en los Capítulos X, XI y XII del Libro II de este tratado acerca de las clases y de la democracia cristiana en el más general y amplio sentido social en que es independiente de las formas de gobierno, no menos que respecto de la inteligencia y concierto de los varios órdenes que constituyen el pueblo. Estas mismas teorías fueron expuestas en el Discurso inaugural del Curso académico de 1891 á 92 en la Universidad de Salamanca, y que versó sobre el tema «El absolutismo y la democracia».

(1) Es de notar como León XIII recomienda la obediencia al poder legítimo en el doble sentido de legitimidad de origen y legitimidad en el ejercicio de la ordenación. Las palabras de la Encíclica son terminantes: «*Longe pariter absit, ut appellatione democratix christianæ propositum »subdatur omnis abjiciendæ obedienciæ eosque aversandi qui legitime præ-*»*sunt. Revereri eos qui pro suo quisque gradu in civitate præsumt, eisdem-*»*que juste jubentibus obtemperare lex æque naturalis et christiana præci-*

Insistiendo el Papa en los sanos principios de Economía política, declara que la cuestión económica está de tal manera relacionada con la Religión y las virtudes, que ni la mejora del salario ni la disminución de las horas de trabajo libran al obrero irreligioso y depravado de ver dissipados sus esfuerzos y recursos, resultando vanos todos los intentos de prosperidad. La cuestión económica es una cuestión religiosa y moral ante todo.

Por eso es tan laudable la caridad en que se inspiran los católicos para mejorar la condición del pueblo. La ley del mutuo amor es el perfeccionamiento de la ley de justicia y nos ordena no solamente dar á otro lo que le es debido, sino favorecernos mutuamente *no con palabras y de lengua, sino con acciones y de verdad según el nuevo mandato de amaros los unos á los otros como yo os he amado... y en eso conocerán que sois mis discípulos...* Y aunque ésta caridad debe mirar ante todo al bien de las almas, no debe descuidar lo que sirve y favorece á la vida, recordando el Pontífice pasajes en que el Salvador omite las obras misericordiosas espirituales para fijarse especialmente en las que se refieren al cuerpo, y las palabras divinas de compasión respecto de la muchedumbre. He aquí porqué ensalza la multitud de instituciones con que los cristianos se proponen aliviar las humanas miserias, instituciones que los hombres de sano juicio admiran, y de las cuales no deben excluirse las limosnas á las que se refieren estas palabras de Cristo: *quod superest date eleemosynam*. De ellas quieren los socialistas privar á la sociedad, como injuriosas á la dignidad natural del hombre, siendo así que, cuando se conforman al precepto y al espíritu evangélicos, nada hay en ellas que pueda excitar el orgullo de los que las dan ni avergonzar á los que las reciben; antes, al contrario, favorecen las relaciones sociales y los deberes recíprocos,

»pit». *Preese legitime* es presidir con título, cosa distinta de *juste jubere*, que es ordenar con justicia.

puesto que nadie hay tan rico que no necesite de otro, ni ninguno tan pobre que en algo no pueda á otro ser útil. La justicia y la caridad, que entre sí ligó Cristo con igual y suave derecho, unen maravillosamente á la sociedad humana y providencialmente conducen á cada singular miembro al propio y común bien.

Viene después la recomendación de las múltiples obras permanentes de la caritativa acción social, la del concurso que á esta obra han de prestar los ciudadanos, según su posibilidad y medios, debiendo entender que no son libres de socorrer ó de abandonar á los ínfimos, sino que es deber de solidaridad social poner cada ciudadano lo que pueda y aun suplir la parte de los imposibilitados de acudir con la suya. Así se pondrá el posible remedio á las miserias, crecientes cada día, y se contrarestará la destructora acción del socialismo. Recomienda el Papa, al efecto, la caridad en las discusiones, huyendo de puntos sutiles y secundarios, para concordar en los capitales y principales, y llevando siempre la discusión de lo opinable, por dudoso, en términos tales de mutuo respeto y consideración; que la discrepancia de los entendimientos no produzca la disensión de las voluntades; insiste en la necesidad de unir y concentrar la dirección de las fuerzas católicas; recuerda como ha excitado siempre á los sacerdotes á ir hacia el pueblo, pero con cautela y prudencia, según las circunstancias y á imitación de los grandes santos, nunca distraídos al exterior, ni olvidados de sí mismos; resume de nuevo los deberes que fraternalmente han de inculcarse en el alma popular: huir de la sedición y de los sediciosos; no violar jamás los derechos ajenos; respetar á los patronos y suministrar el trabajo que les es debido; no mirar con hastío la vida doméstica, tan fructífera en toda clase de bienes; cultivar, sobre todo, la religión, y buscar en ella el consuelo cierto en las asperezas de la vida; tomando por modelo á la familia de Nazareth, buscando su protección y proponiéndose los ejemplos de aquellos á quienes la modestia ha elevado á las

cumbres de la virtud y á la esperanza del premio eterno; inculca á los fieles el deber de sumisión á los Obispos, y á éstos instruye acerca de la conducta que han de seguir; y concluye confirmando las enseñanzas pontificias con la hermosa exhortación de San Pablo á los romanos acerca de la caridad, de la misericordia, y en general, del espíritu de valor y de abnegación, de paciencia, de perseverancia, de esperanza y de gozo, en que debe inspirarse la vida del cristiano.



CAPÍTULO X

DE LAS FORMAS DE GOBIERNO; CRITERIO DE DIVISIÓN Y DE LEGITIMIDAD.—COMPARACIÓN ENTRE LA MONARQUÍA Y LA POLIARQUÍA. LOS GOBIERNOS MIXTOS.

1. Con el término equívoco é inexacto, pero tradicionalmente admitido, *formas de gobierno*, viene estudiando la ciencia política las formas de la soberanía, como quiera que no en todo el gobierno, en todo el organismo del Estado en el sentido estricto de poder central, sino tan sólo en el órgano soberano, en el sujeto de la soberanía, se dan y pueden darse las distinciones y diferencias que se designan así: formas de gobierno (*formæ regiminis civilis*) formas del Estado (Staatsform, etc.)

En efecto; si se consulta á la experiencia histórica, se ve que la distinción más marcada en el organismo gubernamental protárquico consiste en el número de sujetos que poseen la soberanía y retienen sus fundamentales y más elevadas funciones; notándose sólo diferencias de accidente respecto de los otros funcionarios que, ora en el centro, bien en la periferia, desempeñan funciones soberanas delegadas (ministros, directores,

gobernadores de región ó provincia, alcaldes, corregidores). La razón, por su parte, no halla otro fundamento de distinción científica que el que procede de que una autoridad, sean cualesquiera su posición ó jerarquía, resida en persona física ó persona moral, es decir, en un individuo ó en una comunidad ó entidad colectiva, en la cual tengan todos los miembros componentes los mismos derechos gubernativos, legalmente al menos. Por lo cual, aplicando á la autoridad soberana tal criterio, se entenderá por *formas de la soberanía* (formas de gobierno, según la expresión corriente) *la distinta determinación actual de aquélla según que se haya concretado en persona física (monarquía), ó en persona moral (poliarquía, ó, en término más generalizado, pero del todo equívoco é inexacto, república).*

De lo cual se deduce que éstas son las dos únicas é irreducibles formas; porque, si bien en el orden concreto, real é histórico habrá formas tan diferentes cuantos sean los gobernantes, (uno, dos, tres, diez, ciento, mil, etc.), en el orden científico y abstracto no hay otra distinción que la de la unidad y pluralidad, correspondientes á las dos clases de personas ó sujetos de acción y de derecho, lo mismo en esta que en las demás relaciones jurídicas. Y, si por razón del número, no hay distinción científica de las formas, tampoco se halla por razón de lo que se ha denominado el *espíritu de las formas de gobierno*.

Es difícil determinar qué criterio y punto de vista expresa locución tan vaga y oscura, no pudiendo apenas darse de ella otro concepto que el complejo y negativo de aspecto de división independiente de el número

de soberanos, así de la unidad y pluralidad, como dentro de ésta, de la mayor ó menor cantidad de poliarcas. Pero desde luego se descubre que, no afectando esto que llaman el espíritu, al número de personas que ejercen la soberanía, tiene que ser algo extrínseco á la soberanía concretada, cosa esencial ó accidental á la constitución política, protárquica ó extraprotárquica, es decir, á los órganos centrales del Estado ó á los otros órganos jurídicos, pero en modo alguno á la forma de la soberanía por parte de lo que la determina en una ó en más de una persona física. El espíritu de las formas será propiedad y carácter del organismo político ó del organismo jurídico en general, que tenga más ó menos conexión con el órgano soberano, y que en la acción gubernativa de él influya poco ó mucho, pero que no pueda determinar que tal órgano sea de otra manera concreta que individual ó colectivo, que es lo único que diversifica la personificación de la soberanía como de cualquiera otra autoridad (paterna, concejil, universitaria, mercantil, etc.)

Y si se trata de determinar, en cuanto es posible, el sentido del término, se verá confirmada la doctrina. Dos ideas separadas ó juntas, bien ó mal discernidas, explícitas ó categóricas, ó implícitas y supuestas, se quiere expresar y de hecho se expresa con la frase *espíritu de las formas de gobierno*: el predominio político de una clase social y el gobierno soberano enderazado al provecho de ella. Generalmente en el orden real van unidos ambos hechos, aunque científicamente sean distintos y lógica y necesariamente no sean inseparables, siendo lo ordinario que, cuando una clase predomina

en el Estado, enderece su acción gubernativa, más que al procomún, al interés y según las miras y el criterio del beneficio exclusivo ó principal de aquel orden de mayor influencia y poder. Ahora bien, la soberanía no es patrimonio de ningún orden y clase social, sino de la superioridad absoluta presunta, cuyas dotes hemos enumerado en el Capítulo II de este libro, de tal suerte que si se dice, ó puede decirse, que la esencia de la soberanía es la mayor aristocracia que en lo humano y temporal pueda concebirse, no se toma la palabra en el sentido corriente de nobleza ú orden superior de los que constituyen el pueblo, sino en la acepción etimológica de la palabra (mando, gobierno de la persona mejor.) La soberanía ejercida por todo el cuerpo de la nobleza, por reducido que éste fuere, sería, en razón del demasiado número de gobernantes, una demócracia; la más imperfecta forma de gobierno, según con razón afirma Aristóteles, y por el probable intento de ejercer la autoridad en beneficio exclusivo ó principal de la clase, una oligarquía tiránica. Y si la soberanía no corresponde al cuerpo total de la nobleza, ni siquiera á la primera categoría de este orden, menos á las otras clases sociales, que carecen hasta de la superioridad de la aristocracia, y que, menos contenidas que ella por impulsos de virtud y de honor, convertirían el poder en instrumento de provecho injusto, especialmente la plebe, siendo entonces el gobierno una verdadera olocracia, esto es, una de las más odiosas formas de tiranía. En una palabra, *aristocracia*, *mesocracia* y *democracia*, que son los términos más corrientes en la división de formas de gobierno por *razón del espíritu*, significan si-

tuaciones históricas accidentales, contrarias á la esencia y fines de la autoridad soberana, constitución imperfecta y viciosa de la soberanía, por razón de una inadecuada concreción de ella, contraria á su naturaleza y fines, por haberse personificado en una colectividad á quien ni racional ni justamente corresponde el poder supremo.

Esto mismo decimos del otro término, *teocracia*, la cual, discurriendo dentro del orden natural, ó se refiere al sacerdocio católico, ó á sacerdocio de falsas religiones. En el primer caso el gobierno del clero no es conforme al derecho canónico, ni al derecho natural: al primero, porque, en virtud de la distinción de las dos sociedades y potestades, quiso Jesucristo encomendar al sacerdocio más alto y sublime ministerio que el gobierno de la sociedad civil; y así solo accidentalmente algún sacerdote ó sacerdotes, no todo el cuerpo sacerdotal, serán soberanos, y no por razón de sacerdocio, sino por la superioridad temporal que la soberanía supone, que no es incompatible con el carácter sacerdotal, ni con que los hechos concreten el poder supremo en un clérigo ó clérigos de cualquiera grado de las jerarquías, en los cuales hay que presumir además mayores garantías de buen gobierno. No es conforme tampoco al derecho natural, porque según éste no hay más razón para que la soberanía se concrete en clérigos que en leigos; y si se mira, no al derecho natural solamente, sino á su relación y armonía con el derecho eclesiástico, solo por accidente extrordinario, se determinará la autoridad civil en algún sacerdote ó en varios sacerdotes, pues, en general, la soberanía del sacerdocio está en colisión

con otro superior oficio y deber, el magisterio, la administración de sacramentos, el gobierno de la Iglesia. Además, el imperio de todo el clero sería, por el número de los imperantes, una poliarquía democrática, con las imperfecciones de que hemos hablado, poliarquía tan injustificada como todas aquellas en que son marcadamente desiguales la condición y superioridad de los poliarcas, y que, tratándose del clero, bien señalada está en los grados de la jerarquía de orden y de jurisdicción. De manera que la teocracia, en el sentido de la soberanía del sacerdocio católico, tendría que reducirse á una monarquía ó á una poliarquía aristocrática por razón de la condición y el escaso número de los imperantes, monarquía y poliarquía que no entran en el orden providencial y natural de los sucesos, por las razones dichas, exceptuando la soberanía del Papa sobre los Estados pontificios, que se funda en los mismos derechos de existencia, independendencia y libertad de la Iglesia, es decir, que es de título eclesiástico y no civil, en el amplio sentido de la palabra.

En cuanto á la teocracia de las falsas religiones, serán, según el número de sacerdotes gobernantes, monarquías ó poliarquías, y éstas ó aristocráticas ó democráticas por el número de gobernantes, debiendo aplicárseles la doctrina expuesta en el párrafo anterior y añadiendo que las torpes supercherías y supersticiones de tales sacerdocios favorecerían y fomentarían los abusos tiránicos de una clase, aún peor que las otras por razón de los vicios de esas falsas religiones y de los malos é inícuos intereses que ellas encubren y escudan.

2. De lo anteriormente escrito resulta que ningún gobierno debe ser patrimonio de clase alguna y que todos deben ser lo más aristocrático posibles, no por poliarquías formadas por la primera nobleza, sino porque la soberanía debe concretarse en la mayor y más absoluta superioridad personal que pueda darse en lo humano; tal es la esencia de la autoridad soberana y la más fundamental ley de su determinación. Por consiguiente ninguna soberanía, personificada en regulares condiciones de naturaleza y orden, puede decirse democrática en el sentido de gobierno ni de todo el pueblo ni de la plebe, sino cuando más como término convencional que expresa una superioridad menos destacada y neta, una superioridad menor y compartida entre muchos, y que siempre serán, sin embargo, los menos comparados con los súbditos, y superiores respecto de ellos, como dice muy bien el P. Taparelli.

Pero si ningún gobierno debe ser nobiliario ni mesocrático ni democrático ni teocrático en el sentido explicado, todo lo restante de la constitución debe ser á la vez todas estas cosas; pero entonces no hay fundamento de división científica de las formas de gobierno: a) en cuanto se trata de propiedades comunes que deben racionalmente tener, aunque de hecho no las tengan, todas las constituciones políticas; b) en cuanto esas propiedades, aunque lo son del organismo político y aun jurídico en general, son extrínsecas del órgano soberano é independientes de que sea éste un individuo ó una colectividad más ó menos amplia; bien que el espíritu con que toda soberanía gobierne deba ser teocrático, aristocrático, mesocrático y democrático á la

vez, según resulta de la doctrina expuesta en los capítulos I, II, X, XI, XII y XIII del libro II tomo I. La doctrina en ellos contenida en relación con la del presente capítulo servirá al lector de criterio para juzgar cuantas divisiones puedan presentársele y para discernir en ellas los términos, frecuentemente agregados y yuxtapuestos, de distinción por parte de lo que llaman el espíritu y por lo que no puede denominarse de otro modo que la *forma* de las formas de gobierno.

3. Cuando en este libro y en todo el curso anterior del tratado se viene haciendo ineludible y anticipada referencia, directa ó indirecta, á las formas de gobierno ha sido siempre en el supuesto implícito de la legitimidad de ambas, así de la monarquía como de la poliarquía, en el concepto no solo de que los hechos pueden determinar con justo título la soberanía en un individuo ó en una colectividad, sino de que así la persona física como la moral en que la soberanía se concrete, tienen aptitud é idoneidad para ordenar la sociedad civil á la variedad de los fines nacionales. Entiéndese, pues, por legitimidad de las formas de gobierno la *capacidad, así de la monarquía como de la poliarquía, para la soberana ordenación.*

Es la legitimidad la consecuencia necesaria de la superioridad bastante de la autoridad soberana para el cumplimiento de sus varios y complejos oficios ordenadores, así intrínsecos como tutelares. Por ser esta capacidad conforme con el orden (derecho) y con su fórmula y expresión (la ley) se dice legitimidad, no por razón ni de manera formales distintas que se aplica el

término á otras instituciones, y en varios aspectos ó fases de ellas.

De la capacidad de la monarquía no puede dudarse, porque nada hay que se oponga á la posibilidad y probabilidad de que en una persona física resplandezcan las dotes y virtudes propias de la soberanía, como muestra la experiencia con el ejemplo histórico de insignes reyes con todas las prendas y excelencias que requiere el supremo gobierno. En cuanto á la poliarquía, tambien es indudable que pueden reunirse variedad de sujetos con iguales, análogos ó equivalentes condiciones de superioridad sobre los demás ciudadanos, y que por razón de ella, no destacada ni legalmente determinada de un modo visible y considerable en uno de los poliarcas, tengan varios los mismos títulos personales y legales de soberanía.

La unidad por el acto para el fin, que es la que tienen todas las personas morales, sean cuales fueren su naturaleza y jerarquía, no falta tampoco á la colectividad soberana; y si se arguyera que, como toda sociedad, necesita la poliarquía un principio complementario de unidad, una autoridad superior á los iguales para ordenarlos concórdemente, se contesta que entre los iguales, á quienes se supone de igual capacidad para el fin, la autoridad reside en el conjunto social, por ejemplo, en una sociedad mercantil, ó en una academia en que entran todos los socios bajo el pié de la misma aptitud y cooperación para el bien común é idéntica participación en los bienes y derechos sociales. Pues en la poliarquía ó colectividad soberana, los miembros son superiores á los otros asociados, á los súbditos; pero

los poliarcas son entre sí igualmente superiores, y por razón de esta superioridad, cuando menos presunta, más facil es el acuerdo, la unidad de acto para el ejercicio de la soberanía, en proporción de la cultura y virtudes de los imperantes, sobre todo si son pocos, y, en razón inversa del número, más sosegada, ilustrada y recta la deliberación entre los poliarcas y menos expuesta al nocivo influjo de la ignorancia, de la iniquidad y las pasiones. Este es el defecto de las asambleas numerosas, ora compuesta de los soberanos mismos, ya de los supuestos mandatarios; porque, donde quiera que se suponga iguales á los individuos de una muchedumbre cuantiosa, esto será una simulación; y la realidad que la mayor, la máxima parte sea de inferiores, y solo por ficción absurda, no por presunción fundada, soberanos.

Se deduce de la legitimidad de las dos formas de gobierno, consideradas en abstracto y científicamente, la indiferencia é indeterminación en que se halla, hasta cierto punto, la soberanía de concretarse en una ó en otra forma, en monarquía ó en poliarquía. Y decimos hasta cierto punto, porque, aunque legítimas ambas, es *per se* superior la monarquía según á continuación veremos; y la indiferencia é indeterminación quiere decir: *a*) que de la noción de monarquía ó de poliarquía son independientes el hecho ó hechos que en el orden real pueden contingentemente determinar una ú otra forma soberana; *b*) que la soberanía puede cumplir sus fines y oficios ordenadores con la monarquía y con la poliarquía.

Y de esta legitimidad ó indiferencia en el orden

abstracto, se sigue como corolario evidente que en cada nación será forma legítima la forma histórica, esto es, la que han concretado los hechos de que en otra parte se trató, la que en esos hechos tiene sus títulos jurídicos de origen, y la que la tradición ha arraigado y consolidado.

Lo cual no quiere decir que sean ambas formas igualmente aptas para la ordenación soberana en la variedad de sus funciones; porque la monarquía es superior á la poliarquía: *a)* por su más perfecta unidad, pues la unidad que implica la persona física es unidad no solo por el acto, sino por el ser, y, por tanto, de acción más eficaz y enérgica, por no debilitada en su origen con la posibilidad del desacuerdo en la decisión soberana, mientras que en la poliarquía no hay más unidad que la de acto, que rara vez procederá de acuerdo unánime, sobre todo en las poliarquías más numerosas, ó sea, menos aristocráticas, con lo cual la resolución soberana, tomada por mayoría, sale menos autorizada y con menor eficacia moral ordenadora; *b)* en la monarquía se destaca más netamente la superioridad propia de la soberanía, porque se concreta en forma y manera más pura y absoluta la superioridad inherente á ella, la superioridad mayor, sin género alguno de igualdad y participación con otro, como sucede en las poliarquías, sobre todo cuanto más democráticas; pudiendo decirse que toda poliarquía implica una concreción, si bien suficiente, imperfecta de la soberanía; *c)* por razón de su absoluta superioridad hay en la monarquía mayor tendencia magnánima al procomún, no solo en razón de los móviles y garantías de educación, virtud y honor,

sino por menor necesidad de hacer el mal, puesto que el monarca tiene cuanto puede ansiar una ambición noble, y aun la que no lo sea; mientras que en la poliarquía la superioridad solo relativa de cada poliarca, máxime si son muchos, es un perpétuo estímulo aun de ambición racional, creyéndose cada uno, y, sobre todo, los de dotes efectivas, con preferente derecho ordenador en virtud de una superioridad real en pugna y contradicción con la igualdad puramente legal y constitucional de todos los poliarcas; y este es en las poliarquías ó repúblicas un germen y peligro perennes de división entre los poliarcas y tentación y ocasión de golpes de Estado oligárquicos ó dictatoriales, y riesgo inmediato de divisiones intestinas y guerras civiles; *d*) la monarquía es la forma más apartada del gobierno de clase y para la clase, porque el rey no pertenece á ninguna, y está sobre todas, hallándose por ello menos inclinado y expuesto á mandar tiránicamente en beneficio de clase alguna; y, en caso de preferir á una de ellas, mejor dispuesto, no solo por magnánima generosidad, sino por interés hacia la plebe más necesitada de la paternal providencia del monarca, imagen de la de Cristo para con los inferiores, más débiles y menesterosos, de los cuales tiene el rey menos que temer que de las otras clases, más potentes y de mayores aspiraciones y apetitos; *e*) por eso la monarquía es forma más popular y aun democrática; mientras que la república ofrece serios y frecuentes peligros y experimenta graves tentaciones de gobernar oclocrática ú oligárquicamente, esto es, en beneficio del más inferior orden social, ó en el de la nobleza, ó, lo que es peor, en interés

de una parte de ella y acaso solo de las familias de los imperantes; *f*) por todas estas excelencias la monarquía es más perfecta representación de la unidad, solidaridad y perpetuidad de la patria; y penetrado el pueblo honrado y cristiano, cuando la Revolución no le ha extraviado y seducido, de tales ventajas, mas estima y ama á la monarquía que á la república, realizándose así la más cumplida unión entre el soberano y el espíritu nacional, la armonía entre estos dos instrumentos de ordenación civil, á la vez factores de la prosperidad y el adelanto de la nación.

4. Otro corolario importante de las dos únicas formas de gobierno es la no existencia de los gobiernos llamados mixtos, término que, si en la realidad histórica puede expresar ciertas particularidades así de la monarquía como de la república, es incompatible en el terreno abstracto y científico con la imposibilidad de un tercer término intermedio entre persona física y persona moral soberana, aunque de hecho haya *constituciones y gobiernos de tan complicado y complejo organismo, que, por ciertos caracteres y fases, parezcan monarquías, y por otros lados y notas más se asemejen á repúblicas.*

El primer aspecto se lo da una magistratura unipersonal, una jefatura del Estado, como ahora se dice, con más atribuciones soberanas que las de la mera presidencia de la colectividad poliárquica, y la apariencia republicana una asamblea ó asambleas que contribuyen á la legislación, y aun á la función ejecutiva, con una cooperación que no se reduce á consultar y representar acerca de los negocios del Estado.

Pero, si bien se considera, la clasificación de tales dudosos ejemplares no es difícil fijándose en la persona á quien corresponde el ejercicio de las funciones soberanas retenidas y la resolución definitiva de una ley, de una medida ejecutiva ó de una providencia judicial en última instancia. ¿Es á esa magistratura, unipersonal? pues monarquía. ¿Es á esa magistratura con el consentimiento ó aquiescencia de otras ó de cualquiera cuerpo deliberante no solo con voz, sino con voto? pues poliarquía.

También se desprende de toda la teoría anterior que: a) que á estos gobiernos no les falta legitimidad, aunque tengan esas híbridas apariencias; b) éstas no constituyen una mayor perfección orgánica de la forma gubernamental, que es mejor, *per se*, cuanto más sencilla y bien determinada; c) bien que, *per accidens* y *secundum quid*, puedan alguna vez producir el bien de una moderación á las demasías del poder supremo, el gobierno mixto no es un sistema racional y natural de las más eficaces moderaciones á los excesos del imperante, antes bien, por su misma complicación orgánica, una dificultad y estorbo para el gobierno, y ocasión y origen de rozamientos y colisiones entre los factores y órganos gubernativos supremos.

El gobierno *monárquico representativo constitucional* es, como se verá, un gobierno mixto, que se diferencia de éste, no solo como la especie del género, sino en que es *per se* ilegítimo, por naturaleza y origen, esto es, por las razones expuestas en toda la doctrina acerca de la soberanía y del sujeto de ella, y además por la errónea teoría acerca del sistema de las modera-

ciones del poder supremo. Las pruebas de lo primero se han dado ya en capítulos anteriores; las de lo segundo vendrán más adelante y en varios capítulos.

También se irá viendo en lo sucesivo como debiendo ser toda constitución política, no toda forma de gobierno, moderada ó templada, por distintos respectos y por diferentes principios y elementos moderadores, no puede haber diferencia de formas gubernativas por lo que es genérico y común á todo organismo político, y por lo que es extrínseco y ageno al hecho de que la soberanía se haya concretado en persona física ó moral. Así pues, la monarquía moderada ó templada no es forma mixta, sino pura de gobierno y nada tiene que ver con la monarquía constitucional.



1. República, no sólo por su etimología, sino por uso técnico convencional, ha tenido un significado muy distinto de poliarquía, que es la denominación rigurosa de la forma de gobierno en que la autoridad civil reside en una colectividad más ó menos amplia. Aunque, por la composición etimológica, república puede llamarse á cualquiera sociedad completa mayor que la familia y aun la gens, esto es, desde el concejo á la nación inclusive, república en acepción antonomástica se usa como sinónima de Estado, cuando este nombre equivale al de

nación, ó sea, en el más amplio sentido de la palabra. En este sentido los más clásicos tratadistas católicos han empleado el término como sinónimo y en la acepción de sociedad civil ó nacional.

La más restricta significación de república, como equivalente á poliarquía, debe su origen, fundamento y generalización á la forma política del Estado romano que fué poliarquía durante la máxima parte de su vida é historia, y cuando dejó de serlo hasta en apariencia, fué para convertirse en monarquía de contextura dictatorial cesarea, no en monarquía verdadera consolidada sobre las naturales bases de ella y con la plenitud de sus condiciones y atributos. El Estado ó república que llenó casi todo el período de la historia clásico-pagana y legó, así en derecho privado como público, multitud de elementos á la posteridad, fué una poliarquía, nunca totalmente modificada; y de aquí que, identificadas históricamente poliarquía y república durante tantos siglos en la nación que fué en el trascurso de ellos el centro y el escenario del drama de la vida, se llame república á la forma igual ó semejante á la de aquel Estado.

La ingerencia de términos incompatibles con la división bimembre de las formas de gobierno es antiquísima y autorizada desde sus precedentes más remotos con el nombre y prestigio de Aristóteles, el cual dividió la forma gubernamental en monarquía, aristocracia y *politia* ó democracia (1), según que la potestad suprema (soberanía) reside en un hombre, ó en la colectividad de optimates ó próceres, esto es, en la no-

(1) Aristóteles la llamó *politia* que, por su etimología, equivale al gobierno de la Ciudad-Estado por sí misma, y no por persona moral ó física, por órgano unipersonal ó colectivo distinto de la persona nacional-municipal, que real é históricamente eran entonces la misma cosa.

Pero el gobierno de la ciudad por el ministerio de ella misma, y no por el órgano de clase ó sujeto algunos, equivale á imperio del pueblo, del conjunto orgánico de todos los órdenes constitutivos de él (democracia). Con este nombre se designaba ya en Atenas á la *politia*, y de aquí que, como sinónimo de ella, venga este término en la división aristotélica.

bleza, ó pertenece al pueblo, como unidad orgánica, el cual retiene perennemente el poder civil.

Pero bien se nota que tanto la aristocracia como la democracia son poliarquías; y que, cuando menos, la división aristotélica está mal hecha ó inconvenientemente abreviada, introduciendo en ella un término de subdivisión que convierte en trimembre una división bímembre, y todo ello por razón de diferencia meramente cuantitativa, ora para dividir, ora para subdividir, que es el razonable reparo que á la división aristotélica hacen Haller y Taparelli. Y no hay, en mi entender, fundamento á la réplica que en defensa de aquélla formula el P. Meyer diciendo que no es diferencia puramente cuantitativa la que existe entre el gobierno de una clase determinada del pueblo, (*particularis cætus* quarundam familiarum), y todo este (*totalitate* populi ad *moralem unitatem* vitaliter individuum organice collecti), porque, aparte de ser siempre la democracia, por amplia que se la suponga, una minoría gobernante en comparación de la mayoría de gobernados, según discretamente hacen observar los citados autores, la razón principal con que hay que redarguir al P. Meyer es que la soberanía no corresponde al pueblo, y que se convierten en conceptos científicos formas gubernativas viciosas, en que por accidentes históricos, se han apoderado del gobierno más poliarcas de los debidos. En efecto, la soberanía no solo no corresponde á las mujeres é hijos y demás miembros subordinados al pater familias, sino tampoco á éstos por el hecho de serlo; de tal modo que, aun siendo ciudadano, no por ello es capaz de gobierno, aunque en los pueblos clásicos degenerasen las monarquías en poliarquías aristocráticas, y luego éstas, también violentamente, en democracias alternadas con oligarquías y dictaduras. El respeto á la tradición clásica, singularmente á la romana, y su influjo en la lucubración y en el pensamiento de los mismos y más insignes tratadistas escolásticos les ha hecho aceptar un gobierno del pueblo por el pueblo que nunca ha existido de hecho, ni puede racionalmente existir, que no es, claro está, ni la pseudo democracia liberal

ni siquiera la soberanía de todos los varones *sui juris*, y que no hay posibilidad de definir porque no corresponde á realidad ni histórica ni científica (1).

Con esta división bimembre coincide algún otro autor, por ejemplo, Passy, bien que desde su punto de vista de residir en el pueblo la soberanía, y con el propósito de explicar de algún modo la yuxtaposición doctrinaria de la monarquía á los modernos sistemas, sin fundarla en la fórmula genuinamente ecléctica del pacto constitucional. Según Passy, cuando el pueblo retiene todas las funciones fundamental y esencialmente soberanas, la forma de gobierno es poliárquica (república); cuando delega alguna en una magistratura vitalicia y hereditaria, hay monarquía. Creo que á estas alturas ya no es preciso señalar ni juzgar tal criterio de división, ni llamar la atención del lector sobre la coincidencia puramente exterior y subalterna de la doctrina de Passy con la que hemos expuesto. La una se funda en el erróneo supuesto de la soberanía popular ó nacional, la otra en la irreducibilidad científica que, en cuanto á la persona del soberano, resulta de que sea éste uno ó más de uno.

En el supuesto de la exactitud de la doctrina explicada no

(1) No basta decir que la democracia es la suprema potestad del pueblo como viva unidad orgánica; porque surgen é inmediatamente se suscitan todas las cuestiones propuestas y tratadas anteriormente, y que se reducen á resolver cuál es el órgano de esa soberanía popular, que no pueden ejercer ni todos los individuos ni siquiera los ciudadanos y padres de familia. En el concepto aristolético escolástico lo que únicamente se ha salvado es la verdad de que la soberanía no es derecho de toda persona, sino de la ciudadanía, pero esto es bien poco, porque ni siquiera la moderna democracia otorga de hecho la soberanía (léase derecho electoral) á toda persona, y en la teoría doctrinaria del censo restringido ni aun siempre á los hombres *sui juris*. No hay, pues, tal potestad del pueblo, ó sea de los meros ciudadanos, que son tan inferiores é inaptos para el efecto de ejercerla, como pueden serlo las mujeres y los menores, aunque no sea por los mismos respectos de inferioridad; y el que en las repúblicas griegas y en Roma se apoderase de más ó menos funciones soberanas más gente de la debida no quiere decir que tal hecho sea conforme á derecho racional.

es de interés alguno, ni aun para mayor erudición de datos inútiles, la noticia de más ó menos divisiones en que hay defecto de lógica, ó error de fondo, ó ambas cosas á la vez, y en que se mezclan términos ó miembros desde los dos puntos de vista, de la unidad y pluralidad, y de eso que se llama el espíritu de las formas de gobierno. Cualquiera de esas divisiones que se presente, aun al alumno, las juzgará fácilmente, máxime si en ella se introduce como forma de gobierno alguna corrupción de ellas, ora por vicio común á todas, ora peculiar y característico de cada una. Tal sucede con la célebre división de Montesquieu en *monarquía, república y despotismo*, división cuyos móviles pueden verse en Haller (*Restauration de la science politique*).

No podemos sin embargo pasar por alto, aunque no nos parezca punto elemental, ni siquiera de necesaria ampliación, pero sí de oportunidad por razón de circunstancias, las teorías de Mohl y de Bluntschli, en los cuales la mezcla ecléctica de términos de división no ofrece en el fondo novedad alguna, bien que la fama, en mi sentir desproporcionada á sus méritos, de que disfrutaban estos tratadistas y la boga que han alcanzado sus doctrinas y libros, citados á menudo por los traductores y copistas españoles, obligan á un sucinto resumen de los tan ponderados *descubrimientos y novedades* atribuidos á estos doctores del derecho nuevo.

El eclecticismo de Mohl consiste en que, proponiéndose una clasificación científica, hecha, por lo tanto, desde el punto de vista abstracto, como se deduce de palabras terminantes suyas (*la diversidad de Estados puede solo presumirse á priori*), reduce su intento á una deficiente enumeración no de formas de gobierno, sino de formas del Estado por lo que se ha dado en llamar el *espíritu* de ellas, esto es, el fin y propósito gubernativos; y esta enumeración es puramente histórica, recogiendo de la realidad de la vida en el curso de los tiempos, la diversa política predominante en varios Estados como distinta y opuesta á la única forma racional de él, el Estado jurídico (*Rechtsstaat*). En la clasificación de Mohl no hay más

que un término científico, los demás son hechos y, además de accidentales, expresivos algunos de defectos y vicios en la ordenación. Y no hay que decir que en tal enumeración la distinción verdadera y efectiva, la de residir la soberanía en persona física ó moral, no se tiene en cuenta de un modo directo, (1)

(1) Mohl admitió primeramente solo cinco formas, políticas diremos en general, y no de gobierno: la *teocracia*, el *despotismo*, el *Estado patrimonial*, el *Estado patriarcal*, el *Estado jurídico*, notándose aquí desde luego a) que este último es el único término racional de la división, pero no expresa una particularidad, sino una nota común á las dos formas de gobierno y extensiva á toda la constitución política; es el ideal y la exigencia de toda la organización social y jurídica; b) todas las otras son corrupciones de los gobiernos injustos, pues la *teocracia* es el gobierno oligárquico y tiránico de los sacerdotes; el *despotismo*, el gobierno enderezado á satisfacer la concupiscencia del imperante; y el *Estado patrimonial* y el *patriarcal* es la ordenación tiránica en provecho privado de la familia ó de la gente.

Más tarde, Mohl en su *Enciclopedia* (*Encyklopädie der Staatswissenschaften*) amplió la enumeración con una forma más, y tratando de corregir el desorden anticronológico en que colocó esas formas evolutivas del Estado, puso los seis tipos históricos en esta serie sucesiva: el *Estado patriarcal*, las *teocracias*, el *Estado patrimonial*, el *Estado antiguo* (el clásico) el *Estado jurídico* y el *despotismo*, echándose fácilmente de ver que tampoco este orden es rigurosamente histórico; porque el Estado que llaman patrimonial, cuando menos en su forma más característica, el feudalismo medioeval, es posterior al Estado antiguo ó clásico, á continuación del cual salta Mohl al *Estado jurídico moderno*. El *despotismo* es el último término de tan absurda distribución; y bien se nota que éste no es término evolutivo final, sino vicio común á todos los gobiernos, no á las monarquías solo, y más frecuente cuanto más imperfectos sean aquéllos y más atrasadas ó corrompidas las sociedades. Mohl lo presenta como contraste del Estado de derecho, acaso sin sospechar que nada hay más despótico y tirano que los nuevos Estados y sus soberanías, sean cuales fueren las formas de la constitución. Cada una de las especies expresadas tiene por *bajo y dentro* otras subformas, caracterizadas por Mohl, no menos arbitrariamente y con igual desconocimiento de la historia, donde parece que quiso orientarse é inspirarse.

El *Estado jurídico* es para Mohl (claro está) el moderno Estado, el cual en la variedad de sus formas (Mohl admite seis) realiza el derecho, sustituyendo su imperio y el de la ley al imperio del capricho del imperante. De lo cual resulta que todas las anteriores formas son despóticas y que, por lo tanto, el *despotismo* como término especial sobraba en la enumeración. El

como quiera que las diferencias no proceden del órgano gubernamental soberano, sino de la total organización del Estado en el amplio sentido de la palabra. Tiene, pues, razón Burgess, (*Ciencia política y Derecho constitucional comparado*), cuando afirma la distinción entre formas de Gobierno y formas del Estado, correspondiente á la que existe entre Estado en el amplio sentido y Gobierno en el sentido antonomástico del Poder central, en cuanto ordena; bien que tampoco pueda decirse que las formas de gobierno se distinguan por razón de todo el organismo gubernamental, sino de la persona soberana solamente, según creo haber probado.

Bluntschli es aun más ecléctico que Mohl, porque en este predomina el sentido histórico y el criterio de distinción de las formas por propiedades y caracteres extrínsecos al órgano soberano de Gobierno; mientras que en aquel, casi por iguales partes, entran en la yuxtaposición los elementos abstractos y científicos y los históricos, y la división de las formas en razón de la personalidad física ó moral del soberano y en contemplación al consabido espíritu, por principios ajenos al supremo órgano de gobierno y aun al organismo gubernamental central. La parte especulativa ó filosófica de la división está representada; a) por los tres miembros de la división aristotélica, á los cuales añade otro, la *teocracia*, que también designa con el nombre de *ideocracia*; b) por otros tipos gubernamentales, resultantes no ya del vario sujeto en que se haya concretado la soberanía, sino del influjo ó participación de los gobernados en el gobierno, por razón de la libertad mayor ó menor de que gozan, ó por la carencia de ella (Estados no libres, semilibres,

fondo de este tipo común de gobierno es la democracia representativa, que ha sustituido al concepto teocrático (léase cristiano) el sentido racionalista y crítico acerca del mundo y de la vida; y el órgano y factor principal de tal gobierno la *inteligencia y moralidad* de la ilustrada clase media (johl) que es la más apta para la recta concepción sociológica, jurídica y política. Excusamos repetir lo expuesto acerca de todas estas cosas, para concluir que el *Estado jurídico* se reduce á la *oligárquica* mesocracia, tiránica explotadora de los pueblos *emancipados*.

libres, y éstos, con participación inmediata—las repúblicas clásicas—ó mediata en el gobierno—la moderna monarquía representativa). Después Bluntschli exhibe las varias manifestaciones ó especies históricas de las cuatro formas fundamentales de gobierno, de modo que parecen estos hechos otros tantos principios, y que en esos modos históricos se agota la virtualidad específica de las maneras irreducibles de concretarse el poder soberano (1). Pero Bluntschli, aunque no con el mismo término que Mohl, ni con la misma amplitud de especies, admite un *Estado de derecho*, del cual es expresión la moderna *monarquía constitucional*, y de esto resulta que todas las otras formas, así las aristotélicas, como las añadidas, no son tipos científicos, sino viciosos accidentes históricos con los cuales nada tiene que ver la parte racional ó filosófica de la política, sino es por vía de ejemplo de conformidad ó disconformidad con la institución. Y si no considera á la *monarquía constitucional* como la definitiva forma jurídica del Estado, sino de relativa perfección comparada con las anteriores, entonces adopta un criterio positivista, aunque implícito todavía y ecléctico, y toda la clasificación queda reducida á una observación y recuento histórico de las varias formas gubernamentales de las distintas naciones y épocas.

Esta tendencia positiva ya se nota en Mohl, cuando afirma que, siendo el fin del Estado promover la vida del pueblo, á

(1) Bluntschli divide las democracias en antiguas y modernas, ó sea, inmediatas y mediatas, suponiendo inexactamente que las primeras buscaron la libertad de todos por la soberanía igual de todos. La aristocracia tiene dos manifestaciones históricas: la *helénica*, cuyo tipo es la de Esparta, y la *romana*; rígida, inflexible y cerrada la primera, resistente, pero al fin, más reducible y transaccionista la segunda, á la cual considera el autor como el modelo de aristocracia popular!! La monarquía, á su vez, ha presentado en la historia las formas siguientes: *a*) reino helénico y germánico, ó sea, *patriarquía* (reino de linaje, *geschlechts königsthum*) *b*) antiguo reino romano; *c*) imperio romano; *d*) reino de los francos; *e*) monarquía feudal; *f*) monarquía absoluta; *g*) monarquía constitucional. (Bluntschli, *Allg Staatsrecht* (Derecho político general I, 315 y sig.)

la variedad de este fin ha de acomodarse la disposición del Estado; pero cambiando la vida del pueblo, según las etapas de su perfeccionamiento, á cada uno de estos grados de desarrollo ha de adaptarse la forma y disposición de aquél. Después el positivismo, aplicando su criterio y doctrina á este punto, de igual manera que á los demás, descarta de él toda clasificación y división apriorística de las formas, que es incompatible con el eterno cambio de los fenómenos y con el naufragio de las ideas de esencia y de substancia, que no pueden mantenerse en la doctrina positivista (Véanse los Capítulos III y IV de mi *Ensayo de Metodología jurídica*).

Ya no será necesario añadir que, con arreglo al criterio contrario á toda distinción de formas por cualquiera concepto ageno á la personalidad del soberano, ó sea por algo orgánico, extrínseco al órgano mismo de la soberanía (por razón del *espíritu* que ya notó Schleiermacher en la división aristotélica), ni las monarquías ni las repúblicas pueden subdividirse en unitarias y federales, aunque haya habido y haya estados monárquicos y poliárquicos de una y otra clase. Además, ya se ha dicho que la descentralización es exigencia jurídica y nota común de toda constitución social, y la relación que entre descentralización y federación existe.

2. Ya no habrá necesidad ni de insistir en las varias acepciones de esos términos ingeridos en la división y clasificación de las formas, por parte de lo que se llama su espíritu, ni en el concepto de que teocracia, democracia, mesocracia y aristocracia son elementos esenciales de todas las constituciones, las cuales solo se distinguen científicamente por razón de la forma de la soberanía. Cuando se dice que ésta debe ser esencialmente aristocrática, se expresa la necesidad y racional exigencia de que el poder civil, según su naturaleza y fines, se concrete en la mayor y más compleja superioridad presunta que sea posible; por el contrario, cuando se dice que una forma es democrática, se manifiesta ó el vicio esencial y el absurdo de la soberanía del pueblo, ó, en la realidad,

la imperfección de una poliarquía compuesta de más personas de las que consiente una superioridad igual y efectiva en los poliarcas, y por consiguiente, el peligro de que, no mandando soberanos verdaderos, la soberanía se ejerza torpe é inícuamente. Y esto, antes del derecho nuevo, sucedió siempre que desgraciados accidentes históricos dieron ingerencia en el gobierno á muchas personas sin derecho á él; y ahora acontece por razón de las erróneas modernas teorías acerca del sujeto de la soberanía, las cuales han introducido y generalizado la poliarquía de una ó dos cámaras con ó sin monarcas. Por esto los modernos sistemas, por causa de los centenares de soberanos, son unas *democracias*, y si son al mismo tiempo mesocracias y oligarquías, es por otros respectos extrínsecos á la persona moral soberana, los cuales hacen que de todo menos de democráticas tengan de hecho, no las formas de la soberanía, sino el espíritu, conjunto y fin de las actuales constituciones.

Y nada tienen tampoco de teocráticas, no por los motivos y en el sentido expuestos en el número anterior de soberanía del verdadero ó del falso sacerdocio, sino porque, en cuanto naturalistas, esto es, liberales, son contrarias á la más alta significación del término, á la que concuerda con su sentido material y su composición etimológica, imperio de Dios sobre toda la creación, en el orden moral como en el físico, y en la política y en el soberano gobierno, como en las demás esferas de la vida y del derecho. La negación naturalista de un Dios personal y creador excluye su intervención en el mundo, ora por modo ordinario natural y continuo de providencia, ora extraordinario, sobrenatural é intermitente de milagro, y por supuesto mediante la acción docente y justificadora que en individuos y sociedades, en súbditos y soberanos ejerce, por divina disposición é institución, la Iglesia Católica.

Esta acepción más radical y fundamental tiene la *teocracia* y, en tal sentido, la concepción política y jurídica inspirada en el catolicismo no puede menos de ser teocrática.

ca, como absolutamente antiteocrática la concepción liberal (1).

3. Dada la doctrina liberal acerca del sujeto de la soberanía, que es siempre la asamblea ó asambleas representantes de una comunidad soberana, la de los soberanos por derecho nativo, ó por derecho adventicio de capacidad de esta ó de la otra clase, y por uno ó varios conceptos, se sigue que no hay más forma racional y, por lo tanto, legítima de gobierno que la poliarquía ó república; porque la monarquía es en los modernos sistemas una yuxtaposición doctrinaria, y, aun en el supuesto de que efectivamente comparta en alguna manera y proporción la función ó funciones soberanas con las cortes, y aun tenga, de derecho y de hecho, la mayor parte de la soberanía, siempre resultará que rey y cortes son persona moral, no física, (poliarquía), y que esta será todo lo abigarrada, anormal y complicada que se quiera (gobierno mixto), pero de poliarquía ó república no pasará. De donde se sigue también que dentro de los actuales sistemas de so-

(1) En las *refutaciones* y execraciones de los autores liberales contra la teocracia se destaca de entre las irreflexivas ó calculadas confusiones y oscuridades, este sentido capital de *teocracia*, atacando en ella ante todo y sobre todo el gobierno personal de Dios en el mundo: liberalismo y anti-teocracia son términos *simpliciter* convertibles. Pero esto no quiere decir que hayan los tratadistas naturalistas discernido bien las acepciones del concepto, antes, al contrario, hacen una mezcla de ellas, refiriéndose unas veces al imperio de Dios, otras á la soberanía, y otras al mero influjo del sacerdocio, ó como tal, y en virtud de sus funciones, ó como clase social solamente, según puede verse en las extravagantes y embarulladas disquisiciones de Mohl y, sobre todo, de Bluntschli, á las cuales ni sucintamente me refiero por su escasa importancia y valor científicos, aun desde su punto de vista.

Y sin embargo, la distinción de las tres acepciones es utilísima no solo para la ciencia política, sino para juzgar debidamente varias situaciones y manifestaciones teocráticas en la historia, no ya en los imperios orientales, sino en las épocas y períodos que más importan, por ejemplo, en España la teocracia del reino gótico y la teocracia medioeval, posterior á la invasión sarracena.

beranía, ora radical, ora doctrinario de más ó menos grados, no hay otra forma legítima de gobierno que la república.

El otro extremo ó dirección contraria, bien que por muy distintos fundamentos y motivos, es el que de la mayor perfección, por mayor idoneidad para el gobierno, que encierra la monarquía, y de la más generalidad y extensión de esta forma en todo el trascurso de la vida y de la historia precontemporáneas, concluye la legitimidad del régimen monárquico solamente, no también de la república.

Según esta teoría, la forma monárquica, en cuanto deriva de la naturaleza misma de la autoridad y de la sociedad, es como ambas de derecho divino natural, no de derecho natural mediato ó de gentes; y no es indiferente en abstracto que el poder civil se concrete *in unum vel in plures*. La autoridad civil y la monarquía son pues una misma cosa, en cuanto según derecho divino natural aquélla no tiene más que una forma posible (1).

(1) No conozco más escritor católico insigne que Bonald que haya sustentado tal teoría clara y netamente, porque á Bossuet se le ha atribuido sin fundamento. Al Vizconde de Bonald, fidelísimo legitimista, le sucedió algo parecido á lo que le aconteció á Haller, decidido antirrevolucionario: los excesos de la república liberal francesa y el amor á los príncipes proscriptos, cuya posterior política católico liberal desde el trono restaurado tales amarguras y desengaños habían de producir en Bonald, inspiraron al noble desterrado aversión profunda á toda forma de gobierno que no fuese la monárquica. Bajo tal impresión y sentimiento escribió en Suiza á fines del siglo XVIII su hermoso libro *Theorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile*, que apareció en Constanza en 1796 y tuvo el honor de ser secuestrado por el Directorio. En ella, y con la expresión original y aun extraña en que presenta y resuelve el autor las cuestiones por fases, modos y aun términos no muy usados y corrientes, aunque siempre de una manera genial y brillante, considera la monarquía como la única forma propia de las sociedades civiles constituidas, aquellas en que forma de gobierno y constitución se confunden y son manifestación de las leyes necesarias, expresivas de la naturaleza de las cosas y de la voluntad, del poder y de la fuerza general de la sociedad. Por el contrario, á la república la considera al mismo nivel que el despotismo, propias de sociedades sin constitución, y solo con forma exterior de gobierno, no fundados

La verdad es que si no puede afirmarse con Bonald que la república es forma de sociedades no constituidas, especie que de continuo desmienten la experiencia y la razón, las cuales muestran á la república como capaz de gobierno, y con un organismo constitucional substancialmente idéntico al de la monarquía, y en la historia, repúblicas de mejor constitución general que algunas monarquías, lo cierto es que la poliarquía expresa y arguye una imperfección constitucional en el órgano soberano, y es en tal concepto menos conforme á las leyes necesarias, término equívoco en Bonald, esto es, á la naturaleza de la sociedad civil y á la voluntad general que debe consentir lo que sea más perfecto, aunque de hecho no siempre lo consienta, y considerar á la monarquía como la mejor depositaria del poder y de la fuerza sociales.

Es la monarquía imagen y semejanza del divino imperio y gobierno de Dios, soberano señor del cielo y la tierra; el régimen de la Iglesia tambien es monárquico, con lo cual Jesucristo manifestó su preferencia por esta forma al confiar la institución divina á la soberana ordenación del Primado pontificio, y no al cuerpo colegiado de los Apóstoles y de sus sucesores (2); y finalmente monárquica por derecho divino natural es la autoridad en la familia, la más natural, por decirlo así, de las sociedades, la que es base, elemento esencial y origen y factor principales de la grandeza moral y material de las naciones.

Y no vale argüir en favor de la república que la variedad de soberanos ofrece mayores garantías de ilustración en el acuerdo, (ley, medida gubernativa ó judicial), por aquello de que más ven y saben varios que uno, y no por razón del nú-

una y otro en las relaciones necesarias, sino en las libres, producto de un capricho injusto y de la voluntad particular, no social, de varios la república, de uno el despotismo. (Cap. III, Tomo I, París 1843.)

(2) En cambio todas las heregías que han procurado combatir menoscabar y destruir la autoridad del Papa, todas, *ipso facto* y para este mal intento, han sustentado implícita ó explícitamente la poliarquía eclesiástica.

mero, sino de la instrucción y cultura que hay que presumir en los poliarcas; porque, sin negar el hecho, se contesta que por medio del consejo y de las varias formas de cooperación social á la ordenación soberana, que en sociedades regularmente adelantadas tienen ya órganos y organismos estables adecuados y cada vez más perfectos, resulta la resolución monárquica tan orientada é ilustrada teórica y prácticamente como la de los poliarcas, que también necesitan consejo y cooperación representativa en el gobierno soberano y para el (I).

Puede tambien alegarse en defensa de la república la propiedad de tener, por su misma naturaleza, en el propio organismo soberano elementos moderadores de que carece la monarquía, y, en tal sentido, estar la tiranía, el despotismo ó cualquiera injusticia más prevenidos y contenidos, y ser menos probables, puesto que necesitan la aquiescencia de la mayoría; y aun lograda ésta, la fuerza moral de la minoría es una traba y un dique más contra los excesos del Poder. Pero si bien se considera, más fácil es concertar los intereses de los poliarcas en daño del procomún que faltar á sus deberes el monarca, en quien las moderaciones de la virtud y del honor son más poderosas y eficaces, así como también la responsabilidad del supremo gobierno que, en el mismo grado, no comparte el rey con nadie, y que es tambien un principio moderador de importancia. Mas, aun concediendo que en algún caso puede el número de los gobernantes ser obstáculo á la intentada injusticia, es accidental y extraordinaria tal ventaja y procedente *secundum quid* de la misma imperfección natural de la poliarquía, en la cual las moderaciones subjetivas ó internas (virtud, honor, responsabilidad mo-

(I) En cambio la superioridad moral del monarca y la absoluta impunitabilidad legal de su resolución ofrecen mayores garantías de que, no solo por virtud, sino por interés, se conforme más facilmente con el dictamen consultivo y con las varias manifestaciones representativas de la opinión y deseo nacionales, descargándose así de una buena parte de su tremenda responsabilidad moral y social.

ral, y ante la opinión presente y futura) deben estar racionalmente en proporción de la absoluta aristocracia de la monarquía, y bien compensan éstas la moderación circunstancial y anómala que alguna vez ofrezcan las repúblicas, por razón del número de poliarcas, es decir, de la misma deficiencia de la forma.

Finalmente, si bien es cierto que cada poliarca puede responder civil y criminalmente de sus actos privados y públicos, como súbdito y como soberano, ante la colectividad poliárquica, lo cual no sucede, por su misma naturaleza, con la monarquía, también es innegable que, de hecho, esto acontecerá rara vez respecto de las resoluciones soberanas, sobre todo cuando la poliarquía es muy numerosa, según atestigua la experiencia en los modernos gobiernos parlamentarios. En cambio, la responsabilidad moral y social ante los coetáneos y venideros ya hemos dicho que es mayor, é implica más sólida garantía en la forma monárquica (1).

(1) Este punto se relaciona con la doctrina jurídica general acerca de la responsabilidad de las personas morales ó colectivas, que tanta importancia tiene en Derecho natural y tan interesantes aplicaciones en las varias ramas, por ejemplo, aquí y en derecho penal. Siendo materia común á todas, no es posible tratarla ahora en toda su comprensión, debiendo limitarnos por lo que respecta más inmediatamente al actual propósito, á las siguientes observaciones: 1.^a que así la responsabilidad legal y efectiva, como la puramente moral ante los coetáneos y venideros están en razón inversa del número de personas que componen la colectividad, no porque no les sean aplicables los principios generales de acción directa é igual, ó de cooperación desigual é indirecta, sino *a*) porque es más difícil discernirlas en sí mismas; *b*) y en las circunstancias que modifican la responsabilidad, por ejemplo, menor conocimiento y fuerza de voluntad, sugestión, coacción moral, influjo, etc. 2.^a la responsabilidad legal del conjunto es tan imposible en las poliarquías como la del individuo en las monarquías. 3.^a y las efectivas puniciones, que indirectamente pueden resultar de la legítima resistencia al tirano y de las consecuencias contingentes de ella, son más difíciles en las poliarquías, cuanto más democráticas. Mejor se contrasta, derriba y pena á un tirano que á las tiranías, anónimas de hecho, tras el número considerable de miembros de una asamblea, por ejemplo, la Convención francesa.

La única ventaja incuestionable de la república sobre la monarquía es que aquélla no es susceptible de incapacidad, por razón de edad, dolencia moral ó física, ú otras circunstancias, en siendo la poliarquía compuesta de un cierto número de personas, porque si es un triunvirato, la incapacidad de un poliarca hace imposible el gobierno, sin posibilidad de sustitución y remedio por ministerio de la regencia.

Esta institución, ó sea, *el derecho de ejercer la soberanía, y el ejercicio de ella en representación del monarca incapaz*, aménora este inconveniente de la monarquía, cada vez menos probable, aun por minoridad, en virtud de la sucesión por primogenitura y del matrimonio de los reyes en edad oportuna. Si las minorías fueron funestas en época en que la monarquía no estaba consolidada y organizada, ni sus atribuciones esenciales consagradas por la sociedad y por la ley, y en que la fuerza y virilidad personal del monarca eran el principal escudo contra las ambiciones y demasías de otros elementos sociales, especialmente de la nobleza feudal, luego que la institución ha penetrado en la conciencia y en las costumbres tanto como en el sentimiento y el afecto públicos, y se la tiene y estima en más que á la misma persona del rey, no interrumpe una minoridad la marcha normal y ordenada del gobierno monárquico, como atestigua la misma experiencia en los tiempos modernos, aun tratándose de las monarquías constitucionales.

Entonces la regencia, institución supletoria y órgano complementario de la monarquía, no es una magistratura y función todavía no previstas ni constituidas por el derecho consuetudinario ó escrito, y, por consiguiente, un puesto y cargo ofrecido á toda ambición y expuesto á todo asalto, sino un órgano gubernativo bien definido y reglamentado, como parte no subalterna de la legislación fundamental del Estado, y con un orden legal de llamamiento que aleja el peligro de las codiciosas concurrencias y de los consiguientes trastornos y turbaciones (1).

(1) También se ha discutido acerca de los sistemas de regencia; pero

Se desprende de lo dicho que, lejos de ser la república un ideal y el término del progreso, éste consistirá más bien en la transición de la república á la monarquía, siempre que no se haga por medios violentos, sino por pacífica evolución,

no nos parece cuestionable siquiera que la regencia debe ser unipersonal como la institución monárquica á la cual sustituye, y que, para evitar inconvenientes y peligros, han de estar previstas en la ley las personas llamadas á desempeñar el cargo, y bien fijado el orden de los llamamientos, que conviene mucho que sea el mismo de las personas llamadas á la sucesión de la corona, no solo por las más capacitadas para el desempeño de la alta función, sino por el amoroso interés que debe presumirse en ellas respecto del incapacitado monarca. De lo cual se sigue que es preferible la regencia legítima á la testamentaria, aunque no haya en contra de ésta las mismas razones que contra la sucesión testamentaria á la corona. La regencia dispuesta en testamento ofreció mayores peligros cuando en los tiempos medios era menos robusta la institución monárquica, y los nobles turbulentos y mal contenidos por el poder central codiciaban la regencia para sus fines particulares, distintos de los del procomún y contrarios á él; y si entonces se definió el cargo en testamento fué, no solo porque no había ley acerca de la institución, sino porque en la monarquía patrimonial lo concerniente á la corona, como la corona misma, era asunto particular y doméstico exclusiva ó principalmente.

Por esto se confundieron también la regencia y la tutela, siendo tan distintas como sus respectivos fines, y, por consiguiente, derecho público una y privado la otra; y así en la Edad media una misma ó unas mismas personas fueron á la vez regentes y tutores, designándose ellos y el cargo con este nombre más que con el primero, aunque en otras ocasiones se encomendara á distintos sujetos la guarda del rey y la regencia del reino. Mas esta repartición de funciones no argüía que no se considerara idéntica la institución del cuidado del monarca y de la gobernación de la monarquía, así por derecho consuefudinario, como por derecho escrito, según puede verse en la ley de Partida (ley 3, tit. 15, Part. 2.^a) que establecía las tres clases de tutoría ó regencia iguales á la tutela de los particulares: testamentaria, en quien ó en quienes designara el rey en el testamento; legítima, ó por ministerio de la ley, y á falta de aquélla, en la madre, mientras permaneciere viuda; y dativa, ó provista por las cortes en una, tres ó cinco personas hábiles, naturales de la tierra y de buen linaje y sanas costumbres.

Esta tutela de forma poliárquica, (y podían serlo la testamentaria y la dativa,) no era una exigencia racional, sino de las circunstancias para que

á la que contribuya tanto ó más la sociedad que los poliarcas imperantes. Mas esta depuración de una soberanía menos perfecta, por menos destacada en la superioridad absoluta de una persona física, no es fácil y probable, y no deja de ser peligrosa. No es fácil, porque rara vez tendrán todos los poliarcas la virtud y abnegación de renunciar la soberanía, su esplendor y ventajas en favor de un superior efectivo y notorio, bien sea uno de ellos, bien otra persona distinta de la colectividad soberana, y menos en ese extraño á ella. Cuando la soberanía, en su determinación originaria, no ha logrado la forma más pura de expresión, la monarquía, con dificultad y en el orden natural de las cosas y en el curso pacífico de los sucesos, puede destacarse después fuera del gobierno una superioridad tan culminante que alcance legalmente el solio, y antes conquiste el espíritu público en un pueblo de tradición republicana, y que sea al propio tiempo tan poderosa que pueda vencer las resistencias gubernativas y sociales, reacias, cuando menos, á deshacerse de la poliarquía, identificada con la vida y la organización nacional.


Por esto, solo violentamente, en épocas de turbación, por los golpes de Estado y de las dictaduras que la preparan y allanan el camino, aparece la monarquía cesarea, con todos los inconvenientes y peligros que ella encierra, y los que supone la situación anómala y extraordinaria que la ha engendrado. En los gobiernos mixtos, que resulten tales, no por decadencia de la monarquía y pérdida de sus atributos, sino al contrario, por crecimiento y engrandecimiento de una magistratura republicana, por ejemplo, el statouder en Holanda, es el cambio menos brusco, más natural y factible y menos expuesto á convulsiones y contiendas.

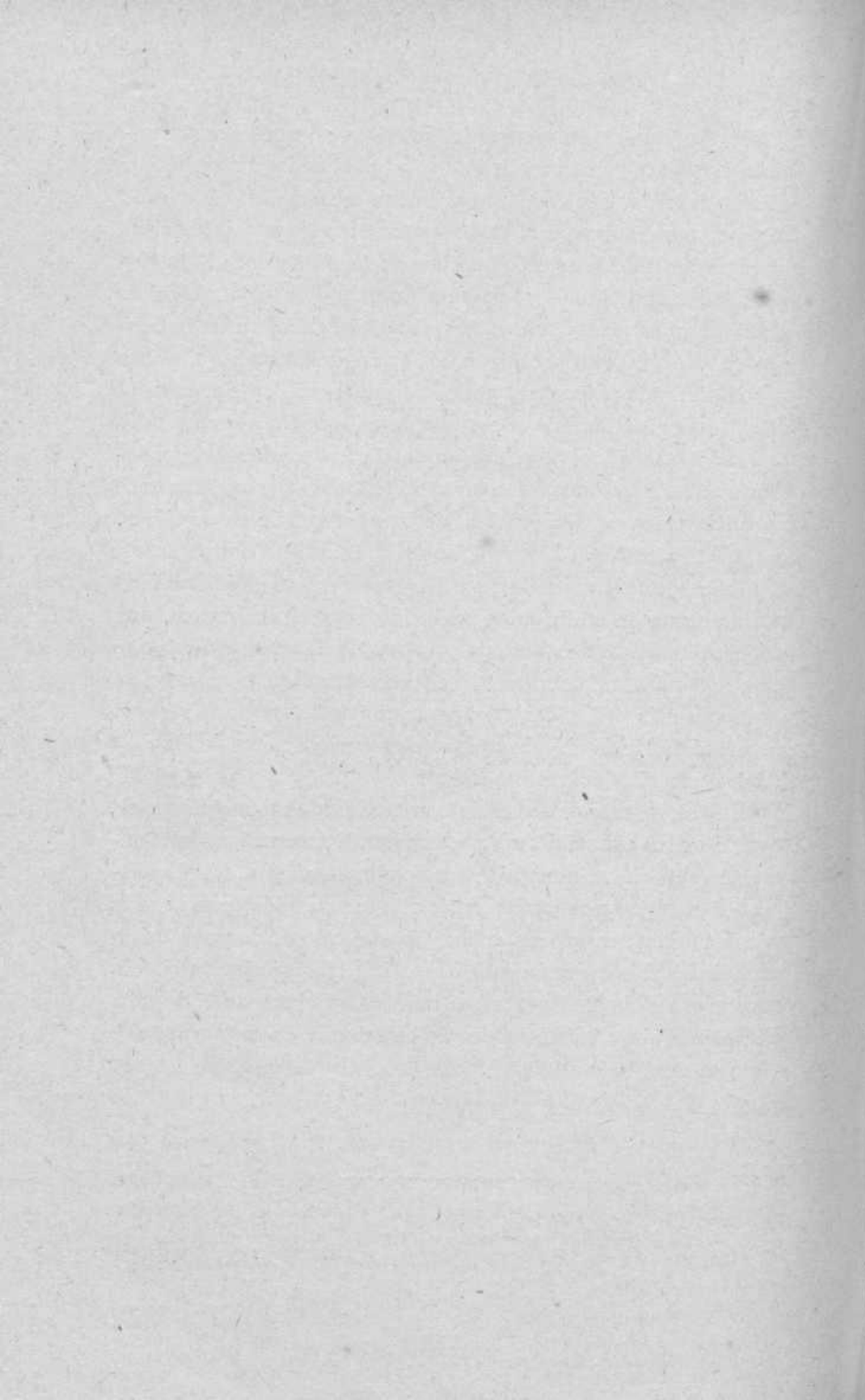
así el rey testador como las Cortes pudiesen contentar y conciliar ambiciones de poderosos, y porque, todavía no circunscrita la tutoría y regencia á persona de la familia real, no había las mismas razones para que residieran en uno más bien que en un consejo, cuyas luces y virtudes compensaran la unidad y aristocracia de la guardia unipersonal.

4. Aunque no solo costara trabajo, sino que fuera imposible clasificar como monárquico ó republicano un gobierno mixto determinado, de complicadas, equívocas y dudosas formas, esto no querría decir que no sean irreducibles científicamente las dos estudiadas formas de gobierno.

Esta complejidad y confusa mezcla, tan contraria á la sencillez con que la naturaleza, obra de Dios, actúa lo mismo en el orden moral que en el físico, con arreglo á pocas y bien definidas leyes, procede generalmente de circunstancias desfavorables, ó poco propicias, que han provocado transacciones ó cesiones por parte de los elementos verdaderamente soberanos; la mayor parte de las veces, son monarquías que se desprenden de la plenitud de su poder, y, compartiéndolo con otras personas y clases, degeneran en repúblicas, aunque puede suceder que sean también poliarquías orientadas y dirigidas hacia la forma monárquica, por depuración de la aristocracia propia de la soberanía, y que de poliarquías democráticas se convierten en aristocracias, cada vez más reducidas oligárquicamente hasta destacar una personalidad más culminante, que es realeza antes de llamárselo, y aun sin llegárselo á llamar.

En el primer caso están las modernas monarquías que, aparte de su esencial defecto, el liberalismo, se han introducido revolucionariamente, rompiendo, en virtud del idealismo de criterio y procedimiento, con la tradición, con la vida y con la contextura nacionales, imponiendo á los pueblos un organismo falso, artificioso y postizo, trasladando toda ó la mayor parte de la soberanía á quienes son incapaces de ella, é implantando un sistema de moderaciones cuyo absurdo y vicio se verá más adelante.





CAPÍTULO XI

DIVERSAS DENOMINACIONES Y CLASES DE MONARQUÍAS.—LA MONARQUÍA HEREDITARIA. CONDICIONES DE LAS LEYES DE SUCESIÓN.

1. La importancia de la monarquía, su mayor extensión y generalidad en el curso de la historia, la situación y actitud especiales de las monarquías modernas, las cuestiones que acerca de éstas y de las precontemporáneas se suscitan, exigen para esta forma capítulo propio, compuesto en su mayor parte de corolarios de anteriores doctrinas y de anticipaciones de otras que se expondrán en el lugar oportuno.

Monarquías *de derecho divino*, monarquías *puras*, *absolutas*, *patrimoniales*, *moderadas ó templadas*, *constitucionales*, *doctrinarias* y *democráticas*, son calificativos que así en el uso vulgar y corriente, como en el lenguaje técnico, encierran equívocos y errores que es preciso deshacer, aun para los fines y dentro de los límites de la enseñanza elemental.

Llama el liberalismo monarquías de derecho divino, en son de censura y anatema, á todas las antiguas monarquías cristianas y en general á cuantas no traten hoy de fundarse en los principios del derecho nuevo,

ó compaginarse y conciliarse con él; pero los mismos autores liberales no determinan bien, ó por error ó por cautela, á que propiedad y carácter del derecho nuevo se oponen las monarquías que llaman de derecho divino, siendo lo general que, por contrarias á todos los atributos de aquel, así las califiquen, sin fijarse especialmente en ninguno.

Y en efecto, las monarquías que se formaron y determinaron bien en la Edad media son del todo distintas de las modernas, pues, aunque representativas aquéllas y *representativas* éstas, nada tiene de común una representación con otra. Además, si bien las medioevales surgieron del fondo de la social y jurídica constitución interna de aquellos pueblos, y se ajustaban á una constitución externa consuetudinaria ó escrita, no son constitucionales en el sentido de constitucionalistas, ó sea acomodadas á un moderno sistema gubernamental erróneo y vicioso, llamado constitucionalismo. Pero estas monarquías de formación y tradición cristiana se dicen de *derecho divino* por la misma razón que lo son todas las instituciones, y, por consiguiente, también la autoridad soberana en los términos explicados anteriormente, de modo que monarquía de derecho divino equivale á monarquía no liberal, á monarquía que reconoce otro origen y fundamento á su título que los puramente humanos, y cuyo gobierno se atempera y quiere atemperarse á la voluntad y á la ley de Dios y estar con su Iglesia en las relaciones expuestas en los Capítulos I y II del Libro II. Así, pues, por liberales, no por constitucionales y representativas, no son de *derecho divino natural* las monarquías mo-

dernas; y los que á las precontemporaneas califican de derecho divino, por no ser ni pseudo representativas ni constitucionalistas, no las caracterizan ni señalan debidamente, bien por error, bien por calculada ocultación del defecto del actual y de la esencial virtud del precedente régimen monárquico.

El aditamento de *pura* es innecesario, si se toma el término según su valor gramatical y natural significación, puesto que monarquía pura es monarquía sin mezcla, es decir, una de las dos formas de gobierno, como lo es la república, en cuanto está bien caracterizada y no es un gobierno de los llamados mixtos. Así, pues, monarquía y poliarquía son formas puras, porque una y otra tienen su naturaleza bien definida y determinada, y ambas poseen los naturales atributos soberanos que ni monarca ni poliarcas comparten con nadie, reteniendo el rey ó la colectividad poliárquica las funciones esenciales y capitales de la soberanía.

Pero los autores del moderno derecho político dan al término una significación convencional y arbitraria, usándole para señalar el supuesto defecto de las monarquías que no comparten la soberanía con la representación parlamentaria del pueblo ó nación, ó de la comunidad de las fuerzas vivas. Significa entonces el término pura, monarquía no mixta, y no en el sentido de las antiguas formas de esta clase, sino de una mixtura especial, la de las modernas monarquías representativas y constitucionalistas, caracteres cuyas conexiones se conocerán plenamente al estudiar el constitucionalismo.

Tomando la palabra absoluto en el relativo sentido

en que puede aplicarse á lo creado, y aquí en la corriente acepción de libre, independiente, plenamente soberano, ambas formas de gobierno son en tal respecto absolutas, en cuanto *puras*, porque no comparten ni rey ni poliarcas su poder supremo con otras personas; pero es más absoluta la monarquía que la república en razón de la unidad física de aquélla, por virtud de la cual no depende el monarca de nadie en lo temporal, mientras que en la poliarquía dependen unos de otros los poliarcas, y cada uno de ellos del cuerpo ó colegio en que reside la soberanía. Absoluto, en este sentido, del mismo modo que puro, expresa la naturaleza de las dos formas de gobierno, y en la monarquía la mayor perfección que tiene en comparación con la república.

Más convencional y tradicionalmente se han venido llamando absolutas á las monarquías; *a*) en cuanto habitualmente, no por la esencia de la institución ni por la deficiencia de la sociedad, sino por innecesaria é inútil ingerencia, se ha entrometido indebidamente el monarca en funciones gubernativas no soberanas, que circunstancialmente no le incumben por vía y título de tutela; *b*) en cuanto la constitución social y política carece de los necesarios elementos moderadores exteriores y extrasoberanos, que estén definidos, determinados y regularmente organizados por derecho positivo, consuetudinario por lo menos, (y mejor ya escrito), que contenga dentro de sus límites racionales la acción soberana, y que no son otros que los que garantizan y consagran la autarquía propia de las demás personas componentes de la sociedad civil, según su categoría je-

rárquica y dentro de su esfera de acción y gobierno propios. De lo cual se deduce 1.º que el absolutismo es un vicio funcional, ú orgánico, ó ambas cosas á la vez, que es lo frecuente, contrario á la autarquía social y de gravedad mayor ó menor en la proporción en que la desconozca y vulnere, y, por lo tanto, un exceso socialista, aunque no esté sistemáticamente fundado en la teoría de ningún monismo: 2.º que este vicio no implica *per se* ninguna clase de injusticia en el ejercicio de la soberanía, aunque sí una situación peligrosa, por la tentación al abuso en una soberanía sin más restricciones y moderaciones que las puramente éticas, ó cuando más las orgánicas protárquicas, esto es, las que no pasan de la esfera del gobierno central: 3.º que, si bien solo á las monarquías se ha atribuido este vicio, es por haber sido la más generalizada forma de gobierno y, por consiguiente, más afectado por la dolencia absolutista el régimen monárquico, y porque en la monarquía no hay la limitación ó moderación que en el mismo órgano soberano supone la colectividad poliárquica, siendo tanto más grave y temible el absolutismo monárquico, cuanto mayor es el poder de la monarquía, es decir, estando el peligro y el daño en proporción de la superioridad de esta forma de gobierno. Puede haber y, en efecto, ha habido repúblicas tan absolutas, ó, mejor dicho, absolutistas, ó más que las monarquías; y de los presentes gobiernos no digamos nada: es en ellos el absolutismo, además de crónico, sistemático y *esencial*; es consecuencia de un socialismo tan extenso como profundo, y no poco inspirado en la concepción monista de la filosofía y del derecho actuales.

El derecho nuevo lo entiende de otro modo: llama monarquías absolutas ó absolutistas, que para él es lo mismo, á las que, no estando organizadas constitucionalmente, esto es, según el constitucionalismo, carecen de las solas limitaciones eficaces, según ellos, para impedir la ingerencia indebida del poder soberano en la esfera gubernativa de las otras personas, y para proteger la misma libertad y los demás derechos de los ciudadanos. Como veremos, para los constitucionalistas las monarquías son absolutas en cuanto es una la soberanía y no está repartida entre tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El absurdo y el vicio que esta teoría encierra, es asunto de otro capítulo.

Monarquías *patrimoniales* llaman ahora á todas las que no son constitucionales y representativas á la moderna, convirtiendo *simpliciter* este término y los de *derecho divino*, *puras y absolutas*; pero los respectos son muy distintos real y formalmente, por más que la monarquía absoluta precristiana, cuyo tipo fué el imperio cesarista romano, fuese una monarquía patrimonial en cierto modo, y, también á su manera, las monarquías medioevales.

Porque la patrimonialidad de la monarquía consistió en confundir el derecho público de soberanía con el derecho privado, particular y doméstico de dominio para beneficio del soberano, familia, deudos y paniaguados, es decir, la patrimonialidad es la misma tiranía, fundada en un error, aunque no seguida siempre, y menos en la Edad media, de las odiosas consecuencias naturales á la aberración de no considerar la autoridad civil para el procomún de la sociedad corres-

pondiente, sino á ésta como cosa del imperante y, por ende, al soberano como señor en el sentido de dueño, ó, cuando menos, usufructuario de aquélla, mientras la soberanía no consolidó su esencial atributo, la sucesión hereditaria. La patrimonialidad fué consecuencia del socialismo, vicio natural de las sociedades y constituciones paganas; de ella fueron en la práctica, aunque no en teoría y en principio, depurándose las monarquías medioevales, que se *despatrimonializaron* en proporción y á medida que, merced á la feudalidad, fué restringiendo de hecho el rey sus derechos dominicales de directo *dominus rerum* y dejando de ser señor absoluto de personas y cosas, como lo fué el cesar pagano.

De lo dicho se desprende que las monarquías de que hemos tratado en este primer punto no constituyen términos de subdivisión de la forma monárquica, unas porque implican caracteres comunes á toda forma de gobierno (*el derecho divino*, el ser *puras* y *absolutas* en el buen sentido de la palabra), otras porque significan defectos históricos accidentales como el absolutismo en la convenida acepción del vicio que hemos descrito, y que es común á la monarquía y á la república, ó la *patrimonialidad*, que no se acentuó y caracterizó bien, sino en la monarquía de clásico abolengo pagano, el cesarismo imperial de Roma, y que fué atenuándose y disipándose poco á poco en las monarquías cristianas de la Edad media.

2. Se dicen *monarquías moderadas ó templadas, ó limitadas*, aquellas que son contenidas dentro de la esfera gubernativa que las corresponde, y en los límites de un gobierno recto y prudente, por instituciones y elementos

orgánicos sociales, y no solo por la virtud del imperante y por las demás restricciones procedentes de otros órganos del Estado central ó protárquico. La monarquía templada es lo contrario de monarquía absolutista tanto en el respecto de la indebida ingerencia en otras esferas gubernativas como de la falta de los elementos moderadores de que se ha tratado en este capítulo.

Acerca de este concepto corriente hay que observar: 1.º que en más amplio sentido debieran llamarse gobiernos templados á cuantos ejerzan la soberanía con la virtud de la templanza, en la acepción más comprensiva del término, ó sea, de aquella general moderación que pone la facultad racional del hombre en todas sus operaciones y apetitos. Así considerada, la moderación es el cumplimiento de la ley sin intemperancias y exceso, y gobierno templado es tanto como gobierno virtuoso ó justo, en la acepción en que justicia y moralidad ú honestidad son una misma cosa: 2.º si la templanza, moderación y limitación se ha tomado en el estricto sentido de la definición anterior es porque ningún gobierno ha carecido de alguna limitación, aun escasa y rudimentaria, pero les ha faltado á los más el número y clase de las estrictamente necesarias que, fuera del organismo soberano y gubernamental, contengan al poder supremo y prevengan los abusos, ora meramente absolutistas, ora de intemperante (injusto) ejercicio de la soberanía. En la formación y consolidación de tales moderaciones consiste la diferencia entre las constituciones paganas y las cristianas, y la mayor perfección orgánica que, merced á varias causas, pero principalmente al cristianismo, adquirieron las monar-

quías medioevales: 3.º en cualquiera de los dos respectos en que se tome la templanza ó moderación, *a)* no puede decirse exclusiva de la monarquía, sino que debe ser propiedad, virtud y excelencia de las dos formas de gobierno; *b)* tampoco es criterio de clasificación, división ni subdivisión de éstas, porque se trata de elementos comunes, y no solo extrasoberanos, sino extraprotárquicos de todas las constituciones; *c)* y por lo tanto esas limitaciones no consisten en que la monarquía comparta con las otras dos formas aristotélicas, la aristocracia y la democracia, el supremo poder, porque tal distribución constituiría una república, sino en que democracia y aristocracia, (y mesocracia añadiremos nosotros), sean en la sociedad, y según las respectivas entidad, jerarquía y posición, elementos orgánicos moderadores, y además influyentes en el gobierno soberano y cooperadores á él.

Se dicen *constitucionales* las monarquías contemporáneas, y desde más remota fecha, (1688), la monarquía inglesa, en cuanto, por ajustarse á los dos caracteres de las actuales constituciones, la representación de la soberanía (ó soberanía representada) y el sistema de moderaciones que la representación y el *constitucionalismo* implican y contienen, suponen los tratadistas de la política nueva que son las verdaderas monarquías no absolutistas, las moderadas y templadas, por razón de esa combinación de la soberanía del rey con la del pueblo, ó de las fuerzas vivas, mediante la representación de aquél ó de éstas en las cámaras. Es decir, que para los autores modernos estas monarquías

son las racional y genuinamente mixtas y limitadas, moderadas ó templadas.

En cuanto á su condición de representativas ya se ha dicho cuanto hay que exponer, y se verá más adelante lo que les falta para serlo; en lo que respecta á las moderaciones, se estudiarán también en el lugar oportuno la clase y eficacia de ellas. También se ha anticipado lo indispensable acerca de la naturaleza de esta *mixtura* que será plenamente conocida en el capítulo dedicado al constitucionalismo. Ahora solo haremos observar que también las poliarquías actuales son representativas y constitucionales en el mismo respecto que las monarquías, aunque no sean mixtas, á pesar de que lo frecuente es que los directores ó presidentes de ellas tengan legalmente cuando menos alguna atribución monárquica, por lo cual (cosa extraña y contradictoria) se les llama como á los reyes *Jefes del Estado*.

Estas monarquías se distinguen con los nombres, usados en una acepción convencional y equívoca, de doctrinarias y democráticas por razón de los atributos, prerogativas y poder que en ellas conserva la realeza y el origen y título que se asigna al monarca. Porque unas veces *comparten* con la *representación nacional* la función legislativa, además de conservar la ejecutiva y parte de la judicial; y otras solo se les concede en la primera una participación negativa y dilatoria y una sanción de pura solemnidad. En el primer caso están las monarquías *doctrinarias*, en el segundo las *democráticas*; aquéllas se fundan en la *legitimidad* histórica y tradicional por cualquiera de los títulos exami-

nados anteriormente, y se supone que el rey y la nación (el pueblo, ó las fuerzas vivas) son dos poderes independientes y cosoberanos que solo pueden concertarse para el ejercicio de la función constituyente, y después para el de la legislativa ordinaria, mediante el pacto constitucional. Las *democráticas* reconocen la soberanía de la nación, de la cual emanan todos los poderes, y que en uso de aquélla puede darse forma monárquica lo mismo que republicana, si le place; la monarquía no tiene otra legitimidad que la del acuerdo nacional soberano que establece esta superior magistratura, como pudiera establecer un colegio de poliarcas, ó una jefatura unipersonal del Estado, ni hereditaria ni vitalicia.

Después de las doctrinas expuestas acerca del sujeto de la soberanía y de la concerniente á las formas de gobierno, no hay necesidad de análisis y crítica de estas *monarquías*; son, de hecho, unas poliarquías en que el Jefe del Estado tiene más ó menos atribuciones entre los dos extremos de las monarquías más históricas y arraigadas en los pueblos en que produjo menos efecto y dejó huella no tan profunda la Revolución, y aquellos otros que no han podido conservar ni siquiera la sombra de la monarquía *democrática* y se han constituido en República. En ellas el Jefe del Estado, puede tener, como en Francia y en los Estados Unidos, una mínima parte de las atribuciones de la monarquía constitucional.

Ambas monarquías son á la vez doctrinarias, en cuanto en una y en otra es la monarquía un elemento contradictorio y yuxtapuesto al principio de la sobe-

ranía nacional; y democráticas, porque rey y cámaras son una persona moral, una colectividad compuesta de muchas personas, con la imperfección consiguiente á esta extraña forma de gobierno. Pero se dicen las primeras, doctrinarias por antonomasia, por serlo más que las otras, porque el máximo de la contradicción lo constituyen la afirmación de dos soberanías incompatibles entre sí, pues si el rey es soberano no lo es la nación, y viceversa, expresando el pacto constitucional, además de la fórmula de tal incompatibilidad yuxtapuesta, el absurdo de que si los pactantes no quisieran pactar, lo cual es propio de la libertad de todo contrato, no había posibilidad de soberanía, constitución, legislación, gobierno ni sociedad.

El doctrinarismo de las monarquías democráticas es menor, pues solo consiste en las escasas facultades legislativas deferidas al rey y, en los caracteres de sucesión y aun inmovilidad, incompatibles con el principio de la soberanía de la nación, cuyos poderes no pueden tenerse más que por representación (*mandato*) revocable á voluntad del soberano. Estas monarquías se llaman tambien *democráticas* por antonomasia, no solo en virtud de ser unas numerosas poliarquías, sino porque no afirmando la cosoberanía de los dos poderes, el tradicional, histórico (la legitimidad) y el nuevo y revolucionario (la soberanía nacional), tan solo restringen ésta por la insignificante facultad del veto dilatorio y la *inamovilidad hereditaria* de la realeza.

Así en una como en otra clase de monarquías se viene confesando implícitamente el error y el vicio de la teoría liberal, puesto que para atenuar los inconve-

nientes de la moderna soberanía, se yuxtapone más ó menos cantidad de principio monárquico, simulado ó efectivo, y se reconoce la virtualidad de la monarquía, teóricamente inconciliable con la soberanía popular ó nacional. Como influyen en la efectividad del poder reservado al rey el constitucionalismo y el parlamentarismo se considerará más adelante; así como lo que significa otorgarle *todo* el poder ejecutivo y solo parte del legislativo y del judicial.

3. Si la herencia fuese atributo esencial de la monarquía, no podrá subdividirse en hereditaria y electiva, aunque, por accidente, algunas de éstas, en apariencia ó en realidad, nos presente la historia.

Ahora bien, que la herencia, ó mejor dicho, la sucesión es atributo de toda soberanía, que no solo de la de forma monárquica, queda probado al tratar de las leyes de concreción de aquélla y del título derivativo ordinario, en virtud de los cuales se concreta la autoridad soberana. De donde se deduce que la monarquía electiva que es *aquella en la cual no es la elección el hecho y título de anómala determinación originaria de la soberanía, sino el modo y forma permanentes, legales y ordinarios, con que un cuerpo colegiado, más ó menos numeroso, designa, á la muerte de un monarca, la persona que ha de sucederle en la posesión y ejercicio de la soberanía*, es una monarquía imperfecta y una forma soberana mal constituida, en cuanto le falta la consecuencia y ventaja inherentes á la inamovilidad y á la inelegibilidad naturales del Poder civil.

En la monarquía electiva, aun suponiendo que vi-

taliciamente se traslade al rey la plenitud del poder soberano, cosa rarísima, existe de hecho una poliarquía, el cuerpo electoral, que se reserva una importante función intermitente y constituyente, y que, por regla general, no se satisfará con ésto, sino que no enagenará tampoco la totalidad de las funciones constituidas. Por esto las monarquías electivas son ó monarquías que están aún en período formativo, ó repúblicas que van evolucionando hasta la forma más natural y cumplida de gobierno soberano, ó, por el contrario, monarquías decadentes á las cuales una oligarquía poderosa ó una invasora democracia despojan de su carácter hereditario, antes de sustituirlas de vez por la forma poliárquica.

4. Continuando aquí la materia concerniente á la sucesión, cuyos principios y precedente doctrina quedan expuestos al tratar de una de las leyes de concreción de la soberanía, habrá que fijarse principalmente en la sucesión monárquica, porque será en esta forma más perfecta donde se destaquen mejor las condiciones y caracteres sucesorios.

Hemos dicho que la sucesión soberana es indivisible y debe recaer en persona cierta y fija, determinada por la ley sucesoria escrita ó consuetudinaria, en virtud de las razones allí expuestas, fundadas todas en el procomún para el cual es la soberanía, á diferencia de los derechos privados. Este mismo interés público exige que sea el primogénito el sucesor en el trono, no solo porque debiendo ser uno de los hijos, no hay razón para que no lo sea este (título negativo

de la primogenitura), sino por el privilegio natural y providencial que ésta implica. Es este el hecho del anterior nacimiento, con que una nueva persona, por disposición y voluntad de Dios, viene á merecer el destino inmortal mediante el cumplimiento de todos los deberes para con su Creador, consigo mismo, con sus semejantes y, por lo tanto, con la sociedad en general y en particular con la patria (título positivo de la primogenitura, á la que el derecho natural inmediato y mediano han asegurado una preferente estimación en todos los pueblos). Sin más diferencia que la de los respectivos fines jurídicos, el mismo principio que determina la sucesión en el mayorazgo regular, concreta en el primogénito la sucesión de la soberanía.

Pero hay más: aquel á quien Dios quiso asignar antes á su servicio, á la manifestación de su gloria, á la virtud y á la bienaventuranza mediante ella, y al provecho de la patria, empieza á ser educado para este fin antes que los otros hijos, en edad en que el padre puede llenar con más virilidad, perfección y eficacia los deberes educativos, debiendo tener en cuenta que la educación del príncipe heredero, como la de los demás hombres, en el sentido más amplio no de potestad coactiva, sino de racional dirección, dura lo que la vida del padre. Con esto no solo es contingencia menos probable el inconveniente de las minorías, sino cosa regular y frecuente que el primogénito suceda, más aún que en la primera juventud, ya en la segunda, y aun cerca de los años en que están ya formadas y hasta en cumplida madurez las dotes del gobierno. El preferente título de la primogenitura en

esto, como en otras varias relaciones, y en general en todas las de la vida es evidente, y lo han traducido, sin excepción, las leyes sucesorias regularmente entendidas y formuladas.

No se ve tan clara la razón del principio de la representación en la soberanía como en derecho privado, ó sea *la subrogación del hijo ó descendiente en el título sucesorio del ascendiente primogénito, muerto antes que el monarca de quien deriva el derecho soberano*, cuando el descendiente está en la menor edad, sobre todo en la infancia, y hay un colateral cercano ya mayor y acaso en virilidad plena. Entran entonces, al parecer, en colisión la mejor línea del menor con las mejores condiciones soberanas del colateral, que acaso sea de grado más próximo en la línea recta del soberano muerto, v. g. el hijo segundo enfrente del nieto; colisión que, consultando el interés público, el mismo que impone la primogenitura, debiera resolverse en favor del colateral de edad suficiente, el cual, sino educación soberana directa, la tiene análoga, similar y cercana y de superior aristocracia, mientras que la del menor es deficiente, ó acaso todavía nula.

Y sin embargo, la generalidad de las leyes sucesorias admiten el principio de la representación, y en tiempos en que este hecho no puede atribuirse á influjo anacrónico de la monarquía patrimonial. La razón de tal hecho y del principio que expresa y á que responde, no puede ser otra que la necesidad, ó cuando menos grandísima conveniencia, por supuesto pública y nacional, de mantener todo lo invariable que sea posible, sustrayéndola á frecuentes cambios y saltos, la per-

petuada unidad de la familia dinástica en el sentido más estricto y en la forma más natural, íntima y permanente, la que se perpetúa en la misma línea. En tal constante y prolongada fijeza consiste el título nacional de la representación, porque así identifica en solidaridad más perfecta la dinastía con la patria, y con ello más arraiga la forma de gobierno que hemos considerado superior. En efecto, cuanto más inalterable la dinastía, más cuenta con la adhesión del espíritu público, la cual en sociedades honestas es la fuerza y raiz principal de la soberanía y el elemento de mayor eficacia en la suprema ordenación, ejercida más con la razón y el amor que con la coacción material. Esta concordia más afectuosa y profunda entre el espíritu público y el órgano soberano es más favorable al espíritu nacional de que se ha tratado en el Capítulo V del Libro I; mientras que el salto de la mejor línea á otra colateral, tal vez lejana, y que no en pocas ocasiones no será la línea recta del soberano anterior, puede ser de hecho un cambio de dinastía, el advenimiento de una nueva que será todo lo aristocrática que se quiera, pero, que por recién advenida, no cuenta todavía más que con la estimación tributada á su nobleza y á la forma monárquica, no todavía con el amor del pueblo á la familia reinante.

5. Punto aún más discutido, y en el cual han adoptado distinto criterio las leyes sucesorias así antiguas como modernas, es el derecho soberano de las mujeres, y, por lo tanto, si la hembra de mejor línea ha de ser preferida al varón de línea inferior en la sucesión á la corona. Mientras no hay, generalmente, discrepan-

cia acerca del orden sucesorio según primogenitura y representación dentro de línea preferente y grado más próximo de parentesco, discútese en teoría y difieren las leyes positivas sobre si la hembra de línea anterior ha de postergar ó no al varón de las posteriores.

Para resolver esta grave cuestión de feminismo en relación jurídica de tal importancia, no hay más que aplicar la doctrina expuesta en el apéndice al Capítulo IX del Libro II en el que se demostró que son «impro-
»pios de la mujer los cargos públicos que llevan anejos
»imperio y jurisdicción, no porque la mujer carezca en
»absoluto de las dotes y virtudes necesarias, sino por
»que á la justicia y á la fortaleza pueden perjudicar
»más que en el hombre la sensibilidad y compasión
»desordenadas, características del sexo femenino. El
»cual tiene, en efecto, más desarrollada la parte afecti-
»va moral, como muestra la experiencia y demuestra
»el raciocinio, fundado en la disposición especial que
»la naturaleza ha puesto en la mujer para los oficios de
»familia, y que determinan un *temperamento psíquico* al
»que no puede aquélla sobreponerse ni en casa ni fue-
»ra de ella. Lo que la capacita más y mejor para el ho-
»gar, la hace menos apta para el desempeño de oficios
»que exigen la rigidez del varón y el mayor dominio
»de éste, sino sobre las pasiones, sobre los sentimien-
»tos. Y con esto se manifiesta que ha de aplicarse al fe-
»minismo, en lo que concierne á los empleos y cargos
»de república, (desde el concejo al poder central in-
»clusivo), y al sufragio tanto administrativo como po-
»lítico...»

Según esta doctrina, la rigurosa tesis es la del prin-

cipio agnaticio, porque la relativa incapacidad femenina con más razón debe excluir de la soberanía que de los demás cargos públicos á las mujeres, en concurrencia con varones que, aunque de peor linea y grado, pertenezcan á la dinastía reinante.

Mas téngase en cuenta que, por lo mismo que la incapacidad de las mujeres es solo relativa, ó sea, en comparación con la de los hombres, no debe admitirse el principio llamado *sálico*, ó sea la exclusión absoluta de las mujeres, porque puede darse el caso de que no haya varones con quienes concurren, y sea el advenimiento de la hembra al trono el único medio de salvar, bien que cognaticamente, la continuación de la dinastía nacional. Así como la preferencia de la mujer en frente de varones colaterales de líneas que, por cercanía, aunque no sea muy próxima al tronco común, no han dejado de ser dinásticas, es insostenible en buenos principios, así la exclusión absoluta de las hembras puede ser contraria al legítimo interés nacional de la permanencia de una dinastía identificada con el espíritu público, connaturalizada con la patria en siglos de vida común y de vicisitudes históricas, y aunque sea un mal la falta de descendencia masculina, sea mal menor que el advenimiento de nueva dinastía, ó de varón agnado tan lejano del ascendiente común y del último monarca que no pueda ya decidirse de la real familia y sí solo de familia perteneciente á la primera nobleza.

6. Aunque no recuerdo autor que trate directamente de la sucesión en las poliarquías, no se halla razón para que dejen de aplicarse á ella los mismos prin-

cipios que á la sucesión monárquica, en la descendencia de los poliarcas, con la única modificación, en mi entender, de que el principio sucesorio debe ser aquí absolutamente agnaticio, como si dijéramos *sálico*, por no haber el mismo motivo que para el derecho eventual y subalterno de las mujeres al trono. Antes, al contrario, su absoluta exclusión de una colectividad compuesta de hombres, se funda no solo en la menor independencia de la mujer en ella, sino en la conveniencia de que, sin golpes de Estado ni violencias oligárquicas, se vaya depurando la poliarquía, reduciéndose el número de sus miembros, y hasta evolucionando pacíficamente hacia el régimen monárquico. A ambas mejoras es contrario cualquiera elemento cognaticio.



1. Cuando se dice que la monarquía es de derecho divino, no quiere decirse que sea la institución monárquica de derecho divino positivo (doctrina anglicana), sino de derecho divino natural, en cuanto á la autoridad soberana, y de derecho natural mediato, de gentes, en cuanto á la forma; de modo que solo en el más amplio sentido, en que puede afirmarse de la república, de una autoridad cualquiera y en general de todas las instituciones, por proceder todas de Dios creador, au-

tor de todos los seres, de su naturaleza, fin y orden, es como se afirma el derecho divino de los reyes.

Aun en el supuesto de la teoría que no admita otra forma de gobierno que la monárquica (Bonald) esto no significa que sea de derecho divino positivo, sino de derecho divino natural únicamente, sin distinción entre la soberanía y su forma racional única, de suerte que ésta sea de derecho natural mediato ó de gentes: la legitimidad de la monarquía exclusivamente lo que implica es que autoridad y régimen monárquico tienen con la sociedad civil la misma conexión de necesidad.

Acerca de las monarquías puras he escrito lo siguiente en *El absolutismo y la democracia*: «Monarquía pura es un término equívoco con el cual designa el derecho nuevo á las monarquías fundadas en la tradición política, especulativa ó práctica, ó, lo que es lo mismo, á las monarquías que, por no ser liberales ni constitucionales, no son gobiernos mixtos en apariencia y poliarquías en realidad. Para el liberalismo y el constitucionalismo, monarquía pura y monarquía absoluta, son una misma cosa, porque consideran absolutistas *per se* todos los poderes no fundados en las dos aberraciones radicales de la política naturalista: la soberanía del pueblo, ó la doctrinaria de las fuerzas vivas, y la división é independencia de los poderes públicos, como única prevención (ilusoria, por supuesto) contra las intromisiones indebidas de la autoridad soberana en la autarquía nacional. Mas, en el sentido tradicional de la política, la monarquía pura es precisamente lo contrario: monarquía que no profesa el error de la soberanía del pueblo ó la doctrinaria de los *inteligentes y ricos*, y confía á otras moderaciones éticas y orgánicas de más eficacia, y no á la imposible y absurda destrucción de la unidad del principio autoritario, la custodia de la democracia y la conservación de la autarquía popular. Según esto, monarquía pura es monarquía verdadera y efectiva, revestida de los esenciales é indispensables atributos de la soberanía en forma monárquica; y por esto todas las monarquías deben ser puras, al propio tiempo que moderadas ó templadas: puras, en el respecto de

»soberanía provista de sus naturales y precisas prerogativas; »moderadas, en cuanto otras fuerzas ordenadoras extrasoberanas, manteniendo su autarquía, impiden las ingerencias del »soberano en el *self-government* social, y en cuanto el soberano mismo está obligado, en conciencia y por honor, á respetar el poder y libertad de los súbditos de regirse por sí mismos, en virtud de su personal autonomía (Nota XI, página XLVIII y XLIX)».

Para evitar el equívoco que encierra el término absolutas, convendría distinguir bien entre estas monarquías y las absolutistas, y así lo hacemos para no incurrir en el error y en la confusión de los autores liberales, que suponen que lo absoluto en la forma de gobierno es siempre el defecto y vicio que se expresa con el término absolutismo, el cual, según ellos, no significa ni puede significar lo absoluto que por naturaleza encierran toda soberanía y su forma, y especialmente por su misma superioridad, la forma monárquica, sino el *vicio natural* á todo poder soberano que, no siendo constitucionalista, carece de moderaciones contra el despotismo y la tiranía. Así como las monarquías, en cuanto *puras*, son, en opinión de tales autores, la negación del carácter de *representativas* á la moderna; así en cuanto absolutas, expresan la nota contraria á *constitucionales*, según el constitucionalismo.

Puede una constitución tener elementos regularmente moderadores extraprotárquicos y, sin embargo, adolecer la ordenación soberana del vicio de absolutismo funcional; pero entonces es que esas limitaciones son tan solo aparentes y de mera legalidad, sin virtud ni eficacia por falta de vigor y solidez de la autarquía social. Y, á *contrario*, puede ésta ser robusta y enérgica y, á pesar de ella, no contener, ó contener mal las ingerencias del poder soberano, por falta de defensas orgánicas suficientes donde amparar la independencia, autonomía y libertad legítimas de la nación y rechazar las invasiones absolutistas. Ya se comprende que de los dos males el primero es el mayor, porque más de estimar es valor sin armas que armas sin valor para esgrimirlas; y mientras que mode-

raciones bien constituidas no tardarán en agrietarse y arruinarse, cuando faltan fortaleza y constancia para emplearlas, sostenerlas y perfeccionarlas, al contrario, un adecuado concepto y un sentimiento profundo y vigoroso de la autarquía nacional no tardarán en disponer, habilitar y reforzar las instituciones estrictamente precisas para la protección de las públicas libertades. Lo general es que ambas cosas, autarquía y sistema social de moderaciones, estén en razón directa y proporción, y que al mismo tiempo nazcan, crezcan y decaigan, influyéndose recíprocamente, como puede observarse en todo el trascurso de la historia medioeval.

Carecieron en general las monarquías de la Edad media no solo de una idea reflexiva y exacta de la autarquía, sino del concierto orgánico y jerárquico de las clases sociales para consolidarla, pudiendo afirmarse que el progreso en la noción y en la práctica de ella no correspondió al tiempo que llevaba de vida la constitución cristiana de la sociedad, cogiéndola el Renacimiento no tan adelantada y fuerte como era necesario para resistir á la acción disolvente de aquella gran calamidad de redivivo paganismo. Así es que el absolutismo moderno, donde no fué despotismo y tiranía asestados contra la Iglesia, puede considerarse, más bien que como exceso, como tutela que legítimamente ejercía el poder soberano, sustituyendo y supliendo á una autarquía débil, enfermiza, extrañada y decadente aun antes de salir de una desmedrada juventud (1).

(1) Así aconteció en España donde los reyes austriacos han sido tildados de absolutistas con tanta injusticia como desconocimiento de la historia, si es que adrede no se ha tratado de falsearla. Ninguno de ellos tocó á una verdadera institución moderadora de las pocas, endebles y mal delimitadas que había en Castilla, quedando después de Villalar, intactas, según en otra parte hemos visto. Y en cuanto á Aragón nadie respetó con mayor, y acaso más exagerado escrúpulo, los fueros del Reino que Felipe II, el cual después de las revueltas de Zaragoza, sofocadas sin ira y sin venganza, y con la justicia estrictamente indispensable, modificó harto poco la viciosa constitución aragonesa, despojándola, y eso con el concurso de las

En cuanto á las monarquías *patrimoniales* hay que tener en cuenta que precisamente fué el feudalismo el que las *despatrimonializó*, porque si bien el rey (en la restauración astúrico cantábrico especialmente) continuó, de nombre y en la mera letra de la ley, siendo el señor absoluto de todo, como el cesar romano, por razón del vicio socialista, de que el cristianismo no había de purgar de repente á las constituciones, de hecho, la enagenación del dominio efectivo casi en toda su plenitud á señores y concejos descentralizó la patrimonialidad, trasladándola á los órdenes sociales y reduciéndose la de la monarquía á un mínimo dominio directo, aparte del patrimonio particular y familiar del rey y el Real patrimonio, que son cosas muy distintas. Esta desconcentración de la propiedad contribuyó al poder social de esos órdenes ó clases y cooperó, por los medios naturales y providenciales con que Dios actúa en la vida, á la autarquía de la sociedad, al establecimiento de las moderaciones orgánicas extragubernamentales, poniendo el feudalismo al servicio de la libertad y de la constitución cristiana de la nación. De manera que á la monarquía nada le quedó al fin de real y efectivamente patrimonial, porque ya sabemos que la herencia, que es en lo que los republicanos modernos hacen consistir la patrimonialidad de la monarquía, es un atributo esencial de ésta (I).

Cortes, de una mínima parte de los fueros más insostenibles, por absurdos, extravagantes é irracionales. Acerca de la materia de esta nota he discurrido ampliamente, en particular con aplicación á Castilla, en mi citado libro *«El absolutismo y la democracia.»*

(I) «En lo que se refiere al llamado *gobierno patrimonial* no han sido menores, generalmente, la ligereza de las apreciaciones, por desconocimiento del asunto, y la confusión reinante, por falta, sin duda, de estudio detenido y conveniente distinción de términos en el vario respecto científico é histórico.»

«En teoría, gobierno patrimonial en el riguroso sentido de la palabra equivale á gobierno tiránico, ó mejor dicho, á negación de gobierno, á conversión de la relación jurídica de régimen para el procomún en provechamiento dominical para interés personal y doméstico. En tal sentido, el *patrimonialismo* es, como tiranía, vicio más grave que el absolutismo,

2. Si aun antes de Jesucristo no todos los imperantes carecieron de la virtud natural de la templanza en el sentido amplio de racional moderación en el obrar y en el apetecer, fué ésta tan rara como las demás virtudes entre paganos; y solo

»y contra él son manifiestos el espíritu y la letra de la política tradicional
»y cristiana. Lo que hay es que muchos autores liberales llaman patrimoniales á los gobiernos monárquicos puros, por el hecho de ser hereditarios, es decir, porque no les falta su atributo esencial, sin el que no pueden llamarse monarquías, sino repúblicas irregulares y anómalas. El principio y circunstancia de la herencia, sin duda, imaginan ellos, que identifica á la soberanía con la propiedad, sin tener en cuenta que la sucesión es carácter formal común de los derechos públicos como de los privados, y que la herencia de la soberanía, ó sea, la sucesión de ella *mortis causa*, al lado de los caracteres genéricos, idénticos á las del dominio de la *hereditas*, tiene los diferenciales que derivan de la naturaleza pública del Gobierno, y que le corresponden precisamente en virtud y contemplación del bien general á que toda soberanía debe enderezar sus actos.

»Es claro que en la historia ha habido gobiernos patrimoniales en más ó menos grado, jamás absolutamente tales, porque nunca el mal ha podido destruir por completo la obra de la naturaleza; pero ni aun en la vida han coincidido siempre absolutismo y *patrimonialismo*, de tal suerte que procedan de un mismo origen y crezcan ó menguen en igual proporción y medida idéntica. Unas veces ambos vicios son grados diversos de un hábito ó sistema socialista, verbigracia en el imperio romano, en que el César, por representante único de la sociedad, es absoluto gobernante y á la vez *dominus rerum*; mas en otras ocasiones el *patrimonialismo* procede en el poder soberano, como en la aristocracia territorial, de la confusión de la propiedad y de la autoridad pública. Tal aconteció en las épocas feudales, no porque sea esencia del feudalismo semejante confusión, como infundada, bien que tradicionalmente se ha venido suponiendo, sino porque hechos y circunstancias concomitantes con aquel carácter de la Edad media, aunque extrínsecos á la naturaleza del contrato de feudo, concretaron en el propietario la jurisdicción en las tierras de su dominio, y en la sucesión hereditaria de la Corona alternaron los principios de la relación pública con los de la privada, durante no corto tiempo.

»Y no fueron estos períodos aquéllos en que el poder monárquico invadió con más frecuencia y gravedad la esfera del gobierno de los súbditos; porque la patrimonialidad efectiva de la monarquía coincide con las épocas de su menor prepotencia y con las de mayor pujanza del feudalismo señorial y pechero, no menos que con el atraso de un organismo central rudimentario y con el individualismo semianárquico de los pueblos y

el cristianismo, dando de todas adecuada idea y sosteniéndolas y promoviéndolas por auxilios sobrenaturales, erigió la templanza en deber del gobernante y la hizo más frecuente en las alturas del poder supremo, como en las demás relaciones de la sociedad. Del advenimiento del cristianismo y de su influjo y poder en la vida data la moderación como prenda y hábito de los gobiernos, desenvolviéndose por virtud de la religión divina y por la noción de la dignidad humana, que enseñó é implantó en la conciencia y en el corazón de los hombres, los otros elementos moderadores, cuyo principio, criterio, auxilio y garantía radican en la conciencia misma de los soberanos.

De la misma manera que de moderaciones éticas no han carecido generalmente los gobiernos, aun paganos, tampoco de aquellas otras orgánicas que no traspasan los límites de la protarquía, ó sea, del Estado, del Gobierno central, como si en ningún caso y tiempo la benigna Providencia hubiese querido entregar la suerte de los pueblos al mero arbitrio de la soberanía. Los mismos gobiernos absolutos, que, desde la Edad moderna, empezaron á sustituir á los gobiernos moderados medioevales, de influjo y precedente cristianos, conservaron y perfeccionaron estas moderaciones protárquicas que no permitieron que el absolutismo se convirtiera en despotismo neto, y que ya en el cesarismo imperial romano de los últi-

»períodos escasamente avanzados en las vías de la cultura, y en los cuales
»apenas ha logrado la soberanía la plenitud de sus indispensables atribuciones. Y cuando, más adelante, las monarquías contraen el vicio habitual
»del absolutismo cesarista, son patrimoniales de nombre, de tradición, de
»recuerdo y título vacío, más que de hecho y en realidad, como herederas
»de aquel dominio directo romano feudal que, con el trascurso del tiempo
»apenas se distingue en la práctica del dominio eminente, propio de todo poder soberano. Lo cual no obsta para declarar que, por otras razones, no
»careció de justicia ni de oportunidad aquel artículo de la Constitución de
»1812, en el cual se consignó que la nación española no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.» (El absolutismo y la democracia, nota XI, pag. LVI á LX.)

mos tiempos nacieron en forma de institución particular y doméstica al servicio del príncipe. Por imperfectos que sean los organismo consultivo, ejecutivo y judicial centrales, constituyen siempre en la esfera del Gobierno protárquico un efectivo elemento moderador.

Mas no son éstas, sino la extrínsecas á él, las que de hecho y de derecho, consuetudinario ó escrito, caracterizan de moderados, templados ó limitados á los Gobiernos, en razón á que, después de la recta voluntad del imperante, de la garantía que la virtud y el honor del soberano ofrecen á la nación, son las moderaciones orgánicas sociales las de mayor eficacia y poder contra los excesos gubernamentales ó las meras intromisiones absolutistas de la soberanía (I).

(I) «Verdaderamente hay que confesar que aun dentro de la escuela que llaman teológica, por no denominarla, con más exactitud, cristiana, confunden algunos autores el gobierno mixto con el moderado ó templado. Así el P. Suárez, ilustre representante de la dirección escolástica española en Filosofía y en Derecho natural, varon portentoso en sublime ciencia y erudición estupenda, esplendor y gloria de la inclita Compañía describe... *Ex quibus* (se refiere á las formas simples ó puras de gobierno) *confici possunt varii modi gubernationis mixtæ, seu compositæ ex illis simplicibus per participationem vel omnium vel duorum ex illis.*
. *licet hoc* (inquam) *ita sit* (trata de la superioridad del régimen monárquico) *nihilominus alii modi gubernandi non sunt mali sed possunt esse boni et utiles, ideoque ex pura lege naturæ non coguntur homines habere potestatem in uno, vel in pluribus, vel in collectione omnium: ergo hæc determinatio necessario fieri debet arbitrio humano: et etiam ita constat experientia magnam esse in hoc varietatem, nam alicubi est monarchia et raro simplex, quia, supposita fragilitate, ignorantia et malitia hominum, regulariter expedit aliquid admiscere ex communi gubernatione quæ per plures sit, quæ etiam est major vel minor juxta varias consuetudines et juditia hominum: pendet, ergo, tota hæc res ex humano consilio et arbitrio.* (R. P. Francisci Suarez, granatensis é Societate Jesu Doctoris eximii, *Tractatus de Legibus ac Deo Legislatore, Venetus, apud Sebastianum Coleti-MDCCL, Lib. III, Cap. IV, par. I.*)

»A primera vista, y á través del prisma de las modernas preocupaciones parece percibirse en muchos autores antiguos, sino el liberalismo, negación radical de la doctrina católica, al menos el principio de la cosobera-

Respecto de las modernas monarquías representativas y constitucionales que, por razón de los atributos que se les reconocen en el código fundamental, hemos llamado y, en efecto, llaman doctrinarias, añadiremos á lo expuesto en la sección

»nía del rey con cuerpos y elementos sociales más ó menos numerosos. Sin
»embargo, bien considerados y enlazados los textos en conjunto armónico,
»é interpretados según el espíritu de la doctrina, lo que se descubre, aun-
»que no de un modo explícito y terminante, es el principio sanamente de-
»mocrático de la cooperación con el soberano al común gobierno nacional
»mediante inteligencia de todos los poderes sociales, cada uno en su cate-
»goría, y concertados en el seno de la pública representación en Cortes. Ni
»la historia, antes de la corrupción absolutista de las monarquías, ni hasta
»ahora la política especulativa tradicional, determinaron con precisión y
»deslindaron en qué proporciones deben cooperar al gobierno el soberano,
»sin dejar de serlo, y los poderes inferiores, sin ingerirse nocivamente en
»la soberanía que, para el bien público, debe ser derecho de los absoluta-
»mente mejores y, si es posible, del absolutamente mejor. De esta confu-
»sión teórica y práctica procede que se hayan denominado formas mixtas
»aquellas complejas constituciones que por un lado parecen monarquías,
»y por otro repúblicas, más ó menos democráticas, es decir, en que partici-
»pan muchos, y no verdaderamente superiores, del poder soberano. . .
» Y mi desautorizada opinión coincide con la respec-
»abilísima del P. Zigliara (Propædæutica ad Sacram Theologiam, páginas
»410 y 411) que escribe: *Denique potest intelligi per monarchiam tempera-*
»*tam, non multiplicitas leguntorum collective acceptorum, scilicet, non di-*
»*visio potestatis, sed restrictio ipsius.... Hanc regiminis formam, à mixta*
»*distinctam, vocamus proprie temperatam, et per oppositionem ad ipsam dici-*
»*mus monarchiam....* Donde se ve que la moderación de las monarquías no
»consiste en la repartición del poder, ó sea, en la negación de la esencia mo-
»nárquica, sino en las restricciones preventivas y represivas del absolutis-
»mo. En la poliarquía, hay en el poder mismo una moderación que resulta
»de la naturaleza de esta forma de gobierno, es decir, de la pluralidad de
»soberanos; pero, aun así y todo, en esta pluralidad se nota sin esfuerzo la
»distinción lógica entre la cosoberanía de los poliarcas y la restricción im-
»perfecta que procede de la cosoberanía republicana.» (*El absolutismo y la*
democracia, nota XI, pág. XLIX á LIV.)

El P. Meyer, que parece, al definir la monarquía limitada, participar de la misma opinión, retrocede al concepto escolástico anterior, al determinar en qué consiste generalmente la garantía de tales limitaciones: participa-
ción popular ó aristocrática en el gobierno.

elemental una advertencia necesaria para prevenir una objeción. Pudiera muy bien argüirse que no todas las monarquías en que mantiene la realeza, al menos en la ley, las facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, anteriormente expresadas, se conciertan para el ejercicio de la cosoberanía con los representantes del pueblo ó de la nación, mediante el pacto constitucional; porque hay monarquías doctrinarias en las cuales el código político no afecta la forma ni tiene la naturaleza de contrato entre las dos entidades cosoberanas que se reparten los oficios y funciones del supremo gobierno común, sino que, por el contrario, la constitución nueva es una *carta constitucional* en la que el monarca, *motu proprio*, se desprende de una parte de la soberanía para compartirla con las cámaras compuestas de aquellos representantes de tan distintos títulos como hemos visto al tratar del gobierno representativo moderno y del senado. La contestación es sencilla: podrá faltar á esas monarquías la ley fundamental en forma de pacto entre el poder histórico y el poder nuevo, entre la legitimidad y la soberanía revolucionaria; pero en el fondo, y de hecho, por muchas atribuciones que conserve el rey, hay una verdadera distribución de soberanía entre éste y el pueblo ó nación, y un efectivo acuerdo entre ambos poderes para asignarse las correspondientes funciones soberanas, que no una mera graciosa concesión de libertades, franquicias y derechos infrasoberanos. Mientras no pasara de esto, la carta constitucional sería una carta régia de la misma clase que las antiguas; porque, por mucha cooperación que concediese en el gobierno á la sociedad, no se desprendía el monarca de parte alguna de su poder soberano; ahora la carta, ó, por mejor decir, en los comienzos del sistema, es una decorosa manera de conservar las apariencias, ocultando la abdicación de la monarquía y su conversión en forma mixta por una convención disfrazada bajo un simulado documento de forma y contenido tradicionales.

En las monarquías, aun siendo democráticas, como al fin se conserva algo de la potestad, real ó supuesta, y todo el aparato de la dignidad régia, se comprende, hasta cierto pun-

to, que se diga jefe del Estado al monarca; mas no así en las repúblicas en que el director, cónsul, presidente ó como quiera llamársele, es el primer servidor y magistrado de la nación y ejecutor de sus soberanos decretos (1). Pero esto se explica en cuanto á estos presidentes repúblicanos se les concede alguna facultad monárquica que les coloca en posición de cierta superioridad sobre las cámaras, la cual encierra y supone una mayor contradicción en las poliarquías, y la confesión consiguiente de la bondad y eficacia de la forma monárquica, de la que las mismas repúblicas necesitan tomar un *mínimum* de autoridad y poder, á fin de contrarrestar un tanto el absurdo y el vicio de las modernas soberanías (2).

(1) En general, y aparte del significado convenido que tienen hoy tales palabras, también en la monarquía pura puede decirse que es el rey el primer magistrado de la nación, tomada la magistratura en su acepción más amplia de dignidad y oficio autoritarios; y el primer servidor de aquélla en cuanto la soberanía es para el procomún ó provecho de la sociedad civil, y no del imperante, ni de otra alguna colectividad ó persona.

(2) Ya se verá más adelante como el constitucionalismo, erigiendo la función ejecutiva en uno de los poderes soberanos y confiándola lo mismo al rey en las monarquías que al presidente en las repúblicas, dá á este funcionario monárquico ó poliárquico una categoría y posición cosoberanas, nominales en las constituciones parlamentaristas, efectivas en las que no lo son, y en tal respecto iguala al presidente con el monarca. Poliarquía por poliarquía, que esto son también las monarquías modernas, sólo en el más ó en el menos se diferencian las atribuciones del supremo magistrado. El cual, por tener él sólo todo el poder ejecutivo, mientras que el legislativo lo comparten entre sí muchas personas, y por ser este intermitente, y continuo el otro, y más representativo de la unidad y perpetuidad del Estado, bien puede ser designado, sin inexactitud, como jefe de él.

Añádase á esto que, si además del poder ejecutivo, se confía al presidente alguna participación, por pequeña que sea, en los otros, resulta superior á las otras personas que no poseen íntegros el legislativo ó el judicial respectivamente. Tal sucede en Francia, república parlamentaria, en la cual el Presidente además de la *irresponsabilidad* como el rey constitucional, excepto en caso de alta traición, goza también de la gracia de indulto, y, oyendo al Senado y de conformidad con él, puede disolver la otra Cámara antes de la conclusión de la legislatura. Más aún: salva urgencia declara-

3. En Roma no llegó á convertirse por normal evolución, relativamente pacífica, la república en monarquía, la cual no pasó de dictadura cesárea, sin alcanzar la continuidad y consolidación de la herencia. Y no fué ésto porque otras fuerzas y magistraturas políticas resistieran y combatieran á la nueva situación, al cambio natural de la democracia oclocrática en dictadura é imperio; fué porque el militarismo pretoriano ó legionario, que había convertido al *imperator* (general) en gobernante, no quiso abdicar su poder constituyente en una sociedad y constitución en que no había quedado más derecho y título soberanos que los de la fuerza. Así es que la tendencia é impulso naturales hacia la herencia solo se mantenían breve tiempo, mientras duraba el influjo del personal prestigio, el recuerdo de un emperador de grandes cualidades, y, sobre todo, de energía militar, que, captándose el favor del ejército, transmitía esta lealtad de las legiones al heredero del César.

A la adhesión moral de la sociedad al imperante faltábale el elemento ético religioso, la noción de los títulos y deberes de la autoridad y de los fundamentos y dignidad de la obediencia que ya el cristianismo había traído á la vida, pero que no encarnó en las costumbres públicas, y mucho menos se ingirió en la organización política en todo el trascurso de la Edad antiqüa. Y faltaron también el he-

da por una de las Cámaras, dispone del plazo de un mes para la promulgación de las leyes, y dentro de este plazo, ó en el de tres días en caso urgente, puede pedir en mensaje motivado á las Cámaras que procedan á nueva deliberación, sin que éstas puedan excusarse de ella. En la República norteamericana el Presidente tiene la facultad de no aprobar inmediatamente el *bill*, orden ó resolución del Congreso (ambas Cámaras), y de devolverlos, acompañado, de objeciones ú observaciones á la Cámara donde fueron iniciados. En ella se examina de nuevo, y en obteniendo las dos terceras partes de votos, se remite á la otra Cámara para que también otra vez lo examine, convirtiéndose en ley si obtiene la misma votación que en la Cámara anterior. Es decir, en ambas Repúblicas tiene el Presidente *veto suspensivo* como en las monarquías democráticas.

cho é institución universales que determinaron, establecieron y arraigaron la sucesión hereditaria, como otras muchas relaciones jurídicas, y á los cuales en este tratado nos hemos referido con frecuencia: el feudalismo, que no solamente engendró y mantuvo entre el rey y los feudatarios de jerarquía nobiliaria y pechera la fidelidad, sino que la perpetuó hereditariamente, así en el dador del bien fecho, (señor) como en el vasallo y en el solariego. Con el dominio directo trasmitió el rey á los herederos, y luego á uno, la realeza, unida de hecho y confundida con la nuda propiedad que el monarca conservaba; de la misma manera que la sucesión en el dominio útil perpetuaba la condición de súbdito noble ó plebeyo, también inseparablemente conexas con el bien recibido á título de prestación privada y pública, al que era á la vez dueño universal y soberano. Véase como la *patrimonialidad* de la monarquía, que de socialista que fué en el imperio romano, se convirtió luego en feudal, determinó no un mal, sino un bien, el atributo esencial de esta forma. Por no haber arraigado el feudalismo en la sociedad y en la constitución góticas, sucumbió el reino godo, sin haber pasado de conatos y de hechos efímeros é intermitentes la sucesión en la corona, ni más ni menos que en la monarquía cesárea de Roma.

4. Por no tan fácil ni inmediatamente notoria, la representación ha tardado más en reconocerse y aplicarse que los otros principios y razonables exigencias de las leyes sucesorias, dándose algunas veces durante los tiempos medios el fenómeno, al parecer extraño, de no llegar siempre el elemento de la patrimonialidad monárquica hasta esa natural y rigurosa consecuencia; y cuando aun se confundía el interés doméstico del soberano con el público de la nación, disputar la herencia del menor un colateral de mejor edad, invocando la conveniencia política de evitar peligros y perturbaciones de la minoría, y buscando el título de tal supuesto derecho en recuerdos y reliquias de la monar-

quía electiva, aun no del todo borrada ni plenamente sustituida por la monarquía hereditaria. Entre los dos extremos colidentes, la patrimonialidad (división del reino entre los hijos, sucesión dispuesta en testamento, etc.), y la aparente utilidad pública de preferir el colateral al descendiente menor, tardó tiempo en abrirse paso el principio representativo fundado no en fines privados, sino en los políticos expuestos en la parte elemental.

Además de los motivos allí manifestados, hay que añadir que, inclinándose, por ley natural y como por instinto político, los pueblos verdadera y sólidamente monárquicos á la rigurosa descendencia en la línea recta anterior, conservan á los menores una adhesión y lealtad que divide el espíritu público y en la misma proporción lo debilita, produciéndose cuestiones y banderías dinásticas, fáciles de convertirse en intestina y abierta guerra, sobre todo cuando el menor llega á la mayor edad, máxime si manifiesta y despliega dotes distinguidas y brillantes. Ejemplo es lo que duraron las tendencias de reivindicación del nieto mayor de D. Alfonso el Sabio contra su tío D. Sancho IV, y como se mezclaron y aliaron con cuestiones internacionales entre los dos más poderosos reinos ibéricos.

5. De las consideraciones expresadas en la sección elemental se deduce que la mejor ley sucesoria, por más conforme con los principios del derecho constituyente, es la que ocupa un discreto término medio, no de transacción eclética, sino de prudente exigencia de razón y justicia, entre la rigurosa agnación exclusiva y cerrada, que priva en absoluto á las hembras de la corona (sistema, ley llamados *sálicos*) y aquella otra agnación imperfectísima que casi niega y desnaturaliza el principio, introduciendo el título cognaticio en proporciones indebidas é inconvenientes, esto es, prefiriendo la mejor línea de la hembra al mejor sexo del colateral no muy lejano del tronco común.

Las constituciones de los reinos ibéricos ofrecen ejem-

plo de los tres sistemas. En Aragón estaban en absoluto excluidas del trono las hembras, mientras que en Navarra, por el contrario, llamaba el Fuero al *hijo ó hija, hermano ó hermana* del rey, es decir, regía no la agnación mitigada que admite á la mujer á falta de líneas de varones, sino la cognación de la mejor línea sobre el mejor sexo de las líneas colaterales (1). Asegurado en el trono Don Felipe V, hizo con el concurso de las Cortes del Reino, y habiendo para este caso extraordinario recibido los procuradores mandato especial, una ley que, además de inspirada en los rectos principios agnaticios que hemos expuesto y justificado, no pugnaba en modo alguno con las costumbres, tradiciones y constitución española en punto tan interesante. Porque, si bien cambiaba el orden de sucesión de la ley de Partida, que prefería la hembra de mejor línea á su colateral varón aun de mejor edad, nunca se aplicó en Castilla, ni antes del Código alfonsino, ni después que Don Alfonso XI le dió vigentez con carácter supletorio de otros cuerpos legales, pudiendo haber reinado las hembras que ocuparon el trono de Castilla, lo mismo con la ley de Partida que con el

(1) En esto de líneas colaterales y posteriores hay que explicar los términos en sí mismos y en relación de uno con otro, á fin de evitar confusión y error. Las líneas se llaman anteriores ó posteriores con relación al que es cabeza y principio de la dinastía, por ejemplo, á D. Alfonso VII, primer rey castellano de la casa de Borgoña, siendo su línea descendente anterior la de su hijo D. Sancho III de Castilla y la posterior la de D. Fernando II de León; y se dicen colaterales con relación al que invoca el título sucesorio en la descendencia del último rey, verbigracia, D. Alfonso de la Cerda, en relación con su tío D. Sancho IV, porque respecto de D. Alfonso X, su abuelo y padre respectivamente, ninguno es colateral. Lo cual no quiere decir que no pudiera haberse dado el caso dinástico entre el nieto y un hermano ó primo del monarca difunto, y entonces ese hermano ó primo era colateral para ambos, para el rey difunto y para el sucesor de éste en la línea recta. Con el término *mejor línea, línea preferente*, etc. no hay ocasión de equívoco, porque lo mismo puede referirse al cabeza, principio ó tronco de la dinastía, que al último soberano, que al que invoca el título en la línea recta que á un colateral respecto de otro más apartado.

sistema sucesorie adoptado en 1713 por D. Felipe V. El cual no hizo otra cosa que determinar la preferencia sucesoria de las líneas agnaticias de los varones sobre las cognaticias de las hembras, que quedaban relegadas al segundo lugar, mas no excluidas (1).

Y aunque, mientras se mantenga, además de la alta aristocracia, el rango del infantazgo lo más ampliamente posible en las líneas agnaticias, extiéndose en la misma proporción la familia dinástica, y no hay inconveniente en que suceda un varón colateral de lejano parentesco con el monarca difunto, puede ser cuestionable, si convendría limitar el derecho sucesorio agnaticio á un cierto grado de agnación con el último rey, de suerte que más allá de ese grado, el pariente varón cediese el puesto á la hembra de mejor parentesco y línea. Este problema de puro derecho constituyente se funda en que es dudoso cuando menos que la dinastía pueda prolongarse hasta tales lejanías de mera gentilidad, y que el advenimiento de un colateral tan apartado del tronco común y del rey antecesor trae de hecho mudanza de dinastía, perteneciendo, en cambio, más á la actual una mujer que acaso sea hija ó nieta del anterior monarca, y con la cual está más ligado el espíritu público que con el varón de tan apartada relación gentilicia. El principio agnaticio no es el gentilicio; y aunque sea difícil marcar *a priori* los límites entre agnación y gentilidad, siempre habrá uno más allá del cual no deba pasar aquélla sin el inconveniente expresado (2).

(1) A este sistema y ley se les ha llamado *sálícos* confundiéndolos con el de la agnación exclusiva, porque hace poco probable que reinen las hembras, en cuanto hay un número regular de varones y de líneas agnaticias; y de hecho, la mayor parte de las veces no llega ninguna mujer á ocupar el trono; pero la mera posibilidad de que alguna ascienda á él no permite calificar de *sálíco* tal orden hereditario, que es el que rige en Austria.

(2) El caso no ofrece duda á favor de la hembra, cuando la desvinculación de la propiedad y la falta de instituciones que, mejor ó peor, sustituyan al mayorazgo, tienen forzosamente que limitar la condición y dignidad

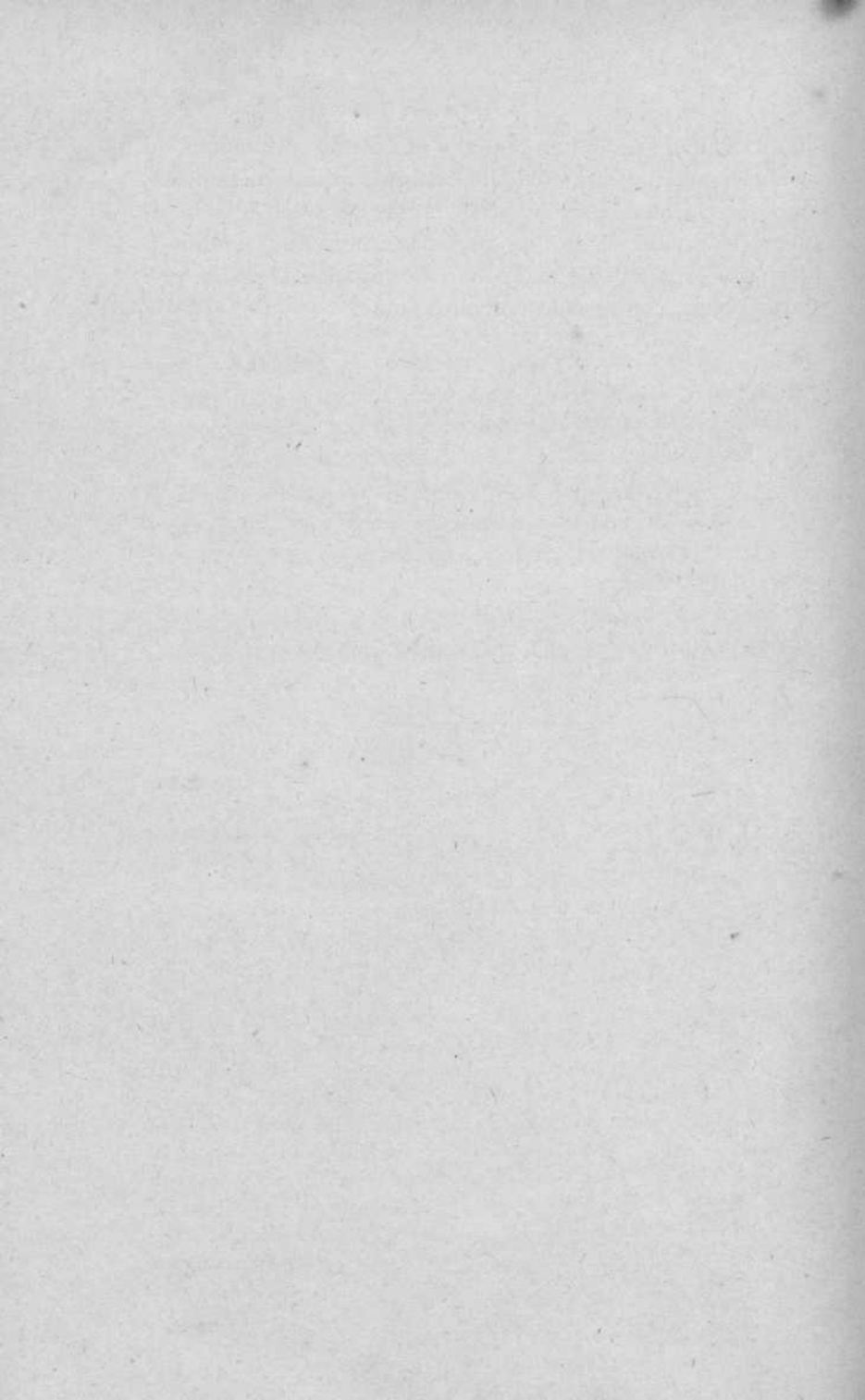
6. No hay para qué hablar de sucesión en las repúblicas liberales, porque la doctrina del derecho nuevo acerca del sujeto de la soberanía es incompatible, no sólo con la sucesión hereditaria, sino con la continuidad vitalicia del poder soberano, por lo cual carece este punto de actual interés positivo.

Aun en las antiguas no ha arraigado, ni apenas se ha insinuado la sucesión familiar, principio que es coetáneo de la existencia misma de la monarquía electiva y hasta del poder personal de las dictaduras. El hecho se explica por la misma imperfección esencial de la forma poliárquica, que no siendo expresión de una superioridad absoluta y única, sino relativa y común á las varias personas componentes de la colectividad soberana, está abierta y expuesta perpétuamente á las invasiones de otros nobles que presumen, con razón ó sin ella, de dotados de las prendas de la soberanía. De aquí la tendencia democrática de las repúblicas, es de-

de infante, para que no se junte con la mediocre y aun modesta posición pecuniaria á pocas divisiones hereditarias que haya del haber familiar. Entonces el título de la mujer es aún más radical y concluyente, porque al varón de mejor línea puede faltarle no solo la riqueza y el poder dinásticos, sino hasta los que se requieren para la primera aristocracia y la educación consiguiente á la más elevada nobleza. Entonces un discreto casamiento de la princesa con un noble nacional de los más elevados en jerarquía y reputación trae más ventajas que la continuación de una dinastía dudosa.

No concluiremos este punto sin hacer notar que la sucesión cognaticia en Inglaterra, ya que no antes, al menos después de la Revolución de 1688, tiene un origen revolucionario y antilegitimista, y son sus títulos los del odio á la dinastía destronada y á la Iglesia católica. Usurpadoras fueron, así María, la hija de Jacobo II y esposa del invasor hereje Guillermo de Orange, como su hermana Ana, solo recomendables á los ingleses por su fanatismo protestante. En cuanto al primer monarca de la dinastía reinante de Brunswick-Hannover, Jorge I, hombre insignificante, aunque notable por sus vicios y aun crímenes, además de ser tiránico detentador de la Corona, fué un Stuart cognaticio tan lejano, que entre él y el legítimo rey despojado, había nada menos que cincuenta y siete personas con mejor derecho sucesorio.

cir, al aumento de gobernantes, y el que las ambiciones no se encierren en el círculo de los distintos grados de nobleza, sino que trasciendan á las otras clases del pueblo, y ni siquiera se pueda pensar en perpetuar hereditariamente el *privilegio* soberano de los poliarcas llegados al poder y, á duras penas, conservado por ellos solos.



CAPÍTULO XII

ÓRGANOS QUE COMPARTEN LAS FUNCIONES LEGISLATIVAS.—CÓMO SE REPARTEN ENTRE LAS CORTES Y EL JEFE DEL ESTADO.—EL VETO Y LA DISOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS Y SUSPENSIÓN DE SUS SESIONES.—LA LEGISLACIÓN CONSTITUYENTE Y LA ORDINARIA.

1. En los anteriores capítulos de este libro se ha tratado del superior órgano de gobierno central, de la soberanía, debiendo á continuación ocuparnos en los otros órganos que, subordinados á aquél, le auxilian en el desempeño de sus funciones soberanas.

De las cuales llámanse *retenidas aquellas que el soberano desempeña personalmente, y encomendadas las que, por delegación de éste, ó por representación de la sociedad, ejercen otras personas*. Unas y otras son y se llaman derechos políticos en cuanto facultades para objeto y fin de tan notorio interés nacional como en el supremo gobierno de la sociedad civil, y tienen con la libertad la relación señalada en el Capítulo IV del Libro II.

El orden categórico de las funciones de gobierno, tal como queda expuesto en anteriores pasajes de este libro, exige empezar el estudio de estos organismos correspondientes por el órgano ú órganos cooperadores con el soberano á la función legislativa que esen-

cial ó tutelarmente corresponde al Estaho en el estricto sentido del término.

La función legislativa central corresponde plenamente al soberano; pero éste, en una sociedad regularmente avanzada en la vida civil, en la variedad y complejidad de las relaciones sociales y en las consiguientes exigencias de cuidado y perfección que impone un progreso legítimo, carece de la capacidad física y moral suficientes para realizar por sí mismo oficio tan complicado y difícil. Aun en las poliarquías compuestas de un número no escaso de miembros, que pudieran compartir entre sí la formación de la ley, no puede suponerse toda la competencia técnica y todo el indispensable conocimiento de las necesidades públicas, para que no sea preciso encomendar á otros órganos extrasoberanos una más ó menos amplia colaboración á la ley. Menos aún podrá el monarca atender él sólo á la legislación.

De aquí se sigue que la indispensable función legislativa retenida es aquella que determina la existencia de la ley, el acto que convierte en norma obligatoria lo que hasta entonces podía haber sido solamente proyecto, la facultad característica de la legislación ya realizada, la *sanción* en una palabra, *ó sea, el establecimiento de la ley por resolución soberana*, háyala ó no iniciado el soberano, contribuido ó no á su formación, y tomado parte activa en la deliberación, ó sólo conocido la generación y estado del proyecto.

Y no añadimos que es también función soberana retenida la *iniciativa*, *ó sea cualquiera acto que da principio á la ley, por petición, insinuación ó presentación de*

ella, porque, si bien es muy propia la facultad de la paternal providencia del soberano y de su celo por el bien público, es también un derecho político de la sociedad, por serlo de sus miembros, de las diversas personas que la componen, en cuanto lleguen al conocimiento y capacidad bastantes para ejercitar la iniciativa, en vista de una racional necesidad de la ley.

La formación del proyecto de ley es también una facultad política que, como la iniciativa, pueden ejercitar el soberano y cualesquiera otras personas, puesto que no requiere condiciones superiores al legítimo interés político que, en él y para el buen gobierno nacional, debe suponerse en los ciudadanos, y la aptitud que el proyecto formado arguya. De suerte, que es una función que toda persona física ó moral puede ejercer directamente por sí misma, aunque solo ciertos proyectos, y con determinados requisitos, puedan admitirse á la deliberación.

La formación de la ley, sin embargo, es más propia de cuerpos colegiados centrales constituidos, por ejemplo, el consejo ó consejos, ó la asamblea ó asambleas colegisladoras, (no soberanas), con el soberano; no solo por la superior competencia técnica, experiencia y demás dotes de gobierno, sino porque siendo tal el oficio y deber de esas colectividades, son los órganos naturales por cuyo conducto y ministerio contribuye ordenada y sistemáticamente la sociedad á la formación legislativa. Los cuerpos consultivos forman la ley cuando la iniciativa parte del soberano, ó éste la acepta por suya; la asamblea ó asambleas, cuando la iniciativa parte de su seno, ó acepta la de otra cualquiera persona,

sin que ésto quiera decir que no contribuya también á la formación de ese proyecto, suyo ó ageno, por medio y en el hecho de la deliberación. Cuando es suyo, la formación compete á las comisiones parlamentarias y á la asamblea en parte, si modifica el proyecto, y en la porción en que lo modifique; y cuando es ageno, las comisiones y después la asamblea contribuyen á la formación de la ley en aquella porción en que alteren y cambien el proyecto recibido.

La *deliberación* de la ley, en el más amplio y fundamental, aunque no usual sentido del término, es la *consideración reflexiva de la justicia y conveniencia de ella, como precedente inmediato y previo requisito de la sanción*; y cuando la forma de gobierno es poliárquica, entonces la *deliberación* es lo que la acepción corriente, así vulgar como técnica, significa, esto es, *discusión de las expresadas justicia y conveniencia del proyecto entre los miembros de la colectividad soberana á la que la sanción corresponde, y á la que, por consiguiente, tienen aquéllos el mismo derecho á concurrir con voz y voto*. Por ésto, porque el acto discursivo en que la deliberación (peso de razones) consiste, incumbe á todos los poliarcas, que deben comunicarse respectivamente su opinión y hacer observaciones á las de los otros, se aplica solo el término á la *consideración, meditación previa, reflexión y discusión* entre varios sujetos, no cuando es uno solo el que acerca de la equidad y oportunidad de la ley discurre, el monarca.

También éste puede deliberar y delibera acerca de ellas con los cuerpos consultivos, con sus ministros, con las asambleas ó con otras personas; pero no se lla-

ma deliberación á este cambio de apreciaciones y de juicios, aunque la autoricen la etimología y la misma acepción gramatical de la palabra, porque los que deliberan con el rey no lo hacen con el mismo derecho y para igual prerrogativa, la de la sanción ó establecimiento de la ley, que solo al monarca, soberano legislador, corresponde.

2. Pero si el soberano es el órgano de la función legislativa característica, propiamente dicha, (*la sanción*), compartiendo con otras personas del Estado funciones varias preparatorias de la ley, (*la iniciativa y la formación*), el organismo á quien naturalmente, por exigencia de la razón y labor de la historia, está confiada por regla general y principalmente toda la tarea legislativa anterior á la sanción soberana es el *organismo representativo* (cortes, parlamento, etc.)

Esto exige un estudio previo de la representación legislativa, igual, en apariencia, á la moderna representación; pero antes y, en virtud del estudio hecho de la representación moderna, y, por no pocas anticipaciones indispensables que han debido necesariamente deslizarse en puntos íntimamente conexos con la materia actual, ya puede el lector penetrarse bien de las diferencias capitales entre el organismo legislativo contemporáneo y el anterior.

Todas ellas derivan de la doctrina acerca del sujeto de la soberanía. La asamblea ó asambleas no son de representantes de la sociedad, súbdita del soberano, sino de *mandatarios* de una colectividad soberana, y soberanos ellos mismos por razón y á título de ese *man-*

dato acerca de cuya efectividad ya se dijo lo necesario en otros pasajes. De aquí el que no sean órganos distintos el soberano, unipersonal ó colectivo, y el organismo representativo, sino que sea este mismo la colectividad soberana, y que á ella le corresponda además de las funciones legislativas comunes á otros órganos protárquicos ó centrales, ó extraprotárquicos, la sanción de la ley que la asamblea ó asambleas dan en forma de *decreto*, ó sea de sanción ó resolución soberana después de la deliberación previa.

En la poliarquía liberal que es, según hemos visto, la única forma lógica compatible con los modernos sistemas acerca del sujeto de la soberanía, la sanción y el decreto están inseparablemente unidos; en realidad, son una misma cosa.

En tal caso ninguna magistratura unipersonal participa de la sanción, limitándose el jefe del Estado á la promulgación de la ley ó sea á su *publicación solemne y suficiente en nombre de la asamblea ó asambleas legisladoras*, considerada ya la promulgación como una función y requisito ejecutivos necesarios para que la ley sea conocida por los súbditos.

3. La sanción, ó mejor dicho, la parte de ella que con tal nombre se cercena á las asambleas, es una agregación doctrinaria fundada en los motivos expuestos en capítulo anterior y proporcionada á la parte de atribuciones monárquicas otorgadas á esa jefatura del Estado, que en realidad no debiera tener más que las facultades ejecutivas que le delegase el parlamento,

considerándole como el primer servidor de la *soberana representación nacional*.

Como el jefe del Estado no tiene la plenitud de la soberanía, sino más ó menos parte en ella, (y ya sabemos la contradicción doctrinaria que esto implica), ni forma parte del cuerpo ó cuerpos deliberantes legisladores, la sanción que á aquél se otorga no consiste en la parte que con su voto toma en la resolución de la colectividad soberana, sino en una intervención posterior, reducida á usar el *veto*, esto es, *la facultad de impedir que sea ley el decreto del parlamento, ó de aplazar por algún tiempo la conversión en ley del proyecto votado por las cortes*. El primer *veto* se llama *absoluto ó resolutorio*, y el *segundo suspensivo*, de suerte que la *sanción*, reconocida por las constituciones modernas al jefe del Estado, se ha convertido de intervención activa y suprema en la función legislativa, que era antes, en mera pasividad de dejar hacer, de consentir, ó en el derecho de estorbar la acción legisladora de las cámaras. En el *veto*, que rarísima vez se atreven á usar los jefes del Estado, es donde más se nota la contradicción doctrinaria que comparte la soberanía entre la representación nacional y un funcionario ejecutivo, y la expresión más repulsiva de tal agregación inconciliable es el *veto absoluto*, que significa la distribución por mitad del poder soberano entre las cortes y el rey, adjudicando á las cámaras el decreto y al monarca la facultad negativa de dejarlo sin efecto.

4. La lógica exige que la existencia y actuación de las asambleas soberanas dependa de los comitentes

y mandantes que las confiaron en *representación* la soberanía que ejercen. Y ya que sea imposible que esta singular especie de mandato pueda retirarse cuando y como plazca y convenga á la comunidad representada, (cuerpo electoral), al menos solo por ministerio de la ley, y no por arbitrio alguno del jefe del Estado, debieran ser disueltas las cámaras, ó suspendidas sus sesiones, y congregarse el parlamento sin necesidad de convocación de ningún funcionario ejecutivo por elevado que fuere. La contradicción doctrinaria que encierra la concesión de ciertas facultades de convocación ó disolución del parlamento, ó la suspensión de sus sesiones al jefe del Estado es harto notoria para que necesitemos señalarla. Si éste se atreviera á usar á discrección, ateniéndose á la letra de la ley, la facultad de licenciar las cámaras ó interrumpir indefinidamente su funcionamiento la vida de las asambleas dependería del jefe del Estado, al cual se trasladaba de hecho, sino toda la soberanía, un odioso y absoluto poder negativo de la función legisladora y de la soberanía popular ó nacional, haciéndose imposible legalmente el gobierno, por supresión de una de sus funciones, á no ser que dictatorialmente se la arrogase.

Sobre este y los otros puntos, en que se refleja el doble caracter doctrinario y constitucionalista del derecho nuevo, insistiremos al tratar del constitucionalismo y de los gobiernos parlamentarios en estricto sentido.

5. Es cuestión, no de derecho racional ni tradicional, sino de derecho contemporaneo, la de si el organismo legislativo ha de funcionar en las mismas condi-

diones y con iguales formas y solemnidades en los períodos de legislación ordinaria que en los períodos de legislación constituyente.

Y como este término, al que otra vez nos hemos referido, es no poco indeterminado y oscuro, diremos que el problema que con esta expresión se plantea, no es el de toda y cualquiera mudanza ó reforma honda, acentuada y grave en cualquiera orden jurídico, ni siquiera en el público y aun en el político, sino en el de la organización, atribuciones y relaciones de los poderes públicos centrales, del Gobierno, del Estado en el estricto sentido de la palabra.

A primera vista puede ocurrir que, por razón de la importancia del organismo soberano y gubernativo superior, haya que proceder con mayor reflexión, madurez y cautelas, verificándose las variaciones legales de cierta importancia y trascendencia con requisitos y precauciones distintas y más prudentes y solemnes que en cualquiera otra mudanza. Y esto, la gravedad y extensión de la reforma, señala la diferencia entre la legislación ordinaria y la constituyente y sus respectivos períodos y condiciones.

Pero, aparte de que no solo en la esfera del derecho político protárquico, sino en el mismo derecho privado, la familia, la propiedad, la contratación, pueden darse casos y circunstancias de radicales y aun revolucionarios cambios que exijan tanto ó más que los de la constitución central las condiciones y solemnidades constituyentes, no se concibe la necesidad de éstas en la suposición fundada de la capacidad de los órganos legislativos, y de la manera detenida, circumspecta, re-

flexiva que para la formación de las leyes habrán consagrado la costumbre y la ley escrita en naciones regularmente adelantadas en la vida y en la cultura correspondiente al tiempo de existencia histórica. Cuando más, podrá decirse que las reglas especiales para esa situación no sobran ni huelgan, y tienen, por lo tanto, importancia relativa, bien que la cuestión sea secundaria y no de la gravedad circunstancial que hoy reviste, y que, á no haberse cortado revolucionariamente la continuidad de la tradición, apenas hubiera constitución histórica, no sé si tan previsorá ó tan casuística, que hubiera legislado para semejante contingencia.

Aun en la doctrina del derecho nuevo acerca del sujeto de la soberanía, tampoco se ve la necesidad de tales condiciones extraordinarias constituyentes, pues lo mismo en el supuesto *democrático* de la nación, origen de todos los poderes, que en el del pacto constitucional entre las dos soberanías, la antigua y la contemporánea, bien deben saber lo que hacen lo mismo, el pueblo soberano que el rey y la nación juntamente, y las garantías ordinarias para una buena legislación bastarán para esas leyes que introducen alteraciones más profundas. El que tiene aptitud para conocer sus necesidades y los medios legales de satisfacerlas y para designar sus *representantes mandatarios*, lo mismo puede penetrarse de los casos y exigencias anormales y excepcionales y de proveer á ellos según la gravedad de las circunstancias. Y en cuanto á los dos poderes contratantes que convienen en las constituciones doctrinarias el pacto constitucional, bien pueden novarlo en una legislatura más ó menos extensa y honda-

mente, de la misma manera que lo establecieron en otra.

Y para esta lógica conclusión nada influye, por ser extrínseca é indiferente, ni la cuestión de si el derecho político, y en particular el del organismo protárquico, ha de proceder ó no de las mismas fuentes que los otros, la costumbre y la ley, ni la diferencia entre constituciones *flexibles* y constituciones *rígidas*. No lo primero, porque precisamente no se trata de mejora sucesiva y continua, introducida por uso popular, sino de innovación legislativa directamente introducida por los órganos legislativos oficiales, y porque toda constitución, así social como política y protárquica, debe ser flexible, aunque algunas puedan tener el defecto de rígida, término tan equívoco como otros muchos, poco técnicos, que andan en circulación.

Y si, lógicamente, *el problema* no surge de la esencia misma del derecho antiguo ni del nuevo ¿cual será el motivo circunstancial de haberse planteado especulativamente y en el derecho positivo? Yo lo considero uno de tantos expedientes doctrinarios que, como todos ellos, procede de razonables sanas exigencias de la realidad y de la vida, siempre en contradicción con el absurdo y la insania del pensamiento moderno. Ya que no puedan evitarse los ordinarios desaciertos legislativos consumados por quienes disfrutan sin título alguno la investidura y función de legisladores, intentase á lo menos retardar y dificultar cuanto se pueda los serios peligros y las perturbaciones que amenazan al organismo superior del Estado. A ellos estimula y excita la congojosa inseguridad de un derecho que, por opuesto

á la razón y á la naturaleza, es indefinidamente provisional y tiene á los pueblos en una interinidad miserable y angustiosa. De aquí la perpetuidad del período constituyente, mantenida por el liberalismo abstracto á pesar de los vanos y estériles conatos del liberalismo orgánico por restaurar la continuidad de la vida y del derecho. Este crónico vicio innovador, sin consideración á la realidad y la historia, y el malestar de una sociedad sacada de sus quicios tientan y mueven al pueblo *soberano* á usar de su soberanía inmanente para cambiar de raíz una situación jurídica que creen depender en absoluto del arbitrio popular. Pues bien, al aplazamiento de los trastornos consiguientes á tal estado; á asegurar ya que no la consistencia, al menos una vida no tan efímera á las instituciones fundamentales, tienden las trabas puestas á la legislación constituyente.



1. Podrá parecer extraño que definamos la sanción confundiendo cosas tan distintas como son el acto de dar la ley, de instituir-la, y *el bien ó el mal, el premio ó castigo respectivamente anejos al cumplimiento ó á la infracción de ella*. El derecho natural distingue en toda ley ambas nociones; pero el uso y el lenguaje corrientes han dado á la sanción este sentido práctico, llamando así al último acto de generación, de for-

mación de la ley, al que expresa rigurosamente por su composición gramatical el término legislación, (1) al que, estatuyendo la norma, la comunica la *santidad* del derecho, del cual es manifestación y fórmula, y en la que se refleja, siendo justa, el caracter santo de la ley eterna de que participan la ley natural y la positiva. Porque, realmente, con el establecimiento de la ley se hace efectivo todo cuanto la ley supone é implica y, por lo tanto, lo que es de razón intrínseca de ella, el bien aparejado á la ejecución, el mal inherente al quebrantamiento de la regla.

El natural recelo con que los partidarios de la nueva política veían sustraer, ilógica y doctrinariamente, á la representación nacional parte, aunque fuera exigua, de sus atribuciones soberanas, produjo en algún tiempo, ya un tanto lejano, controversias acerca de si el jefe del Estado, el mismo rey constitucional, provisto del *veto absoluto*, que es más que la *iniciativa*, había de disfrutar también de ésta. Los más inclinados á los principios y exigencias del nuevo derecho argüían que la iniciativa regia podía, por la significación, poder y prestigio del monarca, coartar y restringir la libertad de las cámaras en la discusión del proyecto, contestando los más *conservadores* y monárquicos, que privándola de la iniciativa, se despojaba á la soberanía de la corona de uno de sus principales atributos legislativos, de un instrumento de gobierno, de un medio de interesarse por el bien público, en consideración de sus necesidades, á las que debe estar atenta la previsión del monarca, y dispuesto á satisfacerlas el celo providente del rey (2).

(1) *Legislatio* es el nacimiento de la ley, su producción, el acto en virtud del cual *se lleva* á la sociedad la norma deducida de la ley eterna, participada en la racional criatura para todas sus operaciones y relaciones.

(2) Esta cuestión no tiene interés para nosotros, ni siquiera ya para los autores constitucionales. Thiers la cortó con una observación práctica de ruda franqueza, de concluyente sinceridad, haciendo notar que en los gobiernos parlamentarios el principio de la responsabilidad ministerial, pone de hecho, no solo la iniciativa, sino la sanción en manos del gabinete

2 y 3. El término decreto por su significación gramatical y su composición etimológica, (de *decerno*, y este de *cerno* y el prefijo *de*), expresa el precepto autoritario en cuanto discernido, (*cerno* significa *cerner* y *distinguir*), sin diferencia de autoridad, y sea cual fuere la naturaleza de la resolución *decretada*, lo mismo legislativa que ejecutiva ó judicial, usándose, en eferto, lo mismo en sentido de legislación que de disposición administrativa ó decisión de juez ó tribunal. Pero convencionalmente se llama decreto en su acepción más categórica y principal á la resolución legislativa de las cortes, ó á la parte que las corresponde en la colegislación con el jefe del Estado, como indican la frase «las Cortes han decretado y Nos sancionado» ó según dice el encabezamiento de la vigente constitución..., *en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino hemos venido en decretar y sancionar...* y más claramente la Constitución de 1869.... *las Cortes Constituyentes decretan y sancionan...*, donde además se nota que en aquel código fundado en la soberanía nacional, (popular), y no en el principio más doctrinario de la igual cosoberanía de las cortes con el rey, y del consiguiente pacto constitucional, decreto y sanción son una misma cosa y se confunden en la misma persona moral soberana, las Cortes constituyentes (1).

parlamentario. Anticuada ya esta *grave materia* de derecho constitucional, no ya á los reyes, más ó menos *cosoberanos* con la asamblea, sino á los otros jefes de Estado, á los Presidentes de la república conceden la *iniciativa* la Constitución francesa (ley de 25 de Febrero de 1875) y la Constitución americana (art. 2.º, Sección 3.ª, 1.ª), pero es en los Estados Unidos donde de hecho la ejerce el Presidente por medio de mensajes. La razón es que la república norteamericana no es parlamentaria como la francesa.

(1) Lo mismo se dice en el encabezamiento de la Constitución de 1837:.. *las Cortes generales han decretado y sancionado y Nos, de conformidad aceptado...* La de 1812 dice también:.. *las mismas Cortes han decretado y sancionado...* En realidad, con una de las dos palabras bastaba, sobre todo con la segunda; si se emplean ambas en esas Constituciones es porque las Cortes son constituyentes y quieren dejar bien expresado que toda la soberanía constituyente les corresponde, sin intervención de la Corona. En cambio en las Constituciones de 1845 y 1876 la fórmula es la misma, expresiva

En ciertas repúblicas modernas el jefe del Estado tiene de hecho, aunque así no se la nombre, la sanción inherente á la especie de *veto suspensivo* que supone la facultad de aplazar la efectividad y aplicación de la ley, ó sea, de su promulgación, según hemos visto. En las monarquías *democráticas*, en que el rey no pasa de un supremo magistrado vitalicio y hereditario, cuyo poder no es propio, sino recibido de la nación, de donde emanan todos los poderes, bien que se le conceda la sanción y no se oculte el nombre, no se diferencia en sustancia de la de los presidentes de aquellas repúblicas; y sí solo en estar generalmente más destacado y neto y ser de mayor alcance el veto suspensivo, aunque tampoco se le menciona. Solo en las monarquías doctrinarias, las de la igual cosoberanía con los poderes nuevos, la sanción consiste en aprobar ó en rechazar el proyecto votado y decretado por las cortes, y, por lo tanto, es absoluto y resolutorio el *veto*, úsese ó no esta palabra que generalmente se evita por odiosa (I).

del pacto constitucional bien que atenuado, encubierto é implícito, para que no se destaque mucho la facultad de sanción en el rey; y arreglando la elocución de manera que Rey y Cortes constituyan una colectividad soberana que decreta y sanciona, sin que se alcance, por la letra, si ambos hacen las dos cosas y como, por más que bien se sepa, por los precedentes, por el espíritu y por el tenor de otros artículos y del texto en general, á quien corresponde la sanción y á quien el decreto.

(1) En la Constitución de 1812 está reglamentada con recelosa minuciosidad la sanción desde el artículo 142 que dice: *El Rey tiene la sanción de las leyes* hasta el 151 en que desenvuelve toda la doctrina legal de los efectos de la negativa de la sanción (veto), que solo puede ser negada dos veces por el monarca, quedando de hecho convertido el proyecto en ley si por tercera vez lo admitieran y aprobaran las Cortes, porque ya tiene entonces el Rey que sancionarlo forzosamente. En la Constitución de 1869 la sanción real queda reducida á menos que la presidencial en las Repúblicas de que hemos hablado; es un mero requisito y solemnidad constitucionales, al tenor de los artículos 34 y 39, puesto que dice el primero: *La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El rey sanciona y promulga las leyes*, donde se ve que la sanción no implica participación alguna en la función legislativa, no pudiendo entonces penetrarse qué clase de facultad, distinta de la

4. La Constitución de 1812 (artículos 104, 105, 106 y 107) determina cuándo y donde deben reunirse las Cortes y trasladarse, la duración de las sesiones, los casos y el tiempo de prórroga. El Estatuto Real, por su carácter de Carta otorgada, reconocía al Rey (artículo 24) la facultad de *convocar, suspender y disolver las Cortes*, salvos los casos en que la convocatoria era necesaria por ministerio de la ley constitucional (artículos, 27, 28 y 30). La Constitución de 1837, ni tan *democrática* como la de 1812, ni tan realista como el Estatuto de 1834, otorgaba al monarca (artículo 26) la facultad de *convocar* (las Cortes), *suspender y cerrar sus sesiones y disolver el Congreso de los Diputados; pero con la obligación en tal caso, de convocar otras Cortes y reunir las dentro de tres meses, de-*

de promulgación, supone en el monarca. El artículo 49 en su párrafo primero confirma esta exclusión del rey de todo acto legislativo, porque dice: *Ningún proyecto podrá pasar á ser ley sin que antes sea votado en los dos Cuerpos colegisladores.*

Las Constituciones doctrinarias de 1837, 1845 y la vigente de 1876 dan á la sanción real el valor y alcance que se ha expresado en el texto, no solo en cuanto consignan que el poder legislativo (*la potestad de hacer las leyes*) *reside en las Cortes con el Rey*, porque esto mismo dice (artículo 15) la Constitución del 12 en que el veto no pasa de suspensivo, sino porque los tres códigos políticos, reconocen en los mismos términos la sanción absoluta al monarca con estas palabras: *Si uno de los Cuerpos, colegisladores desechara algún proyecto de ley, ó le negare el Rey la sanción, no podrá volver á proponer otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en aquella legislatura* (artículo 44 de la Constitución de 1876, que concuerda en la letra con los artículos 38 y 39 respectivamente de las constituciones de 1845 y 1839.)

Ya digimos que en Inglaterra tiene la Corona *veto absoluto*, pero ha caído en desuso desde 1707. En el Imperio alemán, lo disfruta de hecho el Emperador, en cuanto en caso de disenso en el Consejo federal sobre proyectos concernientes al ejército, marina y ciertos impuestos, decide el voto imperial, si se pronuncia por el mantenimiento de la anterior situación. Y aunque para la efectividad de las leyes imperiales, basta la conformidad por mayoría de las dos Asambleas, con los votos que tiene Prusia en el *Bundesrath*, puede el Rey-Emperador mantener el *statu quo*, aparte de que la negativa de la promulgación en caso de *irregularidad* en la formación de la ley da, con otro nombre y por habilidoso modo indirecto, un veto absoluto al jefe del Estado.

biendo reunirse ellas el 1.º de Diciembre, si no las había reunido el Rey (artículo 27). Exceptuando esta reunión verificada por sí mismas, otro tanto disponen las Constituciones de 1845 y 1876, sin más diferencia que la mención que ésta hace de la parte electiva del Senado, en el caso de disolución. La Constitución de 1869 dispone lo mismo en su artículo 42, pero preceptuando en el 43 que el Rey las convocará, á más tardar, para el 1.º de Febrero, y que, por lo menos, han de estar reunidas cuatro meses en el año, sin incluir en este tiempo el invertido en la constitución de ambas Cámaras. También este código, como los anteriores, señala los casos de convocación extraordinaria.

De la Constitución inglesa han tomado nuestras constituciones parlamentarias el espíritu y aun la letra de tales preceptos, bien que en Inglaterra la reunión anual procede de la necesidad de votar anualmente el presupuesto, porque por ministerio de la ley bastaba que el Parlamento se reuniera á lo menos cada tres años (El *bill de derechos* sólo exigía la reunión frecuente).

Pero no sólo las constituciones de tipo parlamentario, ya monárquicas, ya repúblicas (1), admiten esta intervención indirecta del jefe del Estado en la función legislativa, sino aquéllos otros códigos políticos en que están los poderes públicos más distinguidos é independientes según doctrina constitucionalista, bien que entonces es menor la ingerencia como puede verse en la Constitución alemana y en la de los Estados Unidos (2).

(1) El Presidente de la República francesa tiene la facultad de convocar las Cámaras en caso extraordinario, la de suspenderlas un mes, cuando más, y una sola vez en cada legislatura, y, con la venia del Senado, disolver la Cámara de Diputados, bien que teniendo que convocar elecciones dentro de dos meses siguientes á la suspensión.

(2) En la República americana la intervención es mínima: se limita á la convocación de una ó las dos Cámaras en casos extraordinarios, y á fijar la época de suspensión de sesiones, cuando acerca de ella estuvieren las dos Cámaras en desacuerdo.

5. En realidad lo mismo significa aquí instituir que constituir, tomados estos términos en su acepción más amplia, porque uno y otro expresan el acto de formular, de hacer, de dar el derecho positivo, pero por uso convencional, se emplea la palabra constituir para denotar la institución que establece las normas generales y capitales de una relación jurídica por primera vez, y en forma de ley, no de costumbre, ó modifica después y no de un modo accidental ni limitado los fundamentos anteriores de la institución. Y aun se le ha dado á la función constituyente un sentido más restricto, circunscribiéndola, no á la constitución capital en cualesquiera órdenes jurídicos, sino á la que afecta á las bases orgánicas de los que en lenguaje constitucionalista se llaman los poderes públicos y á las relaciones políticas entre *el Estado y sus miembros*, como si tan importante, por lo menos, no fuera la constitución de la familia y de la propiedad; ó, por mejor decir, como si no fuera de mayor trascendencia una ley acerca del matrimonio ó de las relaciones entre el capital y el trabajo que las disposiciones constitucionales y orgánicas acerca del veto de los actuales jefes de Estado, ó del sufragio *universal* ó restringido, ó de la constitución del Senado á la *inglesa* ó á la *belga*.

Los modernos tratadistas no están contestes respecto del punto de que se trata, pues mientras unos, por ejemplo, Ahrens, distingue *el poder constituyente* y los *poderes constituidos* y las correspondientes funciones; otros como Balbo, creen preferible que no haya distinción entre leyes constitu-

En el Imperio alemán el Emperador, si bien convoca, abre, suspende y cierra así el *Reichstag* como el Consejo federal, es con las siguientes limitaciones: uno y otro deben ser convocados anualmente, y además el Consejo cuando lo pida una tercera parte de sus votos; por más de treinta días no puede suspenderse el *Reichstag* sin su consentimiento, ni dos veces dentro de una misma legislación, y la disolución, antes de cumplido el término legal, la decide el Consejo con aprobación del Emperador, y entonces las elecciones tienen lugar á los sesenta días para que á los noventa después de la disolución se reúna de nuevo esta Cámara.

yentes y ordinarias, y que unos mismos órganos, cual sucede en Inglaterra, provean á ambas clases de legislación.

Esto acontece en Inglaterra por las mismas causas en virtud de las cuales sucedería otro tanto en las constituciones históricas, si su continuidad no se hubiera interrumpido y si, á pesar de algunos actos extraordinarios de revolución, verificáranse suavemente las reformas de este orden, como de todos, mediante la acción alternada y armónica de la ley y la costumbre. Porque todas las constituciones tradicionales tenían la flexibilidad necesaria, en cuanto no eran dogmáticas y apriorísticas, y no formulaba entonces la legislación constitucional un schema cerrado y exclusivo, expresión de la categoría ideal y abstracta que para nada tiene en cuenta la realidad, ni procura adaptarse á ella y recibir su influjo. Las constituciones revolucionarias, inspiradas en un idealismo absoluto que presume implantarse en la vida sin modificación alguna de las formas lógicas del pensamiento, son las que tienden á cambiarse de la misma manera y por los mismos procedimientos con que se plantearon, con toda la constituyente solemnidad requerida por la nueva fórmula dialéctica, por la otra tesis, que acaso no tenga más relación con la anterior que la de los fluctuantes y variables pensamientos distintos y aun contrarios en el sujeto cuyas son. Y de aquí que, en la previsión de tales variaciones, pueda determinarse de antemano en semejantes códigos la manera y requisitos de la reforma constitucional, lo cual no quiere decir que sea indispensable prefiarlos en todo caso, ni que así lo hayan practicado siempre los idealistas legisladores constituyentes, ni que en la determinación ó en la omisión consista la flexibilidad ó la rigidez de las constituciones (1).

(1) La rigidez de las constituciones del liberalismo abstracto, (el otro el orgánico, no ha hecho más que ingerir en el constitucionalismo clásico algunas añadiduras de mera apariencia histórica, tradicional y corporativa), es la rigidez de la idea que se tiene por verdadera y se imagina que tal como es puede plantearse en todo su valor ontológico y en todo su rigor dialéc-

Y en efecto, algunas constituciones no tienen respecto de reforma constitucional disposición alguna, por ejemplo, la flexible Constitución inglesa y la inflexible constitución española de 1876; mientras que otras han legislado en previsión del caso, ora adoptando el criterio más radical de abrir un período constituyente, en el que cortes ó asambleas de

tico, y que de hecho así se ha introducido dentro de la realidad. Pero esto no significa que presuma el legislador haber concluido una obra perfecta é inmutable, y no se haga cargo de la eventualidad de una mudanza; antes bien, ante la posibilidad y probabilidad de ella, ya puede, y tal vez no esté de más, legislar para el caso de la sustitución de un organismo que por rígido precisamente, *no evoluciona*, y el cual, á causa de tal rigidez, hay que mudar total ó parcialmente, siempre en forma de revolución, es decir, de cambio hondo, extenso y súbito, no de paulatina é incesante mejora, tomando para ello las precauciones precisas.

Las constituciones no son rígidas porque el legislador las declare inmutables en todo ó en parte, ó porque no se puedan mudar por procedimientos legales ordinarios; son rígidas por su naturaleza misma de idealistas y divorciadas de la vida, por aquello de que una idea no es otra, ni la distinta, ni la contraria; mientras que, por el contrario, las leyes, sea cual fuere su naturaleza y categoría, que se atemperan á la realidad, van en ella experimentándose y contrastándose, y la misma naturaleza, modificando y mejorando los accidentes viciosos sobre el fondo perenne de razon y justicia que la institución contenga, comunica á ésta la flexibilidad de lo real, de lo viviente. Así es que no se comprende que, como Dicey, se haga depender la rigidez ó flexibilidad de las constituciones de cosa tan extrínseca, accidental y subalterna cual es el que algún derecho ó algunos derechos constitucionales ó fundamentales no puedan reformarse por el modo y procedimiento ordinario. Pudieran así reformarse las constituciones de Francia y Bélgica y seguirían siendo tan rígidas como son todas las de tipo idealista y apriorístico; hubiera la Constitución inglesa señalado los límites de lo *constituyente* y lo *constituido*, para determinar las distintas condiciones de la respectiva legislación, y continuara, sin embargo, tan flexible como hasta aquí. Precisamente de puro rígidas las constituciones de este tipo, como no se doblan, hay que quebrarlas, esto es, derogarlas con más ó menos extensión; y bueno fuera que el legislador cauto pensara en la mejor manera de estas modificaciones, enmiendas y reparos, y la tradujera en precepto constitucional, atendiendo al doble fin de retardar el momento constituyente y de hacer la reconstitución con los menores peligro y daño posibles.

esta clase proceden á la reforma, (los Estados Unidos, Bélgica, Suiza) ó un temperamento intermedio, menos expuesto á las incertidumbres y á los trastornos de una renovación y de otra *convención*, y que consiste en no abrir el período constituyente ni encomendar á nuevos órganos la labor reconstitutiva, sino á los ordinarios y anteriores, bien que actuando en condiciones y con requisitos extraordinarios, por ejemplo en Francia, donde al efecto se reúnen las dos Cámaras en Asamblea nacional en Versalles para acordar por mayoría la reforma ó reformas de que se trata.

La Constitución de 1869 dedica un título de tres artículos (Título XI. «De la Reforma de la Constitución» artículos 110, 111 y 112) á esta materia adoptando el criterio y procedimiento más radical de disolución de las Cortes ordinarias, para reunir otras dentro de los tres meses siguientes, las cuales, mientras deliberen acerca de la reforma, tendrán el carácter de constituyentes y no podrán ser disueltas, funcionando después como ordinarias. La Constitución de 1812 (Título X—«De la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella»—artículos del 372 al 384) adoptó un criterio especial y un dilatorio procedimiento que no es tan fácil clasificar incluyéndolos en cualquiera de los dos términos anteriormente expuestos, porque Cortes ordinarias (una ó dos Diputaciones generales) deliberan acerca de la admisión del proyecto de alteración, adición ó reforma y sobre el fondo del mismo, pero son otras Cortes las que al fin resuelven, bien que éstas no se diferencien de las ordinarias, sino en que al poder general otorgado por los electores de provincia á sus diputados, había que añadir otro *especial* (no significa el término mandato imperativo) para el caso propuesto.

El que las Constituciones *rígidas* de 1837 y 1845 nada dijeran acerca de reforma constitucional, no impidió que la primera fuera reformada por la segunda en términos explícitos de modificación, y que, aunque así no se diga en el encabezamiento, se considere la de 1876, como reformadora de las de 1845 y 1869 en un *prudente y conciliatorio* término medio, de

acuerdo y en unión el Rey constitucional con las Cortes del Reino actualmente reunidas. Y lo mismo puede acontecerle por procedimiento ordinario ó extraordinario, inglés ó belga á la Constitución de 1876.



CAPÍTULO XIII

LOS FUNCIONARIOS EJECUTIVOS Y JUDICIALES Y LAS RESPECTIVAS LE- GISLACIONES ORGÁNICAS.—EL JURADO. EL ORGANISMO CONSULTIVO.

1. Órganos de la función ejecutiva *stricto sensu* son igualmente la persona soberana (física ó moral) y toda la serie categórica (jerarquía) de funcionarios que en el centro ó en la periferia desempeñan los oficios esenciales ó tutelares del Estado, ó sea, de la colectividad gobernante suprema compuesta del soberano y de aquellas personas á quienes están encomendadas las atenciones ejecutivas que éste no puede retener, por imposibilidad de consagrarse personalmente á todas ellas. Así las funciones que el soberano ejerce por sí, como aquellas otras confiadas á los empleados protárquicos, lo mismo en el centro del Gobierno que fuera de él, son deberes y derechos públicos y políticos que se concretan en el soberano por el mismo hecho que determinó en él la soberanía; en los demás empleados por los títulos que suponen la vocación, la idoneidad y la elección y designación según los méritos y ajustadas á justicia distributiva.

Tanto uno como los otros cargos son representativos en cuanto implican ejercicio para interés principalmente ageno, predominando en ellos el fin de una legítima conveniencia pública, y no la utilidad privada y doméstica del soberano ni de sus agentes; pero no lo son en el falso supuesto de que, residiendo en el pueblo ó nación la función soberana ejecutiva como las otras, esta colectividad encomiende esas funciones por vía de *mandato* á la jerarquía administrativa, ora eligiéndola en todos los grados directamente, ya haciéndolo por conducto y medio del jefe del Estado. En la monarquía doctrinaria los cargos y empleos ejecutivos tampoco se tienen y ejercen en nombre de la nación, sino de la realeza, en virtud y como consecuencia de la yuxtaposición ecléctica que tal monarquía de pacto constitucional supone.

Cuando los empleos públicos dependían en absoluto del soberano, tanto para la elección de los funcionarios como en cuanto al ejercicio de la función, era ésta representativa, sino respecto de la sociedad civil, si respecto del poder supremo que encomendaba por delegación, á su omnímodo arbitrio y en forma jurídica de mandato, aquellas funciones que él no podía desempeñar ni, por lo tanto, retener. Mas desde que el nombramiento, ascensos, adelantos y ventajas, en suma, la organización de la jerarquía y acción administrativas se han considerado, en máxima parte, asunto de la legislación, por las garantías que la ley ofrece así al prócomún como al empleado, solo conserva la función tal caracter representativo en aquellos respectos en que el derecho positivo consuetudinario ó escrito concerniente

al ramo no ha limitado, sino dejado libre y expedito el arbitrio soberano dentro de los límites y en las condiciones que se dirán. Lo que sí conservan en todo caso es la naturaleza y forma de un arrendamiento de servicios, lo mismo cuando el contrato depende de la voluntad de las partes que cuando el arrendador y el arrendatario tienen que ajustarse á las condiciones legal y previamente determinadas para esta especial locación conducción.

En el empleo hay dos intereses y derechos que consultar y armonizar sin esfuerzo alguno y por la misma índole del cargo público. Es éste una necesidad de la nación y, por consiguiente, un deber de la ciudadanía, el cual, por su índole, no exige la prestación del servicio por todos los ciudadanos, sino por el número preciso de ellos, concretándose este deber abstracto en los idoneos para el desempeño de la función. Esta idoneidad que concreta el deber, determina también en el idoneo derecho á ejercitar su aptitud según la vocación y afición que generalmente acompañan á la capacidad y son el estímulo que mueve á elegir como honrosa profesión técnica el oficio administrativo á quien tiene título preferente á quien es más digno de desempeñarlo, debiendo reconocérsele este derecho según el mérito y con arreglo á justicia, y redundando de ello á la sociedad civil el mayor beneficio que para el procomún resulta del mejor desempeño de los cargos públicos: la armonía no puede ser más notoria.

En ella deben inspirarse la ley ó legislación del ramo, traduciendo en sus preceptos la garantía del empleado y de la nación y exigiendo para ello á éste la

idoneidad, esto es, la posesión de las condiciones de moralidad y competencia necesarias al desempeño del cargo, las cuales no son formalmente distintas de las que requieren los demás oficios y funciones sociales: rectitud y capacidad en el grado correspondiente á la importancia y jerarquía de aquéllos. De una y otra debe asegurarse el soberano, en cuanto es posible, por medio de una elección, que solo puede ser justa si de la manera más detenida y escrupulosa procura penetrarse de la rectitud y aptitud del empleado.

2. Por las mismas razones en virtud de las cuales soberanía no significa conducta de puro arbitrio no reglamentado por la ley, el soberano, en naciones regularmente adelantadas y organizadas, debe ajustarse á un previo derecho positivo consuetudinario ó escrito en el nombramiento y ascenso de los empleados, no habiendo motivo justo para que la carrera administrativa esté menos regimentada y organizada que la judicial, ni para que no exista tanto en una como en otra una legislación preventiva y represiva del *nepotismo*, ó sea, del *exceso y vicio que, considerando los cargos públicos como oficios domésticos que sirven é interesan solo al imperante, reparte este sin más norma que su capricho entre parientes, amigos y paniaguados*. Es el nepotismo una forma frecuente, gravísima y odiosa de tiranía y una de las manifestaciones y síntomas más carecterizados y repugnantes del parlamentarismo contemporaneo, sobre todo cuando falta ó es defectuosa la legislación orgánica de empleados.

Apercibida contra este vicio, la ley ha de fundarse

en los siguientes principios: *a*) ingreso por oposición en la carrera administrativa, señalando como principio de ella, para el efecto de esta forma de concurso, las funciones y cargos que suponen cierta competencia técnica, no exclusivamente práctica y de instrucción elemental, por ejemplo, escribientes, conserjes, porteros, ordenanzas; *b*) ascenso en condiciones que garanticen al funcionario, considerado digno por el hecho de permanecer en su puesto, el justo adelanto y mejora debidos y correspondientes á los años de servicio; *c*) inamovilidad en el cargo, mientras que sentencia judicial por delito incompatible con el ejercicio de función pública no prive del empleo al funcionario delincuente; *d*) retribución proporcionada á la entidad, importancia y grado de tales oficios, y no solo decorosa, sino tan pingüe como permitan la situación del tesoro, el estado de prosperidad de las demás clases y, sobre todo, la disminución del número de funciones protárquicas en el centro y en la periferia, ó, lo que es igual, la simplificación y atenuación posibles de la centralización, burocracia y expedienteo. Con estas condiciones promueve el legislador de la única manera que le es permitido y factible, esto es, de un modo indirecto, pero eficaz, la formación técnica y la educación profesional del empleado, su independencia y, por consiguiente, cuantas garantías y probabilidades, dependientes de la ley, sostienen y fomentan la moralidad, menos tentada cuanto más permanente y mejor retribuida la función y más asegurado el legítimo adelanto en ella.

En proporción de estas ventajas ha de ser la responsabilidad legal del funcionario, ora por meras culpa

ó falta y consiguiente corrección disciplinaria, impuesta por el superior jerárquico después de expediente con las necesarias formalidades y garantías, ya por delito apreciado y sentenciado judicialmente por el juez ó tribunal á que corresponda su conocimiento.

Es tal legislación, si no el único, un factor principal que contribuye al nacimiento y desarrollo del *espíritu y del honor del cuerpo*, los cuales no se diferencian formalmente del espíritu y honor corporativos de cualesquiera otros gremios, asociaciones y colectividades, ni producen distintos y menos favorables efectos para determinar y consolidar la educación (lato sensu) del empleado y fomentar su ilustración, rectitud, dignificación é independencia.

Pero no ha de ser aquí tampoco de tal modo rigurosa é inflexible la reglamentación legal, que del todo excluya y suprima el soberano arbitrio, tan necesario en éste como en los demás actos y oficios de la soberanía, y que es, según se verá, órgano perenne y siempre apercibido é idóneo de equidad rectificadora y supletoria de la ley positiva, dentro de ciertos límites y con determinadas condiciones. Respetando este arbitrio las bases expuestas de una buena ley de empleados, ha de permitir á la soberana prerogativa cierta razonable y libre acción, no solo para dictar, dentro de la ley, reglas concernientes á la función ejecutiva, sino para hacer ciertos nombramientos y decretar algunos ascensos sin ajustarse estrictamente á una previa norma inmutable y rígida. Sin poder determinar de antemano, y mucho menos en la parte elemental, la extensión de tal arbitrio, señalaremos, sin embargo, dos casos bien

marcados, de los cuales en el uno hay conformidad absoluta de apreciación, y en el otro acaso punto menos. Es el primero el nombramiento fuera del escalafón administrativo para ciertos empleos que exigen cualidades superiores á la mera competencia técnica ordinaria en el despacho de los negocios, y requieren más de las dotes presuntas de la capacidad aneja al tiempo de servicio, al grado jerárquico y hasta al más señalado mérito profesional mostrado en el ejercicio del cargo. No siempre un buen director general, ni siquiera la mayor parte de las veces, tendrá altura de ministro de la Corona. Así éstos, como los más elevados funcionarios diplomáticos, particularmente los destinados á embajadas extraordinarias, espinosas y comprometidas, y aun á la representación ordinaria en las naciones extranjeras de primer orden, deben ser de libre nombramiento del soberano. Porque necesitan y requieren éstas y acaso algunas otras funciones, no dotes administrativas solamente, sino las complejas y raras prendas y aptitudes del hombre de Estado, cuyas cualidades y formación no dependen exclusivamente del estudio, ni de la práctica en los varios ramos de la Administración, y que no pocas veces se encuentran en hombres no pertenecientes á ella.

Es el segundo caso de libre nombramiento el que tiene por objeto remunerar con ascenso, fuera de turno, méritos extraordinarios é insignes, bien que conciliando esta justa recompensa con el título que la antigüedad supone en todos los empleados, de modo que no sea ésta postergada, ni aun largo tiempo retrasado el ascenso del funcionario en quien el ingreso y la per-

manencia en el cargo suponen moralidad, aptitud y mayor ciencia y experiencia en él.

Así constituida la función ejecutiva y la jerarquía correspondiente de empleados aptos, probos, inamovibles, inmunes del caprichoso é injusto arbitrio, se forma y consolida dentro del organismo protárquico una moderación importante contra los abusos del poder supremo, que no puede á su talante ingerirse en estos oficios ni forzar á que se desempeñen de otra manera y forma que las prescritas por la ley.

3. La suprema función jurisdiccional que, por atribución propia ó por circunstancial tutela, corresponde al Estado, compete, del mismo modo que la ejecutiva, ó al soberano ó á aquella magistratura protárquica jerárquicamente constituida, la cual, en el centro ó en la periferia, tiene que ejercer la jurisdicción no desempeñada ni retenida por la autoridad soberana, imposibilitada de atender á la totalidad de los negocios judiciales propios de la soberanía.

Cuanto dijimos de las funciones ejecutivas es generalmente aplicable á la jurisdicción, también derecho público y político así del soberano como de los otros órganos que en su nombre desempeñan la que les ha sido encomendada. Esta se concreta en esos órganos dependientes por los mismos hechos y títulos que la función ejecutiva: la vocación é idoneidad judiciales del ciudadano, la elección y designación en justicia distributiva según méritos, hechas por el poder soberano, fuente y principio de jurisdicción, y en quien ella se origina al mismo tiempo y por la misma causa que la

soberanía. La jurisdicción propia del Estado tampoco puede decirse representativa, en el supuesto de haberla recibido éste por delegación ó mandato de la sociedad civil, en virtud del falso principio de la soberanía popular ó nacional, sino representativa en el ya dicho amplio sentido de ser la jurisdicción ejercicio de un derecho por y para el procomún, y no de la persona que en contemplación de éste la ejerce; y también la monarquía doctrinaria, como la tradicional é histórica, y por la contradicción consabida, considera al rey como sujeto de la jurisdicción con la diferencia de que no se circunscribe á la del Estado, sino que se refiere á toda la social, igualmente que se atribuye todo el poder ejecutivo por efecto del desconocimiento socialista de la autarquía de la nación.

Finalmente, también el adelanto orgánico de la sociedad y de sus poderes exigen que la magistratura, tanto en el ejercicio de la función como en el nombramiento y ascenso de jueces y magistrados, no dependa en absoluto del arbitrio del poder supremo; y así solo puede decirse representativa de la del soberano la función judicial no retenida, en aquella parte mínima en que éste intervenga en tal jurisdicción, ó pueda nombrar á su albedrío jueces y magistrados. Y hay que tener en cuenta que el supremo arbitrio en materia judicial se limitó mucho antes que en materia ejecutiva y, por exigencias racionales, será siempre más restricto, como quiera que los intereses confiados á la magistratura, por más individuales, se consideran más sagrados; y esta fué la causa de que el individualismo ó, mejor dicho, personalismo medioeval tratase de garantizar antes la independencia

de la función y organismo judiciales, y en parte lo consiguiera, mientras que hay naciones en que apenas está protegida, á estas fechas, la independencia de la administración y de sus empleados.

Por esto toda la doctrina expuesta en el número anterior acerca de las bases y condiciones de una buena ley de empleados es en general aplicable á la legislación orgánica de la jurisdicción y la magistratura, del poder judicial como ahora se dice, importando todavía más á la sociedad, en virtud de la razón apuntada en el párrafo precedente, la idoneidad, esto es, la rectitud y aptitud del juez que la del agente ejecutivo, y que se concilien de tal modo el interés social y el particular de los magistrados que, en cuanto de la ley dependa, se administre lo más cumplidamente que sea posible la justicia, á lo cual contribuyen el ingreso, el ascenso, la inamovilidad y la retribución en las condiciones dichas. Todo lo concerniente á la independencia y á la responsabilidad de jueces y magistrados y al espíritu y al honor de cuerpo está ya, en compendio y en substancia, expuesto en la doctrina relativa á estos puntos por lo que á los funcionarios ejecutivos respecta.

Tampoco debe estar, sin embargo, aquí tan restringido el soberano arbitrio que no pueda nombrar para caso extraordinario ó imprevisto juez ó tribunal especiales, ó añadir algún miembro adscripto á un tribunal ó juez ya establecidos, (esto sería lo más prudente y menos peligroso), ni premiar servicios y méritos insignes con ascenso, fuera de turno y antigüedad, bien que con las condiciones y cautelas indicadas respecto de los funcionarios administrativos.

La magistratura, constituida sobre tales y bases y con los dichos requisitos, es una moderación protárquica orgánica, poderosa y eficaz en proporción de tales garantías preventivas y represivas de los abusos del poder soberano, y tanto más importante cuanto más interesan los bienes que son así protegidos. Por eso la naturaleza y la historia anticiparon, bien que imperfectamente, estas cauciones, coetaneas en su nacimiento y desarrollo con las legislativas, y anteriores mucho tiempo antes á las de la función y organismo ejecutivos.

4. No tiene la institución judicial del *Jurado* más importancia que la de otras muchas instituciones del derecho nuevo, sin fundamento en la razón, ni más precedente en la historia que las de ciertas analogías accidentales y exteriores, ajenas por lo tanto á un fondo esencial común.

Porque el *Jurado* es un *cuerpo judicial colegiado, compuesto de jueces no profesionales, y generalmente no técnicos, encargados de apreciar el hecho, materia del juicio, y sus circunstancias y determinar el sujeto ó sujetos á quienes ha de imputarse el hecho y aplicarse la responsabilidad y consecuencias correspondientes*. Como se ve, está formulada la definición ó descripción de manera que comprenda al Jurado en materia penal como en materia civil (en el amplio sentido del término: administrativa, mercantil, etc.), aunque ahora es en asuntos penales donde predomina prácticamente la institución, y donde los más se contentan con verla establecida.

El Jurado traslada, pues, la jurisdicción á jueces que

no son permanentes ni profesionales, sin diferencia de técnicos y de legos; y decimos que les traslada y confiere la jurisdicción, pues á ellos atribuye la facultad de dictar el *veredicto*, sentencia efectiva en que se consignan los extremos dichos, reservando, con el nombre de *sentencia*, á la magistratura profesional la mera aplicación material y mecánica de la ley al caso, circunstancias y sujeto, y la técnica dirección de las actuaciones judiciales conducentes al efecto.

Suponen los sustentadores y defensores del *Jurado* que no se necesitan más que las luces naturales, ó cuando más la instrucción elemental del ciudadano y el sentimiento general del deber y de la justicia, sin más formación ni educación especiales del entendimiento y la voluntad, para discernir el hecho y sus circunstancias y el sujeto á quien deben ser atribuidos, por ejemplo, si Fulano saltó la tapia, si se apoderó de tal cosa, si fué de noche, etc. etc. Pero este que se alega como fundamento inmediato de la institución, y es generalmente el que aduce el vulgo, y el que está á su alcance, no tiene consistencia alguna, pues, aun suponiendo que cualquiera sirviese para esa función de justicia, los órganos técnicos de la jurisdicción tendrán, además de esa indoneidad general, la especial y más adecuada de la instrucción y de la educación propias de tales funciones, y en ellos, por más formados y aptos, debe de derecho concretarse, para que sea lo más perfecto posible, el ejercicio de la judicatura. A no ser que vaya á suponerse el absurdo que tal preparación del entendimiento y de la voluntad estorban al discernimiento de los hechos y á la rectitud del fallo. Aun concedien-

do que todo hombre sirva para el caso, el magistrado servirá mejor, y esto es lo que ha de procurarse.

Pero tampoco es exacto que cualquiera ciudadano tenga ni siquiera la idoneidad estrictamente necesaria para juzgar el hecho en verdad y en justicia; no en verdad, porque rara vez se presenta éste tan escueto y claro en sí mismo y en las circunstancias que no sea precisa una compleja y complicada labor crítica á fin de precisar aquél y éstas con toda exactitud, apreciando y discerniendo bien las múltiples causas y factores de uno y otras. No por no ser jurídico en sí mismo tal trabajo, deja de exigir un mayor y más comprensivo conocimiento que el estrictamente técnico, antes bien requiere todo el conjunto y enlace de datos y nociones que constituyen el difícil saber especulativo y práctico, el hábito y seguro tino adquiridos en el ejercicio no de una ciencia, sino de una enciclopedia de noticias y de iniciaciones correspondientes á todas las ciencias, la crítica. Esta ni siquiera la posee el mero jurisperito, es la excelencia y mérito del jurisconsulto, que tal debe ser el juez; y no se alcanza solamente en las aulas y en los libros, sino en el ejercicio de la magistratura, el único que puede comunicar ese golpe de vista, que pudiéramos llamar *ojo judicial*, como otro análogo se llama *ojo médico* ¿Cómo se pretende que un juez de ocasión, no solo lego en derecho, sino inculto y aun rudo, tal vez *analfabético*, pueda penetrar y deslindar ciertos estados de ánimo, la complejidad y oscuridad pasionales de extraños móviles de delincuencia que no pocas veces escapan aun al más delicado y sú-

til análisis, ó el cruzamiento intrincado de elementos objetivos concurrentes al caso ó suceso de autos?

Mas de lo que carecen principalmente los jurados es de la rectitud necesaria para el ejercicio de la función, porque no les basta la general moralidad mediocre de cualquiera, la que es indispensable en las relaciones comunes de la vida y se presume en todas las condiciones y estados sociales. Para juzgar á los demás se necesitan una más alta idea, un más arraigado sentimiento de justicia adecuados, á tal especie de sacerdocio; y ese grado de justificación y de equidad solo se alcanza con una educación dirigida y correspondiente al desempeño del cargo judicial, con la estima en que se le tiene por lo que se sabe que vale y por lo que cuestan la formación y preparación técnicas, con el amor á la profesión cuya entidad, importancia y trascendencia sociales son un constante estímulo para honrarla y dignificarla como exige y merece. Para el magistrado la justicia no es solo un deber, es el deber propio del oficio; mientras que para el jurado es una imposición molesta y arbitraria que, contra la vocación, aficiones y hábitos de este juez pasajero y ocasional, le arranca á sus negocios y pasatiempos y le mantiene distraído y contrariado en la enojosa y aun, abrumadora labor de largas horas, para la cual no trae dispuesto ni preparado el espíritu, y que más le agobia con el peso de las responsabilidades que con el de un trabajo extraordinario, desagradable y aun repulsivo. Salir del paso de cualquiera modo, sustraerse á esta faena gratuita y comprometedora, sin malquistarse con gentes á las que le ligan mil conexiones,

incluso la de vecindad ó de territorialidad próxima, es, salvo honrosas excepciones, todo el empeño del jurado, que, cuando obra por móviles menos ilícitos que el soborno, la sugestión ó imposición del caciquismo, cede á la amistad, á la compasión, al miedo, al influjo y amenaza de la opinión mala ó buena, al egoismo ó á cualesquiera otros impulsos contrarios á razón y derecho. Lo mejor que puede hacer un jurado imperito pero discreto y honrado, es buscar en torno suyo un compañero de competencia y moralidad efectivas y, confiarse á su criterio en absoluto; pero lo frecuente será que ese jurado, aun siendo técnico, encuentre no pocas razones que le eximan, acaso hasta en conciencia, de pronunciarse con rigurosa é inflexible justicia en el sentido de una penalidad severa, por lo mismo que no eligió la profesión judicial, y á la fuerza le imponen un acto opuesto á los impulsos de la sensibilidad, no contenida y confortada por el deber del cargo y por el espíritu de cuerpo.

Todo lo cual quiere también decir que el jurado tampoco posee la independencia precisa, que en la magistratura garantizan, hasta donde es posible en lo humano, no solo esa rectitud más preparada, apercibida, vigorosa y consistente, la vocación y la afición al oficio, el espíritu y el honor profesionales, la menor intimidad con las personas, la carencia de relación de nacimiento ó larga vecindad en el territorio de la jurisdicción, sino también y muy especialmente la inamovilidad, la retribución decorosa y suficiente y las severas sanciones con que la ley defiende la seguridad y

dignidad del juez de derecho y con ellas la libertad del procedimiento y del fallo.

5. Razones tan notorias, contrarias á la institución, descubren desde luego su fundamento y origen en la esencia, en la entraña misma del derecho nuevo, aunque tal base y procedencia se disimulen y aun oculten acaso, ó no todos los partidarios del jurado las penetren, y aun cuando el rigor del principio se atenúe y tergiversen con las incompatibles agregaciones doctrinarias que son inevitables.

A pueblo soberano corresponde pueblo juez; porque la jurisdicción es una función de la soberanía, como la legislación y la administración, y ni una ni otras pueden ser patrimonio de los antiguos poderes históricos, de la legitimidad tradicional; de aquí la tendencia á la jurisdicción inmanente como igual derecho, si no de todos, cuando menos de los ciudadanos, cuya colectividad ó cuerpo juzga en modo y forma de representación, mediante y por el conducto de los jurados, que se designan generalmente por sorteo. Como se ve, el Jurado es una institución esencialmente individualista é igualitarista, y no de cualquiera de los individualismos é igualitarismos históricos no sistemáticos, sino de los que se fundan, lo mismo que la soberanía del pueblo, en la concepción liberal filiada en el racionalismo preschellingniano. El derecho á ser jurado es un derecho individual que, aunque no se atrevan á llamar nativo, lo mismo que á la soberanía, eximiéndose así de la inmediata contradicción de no predicarlo de todo hombre, incluso el ya animado, pero aún no nacido, lo atri-

buyen, cuando menos, al ciudadano, y lo consideran tanto deber y carga como facultad y prerogativa, de la ciudadanía. En abstracto corresponde á todos aquéllos, pero se concreta en los que se necesitan para las funciones judiciales por medio ó de la elección ó del sorteo, principalmente de este último, por más pronto, fácil, expedito y menos expuesto á los inconvenientes y males del *discernimiento* electoral.

Los jurados son, pues, representantes del pueblo juez, á diferencia de la antigua magistratura que lo era del soberano legítimo, cuando el nombramiento de ella dependía en absoluto del arbitrio de éste; y el absurdo fundamental no es menos evidente, porque tan incapaz es de juzgar como de legislar el nuevo ciudadano, y no menos inapto para elegir jurados y diputados que respectivamente juzgen y legislen en su nombre. Las contradicciones doctrinarias consisten: *a*) en que el cuerpo de ciudadanos en quien inmanentemente reside la jurisdicción no designen electivamente á los jueces mandatarios, discutiendo antes y poniéndose de acuerdo acerca de las condiciones de esos representantes judiciales y dándoles cuantas instrucciones sean compatibles con la ley sustantiva y adjetiva á que han de atemperarse juicio y fallo, designándoles para un solo asunto ó para varios, ó por más ó menos tiempo ó indefinidamente; *b*) el que se exija capacidad intelectual alguna, aunque no sea más que la de saber leer y escribir, para ser jurado, bastando con que entre los designados haya uno que sepa hacerlo, y ni aun siendo eso preciso, puesto que no faltará escribiente que transcriba lo que se le dicte, ni funcionario que dé fe de la autenticidad del

veredicto; la sola exigencia de la lectura y escritura es algo como *judicatura de los inteligentes* y confesión palmaria de que no sirve cualquiera para juzgar; y entonces, estirando lógicamente la consecuencia hay que procurar no aptitud mínima, sino la idoneidad bastante y la más perfecta posible, es decir, que sean jurados los magistrados, ó, lo que es igual, que se suprima la institución; c) la mixtificación que supone el reunirse para el juicio en un mismo cuerpo colegiado ó tribunal jueces de derecho y de hecho, siendo así que la función técnica, aquí subalterna y puramente material y de mecánica aplicación de la ley, y aún la de dirección de las actuaciones preliminares previas y del juicio oral pueden ser confiadas á uno de los jurados conocedores del derecho; para lo cual la ley, ó, lo que fuera más lógico, el pueblo, soberano juez, procurarían designar miembros jurídicamente aptos y dispuestos á este fin, que dieran desde luego al veredicto forma científica y artística de sentencia, así como á todo el curso del proceso público precedente; d) la de atribuir al Jurado solo el conocimiento de ciertos delitos, y no el de todo género de infracciones graves y leves, así como el juicio de toda cuestión litigiosa privada ó pública, en cualquiera orden del derecho, no ejerciéndose jurisdicción alguna que no sea en nombre del pueblo y no de jefatura alguna del Estado, ni reteniendo esta función ni prerogativa judiciales de ningún género.

Y si el Jurado es una institución esencialmente contemporánea, derivada de los principios jurídicos del liberalismo abstracto y planteada por la Revolución, la consecuencia que de esto se desprende es que todas

las instituciones anteriores, aunque tengan semejanzas más ó menos marcadas con aquel, no implican comunidad alguna de sustancia y fondo sin solución de continuidad histórica. Todo se reduce á similitudes externas y de puro accidente, las cuales no pasan de haber existido cuerpos judiciales compuestos de personas no profesionales ni siquiera técnicas, y, cuando más tribunales *de pares*, no en el concepto igualitarista de hombres y ciudadanos, sino de jueces pertenecientes á la misma clase social; es decir, era un privilegio de los distintos órdenes que se miraban con harto recelo y aun hostilidad para consentir en ser juzgados por otros que *por los de su igual* como aun sigue diciendo el pueblo con expresión gráfica y exacta.

6. No hay persona tan sabia, prudente, discreta y atinada que no necesite con más ó menos frecuencia el consejo ageno, es decir, *parecer ó dictamen que la ilustre acerca de la conducta que ha de seguir en uno ó varios actos y negocios*, pudiendo ser potestativa y libre la consulta del juicio y opinión agenos, pero habiendo ocasiones en que es necesaria y constituye un deber moral ó jurídico según los casos. La razonable y modesta desconfianza de sí propio procede de la humildad que es obligación de todos, aunque virtud de los menos, y que los hombres superiores saben hermanar con la prontitud, energía y decisión de las resoluciones bien meditadas, ó de las que hay que adoptar sin dilación, timidez ni vacilaciones en circunstancias de urgencia que no consienten espera.

A pesar de la superioridad propia de la soberanía,

la extensión é índole de sus atenciones y cuidados, tantos y tan difíciles y escabrosos, hacen necesario el consejo técnico acerca de la justicia y oportunidad de las medidas de gobierno de más importancia y trascendencia, ora legislativas, ya ejecutivas ó judiciales. Y es tanto más precisa la consulta, cuanto que la superioridad de la soberanía debe ser más por parte de la voluntad que de la inteligencia, y no hay soberano, por culto que se le suponga, que sepa cumplidamente cuanto tiene que hacer y no necesite que le ilustren, no solo acerca de la materia legal, de los bienes morales y materiales sobre que versa la acción ordenadora esencial ó tutelar, sino acerca de la forma jurídica, esto es, la rectitud con que hay que proceder respecto de ellos para dirigirlos al fin y procomún sociales, y respecto también de la prudencia que exigen é imponen la situación y el estado histórico de la época y del pueblo. Este es el triple objeto de la consulta, por la cual se entiende así la demanda de consejo como el consejo dado y la conferencia en que de palabra se formula y fundamenta el consejo y acerca de su materia se discute entre el aconsejado y los consejeros.

Siendo el consejo acto tan natural y necesario y uno de los estimables bienes y auxilios sociales que libremente, ó por deber, se prestan entre sí los hombres, raro será el soberano, si alguno hay que no lo haya hecho, que no pida consejo en los asuntos áridos y que no tenga alguno ó algunos consejeros permanentes ó mudables, aunque no sea más que para descargarse de parte de la responsabilidad moral del acto y compartirla con aquéllos.

También es lo natural que en las sociedades nacientes, y que tienen en embrión y en informes rudimentos su organismo, el soberano pida el consejo á las personas de su mayor cercanía é intimidad, parientes, domésticos y amigos, y que del arbitrio de él dependa la elección de consejero en cada tiempo ó período y aun caso. Pero, á medida que adelantan la vida y la constitución nacionales, el órgano consultivo, individual ó colegiado *a)* va convirtiéndose de privado en público, es decir, no se busca el consejero en la familia ó séquito doméstico del soberano, sino fuera de ellos, en personas que, por su posición extrafamiliar y su consideración y prestigio públicos, ofrecen mayores garantías de inspirarse en el procomún y no en el interés de la persona y casa del soberano; *b)* tiende á hacerse permanente y en cuerpo colegiado, como quiera que es el consejo función pública importantísima y difícil y requiere la idoneidad intelectual y moral adecuadas y la formación y preparación correspondientes para conseguir las dotes, prendas y excelencias de un ilustrado y recto consejero.

Al mismo soberano le convienen tales evolución y trasformación, no solo porque asegura así la rectitud y oportunidad del acto gubernativo, sino porque aquéllas reducen las proporciones y alcance de la responsabilidad moral y social del supremo imperante, de manera que este interés se concilia y armoniza con el público de la moderación efectiva y poderosa que ofrece y representa un organismo consultivo adecuadamente dispuesto.

La variedad y complicación de asuntos en que se

necesita y ejercita el consejo, exigen no un consejero, sino varios, un número, ni tan escaso que le sea difícil y acaso imposible llenar cumplidamente su cometido, ni tan abundante que con la multitud se introduzca gente mediocre y estorbe la muchedumbre la discusión y el pronto despacho de la consulta. Esta función ha menester no un órgano, sino un organismo, un cuerpo ó cuerpos colegiados suficientes, pero no sobrantes, por excesivos.

Porque puede ser asunto de controversia, que excede de las proporciones é intento de esta sección elemental, si el Consejo (cuerpo consultivo) ha de ser uno ó varios, según la diversidad de objetos de la consulta, pero nadie sostiene que el soberano ha de tener un solo consejero.

En cuanto á la idoneidad de estos, dése por reproducida en conjunto toda la doctrina concerniente á la de los funcionarios ejecutivos y los magistrados, sin más diferencias que las que se desprenden de la naturaleza del oficio consultivo y de la posición de los Consejos protárquicos ó centrales. La ley y el arbitrio soberano deben, en prudente combinación, contribuir á la formación del Consejo y á llenar los huecos que abran la muerte, la jubilación, la destitución judicial ó la renuncia; y aunque más parte ha de tener en ello la ley que el arbitrio, no puede ser éste tan restringido como respecto de la magistratura y de la administración, á fin de que el soberano pueda elevar á sus consejos, sin atenerse á los escalafones, á personas adornadas de más dotes de las que supone la mera aptitud técnica en los respectivos ramos, y que, sin haber hecho de ellos profe-

sión, descuellan con notoria superioridad y gozan de bien cimentada fama. Además aquel arbitrio prudente de premiar con ascenso, fuera de turno de antigüedad, merecimientos extraordinarios, no puede ser mejor empleado, y sin sospecha de arbitrariedad, que nutriendo, enriqueciendo y dignificando el Consejo ó Consejos con la sabiduría, virtud, experiencia y prestigio de los funcionarios administrativos más distinguidos y los magistrados más insignes.

Este arbitrio es también preciso para llevar al organismo consultivo los miembros más beneméritos de la aristocracia, sin perjuicio que también la ley incluya la nobleza entre las categorías de donde se forma y se renueva el Consejo; porque no debe componerse éste exclusivamente de hombre de ley, sino de la clase social que tiene por uno de sus oficios el gobierno, en el más amplio sentido de la palabra, según expusimos en el Capítulo XII del Libro II. El factor aristocrático representa todas las garantías de recta consulta anejas á los frutos de la educación más esmerada y eficaz de las altas clases, es decir, superior virtud y más arraigado y vivo sentimiento del honor, amen de la mayor independencia de la posición, del conocimiento experimental de la realidad y de la vida, del amplio y elevado cultivo de las diversas relaciones sociales, de la noción más exacta de las gentes y del influjo que dan sobre ellas todos los recursos y prestigios de la cuna, de la riqueza, cuando sabe la nobleza mostrarse digna de sí y de las humanas funciones á que Dios la destina. Jurisconsultos y nobles recíprocamente se instruyen, educan y estimulan y completan en el Consejo, comuni-

cándose sus respectivas dotes comunes y especiales y contribuyendo á convertirlo en escuela y seminario de buenos políticos; porque la seca rigidez legalista se temple y modera con la equitativa flexibilidad, con la magnánima y generosa tolerancia que es cualidad habitual y frecuente de la verdadera nobleza, y á la vez el severo espíritu de justicia y el profundo sentimiento de recta y bien entendida igualdad de los hombres no solo de ley, sino de derecho, preserva á la aristocracia de soberbio engreimiento y la previene contra el avasallador y tiránico abuso de su poderío social.


Así constituido el Consejo, es también una moderación protárquica de tanta significación y virtualidad cuanto es el valor intrínseco de la consulta, la respetabilidad del cuerpo consultivo, la merecida reputación que goza en una sociedad culta y honesta, en la cual ha logrado justamente el favor de la opinión y del espíritu público. Para todo aconsejado recto y prudente, un sabio consejo tiene no poco de preceptivo, y la discusión é informe de consejeros ilustrados y respetables por todos conceptos equivale en cierto modo á deliberación y voto de asamblea colegislativa; porque, por su propio interés el soberano, cuando no por conciencia, movida en razón de la justicia y oportunidad del consejo, mirase mucho antes de separarse del parecer de tan graves, doctos y virtuosos varones como deben ser los consejeros. Así, bien orientado é inspirado el poder supremo, es más facil el acuerdo con la representación nacional, y en caso de disconformidad entre aquél y ésta, más firme la posición, más fundada la resistencia del soberano, más autorizada su aptitud y

más probable la final concordia cuando las cortes no están soliviantadas por malas pasiones y por fermento revolucionario.

7. Al Estado no corresponde directa ni principalmente la adecuada formación intelectual y moral (educación en amplio sentido) de los funcionarios, de que se ha tratado en este capítulo, porque no es el Estado, sino otras personas físicas y colectivas, órgano docente ni moralizador por función intrínseca, inmediata y habitual. La sociedad, por el conducto y ministerio de esas personas, forma, educa á las tres clases de magistraturas como á los demás ciudadanos, según los diversos estados, clases y oficios, desenvolviendo la instrucción y educación, (stricto sensu), técnicas y profesionales sobre los principios y fundamentos de la pedagogía genérica, así común á todos los nacionales como especial según el orden y posición de cada uno.

La Universidad tal como se la ha descrito en las páginas 281 á 285 del Capítulo VI, del Libro II y especialmente la Facultad de Derecho son uno de los principales factores de la instrucción jurídica, é indirecta y subalternamente, de la educación profesional de funcionarios administrativos, jueces y consejeros, á los cuales ha de tratar de instruir sólidamente con enseñanza inicial y fundamental común á todas los ejercicios y funciones del derecho, y con el elevado intento de formar jurisconsultos en cuanto esto incumbe á la Escuela y á su período de docencia. Pero, si bien el propósito inmediato de la universitaria no necesita ni puede generalmente ser otro que la preparación é iniciación capita-

les del hombre de derecho, cuya vocación se determinaría plenamente más tarde y fuera ya de la Escuela, no de otro modo que también después se perfeccionará técnicamente en la especial profesión jurídica, esto no obsta para que la universidad, trazándose y desarrollando un plan de estudios tan comprensivo y completo como su libertad y recursos la permitan, tenga en cuenta la variedad de direcciones y oficios jurídicos y provea á tales especialidades con las asignaturas y enseñanzas correspondientes, al menos con las fundamentales y más precisas. Así, ya en la Escuela pueden insinuarse, determinarse y atenderse las varias aptitudes y aficiones de los alumnos y empezar á diferenciarse la instrucción y formación adecuadas á las funciones dichas como á otras especulativas ó prácticas del derecho.



1. En derecho racional no existe distinción alguna entre *funcionario, empleado y agente* y no hay por esto para qué señalar las convencionales, aun discutidas y todavía no bien deslindadas en que se ocupa el moderno Derecho administrativo, acerca de cuya *substantividad* ya se ha dicho lo que pareció oportuno en el primer capítulo de este tratado, y en el número I de mi *Guta para el estudio del Derecho administrativo*. Se ha convenido en llamar *agentes* á los funcionarios más su-

balternos y de oficio más material y de menos iniciativa; pero en cambio, en la sinonimia entre funcionario y empleado les será difícil á los tratadistas hallar más sùtiles relaciones y matices que los que el vulgo descubre sin esfuerzo entre los dos términos: que el empleado se ocupa en la función, y que en ella emplea el funcionario su actividad.

Los empleados ó funcionarios de los gobiernos cesaristas, tiranos ó despóticos de la antigüedad, en que la relación privada y la pública se confundían é identificaban en el interés personal y doméstico y en la persona del soberano, eran servidores de éste y de su casa y familia; y aunque menos que mandatarios, por la supeditación y hasta servidumbre en que estaban, podían, sin embargo, considerarse en absoluto representantes del rey, César ó emperador, en cuanto no gestionaban más que asuntos del imperante supremo. En las repùblicas griegas y romana, aunque de carácter y organización notoriamente socialistas, eran al fin los empleos cargos del Estado y magistraturas elegidas por la comunidad de los ciudadanos; pero en Roma, desde que la República se fundió en la dictadura cesárea, solo se conservó el nombre y el recuerdo de las antiguas funciones, y éstas y las de nueva creación se consideraron como oficios domésticos de la persona y casa imperiales, sobre todo cuando la monarquía cesarista adoptó la organización y formas de los antiguos imperios de Oriente. El feudalismo, en cambio, empezó á dignificar, tanto los empleos públicos desempeñados cerca de la persona del caudillo, convertido ya en rey, como los que se ejercían fuera de la corte; porque, si bien es cierto que aún no estaban deslindadas las relaciones con la persona del soberano, de las que se tenían con el supremo representante de la sociedad civil, en cuanto órgano superior de gobierno nacional, el vasallo era en cierto modo un igual del rey, ligado al doble servicio privado público que le prestaba por un convenio explícito ó implícito, por el feudo, de cuya naturaleza contractual se ha hablado tantas veces en el curso de este tratado. Los vasallos, los grandes vasallos especialmente, eran verdaderos compa-

ñeros del monarca, y no, á la manera de los antiguos *comites* del emperador, cortesanos supeditados y serviles, menos que criados, á quienes benévola y graciosamente otorgaba el César un título de puro nombre y aparato, sino compañeros efectivos en cierto modo, puesto que fueron caudillos independientes, libres como el alodio, y que se obligaron voluntariamente y á cambio del beneficio recibido, (*bien fecho*), á servir al primero *inter pares*, al primer caudillo con quien no tuvieron más vínculos que los consentidos y paccionados.

Mas á medida que se engrandeció la monarquía, y en la misma proporción se aumentó el número de sus atenciones que, por múltiples y complejas, requerían mayor competencia que la del señor feudal, fueron los empleos haciéndose profesionales y técnicos, cargos ya bien marcadamente públicos, y el rey designó á las personas que habían de desempeñarlos, sin que apenas limitara la ley la regia prerogativa durante todo el período de la Edad media y de la moderna (1). La ley de empleados era una de las cosas que había ya que hacer cuando el antiguo régimen fué sustituido por el nuevo; pero ¿qué derecho tienen á imputar este atraso y defecto á la monarquía histórica los que á estas fechas tienen harto sueltas y libres la mano y la arbitrariedad para los mayores excesos de ese nepotismo de que se nutre principalmente el vicio parlamentario?

2. El ingreso por oposición parece el mejor medio de asegurar, á la vez que la justicia distributiva, el interés público, en virtud del cual las autoridades correspondientes de esas sociedades tienen el deber y el derecho de elegir entre

(1) Cuanto más absoluta se fué haciendo la monarquía, menos limitación tuvo el rey en el nombramiento y ascenso de los funcionarios, máxime siendo el absolutismo real un retroceso hacia el cesarismo, que, en cuanto lo consintieron el cristianismo, ya harto arraigado en la sociedad, y la misma benignidad y virtud de los reyes, menos responsables y culpables que nadie del exceso absolutista, confundía de nuevo al soberano con la nación, identificando sus asuntos é intereses.

los más aptos de los que tienen título, aun suponiendo que fuera este ganado y merecido en establecimientos docentes serios, sabios, conocedores de sus deberes y celosos del decoro y buen nombre del instituto. Es también tal ingreso modo indirecto, pero eficaz, de promover en esos centros de instrucción social libre la sólida enseñanza, estimulándolos el interés de los padres, el de los alumnos y el de las sociedades, á las que éstos han de servir como funcionarios, á honrosa emulación y competencia en la preparación profesional, que ha de pasar por la difícil y aun ruda prueba de un minucioso y escrupuloso juicio comparativo donde nada sirvan títulos vanos sin ciencia. Y no hay para qué decir como á la moralidad del empleado contribuyen el ascenso, la inamovilidad y la retribución debida y aun pingüe, haciéndole cada vez más digno é independiente. Los honorarios de una función pública deben ser, en cuanto se pueda, proporcionados á la entidad, importancia y alteza de esa función, á la clase de trabajo que supone, á la preparación que requiere y á los esfuerzos y aun sacrificios que ésta exige. Consintiéndolo las circunstancias apuntadas en la sección elemental, sería convenientísimo hoy más que nunca mayor retribución todavía para atenuar, y reducir, cuanto fuere dado, el doloroso y funesto contraste entre los rendimientos de las profesiones liberales, honrada y no piratecamente ejercidas, sobre todo, las de los funcionarios públicos, y los ingresos de las industrias materiales de la menor jerarquía y dignidad, incluso los de las mismas manufacturas y comercio en pequeña proporción y escala. Tan enorme diferencia de posición, contraria al orden natural de las cosas y á la relación y armonía de los oficios y clases sociales, y cuyas causas no hay tiempo ni oportunidad de señalar aquí, produce desastrosos efectos, y entre ellos la humillante situación de gente distinguida y superior por la función que desempeña, por la cultura, educación, aficiones y gustos, y á la que una *aristocracia* improvisada, y sin prendas personales de efectivo y humano mérito, posterga con la soberbia é insoportable arrogancia de la riqueza grosera é incivil. Estado tan anómalo y violento es con-

trario á la independencia del empleado y constituye, por sí sólo, un tentador estímulo á la prevaricación.

De ella defienden á los funcionarios como á los miembros de las demás asociaciones y gremios, y en proporción y medida de la posición y oficio de cada uno, el espíritu y el honor de cuerpo que no es para ninguna colectividad cosa distinta de lo que es para los populares, ni produce menos beneficiosos resultados que los expuestos en el Capítulo X del Libro II, página 407.

Respecto de la extensión y libertad del arbitrio soberano, hay que añadir que en sociedades desmoralizadas, donde el nepotismo está en razón directa de la habitual injusticia, el mal menor será reducir, todo lo posible, la acción soberana, máxime en situaciones de vicioso parlamentarismo oligárquico en que no el jefe del Estado, sino los ministros disponen de los cargos públicos como botín de los partidos turnantes, repartido no entre los mejores, sino entre los más desalmados y audaces de la facción. Hay que restringir entonces el arbitrio á lo estrictamente preciso, encadenando casi en absoluto la facultad ministerial en el ingreso y ascenso de los empleados, y no considerando de libre elección más que los ministros y los primeros puestos diplomáticos de más alta representación ante las naciones de primer orden y las embajadas extraordinarias (1).

(1) El artículo 54 de la Constitución reconoce al rey la facultad de «nombrar y separar libremente á los ministros» y ya se verá lo que es, al tenor del constitucionalismo, tal prerogativa; pero el parlamentarismo considera *políticos*, esto, es de libre nombramiento ó poco menos, por las *condiciones legales* que exige á los elegidos, otros empleos ejecutivos inmediatamente inferiores, por ejemplo, subsecretarios, directores generales, que en ningún caso deben dejar de ser *administrativos* para el efecto de ascender á ellos, por antigüedad, ó méritos distinguidos los funcionarios pertenecientes á la carrera y no otros. Y ya se comprende lo que en el *argot* parlamentarista significa convencionalmente cargo político: cargo de *confianza del ministro*, *decorosa coonestación* de la reserva de esos puestos y de su disfrute para los que han prestado más servicios al partido y más deservicios á la nación.

3. Aunque las palabras magistratura, magistrado designan respectivamente, en general, función y funcionario público, se aplica convencionalmente y en sentido estricto al cargo y al empleado judiciales, siendo magistratura sinónimo de judicatura, y más usado que éste término, y magistrado lo mismo que juez, si bien en acepción aún más reducida se dice magistrado al juez de categoría más elevada, miembro de algún tribunal superior ó supremo. Pero jueces y magistrados, ora sean órganos individuales, ó pertenezcan á cuerpos judiciales colectivos, ejercen en la forma representativa expuesta en la parte elemental, y no como supuestos mandatarios del pueblo, la jurisdicción, ó sea, como la misma composición etimológica del término expresa, la *facultad de pronunciar, de aplicar el derecho en los juicios, ó sea, en los casos en que hay controversia jurídica entre partes* (1).

También la jurisdicción como la administración, el *mixto*,

(1) Aunque el legislador también *dice, pronuncia* el derecho, se ha convenido, por antiguo uso, en llamar *jurisdicción* al acto de pronunciar el derecho en casos concretos cuestionados, mientras que se reserva la palabra legislación á la *dicción* del derecho formulada en regla abstracta y general para los casos que sobrevengan. Pero, en realidad, también es *legislación* el acto de *llevar* la ley desde la norma al hecho determinado y controvertido; aunque el lenguaje vulgar y el técnico hayan asignado á cada una de estas palabras una propia y distinta idea. Ya comprenderá el lector que la sinonimia entre magistrado y juez no se refiere al derecho procesal romano anterior á la abolición del *ordo judiciorum privatorum*, en que la jurisdicción correspondía por regla general al *magistrado* y el conocimiento de los hechos y la sentencia al juez. Entonces el magistrado que tenía el *imperio*, ó sea la facultad de mandar, la potestad pura y netamente ejecutiva, tenía también la de hacer ejecutar en caso dudoso de contienda (*jurisdictio*), para lo cual retenía todas las atribuciones judiciales, menos las que encomendaba al juez, las cuales eran judiciales en sentido estricto y se limitaban á la apreciación de los hechos y sus pruebas y á la aplicación de los principios jurídicos que trazaba el magistrado al caso controvertido. Borrada por Diocleciano y sus sucesores esta diferencia, y erigido en regla general lo que antes era excepción en juicios extraordinarios, fueron desde entonces magistrado y juez una misma persona según el derecho positivo como según el derecho racional.

como el *mero imperio* fué, durante mucho tiempo, función y asunto privado y doméstico del soberano que la ejercía por sí ó la encomendaba, á su arbitrio, á personas de su familia, casa y séquito, con las instrucciones amplias y con la intervención que le placiera en el enjuiciamiento encomendado al mandatario; y del propio modo en Grecia y Roma se erigió la función judicial en incumbencia de público interés, encargada á las correspondientes magistraturas, hasta que el cesarismo imperial romano volvió á considerar al César fuente única de toda la jurisdicción, así la retenida, como la delegada á sus servidores, y supremo juez de apelación y de avocación de todas las causas y negocios judiciales. El feudalismo introdujo en la jurisdicción el mismo cambio que en la función administrativa, porque los vasallos, especialmente y primero los grandes vasallos, iguales al rey en los conceptos tantas veces repetidos, no podían avenirse á que los juzgara ni á su arbitrio, ni como juez único, y en calidad de absolutamente superior. Antes bien, como partes ligadas por el contrato explícito ó implícito de feudo, y sin más relaciones de dependencia que las pactadas, había que someter el asunto controvertido á un tribunal de pares, en el cual era el rey un miembro, con el honor de la presidencia, reduciéndose el juicio á una especie de arbitraje, dictado por los iguales. El mismo efecto se produjo en la jurisdicción concejil del realengo respecto de los pobladores y pecheros, los cuales, no por razón de igualdad con el rey, sino de los beneficios concedidos por el fuero local para estímulo y fomento de la población, gozaron la inmunidad judicial como la administrativa, esto es, el derecho de ser juzgados, de la misma manera que eran gobernados por su ayuntamiento, del cual formaban parte los órganos jurisdiccionales igual que los ejecutivos.

Pero, aunque la jurisdicción se descentralizó, ó mejor dicho, se desconcentró en términos que, durante un largo período de la Edad media, el rey ejerció en mínimas proporciones una judicatura que no solo en primera instancia se repartían señores y concejos, los códigos generales mantuvieron el

principio romano del César, fuente y supremo poder jurisdiccionales, siendo la *justicia* una de las cosas inherentes al señorío real. El quebranto del poder abusivo de la nobleza, la restricción de la inmunidad concejil, el desarrollo y crecimiento de la autoridad monárquica, la reivindicación de atribuciones esenciales de ella y de otras que no lo eran, devolvieron al rey funciones jurisdiccionales de que le habían privado la usurpación y el desuso; y desde entonces aquella jurisdicción mal deslindada, que ejercía á veces en primera instancia el rey, y muchas más en última los señores, fué distinguiéndose algo más, aunque todavía de un modo harto confuso y embrollado, en jurisdicción retenida y en jurisdicción delegada, no solo en las Chancillerías y Audiencias primero, y en el Consejo Real después, sino en autoridades locales que ya no eran órgano de la jurisdicción concejil, (1) y en otras jurisdiccionales de la Casa y Corte del Rey, que fueron de creación anterior al Consejo y á las Chancillerías.

Fué éste un defecto accidental del antiguo régimen, que

(1) Llegó en España el régimen constitucional sin que en orden jurídico alguno estuvieran bien señaladas y circunscritas las tres instancias, y ni en la primera la jurisdicción autárquica local, ni en la última ó suprema la delegada en el Consejo Real (de Castilla) y la retenida por el rey ó ejercida por otros funcionarios. Al lado de la que recibieron y ejercieron de un modo permanente y circunscripto los cuerpos colegiados, especialmente judiciales (las Chancillerías y Audiencias) y aquel otro de heterogénea y múltiple naturaleza y varias y confusas atribuciones, (El Consejo) había otra jurisdicción medio retenida, medio delegada: retenida en cuanto radicaba en la Corte y Casa reales, delegada en cuanto no la ejercía personalmente el rey, sino por medio de sus alcaldes, que constituían cuerpo colegiado también. Es decir, siempre rigió, en teoría, el principio socialista romano de no haber más que una jurisdicción, la del Estado, cuyo representante fué el César y luego el rey en las monarquías medioevales; la época de descentralización y desconcentración, así feudales como concejiles, desparramaron sin distinción de instancia esa jurisdicción por la periferia; y luego, cuando el rey recogió una buena parte de ella, lo hizo con la misma confusión conque antes se había esparcido, sin distinguir la clase ni los grados de la jurisdicción, ni las autoridades unipersonales de las colectivas, ni la jurisdicción central ó del Estado, de las locales ó de la nación.

concluyó sin haber establecido una organización más distinta y definida de funciones y de órganos, imperfecto estado, al cual siguió la absurda división constitucional de esas funciones, erigidas en poderes independientes, y que consideró al judicial, como delegado ó encomendado en su totalidad á la magistratura, sin otra excepción que la de la gracia de indulto. De un vicio histórico se pasó al irracional absurdo contrario: antes toda la jurisdicción era del rey, ahora solo ejerce la gracia de indulto, que ya veremos á qué se reduce de hecho donde el poder efectivo del ministerio convierte en nominal el del monarca, que entonces tampoco ejerce nada del poder ejecutivo, á pesar de la constitucional distinción entre éste y el judicial y de la ambigua fórmula de significación convenida y arbitraria, con que se expresa y consagra esa aparente pretendida diferencia (1).

(1) El artículo 74 de la Constitución («La justicia se administra en nombre del Rey»), tomándolo á la letra y separado de todo el conjunto legal y significación efectiva del código, expresa que, aunque sea el rey único sujeto y fuente de la jurisdicción (el antiguo principio socialista de una sola jurisdicción, la del Estado) toda la ejercen por delegación y en representación de él los Tribunales y Juzgados, que esto quieren decir los términos *en nombre del rey*. La excepción, ó sea la jurisdicción que *retiene*, no está contenida en este título IX, sino en el art. 54: párrafo 3.º, título VI. («Indultar á los delincuentes con arreglo á las leyes»), porque ó el legislador la consideró ejecutiva, atendiendo al procedimiento menos judicial del indulto y no á la naturaleza de la función, ó no atreviéndose á establecer restricción alguna al principio de toda la jurisdicción delegada, acudió al *inocente* y pueril subterfugio de disfrazarla de ejecutiva, ó, finalmente, por la tendencia liberal y constitucional de engrandecer este poder á expensas del otro, y arrebatarle una de sus prerogativas, haciendo como que le cambia naturaleza y nombre, mudándola de lugar en la Constitución.

En cambio, al menos al tenor de la letra de ella, todo el título VI, («Del Rey y sus ministros») y especialmente en conjunto el artículo 50, y en concreto y circunstancialmente, los 51, 52, 53 y 54, (aparte el yerro de considerar función ejecutiva la sanción de las leyes) asignan al rey toda la función ejecutiva que sin excepción ejerce y retiene, (la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el rey,... artículo 50—) y sin más limitaciones que las de los artículos 55 y 56; pero donde el dogma constitucional de la responsabilidad del ministerio ha reducido la monarquía á mera magis-

Lejos de eso, aunque, por obra de la historia y por la naturaleza de los asuntos judiciales, sea más restringido el arbitrio soberano en materia jurisdiccional que ejecutiva, tampoco en aquélla puede suprimirse en absoluto como ha hecho la nueva política; antes las mismas razones que en los demás órdenes y asuntos abonan aquí la acción suprema para suplir y enmendar en casos extraordinarios el defecto del proceso ó de la sentencia, bien que ajustandose, por regla general, la autoridad de ese superior juez á las leyes *sustantivas* y *adjetivas* vigentes. No es de nuestra incumbencia fijar los límites dentro de los cuales debe moverse ese prudente arbitrio, que siempre ofrecerá las garantías de la superioridad moral del poder soberano y las ventajas de la ley personificada en el imperante, viva y flexible, sobre el rigor de la en muchos casos deficiente letra muerta y petrificada (1).

tratura honoraria, sin acción y poder algunos, resulta que *tanta* jurisdicción como función ejecutiva *retiene* el rey: toda ésta, y de aquélla la gracia de indulto la poseen y ejercitan los ministros, ora á su arbitrio, ora al de las cámaras, según el giro y carácter que en cada país haya tomado el parlamentarismo.

(1) Cuanto mayor es el adelanto social y más deslindados están por la ley los dominios de las respectivas jurisdicciones y sus grados jerárquicos, menos peligros hay de intromisión abusiva del soberano, sea cual fuere la instancia; porque la justicia y discreción de éste reservarán para muy graves y excepcionales circunstancias la intervención en el proceso ó la modificación del fallo. Mas ¿quién negará lo razonable y equitativo que es la posibilidad de que el rey descienda, si puede y quiere, hasta un juzgado municipal inclusive, á defender contra abusos ilegales ó legales el asunto litigioso de un desvalido, asunto que, no por ser en sí mismo de ínfima cuantía, tiene para el pobre menos importancia que los ventilados ante un tribunal supremo. El abuso es lo que hay que condenar, no la ingerencia legítima, la cual puede extenderse hasta á conceder, en situaciones bien calificadas, moratorias á ciertos deudores honrados, víctimas de abrumadoras y desusadas calamidades y aflicciones. Este sistema de recelos, *previsiones* y cautelas, que ha sustituido del todo la precaución mecánica á la buena voluntad del imperante, es coetáneo, sino cómplice y aun futor de las mayores iniquidades; mientras que, por el contrario, en la época de la jurisdicción personal del soberano, ganaban los particulares pleitos frecuentes y cuantiosos á la corona.

4. La importancia del punto me ha movido á incluir en la parte elemental toda la doctrina que en otros se comparte entre las dos secciones. Aquí solo añadiré como cuestión ó problema propuesto al estudio ó consideración de los doctos, si convendría, sino siempre, en ciertos casos, agregar á los tribunales de derecho algunos elementos técnicos, aunque no fueran profesionales, ora por ministerio de la ley, ó por voluntad, arbitrio y acuerdo de las partes en las diversas clases de juicios. La razón de esto podría ser ó la importancia desusada y verdaderamente anómala del negocio criminal, ó de introducir en éste y en el asunto civil un principio arbitral equitativo, del cual acaso sean, no lo afirmo, órgano más adecuado, no por la competencia, sino por menor apego pragmático á la letra de la ley, jurisconsultos, verdaderos también, pero dedicados á otras funciones y menesteres jurídicos y más dispuestos á una labor de jurisprudencia más amplia y menos cerrada, más inspirada en la realidad y en el uso del pueblo y menos prevenidos contra esa importante fuente legal.

5. Del juicio feudal de pares ya se ha dicho lo bastante en el número 3 para poder distinguirlo del Jurado. No se percibe entre ambas instituciones más similitud que la de no ser los jueces profesionales, ni aun técnicos, ni los juzgadores de superior estado y condición á los sometidos á esa jurisdicción ejercida por iguales; pero el juicio feudal no se fundaba en la supuesta igualdad de todos los hombres, ni en el error de ser la jurisdicción una función soberana y perteneciente como tal á la comunidad de los ciudadanos, sino que fué el privilegio de una clase poderosa y preeminente, que no reconocía más superioridad que la consentida, ni derecho jurisdiccional en otros que en los que eran y valían tanto como ellos. Las dos instituciones son individualistas; mas de distinto individualismo: de atraso y defecto el uno, de aberración sistemática el otro. Además, en el juicio de pares unos mismos jueces entendían en el hecho y en el derecho, lo que no acontece en el Jurado, cuyo carácter es la distinción entre las

funciones encomendadas á los jueces legos y las encargadas á la magistratura técnica.

Por este aspecto, más se parece el Jurado al *ordo judiciorum privatorum*, anterior á Diocleciano y á las ulteriores mudanzas, porque en ellos el juez a) entendía de lo concerniente á los hechos; b) generalmente no era persona constituida en dignidad administrativa ni jurisdiccional, ni revestida de mero y mixto imperio, y, por lo común, cuando las partes no se ponían de acuerdo para designar el juez que entendiera en el negocio, y tenía por esto carácter como de árbitro, se elegía de entre los comprendidos en el *album judicum selectorum*. Aunque entendiera el juez en el hecho, no podía decirse ni igual, ni no profesional ni técnico, sino también y en cierto modo magistrado, cuando pertenecía al tribunal de los decenviros ó de los centunviros, ó hacían de jueces los recuperadores. Como todos ellos estaban constituidos en dignidad, podían decirse magistrados, aunque no entendieran *in jure*, sino *in judicio*.

Tiene, sin embargo, la división del proceso romano en parte jurisdiccional y parte judicial, correspondientes á la función jurídica y á la de puro hecho, una explicación harto natural y sencilla, para que nadie se obstine en buscar y señalar á la institución antigua y á la nueva un fondo común y una sustancial identidad y relación históricas. Los magistrados mayores entre los cuales, después del advenimiento de la República se repartió el imperio y la jurisdicción del rey, y que, al principio de la nueva forma gubernamental, heredaron los cónsules, hicieron lo que había hecho el monarca, delegar parte de las funciones judiciales, y por la misma razón que aquel supremo magistrado lo hacía, por ser muchas las atenciones inherentes al gobierno ejecutivo, y á la función judicial, al mando (imperio) á la jurisdicción (juicio). De la misma manera que el rey, en quien toda la jurisdicción se compendió, menos la gracia de indulto que retuvo el pueblo, podía abrir y dirigir el proceso y dictar la sentencia por sí mismo, ó confiar la continuación de aquél á un delegado ó comi-

sionado, por ejemplo, la investigación de la rebeldía armada á los *duoviri perduellionis*, de la misma manera los magistrados republicanos mayores que fueron recibiendo sucesivamente una parte de la autoridad cercenada al Consulado, encomendaban una parte de sus funciones jurisdiccionales, las de comprobar los hechos y dictar sentencia (*judicare*), reteniendo las principales, las más jurídicas (*jus dicebant*), esto es, la determinación de la fórmula y los principios que habrían de aplicarse á los hechos. Aunque según el derecho racional todo eso, lo mismo lo correspondiente al magistrado que al juez, es jurisdiccional ó judicial, que es lo mismo, sin embargo, divididas las funciones, se llamó jurisdiccional en estricto sentido lo que retuvo el magistrado, y judicial lo encomendado á una *magistratura* no profesional, de hecho y de ocasión, y *jusdicere* fué distinto de *judicare*. Ahora bien se ve la radical diferencia: el jurado es *representante* de la jurisdicción popular; el juez romano, ora elegido por las partes (*judicem sumere*), ó por el magistrado, ó por la suerte, es delegado de la magistratura, cuya jurisdicción remotamente é *in radice*, procedía de la comunidad patricia, que la trasladó por ministerio de la misma ley constitucional al monarca, al cual sustituyeron después los magistrados mayores. Aun antes de Diocleciano, en ciertos casos y juicios se procedía *extra ordinem*, *in judicio extraordinario* y con *extraordinaria cognitio*, es decir, el magistrado conocía del derecho y del hecho, y este fué en adelante el procedimiento, borrándose en derecho positivo una distinción contraria al derecho natural, aunque hubiera tenido sus motivos históricos (1).

(1) No solo las atenciones de mero y mixto imperio de la magistratura determinaron la partición de la función judicial; hay que reconocer que la facultad de elegir juez concedida á las partes, y que era la regla general cuando para la designación no se ponían de acuerdo, constituyó una prerrogativa de la ciudadanía que reservaba al juicio cierto carácter arbitral y extrapúblico, tal vez recuerdo y rastro de aquella época de individualismo en que sería asunto privado de los *patres* ventilar entre los interesados todo negocio judicial, cualquiera que fuese su índole. En las remotas edades, en

6. La consulta que necesita el soberano versa sobre la materia del derecho y sobre el derecho mismo, en lo que se refiere á la ciencia y sabiduría de él, y á la prudencia y oportunidad de su realización y práctica, especialmente en la función legislativa y en la ejecutiva. La competencia técnica relativa á lo primero, esto es, á los bienes humanos, así morales, como materiales que hay que ordenar según su naturaleza, y en cuanto al Estado incumbe, á los correspondientes fines, es imposible reunirlos totalmente en los cuerpos consultivos, los cuales necesitarían congregarse en su seno todos los saberes, desde el más encumbrado hasta el más humilde para poder aconsejar cumplidamente. Así es que en el Consejo ó Consejos solo se informa en materias jurídicas, y cuando más acerca de esos otros asuntos que, sin ser de jurisprudencia, están con esa alta sabiduría especulativa y práctica más ligados en concepto de ciencias fundamentales ó auxiliares, religión, instrucción pública, etc. Pero la jurisprudencia no es mero conocimiento teórico; implica y supone además la ciencia experimental de la vida y

que la vida social apenas alcanza más intimidad y extensión de la *gens*, y se halla todo lo más en los albores una comunidad civil más amplia, las cuestiones judiciales entre los *patres familias* no se resuelven por autoridad superior, sino por acuerdo entre los interesados, por juicio arbitral convenido, ó por la fuerza. Cuando las gentes empiezan á estrechar los indispensables vínculos de sociedad nacional, comienza también á hacerse materia pública una mínima porción de asuntos judiciales, así en el orden civil como en el criminal, y esto sucedería al constituirse la Ciudad Estado de Roma, como la de los demás pueblos: ventilárianse en las asambleas los asuntos judiciales de mayor entidad, que al fin en máxima parte asume el jefe unipersonal del Estado, como autoridad permanente y de acción continua, dispuesta á entender judicialmente siempre que sea preciso. En Roma perdieron antes que en las tribus germánicas las familias el poder de la acción privada en lo criminal, pero la conservaron más tiempo en lo civil, que afecta harto menos al procomún. De aquí que en los juicios, no todo lo hiciera la magistratura pública, sino una buena parte la magistratura privada, el juez, especie de árbitro, generalmente nombrado por las partes para apreciar cosa de tal importancia como es el hecho, hasta que el absolutismo imperial concentró toda la función (*jurisdictio et iudicium*).

de la realidad en todos sus órdenes, la cual se adquiere no solo en los libros, sino en el trato donde se ejercita y perfecciona el sentido gubernamental, la habilidad política; y este arte, de que se ha tratado en el Capítulo I del Libro I, debe ser una de las distinguidas y preferentes dotes del consejero, que las necesita más que los otros funcionarios, aun los altos empleados administrativos, con exclusión de los ministros y embajadores, porque los consejeros tienen que intervenir á menudo y habitualmente en arduos negocios de Estado, interiores é internacionales.

Y es claro que, cuanto mayor es el número de las funciones y oficios tutelares de que tiene que encargarse el poder soberano, mayor es el círculo de la consulta y, por consiguiente, mayor es el saber, experiencia y número de los consejeros, y más difícil conseguir un organismo consultivo tan amplio y competente como se necesita. Es entonces imposible un solo Consejo, y por eso en los centros administrativos en los ministerios se establecen, con distintos nombres, otras especialidades técnicas, otros institutos de consulta como sucede hoy, los cuales se van multiplicando á medida que más atenciones pesen sobre el Estado, por tutela ó por intromisión absolutista.

Las monarquías de la Edad antigua no tuvieron otros consejeros que los que elegía el capricho del supremo imperante y que más bien que rectos consultores eran, por lo general, serviles aduladores é instrumentos del arbitrio justo ó injusto del soberano. Con la Edad media y el feudalismo, fué la consulta un deber y un derecho de los grandes vasallos, y aunque el consejo y sus órganos nobiliarios significaban y representaban entonces un privilegio de clase, al fin tenían sobre el Consejo antiguo y sus miembros la ventaja de la mayor independencia, siendo el informe además una especie de deliberación legislativa, y confundiéndose así en sus orígenes el factor y cuerpo consultivo con el brazo ó estamento colegislador de la nobleza, aun en el reino de Castilla, heredero en teoría y en la letra de su constitución, de la monarquía absoluta de los go-

dos. La moderación que este consejo feudal comunicó á la monarquía no hay necesidad de encarecerla.

Pero la consulta feudal era una consulta de clase, y solo nacional indirectamente, en cuanto tenía la nobleza, á pesar de sus exclusivismos y violencias, superiores virtudes públicas y mayor patriotismo que los demás órdenes de la sociedad. El interés de esta, armónico y solidario del de los reyes, exigía, no un consejo privilegiado, sino un consejo nacional, que entonces no se concebía que pudiera estar compuesto de otra manera que por las tres clases integrantes de la sociedad civil, y de modo que se estableciera entre ellas cierta ponderación y equilibrio, para que no se sobrepusieran y perjudicasen unas á las otras. A esto, más que á la idoneidad, había que atender, directamente al menos y con preferencia, y sobre tales bases se instituyó en Castilla el Consejo real, dando igual participación en él al clero, á la nobleza y al pueblo, que habían de estar representados por distinguidos miembros de las respectivas clases, pero marcándose luego, tal vez con inconveniente desproporción, la tendencia de los reyes á aumentar el número de consejeros letrados, es decir, los representantes de esa clase de jurisconsultos más favorables al crecimiento de la monarquía y al mismo poder personal absoluto de los reyes. Entonces es, sin embargo; cuando empieza á tomar su caracter verdadero de cuerpo técnico, bien que no con exclusiva participación de los hombres de derecho, porque nunca fueron desechados el clero ni la nobleza.

El Consejo Real no fué solo cuerpo consultivo, sino gubernativo, esto es, administrativo y además supremo tribunal de justicia. Y era natural: no estaban bien repartidas las funciones públicas entre órganos que no se habían establecido á un mismo tiempo por la concepción apriorística de un código político, ideado y planteado en un solo momento histórico; así es que, aunque el establecimiento de tales institutos obedeciese á un propósito principal, hijo de una necesidad predominante, encontrábanles los reyes muy á propósito para encomendarles además otras funciones de su soberanía que

no podían ellos, ó les era menos cómodo y aun favorable al interés nacional, desempeñar por sí.

Por esto se comprende que, siendo tan escasos y mal determinados los cargos y funciones de la administración central, hiciera el rey órganos ejecutivos á los consejeros, encomendando la acción no adscripta á los anteriores cargos á estos funcionarios de nueva creación, á quienes consideraba tan capaces de administrar como de aconsejar, y acaso los más abonados para poner en práctica aquello sobre que versó la consulta. Por la misma razón los hizo supremos jueces en aquella alta jurisdicción que no había delegado primero á varias magistraturas unipersonales, así en el centro como en la periferia y luego á las audiencias y chancillerías. El desempeño de la suprema justicia, que retuvo el monarca, se fué haciendo más difícil á medida que, con el adelanto y varias relaciones de la vida social, se aumentaron y complicaron también los múltiples asuntos judiciales que venían en alzada al tribunal del rey y que, ni por la sencillez ni por la claridad, podían ser como antes resueltos *ex equo et bono* y sin necesidad de la correspondiente y necesaria competencia en un derecho escrito harto abundante y aun ya contradictorio en distintos puntos. De aquí el que no bastara ese cuerpo consultivo, y al advenimiento de la Edad moderna, que coincidió con la unidad nacional por la fusión de las soberanías de los Estados ibéricos en una misma persona, y con mayor pluralidad de asuntos y atenciones del poder central, á causa principalmente del glorioso engrandecimiento territorial del Estado español, fueran precisos nuevos Consejos, que no impidieron, sin embargo, que el de Castilla desempeñara cada vez nuevas funciones y echara sobre sí el peso abrumador de muchas de las que la monarquía concentró ó por necesidad tutelar ó por ingerencia indebida (1).

(1) El Consejo de Castilla, además de sus oficios consultivos y de los administrativos que desde el establecimiento de la Secretaría de Estado, y, especialmente, desde la creación de varias, compartía con estos altos funcio-

Parece, por esto, que la historia se ha pronunciado en favor de la variedad de cuerpos consultivos, sobre todo para los modernos Estados, en los cuales es cada día mayor la concentración burocrática de funciones que antes incumbían á la sociedad, y de las cuales se venía ésta haciendo cargo por derecho racional y tradición histórica. Además, la división del trabajo según la vocación y aptitud producirá su natural efecto de mayor competencia de los diversos cuerpos consultivos en las materias de su especialidad, [garantizando así el mayor acierto de la consulta y estableciéndose al mismo tiempo que una provechosa emulación entre los varios consejos, un razonable contrapeso que prevenga é impida el excesivo engrandecimiento, el espíritu invasor y absorbente de un sólo organismo que en todo informe y entienda.

En pro del Consejo único puede aducirse que en él habrían de tener cabida todas las aptitudes y especialidades, arreglando en una buena ley orgánica la distribución de los asuntos según la variedad y afinidad de negocios en distintas divisiones, secciones ó salas, constituyendo este organismo con personal bien seleccionado y elegido, ni escaso, ni numeroso. Así se lograría mayor unidad en el criterio y en la evaluación del informe, auxiliándose unas salas á otras con sus luces, ó consultando en pleno en los más arduos negocios; se evitarían las cuestiones de competencia en asuntos de naturaleza dudosa, mixtos, como si dijéramos, evitando emulaciones

narios ejecutivos, verdaderos ministros de la Corona, ejercía funciones judiciales correspondientes á inferiores instancias, y alguna vez, á título y con ocasión de jurisdicción suprema, llegaba hasta desempeñar, en representación del rey, una verdadera función legislativa de tal importancia en el orden privado y trascendencia social pública y política como la conversión efectiva, aunque disimulada, de los foros temporales en verdaderos censos enfiteúticos perpétuos. Esto significa la serie de provisiones que, desde la de 1763, mandaron suspender los pleitos pendientes sobre foros en que el dueño directo pedía la extinción de éstos por haber transcurrido el tiempo estipulado al establecerlos, suspensión que se convirtió en estado definitivo.

extraviadas, susceptibilidades vidriosas y aun envidias, rencillas y querellas. Este consejo único, por lo mismo que no comparte con otro sus funciones, responsabilidad y posición, resulta más respetable, ante el soberano y ante la opinión pública, teniendo por esto más autoridad y fuerza moral su consulta y representando una moderación preventiva de más poder y eficacia contra los abusos del poder supremo. El espíritu de cuerpo es también correspondiente á la posición y prestigio que supone un solo órgano colegiado de consulta, y, por lo tanto, de mayor efecto y más favorables resultados el sentimiento de virtud, de dignidad y de honor que tanto influyen en la rectitud y prudencia del dictamen.

A pesar de ello trátase aquí de una cuestión menos importante y aun subalterna, comparada con otras muchas, máxime si se tiene en cuenta que, cuando en una nación ha ido estableciendo la historia variedad de Consejos, y tienen éstos, además del arraigo tradicional, el del prestigio que en el cumplimiento de sus deberes han conquistado, hay que mirar y considerar con prudente circunspección mudanzas idealistas y revolucionarias para una mejora, que aunque fuera notoria, es insignificante y no merece arrostrar el peligro de destruir instituciones venerandas y útiles para sustituirlas con otras nuevas, á las que, por de pronto, faltan las excelencias del tiempo, el saber de la experiencia, las facilidades del hábito y la adhesión del espíritu público (1).

(1) Es esta una cuestión de prudencia gubernativa en la cual ha de procederse, como en toda mudanza, con suma cautela. Toda institución antigua hay que modificarla con exquisito cuidado y con respetuosas contemplaciones, aun para mejorarla; así como á las instituciones efectivamente viejas y caducas, no tachadas de tales, por falsa suposición y preocupación apasionada, no hay inconveniente en destruirlas y sustituirlas por otras, con relativa facilidad y probable éxito. No puede negarse que en la época en que se inició la Revolución, eran los cuerpos consultivos, especialmente el Consejo de Castilla, una de las instituciones que había que rehacer con amplitud un tanto radical, acaso hasta el punto de cercenarle, si es que no arrancarle totalmente sus funciones judiciales, para repartir y deslindar

7. Nada más á propósito que la libertad y autarquía universitarias para el desarrollo de la actividad y la perfección de la potencia docente y educadora de la Escuela. Dueña de sí misma, estimulada por la competencia, en la cual sucumben tales establecimientos cuando no han logrado conquistar el favor y el auxilio de una sociedad honesta, seria grave y verdaderamente ilustrada, que estime en lo que vale el saber sólido y profundo y desprecie las ficciones engañosas y corruptoras de un título inmerecido y vano, obtendrá de la confianza pública numerosa concurrencia á las aulas y, merced á ella y á liberalidades sociales de varias clases y origen, la suficiente riqueza para plantear y desenvolver un plan de estudios completo y adecuado á la formación del hombre de derecho, sea cualquiera la educación y profesión jurídicas. Y no solo esto, porque con el adelanto téctino y el engrandecimiento material, se sentirá la Universidad cada vez más incitada y dispuesta á ensanchar el círculo de sus investigaciones y enriquecer el cuadro de sus enseñanzas con estudios complementarios y de ampliación, como sucedió en los buenos tiempos de las universidades europeas. En esto se introducirá una emulación fructífera, para que no falte en cada centro no solo la

mejor las instancias, y hasta para la creación de un Tribunal Supremo de Justicia. Pero aun así y todo, compárese la respetabilidad del Consejo de Castilla, en la época de su mayor decadencia, á pesar de sus graves defectos orgánicos, y de lo poco que lo honraban sus antipáticos golillas regalistas y aun volterianos, sus cortesanos jurisperitos pragmáticos, con los dos cuerpos de erección constitucional, el Consejo de Estado (Título IV, Capítulo VII de la Constitución de 1812) y el Supremo Tribunal de Justicia (Título V, Capítulo I del mismo Código político) y se notará la misma diferencia que entre el antiguo régimen, bien que bastardeado, y el nuevo, revolucionario y malo de suyo y perturbados aun en materias, hasta cierto punto, indiferentes. Es que, por viciosas que sean las instituciones históricas, rara vez deja de haber en ellas algo aprovechable, y sobre tal base ha de alzarse la reconstitución, soldando lo nuevo con lo antiguo, en lugar de destruirlo y arrasarlo, para levantar sobre arena y sin cimiento, fábricas endebles, viejas apenas nacidas, y que se mantienen en equilibrio inestable y pasajero durante el curso de una existencia infructífera y calamitosa.

instrucción general y común, sino la ampliativa, correspondiente á las varias aficiones é inclinaciones, y hasta la minuciosa, monográfica y erudita, propia de otros periodos de cultura y formación posteriores y superiores á los de la edad juvenil, dejando los reglamentos de la escuela prudente libertad de estudios al alumno, á fin de que, sin faltar á ninguno la necesaria docencia genérica, pueda cada cual elegir sobre la base de ella, la particularidad técnica que fuere de su agrado.



CAPÍTULO XIV

EL CONSTITUCIONALISMO. CONSTITUCIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL.—LA TEORÍA CONSTITUCIONALISTA.—GOBIERNOS DE GABINETE Y GOBIERNOS REPRESENTATIVOS.—EL PODER MODERADOR.—LAS FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL.

1. La doctrina que acerca del organismo del Estado, esto es, del órgano soberano y de los otros que desempeñan las funciones no retenidas ni ejercidas por éste, profesa el moderno *constitucionalismo*, hacen necesario el estudio de la teoría constitucionalista y, como precedente indispensable, la determinación de los conceptos *constitución*, *derecho constitucional*, todos los cuales tienen con el *Gobierno* en la acepción explicada en otro lugar la misma relación que con el Estado en el estricto sentido del término.

La palabra *constitución*, en el respecto jurídico que nos importa, es unas veces marcadamente sinónima de *institución* y expresa lo que ésta: a) el establecimiento de la ley; b) la ley misma establecida ó dada, *puesta*, tanto en el sentido de promulgada, como en el de participada á la criatura racional y asequible á su conocimiento discursivo. Otras veces significa a') el conjunto de todas las instituciones referentes á un objeto y or-

den de derecho; b') no todas sino las instituciones más esenciales y fundamentales. Así lo mismo se dice instituida que constituida la familia, la propiedad individual ó colectiva, de igual manera que se usan estas dos palabras refiriéndose al concejo, á la monarquía, á la provincia, á la región; pero cuando se escribe *constitución* de la familia, de la propiedad, de la monarquía, etc., claramente se denota no una ley ó leyes concernientes á ellas, sino todas las referentes á esas materias y esferas jurídicas; y cuando se habla, por ejemplo, de las bases *constitutivas* de la familia, de la propiedad, de la monarquía romana no se trata de todas las instituciones respectivas, sino de las capitales y más características, por más conformes á la naturaleza del orden jurídico á que uno se refiera.

No parece descubrirse racionalmente motivo alguno para que *constitución* signifique en Derecho político cosa distinta que en las otras ramas jurídicas; y cuando se use sin distinción de leyes y en sentido general y antonomástico el término, con el aditamento de *política* ó sin él, *constitución* será el conjunto de todas las instituciones directa y solidariamente conexas con la existencia y el legítimo interés nacionales, esto es, todo el contenido y expresión del derecho político, así natural como positivo, escrito ó consuetudinario.

De aquí se deduce que todo derecho es constitucional en el amplio sentido de la palabra, en cuanto su objeto y contenido es la constitución de cada orden jurídico, y constituir es *componer, formar, hacer, reunir* las leyes correspondientes á una determinada esfera del derecho. Así es que tan constitucional puede decirse el

derecho político como cualquiera otro, aunque por antonomasia se denomine constitucional á aquel cuyas instituciones son de más alta jerarquía en razón de su objeto y fin, la vida y prosperidad de la nación, con las cuales están inmediata é íntimamente relacionadas, y en cuanto el Estado (Gobierno) es el sujeto activo de no pocas de las funciones propia y estrictamente nacionales y de otras muchas de que, por necesaria tutela, se hace cargo, ó que, por indebida intrusión y usurpación, se arroga.

El derecho constitucional en esta acepción antonomástica no es para nosotros distinto del derecho político, porque las funciones tutelares del Estado, ó las usurpadas por él á otros órganos jurídicos sólo entran accidentalmente en el dominio de uno y otro derecho, cuando son de las directas y solidariamente conexas con los fines de la nación. Las que el Estado desempeña en el orden de otras sociedades inferiores son de la incumbencia de los respectivos derechos: el privado y las varias ramas del público interno. Además de este sentido, tiene otro puramente circunstancial é histórico el derecho constitucional, y es el de derecho político de las constituciones modernas, caracterizado por dos propiedades y notas, de las cuales una nos es conocida, el liberalismo; de la otra sólo anticipaciones y referencias se han hecho en el curso del tratado: el constitucionalismo, que ahora vamos á considerar directamente.

2. El constitucionalismo, tal como lo formuló, con aparato de teoría, su fundador Montesquieu, en el capítulo dedicado en el *Espíritu de las leyes* á la constitu-

ción inglesa, consiste en estatuir y organizar el poder soberano de modo que no abuse lesionando la libertad de los asociados, para lo cual se divide en otros tantos *poderes* cuantas son las personas físicas ó morales, que desempeñan las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, las cuales se elevan á entidades iguales é independientes (por eso se llama á ellas y á sus órganos *poderes públicos*), sustituyendo así á la unidad del poder, de la cual proceden sus abusos, la variedad y división de los poderes. De este modo se vigilarán, inspeccionarán, moderarán y contendrán recíprocamente, evitándose que uno crezca y se engrandezca á expensas de los demás y produciéndose el *equilibrio* entre ellos por mantenerse la *balanza* en el *fiel* en cuanto no se excede ninguno en el ejercicio de sus funciones.

Suponía Montesquieu que la independencia del poder judicial se había ya conseguido y que solo faltaba extenderla á las demás funciones que había que erigir en poderes, confiando la legislativa á una asamblea de representantes, y la ejecutiva al monarca, á lo cual, decía el autor, que debía Inglaterra la libertad de que gozaba.

Desarrollando su teoría, para evitar la omnipotencia de una sola cámara creyó necesario que existieran dos, colegisladoras con iguales atribuciones y el recíproco derecho de oponerse á los respectivos decretos. Al poder ejecutivo, al rey, le sería imposible contener al legislativo, si no interviniera en él por algún modo de participación, por *el veto*, ó sea, la facultad de rechazar el proyecto de ley de las cámaras, sin lo cual podrían éstas, por un decreto, anular y destruir y, de todas

maneras, tener bajo su dependencia al poder ejecutivo. El legislativo, á su vez, modera al ejecutivo é interviene en sus funciones, no preventivamente y con veto, porque ésto paralizaría su acción, sino exigiéndole la responsabilidad de sus actos, con lo cual queda asegurado el cumplimiento de las leyes. Pero un poder que responde ante otro, de él depende como inferior, y ya no es independiente ni plenamente libre, ante el temor de la represión futura; y para salvar la dificultad no queda otro recurso que hacerlo irresponsable en la cabeza, en el jefe del poder ejecutivo, reservando la responsabilidad para los demás órganos de la función, y, sobre todo, trasladando la responsabilidad del rey á los ministros (*la persona del rey es sagrada é inviolable; son responsables los ministros*). Por esto, el refrendo ministerial de las disposiciones soberanas se exige como condición esencial de validez, y no sólo en concepto de signo de autenticidad de ellas, sino como señal de aceptación, por parte de los ministros, de la responsabilidad de los actos del rey.

No hay que esforzarse mucho en señalar los absurdos de la doctrina: 1.º en la unidad del poder, en esa unidad que es una de las propiedades del ente, está, más aún que el peligro del abuso, la necesaria é indefectible tendencia abusiva; 2.º á fin de evitarla no hay otro medio que destruir la unidad de la autoridad soberana, con ella la de la ordenación ó gobierno y, por consiguiente, también la unidad de la sociedad civil para la cual es la de la soberanía; 3.º se sustituye ésta por la variedad de poderes, que siendo independientes, harían imposible todo gobierno por haber destruido la

independencia y la unidad del poder soberano; 4.º pero no son independientes, puesto que dependen unos de otros en el hecho de ingerirse recíprocamente en sus respectivas esferas: el ejecutivo en el legislativo por el *veto*; éste en aquél por la inspección y examen de sus actos y por la responsabilidad, sobre todo; el ejecutivo en el judicial por el nombramiento de los jueces, y, en el sistema contencioso administrativo á la francesa, por usurpar á la administración, como juez y parte, funciones correspondientes á la judicatura; ó viceversa, en el sistema contrario, entendiendo jueces y tribunales en contiendas que, siendo judiciales en la forma, son en el fondo administrativas; 5.º bien que el poder soberano, por su misma naturaleza, jerarquía y posición, esté, por lo general y ordinariamente, exento de una responsabilidad legal efectiva, por falta de un superior que se la exija, es contrario á todo principio ético y al sentido moral más evidente que los ministros respondan de otros actos que los suyos, y se les traslade la responsabilidad de los del jefe del poder ejecutivo, exigiéndoles más de la que por participación en los actos soberanos deba imputárseles; porque la regla general es que el mero consejero sea irresponsable, mientras no se pruebe en el consejo la existencia de delito, culpa ó cualquiera otra infracción legal; 6.º implica el sistema la negación del valor de las moderaciones éticas é internas, inherentes á la superioridad, educación, formación y aristocracia de la soberanía, esto es, la virtud y el honor, y se considera al soberano inferior á los demás hombres, en quienes, mientras no conste lo contrario, se supone honradez y decoro en el gobierno de sí propios, de los de-

más y, en general, en todas sus relaciones sociales; solo en el soberano y en la soberanía, precisamente en los que hay mayor y fundada presunción de justicia y decencia, falla una regla tan fundada en la razón y en la naturaleza; 7.º prescinde igualmente de las moderaciones orgánicas, así de las que radican en la misma constitución gubernamental, (distinción y reglamentación de funciones y de funcionarios), como de las que proceden de la social autarquía, esto es, de la personalidad, recursos, poder, esfera jurídica y gubernativa de las demás personas sociales, físicas ó colectivas. Por esto al sistema constitucionalista se le considera de las moderaciones meramente mecánicas, y se le ha aplicado con harta propiedad la denominación metafórica de *equilibrio* y *balanza* de los poderes públicos.

3. Visto el constitucionalismo por la superficie de estas extrañas afirmaciones, parece una teoría tan nueva como extravagante; pero, relacionándola con los motivos puramente históricos que la provocaron, se nota que no hay en ella nada original, y que toda la estupenda paradoja de la doctrina consiste en haber elevado á principio é ideal de política parte de un estado pasajero de la historia y constitución políticas de Inglaterra, una fase de una de las etapas por las que la evolución constitucional inglesa ha atravesado hasta llegar á la situación actual, cada vez más inspirada en la democracia del Continente. No estaba la monarquía en la posición en que se la figuró Montesquieu, porque, cuando él escribió, ya hacía tiempo que venía acentuándose en la realeza la condición inactiva de mera magistratura

honoraria; pero, por lo mismo, era exacto que, á la sazón, el gabinete privado del rey se había eclipsado ante el ministerio constitucional *responsable*, y poseedor y depositario del poder ejecutivo, ejercido de conformidad con el Parlamento. El poder, valor é influjo de las dos Cámaras también eran sobre poco más ó menos los mismos que sistematizó el formulador teórico del constitucionalismo, porque había en efecto, entonces un cierto equilibrio de fuerza social y política entre la primera nobleza feudal y su órgano la Cámara de los Lores, y la *gentry*, es decir, la especial y característica mesocracia inglesa, entonces en su período de formación ya avanzada y que significaba y pesaba, no poco, en la Cámara de los Comunes.

Trasladó, pues, Montesquieu á su teoría un momento histórico de la evolución, en que había efectivamente un contrapeso mecánico, ya no entre el rey y el Parlamento, sino entre las dos Cámaras; pero se equivocó *a)* en no ver más que la parte externa y el efecto superficial de ese equilibrio, y no la complejidad de causas internas, de las cuales era la expresión exterior, visible al vulgo; *b)* en suponer que en Inglaterra existía la división de poderes tal como la fantaseó, siendo así que todo se reducía á un acomodamiento doctrinario entre los poderes históricos, y de hecho á la unidad de poder, propia del parlamentarismo y ya bien señalada, aunque no inclinada todavía hacia la Cámara de los Comunes, sino compartida en proporción equivalente entre ésta y la de los Lores; *c)* en elevar á doctrina común y universal de constitución adaptable á todos los pueblos lo que, según la teoría positivista de Montesquieu,

solamente era propio y característico del pueblo inglés, elaboración positiva y particular de aquella zona y clima, producto de la variedad de los elementos físicos que determinaron la libertad política, como fin y vocación especiales de Inglaterra. En tales errores consiste la originalidad del constitucionalismo.

No es, pues, exacto que el constitucionalismo consista, ni aun en teoría, en la imposible división de los poderes públicos, contraria á la naturaleza y, por lo tanto, impracticable; porque en la doctrina va implícito el *parlamentarismo* que es también afirmación de la unidad de la soberanía, bien que trasladada al parlamento, cuyo poder en casi todas partes ha sustituido al de la monarquía y mermándole en todas, dando lugar á los actuales gobiernos mixtos, que más bien que monárquicos son unas poliarquías disfrazadas. Así, pues, el constitucionalismo no es más que un doctrinarismo que gravita hacia su consecuencia y resultado inevitables: á la supremacía primero, y después á la soberanía del parlamento, y á la anulación del principio y autoridad monárquicos, aunque en algunos países todavía contenga y contrarreste al poder nuevo el antiguo, y, entre tanto, mutuamente se moderen; pero estas moderaciones, además de pasajeras, no están influidas *á priori* en el fin é intento únicos ni principales del contrapeso mecánico, sino que son producto de los acomodamientos prácticos, de las teorías eclécticas en que el doctrinarismo consiste, por más que de ellas resulte un equilibrio más aparente que real, y cada vez más inclinado y cercano á la soberanía absoluta del parlamento.

En efecto, ya es Montesquieu un autor parlamen-

tarista; porque la irresponsabilidad del rey y la responsabilidad del ministerio, tomadas al pié de la letra y desenvueltas con plena lógica, solo pueden conducir á la anulación de la monarquía y al gobierno del parlamento, puesto que no aviniéndose los ministros á responder sino de lo que aprueban y quieren, la disposición ejecutiva es real en apariencia, ministerial en realidad, y respondiendo, no ante el rey, sino ante las cámaras, al criterio y opinión de éstas tratarán de ajustar el ejercicio de la función ejecutiva. Resulta así el gabinete convertido en delegado del parlamento, más bien que de la corona.

Por esto el doctrinarismo, aleccionado é instigado por la terrible experiencia de la Revolución, quiso reintegrar al trono alguna parte de ese poder de que le despojaban en la teoría de Montesquieu los ministros y el parlamento, ó, por mejor decir, el parlamento y los ministros. Empezó Benjamín Constant por llenar los huecos de aquélla señalando, además del *veto*, otras prerogativas de la realeza, y con ellas las relaciones de ésta con los demás poderes. Presumió arrancar al parlamento la facultad de nombrar los ministros y hacerlos independientes de él, asignando al monarca la de designar y renovar el ministerio (*nombrar y separar libremente los ministros* que dice la constitución de 1876); imaginó además dar á la realeza un poder más positivo y eficaz que el de mantener con el *veto* el anterior estado legislativo, concediéndole la facultad de disolver las cámaras; y para que no se quedara la corona sin jurisdicción alguna retenida, consideró función propia de la realeza, y no delegada á la judicatura, el ejercicio

de la gracia de indulto, á fin de corregir el excesivo rigor y severidad de las sentencias judiciales.

Como se vé, Benjamín Constant, siguiendo en esto las huellas de Clermont-Tonnerre, introdujo en el mecanismo constitucional, ó mejor dicho, extrajo de la teoría no acabada de Montesquieu, un cuarto poder del Estado, el poder *regio*, cuyas son las atribuciones dichas, sustraídas á las de los otros tres, y que constituyen el *reinar*, cosa distinta del *gobernar*, según la consagrada fórmula *el rey reina y no gobierna*. Los doctrinarios más acentuados y ya más marcadamente *legitimistas* no añadieron nada nuevo á la parte formal y mecánica de esta fase del constitucionalismo, intentando únicamente dar á la doctrina un sentido y fondo histórico y á la realeza un título propio, interno, substantivo y tradicional, superior al del mero equilibrio y balanza y al del exclusivo ó principal intento del sistema de las moderaciones físicas.

Pero nada resolvió Constant con tales aditamentos al aparato superficial y externo del constitucionalismo, intentando, en vano, restituir á la monarquía el influjo y poder de que la había despojado la Revolución, y que procedían de una autoridad y prestigios alimentados por una raíz profunda, de la sávia misma de la constitución nacional. Si los había perdido la monarquía, no se los podían devolver estos pueriles y vacíos artificios, faltos de fundamento y de contenido jurídico é histórico. Ellos en sí mismos resultan absurdos y contraproducentes, porque tomada á la letra y en serio la facultad de disolver el parlamento, hace á éste dependiente del rey, entregándole un poder omnímodo, bien

que negativo y entorpecedor, incompatible con el funcionamiento de la máquina, como ya sospechó Montesquieu, quien al contemplar en el artefacto tal enredo de suspicacias y estorbos, dudó que pudiera andar ¡sino fuera porque la ley de los seres es el movimiento! Si eso puede el monarca, será no por virtud del arreglo mecánico apriorísticamente consignado en la constitución, sino por la autoridad tradicional de la monarquía; pero donde el liberalismo y la revolución se la hayan sobrepuesto, ni *veto*, ni disolución de las cámaras, ni iniciativa, ni libre nombramiento de ministros serán más que apariencias y solemnidades rituales de un poder nominal, cuya efectividad se ha trasladado al parlamento, hallándose de hecho el rey con éste en la misma situación y relaciones en que estaban en Inglaterra, cuando Montesquieu observó ligeramente y por fuera la constitución inglesa, sin penetrar las causas que la condujeron á tal estado y etapa.

Y no hay para qué decir que, según que el constitucionalismo sea ya plenamente parlamentario, ó luche todavía contra el arraigo y potencia de la legitimidad monárquica, así la significación y la autoridad del ministerio serán absolutamente distintas de las de los antiguos ministros ó secretarios del despacho, ó análoga ó igual de hecho á la de aquellos funcionarios. En la misma proporción en que la monarquía conserva una buena parte de su poder soberano, merma el poder de los ministros, meros ejecutores, con arreglo á las leyes, de las funciones que les están encomendadas, y las cuales desempeñan bajo la inspección y dirección efectivas del rey, según el arbitrio, nunca reducido, que la cons-

titución le consiente, y que en todo régimen político cuenta con un ancho círculo en que moverse. Aunque la letra de la constitución externa sea igual á la de las constituciones efectivamente parlamentarias, como en realidad más dependen los ministros del rey que del parlamento, más se parecen á los del antiguo régimen, cuyo poder personal dependía de las iniciativas y energías del monarca, siendo cuanto éste valía lo que un Felipe II, meros instrumentos de la voluntad y acción reales, mientras que, en el caso contrario de monarcas poco aptos, flojos é indolentes, en el ministro ó ministros (validos entonces) residía de hecho el soberano poder.

En tal caso, aunque el refrendo constitucional sea requisito indispensable para la validez de los actos del rey, no significa la traslación parlamentaria de su poder á los ministros; es únicamente el signo de autenticidad, que por ministerio de la ley constitucional, no puede sustituirse con otro. Solo cuando la revolución ó la evolución parlamentarias se han consumado y reduciéndose la realeza á magistratura honoraria que manda muy rara vez, si es que alguna, son de hecho los ministros los poseedores de todo el poder ejecutivo, lo mismo el gubernativo que el regio, y el refrendo, que á la letra, siempre significa lo mismo, expresa, en el fondo y entre renglones, el omnímodo poder del parlamento y es como el sello de esta supremacía sobre la del rey.

Tampoco el mero texto material de la constitución denuncia cual es la significación y alcance de la responsabilidad del ministerio. Dicen las constitucio-

nes que los ministros se hacen responsables por el hecho del refrendo, y tal disposición, abstraída del conjunto y del espíritu del código político, solo consigna lo que parece innecesario, el principio general de la responsabilidad de éstos, como cualesquiera otros funcionarios y personas, por sus actos y no por los ajenos, y lo mismo pudo figurar en una ley antigua y con relación á los secretarios del despacho que en una constitución moderna y con referencia á los ministros constitucionales.

Y en efecto, los ministros antiguos no respondían de los actos del rey, sino de los suyos; pero esto mismo acontece á los actuales consejeros responsables; porque, cuando el gobierno es efectivamente parlamentario, de lo que en realidad responden es de haber atemplado ó no su conducta y función ministeriales al criterio é impulso gubernativos del parlamento; y cuando el régimen solo es parlamentario en la forma, ó, cuando más, las cámaras solo ponen un cierto límite, si es que no un estorbo, á la acción del rey, la fuerza, autoridad y prestigio de éste cubren y amparan el acto ministerial en cuanto y en la parte en que fué expresión de la voluntad del monarca.

4. Como la unidad del poder es la ley de naturaleza, confirmada, aún en las doctrinarias constituciones modernas y en la aplicación de ellas á la realidad de la vida política, resulta que el poder supremo tiende á acumularse, unificarse y concentrarse ó en el órgano tradicional histórico, la monarquía, cuando conserva íntegra su autoridad, ó, cuando menos, potencia y recur-

sos bastantes para contrarrestar y detener la corriente del derecho nuevo, aplazando en la práctica el triunfo é imperio definitivos de la idea, ó en el órgano propio de la moderna soberanía, en el que es lógica expresión y vehículo indefectible de ella, el parlamento, ó mejor dicho la cámara baja, en la cual interviene más directamente el pueblo. Pero todo constitucionalismo, por la lógica de los principios y por la fuerza de los hechos, se traduce en parlamentarismo, sin que la situación de ciertas monarquías en que la realeza se sobrepone al parlamento (Prusia), ó comparte con él la soberanía, aunque con alguna ventaja para el emperador (Alemania), sea otra cosa que excepción de la regla general, estado histórico, etapa de evolución política en la cual la monarquía doctrinaria resiste todavía en posición favorable la acción del liberalismo menos ilógico, aunque contradictorio siempre.

Algunos opondrán á este principio y ley indefectibles el tipo del gobierno que llaman *representativo* (en estricto sentido) y *presidencial*, cuyo modelo clásico, y siempre presentado como tal, es la Constitución federativa de los Estados Unidos de la América del Norte, y que, en efecto, ofrece el ejemplar opuesto, al parecer, á la organización parlamentaria, ora de las monarquías, v. g. Inglaterra, ora de las Repúblicas, como Francia.

La cabeza del poder ejecutivo, el Presidente de la República tiene una función propia y definida, delegada por la elección popular inmediatamente, y no por el conducto de las Cámaras reunidas al efecto en Asamblea, como sucede en Francia. De aquí la diferencia entre el poder de uno y otro Presidente; el americano es

y se considera una magistratura que, bien que individual, tiene la misma importancia que uno de los organismos colectivos colegisladores, la Cámara, y el mismo origen, la elección popular. El pueblo, sujeto y fuente de los poderes, estima iguales á estos dos y les transmite por el mismo procedimiento las representaciones respectivas, distintas y separadas, sin considerar explícita ni implícitamente superior una á la otra función, uno al otro órgano, sino poderes iguales é independientes, según la teoría constitucionalista *neta* de Montesquieu, de la cual parece, á primera vista, el gobierno presidencial ó representativo la expresión más fiel posible, al menos en cuanto á las relaciones entre el Presidente y la Cámara baja, que no se mezcla en los actos presidenciales con inspección y vigilancia alguna, ni interviene en ellos con preguntas, interpelaciones, votos de censura y votaciones contrarias. Por esto, por el poder efectivo que tiene el Presidente, se llama *presidencial* á este gobierno; y *representativo* en especial sentido antonomástico, porque los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, proceden del pueblo de la misma manera inmediata, el cual á ambos confía la representación por el procedimiento electoral popular, y no á uno de los poderes por el intermedio y ministerio del otro. El Presidente francés no recibe la representación, sino mediatamente; el pueblo, al elegir por sufragio el Senado y la Cámara de los Diputados, las considera como el poder principal no solo en razón de su origen, sino de la delegación, del encargo de confianza que las otorga de elegir, constituidas en Asamblea, al Presidente de la República. Esto lleva implícita, aunque la letra consti-

tucional diga otra cosa, la necesidad de que el Presidente obre de acuerdo con las Cámaras que, si tuvieron autoridad y comisión para elegirle, la tienen *ipso facto* *é implícitamente*, á pesar de la discrepancia entre el espíritu y el texto constitucionales, para subordinar la política presidencial á la de la Asamblea.

De aquí procede la respectiva situación del Jefe de Estado y de los ministros en el Congreso americano y en la Asamblea francesa. Mientras el Presidente de la República en Francia, para estar de acuerdo con la representación nacional, tiene, como el rey de Inglaterra, que elegir ministros identificados con las mayorías parlamentarias, escogiendo del seno de ellas á la plana mayor del partido que manda, el Presidente americano, como goza poder propio directamente recibido del soberano común, no necesita subordinar la elección de sus ministros al criterio político dominante en el Congreso, hallándose en esto en situación análoga á la de los monarcas preconstitucionales sin más diferencia que la del origen y título de los respectivos poderes. Los ministros americanos son, como los de la monarquía pura, secretarios del despacho y no responden sino de sus actos, porque el Presidente, mero jefe del poder ejecutivo, no irresponsable como el antiguo soberano, responde de los actos propios.

Pero, no deteniéndose en la superficie y penetrando en el fondo de la constitución americana, se ve que tampoco hay tal constitucionalismo, porque no solo existen relaciones de comunicación entre los poderes públicos y recíproca dependencia en varios conceptos, sino un poder predominante en el Senado, que además de la

función legislativa, que comparte con la otra Cámara y con mayor influjo efectivo que ella, goza de facultades ejecutivas de no escasa importancia. En la República americana, el Senado y el Presidente son elementos políticos de mayor poder que la Cámara de representantes; así es que, aunque no bien marcado el centro de unidad, ni tan precisa y perfecta la conexión entre las entidades gobernantes y la subordinación de unas á otras como en los gobiernos parlamentarios, bien puede decirse que la Constitución federativa es una combinación doctrinaria del antiguo derecho anglo-colonial y de la democracia del derecho nuevo, representada principalmente en la Cámara. De análoga manera que en Alemania, también en América predomina en el Código federal el principio conservador histórico posible en un pueblo nuevo, sin historia propia, monarquía ni aristocracia, y asimismo ese elemento tradicional va poco á poco desvaneciéndose é inclinándose hacia la democracia moderna, tránsito á la olocracia que en todas partes suplantará á la plutocracia burguesa. Hoy por hoy, tanto ó más que gobierno presidencial, podría llamarse el americano un gobierno parlamentarista, de un especial carácter, por ser parlamentarismo más de la Cámara alta que de la de representantes, más de la asamblea de precedente antiguo, que de la de nueva creación.

5. Una nueva fase de derecho constitucional, y que implica no solo negación del constitucionalismo, sino un más pronunciado retroceso doctrinario, opuesto á las modernas teorías acerca del sujeto del poder sobe-

rano y un forzado reconocimiento del valor de las soberanías tradicionales, es la doctrina acerca del llamado *poder armónico ó moderador*.

El cual, como indica su nombre, tiene por oficio y función mantener en su respectiva esfera á los poderes públicos, previniendo así los conflictos, ó resolviéndolos cuando se ha turbado entre ellos la armonía que á ese cuarto poder del Estado incumbé restablecer.

No hay que fijarse mucho en esta definición para comprender que tal poder, en el hecho de moderar y armonizar á los otros, es superior á ellos, y que en su notoria superioridad, y no en la igualdad de todos, consiste el equilibrio y la armonía, los cuales no son ya mecánicos, sino procedentes del valor propio y sustantivo de la jefatura del Estado que lo recibe ó de su legitimidad tradicional, ó de la preferente *representación* que la otorga la nación soberana. Si lo primero, resulta evidente la excelencia de la soberanía monárquica sobre la soberanía nacional, reduciéndose el parlamento á cuerpo representativo de la autarquía, no del poder cosoberano de la nación; si lo segundo, resultan la prioridad extraña é inexplicable de un órgano unipersonal, sobre el colegiado, del poder ejecutivo sobre el legislativo, del acto ejecutor sobre el pensamiento legislador, la incompatibilidad del gobierno republicano con una doctrina esencialmente republicana acerca del sujeto de la soberanía, puesto que la superior representación nacional solo es posible en forma monárquica, y, de todas suertes, la confusión inevitable del poder moderador, de la jefatura del Estado con el poder ejecutivo, como quiera que el pueblo, que crea ese órgano supe-

rrior de poder, no ha de despojarle de la plena facultad ejecutiva, la de nombrar toda la jerarquía encargada de esta función, realizada ó por sí mismo ó por sus delegados los ministros y demás autoridades y agentes inferiores. En las monarquías, la jefatura del Estado en el rey es la confesión implícita de la superioridad del poder histórico; en las repúblicas una imitación contrahcha de la forma monárquica y el reconocimiento consiguiente del preferente valor y eficacia de una forma lógicamente inconcilliable con la soberanía popular ó nacional.

En efecto; no se concibe que, asignando á ese poder funciones esencialmente superiores, no se le otorguen todas las otras inferiores que él pueda desempeñar por sí, sin más limitaciones que las que proceden de la imposibilidad física de que un solo individuo las ejerza y retenga, y sin otras moderaciones que las éticas y las legales y las que proceden de la autarquía de las otras personas individuales y colectivas con poder proporcionado á su personalidad, posición y jerarquía bien que no soberanas ni cosoberanas. Si el poder armónico ofrece las garantías, posibles en lo humano, de sancionar rectamente las leyes, no se comprende por qué no ha de hacerlas por sí con el concurso de la representación nacional, bien que inferior á la soberanía; si puede nombrar los ministros y vigilar é inspeccionar el desempeño de la función ejecutiva, no se concibe que no deba realizar por sí mismo toda la que no exceda de sus fuerzas; y, finalmente, si retiene la gracia de indulto y se le juzga capaz de resolver los conflictos entre el poder judicial y el ejecutivo, es contradictorio

que no se le concedan también otras funciones judiciales directas, en las que, asesorándose técnicamente, ofrezca el soberano todas las probabilidades de mayor justicia, aneja á la excelsa superioridad soberana.

De aquí se deduce que, fácilmente deshechas las contradicciones doctrinarias de esta nueva fase del derecho constitucional, lo que en substancia afirman es la restauración del execrado poder absoluto, por el cual entienden falsamente la concentración en el sujeto soberano, y en virtud de la unidad del poder, de la totalidad de funciones que ese órgano supremo de derecho pueda desempeñar y deba por lo tanto retener. El más ó el menos no cambia la esencia; las funciones armónicas son las supremas, y las otras son inferiores y dependientes como ellas los órganos que las desempeñan y que ya no pueden llamarse poderes. De éstas, la legislativa es una cooperación de la autarquía social á la obra de la legislación, mediante la representación correspondiente de una personalidad y un poder inferiores al soberano; y las otras dos son funciones encomendadas, según ley, para realización de aquellos oficios ejecutivos ó judiciales que corresponden esencial ó tutelarmente al Estado (poder central, gobierno).

Pero al fin todo ello para en que este poder armónico no es cosa nueva, sino casi idéntico al poder real ó regio, que de la misma teoría de Montesquieu dedujo Benjamín Constant, y que las funciones armónicas son en lo legislativo la iniciativa, la sanción y la promulgación de las leyes; en lo ejecutivo, el libre nombramiento y separación de los ministros y el cuidado de que se cumpla la variedad de funciones que cons-

tituyen é integran el gobierno en el sentido estricto del término; en lo judicial la expedición del nombramiento de jueces y magistrados, la vigilancia para que se administre debidamente la justicia y la retención de la gracia de indulto.

Los conflictos que tiene que resolver son los siguientes: 1.º entre el poder ejecutivo y el judicial, sobre si el caso es jurisdiccional ó estrictamente ejecutivo para el efecto de determinar la competencia, ó sea el derecho que á conocer y resolver, ó á abstenerse de ello (*competencia positiva ó negativa*) alegan los respectivos poderes, esto es, la Administración y los tribunales; 2.º entre el poder legislativo y el ejecutivo, cuando se manifiesta la disconformidad entre ambos por una votación contraria al Ministerio en cuestión que este ha hecho de *gabinete*, es decir, de capital interés según su criterio político, y condición para continuar al frente de los negocios; 3.º entre el poder legislativo y la opinión pública cuando ésta se pone de parte del Ministerio y por lo mismo, en contra de las cámaras. En el primer caso, el jefe del Estado acuerda si la cuestión es *administrativa* ó judicial; en el segundo, ó mantiene el ministerio y disuelve la cámara baja, y la alta, si procede del sufragio, ó la parte electiva de ella, ó al contrario procura formar otro ministerio conforme con la mayoría parlamentaria, si ésta es regularmente numerosa y compacta; de no serlo, entonces con el antiguo ó con nuevo gabinete procede la disolución; en el tercer conflicto, el poder moderador disuelve la parte del parlamento que puede disolverse y en nuevas elecciones

decide la nación si sus representantes lo eran electivamente ó no.

No hay que esforzarse mucho para poner de manifiesto acerca de este cuarto poder lo que se ha dicho respecto de la teoría constitucionalista en general, y de los aditamentos con que Benjamín Constant la perfeccionó. Todas estas funciones ó las desempeña de hecho la antigua monarquía, donde, á pesar del parlamentarismo, conserva un poder efectivo más ó menos estorbado ó intervenido por el parlamento (Prusia, Alemania), ó es el parlamento el que realmente actúa de supuesto poder armónico ó moderador por medio del ministerio, así en las monarquías como en las repúblicas. Porque los ministros en relación con el poder armónico, son lo que se ha dicho en el número 3, y la responsabilidad y el refrendo no tienen significación y alcance distintos de los allí expuestos.

6. No se concibe que las fuentes del derecho constitucional sean otras que las de cualquiera otra rama jurídica, ni que por distintos fundamentos y motivos la ley y la costumbre, en acción alternada y permanente y la jurisprudencia en el sentido estricto del término, esto es, de derecho declarado por los órganos judiciales ó jurisdiccionales, á falta de norma escrita, ó en interpretación de ella, sean los orígenes de las instituciones políticas, como de las demás públicas y de las privadas. Es á la asignatura de Derecho natural y no á ninguna otra á la que incumbe la demostración del principio, como correspondería probar la excepción de la regla á la rama en que la costumbre y la jurisprudencia

cia no elaborasen también derecho positivo, lo cual desde luego parece absurdo, y lo es efectivamente.

La experiencia histórica lo demuestra en lo que concierne á la costumbre, señalando el origen de la mayor parte de las instituciones políticas en hechos y en usos antes que en leyes, por ejemplo, la monarquía y su consolidación sucesoria hereditaria, la representación de los brazos y estamentos y aun el reconocimiento y garantía de los derechos personales; y ésto no sólo en las épocas anteriores, sino en la moderna y en la contemporánea, y en la misma evolución del derecho y política nuevos, de lo que dan testimonio la Constitución inglesa y la misma de los Estados Unidos.

Lo único que puede ser objeto de una indagación detenida es la mayor ó menor proporción en que contribuyen al derecho constitucional los tres factores jurídicos; así como si la costumbre tiene la plenitud de sus caracteres cuando su órgano es el soberano, y finalmente cual es el valor, eficacia y frecuencia de ella en la época presente, y según sean el estado general y el constitucional de las naciones; pero todos estos puntos exceden de la cultura y proporciones elementales.

En cuanto á las formas de la legislación constitucional escrita, tampoco hay en este orden jurídico nada particular que añadir á la doctrina general tan debatida acerca de los cuerpos legales (códigos en el más amplio sentido de la palabra) en que han de estar reunidas y comprendidas las varias instituciones legales, sea cual fuere su origen (ley, costumbre, jurisprudencia). También es esta teoría, por formal y común, propia de la asignatura de Derecho natural, debiendo por ello

consignar aquí, solamente en concepto de mera aplicación y referencia, la doctrina que nos parece más probable, es á saber, que la *compilación* por orden cronológico es la forma natural de la legislación política, como de las otras; que cuando ésta es numerosa, complicada y contradictoria en no pocos puntos, procede el *ordenamiento*; y finalmente, que el *código*, en el sentido estricto del término de derecho formulado en conjunto y de una vez, y arreglado sistemáticamente según las exigencias y categorías lógicas, esenciales al derecho racional y científico, es forma extraordinaria, excepcional y anómala de procedimiento hondamente reformista y aun revolucionario, en el caso de una legislación, que, además de los defectos de forma, que exigen el ordenamiento, resulte atrasada, anacrónica y deficiente.

Lo cual no quiere decir que el código rompa con la tradición y con la historia, para introducir una legislación idealista sin conexión alguna con la realidad y sus naturales precedentes, antes bien el fondo y contenido de tal cuerpo legal debe conservar, cuanto pueda, el espíritu y la materia de las antiguas leyes, expresivas de la constitución interna del pueblo y elaboradas con su propia substancia, sin más variaciones que las precisas, ni otras mudanzas y adelantos que los que implícitamente é *in potentia* preexisten en la contextura y en el carácter nacionales, y que el mismo genio é impulso de la nación deben desenvolver y desplegar.

En esto se diferencia el código histórico y nacional de los modernos códigos constitucionales de la mayor parte de las naciones, inspirados en el liberalismo idealista y abstracto y en la doctrina social y política de la

Revolución. Importaron, como ya repetidas veces hemos manifestado, un derecho absolutamente distinto del antiguo y contrario á él, y fundaron sobre las ruinas causadas por el furor revolucionario instituciones que no tenían con las precedentes más conexión que la del tiempo, y tan divorciada de las históricas como de la razón, de la naturaleza del hombre y de la sociedad y de la esencia y fines de la soberanía.

Códigos de esta clase son las constituciones modernas, así en su forma de *carta otorgada*, como de legislación política que, en uso de su soberanía, se da el pueblo en un período y con solemnidades y requisitos constituyentes, ó de acomodamiento y pacto constitucional, en que el poder antiguo y el nuevo acuerdan la organización, atribuciones y relaciones de los poderes públicos, esto es, la constitución política sobre la base doctrinaria de la legitimidad real y la soberanía de la nación. Solo en el más ó menos de derecho nuevo que contienen, se distinguen, que no se diferencian, estos cuerpos legales de forma de código, y en el supuesto, más aparente que efectivo, de ser la carta constitucional, *obra espontanea del rey, que en uso de su soberanía, sin el concurso de la antigua representación nacional, por acto y modo de pragmática, no de ordenamiento, otorga, á título de libertades y franquicias como las antiguas, una constitución fundada en los nuevos principios liberales, y en la que conserva la monarquía más ó menos poder verdadero ó ficticio, no distinto del que le reservan las constituciones doctrinarias*. Estas, como las democráticas, ó sean aquellas en que el pueblo soberano crea y organiza, á su arbitrio y sin consulta ni acuerdo de la soberanía an-

tigua, los poderes públicos que de la nación reciben y en nombre de ella tienen y ejercen, cámara ó cámaras, jefe del Estado y tribunales y jueces, reciben, en estricto sentido, el nombre de constituciones, para diferenciarlas de las cartas constitucionales que solo lo son en la amplia acepción del término.

1. A pesar de que no parece tan difícil señalar las relaciones entre institución y constitución y entre derecho político y derecho constitucional, debe ser cosa árdua para los autores modernos, que aún no están conformes en esta materia, cada vez más confusa y embrollada en la numerosa literatura de la nueva ciencia política. En máxima parte han contribuido á ello los tratadistas alemanes y sus casi copistas latinos, trascendiendo á este punto la oscuridad y vaguedad reinantes acerca de la naturaleza y división del derecho público y los respectivos dominios jurídicos de cada una de sus ramas. Así, mientras Palma entiende por constitución todo el derecho positivo de la sociedad civil, el conjunto de leyes y de usos que hacen de la sociedad humana un cuerpo político, otros, por ejemplo, Stein, no asignan á la constitución toda la materia política, porque la reducen á las instituciones orgánicas del Estado, á la soberanía y á sus funciones legislativa y ejecutiva.

Bien se comprende que esta misma indeterminación y discrepancia han de notarse acerca de la índole y esfera del derecho constitucional, dada la concepción socialista del derecho político como derecho del Estado, y dentro de la cual no

es posible determinar la jurisdicción y límites de ninguna otra rama del derecho público. De aquí procede el que los autores modernos hallen entre el derecho político y el constitucional distinciones tan insostenibles como éstas: *a)* estar todo el segundo contenido en la constitución, mientras que no todo el político se halla en ella, pues hay una parte que, aunque deriva inmediatamente de las disposiciones constitucionales, no se halla inserto en el *código* fundamental, sino en otras leyes que llaman *orgánicas*; *b)* aun del derecho consignado en la constitución sólo una parte es constitucional, la que llaman *orgánica*, ó sea, la que establece y arregla los *órganos* del Estado oficial, del gobierno; y no lo es la parte *dogmática*, la que contiene la declaración de derechos de personas que no son ese Estado, cuyos varios *poderes públicos* compone, concierta y relaciona el derecho constitucional; *c)* mas, después de dar mil vueltas al asunto y de obscurecerlo cada vez más, todo se reduce á una mera distinción histórica: el derecho constitucional es el moderno derecho político, en razón de que él y las constituciones que lo contienen son de índole distinta del derecho y de las constituciones premodernas. Los de ahora son *constitucionales* en virtud de su especial carácter el *constitucionalismo*, cuyo concepto tampoco suelen los autores determinar con la precisión y exactitud debidas, porque no distinguen bien lo *constitucional* de lo liberal y de lo *representativo* y se mantienen generalmente en la vaguedad de calificar al constitucionalismo, al moderno gobierno constitucional como el *actual estado de derecho*, como la única situación y condición jurídicas posibles, no se sabe bien por cual de las notas ó propiedades de la nueva política: hay que suponer que por todas (Möhl, Biuntschli, etc.) Derecho político y constitucional son una misma cosa, el moderno derecho político, tanto el de la constitución inglesa, á contar desde el influjo ejercido y de la evolución y consiguientes modificaciones provocadas en aquélla por la Revolución de 1688, como el de las otras constituciones ya contemporáneas, impuestas á los demás pueblos por la Revolución, ya plenamente liberal, acontecida en Francia á fines del siglo XVIII.

2. En la reseña histórica del constitucionalismo suele figurar, no sólo por prioridad de tiempo, sino por el estado más embrionario de la teoría, antes Locke que Montesquieu en cuanto ya distingue y separa dos poderes, el legislativo, confiado á los representantes del pueblo, á quien corresponde exclusivamente, por conducto y ministerio de ellos, hacer y darse leyes, y el ejecutivo que es propio del monarca. Pero, si se considera que esta dualidad de poderes no está inspirada en el pensamiento y propósito principal y especialmente mecánicos, sino que es consecuencia del empeño de compaginar la institución histórica, la monarquía, con el principio ya explícito del derecho nuevo, la soberanía del pueblo, se ve que Locke es más bien un autor doctrinario que yuxtapone al dogma liberal el dogma monárquico y legitimista, éste en menores proporciones que aquél, suponiendo falsamente que al rey de Inglaterra no le pertenecía por título histórico más que el poder ejecutivo. No tuvo, pues, razón Stahl, en mi entender, cuando juzgó á Locke tan precursor de Rousseau como de Montesquieu, porque lo es mucho más del primero, en cuanto profesa ante todo la doctrina liberal común á Rousseau, y si no á todos los tratadistas protestantes del derecho natural, á los que en la esfera política, y por el motivo é imperio de las circunstancias, desarrollaron lógica y directamente todo el sentido democrático de la *Reforma*. Este mismo profesó Locke, consistiendo la agregación doctrinaria de su teoría en la asignación de un poder propio, substantivo á la realeza, aunque harto menor que el que intentó restituirle el doctrinarismo posterior á la caída del Imperio, es decir, el doctrinarismo, ya en el estricto sentido de la palabra. Lo que hay de común entre Locke y los constitucionales es ese doctrinarismo á que, en último término, se reduce la doctrina del constitucionalismo; mas muy poco de lo que á primera vista y en la superficie caracteriza al sistema, que es el concepto é intento mecánicos del equilibrio y balanza de los poderes, fase marcada únicamente en Montesquieu y, si acaso, todavía algo en Benjamín Constant. El estado de ánimo en que escribió

Locke era un tanto parecido á aquel en que lucubró Sieyes, el de un predominio del liberalismo radical sobre el doctrinario, y, por lo tanto, de la fase de la unidad é indivisibilidad del poder sobre la de distribución de él entre varias entidades; estaba el uno bajo el influjo idealista y renovador de la primera revolución inglesa, y el otro sometido al fanatismo más sistemático y *metafísico* de la de 1789, para que dejaran ambos de inclinarse más á la lógica del sistema que á las exigencias de la realidad y á sus eclécticas imposiciones (1).

Tampoco parece exacta la relación substancial que algún autor supone entre la doctrina de Maquiavelo y la de Montesquieu, considerando al constitucionalismo como una teoría pragmática, igualmente destituida de fin, principio y sentido morales que la del secretario florentino. Es cierto que el sistema constitucional prescinde de las moderaciones éticas y de las garantías de recta gobernación que encierran y ofrecen la moralidad y el honor del imperante; pero esta omisión ni es sistemáticamente intencionada, ni arranca de una teoría que niegue la existencia y virtualidad de una moral y de un derecho absolutos y universales, fundados en la naturaleza y el fin del hombre, y que en todo caso, y sobre cualquiera motivo y propósito singular, circunstancial y subjetivo, constituyen el criterio y la norma objetivamente inmutables de conducta racional y debida. El positivismo deficien-

(1) Esto no es decir que fueran igualmente doctrinarios y constitucionales el político inglés y el francés, como tampoco lo fueron en intensidad, poder y trascendencia inmediata la revolución inglesa de 1648 y la francesa de 1789. Del mismo modo que no fué la primera tan hondamente hostil á la tradición histórica, así tampoco Locke rechazó la monarquía, restaurada ya desde 1660 con el mismo antiguo poder, bien que tan mal deslindado y tan controvertido como en tiempo de Carlos I. Locke, escritor en un período de elaboración doctrinaria ya avanzada en la realidad y en los espíritus, fué lo menos monárquico posible, pero monárquico al fin; mientras que Sieyes, todavía en período álgido de fiera expansión revolucionaria, limita su doctrinarismo incipiente, y acaso inconsciente en él, á meras manipulaciones del número y de la masa, sobre la cual proyecta el Gran Elector la sombra de la aún lejana monarquía constitucional.

te y contradictorio de Montesquieu carecerá de sentido ético, como todos los sistemas naturalistas que son pragmáticos, por no contener fundamento é impulso racionales de moralidad y rectitud, y escepticos en la misma proporción que destituidos de espíritu religiosos y de fe en la eficacia de ninguna moral; pero el que, por estos defectos, en nada estime el constitucionalismo el valor de tan altos móviles de buen gobierno, que previenen y remedian, en cuanto es posible, las extralimitaciones del poder soberano, no quiere decir que tenga filiación esencial é íntima con el pragmatismo maquiavélico, es decir, con aquella política práctica *arbitraria y subjetiva, divorciada de los principios, atenta en cada caso particular á los fines personales y singulares del gobernante, sin conexión alguna con el integro fin honesto de la humana naturaleza, ni propósito que trascienda más allá del hecho concreto á que la disposición soberana se refiera* (1).

El constitucionalismo, escéptico y pragmático no por distinta razón y manera que toda la filosofía especulativa y práctica, que todo el derecho y la política racionalistas, encomienda á precauciones materiales, externas, mecánicas y artificiosas la custodia de una libertad que perdió hace tiempo su base más sólida y sus defensas más naturales y robustas: la justicia y la honra del soberano y las resistencias orgánicas extragubernamentales; pero las causas del aparato constitucional no fueron ni la negación directa y radical de la eficacia ética y de las sanciones morales y sociales, ni la advertida falta de las instituciones moderadoras, coetáneas, en la plenitud de su fuerza y poder, del origen y desarrollo del constitucionalismo inglés, y que tampoco habían desaparecido en Francia, cuando escribió Montesquieu, aunque ya no funcionaran y, por el contrario, hubieran caído en el último grado de postración é inercia.

(1) Véase «El absolutismo y la democracia» sección de las notas finales, nota II, páginas VII á XIX.

3. No hizo Montesquieu otra cosa que elevar á doctrina general y común, adaptable á todos los pueblos (1), lo que á él le parecía ver en la constitución inglesa, y de lo cual algo había en el tiempo en que la observó el autor.

Hallábase entonces la constitución británica en una de las etapas de su natural movimiento hacia el liberalismo parlamentarista, en un cierto equilibrio de poderes entre la nobleza feudal y la *gentry*, es decir, la mesocracia orgánica y de formación histórica, constituida por los grados inferiores de la feudalidad y la burguesía terrateniente é industrialista, que ya significaban y podían no poco en la Cámara de los Comunes. Era entonces el comienzo, por lo menos, de la burguesocracia, hoy ya tan avanzada en dirección hacia la democracia continental.

A su vez, la monarquía, aleccionada con los dos grandes reveses sufridos en la revolución democrática de 1648 y la aristocrático mesocrática de 1688, sólo había osado resistir y gobernar durante el reinado de Guillermo III, que si no fué un génio, tampoco una vulgaridad, y á quien el prestigio de la reciente victoria, la intervención pedida por los revolucionarios ingleses, la displicencia con que la otorgó y aceptó la corona juntamente con su mujer, la comunidad de fanatismo protestante, y el temperamento de prudencia conservadora que reacciona y crece después de las convulsiones revolucionarias, permitieron una acción personal que puede decirse la última en la historia de la monarquía inglesa. La dinastía que sustituyó á la segunda estuarda usurpadora, señala el período de la anulación de la realeza, á que contribuyó no poco la condición de aquellos Jorges que fueron menos que medianías, y

(1) No nos incumbe señalar la contradicción harto patente del sistema en que todo el derecho es producto necesario é indefectible de causas físicas que varían según climas y zonas, con el procedimiento idealista y revolucionario á lo Rousseau, de trasladar la planta constitucional inglesa á suelo y ambiente menos propicios, y donde, dado caso que viviera, tendía que ser exótica y arrastrar misera y raquítica vida. Pero ya hemos visto que es nociva *flora* liberal doctrinaria de todas las comarcas y latitudes.

en cuyo tiempo se limitaron ya los monarcas á ir á remolque de la política del Parlamento.

Entonces el pacto constitucional de 1689 dió su natural resultado, marcándose un período culminante de la evolución parlamentarista: el rey dejó de ser responsable, porque dejó de gobernar, viéndose reducido á elegir ministros que estuviesen de acuerdo con las Cámaras para que le aconsejasen y gobernasen según el criterio parlamentario, á fin de evitar la renovación de los antiguos conflictos entre el Parlamento y la Corona. La monarquía deshecha en 1648, restaurada en 1660, expulsada de nuevo en 1688, *contratante* con la nación en 1689, abdicó al reconocer una cosoberanía; y no podía pasar mucho tiempo sin que al Gabinete privado del rey se sustituyera el Gobierno constitucional, el Gabinete parlamentario, conforme con la mayoría de las Cámaras, dependiente de ellas y ante ellas responsable por los actos del poder ejecutivo.

Ahora ya se explica lo que, desglosado de estos precedentes, parecía inexplicable y aun extravagante paradoja. En este período de la historia política inglesa había una cierta moderación mecánica de elementos y entidades que se habían disputado la soberanía por las vías parlamentarias y fuera de ellas; pero ese fenómeno no suponía ni introducía el influjo y acción de un principio nuevo; era una transacción un acomodamiento doctrinario entre esos poderes, en los que la Reforma y sus consecuencias sociales y políticas habían introducido el germen y el impulso de una modificación profunda, convirtiéndoles de feudalmente mal deslindados y definidos que eran antes, en esencialmente incompatibles y adversarios. En el primer choque natural é inevitable, la guerra civil entre el Parlamento y el Rey (1642) y la destrucción subsiguiente de la monarquía y de la Cámara de los Lores, la revolución democrática había ido demasiado lejos, por lo cual la de 1688, menos violenta, más cauta é instruida por la experiencia, inauguró el período doctrinario y conservador sobre la base del pacto constitucional, sino entre el pueblo y el rey,

entre éste y la nación, acuerdo á que era propicia la circunstancia de una dinastía llamada por la convención parlamentaria de las dos cámaras históricas.

Aunque siempre doctrinario, puesto que doctrinarismo, en el sentido más amplio, hay donde quiera que exista contradicción irreducible de tesis, el autor más constitucionalista es el abate Sieyes, de triste memoria, porque en su sistema no hay nada de histórico y orgánico como en el de Montesquieu y en todos los otros constitucionalismos teóricos y prácticos, incluso el de la Constitución norteamericana. En la doctrina de Sieyes todo se reduce á una manipulación de la masa y á un arreglo de la voluntad única, (la mayoría de las voluntades individuales), de suerte que la *representación* de ella, además de ilusoria, pues se reduce á proponer, y no por voto directo, listas de candidatos para el ejercicio de las funciones públicas, se divida en varias entidades representativas que recíprocamente se contrarresten y nada puedan hacer por las inutilizadas fracciones de soberanía que se las asigna. Este sistema es más constitucionalista, en cuanto más mecánico, como quiera que el equilibrio no procede de fuerzas y elementos históricos é internos, sino de combinaciones dinámicas meramente externas y superficiales; y aunque no logre evitar el predominio natural é indefectible de un poder sobre los otros, no es el parlamento el que aquí obtiene la supremacía; antes, al contrario, el poder legislativo, compartido entre tres cuerpos colegiados, *inválidos de nacimiento y pasivos por institución* como dice Taine, de los cuales uno discute y no decreta, el otro decreta sin discutir, y el tercero mantiene en equilibrio esta inacción paralítica, quedó de hecho supeditado á un poder ejecutivo, que Sieyes quiso hacer también completamente automático y nulo, pero de cuyos resortes se apoderó el genio activo, emprendedor é impetuoso de Bonaparte para erigir la dictadura disfrazada con esos aparatos y trampantojos moderadores y compartida en apariencia con los otros cónsules hasta que, simplificado el mecanismo, se destacó el omnímodo poder personal cesáreo á la romana,

con sus correspondientes serviles instrumentos, el Senado arriba y el plebiscito abajo. Porque Sieyes, el más constitucional, por el más desconfiado de los autores modernos, y tan temeroso de la tiranía del jefe del Estado como de la de la masa electora, del mismo modo que le redujo á ésta la soberanía, quiere decir, el voto, á una designación, por sufragio de tres grados, de listas de candidatos entre las cuales elegía el gobierno sus funcionarios, esto es, á una participación de poder *ilusoria y metafísica* (dicho de Bonaparte), así también creyó maniatar al poder ejecutivo en la magistratura escandalosa y grotesca del Gran Elector, destinado á la única función de nombrar y separar los dos magistrados cabezas del poder ejecutivo, el Cónsul de la paz y el de la guerra, dependiendo aquél, éstos y toda la jerarquía administrativa del arbitrio del Senado que podía suprimirlos incorporándolos á sí en calidad de miembros. Pero ese gran elector, ese muñeco de escena se convirtió en el primer cónsul, y luego en el emperador omnipotente y absoluto gobernante, y al cual el Senado, en quien Sieyes había concentrado la mayor suma de poder, servía de pantalla ó de supeditado instrumento como en la Roma imperial. En suma, el constitucionalismo de Sieyes caía, como no podía menos, en la unidad de poder, no en el del parlamento, sino en el de la dictadura y del imperio que es el término natural de todas las *democracias gobernantes* en el tiempo y etapa en que no puede contenerlas, mixtificarlas y falsearlas el parlamentarismo (I).

(1) Del gran elector decía Napoleón (*Correspondence de Napoléon premier*, XXX, 345). «Si se atiende estrictamente á las funciones que le asignais »será la sombra, la sombra descarnada de un rey haragán (*fainéant*)? »Co- »noceis un hombre de carácter bastante vil para acomodarse (*complaire*) »dice el texto) á semejante ridículo remedo (*singerie*)? Como habéis podi- »do imaginar que un hombre de algún talento y de un poco de honor quie- »ra resignarse al papel de cebón con algunos millones (*cochon à l'engrais* »de quelques millions)...» «Si yo fuese el gran elector, al nombrar el Cón- »sul de la guerra y el de la paz les diría: si hacéis un ministro, si firmáis »un acto, sin que lo apruebe, os destituyo.» En una palabra, que cuando el

En Francia la fase constitucional parlamentarista empezó con la *restauración* doctrinaria de la monarquía y su código fundamental, la Carta, la cual traducía todos los principios del constitucionalismo de Benjamín Constant y de los doctrinarios, tal como quedan expuestos en la sección elemental. Corresponde este período en la historia política de Francia al inaugurado en Inglaterra con el acuerdo convenido entre la nación y el trono en 1689, aparte las diferencias de época, de fuerza revolucionaria, de elementos orgánicos y de sentido político práctico de los dos pueblos (1).

jefe del Estado tiene un poder efectivo, bien monárquico, bien dictatorial, los ministros constitucionales son, de hecho, *secretarios del despacho*.

(1) En Inglaterra las revoluciones, aunque liberales en esencia, contenidas por la constitución interna tradicional, habían quebrantado y al fin anulado la monarquía, pero conservándola en la letra todas las antiguas atribuciones históricas, bien que desusadas y convertidas de hecho en uso contrario, y manteniendo la existencia de la realza al servicio de dos clases bien definidas y fuertes, distribuidas por igual entre los dos partidos: la aristocracia y la *gentry*, de entre las cuales se reclutaban *torys* y *whigs*. Era el rey, y fué durante una buena parte del siglo XIX, el presidente honorario y hereditario de una república aristocrática y ya un tanto burguesa, en la cual el doctrinarismo fué una transacción práctica y prudente entre la teoría y la realidad, entre el liberalismo y la tradición. Al contrario en Francia: la revolución, vencida en la persona del Cesar revolucionario, conservaba aún en la burguesía y hasta en las masas el imperio de las ideas y el influjo de fanáticos afectos; la aristocracia no existía ya; la clase media aborrecía la tradición y carecía de sentido político; todas las instituciones y organismos antiguos estaban hechos polvo; la realza venía no llamada, venía impuesta por una necesidad que no era la de la justicia reconocida y la legitimidad acatada, sino la fuerza de las circunstancias, el deseo de reposo material, el criterio doctrinario, el sentido conservador torpemente egoísta y las conveniencias diplomáticas del sosiego y equilibrio internacionales. En tal situación, la monarquía no trajo más que la persona del rey; y lejos de mantener y ejercer moderada, pero enérgicamente un poder personal, un interino *absolutismo ilustrado*, apoyándose en las todavía fuertes muchedumbres creyentes y realistas, y dispuesta á otorgar derechos, franquicias y libertades con mesura y parsimonia, y á restaurar y renovar los organismos é instituciones tradicionales en la medida en que esto puede ser obra de una generación y del limitado período de unos cuantos años,

El poder regio, al cual la yuxtaposición doctrinaria del principio de la legitimidad no había podido restituir el valor y fuerza de que le despojaban el dogma liberal contrario, la situación del país y la ambición desenfrenada de la burguesía, triunfante al fin en la revolución de 1830, no pasó en Francia de lo que era en Inglaterra desde 1689, de letra muerta, de intento vano de crear un poder distinto del ejecutivo y superior á él y al del parlamento. La responsabilidad ministerial significó lo que en el texto se ha dicho que expresa cuando la monarquía ha perdido su autoridad, influjo y poder: la traslación de la soberanía al parlamento que ejerce la función ejecutiva y la judicial por conducto y órgano de un ministerio salido de la mayoría de las cámaras.

Un poder ejecutivo propio del Ministerio solo existe de hecho en el caso de que, aun siendo el gobierno verdaderamente monárquico, el rey, ó por escasa aptitud ó por negligencia, se abandone y abandone los negocios públicos á la gestión de sus ministros, sin iniciativa, intervención é inspección alguna en las funciones que delega. Lo cual no quiere decir que, en el caso contrario de acción ordenadora personal del soberano, no tengan en la gestión gubernativa los ministros, aun meros secretarios del despacho, además de la responsabilidad legal que les corresponda, la moral y social proporcionada á la participación en los actos de gobierno y queden rebajados á meros ejecutores y como instrumentos materiales de la voluntad real. Nunca, ó muy pocas veces, será tan superior el rey y tan *impersonal*, por decirlo así, el ministro, que no tenga parte de alguna importancia y entidad en las regias disposiciones, y que, aun exento de responsabi-

la realeza se negó y desarmó, aviniéndose á dar la Carta, con la cual aprobó y consagró la Revolución, y privó á la legitimidad de todo poder moral y material y de cuantos recursos y elementos de resistencia y restauración necesitaba. Las consecuencias fueron las indefectibles de siempre: desautorizó y disgustó á los amigos fieles, enagenándose su afecto y apoyo, y no satisfizo á la revolución, ante la cual sucumbió sin gloria al cabo de pocos años de lucha sin energía ni constancia.

lidad penal y aun civil, no le sea permitida una prudente libertad para no suscribir en todo caso los preceptos soberanos y presentar la dimisión primero que prestar una firma siempre significativa de algo más que pura fe notarial de autenticidad indudable (1).

En los gobiernos parlamentarios suceden las cosas al revés de lo que dice el texto constitucional, porque el rey que se empeña en tomar en serio y á la letra sus regias prerogativas aparentes, y gobierna en desidencia con el parlamento, responde de hecho, y sufre, por lo menos, la pena del destronamiento, cuando no tiene poder y medios bastantes para sobreponerse á la representación nacional, como sucedió á Carlos X, á Luis Felipe y á doña Isabel II, y acontecería al mismo rey de Inglaterra, por tercera vez, en cuanto diera en romper con el uso ya tradicional de no intervenir en el gobierno. Por el contrario, los ministros, mientras estén identificados con la mayoría, no responden

(1) El refrendo será para el ministro un caso de ardua y delicada conciliación de conciencia, honor, patriotismo y fidelidad al soberano, de manera que, ni por servilismo, en caso grave, refrende siempre contra su opinión y criterio moral, ni mucho menos, por presunción, terquedad, susceptibilidad quisquillosa, contribuya con este género de oposición á desautorizar las reales disposiciones y aun producir mayores males en el espíritu público y en la actitud de la sociedad respecto del soberano. Este á su vez, sin abdicar en el ministro, convirtiendo así al Ministerio en gabinete constitucional, estimará en mucho, siendo un rey de elemental prudencia, la opinión de sus más inmediatos consejeros, y, antes de decidirse en contra de su opinión, pesará no poco el valor y alcance de la discrepancia respetuosa, sincera y firme, máxime si tiene alta idea de estos altos funcionarios, de sus relaciones, comunicación y conformidad con una sólida y honrada opinión pública, y, sobre todo, si les ve de acuerdo con la representación nacional, aun no siendo cosoberana. Y no se tenga esto por confesión vergonzante y disfrazada de parlamentarismo, porque no se trata más que de la armonía entre un régimen monárquico, llegado á la plenitud de su perfección y madurez civil, y una autarquía no menos adelantada en rectitud, prudencia y demás cívicas virtudes. Entonces en la elección de los ministros ha de mostrarse tal acuerdo entre la soberanía real y la autarquía nacional.

ni política ni administrativamente y gozan de absoluta inmunidad civil y penal para los mayores desafueros y aun verdaderos y graves delitos, porque la que con aquéllos delinque es la representación nacional, y no hay modo legal, ordinario y expedito de que una colectividad soberana tan numerosa como es la mayoría de un parlamento responda efectiva y eficazmente de sus faltas y aun crímenes. Las fracciones de la Convención se guillotinaron unas á otras por procedimiento de feroz dictadura.

4. De lo dicho en la parte elemental resulta que el gobierno llamado estrictamente *representativo*, ó sea presidencial, de la gran república norteamericana, es en realidad un régimen no de imposibles separación é independencia de poderes públicos, sino de unidad y concentración, no bien señaladas y definidas, en uno de los órganos, en una de las entidades que proceden de la soberanía del pueblo americano, y que éste crea por sufragio, encomendándoles las respectivas funciones de gobierno. Si esos órganos se llaman poderes, no es porque los tengan iguales é independientes entre sí, sino, porque recibiendo inmediatamente del *mandato* nacional, tienen funciones marcadas y propias, sin que en las de uno se ingieran los otros, aunque no sean los tres de la misma importancia. Lo más característico de estos gobiernos es que la magistratura unipersonal, llamada jefe del Estado, no está supeditada al parlamento como en las monarquías y repúblicas parlamentarias: por esto se llama presidencial, porque el presidente no solo preside, sino que gobierna, diremos aplicando á las repúblicas la fórmula monárquica de Benjamín Constant.

Pero es aventurado asegurar que sea el Presidente en los Estados Unidos el principal poder, porque sobre él tiene el Senado la superioridad que implica el mayor número de atribuciones, puesto que con su consentimiento ha de nombrar el Presidente á sus ministros y otros altos funcionarios, y también necesitan los tratados diplomáticos la

aprobación de las dos terceras partes de esta asamblea que como se ve, es además de cuerpo colegislador una colectividad un tanto ejecutiva en asuntos interiores y exteriores. El tribunal superior, compuesto de nueve miembros vitalicios, nombrados por el Presidente con el consentimiento del Senado, puede decirse también en cierto respecto superior á los demás poderes, no solo por la duración de sus funciones, sino porque entre sus facultades judiciales, que son importantísimas, figura una anómala y extraordinaria, la de anular virtualmente una ley declarándola contraria á la constitución y negándose á aplicarla (1).

En los Estados Unidos el poder que menos vale y puede, es precisamente la cámara popular, la que en todas partes tiene á su favor la lógica de los principios y el poder é influjo naturales que sobre los hechos ejercen las afirmaciones más absolutas y menos contradictorias. Pero en los Estados Unidos, lejos de ser el centro de unidad y el impulso motor de la máquina política, que es lo que acontece en los gobiernos parlamentarios, legisla lo menos posible la cámara baja, porque los americanos se han arreglado de modo que tenga la totalidad de la asamblea la menor iniciativa y discusión; y como el poder ejecutivo no depende de ella, carece del principal poder de que goza en los países parlamentaristas, que es el de gobernar por conducto de los ministros é intervenir en la función por preguntas, interpelaciones, votos de censura y votaciones sobre asuntos

(1) Tocqueville considera esta invención tan original como admirable, y no niego, que lo sea en cuanto corrige con la sabiduría, justicia y moderación de una colectividad reducida é inamovible los excesos de las grandes asambleas imperitas é inícuas, poniendo freno saludable á la brutalidad del número y de la fuerza. Aquí lo original y también admirable, por estupidamente extraño, es que los autores liberales no hayan visto en ello una negación y condenación de la soberanía legislativa de las Cámaras, y por lo tanto uno de los *sabios*, pero contradictorios expedientes, conque el sentido práctico de los americanos procuró reducir la democracia liberal á su más mínima expresión.

administrativos. En efecto, los comités y las comisiones, es decir, una insignificante minoría para cada negocio legislativo, han sustituido de hecho, en máxima parte, á la deliberación verificada en conjunto por todo el cuerpo colegislador; y como en esos comités tiene el poder ejecutivo, es decir, el Presidente, intervención y acción que sustituye en cierto modo á las del gabinete en las mayorías parlamentarias, resulta que más bien que ingerirse la cámara en el gobierno, influyen no poco en la función legislativa de ella el jefe del Estado y los secretarios del despacho, siendo ésta no floja razón para llamar presidencial á un régimen en que más interviene el ejecutivo en el legislativo que viceversa (1).

(1) No hay tiempo material de discutir la mayor parte de los *bills*, sino aquéllos que más interesan al Presidente ó á los miembros más importantes del correspondiente comité. Repartiendo entre ellos las horas de los días hábiles, tocan á cada uno de los cuarenta y ocho comités no más de dos horas, y contando con que los dos de Hacienda y algún otro, tienen el preferente derecho de hacerse oír cuando les parezca, prescindiendo del que á la sazón tenga la palabra, queda notablemente reducida la parte de los demás, y sin discutir un enorme número de proyectos. El informante dispone de una hora, y lo general es que, antes de que termine, reclame la *cuestión previa* que casi nunca le niega la Cámara y que le da derecho á otra hora de exposición. Durante la primera no se puede proponer enmienda alguna sin el consentimiento del relator, y en la segunda después de la votación de *cuestión previa*. Ya puede calcularse lo difícil que es modificar las proposiciones del comité, siendo así lo más expedito y frecuente aceptarlas, ó rechazarlas en conjunto. Añádese á esto el interés que cada comité tiene en abreviar los negocios para que la otra multitud de ellos no quede en cartera, y que esto mismo importa á los demás y se comprenderá que es toda la Cámara, repartida en ellos, la que procura que toda la discusión se reduzca á un ligero cambio de breves observaciones antes de votar. Y como, aun así y todo, no hay modo de que pasen más que muy pocos *bills*, todos los lunes á cierta hora, y sobre todo durante los diez últimos días de sesión, puede cualquiera representante pedir la suspensión del reglamento para que sin discusión (y tampoco se discute esta solicitud) se acepte y rechace el *bill*, si las dos partes de la asamblea acceden á tal procedimiento ejecutivo. No hay que decir que en estos días así se vota en una multitud de proyectos para que la opinión no acuse de inactiva á la

Porque hay que advertir que, si en los gobiernos parlamentarios todo se reduce á la sumisión del Ministerio al Parlamento, en América no impiden la distinción de funciones, ni la misma imperfección constitucional de comunicación y relaciones entre los poderes públicos el que la naturaleza, la costumbre y el buen sentido hayan provisto á llenar esos huecos y remediar tales faltas del código federal. El Senado tiene la habitual prudencia de dejar expeditas al Presidente aquellas funciones en que el Jefe del Estado necesita el consentimiento de la alta Cámara. Sin tal circunspección, privándole de la libertad de nombrar los ministros y funcionarios de su confianza y estorbándole así el gobierno personal, lo convertiría de hecho en presidente á la francesa, sin más diferencia que la de trasladarse el parlamentarismo de la cámara baja, que lo ejerce en la mayor parte de los países constitucionales, al Senado, que es el que goza en América de más autoridad *tradicional* y de mayor prestigio por ser orgánica su representación.

Además, aunque por costumbre, los ministros no penetran en las Cámaras y, por consiguiente, nada exponen de palabra en ellas, no solo se comunican con las dos ramas del Congreso (el Senado y la Cámara de representantes) por medio de informaciones y mensajes, cuando lo juzgan conveniente, sino que la prudencia política ha procurado el acuerdo entendiéndose el ministro de cada ramo con los presidentes de los Comités legislativos; y la inteligencia es tanto más fácil, cuanto que, desde 1841, se descubre, ya bien determinado y constituido, el uso de que tanto los comités permanentes como las comisiones especiales se compongan en su mayoría de miembros pertenecientes al partido del gobierno. Y, si se añade que el autor de una proposición de ley es, *ipso facto*, presidente de la comisión en-

asamblea. O lo que es lo mismo, que en América se han arreglado para que los menos y más aptos hagan las leyes, atando corto á la vana é inútil charla.

cargada del examen y del informe, se comprenderá que no falta al poder ejecutivo un medio, si no perfecto, cuando menos útil, de acción y de armonía parlamentarias.

En suma, no hay constitución que pueda ser rigurosamente constitucionalista, diferenciándose estas *representativas* de las parlamentarias; a) en la mayor independencia del poder ejecutivo; b) en no estar bien determinadas, sino organizadas de un modo deficiente é imperfecto las relaciones entre los poderes públicos; c) en no concentrarse la unidad de la soberanía en el parlamento y, especialmente en donde es lógico y natural que esté en los modernos gobiernos, en la cámara popular (1).

(1) Acerca de la índole de la Constitución norteamericana se ha discutido y aun discute no poco, considerándola especialmente en su relación con la Constitución inglesa para encontrar más ó menos parecido á los organismos políticos de los dos pueblos sajones. No suscribo á la opinión, que me parece, por lo menos, exagerada, de Sumner Maine, de que la constitución americana es la misma constitución británica adaptada á las necesidades de los ingleses del Nuevo Mundo; pero encuentro en ellas semejanzas más sustanciales y de fondo que de forma y de concomitancia exteriores.

No puede haber, á primera vista, mayor discrepancia que la señalada entre una constitución parlamentarista y otra presidencial, y no digo monárquica y republicana respectivamente, porque la jefatura del Estado es lo contrario de lo que expresa la *forma de gobierno*: un rey que no manda y un presidente que gobierna; una Cámara de los Comunes que es ya el centro impulsivo, casi único, de acción y una Cámara de representantes que es todavía el menor de los poderes, aunque con el tiempo será lo que no puede menos de traer la evolución, es á saber, la representación de la democracia primero, de la oclocracia después y Dios sabe de qué en adelante. La Cámara de los Lores ya apenas significa, mientras que el Senado americano, cámara no aristocrática, sino todavía, en cuanto es posible, Cámara de los Comunes, aunque esto parezca paradójico, mantiene en la actualidad un poder superior, mientras la república no acabe de democratizarse á la europea. Tampoco se comprende que Sumner Maine equipare la presidencia americana, de gobierno personal efectivo, con la realaleza inglesa, harto quebrantada ya, no poco antes de la independencia de las colonias, y que funde la semejanza en hecho tan accidental, pasajero y al fin frustrado, como las tentativas de Jorge III, no tanto de recuperar las regias prerogati-

No hemos aducido como tipo de gobierno representativo y presidencial el que al lado de la Constitución de los Estados Unidos presentan los autores, la constitución del Imperio alemán, porque no hay modo de aplicarla ambos caracteres de

vas de la letra constitucional, como de sacudir el yugo de los *wighs*, disgustado el rey, por cierta natural probidad, de la corrupción, de las intrigas parlamentarias y del desenfreno *ya gingoista* de la prensa avanzada y licenciosa.

Pero sobre estas diferencias, no leves, es lo cierto que los constituyentes americanos trasladaron á su constitución, cuanto les fué posible, y acaso sin darse cuenta de ello, el espíritu, el carácter general de la constitución británica, y hasta imitaron sus instituciones en la medida en que lo consintieron las circunstancias de tiempo y lugar. Nada, al parecer, más extraño y aun contradictorio con lo expuesto en los párrafos anteriores que esta interna y como secreta afinidad de fondo entre una constitución parlamentaria y una constitución presidencial, y, sin embargo, fué ésta el trasunto más fiel que podían sacar de aquélla unas sociedades dependientes en las que existían *in potentia* los elementos de la nacionalidad común, pero que no fueron Estado ni nación hasta que la necesidad las obligó á erigirse en tales. Como pueblo nacional nuevo tuvieron las insurreccionadas colonias que crear las instituciones de que carecían. A falta de monarquía, que ni se improvisa, ni habían de trasplantar de Inglaterra, porque atribuían á la Corona, es decir, al poder nominal, los agravios inferidos por el poder efectivo, el Parlamento, crearon una magistratura unipersonal, que si no fué vitalicia, como proponía Hamilton, quisieron dotar con poder propio haciéndola del todo independiente de la cámara popular. Copiaron en esta jefatura temporal del Estado lo que imaginaron ellos que era aún la monarquía inglesa, y lo que seguía siendo y aún es hoy según la letra, hace tiempo desusada y derogada por costumbre contraria de la Constitución; dieron por acción constituyente al jefe del Estado las funciones gubernativas que la acción de la historia había dado al rey de Inglaterra, que éste ejerció, bien que disputadas por una representación feudal parlamentaria, orgánica y poderosa, hasta que violenta y pasajeramente se las arrebató la revolución de 1648, y de vez, bien que por modo suave y evolutivo, el liberalismo doctrinario entronizado por el pacto constitucional de 1689.

Pero, así como la monarquía inglesa fué antes de los Tudors, y siguió siendo á la letra, como las demás medioevales en el Continente, una monarquía moderada por el concurso gubernativo de los brazos del reino, tampoco quisieron los americanos hacer independiente de su *representación nacional* al presidente de la república, esto es, al *rey temporal y amovible* que

idéntico modo que á la constitución americana, sino cuando más con cierta lejana analogía. El emperador no es un jefe de Estado republicano, sino rey vitalicio y hereditario de una monarquía federal, presidente, es cierto, de una federación,

es más *rey* en su cuatrienio que es el rey de Inglaterra en toda su vida. De aquí la coparticipación gubernativa del Senado en los actos presidenciales expresados en el texto á que corresponde esta nota.

El Senado era en el nuevo pueblo la única institución de precedente tradicional, y por eso la enriquecieron con mayor número de atribuciones, ó, por mejor decir, se las reconocieron y consagraron los autores del pacto federativo. Colonias lejanas, independientes entre sí, creadas unas por concesión real mediante una especie de carta puebla, formadas otras por una inmigración libre é independiente en las tierras en que se asentaron, traían de la nación de origen, además de la unidad de raza y de lengua, la noción, el afecto y el hábito de la fuerte y sólida comunidad inglesa, resistente por tradición y contextura étnica al principio de disolución individualista que llevaban en sus entrañas la religión y el derecho nuevos. Sobre la diversidad de creencias, de condiciones de inmigración, (por concesión real, y como por una especie de carta puebla y fuero algunas, por empresa de compañía mercantil, ó por libre establecimiento, al azar, otras) y de bases constitutivas, (ora la carta real, ora las ordenanzas acordadas por los inmigrantes), las colonias copiaron, por regla general, todo lo que era posible de la constitución patria: una magistratura personal ejecutiva, con atribuciones análogas en la colonia á las del rey en la nación, un consejo con varias y no muy bien definidas atribuciones de cogobernación auxiliadora y moderadora de la autoridad del jefe colonial y no muy distintas, al lado de éste, de las del primitivo Parlamento al lado del rey en Inglaterra. Ahora bien, estas colonias, trozos de la patria inglesa, esparcidos en la inmensidad del continente septentrional americano, verdaderos estados semi independientes de hecho, por los flojos vínculos con la metrópoli, que formaron primero ligas defensivas contra los salvajes ó contra los franceses, y que ya en 1690 se habían reunido en Congreso en Nueva York para conquistar la Nueva Francia, fueron las que hicieron primero una confederación defensiva y luego una unidad nacional federal sobre las bases y la traza más común de las constituciones embrionarias coloniales: un presidente, asistido de un Senado, de acuerdo con él y moderado por él, como en la vieja constitución de Inglaterra un rey asistido y contrarrestado por el Parlamento. No tenía la Nueva Inglaterra más organismo que sus *comunidades*, las colonias; pues bien, cámara representativa de ellos, para la unión confederal primero y para la federal después, fué el Senado, y así se explica la variedad de sus atribuciones, que es la mayor negación del principio constitucionalista.

cuyo título inmediato de presidencia es el acuerdo de los Estados federales, pero cuyo título mediato es una histórica y poderosa legitimidad monárquica en el estado alemán de más fuerza é influjo actuales en las naciones germánicas, jefatura

La otra cámara es la agregación pegadiza de lo nuevo á lo antiguo, la yuxtaposición doctrinaria del liberalismo individualista al organismo histórico, y que, aunque ideada y establecida en unidad de función constituyente, representa en la constitución americana lo que la ingerencia del principio liberal, atomista y revolucionario en la histórica constitución inglesa en el reinado de Carlos I, especialmente desde 1848, y después de la interrupción de 1660 á 1688, definitivamente y sin solución de continuidad desde 1689.

En efecto, los autores del pacto federativo no fueron, como los autores de la Constitución francesa de 1791, los individuos libres é independientes, la masa, el pueblo soberano, fueron las unidades orgánicas coloniales, es decir, unos Estados de existencia tradicional é histórica, unas seminaciones que no tenían de nuevo tanto como se ha dicho, sino tan solo la común y definitiva existencia nacional, plenamente actuada en forma federativa, lo cual aconteció en 1787-89. Ellas, las Colonias-Estados eran las que se habían reunido en 1775 en Congreso para tratar de los intereses y de los agravios comunes, para publicar éstos solemnemente con la declaración de independencia, para convenir la liga y la guerra defensivas y formar la confederación, promulgada al fin en 1781. La representación del Congreso era orgánica, no individual, porque procedía de las legislaturas ó de las convenciones de los Estados, y todos, chicos y grandes, tenían igual voz y voto en la Asamblea. Con esta representación hubiera bastado para hacer en el definitivo período constituyente (1787-89) una federación tan suficiente y completa como fuera necesario, dejando á los Estados, á quienes el Congreso, á poco de reunirse, invitó á darse constituciones, si no las tenían á la fecha, toda la autonomía compatible con la unidad nacional recién creada. Pero no hay que olvidar que corrían los últimos años del siglo XVIII, que el individualismo de la titulada Reforma había llegado á la plenitud de su desarrollo teórico y apremiaba á publicistas y políticos con la natural exigencia de ser llevado á la realidad, y que los constituyentes americanos, bien que hombres prácticos y circunspectos, estaban no poco imbuidos en el concepto antropológico y sociológico que trajo al mundo el protestantismo, la igualdad é independencia de todos los hombres, la consiguiente composición de la sociedad por la mera suma de individuos, libremente convenidos en formarla. Por esto, bien que en el grado máximo de mesura y atenuación, economizando cuanto pudieron la exposición *metafísica* de principios

más bien que creada por los Estados alemanes, reconocida y acatada como la natural del nuevo Estado, en virtud de la superioridad notoria del Rey de Prusia sobre los otros reyes y de la monarquía prusiana sobre las otras monarquías. Mien-

abstractos, y solo refiriéndose á ellos en cuanto les parecía exigirlos los preceptos positivos, los constituyentes americanos, entendieron que no había nación, si no estaba inmediatamente constituida por todos los individuos, sin distinción de Estados, y no por el natural y necesario conducto de ellos, y que esta suma de ciudadanos requería una representación conforme y adecuada, no orgánica, sino numérica, en proporción de la masa indistinta y continua, y salvando los límites y todas las diferencias múltiples procedentes de la personalidad de los Estados. Órgano de esta representación de la masa fué la cámara popular, la Cámara de representantes.

Acaso no fué sólo la indefectible influencia del liberalismo individualista la que agregó á la representación verdaderamente popular del Senado esta supuesta representación popular, ficticia y apriorística; es posible que en el ánimo de aquellos legisladores fuera, tanto ó más que la expresión de un dogma y el reflejo de un estado social, un arma y un instrumento de unidad nacional ulterior, ya que, á la sazón, apenas estaba incoada, y era mucho más débil y floja de lo que el organismo federal manifestaba y traducía. Diversidad de confesiones, de costumbres, de población, de posición social y económica, como era inevitable en territorio tan vasto, y de clima, suelo y situación tan diferentes, no podía haber producido unidad social muy sólida y compacta y espíritu público pronunciado, íntimo y vigoroso. Por eso los constituyentes querían apresurar, sobre la variedad de los anteriores pueblos coloniales, la identidad del pueblo americano, por el sistema idealista entonces en boga, mediante una especie de pacto que creara la nación americana, en virtud de la voluntaria asociación de los individuos soberanos, cuyo *mandato* se encomendaba á la Cámara de representantes, á la rama menor del Congreso.

Va se ve cuan distinta significación tiene esta cámara de la Constituyente francesa, expresión y fórmula de la soberanía popular, con todo el rigor lógico posible, y único organismo cuyo poder no tuvo desde luego más limitaciones que la soberanía inmanente que de hecho retuvo el pueblo, y que, por la asonada y el motín callejero, la amenaza y la coacción violenta, se impuso desde el principio de la Revolución á la Asamblea. De esta anarquía espontánea, que siguió inmediatamente al derrumbamiento de los viejos organismos, surgió la Constitución francesa, mientras que la americana se hizo con todo el orden, sosiego y corrección que permitían las circunstancias: la declaración de independencia, la guerra con la Metrópoli, las desconfianzas y susceptibilidades de los Estados, que en su mayor

tras el Presidente de los Estados Unidos puede decirse representativo en cuanto elegido por el pueblo, el Emperador alemán es representante del Imperio federal en el sentido en que todo soberano se dice representación del pueblo, como cabeza, como órgano visible y más culminante de la nación; y después del pacto federativo de 1871, la *presidencia* imperial no depende de ningún modo ni del sufragio directo de los ciudadanos, ni del que mediatamente pudieran ejercer por conducto de las Cámaras. Si bien puede decirse que el Emperador es aun más presidente que el jefe del Estado en la República americana, y en este sentido pudiera llamarse presidencial, y aún más presidencial la constitución del Imperio, como ese poder efectivo superior procede del que tiene el Emperador por su doble título monárquico, resulta, además de un modo impropio de expresión, una inexactitud por el distinto origen y razón de las magistraturas que estamos comparando; ni lo representativo ni lo presidencial del imperio tiene nada que ver con ambas propiedades de la jefatura americana, ni por el fundamento ni por la procedencia.

parte inauguraron y terminaron el período constituyente interior de su autarquía por los mismos años en que se elaboraban, primero la confederación y luego la federación nacional (de 1776 á 1781 en que las colonias-estados se organizaron políticamente de un modo más regular y completo). El ciudadano francés era, en cuanto la realidad consiente la efectividad de la aberración, el hombre abstracto, independiente, igual en derechos, creador de la sociedad y de los poderes delegados que la rigen; mientras que el ciudadano colonial, el futuro miembro de la federación, era el hombre real, *histórico*, sin las desigualdades tan acentuadas y clasificadas de la vieja sociedad inglesa, pero tampoco de condición absolutamente igual, aunque sí muy parecida, á la de la mayor parte de los colonos; era el poblador terrateniente, más ó menos acomodado, poseedor de latifundia ó de pequeñas porciones de terreno, pero burgués pacífico, conservador y hasta dueño de esclavos, á pesar de la declaración igualitaria del Congreso que tuvo participación directa en la elaboración del Código federal. La evolución democrática, cada vez más acentuada, y coetánea con la centralista é *imperialista*, es posterior, simultánea con la de Inglaterra, y señalada en América, especialmente desde la guerra de secesión, cuyo resultado fué propicio á este transformador movimiento interno y consuetudinario.

Además, la Constitución alemana se acerca mucho menos que la de América á la *división* constitucionalista de los poderes, estando harto más señalado el centro de unidad que en los Estados Unidos. Allí, prescindiendo de las extraordinarias atribuciones del Tribunal supremo, que tiene la jurisdicción superior á todos los poderes, como hemos manifestado anteriormente, el poder más culminante es el Senado, con el que debe contar el Presidente para ciertos importantes actos ejecutivos de carácter interior y exterior; en Alemania también el *Bundesrath* y el Emperador son los principales poderes hasta ahora, pero, al revés de lo que sucede en América, el Emperador predomina sobre el Consejo federal, y no viceversa, porque aparte de los 17 votos que en él tiene Prusia á disposición del Rey-Emperador, el voto de éste, como Presidente del alto cuerpo legislativo, puede mantener el *statu quo* en caso de disenso en proyectos de ley sobre guerra y marina.

Sobre ciertas singularidades de la Constitución alemana bien descuella y se percibe la yuxtaposición doctrinaria que es la esencia del constitucionalismo; allí hay enfrente dos poderes: el histórico, esto es, el emperador con el *Bundesrath* al cual supedita y domina, y el nuevo, la representación individual del pueblo alemán indiviso é indistinto, sin diferencia de Estados federales, borradas las fronteras de éstos por análogos fundamento y motivo á los de la representación del pueblo americano en la Cámara de representantes. Este es el parecido de más bulto entre ella y el Reichstag, elegido también por sufragio universal en proporción de un diputado por cada 100.000 habitantes. Hasta ahora, este poder aún vale menos que el histórico; pero la lógica y la acción del tiempo concluirán por sobreponerle á la monarquía, sobre todo cuando se interrumpa la feliz tradición de príncipes activos, enérgicos é inteligentes y la de estadistas distinguidos que les secunden ó les suplan. Entonces, alejado además el glorioso recuerdo de la fundación de la nueva unidad alemana y del Imperio federal, sucesor de las antiguas confederaciones,

y coincidiendo con la disminución de tal prestigio el crecimiento de la democracia, cada vez más adelantado hacia el socialismo, sucederá lo que en todas partes en que la revolución se ha sobrepuesto á la tradición: roto el inestable equilibrio doctrinario, el emperador, mientras la monarquía nominal y aparente dure, tendrá que enviar al *Reichstag*, ya sobrepuesto á la Corona, un canciller del gusto de la Cámara, y este órgano de comunicación se habrá hecho parlamentario por los mismos motivos, y por uso y exigencia de adaptación, como en Inglaterra (1).

5. Si el poder armónico es el poder, esto es, el conjunto de las funciones verdaderamente superiores de la soberanía que retiene el soberano, resulta que no son poderes las otras funciones de categoría inmediata, pero inferior, encomendadas á entidades físicas ó colectivas dependientes del único y supremo poder, y que es vano y pueril empeño distinguir y circunscribir de hecho ese supuesto cuarto poder, por solo nombrarlo, definirlo y asignarle en la constitución artículos y aun sección aparte, en que se determinen las imaginadas atribuciones que en la práctica corresponden á la monarquía ó al parlamento.

Las contradicciones doctrinarias de esta teoría aun más se destacan considerando que el poder armónico solo lo parece en la resolución de conflictos entre el poder ejecutivo y el judicial; porque los otros dos es la opinión pública la que los resuelve, y á la cual el poder armónico debe estar atento en él un caso para mantener al ministerio ó á la asamblea, y en el otro para que la opinión confirme ó retire en nuevas elecciones los poderes á los anteriores representantes. Aun en la solución del conflicto entre el poder judicial y el ejecutivo, si la corona no tiene propia autoridad y fuerza, y el ministerio depen-

(1) Bien que esto mismo pasará en los Estados Unidos cuando la ola democrática suba y, en la misma proporción, desciendan los actuales temperamentos de prudencia conciliadora entre el poder legislativo y el ejecutivo.

de no del rey, sino del parlamento, queda realmente sometida á la inspección é intervenciónde éste que puede derribar al gabinete cuando en el asunto no se atempere al arbitrio y voluntad de las cámaras (1).

(1) Y por cierto que en el más frecuente caso y supuesto del poder del parlamento sobre la monarquía, el conflicto de que se trata, ó lo resuelve el ministerio, es decir, el poder ejecutivo, actuando de juez y parte, con aparato de juicio y forma de sentencia, (sistema administrativo ó francés), ó es el poder judicial el que falla, bien por el órgano del tribunal supremo común (sistema judicial neto), ó por uno especial, compuesto sólo de jueces, ó de jueces y hombres de administración ó de jurados, ó de cualquiera otra manera mixta. Pero siempre será un tribunal y, por consiguiente, juez y parte también en la contienda, el que decida si la materia controvertida es de administración ó de jurisdicción.

Lo mismo decimos respecto de la autoridad que ha de entender en lo que se llama contencioso administrativo; y tanto tratándose de lo judicial administrativo como del conflicto de poderes, la cuestión que se debate en último extremo es más bien entre el poder judicial, menos supeditado al parlamento, y el poder legislativo que es á la postre el que juzga por conducto de los órganos administrativos, los ministros, sometidos á las cámaras en los gobiernos parlamentarios.

Por el contrario, cuando y donde la monarquía conserve poder personal sobre y á pesar de la constitución nueva, la solución de tal conflicto es un caso sencillo de apelación al poder soberano para que por sí mismo, ó por las personas á quienes delegue, resuelva una competencia entre distintas autoridades, siendo indiferente al efecto que juzgue el ministerio erigido en tribunal, ó un cuerpo consultivo, ú otros individuos ó colectividades á quien el soberano encomiende esta jurisdicción retenida. Porque, sólo en el supuesto de *poderes* distintos, separados, *independientes*, y en la misma medida recelosos, envidiosos, y enemigos, puede interesar el que sea la *administración* ó la judicatura la que conozca y resuelva esos negocios; lo que al interés particular y público importa, cuando no hay constitucionalismo, es la mayor garantía que presta el que es juez superior de todos los jueces, como es también superior legislador y gobernante. Que los que le asistan con su consejo técnico, si él interviene personalmente en el juicio, ó los que por encargo suyo conocen del hecho, ofrezcan todas las mayores probabilidades de acierto y rectitud en el fallo, he aquí lo que debe racionalmente preocupar, y no otra cosa. Si ahora es ésta una materia de grandísima importancia, tanto especulativa como práctica, es porque en el constitucionalismo implica una grave y trascendental cuestión de organismo y funcionamiento políticos, y porque los ciudadanos, y la sociedad en gene-

Es decir, siempre la opinión, *reina del mundo*, resulta el único poder, cuando ha sustituido, y eso es lo natural y lógico, á la soberanía histórica; y esa opinión, y no el poder armónico, es la que dicta su fallo por medio del sufragio, y, mientras, por el conducto y ministerio de otros órganos y funciones cuyo *valor* estudiaremos en breve. O lo que es lo mismo, el aditamento doctrinario del poder armónico, como el de todas las demás añadiduras y correcciones de la misma clase, lo resuelven la lógica y la naturaleza en el sentido de la unidad é indivisibilidad del poder nuevo, y solo por la contradicción y la fuerza, podrá recabar para sí y retener, más ó menos tiempo, el poder antiguo las atribuciones armónicas, que no son otra cosa que las más altas prerogativas soberanas.

Pero, si es falsa la división, separación é independencia de los poderes públicos, no así la distinción de las funciones gubernativas que el soberano no puede ejercer ni retener, y están encomendadas á funcionarios individuales y corporativos que, en nombre de aquél, las desempeñan. Reunidas confusamente y aun amontonadas en unos mismos sujetos no solo en las épocas primitivas, sino en períodos muy avanzados de la vida nacional, el tiempo y el progreso del organismo político van distinguiendo las funciones más señaladas y características, para atribuir las, por natural exigencia de la división del trabajo, y con las ventajas á ella anejas en éste como en los demás órdenes de actividad, á funcionarios especiales de particular vocación y aptitud para los correspondientes oficios. Así, no solo son éstos más adecuadamente cumplidos, sino que, por acción orgánica de la naturaleza y de la historia, y más substancial y profunda que la de los superficiales artificios del constitucionalismo, se va formando una moderación

ral, tienen un interés contrario al del poder ejecutivo, brazo del absolutismo, despotismo y tiranía parlamentaristas, el interés de sustraerse al fallo de la administración absorbente y opresora, amparándose de los tribunales de justicia, á los que se juzga más justos ó menos viciados.

eficaz de arraigada y espontánea constitución interna, la cual mantiene á las autoridades en sus respectivas esferas de competencia bajo la garantía de las correspondientes leyes orgánicas y procesales y la inspección personal del soberano común. Lo cual no quiere decir ni que la aplicación del principio sea tan extremada que se extienda en toda esfera pública, separando, hasta en los municipios rurales, las funciones del alcalde de las del juez municipal, ni que, con revolucionaria intemperancia, cuando no sea preciso, se sacrifique á la doctrina, aun siendo intrínsecamente buena, costumbres é instituciones respetables que ofrecen más garantías de justificación y competencia que la exterior formalidad de una estricta y minuciosa distribución. Ayudar á la naturaleza, sin contrariarla ni forzarla, debe ser aquí la obra prudente del legislador, teniendo en cuenta que es en el medio y no en los extremos, es decir, ni arriba ni abajo, donde va la historia determinando la distinción de funciones; en el padre como en el soberano están naturalmente reunidas.

6. No se puede señalar *á priori* la proporción en que la ley y la costumbre contribuyen á la formación del derecho constitucional y á su adelanto y mayor perfección; pero, prescindiendo de las circunstancias históricas que pueden favorecer más ó menos á cada uno de estos dos factores de legislación positiva, no parece aventurado afirmar una ley ó principio general acerca del valor del elemento consuetudinario, y que puede afirmarse así: *son, con corta diferencia, iguales la frecuencia y eficacia de la costumbre en todas las épocas de la vida del pueblo, cuando el desarrollo de éste se verifica de una manera regular y normal, y no le contrarían gravemente defectos y vicios varios de constitución.* Esta ley, que parece error y aun estraña paradoja, se funda en que, por razones distintas y contrarias, el pueblo sustituye la acción legislativa, directa y refleja, del órgano soberano, en los comienzos de la vida social y en los períodos de poca avanzada cultura, por deficiencia legislativa de aquél; y, á medida que la

civilización avanza, sucede lo mismo, bien que por causa opuesta, es á saber, por el adelanto de la conciencia jurídica popular, que se hace cargo de los vacíos de la legislación escrita y va llenando los huecos de la ley, ó corrigiendo su injusticia ó inoportunidad (1). Al principio, el legislador apenas observa, reflexiona y generaliza; luego, por perfecta que sea la ley, ni vaga é indeterminada, ni minuciosa y casuística, no puede abarcar total y cumplidamente la realidad, la vida de que es norma, y el uso popular la completa y modifica acudiendo á la necesidad y supliendo la deficiencia como antes, bien que cada vez con mayor adecuación y suficiencia.

Este mismo principio es aplicable al derecho constitucional, debiendo notar solamente que en una parte de su esfera aun se retarda más la ley, porque el soberano antes atiende á la necesidad más apremiante de regla escrita en otros dominios jurídicos que en aquellos más cercanos á la acción de la soberanía. En éstos entiende que es bastante garantía de justicia el arbitrio soberano que, por regla general, no cercena el imperante por espontánea y gustosa voluntad, sino instado y aun apremiado por solicitudes, reclamaciones y aun presiones sociales más ó menos pacíficas. Así, pues, la serie de actos soberanos singulares hacen las veces de ley, y á esta forma dispositiva no me atrevo á llamarla costumbre, sino en cuanto es derecho no escrito, porque para ser costumbre en el riguroso y clásico sentido de la palabra le faltan las condiciones de origen, de génesis (acto, uso) y de aceptación y consentimiento por el soberano (*sabiéndolo el Señor de la tierra* (el uso) *e non lo contradiciendo é teniéndolo por bien*. La costumbre, en la estricta acepción de la palabra, también se actúa y determina antes en otras relaciones jurídicas, en las privadas y en las públicas extrapolíticas, que en las que se refieren directamente

(1) Cuando esta ley no se cumple, es por el presumido pragmatismo absolutista del legislador, ó por postración y decadencia del espíritu público; generalmente por ambas causas á la vez, puesto que racional é históricamente tienen entre sí conexión íntima ambos hechos.

al solidario interés nacional, menos cercano al pueblo, menos importante para él y apenas asequible á su entendimiento y á su corazón, mientras no han alcanzado un regular desarrollo la conciencia y el sentimiento patrios (1).

¿Y qué acción é influjo tiene la costumbre en el moderno derecho constitucional? Si nos fijamos en la constitución madre del constitucionalismo y tipo y modelo de él, la constitución inglesa, veremos que no solo antes de la revolución de 1648 compartió la costumbre más que por igual con la ley, la formación del derecho político británico, sino que después de 1689, la radical transformación, el cambio substancial y de fondo de la constitución monárquico aristocrática, ó mejor dicho, aristocrático monárquico en un parlamentarismo burgués de exterioridades democráticas y cada vez más en camino de la efectiva democracia moderna y sus consecuencias (oclocracia, socialismo) no se ha verificado por ministerio de la ley escrita en ninguna de sus formas. Ha sido consuetudinariamente como el espíritu y el principio del derecho nuevo han ido informando el antiguo organismo constitucional inglés y modificando su esencia, á pesar y á través de su exterioridad histórica, conservada casi íntegramente hasta nuestros días. Aunque no pueda precisarse bien si esto ha acontecido por desuso, ó por costumbre según y fuera de ley, ó contra ley, lo cierto es que el gabinete aulico ha pasado á gabinete constitucional, y la, hasta cierto punto, monarquía pura á monarquía parlamentaria, sin que de ello se encuentre señal y vestigio alguno en el derecho escrito.

(1) Ni hay tiempo, ni es este el lugar oportuno, de tratar y discutir la cuestión jurídica general, que por incidencia tocamos, de si es costumbre lo que tradicional y generalmente se ha venido entendiendo, es á saber, *uso jurídico popular consentido por el legislador*, ó si no hay diferencia cronológica ni categórica entre costumbre y uso, siendo una y otra cosa el derecho que el pueblo elabora por acción continua, lenta é insistemática, aunque no irreflexivamente, *extra y contra legem*, y que en lugar de ella emplea y aplica. Para lo que aquí importa, llamaremos en amplio sentido derecho consuetudinario al *no escrito*, hágalo el pueblo, ó hágalo el soberano por modo de *fazaña ó albedrío*.

En cuanto á las otras constituciones, no elaboradas por evolución, sino concebidas *á priori* y concluidas y escritas de una vez con arreglo al nuevo derecho abstracto, é imitando á la constitución inglesa, ó coincidiendo con ella en aquellos puntos en que ya el liberalismo había cambiado la naturaleza de la institución, parece á primera vista que no son susceptibles de añadidura ni modificación consuetudinarias. No solo por rígidas é inflexibles, por la pretensión de haber expresado y traducido todo el ideal, ó cuando menos el de un período indefinido, preséntanse como cerradas á toda acción que no sea la legislativa constituyente, después de cierto lapso de tiempo más ó menos largo, en que el pueblo soberano ha modificado su pensamiento de un modo ni accidental, ni subalterno, sino un tanto extenso y grave.

Y en verdad, en ellas tampoco se concibe lo esencial del derecho consuetudinario, esto es, la acción legislativa implícita del pueblo, porque además de que el órgano *propio y periódico* de su *soberanía* es la representación parlamentaria, por medio de la cual puede, con ciertas solemnidades y precauciones, ó sin ellas, introducir en la constitución las mudanzas que le parezca, hoy, de hecho, hállase en todas partes extinguida la fuerza de la costumbre, no solo por el pragmatismo socialista inherente al derecho nuevo, sino porque ha desaparecido la conciencia jurídica popular y extinguiéndose la potencia moral y efectiva del pueblo para irla infiltrando en la legislación y hacerla prevalecer en actos, y luego de repetidos, en uso ya bien determinado y concreto.

Mas, por otra parte, toda la *rigidez é inflexibilidad* de los modernos códigos políticos no les exime de las modificaciones y variaciones impuestas por la lógica ó por la realidad. Unas veces aquella disipa y desvanece las contradicciones doctrinarias, las pegadizas añadiduras del derecho antiguo; otras veces la naturaleza corrige, cuanto le es dado, el absurdo esencial de las instituciones nuevas, y, entre estas dos fuerzas y factores contrarios, suelen ser en la práctica las constituciones escritas cosa muy distinta de lo que aparecen

en la letra y hasta en el fingido y aparente espíritu del texto constitucional. El cual es derogado también *more despótico*, y con los procedimientos más simples y expeditos, en aquella parte que, aun siendo justa y conveniente, no está conforme con las exigencias del nuevo derecho, ni con los propósitos y criterio gubernativo de los poderes oficiales. Y esto es lo que en realidad tiene de consuetudinaria una buena porción de las mudanzas constitucionales, así en la constitución inglesa como en los códigos idealistas y apriorísticos de las demás naciones: la nota negativa y amplia de no ser introducidas por ley escrita, sino por acto, por *fazaña* y *albedrío*, no pocas veces ilegal, además de injusto, en el fondo y en la forma, por los órganos legales de la soberanía nacional, si es que no por el poder ejecutivo solo, con la aquiescencia tácita del legislativo, ó sin ella, pero sin intervención efectiva y, menos, verdaderamente consuetudinaria del único autor de esta forma de derecho, el pueblo (1).

(1) Así es que empleamos la palabra costumbre en un sentido impropio, y á falta de otra más precisa que sustituya circunloquios y rodeos expresivos de cambios y transformaciones no verificados por la ley en la acepción estricta del término: derecho escrito al mismo tiempo que formado de una vez, y decretado con las formalidades constitucionales por el soberano. En la misma constitución inglesa habrá actos rigurosamente consuetudinarios, todos aquellos que se refieran á derechos políticos de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho electoral de los clérigos desde que dejaron de fijar en la *Convocation* el impuesto que correspondía á la clase; pero ¿qué tiene que ver, ni en qué ha influido el uso popular en el desuso de las reales prerogativas reducidas hoy á letra muerta, y cuyo vigor puede restablecerse algún día? ¿Qué hay de costumbre, en el sentido comunmente aceptado de la palabra y aun en el más amplio y sinónimo de uso, aunque no sea aprobado por el legislador, en el hecho, ya secular, de no ejercitar el monarca el veto, que puede, sin embargo, oponer cuando le plazca, si se siente con ánimos y poder efectivo para contrarrestar al Parlamento? Y en la misma división de éste en dos Cámaras ¿quién es capaz de señalar la parte que correspondió á éstas, al pueblo y al rey?

Lo mismo puede decirse de la Constitución americana. Desuso, en el cual para nada interviene el pueblo, es el de la responsabilidad presidencial, por las dificultades y peligros de exigirla, y la de los mismos minis-

Pasando ahora á las formas de la legislación constitucional escrita, solo procede en esta sección una referencia, un poco más amplia que la de la parte elemental, á puntos generales jurídicos, bien que de la más interesante aplicación á

tros que pueden ser acusados criminalmente y condenados por las Cámaras, y que les convertiría en ministros parlamentarios, si el buen sentido de los americanos no dejara en la inacción este recurso de la letra constitucional. Otro tanto sucede con la transformación de otras instituciones, ó con el desenvolvimiento del implícito contenido legal, por ejemplo, la conversión del Senado en principal poder legislativo, predominando esta función sobre las ejecutivas de coparticipación con el Presidente de la República, ó las de orgánica representación semidiplomática de los Estados en el centro del poder federal común. Esto, como la creación de comités en las Cámaras y demás medios con que se ha acudido á habilitar una cierta unidad y armonía, harto deficientes en la constitución más *literalmente constitucionalista* de los Estados Unidos, son un derecho complementario que, aunque no se haya incorporado á la Constitución, ni aun escrito fuera de ella, no puede llamarse consuetudinario, esto es, popular; es obra de los órganos y poderes, oficiales. El pueblo puede introducir usos donde directamente obran las personas, por ejemplo, en la manera de testar ó de distribuir el caudal hereditario, no en las esferas jurídicas sustraídas á la inmediata acción popular. Y, aun concediendo que tales variaciones sean obra, en más ó menos parte, de la opinión, ésta es factor común de ley y de costumbre, no costumbre, ni uso siquiera. Hé aquí, lo que en mi opinión, no han discernido bien, ni aun siquiera claramente entrevisto los autores modernos, aunque á muchos parezca extraña é irreverente suposición.

Desarrollo del indefectible principio de la unidad del poder, en el lógico sentido del liberalismo parlamentario, es lo que ha acontecido en Inglaterra y está sucediendo en menor proporción en la República sajona de América, aunque cada vez se irá acentuando más, hasta convertir, *la organización menos democrática posible de una democracia* que es lo que á primera vista parece, según Boutmy, esta constitución, en una democracia efectiva á la moderna, en la cual los poderes, predominantes hoy, se inclinarán luego ante el que ahora menos vale y significa, para desaparecer de hecho á medida que crezca la fuerza brutal de la plebe, y á la burguesía sustituyan la oclocracia y el socialismo.

Y si esto sucede á las dos constituciones anglo-sajonas, con mucha más razón á las otras idealistas, así europeas como americanas, en las que la natural inclinación y el rápido descenso por la pendiente liberal del parlamentarismo no están ya contenidos por fuerza alguna tradicional é histórica,

la presente materia política. En este derecho, como en todos los demás, es la compilación la forma natural del cuerpo en que se reúnen las disposiciones positivas, las cuales, siendo derecho histórico, no científico, no tienen otro nexo que el del tiempo, ni hay entre ellas más conexión que la de causa, no la de principio lógico; ni más explicación al estado, valor y significación de las leyes posteriores que la génesis con que han contribuido á su formación y mayor perfección las leyes precedentes. Suponiéndolas ni tan irracionales, injustas é inportunas que nada quede de ellas en las siguientes, ni á éstas tan perfectas, ó, por mejor decir, tan redundantes que todo lo hayan previsto y formulado, son las anteriores, siempre interpretación de las segundas, así en el amplio como en el estricto sentido de la palabra, y, no pocas veces, suplemento para la aplicación y la práctica de la ley, porque lo que ha dispuesto y expresado bien la anterior no es preciso, sino ocioso, que lo preceptuen y manifiesten en los mismos términos las ulteriores. Así como entre las verdades del derecho

por hábitos étnicos, aun poderosos, y por el buen sentido, por el instinto de la realidad y de la conservación que el liberalismo ha arrancado ya á las naciones latinas. A ese lógico y natural desarrollo se ha reducido la supuesta acción consuetudinaria sobre estas constituciones rígidas, en las cuales, como en la actual de España, se ha puesto al servicio de la interpretación en sentido plenamente liberal, y por consiguiente anticatólico, no prácticas según ley constitucional, sino notorias infracciones, tanto de la letra como del primitivo y supuesto espíritu, que velaban el verdadero propósito. Tal ha sucedido con la interpretación del artículo 11, en sí mismo y en relación con el 12 y las leyes orgánicas correspondientes, no obstante los cuales, existe de hecho una situación absolutamente librecultista, inspirada en la hostilidad más enconada al catolicismo.

Pero hay más: habiéndose presentado candidatos á la senaduría en las últimas elecciones generales algunas personas sin las condiciones indispensables prescritas en el título III de la Constitución, un señor senador sostuvo que, aun sin ellas, el Senado era árbitro de admitir á quien le pareciese á la investidura y ejercicio del cargo. Lo cual es harto más que la indistinción inglesa de lo constituyente y lo legislativo ordinario. (Esto se escribe en Agosto de 1901).

racional, lo mismo que en cualquiera otro dominio científico, no hay más orden y enlace que el dialéctico según la categoría lógica de aquéllas, tampoco entre las leyes positivas, que son hechos, hay otro vínculo que el cronológico, y éste es el *método* y *plan* de las compilaciones, porque ese es el método y plan de la historia. La compilación es por esto el cuerpo legal que la misma naturaleza del derecho positivo reclama.

Lo cual no quiere decir que se compilen siempre las leyes con el solo orden de la sucesión temporal, porque, sin romper el nexo del tiempo, hay que arreglarlas con cierto método, cuando la legislación es numerosa. Entonces, al compilar, esto es, al reunir las leyes, hay que distribuirlas por materias jurídicas, según el método del derecho natural, bien que en cada institución se guarde el orden cronológico en virtud de las razones dichas. Por esto, toda compilación de leyes de larga fecha y aun de siglos no puede menos de tener la forma de ordenamiento, es decir, de método lógico, sino dentro de cada relación jurídica, al menos en cuanto á la conexión que guardan entre sí en el conjunto de cada rama del derecho, y con más motivo si la compilación abraza así el privado como el público en la variedad de sus objetos materiales y formales, como acontece á los cuerpos legales españoles anteriores á la revolución de 1810.

Y el ordenamiento, sin dejar de serlo, se va acercando cada vez más al código cuando una legislación farragosa, difusa y en no pocos puntos contradictoria exige una amplia tarea de reducción, conciliación y armonía de textos legales; y ni pueden, por eso, conservarse todos, ni mantener rigurosamente el nexo cronológico entre disposiciones compendias, cercenadas ó refundidas y que guardan entre sí una conexión de materia, independiente de las respectivas fechas. Hay entonces algo de labor apriorística, procediendo el legislador, ó quien, por su encargo, hace el ordenamiento, con mayor y necesaria libertad que en la mera compilación. En el código este arbitrio es absoluto en cuanto á la letra de la legislación anterior que, por atrasada ó deficiente por cualquiera otro

concepto (escasa, injusta, inadecuada, etc.), apenas es aplicable; pero de la cual debe conservarse aquella parte que sea justa y conveniente, además del espíritu del conjunto y aun el sentido general de la doctrina, porque rara vez dejará en ella de traducirse la esencia y los rasgos comunes de la constitución interna (1) en cada una de las esferas jurídicas.


Códigos de esta clase han sido el Código mercantil de 1829 y aun el vigente, el mismo Código civil, en máxima parte, y una no pequeña de la moderna legislación procesal, la civil particularmente. Códigos de la otra especie, es decir, de los idealistas y absolutamente innovadores, todas las constituciones políticas, empezando por la de 1812, y sin excluir el Estatuto real, á pesar de sus pretensiones y trazas exteriores y aparentes de tradicional constitución.

(1) El uso ha consagrado este término que, por su misma vaguedad y equívoco significado, contribuye no poco á la indeterminación y oscuridad del concepto que expresa. Como no se concibe constitución que no sea interna, no se sabe bien lo que se ha querido significar con este aditamento, ni siempre los autores le dan el mismo sentido y alcance. Unas veces es la misma constitución, en cuanto no se traduce al exterior, es decir, en leyes, especialmente en leyes escritas; ese fondo que no se agota en el derecho positivo y que es la fuente inagotable de él, algo como el perenne repuesto de donde se surten leyes y costumbres, y que es á la vez la base que las sustenta y el ambiente que las rodea y en que viven. En tal acepción, aunque se distingan ambas constituciones, la interna, que es el mismo modo de ser, la substancia y contextura nacionales sin solución de continuidad, tradicionalmente transmitidas de generación en generación, y la externa, que es aquella parte de la interna legislada escrita ó consuetudinariamente, no hay entre una y otra ninguna oposición, antes bien generales y frecuentes conformidad y armonía.

Pero otras veces, (y entonces se destacan más la acepción é intención del término), constitución interna equivale á constitución natural, verdadera, y no solo distinta, sino contraria á la constitución escrita, idealista, artificial y postiza, en absoluta discordancia con el organismo y temperamento de la nación; es la obra *ideológica* de los constituyentes nuevos, impuesta por el sofisma, la sorpresa y la fuerza, aprovechándose del atraso y actualidad de instituciones tradicionales paralizadas, estancadas, ó anomiadas acaso; el edificio contemporáneo, edificado sobre arena y entre ruinas, y con la cooperación de la atonía y el servilismo públicos.

Por la procedencia verdadera ó fingida se distinguen estos códigos: si proceden de la voluntad *espontánea* del monarca se llaman *cartas*, como los antiguos documentos; si de la voluntad del pueblo soberano, ó del pacto entre los dos poderes, el cual, por el fin y la materia, es y se llama constitucional, reciben el nombre de constituciones en sentido estricto, pues en el amplio todas lo son; y, de hecho, cartas y constituciones democráticas y doctrinarias más son obra principal del pueblo que del rey, ó del convenio de ambas cosoberanías, porque las cartas solo tienen de espontáneas la apariencia, y en el pacto constitucional hace el rey como que otorga lo que las circunstancias le imponen (1).

(1) Díganlo si no la Carta francesa otorgana por Luis XVIII bajo la presión de las bayonetas extranjeras y la no menos apremiante del liberalismo, contenido, mas no vencido, por las circunstancias, y el Estatuto Real, también arrancado á María Cristina por las ideas y los poderes nuevos, manifestos y ocultos, que hicieron de la rama borbónica cognaticia la representación y el instrumento de la revolución liberal.



CAPÍTULO XV

DE LAS MODERACIONES DEL PODER SOBERANO; SUS CLASES. LAS MODERACIONES ORGÁNICAS. LA AUTARQUÍA NACIONAL.

1. Hemos visto que el gobierno constitucional es un gobierno de ficticias y vanas moderaciones, absolutamente distintas de las del gobierno moderado tradicional, inspiradas por el mismo derecho de la razón y de la naturaleza, y formadas y desarrolladas por la historia en la época de génesis y desenvolvimiento cristiano de todas las instituciones, la Edad media.

La moderación de esos gobiernos consistió, en cuanto es posible en lo humano, *a)* en la virtud de este nombre, ó sea la templanza, en el más amplio sentido de la palabra, en aquel en que es carácter y nota común de todas las virtudes, *como atemperación de las operaciones y pasiones á la razón y á la ley moral;* *b)* en la existencia y relativo arraigo y eficacia de distintos elementos y factores que contribuyen á esta moderación, previniendo, evitando y remediando los varios excesos del poder, desde su injusto y desarreglado ejercicio hasta su intervención indebida en la esfera autárquica de las otras personas. En el primer sentido, la moderación es

como la virtud misma, la moralidad y rectitud de la soberanía; en el segundo el conjunto de los medios, instrumentos é instituciones que la contienen en los límites del deber.

Antes de ahora, en las indispensables referencias anticipadas á esta materia, hemos designado con distintos nombres á la diversa clase de moderaciones; ensayando ahora, más que una clasificación y división, una enumeración, las distribuiremos *a)* en éticas y jurídicas; *b)* en legales y orgánicas; *c)* en protárquicas y autárquicas. Llamamos *éticas* á las que consisten en las virtudes de gobernantes y gobernados, de soberano, autoridades y súbditos; y *jurídicas* á las determinadas y concretadas en instituciones positivas, ora escritas, ora consuetudinarias. Son *legales* en cuanto están señaladas en la ley, comprendiendo en este término á la costumbre; y *orgánicas* en cuanto dependen de la existencia y poder de los órganos así individuales como colectivos, es decir, de las personas físicas y, especialmente, de las morales ó comunidades de distinta naturaleza y jerarquía. Pueden, en fin, denominarse *protárquicas* las que residen en la esfera misma del poder central, del Estado, del Gobierno, en el estricto sentido de ambos términos; y *autárquicas* las que corresponden á la esfera de la personalidad, de la autonomía, gobierno y recursos propios del resto de la sociedad civil.

No son éstos, términos de rigurosa división que lógicamente se excluyan, y por eso no la hemos intentado ni denominado así; en la realidad no están, ó no deben estar, siempre separadas; son, cuando más, fases formalmente distintas de una misma efectiva moderación.

Las jurídicas deben ser éticas; y si no todas las éticas, varias de ellas pueden y aun necesitan traducirse al derecho positivo. Las moderaciones legales no deben reducirse á una mera declaración, á un precepto incumplido, antes deben encarnar en la conciencia y en el corazón de las personas que son los instrumentos vivos de la realización y efectividad de esas moderaciones, las cuales á la ley han de atemperarse en su existencia y ejercicio. Las únicas que, *á parte rei*, se, distinguen como sus respectivos dominios, sujetos y agentes, son las *protárquicas* y las *autárquicas*; pero unas y otras son á su vez, éticas y jurídicas, legales y orgánicas.

Por su jerarquía y eficacia, son las primeras, y reclaman preferente y anterior estudio, las *éticas* que, lo mismo en el imperante soberano que en toda clase de autoridades y súbditos, se reducen á la justicia en su más amplio sentido de honestidad y moralidad. Cuando existe en la mayor parte de los ciudadanos sustituye y reemplaza ventajosamente á la carencia ó defecto de las otras moderaciones, las cuales, á su vez, si falta la rectitud social, son letra muerta y aun sarcasmo, y más desmoralizan y deprimen el espíritu público que aseguran la recta gobernación. Sirvan de ejemplo las garantías constitucionales de los modernos sistemas, concebidas y formuladas en el supuesto de la falta de moralidad del soberano, á quien indefectiblemente se supone déspota y tirano por el hecho de su autoridad una y suprema.

La virtud social se funda en la religión verdadera, única que presta fin, motivo y sanción bastante á la moralidad; de tal modo que, si no es físicamente imposi-

ble que un hombre irreligioso ó sectario de una falsa religión tenga cierta honestidad natural, es imposible moralmente que una sociedad atea ó no católica posea una virtud sólida y durable. Por eso puede y debe considerarse la religión católica como la primera y capital moderación ética.

De ella y de la virtud, á la que informa, nutre y sostiene, depende el valor de la tercera, en orden y eficacia, de esta clase de moderaciones: el honor que, *objetivamente*, es el juicio exacto que de los actos morales de cada uno hacen los demás hombres; y *subjetivamente* la estimación que de ese juicio hacemos, y el motivo y sanción de moralidad que esa estimación implica. Mas, por lo mismo, es un movil secundario y como externo de bien obrar, fundado en el temor de la negación de los bienes morales y materiales de que nos priva ó puede privarnos la desestimación pública; y así se explica que en una sociedad virtuosa sea tal garantía la última en importancia; y que cuando no queda más moderación ética que ella, por descenso ó desaparición de las otras dos, ésta pierde pronto su fuerza y prestigio y queda reducida á mero nombre y alarde vano.

Estas tres garantías valen tanto más cuanto más elevadas son la posición y función sociales de la persona, y de aquí la significación y trascendencia que encierra el que sea el soberano varón religioso, virtuoso y honrado; pero, como, al fin, él es una sola persona, más que su piedad, virtud y honra importan las de la sociedad, puesto que las del soberano son más contingentes en el hecho de depender de la vida de un hombre; mientras que las de la sociedad son menos inseguras;

las primeras dependen de la voluntad y de la acción de uno; las segundas de la voluntad y del poder de muchos; los excesos del soberano son un ataque; la actitud de la sociedad una defensa. De donde se deduce que la virtud social es moderación más cierta, firme y activa que la del soberano.

La utilidad y aun la necesidad de que las garantías moderadoras trasciendan al terreno del derecho positivo y se consignent en las leyes, constituyen una teoría de mera y sencilla aplicación de la utilidad y necesidad de que no sean meramente la moral y el derecho natural los que regulen los actos de la vida colectiva. A las asignaturas de Ética y de Derecho natural corresponde la fundamentación de una doctrina común á todas las relaciones é instituciones sociales, debiendo aquí limitarnos á recordar que la legislación sobre moderaciones de varias clases es respecto de ellas maestra para la inteligencia, precepto para la voluntad y coacción para la libertad extraviada y para las malas pasiones que la tuercen. Tiene aquí la ley, como en cualquiera otro orden jurídico, la bondad intrínseca de la verdad y del bien que encierra é impone, es decir, una coacción esencial, inherente á su naturaleza, que en una sociedad honesta pesa sobre la conciencia y la conducta de los súbditos y del soberano con toda la magestad, con toda la *divinidad* del derecho. Mientras la ley no habla, el deber no es social y totalmente cierto, y aun siéndolo, el interés y la maldad lo infringen impunemente, pero, en cuanto la ley positiva lo sanciona, aunque la desidia, la torpe utilidad y la protervia dejen incumplido el precepto, no cesa éste de ser muda pro-

testa y reclamación perenne contra el atentado, á la vez que estímulo á la reivindicación de esas garantías olvidadas y holladas, y afrentoso reproche lo mismo á los que las conculcan que á los que consienten la conculcación. Esto sucederá, sobre todo, cuando las moderaciones legales hayan pasado antes por una elaboración consuetudinaria, y estén por esto más identificadas con el pueblo que las formó

2. Aunque los términos *órgano*, *organismo* suelen tener amplia y variada aplicación, como en otro lugar se ha visto, de tal modo que también se refieren á las leyes en cuanto constituyen ó instituyen, es decir, arreglan las correspondientes relaciones jurídicas, llamamos principalmente moderaciones orgánicas las que ofrecen las personas mismas, las cuales, como partes componentes de la sociedad civil, se llaman *órganos* de ella, en virtud de semejanza, no identidad, con los miembros de un cuerpo vivo, especialmente de un cuerpo animado. Estas moderaciones son las más eficaces, porque representan, encarnada en la persona, toda la potencia moral y material del derecho, tanto más activa y vigorosa cuanto mayor la decisión con que el sujeto la ejercita. Y por esto, porque proceden de la composición y contextura de la sociedad civil, y son, en cierto modo, independientes de las leyes y anteriores á ellas, se denominan orgánicas con más motivo y justificación que todas las otras.

Cada persona, por razón de su personalidad, tiene un dominio jurídico propio, dentro del cual la incumbe y no á otras, el cumplimiento del derecho para sí y en

las relaciones con las demás, y excluye de esa esfera la intervención ajena en la parte y respecto en que la persona es capaz, esencial y circunstancialmente, del oficio de orden que Dios la ha encomendado. Toda persona posee su autarquía y, en virtud de ella, título para rechazar de su jurisdicción lo mismo la injusticia que la indebida ingerencia. Por esto es la persona, y toda persona, en llegando al uso de la razón y al ejercicio de algunos de sus derechos, una moderación presente, actual y viva.

El valor de cada una de estas personales, vivientes moderaciones está en proporción de la jerarquía, posición y medios de las personas, es decir, del título moral de sus derechos y del poder físico para hacerlos efectivos; y de aquí que sean moderaciones superiores las de las colectividades á las de las personas físicas, y merezcan aquéllas con preferencia el nombre de orgánicas, porque una persona es un órgano, y solo una sociedad, por simple, incompleta y rudimentaria que sea, es un organismo.

La significación, importancia y potencia de los altos oficios que ejercen y de la alta esfera de gobierno en que los ejercitan, tienen los funcionarios protárquicos que en el centro ó en la periferia poseen atribuciones y ejercitan actos propios del Estado, ó por naturaleza, ó por necesaria tutela. Las leyes que fijan y arreglan estas funciones delegadas ó encomendadas, y definen y determinan los derechos y deberes de los que las desempeñan, son moderaciones legales, y orgánicas las personas mismas de los empleados, á quienes está encomendada la función y el cuidado de realizarla dentro

de los límites debidos, defendiendo el recto y estricto desempeño de ella contra cualquiera injusticia ó intromisión superior, invocando para esto la misma ley con el poder que ella confiere y el que la agregan la respetabilidad, prestigio é independencia del empleado y los del cuerpo y gremio á que pertenece. Por razón de la superioridad corporativa, son moderaciones de más cuenta que el mero funcionario individual los órganos colectivos de gobierno, por ejemplo, tribunales, consejos, etc.

Aunque, en acepción genérica, toda moderación personal es autárquica, en razón directa de la categoría y poder de la persona, y, en tal sentido, la autarquía de las autoridades y funcionarios protárquicos es superior á la de los demás individuos y aun de algunas colectividades separadamente considerados, el conjunto armónico de todas las autarquías extragubernamentales forma una esfera autárquica más amplia y poderosa por el número y la potencia moral y física y, por consiguiente, la más considerable y eficaz de todas las moderaciones. Porque *esas autarquías dependientes unas de otras, jerárquicamente enlazadas y subordinadas entre sí, y todas ellas á la autoridad soberana común*, constituyen la *autarquía nacional*, es decir, la esfera de la personalidad, vida y propio gobierno de la nación en todas las relaciones jurídicas que no exceden de la capacidad natural ó circunstancial de las varias personas que forman este sujeto colectivo de derecho. Es ésta la moderación por excelencia, por ser la más independiente de la soberanía á que debe moderar; y, suponiendo á todos ó á la mayor parte de los órganos com-

ponentes de ese vasto organismo animados de aquellos principios de religión, virtud y honor que hemos denominado moderaciones éticas, y suficientemente determinada y reglamentada en la legislación la esfera y el ejercicio de la autarquía social, no se concibe defensa más sólida de las libertades privadas y públicas, civiles y políticas de la nación, ni medio más seguro para la custodia y fomento de todos sus derechos y franquicias.

Esta autarquía se forma con los mismos elementos que la sociedad civil cuya es, ó sea, mediatamente de individuos, é inmediatamente de las sociedades que la siguen en orden jerárquico, las cuales, en un grado de regular existencia histórica y de consiguiente desarrollo nacional, son, por lo menos, los concejos ó municipios, y, en la plenitud de él y en el estado actual de la mayor parte de los pueblos, las regiones. Y así como la sociedad es una conexión orgánica, también su autarquía es un conjunto armónico de las autarquías individuales y colectivas que se enlazan y concentran en orden ascendente, las inferiores en las superiores y todas en la región, órgano supremo de la autarquía nacional. De este ordenado engranaje procede la consistencia y fuerza de la sintética y comprensiva moderación ética y jurídica, legal y orgánica, á la vez de interna y tradicional contextura, antes apercebida por el instinto social que elaborada por la reflexión científica, sistema inspirado é iniciado por la naturaleza, formado y desarrollado por la historia; garantía cuyo valor y eficacia contrastan con la esterilidad irrisoria de esos pueriles expedientes constitucionalistas, fantaseados á priori y formulados de re-

pende en la letra de códigos idealistas y vanos, que no arrancan siquiera de la capa más exterior de la efectiva constitución nacional.

3. Soberanía y autarquía son funciones y esferas de gobierno que se diferencian jerárquicamente por su respectiva entidad y por la categoría de los correspondientes órganos. Al problema del Estado, del que se trata en tantos pasajes de esta obra, corresponde la determinación de los límites en que á la vez se tocan y distinguen ambos dominios de acción jurídica; á la historia incumbe señalar concretamente en cada nación y época cuales han sido las jurisdicciones del gobierno soberano y del gobierno autárquico. Bastará aquí con indicar, más bien que como nueva doctrina, como corolario de la expuesta repetidamente en diversos lugares: *a)* que la extensión de estos dos órdenes gubernativos y la variedad y pluralidad de sus oficios y atribuciones están en razón inversa, disminuyendo y restringiéndose la ordenación soberana á medida y en proporción que se amplía el círculo de gobierno que la sociedad cumple por conducto y ministerio de los varios órganos y vehículos de su autarquía; *b)* que el progreso y el ideal no solo políticos, sino jurídicos, consisten en el crecimiento y ensanche de la autarquía social, de modo que la soberanía, con ese adelanto, no solo se vaya desprendiendo de sus funciones tutelares é históricas, sino que, hasta respecto de las esenciales, sea más bien fuerza apercibida que de acción, y la espontaneidad con que se cumple el deber excuse la necesidad del ejercicio de medios coactivos.

Fácilmente se deduce también del contenido de este capítulo y de todos los anteriores que con él tienen más directa é íntima relación, *a)* que los gobiernos de la antigüedad pagana, aunque no careciesen siempre de virtud en el gobernante, ni en absoluto de las moderaciones descritas que le contienen dentro de los límites de su acción y su deber, apenas pueden llamarse gobiernos moderados, por la deficiencia de las contenciones éticas, así en el soberano como en los súbditos, y por no menor falta de la idea y sentimiento de la personalidad y la dignidad humanas que son el fundamento, origen, espíritu, estímulo, sosten y fomento de las moderaciones orgánicas, de las autárquicas principalmente: donde no hay virtud social, ni noción de la libertad y amor proporcionado á ella, no hay que pensar en un sistema regular, suficiente y estable de elementos moderadores; *b)* el cristianismo trajo el gérmen de ellos, dando á todas las virtudes sociales principio racional y sobrenaturales auxilios, conservándolas y perfeccionándolas en gobernantes y gobernados, y propagando entre todos el concepto y el sentimiento legítimo de libertad verdadera; *c)* en la Edad media fructificó la semilla en un propicio ambiente de fe y de libertad, iniciándose y desarrollándose las instituciones sociales y políticas en las condiciones más favorables de recíprocas limitaciones; surgiendo y destacándose en sus propios y naturales dominios la monarquía, la aristocracia y el pueblo bajo el santo influjo santificador de la Iglesia católica, depositaria de las moderaciones éticas, de la religión y de la virtud, guardadora de los derechos de todos, y, especialmente, de los pequeños y humildes; y fomentando,

con el influjo y poder sociales de que gozaba la Iglesia la templanza en el soberano, á la vez que la debida obediencia en los súbditos; *d*) todos estos factores de legítima, sólida y poderosa moderación faltan casi en absoluto en los modernos tiempos y sociedades: el racionalismo y naturalismo no pueden fundar especulativamente el concepto de moralidad privada ni pública, á la cual además atacan y combaten con la hostilidad á la Iglesia y á la única religión verdaderamente moralizadora de los individuos y de las sociedades. Deshechos por el individualismo liberal y la Revolución todos los organismos sociales, sólo quedan enfrente del soberano átomos disgregados, masa inorgánica, manejable por un poder absoluto, despótico y, por lo general, tiránico, que tiene del derecho y de la autoridad una errónea idea socialista, y al cual no modera el inútil artefacto del constitucionalismo, sino sólo el injusto interés contrario de la plebe, armada de la fuerza del número de asociaciones ilícitas para arrancar á otra detentadora y monopolizadora no menos injusta, la burguesía, el goce exclusivo de la materia.

No existen de hecho ya, aunque lo parezcan, gobiernos moderados. La Edad media dió la traza general de ellos, y sobre la base del cristianismo empezó la fábrica irregular y lenta, pero robusta y gallarda, á la que paralizó muy en los comienzos de la construcción heterogénea é interrumpida, el Renacimiento. Luego la resolución liberal la arrasó sin esperanzas, ni posibilidad moral y material de reedificación próxima, ni acaso remota.



1. Se deduce de lo expuesto en la parte elemental de este número que son perfectamente sinónimos los términos *templado* y *moderado*, aplicados al gobierno. Cuando más, puede señalarse la distinción de que con el primero se expresa más bien la virtud, que es la causa de la moderación; mientras que, con el segundo, el efecto que produce; aquél se refiere principalmente á la moderación ética, éste á todas las que caracterizan á estos gobiernos no absolutos, ó, por mejor decir, no absolutistas.

La moderación ó templanza es una condición esencial de los gobiernos, sea cualquiera su forma, y así, solo de hecho, en el terreno histórico, pueden distinguirse gobiernos que cuenten con un regular número y valor de moderaciones, y otros más ó menos viciosos por carecer de las estrictamente precisas. La naturaleza de la sociedad y de la soberanía exigen racional y científicamente la existencia y consistencia de todas las moderaciones en el mayor grado posible de adelanto, y tal es el ideal, no solo de la constitución protárquica, sino de la buena contextura de toda la sociedad civil, de cuyo seno y fondo han de surgir y nutrirse las moderaciones de garantía más estable y segura.

En esto y en el preferente valor de las moderaciones éticas se distinguen los tradicionales gobiernos moderados, y su sistema especulativo y práctico, de los actuales gobiernos constitucionales, que, si *á priori* no niegan y combaten la superior y radical templanza propia de la virtud, no hacen de ella aprecio alguno, y tratan de sustituirla, así como á las contenciones orgánicas, con manipulaciones de fracciones de número y fragmentos de fuerza en la esfera de la soberanía dividida y deshecha. Así es que lo característico de la moderación en los antiguos gobiernos es ser moral y no física, orgánica y substancial, no superficial y mecánica meramente.

A señalar tal contraste, en lo que á esta lección corresponde, va dirigida la enumeración, no la clasificación y división de las moderaciones, las cuales, en rigor, pudieran

acaso reducirse á éticas y orgánicas con la subdivisión correspondiente de este último miembro, debiendo darse por supuesto que así unas como otras no habrán quedado encerradas en la pura esfera moral, sino que se habrán traducido en la legislación positiva. Pero, aun así y todo, no sobra, para el dicho efecto de distinguir el antiguo y el nuevo sistema, la inclusión de los dos términos, *jurídicas, legales*, porque á ellas se reducen las moderaciones constitucionalistas, en cuanto la moderna teoría suprime y aun desprecia las garantías éticas y se limita á las creadas por un legalismo sin conexión alguna con la interna constitución nacional histórica; mientras que en el antiguo régimen se daba á las contenciones morales la debida importancia, y la ley no improvisaba un aparato moderador artificial, ilusorio é inútil, sino que recogía de la naturaleza, de la realidad y de la tradición los elementos y factores orgánicos que no improvisan, aunque de ello presuman, los hombres. Bien que el constitucionalismo no tuvo más que los elementos que fantaseó, porque á los antiguos los juzgaba viciosos y contrarios, y además el liberalismo y la Revolución dieron buena cuenta de los que había conservado y respetado el anterior absolutismo cesarista.

Sin las moderaciones éticas, las legales resultan letra muerta, apariencia y engaño, porque entonces solo depende su cumplimiento de la buena voluntad del imperante y no de la presión moral del espíritu público. Así es que, cuando el soberano es hombre injusto, ó, por débil, le cautivan la voluntad favoritos ó paniaguados, el arbitrio, al servicio de la tiranía, sustituye impunemente á la recta y cumplida ordenación, de la cual es la principal garantía y el sobrenatural auxilio la religión divina confiada por Jesucristo á la custodia de la Iglesia. Solo por Dios y para Dios es la virtud, que, cuando carece de esta base é inspiración, es como bien casual, excepcional y extraordinario en el soberano y en una escasa minoría, no moralidad de los más, arraigada y durable. En cuanto al honor, es el re-

flejo de la religión y la virtud, con fuerza efectiva mientras aquéllas duran, y aun poco después que han tramontado; en las sociedades honestas impulso supletorio de exterior rectitud para los no muy protervos, y en tiempos y pueblos precristianos, ó descristianizados en mayoría, es punto menos que contención nominal; en plena noche la luz matutina está lejana, ó hace tiempo que se desvaneció y borró la de la tarde.

2. De la misma manera que las moderaciones legales son como forma y cosa hueca y vacía, cuando faltan los móviles é impulsos éticos, así también sucede á las contenciones orgánicas, cuando las personas, en cuya existencia concreta y actuación debida consisten esas moderaciones, no están animadas del sentimiento íntegro del derecho, que, radicalmente, es el mismo de la moralidad, es decir, cuando no obra y procede la mayoría de los sujetos de derecho, así individuales como colectivos con plena é íntegra rectitud: la objetiva de adecuación al fin y la subjetiva de la pureza de intento.

En esta plena conciencia y sentimiento del deber y del derecho está comprendido el que es fundamento y condición del cumplimiento y ejercicio de todos, la libertad, la cual, jurídicamente, es el deber y el derecho de mantener la facultad electiva de medios jurídicos dentro del orden y en la esfera del que á cada persona incumbe cumplir por razón de la misma personalidad y de su correspondiente independencia, según la posición y estado respectivos. El dominio autárquico de toda persona es también el de la libertad propia de su condición, libertad que, como los otros deberes y derechos, tiene en la moralidad y en la religión segura base y espíritu inmortal, de manera que bien puede decirse: *vera religio liberabit nos*. La libertad es, pues, sostén y aliento de la autarquía, y uno de los bienes y prerogativas que ésta debe mantener, guardar y acrecentar con más celo, es la libertad. Cuando la idea y el amor de ésta

descienden ó se extinguen, en la misma proporción decae, ó perece la autarquía, que es entonces fortaleza deshabitada, ó guarnecida por gente floja y cobarde, abierta á todo asalto, á pesar de las fortificaciones exteriores, detrás de las cuales faltan animosos pechos. Después, ó las almenas se desmoronan, ó las arrasa el poder absoluto, cuya obra facilitaron la acción del tiempo y la pusilánime desidia de los hombres.

Es la autarquía nacional no el agregado, sino el conjunto armónico, el organismo formado por todas las autarquías, y animado y vivificado en las partes y en el todo por el espíritu de la libertad en Cristo y por Cristo. Este organismo autárquico no alcanzó en la Edad media la plenitud de su desarrollo y no paso más allá de aquellos círculos en que la fuerza misma de la naturaleza pudo concretar el principio de la sociabilidad y solidaridad nacionales, contrarrestado y contenido durante mucho tiempo por el individualismo, propio no sólo de los bárbaros, sino de todas las épocas y pueblos atrasados y de todas las culturas incipientes. Era el concejo, ya que no la única sociedad pública, inmediatamente constitutiva de la sociedad civil, cuando menos, la única bien determinada y organizada, la que concentraba, subordinaba y armonizaba dentro de sí todas las otras inferiores. Las demás intermedias entre él y el gobierno central existían solo en principio y en gérmen, y más que comunidades eran círculos administrativos, donde con mayor dificultad tenía que destacarse y formarse una autarquía independiente del influjo y la acción del soberano (1).

(1) Por causas análogas á las de la expresión y concentración de la vida pública en el concejo en los comienzos de la vida nacional, sean cuales fueren las épocas, razas y pueblos, sucedió esto mismo á la caída y destrucción del Imperio romano de Occidente, con la sola diferencia de que entre las tribus primitivas sometidas por Roma, no surgió, por diversidad de circunstancias, el principio de la soberanía común como entre las naciones bárbaras invasoras. Estos elementos nacieron y se desarrollaron en ellas conjunta y coetáneamente: el concejo y la monarquía unidos por el vínculo feu-

3. Aunque en otros capítulos hemos tratado de justificar, con respetable autoridad científica, un término cuya doble derivación etimológica justifica con hartos títulos la introducción del neologismo en la esfera del lenguaje y de la ciencia, siempre desconfío no tanto de que la palabra se tache de extravagante licencia, como de innovación peligrosa, si es que no como un disfráz decoroso de la teoría doctrinaria de la cosoberanía del poder antiguo y del nuevo.

En cuanto al primer cargo, declaro que estoy dispuesto á aceptar cualquiera otro término que exprese mejor que el de autarquía el doble concepto de suficiencia y propio gobierno personal; pero no he hallado ninguno, ni creo que haya hasta ahora llegado la ocasión de señalar con un vocablo la síntesis de una teoría, de la cual solo hay en la historia los elementos y datos de una constitución social y política malograda por el Renacimiento y sus consecuencias, mucho antes del período de madura edad y correspondiente desarrollo.

Por lo que respecta á la segunda imputación, si en todo el cuerpo del tratado, y especialmente en este capítulo, no la he prevenido y contestado satisfactoriamente, menos podría hacerlo ahora condensando en pocas palabras todo un sistema amplio y aun prolijamente desenvuelto en los dos tomos de la obra. Al lector atento, desapasionado é im-

dal lo mismo en el realengo que en el señorío. Las otras sociedades naturales no se determinaron ni se formaron espontáneamente, porque el impulso social natural no alcanza á tanto sino en tiempos de más madura civilización, y porque, para los fines de gobierno debido y necesario, ó de absolutista ingerencia, invadió el poder central esos círculos sociales á cuya propia contextura dificultó y contrarió no poco la organización burocrática, especialmente en la indeterminada y heterogénea esfera de lo que después fué provincia. Cuando se consolidó la unidad nacional, pudieron los antiguos reinos ó grandes feudos quedar en condición de regiones ampliamente autárquicas, pero lo impidieron primero el absolutismo centralizador de los reyes y luego el de la Revolución.

parcial toca decidir acerca del fondo y conjunto de la doctrina contenida en esta fórmula de que no estoy descontento, porque me parece expresiva de la exigencia racional y de la obra histórica de la Edad Media, obra destruida por el liberalismo y la Revolución: *soberanía legítima y autarquía nacional*.

No niego que si ésta hubiera llegado, no ya á la plenitud de su desarrollo, pero sí á un grado de perfección relativa y proporcionada al tiempo de existencia histórica de los pueblos dentro de la era inaugurada por Jesucristo, maestro y santificador de la vida humana, hubieran sido los efectos positivos de la autarquía parecidos, si no idénticos, á los supuestos, anunciados y frustrados, de la soberanía nacional. La monarquía, no por abdicación y destronamiento efectivos, velados con aparatosas exterioridades y falacias de vana magestad, sino por el progreso de un pueblo conocedor de sus derechos y exacto cumplidor de sus obligaciones, celoso de sus libertades legítimas, enérgica y mesuradamente ejercitadas, rico de resueltas y cautas iniciativas, y no falto de los proporcionados y oportunos recursos, apenas tendría que hacer sino observar, presidir y cuando más guiar suavemente el *self-government* de la nación. Lo cual no redundaría ni en desprestigio y desdoro de la dignidad real, ni en mengua de su autoridad, poder y grandeza, de la misma manera que tampoco desdice de la potestad, honor y posición del padre en la familia el que ésta se gobierne, más bien que la gobierne, sustituyéndose la acción amplia y minuciosa y el mando coactivo del jefe por la discreción, virtud, idoneidad y actividad de mujer, hijos y servidores. Sin dejar de ser inferior y súbdito el súbdito y el inferior, y superior y autoridad los que gozan de tal condición y estado, siempre los discretos y virtuosos serán menos mandados y dirigidos, y tales pueden ser sus prendas morales é intelectuales, que no necesiten, ó apenas, ser dirigidos y mandados. Felicidad y no mengua será éso para los destinados á gobernarlos.

Hé aquí lo que en otro libro he escrito acerca de las moderaciones en la Edad antigua y en la media: «En los imperios orientales, como en los Estados clásicos, la desigual participación del derecho natural y civil dividió á la sociedad en castas ó en clases, sin que las más privilegiadas gozaran la plena garantía de la personalidad; pero, aun así y todo, el imperante supremo no dispuso, á su ilimitado arbitrio, de los grados superiores de la social jerarquía. Los grupos más beneficiados y potentes, el sacerdocio, en nombre de las religiones, y los guerreros, con la imposición de la fuerza, fueron valladar del capricho despótico y de las demasías tiránicas; y hasta cuando en Roma desaparecen bajo la dictadura cesárea las diferencias y prerrogativas de los ciudadanos, y solo quedó la masa servil nivelada por el rasero imperial, el César, á quien deificaba en vida la abyección pública, no pudo permitírsele todo; aún quedaba una fuerza moderadora, el pretoriano y el legionario, afilando la espada homicida y apercebidos á ejercitar su alto poder constituyente en favor de un nuevo siervo y amo.»


«Pero estas moderaciones embrionarias ó atrofiadas eran, por su imperfección, ineficaces, y ni siquiera se tuvo noción exacta de ellas hasta que el cristianismo infundió tanto al soberano como al súbdito idea adecuada del valor de la persona y el deber de estimarla por la dignidad de su origen y la grandeza de su destino. El concepto de la personalidad, de su principio y fin es como el punto céntrico del orden moral y jurídico, el inmediato criterio de la legitimidad de todas las instituciones privadas y públicas, y por consiguiente, también la medida y norma de las atribuciones gubernativas soberanas. Puede decirse que la ciencia y el arte de la gobernación, la teoría y la práctica constitucionales, no encierran, desde la concepción cristiana, materia más importante, cuestión más capital que ésta, á la cual se refieren y enderezan todas las otras: determinar qué acción ordenadora corresponde á la

»soberanía, cuyos límites esenciales y circunstanciales son
»los que en cada período y pueblo le trazan la rectitud,
»energía y circunspección con que la comunidad nacional
»sabe por sí misma gobernarse.»

«Y ésta fué la fecunda labor histórica de la Edad me-
»dia: ir lenta y trabajosamente, entre desmayo y aliento,
»excesos y poquedades, precipitaciones y paradas, adelan-
»tos y caídas, temeridades y flaquezas, rebelión y servilis-
»mo, afirmando y conquistando los fueros de la persona y
»el propio gobierno, que es consecuencia de la personal li-
»bertad, y restringiendo en la misma proporción el poder
»abusivo del absolutismo romano, quebrantado providen-
»cialmente por la framea de los bárbaros invasores...» (1)

En efecto, por la misma fuerza de los hechos y de las circunstancias, se fueron formando y consolidando provi-
dencialmente, al mismo tiempo que el poder soberano, sus
moderaciones sociales autárquicas, la aristocracia eclesiás-
tica y secular primero, el estado llano después, erigiéndose
estos elementos en órdenes ó clases de íntima y fuerte cohe-
sión gremial, de que apenas podemos formar idea exacta
en estos tiempos de disolvente individualismo. No había
entonces fuerza disgregada ni dispersa; todo factor social
encajaba en el molde orgánico, y dentro de la correspon-
diente jerarquía, con sus semejantes y, sin solución de con-
tinuidad, con los afines. A estas alturas no hay para qué
insistir más en que, por falta de sentido ético y por aniqui-
lación de los sociales organismos públicos, no queda otro
poder que el del Estado que se alza y destaca omnipotente
sobre la masa inorgánica, mera suma de individuos *indepen-*
dientes y dispersos, reducidos á la impotencia, á causa y en
virtud de esa misma autonomía que, huyendo de la solida-
ridad y de la subordinación necesaria, se esclaviza y anula.

(1) *El absolutismo y la democracia*, páginas 51 á 54.



CAPÍTULO XVI

DE LA COMUNICACIÓN É INTELIGENCIA ENTRE LA AUTARQUÍA NACIONAL Y LA SOBERANÍA.—LA OPINIÓN Y LOS PARTIDOS.—ÓRGANOS Y MEDIOS DE FORMACIÓN Y EXPRESIÓN.

1. El soberano y el pueblo, si han de proceder acordes en sus respectivas esferas gubernativas, la soberana y la autárquica, necesitan comunicarse y concertarse por dos medios y vehículos: la opinión y la representación. Por conducto de una y otra, no sólo el pueblo mantiene la acción autárquica que natural é históricamente le corresponde, sino que influye en el mismo gobierno soberano sin exceptuar ninguna de las funciones de éste, así las retenidas como las delegadas. Se llama opinión pública, no á la de cualquiera de las sociedades de esta clase, sino antonomásticamente á la opinión nacional, ó sea, *al juicio público concorde que forma y tiene la nación acerca de todos los asuntos y materias que pueden interesarla, y, en particular, sobre los que conciernen á la acción política de los distintos órganos sociales, y especialmente, del soberano y su gobierno.*

La opinión pública no es opinión de una ó varias personas y clases, es la opinión de la mayoría del pueblo; y está formada, no por la suma de nociones y jui-

cios iguales é idénticos en todo punto y negocio de capital interés, sino por una conformidad general en la esencia, en el fondo de los problemas y cuestiones sociales, aunque, por ventura, se discrepe más ó menos en los detalles y en los accidentes. Tal comunidad fundamental de ideas es lo que, con término tan equívoco como inexacto, se llama *conciencia social*.

Son sus elementos todo el acervo de nociones asequibles á la generalidad de los ciudadanos, y que se comunican y recíprocamente se adquieren por las diversas personas individuales y colectivas en el vasto campo de amplísima pedagogía que la sociedad civil supone, y que es uno de sus fines. Órganos de esa pedagogía son, además de los propiamente tales, esto es, el magisterio profesional de individuos y corporaciones, toda persona física moral que enseña con los hechos y en las relaciones del humano trato, según el saber y conducta de cada sujeto, generalmente proporcionados á la posición particular y á la de la clase á que pertenece; y así lo natural es que las personas superiores, por sí y por el orden social en que Dios las puso, aleccionen y eduquen á las inferiores en aquellas ideas y sentimientos que constituyen la materia ó contenido y la fuerza é impulso de la pública opinión. Por esto, en otro lugar se dijo, (Capítulo XII del Libro II), que tal magisterio y pedagogía son uno de los nobles oficios de la aristocracia, y no hay para qué repetir que la principal maestra, formadora de la opinión, es la Iglesia, por razón del criterio infalible con que alecciona respecto de todas las cuestiones de fundamental importancia para el individuo y para la sociedad.

Y este factor divino de opinión pública es tanto más interesante, cuanto en las naciones, por adelantadas que se las suponga en el progreso cristiano, está en desproporción enorme el número de las gentes que saben regularmente y de ciencia y saber propios las cosas con los que las saben por criterio de agena autoridad, y sin más razón que este mediato é indirecto motivo de asentimiento. La autoridad de la Iglesia es, pues, de certidumbre absoluta para todos, pero de mayor influjo y adhesión respetuosa para las clases inferiores, que tienen luz suficiente y buen sentido con que comprender que tal docencia es harto más desinteresada que la procedente de las clases altas, porque las verdades que enseña la Iglesia son comunes, dulces y severas á la vez, sin distinción de categoría, posición y poder, pero más favorables á los modestos y humildes entre las que la doctrina de Cristo ejerce la irresistible y santa sugestión de su divina democracia.

El gremio, por su parte, es en cada clase social, pero sobre todo en la plebe, un poderoso factor de opinión, por razón de la intimidad social que implica, la cual no puede menos de ser de ideas como lo es de sentimientos, aspiraciones y conveniencias comunes, y porque la autoridad moral, propia de la jerarquía, supone un magisterio eficaz de los maestros en los oficiales y de unos y otros en los aprendices, amén de la comunicación fraterna entre los grados jerárquicos de la corporación industrial.

Y todos estos elementos y órganos de opinión nacional actúan sobre las sociedades completas y se armonizan dentro de ellas por su orden jerárquico, desde

la familia á la región inclusive, resultando la opinión de cada una de estas comunidades del concorde, común y esencial entender y sentir de las inferiores inmediatas, y la de la nación, por consiguiente, de la de las regiones, unidas así íntimamente por el vínculo interno de un mismo espíritu nacional.

El valor de la opinión nacional, y la posibilidad y probabilidad de su influjo, dependen de que el juicio público, en que aquélla consiste, sea verdadero, cierto y general, y en que se exprese y manifieste con la seguridad, la decisión y al mismo tiempo la circunspecta prudencia con que los pueblos virtuosos abrigan sus convicciones y profesan sus ideas. Solo así producirán efecto en el ánimo del Gobierno, con título para ser atendidas, las manifestaciones y presiones de la opinión, y no carecerán de fuerza moral para mover á un soberano recto y previsor en la dirección y sentido que marca el espíritu público.

2. Es moralmente imposible que, por claras que aparezcan las verdades capitales, y por muy extendida y propagada que esté en el pueblo la evidencia y certeza de ellas, opinen todos de manera idéntica acerca de las verdades secundarias y de la aplicación de los primeros principios. Por esto, aun en las sociedades más penetradas y más convencidas de las doctrinas fundamentales y comunes acerca de Dios, de la naturaleza y destino del hombre y de los fines de la sociedad, en una palabra, de las nociones esenciales y generales de sociología y política, existe, sin embargo, y se manifiesta diversidad de juicios en materias libres y subalter-

nas, que no daña á la unidad de opinión en lo necesario, á pesar de la variedad en lo accidental y libre. La fe, la caridad y el patriotismo funden estas variedades en la armonía de un verdadero espíritu nacional.

No parece, pues, que pueda haber época ni pueblo en que no existan, además de escuelas en el terreno especulativo, *partidos* en el terreno práctico, ó sean *agrupaciones de ciudadanos que opinan de un mismo modo acerca de las cuestiones y problemas de conducta social y política, y concuerdan, por consiguiente, en los medios y procedimientos de la adecuada y oportuna acción*. La existencia, pues, de los partidos es natural, en cuanto procede de la misma condición del hombre, no en la integridad propia, sino en la imperfección actual de su naturaleza; más por lo mismo la perfección social consistirá en que cada vez sea menor el número de estas agrupaciones y exiguo y subalterno el de sus diferencias y discrepancias, y el ideal del progreso cristiano en que sean cada vez mayores la comunidad y conformidad en toda clase de verdades, en las reglas prácticas de la acción y en la acción misma. La unidad, vigor y eficacia del espíritu nacional están en razón inversa de la multiplicidad y oposición de los partidos.

Entre tanto, la honestidad y utilidad de éstos dependerán, como en los individuos, de la íntegra habitual moralidad de su conducta, es decir, de la moralidad objetiva y subjetiva de los actos de la agrupación. O, lo que es lo mismo, los partidos son virtuosos por las mismas razones y condiciones que las personas físicas, y la justicia de estos grupos sociales es un producto, como la de cualquiera colectividad, de la justicia de la mayor

parte de sus miembros y de la rectitud de los actos colectivos, interrumpida las menos veces posibles, y en asuntos de subalterna entidad y trascendencia. Y de la misma manera que entre individuos honrados, razonables y prudentes, no obsta la libre y distinta apreciación de lo dudoso á la inteligencia sincera y cordial en lo necesario, y al generoso sacrificio recíproco de las secundarias opiniones individuales en aras de la concordia de acción, así también los partidos, en tiempos y naciones de adelantada honestidad social, más que para las luchas por el poder, para la satisfacción de la concupiscencia, servirán para ilustración mútua y noble estímulo, promoviendo juntos el bien social, acerca de cuyo concepto y medios adecuados están en lo general y esencial conformes, y dispuestos á ceder y transigir en lo accidental y secundario, no por mal interesado oportunismo, sino por patriótica abnegación. Entonces es cuando, según hemos dicho antes, la variedad de los partidos no daña á la armonía de la opinión nacional.

Aunque el partido es, en el orden racional, una agrupación distinta de otras colectividades sociales, y tampoco repugna que en el orden real obre separado é independiente de ellas, lo general y más frecuente sería, en sociedades de sólido y total organismo, que la variedad, oposición, reducción, composición y armonía de juicios y procederes se produjeran y manifestaran en el seno de otras sociedades más comprensivas y perfectas, y fuesen ellas así como las formadoras y formula-doras de la opinión pública, los órganos de génesis, determinación, expresión y conciliación de los partidos. De este modo, fuera de estas colectividades, (familia,

gremio, universidad, concejo, etc.) resultarían la diversidad de opiniones y su publicación y resonancia, cosas accidentales, pasajeras y supletorias; y solo en esos centros se notara más directamente la acción del partido, que rara vez influiría de un modo directo en el gobierno central. Así las pocas acritudes, hostilidades y violencias que el partido supone en pueblos adelantados en la humanidad discreta, en la tolerante y caritativa templanza infundidas por el cristianismo, se atenuarían y aun disiparían abajo, antes de que estallasen con fiero ímpetu y escandaloso estrago en las altas esferas del soberano poder.

3. Despréndese además de la doctrina explicada que así la reunión, como la asociación y la prensa, son factores y órganos, lo mismo de la opinión pública que de los partidos: de la primera, porque contribuyen á expresar las ideas y nociones referentes al interés social; de los segundos, porque, usando de tales medios, se esfuerzan esas agrupaciones en lo que ahora se llama *ganar la opinión*, es decir, en justificar que cada grupo mejor la representa, y atraerse así partidarios, y con ellos, la fuerza correspondiente á su número y calidad. Bien puede decirse que esta doble acción es coetánea y concorde, porque, todo el que expone verdades prácticas, lo hace con el objeto de comunicar la convicción á las inteligencias de los demás y recabar el acuerdo de las voluntades y la coordinación de medios, esto es, de formar escuela y partido; y á su vez, los que se reunen, asocian y escriben para constituir, ensanchar ó fortalecer las agrupaciones que se proponen fi-

nes sociales de distinta naturaleza, no tienen otro propósito que agrandarlas y robustecerlas, de suerte que e programa y la conducta del partido sean los de la lmayoría nacional.

Reunirse y asociarse es propio del hombre, y, por consiguiente, derecho y aún deber personales, así de la persona física como de la misma persona moral. Las sociedades completas, y menos las incompletas, por útiles que sean, y arraigo, antigüedad y consistencia que hayan logrado, no agotan la materia y el fondo inextinguibles de la sociabilidad, de modo que aquellas, aun con el auxilio y complemento de éstas, no bastan siempre á la satisfacción de las necesidades humanas, cada día crecientes y más complejas y apremiantes, ni á la realización de los fines que el progreso social descubre y multiplica. De aquí la necesidad de reuniones y asociaciones nuevas en todos los órdenes de la actividad, las cuales completan y perfeccionan el organismo social, por amplio y adecuado que sea, dividiéndose el cultivo y cuidado especiales de bienes y fines antes no descubiertos, ó que presentan formas desconocidas hasta entonces, ó que exigen una difusión y multiplicación cuya conveniencia aun no se había sentido.

Entre las reuniones y asociaciones para tan varios fines, pueden figurar las que tienen por objeto ilustrar, mover y dirigir la opinión en determinado sentido, al efecto de obtener bienes y beneficios sociales, ó de influir directamente en la política del gobierno central. Pero, aunque no repugna que con tal propósito se congreguen, y unidos permanezcan los ciudadanos hasta lograr su intento, no es lo natural en naciones sólida-

mente organizadas sobre firmes bases de armonía pública elaborar la opinión fuera de sus naturales centros, es decir, de los círculos sociales en que se procura la consecución de los correspondientes bienes. En esas sociedades, de tan diversa clase y jerarquía como ellos, y más ó menos comprensivas según el número de los que se proponen obtener, se habrá debido formar la opinión de una manera lenta, pero firme y segura, sin sugestión de la palabra aparatosa y sonante, del engalanado sofisma y la combustión repentina de los apetitos y pasiones. La opinión, como todo en el orden moral, á semejanza de lo que acontece en el físico, nace y se desarrolla por la tradición progresiva, no por la improvisación revolucionaria y perturbadora que pone de frente, para que choquen y estallen, ideas contrarias, exclusivas é incompatibles, intereses y anhelos que no tienen más fundamento que el error, ni otro título que el número y la fuerza. Solo cuando la opinión pública se determina y condensa suavemente, y como por aluvión, en los varios núcleos y órganos sociales, resulta verdadera, justa, prudente, arreglada y armónica, como ellos, en el organismo nacional.

4. Todo cuanto se ha dicho acerca de las reuniones y asociaciones como elementos formativos de opinión y de partido y vehículos de manifestación y divulgación de las ideas comunes, ó del programa de las agrupaciones sociales y políticas, es aplicable á la prensa.

Si la palabra hablada produce generalmente un efecto súbito, visible y aun poderoso, es, en cambio, pa-

sajero y superficial las más veces; mientras que el de la palabra escrita, fijada de un modo permanente, y multiplicada y propagada con extensa y trascendental difusión por medio de la imprenta, y, sobre todo, del periódico diario, tiene la eficacia de una acción continua, y de una propaganda perseverante que determina al fin la formación de un criterio y de un sentimiento habituales y de hondas raíces en el ánimo de los lectores. De aquí deriva el poder de la prensa para determinar la opinión, darla impulso y señalarla derrotero.

Acerca del derecho de emitir el pensamiento y de perpetuarlo y divulgarlo por cualesquiera de los modos permanentes de exteriorización, ya se ha dicho lo necesario y procedente en el lugar oportuno, así como respecto de la índole del diario y de sus peligros circunstanciales en todo tiempo, pero inminentes en la época y sociedades contemporáneas. En tésis, no puede negarse, no sólo la licitud, sino la utilidad del periódico diario para todos los fines de la comunicación social de las ideas en las relaciones nacionales y en el trato, comercio y comunicación entre los pueblos. La docencia del libro, y aun la de la revista y el folleto, siempre tendrán un número muy limitado de lectores en comparación del ancho círculo á cuya inteligencia, posibilidad, lugar, tiempo, inclinaciones y gustos solo pueden llegar y alcanzar las dos hojas ó el pliego diarios. A medida que las necesidades y los medios de satisfacerlas crecen, y, con ellas, las exigencias de la recíproca comunicación y cultura, excitadas por la facilidad de comunicaciones, se hace indispensable esa forma condensada, sintética y concisa que refleje las ideas y reproduzca los hechos

con toda la exactitud, brevedad, celeridad, oportunidad y amenidad posibles, dando á la vez estímulo y pábulo á una curiosidad cada vez más extendida entre todas las clases, y tan legítima cuando pide nociones como cuando solicita la información en los sucesos.

Así es que, aun no interrumpida la tradición cristiana del concepto y de la práctica de la vida, un progreso sano y recto, inspirado en los buenos principios de moral, derecho y política, hubiera producido y traído á su debido tiempo la forma periódica diaria de docencia y narración, como uno de los modos de expresión que, en el lugar jerárquico correspondiente, compartiera con el libro y otras publicaciones intermedias la manifestación de la opinión pública y su acción é influjo sobre ella.

Difícil es que el diario concilie la ilustración é información con la cortedad de espacio y tiempo para enseñar y referir, la exactitud con la concisión, la suficiencia con la multiplicidad de conceptos y datos que necesita reproducir cada día. Mas, no por esto, dejan de ser las condiciones de facilidad material y las aparentes de sencillez y llano magisterio, al alcance de todos, una tentación á que se apoderen de tan terrible arma corta de salud ó de muerte lo mismo el apto que el presumido, el virtuoso que el malvado, y pueda resultar esta clase de publicaciones, así medio y conducto de civilización y adelanto, como de corrupción y barbarie, cubiertas con barniz de cultura. Se necesita, pues, que haya llegado el pueblo á un alto grado de moralidad y circunspección, para que sin peligro maneje este instrumento, más ocasionado que otro alguno á par-

ciales y apasionados juicios, á perturbadora propaganda de delirios é iniquidades, á combustión de pasiones y apetitos desordenados, á conflagración de todos los elementos de desorden que no faltan en ningún tiempo y sociedad.

Este riesgo se hubiera prevenido y atenuado en parte, si la prensa periódica hubiese nacido en ocasión oportuna y en condiciones de normalidad, como expansión sosegada de comunicación é intimidad sociales, no como escudo de defensa y dardo de agresión en luchas envenenadas y feroces. Viniera á la vida en calidad de maduro producto, á la vez que signo cierto de progreso efectivo, y ocupara entonces este órgano de publicidad el lugar y posición que le corresponde en la jerarquía de los otros modos de expresión del pensamiento, sin usurparles la materia propia, y manteniéndose en su natural esfera de elemental difusión de conocimientos útiles y relación de hechos instructivos é interesantes. Y tal vez fuera manejado dentro de esos límites por personas juiciosas y competentes, acaso por las corporaciones y gremios, y quien sabe si con la iniciativa, estímulo y auxilios, vigilancia y moderación de la misma comunidad concejil.

Así, aunque no estuvieran vedados al diario los asuntos y cuestiones más importantes de sociología y política, se expondrían y discutirían con los mejores deseo, intención y formas, llevando el periódico la voz y sustentando el criterio de esas clases y órdenes, ó, cuando menos, no atreviéndose á herir convicciones y sentimientos sana y efectivamente populares. Ellos constituirían verdadera prevención y moderación de las abe-

rraciones, immoralidades y destemplanzas de la prensa periódica, y serían contención saludable de los excesos, acrimonias, extravagancias y furores de un presumido, malhumorado, pesimista é implacable individualismo ignaro y disolvente.

1. A la opinión nacional no se la designa con el nombre de certeza, esto es, del estado más perfecto de conocimiento, porque no todas las personas poseen en el mismo grado de certidumbre el conjunto de verdades constitutivas del juicio público en que aquella opinión consiste, y ni aun las gentes que conocen bastante las cosas, están, del todo y por igual, exentas de duda en todas las materias y cuestiones sobre que versa la pública opinión. Hay en este saber una certeza capital y común, pero mayor número de verdades en estado de mera opinión para el mayor número de personas.

No procede llamar á la opinión pública conciencia social, por lo ocasionado que es el término al error de una sola conciencia y alma en el sentido del monismo hegeliano ó positivista, y porque conciencia no es todo y cualquiera conocimiento, sino el que tiene el alma de los actos intelectivos de que es sujeto. Tampoco opinión es sinónima de espíritu nacional, porque éste comprende, además del concorde entender, el de la voluntad y de las obras sociales, habiendo entre ambos términos la relación de parte á todo.

Como de una colectividad no puede predicarse conocimiento, juicio y raciocinio, sino por modo análogo á como se atribuye á la persona física, es decir, en cuanto hay unidad, en tal ó cual acto intelectual, la opinión pública de cualquiera sociedad de esta clase, y la nacional, por lo tanto, no pueden consistir en juicios diversos y disconformes. He aquí porque en las modernas sociedades, en que el racionalismo es hábito arraigado y crónico, no hay opinión: *a)* porque es moralmente imposible que, no admitiendo más criterio que el de la razón individual, pueda haber conformidad alguna ni siquiera en las verdades fundamentales de religión, moral, derecho, sociología y política, según lo demuestra la experiencia; *b)* porque el racionalismo rechaza, ante todo y sobre todo, la verdad de la Revelación y la autoridad de la Iglesia, de cuya docencia infalible procede principalmente ese armónico conocimiento social en que la opinión pública consiste, magisterio á que, por enconada preocupación, son hostiles las naciones. Además, como el racionalismo supone y encierra el error sintético, inherente al naturalismo, que nada funda, explica y resuelve, tradúcese de hecho en un escepticismo práctico, incompatible con la firme creencia que es propia de la opinión pública, la cual es hoy más aun que barullo de ideas, pugna de intereses. A eso se reduce lo que, solo por sarcasmo, puede llamarse *cuarto poder del Estado, reina del mundo*, á vocerío de sofismas incoherentes que ahogan la voz de la verdad, cada vez más reducida y acorralada, á choque de torpes conveniencias que no toman de la justicia más que la parte y aparato estrictamente precisos para la sugestión y para un equilibrio inestable y fugaz.

Después de la Iglesia y de la familia es el gremio el molde de recepción y formación y el órgano directivo de la opinión pública, porque de la misma manera que, deslindando las clases, las concierta en la unidad superior del concejo, así también constituye el común entender y sentir de las familias de un mismo orden social, y lo eleva, ya coordinado, á conciliarse, en el seno de la corporación popular y de su gobierno, con la

opinión de los otros órdenes ó clases. A falta del criterio gremial, es la opinión ruido que hacen los titulados directores y órganos de aquélla, y por bajo del cual congrega el socialismo las pasiones y las ansias de las muchedumbres explotadas por el poder tiránico del capital, á una coalición destructora de los pocos fundamentos sociales que ha dejado en pié la corrosiva burguesía.

Así es que, al contrario de lo que se repite y propala, casi todos los gobiernos antiguos, incluso los paganos, eran de opinión, porque no faltaba, en medio de los extravíos é iniquidades de los peores gobernantes, (dígalo Nerón que fué popularísimo), una cierta comunidad intelectual y afectiva entre el imperante y los súbditos; hoy, al revés, casi no lo es ninguno, y se sostienen, en medio de la atonía é indiferencia de la masa neutra, en cuanto tienen más fuerza que la de los pocos elementos sociales que les hacen frente y que son hostiles entre sí, mientras llega el tiempo en que hayan de habérselas con la potencia superior del colectivismo universal (1).

2. Como la sociedad, por su naturaleza, es unidad y armonía, y los partidos implican diversidad y aun oposición de pareceres y, por consiguiente, de intentos y de obras, resulta que son los partidos una imperfección aneja á la condición del hombre *in statu naturæ finitæ et lapsæ*; y de la misma manera

(1) A cualquiera persona bien intencionada, veraz é imparcial puede retársela á que señale lo que es hoy la opinión en Inglaterra respecto de la guerra sudafricana. En favor de ella pueden alegarse la explosión de *jingoisismo* que hubo en Londres á la llegada de las primeras fuerzas militares repatriadas, y las manifestaciones de los otros *jingos* del Parlamento. Pero ni Londres ni las Cámaras son la opinión que, por voces más serenas, generosas, ó fría y prudentemente calculadoras, condenan esa campaña, afrenta de la nación que la hace y de las naciones que la toleran. Es posible que las primeras elecciones denuncien un cambio de opinión, pero esto solo será en el caso de que se prolongue la heroica resistencia boer, y el pueblo inglés vea que no le conviene seguir vertiendo sangre y libras esterlinas. La injusticia de la agresión es hoy la misma de antes. (Agosto de 1901).

que en el de bienaventuranza no habrá diversidad de juicios, el ideal de perfección social consistirá en que cada vez se reduzca, é indefinidamente, no la libertad de lo opinable, sino la disconforme variedad de lo opinado. Entretanto, la situación de las diversas agrupaciones y la conducta que entre sí deben observar es la de *in necessariis unitas et in omnibus charitas*, y esta hubiera sido la labor y el resultado del progreso cristiano en las sociedades penetradas, al andar de los siglos, por el espíritu de verdad y de amor en Cristo.

Se sigue de aquí que, según principios, y esto acontecería en pueblos y edades tan felices, los partidos no constituyen la opinión, sino lo que está fuera de su círculo y lo que le es opuesto, ó, lo que es lo mismo, que se hallan con ella en igual relación que con la unidad y armonía de la sociedad civil, en razón inversa. Por el contrario, en las sociedades modernas, la suma de las opiniones de los partidos, aun distintas, adversas é incompatibles constituyen la opinión nacional, de la misma manera que los individuos, agregados en los únicos grupos sociales públicos que quedan, son á saber, las fracciones y las facciones, componen numéricamente el Estado ó nación. Así es que, lejos de considerarse en la sociología y la política nuevas los partidos como una imperfección, se les juzga como cosa no solo natural, sino buena é indefectible; existen, porque no pueden menos de existir, y en esta necesidad estriba el título moral y jurídico de su existencia (1). Según esto, los partidos tienen menos inconvenientes que ventajas, y aun aquéllos son accidentales y se disminuirán y aun borrarán con el progreso indefinido, aunque por ventura sea cada vez mayor su número, y la dualidad vaga y genérica con que aparecieron,

(1) Son los partidos uno de los momentos y expresiones del movimiento dialéctico, la antítesis que se resuelve y concierta en una superior síntesis armónica, la opinión. Pero es el caso que esta armonía aún no se ha visto ni verá, reduciéndose hoy tales agrupaciones á la disconformidad y pugna que nos denuncia la experiencia diaria; lejos de ser factores de opinión, son las fracciones y los residuos de la opinión deshecha.

por regla general, en la época contemporánea, (en Inglaterra antes), se especifique y multiplique en los términos que hoy se ve, especialmente en Alemania, Austria y Francia (1).

Los partidos modernos están tan radicalmente equivocados como fundamental y esencialmente erróneas son sus doctrinas, y de la misma clase y trascendencia es la consustancial inmoralidad de estas agrupaciones, la cual es independiente de las flaquezas, pecados y delitos de sus miembros, y procedente de una causa más honda, la imposibilidad intrínseca en que se halla el naturalismo de fundamentar y promover la rectitud de los actos individuales y sociales, á causa del desconocimiento y negación del fin ó bien honesto del hombre y de la sociedad. Todo lo que dijimos de la moderna opinión pública es aplicable á sus elementos componentes, la suma de las opiniones de los partidos: incapaces sus programas de dirigir y justificar la conducta social y política, caen desde las regiones de un fantástico idealismo á las bajezas de la *realidad positiva*, del utilitarismo sensualista, perdiendo lo

(1) Los autores modernos más entusiastas de los partidos, observando sus defectos, no pueden menos de señalarlos; y de éstos son más los que proceden de la índole y circunstancias particulares de las modernas agrupaciones sociales y políticas que los que derivan naturalmente de la existencia de grupos que piensen y procedan de distinto modo acerca de materias y puntos de nacional interés. Los partidos modernos son malos, no tanto por la variedad que el partido implica, y por los vicios anejos á todas las agrupaciones humanas de cualquiera clase, tiempo y lugar, sino porque son liberales y parlamentarios; y de esta condición proceden las imputaciones que les hacen tratadistas como Bryce, Broughan, Minghetti, etc, cuando les acusan de excluir, por el juego de los partidos turnantes, á hombres beneméritos, aptos y útiles para el desempeño de las funciones públicas, atrayendo, en cambio, á ambiciosas nulidades é ineptias; de hacer del gobierno y del poder botín del partido vencedor; de fomentar la casta de *politiciens* y caciques; de arrojar del ejercicio de la política la guía técnica y la científica ilustración, sustituidas por la parcialidad, la pasión, el exclusivismo fanático, etc., etc. Como se ve, tales cargos, más que á la diversidad de agrupaciones, van dirigidos al sistema que las inspira y caracteriza y las hace ser lo que son y no pueden menos de ser, sin remedio.

que tenían de escuela para convertirse en empresa de explotación de los bienes materiales que ofrece el campo de la sociedad y, sobre todo, de los beneficios con que brinda la posesión del poder (1).

(1) Es lástima que las proporciones de este tratado, aun ensanchándolas acaso más de lo conveniente, no permitan comprobar por actual experiencia histórica la evidente evolución de los partidos modernos desde la altura de las *nobles y generosas* utopías hasta el valle de las conveniencias y utilidades *prácticas*. Este carácter, aunque no tan señalado como ahora, tuvieron los dos partidos clásicos los *torys* y los *wihgs*, cuya diferencia, más que de *ideales*, fué siempre de procedimientos, esto es, de parsimonia ó celeridad en adoptar y recibir no los principios, sino los hechos, cuya fuerza social se iba destacando; en apreciar el poder y empuje de la dinámica de abajo, y de si había llegado el tiempo oportuno de que cedieran, para no sufrir menoscabo, las resistencias de arriba. Este es hoy, no el principal, sino el único distintivo de los dos partidos sucesores de los tradicionales, ó mejor dicho, de los partidos tradicionales en la etapa actual de su evolución, distinguiéndose cada vez menos el *unionista* (coalición de conservadores y de una parte de los antiguos liberales y que es el más parecido al clásico *torysmo*) del *liberal* (ó sea, lo que resta de éste después de los desprendimientos unidos á la conservaduría, el más semejante al histórico *wihg*) así en las cuestiones interiores como en las de política exterior.

También mera conjunción de fuerzas gobernantes, tomadas en una línea que toca con el *centro*, por un lado, y con un poco más adentro de las fronteras socialistas, de otro, es, hace no pocos años, el *oportunismo* que manda en Francia, bajo la presidencia de radicales *enragés* ó de hombres del más pulcro temperamento conservador personal, como Valdeck-Rousseau. Las circunstancias inclinan más ó menos á uno ú otro lado de la zona gubernamental, según necesidades y combinaciones de fugaz estática. Para secularizar el Estado, esto es, para descristianizarlo, se recluta mercenariamente con el sueldo del Poder, ó de otra retribución que éste pueda directa ó indirectamente dar, la mesnada oportunista; y una vez la acaudilla Bourgeois, Dupuy y aun Meline, y ahora Waldeck, el más radical por fuera, pero que, para sus adentros, mejor quisiera concertarse con los frailes en un terreno de recíproca *tolerancia y prudencia* que expulsarlos por una ley en que la habilidad conservadora ha puesto los tan familiares maquiavelismos al servicio de los furios sectarios.

Análogo oportunismo, aunque así no se llame, impera en los partidos italianos y nada decimos de los españoles por repugnancia á descender á este terreno, aunque tengamos pleno derecho de bajar hasta él.

Además, hoy son los partidos las únicas asociaciones públicas, de corta existencia y flaca contextura, en que se forma y expresa, á la vez que se divide, la opinión, y por medio de las cuales actúa ésta en la esfera del gobierno y en los demás órdenes de la vida social. En el único molde de esas agrupaciones hostiles se vacían ahora, no discrepancias subalternas, bajo la unidad de un pensamiento verdadero y de un patriótico propósito común, sino ideas fundamentales opuestas, intereses vitales incompatibles, faltos de un principio general de armonía y de una clave de recta conciliación, no menos que de los otros organismos más naturales, perfectos, amplios y permanentes, donde se formaban y condensaban así lo genérico como lo diferencial de la opinión, y donde las variedades de ésta, mientras subsistían, no dañaban á la concordia y solidez del espíritu público que tenía á raya, subordinaba y reducía á sus justos límites los juicios particulares, sustrayéndolos á la ilicitud, á la extravagancia y á la utopia. Lejos de eso, los partidos son ahora campos enemigos, banderines de enganche, facciones que, si discuten, no es para persuadirse y marchar después unidas, sino para provocar la desertión en los adversos bandos, los cuales no cruzan ya argumentos para convenir de una tesis, sino sofismas para poner apetitos y pasiones de parte y al lado de un interés. Y en esto consiste á la vez la potencia destructora y la flaqueza y la esterilidad de estas agrupaciones: por falta de concierto y equilibrio, son como los vientos desencadenados que hielan ó abrasan, y que no mueven sino cuando abaten y arrancan de raíz con fuerza de huracán.

Al suave impulso de una opinión verdadera y poderosa, en que las diferencias accidentales de apreciación y conducta fueran crisis pasajeras y aun saludables, de las que surgiesen aun más robustas y perfectas la unidad y la armonía del espíritu público, ha sustituido el liberalismo una pseudo opinión, es decir, un montón abigarrado de juicios, cada vez más varios, extravagantes y disconformes. Porque es natural desarrollo del racionalismo ahondar la división intelectual y

multiplicar las opiniones, y del utilitarismo positivista, gobernado por el interés individual, sin otra ley que el egoismo, centuplicar los apetitos y sus exigencias; y así los partidos, que representan cada día mayor diversidad y oposición, no son una fuerza, sino la negación de ella, los restos y miserables fragmentos de una potencia rota en mil pedazos cada vez más menudos (1). Los gobiernos actuales, que se dicen de

(1) No hay necesidad de un análisis minucioso, delicado y sutil para notar por experiencia en la sociedad contemporánea este fenómeno de la multiplicación fragmentaria de los partidos. Mientras, como armas de oposición y demolición del antiguo régimen, pudieron permanecer en las vaguedades de un programa teórico y de no inmediata y aun lejana aplicación, conservaron cierta unidad que el interés de la acometida les aconsejaba aparentar y prolongar todo lo posible. La posesión del poder dividió á los partidos, en un principio, más por variedad de ideas que por diversidad de intereses, distinguiéndose, dentro y bajo el error radical común, por razón de procedimiento y temperamento, en dos grandes agrupaciones semejantes á los que la evolución constitucional había determinado en Inglaterra, moderados ó conservadores y progresistas, avanzados, exaltados, etc. En Francia la potencia del primer impulso revolucionario gastó y anuló con disolvente celeridad á los primitivos partidos conservadores: á los constitucionales y fuldenses primero, después á los girondinos, á continuación á los jacobinos propiamente dichos, y, últimamente, á los *montañeses* menos furibundos de la Convención. La comunidad en los errores fundamentales y generales, no menos que la bien calculada conveniencia del sistema y de sus partidarios, y cierta convicción y aun fanático entusiasmo de ideas mantuvieron por mucho tiempo la anhelada y precisa dualidad de las agrupaciones; pero, al fin, se ha quebrantado hace cerca de media centuria en la mayor parte de los Estados, y ya se marca ahora aun en Inglaterra, primero con el desprendimiento unionista del partido liberal, y en la actualidad con la división de lo que queda de éste en los dos grupos aun no conciliados, y acaso inconciables.

Enfrente, no del partido tradicional y legitimista, sino de la amplia agrupación constitutiva de lo que resta de patria, los partidos revolucionarios, entrometidos en el *gobierno* de la nación, se diferenciaban y dividían primero por cuestión meramente política, esto es, de criterio y procedimiento gubernativos; pero, fuera del círculo de la acción gubernamental, se vienen formando, hace tiempo, agrupaciones determinadas y condensadas por principios é intereses de oposición más radical y honda que la que *se hacen* los partidos turnantes en el disfrute del Poder, y desde puntos de

opinión por uno de los tantos falaces convencionalismos al uso, no son de opinión ni pueden tenerla, porque no existe. Porque opinión es juicio público verdadero y conforme en lo capital y esencial, y lo que ahora llaman opinión son juicios erróneos y opuestos en todo lo divino y lo humano, multiplicados indefinidamente por la razón individual sin guía y el interés egoísta sin freno.

Y, sin embargo, para conservar su apariencia de representativos, necesitan estos gobiernos mantener y perpetuar la ficción sugestiva de representantes de la opinión; y como no son gobiernos de verdadera mayoría nacional, que se ha ido

vista harto más amplios y contrarios, y si no de intervención presente en el gobierno, de influjo notorio en su marcha y de innegable trascendencia para el porvenir. Tales son los que quieren cambiar la forma de gobierno; los que pretenden reivindicar la mayor autonomía regional, ó la independencia, si pueden, para aquellos cuasi Estados á seminaciones de que se trata en el Capítulo II del libro y tomo primeros; los que van más allá todavía, porque aspiran, nada menos, que á un cambio radical social, á fin de distribuir con toda la *igualdad* y *equidad* los bienes de la tierra, *únicos* que existen, destruyendo al efecto, la organización presente, para alzar sobre sus ruinas el edificio socialista del porvenir. A estos partidos, que no aceptan todo el conjunto ó la mayor parte de la constitución y del actual estado de cosas, les ha llamado Bluntschli partidos mezclados.

Este, como otros autores, estima cuestión de interés una clasificación y división de los partidos, cosa imposible tratándose de los históricos, sumamente difícil y, por otro lado, innecesaria si se intenta clasificar y dividir en el único terreno propio y factible, en el científico y racional; porque no es empresa tan llana determinar y agrupar lógicamente las materias sociales y políticas en que pueden opinar de distinta manera los hombres; y, aunque lo fuera, no sería este el lugar de señalarlas. Así es que ninguna de las divisiones más conocidas y célebres puede soportar la crítica más rápida y superficial. ¿Quién es capaz de encasillar en una clasificación lógica los actuales partidos alemanes, todos ellos *mezclados*, que diría Bluntschli; ¿ni qué interés histórico ó importancia racional tendría una operación analítica consistente en extraer del acaso más *mezclado* de todos, el centro católico, las notas comunes con los demás, y las que lo diferencian de ellos, no para marcar sus relaciones históricas, sino encajar lo conservador, lo territorial, y lo antiindividualista en los moldes lógicos correspondientes?

formando previa suave y armónicamente en orden gradual y jerárquico, en los organismos sociales extra é infraprotárquicos, sino gobiernos de fingida mayoría, esto es, de una minoría que es, ó se supone, más nutrida que las otras, necesitan habilitarla, fuera y antes del parlamento, por medio de partidos lo más numerosos posible, y sostenerla dentro de él por una agrupación de bastante gente y fuerza para apoyar al gobierno y lograr que *vaya tirando* lo más que pueda. En una sociedad bien organizada la base del poder central es todo el cuerpo de la sólida y armónica fábrica; ahora tiene que ser un andamiaje improvisado en las elecciones, siempre con poca y mediana madera, y cada vez con menos y más flojos puntales; los gobiernos cristianos patriotas y efectivamente representativos viven y respiran bañados en un ambiente puro y sano de opinión nacional que los rodea, compenetra y satura; á los actuales hay que disponerles artificial y viciada atmósfera por medio del aparato en que á duras penas se introduce una mísera corriente de insalubre aire exterior. De aquí la necesidad de tener dispuestos dos artefactos lo más anchos y menos endebles que se pueda para que turnen en el servicio de la respiración parlamentaria.

Y esta sería la conveniencia y el ideal de los actuales gobiernos, la dualidad de los partidos turnantes, porque significarían dos poderosas corrientes de opinión, bien condensada y deslindada, y, por lo tanto, dos orientaciones y fuerzas menos fluctuantes y movedizas de gobierno parlamentario. Aquí el progreso consistiría en que la diferenciación no pasara más adelante, ó que si pasó, haya sido para volver á la feliz y clásica dualidad pristina. Pero eso no puede ser, ni lleva traza de serlo; antes, al contrario, en la mayor parte de las naciones los gobiernos se apoyan en coalición de partidos, en concentración de fuerzas, ni siquiera similares, sino meramente afines, porque la *opinión*, cada vez más fluctuante, indefinida, indecisa y tornadiza no consiente otra cosa. Solo en España los partidos *mezclados*, políticamente mal constituidos, faltos de toda fuerza social, tampoco la tienen en el parlamento, y,

solo para que no obstruyan, cuentan con ellos los dos turnantes, y con esto y recitar su papel se satisfacen los otros, *verdadera oposición de Su Majestad*, no en el sentido inglés, sino en el genuino y propio del parlamentarismo español que es un parlamentarismo *original y nuestro* (1).

(1) Aquí perdura la *dichosa* dualidad sostenida por los procedimientos que ni recordarse pueden sin sonrojo; pero España es la excepción entre los países parlamentarios más conocidos y estudiados. Ya se ha dicho que en Inglaterra gobierna actualmente una coalición, y, probablemente, otra del fraccionado partido liberal y algún elemento afín sucederá al ministerio Salisbury-Chamberlain. Este es un síntoma de lo más significativo y trascendental en la situación política de Inglaterra. En Bélgica el partido *católico*, además de haber sufrido el desprendimiento de los titulados demócratas cristianos, no tiene hoy tal solidez y cohesión que no pueda discutirsele el caracter de partido uno é indiviso. En harto peor estado se halla el partido liberal clásico que tuvo por patriarca á Frere Orban.

Aun así y todo, Bélgica é Inglaterra es donde la multiplicación y descomposición de los partidos está en los comienzos; más adelantada en Alemania y, sobre todo, en Francia. En el Imperio, además del partido socialista, cada vez más pujante, la cuestión federal, la territorial de reivindicación regionalista y aun de nación mantienen agrupaciones propias, ó contribuyen, cuando menos, al caracter complejo de otras, y casi á absorber la mera división de los partidos por el solo caracter de más conservadores ó avanzados; en la vecina República, el elemento de restauración regional ó nacionalista y el de centralización ó federalismo no agitan la opinión dentro ni fuera de las Cámaras. Lo característico de los partidos franceses, en relación con aquel parlamentarismo, es haber perdido su fuerza parlamentaria no solo las fracciones monárquicas, los elementos genuinamente conservadores republicanos y los que después han aceptado la república, sino también el *centro*, compuesto, como todos los centros, de prolongaciones de las zonas limítrofes, de esos matices intermedios formados por las opiniones menos pronunciadas y más *neutras*. Hace años que el gobierno francés se funda en una concentración oportunista, cada vez más inclinada al radicalismo anticatólico, á lo cual contribuyen la indiferencia religiosa del país y el quebrantamiento y debilidad de las fuerzas conservadoras y católicas por causa de la misma acción parlamentaria que han adoptado. Prueba palmaria es la última ley de asociaciones, ó sea, contra las congregaciones religiosas que no han podido impedir monárquicos, *rallies* y aún los elementos republicanos más juiciosos, los que siguen tomando en serio los principios del 89 y parecen creer que liberalismo no es, *per se*, ley de castas y fiera persecución á la Iglesia y á los católicos.

3. Al hablar de las relaciones del Estado con las sociedades incompletas, (Capítulo, II del Lib. III), señalamos cuales eran los oficios de aquél para con éstas y el criterio de amplia libertad y autarquía, según el cual, así en el nacimiento como en la organización y acción de tales sociedades, debe tener el Estado la menor intervención posible, y únicamente, por razón de circunstancias, el oficio tutelar estrictamente preciso.

El mismo criterio debe aceptarse para las reuniones. Este derecho es, en tesis, uno de los más propios y naturales, inherentes á la libertad de toda persona, sobre todo de las *sui iuris*, y ejercicio saludable y apreciableísimo, actuación habitual y frecuente, así de la sociabilidad como de la ciudadanía. Por esto, en una sociedad ordenada y pacífica, la reunión, como quiera que no pasa de acto de congregación pasajera que inmediatamente se disuelve, no necesita de previo requisito legal: no ya la autorización, acaso la mera notificación anterior, es una traba infundada é injustificable de la libertad personal. Todo lo más, en casos extraordinarios de concurrencia en la vía pública, procederá un aviso previo para que se redoblen las precauciones policiacas ordinarias.

Solo, pues, la hipótesis habitual de una sociedad en estado crónico de perturbación violenta ó de agitación mansa, pero expuesta á los abscesos agudos de tumultuosas explosiones, puede explicar y aun justificar las medidas preventivas, así contra las reuniones como contra las sociedades de voluntaria formación, que son las que aquí estudiamos. En la mayor parte de los países modernos, después de garantizar las constituciones la libertad de reunión y de asociación, toman tales precauciones contra ellas en las leyes orgánicas y aun en el mismo código político, que bien puede decirse que el ejercicio de esos preciosos derechos depende, ó punto menos, del arbitrio dictatorial de un poder receloso y hostil.

Y es natural esto, aunque no sea justo: son tales asociaciones la casi exclusiva y poderosa arma del individualismo extraviado y perturbador contra el no menos injusto socialismo

del Estado. Deshechos los naturales, amplios, comprensivos y potentes organismos históricos, no tiene la masa disgregada mas recurso de cohesión y fuerza para hacer frente al otro poder adverso que esas asociaciones, ya no subalternas y complementarias, sino principales y únicas en la labor de *crear* y mover opinión, utilizándolas los partidos como medio de vida y propaganda, de ataque y defensa. Con ellas ejerce, en cierto modo, la masa su *soberanía inmanente* sobre y contra su representación legal y ficticia, y de aquí que el Estado oficial las mire y trate con tal desconfianza y enemiga, doctrinariamente disfrazada de policiaca defensa del orden. Y, por la situación actual de las ideas y las cosas, tanta razón y justicia tienen éstas asociaciones contra el Estado como el Estado contra ellas en esta lucha de las dos fuerzas incompatibles, el individuo y el Poder (1).

(1) En Francia, en la cuna de la Revolución abstracta é idealista, en el hogar de las libertades absolutas é ilimitadas, son coetaneas del nacimiento y existencia de estos derechos las precauciones contrarias; y desde 1791 hasta la fecha hay una verdadera legislación restrictiva, interrumpida en los períodos revolucionarios de mayor expansión liberal para reanudarse en cuanto el *orden conservador* reivindica sus fueros. *Obra maestra* de cautelas atentatorias, tomadas en apariencia para todas las asociaciones, pero en realidad contra las congregaciones religiosas, es la reciente ley con sus tres grados de asociación, *libre, declarada y reconocida*, en la que la mayor libertad está en razón inversa de la mayor jerarquía y derechos, y en la que para las comunidades no hay más que una forma forzosa de asociación, la reconocida, que es también precisamente la de mayor servidumbre.

En Alemania la legislación federal acerca de asociaciones es harto restrictiva también, y hace al Estado árbitro de la existencia de muchas, puesto que le da facultad de prohibir las que se juzguen nocivas á él, así como las que prometan obediencia absoluta á sus superiores, ó si fueren éstos desconocidos, (arma terrible contra las asociaciones religiosas). Predominan, en cambio, en Inglaterra y en los Estados Unidos un criterio de mayor libertad y más bien el régimen de represión. Las condiciones en que en Inglaterra ha ido, por infiltración y evolución, introduciéndose el liberalismo, han hecho en cierto modo tradicionales y connaturales las asociaciones políticas, que no nacieron repentinamente y como arma de combate violento y revolucionario, sino de propaganda é influjo constantes, lentos y pacíficos, y bajo

4. Surgió el diario, no solo como palanca demoledora y puñal envenenado en la lucha de los partidos, sino como el único texto que presumió enseñar al pueblo toda la nueva y dañada doctrina política, jurídica, sociológica y aun filosófica, necesaria para el ejercicio de la soberanía en la variedad múltiple de sus nuevos oficios. Pretendió ilustrar por modo maravilloso, súbitamente, á la nación, sustituyendo á los medios naturales de cultura paulatina y metódica esa lección diaria, confusa, tumultuosa, desordenada y heterogénea acerca de todas las cosas divinas y humanas, en que no hay posibilidad de razonamiento, por elemental que sea, y en que, por necesidad, se impone la afirmación dogmática que llena con declamaciones y llamamientos á la pasión dominante el hueco de los raciocinios. Mientras tal cátedra repugna á las gentes rectas y juiciosas, brinda en cambio á todas las torpezas y delirios un magisterio fácil y lucrativo, en que la sugestión del sofisma campanudo y abigarrado no deja ni quiere dejar campo á la discusión imparcial y serena para la convicción sólida y la persuasión honrada. No solo así se mantiene y perpetúa la

la acción directiva de antiguos partidos, más reflexivos y disciplinados. El carácter tan orgánico de la sociedad inglesa comunicó á las asociaciones voluntarias, aun las políticas, un cierto espíritu de circunspección y subordinación, preservándolas de la nota individualista, agresiva y utópica de las sociedades que en el Continente se mostraron desde luego tan perturbadoras, idealistas y anárquicas. También el sentido práctico de la raza sajona y las circunstancias de paz y acuerdo interiores en que nacieron los Estados Unidos y su constitución, á pesar de la guerra contra la Metrópoli, imprimieron á las asociaciones una marcha un tanto regular y ordenada, también bajo la dirección é impulsión principales de los dos grandes partidos políticos. En Inglaterra, como en sus colonias, había comenzado el ejercicio de la reunión y de la asociación antes de que se ingirieran en ellas la violencia y el delirio revolucionarios, y todavía siguen siendo las asociaciones escuelas en que el pueblo recibe y acepta con seguro instinto de utilitarismo las lecciones que acerca de la conveniencia actual comunican los pedagogos y directores de la opinión pública. Generalmente, ni en *meetings*, ni en sociedades halla eco la idea abstracta y aun no comprobada, sino el hecho confirmado por la experiencia.

incultura y la ignorancia del pueblo, sino que se las inocula un virus de presumida soberbia que las hace incurables y cerradas á toda lección sana y reconstituyente del sentido común y del sentido moral, creando un prejuicio tan cristalizado, una tan impenetrable costra de absurdo y craso error que hubiera parecido inverosímil y pesimista augurio si como venidero estado de opinión se anunciara en pasadas edades. Entre el periodista y su público se establece una corriente recíproca de engaño interesado y de estímulo tentador á él, por la cual se acrecienta y agrava cada día la estulticia de la masa y la ambición y la codicia de sus manipuladores. Y no hay que pensar en que otro periódico pueda perforar ó asaltar esa muralla espesa tras de la que se encierra cada círculo de lectores, porque, aun suponiendo que la discusión esté al alcance de ellos, ó pueda tener eficacia en el período crónico y á la vez agudo de preocupación enconada y acerba en que se hallan, ya tienen buen cuidado los secuestradores de tal clientela de que no llegue á su noticia el alegato de sus adversarios, ó llegue de tal suerte mutilado, adulterado y truncado que no haya quien se preste á admitirlo, ni atenderlo.

Así es que la prensa diaria que, mantenida en el tercer lugar de la jerarquía docente, redujérase más bien al papel modesto de condensar y difundir doctrinas verdaderas y comúnmente aceptadas, y, sobre todo, á informar amplia, verídica y desapasionadamente acerca de los sucesos, procurando que, encarnados en ellos, brillasen la evidencia y el magisterio de los principios, hase convertido, por razón de desgraciada hipótesis, en vehículo de corrupción, de ignorancia y de trastorno, contra los cuales tendrán siempre razón, aunque no siempre lógica, cuantos gobiernos, buenos ó malos, legítimos ó de mero hecho, no quieran consentir tales calamidades; y á las medidas así represivas como preventivas contra el pensamiento libre, especialmente contra su forma de expresión diaria, no se le exigirán más condiciones que justicia y eficacia. La libertad de escribir es la tesis, pero ésta no se ha hecho ni para delincuentes ni para enagenados.

Síguese de lo dicho que el diario es la forma y medio menos adecuados de crear y de reflejar opinión; y de aquí el que solo sirva á los partidos más para mantener en filas á la gente que para atraerse la de otras banderías. Por otra parte, si es verdad que la prensa vino á la vida del brazo de las agrupaciones políticas, y como servidora de ellas, cada vez tiende más á emanciparse de sus tiranas y á convertirse, de reflejo y factor del programa é interés de partido, en reproducción de la *realidad de la vida* y en órgano de la opinión *neutra é imparcial*. Al lado de la prensa de partido se destaca una de gran circulación que rompe el *estrecho molde* de las facciones políticas ó sociales para *representar* á la nación y sus *intereses vitales*.

Mas no se crea que este movimiento procede de un móvil racional y generoso; es sencillamente un cálculo del provecho de servir al nuevo amo. Sobre la opinión que es agregado de las opiniones de los grupos, se va formando otra, no cierta y ordenada, activa y patriota, sino un conglomerado de negaciones comunes, de desfallecimientos, dudas, escepticismos y positivismos, producto natural del error, del sofisma y de sus abusos, extravíos y culpas. En los comienzos de la revolución liberal, hasta sus masas gustaban de principios y doctrinas, y leían con deleite y avidez, que no solo soportaban pacientes, aquella abrumadora diaria exhibición de tópicos patrióticos, aquellas largas columnas rellenas de la consabida perorata, sin variación notable, sobre el perpétuo tema; hoy á la mayor parte de los lectores, incluso á los encasillados en los partidos, hastía y repugna todo lo que no sea crítica rápida, ataque discreto y hondo pero ligero y fugaz al contrario dogma de partido, y, sobre todo, relación, que parezca fiel, del hecho último y palpitante todavía, con todas las minucias narrativas de que está hambrienta una curiosidad insana, y con todos los atractivos de la parte pasional y dramática para excitar el gusto saciado y despertar el interés adormecido y como insensible.


En este *impersonalismo* que á muchos entusiasma, imaginando que detrás de él existe un precipitado de juicio públi-

co, de verdadero espíritu nacional, reflejado en la gran prensa, se han anticipado y hoy se distinguen los diarios ingleses y americanos, porque siempre la raza sajona ha rendido más culto á la utilidad que á la idea, á los hechos que á los principios; y así la mayoría de los lectores apenas se fija en la teoría, ni hace caso de ella como no sea en la parte necesaria para guiarse en esa pugna de encontradas conveniencias en que ha consistido, hace más de un siglo, la historia social y política de ambos pueblos. Por eso ha sido la prensa sajona la menos especulativa y la más especuladora, bien que no sabemos si esa supeditación y entrega al escepticismo positivista del público es mal menor ó mayor que las subvenciones de la prensa asalariada por las empresas y los gobiernos y sostenida con *los fondos de reptiles* (1).

(1) He aquí lo que en 1848 escribía Brownson (S. Review, cuaderno XII)..... «Los ingleses y los americanos dan poco crédito á las ideas; creen en pocas cosas, sino es en el *roastbeef* y en el *plum-pudding*. Conservan mucho de la antigua índole sajona, y raras veces sienten, salvo en la bolsa y el estómago. Los ha educado el protestantismo que mira la lógica con menosprecio y torna la razón en cosa supérflua. . . . Además de esto, es nota característica de los anglo-sajones no curarse jamás de aprender lo que repugna á sus propias preocupaciones. El anglo-sajón toma en sus manos un periódico no para aprender lo que ha de pensar, sino para ver escrito lo que ya piensa. Si alguna vez se encuentra con algún parecer contrario al suyo, ó al que sospecha ser el suyo, lo desecha ó se niega resueltamente á creer ni una sola sílaba de lo que le dicen. . . . como quiera, en estos países, por grandes que sean las pretensiones de la prensa, en realidad es muy escasa su influencia. Rara vez tiene virtud para robustecer ni debilitar un partido; muy raro es el caso en que produzca una resolución pública ó influya en el éxito final de una discusión pública. Las cosas seguirán su camino sin ella, como lo siguen con ella, en tanto que ella sirva de válvula de seguridad al vapor excesivo de los demagogos.

»Pero en el Continente de Europa, la cosa muda enteramente de aspecto. La cultura intelectual es allí superior á la de la Gran Bretaña y á la de nuestro país, y las gentes se sienten más dispuestas á obrar de conformidad con sus principios. Hay, y siempre ha habido en el Continente, más libertad mental que en la Gran Bretaña, como en la Gran Bretaña la hay y la ha habido siempre mayor que en los Estados Unidos. Entre todos los

»países civilizados el nuestro es el que tiene menos libertad de pensar, no
»por efecto de las leyes, sino de las costumbres, de los hábitos, de los usos
»del pueblo, sujeto á una intolerable servidumbre intelectual que no tiene
»compañera en parte alguna. Entre nosotros aquél dá muestras de gran va-
»lor que se determina á publicar sus honestas convicciones, y todavía es
»mayor su valor generoso, si se atreve á combatir las convicciones contra-
»rias con ingénua imparcialidad. Somos el pueblo más libre del mundo en
»la *Constitución*, mas en la realidad, y especialmente en cuanto á lo inte-
»rior, no hay pueblo más esclavo.»



CAPÍTULO XVII

NATURALEZA DE LA REPRESENTACIÓN; SUS ÓRGANOS.—LAS CORTES: EL ESTAMENTO REGIONAL Y EL ARISTOCRÁTICO.—EL GOBIERNO REPRESENTATIVO.—LA RESISTENCIA AL PODER.

1. Bien puede decirse representación la expresión del juicio público común en que la opinión nacional consiste, así como también la manifestación de las particulares ideas y aspiraciones de los partidos. En cuanto éstos y aquélla exhiben sus pensamientos, esto es, sus conceptos y propósitos, *representan*, no solo ante la nación, sino ante sus poderes para el fin práctico de que tales juicios y deseos se realicen. Y este es el nuevo sentido gramatical y jurídico del término *representar*, *hacer presente é informar acerca de algo y pedir medidas en conformidad con aquello que se refiere ó declara*. Porque, si bien se mira, todo lo que la opinión y los partidos conocen y apetecen, en cuanto son verdades no especulativas sino practicas y de orden moral y jurídico, puestas que se refieren á la conducta social, tiene un carácter representativo en el doble concepto de expresión de la idea y de petición, cuando menos implícita é indirecta, de que aquélla se traduzca en hechos.

Mas, en acepción estricta, no hay representación, sino cuando hay petición ó *instancia ó demanda á una*

autoridad, ante la cual se expone, y á quien se ruega un determinado acto de ordenación ó gobierno. Por la jerarquía de la autoridad, á la que se informa de algo y de la que se solicita la medida correspondiente, es representación, por antonomasia, la que se dirige al soberano, y de ésta es de la que aquí se trata, y la que da al gobierno nacional el carácter de representativo en el sentido propio de la palabra.

La petición es un derecho inherente á la personalidad que pueden ejercitar por sí las personas *sui juris*, y en nombre de las que están bajo la potestad de otro, aquél que las tiene bajo su autoridad. Porque la petición se funda en la necesidad del solicitante, en la posibilidad en que está de atenderle aquél á quien se dirige, y de la imposibilidad en que se halla la persona y autoridad más vigilante, observadora, previsora y celosa de los bienes y derechos de los ciudadanos de tener presentes su situación y circunstancias y los medios de satisfacer sus justas y equitativas exigencias, espontáneamente *y de oficio*. El derecho de petición fluye de la posición y relaciones respectivas de autoridad y súbditos, y de tal manera radica en la naturaleza del hombre y de la sociedad, que, mientras la legitimidad de otros derechos personales se ha puesto en tela de juicio, y no se han reconocido ni ejercitado siempre, encontrando su actuación no pocos obstáculos, el de petición ni se ha discutido ni negado, aunque se hayan puesto limitaciones á su ejercicio.

2. Siendo la petición derecho de la persona, es claro que lo mismo corresponde y hay que reconocer-

lo y garantizarlo á la persona individual que á la colectiva. A la primera, aun fuera y aparte de las sociedades de que es miembro, porque bien puede acontecer que lesionen el derecho de las partes de que constan, y necesiten éstas que las ampare una autoridad superior común; á las segundas, también en razón de su personalidad y de su categoría, porque cuando piden, no es por y para una sola persona, sino que exponen y reclaman en nombre del interés armónico de las personas físicas y colectivas de que esas sociedades constan, y con título, fin y propósito que están en proporción de su grado jerárquico.

Pero, así como cada persona individual ó jurídica, no forma parte del Estado nacional por relación y enlace directos, sino por el conducto y medio de la sociedad y de las sociedades con las cuales las ha puesto en contacto más íntimo la naturaleza, así lo natural y frecuente es que la petición vaya formada, formulada y conducida por el ministerio de aquellos órganos sociales, intermedios entre el peticionario y la sociedad y autoridad, á las que en último término se dirige. La personalidad superior que recibe y concierta en sí, como miembros de un todo más perfecto, á las personas inferiores, reconociendo su personalidad para complementársela y aumentársela, esa misma expresa, condensadas y armonizadas en la petición colectiva, las ideas y aspiraciones comunes, de tal suerte que la petición personal, aislada, suelta y aun contraria, empezando por la individual y concluyendo por la de la provincia, es caso excepcional y anómalo, bien que con recurso fácil y expedito para que la decisión superior encaje el inte-

rés particular en el general con el criterio conciliador de la justicia.

No es incumbencia del Derecho político determinar el orden orgánico y jerárquico de la petición social, que no es distinto del de la relación y dependencia naturales de unas personas y sociedades á otras superiores y más comprensivas. Al Derecho político corresponde exclusivamente deducir de toda la anterior doctrina propia y de cuantas fundamentales y auxiliares tienen con el punto conexión más íntima, que las sociedades completas públicas, directamente constitutivas de la nación, las regiones, son los directos órganos representativos de la sociedad civil, los que habiendo recogido por orden categórico y armónico, y condensado en su seno, la idea y la aspiración nacional, deben representarla en forma de petición ante el común poder soberano.

Es decir, la razón exige que la petición representativa sea regional, porque solo así puede ser orgánica, jerárquica, armónica, además de bien concretada por parte de la idea que se expresa y la demanda que se formula, y, por lo tanto, susceptible de que la región la determine, precisándola en *mandato imperativo* á aquellos encargados de exponer y suplicar al soberano en nombre de la región, de la cual son *representantes, diputados, procuradores, mandatarios, etc.* términos, en derecho racional perfectamente sinónimos. Los dichos representantes, que son los órganos é instrumentos de tal representación común, única, legítima, posible, íntegra, y perfecta ya en la región, constituyen ante el soberano, y al lado de él, la asamblea representativa

que así se ha denominado con término genérico y comprensivo, recibiendo en algunos países también este nombre peculiar, ó bien el de parlamento, córtes, etc.

Esta representación debe ser *intermitente*, porque no hay necesidad de que sea continua; *periódica*, es decir, de tiempo determinado, así para la convocación como para la duración de la asamblea, porque la petición nacional es asunto harto importante por su fin, objeto y materia para que no se deje al acaso y al arbitrio el tiempo en que ha de ejercerse tan importante función; *igual* para todas las regiones, por razón de la igualdad de categoría en una persona moral superior á todas las otras, y solo inferior á la nación, y cuya superioridad ó inferioridad no ha de medirse ni atomísticamente por la población individual, ni por ninguna otra circunstancia de desigualdad que despoje á región alguna, chica ó grande, rica ó pobre, agrícola, industrial, etc. de su grado social jerárquico de unidad y elemento social inmediatamente constitutivo de la sociedad civil por excelencia. Las regiones podrán enviar uno ó más representantes, es decir, una ó más voces, pero no deberán tener más que un solo voto en los acuerdos ó decretos de la asamblea nacional.

Este, como otros puntos concernientes al mandato, es decir, á la legislación electoral, corresponde, generalmente, á la autarquía de cada región que, por uso ó ley propias, habrá determinado la forma de hacer la designación de los representantes, condiciones de éstos, etc. Incumbe en cambio al gobierno ó poder central la parte *protárquica*, que no es fácil determinar

á priori, y menos, y acaso no del todo necesario, en esta sección elemental, por ejemplo, la relación de los representantes regionales con el soberano ó sus ministros, para tratar de los asuntos del mandato representativo, presencia del rey en la asamblea, discusión de la petición y observaciones á ella, réplicas y dúPLICAS, etc.

3. En el supuesto de un estado de regular desarrollo de la autarquía nacional, las peticiones de los representantes regionales en la corte del soberano habrían de versar sobre materias propias de la acción gubernativa de éste, ora esencial, ora circunstancial y extraordinaria, es decir, acerca del ejercicio de funciones naturales ó tutelares de la soberanía, ó bien sobre deslinde de la jurisdicción respectiva de ella y de la autarquía social, ó sobre ambas cosas á la vez, tratadas y resueltas con la distinción debida, ó bien en conjunto, y englobada la cuestión de competencia en la de fondo.

Es claro que la petición de una ó más regiones, hecha por el conducto de sus representantes y en el seno de la asamblea nacional para el efecto de resolución y acción soberanas consistentes en ley, ó medida ejecutiva ó judicial, según los casos, es de la mayor amplitud, complejidad y trascendencia, por las que suponen y encierran la relación y trabazón de los intereses regionales, cuyo conjunto armónico constituye el supremo interés nacional. Y esta es una de las razones del organismo representativo regional comun y de su periódico funcionamiento: el que toda la nación asista á la petición de una ó varias de sus partes, para que las demás expon-

gan y el soberano resuelva con conocimiento de lo que alegan y reclaman todas. Solo así puede éste decretar con la bastante ilustración y con la oportunidad precisa.

De lo cual se deduce que estas peticiones, de más ó menos número de representantes regionales en el parlamento ó córtés de la nación, implican la misma variedad de funciones y operaciones que en las asambleas ó cámaras modernas, con la diferencia de que los diputados ó procuradores discuten y resuelven, es decir, deliberan, en el límite de los poderes delegados de la autarquía nacional, cuyos organos supremos son las regiones, y lo hacen para el efecto de ponerse de acuerdo en la petición, cuando ésta no ha sido común desde el principio, y el soberano acuerda en uso de una plena soberanía que no procede de la nación ni comparte con ella el soberano.

Otra diferencia bien marcada es que las córtés, además de órgano de petición, lo son de consulta, porque el soberano aprovecha la reunión de ellas, no solo para oír sus peticiones, sino para pedirles informe sobre hechos y necesidades sociales y parecer acerca de medidas que piensa tomar, y que á la representación regional nacional propone para que le ilustren acerca de la justicia y oportunidad, así como respecto á la materia y á la parte técnico jurídica de la ley, del acto ejecutivo ó de la judicial providencia.

De lo cual se deduce que no hay aquí cuestión posible acerca de si el rey y las córtés han de compartir la iniciativa de las leyes, controversia accidental y propia del nuevo sistema, como ya en otro lugar se ha

manifestado, y despréndese igualmente que también puede adoptarse como expresiva de las relaciones entre la soberanía y la autarquía representada la fórmula de *el rey con las cortes hace las leyes*, porque, en efecto, cooperan, sin que pueda decirse cual más, si el monarca ó la asamblea. Lo que hay es que no comparten en esto ni en las medidas de gobierno en que se muestran conformes, una potestad igual, sino que colaboran en sus respectivas esferas de desigual categoría, las regiones nacionales en su dominio autárquico, el rey en su esfera soberana. Por esto, el rey sanciona en el antiguo régimen como en el régimen doctrinario; pero la sanción no es en aquél la mitad de la facultad legislativa, sino toda ella; y á su vez, las cortes, no decretan soberanamente, sino que deliberan acerca de la petición que por mayoría han de elevar, ó de el parecer que han de formular, también á pluralidad de votos de los representantes regionales, que meramente acuerdan cual es la petición ó el informe nacional, por ser el de la mayoría de las regiones.

En uso de su soberanía, puede el rey atender á la mayoría ó á la minoría, que no solo mediante el *veto* aplazar la resolución común; pero, de hecho, si el progreso cristiano hubiera elevado autarquía y soberanía á un grado lo más perfecto posible de justicia, discreción, prudencia y tolerancia, bajo esa feliz armonía social, maduro fruto de la civilización verdadera, el acuerdo entre ambos poderes, el autárquico y el soberano, entre rey y representación nacional sería el estado normal y corriente, interrumpido muy rara vez, y con facilidad y con sincera reconciliación reanudado. De esto

resultaría dichosa realidad lo que en el moderno parlamentarismo es ficción y sarcasmo, la cosoberanía de las cortes y el rey.

4. Hasta ahora no hemos visto que la representación de la autarquía nacional por el conducto y órgano inmediato de las regiones exija más de una cámara, compuesta de los diputados, ó procuradores de esas sociedades directamente constitutivas de la nación; y, por lo tanto, no se justifica bastante el nombre de cortes en cuanto signifique una asamblea, un parlamento, compuesto de más de una rama, estamento ó brazo. Y ahora se pregunta ¿reclama la aristocracia ó nobleza, cuando menos la de más elevado rango y poder, una representación distinta de la orgánica y total de la nación, de la cual el orden aristocrático forma parte como porción y cabeza del pueblo?

Los motivos de duda son que, antes del derecho nuevo, es un hecho general y constante el que la nobleza haya tenido un estamento propio, si es que no dos como en Aragón; y que, aun después del advenimiento de la moderna política, y á pesar de su incompatibilidad con el antiguo régimen, subsiste una segunda cámara, de privilegio ó beneficio de clase, ó, cuando menos, de estado, junto á la cámara representativa popular y de derecho común, lo cual hace creer que es esto de tal manera conforme á la naturaleza y á las exigencias de buen gobierno, que la realidad ha impuesto tal agregación doctrinaria al error esencial del sistema.

Mas, por otra parte, tampoco se explica que la nobleza, que al fin no está fuera del pueblo, sino dentro

de él, como orden popular bien que preeminente, no se haya armonizado con los otros elementos constitutivos de la sociedad civil en el seno de los varios organismos públicos infraregionales, concertando en ellos sus intereses y representación, de modo que, conciliados ya en la comunidad regional, no haya necesidad, posibilidad, ni título de un estamento representativo aristocrático, que tiene más bien traza de pasajera institución feudal, incompatible con los principios racionales de igualdad rectamente entendida.

Para resolver la cuestión, recuérdese que los oficios de la aristocracia ó nobleza (Cap. XII del libro segundo del primer tomo) son el patronato social y el público gobierno, y que tal es la elevada patriótica y humana *industria* en que emplean su actividad los aristócratas. Ahora bien, para una y otra función, nada más propio y adecuado que la existencia de una cámara alta ó estamento nobiliario, que cerca de la soberanía y ante ella, desempeñe los mismos oficios que la representación nacional, y con idénticas atribuciones, esto es, pida é informe para que el soberano resuelva. Esta cámara no se funda ni en la supuesta necesidad y conveniencia de la doble discusión, ni en el sistema constitucionalista de la balanza y equilibrio de las mecánicas moderaciones, ni en la representación gremial, sino en la utilidad, por no decir precisión absoluta, de un cuerpo, á la vez representativo y consultivo, que por la esmerada educación moral é intelectual de sus miembros, y por las prendas y virtudes sociales que tal formación hace presumir razonablemente, ofrezca garantías de un espíritu de justicia, de un patriotismo, de

unas dotes de gobierno, superiores á las de la misma representación regional. Los diputados de las regiones, por mucho que sepan, y rectos y discretos que se les suponga, no pueden prescindir, ó es más difícil que prescindan, de cierto particularismo de región, que solo en avanzada etapa de progreso y cultura sociales se sacrifica gustosa y habitualmente en las aras del supremo interés nacional. Las aristocracias, en cambio, por la cuidadosa pedagogía con que la familia y la clase cultivan las facultades de los individuos, y, por la consiguiente alteza de miras que en ellos suscitan, se elevan más fácilmente al sentimiento é idea de la patria común y á un sentido más generoso y armónico de todos los derechos y libertades, sin distinción de estado, clase y localidad, aun la de la región que fué Estado independiente algún día.

Y no solo para defender estos legítimos fueros, oponiendo á los desafueros posibles del poder soberano moderación tan sólida y fuerte como lo es la de la aristocracia, de poder proporcionado á su posición, recursos, prestigio é historia, sirve la cámara alta, sino para no dejar desamparado y desguarnecido al rey en frente de una representación regional, que si unas veces puede pecar de supeditada complaciente y aun sierva, también es fácil que otras se muestre altiva, exigente, levantisca y hasta revolucionaria. Poder central intermedio, órgano superior neutral y común, más que de las autarquías regionales, de la indistinta y más orgánica y ya armonizada autarquía nacional, lo mismo es útil para contener al trono que para contrarrestar á la cámara baja, dándole con el ejemplo constantes leccio-

nes y estímulos de moderación y templanza, y poniéndose de hecho al lado de aquél ó de ésta, cuando sea preciso este último y doloroso medio.

Para este efecto, esa asamblea debe ser regularmente numerosa, de modo que no se convierta en patrimonio privilegiado de unas cuantas familias, con más trazas de cuerpo oligárquico que de estamento nacional, pero no tan amplia que, penetrando en ella toda la nobleza, aun la intermedia y hasta la inferior, se convierta de hecho en una cámara democrática por el número y calidad de sus miembros é incapaz del difícil y honroso oficio á que se la destina. Lo natural es que se constituya por el mismo medio con que se perpetúa la aristocracia, por sucesión é investidura aneja al mayorazgo, aunque no repugna que de la nobleza inferior, por prudente arbitrio real, pueda utilizarse las cualidades y servicios de los nobles más distinguidos en este secundario orden aristocrático.

Mientras el estamento regional nacional es representativo en la doble acepción del oficio que desempeñan los diputados regionales, y del mandato ó encargo que para ello reciben de la comunidad cuyas veces hacen, el otro estamento, solo lo es en el primer sentido, esto es, en cuanto los concurrentes, alegan y reclaman, y no para interes de clase sino para el procomún, mas no porque sean mandatarios de una clase, que al efecto los elija. Esto puede suceder, y de hecho ha sucedido, y en el mismo parlamento inglés acontece, pero lo racional es que los nobles concurren por personal derecho, por título hereditario y algunos por convocación y nombramiento reales.

Acerca del estamento eclesiástico se hacen en la parte de ampliación las sucintas observaciones oportunas.

5. De lo expuesto en este y aun en el anterior capítulo, y de toda la doctrina que en este mismo libro concierne á la representación según los modernos sistemas, y al gobierno representativo liberal, dedúcese que el gobierno representativo no es para nosotros una forma histórica exclusivamente, ni el término de una clasificación y división especulativas, sino una propiedad y nota de todo gobierno regularmente constituido y ordenado á sus fines; ó, lo que es igual, que también estimamos la representación como *estado de derecho*, aunque en muy distinto sentido que Mohl y Bluntschli. En tal respecto, el gobierno, por exigencia de derecho racional, debe ser representativo en cuanto *para la armonía de la acción de la sociedad civil verificada por los varios órganos sociales, desde el individuo al poder soberano inclusive, debe la autarquía nacional, contar con un organismo permanente y organizado de alegación y petición al soberano y de cooperación gubernativa con él, por medio de las cortes, compuestas de dos estamentos ó cámaras, el regional y el aristocrático.*

El derecho á ser sujeto de representación, por mandato ó por propio personal título, constituye uno de los oficios inherentes á la *ciudadanía*, y que distinguen á ésta de la mera *nacionalidad*, sin que sea cosa tan llana y fácil señalar los límites entre ambos estados, de los cuales solo se disciernen bien las condiciones extremas del solo goce de los derechos civiles corres-

pondientes y debidos á todos los miembros de la sociedad civil según su estado (nacionalidad) y la plenitud de los derechos políticos, no solo el de desempeño de los cargos públicos de esta índole, sino el de ser órgano representativo, cuando menos, de las regiones en la asamblea nacional de los diputados de todas ellas. Así es que totalmente ciudadano solo será el que tiene capacidad senatorial, y, por bajo de este grado máximo, los que participan de funciones públicas gubernativas desde la de miembro de la alta cámara, hasta de la asamblea concejil.

6. Así como la función representativa y su correspondiente organismo, compuesto de dos cámaras (córtes) son el medio y el instrumento más adecuados de mantener y perfeccionar la armonía entre las dos esferas de gobierno nacional, la autárquica y la soberana, así también, en caso de ruptura grave y permanente de ese dichoso acuerdo, y cuando por obstinada, extrema y crónica injusticia y tiranía del soberano, no queda recurso, ni aun esperanza de restablecer la concordia, trayendo al imperante á vías de equidad y moderación, son los estamentos, sobre todo, si están conformes, no sólo el arma de resistencia pasiva ó activa, sino el criterio y autoridad que disciernen si ha llegado cualquiera de éstos desdichados extremos, los jefes, conductores y organizadores de la resistencia, y los que, al mantenerla dentro de los prudentes límites estrictamente precisos, impiden que, por incongruencia ó exceso, se haga injusta la oposición, justa por sus fines y por el título consiguiente de razón y necesidad. De la misma mane-

ra que hasta la guerra internacional ha de hacerse lo más justamente posible, con mayor motivo ha de ser también reglamentada y ordenada la resistencia al Poder para que produzca el menor número de males.

Se discurre aquí en el supuesto de la doctrina comúnmente aceptada y expuesta por los autores católicos acerca de la resistencia tanto activa como pasiva al Poder, grave y habitualmente tiránico, doctrina que no es otra cosa que la aplicación á la sociedad civil, de los principios generales del derecho natural respecto de la obediencia que se debe á los preceptos de la autoridad y del derecho de legítima defensa.

La persona moral, como la física, y, por identidad de razones y títulos, la sociedad civil tienen el derecho de oponerse á la tiranía, ora con la resistencia que se llama pasiva, ó sea, con la mera desobediencia lícita y, en ciertos casos obligatoria, al precepto injusto, ora con la coacción y fuerza al servicio de legítima defensa, que es lo que constituye la resistencia activa. Una y otra son legítimas en sí mismas, dependiendo la justicia de su empleo por la nación, como por cualesquiera otras personas, de que sean necesarias, estrictamente proporcionadas al fin, esto es, no excesivas, de que no produzcan mayores males que el que se trata de evitar, y, por lo tanto, de que no se emplee la defensa coactiva cuando basta la denegación de obediencia no debida, ó acaso ilícita en ciertos casos: en suma, que la prudencia y la templanza presidan, como en todo, al uso y ejercicio de la justicia.

En esto, al Derecho político solo le incumbe hacer notar que, si cualquiera individuo, en cuanto llega al

uso de la razón, tiene el derecho y aun en ciertos casos el deber de no prestar obediencia al mandato injusto, y el de rechazar con la fuerza y *cum moderamine inculpate tutelae* acto injustamente lesivo de la persona y sus derechos, con más motivo compete esto á las sociedades, y sobre todo, á la sociedad civil, que tiene á su cargo el bien de muchas personas individuales y colectivas. Cuando la autoridad es tirana, cambia de naturaleza, y de autoridad se convierte en mera fuerza física al servicio de la injusticia; y así, al resistirla, no se altera una relación de superioridad é inferioridad que no los súbditos, sino el tirano ha subvertido.

Estos derechos innegables no solo competen á la sociedad civil como tal, y ejercitándolos como cuerpo orgánico en nombre de todos ó de la mayoría de sus miembros, sino que también pueden ponerlos en acción una minoría ó grupo de ciudadanos, asociados ocasionalmente por y para ese interés tan legítimo. Pero conviene, para asegurar el éxito y proceder de la manera más ordenada, prudente y eficaz, que no solo sean individuos aislados ó fracciones sociales quienes así resistan, sino la nación misma, orgánicamente constituida, y cada miembro y parte de ella en su sitio y esfera propios, en enlace y lugar jerárquicos, y las diversas autoridades en sus respectivas posiciones, y armonizados todos los intereses y fuerzas en el seno de la representación nacional. Son entonces las cortes la autoridad suprema, en cuanto el tirano perdió sus títulos por la continuación habitual de una injusticia conculcadora de sagrados derechos, entre los cuales ocupan el primer término los de Dios y su Iglesia; y así la acción contra el

Poder, reducido por su iniquidad á mera potencia física, no es rebelión ni perturbación revolucionaria. En tal situación, la autoridad y, con ella, sus atribuciones directivas y coactivas se trasladan á las córtés, convertidas, por accidente, en soberanas; y de este modo no es fácil que la resistencia cese por flojedad, flaqueza, conveniencia ó servilismo, ni que, á la sombra de estado tan anómalo, se añada á la calamidad de la opresión la plaga de la anarquía.

Más aún: lo probable es que un poder autárquico, tan enérgico y celoso como circunspecto y razonablemente sufrido, use de la representación con tal firmeza y prudencia que evite que los conflictos estallen, ó lo- gre, cuando menos, que no sobrevenga la ruptura por pocas que sean la reflexión y templanza con que el soberano se conduzca.



1. Hasta ahora, y por necesidad de análisis crítico de doctrinas distintas y opuestas, hemos considerado la representación en una de sus acepciones particulares y derivadas, la de soberanía ejercida por córtés, en nombre y por elección de una colectividad soberana, que no puede menos de encomendar este su derecho á diputados que al efecto designa, y tal es el carácter del moderno gobierno repre-

sentativo. Ahora, ofrécese la representación por una fase distinta más conexa con el sentido general y común, con la acepción gramatical del término que es la de *expresión ó manifestación de una cosa por medio de otra que la da á conocer*. En tal sentido, lo mismo puede aplicarse la representación á la petición que hace una persona para sí ó para un tercero, individuo ó colectividad, que cuando se denota ó significa algo sin el propósito explícito y directo de solicitud ó reclamación. En locuciones corrientes se comprueba la exactitud de esta acepción, vulgar y técnica á la vez, por ejemplo; *la prensa, representante de la opinión; este periódico representa* (es el órgano ó eco) *de la clase obrera, de la clase aristocrática; la Universidad, el Concejo representaron al rey, pidiendo, solicitando, etc.*

2. Pero, aunque toda petición es representación, este nombre y carácter debe restringirse para aplicarlo á la petición social de las comunidades más perfectas, tanto por la mayor importancia que tienen, cuanto porque la petición que elevan á una autoridad superior se refiere al interés común y armónico de mayor número de personas; y así, por antonomasia es representativa la petición que las regiones de que se compone inmediatamente la nación, dirigen á la autoridad soberana. La petición regional ha recogido y conciliado la opinión y las aspiraciones de la sociedad civil, no mera suma de individuos, sino social organismo que, por el conducto y ministerio de otras sociedades inferiores, ha unificado en la asamblea de cada región la variedad de las representaciones de las respectivas personas físicas y morales (individuos, familias, gremios, concejos, provincias.) Después, no pudiendo todas y cada una de las regiones presentarse en las córtes, ni debiendo hacerlo tampoco las asambleas regionales correspondientes, asistiendo en masa todos los representantes de las provincias que forman la diputación regional, cada una de éstas, por verdadero y estricto mandato, más ó menos

puntualizado, encomienda ora á algunos representantes regionales, ora á otras personas, las peticiones que han de formular y las instrucciones relativas á la cooperación que en el gobierno van á prestar al poder soberano. En este concepto es también, con más motivo, representativa la petición de las regiones; porque no la formulan ellas mismas, sino sus mandatarios, (diputados, procuradores, etc.)

La asamblea ó cortes nacionales no deben estar constituidas por la totalidad de las asambleas regionales, ó sea por la representación de las provincias en cada región; no precisamente, porque así sería excesivo el número de la asamblea nacional, sino porque se rompería la gradación y orden jerárquico de la representación pública que, según principios racionales, ha de ser de concejo á provincia, de provincia á región y de región á Estado nacional, puesto que tal sucesión y enlace exigen la misma composición orgánica de la sociedad civil y la subordinación categórica de sus elementos constitutivos. La composición de las cortes nacionales con la suma de las asambleas regionales, es decir, con todos los diputados de las provincias de las regiones, establecería en realidad la representación provincial directa, haciendo inútil la de las provincias en la región y la misma existencia de este superior organismo de armonía social y consiguientemente de interés y petición públicos.

Y si la cámara nacional no puede componerse directamente de la representación de las provincias, mucho menos, y con doble motivo, de la representación de los concejos ó ayuntamientos, y menos aún de los gremios, como suele sostenerse aún por autores tradicionalistas, que suponen restaurar así la tradicional representación orgánica. Si en la Edad media la representación popular común, que se presentó entonces en forma embrionaria de representación del estado llano, fué de los concejos, la causa era que no había otras sociedades completas públicas superiores, bien señaladas y constituidas, y que sobre las regiones

no existía más principio de unidad nacional que la persona del común soberano (1).

En cuanto á las corporaciones gremiales, desde luego se comprende que, en el supuesto de la doctrina que nos parece innegable de la representación orgánica, armónica y jerárquica en que se reflejan estos mismos caracteres de la sociedad civil, no puede ser el gremio el órgano directo de representación nacional ante el soberano, por la sencilla razón de no ser la corporación de los oficios, por amplia que se la conciba y por comprensión social que de hecho haya alcanzado, la colectividad infrasoberana de superior categoría; lejos de comprender dentro de sí á la provincia y aun al pueblo, es una sociedad incompleta que forma parte del organismo popular ó concejil. En tal concepto, combinado el gremio con la familia en la parroquia, en los términos y proporción que, no al Derecho político sino al municipal corresponde estudiar, es un elemento de representación familiar corporativa en y para el concejo, pero ya ni siquiera en la asamblea provincial, cuanto más en las otras superiores. Los estamentos populares se componían de los representantes de los pueblos, sin que en las córtes ya se distinguieran como en el concejo, los oficios é industrias del estado llano (2).

(1) Si cuando los reyes, por necesidades económicas y políticas, llamaron á la corte á los representantes de los pueblos, (comunes, concejos, universidades) hubieran encontrado una comunidad pública más comprensiva que ellos, y que los enlazara en un organismo superior y en un interés solidario, á ella hubieran acudido, y la representación política naciera provincial ó regional en vez de concejil. Pero si el gobierno representativo medioeval, con los caracteres que hemos señalado, y en los que, como en todas las instituciones, se notaba el gérmen y principio de su progresivo desarrollo, no se paralizara y desviara de su cauce racional é histórico, en regional concluyera la representación pública, que bajo y dentro de sí subordinara y conciliara las otras representaciones.

(2) En Castilla ni á eso llegó siquiera el gremio, institución que alcanzó, como no podía menos, benéfico influjo y considerable poder social, pero más bien en la esfera económica que en la representación pública; y la cau-

Sin duda alguna, los autores partidarios de la representación orgánica, y que procuran restaurarla, en cuanto es posible, enfrente y contra la representación individual, juzgan más fácil, acaso lo único hacedero en la actual hipótesis, la reconstitución gremial, considerando que mejor se rehace una sociedad incompleta, donde son tan fuertes el estímulo y el vínculo del interés industrial, que una comunidad más comprensiva y perfecta como la provincia ó la región; mas tan imposible, y acaso más, nos parece habilitar é improvisar el gremio que esas otras sociedades, aún más naturales y necesarias que él. Si fuera ahora posible, que no lo es, y útil, que no lo creo, reanudar la tradición representativa, más llano era asentarla, como antes, sobre la base de la comunidad pública que no se ha disuelto totalmente, y que, á semejanza de la familia, y por inmediatamente próxima á ella, tiene mayor defensa y arraigo en la naturaleza, el pueblo. Para que el gremio recobrara el espíritu de solidaridad y la consistencia orgánica bastantes á ser elemento y vehículo de representación, sería preciso que volviera la sociedad á condiciones parecidas á aquellas en que el cristianismo fué creando poco á poco poderosos medios de social cohesión, hace mucho tiempo disueltos por el individualismo naturalista. Al gremio, como á todas las sociedades que no sean la familia, de la que tampoco se conserva más que el vínculo del parentesco inmediato en la línea recta, le faltan las dos condiciones esenciales de vida: alma y contextura orgánica. Creo que

sa repetidas veces la hemos señalado, es á saber, el carácter inorgánico é igualitarista de la democracia castellana, donde más se dejó sentir la acción del romanismo y, por consiguiente, el factor de aquella plebe disuelta y nivelada por el rasero del despotismo imperial. El pueblo castellano, en cuanto es posible la comparación entre épocas y épocas, y sobre todo entre la civilización cristiana y la cultura gentílica, es el que más se parece al pueblo de aquella edad en que el cesarismo no había dejado bajo de sí más que la masa incoherente.

llegará el fin de los tiempos sin que el gremio y otras muchas instituciones revivan.

De la doctrina expuesta acerca de la representación regional se desprenden dos consecuencias que parecerán extrañas. Es la primera que, por mucho que se amplíe el reconocimiento de la personalidad regional á circunscripciones geográficas que no tengan muy acentuada la personalidad étnica, por ejemplo, en España, á Galicia, Extremadura, las Andalucías, la asamblea nacional popular ó de derecho común había de ser poco numerosa, acaso menos que cuando unas cuantas ciudades y villas gozaban del privilegio representativo (1). La segunda consecuencia, aun más importante, es que, si bien todas las regiones deben tener una asamblea regional, órgano é instrumento de la mayor autarquía que consientan las circunstancias, y formada por los representantes de las provincias respectivas con arreglo á los usos y leyes regionales, el derecho nacional exige, y los progresos del derecho histórico hubieran al fin engendrado, una sola asamblea nacional, condición indispensable de la superior unidad de la sociedad civil, sobre y en medio de la mayor autonomía federativa. Así es que, solo en hipótesis, por recta prudencia y cauta circunspección de gobierno, son tolerables la variedad de organismos representativos distintos é independientes de las regiones-estados, ventilando los asuntos propios con el soberano común, sin

(1) Acostumbrados á estas numerosas asambleas modernas, producto de la representación individualista y atómica de la masa, acaso no se expliquen ni justifiquen algunos una asamblea compuesta de reducido número de personas, el cual más se acomoda, por lo mismo, á las sosegadas discusiones y á la ardua labor gubernativa de las cortes con el rey. Cuanto más numerosos los cuerpos colegisladores, más imperfectos, por constituidos por gente mediocre, sobrante y estorbosa, y más tentados á las vanas exhibiciones y al rutilante efectismo de la palabrería parlamentaria. Lo cual no quiere decir que, aunque cada región no deba tener más de un voto, no puedan éstas encomendar la representación á varias personas peritas y á cuantos asesores juzguen necesarios para ilustrar el debate en cortes.

comunidad de discusión y acuerdo con las demás regiones nacionales. Solo un foralismo irreflexivo, apasionado y estrecho, de noción y afecto muy dudosos de patria nacional, puede pretender la perdurabilidad de transitorios estados históricos, esto es, Cortes de Castilla, de Aragón, de Cataluña, Galicia, etc.

Las Cortes antiguas (1) hubieran llegado con el tiempo á una estructura exterior y á un modo de funcionar muy parecidos á los de las modernas cortes, bien que sin conexión alguna esencial é interna con ellas, é inmunes por lo tanto del connatural vicio parlamentarista de las actuales asambleas. Solo el procedimiento electoral hubiera variado por respeto á un asunto que es de autarquía regional, aunque el tiempo y el progreso hicieran cada vez más semejantes, nunca idénticas, las respectivas leyes electorales. La perioricidad de las asambleas dependería primero del arbitrio del monarca que, por su propio interés bien entendido, en consonancia con el de la nación, convocaría á cortes siempre que lo reclamaran asuntos urgentes, como aconteció en Castilla, aun después de Villalar, durante los reinados de Carlos V y de Felipe II; pero, al fin, la determina-

(1) La asamblea, (término genérico), que en Inglaterra se denominó Parlamento, se designó aquí con el de Cortes, que no eran solo la representación de los concejos de ciudades y villas, sino también de los otros estamentos, el eclesiástico y el nobiliario, que en Aragón se componía de dos brazos. La derivación de la palabra es latina, de *cohors*, séquito ó concurso de aulicos y servidores del rey. Porque éste llamaba á él y al lugar de la residencia real á eclesiásticos y nobles, á procuradores de concejos ó universidades, llamáronse cortes estas reuniones, y hoy se conserva esta denominación para designar el parlamento moderno compuesto de Senado y Congreso que solo el nombre de Cortes tienen de común con las antiguas. Congreso es también un término común, equivalente al de reunión ó junta, y lo mismo puede aplicarse á una de las cámaras que á las dos, como en los Estados Unidos. El nombre más propio y castizo de la asamblea formada por los representantes de las regiones me parece el de estamento regional. Camaras equivale á cortes, bien que expresando no séquito, sino pieza ó sala principal donde el rey recibe.

ción de la convocatoria y del tiempo de legislatura serían uno de los puntos de legislación fundamental federativa, como por ejemplo, en Inglaterra y en Aragón.

Aunque lo natural es que las cortes apoyen y discutan ante el rey las peticiones regionales, y también deliberen acerca de las proposiciones de la corona en presencia del monarca, formando éste y las cámaras una persona moral, el doble organismo autárquico-soberano, (1) el respeto al rey y la mayor libertad de la deliberación habrían, por costumbre, como ha sucedido en Inglaterra, alejado al jefe del Estado de los debates parlamentarios, interviniendo en ellos por medio de un delegado, mas aun que para presidir la asamblea, para informar, hacer observaciones, en una palabra, discutir con el criterio y las instrucciones recibidas del trono. Y lo natural es que esto lo hicieran al fin los secretarios del despacho, ó sean, los ministros, sin necesitar, al efecto, ni ser diputados regionales, ni tener á disposición del ministerio una mayoría fija, compacta y disciplinada, bastándole la que en cada caso exprese el acuerdo entre el rey y las cortes, y hasta pudiendo prescindir de ella, como quiera que son los secretarios del despacho los delegados de un poder soberano efectivo, aunque ellos y el monarca procuren la aquiescencia de las cámaras y, la mayor parte de las veces, la obtengan.

3. En virtud de su soberanía, tiene el rey en su esfera de gobierno la plenitud de poder legislativo, ejecutivo y judicial que cada persona en la de su correspondiente autarquía; y, por lo tanto, en el terreno del derecho racional no puede trazarse *a priori* cual es la materia en que el rey ha de gobernar con el concurso, aunque no sea con el acuerdo, de las cortes, y cual otro el círculo en que no ha menes-

(1) En Inglaterra formaban el Parlamento el Rey y las dos Cámaras, y así continúa en la exterioridad legal; como todavía se dice en nuestro sistema parlamentario *las Cortes con el Rey*.

ter la intervención ni el conocimiento de ellas, estén ó no reunidas. Tampoco es fácil que la legislación constitucional señale de antemano tal línea divisoria, que tampoco marcan los códigos políticos modernos, ni las mismas leyes orgánicas, de un modo concreto y suficiente (1).

Pero, reuniéndose las cortes periódicamente y durante un tiempo predeterminado por el uso ó por la ley, raro será el asunto de importancia en que los representantes regionales no tengan participación, si es que no toman la iniciativa por medio de la petición, ó en que el rey no les consulte é informe sobre las medidas de gobierno que piensa adoptar. Así, tanto ó más que por ministerio de la ley, por uso todavía no traducido legislativamente y por tradicional acuerdo y armonía entre el poder soberano y el autárquico, pocos asuntos de importancia habría en materia de legislación, *administración* y aun *jurisdicción* reales en que de hecho no intervinieran las cortes á poco adelantado que estuviese el gobierno representativo, sustituyendo esta concordia á garantías y precauciones legales poco eficaces y punto menos que imposibles. Un verdadero gobierno de las cortes con el rey hubiera ocupado el lugar de estos convencionalismos y ficciones parlamentaristas, si en flor no hubiera muerto en todas partes el gobierno representativo (2).

(1) Aunque la regla general y sin excepción en las constituciones doctrinarias es que el rey comparte con la *representación nacional* la potestad legislativa, corresponde á aquél, en virtud de su *poder ejecutivo*, una potestad llamada reglamentaria que le traslada, (de hecho y, generalmente, á los ministros), un poder legislativo sin límites posibles, y á título del cual da el monarca verdaderas leyes con el nombre, aparato y máscara de *preceptos administrativos*, de tal modo que país hay en que la potestad legislativa de las cortes queda reducida á lo que quiera consentirle la oligarquía ministerial. (Vid. *Guía para el estudio del Derecho administrativo*, páginas 30 y 31).

(2) Tampoco repugna que, dada una ley con el acuerdo de las cortes, éstas pidan y el rey acuerde que en lo sucesivo no se derogará ni modificará sin el concurso de ellas, distinguiéndose así los actos legislativos de las cortes con el rey, (ordenamientos), de los que el rey verifica solo y en virtud

Así en Aragón como en Castilla, las Cortes, bien que con distinto poder é influjo, intervinieron en todos los asuntos de gobierno, y tan directamente en la legislación como en la función ejecutiva, á diferencia de lo que sucede en el sis-

de su soberanía. En este sentido representaron repetidamente los procuradores desde las cortes de Briviese de 1387, siendo por lo general favorables las respuestas y promesas de los reyes; pero es en las de Madrid de 1592, donde más expresiva encuentro la distinción entre la soberanía real y la autarquía nacional, bien que no con estos términos, puesto que dicen los procuradores que, aunque hacer leyes y estatutos es de la suprema potestad del príncipe, á cuyo cargo está el gobierno de los súbditos, siempre los reyes, para acertar en esto, han procurado tomar parecer de sus reinos *porque á lo menos por este camino se habrá hecho la diligencia necesaria para que más se acierte.*

Si bien se considera, toda la teoría de este capítulo, formulada según la exigencia racional de los principios, está conforme, en cuanto es posible, con la traza general y con las bases fundamentales del incipiente gobierno representativo castellano, que tradujo en la realidad los elementos esenciales, bien que embrionarios, de la representación política. En Castilla, la monarquía, institución anterior á la nobleza como clase social y á los concejos en que se formó y condensó el orden de los populares, se va limitando y entra por las vías del gobierno moderado y templado á medida que esas clases adquieren poder social é importancia proporcionada á él, mediante la *feudalización* de que repetidamente se ha hablado en este libro. Llamados primero eclesiásticos y nobles á la corte, y luego los representantes de la nueva potencia nacional, los concejos, para lo mismo, es á saber, para que el rey los consulte y salga con su parecer y su firma más autorizado moral y materialmente el precepto soberano, aprovechan estos *consejeros* de ocasión la que se les ofrece de representar, (exponer y pedir), convirtiéndose la petición y la consulta, tanto por su valor intrínseco, como por la fuerza que la apoya ante el flaco poder central, en una participación efectiva en el gobierno. Solo faltó haberla regularizado y constituido, y, sobre todo, que hubiera arraigado en las costumbres populares y desarrolládose en proporción de la larga fecha de su origen, concertándose jerárquicamente nobles y plebeyos para que lo estuvieran también los respectivos estamentos; y así el gobierno representativo de Castilla hubiera llevado ventaja al de las demás naciones, por una más equilibrada proporción entre la monarquía y las otras fuerzas sociales, entre los principios románicos y el nuevo elemento de la feudalidad.

En Aragón, por el contrario, la nobleza es anterior á la monarquía, y de tal suerte la limita, al crearla por el primitivo pacto feudal, que el go-

tema parlamentario, en el cual la acción del parlamento en materias no legislativas es indirecta y ejercida en razón y por el medio de la armonía necesaria entre las cámaras y el ministerio al cual sostienen.

4. Por lo mismo que la nobleza, como parte integrante, como cabeza que es del pueblo, debe estar y vivir en él y con él, y entrar en la representación concejil en una proporción equitativa con las demás órdenes sociales, necesita de un estamento ó cámara, donde conserve y defienda la existencia contra el impulso y conato niveladores y absorbentes de las demás clases populares, amparándose en ese baluarte para perpetuar el mantenimiento, no de un privilegio de casta, sino de beneficios que redundan más en provecho del procomún que de las familias que los disfrutaban. Como el ayuntamiento es la única asamblea pública en que se distinguen las órdenes sociales, fundidos ya en armonía dentro de las otras dos representaciones superiores, la provincial y la regional, la función gubernativa y el patronato de la nobleza, es decir, sus altos oficios nacionales, serían imposibles sin la cámara alta, el único instrumento del benéfico poder nobiliario. Sin él, la acción de la

bierno nace allí en forma aristocrática y aun oligárquica, bajo la presidencia de una más bien honoraria que efectiva realeza. Así es que, cuando surge la representación de las universidades, de naturaleza harto menos democrática que los concejos castellanos, y más sometidas á la influencia de la aristocracia local, el nuevo estamento contribuye, como los anteriores, no á moderar la monarquía, sino á restringir desmesuradamente y hasta á anular su poder en daño de ella y de la plebe rústica, que vive en servidumbre vecina de la esclavitud. Los radicales defectos de la constitución aragonesa, en la cual, sobre la monarquía y la última capa del pueblo, se destaca una fuerte y orgánica aristocracia y una clase media más cercana y ligada á los nobles que á los populares, se tradujo en aquel parlamentarismo que tuvo al rey en continua supeditación y á la plebe en opresión perpetua, en aquella abusiva representación, cuya fórmula antimonárquica *lo sinyor rey, de voluntad de las Cortes, estatuesce y ordena*, parecía anuncio y remedo de la futura soberanía nacional.

nobleza no trascendería del concejo; y aun en él no sería tan potente y eficaz como es preciso, contenida y limitada por la representación de las otras dos clases. Es, por esto, el brazo aristocrático, la cámara que bien puede llamarse alta, la clave de esa jerarquía, sin la cual no hay posibilidad ni de gobierno moderado y representativo, ni de libertades públicas que pronto se pierden, abandonadas á la custodia y cultivo de los medianos y pequeños.

Como el poder personal, lo mismo en los individuos que en la colectividad concejil, fué la causa y el origen de la doble representación política, los nobles más poderosos, á título de esa posición y mayor estado correspondiente, ascendieron á representación en córtés, y por costumbre mantuvo la familia el honor y carga de ese derecho, que por primogenitura agnaticia debe perpetuarse en las familias principales, y no en toda la nobleza, sin que la alta cámara se desnaturalice, convirtiéndose de aristocrática en democrática, por el número, y en burguesa, por el espíritu. Al primitivo llamamiento del rey, y dependiente de su arbitrio, sustituyen luego el tiempo y el uso un derecho familiar perfecto de sucesión en forma de mayorazgo regular, bien que absolutamente masculino y *sálico*, y en el cual la vinculación de propiedad inmueble es condición insustituible por las razones expuestas en el Capítulo XII del Libro II.) Lo cual no obsta para dejar á la corona la facultad discrecional, el prudente arbitrio de llamar al senado, ó como este brazo se denomine, á personas pertenecientes á la nobleza inferior, no solo como distinción honorífica de algunos esclarecidos miembros, sino para honrar la clase, ofrecerle este medio de manifestación representativa, y para moderar y aun contrarrestar la demasiada potencia y pujanza de una nobleza, acaso altanera y absorbente. La naturaleza, servidora de la razón, ingirió de este modo en la representación pública el elemento aristocrático con el doble sistema que aún perdura en la Cámara de los Lores, y del cual es yuxtaposición forzosa, impuesta

por las circunstancias, el título de representación de clase de los lores escoceses é irlandeses (1).

Acerca del estamento eclesiástico, creo que no puede negarse que sea el clero un orden social, en el general y amplio sentido, respecto de las demás clases, es decir, de agrupación de personas que tienen el mismo estado y desempeñan idéntica función. Mas la misma naturaleza de ella, el sagrado caracter del sacerdocio y su posición jerárquica en una sociedad superior al Estado dan á los clérigos consideración más alta que la de mera ciudadanía y, por consiguiente, elevan al clero á condición más elevada que la de cualquiera de las clases de la sociedad civil, con cuyos oficios temporales no puede compararse la divina misión sacerdotal. El clero es, pues, clase de una sociedad distinta, independiente del Estado, el cual le es inferior en los conceptos y por las razones expuestos en el Cap. I, del libro II; pero, desempeñando su ministerio en y dentro de la nación, resultan en ella los sacerdotes, por la excelencia de las funciones sacerdotales, los primeros ciudadanos y el sacerdocio el orden preeminente en la misma sociedad temporal.

Para que establezca y mantenga la Iglesia con el Estado las relaciones que expusimos en el capítulo y libro citados, no ha menester que formen los arzobispos y obispos un estamento especial, órgano y medio de la armonía entre ambas sociedades y vínculo y conducto de la cordial y sincera inteligencia entre los respectivos poderes. Antes bien, parece que la institución del brazo eclesiástico equipara al sacerdocio con la aristocracia, mezcla directamen-

(1) La Constitución electiva de la alta cámara tiene en los modernos sistemas el fundamento que expusimos en otro capítulo de este libro cuarto. En un sistema de representación histórica solo puede explicarse por ser la investidura senatorial derecho de todos los nobles, sin distinción, y no convenir, ni aun ser materialmente posible, que concurra toda la nobleza á la cámara alta. En tal caso el cuerpo aristocrático elige quien le represente en ella.

te á la Iglesia en los asuntos temporales, confundiéndola con uno de tantos elementos de la sociedad civil, y compromete el prestigio, la posición, autoridad é influjo eclesiásticos en las vicisitudes y suerte de los negocios del orden natural, muy por bajo del supremo fin de la salud de las almas.

Mas, por otra parte, el divino ministerio de docencia y moralización encomendado á la Iglesia sobre individuos y sociedades y, por consiguiente, también sobre las naciones, no puede hallar medio y ocasión más oportunos y eficaces de ejercicio que la representación en cortes. En el cuerpo ó cuerpos consultivos solo puede influir sobre el monarca y sus ministros; pero en las cortes contribuye, con la autarquía y soberanía gobernantes, á ingerir en el gobierno un espíritu de justicia, un temperamento de prudencia, un generoso sentido de patriótico desinterés y de templanza, un aliento y estímulo de caritativa y fraternal concordia entre las clases, además del especial cuidado y celo de que no se altere, antes bien, se arraigue y fomenta la relación de perfecta armonía entre la Iglesia y el Estado.

Debe, pues, como superior espiritual aristocracia, que, además de la educación más esmerada para la virtud y aun para la santidad, cuenta con la correspondiente gracia de estado, formar parte de la alta cámara á título de senadores, por razón de la dignidad, ó llamados por la corona, un cierto número de arzobispos y de obispos, que no puede de terminarse *á priori*, y que en las constituciones históricas hubieran determinado el uso y luego la ley (1). La

(1) El brazo eclesiástico concurrió en Castilla á las Cortes en el doble concepto de restauración parcial de los Concilios toledanos, y del poder y título que al alto clero prestaban suposición y señorío feudales. El concilio de la época gótica había sufrido con el tiempo una transformación y diversificación naturales, en virtud de esa evolución que no puede encajar, ni encasillarse en clasificación y división lógicas. La anterior asamblea, que era primitiva y principalmente eclesiástica, esto es, lo que su nombre expresa, concilio, aunque á ella asistieran nobles y se ocupara en asuntos civiles,

alta cámara inglesa ha conservado todavía sus *lores espirituales*, y entre otras, también el Senado español admite como senadores por derecho propio al Patriarca de las Indias y á los Arzobispos, y por designación del rey ó elección de las Corporaciones, á los Obispos, (artículos 21 y 22 de la Constitución de 1876), bien que no por respeto á la tradición, ni en virtud de las razones expuestas, sino, según el espíritu del código y la intención de los que lo hicieron, como uno de tantos elementos conservadores, no de índole distinta de los que se reclutan en la burocracia civil.

empieza á convertirse en Cortes, esto es, en Asamblea más política que canónica, porque, si bien siguen concurriendo eclesiásticos, y tratándose negocios de este orden, es ya en sentido y proporción distintos y aun inversos. No asiste la nobleza como palatina y adlica, sino como social y feudal, y no á dar séquito al rey y lustre á la reunión, sino á desempeñar la función consultiva, á informar con todo el influjo y eficacia que prestan al consejo el rango y el poder del consejero, y á exponer y pedir, (representar), con todo el peso y apremio de una súplica apoyada en efectiva fuerza, poco disciplinada y sumisa. Trátanse, no en secundario, sino en preeminente lugar, las cosas concernientes á la república, y acerca de ellas confieren los obispos y abades, más que como padres, que, aprovechando la ocasión del concilio, extienden su celo y providencia al gobierno del Estado; como nobleza de investidura y forma feudal que discute lo más conveniente á la sociedad civil, de que también son miembros conspicuos. Tanto es así, que la Iglesia necesita ya atender á sus negocios en concilios puramente eclesiásticos y sin mezcla ni elemento alguno de asamblea política, mientras que, por último, en la segunda mitad, ó á los fines del siglo XII, la representación concejil penetra en las Cortes y las imprime el carácter que han de mantener en lo sucesivo. Vana controversia la de si son las Cortes continuación de los Concilios toledanos: tanto éstas como los concilios nacionales, compuestos ya solo de prelados, pueden considerarse sucesores de aquellas juntas venerandas, porque en unas y en otros hay factores constitutivos de los Concilios de Toledo, y porque, para tener con ellos la conexión histórica que se trata de indagar, no es preciso ni posible que la institución precedente permanezca inmutable é idéntica; antes más natural es que, transformándose, se diversifique, y más razonable parece la afirmación de que en el Concilio gótico, que renace con la reconquista, están el principio y el germen de ambas clases de juntas, las eclesiásticas y las civiles.

5. Si la representación es atributo esencial y nota común de todo gobierno, será también independiente de la circunstancia accidental de esta ó de la otra forma de soberanía, debiendo ser representativas así la monarquía como la república. Por la generalidad, frecuencia y perfección del régimen monárquico, no por otra cosa, va á él, lo mismo en la política antigua que en la nueva, unido con traza de propiedad exclusiva y característica, el término expresivo de la representación. Se equivocan, pues, los que juzgan la moderna *monarquía representativa*, (no es, según se ha visto, lo uno ni lo otro), el estado único é insustituible de derecho.

La doctrina de este capítulo y las precedentes y conexas ofrecen un criterio seguro con que apreciar la naturaleza de ciertas asambleas y resolver las cuestiones acerca de su índole. Para que ciertas juntas se consideren córtes, basta con que, en unión del monarca y á su lado, se ocupen en los asuntos concernientes al gobierno de la nación, y expongan y discutan sobre ellos; para que puedan llamarse representativas es necesario algo más, es preciso que no solo informen acerca de las materias que se sometan á su dictamen y acuerdo, sino que tengan iniciativa y atribuciones para representar, esto es, manifestar y pedir invocando los intereses nacionales. Según esto, los concilios de Toledo, en cuanto asambleas mixtas que se ocupan en negocios civiles, cuyo conocimiento les somete el soberano, son córtes, y lo hubieran sido, aunque no concurriera la nobleza, como no dejaron de serlo aquellos á que no concurrió (1).

(1) El rey gótico tenía lo mismo que el emperador romano la plenitud de la potestad legislativa, como de derecho la tuvo después el rey de la restauración astúrica.

Luego que los godos, desde Leovigildo, se acabaron de romanizar y, en cuanto fué posible, de organizar el reino á la romana, la nobleza, aún no constituida en plena feudalidad, careció de poder bastante para oponer una limitación suficiente á la monarquía, en la cual renació en cierto modo el cesarismo de los emperadores. En virtud de su potestad absoluta, era el

Se deduce también de todo lo expuesto que, para que una asamblea sea representativa, no es preciso que el que alega y demanda, lo haga por expreso ó implícito mandato de otra persona; basta que lo haga por y para el procomún. En tal concepto eran representativos el brazo nobiliario y el eclesiástico, aunque concurrían sus miembros personalmente, y solo alguna vez algunos, por mandatario, y no dejan de llamar representativas á las modernas cámaras altas á pesar de los senadores por propio derecho, ó por nombramiento real. Representativa, en la plenitud é integridad del concepto y en toda la extensión de la palabra, solo fué la representación común del pueblo por el conducto de los concejos, como lo sería hoy por el de las regiones, por ser personas morales, cuya colectividad no puede concurrir en masa á la asamblea nacional, (estamento popular, cámara baja), y necesitar hacerlo mediante mandatario, (procurador, personero, diputado), con poderes tan limitados y circunstanciados como le plazca otorgarlos á la comunidad mandante.

El derecho á representar á las regiones en la asamblea nacional es tal vez la facultad y el carácter distintivo de la ciudadanía, porque si bien la plenitud de ella parece inherente al estado de primera aristocracia y á la prerogativa de pertenecer á la alta cámara ó estamento, y el grado ínfimo de ciudadanía, el derecho de formar parte del ayunta-

placet del rey godo la única fuente de legislación, como lo fué antes el *placet* del César romano, no teniendo la monarquía más moderaciones que las que la Iglesia levanta ante todos los poderes que reciben el benéfico influjo religioso. Los reyes consultaban á los padres reunidos en concilios, que, si no eran consejos, y sí *córtes*, fué porque no formaban un cuerpo continuo y fijo como el *Aula regia*. Pero consulta hecha por el que no sabe al sabio, por el humilde y bien intencionado á personas de la ciencia virtud, y prestigio de los Obispos, equivalía á trasladarles, á delegar en ellos la potestad legislativa, por esto, y por la reunión intermitente de los sínodos, se les considera con razón *córtes* y no un cuerpo consultivo, en la fase temporal y civil de aquéllas asambleas.

miento, puede y debe adoptarse, como término medio, la más alta dignidad pública asequible á cualquiera individuo, sin distinción de clase social (1).

En el primitivo derecho romano, nacionalidad y ciudadanía eran una misma cosa: solo era nacional el pater familias patricio, el que tenía la plena condición jurídica, por el goce de los tres estados de libertad, ciudad y familia; los demás, si eran miembros del Estado, no podían considerarse nacionales en el moderno sentido de la nacionalidad, la cual supone el reconocimiento y garantía de todos los derechos inherentes á la personalidad, según los define y sanciona la legislación de cada sociedad civil. Por eso no eran nacionales ni el esclavo, ni el primitivo plebeyo, ni la mujer, ni el hijo, y ésto, no por súbditos, sino por sometidos á unos poderes que no expresaban la respectiva autoridad racional: lo mismo la *potestad* del señor ó dueño que la del patrono, que la del marido y la del padre eran poderes de hecho, legales, pero injustos y más ó menos abusivos, según que lo consentía la naturaleza, por la mayor ó menor intimidad social y el afecto que implicaban estas relaciones. El movimiento emancipador que, en la esfera privada y en la pública, iba, según los correspondientes estados, asegurando á todas las personas los derechos debidos á la personalidad, con la diferencia que la realidad supone é impone en cada condición personal, es al propio tiempo el movimiento y la evolución que van distinguiendo y destacando bien los dos estados ó condiciones políticas, la mera nacionalidad y la nacionalidad ciudadana (2). La mujer y el

(1) Los otros empleos públicos, aun los más elevados, por ejemplo, ministro, embajador, consejero, etc., aun siendo como son derechos políticos, no implican más que el desempeño de una función determinada, mientras que la investidura de procurador regional supone la cooperación con el soberano al gobierno en el más amplio sentido.

(2) Decimos políticas, porque son estados jurídicos de relación con la sociedad civil más perfecta ó por antonomasia, la nación. Por razón contraria á los motivos del derecho quirritario volvió la revolución francesa á

hijo, á medida que el derecho natural y el influjo cristiano quebrantan los rigores del derecho queritario, y poco á poco convierten en razonable dirección autoritaria la potestad marital y paterna, se *nacionalizan* por decirlo así; careciendo antes de personalidad en la familia, no podían tampoco tenerla en el Estado. Por su parte, el plebeyo se hace también paulatinamente nacional y ciudadano: lo primero, cuando el paterfamilias y el marido conquistan en el orden privado las garantías del derecho queritario que ya no les es secreto y que pueden alegar por sí mismos sin la obligada representación del patricio patrono; lo segundo, cuando en el orden público político intervienen en el gobierno de la Ciudad-Estado, mediante el voto en los comicios, por centurias antes, y por tribus después, y logran acceso á los cargos públicos, á contar desde el tribunado al sacerdocio. Aún quedan, sin embargo, por mucho tiempo subsistentes en cuanto á la ciudadanía, no las diferencias de clases, borradas ya en el seno del municipio-nación, sino las de territorio por la distinción entre el primitivo y el ulterior de las agregaciones y conquistas romanas (el Lacio, la Italia, las provincias).

En la Edad media la manifestación y estado primeros de la ciudadanía, á la vez que de la nacionalidad, fué la vecindad en las municipalidades realengas, en los concejos, diremos hablando en términos del derecho de Castilla. El vecino, padre de familia, esto es, la persona sui juris en el orden privado, gozó en el realengo de todos los derechos de la personalidad, porque no eran incompatibles con ellos

confundir en teoría ambos estados, aunque no pudiese lograrlo en la práctica. Al tenor del art. 1.º de la *Declaración de los derechos del hombre* («los hombres nacen y permanecen libres é iguales en derechos»), también las mujeres eran no solo nacionales, sino ciudadanas, aunque sin los derechos propios de la ciudadanía. El falso igualitarismo trajo la situación que antes determinaron la injusticia y la fuerza, y á la realización de aquél tiende, como se ha visto, por lo que concierne á la mujer, el moderno feminismo.

las prestaciones personales y las limitaciones de su propiedad, los servicios y pechos que, en la persona del rey, debía y daba á la patria. En esto consistía la nacionalidad del hombre de concejo, y su ciudadanía en su capacidad para los cargos concejiles, en la jurisdicción que por el fuero delegaba el rey en el cuerpo, en la comunidad de vecinos, como en el señorío la había delegado expresa ó tácitamente en el noble, (inmunidad). El hombre concejil, en la plenitud de sus derechos privados y públicos municipales, era el *hombre bueno*, *prohombre*, (probus homo); y de tal ciudadanía concejera, manifestación primaria de la ciudadanía política, había de ascender por natural proceso, que no es oportuno puntualizar aquí, hasta el desempeño de los cargos centrales, ora en las Córtes como procurador del concejo, ora en los empleos ejecutivos y judiciales, como oficial del rey, al nivel de los nobles, y al fin con más influjo y poder que ellos.

6. La resistencia al Poder es una doctrina política que fluye de la doctrina de derecho natural concerniente á la obediencia legítima y á la obediencia indebida, que son los dos polos extremos en que gira la obligación de los miembros de cualquiera sociedad y súbditos de cualquiera autoridad, en lo tocante á los preceptos que ésta dicta é impone. Si á unos debe obediencia, hay otros á los que no es debida, y algunos que no se deben obedecer, (resistencia pasiva), naciendo de este derecho, inmediatamente fundado en un deber estricto, la facultad y aun la necesidad moral de defenderse con actos y medios positivos, de los ataques injustos suscitados por la legítima denegación de obediencia.

Ahora bien, si cualquiera precepto incompatible con el cumplimiento de superiores deberes, por ejemplo, los que se tienen con Dios y con su Iglesia, puede y debe resistirse pasiva y activamente, con más motivo y más esfuerzo y orden la injusticia y tiranía habituales y graves. Con la resistencia pasiva y activa no se combate entonces á la au-

toridad, sino el crónico, profundo y escandaloso abuso de ella; y tanto más justa es la resistencia, cuanto más perfecta es la sociedad que la opone, más numerosos y sagrados los derechos que se escudan resistiendo, de mas larga fecha y mayor entidad la tiranía que los vulnera, y más organizada, metódica y proporcionada la fuerza con que la contrarresta la nación.

Si las dos modernas revoluciones más hondas y trascendentales que registra la Historia, una sobre todo, hubieran encontrado la doble representación, la regional y la aristocrática, tan bien organizada como penetrada de sus deberes, tan habituada á un enérgico á la vez que moderado ejercicio de la autarquía, como constituida, y regulada siquiera en los puntos esenciales, por una legislación bastante expresiva de los recíprocos dominio y derechos del poder soberano y del autárquico, lo probable es que no hubiera estallado el conflicto, ó que, de estallar y no restablecerse pronto el acuerdo, no llegara la catástrofe á las violencias, excesos y subversiones á que llegó, especialmente en Francia. (1)

(1) Aunque incompleto é imperfecto el organismo parlamentario inglés, no era tan incipiente y embrionario en tiempo de Carlos I que no hubiera ya podido hacer cosa distinta de lo que hizo para evitar la raptura, ó, cuando menos, para entenderse y conciliarse con el rey prisionero, más traicionado que vencido. El Parlamento servil de los Tudors, cómplice y coautor de las crueles persecuciones contra los católicos, muestra una susceptibilidad agresiva en cuanto el segundo Stuardo sube al trono, y, sin motivo justificado, toma la ofensiva contra un rey cuyos actos de gobierno no habían comenzado siquiera. Toda la política de los parlamentos fué en este reinado un continuo ataque á la monarquía, una revolucionaria é insensata hostilidad contra ella y un propósito deliberado de anularla de hecho, ó de encender la guerra civil, en la que entró Carlos I por necesaria defensa. Vencido aquel rey, que fué un monarca mediocre, que cometió yerros graves, pero que de ningún modo puede ser calificado de mal hombre y mucho menos de tirano, el Parlamento usó de su victoria de la manera más indigna, asesinando al infeliz prisionero, porque asesinato fué, y con la circunstancia agravante de la hipócrita superchería de un juicio legal irri-

Puesta la resistencia justa en el extremo de derrocar al poder tiránico, ninguna autoridad más apropiada que las cortes para decidir en justicia y equidad acerca de la suerte del soberano y de la del Estado, y en el caso lamentable de encenderse y prolongarse la guerra civil, ningún organismo con título superior al de la representación nacional para conducir la campaña con el menor daño y estrago y la mayor justicia y moderación posibles.

La tiranía del soberano, colocándole en la inferioridad aneja á tan grave delito, traslada de hecho y accidentalmente la autoridad suprema á la autarquía representada en las cortes, y con tal soberanía también la alta jurisdicción para juzgar y punir al tirano. Consideraciones no solo de misericordia, de equidad y de prudencia, sino de estricta justicia en la mayor parte de los casos, deberán imponer, sin embargo, á un parlamento á quien no ciegue, como á los protestantes ingleses y á los ateos y deístas de Francia, el odio vengativo, una benignidad razonable y conveniente, además de justa, para que no pase la sentencia más allá

sorio, la sentencia de muerte contra Carlos I. El Parlamento, esclavo del feroz tirano Enrique VIII, se vengaba de la opresión, derribando la cabeza de un hombre bien inclinado, cuya mayor falta fué acaso la de no tener la energía suficiente para enfrenar á tiempo las agresiones é intrusiones parlamentarias.

En cuanto á la situación de Francia, al ocurrir la Revolución, ya hemos en varios pasajes expuesto lo suficiente. Allí, como en España, se había interrumpido la tradición representativa hacía más de un siglo, y ni siquiera había un parlamento defectuoso, aunque ya revolucionario, como el inglés, del cual hubiera podido servirse el rey, para colaborar con él á las amplias, profundas y apremiantes reformas. Los Estados generales, congregados para ellas, se convirtieron incontinenti en una asamblea revolucionaria, presa no ya del deseo de un desquite sobre la monarquía, y de medrar y ensancharse á costa de ella, como en la Inglaterra de Carlos I, sino del delirio disolvente que en cuatro años escasos iba á arrasarse todo cuanto le permitió la Providencia, y asesinando, también en *forma parlamentaria legal*, y con las circunstancias más odiosas, á uno de los reyes más justos que tuvo Francia.

del destierro, ó de la deportación, á lo sumo, con una indemnización razonable, sin confiscación, en el patrimonio del soberano destituido. Es decir, que aunque en *tesis* tenga el parlamento la facultad de aplicar la última pena, muy rara vez podrá y deberá en *hipótesis* llegar á ese rigor extremado (1). En las dos ocasiones, que presenta la historia moderna, de juicio parlamentario de la causa de dos reyes condenados á la última pena, la sinrazón, la iniquidad y la cruel venganza se sentaban entre los que escarnecieron y deshonraron la investidura de jueces, y la menor culpa y la inocencia respectivamente al lado de las dos víctimas de la fuerza brutal, Carlos I y Luis XVI.


Si bien en las incidencias de la resistencia armada contra el tirano, y de la lucha que ésta origina, puede encontrarse un ciudadano, aunque no esté investido de autoridad alguna, en el caso de dar muerte á aquél con todas las condiciones de la legítima defensa, no ha de confundirse esto con el tiranicidio, ó sea, el supuesto derecho de todo súbdito de matar de cualquiera modo y en cualquiera lugar y tiempo al imperante tiránico. Esta teoría es insostenible, a) porque toda pena supone juicio previo, y el reo de tiranía, si por el delito ha menguado su derecho, no lo ha perdido totalmente, y conserva, con su consideración de

(1) Hay en efecto algo de repugnante en tal severidad, usada por quien ha sido parte en la contienda, y á quien el éxito convierte en juez efectivo de la propia causa. Además, muy pocas veces será tan calificada la tiranía y tan unánime y cierto el juicio público acerca de ella, ni dejarán de existir en favor del tirano varias circunstancias atenuantes, ni habrán procedido la nación y su representación autárquica con justicia tan plena é indudable y con tal circunspección y templanza que puedan decirse exentas de culpa. También hay que tener en cuenta que la tiranía de un rey no es razón ni para cambiar la forma de gobierno, ni siquiera la sucesión dinástica, y por lo tanto, es atroz obligar al sucesor, que regularmente será el hijo, el nieto, el hermano, pasar al solio sobre la sangre de un ascendiente ó colateral próximo, quebrantando y comprometiendo así desde el principio el acuerdo entre el agraviado y dolorido rey y la nación, juzgadora inexorable y despiadada.

persona, el derecho al proceso regular y en él á la alegación y á la defensa; *b*) porque el crimen del tirano no da al igual ó inferior la superioridad y dotes que la jurisdicción implica y exige, ni la investidura judicial; *c*) porque sería perturbador y anárquico (1) que el capricho de cualquiera fanático, ó la maldad de un homicida, tomando por razón bastante el juicio privado, ó por pretexto una opinión pública ficticia, reputase tirano á quien le placiera, y entregara así la autoridad á perpétuo peligro y asechanza.

La doctrina de la resistencia al poder está sustentada por autores de las varias escuelas, debiendo citar entre los católicos más autorizados y conocidos á Santo Tomás, Suarez, Balmes, Hergenröther etc., y notar que de los fundamentos de la resistencia descartamos el supuesto derecho de la multitud de proveerse de rey (Santo Tomás, *De regimine principum*) ó las condiciones del primitivo pacto político (Suarez, Def. fidei cath.) por ser incompatible con la teoría expuesta acerca del título legítimo de concreción de la soberanía, para aceptar de estos autores la doctrina común de que la voluntad injusta del príncipe es más bien *iniquitas quam lex* (Santo Tomás, S. theol.) y principio de justicia natural la defensa de los derechos contra el tirano.

(1) Aún podrá argüirse que el ciudadano puede ser no juez, sino ejecutor de justicia contra un tirano juzgado con todos los requisitos de un proceso regular y solemne, pero sustraído al cumplimiento de la condena por fuga, expatriación, etc. El caso ya es distinto y extremo, pues en el texto nos referimos á la muerte del tirano no sentenciado, ni encausado todavía y hasta en posesión del poder, ó con fuerza cuando menos para contrarrestar la resistencia de la sociedad. Pero ni aun en el supuesto de la objeción, es lícito el tiranicidio por razones obvias que no es del caso puntualizar aquí.



CAPÍTULO XVIII

LOS VICIOS DE LA SOBERANÍA. EL GOBIERNO PERSONAL.—EL LIBERA- LISMO, VICIO A LA VEZ FUNCIONAL Y ORGÁNICO. EL PARLAMENTARISMO.

1. Explícitamente, aunque de un modo indirecto, ó por implícito contenido en doctrinas conexas, se han hecho en este tratado continuas referencias anticipadas al objeto propio del presente capítulo, los vicios ó defectos de la soberanía.

Y se emplean los dos términos para significar así lo que el vicio arguye, esto es, inmoralidad, como la mera imperfección ó deficiencia, que es lo que queremos expresar más bien con la palabra defecto.

Lo mismo defectos que vicios pueden afectar y referirse ora al ejercicio del poder soberano, ora á su constitución, por lo cual llamaremos á los unos funcionales, y orgánicos á los otros.

Todo vicio funcional consiste en algún género de injusticia en los actos soberanos, la cual puede ser grave ó leve, singular y casual, ó repetida y habitual, como sucede á todas las infracciones del deber, sea éste el que fuere, y cualquiera la persona que las cometa. Y es claro que, tratándose del fuero externo,

la injusticia del supremo gobernante depende y procede de no enderezar la acción gubernativa al legítimo interés de la persona física ó colectiva para la cual son el bien ó los bienes que, por función esencial ó tutelar, está obligado el soberano á prestar á esos individuos ó colectividades.

Esta injusticia puede provenir de ignorancia y de error que, por regla general, no son excusables en el supremo imperante; y es igualmente posible que el ejercicio injusto del poder dañe á algunos, ó á muchos sin aprovechar á ninguno, ni siquiera materialmente. Pero, la mayor parte de las veces, la medida desordenada se dicta con el intento de favorecer injustamente con algún bien indebido ora al mismo soberano, ora á una porción de la sociedad, á cuyo procomún se debe de justicia el bien que sin razón y derecho se la arrebatata en interés ilegítimo de uno ó de varios individuos, ó colectividades, soberano ó súbditos. En esta clase de injusticia consiste la tiranía la cual en otro libro (*El absolutismo y la demoracia*, página 111) he definido *acción autoritaria no enderezada al procomún de la sociedad, sino á fines más restrictos que los de la prosperidad social correspondiente*, habiendo, por lo tanto, varios grados de gravedad y de responsabilidad según la «variedad de tiranías, más ó menos criminales y execrables, en razón de dos criterios, la ilicitud del acto y la restricción del intento gubernativo en una escala gradual comprendida entre la persona misma del imperante y el interés de una región ó círculo federativo de los que inmediatamente componen el Estado nacional (ibíd).

De lo dicho resulta, no solo que alguna injusticia del imperante puede muy bien no ser tiranía, aunque casi siempre sea ésta el móvil y la forma de la injusticia, sino un corolario importante y que rectifica el error muy generalizado de que la tiranía es vicio propio y exclusivo de la forma monárquica. Para que esto fuera cierto, sería preciso, ó que la tiranía no consistiera en lo que se ha manifestado, ó que las poliarquías estuvieran inmunes de la tentación y el defecto de no gobernar para el procomún.

Igualmente se desprende que, así la *oligarquía funcional* como la *oclocracia* son dos formas ó modos de tiranía que, aunque más propios de las repúblicas pueden también ser perpetrados por la monarquía, bien que no sea lo frecuente ni probable. En efecto, se ha venido entendiendo tradicionalmente, desde Aristóteles, por *oligarquía el abuso de poder que consiste en usarlo en daño de la plebe, á la cual se emplea en favor de los intereses de dominación, riqueza y vanagloria de magnates y plutócratas*; y, si bien este vicio es más natural en las repúblicas aristocráticas, en que los nobles están tentados, por la posesión de la soberanía, á emplearla en provecho de la clase nobiliaria, no es imposible que en este vicio tiránico incurra la monarquía, ó por complaciente debilidad, ó por torpe alianza de sus injustos intereses con los de una nobleza más ó menos reducida. A su vez, la *oclocracia*, que es *el poder abusivo en provecho injusto de la parte más inculta y necesitada de la plebe y en daño de ricos y próceres*, aunque es inclinación y aun tentación de las repúblicas democráticas, más expuestas á este vicio, ó por el mismo interés de la demasiada y ru-

da multitud gobernante, ó por la misma presión demagógica de la muchedumbre excluida del gobierno, puede también ser defecto y culpa de las monarquías, ya por mal entendida piedad, ya por deseo de popularidad insana, ó por cualquiera otra clase de ilícita conveniencia.

El nepotismo es aquel odioso grado de tiranía que *emplea el poder supremo en favor inicuo de parientes, amigos, paniaguados, banderizos, partidarios, etc.* El nepotismo es el execrable máximun tiránico, y lo es en la proporción en que los beneficiados son los menos, y los desatendidos los más.

2. Otro vicio funcional de la soberanía es el despotismo, que también se viene confundiendo con la tiranía, llamándose indistintamente déspota y tirano, y aun ambas cosas, al imperante injusto que no usa del poder para el procomún. Mas, si bien todo tirano es déspota, porque no hay ninguno que no atropelle y ultraje las leyes, y á su vez el déspota está, por posición y temperamento, en rápida pendiente de tiranía, es preciso distinguir teóricamente dos estados y situaciones como son poder no actuado en armónico interés social, y poder no ejercido según las leyes, esto es, entre de sordenación y ordenación ilegal, pero justa. Esto último es el *despotismo*: «gobierno de puro arbitrio, ó sea »hábito de prescindir de leyes y costumbres, para no »reconocer y aplicar en cada caso otra norma que la »particular, dictada en contemplación de aquel hecho »y circunstancias singulares. *Sit pro lege voluntas* es, en »tal supuesto, el lema y principio de las soberanías des-

»póticas, cuya injusticia consiste, no en intrínseca des-
»ordenación actual, sino en peligrosa é indebida priva-
»ción de las garantías que las normas previamente
»sancionadas prestan, por más de un concepto, á los
»súbditos, y en la carencia de aquellas cautelas y pre-
»venciones con que las leyes dificultan, ya que no im-
»posibilitan, los atentados del poder (1).»

Del otro vicio funcional, el absolutismo, que es común á ambas formas de gobierno, de la misma manera que lo es también el despotismo, se ha tratado en variedad y aun multitud de pasajes de esta obra para que tengamos aquí necesidad de más que de un recuerdo y síntesis en esta fórmula comprensiva: *ingerencia injustificada del gobierno soberano en la esfera gubernativa de las demás personas individuales y sociales y, especialmente, en la función autárquica nacional de las cámaras.* También en no pocos lugares se ha señalado la relación entre el absolutismo y el socialismo.

Por su significación etimológica, la *anarquía* en cuanto *ausencia, carencia de gobierno*, lo mismo puede ser vicio orgánico que funcional, consistente en que no haya autoridad soberana, ó en que, habiéndola, no gobierne. Mas si bien se considera, no debe darse á la palabra este riguroso sentido, porque en uno y otro caso, la anarquía es incompatible con la existencia de la nación, la cual no puede existir sin la autoridad correspondiente y sin el ejercicio de sus funciones esenciales; así es que, discurriendo en el supuesto de sociedad civil que subsiste, y de poder soberano que en ella actúa, aunque

(1) El absolutismo y la democracia, pág. 14.

viciosa ó defectuosamente, la *anarquía* no arguye falta de soberanía, sino *extrema flojedad, debilidad y aun impotencia de la acción soberana, y, por consecuencia de ellas y de las imperfecciones, deficiencias é irregularidades del gobierno, un estado de perturbación caracterizado por la licencia y el desorden.*

Tampoco la *anarquía* es vicio propio de una forma de gobierno, aunque las repúblicas y, sobre todo, las democráticas estén más expuestas á él, en razón y proporción de la menor unidad, fuerza y eficacia que hacen á esta forma inferior á la monarquía. También bajo ésta, como la experiencia tiene demostrado, no solo en las monarquías incipientes y aun en las de más avanzados tiempos medioevales, sino en algunas contemporáneas, es de tal modo flaca la autoridad y deficiente el gobierno, que la perturbación y el individualismo antisocial surgen y se propagan brava ó mansamente, alternando con el despotismo y la tiranía. Y es que la más perfecta unidad de la forma monárquica es un precioso elemento de potencia y virtualidad ordenadoras, no el único, ni bastante á anular las causas varias y cegar las dañadas fuentes de la anarquía.

3. La monarquía no puede tener vicio orgánico, porque no puede haberlo en la unidad física, en la unidad por razón de la persona individual en que esta forma consiste; así es que todos los vicios que la afectan, como á la república, son cosa extrínseca á la concreción unipersonal de la soberanía. El mismo vicio que parece más anejo á la monarquía, esto es, la falta, ó los defectos de una ley sucesoria adecuada á la naturale-

za, leyes y fines de la soberanía en general y de la monarquía en particular, es común á la república que, no siendo liberal, necesita y exige también racionalmente una sucesión hereditaria en la familia de los poliarcas. Si ni siquiera á las repúblicas antiguas se atribuye este vicio, es porque generalmente no han logrado consolidar la continuación hereditaria por las razones expuestas en otro lugar.

El vicio orgánico de las poliarquías es aquél á que las expone su imperfecta unidad, que tiende á ser cada vez más deficiente, en razón del mayor número de poliarcas que van adquiriendo el derecho soberano y menguando la superioridad propia de la soberanía en proporción del aumento de la colectividad suprema gobernante. Ya se ha dicho cómo y porqué sucede esto.

Los grados y etapas de esta viciosa tendencia poliárquica son dos: la *democracia*, por la cual entendemos aquí la *desnobilización ó desaristocratización* de la poliarquía, cuando los gobernantes llegan á tal número que no pueden ya decirse todos superiores en la calidad y entidad que exige la superioridad, esto es, la nobleza ó aristocracia inherente á la soberanía; y la *demagogia*, ó sea, *usurpación y detentación de la soberanía, si no por todo el pueblo, por parte considerable de la plebe que, sin condiciones para el desempeño del gobierno, lo ejerce con todos los vicios funcionales, desde la tiránica olocracia hasta la anarquía*.

Este gradual y desordenado aumento de poliarcas provoca un impulso natural contrario, suscitado y fomentado por generosas, ó por torcidas pasiones, esto es, por patriótico deseo de tener y ejercer rectamente la

autoridad, ó por ambición y codicia de poseerla, ó por ambos anhelos juntamente, un movimiento de exclusión de los poliarcas menos aptos y poderosos, para concentrar el poder en los más expertos, decididos y arrojados. Pues á este *movimiento de depuración y selección de la poliarquía en sentido y retroceso aristocráticos en favor de los menos poliarcas posibles* llamamos *oligarquía orgánica* para diferenciarla de la funcional, descrita en el número 1 del capítulo; y como quiera que implica una reacción saludable á una más perfecta constitución de la soberanía, según su objeto, esencia y leyes de concreción, á tal oligarquía no me atrevo á llamarla vicio, aunque el cambio sea contrario á la ley fundamental y se verifique de una manera súbita y violenta, (golpes de Estado). Es, cuando más, la mudanza una irregularidad ilegal, peligrosa por los trastornos, divisiones, injusticias que suele producir; pero, mientras á la licitud del fin corresponda la de los medios, la oligarquía, cuya composición etimológica expresa la misma idea que aristocracia, no es otra cosa que lo que hemos dicho: el medio y procedimiento de lograr ésta, la *aristocratización* de la poliarquía. Entre tal irregularidad y el vicio democrático demagógico fluctúan las repúblicas, y dichas pueden considerarse las que retroceden á tiempo para no precipitarse por la pendiente de la *democratización y plebeyización* de la soberanía, en que naufragan orden y libertad juntamente.

4. El *gobierno personal* es una denominación harto oscura, impropia y extraña, cuyo objeto y motivo no se descubren á primera vista, toda vez que no hay gobier-

no que no sea personal, por razón del sujeto en quien reside y que lo desempeña, y que no puede ser otro que una persona física ó colectiva.

Mas, por uso ya bastante determinado, puntualizado y extendido, se aplica tal denominación pleonástica, á aquélla forma de soberanía *en que, por causas especiales y extraordinarias, concentra y ejerce un individuo ó funciones soberanas que antes compartía con otras personas, ó funciones gubernativas infrasoberanas no esencialmente propias de la soberanía*. En esta descripción se trata de comprender bajo el carácter y nota comunes de una forma monárquica irregular y anómala los dos modos y procedencias del gobierno personal, la dictadura que sustituye á la república, y la monarquía absolutista ó legítimamente tutelar que toma á su cargo funciones de gobierno correspondientes á otras esferas autárquicas y, en particular, á la representación de la autarquía nacional en córtes.

La dictadura es la *ocupación, por parte de un alto funcionario, ó por persona que no desempeñe á la sazón función pública, de varias ó todas las soberanas que corresponden á otras instituciones y magistraturas*. La dictadura es la sustitución de la república por una monarquía excepcional y circunstancial de más ó menos poder, según las atribuciones que se arrogue y las autoridades á que, en todo ó en parte, reemplace el dictador. Para provocar la dictadura únense varias causas: la más natural y elevada es aquel impulso de selección y mejora de la forma de gobierno republicano, el cual no se detiene en la oligarquía orgánica y tiende á alcanzar la manifestación y contextura más pura y propia del po-

der soberano, la monarquía. Después, la ambición ó la codicia del poliarca más poderoso, apto, intrigante, ó audaz, ó de otra persona que no participa del poder, (aunque esto sea menos frecuente), la inferioridad y flaqueza de los otros poliarcas, las deficiencias de la constitución, el consiguiente irregular funcionamiento de ella, los desacuerdos entre los elementos gobernantes, y, en muchos casos, como factores sociales más hondos, el estado de perturbación, inmoralidad, anarquía, el inminente peligro de la paz y el orden interiores, ó acaso de la misma integridad nacional, etc., etc., son otros tantos estímulos, ocasiones y tentaciones á la dictadura.

Esta, siempre que puede y no fracasa, tiende á consolidarse en la forma monárquica, absoluta, absolutista y aun despótica, mediante el *cesarismo* que no es otra cosa que la *dictadura misma en cuanto se prolonga y tiende á hacerse hereditaria, y aun lo consigue, en más ó menos número de sucesiones familiares*. Afecta entonces la dictadura la forma de *imperio* á la antigua, es decir, á la manera romana, no primitiva, sino posterior y en los fines de la república, la que inauguró Sila y consolidó Augusto, esto es, la dictadura militar del *imperator* victorioso que disputó á otro el poder absoluto efectivo (á Mario) que se concertó pasajeraamente con otros oligarcas (César con Craso y Pompeyo en el primer triunvirato; Augusto con Lépido y Antonio en la segunda oligarquía triunviral) y que se descartan de los triunviros para imperar solos, (César en dictadura interrumpida por el asesinato; Augusto en dictadura que se prolonga durante cuatro sucesiones en la familia Julia.)

Acerca del gobierno personal que implica la monarquía absolutista, ó la que, por necesaria y debida tutela, tiene que desempeñar funciones esencialmente ajenas á la soberanía, hemos dicho lo bastante en otros lugares, y no es preciso añadir más.

Pero no puede omitirse que, del mismo modo que en la antigüedad clásica romana no se determinó ni pudo formarse más monarquía que la de procedencia dictatorial cesarea, así también todas las monarquías medievales y modernas que retrocedieron, en la teoría y en la práctica, desde el sano concepto y efectividad de la monarquía moderada ó templada al antiguo absolutismo, fueron también cesareas, *a*) en el mismo sentido, más ó menos acentuado, del imperio romano, esto es, en cuanto se proclamó la voluntad del César única ó principal fuente de derecho *b*) en cuanto el restaurado *sed et quod principi placet* no significó solo la añadidura, y luego la sustitución de la voluntad del César á las otras extinguidas fuentes del derecho, sino que, con más trascendental y nocivo alcance, expresó el arbitrio soberano, autor de un derecho que prescindió y hasta se divorció de la ley natural y divina, reemplazando el fundamento de una y otra con la voluntad del César, (*sit pro ratione voluntas*), y esto no solo en el orden temporal, sino á fin de poner al Estado al nivel de la Iglesia y aun subordinarla y supeditarla al Estado. El cesarismo medieval fué no solo *la restauración de la dignidad imperial pagana y del poder y unidad del imperio romano de Occidente, sino el retroceso de la monarquía moderada y de espíritu cristiano, más aún que á la contextura externa de la monarquía imperial de Roma, al rena-*

cimiento de su espíritu de naturalismo pagano. El cesarismo resulta así la paganización de la monarquía, y una especie de anuncio y anticipo del liberalismo en cuantas monarquías medioevales, con título de imperio, ó sin él, interrumpían la tradición cristiana tanto en el organismo como en el principio informante del soberano poder, llámese el imperante Felipe el Hermoso ó Enrique IV.

Igual carácter tuvo el cesarismo de la Edad moderna, cuya encarnación y representación fueron las monarquías protestantes y la misma monarquía absolutista de Luis XIV, que se erigió en todo el Estado (*el Estado soy yo*) y quiso también ser la Iglesia, á la manera herética y cismática. Tampoco el gobierno personal contemporaneo se diferencia del antiguo, ni en su forma de dictadura y monarquía más ó menos absolutista, ni en su procedencia, ora del régimen republicano, ora del monárquico, ni en su espíritu que es el pragmatismo cesareo, bien que ultimado, sistemático y plenamente naturalista ó liberal.

Las modernas repúblicas, no solo por natural imperfección de democráticas, en el sentido de compuestas de excesivo número de gobernantes, (el presidente y las cámaras), sino por su vicio esencial de democráticas en el respecto de la soberanía del pueblo, exigen y determinan con doble motivo y con mayor apremio y urgencia ese conato dictatorial cuyas causas hemos expuesto; y la dictadura surge por golpes de Estado, bien directamente de tal situación democrática, sobre todo cuando la demagogía y la anarquía provocan la reacción, bien por el intermedio de alguna *depuración*

oligárquica, por ejemplo, las que precedieron mediante el Directorio y el Consulado, á la dictadura militar de Bonaparte.

Tampoco hay imposibilidad de que se consoliden las dictaduras en forma de monarquía cesarista hereditaria, aunque esto sea más difícil que en la antigüedad, por los obstáculos que oponen ya el arraigo de la tradición legitimista, ya el dogma radical de la soberanía del pueblo, ya ambos factores doctrinariamente atenuados y yuxtapuestos. Ni Cronwell, ni los dos Napoleones pudieron el uno convertir su protectorado en realeza, los otros transmitir la dignidad imperial á sus hijos.

En las monarquías doctrinarias contemporáneas el poder personal del monarca procede del influjo y predominio que, por las causas señaladas en otro lugar, tiene el poder antiguo sobre el nuevo, la realeza sobre el parlamento, siendo para esto indiferentes la contextura parlamentaria del sistema, por ejemplo, en Prusia, ó el tipo llamado representativo, como en el Imperio alemán. En ellas el gobierno del rey está con el de las cámaras en relación proporcional al prestigio y fuerza que conserve el principio monárquico, y, en esa misma medida, puede ser más ó menos personal este régimen doctrinario.

En la monarquía antigua el gobierno pudo ser personal *a)* ó por no estar bastante formados y desarrollados, ó encontrarse en decadencia y postración, ó muertos del todo, la autarquía y su organismo representativo; *b)* ó porque inmotivadamente se ingiere el rey, sin necesidad y título de tutela, en varias esferas de gobier-

no correspondientes á otras personas, y, en particular, en la esfera autárquica de los estamentos.

El cesarismo de los gobiernos personales contemporáneos no puede tener la forma del antiguo, porque ni las dictaduras, ni las monarquías, aunque se denominen imperios, pueden prescindir de las modernas instituciones representativas, cuyo aparato y ficción necesitan, siendo conveniente y útil á dictadores y reyes mantenerlas ante la ilusión de los pueblos para menor responsabilidad y mayor seguridad del imperante. En cambio, ahora el gobierno personal es cesarista, ni más ni menos que todo régimen gubernativo moderno, en cuanto la ley no es más que expresión de la voluntad del Estado, sea cual fuere su forma, y en cuanto el Estado liberal, por falta de sentido religioso, carece de sentido ético y jurídico, resultando la ley no *rationis ordinatio*, sino mero mandato de la voluntad soberana (*sit pro ratione voluntas*).

5. Pero el vicio radical, á la vez funcional y orgánico, no solo de la soberanía, sino de toda la política nueva, es el liberalismo de que directamente se ha tratado en el capítulo segundo del segundo libro. Deduciendo, para el actual propósito, las consecuencias de aquella doctrina y de cuanto se ha expuesto en numerosos pasajes del tratado acerca del mismo capital asunto, no hay que esforzarse mucho en señalar como vicios naturales é indefectibles del liberalismo todos los que han constituido la materia de los números anteriores.

El liberalismo, como naturalismo jurídico que es,

desconociendo, ó, mejor dicho, negando la verdadera doctrina acerca de la naturaleza, origen y destino del hombre y de la sociedad, no puede fundar, explicar, sancionar ni realizar el orden de los actos humanos así de individuos como de colectividades, sean los que fueren su estado, clase y categoría. De aquí la esencial y radical injusticia del gobierno, cualquiera que sea la jerarquía del sujeto gobernante, el cual, si gobierna justamente, no es por el liberalismo, sino á pesar de él y *per accidens*, en virtud de la honestidad natural que pueda tener el imperante, y la imposición de la realidad y de las circunstancias con que la naturaleza, defensora de la rectitud, se sobrepone en esta esfera y relación, como en otras, á la voluntad torcida de los hombres.

De las filosofías que, por falta de fin y motivo de orden, no pueden fundamentar moralidad ni rectitud alguna, surgen esos escepticismos y positivismos prácticos, esos pragmatismos que solo procuran el bien material y sensible, no de todos, sino de los que tienen la fuerza y recursos físicos para lograrlos en su provecho, bien sea el imperante soberano, bien sus paniaguados, parientes y amigos, (nepotismo), ú otras clases y colectividades. En una palabra, las filosofías y las jurisprudencias nuevas engendran las varias especies y grados de tiranía que, si en las sociedades antiguas procedió de ignorancia y de error, tiene hoy el fundamento sistemático de una metafísica, ética y derecho impotentes para fundamentar un orden dirigido á un armónico procomún.

Y como al concertado interés jurídico de todos ha sustituido, por el error y el extravío habituales que sur-

gen de tales filosofías, el imperio del hecho y de la fuerza, de aquí la lucha actual entre las dos que se disputan el disfrute de los bienes de la tierra, el *tercer estado*, que de hecho es la burguesía plutócrata, advenida al goce y al poder desde y en virtud de la Revolución, y el *cuarto estado*, la plebe socialista que opone la potencia del número á la del capital: contienda entre las dos formas de tiranía, la del presente, la *oligarquía funcional*, y la del porvenir, la *oclocracia*, es el espectáculo que ofrecen y el carácter que presentan la política y la sociología contemporáneas.

El liberalismo determina también el despotismo en el sentido de más nocivo alcance y trascendencia, pues el despotismo liberal no tanto consiste en la sustitución del arbitrio á las normas establecidas, ó sea á las leyes y costumbres, como en algo más grave, en la arbitrariedad injusta de una legislación divorciada de la ley natural y divina. No es el *sit pro lege*, sino el *sit pro ratione voluntas* en el sentido del pragmatismo naturalista, lo que distingue al despotismo liberal, que, si, en efecto, no pocas veces infringe la ley establecida, casi siempre, y esto le es más conveniente, por más seguro, hace leyes injustas dirigidas al fin concreto, circunstancial y antijurídico que procura. *Legalismo pragmático naturalista* debe ser más bien definido el despotismo liberal.

De la misma fuente procede el absolutismo, expresión de la idea y constitución socialista del moderno Estado, de las cuales se trató en diversos pasajes de esta obra. El liberalismo, que, como se ha visto, tacha inmotivadamente de absolutistas todas las constituciones

antiguas no ajustadas á la doctrina nueva acerca del sujeto de la soberanía y á la otra aberración constitucionalista de la separación é independencia de los poderes públicos, es el más ó menos absolutista, según que en la especulación y en la práctica profese con más ó menos lógica ese socialismo cuyos elementos y causas hemos señalado. En la misma proporción en que desconoce y vulnera los fueros de la personalidad, tiene que desconocer y atacar la autarquía de las varias personas, y, por consiguiente, el propio y respectivo gobierno, empezando por el del individuo y concluyendo por el de las córtes.

Siendo el liberalismo esencialmente desordenador, de él tiene que fluir naturalmente el desorden característico de la anarquía. La deficiencia y flaqueza del impulso gubernativo, y la irregularidad y perturbación consiguientes en el gobierno, surgen además directamente de la constitución republicana democrática de todo régimen fundado en la soberanía del pueblo, ó en sus atenuaciones doctrinarias, porque soberanía repartida entre el jefe del Estado y el parlamento implica una poliarquía compuesta de hartos y mediocres é inferiores miembros, faltos de las virtudes y prendas de la soberanía, é incapaces del regular, y á la vez que moderado, enérgico ejercicio de ella. El principio constitucionalista, con su sistema de celos, desconfianzas fiscalizaciones, compensaciones y moderaciones mecánicas del poder soberano, no puede menos de enflaquecerlo; así es que, si todo gobierno liberal no resulta anárquico, se debe á las contradicciones teóricas y á las negaciones prácticas del sistema, á las rectificacio-

nes y remedios que ponen la realidad y la naturaleza, y que logran, *per accidens*, contener y contrarrestar la flaqueza ingénita del régimen.

Como este es *democrático* se acaba de decir, y como por la pendiente de tal democracia se precipita en la demagogía con todos sus excesos no hay necesidad de repetirlo.

Esta su contextura *democrática* lo hace esencialmente incompatible con la racional constitución aristocrática que, por su naturaleza, fines y funciones exige todo poder soberano, así en la monarquía como en la república; y de aquí la mayor necesidad de depuración en el sentido de *oligarquía orgánica*, bien que ahora contenida por todo el espíritu y tendencia de la política nueva y sobre todo por los sistemas de soberanía, contestes en atribuirle á una amplia colectividad poliárquica. El mismo principio democrático acerca del sujeto de la soberanía dificulta y estorba la aparición y arraigo del gobierno personal, ora en forma de dictadura, ó en los varios modos de monarquía sobrepuesta al parlamento, del cual no puede prescindir en absoluto la magistratura personal republicana ó monárquica.

6. A las alturas de este último punto del tratado ya no es posible la vacilación acerca de la naturaleza y caracteres del *parlamentarismo* que, en el supuesto de la verdad y exactitud, cuando menos de las generales y fundamentales, de toda la doctrina expuesta, no puede ser otra cosa que el *conjunto y síntesis de todos los vicios orgánicos y funcionales del gobierno liberal*, sea cual-

quiera su forma, en cuanto se muestran en el espíritu, organización y función del parlamento, ó sea, de las cámaras, y en sus precedentes, origen, formación y acción política y social.

De donde se sigue que, siendo el *parlamentarismo* el *liberalismo condensado y reflejado en el parlamento*, no caben en nuestra doctrina las distinciones que son á la vez causa y efecto de las disputas respecto de la significación del término y el contenido de la noción; y que, por lo tanto, *sistema parlamentario y vicio parlamentario* en las monarquías como en las repúblicas, en los gobiernos llamados de gabinete y en los denominados representativos *stricto sensu*, es lo mismo, sin posibilidad racional de varias acepciones en la palabra y desinencia, expresivas de un sistema natural, radical y múltiplemente vicioso.

El espíritu del parlamentarismo es el mismo del liberalismo, el que constituye el carácter habitual y profundo del pensamiento y la vida modernos, el naturalismo, que aparte las aberraciones multiformes con que se manifiesta en la esfera de las ideas, tradúcese en la práctica en escéptica indiferencia y en efectivo materialismo.

La ausencia de virtud y honestidad social que el naturalismo supone, y que ha ingerido y arraigado en las masas, se traduce en el origen mismo y en la formación de la asamblea ó asambleas, electivas en todo ó en parte. El cuerpo electoral no vota por ideas ni en justicia, elige por el interés utilitario y sensual de los bienes materiales. Si en toda época, aun en las sociedades más cristianas, la plebe no dirigida obra extravia-

da por el error, por la pasión y por la conveniencia física y sensible, en los modernos tiempos y pueblos, corroidos de escepticismo y positivismo, la máxima parte de los electores, y no más el pueblo que la burguesía y los aristócratas, desertores de su función y puesto, votan por un móvil personal, empezando por el más disculpable de la amistad ó el parentesco, y concluyendo por los execrables y nefandos de cualesquiera concupiscencia, vanagloria, interés de bandería, soberbia, ambición de mando, codicia, venganza, etc. Añádase á esto que, cuando falta la virtud social, apenas se conoce ni se ama, y mucho menos hay esfuerzo y constancia para defender y practicar la libertad y mantener la independencia del sufragio; así es que, si en todos tiempos ha sido difícil á la plebe y á la mayor parte de los necesitados de cualquiera clase social resistir á la imposición de interés ó fuerza mayores, hoy son éstos los que principal, por no decir exclusivamente, disponen del voto, el cual está sometido ordinariamente á todo género de coacción injusta, error, pasión, seducción, compra, amenaza de arriba ó de abajo. La corrupción y falsificación del voto sometido á mentira é iniquidad, es la primera manifestación morbosa del parlamentarismo.

De ese voto corrompido surge la democracia de asambleas en que los diputados son, á imagen y semejanza de los comitentes, personas menos que mediocres en cultura y rectitud, y envenenadas por el error y la inmoralidad propias del liberalismo, de suerte que á la imperfección natural de asambleas numerosas, es decir, de la democracia gobernante, únese el mal espíritu de legisladores sin sentido ético ni jurídico, que legislan y

gobiernan para fines prácticos, parciales y subjetivos, en los que el fin justifica los medios.

Este despotismo liberal no ha salido aún de los derroteros por donde lo encaminó la Revolución francesa, esto es, del servicio y provecho de una oligarquía de clase media, especialmente de las capas superiores de la burguesía y más en particular de las de la banca, bolsa y agio, en que los judíos tienen tanta parte, mano y ventajosa posición. Es decir, que hasta que el parlamentarismo no se entregue á la tiranía oclocrática y socialista, hoy por hoy es el instrumento de una tiranía oligárquica de clase media plutocrática, de que principalmente se aprovecha la judería más acaudalada y despreocupada que los otros ricos no semitas. Este es el más saliente carácter, la manifestación morbosa más grave y perceptible: un tiránico gobierno de plutocracia especialmente favorable á Israel.

Tal vicio parlamentario, orgánico y funcional, de *democracia legalista á disposición y utilidad de una oligarquía bursátil y judaica, ó judaizante cuando menos*, es propio del moderno gobierno *representativo* en la más amplia acepción del término y, por lo tanto, común á las dos formas y manifestaciones de aquél, la *representativa* en estricto sentido y la parlamentaria ó de gabinete, solo que más acentuado y dañoso en esta última clase de gobiernos, en que el jefe del Estado apenas tiene poder, si es que le queda alguno, para contrarrestar la tiranía oligárquica del parlamento, impidiendo que las cámaras enderecen legislación y gobierno al mencionado tiránico monopolio de la *política* gubernamental. Yerran, pues, los autores que consideran al

- parlamentarismo como vicio exclusivo de los gobiernos de gabinete, cuando lo más que puede concederse es que sea en ellos más frecuente é incontrastable, por falta de esa jefatura de Estado que con poder propio, especialmente el de la monarquía, reprima algo ó mucho, aunque del todo no sea bastante á impedir ó extirpar los naturales excesos parlamentarios. Reducido entonces el rey ó el presidente de la república á dignidad de puro nombre y aparato, con facultades escritas, pero no efectivas, el parlamento, de acuerdo con los ministros *responsables*, hechura é instrumento de las cámaras, ó directores y fautores de ellas, ó en situaciones intermedias entre la supeditación y el señorío ministeriales, *gobierna* sin obstáculo para los reprobados fines que hemos expuesto.

Las modernas asambleas, no solo por el número, sino por la calidad de las personas, además de injustas é incompetentes, carecen del sentido de la realidad, y de aquí que su legislación adolece no solo de irracional y generalmente inicua, sino de inoportuna y aun inaplicable por idealista y divorciada de la experiencia. De aquí procede que esas leyes viciosas tienen escasa vida, y hay que sustituirlas pronto, lo cual unido á la intervención necesaria ó á la indebida ingerencia del Estado en funciones y esferas que no le competen, origina el *prurito* ó incontinencia legislativa, del cual es expresión y fórmula el conocido axioma *corruptissima respublica plurimæ leges*. Sin embargo, en los gobiernos de gabinete predomina el contrario defecto, ó sea, el de la pereza y aun la inacción legislativas, porque teniendo que atender las cámaras á asuntos de administración y

aun de judicatura, y á la lucha entre la mayoría y las oposiciones, de cuyos asaltos necesita defender el Gabinete la posición ministerial y la continuación en el gobierno, apenas queda para legislar un tiempo que en máxima parte consumen las interpelaciones y preguntas, y, al principio de legislatura, la discusión del discurso de la corona y el proyecto de contestación que han de dar las cámaras.

Este vicio particular de los gobiernos parlamentarios, en estricto sentido, procede de su especial índole, ó sea, de la máxima concentración de los poderes en el parlamento, como si dijéramos, en la mayor negación del principio constitucionalista y, por consiguiente, en el *absolutismo parlamentario* que es vicio más pronunciado de los gobiernos de Gabinete. En efecto, en ellos gobiernan, en el amplio sentido de la palabra, las cámaras y el Ministerio mientras se mantiene el acuerdo entre aquéllas y éste, de donde procede el mayor interés de las oposiciones en conquistar con una votación victoriosa, no la función legislativa, sino algo más positivo, el disfrute del poder; y de aquí las preguntas, interpelaciones y *votos de censura* al Gobierno. A ellos responde éste procurando conservar la mayor fuerza y cohesión posibles en la mayoría y su inteligencia con el Ministerio, expresando tales potencia y concordia por medio de los *votos de confianza*, ó sea, manifestación de la que el parlamento tiene en el Ministerio acerca de las cuestiones que éste estima *graves y fundamentales*, es decir, *parte integrante y esencial del criterio y programa ministeriales*. El abuso consistente en menudear y multiplicar éstas, elevando á puntos capitales é impres-

cindibles de la política del partido materias y asuntos subalternos y aun insignificantes y ridículos, amenazando con la dimisión si la mayoría no vota de conformidad, es un vicio, aunque más accidental y menos frecuente, del gobierno parlamentario.

La burguesía oligárquica que usufructúa el país por medio del parlamento, necesita tener montada, corriente y expedita la máquina electoral que lo produce; y al efecto, los partidos, en que la plutocracia burguesa se divide para turnar en el poder explotador, constituyen *una organización jerárquica de directores, manipuladores y falsificadores del sufragio, cuyos grados supremos son los altos funcionarios presentes ó futuros, y los últimos los agentes subalternos que, por módica merced, desempeñan las funciones más materiales y mecánicas de captarse voluntades y sumar votos.* Por uso generalmente aceptado, se viene en España llamando *caciques* á esos caudillos de las banderías turnantes, especialmente á los jefes de provincia ó más pequeña localidad, y *caciquismo* así á esta organización, como á su corruptor imperio, á su *política* y sistema *gubernativo* y al *habitual estado social y público* que arguye la ignominiosa plaga. La retribución de esta hueste electoral, que no se licencia pasadas las elecciones, sino que se tiene siempre dispuesta para la lucha, es de distintas clases según el grado categórico del mercenario, pero generalmente es la distribución de los cargos públicos, el poder é influjo absolutos y despóticos en la localidad, la administración y la justicia al talante y capricho caciquiles, la ley y las medidas gubernativas dictadas en su provecho, en una palabra, una verdadera soberanía tiránica en los

respectivos lugares del cacicato, con todos los gajes y aprovechamientos inherentes á la inmunidad, al mero y mixto imperio de estos nuevos y oprobiosos señores, sin precedente en la historia, y de producción y tipo exclusivamente contemporaneos. El caciquismo constituye, pues, no sólo la base y el ambiente del parlamentarismo, sino un gobierno *extra y retro*, y, sin embargo, *supraparlamentario*, un régimen irresponsable y anónimo, del cual son las instituciones oficiales tapadera engañosa é inmoral.

4. La tiranía es «intrínseca negación de la naturaleza y fines del poder en cualquier orden social que se considere, desde la familia á la comunidad nacional; designándose con calificación de tirano, así en el lenguaje científico como en el usual y corriente, lo mismo al padre que al rey cuando infringen los más altos deberes de su respectiva dignidad veneranda

... En el poder soberano «preséntase una variedad de tiranías más ó menos criminales y execrables, en razón de dos criterios: la licitud del acto y la restricción del intento gubernativo en una escala gradual comprendida entre la persona misma del imperante y el interés de una región ó círculo federativo de los que inmediatamente componen el Estado nacional.» Y así... habrá actos tiránicos con circunstancias tan atenuantes, que apenas priven de la estimación ge-

»neral al que los cometa, mientras que otros sellarán por
»siempre su persona con el estigma de la ignominia, y con el
»de vergonzosa servidumbre á los pueblos que sufren tiranías
»tan radicales y humillantes;... actos tiránicos habrá que
»duelan menos que medidas dictatoriales é ingerencias abso-
»lutistas, en tanto que otros apenas son compatibles con la
»dignidad, la seguridad y aun la vida del pueblo, convertido
»en propiedad privada del que impera, no *ad bonum commu-*
»*ne*, sino *ad singulorum utilitatem* (1).

2. «No están concordes los tratadistas en la noción de
»despotismo, tan confusa en el sentido técnico como en el
»extracientífico, por fluctuante entre los caracteres del abso-
»lutismo y de la tiranía. No puede concretarse la idea entre
»las notas de *violencia y arbitrariedad* gubernativas; porque
»en su acepción propia, expresan imperio injusto, es decir,
»tiránico, si es que no más extensa transgresión de los debe-
»res autoritarios. Y si cupiere la equivalencia torcida, gra-
»tuita é infundada de arbitrariedad por arbitrio y de violencia
»por coacción material legítima, lejos de resultar vicio el
»despotismo, expresaría posesión y uso de naturales atribu-
»ciones, inherentes á todo poder; que no hay ninguno que no
»necesite de la fuerza para efectuar el derecho, y que no
»supla con arbitrio, ó con el mismo no corrija equitativa-

(1) *El absolutismo y la democracia* pág. 9 á 13. Y, así en el texto como en la nota I que va al fin de él, desecho, apoyado en la opinión de respetables autores, (el P. Rivadeneira, Santo Tomás, el P. Suarez y Fray Alfonso de Castro), las de ser la tiranía usurpación de reino, según define el tirano la ley X, tít. I, part 2.^a («Tirano tanto quiere decir como señor »cruel que es apoderado en algún regno por fuerza ó por engaño ó por »traición:), aunque después coincida con el común sentir de los autores en el carácter de la tiranía, que es «amar más de hacer su pro, magister sea »en daño de la tierra, que la procomunal de todos». . . . Son distintas cosas el *apoderamiento* del gobierno y el uso tiránico de él, como se ha visto y no hay necesidad de repetir; ni lo uno implica lo otro, por el solo hecho de que los tiranos «siempre viven á mala sospecha de la perder (la tierra).»

»mente, las deficiencias é imperfecciones de la legislación, »por adelantada que se la suponga.

»Tampoco puede caracterizarse de despotismo el gobier- »no de mero arbitrio soberano en cada caso particular, por- »que no de otra manera fueron regidas las sociedades na- »cientes, y tal es la nota distintiva de la ordenación en las »sociedades patriarcales, que ocupan el término medio entre »la familia, *restricto sensu*, y la sociedad civil. Antes de que, »por la repetición de hechos iguales, la aplicación concreta, »discontinua de la equidad natural á cada uno de ellos forme »uso jurídico y luego costumbre; y primero que la experien- »cia y la reflexión soberanas formulen previamente en nor- »ma general y abstracta la regla de la conducta social ulte- »rior, el poder público legisla por modo ejecutivo y juris- »prudente en cada caso y circunstancia, cuando se presentan »y no antes de que hayan ocurrido. Nadie calificará de dês- »potas á los que dictaron las *fazañas y albedríos*, que fueron »sentencias elevadas después á la categoría de derecho escri- »to. No es esto vicio constitucional, sino defecto propio de »constituciones nacientes en los primeros tiempos, ó en épo- »cas relativamente atrasadas de la nacional existencia. Y »precisamente es en ellas cuando, por regla general, menos »excesos tiránicos ó meramente absolutistas puede, de un »modo habitual, permitirse el imperante, porque en tales »primitivos ó no avanzados tiempos, no suele ser el socialis- »mo, sino el individualismo el que domina, y los súbditos, »mal avenidos aún con la indispensable obediencia, apenas re- »conocen y consienten al Poder la posesión y ejercicio de las »prerogativas esenciales á la soberanía.

»Tampoco constituye despotismo el arbitrio complemen- »tario y corrector con que todo gobierno necesita suplir ó »enmendar, por equidad, y en ocasiones extraordinarias, las »deficiencias ó vicios de la legislación escrita. Lo caracterís- »tico de este exceso gubernativo es la repetida sustitución de »la voluntad soberana al precepto legal establecido previa- »mente, el imperio personal del gobernante al de las leyes

»substantivas ó de procedimientos, la supresión de las garantías que el derecho anteriormente sancionado presta al súbdito, restringiendo el arbitrio del poder y las contingencias de la arbitrariedad. Síguese que el despotismo no es *per se* tiranía; porque no es física ni moralmente imposible que la despótica decisión vaya encaminada al procomún; lo que hay es que el despotismo, cuando se convierte en hábito, ó se erige en sistema, arguye un mal más hondo del cual el despotismo es manifestación y síntoma que denuncian la muerte de la autarquía nacional, la anulación de la democracia; y entonces el poder absoluto, sin freno que lo contenga, ni fuerza que lo modere con facilidad, da en tirano, y remueve despóticamente el obstáculo que las leyes oponen á la tiranía. ¡Desdichada la sociedad que no tiene más seguridades que las virtudes del imperante cuando á Augusto suceda Tiberio, y Domiciano á Tito!» (1).

Anarquía, según lo que en el texto se ha dicho, equivale á desgobierno en el sentido de acción gubernativa deficiente é ineficaz en mayor ó menor grado; y este desgobierno puede proceder ó de arriba ó de abajo, esto es, ó de las cualidades del soberano ó de defectos en la constitución de la soberanía, ó del estado de la sociedad y de su vicioso organismo ó de todas estas causas á la vez. En frases de la elocución corriente puede comprobarse como el concepto vulgar concuerda con el técnico, y como también en régimen monárquico se da anarquía más ó menos grave y crónica según las circunstancias. Anárquica fué en varias ocasiones la situación de Castilla, no solo bajo las minoridades y regencias, sino bajo el cetro de reyes, si mayores en edad, niños en ánimo y esfuerzo; y no por flaqueza de los monarcas, sino por imperfección constitucional de la monarquía y, en general, de todo el organismo social y político, anarquía frecuente y hasta crónica hubo en Aragón, aun reinando varones tan insignes como

(1) Gil y Robles, obra citada, páginas 13 y 14 del texto y VII, VIII y IX de las notas.

Don Jaime y su hijo. Las constituciones embrionarias é incipientes constituyen un constante peligro de anarquía (1).

Aunque en el texto se dice que ejemplos de anarquía man-
sa y crónica, alternada con violencias de anarquía fiera, ofre-
cen las mismas monarquías actuales, ya sabemos que son és-
tas verdaderas poliarquías de solo apariencia y nombre mo-
nárquicos; pero, aun así y todo, se las cita como caso más
expresivo por dos razones: porque al fin la realeza es, ó puede
ser un elemento y factor de potencia y energía gubernativas,
y porque, de todas suertes, en ellas el moderno Estado socia-
lista, armado de cuantos medios y recursos le proporcionan
su propia constitución y la de la sociedad, no menos que la
pasividad servil del pueblo, parece menos expuesto á ese des-
gobierno en que la anarquía consiste (2).

3. «En mi entender, (y dicho sea con la mayor descon-
»fianza), no ha discernido bien la política aristotélico-escolás-
»tica entre el vicio orgánico y el vicio funcional de *oligar-*
»*quia*, es decir, entre lo que afecta á la forma de gobierno re-
»publicano aristocrático y lo que se refiere á la manera con

(1) Por esto surgió repetidas veces en la Edad media, uno de cuyos ca-
racteres fué el de toda sociedad en que luchan con el personalismo insti-
tuciones imperfectas y nacientes, que no aseguran y garantizan bastante la
más amplia solidaridad en el seno de la más perfecta sociedad civil, despro-
vista durante mucho tiempo de los medios de mantener y consolidar la uni-
dad nacional indispensable, y, entre ellos, de un poder soberano con esfera
gubernativa bien deslindada y con recursos suficientes para defender y ejer-
citar las funciones esenciales ó las tutelares de la autoridad suprema. La
feudalidad señorial y aun la concejil fueron á menudo fautoras de anarquía
alternada con excesos absolutistas, despóticos y aun tiránicos de los reyes.

(2) Mas, si bien se considera, en la misma concentración de gobierno, y
en el peso enorme de funciones y atenciones que el moderno Estado se arro-
ga, ó que no puede menos de echar sobre sí, están el principio y germen
de la flojedad é insuficiencia de su acción ordenadora, sin contar con los
obstáculos que la opone una sociedad en la que el servilismo no obsta á la
resistencia pasiva y aun á la rebeldía fomentadas por el natural fermento
anárquico de la política liberal.

»que esa poliarquía ejerce el supremo poder. Lo primero, que
»es lo especial y característico, lo dejó á un lado la antigüa
»ciencia para calificar de especial defecto de una forma lo que
»es nota común y genérica de cualquiera gobierno tiránico, lo
»que constituye la tiranía, así de reyes como de poliarcas: *el*
»*mando supremo dirigido á otro fin é interés que no sean los*
»*del procomún nacional*». «Yo opino lo contrario: que la *oli-*
»*garquía*, como vicio que se refiere al *ser* de un gobierno, no
»al *actuar* de cualquiera, sin distinción de formas, no pasa de
»una irregularidad orgánica, consistente en el movimiento de
»depuración de una república, que contra la legalidad, por
»modo suave ó violento, (golpes de Estado), va excluyendo
»á más ó menos poliarcas y reduciendo, *aristocratizando* la
»colectividad en que reside la soberanía. La ciencia no ha re-
»cogido de la historia este fenómeno tan señalado en la de
»Grecia, y sobre todo en Roma, donde fué secular la evolu-
»ción oligárquica, alternando las *habilidades* pacíficas con los
»medios airados y atroces, la ley con el uso, el oligárquico co-
»nato con el dictatorial, hasta que el primer exceso se desta-
»có y caracterizó bien en los dos Triunviratos que precedie-
»ron respectivamente á la fracasada dictadura de César y á la
»consolidada é imperial de Augusto.

»Es claro que tal oligarquía, que puede ser buena y patrió-
»tica, aunque sea ilegal, que responde á un natural impulso de
»selección republicana, (y esta es la idea expresada por la com-
»posición etimológica del término, *mando de los pocos*; los me-
»jores nunca han sido muchos, y cada vez serán los menos),
»puede ir, y de hecho ha ido acompañada con frecuencia, de
»mando tiránico para inicuo provecho de los que gobiernan;
»pero ambas cosas, aunque sean concurrentes en la realidad,
»bien se distinguen *á parte rei* y *á parte intellectus*, y no me
»explico como no lo hayan distinguido la política tradicional
»ni la nueva. Redujérase todo á ese principio y tendencia de
»*nobilización* de la forma de gobierno, (bien entiende usted que
»no me refiero á gobierno de los nobles), á concretar la sobe-
»ranía según la ley de su naturaleza y fines, y la oligarquía,

»*fuera de ley y contra ley*, sería una crisis favorable, un mal para bien, una de esas enfermedades de que sale el doliente más sano y fuerte que antes de la dolencia; pero no es esa la execrable oligarquía, infamante y deshonrosa que padece, no España sola, sino el mundo entero, aunque aquí con caracteres y síntomas de envenenamiento y disolución de humores, y con señales desoladoras de próximo mutilamiento y aun muerte de la patria infeliz (1).

4. »Una especie de despotismo es la *dictadura*, porque, si no gobierno de puro arbitrio, no consiente el imperio de otras leyes que las que, por su autocrática voluntad, sanciona ó consiente el dictador. El cual es un magistrado que sustituye á todas ó parte de las magistraturas protárquicas, concentrando las atribuciones de las que suprime, y hasta aumentándolas y extendiéndolas más allá de los límites en que las circunscribían las anteriores leyes orgánicas. Aunque, en cierta manera y en impropio sentido, pueden llamarse dictatoriales las monarquías absolutas, las dictaduras surgen del seno de las repúblicas, por deficiencia de sus poderes constitucionales, por desacuerdos graves entre los factores de gobierno, por desarreglo funcional del organismo político, ó por más honda perturbación en las entrañas de una sociedad viciada de arriba á bajo. En tal concepto, resulta la dictadura una sustitución más ó menos duradera de forma republicana por forma monárquica, que nace fuera de ocasión, con la plenitud del poder, pero sin las moderaciones de que la tradición y la historia han ido rodeando á las monarquías, mediante labor simultánea de su formación y crecimientos. Síguese que, si no poder intrínsecamente injusto, son las dictaduras monarquías imperfectas, porque no son moderadas ó templadas, y porque, generalmente, care-

(1) Gil y Robles, *Oligarquía y caciquismo-naturaleza-causas-remedios-urgencia de ellos*. Informe pedido por el Ateneo de Madrid y evacuado en forma de carta al Sr. D. Joaquín Costa. Salamanca-1901, páginas 10 y 11.

»ce el dictador de la preparación y educación para el solio
»que presta al régimen monárquico su atributo esencial, la
»herencia. Por otra parte, la dictadura no se defiende por mi-
»nisterio de una ley que la tiene prevista, definida y circuns-
»cripta, como sucedió con la singular dictadura primitiva ro-
»mana, sino que se ocupa y conquista por la fuerza, vencien-
»do las más veces la resistencia de los poderes constituidos,
»en puja con otros aspirantes al imperio dictatorial, después
»de civil contienda que trae generalmente aparejadas pros-
»cripciones y matanzas como las de Roma ó las repúblicas de
»la América latina. Vienen las dictaduras como remedio he-
»rónico en casos, más que de enfermedad política, de enferme-
»dad social, en épocas de corrupción y decadencia, en las
»cuales no suelen exceder los dictadores del nivel común, que
»está á poca más altura que las pasiones abyectas de la plebe,
»de los sofistas que las encienden y envenenan y de los aven-
»tureros que las explotan. Con lo cual, la medicina de la dic-
»tadura no suele surtir efecto, si es que no resulta peor que
»la dolencia misma, como demuestra la historia con el ejem-
»plo de las dictaduras más famosas que no consolidaron
»efímeramente el orden sino á costa de la libertad. Aun así
»y todo, tan desgraciada y calamitosa por extremo puede
»ser la situación de las naciones, que consideren la dictadura
»tabla de salvación en el general naufragio, y anhelan y sus-
»piren por un dictador de recta y acerada voluntad y de fé-
»rrea dureza, cómitre inexorable que fuerce al remo á la des-
»mandada innumerable chusma, cirujano inmovible que
»arranque sin piedad la carne gangrenada y ampute los
»miembros putrefactos para librar del contagio la parte sana
»de la sociedad. La dictadura no es *per se* un bien, pero pue-
»de ser en muchos casos el mal menor y aun ascender á la
»categoría de bien relativo ¡Dolorosa imposición de la hipó-
»tesis tirana!... (I).

(I) Gil y Robles *El absolutismo y la democracia*, pág. 15 á 19. Después la nota III dice acerca de la misma materia: «En toda república existe un

La primitiva dictadura romana, aquella que legalmente sustituía en graves crisis y en circunstancias extraordinarias de peligro nacional á las magistraturas, entre las cuales, después de la expulsión de los Tarquinos, se había partido y re-

»conato dictatorial, que no es otro, en substancia, sino la natural tendencia
»de las poliarquías á la unidad del poder, á la más cumplida concreción de
»la absoluta aristocracia, propia de la soberanía, en una sola persona física.
»ca. Aunque la poliarquía sea forma legítima de gobierno, especulativa é
»históricamente considerada, encierra en sí misma un principio é impulso
»de *selección* hacia la forma monárquica, en la cual la superioridad compleja é independiente de la autoridad suprema encuentra más cabal y satisfactoria manifestación. Cuanto más numerosa sea la pluralidad de los poliarcas, más señalada y potente se descubre en la observación y experiencia históricas la fuerza secreta depuradora de la imperfección democrática del poder, que vá poco á poco desembarazándose del número, de la cantidad inútil y nociva, hasta reducir la democracia á *oligarquía* para convertirla en *dictadura* el mejor ó más fuerte de los poliarcas, que al fin logra alzar el sólio en forma de *cesarismo*. No es difícil, aun al observador más superficial y preocupado, descubrir esta evolución en la historia política de Roma cuya democracia, á través de dictaduras efímeras, concluyó en una definitiva, elevada á imperio en la familia de César y en la persona de Augusto. La oligarquía del segundo Triunvirato fué el tránsito á la consolidación cesarista del poder personal.

»Mas la depuración de la forma de gobierno no es siempre evolutiva, sino revolucionaria con más frecuencia, por la violenta acción de la demagogía y de la anarquía. Sucede á menudo que las repúblicas democráticas, en las que participa del poder mucha gente mediocre, lejos de perfeccionarse en sentido y con tendencias más aristocráticas, véanse invadidas por la desbordada ambición y por la fuerza incontrastable del número, y sin poderlas resistir un gobierno desautorizado, dividido y, en la misma proporción, falto de prestigio y potencia coactiva, deja en manos de la plebe la autoridad menguada y débil, que naufraga presto en las borrascas de la anarquía.

»Entonces el poder que anda por el suelo, como cosa *nullius*, pertenece al primer ocupante; y el que se arriesga á recogerlo, más que de ambicioso, da muestras de benéfico y magnánimo, ostentando en el hecho, y por el hecho de la ocupación, las dotes personales de una soberanía, que se concreta directamente por el ejercicio del primer precepto de la ley natural. Resurge entonces el poder en forma monárquica dictatorial, es decir, desprovista de las moderaciones legales y orgánicas de la monarquía templada, porque en las convulsiones y trastornos sucumbieron leyes y se disol-

partido la realza, convertida por la revolución en Consulado, tuvo de común con las dictaduras posteriores la concentración de atribuciones de varias autoridades en una sola autoridad, y se diferenció en que esto no se verificaba por ocupación ilegal, sino por ministerio de la ley. Era aquella dictadura una reminiscencia de la monarquía, un retorno provisional á ella en casos de extrema y urgente necesidad, y, por consiguiente, un extraño y notorio reconocimiento de la superioridad de la forma monárquica, de la cual, imperfecta y embrionaria y todo, se desprendió como de mala gana y á la fuerza el pueblo romano, más por pasiones y conveniencia de la aristocracia que á impulsos y en interés de la plebe. Pero la dictadura muy posterior, la del mismo tipo y procedencia que las dictaduras de las repúblicas griegas, la que ofrece los caracteres trasladados á la definición, fué una dictadura militar, esa dictadura de la cual son ocasión y tentación las democracias, cuanto más imperfectas, y que se fundó sobre la base del poder de los generales de más dotes estratégicas y políticas, de mayor decisión y de menos escrúpulos, más famosos por sus victorias, y apoyados en la adhesión personal del ejército. Estos que se llamaban *imperatores*, porque, triunfantes, eran saludados, aclamados y recibidos, con el título genérico de todas las magistraturas, el mando, pero más propio de los generales, por más acentuado en la milicia, se hacían dictadores, es decir, supremos gobernantes, conservando todo el organismo anterior

»vieron organismos, ó, si sobrevivieron, carecen de autoridad y vigor jurídico para reivindicar y mantener más imperio y eficacia que los que el dictador consienta.

»Apenas suele entonces tener el dictador más freno que los del honor y el deber, ni más garantía los súbditos que el justo arbitrio del imperante al que la conciencia religiosa y ética impida degenerar en arbitrariedad inícuca. Pero esta garantía, en todos los tiempos insegura y deleznable, es punto menos que nula en aquellas épocas en que está lá inmoralidad en razón directa del descreimiento escéptico y positivista, y en las que es raro que el dictador posea la bondad y honradez naturales que faltan á la mayor parte de las gentes.»

político, toda la máquina constitucional, pero manejándola á su arbitrio, *dictando* medidas de gobierno, é imponiendo leyes, por conducto de los legisladores legales y aparentes, al arbitrio absoluto del nuevo ocupador del poder.

Tenemos, pues, que ésta dictadura romana nació ya imperial, ó, si se quiere, imperatoria, que no fué más que el imperio elevado por modo irregular y extraconstitucional á suprema magistratura civil. Dictadura é imperio fueron una misma cosa, designándosela más con este nombre que con el anterior, especialmente desde que la dictadura logró consolidarse, señalar su tendencia y caracter de sucesión monárquica, y aun conseguir dos ó más sucesiones familiares, (familia Julia, Flavia, Antonina, etc.)

En Augusto la dictadura del imperator se convierte en imperio de forma monárquica por el título aparentemente legal que le presta la llamada *ley regia*, ó sea, de traslación de poderes que el pueblo de aquella república, quebrantada ya y moribunda, y de muy difícil clasificación, desde mucho antes de la aparición de la dictadura, (1) trasmite al imperator en

(1) Hasta el fin de la república, Roma continuó siendo en la forma una democracia de dos asambleas, los Comicios de base y amplitud cada vez más popular, (comicios por tribus), y el Senado, asequible de derecho á todas las clases, pero convertido de hecho, de asamblea aristocrática de linaje, que fué en un principio, en asamblea mesocrática plutocrática, ó como si dijéramos, empleando lenguaje nuevo, alta cámara, formada por la acaudalada burguesía. Bajo estos cuerpos colegisladores, al lado de los cuales faltaba una *jefatura del Estado*, una representación del *poder ejecutivo*, una magistratura de atribuciones bien definidas y superiores á la de los otros funcionarios centrales, estuvieron en perpétua lucha, desde la caída de la monarquía, la oligarquía y la oclocracia, sin que el organismo y mecanismo constitucionales sufrieran más modificación substancial que la del influjo y poder de los comicios por tribus, verificada por la evolución que les trasladó la autoridad é influencia de los comicios centuriados. Instrumento de resistencia oligárquica, primero de la nobleza de la sangre y después de la aristocracia y mesocracia del dinero, era el Senado, que desde el comienzo de la República, fué no solo adquiriendo de hecho la mayor y efectiva parte del poder legislativo, enfrente de una asamblea que por su número solo podía decir sí ó no *plebiscitariamente*, sino concentrando cuantas

quien se concentraron los nombres y dignidades de las antiguas magistraturas.

En cuanto una de las más poderosas monarquías medioevales, la de Carlomagno, adquirió un poder y grandeza superiores á las de los otros Estados y naciones que lograron consolidar los bárbaros, y los francos conquistaron una buena parte de las tierras del antiguo imperio romano de Occidente, quiso el Rey restaurar en su persona la antigua dignidad imperial, cuya significación era análoga á la del imperio romano, esto es, mayor potencia y más elevada jerarquía que las de los otros pueblos y reyes, una realeza de más categoría que las otras realezas. Mas aparte esta similitud, meramente exterior, el nuevo resurgido imperio diferenciábase del romano así en la constitución interior como en el espíritu, esto es, en que el antiguo era absolutista y pagano, y el nuevo, una monarquía que empezaba á ser moderada, y no dejó de serlo ni aun bajo el cetro de Carlomagno, y, sobre todo que estaba penetrada

funciones ejecutivas ó de gobierno no estaban taxativamente anejas á las varias magistraturas entre las que se repartió el *imperio* absoluto ejercido por la realeza y transmitido en un principio íntegramente al Consulado. Para contrarrestar el poder oligárquico, lo mismo los demócratas sinceros y desinteresados que los aventureros demagógicos que buscaban su provecho personal, acudían á la fuerza numérica é irreflexiva, á los Comicios, excitando y levantando las pasiones de la plebe, rara vez contenida en límites de justicia y de prudencia, destinada á tiranizar ó á esclavizarse, alzada solo de la pasividad inerte de sierva el poco tiempo en que la borrasca revolucionaria la erige en soberana opresora.

Era esta la situación más favorable y tentadora para la dictadura militar, para que, apoyado en uno ó en otro elemento, alzarse un general con el poder supremo; y esto fué lo que aconteció: en nombre de la aristocracia oligárquica uno, y en *favor* y por *intereses* de la plebe oclocrática otro, chocaron Sila y Mario primero, Pompeyo y César después, y Antonio y Octavio últimamente. Los Trunviratos no fueron formas durables de oligarquía que reducen la colectividad poliárquica á la menor expresión posible, sino transacciones y componendas efímeras entre dos aspirantes á la dictadura que buscan, para el pasajero equilibrio, un tercer poliarca, hasta que, desapareciendo éste de la escena, se resuelve en Farsalia y en Accio quien ha de ser el dueño de la República.

ya del espíritu del cristianismo. En efecto, el feudalismo, aunque todavía no hereditario, y los grandes señores, bien que refrenados por la potente diestra real, constituían ya ese primer elemento moderador que surge en la historia, la aristocracia territorial y guerrera, tan distinta de la aristocracia administrativa, palatina y áulica del antiguo y destruido imperio de Occidente. Pero sobre todo, el imperio de Carlomagno nació y se mantuvo absoluta é íntegramente católico, á diferencia del romano, que en los últimos tiempos de su existencia tuvo emperadores cristianos, pero que murió sin realizar, ni mucho menos, el ideal de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

Cuando á Carlomagno, postrado en la fiesta de Navidad ante el sepulcro de los Apóstoles, el Papa León, por inspiración súbita, acercándose al rey pide *vida y victoria á Carlos grande y pacífico emperador romano, coronado por la voluntad de Dios*, crea, en nombre de Él y en su representación, una dignidad que solo tiene de la antigua el nombre y la soberanía sobre vastos territorios, pero un título superior, procedente del principio y origen de todas las potestades, una autoridad imperial deferida por el Pontífice, ni despótica, ni absoluta, respetuosa de la personalidad de los otros pueblos y de la soberanía de sus reyes, servidora de Dios y brazo de su Iglesia. En el cuerpo del imperio antiguo penetra el espíritu cristiano para unir á las naciones en una amplia colectividad, hasta entonces desconocida, la Cristiandad, con un poder temporal correspondiente, el de un rey que se llama emperador, no por general victorioso, sino por monarca presidente de la confederación cristiana. Y tal es el concepto que, siglos después, han de traducir las leyes de Partida (1).

(1) «Imperio es gran dignidad, noble é honrrada, sobre todas las otras que los omes pueden aver en este mundo temporalmente. Ca el Señor a quien Dios tal honrra da, es Rey é Emperador: e a el pertenesce, segund derecho, el otorgamiento que le ficeron las gentes antiguamente, de go-
vernar, é mantener el Imperio en justicia. E por esso es llamado Empe-

La ambición de los emperadores, el precedente absolutista y pragmatista del imperio romano, el renacimiento de su imperfecto derecho público y otras causas históricas determinaron las luchas entre el Sacerdocio y el Imperio, entre la Iglesia y el Estado, entre las dos ciudades, de las cuales la profana y terrena siempre tendió á sobreponerse á la mística y celestial. Varios emperadores alemanes, por la cuestión interior de las investiduras, y por la exterior de la intervención en Italia para fines de influjo y dominación de muy distintos propósitos de los que movieron y guiaron á Carlomagno, quisieron supeditar á los Papas, considerándose, de derecho iguales á ellos, y, por la fuerza, reduciéndolos de hecho á condición inferior. Para ello interpretaron á su manera los romanistas con sofismas teológicos el origen divino del Imperio, y este derecho imperial dimanado de la voluntad del Emperador se hizo cesarista en el mal sentido de la palabra, esto es, emancipado de la razón, de la justicia y del derecho canónico. Desde entonces cuantos emperadores, separándose de la tradición cristiana del Imperio fundado en Carlomagno,

»rador, que quiere tanto dezir, como Mandador, porque al su mandamien-
 »to deben obedescer todos los del Imperio; e el non es tenuto de obedes-
 »cer á ninguno, fueras ende al Papa en las cosas espirituales. E convino
 »que un ome fuesse Emperador, e oviese este poderío en la tierra, por
 »muchas razones. La una, por toller desacuerdo entre las gentes, e ayun-
 »tarlas en uno; lo que non podría facer si fuessen muchos los Empera-
 »dores, porque segund natura, el Señorío non quiere compañero, nin lo
 »ha menester. La quarta, para amparar la Fe de
 »nuestro Señor Jesu Cristo, é quebrantar los enemigos de ella. E otrosí
 »dieron los Sabios, que el Emperador es Vicario de Dios en el Imperio
 »para fazer justicia en lo temporal, bien así como lo es el Papa en lo espi-
 »ritual.» (Ley I, tít, I, Part. II.) Después en la ley VIII traza las diferen-
 cias entre emperadores y reyes, de las que resulta que son más en dignidad,
 y menos en poder efectivo los primeros que los segundos, aparte la no-
 ta característica respectiva más señalada, la de ser hereditario el reino y
 electivo el imperio, como en la antigua Roma, que no logró ver consolida-
 da ni establecida regularmente la sucesión familiar de esta especial forma
 monárquica, alternando la ocupación violenta con la designación senatorial y la herencia á veces.

dictaron la ley y gobernaron según caprichoso, despótico y tiránico arbitrio, fueron césares, no á la manera del gran Carlos y de nuestro Carlos V, sino de un modo semejante á los césares paganos, según un naturalismo cuyo órgano y criterio era la voluntad omnímota del imperante, como en la Roma gentilica.

Cesarismo se ha llamado desde entonces, por indisputable título histórico, no solo al imperio que desde su origen y asiento primitivo en Francia se trasladó á las grandes casas feudales de Alemania, sino á cuantas monarquías se paganizan, así en la forma, (absolutismo), como en el espíritu, (laicismo, naturalismo), ora traten de cohonestarlo con motivos teológicos, (los protestantes y galicanos), ora con meras falsas nociones é interpretaciones políticas de la naturaleza y atributos del poder civil, (los regalistas y los liberales).

Cuantos en la antigüedad trataron de restaurar la realeza por el camino de la dictadura, retrocedieron ante el miedo que les inspiraba la hostil preocupación de la plebe contra una dignidad que el pueblo no acertaba á separar del odioso recuerdo de la tiranía de los Tarquinos; y de aquí el encubrir con otros nombres un poder más absoluto que el de la antigua monarquía. La misma apasionada prevención de las actuales muchedumbres, extraviadas y ciegas por el liberalismo, y dispuestas á aceptar cualquiera servidumbre antes que e suave y paternal régimen monárquico, obliga á los gobiernos personales surgidos de las repúblicas á prescindir del nombre de rey, á pesar de su significación y etimologías más dignas y decorosas que las de dictadura é imperio. Mas no es esto solo: es que la palabra y la cosa, por su precedente y origen paganos, son más simpáticas á la política moderna, y más conformes con su sentido naturalista que la monarquía medioeval, informada por el espíritu cristiano, y que recibió de su divina virtud las primeras moderaciones internas y radicales de que carecieron las monarquías precristianas (1).

(1) En la Confederación Germánica, continuadora aparente del Sacro

5. En la sociedad precristiana el hombre no valía y significaba como tal, y por ser tal, sino por fuerte y en cuanto poderoso; así es que del poder puramente físico era presa y patrimonio el gobierno, que servía para el provecho del poseedor y no para el procomún. El hombre débil era para el fuerte, y, por eso, también toda la colectividad para los pocos que podían más que ella. Pues á esta situación, que el cristianismo modificó y cambió radicalmente, rectificando la aberración en que se fundaba la tiranía, esencial al paganismo, han hecho retroceder á la sociedad el error y el vicio liberales, con la diferencia de que el naturalismo pagano y el tiránico imperio que de él fluían, procedieron de error teológico acerca de la personalidad de Dios, mientras que ahora la tiranía es el fruto indefectible del naturalismo plenamente sistemático, que es, como se ha dicho, un verdadero ateísmo (Capítulo I del Libro II) Por no considerarse los hombres hermanos, en cuanto hijos de un mismo Dios, y no ser todos igualmente para Él, los hombres tenían que ser unos para otros, constituyendo la inferioridad social diferencia de naturaleza, y habiéndose los superiores para con los inferiores de análoga manera á como se las ha el hombre con las demás criaturas de que es señor. El pecado, dueño entonces del mundo, por falta de verdad y de gracia eficaz que lo contrarrestaran, exageraba esas aberraciones para mejor cohonestar el crimen de una relación pública convertida en señorío y servidumbre respectivamente. Pues ahora acontece lo propio: por más radical negación del fin humano y del consiguiente fundamento y motivo de la moralidad, que han caído envueltos en

Romano Imperio, la dignidad imperial de la Casa de Austria conservaba el nombre y los caracteres legales externos del Imperio cristiano y las formas de su continuidad tradicional, bien que viciado de pragmatismo regalista y naturalista y, desde la Revolución de 1848, plenamente liberal. En cuanto al actual Imperio alemán, la denominación se imponía, por no poderse llamar rey el presidente de una unión de Estados, algunos de cuyos jefes conservaron el nombre y dignidad reales, y todos los de los Estados monárquicos esta forma de gobierno, aunque con títulos inferiores al de rey.

la negación del Dios personal y absoluto, ha desaparecido el orden moral y confundido con el orden físico; y así, lo mismo en la concepción materialista que en la pseudo espiritua- lista, el derecho es la fuerza, y choque de fuerzas, equilibrio inestable de ellas la vida social. Si á pesar de doctrinas, de suyo disolventes, la sociedad subsiste, es porque aún perduran el fondo y la base de la constitución cristiana y no se han destruido totalmente los hábitos, ni disipado y desvanecido el ambiente de honestidad social formados por tantos siglos de espíritu é influjo de la religión divina. Así como el paga- nismo no puede oscurecer completamente la luz de la ley natural en los individuos ni en las sociedades, ni privarles en en absoluto de cierto grado de virtud natural, sin el que se hace imposible la más efímera convivencia, con mayor razón es impotente el naturalismo filosófico ó jurídico para deshacer la secular labor, para derrochar súbitamente el tesoro de diez y nueve centurias de enseñanzas y vida cristianas, y to- dos estos sistemas nuevos han tenido que copiar una buena parte de la moral, del derecho y de la política cristianos para poder ingerirse en los entendimientos y en las instituciones. El mundo vive hoy de la parte de buen sentido y de justicia que resta del patrimonio de ideas y costumbres acumulado por el cristianismo, y todavía no dilapidado y deshecho por la insania y nequicia de los hombres (1). Esas nociones y ese

(1) Poco observador será, ó con escasa serenidad é imparcialidad hará sus observaciones sociales, el que no vea en las naciones que gozan hoy fama de mayor poder, cultura y adelantos una grandeza material de conjunto, bajo la cual, se oculta una desigual y tiránica distribución de los bienes sociales en favor de una clase y minoría nacional, y en perjuicio del mayor número, supeditado y postergado á los que detentan el poder, ó lo manejan para sus fines oligárquicos. «Una oligarquía sin sentido moral im- »pera en la Grán Bretaña, como en Alemania, como en los Estados Unidos; »solo que en esas naciones, la clase media, no diré más educada, pero sí »más ilustrada que la nuestra, más hecha para la vida pública, más forma- »da en la lucha parlamentaria, en una palabra, con más conocimientos y »hábitos de política, ha adquirido una prudencia gubernativa, un sentido »práctico de transacción y acomodamiento con los intereses distintos y con-

hábito tradicional moderan un tanto todavía la brutalidad feroz del choque entre los materiales y sensuales intereses de las agrupaciones, no ya clases y órdenes, en que está dividida la sociedad civil, é impide que de esta lucha de concupiscen-

»trarios, cualidades de que carece la burguesía española por concurso de
»causas que no hay tiempo de explicar, y en virtud de las cuales acaso no
»apareciera de peor condición é índole moral la clase media ibérica que la
»de los demás pueblos.

»Lo que ha acontecido en esos es que la *prudencia de la carne*, con que
»gobierna la mesocracia europea y americana, ha tenido una escuela en
»que formarse y arraigarse, la resistencia, ya secular y organizada, de la
»clase popular, resistencia que falta casi en absoluto en las naciones lati-
»nas y en absoluto en España. Ella ha enseñado á la burguesía á ceder á
»tiempo, aunque de mala gana, para no comprometerse y anularse, y á ir
»retrocediendo á las posiciones que puede conservar sin gran esfuerzo y
»peligro y por indefinido plazo; de suerte que allí el gobierno es una tran-
»sacción y equilibrio, más ó menos estable, de conveniencias entre las dos
»fuerzas que se disputan el imperio del mundo: el tercer estado que cada
»día retrocede, y el cuarto, que cada día avanza, ora ruidosamente como en
»Francia y Alemania, ora por callado y apenas perceptible evolución, como
»en Inglaterra. ¿Cuándo la altiva, exclusivista y desalmada *gentry*, en
»que se ha convertido la flexible aristocracia inglesa, hubiera espontá-
»neamente, y por inspiración del sentido jurídico, abandonado la obstinada
»defensa y mantenimiento de seculares iniquidades, sino asediada y com-
»primida por esa otra fuerza que llaman opinión popular, y que en resú-
»men no es otra cosa que el impulso numérico bien organizado de la plebe,
»que quiere su parte en el festín de la vida, y que en él va poco á poco con-
»quistando puesto y cubierto? ¿Cómo es posible hablar del sentido jurídico
»de los gobiernos ingleses, sin volver los ojos á la isla infeliz, asesinada,
»saqueada, despoblada horriblemente aun en el último reinado de la *gra-
»ciosa* soberana, y donde aún perdura la constitución más monstruosa de la
»propiedad, fundada en un despojo que, aunque de Edad moderna, hay, para
»buscarle semejante, que acudir á las bárbaras edades de las castas, en que
»el invasor victorioso señoreaba, con el suelo, las cosas y las personas, la
»libertad y la propiedad de los vencidos? (Gil y Robles, *Oligarquía y caciquismo*, págs. 17 y 18.)»

A los mismos admiradores de la civilización moderna les arrancan la realidad y la verdad preciosas confesiones. Un libro reciente, (*Imperialismo. La civiltà industriale è le sue conquiste. Studi inglesi di Olindo Malagodi*), señala la natutaleza del fenómeno actual, el *imperialismo inglés* como mera

cias, á cuyo servicio pone la pasión los sofismas estrictamente precisos para cohonestarlas, no hayan surgido ya la esclavitud ó la anarquía, la esclavitud del pobre, perpetrada por el capital, ó la anarquía producida por el socialismo y colectivismo en cualquiera de sus formas. Ya no luchan las ideas por la justicia, contienden las fuerzas por el goce, aunque creyéndose todavía en el caso de acudir á aquéllas para que las falsifiquen títulos de equidad, y, como mercenarias, combatan bajo las banderas de la sin razón burguesa ó de la comunista.

6. «Antes del liberalismo, el parlamentarismo fué vicio »accidental de la constitución histórica de algunos pueblos, »pero, desde que las *libertades* de perdición se han esparcido »por el mundo, el parlamentarismo es el complicado conjunto de fenómenos morbosos de variados, múltiples y confusos síntomas con que se manifiesta principalmente en el »parlamento, esto es, en las cámaras, cortes, ó como quiera »llamárselas, el virus que ha corrompido toda la vida pública »moderna. Tenía, en parte, razón Donoso cuando en su her-

fuerza de explotación y de opresión, y este es el dato que nos importa recoger, y en el cual coincide el autor con apreciaciones varias vertidas en este tratado acerca de los caracteres de la política y de la civilización inglesa y de la raza sajona en general. La discrepancia entre su opinión y la nuestra es agena al testimonio de mayor excepción que aducimos, suponiendo Malagodi una diferencia sustancial entre la creación imperialista y su actual torcido espíritu, y viendo nosotros una misma esencia en el industrialismo inglés y en su tendencia absorbente de expansión colonial y de conquista violenta y feroz de mercados, sin otro fin humano y civilizador que la utilidad material. Malagodi, dominado del ya viejo prejuicio del industrialismo, que el considera etapa avanzada del progreso social y carácter que distingue á las sociedades contemporáneas de las que tuvieron la guerra y la agricultura por ocupación predominante, no quiere ver en la ambición y codicia industriales de Inglaterra la raíz de ese fruto amargo que al ideal y al ídolo del más desalmado utilitarismo sacrifica á los pueblos más débiles, abriendo al mismo tiempo, por justa sanción providencial, ancha herida por donde se escapa la sangre y la savia nacionales. Y nada digamos de la honra y el prestigio deshechos y perdidos.

»mosísima carta acerca del parlamentarismo escribía: *Mi con-*
»denación no cae sobre el Parlamento, que es el vaso; sino sobre
»el espíritu revolucionario, que es el licor; tenía la totalmente
»cuando consideró al vicio como un mal que radica en las
»entrañas de la sociedad actual; no se expresó con exactitud
»completa, cuando diagnosticó la dolencia de *espíritu revolu-*
»cionario, en vez de espíritu naturalista ó liberal; se quedó
»corto en la fórmula concreta y sintética: *el parlamentarismo*
»es el espíritu revolucionario en el parlamento, porque debió ha-
»ber dicho algo parecido á esta descripción más larga: el par-
»lamentarismo es el liberalismo, que envenena las fuentes mis-
»mas de la vida social, y de cuyas manchas y pústulas gan-
»grenosas están especialmente cubiertos los órganos parla-
»mentarios.....

.....«Puede ya caracterizarse la enfer-
»medad de naturalismo explotado en el parlamento y me-
»diante el parlamento por la burguesía industrialista y capi-
»talista, judaica de raza, ó de condición y mañas. Y como el
»más ó el menos no cambia la especie, no hay pueblo, par-
»lamentariamente regido, que no padezca este vicio, á la vez
»orgánico y funcional, sin otra diferencia que el grado de in-
»tensidad, profundidad y desarrollo que el mal ha alcanzado
»según los precedentes, naturaleza y temperamento del en-
»fermo, esto es, según la resistencia que á la invasión y arrai-
»go oponen la fe, la tradición, la etnología, la constitución in-
»terna, las costumbres sociales y políticas, en fin, las diversas
»circunstancias de tiempo y condiciones, de lugar y na-
»ción» (1).

La corrupción electoral, de que en otro lugar hemos tra-
tado, aduciendo elocuentes datos y ejemplos, presenta tam-
bién distintas formas y caracteres variados más ó menos gra-
ves y odiosos, desde la mera sugestión del sofisma, hasta la
venta del voto á bajo precio, desde la presión que implican

(1) Gil y Robles. *El Parlamentarismo*. Artículos publicados en la re-
vista *La Lectura dominical*, de Madrid.

las preocupaciones y pasiones revolucionarias hasta la escandalosa coacción con que los gobiernos se procuran dóciles mayorías y oposiciones de mera apariencia y teatral aparato, presentándose entonces el parlamentarismo de los gobiernos de gabinete en la repugnante forma de una oligarquía, en el sentido orgánico de la palabra, la oligarquía de un limitado número de *próceres* del partido, ó en la de dictadura del que descuella notablemente sobre los otros. En ambos casos es el Gabinete el efectivo poder, más ó menos moderado por la acción é intereses de la plana mayor del partido, ó bien el simple instrumento de la voluntad del jefe de la agrupación. Alternan entonces el servilismo de las mayorías con las conjuras y conatos de *independencia*, esto es, se manifiesta otro síntoma parlamentario, el de la indisciplina mal contenida del partido gobernante y la formación de grupos medio sumisos, medio rebeldes que, solo á cambio de mercedes y transacciones, prestan al gobierno un concurso inconstante, flojo y desabrido. Entre la supeditación absoluta y las tentativas de emancipación, suscitadas ó por interés bastardo, ó por un resto de ideal ó de dignidad bien entendida, fluctúan las mayorías *traídas* por los gobiernos, ó que los imponen y mudan (1).

(1) «Dos síntomas más claros y seguros van, sin embargo, presentándose ya con cierta generalidad y permanencia, la descomposición y multiplicación de los partidos y las consiguientes inconsistencia y mudanza de los Ministerios. Destácanse principalmente estas manifestaciones en los Parlamentos de Austria, Hungría, Francia é Italia, y se va señalando también en Bélgica y aun en Inglaterra, y no hablo de España, porque este parlamentarismo, un tanto singular y propio, es de una indignidad y bajeza incurables. Consecuencia de este movimiento de disgregación de los dos partidos turnantes, de las dos agrupaciones, instrumento y vehículo de gobierno, es la aparición de grupos y grupitos, por razón no solo de discrepancias capitales, sino subalternas; y de ahí la vaguedad é indeterminación de los programas políticos, mantenidos dentro de tópicas generalidades, la confusión de los límites y contornos de las fracciones intermedias, y los gabinetes de concentración oportunista, que apenas pueden moverse ni aun expresar su criterio en puntos y materias de importancia sin comprometer la vida del Ministerio, y aun dar con él al traste.

«Ya se comprende que todo lo que no sea naturalismo tal-
»múdico masónico, que ha convertido al parlamento en ma-
»quinaria para la explotación de la sociedad, en interés de la
»burguesía adinerada, Dios sabe como, no es parlamentarismo»

»Estos síntomas denuncian una agravación creciente de la enfermedad,
»y no lejana de la final crisis, porque son fenómenos procedentes de la raíz
»misma de la infección parlamentaria, esto es, de la división é incompatibi-
»lidad de intereses egoistas y torpemente utilitarios; es la disolución de
»humores que de la entraña misma de la sociedad anticristiana trasciende
»ya á la cabeza y á la cara del doliente. En efecto, aun en pleno racionalis-
»mo, á los comienzos del sistema, pudieron mantenerse los partidos dentro
»de las grandes tésis, de fundamentales afirmaciones abstractas que les
»permitían libertad y desembarazo para afrontar y resolver las grandes
»cuestiones de gobierno. Hoy no es esto posible, no tanto por el barullo
»de las ideas, como por la complicación de las conveniencias positivas que
»no pueden agruparse ni concertarse donde no las armoniza el superior
»principio del derecho. Así es que apenas pueden moverse los gobiernos
»sin lastimar un interés y provocar una protesta y una perturbación: un
»solo camino tienen expedito y llano, el de los atropellos á la religión ver-
»dadera, á la justicia, á la grandeza, á la libertad efectivas de las nacio-
»nes.» (Gil y Robles, artículos citados.)

En los citados pasajes se alude principalmente al parlamentarismo francés, acaso tan judaico como el austriaco y húngaro; pero la descomposición también se señala en Bélgica y en Inglaterra, como ya en otro lugar hemos dicho. Respecto de esta última tiene razón Malagodi, cuando en la obra citada señala la coincidencia del mal imperialismo con un principio de postración del legítimo poder expansivo de la creación imperialista industrial, viendo en el primero una forma parasitaria de vida, una etapa de retroceso, de atavismo hacia el período bárbaro de violencia y conquista. Pues bien, el parlamentarismo inglés es á la vez producto é instrumento de esos dos imperialismos que no se diferencian en substancia, y obra y carácter bien notoriamente parlamentaristas la guerra sudafricana en que han colaborado, con las circunstancias más agravantes y calificadas de responsabilidad, Chamberlain y Cecil Rhodes, los hombres que gozan de más popularidad en Inglaterra, á pesar de haberse probado en la prensa y en el parlamento que esa campaña se ha emprendido con el doble objeto de la explotación minera del suelo de las heroicas repúblicas, y de favorecer el negocio de grandes compañías industriales inglesas. Con este industrialismo imperialista de fase bárbaro guerrera, que no es de ahora en la Gran Bretaña, coinciden, en efecto, la merma del tráfico interior y exterior, en que va llevando ya Alemania la delantera, y la disminución de la hulla,

»mo ni síntoma bien determinado de él. Tales son ciertos fe-
»nómenos parlamentarios, ni fijos ni idénticos, que pueden
»compararse á los desarreglos morbosos de los enfermos in-
»curables, y que son concomitantes más bien que esenciales
»de la dolencia, por ejemplo, la locuacidad intemperante y
»vacía, el pugilato de retórica y vanidad, el abuso de las pre-
»guntas é interpelaciones, en una palabra, todo el despliegue de
»charlatanismo, ó, cuando más, de curialesca facundia, así co-
»mo intrigüelas de pasillo, el abuso de las cuestiones de con-
fianza ó de gabinete, etcétera (Gil y Robles, *El parlamentarismo*, artículos citados) (1).

cuyas dos terceras partes, según inteligentes cálculos de Foster-Brown, se habrán agotado en Inglaterra dentro de cincuenta años, mientras el poder dinámico del agua, trasladado por medio de la electricidad á grandes distancias de su origen, traerá ventajosamente á otros pueblos al terreno de la competencia industrial.

(1) El *retorismo* (permítasenos la palabra) ha predominado sobre todo en los países latinos, no solo por las condiciones psicológicas de raza, sino porque en ellos carecía el gobierno *representativo* de la raíz tradicional que en Inglaterra, donde la elocución y estilo parlamentarios reflejaron, no solo las condiciones étnicas del pueblo inglés, sino que conservaron también los hábitos de sobriedad y buen gusto propios de las asambleas históricas, más cuidadosas del fondo y de la substancia que de la forma, ó, por mejor decir, del efectismo oratorio. Así es que en el parlamento inglés es donde ha brillado la verdadera elocuencia parlamentaria, la que deriva principalmente de la naturaleza de toda elocuencia, que consiste en hablar de la manera adecuada al fin propuesto, sin cambiar el orden de fines, subordinando la idea á la impresión de la palabra y á la sugestión de la música,—sí es que lo es—en los oídos del numeroso vulgo.

Por el contrario, el habla parlamentaria en los países latinos se ajustó al figurín de origen, al francés, consistiendo la elegancia no en el vestir decoroso y estético del pensamiento parlamentario, sino en el sacrificio de las ideas á un estilismo amanerado y artificioso, muy semejante á la afectada y violenta indumentaria de todo el período de la Revolución. Bien que había pocas ideas que sacrificar en tales parlamentos, porque yo no conozco mayor vacuidad é insignificancia de doctrina que la de las asambleas revolucionarias francesas, ni superficialidad comparable á la de los constituyentes, legislativos y convencionales franceses, como no sea la de *nuestros legisladores gaditanos*, pedisecuos y copiadores de aquéllos.

A decir verdad, la oratoria parlamentaria inglesa ha decaído, porque han

El caciquismo es tan inherente, no solo al gobierno parlamentario, sino al representativo en sentido estricto, como la falsificación del voto al sistema. Estos falsificadores, más ó menos organizados, y que existen en Francia como en los Estados Unidos, necesitan su retribución, una de cuyas formas es el nepotismo en la variedad de sus manifestaciones y especies, desde la contrata clandestina, la corta, y aun la tala, á ciencia y paciencia de toda la jerarquía oficial, empezando por el ministro, el camino, la carretera y aun el ferrocarril trazados y concluidos por delante de la casa ó heredad del cacique, con estación ó apeadero cuando menos etc., etc., hasta el absoluto señorío municipal, no compartido con el concejo como en los señoríos antiguos, sino oculto y tapado detrás de alcalde, síndico, regidores, juez municipal, en una palabra, todo el mero y mixto imperio en el municipio y una buena parte del de la provincia, cuando el cacique es de más categoría y poder, los cuales pueden ser tales y tantos que un solo cacique se erija en régulo provincial. Ellos manejan el resorte ejecutivo, que es más sencillo y expedito; pero con igual desahogo pasan por encima de los códigos y del procedimiento, ó mañosamente los adaptan á sus fines, adobando pleitos y causas con el mismo éxito que expedientes administrativos; y, si encuentran funcionarios independientes y probos, que van, por cierto, necesitando temple heróico para resistir, los hunden en la oscuridad y en el descrédito, les cierran el acceso

menguado también cada vez más las convicciones y entusiasmos de donde brota la elocuencia de buena ley, y se va además perdiendo la tradición clásica, de elegancia severa, no falta de calor y arranque, en que brillaron los grandes oradores parlamentarios del reinado de Jorge III, y que fulguró todavía en los discursos de Gladstone. A su vez la elocución del parlamento francés se ha despojado hace tiempo de la hueca y rutilante palabrería de los revolucionarios primitivos, y se atiende más al fondo que á la expresión. La causa de encontrarse en este punto de coincidencia las dos oratorias modelos es la misma, el positivismo burgués, que ha perdido el gusto al culto de la forma por lo que aún había en ella de encarnación y reflejo de altas idealidades.


á los adelantos legítimos y debidos, ó con traslados ó destituciones les menguan ó arrebatan el pan de sus hijos.

Ya se comprende que, al lado de este nepotismo encubierto é irresponsable, es harto menos nocivo é indecoroso el franco, paladino y oficial que reparte beneficios y honores, actas de senadores y diputados y todos los empleos administrativos y judiciales entre gente mediocre y aun nula, pero empujada por la ambición sin conciencia, yalzada y sostenida por el parentesco y el compadrazgo de varias formas y de una sola infcua y corrompida naturaleza (1). Este nepotismo y aquel se confabulan, conciertan y completan, para el aprovechamiento del sistema, envolviendo en sus redes la libertad y la justicia, la prosperidad y la honra nacionales, y extendiendo por todo el cuerpo social los repugnantes y agarrotadores tentáculos del monstruoso pólipo de que son presa infeliz los pueblos emancipados de la divina autoridad y de la santa y suave ley de Cristo.

(1) En la descripción del caciquismo preponderan las manifestaciones, caracteres y colorido del que está más cerca de nuestro campo de observación; pero esto no quiere decir que sea exclusivo de España, como tampoco lo es la oligarquía, cuyo instrumento parlamentario es el organismo caciquil. Sin el nombre, existe el vicio, que en Francia es coetaneo de la Revolución de 1789, y que, atenuado un tanto por la restauración borbónica, se acentuó desde la revolución de 1830. En los primeros días de ella siete mil pretensiones llevaban nota comentadicia de Lafayette. El caciquismo francés es el que más se asemeja al de España, porque allí también la cabeza de la jerarquía toca en las altas regiones oficiales; pero no deja de ser caciquismo el de Inglaterra y la República sajona de América, porque sea allí obra y arma de la oligarquía extraoficial, para el monopolio de las conveniencias sociales que monopoliza la burguesía, bien que contrarrestada por el poder numérico y la fuerza de asociación del cuarto estado, que será en vida el heredero de la plutocracia burguesa. Allí manda el capital, mientras no lo aniquile y suplante el trabajo, tan sin Dios ni freno como la potencia capitalista, y hoy tienen las empresas y los *trust* una constitución y administración caciquiles, legales y extralegales para el manejo del voto y del parlamento, especialmente en los Estados Unidos en que la mayor parte de los cargos públicos son de elección popular.

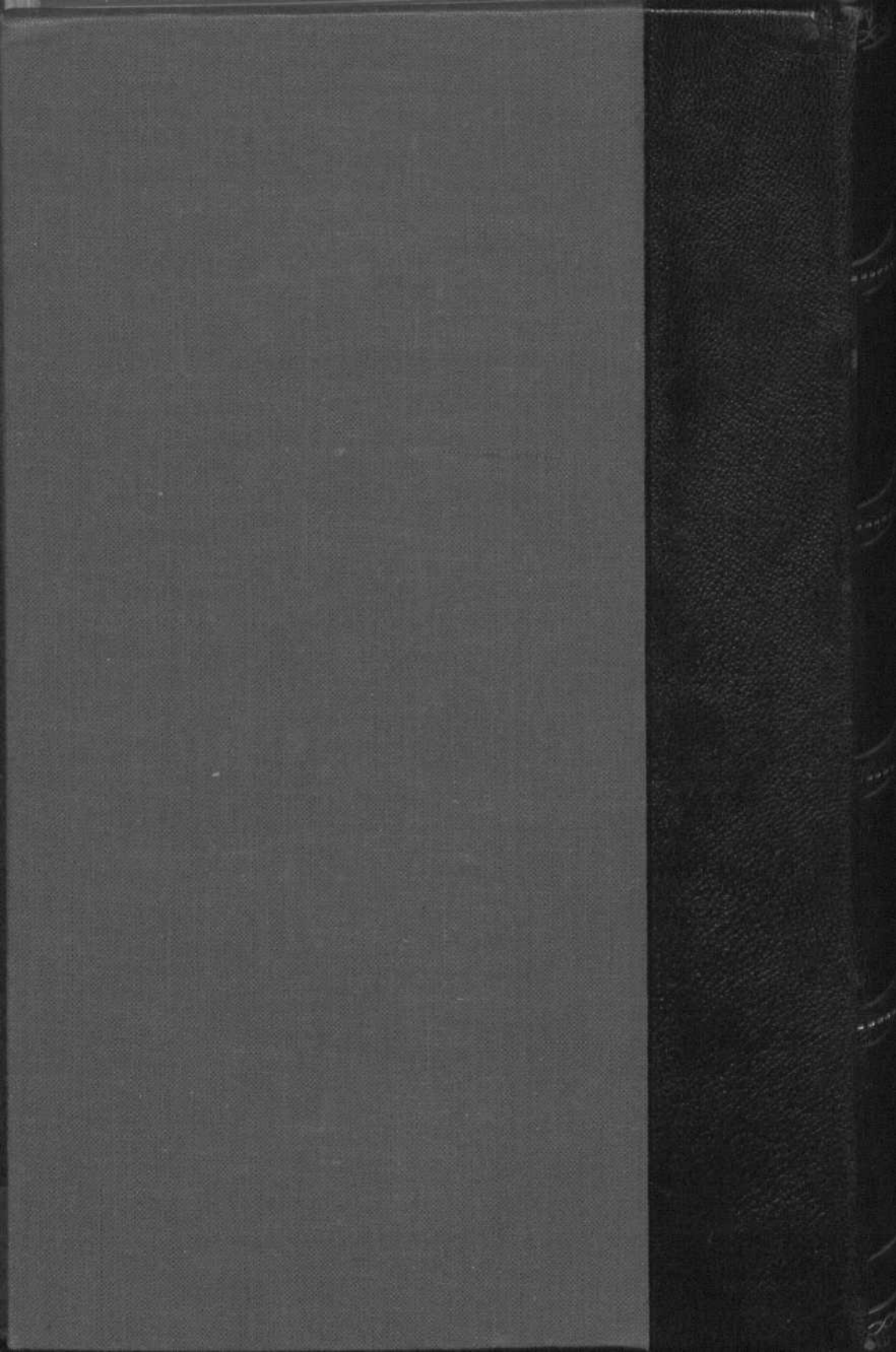
ADVERTENCIA

La prisa con que ha habido necesidad de imprimir este tomo y de corregir, con no menor precipitación, las pruebas ha impedido evitar erratas, de esas que salva fácilmente el lector, aun siendo alguna de tanta importancia como la de Grecia por Suecia, en la línea 20 de la página 151.











E. GIL Y ROBLES

TRATADO
DE
DERECHO
POLÍTICO



II

G 46113

1902